

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander

TRIBUNAL SUPERIOR

Distrito Judicial de Cúcuta

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE

Dr. JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Proceso: Ejecutivo- Sentencia-Pensión

Rad. Juzgado. 54-001-31-05-001-2009-00132-00

Partida Tribunal: 19534

Juzgado: Primero Laboral del Circuito de Cúcuta

Ejecutante: Estella Teresa Capacho de Real

Ejecutado: LA UGPP como sucesor procesal de CAJANAL EICE en liquidación

Asunto: Apelación de Auto-

San José de Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Procede la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la decisión tomada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el día 30 de junio de 2021, dentro del proceso ejecutivo laboral Radicado N.º 54-001-31-05-001-2009-00132-00 y Partida de este Tribunal N.º 19534, promovido por la señora ESTELLA TERESA CAPACHO DE REAL mediante apoderada judicial, en contra LA UGPP en calidad de sucesora procesal de CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN.

I. ANTECEDENTES

La señora ESTELLA TERESA CAPACHO DE REAL presentó solicitud de librar mandamiento de pago contra LA UGPP sucesora procesal de CAJANAL EICE en liquidación (PDF. 2), siendo el título ejecutivo la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta el día 20 de enero de 2012.

El juzgado de primera instancia por decisión de fecha 13 de agosto de 2015 (PDF 2. folios 63-67 expediente digital) procedió a librar mandamiento de pago a favor de la ejecutante y cargo de la UGPP junto con el pago de las costas procesales, no accedió al pago de los intereses legales ni a las medidas cautelares solicitadas.

El apoderado judicial de la parte ejecutada mediante escrito visto a folio digital 129 del PDF 2., alegó que la UGPP pagó en forma total el valor consignado

en la sentencia del 20 de enero de 2012, solicitando revocar en todas sus partes la decisión anterior.

Mediante auto de fecha 11 de diciembre de 2015 visto a folio 147-148 digital PDF 2., el Juez A quo, corrió traslado del escrito anterior a la ejecutante.

En auto del 10 de mayo de 2016 visto a folio 203-204 del expediente digital PDF2., negó nuevamente las medidas cautelares pedidas por la ejecutante y solicito la entrega de unos documentos por parte de la UGPP.

El apoderado judicial de la UGPP presento memorial solicitando la nulidad de todo lo actuado y la apoderada judicial del ejecutante recurso de apelación contra el auto anterior; para lo cual, el Juez A quo decide no acceder a la nulidad y esta Sala Laboral al resolver el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, revocó la decisión de mayo de 2016, ordenándose el decreto de las medidas cautelares pedidas.

II. AUTO OBJETO DE APELACIÓN

En audiencia celebrada el día 30 de junio de 2021, el Juez de primera instancia resolvió la excepción propuesta por la ejecutada UGPP, ordenando:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, UGPP como sucesor procesal de CAJANAL EICE en liquidación.

SEGUNDO: seguir adelante la ejecución incoada por la parte demandante por los valores y conceptos que ordeno el despacho mediante providencia agosto 13 de 2015, que libro mandamiento de pago teniendo como diferencias adeudadas de la condena respecto al literal a) del ordinal segundo la suma de \$42'276.888,50, por concepto de intereses moratorios y lo adeudado por indexación que se liquidará al momento de liquidar el crédito conforme la parte motiva resaltando que, se adeuda \$10'600.000 por concepto de costas ordinarias del proceso ordinario.

TERCERO: en cuanto a la liquidación del crédito, se dará aplicación al artículo 446 del C.G.P., **CUARTO:** condenar en costas a la demandada, UGPP de conformidad con las motivaciones de esta sentencia...”.

El Juez A quo fundamentó la decisión anterior, en que, de conformidad con las pruebas documentales aportadas, se demostró que existen diferencias adeudadas que provienen básicamente de las costas liquidadas dentro del proceso ordinario, los intereses moratorios y la indexación ordenados en la sentencia base de la ejecución del 20 de enero de 2012.

En cuanto a los intereses de mora, el Juez A quo tuvo en cuenta únicamente los intereses liquidados desde el mes de abril 2004-septiembre de 2013, el valor \$159'423.979,73 conforme a la liquidación aportada por el profesional universitario grado 2, contador público vista a folios 387-390 aclarando que se liquidan hasta ese mes de septiembre de 2013, en razón en septiembre de 2013 se consignó a favor de la ejecutante el valor de \$117'147.091.23, conforme al cupón de pago No. 164556 de Bancolombia

visto a 233 folio aportado por la parte actora, que coincide con la traída por la pasiva vista a folio 354 valor que se descontara de la liquidación aportada por el contador saldo **\$42'276888,50.**

Respecto a la **Indexación** ordenada, se realizará al momento de liquidar el crédito a efecto de traer a valor presente las mesadas hasta su inclusión en nómina, descontando la suma de **\$16'908.718,84**, suma consignada en abril de 2014 conforme auto ADP 008654 de noviembre 21 de 2018, folio 392 vuelto, valor que coincide con la liquidación de la indexación realizada en abril 12 de 2004 a enero 30 de 2012, liquidación titulada mesadas atrasadas indexadas folios 350-351 en el recuadro nombrado RESUMEN INDEXACIÓN, documentación aportada por la demandada.

Y que, la demandada con la documentación aportada, **no prueba haber cancelado las costas del proceso ordinario**, según refiere el auto ADP 008654 de noviembre 21 de 2018 folio 392-393, razón por la cual la excepción propuesta de pago de la obligación se declarara NO PROBADA.

III. APELACIÓN PARTE EJECUTADA

Frente a esta decisión, la apoderada judicial de la UGPP presentó recurso de apelación, alegando que la entidad **cumplió cabalmente con el fallo judicial del 20 de enero de 2012 proferido por el Juzgado Adjunto de Descongestión judicial**, reconociendo y pagando la pensión de vejez a favor de la señora Estella Capacho de Real efectiva a partir del 12 de abril de 2004; así mismo, indicó que, de conformidad con las diferentes resoluciones mencionadas por el Juez, la UGPP realizó las correcciones pertinentes en cuanto al reconocimiento que se debía hacer de la obligación pensional a favor de la demandante, operando la excepción de pago total de la obligación.

Frente a la **indexación**, indicó que en abril de 2014 se canceló por concepto de indexación del 12 de abril de 2004 hasta el 30 de enero de 2012 el valor de \$16'908.718,84.

Respecto a las **costas procesales**, sostiene que las mismas ya prescribieron teniendo en cuenta que la providencia ordinaria quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2012 y el inicio de la acción ejecutiva se dio el 13 de agosto de 2015, superando 3 años, 6 meses y 14 días.

IV. CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso concluir que la providencia apelada es susceptible de tal recurso, según lo dispuesto en el numeral 9º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que señala que es apelable el auto “(...) *el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.*”

Como viene de verse, en el presente caso la parte ejecutada solicita que, en virtud de las consideraciones esbozadas en el recurso, se revoque la decisión de seguir adelante la ejecución, alegando que la obligación se pagó en su totalidad, cumpliendo a cabalidad con los pagos de la mesada pensional y la indexación ordenada en la sentencia del 20 de enero de 2012. Además, que la ejecución de las costas procesales se encuentra prescritas.

El Juez A quo derruye dicha argumentación, al señalar que no existen pruebas documentales que acredite el pago total de la obligación, en primer lugar, los intereses en mora liquidados desde el mes de abril de 2004 hasta septiembre de 2013 arrojan la suma de \$159'423.979.73 según la liquidación aportada por el profesional universitario grado 2 de la rama judicial y lo pagado por parte de la ejecutada LA UGPP fue de \$117'147.091.23 quedando un excedente de \$42'276.888,50 a favor de la ejecutante. En segundo lugar, señaló que la indexación deberá realizarse al momento de liquidar el crédito a efecto de traer el valor presente las mesadas pensionales hasta su inclusión en nómina descontándose la suma de \$16'908.718.84 pagada por la demandada, y por último, que la UGPP no demostró que pagó a favor de la demandante, las costas procesales del proceso ordinario correspondiente a la suma de \$10'600.000.

Con fundamento en lo anterior, los problemas jurídicos a resolver se reducen a valorar las pruebas aportadas en el plenario, para verificar si se encuentra o no demostrado el pago total de la obligación por parte de la UGPP a favor de la señora ESTELLA TERESA CAPACHO DE REAL, respecto al pago de los intereses en mora y la indexación; así mismo, determinar si operó el fenómeno prescriptivo de la acción judicial respecto al cobro de las costas procesales del proceso ordinario.

De esta manera, se verifica que, mediante sentencia ordinaria laboral de fecha 20 de enero de 2012 el Juez Laboral Adjunto de Descongestión del Circuito de Cúcuta, condenó a *“CAJANAL EICE a reconocer y pagar a favor de la señora ESTELLA TERESA CAPACHO DE REAL, la pensión de jubilación desde el 12 de abril de 2004 junto con el respectivo retroactivo, de acuerdo con el promedio cotizado conforme al IBC, sumas que deberán ser indexadas, incluyendo las primas adicionales de junio y diciembre de cada año, sumas que deberán ser ajustadas al IPC certificado por el DANE junto con los intereses de mora previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 13 de junio de 2004 y hasta cuando se efectúe su pago total aquí ordenado, o sea incluida en nómina...”*

Así las cosas, al no existir controversia respecto al pago del retroactivo pensional a favor de la demandante y a cargo de la UGPP, se tiene que, por concepto de intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, la obligada reconoció y pago a favor de Estella Capacho de Real la suma de \$117'765.835.38 según cupón de pago en Bancolombia No. 47695418716 (fl.61 PDF 3), y pagó por indexación \$16'908.718.84 según los documentos

aportados a folios 45-60 del PDF 3. Ahora, por concepto de costas procesales del proceso ordinario, en la resolución RDP 043638 del 22 de octubre de 2015 vista a folios 83-100 del PDF-3, la UGPP manifestó que pagaría la suma de \$10'600.000, sin embargo, no existe prueba de ello, además, en la excepción de prescripción propuesta, acepta que las mismas no han sido reconocidas.

De otro lado, se aportó la liquidación realizada por el profesional grado 2 de la rama judicial, vista a folios 125-131 del PDF 3., donde certifica mediante tabla de liquidación, que la deuda por concepto de intereses moratorios es de \$159'423.979.73, y a pesar de que dicho valor fue liquidado erróneamente desde el 1º de abril de 2004, ya que la sentencia base de ejecución lo exige desde el 13 de junio de 2004, al restarle los meses adicionales, arrojaría la suma de \$150'883.480.6, esto es, quedando un excedente a favor de la señora Estella Capacho de Real, lo cual indica, que sobre este concepto no existe pago total de la obligación.

En cuanto a la indexación de las mesadas, se tiene que, desde el 12 de abril de 2004 hasta el momento del pago septiembre de 2013, arrojaría un aproximado de \$23'000.000, y al encontrarse probado que la UGPP pagó solo \$16'908.718, sobre esta obligación tampoco prospera la excepción de pago total de la deuda.

Respecto a la condena en costas procesales y el pago de las agencias en derecho, se aclara en primer lugar que el Juez A quo no analizó dicha excepción, pues sus fundamentos se orientaron a establecer que la UGPP no había demostrado el pago respectivo, luego entonces, esta Sala procederá a realizar el estudio pertinente, para lo cual, se hace imperioso traer a colación lo señalado por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias de radicado STL6507 de 22 de mayo de 2019 y STL7311-2019- reiteró su línea jurisprudencial contenida en las STL 4544-2018 y STL11275-2016 sobre el tema de la prescripción de las costas judiciales, en el sentido de señalar que el término de prescripción de las mismas es de tres años de conformidad con lo previsto en el artículo 151 del C.P.T.

En concordancia con lo anterior, en sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia STL14542-218, STL7447-2019, STL7311-2019 que reiteran la sentencia STL11275-2016, señaló respecto a la interrupción del término lo siguiente: *“...el punto de partida para la contabilización de dicho plazo es, en principio, la fecha en la que quedó ejecutoriado el auto de aprobación de las costas y de intermediar la reclamación escrita elevada a la entidad deudora se «interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual», esto es, el término se amplía por tres años más al mismo día y mes en el que se presentó la solicitud”*.

Aterrizando lo mencionado al caso que nos ocupa, se tiene que mediante auto de del 8 de febrero de 2012 se aprobaron las costas procesales y una vez ejecutoriado este proveído el 13 de febrero de 2012, el día 14 de febrero del mismo año, se empezaba a contar el término para la prescripción de dicho

valor; de la misma manera, el día **28 de febrero de 2012**, la demandante elevó la correspondiente cuenta de cobro a la entidad obligada CAJANAL EICE hoy LA UGPP y, en virtud de lo normado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, con este escrito interrumpió dicho lapso; luego, disponía de 3 años para presentar la demanda contados desde el mismo día y mes en que se elevó la reclamación.

De ahí, se tiene que la prescripción acaeció el **28 de febrero de 2015** y la demanda ejecutiva fue presentada el **13 de septiembre de 2013**, según fue constando por el Juez A quo en auto proferido el 19 de septiembre de 2014 visto a folio 23 digital del PDF 2, de donde se infiere que a la fecha en que acudió al operador judicial con el fin de ejecutar la sumas correspondientes a costas procesales, la acción judicial no estaba prescrita, tal como lo indicó el juzgado convocado en la decisión que se censura, y no es jurídicamente válido acudir al auto fechado el 13 de agosto de 2015 que libró mandamiento de pago, como medio para acreditar la presentación de la demanda, adicionalmente, cuando la UGPP en resolución RDP 043638 del 22 de octubre de 2015 vista a folios 83-100 PDF 3., aseguró que las costas procesales se pagarían en su totalidad.

En ese orden de ideas, concluye la Sala que la documentación aportada, es evidente que la obligación no ha sido cumplida en su totalidad, por lo que, la excepción de pago alegada por la ejecutada UGPP no prospera, además, el pago por concepto de condena en costas procesales del proceso ordinario consecuente con el valor de las agencias en derecho, no fueron afectadas del fenómeno prescriptivo de la acción judicial, luego entonces, se CONFIRMARÁ en su totalidad el auto proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el día 30 de junio de 2021, por las razones expuestas en esta providencia.

Se condenará en costas a la parte ejecutada la UGPP y fijar como agencias en derecho la suma de \$400.000 conforme lo establece el art. 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, por intermedio de su Sala de Decisión Laboral,

V. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR en su totalidad la decisión de fecha 30 de junio de 2021 adoptada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte ejecutada LA UGPP fijando como agencias en derecho la suma de un \$400.000 conforme lo establece el art. 365 del CGP.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para los efectos pertinentes, previas las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE



ELVER NARANJO

MAGISTRADO



NIDIAM BELÉN QUINTERO GÉLVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Treinta y uno (31) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-001-2017-00035-00
RADICADO INTERNO:	18.339
DEMANDANTE:	WILDEN SMITH CONDE GARCÍA Y OTROS
DEMANDADO:	COTRANSCOPETROL S.A.S.

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral promovido por los señores WILDEN SMITH CONDE GARCÍA, JHON JAIRO ACOSTA REINOSA, JOSÉ LUIS GELVEZ MENDOZA y JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR MONTAÑEZ contra la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - COTRANSCOPETROL S.A.S., Radicado bajo el No. 54-001-31-05-001-2017-00035-00, y Radicación interna N° 18.339 de este Tribunal Superior, para conocer el recurso de apelación interpuesto por ambas partes a la Sentencia del 28 de septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

Los señores WILDEN SMITH CONDE GARCÍA, JHON JAIRO ACOSTA REINOSA, JOSÉ LUIS GELVEZ MENDOZA y JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR MONTAÑEZ, solicitan se declare la existencia de un contrato de trabajo con la demandada entre el 1 de junio al 23 de diciembre de 2015, para que se condene a la demandada al pago de los siguientes conceptos:

Concepto	Wilden Conde	Jhon Acosta	José Luis Gelvez	José Villamizar
Salario y bonificación no salarial de noviembre de 2015 (modificada en reforma a la demanda)	\$996.167	\$996.167	\$996.167	\$996.167
Remuneración salarial y no prestacional de diciembre 1 a 23 de 2015	\$1.417.695	\$1.417.695	\$1.417.695	\$1.417.695
Horas extras diurnas laboradas	380 por total de \$1.674.162	307.30 por valor de \$1.303.832	259.30 por valor de \$1.115.545	312.30 por valor de \$1.475.814

Horas extras nocturnas	199.20 por valor de \$1.149.756	166 por valor de \$1.035.066	120.30 por valor de \$1.090.332	136.30 por valor de \$833.631
Horas de recargo nocturno ordinario	375.30 por valor de \$1.752.211	288.30 por valor de \$1.331.567	277.30 por valor de \$1.264.549	310 por valor de \$1.312.316
Horas dominicales y festivas	205.30 por valor de \$1.211.692	189 por valor de \$1.133.200	144 por valor de \$892.494	171 por valor de \$942.077
Horas extras diurnas dominicales y festivos	55.40 por valor de \$342.198	84 por valor de \$661.553	24 por valor de \$185.947	54 por valor de \$418.389
Horas extras nocturnas, dominicales y festivas	52.50 por valor de \$440.971	46 por valor de \$381.199	120.30 por valor de \$368.146	28 por valor de \$242.639
Horas de recargo nocturno dominical y festivo	72 por valor de \$602.423	53 por valor de \$447.631	48 por valor de \$401.615	68.30 por valor de \$573.137
TOTAL TRABAJO SUPLEMENTARIO:	\$7.173.413 pero acepta pagos \$1.615.002	\$6.294.048 pero acepta pagos \$1.615.002	\$5.318.628 pero acepta pagos \$1.615.002	\$5.798.003 pero acepta pagos \$1.615.002
Cesantías reliquidadas	\$1.297.287	\$1.224.006	\$1.142.721	\$1.182.669
Intereses cesantías reliquidados y sanción	\$175.566	\$165.649	\$154.648	\$160.054
Vacaciones	\$648.643	\$612.003	\$571.360	\$591.334
Prima de servicios reliquidadas	\$1.105.569	\$1.043.118	\$973.845	\$1.007.890
Indemnización por despido injusto	\$2.837.415	\$2.677.136	\$2.499.350	\$2.586.724
Indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T.				
Indexación				

1.1 Como fundamento fáctico de sus pretensiones refiere:

- Que, COTRANSCOPETROL S.A.S., presta servicios para La Empresa MC2 S.A.S. E.S.P., que transporte gas natural comprimido desde la planta compresora de Gas La Florida, ubicada en el Municipio de Sardinata, a las empresas de clientes como CERÁMICA ITALIA S.A.
- Que, el 1 de junio de 2015 contrató laboralmente a los demandantes como conductores de los vehículos que están al servicio de esa empresa para transportar gas natural comprimido entre la ciudad de Cúcuta y los Municipios de El Zulia, Pamplona y Sardinata, suscribiendo contrato a término fijo con duración inicial de dos meses, que fue prorrogado por igual período desde el 1 de agosto, por segunda vez el 1 de octubre y al no haber preaviso para su terminación del 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016, debido a que la relación laboral finalizó el 23 de diciembre de 2015 unilateralmente y sin justa causa.
- Que la actividad laboral era desarrollada de lunes a domingos, inclusive festivos, con disponibilidad de 24 horas, pues al recibir llamada de cargue o descargue completo debían estar dispuestos para salir de inmediato de conformidad con la información contenida en las bitácoras, planillas de despacho y autorizaciones de salida; documentos de donde se puede evidenciar que la jornada de cada uno excedía las 8 horas ordinarias consagradas en la ley; siendo dable cuantificar como se discriminó en el cuadro anterior, el trabajo suplementario ejecutado, por el cual solo se pagó a cada uno un total de \$1.615.002.

- Que, en la nómina de noviembre de 2015 se realizó un descuento injustificado y no explicado por valor de \$999.167, por el cual se reclamó y la empresa informó que se trataba de un error en el pago de los salarios de junio a octubre que fue corregido en noviembre; es decir, que para este mes solo pagó \$731.667 y adeuda a los trabajadores un total de \$1.117.500.

- Que, con fundamento en estos pagos excesivos, se abre investigación a los trabajadores, citándolos a descargos a la Ciudad de Bogotá el 23 de diciembre de 2015, pero fueron notificados luego de su desvinculación y por eso solicitaron los viáticos para acudir, pero no hubo respuesta alguna.

- Que, no existe el pago en exceso alegado para descontar, por lo que debe reintegrar el descuento, pues en los 5 meses del año 2015 canceló \$850.000 de salario básico, \$360.000 de viáticos, \$269.167 de trabajo suplementario y \$370.000 de bono no salarial, que descontado los aportes asciende a neto de \$1.730.834; señalando los contratos suscritos todos estos valores pactados y adicional a ello, solo canceló conceptos denominados variables por \$80.000 de viaje a pamplona, \$30.000 por standby y \$40.000 por otro viaje.

- Que, el 22 de diciembre de 2015 al asistir para laborar en CERAMICA ITALIA donde estaban los vehículos, no les dejan ingresar porque el supervisor había reportado que ya no eran trabajadores de la demandada y que ya tenían reemplazos designados, siendo notificados entre el 28 y 29 de diciembre del despido por no presentarse a laborar desde el 24 de diciembre, enviando contestación negando esa imputación pero no fue contestada y posteriormente se les notificó del pago de la liquidación final por consignación de depósitos judiciales en juzgados de Bogotá que solo les fue notificada el 18 de marzo de 2016, pero sin llenar la casilla que autorizaba a su retiro, consignando en otra ciudad y de manera incompleta.

1.2 La demandada COTRANSCOPETROL S.A.S., contesta a las pretensiones:

Acepta la existencia del contrato de trabajo con los 4 demandantes, pero se opone al pago de lo reclamado por estimar que canceló todas las acreencias laborales y justifica su oposición así:

- Que, la decisión de descontar lo correspondiente a tiempo suplementario, viáticos y bono no salarial por \$999.167 se toma hasta que la empresa recupere el mayor valor pagado al trabajador, para lo que no requiere autorización y no afectó el mínimo vital; no obstante al pagar el mes de diciembre de 2015 en título judicial, se pagó los 23 días de diciembre con todos estos conceptos.

- Que, en la cláusula tercera parágrafo II del contrato se pactó la suma de \$269.167 por trabajo suplementario, sin autorizar al trabajo extra superior a 2 horas diarias conforme la cláusula décimo primera, indicando que toda hora extra debe estar autorizada por escrito y este documento no existe pues no se autorizaba, sin que en muchos casos el trabajador laborara las 8 horas diarias; se opone a que se liquiden estas horas con base en la bitácora de ingreso y salida de las plantas de producción por no ser documentos oficiales de la empresa ni tener control sobre estas y tampoco reflejan la operación.

- Señala, que los trabajadores actuaron de mala fe, dado que durante los primeros 5 meses la empresa por error involuntario pagó girando desde cuentas bancarias una suma de \$5.520.000 sin que esto fuera reportado, indicando que era una operación nueva en este departamento y se realizaron anticipos que cubrieran el equivalente aproximado a tiempo suplementario,

viáticos y bonificación no salarial, con el fin de que se tuvieran recursos para la actividad y el departamento de nómina solo tuvo conocimiento de estos anticipos en octubre de 2015, evidenciando el doble pago y previa notificación del error a los trabajadores se procedió a planificar los descuentos.

- Indica, que canceló las prestaciones sociales liquidadas correctamente por el período trabajado y que no hubo despido injusto, pues los actores abandonaron sus labores el 23 de diciembre de 2015 y se utilizaron todos los medios para ubicarlos, llamándolos al teléfono registrado sin respuesta y por eso se dirigió correo certificado. Y tampoco acudieron al pago de la liquidación y por eso se realizó el mismo por consignación en juzgados laborales del circuito de Bogotá

- Advierte, que para la operación contratada, la empresa suscribió un contrato con MC2 en Bogotá y los demandantes firmaron contratos de trabajo en Bogotá, asignándoles como zona de trabajo el territorio nacional, pero con base en Cúcuta donde tienen su domicilio con posibilidad de asignarles cualquier otra zona del país; y por la naturaleza de la labor, los conductores dirigen el vehículo a la planta de gas comprimido, esperando que sean llenados. Cada trayecto dura 3 horas y el llenado de 6 a 7 horas en que no trabajan, pueden retirarse de la planta a descansar y por eso se les reconocen viáticos por valor de \$360.000 para que los utilicen en este tiempo, cancelándolos directamente las 6 horas de trayecto y 2 horas para cubrir las maniobras de parqueo y por lo tanto no exceden la jornada contratada.

1.3 El apoderado de la parte demandante presentó reforma a la demanda, adicionando los siguientes hechos:

- Que, la demandada además de la remuneración establecida en el contrato de trabajo acordó verbalmente con los trabajadores cancelarles mensualmente variables, así: \$40.000.00 por viaje realizado desde la planta La Florida en Sardinata a Cúcuta, \$80.000.00 por viaje realizado desde la planta La Florida en Sardinata a Pamplona y \$30.000.00 por viaje realizado desde la planta La Florida en Sardinata a El Zulia.

- Que, el salario promedio de los demandantes acorde al contrato de trabajo, las nóminas de pago, liquidación de trabajo suplementario según la bitácora y comprobantes de pago asciende a la suma de \$3.160.705.00 por WILDEN SMITH, \$3.079.518.00 por JHON JAIRO ACOSTA, \$2.539.307.00 por JOSÉ LUIS GELVEZ y \$2.892.418.00 por JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR.

- Que la demandada canceló como remuneración denominada variables las siguientes sumas, que ahora pretende revocar sin proferir acto o decisión motivada y tampoco notificó a los trabajadores previo descontarles:

- A favor de WILDEN SMITH CONDE GARCIA la suma de \$5.820.000.00 según comprobantes Nos. 359971, 361151, 362290, 363255 y 364760 obrantes a folios 20, 21, 22,23 y 24 del cuaderno de anexo 1, para un promedio mensual de \$860.098.00

- A favor de SHON JAIRO ACOSTA REINOSA la suma de \$6.150.000.00 según comprobantes No. 360029, 361148, 362287, 363252 y 264757 obrantes a folios 75,76,77,78,79 del cuaderno de anexos 1, para un promedio mensual de \$908.867.00

- A favor de JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA la suma de \$3.470.000.00 según comprobantes 359970, 361149, 362288, 363253 y 364758 obrantes a folios 107, 108, 109, 110 y 111 del cuaderno de anexos 1, para un promedio mensual de \$512.807.00

-A favor de JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ la suma de \$5.380.000.00 según comprobantes Nos. 359972, 361150, 362289, 363254, 364759 obrantes a folios 141,142,143,144 y 145 del cuaderno de anexos 1, para un promedio mensual de \$795.074.00

- Que, la demandada no canceló la prima de servicios a los trabajadores y el documento aportado a folios 15, 55, 102 y 137 del anexo 1 no está suscrito por los demandantes como recibido.

- Que, la bitácora obrante a folios 434 a 727 del cuaderno 3 y 4, y 735 a 750 del cuaderno 5, es un documento convenido entre la demandada y MC2 empresa contratante de la demandada y que fue suministrada a mis representados por MC2 en virtud de acción de tutela; que este es un documento utilizado por estas empresas para monitoreo y control de la operación realizada por los actores, y consecuentemente es documento idóneo para establecer la jornada laboral de los demandantes, las horas extras y los festivos y dominicales laborados durante toda la relación laboral.

- Que, la operación de cargue y descargue de gas comprimido se gestaba con la salida del vehículo hacia la planta de gas en La Florida (Sardinata) en trayecto de 3 horas, allí se cuadra la mula en zona de cargue y debe esperarse el proceso de llenado entre 6-7 horas en un contenedor adecuado sin salir por si requieren mover el vehículo, luego de ello se devuelve al destino asignado cual puede ser Sardinata, El Zulia, Pamplona, Cerámica Italia o Gases del Oriente en Cúcuta en el trayecto de 3 horas, cuadrando la mula y desplazándose a la casa a esperar un nuevo llamado o atender emergencias.

- Que, al presentarse a laborar el 22 de diciembre de 2015, acorde a documento “autorización de salida No. 242” obrante a folios 33 y 99, se expone que no se autorizó la salida por parte del supervisor ya que los trabajadores habían sido despedidos unilateralmente y les tenían reemplazos” y en otro correo electrónico consta la designación de los conductores a reemplazar, acreditando la razón para no ingresar a laborar; además se generó la novedad de retiro de los trabajadores en fecha 23 de diciembre de 2015, conforme documentos anexos.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, contra la Sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que entre los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA, JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTAÑEZ, JHON JAIR ACOSTA REINOSA Y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA y la demandada COOTRANSCOPETROL, una relación laboral entre los extremos 1 de junio de 2015 hasta el 23 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: DECLARAR que a la culminación de la relación laboral existente entre **WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ - JHON JAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA** y la entidad **COOTRANSCOPETROL**, no se les efectuó inmediatamente el pago de sus prestaciones sociales adeudadas.

TERCERO: DECLARAR que se configuro respecto los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO

VILLAMIZAR MONTANEZ - JHON JAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA un despido injustificado por parte de su empleador.

CUARTO: DECLARAR que se les retuvo a los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ - JHON JAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA sin previa autorización de los trabajadores por concepto de anticipo la suma total de \$1.765.197.

QUINTO: DECLARAR no probadas las excepciones de cobro de lo no debido y falta de competencia, propuestas por la entidad aquí demandada COOTRANSCOPETROL y parcialmente probada la excepción de buena fe, conforma a las motivaciones que anteceden.

SEXTO: ORDENAR a la entidad de demandada COOTRANSCOPETROL a habilitar y autorizar el pago de los depósitos judiciales que efectuó a favor de cada uno de los demandantes.

SÉPTIMO: CONDENAR a la entidad de demandada COOTRANSCOPETROL a reconocer y pagar a favor de cada uno de los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ - JHON JAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA la suma de \$1.765.197 por retenciones efectuadas.

OCTAVO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a favor de cada uno de los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ - JHON JAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA por concepto de indemnización por despido injusto la suma de \$1.824.305,72.

NOVENO: CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar a favor de cada uno de los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCIA - JOSE ORLANDO VILLAMIZAR MONTANEZ - JHONJAIR ACOSTA REINOSA y JOSE LUIS GELVEZ MENDOZA por concepto de indemnización moratoria del 24 de diciembre de 2015 al 16 de marzo de 2016 por la suma de \$4.092.361,48.

DÉCIMO: ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra.

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que, el objeto del litigio está dirigido a resolver sobre la existencia de una relación laboral entre las partes intervinientes desde el primero de junio 2015 al 23 de diciembre del mismo año, en aras de establecer si acorde a las pruebas aportadas es procedente la condena por el pago de salarios adeudados de diciembre de 2015, devolución de retención indebida de noviembre de 2015, horas extras, recargos laborados, indemnización por despido injusto, indemnización moratoria y pago de prestaciones sociales adeudadas.

- Respecto de la relación laboral, advierte, que está demostrado y aceptado que los 4 demandantes y la empresa demandada suscribieron contrato a término fijo por 2 meses desde el 1 de junio de 2015, que se

prorrogó por igual término el 1 de agosto, el 1 de octubre y del 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016.

- Sobre la pretensión de reconocimiento de horas extras y recargos, advierte, que acorde al criterio jurisprudencial estas deben demostrarse de manera clara y determinar su número y fecha, sin que sea viable establecer conjeturas, así mismo, que el empleador las autorizó o consintió tácitamente y fueron utilizadas en la labor contratada. Aportándose una bitácora que contiene fechas y cantidades, pero que revisada no se encuentra que constituya un reporte o registro de la demandada, no cuenta con un membrete o señalización que lo haga oficial y otros documentos como provenientes de la planta compresora de gas La Florida; si bien se visualizan las horas de carga y descarga de gas en la denominada planta compresora de gas, no se logra establecer ni se acredita la acusación de las horas extras alegadas más aún cuando no se permite ni siquiera contrastar el cumplimiento de las horas mínimas de la jornada laboral. Sin que en todo caso obre la autorización del empleador, dado que desde el contrato de trabajo consagró un rubro de horas extras y solo autorizó 2 extras diarias, prohibiendo adicionales. No siendo dable acceder a esta pretensión.

- En cuanto a la reclamación del salario de noviembre de 2015, indica, que debe partirse del salario pactado en la cláusula tercera del contrato de trabajo y se evidencia que si bien para ese mes hubo en la nómina el reconocimiento de todos los conceptos salariales, se hizo un descuento adicional de \$999.167 por concepto de devolución de anticipo sobre el que gira la controversia pues los demandantes afirman que recibieron por acuerdo verbal unos valores adicionales al salario y la demandada alega, que realmente hubo un error ente los departamentos de nómina y operaciones que genere el pago en exceso que se comenzó a recuperar en dicho mes. Destaca, que está probado el pago a los demandantes de unos conceptos de anticipos adicionales al salario, y aunque los demandantes no demostraron la existencia de dicho acuerdo sino que está suficientemente acreditado el salario pactado, el artículo 59 del CST no autoriza al empleador a efectuar descuentos, aún adicionales, sin autorización del trabajador y aunque se afirma que se les notificó previamente, no se demostró. Por ello condena a la demandada a pagar la devolución de estos rubros a cada demandante.

- En cuanto a la remuneración prestacional y no salarial de diciembre de 2015, resalta, que la demandada realizó la liquidación final de prestaciones a cada actor incluyendo el salario del último mes y realizó consignaciones mediante título judicial, aunque igualmente aplicó un descuento a cada uno de \$766.030 que también debe devolver.

- Respecto del despido injusto refiere, que el empleador alega la existencia de justa causa por abandono del cargo y que intentó por todos los medios disponibles ubicar a los trabajadores, pero esto no fue demostrado, pues no obra prueba de algún requerimiento o notificación previa al despido. Si probaron los actores que al acudir a trabajar el 22 de diciembre se notificó a MC2 que ya no estaban autorizados a conducir los vehículos, y las citaciones a descargos son realizadas hasta el mes de enero de 2016, citandolos a Bogotá pese a no ser su lugar de trabajo y sin conferir los viáticos para que asistieran. Destaca que no se utilizaron todos los medios posibles para notificarles debidamente y que en todo caso desde el 23 de diciembre de 2015 se reportó el retiro al sistema de seguridad social, por lo que se configuro desde entonces un despido sin justa causa y por ello procede la indemnización solicitada, equivalente a los 36 días que faltaban para terminar el contrato.

- En lo que atañe a la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T., tras explicar que esta no procede de forma automática sino que depende de

la mala fe del empleador que incurrió en mora, advierte que no existe justificación para que el demandado hubiera decidido consignar el saldo por título judicial si ya conocía las cuentas de nómina de los trabajadores y aunque consignó el título judicial en enero de 2016, solo notificó a los actores el 14 de marzo de 2016 y por ende condena a sanción moratoria por estos 84 días. No accede a que está se extienda por la mora derivada de los descuentos que se ordenó devolver, porque se entiende que el empleador los aplicó con la firme convicción de que estaba recuperando un pago en exceso.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la parte demandante

El apoderado de los demandantes interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que debió condenarse por las horas extras solicitadas en la demanda, pues conforme al testimonio del señor WILMER PORRAS CORTES, jefe de personal de la demandada, quien negó haber autorizado horas extras, pero al ser indagado afirmó desconocer cómo se tasó el valor fijo de horas extras en el contrato y sobre que sucedía si la labor diaria excedía de 10 horas, indicó, que eso dependía de la logística. Igualmente que el testigo WILSON SANGUINO, quien manejaba la operación de la empresa contratante, dijo que la operación era de lunes a lunes días ordinarios festivos dominicales día y noche, los 365 días al año, lo que requería la total disponibilidad de los trabajadores las 24 horas y que en virtud a ello, la jornada laboral de un trabajador podría ser entre 14, 15, 16, horas diarias ya que el tiempo de trabajo de los empleados era de acuerdo a la necesidad de la operación; también explico, que el proceso de llenado duraba desde 4 horas y se controlaba el ingreso y salida de los vehículos en las bitácoras, que eran conocidas por el contratista. Por esto se opone a la negativa de acceder al pago de estas horas extras y recargos desconociendo el medio de prueba documental que no fue tachado o desconocido y resulta idóneo, con tal claridad que desde la demanda se resaltó y contabilizo la cantidad de horas adicionales para cada trabajador, solo estando demostrado el pago fijo por este concepto contenido en cada nómina.

- Que, si bien se accedió a la devolución, el Juez dio total credibilidad a la figura de anticipos alegada por el empleador, pero se logró demostrar que estos realmente correspondían a pagos de conceptos de variables pactados dependiendo del destino (Cucuta, Pamplona, Sardinata) y que para José Luis Gelves alcanzó la suma de \$3.381.00, a José Orlando Villamizar la suma de \$5.380.000, a Jhon Jair Acosta la suma de \$5.351.000 y a Wilden Smith Conde la suma de \$5.557.000, sin que pueda alegarse un comprobante de nómina de enero de 2016 (posterior a la desvinculación) para probar que fueron anticipos. Advierte, que no es lógico que se anticipe el salario y no se descuenta al mes siguiente vencido, inclusive que al hacer los descuentos se realice la nómina con todos sus contenidos y no se aplique el supuesto descuento de adelanto, siendo el documento de enero un intento de inducir a error y reclama que no puede aceptarse la teoría de un doble pago, pues está demostrado que fue pago de variables.

- Que todo lo anterior para establecer que la empresa dejó de liquidar las prestaciones sociales de los trabajadores con su remuneración real y total, pues sumando las variables y las horas extras se advierte que los promedios devengados por los actores eran superiores a los utilizados para estimar lo consignado por la demandada, lo que evidencia la mala fe patronal pues deliberadamente no se tuvo en cuenta el saldo total del pago a los trabajadores; por ende no está conforme con que el 16 de marzo de 2016 se

declare que cesó la mala fe, pues esta siguió en la medida que a la fecha no se ha cancelado íntegramente el saldo de prestaciones que realmente se debe a los trabajadores y tampoco los saldos descontados indebidamente, manteniéndose el pago incompleto de los meses de noviembre y diciembre como para seguir causando la sanción moratoria.

3.2 De la parte demandada

El apoderado de COOTRANSCOPETROL presenta recurso de apelación argumentando lo siguiente:

- Que las partes suscribieron un contrato a término fijo que fue aportado al proceso y fue reconocido por los trabajadores en su interrogatorio de parte, aceptando haberlo firmado incluyendo la cláusula tercera donde constaba el valor del salario básico y las contraprestaciones de trabajo suplementario, viáticos y bonificación no salarial; siendo un error financiero de la compañía el pago adicional, debido a lo nuevo de la operación en Cúcuta y que aceptaron haber recibido en su cuenta de nómina el valor adicional (\$5.820.000 Conde, \$6.150.000 Acosta, \$3.470.000 Gelvez y \$5.380.000 Villamizar), no siendo cierto lo alegado por los actores e incluso resalta que prueba de ello es que si esos pagos eran por salario adicional, no se reclamó adicional al descuento por su pago en noviembre y diciembre.

- Que el testigo JHON VILLALOBOS fue claro al explicar lo sucedido en realidad, dado que era la persona encargada de coordinar las labores de los aquí demandantes, era quien coordinaba sus viajes y quien debía presentarse en la Ciudad de Bogotá, se les giraron los dineros para su desplazamiento y alimentación, hospedaje y otros, pero aceptó, que no los entregó y la retornó a la compañía pues los demandantes no la quisieron aceptar.

- Que la terminación del contrato se demostró fue por abandono del cargo, pues la empresa tiene domicilio en Bogotá y los contratados no aceptaron el llamado para ser oídos en descargos para iniciar el proceso en dicha ciudad, haciendo caso omiso al llamado del señor Villalobos; aclara, que una cosa es la novedad de los nuevos conductores para prestar un servicio y que los anteriores no estaban autorizados a ingresar, otra que se cancele el contrato laboral e inclusive la novedad de retiro se reporta al mes vencido, por parte del departamento de nómina pero eso no significa que se haya terminado el contrato en esa época. Que a los demandantes se les requirió de manera escrita y no aportaron información por el abandono del cargo, esperando un término prudente para proceder con su liquidación e inclusive a la fecha estos siguen adeudando los pagos en exceso.

- Que desconoce cualquier validez que se quiera imputar al libro de minutas aportado, que no contiene información personal sino horas de ingreso y salida a otras instalaciones, pues COOTRANSCOPETROL nunca optó por llevar controles de entrada y salida; pruebas que reclamaron por tutela pese a que conocían de la deuda que mantenían con la empresa y pese a lo cual se consignó el valor de sus liquidaciones.

4. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

•PARTE DEMANDANTE:

El apoderado de los demandantes solicita que se modifique y adicione la sentencia de primera instancia por contener una valoración errada de la

prueba documental, del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada COOTRANSCOPETROL SAS y de la prueba testimonial recaudada durante el proceso que dio lugar al no reconocimiento y pago de las horas extras, recargos nocturnos y festivos y dominicales, estando probadas así como la causación de pagos de variables adicionales a la nómina que no se tuvieron en cuenta para liquidar prestaciones sociales e indemnización moratoria. Resalta sobre esta última que está evidenciada la mala fe patronal pues no se le ha cancelado a los trabajadores las prestaciones, salarios adeudados y liquidación a la fecha, pues no autorizó la entrega de los títulos judiciales que la contienen y además adeuda la reliquidación pretendida.

Resalta que el testigo WILSON SANGUINO RINCÓN, acreditó que se causaban horas extras por cuanto el proceso de cargue, traslado y descargue de gas comprimido que transportaban mis representados desde la Planta La florida en Sardinata hasta Cúcuta, Pamplona, El Zulia e incluso Toledo, quien indica que la operación era de lunes a lunes, días ordinarios festivos y dominicales día y noche, los 365 días al año, que por tanto se requería total disponibilidad de los trabajadores las 24 horas y que en virtud a ello la jornada laboral de un trabajador podría ser entre 14, 15 y 16 horas diarias, resaltando que por necesidad de la operación los trabajadores debían estar disponibles a cualquier hora, esperar que se llenara el cargue del vehículo y así se desprende de las boletas de salida y llegada, tal y como se certifican los documentos obtenidos por tutela y aportados con la demanda, donde se identifica la asignación de cada trabajador, procediendo a identificar el resultado individual para cada uno, en los mismos términos ya resumidos en cuadro previo.

Respecto de la retención indebida de salario de noviembre de 2015, señala que acertó el juzgado al ordenar su reintegro por no estar autorizado por los trabajadores, pero lo que alega es que dicha retención no eran anticipos de salario sino remuneración adicional y que el empleador pretende engañar con un documento para hacer ver como anticipos, pero se evidenció que se trataba de pagos adicionales por viajes realizados a Cúcuta, Pamplona o el Zulia y por ello debe reconocerse dicha suma como factor salarial omitido por el empleador en la liquidación de prestaciones, procediendo a discriminar los pagos adicionales y su incidencia en las pretensiones; por lo que rechaza que se acoja la tesis de un doble pago o de anticipos, para desconocer el salario de los trabajadores.

Sobre la indemnización moratoria, refiere que la misma procede tanto por el descuento indebido de salario, la falta de inclusión de las variables como factor salarial y la no autorización para retirar el título judicial consignado; resaltando que desde el 24 de diciembre de 2015 se adeuda a los trabajadores sus derechos laborales, reteniendo lo que les corresponde legalmente con apatía, dejadez, negligencia y desinterés tras más de 6 años de haber terminado la relación laboral, desconociendo las prohibiciones legales.

• PARTE DEMANDADA:

El apoderado de la empresa demandada, se ratifica en lo expuesto en la contestación y alegatos de conclusión, resaltando que cumplió con todos los pagos de prestaciones y acreencias laborales que le correspondían con buena fe dentro de la relación contractual; procediendo a enunciar el contenido de la cláusula salarial del contrato de trabajo y a discriminar los valores cancelados mensualmente a cada trabajador; explicando que hubo despido con justa causa por abandono del puesto de trabajo, tratando de ser ubicado por todos los medios de comunicación conocidos telefónico y dirección de residencia mediante correo certificado, siendo posteriormente consignado el valor de las prestaciones con restricción por el saldo que le fue pagado en

exceso, correspondiente a pagos en exceso que hizo el departamento de operaciones para ayudar a su movilización y que no fueron conocidos por nómina hasta octubre de 2015 por lo que se dispuso el descuentos correspondiente. Advierte que la empresa no tenía bitácoras de control de entrada y salida, desconociendo los presentados que afirma eran realizados por otras empresas.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

6. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER:

Los problemas jurídicos propuestos a consideración de esta Sala son los siguientes:

¿Se encuentra debidamente acreditada la existencia de trabajo suplementario ejecutado por los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCÍA, JHON JAIRO ACOSTA REINOSA, JOSÉ LUIS GELVEZ MENDOZA y JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR MONTAÑEZ al servicio de COOTRANSCOPETROL?

¿Se demostró por parte de COOTRANSCOPETROL la justificación para realizar descuentos del salario de los trabajadores en los pagos de noviembre y diciembre de 2015 por “anticipos” o “pagos dobles”?

En caso de que se demuestre el trabajo suplementario y la existencia de pagos adicionales, se establecerá si hay lugar a reliquidar las prestaciones sociales de los demandantes.

¿Se acreditó la existencia de justa causa por parte del empleador para la terminación unilateral del contrato de trabajo con los demandantes para exonerarlo del pago de la indemnización por despido injusto?

¿Resulta procedente imponer la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. por evidenciar mala fe en el empleador? En caso positivo, si esta se debe liquidar hasta la fecha de notificación del pago por consignación o seguirse causando por los conceptos que se siguieron adeudando.

7. CONSIDERACIONES:

El proceso fue iniciado por los demandantes WILDEN SMITH CONDE GARCÍA, JHON JAIRO ACOSTA REINOSA, JOSÉ LUIS GELVEZ MENDOZA y JOSÉ ORLANDO VILLAMIZAR MONTAÑEZ para que se condenara a su empleador COOTRANSCOPETROL, a reconocerles y pagarles los conceptos adeudados por: trabajo suplementario, descuentos indebidos aplicados al salario, reliquidación de prestaciones sociales, sanción moratoria e indemnización por despido injusto. Pretensiones a las que se opuso la demandada, alegando, que siempre garantizo los derechos de sus trabajadores. Que no se pactó en el contrato de trabajo la autorización del trabajo suplementario más allá del pagado y causado; y los actores fueron despedidos con justa causa, tras abandonar su puesto de labor por lo que no hay lugar a reliquidar sus prestaciones.

El juez *a quo* dispuso negar las pretensiones de trabajo suplementario por estimar que las pruebas aportadas no constituyen documentos oponibles al

demandado. Ordenó, la devolución de los conceptos descontados por no existir autorización del trabajador para ejecutarlos. Condenó por despido sin justa causa al no verificarse la notificación previa de los trabajadores del motivo de la terminación de sus contratos de trabajo y accedió a imponer sanción moratoria, pero desde la fecha de terminación de los mismos, a la de notificación del título judicial contentivo de las prestaciones.

Conclusiones frente a las cuáles cada parte presentó recurso en lo desfavorable, y que serán abordadas acorde a los problemas jurídicos presentados previamente.

De manera preliminar, conforme al principio de consonancia indicado en el artículo 66A del C.P.T.Y.S.S., la competencia de esta Sala se circunscribe a estos asuntos específicos, materia de apelación por cada parte; por lo que no es objeto de controversia la existencia de contrato de trabajo entre las partes, estando aceptado desde la contestación que cada demandante suscribió el 1 de junio de 2015 contrato a término fijo por 2 meses como conductor de GAS NATURAL COMPRIMIDO con la empresa COTRANSCOPETROL S.A.S. y que este se prorrogó por iguales períodos en 3 ocasiones, hasta que finalizó por decisión unilateral del empleador el 23 de diciembre de 2015.

Procede la Sala a verificar cada aspecto apelado y si hay lugar por ello a las condenas impuestas y solicitadas por los demandantes.

7.1 Trabajo suplementario

Estima la Sala que el primer problema jurídico que debe ser resuelto es la alegada existencia de trabajo en jornadas adicionales o con recargo que no fue debidamente remunerado; dado que, en caso de imponer condenas por los mismos; las sumas a reconocer entrarían a conformar parte del salario de los actores e influir en la resolución de los demás aspectos en controversia.

Se esgrime desde la demanda, que cada uno de los demandantes ejecutó las labores de conductor a favor de la Sociedad COTRANSCOPETROL S.A.S. en jornadas de trabajo fluctuantes y que dependían de las particularidades propias del transporte de gas comprimido. Por lo que eran requeridos en diferentes turnos para transportar de ida y regreso, los vehículos desde la sede de las empresas usuarias – como Cerámica Italia o Gases del Oriente - en las Ciudades de Cúcuta o Pamplona hasta la Planta Compresora de Gas La Florida, ubicada en el Municipio de Sardinata (Norte de Santander). Alegando, que estas labores implicaban excederse de la jornada laboral ordinaria, por lo que se ejecutaron en horarios nocturnos, dominicales y festivos, con total disponibilidad para el empleador, estando estas actividades respaldadas y verificables en documentos anexos a la demanda, provenientes de dichas empresas usuarias.

La demandada se opone a la prosperidad de estas pretensiones, alegando, que, desde la suscripción del contrato de trabajo, se estableció un rubro adicional en la cláusula tercera para cubrir el promedio de 2 horas diarias adicionales que pudiera necesitarse y que allí se prohibía además la autorización de horas extras adicionales; que los documentos aportados no le son oponibles por provenir de terceros y no tener control sobre su realización.

Al respecto, el juez *a quo* resolvió denegar esta pretensión, por estimar que siguiendo el criterio jurisprudencial que exige un alto deber probatorio al demandante; los documentos anexos no permiten verificar la causación de horas extras por no provenir del demandado, carecer de logos o signos de autenticidad y no permite contratarlos con la jornada ordinaria, en todo caso, no son autorizadas desde el contrato por la demandada. A lo que se opone

la parte actora en su recurso, señalando, que las pruebas documentales y testimoniales permiten convalidar la autenticidad de los documentos, así como la necesidad de estas horas extras por la naturaleza de la labor de transporte contratada.

Para resolver este asunto, se resalta, que conforme al Código Sustantivo del Trabajo, es jornada ordinaria “la que convengan a las partes, o a falta de convenio, la máxima legal” y se entiende como trabajo suplementario “el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima legal”; así mismo se estableció para el año 2015 que el trabajo diurno comprendía el realizado de entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.) y el nocturno entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00 a.m.), así como que para entonces la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de ocho (8) horas al día y cuarenta y ocho (48) a la semana.

Ahora bien, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que la pretensión encaminada a reclamar trabajo suplementario y recargos debe estar acompañada de una prueba precisa, que permita establecer la efectiva prestación del servicio y no deje duda de su existencia al fallador; como se explica recientemente en sentencia SL022 de 2022 que dice:

“Bien sabido es que esta Corporación, ha sostenido que la prueba del derecho al reconocimiento de horas extras debe ser precisa, de suerte que permita generar certeza de los horarios y días en que el asalariado ejecutó sus actividades al servicio del empleador. Por ello, no es posible obtener dicha información a partir de especulaciones, surgidas de expresiones genéricas o imprecisas en cuanto a tiempo, modo y lugar, o simplemente a cálculos o suposiciones efectuados sobre un horario ordinario, frecuente o regular de trabajo. En sentencia CSJ SL, 9 ago. 2006, rad. 27064, se expresó:

Analizado cuidadosamente el documento mencionado, encuentra la Corte, como efectivamente lo aduce el recurrente, que a más de que se torna ilegible en gran parte su contenido, no fluye con absoluta certeza que el actor haya laborado las horas extras y dominicales, objeto de la condena, y mucho menos en la cantidad determinada por el fallador. Es importante recordar, como de vetusta lo ha enseñado esta Corporación, que para que el juez produzca condena por horas extras, dominicales o festivos las comprobaciones sobre el trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no dejen duda alguna acerca de su ocurrencia, es decir, que el haz probatorio sobre el que recae tiene que ser de una definitiva claridad y precisión que no le es dable al juzgador hacer cálculos o suposiciones acomodaticias para determinar el número probable de las que estimen trabajadas, como sucedió en el sub examine (Subrayas fuera de texto).

Conforme lo expuesto, asoma claro que al exigir que la condena por trabajo suplementario, estaba supeditada a la demostración de los turnos y la jornada en que se ejecutaron las labores, el ad quem no cometió desacierto alguno en la medida en que no se ciñe a la jurisprudencia la elaboración de conjeturas a partir de especulaciones como las sugeridas por el impugnante.”

Entre los principios que orientan el Derecho Procesal Colombiano, es de recibo el de la necesidad de la prueba, el cual está contemplado en el artículo 164 del C.G.P., que a su letra dice: “...Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”. A la vez hace lo suyo en materia laboral, el artículo 60 de C.P.T.S.S. que expresa:

“(…) El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas a tiempo”. Seguidamente el artículo 61 del C.P.T.S.S. reza que:

“...El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (...)”.

Con fundamento en este marco jurídico y procesal, con el fin de resolver el problema jurídico antes expuesto, la Sala destaca del expediente como pruebas las siguientes:

- Contrato de trabajo suscrito entre cada uno de los demandantes y COOTRANSCOPEPETROL, del cual se destacan las siguientes cláusulas:

TERCERA: SALARIO Y SUS COMPONENTES.- Las partes han pactado que el salario que el trabajador devengará por el desarrollo efectivo de su labor como conductor está compuesto por los siguientes factores a saber: **PARAGRAFO I.-** Un Salario básico que corresponde a la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$850.000,00). **PARAGRAFO II.-** La suma de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$269.167,00), como contraprestación y reconocimiento a tiempo suplementario y recargos que el trabajador llegare a laborar en el mes, no obstante se establece que no se autoriza trabajo extra superior a 2 horas diarias. **PARAGRAFO III.-** Se reconocerán unos Viáticos mensuales por la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$360.000,00), por los cuales solamente se verá afectado éste valor si el trabajador no realiza viaje y como consecuencia no viatica. Para un total por mes trabajado de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS (\$1.479.167,00). **PARAGRAFO IV.-** Queda convenido por las partes que conforme con lo establecido en la Ley 15 de 1.959 reglamentada por el Decreto 1258 de 1959, no se reconocerá el subsidio de transporte de que tratan estas leyes en virtud a que el trabajador devengará un componente salarial superior a los dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. **PARAGRAFO V.-** El trabajador autoriza expresamente a su empleador para consignar los valores correspondientes a su componentes salariales como también los no salariales en la cuenta de nómina dispuesta para recibir estos dineros, el simple reflejo de la

DECIMA PRIMERA: HORARIO DE TRABAJO: El trabajador ha hecho el compromiso de laborar la jornada ordinaria o el horario previamente establecido por el empleador dentro de los turnos y horas señaladas y autorizadas por el mismo teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma según el artículo 167 del C.S.T. **PARAGRAFO I:** No obstante el empleador ha establecido la jornada para el cargo de trabajador en el artículo 8 numeral 2 del Reglamento y no podrán laborar más de 2 horas extras diarias cuando las necesidades de llegar a sitio seguro así lo ameriten, por ello el empleador reconoce una suma considerada como remuneratoria de las horas extras que pudiera llegar a laborar el trabajador en el mes. **PARAGRAFO II:** Para que proceda el reconocimiento y pago de trabajo dominical o festivo el empleador o sus representantes deben autorizarlo previamente y por escrito cada caso.

- Documentos rotulados como “WELL LOGGING S.A.S. – PLANTA COMPRESORA DE GAS LA FLORIDA – DESPACHO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO”, donde consta la fecha, hora de cargue y de salida, placa de vehículo, conductor, características del producto cargado y firma de quien despacha y transporte; del demandante WILDEN CONDE entre folios 41 a 79, ORLANDO VILLAMIZAR entre folios 138 a 175, JHON JAIRO ACOSTA entre folios 215 a 256 y JOSÉ LUIS GELVEZ entre folios 317 a 345, aunque algunos de estos documentos resultan ilegibles por la calidad de la fotocopia.

- Documentos rotulados como “MC2 S.A.S. E.S.P. – AUTORIZACIÓN DE SALIDA”, donde consta fecha, hora y sitio de salida, placa de vehículo, conductor y operador, con firma de autorización para partida; del demandante WILDEN CONDE entre folios 80 a 99, ORLANDO VILLAMIZAR entre folios 176 a 194, JHON JAIRO ACOSTA entre folios 257 a 273 y JOSÉ LUIS GELVEZ entre folios 346 a 363, aunque algunos de estos documentos resultan ilegibles por la calidad de la fotocopia.

- Fotocopias que se alegan pertenecen a un libro de minutas de CERAMICA ITALIA, donde constan anotaciones del personal de dicha

empresa entre el 1 de junio al 25 de diciembre de 2015, donde se observa resaltado por el apoderado de los demandantes reportes de ingreso y salida de vehículos con los nombres de los actores como indicativos

- Testimonio del señor WILSON SANGUINO RINCÓN, quien afirmó ser el jefe de operaciones de la empresa MC2, conoce a los actores porque fueron contratados por COOTRANSCOPETROL como conductores aunque desconoce las especificaciones de sus contratos; respecto de las horas extra reclamadas expone, que los conductores deben estar disponibles las 24 horas y los 365 días del año, siendo sus servicios requeridos conforme a las necesidades de la operación y el señor JHON VILLALOBOS era su supervisor directo, quien les impartía órdenes. Explica que MC2 tienen unos formatos llamado “ingreso de recepción de gas natural” y “boleta de salida” donde queda plasmado cuando sale cada vehículo del sitio de descargue y también una bitácora la cual se encuentra en las instalaciones de CERÁMICA ITALIA y queda registrado la hora de ingreso de los conductores a la estación. Además, se lleva un registro diario sobre las rutas que tiene cada uno de los vehículos y unas boletas de despacho y salida dependiendo del origen y destino del gas. Procede a reconocer la bitácora aportada al plenario y que está firmada por los operadores de turno, que exclusivamente tienen acceso a la bitácora y no los conductores; así como las planillas de llegada y salida que se emiten de la Planta Compresora La Florida.

- Por su parte en su declaración el señor WILSON GALVIS ROA, manifiesta, ser operador de descompresión de gas de MC2 en la estación de Cerámica Italia, y por ello conoce a los 4 actores como conductores que laboraron hasta mediados de diciembre sin conocer la razón de la desvinculación, el salario o tipo de contrato. Explica, que el horario era de 24 horas los 7 días, siempre estaba disponible; el conductor llegaba a cerámica Italia e iniciaba el proceso de descompresión (6-7 horas), el conductor se retira de la empresa y se le llama por teléfono cuando el proceso de descompresión ha terminado para que retire el camión en el caso de CERÁMICA ITALIA, pero en las demás estaciones el conductor debía permanecer al lado del vehículo hasta la terminación de la descompresión (2-4 horas). Explica que la empresa MC2 tiene documentos (bitácora) en donde se registra el ingreso, salida, cargue y descargue, llegada a las estaciones y demás observaciones, reconociendo la aportada al proceso y que esta solo podía ser manipulada por los operadores de estación.

- A su vez, el señor ALFONSO CONTRERAS JARAMILLO, director financiero y administrativo de COOTRANSCOPETROL, indica, no conocer a los 4 demandantes y solo sabe que laboraron para esa empresa como conductores; respecto de las horas extras señaló que no hay autorización para que personal diferente a la compañía pueda llevar control de horas extras y por tanto pueda autorizar horas extras adicionales.

- El señor JHON ERNESTO VILLALOBOS CENTENO, quien labora como coordinador logístico de COOTRANSCOPETROL, conoce a los actores, pues trabajó con ellos dos años y para la empresa de junio a diciembre de 2015; respecto del control de horas, afirma, que no lo realizaba sino Bogotá directamente y solo llevaba el control de viajes y cargues diarios que se realizaban, llevar reporte de la cantidad de gas transportado y las necesidades que tuvieran los vehículos (combustible, mantenimiento); que los conductores cuadraban verbalmente un día de descanso a la semana cada uno.

- El señor WILMAR PORRAS CORTES, indicó, ser el jefe de talento humano de la demandada, conoce a los demandantes por su labor de

conductores en el año 2015, desconoce sobre la logística y que el salario era de \$850.000 más viáticos y tiempo suplementario; advierte sobre el trabajo suplementario únicamente que desconoce el uso de bitácoras y boletas, y que él no asigna horarios.

Conforme a esta relación probatoria, reitera la Sala, que para la imposición de condena por trabajo suplementario se requiere que estas horas laboradas queden acreditadas con suficiente grado de certeza para proceder con su liquidación; al respecto de la valoración probatoria, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL21157-2017, Radicación N° 55951 y con M.P. ERNESTO FORERO VARGAS, se refiere las facultades del juez recordando que:

“no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo. 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto (...) las decisiones se deben fundamentar en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico”

En primera medida, debe señalarse, que no le asiste razón al juez *a quo* cuando señala, que la sola invocación en el contrato de trabajo de que está prohibida la reclamación de horas extras adicionales a las ya reconocidas económicamente en la cláusula salarial, es un impedimento para cualquier reconocimiento; ello por cuanto el principio de primacía de la realidad sobre las formas, impide desconocer el resultado efectivo y demostrado de la fuerza de trabajo de las personas, por lo que ante pruebas efectivas del despliegue de una jornada adicional a la ordinaria, debe remunerarse su equivalencia legal, pues si las necesidades del servicio las imponían y el empleador no tomaba medidas para evitarlas, tácitamente se entenderían consentidas. Así lo advierte la Sala de Casación Laboral en providencia SL1225 de 2019:

“Así pues, esta corporación ha señalado que para que se condene al pago de horas extras y trabajo suplementario debe probar el número de horas diarias laboradas, así como el de los dominicales y festivos, las mismas deben ser probadas por quien pretende su pago, es decir, deben encontrarse plenamente acreditados los siguientes supuestos:

(a) La permanencia del trabajador en su labor, durante horas que exceden la jornada pactada o la legal.

(b) La cantidad de horas extras laboradas debe ser determinada con exactitud en la fecha de su causación, pues no le es dable al fallador establecerlas con base en suposiciones o conjeturas.

*(c) Las horas extras **deben ser ordenadas o por lo menos consentidas tácitamente por el empleador** y, en ese sentido, deben estar dedicados a las labores propias del trabajo, y no cualquier otro tipo de actividades.”*

Aclarado lo anterior, procede la Sala a establecer ahora; si los documentos aportados por la parte actora donde constan los horarios de carga, descarga, salida y llegada de los vehículos transportados por ellos con gas comprimido, son oponibles a la parte demandada y con ellos se demuestra la configuración del trabajo suplementario.

Se aducen para cada demandante, 3 grupos de documentos diferentes: una serie de órdenes de carga expedidos en la PLANTA COMPRESORA DE GAS LA FLORIDA – DESPACHO DE GAS NATURAL COMPRIMIDO que maneja la empresa WELL LOGING S.A.S., autorizaciones de salida de vehículo expedidas por la empresa MC2 S.A.S. E.S.P. y el libro bitácora de ingreso y salida de la empresa CERÁMICA ITALIA S.A.

Lo anterior implica, que todos los documentos aportados para demostrar las horas extras, provienen de terceros ajenos al proceso; situación que se explica a partir de lo expuesto por los diferentes testigos al exponer que COOTRANSCOPEPETROL S.A.S. es una empresa con sede en Bogotá, cuyo objeto social es prestar el servicio especializado de transporte y conforme al contrato visto entre los folios 751 a 760, se suscribió un “contrato de arriendo de cabezotes para el transporte de gas en GTMs” con la empresa MC2 para el transporte de gas natural desde el Municipio de Sardinata (Estación de Compresión de Gas LA FLORIDA) a cualquier lugar en la ciudad de Cúcuta y Norte de Santander.

Esto significa, que deben valorarse como documentos declarativos emanados de terceros, en los términos del artículo 262 del C.G.P. que establece: “...*Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación*”; en este caso, no habiéndose solicitado su ratificación por la parte demandada, se pueden valorar; y sobre la manera de realizar la misma, advierte la Sala de Casación Laboral en múltiples pronunciamientos, que su contenido debe recibir el mismo tratamiento de la prueba testimonial. (SL092 de 2022 que reitera SL, 4 nov. 2009, rad. 36218).

Ahora, frente a la oponibilidad de estos documentos a la parte contra quien se imputa, es menester indicar, que se debe haber identificado previamente su autenticidad, como primer punto, porque de ello depende su eficacia probatoria, en la medida que si no está clara la autoría de un documento no es posible valorarlo o apreciarlo.

Al respecto, el artículo 244 del C.G.P. señala que “...*es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, **mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos**, según el caso*”.

En este caso, la empresa demandada en su contestación no alegó la falsedad respecto de los documentos, y tratándose de elementos no firmados o elaborados por ella, tampoco desconoció su autenticidad en los términos del artículo 272 del C.G.P.; que señala: “*En la oportunidad para formular la tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del desconocimiento. **La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y representativos emanados de terceros.***”

De la aplicación de estos preceptos normativos, se puede determinar, la autenticidad de los anteriores documentos emanados de terceros, situación que esta Sala encuentra ratificada por los testigos WILSON SANGUINO RINCÓN y WILSON GALVIS ROA, quienes corroboraron en su calidad de empleados de la empresa MC2, que los mismos, eran los formatos utilizados para controlar el ingreso, salida, cargue o descargue de gas, así como que los conductores no tenían acceso a manipularlos o diligenciarlos, sino el

operador de turno. Por lo que estima la Sala, que estos medios de prueba se advierten auténticos, son oponibles a la parte demandada que, en su oportunidad, no propuso los medios de deslegitimación correspondientes, por lo que se valorará su contenido para resolver este problema jurídico.

Como se indicó previamente, alega la parte actora que estos documentos permitirían evidenciar las extensas jornadas laborales a las que eran sometidos los cuatro conductores demandantes; de los que se puede derivarse la siguiente información: hora de recepción del camión en Cerámica Italia en Cúcuta, hora de salida de esta empresa hacia la Planta Compresora en el Municipio de Sardinata, tiempo de espera mientras se carga el gas comprimido, hora de salida desde Sardinata al destino en Cerámica Italia y con ello, procede en el caso de cada demandante a elaborar una tabla explicativa de las horas de ingreso, espera y salida, como puede observarse a folios 37-40 para WILDEN CONDE, 132-137 para ORLANDO VILLAMIZAR, folios 291-296 para JHON JAIRO ACOSTA y folios 378-381 para JOSÉ LUIS GELVEZ.

Así mismo, advierten los testigos que la naturaleza de la labor contratada implica una disponibilidad permanente, por cuanto el gas comprimido debe transportarse en condiciones especiales y apenas quede cargado.

Valorado el contenido discriminado de las planillas de liquidación de horas extras expuesto por los demandantes y comparado con cada uno de los documentos que contienen la información de ingreso, cargue, descargue y salida; advierte la Sala, que aunque pueda aparentar ser una prueba perfecta para acreditar la jornada laboral, existen una serie de inconsistencias que impedirían acceder a las pretensiones por evidenciarse vacíos, errores, situaciones fácticas que serían físicamente imposibles e incongruencias con el relato general de la mecánica laboral contratada.

Por ejemplo, se advierte en el caso del demandante WILDEN CONDE que los documentos permitirían inferir que salió el jueves 11 de junio de 2015 a las 2:00 a.m. y finalizó su jornada hasta el sábado 13 de junio de 2015 a las 3:00 a.m., constituyéndose una jornada de 48 horas consecutivas o que salió el martes 13 de octubre de 2015 a las 3:00 p.m. y terminó turno el miércoles 14 de octubre de 2015 a las 4:00 p.m. tras un total de 25 horas laboradas, igualmente en el caso de ORLANDO VILLAMIZAR que salió el viernes 5 de junio de 2015 a las 21:40 p.m. y finalizó el sábado 6 de junio de 2015 a las 20:00 tras 23 horas de jornada, también en el caso de JHON JAIRO ACOSTA que entre el 13 y 14 de julio de 2015 afirma haber laborado 27.3 horas de jornada, o JOSÉ LUIS GELVEZ que alega haber laborado 21 horas entre el 27 y 28 de agosto de 2015; lo que resulta físicamente imposible y estima la Sala, corresponde a que las minutas de ingreso y salida no registraban todos los movimientos de los camiones o realizaban sus anotaciones de manera incompleta.

De otra parte, como se resaltó previamente, la calidad de algunos de los formatos de autorización impide casi totalmente su lectura; múltiples días se reportan con anotaciones borrosas, ilegibles y esto impide dar continuidad a las jornadas que se pretenden alegar.

Existen además inconsistencias en el relato de la mecánica laboral que impide esquematizar completamente la jornada laboral de los conductores en función de solo estos tres grupos de documentos y que explicaría los vacíos previos; como se reiteró por la parte actora y los testigos, CERÁMICA ITALIA no era el único receptor del gas comprimido que transportaban los demandantes como empleador de COOTRANSCOPETROL S.A., ni su sede en Cúcuta era su único destino permanente. Se indica, que los conductores eran destinados a conducir para otras empresas como GASES DEL ORIENTE y

también a otros municipios como Pamplona, lo que imponía entonces exigirles que se aportaran los documentos que certificaran los días de estas rutas, sus horarios de llegada y salida, porque de lo contrario, resulta evidente que las pruebas aportadas estarían incompletas.

Bajo este análisis, concluye la Sala que las pruebas aportadas, aunque numerosas y detalladas en su contenido, no cumplen con la exigente carga probatoria que requiere la reclamación de trabajo suplementario; pues además de ser incompleta, no contienen toda la carga laboral que era desplegada por los trabajadores y con ello se impide la estimación de la condena.

Ha resaltado la Sala de Casación Laboral en providencia SL8675 de 2017 que es posible que el demandante logre demostrar la existencia permanente de trabajo suplementario, pero que no pueda acreditar con exactitud la cantidad de horas y con ello es imposible realizar la liquidación, debiendo absolverse por este concepto; explicándolo así:

*“que se deduce que, en esos días, el demandante prestó su servicio y causó trabajo suplementario y aun cuando no era posible determinar la hora de llegada, en las planillas en las que no se incorporaba, si era viable tener en cuenta la última salida a ruta pues da cuenta que, según el despachador, para ese momento, el actor se encontraba laborando y que de ello estaba al tanto la empresa, al punto que aquel lo habilitaba, lo que desdibuja la conclusión del Tribunal (...) **No es posible sin embargo, como lo plantea, que deba ser tenido en cuenta el patrón de horas extras y contabilizar por todo el tiempo de servicio el número máximo de horas permitido por la ley, pues no se trata de una presunción, sino que ello debe ser resultado de demostración una a una, de forma que solo se podrá declarar la causación en los días aquí acreditados.**”*

Fluye de lo expuesto, que se confirmará la decisión de primera instancia que negó la pretensión de condena y reliquidación de prestaciones por trabajo suplementario no reconocido por el empleador, dado que las pruebas aportadas son insuficientes para detallar cada una de las horas extras reclamadas y probar la ejecución de las labores en jornadas adicionales por lo que no se puede proceder a liquidarlas.

7.2 Descuentos aplicados por el empleador

Procediendo a resolver sobre el segundo problema jurídico; la parte actora reclamó en la demanda que la empresa COOTRANSCOPETROL realizó una serie de descuentos no autorizados a los demandantes en el mes de noviembre y que son apreciables en el desprendible de nómina como “DESCUENTO ANTICIPOS - \$999.167”, agregando en la reforma a la demanda que la demandada canceló como remuneración denominada variables, las sumas que ahora pretende revocar sin proferir acto o decisión motivada, por lo que solicita su devolución; a lo que se opone la parte demandada alegando, que este pago fue de más, y es el resultado de un error entre los departamentos de nómina en Bogotá y de operaciones en Cúcuta, debido a que recién empezaban operaciones en esta región, pues se consignó anticipadamente a los actores los viáticos, bonificación y trabajo suplementario pactado pero no se reportó a la otra oficina, por lo que volvieron a pagarse con el sueldo y solo hasta Octubre detectaron ello, procediendo a su descuento desde el mes de noviembre.

Al respecto, el juez *a quo* estableció, que aunque los demandantes no demostraron la existencia del referido acuerdo de pago adicional y estando suficientemente acreditado el salario pactado, el artículo 59 del CST no autoriza al empleador efectuar descuentos, aún adicionales, sin autorización

del trabajador y por ello condenó al reintegro de los valores descontados en el salario de noviembre y el pago de diciembre anexo a la liquidación final.

Para resolver este asunto, son hechos aceptados por ambas partes la ya citada cláusula segunda que señala como remuneración los siguientes conceptos: Salario básico: \$850.000, Trabajo suplementario: \$269.167; viáticos \$360.000 y adicional a ello, en la cláusula cuarta se pactó un bono para alimentación en viaje y beneficio de educación no salarial por \$370.000; por lo que es posible evidenciar en las nóminas de pago de los diferentes demandantes, que exclusivamente estos conceptos componen los ingresos devengados, acorde a folios 9-14 para WILDEN CONDE, 108-113 para ORLANDO VILLAMIZAR, folios 203-208 para JHON JAIRO ACOSTA y folios 305-310 para JOSÉ LUIS GELVEZ.

Además, es un hecho enunciado en la contestación de la demanda y aceptado por los demandantes, que adicional a su salario cada uno recibió las siguientes sumas directamente consignadas a su cuenta de nómina durante el 2015:

- WILDEN CONDE: \$1.200.000 en junio, \$1.440.000 en julio, \$1.540.000 en agosto, \$1.200.000 en septiembre y \$440.000 en octubre, para un total de \$5.820.000, verificados en desprendibles folios 20 a 24 de Anexo 1.
- ORLANDO VILLAMIZAR: \$1.050.000 en junio, \$1.620.000 en julio, \$1.380.000 en agosto, \$1.240.000 en septiembre y \$860.000 en octubre, para un total de \$6.150.000, verificados en desprendibles folios 75 a 79 de Anexo 1.
- JHON JAIRO ACOSTA: \$1.270.000 en junio, \$220.000 en julio, \$300.000 en agosto, \$1.110.000 en septiembre y \$570.000 en octubre, para un total de \$3.470.000, verificados en desprendibles folios 107 a 111 de Anexo 1.
- JOSÉ LUIS GELVEZ: \$1.190.000 en junio, \$1.490.000 en julio, \$1.290.000 en agosto, \$1.070.000 en septiembre y \$340.000 en octubre, para un total de \$5.380.000, verificados en desprendibles folios 141 a 145 de Anexo 1.

Así mismo, está demostrado en cada una de las nóminas de noviembre de 2015 que a los demandantes se les descontó un total de \$999.167 por concepto “DESCUENTO DE ANTICIPO” (Fol. 14, 113, 208 y 310); y en cada liquidación final de prestaciones, se evidencia un descuento de \$766.027,28 por el mismo concepto aplicado al salario del 1 al 23 de diciembre de 2015 (Fol. 30, 124, 281 y 369); para un descuento total de \$1.765.194,28 a cada uno.

Partiendo de estos hechos, se resalta que el artículo 59 del C.S.T. señala:

“Se prohíbe a los {empleadores}:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

a). Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400.

b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice.”

Respecto de la forma de aplicar este parámetro normativo para los casos en que se alega un pago en exceso por parte del empleador, ha señalado la Sala de Casación Laboral en providencia SL697 de 2020:

*“(...) esta Sala de la Corte, ha sostenido de manera reiterada y pacífica que, **el reembolso o reintegro de las sumas pagadas en exceso sin que el trabajador tenga derecho a ellas, por salarios o prestaciones, no constituye una deducción que necesite autorización de descuento**, como lo fue en el caso de la recurrente el descuento por concepto de comisiones no causadas, así se dijo en sentencia CSJ SL 3 sep. 2002 rad. 17740, reiterada en la CSJ SL 13 feb. 2013, rad. 39980, citada por el Tribunal, en la que se puntualizó:*

“(...) De otra parte el reembolso de salarios pagados en exceso no constituye deducción que requiera los permisos que habla la censura. Así lo sostuvo la Corte en sentencia de 28 de febrero de 1995, radicada con el No. 7232 donde en lo esencial se dijo:

*“Por regla general al llegar a la fecha de pago del sueldo el trabajador que únicamente haya laborado parte del periodo respectivo solo tiene derecho a la remuneración del tiempo trabajado. Por tanto el empleador que del total de la asignación deduce la parte proporcional a los días en que el trabajador dejó de prestar el servicio no está haciendo retención salarial alguna. **Sería absurdo suponer que la ley impone al empleador la obligación de obtener autorización expresa y específica del trabajador para dejar de pagarle salarios no devengados**”.*”

Lo anterior significa que no es absoluta la regla aplicada por el juez *a quo* para resolver esta controversia, en la medida, que no todo pago realizado al trabajador y que sea posteriormente descontado implica la necesidad de contar con su autorización, pues se ha aceptado como excepción cuando se evidencie que existieron pagos en exceso y no justificados. Aunque en decisiones como SL1098 de 2021 se ha aclarado que estos descuentos no pueden darse, aún con autorización del trabajador, cuando afectan el salario mínimo legal.

Adicional a las pruebas ya referenciadas, los demandantes rindieron interrogatorio de parte, indicando cada uno en términos generales que suscribieron el contrato aportado pero que adicional y de manera verbal pactaron unos rubros adicionales de acuerdo al destino del viaje, que no autorizaron descuentos pese a lo cual en noviembre se les canceló un valor inferior y que, si bien se pactó un valor adicional de horas extras fijo, por la labor debían estar disponibles a cualquier llamado.

De otra parte, el testigo ALFONSO CONTRERAS JARAMILLO, director financiero y administrativo de COOTRANSCOPETROL, indicó, que a los actores se les dio un valor anticipado de salario (conformado por horas extras y viáticos) para que pudieran moverse y al final del mes liquidar todo, restando lo anticipado, pero hasta octubre no se percataron que no se estaba descontando. Afirma, que al no ser un descuento diferente al salario y no ser superior a este, no requería autorización para realizar el descuento y se les informo, que fue cuando decidieron no seguir trabajando.

Igualmente, El señor WILMAR PORRAS CORTES, jefe de talento humano de la demandada, afirmó, que al hacerles un giro de dinero adicional, se les solicitó a los demandantes que se presentaran a descargos por escrito, pero ellos no se presentaron, aunque desconoce la suma y la razón del error, advirtiendo que los demandantes nunca acudieron a solucionar el tema del pago adicional.

Aplicando este precepto jurisprudencial al caso concreto; advierte la Sala, que a partir de los elementos de prueba reseñados no existe una justificación

objetiva para que los trabajadores hubieran percibido conceptos adicionales a las sumas pactadas en el contrato de trabajo; aunque alegan haberlas acordado verbalmente con su superior en Cúcuta, un pago adicional por viaje (\$40.000 a Cúcuta, \$80.000 a Pamplona y \$30.000 a El Zulia), no obra ninguna prueba que ratifique este pacto. Y en todo caso, iría en contravía con el clausulado del contrato de trabajo donde ya se preveía un pago adicional, por concepto de viáticos y otra bonificación no salarial para alimentación.

En esa medida, si los demandantes pretendían defender la versión de la existencia de pagos adicionales al salario pactado y desacreditar el error administrativo alegado por el empleador, debieron ejercer debidamente la carga probatoria para ello, por lo que, no existiendo justificación para los pagos percibidos adicionalmente, se estima equivocada la decisión de primera instancia que condenó a la demandada a su reintegro, por realizarla sin la autorización de los demandantes, dado que por tratarse de sumas pagadas en exceso y sin justificación no requería su permiso, sin que en todo caso se afectara el salario mínimo mensual legal vigente para entonces.

Por lo anterior, le asiste razón a la parte demandada en su apelación y se revocarán los numerales cuarto y séptimo de la providencia impugnada y en su lugar, se negarán las pretensiones dirigidas a reclamar devolución de descuentos indebidos y se absolverá a la demandada, declarando probada la excepción de COBRO DE LO NO DEBIDO.

7.3 Reliquidación de prestaciones sociales.

En la medida que la resolución de los dos primeros problemas jurídicos fue desfavorable a la parte demandante, al no demostrarse debidamente la existencia de trabajo suplementario no remunerado y la existencia de pagos adicionales al salario pactado, por sustracción de materia se hace improcedente analizar si hubo indebida reliquidación de prestaciones sociales.

7.4 Indemnización por despido injusto.

Procede la Sala a analizar si en efecto, el despido de los trabajadores fue justificado y se les garantizó el derecho de defensa; en principio el trabajador que alega la causación de derechos originados en un despido injusto, debe demostrar el hecho simple del despido, y al empleador le corresponde acreditar la ocurrencia de la justa causa legal que le permitió realizar el mismo, en los términos del artículo 167 del C.G.P., el cual dispone que le corresponde a las partes demostrar los supuestos de hecho en que se sustentan sus pretensiones.

Se advierte también, que el empleador cuando considere que existe justa causa puede unilateralmente y sin indemnización alguna, despedir al trabajador, siempre y cuando, le haya comunicado al trabajador de los motivos y razones concretos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior, lo cual debe ser inmediato al evento generador y debe estar relacionado entre las causas taxativamente previstas en el postulado normativo.

En esa medida, corresponde al trabajador acreditar el hecho simple del despido y demostrado este, ya compete al empleador establecer plenamente la concurrencia de una justa causa imputable al trabajador para justificar la terminación unilateral y, al tiempo, debe demostrar haber garantizado el debido proceso al agotar esta decisión.

Desde la demanda se indicó por los actores, que el día 22 de diciembre de 2015 al presentarse para laborar en CERAMICA ITALIA, donde estaban los vehículos, no los dejaron ingresar, porque el supervisor había reportado que ya no eran trabajadores de la demandada y que ya tenían reemplazos designados, siendo notificados entre el 28 y 29 de diciembre del despido por no presentarse a laborar desde el 24 de diciembre.

Por su parte la demandada se opone alegando que no hubo despido injusto, pues los actores abandonaron sus labores el 23 de diciembre de 2015 y se utilizaron todos los medios para ubicarlos, llamándolos al teléfono registrado sin obtener respuesta y por eso, se les dirigió correo certificado.

Argumento que fue rechazado por el juez *a quo* al no encontrar prueba que lo respaldara, mientras que sí observó que los actores probaron que les impidieron trabajar desde el 22 de diciembre, reiterando la demandada en su apelación que hubo despido justo por abandono del cargo.

Para resolver lo anterior, se debe tener en cuenta que el despido con justa causa, por regla general, no constituye una sanción disciplinaria, salvo que en el orden interno de la empresa se la haya dado expresamente ese carácter, según posición reiterada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en providencia del 15 de febrero de 2011, Rad. no.39394, ha dicho:

“la naturaleza del despido no es la de una sanción, por lo que para adoptar una decisión de esta índole el empleador, salvo convenio en contrario, no está obligado por ley a seguir un procedimiento de orden disciplinario”

Sin embargo, resulta claro que es inalienable la exigencia del derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Política, ante la existencia de cualquier procedimiento judicial o administrativo, en razón a la primacía para cualquier decisión del principio de legalidad; por ello, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha estimado que *“para el evento de la terminación del contrato con justa causa por parte del empleador, la vulneración del derecho al debido proceso se puede predicar, por regla general, en el evento de que dentro de la empresa se haya previsto expresamente un procedimiento para despedir.”* (Providencia SL15245-2014. M.P. JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ)

De allí que, si bien no se le exija al empleador un procedimiento delimitado y concreto para el despido, ello no significa que este no tenga límites al momento de tomar la decisión del despido con justa causa; al respecto, recientemente en proveído SL2351 de 2020 la Sala de Casación Laboral ha complementado lo expuesto en precedencia y ha delimitado las garantías que deben preceder a la decisión de finalizar el vínculo laboral con base en una justa motivación, así:

a) La necesaria comunicación al trabajador de los motivos y razones concretos por los cuales se va a dar por terminado el contrato, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior; deber este que tiene como fin el garantizarle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se le hacen y el de impedir que los empleadores despidan sin justa causa a sus trabajadores, alegando un motivo a posteriori, para evitar indemnizarlos .

b) La inmediatez que consiste en que el empleador debe tomar la decisión de terminar el contrato de forma inmediata, después de ocurridos los hechos que motivan su

decisión o de que tiene conocimiento de estos. De lo contrario, se entenderá que fueron exculpados, y no los podrá alegar judicialmente.

c) Se configure alguna de las causales expresa y taxativamente enunciadas en el Código Sustantivo de Trabajo;

d) Si es del caso, agotar el procedimiento a seguir para el despido establecido en la convención colectiva, o en el reglamento interno de trabajo, o en el contrato individual de trabajo, para garantizar el debido proceso.

e) La oportunidad del trabajador de rendir descargos o dar la versión de su caso, de manera previa al despido.”

Se encuentra demostrado en este asunto que en formato de autorización de salida No. 5242 del 22 de diciembre de 2015 a las 18:15 p.m. (Fol. 23), se deja constancia que *“se presentó el conductor WILDEN CONDE a la estación pero no se autorizó la salida por parte del supervisor de CTC”* y a folio 403 obra copia de un correo electrónico remitido por WILSON SANGUINO (wsanguino@mc2energia.com) a la portería de Cerámica Italia (fcaceres@ceramicaitalia.com) y otros, indicando *“Formalmente informo que los siguientes señores a partir de la fecha apoyarán las operaciones de transporte de GNC, con los vehículos de CTC que prestan su apoyo a MC2. Los conductores anteriores ya se encuentran desvinculados de la operación a partir de las 18:00 horas del día de hoy”*.

Acorde a esta prueba, es claro que los demandantes dejaron de ejercer funciones por decisión unilateral del empleador desde el 23 de diciembre de 2015; aceptando el empleador desde la liquidación final de pretensiones, que esta es la fecha delimitada como extremo final del contrato.

Por ello, estima la Sala que demostrado el despido como acontecido el 23 de diciembre de 2015, cualquier actuación posterior del empleador destinada a modificar los hechos que originaron la terminación no tienen vocación de legitimidad; nótese que carece el abundante material probatorio de una comunicación formal notificando a cada trabajador de la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo alegando una justa causa e informándole debidamente los fundamentos de hecho.

De acuerdo a lo expuesto, le asistió razón al juez *a quo* cuando determinó que no existió justa causa para el despido, dado que acorde a lo probado fue una decisión unilateral del empleador que posteriormente intentó legitimar; por lo que no prospera este aspecto del recurso de la demandada y se confirmarán los numerales tercero y octavo que impusieron la condena por este aspecto.

7.5 Indemnización moratoria

Respecto de la indemnización moratoria, el juez *a quo* resolvió imponer la sanción moratoria exclusivamente del 24 de diciembre de 2015 al 16 de marzo de 2016, indicando que el empleador no pagó al finalizar el contrato la liquidación final de prestaciones y el salario de diciembre, acudiendo a realizar una consignación judicial en el mes de enero, pero notificando a los trabajadores hasta que ellos le reclamaron; por lo que no evidenció buena fe en su actuar.

Al respecto, el apoderado de la parte actora reclama que se debió condenar sin el límite impuesto a la parte demandada pues pese a la consignación, el trabajador no ha accedido al pago por cuanto el empleador no autorizó su retiro y en todo caso que se seguía adeudando los demás conceptos reclamados en la demanda; por otra parte, el apoderado de la demandada

solicita se absuelva por esta condena, dado que pese al valor adeudado por los trabajadores igual se consignaron sus prestaciones.

De conformidad con el artículo 65 del C.S.T., *“Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.”*

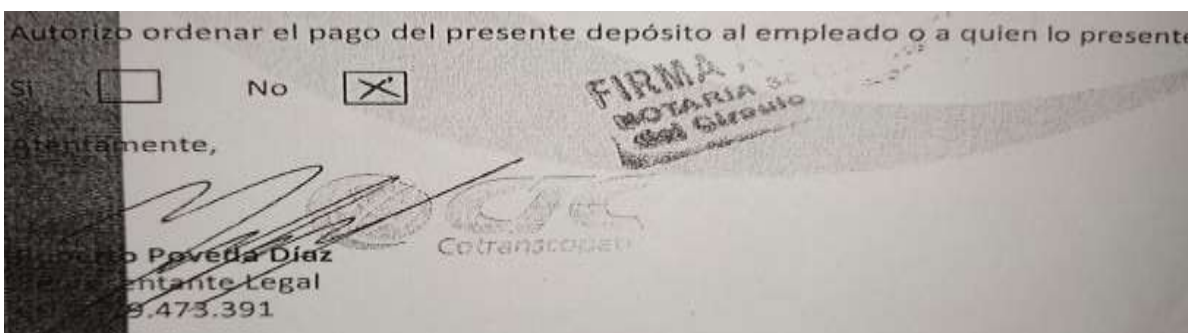
Al respecto, sobre la indemnización moratoria, se traerá a colación lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-1091 de 2018 al indicar que esta condena *“tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, al pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo laboral”* y se ha agregado por la jurisprudencia *“que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la buena fe para exonerar al empleador”*.

Más recientemente, la providencia SL1293 de 2020 resalta que la Sala de Casación Laboral *“se ha opuesto a cualquier hermenéutica fundada en reglas inderrotables y concluyentes acerca de cuándo procede o en qué casos hay buena fe o no, pues se ha inclinado por la verificación de la conducta del empleador en cada caso concreto, de acuerdo con todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el proceso, pues «no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuándo un empleador es de buena o de mala fe» y «sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro»* concluyendo que *“las decisiones fundamentadas en guías o paradigmas preestablecidos de comportamiento de buena o mala fe, se distancian del sentido que esta Sala les ha atribuido a los preceptos normativos que consagran la indemnización moratoria, que, se repite, exigen sin excepción, la revisión completa y dimensionada de todos los elementos del caso”*.

Ante ello, no existe un parámetro objetivo para determinar la buena fe del empleador para no cancelar las prestaciones laborales respectivas al trabajador cuando ha finalizado la relación laboral, sino que compete al juzgador establecer si existió alguna justificación que permita entrever que el empleador entendía que no estaba obligado a cancelar los derechos reconocidos, o que estaba convencido de que existían serias razones objetivas y jurídicas para abstenerse de hacer los pagos.

Sobre la forma de valorar la mala fe, la sentencia SL11436 del 29 de junio de 2016 (Rad. 45.536 y M.P. GERARDO BOTERO) hace un recorrido sobre los precedentes que debe seguir todo funcionario judicial al estudiar la imposición de la indemnización moratoria; destacando que algunos elementos a tener en cuenta son la conducta del empleador, tanto en el desarrollo de la relación como con su finalización, esto es, *“en relación a los actos y comportamientos del empleador moroso que permitan descalificar o no su proceder”*, recordando que en decisiones previas se dieron algunos parámetros como la necesidad de evaluar *“si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos”*, también si *“éste tuvo razones serias y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, o que justifiquen su incumplimiento”*.

Obra como prueba a folios 35, 130, 289 y 376 oficio suscrito por ROBERTO POVEDA DÍAZ como representante legal de COOTRANSCOPETROL, acompañado de título judicial consignando \$1.805.592, cuyos conceptos discrimina entre prestaciones y salario, resaltando en la parte inferior el siguiente recuadro, para todos y cada uno de los demandantes:



Al respecto de la validez del pago por consignación para exonerar de la indemnización moratoria, se explica en providencia SL4948 de 2020:

“Ha dicho la Corte en su jurisprudencia, que el pago por consignación libera al empleador de la indemnización moratoria (CSJ SL, 9 sept. 1966, GJ CXVII, n.º 2282, pág. 366-372), pero para ello, es menester que el trabajador sea enterado de la existencia del título de depósito judicial, y del juzgado al cual debe acudir para retirarlo.

Así lo sostuvo la Corte en la sentencia CSJ SL4400-2014, en la que al rememorar las providencias CSJ SL, 29 jul. 1998 rad. 2264, y CSJ SL, 20 oct. 2006, rad. 28090, consideró:

1º) Sobre el pago por consignación.

En sentencia CSJ SL del 29 jul 1988, rad. 2264, la Corte recordó el sendero que hay que recorrer para que una consignación judicial sea plenamente válida en relación con el trabajador reclamante, de la siguiente manera:

El pago por consignación es un acto complejo que supone la sucesión de varios pasos, comenzando por el depósito mismo en el Banco Popular, siguiendo por la remisión del título al Juzgado Laboral y concluyendo con la orden del juez aceptando la oferta de pago y disponiendo su entrega, acto este último que reviste gran importancia frente al problema de la mora en los eventos en que el juez se ve impedido de disponer la entrega por circunstancias imputables a la responsabilidad del deudor o consignante.

Para que el pago por consignación produzca sus efectos plenamente liberatorios es indispensable que alcance el efecto de dejar a disposición del beneficiario la suma correspondiente y ello se logra mediante la orden del juez ordenando lo pertinente. Sólo en tal momento debe tenerse por cumplida la condición para que cese el efecto de la indemnización moratoria, salvo que la razón por la cual no se produzca esa orden no sea imputable a responsabilidad del consignante” (Sentencia 11 de abril de 1985).

Y en providencia CSJ SL del 20 oct 2006, rad. 28.090, la Sala dispuso:

importa precisar que no resulta suficiente que la empleadora consigne lo que debe, o considera deber, por concepto de salarios y/o prestaciones de quien fue su trabajador, en los términos del artículo 65 del C. S. del T., sino que es su obligación notificarle o hacerle saber de la existencia del título y del juzgado a donde puede acudir a retirarlo, porque, de no obrar así, es lógico entender que no actuó con buena fe, lo que es lo mismo, que su responsabilidad se entiende extendida hasta dicho momento.

En cualquier caso, conviene recordar que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en los juicios laborales los falladores de instancia gozan de libertad para apreciar

las pruebas, y están facultados para valorarlas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo «cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus», pues en tal caso «no se podrá admitir su prueba por otro medio».

Aplicando este precedente jurisprudencial, estima la Sala para este caso, que el pago por consignación realizado por el empleador no tiene efectos liberatorios por cuanto en su contenido se desprende que informó al juez laboral receptor que no autorizaba al trabajador a retirar el valor consignado; es decir, pese a consignar y notificar - aunque tardíamente - a los trabajadores, estos no lograron acceder finalmente al pago. Se advierte, que la norma no autoriza a retener la liquidación final de prestaciones, y el artículo 250 del C.S.T. se limita a permitir la pérdida del derecho a cesantías por acto delictuoso, sin que el empleador ejecutara las acciones tendientes a adelantar el cobro de conceptos que estime adeudados o denuncias para apegarse a esta norma.

En consecuencia, el pago por consignación efectuado no solo fue incompleto sino que se ejecutó un inexistente derecho de retención que ha impedido a los trabajadores acceder al pago y por ende, se estima que esta es una actuación de mala fe, dado que cualquier intención de recuperar conceptos adeudados debió ejercerse bajo mecanismos legales.

Por lo anterior, no está llamado a prosperar el recurso de apelación de la demandada y le asiste razón al demandante cuando advierte que a la fecha de notificación del pago por consignación no podía tenerse como límite, dado que, pese a ello, no se ha logrado materializar el cobro de los conceptos salariales adeudados.

En consecuencia, se modificará el numeral noveno de la providencia apelada y en su lugar se condenará a COOTRANSCOPETROL a reconocer y pagar indemnización moratoria a favor de cada uno de los demandantes en cuantía de un día diario de salario (\$37.305)¹ desde el 24 de diciembre de 2015 al 23 de diciembre de 2017, lo que equivale a un total de \$26.859.600 y a partir del 24 de diciembre de 2017 se ordenará el pago de intereses moratorios liquidado a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, sobre el saldo adeudado (\$1.805.592).

Finalmente, la Sala advierte que como la demandada resultó vencida en juicio, aunque ha prosperado parcialmente su apelación, se impondrán costas de segunda instancia en su contra y se fijará un salario mínimo mensual legal vigente como agencias en derecho, a favor de cada demandante.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR los numerales cuarto y séptimo de la sentencia del 28 de septiembre de 2018 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta de la providencia impugnada; en su lugar, se negarán las pretensiones dirigidas a reclamar devolución de descuentos indebidos y se

¹ Conforme a la cláusula segunda son conceptos salariales: \$850.000 –salario básico y \$269.167 por trabajo suplementario, para un total de \$1.119.167 mensual y diario de \$37.305

absolverá a la demandada, declarando probada la excepción de COBRO DE LO NO DEBIDO.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral noveno de la providencia apelada, en el sentido de CONDENAR a COOTRANSCOPEPETROL a reconocer y pagar indemnización moratoria a favor de cada uno de los demandantes en cuantía de un día diario de salario (\$37.305) desde el 24 de diciembre de 2015 al 23 de diciembre de 2017, lo que equivale a un total de \$26.859.600 para cada uno y a partir del 24 de diciembre de 2017 se ordenará el pago de intereses moratorios liquidado a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia Financiera, sobre el saldo adeudado (\$1.805.592) a cada actor.

TERCERO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia apelada, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a la parte demandada COOTRANSCOPEPETROL S.A.S. Fijar como agencias en derecho a favor de cada demandante. un salario mínimo mensual legal vigente

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

RAD: 54-001-31-05-001-2017-00259-01

P.T. No. 18888

REF: Proceso Ordinario

DEMANDANTE: Aura María Prada Moncada

DEMANDADO: UFPS, Colpensiones y Grecia Lenin Méndez Contreras

Como las pretensiones de la activa superan el equivalente a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020 (\$105.336.360), se concede para ante el superior el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada el 30 de junio de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELVER NARANJO

Elver Naranjo



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Treinta y uno (31) de marzo de Dos Mil Veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-001-2018-00302-00
RADICADO INTERNO:	18.768
DEMANDANTE:	YANETH NIÑO CAMPOS
DEMANDADO:	COLPENSIONES y ALEXANDRA SOLANO BOTELLO

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala, dentro del proceso ordinario laboral promovido por YANETH NIÑO CAMPOS contra COLPENSIONES y ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, Radicado bajo el No. 54-001-31-05-001-2018-00302-00, y Radicación interna No. 18.768 de este Tribunal Superior, para conocer el recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas contra la Sentencia del 5 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

La señora YANEHT NIÑO CAMPOS, mediante apoderado judicial, solicita se ordene a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente como compañera permanente del señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO, revocando la Resolución SUB-150597 del 24 de agosto de 2017 que negó dicha petición.

Como fundamento fáctico refiere:

- Que convivió con el señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO en unión marital de hecho permanente, ininterrumpida y bajo el mismo techo por más de 25 años antes de su fallecimiento, procreando una hija ya mayor ARGY LINET SOLANO NIÑO.
- Que el 15 de julio de 2017 falleció, habiéndosele reconocido pensión de vejez en Resolución GNR-278518 del 11 de septiembre de 2015 por parte de COLPENSIONES.
- Que su compañero se encontraba casado con la señora ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, de quien no se había separado legalmente, pero sí de hecho hacía más de 25 años; pese a lo cual, ella solicitó el reconocimiento pensional aprovechando que legalmente seguía siendo cónyuge.

- Que por su cuenta solicitó el reconocimiento pensional el 28 de septiembre de 2017, pero dicha entidad solo otorgó el derecho a la ALEXANDRA SOLANO BOTELLO mediante Resolución SUB-150597 del 24 de agosto de 2017, indicando posteriormente que la actora no acudió durante el emplazamiento con su reclamación y la misma es extemporánea, pero sin valorar que esta demora obedeció a que estaba en trámite su registro civil de nacimiento expedido en Saravena, de donde fue desplazada por grupos al margen de la ley.
- Que mantuvo una relación de apoyo y acompañamiento con su compañero hasta el día de su fallecimiento, dependiendo económicamente de él pues no tenía salario ni trabajo; de manera que desde su muerte se le ha dificultado su subsistencia.

La demandada COLPENSIONES contestó a la demanda indicando que admite los hechos de trámite administrativo, no constándole las circunstancias de convivencia personal relatadas y que corresponde al juez, resolver el conflicto entre la cónyuge y compañera permanente. Se opone a las pretensiones por no tener certeza de los requisitos como beneficiaria que alega tener la demandante y propone como excepciones INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN e INNOMINADA.

La demandada ALEXANDRA SOLANO BOTELLO se notificó personalmente el 9 de octubre de 2018 y dentro de la oportunidad legal no contestó la demanda.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la Sentencia del 5 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR QUE LA DEMANDANTE YANETH NIÑO CAMPO, EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE ASÍ COMO LA DEMANDADA ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, EN CALIDAD DE CÓNYUGE SUPÉRSTITE, DEL CAUSANTE BENILDO SOLANO AVENDAÑO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA ACCEDER A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2017.

SEGUNDO: ORDENAR A LA DEMANDADA COLPENSIONES RECONOCER Y PAGAR PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE A FAVOR DE YANETH NIÑO CAMPOS, EN CALIDAD DE COMPAÑERA PERMANENTE A PARTIR DEL 15 DE JULIO DE 2017 EN PROPORCIÓN EQUIVALENTE AL 50% DE LA MESADA (...) TENIENDO EN CUENTA QUE A LA DEMANDADA ALEXANDRA SOLANO BOTELLO YA SE LE VIENE RECONOCIENDO Y PAGANDO STE DERECHO Y QUE LE CORRESPONDE EN UN 50%.

TERCERO: DECLARAR NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS POR COLPENSIONES.

CUARTO: ABSOLVER A COLPENSIONES DE LAS DEMÁS PRETENSIONES”.

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que, el objeto del litigio se centra en establecer si la señora YANEHT NIÑO CAMPOS cumple con los requisitos de ley para que COLPENSIONES le reconozca la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del pensionado BENILDO SOLANO AVENDAÑO, y condenar al pago de las mesadas causadas, pretensión que le fue negada por haberse reconocido previamente el mismo, a la cónyuge supérstite ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, quien alega estaba separada de hecho del causante.

- Señala, que está demostrada la calidad de pensionado por invalidez del causante BENILDO SOLANO, por lo que se verificará si la actora acreditó la calidad de beneficiaria para acceder a la sustitución pensional conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993; esto es, que conviviera al menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado.

- Resalta las pruebas documentales anexas, así como con los testimonios de MARIA BEATRIZ ROLDON CALDERÓN, MARJORILYN JARETH TOSCANO, MIRYAM CONTRERAS CONDE y los interrogatorios de parte; del primero indica que afirmó ser compañera de estudio de la actora hace más de 25 años, que ella vivía con el causante desde 1989-1990, siendo él un conductor de buseta, residían en casa de la mamá de Yaneth donde construyeron un segundo piso, procrearon una hija juntos y murió en semana santa de 2017 por una rabia que le generó un aneurisma. Mientras MARYORY pues labora junto a la casa de la madre de la actora, a quien conoce desde hace 11 o 12 años junto a su hija y a su esposo BENILDO, quien laboraba en COOMICRO, relatando los cuidados de la actora a su compañero en sus últimos días. MYRIAM CONTRERAS afirmó que conoció a BENILDO y afirma que este vivía era con YANETH, aunque tenía una relación con ALEXANDRA y que ella lo cuidó junto a YANETH y su hija en la enfermedad. Finalmente, FREDY SOLANO, hermano del causante, quien afirma que tenía muchas mujeres y si bien se casó con ALEXANDRA nunca vivió con ella, no se tenía muy claro, pero su hermano siempre hablaba de YANETH y su hija con ella.

- Destaca del interrogatorio de parte de la demandante, que conoció al actor en 1989, tuvieron una relación continua y sin separación hasta su muerte, aunque acepta que a veces se iba 1 o 2 días a casa de la mamá, era quien sostenía el hogar y ella era su compañera permanente; mientras la demandada afirma que conoció al actor en 1986, fueron novios 3 años y luego nacieron sus dos hijos, en 1990 y 1992, se casaron en 1998 por lo civil aunque tuvo separaciones por celos pues le contaban que tenían muchas mujeres, incluso tenía 5 hijos extramatrimoniales y que él le pasaba las mujeres frente a su casa, visitaba a YANETH en el día pero pasaba con ella la noche y ella no la dejaba ingresar a su casa.

- Concluye, que analizadas las pruebas obrantes en el expediente se encuentra probado que efectivamente entre el señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO, y la señora YANETH NIÑO CAMPOS, si se materializó una convivencia real y efectiva por más de cinco años anteriores a la muerte del causante; pues según los declarantes y el interrogatorio rendido por la actora, la convivencia se dio por un espacio aproximadamente de 25 años desde el año 1989, dependiendo económicamente del causante. Respecto de la demandada ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, Colpensiones le reconoció pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge del causante, al acreditar los requisitos de Ley para ello. Por lo que ambas tienen derecho según la ley para el reconocimiento pensional, sin que prospere la excepción de prescripción.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la demandada ALEXANDRA SOLANO BOTELLO

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión señalando lo siguiente:

- Indicó que a pesar de probarse una convivencia entre el señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO y la señora YANETH NIÑO CAMPOS, no se determinó el tiempo durante el cual estuvo vigente la misma, por cuanto las declaraciones de los testigos no son concordantes en cuanto las fechas en que manifestaron se dio la convivencia, pues la testigo María Beatriz Rondón dice que los conoce desde hace 25 años, es decir, desde el año 1986, y la demandante YANETH OCAMPOS señala que vivieron desde el año 1989.

- Agregó que, la mayor contrariedad se presenta cuando los testigos señalan que la pareja siempre vivió en la casa de los papas de YANETH NIÑO CAMPOS, y que siempre permanecieron ahí; no obstante, en el expediente obra una declaración extraproceso rendida por la actora en la que manifiesta que para el año 2012, la actora no vivía en la casa de sus padres, por lo que si ella misma acepta que no vivía ahí es claro que los testigos están mintiendo.

- Señaló también, como otro punto de inconformidad la declaración rendida por el señor Freddy Antonio Avendaño Solano, quien no fue claro en manifestar con quien convivió su hermano, pues para el testigo, su hermano “se lo pasaba con una persona una vez y con otra y otra” (sic).

- Que teniendo en cuenta que no se demostró los extremos de la convivencia, solicita se revoque la misma, y se reconozca que la señora ALEXANDRA SOLANO BOTELLO es titular del 100% de la pensión de sobrevivientes, o que por el contrario redistribuya el porcentaje y se le asigne a la demandada un porcentaje mayor, por no estar determinado el tiempo de convivencia.

3.2 De la demandada COLPENSIONES

La apoderada de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión señalando lo siguiente:

- Que la demandante YANETH NIÑO CAMPOS no demostró haber realizado convivencia con el causante BENILDO SOLANO AVENDAÑO.

- Que no puede darse crédito a las declaraciones de los testigos pues estos siempre manifestaron que la actora y el causante siempre convivieron en la casa de los padres de YANETH NIÑO hasta el momento de la muerte; no obstante, en la declaración rendida por la demandante obrante a folio 12 del expediente, ella misma manifestó que en el año 2012 vivía en Venezuela, lo que deja sin piso lo manifestado por los testigos.

- Que de igual forma una de las declarantes manifestó que tuvo amores con el causante tres años después de haberse separado de la esposa ALEXANDRA SOLANO, y no indicó tampoco la época en que se dio la convivencia de la actora con el señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO, y a su vez el hermano del causante manifestó en su declaración que él un día estaba con una y al otro día con otra, llegando a la conclusión que la actora no demostró cuanto tiempo convivió con el causante.

4. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

- **Parte demandante:** No presentó alegatos
- **Parte demandada:**

La apoderada de COLPENSIONES reiteró lo expuesto desde primera instancia de que no se encuentra obligada al reconocimiento de la pensión de sobreviviente que fue otorgada en primera instancia por el Aquo, a la demandante YANETH NIÑO CAMPOS, por cuanto se tiene, que obra un reconocimiento a favor de la señora ALEXANDRA SOLANO BOTELLO mediante Resolución No. 170597 del 24 de agosto de 2017, como beneficiaria del causante BENILDO SOLANO AVENDAÑO; decisión que fue tomada dentro de los parámetros legales, procediendo con lealtad dentro del estudio por parte de funcionarios idóneos.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

6. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala es el siguiente:

¿Si la demandante YANETH NIÑO CAMPOS, tiene derecho a que COLPENSIONES le reconozca y pague la pensión de sobreviviente causada tras el fallecimiento de su compañero permanente BENILDO SOLANO?

7. CONSIDERACIONES:

El debate en esta instancia está encaminado a determinar si la señora YANETH NIÑO CAMPOS, en su condición de compañera permanente supérstite, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte del señor BENILDO SOLANO AVENDAÑO, desde el 15 de julio de 2017, con el respectivo retroactivo pensional, debidamente indexado.

Es menester indicar, que el actor devengaba la pensión de invalidez y la actora afirma cumplir con los requisitos para acceder a la sustitución pensional, pero esta le fue negada por COLPENSIONES, por cuanto ya había accedido a la misma la señora ALEXANDRA SOLANO BOTELLO, en calidad de cónyuge.

El juez *a quo* accedió a las pretensiones de la demandante, indicando, que las pruebas practicadas permiten evidenciar la convivencia entre compañeros que formaron el causante y la actora desde 1989 hasta su fallecimiento, debiendo compartirse en cuotas iguales la mesada ya reconocida a la cónyuge; conclusión a la que se oponen las demandadas, quienes argumentan que las pruebas obrantes al plenario son contradictorias y no permiten aseverar con certeza que hubo la convivencia necesaria para acceder a la pensión de sobrevivientes.

De conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del C.P.T.Y.S.S., la competencia de esta Sala se limita a establecer si la señora YANETH NIÑO CAMPOS acreditó los requisitos para ser beneficiaria de la sustitución pensional por el fallecimiento de su alegado compañero permanente BENILDO SOLANO; advirtiéndose que desde la demanda esta pretendió también que se revocara el reconocimiento inicial concedido a la

cónyuge supérstite ALEXANDRA SOLANO, pero el juez negó esta pretensión y no hubo recurso de apelación en contra de ello, ni de la demandante o COLPENSIONES, por lo que dicho asunto quedó excluido de pronunciamiento en esta instancia.

Como principales hechos demostrados en el proceso, se determinan los siguientes:

- Los señores BENILDO SOLANO AVENDAÑO y ALEXANDRA SOLANO BOTELLO contrajeron matrimonio civil el 30 de abril de 1998, inscrito ante Registro Civil No. 18981820; pareja que procreó dos hijos: DAYSI ISAMAR SOLANO SOLANO y EDWIN ORLANDO SOLANO SOLANO, nacidos en octubre de 1990 y julio de 1992 acorde a registros civiles de nacimiento anexos al expediente administrativo.
- BENILDO SOLANO AVENDAÑO y YANETH NIÑO CAMPOS procrearon una hija, ARGY LINETH SOLANO NIÑO, nacida el 10 de junio de 1993.
- COLPENSIONES mediante Resolución GNR278518 del 11 de septiembre de 2015, reconoció a BENILDO SOLANO AVENDAÑO una pensión de invalidez, luego de ser calificado en dictamen 6392 del 25 de febrero de 2015 con 51.74% de pérdida de capacidad laboral estructurada el 16 de octubre de 2014 y equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, modificada en Resolución GNR338675 del 28 de octubre de 2015 y confirmada en Resolución VPB4274 del 28 de enero de 2016.
- Acorde al registro civil de defunción, BENILDO SOLANO AVENDAÑO falleció en Cúcuta el 15 de julio de 2017.
- COLPENSIONES, mediante Resolución SUB170597 del 24 de agosto de 2017, por la que COLPENSIONES reconoce pensión de sobreviviente a ALEXANDRA SOLANO BOTELLO como beneficiaria de BENILDO SOLANO AVENDAÑO, en calidad de cónyuge y acorde a declaraciones extrajuicio aportadas.
- COLPENSIONES, a través de Resolución SUB245965 del 2 de noviembre de 2017, negó la solicitud de pensión de sobrevivientes de YANETH NIÑO CAMPOS alegando que el 100% ya se había asignado a la reclamante ALEXANDRA SOLANO BOTELLO.

Respecto al problema jurídico puesto a consideración por la Sala es preciso indicar, que el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, dispone que es beneficiario de la pensión de sobrevivientes:

“En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. (...)

Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo

convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”

De acuerdo con la norma anterior, para que la compañera permanente adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe demostrar que convivió con el causante durante los últimos cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; requisito que ha sido analizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL- 1399 rad. Interno N° 45.779 del 25 de abril de 2018, en la cual se incide en que *“la jurisprudencia ha sido pacífica en señalar que la convivencia debe verificarse dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al deceso del causante (...) puesto que, a diferencia del vínculo matrimonial, cuyas obligaciones personales no se agotan por la separación de facto, en tratándose de las uniones maritales de hecho, la cesación de la comunidad de vida tiene un efecto conclusivo de la unión y de sus obligaciones y deberes personales, y por ende el compañero deja de pertenecer al grupo familiar. Vale aclarar que esta distinción, aunque podría parecer artificiosa y contraria al principio de no discriminación, en realidad no lo es, ya que se funda en las especificidades propias del matrimonio y de la unión marital de hecho, único criterio que ha sido aceptado por la jurisprudencia constitucional como legítimo para establecer diferencias entre cada uno de estos vínculos familiares.”*

En todo caso, en la misma decisión, la Corte recuerda que los desacuerdos o disgustos transitorios de la pareja, o la no cohabitación por motivos de fuerza mayor no suponen una ruptura de la convivencia, pues su jurisprudencia ha entendido que *“en la familia, como componente fundamental de la sociedad, pueden presentarse circunstancias o vicisitudes que de ningún modo pueden tener consecuencias en el mundo de lo jurídico, como cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan a que transitoriamente no compartan el mismo techo, pero se mantengan, de manera patente, otros aspectos que indiquen que, inequívocamente no les interesa acabar con la relación, es decir, que el vínculo permanece”* y ante ello, agrega, *“la convivencia debe ser evaluada de acuerdo con las peculiaridades de cada caso, dado que pueden existir eventos en los que los cónyuges o compañeros no cohabiten bajo el mismo techo, en razón de circunstancias especiales de salud, trabajo, fuerza mayor o similares, lo cual no conduce de manera inexorable a que desaparezca la comunidad de vida de la pareja si notoriamente subsisten los lazos afectivos, sentimentales y de apoyo, solidaridad, acompañamiento espiritual y ayuda mutua, rasgos esenciales y distintivos de la convivencia entre una pareja y que supera su concepción meramente física y carnal de compartir el mismo domicilio”*.

En consecuencia, la Sala procederá a analizar si en el presente caso la señora YANETH NIÑO CAMPOS, logró demostrar 5 años de convivencia con el fallecido BENILDO SOLANO AVENDAÑO en el tiempo inmediatamente anterior al fallecimiento para acceder al derecho pretendido, y en ese sentido el libelo probatorio se compone de los siguientes elementos:

Bajo esta línea jurisprudencial, se analizarán los siguientes medios de prueba aportados, para verificar la convivencia:

- Certificado expedido por NUEVA E.P.S. donde consta que YANETH NIÑO fue retirada como afiliada beneficiaria por muerte del cotizante en julio de 2017.
- Declaración extrajuicio rendida por BENILDO SOLANO AVENDAÑO el 4 de septiembre de 2012, dirigido a la REPÚBLICA DE VENEZUELA, donde afirma que YANETH NIÑO CAMPOS es su concubina y ella con su hija dependen económicamente de él.

- Registro civil de nacimiento de ARGY LINETH SOLANO NIÑO, hija de YANETH NIÑO CAMPOS y BENILDO SOLANO nacida el 10 de junio de 1993.
- Resolución SUB170597 del 24 de agosto de 2017, por la que COLPENSIONES reconoce pensión de sobreviviente a ALEXANDRA SOLANO BOTELLO como beneficiaria de BENILDO SOLANO AVENDAÑO, en calidad de cónyuge y acorde a declaraciones extrajuicio aportadas.
- Registros civiles de nacimiento de DAYSI ISAMAR SOLANO SOLANO y EDWIN ORLANDO SOLANO SOLANO, hijos de los señores BENILDO SOLANO y ALEXANDRA SOLANO, nacidos en octubre de 1990 y julio de 1992.
- Registro civil de matrimonio celebrado ante la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta el 30 de abril de 1998 entre BENILDO SOLANO AVENDAÑO y ALEXANDRA SOLANO BOTELLO.
- Registro civil de defunción de BENILDO SOLANO AVENDAÑO, fallecido el 15 de julio de 2017.
- Testimonio rendido por MARIA BEATRIZ RONDÓN CALDERÓN, quien manifestó que conoce a la demandante porque fueron compañeras de estudio desde bachillerato y desde entonces mantienen su relación, pero solo conoce de vista a la señora SOLANO y explica que YANETH vivía en unión libre con BENILDO SOLANO, de quien era su pareja anterior y tuvieron dos hijos. Explica que BENILDO era la pareja de YANETH, laboraba como conductor de buseta y tenía la ruta de su barrio alrededor de 1989, siendo a quien contrataba su familia para realizar paseos en su buseta. Relata que BENILDO y YANETH tienen una hija, de 26 años lo que sabe porque es la misma edad de su hija, residiendo inicialmente en casa de la madre de ella y con el tiempo allí construyeron un apartamento en el segundo piso para tener su privacidad, que se ubica en la calle 23 con avenida quinta de Atalaya. Que esta relación data de hace 28 o 29 años porque antes de terminar el bachillerato eran pareja, inclusive vivían juntos y para esa época ella incluso perdió un bebe. Sobre la muerte del señor BENILDO en 2017, alrededor de semana santa cuando por una rabia le dio un aneurisma, fue internado varias veces y estuvo en UCI hasta que lo enviaron a casa, pero como su segundo piso era de escaleras muy inclinadas lo llevaron a donde su hermano en el Barrio Pizarro y allí falleció tras 8-10 días siendo cuidado por YANETH y su hija, sin que viera a ALEXANDRA que fuera a cuidarlo o visitarlo y narra que BENILDO no permitió que su hija con ALEXANDRA entrara. No le consta que esa relación tuviera interrupciones, descarta que paralelamente él tuviera otra relación, que YANETH estudiaba y se encargaba del hogar, mientras BENILDO laboró en TRANSTONCHALÁ hasta que se pensionó por su enfermedad. Afirmad desde su conocimiento que BENILDO nunca convivió con ALEXANDRA.
- Testimonio rendido por MARJORILYN TOSCANO, quien explica trabaja en una farmacia que queda junto a la casa de la demandante desde hace 11 años, de donde la conoce y es amiga de su hija; no conoce a ALEXANDRA SOLANO y conoció a BENILDO SOLANO desde que llegó al local, era quien vivía con YANETH y su hija, podía observar que salía a laborar en la mañana en su buseta hasta que se accidentó y lo reubicaron en labores de oficina, volvía a almorzar y en la noche, salían juntos. Que oyó sobre unas hermanas de su amiga, pero nunca las conoció. Que ese hogar era sostenido por el trabajo de BENILDO, pero que YANETH antes de perder su visión hacía peinados o tejidos, pero ahora solo vende catálogos. Explica que el señor BENILDO tuvo complicaciones de salud, su esposa e hija lo visitaban en la clínica permanentemente pero al ser enviado a la casa su apartamento no estaba en condiciones para recibirlo por las escaleras para acceder lo

que conoce porque les vendía y llevaba los suministros de la farmacia, por lo que murió en la casa de su hermano. Relata que el trato entre los 3 miembros del núcleo familiar siempre se vio normal, afectivo y cercano.

- INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por YANETH NIÑO CAMPOS, quien explica que al solicitar la pensión de sobreviviente se le informó que esta ya había sido solicitada y adjudicada a ALEXANDRA SOLANO, pues ella se demoró en reclamarla tanto por su duelo por la pérdida de su esposo como por problemas para expedir su registro civil en Arauca, de donde salió desplazada. Que su relación con BENILDO SOLANO comenzó en 1989, construyeron un apartamento en el segundo piso de la vivienda de su mamá y allí convivieron hasta que él falleció, teniendo una relación sin interrupciones solo con discusiones normales donde él sostuvo económicamente el hogar.
- INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por ALEXANDRA SOLANO, quien relató que conoció a BENILDO SOLANO en 1986, comenzando una relación de novios y que a los 3 años se fueron a convivir procreando dos hijos nacidos en 1990 y 1992. Residieron inicialmente en el barrio belén, contrajeron matrimonio civil en 1998 y afirma que él era muy celoso pero pretendía que ella le aguantara muchas cosas, que afirmaba tener muchas mujeres. Conoce a YANETH NIÑO, sabe que tuvo un hijo con BENILDO pero igualmente otras mujeres asistieron al velorio y afirmaron haber convivido con él y tener hijos que no reconoció, una incluso con 4 hijos. Señala que sí peleaban y él se iba de la casa, llegando a su empresa rumores de que estaba con otras mujeres y que inclusive él le pasaba las otras mujeres frente a la casa. Advierte que en la clínica fue cuidado por MYRIAM CONTRERAS, quien no la dejaba entrar y ella también pretendía reclamar derechos por él, pues para entonces vivía con su hermano JESÚS. Indica que desde su conocimiento BENILDO nunca convivió con YANETH, si la visitaba lo hacía de día porque él pasaba a recogerla en su oficina y volvían a la casa.
- Testimonio rendido por MIRYAM CONTRERAS CONDE, quien expresó que conoce a YANETH NIÑO hacía 30 años y desde entonces vivía con BENILDO SOLANO, también conoció a ALEXANDRA SOLANO hace 20 años como vecinas pero no que tuviera vínculo con BENILDO conviviendo, solo que tuvieron 2 hijos. Que estuvo seis meses en la clínica internado, donde ella lo cuidaba y era visitado por YANETH y la hija que tuvieron juntos. Explica que ambos la contrataron para cuidarlo y le pagaba BENILDO de su pensión, saliendo de la clínica a donde un hermano de él porque las escaleras de su casa con YANETH hacían imposible tenerlo allí. Advierte que BENILDO fue quien decidió que ALEXANDRA y sus hijos con ella no lo visitaran, solo la recibió una vez pero no le dirigió la palabra. Relata que ella también tuvo un vínculo sentimental con BENILDO, pero no convivieron, solo que eran cercanos porque ella también cuidó en su enfermedad a sus dos padres. Desconoce que el causante conviviera con ALEXANDRA, siempre conoció del vínculo con YANETH y relata que esos últimos meses ella con un poder cobraba la pensión para cuidarlo, entregarle a YANETH y su hija. Manifestaciones que son concordantes con la declaración extraproceso aportada con la demanda.
- Testimonio rendido por FREDDY ANTONIO SOLANO AVENDAÑO, hermano del causante, quien relató que conoce a YANETH SOLANO hace 30 años como la mujer de su hermano BENILDO conviviendo en unión libre y tuvieron juntos una hija, residiendo en motilones pero sus últimos meses vivía con su otro hermano porque la enfermedad le impedía subir las escaleras. Niega que esa relación tuviera interrupciones. Conoce a ALEXANDRA SOLANO, que vivía cerca y solo escuchó que su hermano se había casado por lo civil con ella, pero no convivieron mucho por las peleas, indicando que su hermano vivía con

una y con otra, incluso cree que él les pasaba dinero a ambas. Que en su enfermedad fue cuidado por YANETH y MYRIAM, solo una vez fue ALEXANDRA con su hija, pero él no las dejó entrar. Manifestaciones que son concordantes con la declaración extraproceso aportada con la demanda.

Entre los principios que orientan el Derecho Procesal Colombiano, es de recibo el de la necesidad de la prueba, el cual está contemplado en el artículo 164 del C.G.P., que a su letra dice: *“Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho”*. A la vez hace lo suyo en materia laboral, el artículo 60 de C.P.T.S.S. que expresa: *“El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas a tiempo”*. Seguidamente el artículo 61 del C.P.T.S.S. reza que: *“El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes...”*, lo cual guarda consonancia con el artículo 167 del C.G.P.

Frente a la valoración probatoria, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL21157-2017, Radicación n.º 55951 y con M.P. ERNESTO FORERO VARGAS, se refiere las facultades del juez recordando que *“no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo. 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto”* y concluyen que las decisiones se deben fundamentar en los *“elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico”*

Específicamente en cuanto a la forma de analizar las pruebas de la convivencia, en providencia SL5677 de 2021 se resalta que *“el requisito de convivencia no se prueba con una simple declaración extraprocesal, pues debe acreditarse la real y permanente comunidad de vida, no se trata de una simple relación amorosa o un tiempo escaso de convivencia, es la voluntad real y con vocación de permanencia de conformar una familia”*.

Bajo esta libertad de configurarse un criterio a partir de los elementos probatorios, esta Sala recuerda en primer lugar, que elementos de prueba como la afiliación a E.P.S. no son idóneos para acreditar convivencia porque no demuestran que entre las personas se haya conformado una relación permanente de acompañamiento mutuo; así lo ha reiterado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL2396 de 2021, donde señaló que *“la Sala ha sostenido que la sola afiliación de una persona al sistema de salud no es prueba apta, por sí sola, para demostrar una convivencia en los términos exigidos legalmente y mucho menos su duración”*.

Ahora bien, a diferencia de lo reclamado por los apelantes, de los diferentes relatos testimoniales recepcionados sí es posible establecer una narrativa coherente y concordante, pues los testigos desde sus diferentes posiciones y relaciones fueron contestes al indicar que BENILDO SOLANO mantenía un hogar permanente desde 1989 con la demandante YANETH NIÑO y la hija en común, residiendo siempre en el mismo lugar: el segundo piso que construyeron en la vivienda de la madre de YANETH y que esta relación tuvo vocación de permanencia hasta el fallecimiento del pensionado. Inclusive se

aporta una declaración del mismo causante donde identifica a la demandante como su compañera y que sostiene el hogar que comparte con esta.

Nótese que MARÍA BEATRIZ RONDÓN expuso como amiga desde el colegio de la demandante que presenció de principio a fin la relación, que inició aun estando YANETH NIÑO en bachillerato, vivieron permanentemente juntos en el segundo piso construido sobre la vivienda de la madre de YANETH y que sus últimos días de enfermedad fue cuidado por esta en casa de su hermano por sus complicaciones de salud para residir en el segundo piso; esto último es concordante con lo expuesto por MARJORILYN TOSCANO, farmaceuta, vecina y amiga de la hija de la actora con el causante, quien explicó que los 11 años que llevaba laborando en la droguería junto al domicilio de la actora presenció su unión familiar, las atenciones al causante durante su enfermedad y que finalmente tuvo que ser cuidado en otro lugar por la dificultad para subir escaleras.

Historia que coincide a rasgos generales con lo expuesto por MYRIAM CONTRERAS, que explicó haber sido cuidadora de los padres de BENILDO SOLANO y de este último, contratada por YANETH NIÑO y quien aseveró que esta era la persona que convivió por más de 30 años con el causante, pues pese a los hijos con ALEXANDRA SOLANO no recuerda que ella hubiera tenido mayor convivencia permanente que YANETH, tanto que el señor SOLANO enfermo no quería recibir visitas de la demandada ni de sus hijos con ella.

Este panorama general es corroborado por el hermano del causante, FREDDY SOLANO, quien relata que este identificaba siempre a YANETH y ARGY como su núcleo familiar cercano, que si bien contrajo matrimonio con ALEXANDRA no convivió permanentemente con ella y mantenía ambos hogares, siendo la demandante quien vio por él durante su enfermedad.

Inclusive, los diferentes testigos aclaran que el señor BENILDO SOLANO era un hombre con múltiples relaciones amorosas y familiares simultáneas, como reconoce su hermano FREDDY SOLANO e inclusive la testigo MIRYAM CONTRERAS acepta haber sido una de esas relaciones por un tiempo, pero advierte que identifica la relación con YANETH NIÑO como permanente y explica que le consta que duró hasta la muerte porque ella fue contratada como cuidadora de BENILDO en sus últimos meses de vida.

A partir de las pruebas documentales es imposible desconocer que el señor BENILDO SOLANO mantenía paralelamente dos hogares: uno con la demandante YANETH NIÑO con quien tuvo una hija y otro con ALEXANDRA SOLANO, con quien tuvo dos hijos e incluso fue con esta quien contrajo matrimonio civil, nacidos los 3 hijos entre 1990 y 1993; incluso, es posible identificar que ambas relaciones fueron paralelas e iniciaron casi al tiempo. La señora ALEXANDRA SOLANO confiesa en su interrogatorio que fueron novios desde 1986 pero se fueron a vivir juntos hasta 3 años después, esto es 1989. Mientras la actora afirma que fue a vivir con el causante también en 1989 cuando aún estudiaba en bachillerato, lo que es respaldado por la testigo MARÍA BEATRIZ RONDÓN, que fue compañera de colegio y amiga desde esa época.

También confiesa la demandada ALEXANDRA SOLANO que conocía de las múltiples y continuas infidelidades de su cónyuge, incluyendo la relación que tenía con YANETH NIÑO, por lo que era normal que discutieran y el saliera por temporadas de la casa que compartían.

Fluye de lo expuesto, que la demandante YANETH NIÑO CAMPOS respaldó probatoriamente que sostuvo un hogar con el señor BENILDO SOLANO, siendo públicamente reconocida como compañera de este por diferentes

vecinos, amigos y familiares en una relación que inició en 1989 y persistió hasta el fallecimiento del causante; la cual, fue descrita por todos los testigos como amorosa, familiar, sostenida económicamente por el trabajo del señor SOLANO y públicamente conocida.

Respecto de los argumentos de los apelantes, se advierte que la testigo MARÍA BEATRIZ RONDÓN no afirmó que la demandante conviviera con el causante desde 1986, sino que desde entonces mantenían una relación y luego supo que vivían juntos; igualmente la declaración de 2012 pese a señalar que el actor trabajaba en Venezuela por un tiempo, el mismo causante afirmó que de esta labor mantenía el hogar con la actora y si bien FREDDY SOLANO aceptó que su hermano estuvo con varias mujeres, identificó a YANETH como la mujer con quien conformó un hogar. Siendo todos los testigos contesten en la misma línea de tiempo de la relación entre las partes, evidenciando la Sala como natural que existan algunas inconsistencias, propias de una persona que mantiene múltiples hogares y por lo tanto aparenta diferentes estilos de vida frente a las personas de su círculo social, sin que estas permitan desconocer el hogar que conformó con la actora.

En consecuencia, no están llamados a prosperar los argumentos de los apelantes y por ende se confirmará la decisión de primera instancia que reconoció en igual proporción la sustitución pensional causada por el fallecimiento de BENILDO SOLANO AVENDAÑO, a favor de su cónyuge ALEXANDRA SOLANO BOTELLO y su compañera permanente YANETH NIÑO CAMPOS, al acreditar esta última los requisitos legales para compartir con la primera el reconocimiento pensional.

Se advierte que el juez *a quo* omitió el deber de proferir la sentencia en concreto, conforme al artículo 283 del C.G.P., por lo que acorde a la liquidación realizada en el siguiente cuadro, se adicionará a la sentencia de primera instancia que desde el 15 de julio de 2017 a marzo de 2022 el retroactivo a favor de YANETH NIÑO CAMPOS asciende a la suma de \$25.969.545,75; así como la autorización a COLPENSIONES para que realice los descuentos a salud de la actora, conforme a los artículo 206 y 207 de la Ley 100 de 1993.

AÑO	MESADA	50%	NO. MESADAS	TOTAL
2017	\$ 737.717,00	\$ 368.858,50	6,5	\$ 2.397.580,25
2018	\$ 781.242,00	\$ 390.621,00	13	\$ 5.078.073,00
2019	\$ 828.116,00	\$ 414.058,00	13	\$ 5.382.754,00
2020	\$ 877.803,00	\$ 438.901,50	13	\$ 5.705.719,50
2021	\$ 908.526,00	\$ 454.263,00	13	\$ 5.905.419,00
2022	\$ 1.000.000,00	\$ 500.000,00	3	\$ 1.500.000,00
				\$ 25.969.545,75

Finalmente, fíjense como agencias en derecho de segunda instancia, la suma de \$200.000 a favor de la demandante y a cargo de cada demandada.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2019 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: ADICIONAR a la providencia en consulta que desde el 15 de julio de 2017 a marzo de 2022 el retroactivo a favor de YANETH NIÑO CAMPOS asciende a la suma de \$25.969.545,75; así como AUTORIZAR a COLPENSIONES para que realice los descuentos a salud de la actora, conforme a los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a las demandadas. Fijar como agencias en derecho de segunda instancia, la suma de \$200.000 a favor de la demandante y a cargo de cada demandada.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 1° de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-001-2019-00346-00, promovido por **Betty Parada Montes** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. y Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, surtir el grado de jurisdicción de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue apelado por ésta.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA (fls. 54 a 72): Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y en consecuencia se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 30 de octubre de 1963, y desde junio de 1991 se afilió al régimen de prima media administradora por el otrora ISS, del que mutó con destino a los fondos privados, sin que mediara una verdadera asesoría o mínima ilustración sobre los riesgos y consecuencias que acarrearía el cambio; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue

espontánea, voluntaria, ni libre. **2) Que** formuló ante las tres administradoras de pensiones convocadas a juicio, petición de nulidad del traslado de régimen.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: Colpensiones se opuso a las pretensiones (fls. 91-96). Admitió las circunstancias fácticas relativas a la edad de la actora, la data de afiliación al RPM, los distintos traslados efectuados ante el RAIS y el reclamo administrativo elevado. Argumentó que la actora se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria y, se encuentra inmersa en la prohibición de trasladarse de régimen establecida en el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en la medida en que, está a menos de diez años para pensionarse. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia del derecho para reclamar la prestación económica, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, y la innominada o genérica.

Porvenir S.A. igualmente resistió las súplicas (fls. 153-161). Indicó no constarle ninguno de los hechos, con excepción de la petición de traslado elevada por la actora. Adujo que ésta no señaló ni demostró cuál fue el error en el que se incurrió para poder determinar si hay lugar a la anulación de su consentimiento, máxime cuando obra formulario de vinculación suscrito por aquella, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la ocurrencia de cualquier vicio de la voluntad. Además, en forma posterior hubo traslado entre administradoras del RAIS, lo que evidencia que decidió permanecer en este régimen. Propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la innominada.

Protección S.A. también se opuso a la pedido (fls. 163 a 171). Reconoció como ciertos los hechos atinentes a la data de afiliación de la demandante en el RAIS y su petición de retorno al RPM; de los demás aseguró no constarle. Señaló que la incoante de manera libre y voluntaria suscribió la vinculación al RAIS

en 1999 con el pleno conocimiento y suficiente ilustración, sin que la simple inconformidad con el régimen seleccionado de lugar a la ineficacia del traslado que se pretende. Formuló como excepciones: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de, e innominada.

Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. no dio respuesta al libelo genitor.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el 1º de octubre de 2021, resolvió declarar la “*nulidad e ineficacia*” de las afiliaciones al régimen de ahorro individual que la accionante surtió primeramente con el fondo de pensiones Horizonte, hoy Porvenir S.A., luego ante Protección y posteriormente hacia Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. Condenó a dichos fondos privados a devolver a Colpensiones todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora y todos los frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., con los rendimientos que se hubieren causado, sin descuento alguno. Asimismo, asumir los deterioros sufridos por el bien administrado (en caso de que se hubieren causados), mermas del capital destinado a financiar la pensión de vejez del demandante, por los gastos de administración en que haya incurrido, en los términos del artículo 963 ibídem. De igual manera, ordenó a Colpensiones que una vez cumplido lo anterior, acepte el traslado de la accionante del RAIS al régimen que ésta administra. Gravó en costas a las demandadas.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley

100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio ninguna de las encartadas cumplió con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada a la demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas.

RECURSOS DE APELACIÓN: Las administradoras del RAIS, Porvenir S.A. y Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. aspiran a que se revoque la decisión. Coinciden en que las disposiciones legales vigentes a la fecha del traslado de la actora, tales como el estatuto financiero y el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 si bien establecieron la obligación en cabeza de los fondos de pensiones de suministrar información que diera elementos de juicio claros y objetivos para tomar la decisión de traslado, dichas disposiciones no señalaron que tal información debiera otorgarse de una forma en particular; de modo que resulta suficiente el formulario de afiliación o traslado que suscribió la demandante, que da cuenta de la información que de forma verbal se le brindó por el respectivo asesor, luego, aducen que no es cierto que se haya omitido dar una información suficiente para que aquella tomara la decisión de traslado. Aseguran que como están estructurados los regímenes pensionales en la ley 100 de 1993, resulta imposible que en el año 1994, cuando la actora estaba comenzado a construir su pensión, se pudiese hacer una proyección de cómo sería la prestación económica y si iba a ser mejor o no en un régimen que en otro.

En relación con la devolución de sumas adicionales, dentro de las que se encuentran los gastos de administración, refieren que, si bien es cierto ingresan al patrimonio del fondo de cesantías, ellos son para remunerar y cubrir los costos y gastos, que esa producción de rentabilidad, que también se ordena trasladar a Colpensiones, incurrió el fondo para lograrla, eso compaginado con lo señalado en el artículo 964 del Código Civil, que prevé que en toda restitución de frutos se abonará a quien la hace, los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos, que para el caso en concreto son los gastos de administración, el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión

mínima y el seguro previsional. Así las cosas, concluyen que en virtud a la ineficacia del traslado declarada, lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual.

La aspiración de Colpensiones también es derruir la decisión de primer grado. Manifestó que el traslado pretendido no es viable, en la medida en que, a la actora le faltan menos de diez años para adquirir el derecho pensional, situación que legalmente impide la aludida mudanza. Depreca igualmente se le exonere de la condena en costas, debido a que no tiene responsabilidad frente a las peticiones de aquella.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Colpensiones alega que la declaratoria de ineficacia de traslado no resulta procedente, dado que a la fecha, el traslado efectuado por la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad goza de plena validez en tanto se realizó ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen establecido en el art. 13 literal b de la ley 100/93 y según el artículo 48 de la ley 1328 del 2009 que modificó los literales c) y d) del artículo 60 de la ley 100 de 1993. Refiere que ha actuado con la convicción del cumplimiento legal de sus obligaciones, sin incurrir en abusos de su parte o maniobras engañosas, de modo que no resulta dable que en el caso de marras se le imponga condena en costas.

La Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A., insiste en que brindaron a la actora la información requerida a efectos de materializar el traslado entre regímenes y que prueba de ello, es la suscripción del formulario respectivo, tal como lo estipulaba el artículo 11 del Decreto 692 de 1994. Por tanto, carecen de fundamento jurídico las aspiraciones del extremo activo de la relación procesal. También, en que solo es factible devolver los aportes contenidos en la cuenta de ahorro individual.

La actora y la AFP Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. omitieron presentar alegaciones finales.

3o. CONSIDERACIONES

Atendiendo las apelaciones y la finalidad del grado de jurisdicción de consulta en favor de Colpensiones, los problemas jurídicos consisten en determinar: **1º** Si puede darse ineficacia por vicio en el consentimiento en los traslados del RAIS al RPM. **2º** Si el traslado de régimen pensional de la demandante fue una decisión fundada en una deficiente y errada asesoría por parte de la administradora de pensiones del RAIS, y quién tiene la carga de probarlo. **3º** Si luego de declarada la ineficacia del traslado al RAIS, la actora se encuentra vinculada sin solución de continuidad o no a Colpensiones, y en consecuencia si esta entidad debe o no recibir los dineros de la cuenta de ahorro individual por parte de Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. **4º** Si la acción para deprecar la ineficacia está sometida a prescripción alguna. Y **5º** si está o no ajustada a derecho la condena en costas a cargo de a Colpensiones.

De la ineficacia del traslado.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa

legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, como quiera que el deber de información se dirige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP. En ese orden, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos a saber, iniciando con el que en principio encontró sustento en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado, para ello era entonces necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 se estableció el deber de las administradoras pensionales de asesoría y buen consejo, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información que, desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otras, así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual, la que además debía estar acompañada de la opinión que sobre la asunto tuviere el representante de la administradora, lo que comportaba un asesoramiento de las personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer momento, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

Finalmente la Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, pues si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

En ese orden, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son estos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual: **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Aplicando estos preceptos legales y jurisprudenciales al caso en concreto, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad está en cabeza de las AFP

Porvenir S.A. y Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A.; pues argumenta la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Betty Parada Montes para hacer efectivo el traslado de régimen pensional fue consentido e informado. Es decir, si las AFP codemandadas cumplieron con su deber legal de información atendiendo el precedente judicial expuesto por la alta corporación en la especialidad y de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Acreditado se tiene que la incoante suscribió un formulario de afiliación a Horizonte (hoy Porvenir S.A.), el 19 de mayo de 1994, el 23 de agosto del 1999 otro documento de igual naturaleza ante Protección, posteriormente un tercer escrito para mutar hacia Protección, el 18 de julio de 2000. Luego, el 1° de enero de 2014 con destino nuevamente a Horizonte (hoy Porvenir S.A.), y finalmente ante Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A., el 26 de agosto de 2014 (fl. 119). Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a las AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que ninguna de las AFP encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitieron a la accionante sopesara la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

Sin embargo, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues el que en ambos se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Betty Parada Montes la anotación: “*hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)*”,

tal y como lo señala la alta corporación, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado.

No asumieron entonces las AFP la carga de desvirtuar, como les correspondía, los hechos aducidos por la demandante como sustento de su pretensión, demostrando lo contrario, esto es que cumplió con su deber de información, pues no bastaba con señalar en las contestaciones dadas a la escrito introductor de demanda, que sí brindaron asesoría en donde le explicaron en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, en tanto principio elemental de derecho probatorio enseña que afirmar no es probar, de modo que debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuó.

En conclusión las citadas AFP se sustrajeron al momento de suscribirse los formularios de traslado y en perjuicio de la actora, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltaron a los deberes de ilustrar sus características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos, de manera que no se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que ello es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto. Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión del *A-Quo* en lo que refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo la demandante del Régimen de prima media al RAIS.

Sin embargo, se torna imperioso precisar que no es factible declarar la nulidad del traslado en sí, como erradamente procedió el funcionario judicial, pues sus consecuencias no son las que específicamente prevé el Código Civil en sus artículos 1740 y siguientes, sino que como está de por medio el derecho a la pensión, lo que ha de interpretarse de cara a la carga argumentativa utilizada en la demanda, es que lo que realmente se depreca es la **ineficacia** de ese acto por el incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora que permitió el traslado al sistema privado.

Aclarado el anterior contexto, se tiene que frente a la afirmación de la AFP Porvenir S.A., de que no se encuentra probada la lesión o perjuicio a la accionante por la insuficiencia de la información que impida el acceso al derecho pensional, citando para el efecto la sentencia SL 19447 de 2017, en donde se señaló que existirá ineficacia de la afiliación cuando “*la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado impidiéndole su acceso al derecho*”, resulta menester indicarle que la regla jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, tal y como ya se ilustró, enseña que no se requiere demostrar que el acto de traslado causó un perjuicio, verbigracia por tener un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse, dado que lo que se analiza es el deber de información, el cual opera para todos los afiliados, en tanto ello se dirige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado.

Tampoco es de recibo la tesis planteada por Colpensiones en cuanto alude a la imposibilidad de traslado del afiliado al que le falten menos de 10 años para cumplir los requisitos mínimos de pensión, o que ya los acredite. Esto, dado que las reglas de la jurisprudencia explicadas en precedencia, **aplican** a todos los afiliados que luego de vinculados a un sistema pensional deseen cambiarse a otro, sin miramientos a que estén cercanos a no a adquirir una pensión, o sean beneficiarios o no del régimen de transición, pues si se hubiese querido hacer dicha diferenciación, así tendría que haberse expuesto en las decisiones que hasta al momento ha proferido sobre el tema el órgano de cierre, pero en ninguna se ha aludido expresamente a permitir la desigualdad que implicaría exigir el cumplimiento del deber de información a las administradoras del RAIS solo para los ciudadanos inmersos en esas circunstancias (ver sentencia C-621 de 2015).

Y es que por tratarse la función de las administradoras de pensiones privadas de un servicio público a luz del artículo 48 superior, se exige de estas un papel activo en la asesoría que brindan a sus futuros afiliados. No en vano el inciso tercero del literal c del artículo 60 de la Ley 100 ya citada, les impone como obligación “*informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permitan la adopción de decisiones informadas*”.

Se colige así, que al determinarse que como el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Horizonte (hoy Porvenir S.A.), ni en su oportunidad Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A., con el deber de información, deberá ésta como última administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Betty Parada Montes, devolver todas las prestaciones que el afiliado hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

Véase que en lo que refiere a los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, es que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de las administradoras privadas, éstas también deben asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su

propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C. Siendo claro así, que no tiene asidero la afirmación de la apelante quien indica que no se dan los presupuestos para que opere la restitución mutua del código civil.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la Seguridad Social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*, de modo que no resulta acertada la acotación que efectúa Porvenir S.A. en cuanto a que tal acto de traslado no tiene injerencia alguna en el derecho pensional de los afiliados.

Condena en costas a Colpensiones en primera instancia.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las costas, orientado a que éstas sean cubiertas por la parte que pierde el litigio. Como las pretensiones prosperaron en este juicio, habiéndose opuesto a ello la AFP del RPM no cabe duda que debe ser condenada al pago de las costas del proceso en primera instancia.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de sistema pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta

ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó el juez de primera instancia, siendo ineludible la confirmación íntegra de dicha decisión.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones, Porvenir S.A. y Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A., por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$400.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1º de octubre de 2021 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO: CONDENAR en costar Colpensiones, Porvenir S.A. y Old Mutual Skandia Pensiones y Cesantías S.A. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$400.000 a cargo de cada una de ellas. Líquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO

Nidia Belén Quintero G .

Nidiam Belén Quintero Géives

José Andrés Serrano Mendoza

José Andrés Serrano Mendoza

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.

U.

Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO : ORDINARIO EN APELACIÓN
RAD. ÚNICO : 54-001-31-05-001-2020-00055 01
P.T. : 19739
DEMANDANTE : JOSÉ REINALDO CANCHICA CARRILLO
DEMANDADO : COLPENSIONES y PORVENIR S.A.

MAGISTRADA PONENTE:
DRA. NIDIAN BÈLEN QUINTERO GELVES

Realizado el examen preliminar, se admite el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada Porvenir S, A. contra la providencia del 22 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso de la referencia,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

NIDIAM BÈLEN QUINTERO GELVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 1 de abril de 2022

Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Ref. Proceso Ordinario Rad. 54-001-31-05-001-2020-00126-00

Demandante: Lino Cárdenas Pérez

Demandado: Serinco Drilling S.A.

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

1º. ASUNTO:

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 16 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta.

2º. ANTECEDENTES:

Lino Cárdenas Pérez, presentó el 26 de julio de 2019 (fl. 84) demanda ordinaria laboral contra Serinco Drilling SAS, para que se declarara que entre esta última y ella existieron varios contratos gestados entre el 14 de abril de 2008 y agosto 4 de 2013, que terminó por despido indirecto achacable a la pasiva y sin la mediación del Ministerio del Trabajo dada su condición de debilidad manifiesta. En consecuencia, pide el reintegro junto con la condena en el pago de los salarios, viáticos, prestaciones sociales (cesantías, intereses a éstas y prima de servicios), y vacaciones compensadas en dinero, causadas desde la fecha de su reinstalación; indemnización moratoria de que trata el artículo 99 de la ley 50/1990, sanción del artículo 65 del CST; aportes a pensiones entre agosto de 2008

al 4 agosto de 2013; indemnización por despido del numeral 64 ibídem; intereses moratorios y costas del proceso (fls. 93 a 116).

Por auto del 24 de septiembre de 2020 (fls. 1-2, archivo digital 03) el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta devolvió la demanda por dos requisitos específicos:

“Al efectuar el estudio de los requisitos que para toda demanda exige el artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral, reformado por la ley 712 de 2001, en su numeral 2º, exige como requisito de la demanda el nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas, en el presente caso, se omitió el nombre del representante legal de la demandada tanto en el poder como en la demanda.

Ahora bien, tanto el poder y la demanda se encuentran dirigidos ante Juez Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga, siendo incorrecta la ciudad en donde se encuentra radicada la demanda.”

El extremo activo radicó el 30 de septiembre de 2020 memorial contentivo de solicitud de la copia del poder y la demanda, con la finalidad de subsanar la demanda. Igualmente, solicitó *“se aclare el auto inadmisorio en que norma regula el punto de inadmisión”* (Archivos digitales 08 y 09).

A través de correo electrónico del 2 de octubre de 2020, el escribiente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, respondió al accionante lo siguiente: *“Doctor en el auto de fecha 24 de septiembre que usted puede ver en los estados se encuentra el link para que usted pueda tener acceso a todo el expediente virtual para que subsane el defecto ordenado en ese auto”.*

Por memorial recibido en el buzón electrónico del Juzgado de primera instancia el 5 de octubre de 2020, el accionante aportó archivo contentivo de la subsanación y el poder.

Mediante auto del 16 de marzo de la pasada anualidad (archivo digital 10), el juzgado de primera instancia rechazó la demanda al considerar que la subsanación no se realizó en el término concedido.

La anterior decisión no fue del agrado de la activa, quien buscando su revocatoria, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Sostuvo que el *a quo* no dio aplicación correcta al “*artículo 332 inciso 2 del CGP*¹” (sic), ya que, en razón de la solicitud de aclaración del auto inadmisorio, se subsanó en término. La célula judicial no revocó la decisión al reiterar que la subsanación se dio extemporánea y en su lugar concedió la apelación, presentada subsidiariamente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: No fueron presentados.

3º. CONSIDERACIONES:

En torno a la ejecutoria de las providencias judiciales respecto de las cuales se solicita su aclaración o complementación el artículo 302 del C.G.P. aplicable por analogía expresa del artículo 145 del CPTSS, consagra lo siguiente: “*No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva*”.

Así las cosas, como frente al auto del 24 de septiembre de 2020, notificado el 25 del mismo mes y año en estado No. 061 publicado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, el demandante presentó solicitud de aclaración dentro del término de ejecutoria, es decir el 30 de septiembre de 2020, interrumpió el término fijado en la providencia para subsanar.

De esa manera, el plazo de los 5 días concedidos, debió ser contabilizado a partir del día siguiente al de la notificación del proveído que resolviera la solicitud de aclaración del auto inadmisorio. Como no obra manifestación al respecto por parte del *a quo* quien ha omitido dar trámite a dicho petitum, dado que la subsanación a la demanda se radicó el 5 de octubre de 2020, se colige que se llevó a cabo dentro de temporalidad permitida, ya que, como se hizo énfasis, la providencia respecto de la cual se solicitó

¹ No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

la aclaración, no ha iniciado los términos ejecutoria y menos ha cobrado tal.

Así, como el escrito de subsanación fue arrimado el 5 de octubre de 2020, se concluye que se presentó oportunamente, pues, como se dijo y reitera, los términos de ejecutoria no empiezan a contarse hasta tanto no haya pronunciamiento sobre la petición de aclaración radicada el 30 de septiembre de 2020. Lo cual efectivamente no ha ocurrido. En otras palabras, el rechazo del libelo genitor bajo el argumento de no haberse subsanado en tiempo, deviene en errado.

Cabe señalar que mal podría tenerse como respuesta a la petición de aclaración de marras, la manifestación del escribiente del juzgado de primera instancia consistente en:” *“Doctor en el auto de fecha 24 de septiembre que usted puede ver en los estados se encuentra el link para que usted pueda tener acceso a todo el expediente virtual para que subsane el defecto ordenado en ese auto”*”, ya que, este tipo de solicitudes requieren del juzgador una respuesta acorde con las reglas establecidas en el código adjetivo laboral y de la seguridad social.

Corresponde entonces, analizar si con la documental allegado el 5 de octubre de 2021, se acata o no lo dispuesto en el proveído inadmisorio.

Se tiene que el accionante a través de memoriales vistos en los archivos digitales 04 a 06, aporta la demanda y el poder incluyendo en su contenido el nombre del representante legal de la pasiva y los dirige al juzgado de conocimiento, tal como le fue requerido en proveído del 24 de septiembre del 2020. Esto es, se logra establecer que fue subsanada la demanda y, se satisfacen los requisitos dispuestos en el artículo 25 del CPTSS, debiendo admitirse y darle el trámite respectivo.

En consecuencia, se revocará el auto del 16 de marzo de 2021, se admitirá la demanda y se dispondrá la devolución del expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite correspondiente.

Sin costas en esta instancia por la prosperidad del recurso.

4º. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, **RESUELVE: PRIMERO.- REVOCAR** el auto del 16 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado Primero Laboral del circuito de Cúcuta, y en su lugar **ADMITIR** la demanda ordinaria laboral de primera instancia instaurada por Lino Cárdenas Pérez contra Serinco Drilling SA, por reunir los requisitos del artículo 25 del CPTSS y del Decreto 806 de 2020. Notifíquese personalmente este auto admisorio y córrase traslado de la demandada con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos, a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual, de cara a lo dispuesto por el artículo 8º del Decreto 806 de 2020. **SEGUNDO.-** Una vez surtido el trámite correspondiente, se ordena al operador jurídico de instancia continuar con las etapas procesales correspondientes. **TERCERO.-** Sin costas.

NOTIFIQUESE.

Los magistrados,



ELVER NARANJO

Nidia Belén Quintero G .

Nidiam Belén Quintero Gelves

José Andrés Serrano Mendoza

José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP.

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander
TRIBUNAL SUPERIOR
Distrito Judicial de Cúcuta

Clase de Proceso: Ejecutivo

Radicado Juzgado: 54-001-31-05-001-2020-00298-00

Partida Tribunal: 19500

Juzgado: Primero Laboral del Circuito de Cúcuta

Demandante: CARMEN CECILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ

Demandado: EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONDO TORRES SOSA, DAMIAN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ Y LUZ MARINA WALDO DE JAIMES.

Asunto: Apelación de Auto que resuelve sobre el mandamiento de pago

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Hoy, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) se reunió la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, contra la providencia proferida el día veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se abstuvo de librar mandamiento de pago deprecado por la parte actora, dentro del proceso ejecutivo laboral con Radicado N.º 54-001-31-05-001-2020-00298-00 y Partida de este Tribunal N.º 19.500, promovido por la señora CARMEN CECILIA GÓMEZ RODRÍGUEZ mediante apoderado judicial, en contra de EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONDO TORRES SOSA, DAMIAN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ Y LUZ MARINA WALDO DE JAIMES.

Abierto el acto por el Magistrado Ponente, una vez conocido el proyecto de decisión, se procede a deliberar sobre el mismo, teniendo en cuenta para el efecto los siguientes,

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN

La alzada es procedente conforme a lo normado en el numeral 8º del artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 29 de la ley 712 de 2001, el cual señala que este medio de impugnación se puede incoar contra el auto que decide sobre el mandamiento de pago.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

Según consta en el expediente digital, se tiene que el recurso fue instaurado en la oportunidad procesal que dispone el artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 29 de la ley 712 de 2001, numeral 1 del inciso segundo, esto es, por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estados del auto controvertido (impugnado el 31 de agosto de 2021).

COMPETENCIA DE LA SALA

Por la competencia funcional asignada en el artículo 15 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el numeral 1, literal B del artículo 10 de la ley 712 de 2001, esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso de apelación reseñado.

ANTECEDENTES

La señora CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ, instauró DEMANDA EJECUTIVA LABORAL en contra los señores: EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONSO TORRES SOSA, DAMIAN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ, LUZ MARINA WALDO DE JAIMES, con el objeto que se librara mandamiento de pago a su favor en cuantía de CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) M/L., intereses moratorios desde el día 19 de enero de 2018, fecha en que se hizo exigible la obligación contenida en el Título Ejecutivo hasta que se haga efectivo el pago, de acuerdo a la tasa máxima conforme a certificación expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y al pago de las agencias en derecho y costas del proceso. De la misma manera, solicitó el decreto de medida cautelar de embargo y secuestro del bien inmueble de propiedad de los demandados.

Para fundamentar lo anterior, alega la ejecutante que, firmó contrato de prestación de servicios profesionales con los demandados en calidad de herederos del causante Constantino Sosa el 20 de diciembre de 2017; Que los demandados en el año 2012 autorizaron a los señores CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA Y ANA ELVIRA WALDO SOSA (también herederos del causante Constantino Sosa), para

que contrataran sus servicios profesionales y le otorgaron poder, a fin de que adelantara proceso Ordinario de Declaración de Pertenencia por Prescripción Ordinaria de Dominio, contra Silvestre Monterrey, herederos indeterminados de Silvestre Monterrey y personas indeterminadas, en donde CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA actuaran como demandantes en su condición de herederos del causante Constantino Sosa.

Que, en el mencionado contrato de prestación de servicios profesionales, se pactó entre las partes como honorarios provisionales la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) que fueron cancelados a la firma del poder y la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) como Honorarios Definitivos y Adicionales, en el evento de lograr un fallo o sentencia a favor de los demandantes del proceso de pertenencia, es decir se pagaba esta suma si se cumplía esta **condición**.

Que en cumplimiento del anterior mandato, en enero de 2012 presentó Demanda Ordinaria de Declaración de Pertenencia por Prescripción Ordinaria de Dominio, contra SILVESTRE MONTERRY, HEREDEROS INDETERMINADOS DE SILVESTRE MONTERRY Y PERSONAS INDETERMINADAS, conociendo del proceso el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta bajo el radicado 00064 de 2012, donde se solicitaron diferentes pretensiones, se solicitaron pruebas entre otras medidas procesales.

Que el Juzgado Sexto Civil Del Circuito De Cúcuta, dictó sentencia favorable en audiencia el 19 de enero de 2018. En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, la oficina de registro de instrumentos públicos de Cúcuta mediante anotación N° 009 del folio de matrícula inmobiliaria No. 260-134981 registró la sentencia.

Que cumplió cabalmente con lo pactado en el contrato de prestación de servicios profesionales fechado 20 de diciembre de 2017, por lo que, procedía el pago de la suma de los \$100.000.000 como Honorarios Definitivos y Adicionales; de tal manera, solicitó el pago a los demandados, sin embargo, estos han sido renuentes a los requerimientos, **y no han cumplido con la obligación derivada del título ejecutivo esto es, el pago de la suma de \$100.000.000 estipulada en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales suscrito el día 20 de diciembre de 2017 con mi poderdante.**

Que los demandados se constituyeron en mora de pagar lo correspondiente a los honorarios profesionales definitivos que ascienden a la suma de **CIEN MILLONES PESOS** (\$100.000.000) M/L., debiendo pagar los intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la superintendencia financiera de Colombia causados desde la fecha que se profirió la sentencia, es decir, desde el 19 de enero de 2018, más las agencias en derecho y las costas procesales.

Que la obligación surge de un título ejecutivo complejo constituido por un contrato de prestación de servicios profesionales, más la copia auténtica de la sentencia favorable a los demandantes en el proceso Ordinario de Declaración de Pertenencia efectivamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria N° 260-134981.

Que el título - Contrato De Prestación De Servicios presta mérito ejecutivo pues constituye una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una cantidad liquida de dinero como se desprende y prueba con ello su contenido.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante providencia de fecha 26 de agosto de 2021 se abstuvo de librar el mandamiento de pago, argumentando que:

“...ninguno de los demandados en este proceso ejecutivo es parte del proceso de pertenencia, ya que quienes demandan son CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, es decir, que serían estas dos personas las responsables del pago la obligación originada de la relación de trabajo, porque a estas dos personas fue que la doctora CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ les adelantó el proceso...”

*“...que el contrato de prestación de servicios profesionales, no proviene de los deudores, CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, personas estas que son los mandantes en el proceso de pertenencia adelantado por la acá demandante, CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ, proceso del cual se están cobrando los honorarios en este proceso ejecutivo; no se puede integrar la unidad jurídica del título complejo, por no darse las condiciones formales, **pues el documento presentado como contrato de prestación de servicios no proviene de los deudores.** Además, en el documento presentado como contrato de prestación de servicios profesionales, aunque están escritos los nombres de los demandados en este proceso ejecutivo que nos ocupa, el documento no tiene la nota de presentación de las personas que firman, es decir, estas firmas no están autenticadas y el parentesco aludido como herederos del causante CONSTANTINO SOSA no está demostrado”*

(...)

“en tratándose del reconocimiento y pago de honorarios causados con cimiento en un contrato de prestación de servicios profesionales, es necesario que el mandatario o apoderado judicial acuda a la acción ordinaria laboral conforme a lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 2º del C.P.L. de la S.S., con el objeto que se reconozca la obligación allí consignada, demostrando en juicio el cabal cumplimiento de la gestión realizada y no acudir directamente al proceso ejecutivo laboral, como quiera que dicho escenario no está instituido para debatir el cumplimiento y los pormenores de las tareas y obligaciones profesionales realizadas.

De esta manera, luego de realizado el estudio respectivo al escrito de demanda y los documentos allegados, se debe precisar que el título ejecutivo presentado como base de la ejecución, carece de las condiciones formales, no pudiéndose predicar la existencia del título ejecutivo, razón por la cual se negará el mandamiento de pago como se dirá en la parte resolutive de este auto”.

EL RECURSO DE ALZADA Y SU SUSTENTACIÓN

La parte ejecutante inconforme con la decisión interpone recurso de apelación, solicitando que sea revocado el auto anterior en su totalidad y se proceda a ordenar librar mandamiento de pago contra los demandados, alegando que,

Si bien es cierto el Contrato de prestación de servicios allegado al libelo demandatorio, no fue firmado por CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, también lo es que, los demandados en la presente acción ejecutiva señores; EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONDO TORRES SOSA, DAMIAN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ Y LUZ MARINA WALDO DE JAIMES, firmaron el mismo Contrato de Prestación de Servicios fechado diciembre 20 de 2017 en su condición de herederos del causante CONSTANTINO SOSA y, en representación cada uno de las ocho familias que componen el grupo de herederos como quedó consignado en el Contrato.

En la Cláusula Segunda del Contrato en mención los demandados Autorizaron a los herederos de CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA para que solicitara los servicios profesionales de la Dra. CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ con el fin de adelantar el proceso de pertenencia.

De otra parte en la Cláusula Primera del Contrato ya mencionado, los demandados manifiestan que de mutuo acuerdo todos los herederos aprobaron pagarle a la Dra. CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ la suma de CIEN MILLONES DE PESOS como honorarios definitivos y adicionales en caso de lograrse un fallo a favor de los demandantes, por los servicios profesionales prestados desde el año 2012 y en representación legal en su condición de abogada en el proceso ordinario de Declaración de Pertenencia por prescripción ordinaria de dominio, adelantado por los herederos del mismo causante CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA

ELVIRA WALDO SOSA, contra silvestre monterrey hasta la terminación del proceso.

Con esta manifestación se dejó claro que los demandados en su condición de herederos del causante Constantino Sosa y en representación de todos los demás herederos incluyendo al señor CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA quien estaba representado por CLAUDIO HERNANDEZ SOSA pues hace parte de la familia de MARIA DEL CARMEN SOSA, y la señora ANA ELVIRA WALDO SOSA representada por LUZ MARINA WALDO DE JAIMEZ quien es su hermana y hace parte de la familia de MARTINIANA Sosa (especificaciones éstas que se encuentran plasmadas en el Contrato de prestación de servicios), asumieron el pago de los honorarios de mi representada, pasando ellos a ser los DEUDORES de dicha obligación caso contrario, no hubieran firmado y aceptado el contrato de prestación de servicios suscrito por ellos y mi mandante, pues los servicios profesionales fueron prestados a todos los herederos firmantes y la remuneración fue convenida y acordada de mutuo acuerdo con los demandados del proceso ejecutivo.

Debemos tener en cuenta que un proceso ejecutivo laboral es aquel que se inicia para lograr la ejecución o cumplimiento de un derecho ya reconocido, que figura en algún documento que preste mérito ejecutivo.

Para fundamentar lo expuesto, trae a colación lo señalado por el Tribunal Superior del Distrito de Pereira-Sala Laboral en auto de radicado 2015-00390 del 25 de noviembre de 2015 y la Corte Constitucional en sentencia T-474 de 2018, que trata sobre las normas aplicables al proceso ejecutivo y la interpretación judicial de estos dos cuerpos colegiados.

Sostiene que la decisión adolece de defecto fáctico por indebida valoración probatoria según lo indicado en la sentencia T-041 de 2018 de la Corte Constitucional.

En relación con la autenticidad de las firmas, considera que existe un exceso de ritual manifiesto, al establecer como causal para negar el mandamiento de pago, la exigencia de las firmas autenticadas, máxime cuando el Código General del Proceso dentro del art. 244 no exige un adicional en relación de los documentos privados hasta tanto no se hayan tachado de falsos, es decir, que se presumen que son auténticos, citando para ello, las sentencias T-234/17. SU573/17 y T-474 de 2018.

Arguye que dentro del trámite de este proceso ejecutivo se ha presentado una mora judicial injustificada por cuanto, después de más de ocho meses el despacho se pronuncia sobre la admisibilidad de la demanda, negando el Mandamiento de Pago,

perjudicando la satisfacción oportuna de los derechos de la demandante, de conformidad con las sentencias SU-453/2020, T-441/2015 y T-747/2009.

Para resolver,

SE CONSIDERA

El problema jurídico se reduce a establecer si los documentos aportados con la demanda, cumplen con los presupuestos formales establecidos en las normas aplicables para librar mandamiento de pago en contra de los ejecutados por concepto de honorarios profesionales pactados.

Con el propósito de resolver la viabilidad de librar mandamiento de pago en los términos solicitados en la demanda ejecutiva, es pertinente remitirse a lo dispuesto en el artículo 100 de C.P.T. y S.S., que indica:

“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.”

En el mismo sentido, cabe traer a colación el artículo 422 del Código General del Proceso, el cual prevé:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y, que constituya plena prueba en contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley...”

A su turno, el artículo 430 del mismo estatuto procedimental, señala que *“Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.”*

Dando aplicación a las normas previamente referidas, es claro que el Juez sólo podrá librar mandamiento de pago si el documento allegado como título presta

mérito ejecutivo, situación que debe encontrarse acreditada al momento en que el Juez entre a decidir sobre la procedencia del mandamiento, es decir desde la presentación misma de la demanda y no con posterioridad.

Ahora bien, se extrae de las normas anteriores que, a pesar de no determinar la clase de documentos que se deben aportar para que se pueda inferir que puedan ser objeto del proceso de ejecución, lo indispensable en la valoración es que se trate de una OBLIGACIÓN EXPRESA, CLARA Y EXIGIBLE.

Así las cosas, la obligación es **expresa** cuando la misma se encuentre declarada en el documento que la contiene, su alcance y pueda determinarse con precisión y exactitud la conducta a exigir al ejecutado; **clara** cuando aparece determinada en el título, es fácilmente inteligible y se entiende en un solo sentido; y, **exigible** cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición.

De tal manera, la demanda ejecutiva debe acompañarse del documento base que constituye el fundamento de la obligación, el cual debe ser explícito tanto del contenido, plazo y cuantía, como del ejecutado, lo anterior para lograr el convencimiento del juez de que profiera el mandamiento de pago.

Caso en concreto.

En este orden de ideas, se tiene que, el título base de ejecución aducido por la demandante, corresponde a un contrato de prestación de servicios profesionales (PDF02 41-42), en el que, se pactó:

PRIMERA: Los mandatarios EDGAR ORLANDO SOSA, JESÚS ALFONSO TORRES SOSA, DAMIÁN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, LUZ MARINA WALDO DE JAIMEZ, CARLOS ALBERTO SOSA CÁCERES, CLAUDIO HERNÁNDEZ SOSA, ANA MARÍA SOSA FERNÁNDEZ en representación de las familias antes mencionadas y en su condición de HEREDEROS DEL CAUSANTE CONSTANTINO SOSA, de mutuo acuerdo todos los herederos aprobaron pagar a la Dra. CARMEN CECILIA GOMEZ RODRÍGUEZ la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) como honorarios definitivos y adicionales en caso de lograrse un fallo a favor de los demandantes, por los servicios profesionales prestados desde el año 2012 y representación legal en su condición de abogada, en el proceso ordinario de Declaración de Pertenencia Por Prescripción Ordinaria de Dominio, adelantado por los herederos del mismo causante CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, contra SILVESTRE MONTERREY, HEREDEROS

INDETERMINADOS DE SILVESTRE MONTERREY Y PERSONAS INDETERMINADAS hasta la terminación del proceso.

SEGUNDA: Los mandantes AUTORIZARON a los herederos CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, solicitar los servicios profesionales de la Doctora CARMAN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ, en su condición de abogada para que instaurara proceso antes mencionado.

TERCERA: La Abogada presentó la demanda en Enero de 2012, correspondiéndole en reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta, quien la radicó bajo el número 00064 de 2012.

CUARTA: La Abogada se comprometió a representar a los mandantes conforme al poder conferido y en ejercicio de ese mandato, a cumplido a cabalidad con todas las etapas y actor procesales que se deben realizar y surtir dentro del proceso de Pertenencia instaurado y que para la fecha aun se encuentra vigente, continuando con la representación legal hasta la culminación del proceso.

QUINTA: Las partes acordaron fijar como honorarios profesionales la suma de TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) a la firma del poder y, en reunión de herederos MEDIANTE ACTA de fecha Agosto 06 del año en curso, APROBARON PAGAR la suma de CIENTO MILLONES DE PESOS MCT (\$100.000.000), como honorarios definitivos y adicionales en el evento de lograr un fallo o sentencia a favor de los demandantes del proceso ya mencionado...

El contrato anterior fue firmado por los demandados: EDGAR ORLANDO SOSA, JESÚS ALFONSO TORRES SOSA, DAMIÁN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, LUZ MARINA WALDO DE JAIMEZ, CARLOS ALBERTO SOSA CÁCERES, CLAUDIO HERNÁNDEZ SOSA, ANA MARÍA SOSA FERNÁNDEZ y la ejecutante en este proceso CARMEN CECILIA GOMEZ RODRÍGUEZ el 20 de abril de 2017.

Para el efecto, refirió la ejecutante que culminó su trabajo profesional y, se cumplió la condición pactada en el Contrato De Prestación De Servicios Profesionales, para el pago de la suma de los \$100.000.000 como Honorarios Definitivos y Adicionales, al proferirse la sentencia favorable a los demandantes del proceso de pertenencia en fecha 19 de enero de 2018 quedando en firme, junto con el registro en la oficina de instrumentos públicos de Cúcuta mediante anotación No.009 del folio de matrícula inmobiliaria No.260-134981.

Para el Juzgado de primer grado, el título base de ejecución carece de los requisitos formales, al considerar que ninguno de los demandados en el proceso ejecutivo, hacen parte del proceso de pertenencia, ya que quienes demandan son

CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA, quienes son los obligados del pago de la relación de trabajo originada del contrato de prestación de servicios, que tampoco fue firmado por éstos.

Además, señalo que *“el documento presentado como contrato de prestación de servicios profesionales, aunque están escritos los nombres de los demandados en este proceso ejecutivo que nos ocupa, el documento no tiene la nota de presentación de las personas que firman, es decir, estas firmas no están autenticadas y el parentesco aludido como herederos del causante CONSTANTINO SOSA no está demostrado”*.

Así las cosas, le corresponderá a esta Sala verificar si el título traído como base de ejecución cumple con los presupuestos previstos en el art. 422 del C.G. del P., esto es, el requisito de claridad de la obligación exigida, respecto a las partes obligadas en este proceso en relación con el cumplimiento del proceso ordinario.

De conformidad con los documentos anteriormente transcritos, en ese asunto el título con el cual pretende hacer cumplir la obligación **es complejo** ya que requiere de diversos documentos y no puede ser reclamada con la sola presentación del contrato de servicios profesionales, sino que se hace indispensable acreditar, el cumplimiento de las obligaciones que allí se indican, esto es, la actividad contractual respecto a la etapa de culminación de la gestión judicial encomendada, el reconocimiento del contratante del precio pendiente de pago, la presentación de la cuenta de cobro entre otros.

Precisamente, la ejecutante trajo además del referido contrato: (i) la copia de la demanda ordinaria de pertenencia. (ii) Copia del auto de inadmisión de demanda fechado abril 12 de 2012, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta. (iii) Copia del escrito fechado abril 25 de 2012, mediante el cual se subsana la demanda. (iv) Copia del auto de admisión de demanda fechado mayo 09 de 2012, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta. (v) Copia del escrito de contestación de demanda Dra. LUCY SOLEDAD WILCHEZ JAIMES curadora, fechado octubre 21 de 2013. (vi) Copia del escrito de contestación de demanda Dra. ISABEL ADRIANA ORTEGA GARZÓN, curadora fechado diciembre 07 de 2012. (vii) Copia del escrito de contestación de demanda de la Procuradora 16 Judicial II Ambiental y Agraria de Norte de Santander Dra. CRUZ MARINA LIZARAZO OCAMPO, fechado agosto 27 de 2012. (viii) Copia del auto fechado mayo 09 de 2014, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongestión Distrito

Judicial de Cúcuta, con el cual avoca conocimiento. (ix) Copia autentica de la sentencia fechada enero 19 de 2018, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta. (x) Copia del oficio fechado enero 24 de 2018 dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de Cúcuta (xi) la copia de la Nota informativa fechada febrero 27 de 2018 expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta. (xii) Copia del auto fechado 06 de marzo de 2018, proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta. (xiii) Copia del oficio N° 973 fechado marzo 9 de 2018 dirigido al Registrador de Instrumentos Públicos de Cúcuta. (xiv) Certificado de tradición de la matricula inmobiliaria N° 260-134981 expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta. (xv) Requerimiento de cobro de honorarios fechados abril 24 de 2020 enviados a los señores: EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONSO TORRES SOSA, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ, enviados por la empresa Envía COLVANES S.A.S. (xvi) Requerimiento de cobro de honorarios fechado abril 24 de 2020, enviado a LUZ MARINA WALDO DE JAIMES. (xvii) Requerimiento de cobro de honorarios fechado junio 12 de 2020 enviado a DAMIAN MORENO por la empresa Envía COLVANES S.A.S.

Para lo pertinente, lo primero que se debe verificar a fin de establecer si se trata de una obligación clara, expresa y actualmente exigible, si duda alguna es identificar las partes obligadas al pago de los honorarios y las partes a las cuales se les adjudicó el bien o quienes resultaron favorecidas en el proceso ordinario civil de PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO.

En lo que respecta al contrato de prestación de servicios, se tiene que fue firmado por: EDGAR ORLANDO SOSA, JESÚS ALFONSO TORRES SOSA, DAMIÁN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, LUZ MARINA WALDO DE JAIMEZ, CARLOS ALBERTO SOSA CÁCERES, CLAUDIO HERNÁNDEZ SOSA, ANA MARÍA SOSA FERNÁNDEZ y la abogada CARMEN CECILIA GOMEZ RODRÍGUEZ el 20 de abril de 2017.

La demanda ejecutiva laboral fue interpuesta contra los señores EDGAR ORLANDO SOSA, JESUS ALFONDO TORRES SOSA, DAMIAN MORENO, LUCAS DIAZ SOSA, CLAUDIO HERNANDEZ SOSA, ANA MARIA SOSA FERNANDEZ Y LUZ MARINA WALDO DE JAIMES.

Y la demanda ordinaria civil DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN ORDINARIA DE DOMINIO, fue interpuesta por CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA (PDF02-1-5), según se visualiza en la demanda

interpuesta, sin embargo, no se aportó el poder judicial conferido, que llegase a demostrar la participación de los otros demandados en el proceso ejecutivo.

De otro lado, en la decisión proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cúcuta fechada el 19 de enero de 2018 (PDF02-27-30), la parte resolutive se dispuso:

“Primero: Declarar no probados los medios exceptivos de mérito propuestos por la curadora ad-litem designada para representar a la parte demandada, herederos del señor Silvestre Monterrey.

Segundo: Declarar que **ANA ELVIRA WALDO SOSA y CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA**, han adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el siguiente bien inmueble: Un predio rural denominado GUADUAS, localizado en Sabanas Guaduas -Vereda Guaduas del Municipio de San Cayetano (N de S), con una extensión superficiaria aproximada de 195 Hectáreas, según plano topográfico protocolizado mediante Escritura N° 814 del 5 de mayo de 2.011, de la Notaria Primera de Cúcuta. Alinderado actualmente, conforme a la prueba pericial practicada, así: NORTE: Sucesión de MAXIMINO ALVAREZ. SUR: Con filo y Quebrada Seca. ORIENTE: Con propiedades de MAXIMINO ALVAREZ. OCCIDENTE: Con Caño Grande. Este bien así descrito se identifica con la matrícula inmobiliaria N° 260-134981 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cúcuta, y Código Predial No. 000000040017.

Tercero: ORDENAR la inscripción de la presente sentencia ante la citada oficina de instrumentos públicos, en folio de matrícula inmobiliaria N° 260-134981, para ello expídanse las copias de rigor y remítase mediante oficio por la secretaria del Juzgado.

Cuarto: Cancelar oficiosamente la medida cautelar de inscripción de la demanda presentada. Líbrese oficio...”

Ahora, al margen de tal omisión documental, advierte la Sala que el título base de ejecución, desde la suscripción del mismo contrato de prestación de servicios profesionales, carece de la claridad necesaria para que pueda hacerse exigible por la vía ejecutiva, esto es, atendiendo las características propias del título, le es imposible presumir el Juzgador y por ende, es obligación de la ejecutante, traer las pruebas que acreditaran la participación de los sujetos en las actuaciones respectivas.

Por otra parte, el apoderado judicial recurrente asegura que en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios profesionales, los demandados autorizaron a los herederos CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA para que solicitara los servicios profesionales de la Dra. CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ con el fin de adelantar el proceso de pertenencia; sosteniendo que, hacen parte de la familia de MARIA DEL CARMEN SOSA y la señora ANA ELVIRA WALDO SOSA representada por la señora LUZ MARIAN WALDO DE JAIMEZ *quien es su hermana y hace parte de la familia de MARTINIANA Sosa (especificaciones éstas que se encuentran plasmadas en el Contrato de prestación de servicios), asumieron el pago de los honorarios de mi representada, pasando ellos a ser los DEUDORES de dicha obligación caso contrario, no hubieran firmado y aceptado el contrato de prestación de servicios suscrito por ellos y mi mandante, pues los servicios profesionales fueron prestados a todos los herederos firmantes y la remuneración fue convenida y acordada de mutuo acuerdo con los demandados del proceso ejecutivo.*

Sobre este punto, no existen pruebas pertinentes que permitan asegurar con certeza absoluta lo alegado por el apoderado judicial recurrente, ya que, de las mismas no se logran demostrar la presunta relación de familia y/o consanguineidad infirmada donde las partes aceptan la delegación en el contrato vista en la cláusula segunda, esto es, que permitan acreditar que CRISTOBAL HERNANDEZ SOSA y ANA ELVIRA WALDO SOSA quienes en su condición de demandantes en el proceso de pertenencia, las pretensiones le resultaron favorables, hacen parte de la familia de MARIA DEL CARMEN SOSA y la señora ANA ELVIRA WALDO SOSA representada por la señora LUZ MARIAN WALDO DE JAIMEZ, esta última quien figura como demandada en el proceso ejecutivo laboral.

Luego entonces, ante la incertidumbre en la identificación de las partes obligadas en el contrato de prestación de servicios profesionales, de las favorecidas en la declaración de pertenencia y los demandados en el proceso ejecutivo laboral, el operador judicial no le es permitido deducir como lo asevera, que las partes asumieron la obligación sólo por el hecho de aparecer en el mencionado contrato de prestación de servicios profesionales, pero sin existir claridad en identificación del parentesco que tanto pregona la ejecutante; además, se itera, el proceso ejecutivo exige que las obligaciones sean claras, expresas y exigibles, presupuestos que prohíben realizar interpretaciones ante los conflictos suscitados, sobre todo, en lo que respecta a la identificación de las personas sobre las cuales recae la obligación, que como bien se explico en renglones anteriores, el análisis no

solamente recae sobre lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, sino que debe existir un engranaje con los demás documentos aportados.

De otro lado el artículo 6º del CPL y la SS establece que la Jurisdicción ordinaria laboral conoce de los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive.

Así las cosas atendiendo la naturaleza del contrato suscrito, la obligación del mandante a satisfacer el pago de los honorarios pactados solo surge con la pertinente gestión realizada por su mandatario, de tal suerte y bajo esas condiciones, en el hipotético caso que el mandante no satisfaga el PAGO de los honorarios pactados, es menester que el apoderado judicial, acredite dentro del respectivo juicio laboral los resultados de su gestión para que de esta manera se REGULE y se DECLARE el monto de las prestaciones adeudadas.

En ese orden de ideas, tal y como lo advierte el señor Juez de instancia, en tratándose del reconocimiento y pago de honorarios causados con cimiento en un contrato de prestación de servicios profesionales, es necesario que el mandatario o apoderado judicial acuda a la acción ordinaria laboral conforme a lo dispuesto en el No 6º del artículo 2º del CPL , con el objeto que se reconozca la obligación allí consignada, **demostrando en juicio el cabal cumplimiento de la gestión realizada** y no acudir directamente al proceso ejecutivo laboral, como quiera que dicho escenario no está instituido para debatir el cumplimiento y los pormenores de las tareas y obligaciones profesionales realizadas, máxime cuando en el sub-examine, atendiendo la naturaleza del proceso civil adelantado y las partes allí involucradas, se debate la legitimación por pasiva, de los suscriptores del aludido contrato de prestación de servicios.

De lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que, de las pruebas aportadas por la ejecutante y que pretende hacer valer como título ejecutivo, no existe claridad para determinar las personas que se encuentran obligadas en el título base de la ejecución, atendiendo, como ya se explicó, la naturaleza y las partes involucradas

en la gestión profesional adelantada por la Dra. CARMEN CECILIA GOMEZ RODRIGUEZ, sin que pueda advertirse la existencia de una obligación clara, expresa y actualmente exigible por parte de los demandando, motivo por el cual en esta instancia, se CONFIRMARÁ el auto impugnado, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta fechado el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

No se condenará en costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**, por intermedio de su Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de fecha veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas anteriormente.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS de segunda instancia.

TERCERO: Ejecutoriado el presente auto **DEVUÉLVASE** la actuación al Juzgado de origen para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se extiende y firma por quienes en ella intervinieron.



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Magistrado Ponente



ELVER NARANJO

Magistrado



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Magistrada

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander
TRIBUNAL SUPERIOR
Distrito Judicial de Cúcuta

Clase de Proceso: Ejecutivo

Radicado Juzgado: 54-001-31-05-001-2021-00188-00

Partida Tribunal: 19499

Juzgado: Primero Laboral del Circuito de Cúcuta

Demandante: SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A.

Demandado: LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA

Asunto: Apelación de Auto que resuelve sobre el mandamiento de pago

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE:

JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Hoy, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022) se reunió la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de esta ciudad, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, contra la providencia proferida el día ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021) corregida el 10 de agosto de 2021 por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se abstuvo de librar mandamiento de pago deprecado por la parte actora, dentro del proceso ejecutivo laboral con Radicado N.º 54-001-31-05-001-2021-00188-00 y Partida de este Tribunal N.º 19.499, promovido por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., mediante apoderado judicial, en contra del señor LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA.

Abierto el acto por el Magistrado Ponente, una vez conocido el proyecto de decisión, se procede a deliberar sobre el mismo, teniendo en cuenta para el efecto los siguientes,

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN

La alzada es procedente conforme a lo normado en el numeral 8º del artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el

artículo 29 de la ley 712 de 2001, el cual señala que este medio de impugnación se puede incoar contra el auto que decide sobre el mandamiento de pago.

OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN

Según consta en el expediente digital, y conforme a la fecha de notificación por estados de la providencia impugnada (fechada el 9 de julio de 2021 y notificada el 23 de agosto de 2021), se tiene que el recurso fue instaurado en la oportunidad procesal que dispone el artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 29 de la ley 712 de 2001, numeral 1 del inciso segundo, esto es, por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación por estados del auto controvertido (impugnado el 26 de agosto de 2021).

COMPETENCIA DE LA SALA

Por la competencia funcional asignada en el artículo 15 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el numeral 1, literal B del artículo 10 de la ley 712 de 2001, esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso de apelación reseñado.

ANTECEDENTES

La **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCION S.A.**, por medio de apoderada judicial instauró demanda ejecutiva, en contra del señor LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA, con el objeto que se librara mandamiento de pago a su favor en cuantía de (A) **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 10.438562,00)** por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias dejadas de pagar por el demandado en su calidad de aportante por períodos comprendidos entre abril de 1994 a diciembre de 2020, por los cuales mediante requerimiento enviado al aportante de fecha 17 de febrero de 2021 y recibido el día 23 de febrero de 2021 correspondiente a los trabajadores y períodos relacionados en la liquidación de aportes pensionales adeudados, título ejecutivo base de esta acción, presentado en 8 folios (prueba No.1). (B) librar mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios causados por cada uno de los períodos adeudados a los trabajadores mencionados y relacionados en el título

ejecutivo base de esta acción desde la fecha en que los empleadores debieron cumplir con su obligación de cotizar, los cuales a la fecha ascienden a la suma de **CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 51.601.300,00)**, y que deberán ser verificados a la fecha del pago efectivo, correspondientes a las cotizaciones obligatorias y a los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional, los cuales deberán ser liquidados de acuerdo con el artículo 23 de la ley 100 de 1993, desde el vencimiento del plazo para el pago hasta la fecha de expedición del título ejecutivo. Los plazos para el pago de las cotizaciones por parte de los aportantes están definidos en el decreto 1406 de 1999 y 1670 del 14 de mayo de 2007. Por último, al pago de las costas y agencias en derecho.

Para fundamentar lo anterior, alega el ejecutante que, la parte demandada no ha cumplido con la obligación consagrada en el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes, al dejar de efectuar el pago de su aporte y del aporte de sus trabajadores afiliados al Fondo de Pensiones Obligatorias administrado por **PROTECCION S.A.**, correspondiente a los períodos discriminados en el título ejecutivo base de la presente acción, constituyéndose en mora en el pago de las obligaciones a cargo de la parte demandada, hasta el momento en que se haga efectivo dicho pago.

Que se adelantó las gestiones de cobro pre jurídicas requiriendo a la parte demandada para el pago de los periodos vencidos insolutos que a la fecha ascienden a **SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 62.039.862,00)**, por concepto de cotizaciones pensionales obligatorias y aportes al Fondo de Solidaridad Pensional adeudadas desde el periodo de abril de 1994 a diciembre de 2020, conforme con el procedimiento establecido en el artículo 5 del Decreto 2633 de 1994, mediante requerimiento del fecha 17 de febrero de 2021 recibido por el aportante el día 23 de febrero de 2021, concediéndole el plazo de ley .

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante providencia de fecha 08 de julio de 2021 corregida el 10 de agosto y notificada el 23 de agosto de 2021 se abstuvo de librar el mandamiento de pago, alegando que:

*“Estudiado el expediente se puede observar que la demandante remitió comunicación al empleador, LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA, para informarle de su deuda con el fondo, pero en dicha comunicación se reseña como dirección del ejecutado la Avenida 18E No. 21N-36 Urbanización Niza, y en los documentos anexos al título ejecutivo la dirección que se reseña del ejecutado en el recuadro titulado **“DATOS BÁSICOS”, es Calle 10 N 4A-18**, dirección completamente diferente a donde se envió, no habiendo certeza para determinar si el ejecutado se constituyó en mora, conforme el Artículo 2º del Decreto 2633 de noviembre 29 de 1994; **resaltando que el demandante no aportó certificación de existencia y representación legal del ejecutado**, situación que impide establecer si el demandado se constituyó en mora, a efecto que la liquidación realizada por el Fondo preste mérito ejecutivo de conformidad con el artículo 24 de la ley 100 de 1993...”*.

Por lo anterior, concluyó que, *“...no hay certeza que el demandado se haya constituido en mora, la liquidación efectuada por la demandante, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., no prestará mérito ejecutivo...”*.

EL RECURSO DE ALZADA Y SU SUSTENTACIÓN

La parte ejecutante inconforme con la decisión interpone recurso de apelación, solicitando que sea revocado el auto anterior en su totalidad y se proceda a ordenar librar mandamiento de pago contra el demandado, alegando que, el requerimiento previsto en el artículo 5 del decreto 2633 de 1994, fue enviado al demandado “empleador moroso”, a la dirección *Avenida 18E 21N 36 Urbanización, Cúcuta Norte de Santander*; siendo esta misma dirección que fue informada en año 2019, por el empleador (demandado), Luis Eduardo Niño Acosta al solicitar la devolución del saldo como prestación subsidiaria en calidad de afiliado a esta administradora, siendo entonces necesario para ese momento, actualizar los datos conforme a la información suministrada por el demandado; como prueba de ello, se tiene la respuesta a dicha solicitud que elevó, (se anexa) en la cual se encuentra la dirección al cual se le envió el requerimiento de cobro de aportes por sus empleados, documento se encuentra firmado por el señor Luis Eduardo Niño, lo que da cuenta que avaló la dirección. De igual forma sostuvo que, el requerimiento que lo constituyó en mora fue recibido por JUAN DIEGO NIÑO, de lo cual se “deduce” que es un familiar del demandado logrando acreditar que éste tuvo conocimiento sobre el requerimiento de pago.

Aseguró que en el expediente no reposa una nueva dirección, que hubiera sido reportada por la sociedad ejecutada en el registro único de aportantes, de que trata

el artículo 5 del Decreto 1406 de 1999 y que impone a los obligados al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral el deber de inscribirse en el mismo; así como la obligación de reportar novedades relacionadas con su identificación, entre ellas, “los cambios de dirección.”, acreditándose de esta forma, el cumplimiento de lo previsto en el art. 5º del Decreto 2633 de 1994.

Respecto a la aportación del certificado de existencia y representación legal del ejecutado, resaltó que, de conformidad con el art. 167 del CGP, se estableció la posibilidad de que el Juez, antes de fallar, pueda “redistribuir la carga”, exigiendo que determinado hecho sea probado por la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos, por lo que, consideró que en este asunto, es el empleador demandado quien se encuentra en la mejor posición para demostrar su representación legal.

Adicionalmente infiere que, la Resolución 2082 de 2016 habilita a PROTECCION S.A. para que al momento de instaurar demandas a los aportantes *se haga sin realizar un proceso persuasivo, ante el riesgo de incobrabilidad*, en especial lo indicado en el literal e) o a) por lo que si el juez se mantiene en la postura de negar el mandamiento de pago pondría en peligro la finalidad de este proceso ejecutivo, cual es lograr el pago de lo adeudado por la demandada a través de los medios legales e idóneos para tal fin, *representado en últimas un detrimento para el patrimonio y expectativas de los afiliados y que contraría la sostenibilidad del sistema pensional colombiano que tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 48 de nuestra carta magna, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.*

De lo anterior indica que, para una sociedad financiera de carácter privado como lo es Protección SA., *es imposible controlar el cambio habitual de direcciones de los empleadores y esto no puede suponer un beneficio para que el empleador no sea ejecutado y los afiliados se vean perjudicados con la postura rígida de los despachos judiciales; y más aún cuando el demandado no ha cancelado oportunamente los aportes pensionales obligatorios de sus empleados afiliados a PROTECCION S.A, que se han causado.*

Para resolver,

SE CONSIDERA

El problema jurídico se reduce a establecer si el Juez de instancia erró al determinar que no existe certeza de la constitución en mora del demandado, ante el incumplimiento del presupuesto previsto en el artículo 2º del Decreto 2633 de noviembre 29 de 1994 respecto al requerimiento previo al demandado; además, por cuanto la demandante no aportó el certificado de existencia y representación legal del ejecutado de conformidad con el artículo 24 de la ley 100 de 1993.

Con el propósito de resolver la viabilidad de librar mandamiento de pago en los términos solicitados en la demanda ejecutiva, es pertinente remitirse a lo dispuesto en el artículo 100 de C.P.T. y S.S., que indica:

“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme.”

En el mismo sentido, cabe traer a colación el artículo 422 del Código General del Proceso, el cual prevé:

“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y, que constituya plena prueba en contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley...”

A su turno, el artículo 430 del mismo estatuto procedimental, señala que *“Presentada la demanda con arreglo a la ley, acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.”*

Dando aplicación a las normas previamente referidas, es claro que el Juez sólo podrá librar mandamiento de pago si el documento allegado como título presta mérito ejecutivo, situación que debe encontrarse acreditada al momento en que el Juez entre a decidir sobre la procedencia del mandamiento, es decir desde la presentación misma de la demanda y no con posterioridad.

Ahora bien, el documento base del recaudo en el presente asunto tiene unas características especiales, pues además de tener que cumplir las condiciones de ser claro, expreso y actualmente exigible, también debe satisfacer ciertos requerimientos establecidos en las disposiciones legales regulatorias del sistema de seguridad social integral, puntualmente con respecto al cobro ejecutivo de las cotizaciones sobre los cuales el empleador afiliado se encuentra en mora de cancela.

Sobre el particular, se trae a colación lo señalado en el **art. 22 de la Ley 100 de 1993**, que dispone como una obligación del patrono descontar los aportes del trabajador a la seguridad social del sueldo de cada mes, los cuales, -adicionados a los aportes patronales- deberán trasladarse a la Entidad Administradora de Pensiones. Esto significa, entonces que, durante ese período, la entidad administradora de pensiones debe haber recibido y registrado en su sistema los aportes que mes a mes le debieron trasladar los empleadores, con base en las afiliaciones respectivas y durante la vigencia de su vínculo laboral. Al no ocurrir así, es decir, al presentarse una mora patronal, el Fondo debe proceder a cobrar las cotizaciones pendientes, inclusive, coactivamente.

Así entonces, recalcó la Corte Constitucional en la Sentencia T-363/98, con ponencia del Magistrado Fabio Morón Díaz, que

“...el artículo 53 de la Ley 100 de 1993 precisa que estas entidades “tienen amplias facultades de fiscalización e investigación sobre el empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, para asegurar el efectivo cumplimiento de la presente ley”, entre las cuales figura la posibilidad de (i) verificar la exactitud de las cotizaciones y aportes u otros informes; (ii) adelantar las investigaciones que estimen convenientes para verificar la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones no declarados; (iii) citar o requerir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, para que rindan informes; (iv) exigir a los empleadores o agentes retenedores de las cotizaciones al régimen, o a terceros, la presentación de documentos o registros de operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados; (v) ordenar la exhibición y examen de los libros, comprobantes y documentos del empleador o agente retenedor de las cotizaciones al régimen, y realizar las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de las obligaciones.

Además, la misma ley, en su artículo 24 precisa que para que esas entidades puedan adelantar las acciones de cobro, se entiende que “la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo.”

Por su parte, el artículo 57 confiere a las entidades administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida la posibilidad de establecer el cobro coactivo, para hacer efectivos sus créditos. En tales condiciones, y con ese abanico de facultades, resulta inaceptable que una EAP invoque su negligencia en el

cumplimiento de sus funciones para imponer una carga desproporcionada a la parte más débil de esta relación triangular, esto es, al trabajador. Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que en muchos casos estas situaciones afectan negativamente a personas de la tercera edad, las cuales merecen una especial protección del Estado (CP arts. 13 y 46).”

De lo expuesto hasta el momento, se concluye que, ante la mora patronal las entidades de seguridad social en el sistema de seguridad social integral están en la obligación de tomar las medidas que la ley les brinda para exigir el cobro de los aportes, para garantizar el equilibrio y estabilidad del sistema.

De manera tal que, como bien se explicó, el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, otorgó a las administradoras de fondo de pensiones la facultad de ejercer el cobro ejecutivo de los aportes obligatorios dejados de consignar por parte de los empleadores, y a su vez, le dio la calidad de título ejecutivo a la liquidación del valor adeudado que para el efecto realice la administradora, todo de conformidad lo señalado en el Decreto 2633 de 1994, que en su artículo 2° y 5° determina lo siguiente:

ARTICULO 2o. DEL PROCEDIMIENTO PARA CONSTITUIR EN MORA AL EMPLEADOR. Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

ARTICULO 5o. DEL COBRO POR VIA ORDINARIA. En desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que ésta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimulación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordasteis.

Vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá. Si dentro de los quince (15) días

siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.

De las normas anteriores, se extrae que el título ejecutivo que sirve de fundamento a litigios como el estudiado, lo configuran: el requerimiento al empleador para constituirle en mora junto con la constancia de entrega del mismo y la liquidación elaborada por la administradora de pensiones; por lo que una vez acreditados estos requisitos formales se puede establecer la existencia de un título ejecutivo, suficiente para librar mandamiento de pago.

Ahora bien, repite la norma que la liquidación presta mérito ejecutivo, es decir, con vocación de cobrarse coactivamente una vez vencido los 15 días del requerimiento al empleador. Dicho en otras palabras, mientras no se surta el requerimiento y se elabore la respectiva liquidación, no puede el Fondo de pensiones acudir a la administración de justicia para apremiar el pago de lo adeudado, porque sólo a partir de ese momento la obligación se vuelve exigible.

Luego entonces, del primer requisito en mención “**el requerimiento al empleador para constituirle en mora**”, es menester indicar que el tenor legal que lo consagra, exige que la AFP remita la simple comunicación al deudor, cuestión de la que se desprenden dos situaciones: **1.** La comunicación remitida al empleador que se encuentra en mora, y, **2.** Que haya certeza de que dicha comunicación o requerimiento fue realmente puesto en conocimiento del destinatario, esto es, que exista constancia de entrega del documento.

Descendiendo al caso en estudio, en las pruebas anexas con la demanda, PROTECCIÓN S.A. aportó copia de un documento denominado TITULO EJECUTIVO No.11794-21:

Proteccion Pensiones y Cesantías	
Título Ejecutivo No. 11794 - 21	
La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. con NIT No. 800.188.188-1 procede a LIQUIDAR las Cotizaciones Obligatorias adeudadas al Sistema General de Pensiones para los fondos de Pension Obligatoria que Administra, por el aportante, así:	
NOMBRE DE APORTANTE	LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA
IDENTIFICACIÓN DEL APORTANTE	CC 3023762
TOTAL ADEUDADO	\$ 62.039.862,00
CAPITAL ADEUDADO a la fecha del ppeado de corte del Requerimiento	\$ 10.438.862,00
INTERESES DE MORA ADEUDADOS	\$ 51.601.300,00
Intereses depositados a la fecha:	18/02/2021
Fecha de CANCEL del Requerimiento en mora	18/02/2021
Fecha de Expedición del Título Ejecutivo	03 de junio de 2021
Esta liquidación presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 2603 de 1994, artículo 8º, y corresponde a los auditores de deudas que se anexan y forman parte integral del título ejecutivo, los cuales se elaboran con base en la información reportada y pagos efectuados por el aportante. En los estados de deuda anexos, se documentan los afiliados, períodos y valor de las cotizaciones e intereses de mora que debe el aportante. Los intereses de mora se liquidan de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 100 de 1993, desde el vencimiento del plazo para el pago hasta la fecha de expedición del título ejecutivo. Los plazos para el pago de las cotizaciones por parte de los aportantes están definidos en el decreto 1406 de 1999 y 1670 del 14 mayo de 2007.	

Junto con el DETALLE DE DEUDAS POR NO PAGO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS del demandado LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA quien registra con la dirección **Calle 10 No. 4 A 18** de donde se advierte que la liquidación de aportes anexa con la demanda, comprende periodos en mora por cinco (05) trabajadores y durante el periodo de abril de 1994 hasta diciembre de 2020, por una deuda de \$10'438.862 con intereses de \$51'601.300 para un total de \$62'039.862.

Además, como prueba de haber agotado el requerimiento precitado, se allegó un documento llamado “Requerimiento por Mora de Aportes Pensión Obligatoria-previo a la demanda”, fechado el 17 de febrero de 2021 destino al demandado LUIS EDUARDO NIÑO ACOSTA a la dirección **Avenida 18E No. 21N-36 Urbanización Niza**, con guía emitida por una empresa de correspondencia COMPUTEC, recibido por JUAN DIEGO NIÑO el 23 de febrero de 2021 (folio digital PDF5).



De conformidad con los documentos allegados, en primer lugar, las guías emitidas por las empresas de correspondencia, atienden a ser un documento privado de índole declarativo emitido por un tercero, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de una obligación contraída para el transporte de determinado elemento, frente a la cual puede darse su ratificación, siempre que la parte en contra de quien se aduzca lo solicite. No obstante, dado que en esta etapa primigenia no se ha trabado la Litis, el alcance probatorio de tales documentos debe analizarse con estricta sujeción a su contenido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 250 del CGP.

De manera tal que, en el documento con el cual la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., pretende demostrar la entrega del requerimiento exigido en el Decreto 2633 de 1994, no se describen de manera expresa los documentos remitidos y entregados al demandado, pues no fue aportado cotejo del requerimiento u otro elemento que brinde certeza sobre el verdadero contenido de lo entregado al destinatario, y mucho menos constancia de lo que se entregó, en orden a establecer que la ejecutante dio a conocer el requerimiento al empleador moroso, y que verdaderamente se cobraron los montos aducidos en el titulo ejecutivo, con el objetivo de que el demandado tuviese la oportunidad de pagar, reportar las

novedades que ha omitido comunicar a la entidad, o de controvertir el monto de los aportes que le están siendo cobrados.

Por otra parte, si en gracia de discusión se aceptase que la demandante satisfizo la obligación legal de realizar el requerimiento previo al empleador moroso, al revisar los documentos allegados, de ninguno se desprende con certeza absoluta, cual es el domicilio de la demandada, ya que, analizando en totalidad las pruebas, los soportes llamados: DETALLE DE DEUDAS POR NO PAGO FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS se tiene que la dirección reportada para el **16 de febrero de 2021** es la **Calle 10 No. 4 A 18**, lo cual no coincide con la vista dos días después en la carta del 17 de febrero de 2021 **Avenida 18E No. 21N-36 Urbanización Niza**, tal como lo analizó el Juez A quo; adicional a ello, tampoco existe prueba respecto a la presunta información suministrada por el demandado en el año 2019 que alega la parte activa, pues si bien es cierto el sistema interno de la entidad realizó la actualización de la información, en la liquidación de aportes del año 2021 la dirección continuaba siendo diferente a la enviada.

Por último, dentro del plenario, no fue allegada la prueba de la existencia y representación legal del demandado, donde conste la dirección del domicilio para efectos de notificación, todo ello con el fin que el Juzgado de conocimiento pudiera deducir que la dirección anotada en la guía de envío allegada en el PDF5, corresponde en efecto a la dirección del demandante.

Implica lo anterior, que mal podría afirmarse que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., cumplió con la carga demostrativa en relación con el agotamiento efectivo del requerimiento previo y la puesta en conocimiento del estado de la presunta deuda, pues de las pruebas aportadas no permiten determinar con exactitud los presupuestos exigibles en los art. 2 y 5 del Decreto 2633 de 1994, siendo procedente en esta instancia, CONFIRMAR el auto impugnado, proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta fechado el ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Se condenará en costas procesales de segunda instancia, a la parte ejecutante la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS

PROTECCION S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$400.000 según lo previsto en el numeral 1º del art. 365 del CGP.

En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**, por intermedio de su Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de fecha ocho (08) de julio de dos mil veintiuno (2021) y corregida el 10 de agosto de 2021 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas anteriormente.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia, a la parte ejecutante la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION S.A., fijar como agencias en derecho la suma de \$400.000 según lo previsto en el numeral 1º del art. 365 del CGP.

TERCERO: Ejecutoriado el presente auto **DEVUÉLVASE** la actuación al Juzgado de origen para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se extiende y firma por quienes en ella intervinieron.



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Magistrado Ponente



ELVER NARANJO

Magistrado

Nidia Belén Quintero G.

NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Magistrada

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Ref. Ejecutivo laboral Rad. 54001-31-05-002-2015-00110-02

**Ejecutante: Enohelia Heredia Vargas y Brallan Harley
Contreras Heredia**

Ejecutado: Positiva Compañía de Seguros S.A.

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

1º. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra los autos del 17 de agosto y 25 de octubre de 2021, proferidos por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante los cuales libró mandamiento de pago a continuación de proceso ordinario, y decidió sobre las excepciones formuladas contra el mismo.

2º. ANTECEDENTES

Teniendo como título ejecutivo la sentencia de primera instancia proferida el 11 de noviembre de 2016, confirmada y complementada por esta sala de decisión el 22 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, luego de presentada por la activa solicitud de ejecución, determinó librar orden de apremio contra Positiva Compañía de Seguros S.A., en los siguientes términos:

- Retroactivo pensional por valor de \$22.128.141 a favor de Enohelia Heredia Vargas, comprendido entre el 12 de septiembre

de 2014 y el 31 de octubre de 2018. Y las que continuaran causándose a partir del 1° de noviembre de 2018.

- Retroactivo pensional por valor de \$21.783.337 para Brallan Harley Contreras Heredia, por mesadas causadas entre el 12 de septiembre de 2014 y el 7 de octubre de 2018 (día anterior al cumplimiento de la mayoría de edad).
- Intereses moratorios de que trata el artículo 1° de la Ley 776 de 2002, desde el 20 de marzo de 2015 y hasta el cabal pago de lo adeudado.
- Agencias en derecho liquidadas en el proceso ordinario.

Decretó, además, medida cautelar consistente en el embargo y retención de los dineros que llegare a poseer la pasiva en las entidades bancarias: Bancolombia, Banco Agrario, Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco de Occidente, cual limitó a \$65.867.622.

La anterior decisión no fue del agrado de la pasiva, quien buscando su revocatoria, interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación. Sostiene que, en virtud de la petición de cumplimiento de sentencia elevada por el apoderado de los demandantes, consignó en el Banco de Bogotá y en favor de Enohelia Heredia Vargas, en enero de 2020, retroactivo pensional por valor de \$29.515.959 calculado entre el 12 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, más \$482.057 correspondiente al 50% de la mesada correspondiente a enero de 2020. Trámite bancario que asegura, reversó, luego de conocer sobre el fallecimiento de la beneficiaria en diciembre 23 de 2019, para efectuar la consignación a órdenes del despacho judicial de conocimiento y así evitar disponer de las mesadas, lo que asegura, ocurrió.

Respecto a Brallan Harley Contreras Heredia, dijo haber realizado los giros correspondientes al retroactivo pensional reconocido en sede judicial, pero que se hallaba en estado de *“parte pensional en reserva”*. Y, que, el reconocimiento de las mesadas eventualmente causadas a partir

del 8 de octubre de 2018 (día siguiente al cumplimiento de los 18 años), está supeditado a la acreditación de la calidad de estudiante.

Con apego en lo anterior, discute que no existe mérito para librar orden de apremio en su contra en tanto demostró haber adelantado el correspondiente pago de la sentencia judicial. Máxime, cuando dice, se obvió adelantar la reclamación administrativa de que trata el artículo 6° del CPTSS.

Alega la indebida representación de Brallan Harley Contreras Heredia, acotando que resulta necesario verificar si el abogado Ricardo Bermúdez Bonilla fue o no revestido de poder por parte del mismo para instaurar la acción ejecutiva, teniendo en cuenta que éste ya es mayor de edad y su madre, quien lo representó en el trámite ordinario, falleció en diciembre de 2019.

De otro lado, formuló como medios exceptivos los que denominó: pago de la obligación y falta de exigibilidad de la sentencia que se ejecuta. Insiste en que dio cabal cumplimiento a la orden judicial correspondiente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

También sostiene que la sentencia que se ejecuta adolece de uno de los requisitos formales de validez, esto es que aún no resulta exigible en la medida que conforme los artículos 307 del C.G.P. y 299 de la Ley 1437 de 2011, para iniciar la ejecución en contra de entidades públicas debe haber transcurrido un término de diez (10) meses contados a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Critica el decreto de la medida cautelar de embargo, bajo la tesis de que los dineros administrados por entidades del sistema de seguridad social gozan de inembargabilidad en tanto se destinan al cumplimiento de fines constitucionales y de las normas orgánicas de presupuesto.

En sede de reposición, el *a quo* indicó que la razón no acompañaba a la recurrente, puesto que (i) la ejecución de la condena contenida en sentencia judicial debidamente no está supeditada al agotamiento de reclamación administrativa alguna, y que (ii) a la luz de lo dispuesto en el artículo 76 del CGP, es claro que la muerte del poderdante no pone fin al mandato, ni siquiera cuando lo ha conferido a nombre de un menor, pues es éste quien luego de arribar a la mayoría de edad, está legitimado para revocarlo; última circunstancia que dice, no acontece.

Bajo tal égida, concedió la alzada presentada subsidiariamente de cara a la orden de apremio, y en forma directa respecto al decreto de la medida cautelar. Todo ello, en efecto devolutivo.

Continuó con la diligencia, procediendo a desestimar las excepciones formuladas. Despachó por extemporánea la denominada *“falta de exigibilidad de la sentencia que se ejecuta”*, advirtiendo que al estar encaminada a cuestionar la validez del título base de recaudo, debió plantearse a través del escrito de reposición dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto que libró mandamiento de pago, lo que asegura, obvió la ejecutada, al radicar el escrito el 6 de septiembre de 2021. Declaró parcialmente probada la de pago de la obligación, teniendo en cuenta para ello la consignación del título judicial por valor de \$26.705.616 a nombre de Enohelía Heredia Vargas.

En tal línea dispuso continuar con la ejecución por los siguientes conceptos:

1. Diferencia monetaria entre las mesadas causadas con posterioridad a octubre de 2018 a favor de Enohelía Heredia Vargas, de cara al pago realizado.
2. \$21.783.337 por concepto de retroactivo pensional reconocido a Brallan Harley Contreras Heredia, gestado entre el 12 de septiembre de 2014 y el 7 de octubre de 2018 (día anterior al

cumplimiento de la mayoría de edad). Y las mesadas que lograre causar posteriormente con ocasión a la acreditación de la calidad de estudiante.

3. Intereses moratorios de que trata el artículo 1° de la Ley 776 de 2002, desde el 20 de marzo de 2015 y hasta el cabal pago de lo adeudado.
4. Agencias en derecho liquidadas en el proceso ordinario.
5. Más las cosas de la ejecución, que tasó en el 7% de la totalidad del crédito que llegare a liquidarse.

La convocada a juicio también estuvo en desacuerdo con dicha determinación. Precisa que debió declararse cabalmente la sentencia respecto a Enohelía Heredia Vargas en la medida en que la consignación del depósito judicial contiene la integralidad de mesadas adeudadas hasta la fecha de su obitamiento. Advierte que, con posterioridad a dicho acontecimiento dado el 23 de diciembre de 2019, no es factible disponer el pago de más mesadas. Cuestiona el que no se tuviera en cuenta la consignación que asegura efectuó a nombre del beneficiario Brallan Harley Contreras Heredia, a través del Banco de Bogotá y por valor de \$16.150.460. Finalmente discrepa de que no se hubiese dispuesto el descuento por salud sobre los rubros pensionales en los términos fijados en la sentencia judicial.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Positiva Compañía de Seguros S.A. asegura que a la data se ha presentado un pago exitoso y total de la obligación de cara a las consignaciones efectuadas con posterioridad a la audiencia que resolvió las excepciones, que se logra constatar a partir de la documentación allegada.

El extremo activo no alegó de conclusión.

3°. CONSIDERACIONES

Del recuento efectuado en el acápite anterior se extrae diáfananamente que el descontento de la encartada, representado en los recursos de alzada interpuestos, emana de dos momentos procesales puntuales y disímiles.

En primera medida, se cuestiona la determinación de librar orden de apremio y acceder al decreto de medida cautelar de embargo frente a las cuentas bancarias que posee la entidad, argumentando que (i) el título no es exigible por no haberse presentado reclamo de pago previamente e inobservar los diez meses que han de transcurrir luego de la ejecutoria de la providencia judicial, (ii) que Brallan Harley Contreras Heredia no está debidamente representado por el apoderado judicial, y (iii) los recursos de las cuentas son inembargables por destinarse a pagos derivados de la seguridad social.

El segundo reproche se da en sede de resolución de excepciones porque en el sentir de la pasiva, constituye un error proseguir la ejecución a razón de mesadas pensionales causadas por Enohelía Heredia Vargas, dado que, asegura, el título judicial consignado a órdenes de la agencia judicial cubre la totalidad de lo adeudado. También, en lo que respecta a Brallan Harley Contreras Heredia, porque discute que debe tenerse en cuenta el abono realizado por valor de \$16.150.460. Ambos sujetos que precisa, deben responder por los descuentos en salud respectivos.

Siendo así, y en aras de edificar una decisión sistemáticamente ordenada se procederá a abordar cada uno de los puntos de la alzada, partiendo de la presentación cronológica de los medios de impugnación.

De la orden de apremio librada.

Como se reseñó, fustiga la enjuiciada dicha providencia en tanto considera, debió presentarse cuenta de cobro antes de la radicación de la acción ejecutiva y esperar a que transcurrieran los diez meses de que trata el artículo 307 del CGP. Presentando, además, un nuevo poder concedido directamente por Brallan Harley Contreras Heredia, que en

tiempos anteriores estuvo representado por su fallecida madre en razón de su minoría de edad.

Para la resolución del asunto importa advertir de entrada que, de conformidad con lo establecido el artículo 100 del CPTSS, es exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante, o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme. De su lado, el artículo 422 del C.G.P., aplicable por remisión normativa que permite el artículo 145 del estatuto procesal laboral, a su tenor dispone que *“(...) pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él (...)”*.

Ahora, comoquiera que las decisiones judiciales que ordenaron el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Enohelia Heredia Vargas y Brallan Harley Contreras Heredia, junto con el respectivo retroactivo pensional, intereses moratorios y costas, no dispusieron en su parte resolutive un término expreso para su cumplimiento, la ejecución de aquellas debía proseguir inmediatamente cobraren ejecutoria, ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 305 del C.G.P ibídem.

Así, sosteniendo la recurrente que las sentencias objeto de ejecución carecen del requisito de exigibilidad, ello por cuanto es una entidad de derecho público y por ende, conforme el artículo 307 siguiente, no podía librarse mandamiento de pago hasta tanto transcurriera el término de diez (10) meses, luego de su ejecutoria, es esta a no dudarlo, una intelección que deviene en desacertada, si se atiende que la inmunidad temporal frente a ejecuciones de sentencias, no le resulta aplicable, pues, ello está limitado a la Nación o a las entidades territoriales.

En efecto, el tenor literal del canon en cita, es el siguiente:

Artículo 307. EJECUCIÓN CONTRA ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO. Cuando la Nación o una entidad territorial sea condenada al pago de una suma de dinero, podrá ser ejecutada pasados diez (10) meses desde la ejecutoria de la respectiva providencia o de la que resuelva sobre su complementación o aclaración.

Nótese que la formulación lingüística de la norma es tanto diáfana como restringida, dado que, no amplió su alcance expresamente a cualquier entidad pública. Únicamente a la Nación o entidades territoriales. Discernir lo contrario, en sede judicial, sería tanto como alterar el sentido de la norma e invadir facultades exclusivas y excluyentes del legislador. Es más, véase que la Corte Constitucional en sentencia T-048 de 2019 arguyó en cuanto a la aplicación del mentado artículo 307 lo siguiente:

“En el caso concreto, el término de 10 meses previsto en el artículo 307 del Código General del proceso e invocado por Colpensiones, es irrazonable, pues no era aplicable para el efectivo cumplimiento de la orden proferida por los jueces ordinarios laborales para el debido reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Eduardo González Madera. Lo anterior, comoquiera que dicha norma, se encuentra dirigida a la Nación o a las entidades territoriales y no a otro tipo de autoridades administrativas, como Colpensiones que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional (artículo 1º del Decreto 4121 de 2011), con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente.”

De otra parte, y en lo que hace al término previsto en el artículo 299 del C.P.A.C.A.¹, debe advertírsele a la inconforme que el mandato allí

¹ ARTÍCULO 299. DE LA EJECUCIÓN EN MATERIA DE CONTRATOS Y DE CONDENAS A ENTIDADES PÚBLICAS. Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código,

contenido respecto del plazo máximo de diez meses para el pago o devolución de una suma de dinero, en tratándose de las condenas impuestas a entidades públicas, es procedente respecto de las sentencias emanadas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y, no las que se emitan en la jurisdicción ordinaria, debiéndose recordar que la aplicación analógica del artículo 145 del CPTSS, se encuentra limitada a las normas del “código judicial” hoy Código General del Proceso.

Son las anteriores consideraciones suficientes para concluir que la razón no acompaña a la recurrente cuando afirma que las sentencias base de ejecución carecen del requisito de exigibilidad, ya que, los artículos 307 del C.G.P., y 299 del C.P.A.C.A., no aplican por una parte, cuando se trata de la ejecución de sentencias proferidas en contra de una empresa descentralizada del nivel nacional, como lo es Positiva Compañía de Seguros S.A., y por otra, tampoco para el caso de procesos rituados ante esta jurisdicción, por lo que imperioso resultaba, luego de presentada la respectiva solicitud de ejecución, librar orden de apremio en su contra por las condenas que en sede judicial ordinaria le fueron impuestas.

Igual suerte corre el argumento relacionado con la necesidad de agotamiento de reclamación administrativa previo a la radicación de la demanda ejecutiva, pues en parte alguna de la norma que regula dicho cobro coercitivo se impone al accionante tal carga.

En efecto, en tratándose del cobro de condenas contenidas en sentencias judiciales, los ya referenciados artículos 100 del Estatuto Procedimental del Trabajo y de la Seguridad Social, 305 y 422 del Código General del Proceso, tan solo hacen alusión a la debida ejecutoria de la providencia

si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento

que pretende cobrarse. Por lo que mal podría añadirse requisitos que el legislador no previó, más, cuando la situación de reclamo de que habla el artículo 6° ibídem concierne a acreencias no reconocidas, caso que en el sub judice no aplica porque justamente, el derecho fue declarado cierto a través de sentencia judicial, que para el momento de la presentación de la demanda (10 de septiembre de 2020) ya había cobrado ejecutoria.

Menos resulta de recibo la discusión planteada respecto a la indebida representación del ejecutante Brallan Harley Contreras Heredia, puesto que aun cuando es claro que cuando se tramitó el proceso ordinario laboral de primera instancia en procura de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su padre, el precitado, a razón de su minoría de edad, estuvo representado por su progenitora Enohelía Heredia Vargas, quien en ambas calidades (demandante y representante legal) otorgó poder al profesional del derecho para el adelantamiento del trámite judicial, también lo es que, dicho mandato a la luz de lo dispuesto en el artículo 76 del CGP, aplicable al rito laboral por analogía dispuesta en el 145 del CPTSS, no se extingue al acontecer la muerte de la otrora demandante, y tampoco lo deslegitima el arribo a la mayoría de edad por parte de Brallan Harley, hasta tanto éste no determine revocar el aludido poder. Como ello no aconteció, tal como lo reseñó el *A Quo*, el mandatario está facultado para continuar representando a tal sujeto activo.

El último aspecto de reproche en lo que al mandamiento de pago librado se refiere, al decreto de la medida cautelar de embargo de las sumas de dinero depositas en las cuentas bancarias de propiedad de la ejecutada. Esto, bajo la tesis de que dichos recursos gozan de inembargabilidad por su naturaleza misma.

Al respecto, resulta pertinente indicar que si bien, por regla general, los recursos destinados al Sistema de Seguridad Social Integral ostentan la

calidad de inembargables, según lo disponen los artículos 48 de la Constitución Política, 19 del Decreto 111 de 1996, 91 de la Ley 715 de 2001, y 134 de la Ley 100 de 1993, respectivamente; esta regla encuentra su excepción en tratándose de vulneración de los derechos fundamentales que asisten a los pensionados, a la seguridad social, el mínimo vital, dignidad humana, acceso a la administración de justicia, entre otros. Así lo ha estimado el Máximo Órgano Constitucional, en las sentencias C-546 de 1992, C-017 de 1993, C-103 de 1994, T-025 de 1995, C-354 de 1997, C- 566 de 2003, C-1064 de 2003, C-192 de 2005, y más recientemente en la C-1154 de 2008.

A la par, dicho concepto también ha sido analizado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias de tutela No. 39697 de 28 de agosto de 2012, 40557 de 16 de octubre y 41239 de 12 de diciembre de 2012, 31274 de 28 de enero de 2013, y 41347 de 30 de enero de 2013, en las que concluyó que, el procedimiento establecido en el artículo 134 de la Ley 100 de 1993 puede llegar a lesionar los derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida, al mínimo vital, al desconocerse que el rubro a embargar, o el que está embargado, corresponde justamente a derechos de la seguridad social reconocidos por una autoridad judicial, tal y como acontece en el presente caso.

De la misma forma debe indicarse que el artículo 283 de la Ley 100 de 1993 establece que los recursos derivados de las cotizaciones pensionales no pueden estar destinados sino al cubrimiento de las contingencias consagradas en el mismo sistema integral. De tal suerte, que los dineros que administra la ARL Positiva Compañía de Seguros S.A., en caso de ser embargados para cumplir la sentencia que hoy se pretende hacer efectiva, no pierden la destinación específica legal que poseen, porque corresponden precisamente a aquellos que deben estar destinados al cubrimiento de una contingencia propia del subsistema de riesgos a cargo de la entidad ejecutada.

De esta manera las cosas, cuando se tiene que el título ejecutivo es la sentencia del 11 de noviembre de 2016 del Juzgado Segundo Laboral del Circuito, resultado del proceso surtido por la activa contra la administradora de riesgos profesionales, por el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento del afiliado a dicha entidad, José Edmundo Contreras Vega, producto de un accidente de trabajo, factible resulta el decreto y práctica de la medida cautelar elevada consistente en el embargo de dineros, encaminada a materializar el pago de las mesadas pensionales reconocidas en favor de los ejecutantes.

Como así procedió al juzgador de conocimiento, se impone el deber de confirmar dicho aspecto de la providencia.

Habiéndose resuelto la totalidad de inconformidades planteadas por la encartada de cara al mandamiento de pago librado, conviene adentrarse en el segundo tópico de la alzada, a saber, desestimación de los medios de defensa planteados.

Del escrito de excepciones.

Sostiene la enjuiciada que erró el juez primigenio en disponer la continuidad de la ejecución por la totalidad de mesadas pensionales reconocidas a Brallan Harley Contreras Heredia, por valor de \$21.783.337, cuando en la misma diligencia se pone en conocimiento el abono por \$16.150.460, que no tuvo en cuenta. Y frente a posibles rubros adeudados a Enohelia Heredia Vargas por el mismo concepto, en tanto sostiene que con el título judicial consignado a órdenes del Despacho, se cubre la totalidad de la obligación.

Se extrae con claridad que las obligaciones impuestas a la pasiva, consistieron en i) el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes desde la fecha de fallecimiento del afiliado José Edmundo Contreras Vega, 12 de septiembre de 2014; ii) el pago de intereses

moratorios previstos en el artículo 1° de la Ley 776 de 2002, desde el 20 de marzo de 2015, hasta cuando se haga efectivo el pago y iii) las costas procesales del juicio ordinario.

En razón de estas obligaciones (retroactivo pensional, intereses moratorios y costas), la entidad ejecutada demostró haber efectuado un único pago por valor de \$26.705.616, como se extrae del contenido del título judicial consignado el 5 de agosto de 2021 a nombre de Enohelía Heredia Vargas, rubro que en manera alguna cubría la totalidad de la deuda para con esta ejecutante, pues, además de cancelar mesadas deficitarias, no se liquidaron los respectivos intereses de mora.

Tampoco se acreditó el pago discutido por la entidad de los \$16.150.460, pues si bien aportó constancia de liquidación de la misma a corte de septiembre de 2021, para cancelación hasta el 30 de diciembre de la misma anualidad, lo cierto es que, en misiva fechada del 29 de septiembre de 2021, el área de gerencia jurídica condicionó el desembolso del dinero al aporte “...*de certificación bancaria de cuenta pensional del señor BRALLAN HARLEY CONTRERAS HEREDIA, del Banco de Bogotá...*”. Lo que nunca ocurrió, ya que, incluso en sede de alegatos de conclusión, así lo sostuvo la apoderada judicial.

Por manera que, mal podría declararse probado el pago total de las obligaciones respecto a cualquiera de los dos sujetos ejecutantes, ya que, cuando se desarrolló la diligencia, tal circunstancia no se probó.

Es de advertir que con posterioridad la entidad efectuó la cancelación de todos los rubros adeudados a los beneficiarios, en la siguiente manera:

Liquidó retroactivo pensional para Enohelía Heredia Vargas en cuantía de \$29.998.016 por mesadas comprendidas entre el 12 de septiembre de 2014 y 7 de octubre de 2018 en porcentaje del 50%. A partir del 8 de octubre de 2018 y hasta enero de 2020 -luego de la muerte de la precitada- incrementó el quantum al 100% atendiendo a que el Brallan

Harley no acreditó la calidad de estudiante. Con apego en dichos parámetros, liquidó intereses moratorios hasta el 29 de octubre de 2021, en suma de \$33.670.237.

A Brallan Harley Contreras Heredia efectuó un único pago de \$28.817.304 por mesadas causadas en un 50% entre el 12 de septiembre de 2014 y 7 de octubre de 2018, más intereses moratorios de \$25.279.404, también liquidados a 29 de octubre de 2021.

Asimismo, consignó el rubro correspondiente a las costas de primera y segunda instancia impuestas en el trámite ordinario.

El anterior escenario fáctico, revela diáfananamente que la decisión adoptada por el sentenciador de primer grado fue la adecuada, pues no podría contar con vocación de prosperidad la excepción de pago propuesta por la ejecutada, en la medida en que ni al momento de librarse orden de apremio, ni durante la celebración de la diligencia, se probó la cancelación íntegra de las sumas adeudadas.

Debiendo tomarse como abono, a la luz de lo dispuesto en el artículo 446 del CGP, aplicable en materia laboral por analogía dispuesta en el 145 del CPTSS, los valores reconocidos en favor de los ejecutantes durante el trámite de la alzada, para efectos de computar la liquidación del crédito.

Como las impugnaciones formuladas no logran derruir las decisiones adoptadas por el operador judicial, se condenará en costas a la pasiva conforme al artículo 365 del C.G.P. aplicable por remisión del 145 del CPTSS. Se fijarán como agencias en derecho de la alzada \$400.000 a su cargo. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4º DECISIÓN

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, **RESUELVE:** Primero. **CONFIRMAR** los autos del 17 de agosto y 25 de octubre de 2021 proferidos por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, a través de los cuales se libró mandamiento de pago y resolvió las excepciones formuladas. Se advierte que al momento de efectuar la liquidación del crédito, deberá tenerse en cuenta la totalidad de pagos realizados por la ejecutada. Segundo. **CONDENAR** en costas a la pasiva. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada \$400.000. Líquidense de manera concentrada en el despacho de origen.

Devuélvase el expediente al juzgado para los efectos pertinentes, previas las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE

Los magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

KathyM

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

RAD: 54-001-31-05-002-2019-00200-01

P.T. No. 18940

REF: Proceso Ordinario

DEMANDANTES: Vilma Yudi Jiménez Sarabia y la menor Angie Tatiana
González Jiménez

DEMANDADO: Colpensiones

Como las pretensiones de la activa superan el equivalente a 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020 (\$105.336.360), se concede para ante el superior el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en octubre de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander
TRIBUNAL SUPERIOR
Distrito Judicial de Cúcuta

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
RAD. JUZGADO: 2019-00228
PARTIDA TRIBUNAL: 19382
JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA
DEMANDANTE: YANETH PATRICIA ORTEGA SUAREZ
ACCIONADO: PROTECCIÓN S.A.
ASUNTO: PENSION DE SOBREVIVIENTES
TEMA: APELACIÓN

JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE

San José de Cúcuta, **treinta y uno (31) de marzo** de dos mil veintidós (2022).

Procede la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia proferida el 09 de junio de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido bajo el radicado No. 54-001-31-05-002-2019-00228-00 y P.T. No. 19382 promovido por la señora YANETH PATRICIA ORTEGA SUÁREZ en contra del FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.

Abierto el acto por el Magistrado Ponente, entra la Sala a deliberar y una vez conocido y aprobado el proyecto, se profirió la presente sentencia, previos los siguientes

I. ANTECEDENTES

La demandante, por intermedio de apoderado judicial, interpone demanda ordinaria laboral con el fin de que se condene al fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor en virtud del fallecimiento de su compañero permanente, el señor LUIS EMILIO RODRÍGUEZ ORTIZ, al pago del retroactivo pensional, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

II. HECHOS

La demandante fundamentó sus pretensiones en los hechos narrados en el libelo originario, los cuales serán expuestos brevemente, de la siguiente manera: que el señor LUIS EMILIO RODRÍGUEZ ORTIZ falleció el 12 de marzo de 2005, que

a su fallecimiento le sobreviven al causante ella en calidad de compañera permanente y su hija Paola Tatiana Rodríguez Ortega quien para la fecha del deceso de su padre contaba con nueve años de edad; que convivió con el causante desde el 07 de diciembre de 1993 hasta el fallecimiento, es decir, durante 11 años en compañía de su hija; que el afiliado contaba con 120 semanas de cotización y dentro de los 3 último años contaba con 58 semanas; que solicitó la pensión de sobrevivientes y fue negada por el requisito de fidelidad.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA

Notificada de la demanda presentada en su contra, el FONDO PROTECCIÓN S.A. dio formal contestación a la misma, oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda, manifestando que la demandante no demostró que convivió con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, por lo que, es imposible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes según lo consagrado en el art. 13 de la Ley 797 de 2003; propuso como excepciones de fondo, la prescripción, la inexistencia de la obligación, improcedencia de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y de los intereses moratorios, innominada y la buena fe.

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Tramitada la Litis, el Juzgado de conocimiento que lo fue el SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO CÚCUTA, en sentencia de fecha **09 de junio de 2021** resolvió, declarar que la demandante en calidad de compañera permanente supérstite del señor Luis Emilio Rodríguez Ortiz (q.e.p.d.) tiene derecho a la pensión de sobrevivientes a partir del 12 de marzo de 2005, a cargo de PROTECCIÓN S.A., en consecuencia, CONDENÓ al Fondo PROTECCIÓN al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, desde el 23 de julio de 2015 con retroactivo de \$55.428.959, al pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 23 de julio de 2015 hasta cuando sea incluida en nómina de pensionados, Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción y condenó en costas procesales a la demandada.

Para resolver lo anterior, argumentó que, de las pruebas documentales aportadas, el afiliado Luis Emilio Rodríguez Ortiz al fondo de pensiones PROTECCIÓN reunió las 50 semanas en los 3 años anteriores al su fallecimiento, esto es, dejó causada la pensión de sobrevivientes, y el requisito de fidelidad no es aplicable en estos casos, tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en las sentencias S.L. 14476 del año 2016 que rememora las sentencias del 17 de julio del año 2012, 18 y 25 de septiembre de la misma anualidad con radicación 46825, 44424 y 48331, en las cuales, sostienen la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para aquellas disposiciones contrarias y regresivas a la seguridad social.

Determinó que la demandante Yaneth Patricia Ortega Suárez cumplió con la acreditación de los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003, esto es, demostró la calidad de compañera permanente y que convivió con el afiliado en los últimos 5 años antes de su fallecimiento, convivencia que perduró desde el año 1993 hasta el 2005, todo ello, con base en las pruebas documentales y los testimonios practicados en audiencia.

Que operó el fenómeno prescriptivo de la acción parcialmente, ya que la petición de reconocimiento fue el 23 de julio de 2018, razón por la cual, se reconocerá el retroactivo pensional desde el 23 de julio de 2015, teniendo como mesada pensional, un salario mínimo mensual.

Por último, que son procedentes los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 porque las mesadas pensionales no las habían reconocido, esto es, la demandada estaba en mora de su pago, por la cual, se ordenará su reconocimiento desde el 23 de julio de 2015.

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la parte demandada PROTECCIÓN S.A. inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicita sea revocada en su totalidad, alegando que la negativa por parte de la entidad, fue siguiendo el ordenamiento jurídico operante para la fecha del fallecimiento del afiliado, cuando se exigía el cumplimiento del requisito de fidelidad y el requisito de convivencia se acreditó fue en este proceso por los testigos, que no se acreditó tampoco ante el fondo de pensiones.

Que no está conforme con la condena al pago de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, asegurando que solo se aplica cuando existe una pensión legalmente reconocida y mora en el pago de las mesadas al pensionado, lo cual requiere que se tenga esa calidad y se le haya reconocido el derecho y la demandante no es pensionada, adquiere el título de pensionada con el reconocimiento que le ordena el juzgado, pero antes no tenía la calidad de pensionada.

V. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

El apoderado judicial de PROTECCIÓN S.A. solicitó en los alegatos de segunda instancia, que, según la investigación administrativa realizada por la entidad, la demandante alegó que para la fecha en que falleció el afiliado, había procreado una hija llamada Paola Tatiana Rodríguez Ortega, razón por la que, de conformidad con las normas que gobiernan el asunto, debe ser vinculada.

Que no es procedente la condena a los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 porque éstos sólo se aplican cuando existe una pensión legalmente reconocida y mora en el pago de la misma, por lo que,

considera que la demandante no es pensionada para el momento en que solicita la pensión.

VII. CONSIDERACIONES

APELACIÓN. De conformidad con el artículo 66 A del CPT y de la SS adicionado al art. 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala se encuentra limitada a los temas propuestos y debidamente sustentados por el apelante en su recurso de alzada.

Previo a formular el problema jurídico, se hace preciso responder a la solicitud hecha por el apoderado judicial de la entidad demandada en el memorial de alegatos, respecto a la vinculación de Paola Tatiana Rodríguez Ortega en calidad de hija del causante y la demandante, para lo cual, se trae a colación el artículo 61 del C.G. del P. (antes Artículos 51 y 83 C.P.C. modificado por el Decreto 2282 de 1989 art. 1º), aplicable a nuestro ordenamiento por remisión del artículo 145 del C.P. del T. y de la S.S., señala:

«Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de ésta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado...” “los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos. Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio”.

El caso del litisconsorcio necesario u obligatorio se presenta cuando no es posible que el juez se pronuncie sobre la obligación sin que la decisión comprenda u obligue a terceras personas. Por ello, el litisconsorcio puede ser de diversas clases: **(i) será necesario**, cuando la relación jurídico material discutida es una sola e indivisible, por la cual la ausencia de cualquiera de ellos impide un pronunciamiento de fondo y determina un fallo inhibitorio, **(2º) es voluntario o facultativo** cuando, entre varias personas que integran la parte demandante, la demandada o ambas, median relaciones jurídicas independientes, pero afines o conexas, por lo cual podrían ser objeto de procesos separados.

En tratándose de pensión de sobrevivientes, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en la sentencia de radicación SL 16855-2015 que rememoró lo asentado en las sentencias de rad. 24954, del 15 de feb. y 25 de oct. del 2011, radicaciones 34939 y 36379; y de 22 de agosto de 2012, rad. 38450 señalando que:

“Ahora bien, no desconoce la Sala que hay eventualidades excepcionales en que no es posible resolver el pleito sin la necesaria comparecencia de un determinado beneficiario, como por ejemplo: (i) cuando se trata de un “menor de edad”, dada su condición especial y la naturaleza del derecho, ya que es posible que a éste se le afecte o despoje de su porción pensional, sin que se le hubiere oído ni permitido ejercer su derecho de

defensa por no habersele vinculado debidamente al proceso, o (ii) cuando el derecho pensional, se ha reconocido a la (al) cónyuge supérstite o compañera (o) permanente, previamente a la iniciación del proceso, habida cuenta que no sería razonable ni jurídico que quien fue satisfecho en su pretensión, aunque resuelta sin autoridad para ello, inusitadamente se vea privado del derecho reconocido, sin que se le haya dado la oportunidad de discutir judicialmente su prerrogativa”.

Expuesto lo anterior, se tiene que, según el registro civil de nacimiento aportado con la demanda visto a folio 18 del expediente, Paola Tatiana Rodríguez Ortega nació el 2 de abril de 1995 y es la hija del señor Luis Emilio Rodríguez Ortiz y Yaneth Patricia Ortega Suarez, que para el momento del fallecimiento de Rodríguez Ortiz el 12 de marzo de 2005, la niña contaba con 9 años de edad y para el data en que se solicitó la pensión de sobrevivientes, esto es, en julio de 2018 contaba con 23 años de edad, por lo que, ya no cumplía con la condición de menor de edad, razón por la que, para la fecha en que se interpuso la demanda, 11 de junio de 2019 (fl.1 del expediente) no reúne la calidad de litis consorte necesario, además, verificando la condena del Juez A quo conforme a la declaración parcial de la prescripción judicial, esto es, desde julio de 2015, la joven Rodríguez Ortega contaba con 20 años de edad, siendo mayor de edad.

Y tal como lo señaló la sentencia anterior,

“la figura del litisconsorcio necesario hace relación a que «cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos», lo que quiere decir que tal predicamento corresponde no a las afirmaciones del demandado en su respuesta a la demanda, o a las del demandante en su escrito inaugural del proceso, sino que por la naturaleza del asunto en litigio adquieren la calidad de litisconsortes necesarios, la cual surge cuando no es posible dictarse sentencia sin la presencia de todos quienes conforman la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, pues de resultar excluido alguno o algunos a quienes atañe la decisión de instancia, ésta no lograría su eficacia, y por consiguiente, no sería inmutable ni definitiva necesarias para su ejecutoria, puesto que respecto de aquél o aquéllos no contaría con oponibilidad.”.

En conclusión, no se accede a la petición del apoderado de la entidad demandada, ya que no es procedente integrar de forma necesaria a la litis a Paola Tatiana Rodríguez Ortega, pues el conflicto puede ser resuelto de fondo sin incurrir en nulidades ya que nada le impide a la hija mayor de edad, que posteriormente reclame judicialmente su derecho pensional.

Hechos acreditados.

Aclarado lo anterior, no existe discusión en que, el señor Luis Emilio Rodríguez Ortiz cotizó al fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A. un total de 120 semanas y en los 3 años anteriores de su fallecimiento (12 de marzo de 2005) contaba con 58 semanas, que falleció el 12 de marzo de 2005 (fl.20), que la demandante solicitó la pensión de sobrevivientes ante el fondo demandado el

23 de julio de 2018, que dicha solicitud fue negada con el argumento de no cumplir con el requisito de fidelidad establecido en la ley.

De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a planear el siguiente **PROBLEMA JURÍDICO:**

Determinar si para la fecha de fallecimiento del afiliado Luis Emilio Rodríguez Ortiz, esto es, 12 de marzo de 2005, dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios; en dado caso, verificar si la demandante Yaneth Patricia Ortega Suárez cumple con los presupuestos previstos en la Ley 797 de 2003 art. 13, para ser beneficiaria de la prestación; igualmente, determinar la procedencia o no de los intereses moratorios.

Normatividad aplicable.

Al respecto se ha de indicar que, de acuerdo a lo reiterado en esta Sala, por virtud de la aplicación inmediata de la ley y del efecto retrospectivo que caracteriza a las disposiciones laborales, la regla general es que, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado (Sentencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral del 10 jun 2009, rad. 36135; 1º feb 2011, rad. 42828; 23 mar 2011, rad. 39887; y 3 de may. 2011, rad. 37799, entre otras). La excepción está constituida por los expresos eventos en que se ha aceptado la aplicación ultraactiva de normas anteriores ya derogadas, en virtud del principio de la condición más beneficiosa.

En este caso, en atención a que el causante falleció el 12 de marzo de 2005, el derecho de los beneficiarios a la prestación de sobrevivientes está gobernado por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

El artículo 12 de la Ley 797 de 2003 modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, señalando los requisitos para la obtención de la pensión de sobrevivientes, y exige que el afiliado fallecido hubiera cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años (los inmediatamente anteriores al fallecimiento) *y que se acrediten los requisitos contemplados en los literales a) y b) de dicho artículo, que contemplan una exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993.*

La Corte Constitucional en sentencia C-556/2009 declaró los literales a) y b) inexecutable porque *“constituye una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes, desconociendo la naturaleza de esta prestación, la cual no debe estar cimentada en la acumulación de un capital, sino*

que por el contrario, encuentra su fundamento en el cubrimiento que del riesgo de fallecimiento del afiliado se está haciendo a sus beneficiarios”.

La Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en la sentencia de radicado 42540 del 20 de junio de 2012 M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos dispuso en lo pertinente:

1.- Es cierto que en casos similares al presente, la Corporación ha exigido en relación con la pensión de sobrevivientes, el cumplimiento del porcentaje de fidelidad de cotizaciones al sistema durante el lapso en que tuvo vigor ese requisito, esto es entre la entrada en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, y la sentencia que lo declaró parcialmente inexecutable, la C-556 de 2009, con apoyo en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto el juez constitucional en la parte resolutive no previó que esa decisión tuviese efectos retroactivos. Al no haber modulado la Corte Constitucional los efectos del fallo al realizar el control abstracto, se entendió que durante el

periodo en que tuvo vigor la exigencia de fidelidad de cotizaciones al sistema, estuvo amparada por la presunción de constitucionalidad y su aplicación en ese interregno resultaba obligatoria.

No obstante lo anterior, la nueva composición de la Sala, por mayoría de sus miembros, varía su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexecutable de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.

En esos eventos y ante la existencia de una disposición legal que desconoce el principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, el juzgador para lograr la efectividad de los postulados que rigen la materia y valores caros a un estado de derecho consagrados en nuestra Constitución Política, especialmente en los artículos 48 y 53, y que encuentran sustento también en la regulación internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los tratados sobre el tema ratificados por el Estado Colombiano los cuales prevalecen sobre el orden interno, debe abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexecutable, en las hipótesis en que ella se constituya en un obstáculo

para la realización de la garantía pensional; esto significa que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos efectos.

Este cambio de postura va en armonía con lo dispuesto recientemente en la sentencia de 8 de mayo de 2012, Rad. N° 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.

Consideró la Corporación que cuando *"el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible"*.

(...)

Es con fundamento en los criterios precedentes, que en el *sub lite*, no puede exigirse a la demandante para efectos de tenerla como beneficiaria de la prestación de supervivencia, el cumplimiento por parte del causante del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento; no obstante que la muerte se produjo mientras estuvieron en vigor los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto dichas previsiones fueron a todas luces regresivas como lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009.

Así las cosas, si bien es cierto la misma Corporación en sentencias posteriores señaló que el operador judicial tendría la posibilidad de aplicar la excepción de inconstitucionalidad de la norma respecto a la pensión de invalidez que también exigía el requisito de fidelidad al sistema, en este asunto es dable dar aplicación a lo señalado por la CSJ en la sentencia anterior, ya que, no se hace necesario acudir al art. 4º de la Constitución Política ante la desaparición del ordenamiento jurídico de los literales a) y b), ya que estos no hacen parte del catálogo de normas aplicables a este caso y, ante el efecto vinculante del precedente horizontal del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, la Sala acoge la interpretación asumida por la CSJ en el sentido de que, a pesar de que para el 12 de marzo de 2005 (fallecimiento del afiliado) la exigencia de la fidelidad en el sistema estaba vigente, para la fecha en que se resuelve el conflicto no se exigirá el mencionado presupuesto, por ser a todas luces regresivo según lo indicado por la Corte Constitucional.

De manera tal que, se acreditó que el causante dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, cumpliendo lo previsto en el numeral 2 del art. 12 de la Ley 797 de 2003, esto es, las 50 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento, decisión de primera instancia que deberá ser confirmada.

Ahora, pasando a los beneficiarios de esta prestación, se tiene que el art. 13 de la Ley 797 de 2003 señala que son: i) la cónyuge o compañero (a) que tenga

treinta años o más de edad; ii) que haya hecho vida marital con el causante hasta su muerte, y iii) que haya además convivido con él o la pensionada o afiliado por un tiempo no inferior a cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

De acuerdo con la norma anterior, para que la compañera permanente supérstite adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe demostrar que convivió con el causante no menos de 5 años con anterioridad a su muerte.

Entendiéndose que el concepto de convivencia comprende aspectos que van más allá del meramente económico, pues implica el acompañamiento espiritual permanente, proyecto familiar común, apoyo económico, el compartir la vida de pareja y la cohabitación bajo el mismo techo, que es la regla, salvo casos especiales en los cuales la jurisprudencia ha eximido del requisito de la cohabitación, pero siempre y cuando esté presente el concepto de pareja, con vocación verdadera de conformar una familia.

De tal manera que, para acreditar la calidad de compañera y la convivencia, se presentaron los siguientes testigos:

La señora Lucely Carolina Omaña quien aseguró ser amiga de la familia del causante, de la madrastra la señora Magaly, son vecinas en el Barrio Guaimaral, que le consta que la demandante y el causante se conocieron en el año 1992 y luego se fueron a vivir juntos en 1993, posteriormente nació la hija Paola en 1995; que el señor Luis falleció de cáncer de estómago, que se mudaron al barrio la concordia y que murió en la Clínica de SaludCoop.

Noris Yaneth Duran Blanco manifestó que conoce a la demandante desde que nació porque estudio con la mamá en la escuela, son vecinas y compañeras de colegio del barrio Guaimaral, que Yaneth Ortega era la esposa de Luis Emilio Rodríguez, que se conocieron en el año 1991 y cuando quedó embarazada se fueron a vivir juntos, que nunca se casaron, que la relación fue permanente y nunca se separaron hasta el fallecimiento de Luis, que le consta porque los visitaba cada 8 días en la casa donde vivían en la Concordia, que la causa de la muerte fue por una gripa y luego le diagnosticaron meningitis. Que falleció en la Clínica SaludCoop.

Landis Niño Andrade que conoció al señor Luis Emilio porque eran vecinos del Barrio Latino donde él tenía un local de pinturas, aseguró que la pareja se conoció en el año 1992 y luego se fueron a vivir juntos; que primero vivían en Guaimaral y luego en el Barrio la Concordia, que ella es vecina en ese barrio; que tuvieron una niña en 1993, que la convivencia perduró hasta el fallecimiento en el 2005; que el trabajaba y ella siempre se quedaba en la casa con la niña; y que el señor Luis falleció en la Clínica SaludCoop.

Así las cosas, la Sala considera que los testigos fueron contestes en señalar y dar fe bajo la gravedad del juramento que la pareja conformada por la señora Yaneth Patricia Ortega y el señor Luis Emilio Rodríguez (q.e.p.d.) convivieron bajo el mismo techo, por mas de 10 años, esto es, desde el momento que quedó

embarazada en el año 1994 hasta el fallecimiento de Luis, que nunca hubo separación, que la convivencia fue de pareja, procrearon una hija y los afectos de cariño fueron exteriorizados a la sociedad; cumpliendo de esta manera, lo dispuesto en el numeral 3º del art. 221 del C.G.P. aplicable por remisión normativa del art. 145 del C.P. del T. y de la S.S., y que establece que al testigo se le exigirá que exponga la razón de la ciencia de su dicho con explicación de tiempo, modo y lugar en que haya ocurrido cada hecho.

En este orden de ideas, la Sala considera que la demandante YANETH PATRICIA ORTEGA cumplió con la acreditación de los presupuestos previstos en el art. 13 de la Ley 797 de 2003 para declararla beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de Luis Emilio Rodríguez, esto es, demostró la calidad de compañera permanente y la convivencia durante los último 5 años de vida del afiliado, decisión de primera instancia que deberá ser confirmada; en igual sentido, en cuanto a la declaración de la prescripción parcial de las mesadas pensionales, ya que la solicitud fue presentada ante el fondo demandado el 23 de julio de 2018 y la demanda el 11 de junio de 2019, prescribiendo las mesadas del 23 de julio de 2015 hacia atrás.

En cuanto a los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, se ha dicho en pronunciamientos anteriores, que no tienen carácter sancionatorio sino resarcitorio, pues proceden a fin de aminorar los efectos adversos que produce al acreedor la tardanza del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, con independencia de las razones que se aduzcan en sede administrativa.

Sin embargo, esta no es una regla absoluta, en tanto la CSJ ha reconocido supuestos en los cuales no cabe una condena por tal concepto, porque la negativa se encuentra plenamente justificada (SL704-2013). El primero, cuando en sede administrativa hay controversia legítima entre potenciales beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (SL14528-2014). Y, el segundo, cuando la actuación de la administradora estuvo amparada en el ordenamiento legal vigente al momento en que se surtió la reclamación, y después se reconoce la pensión en sede judicial con base en criterios de origen jurisprudencial (SL787-2013).

Advertido lo anterior, al descender al caso particular, se tiene que, si bien es cierto, para el momento del fallecimiento 12 de marzo de 2005 se exigía en la norma el cumplimiento del requisito de fidelidad, también lo es, que cuando el fondo demandado negó la prestación reclamada (26 de octubre de 2018), la Corte Constitucional había declarado inexecutable los literales a) y b) del numeral 2.º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 (C-556 de agosto de 2009); asimismo, la demanda contentiva de la reclamación de la demandante fue radicada en Juzgado 2º Laboral de Circuito de Cúcuta el 11 de junio de 2019 y notificada a la demandad el 05 de agosto de 2019 (fl.48 del expediente), para estas últimas datas ya se había generado el precedente de la Sala mediante la sentencia CSJ SL 41832 de 8 de mayo de 2012, en que se inaplicaba el requisito de fidelidad al sistema por ser abiertamente contrario al principio de progresividad y no regresividad.

Por consiguiente, no es procedente aceptar los argumentos de la entidad demandada, primero, cuando manifiesta que los intereses moratorios sólo se pagan a quien ya reúne la calidad de pensionada porque la norma no lo dispone de esa forma, y, segundo, la negativa al derecho pensional obedeció al incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema, pues, al momento en que la entidad emitió su negativa al derecho reclamado, la norma que consagraba dicha exigencia ya estaba por fuera del ordenamiento jurídico y al momento de la presentación de la demandada y su respectiva notificación, los jueces tenían la obligación de inaplicarla, incluso, en asuntos pensionales en los que el causante falleció con anterioridad al juicio de constitucionalidad.

En consecuencia, la Sala CONFIRMARÁ la condena al reconocimiento y pago de los intereses moratorios previsto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A., no gozaba de una razón jurídicamente válida para negar el pago de la pensión de sobrevivientes, al no existir controversia entre presuntos beneficiarios y/o conflicto entre normas para la fecha en que la entidad niega la prestación, esto es, no demostró la existencia de una razón atendible que la liberara de tal carga ante el pago tardío de las mesadas pensionales.

No obstante, advierte la Sala que el Juez A quo incurrió en error al condenar al fondo de pensiones PROTECCIÓN S.A. al pago de los intereses moratorios desde el día en que se ordena el pago de la pensión de sobrevivientes (23 de julio de 2015), ya que según lo previsto en el art. 1º de la Ley 797 de 2001, las entidades de seguridad social disponen de **dos meses para reconocer la pensión de sobrevivientes, contados a partir del momento en el que el interesado radique la solicitud junto con la documentación que acredite su derecho** (ver sentencias SL-4321-2021 y SL5681/2021), por consiguiente, la demandada debe los intereses moratorios por la tardanza a partir de dicho vencimiento (dos meses), que en este caso, será desde el 23 de septiembre de 2018 y a la tasa máxima legal vigente al momento en que se produzca el pago, por lo que, en esta instancia prospera el recurso de alzada respecto a dicha condena y dando aplicación al principio de consonancia, se MODIFICARA el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada.

Se **CONFIRMARÁ en todo lo demás** la sentencia apelada, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito del 09 de junio de 2019.

No se condenará en costas en segunda instancia, al prosperar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el fondo de pensiones demandado.

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR PARCIALMENTE el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, en el sentido de CONDENAR AL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. al reconocimiento y pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, desde el **23 de septiembre de 2018** sobre las mesadas adeudadas y a la tasa máxima legal vigente al momento en que se produzca el pago, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: CONFIRMAR en su totalidad la sentencia apelada adiada del 09 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE


ELVER NARANJO

MAGISTRADO



NIDIAM BELÉN QUINTERO GÉLVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-002-2019-00314-01 promovido por **Martha Eufemia García Sánchez** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección** y la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (fls. 61-83): Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones; así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 29 de marzo de 1960, iniciando su cotización en el régimen de prima media desde agosto de 1979, completando 164 semanas de cotización, vinculación que duro hasta octubre de 1994 fecha en

la cual mutó a la AFP Davivir S.A. “*hoy Protección SA*” (sic) y en agosto de 1997 se trasladó a la AFP Porvenir SA. **2) Que** dichos traslados surgieron sin que mediara una verdadera asesoría o mínima ilustración sobre los riesgos y consecuencias que acarreaban los cambios; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, voluntaria, ni libre. **3) Que** formuló ante las tres administradoras de pensiones convocadas a juicio, petición de nulidad del traslado de régimen.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: **La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** (fls. 106-115) se opuso a lo pretendido. Aceptó como ciertos los hechos relacionados con la edad de la actora, la cotización efectuada al RPM, los traslados efectuados entre regímenes y la reclamación administrativa elevada. Argumentó que la precitada se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria y, se encuentra inmersa en la prohibición de trasladarse de régimen establecida en el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en la medida en que, está a menos de diez años para pensionarse. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación pretendida, buena fe, prescripción, e innominada.

Por su parte, la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** (fls. 162-172) también se resistió a las súplicas. Tuvo como únicos hechos ciertos los relativos a las peticiones elevadas por la incoante; dijo no constarle algunos y no ser ciertos otros. Adujo que es Protección SA la llamada a responder por las suplicas de la demanda por cuanto fue esta quien generó el traslado del RPM. Afirmó que la demandante no señaló ni demostró cuál fue el error en el que se incurrió para poder determinar si hay lugar a la anulación de su consentimiento, máxime cuando la información que se debe suministrar en el traslado entre AFP es distinto y el cual obra en formulario de vinculación o traslado suscrito por la misma, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad. Se refirió al artículo

1746 del CC y la sentencia SU 062 de 2010 para fundamentar su oposición tendiente a obtener la restitución en el mismo estado en que se encontraba antes del acto acreditado como nulo, o en su lugar que el actor asuma la diferencia que surja de la equivalencia entre lo ahorrado en el RAIS y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el RPM. Propuso las excepciones que denominó: falta de legitimación por pasiva, inexistencia de la obligación, buena fe, pago, prescripción, e innominada.

Igualmente, la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.** (fls. 14-27, archivo digital 04) se opuso a las peticiones. Admitió la data de nacimiento de la actora y los traslados efectuados ante el fondo, último aspecto sobre el que explicó, se hizo de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, por lo tanto, no hay lugar a decretar la nulidad en los términos solicitados, ni a acceder a las demás súplicas. Afirmó, que la accionante no se encuentra dentro de las posibilidades que otorga la jurisprudencia y reglamentación vigente para trasladarse al RPM. Sobre los demás factuales dijo que no son ciertos o no le constan. Propuso como excepciones de mérito: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro provisional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, e innominada.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta el 15 de diciembre de 2021, resolvió declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que la accionante surtió

el 6 de julio de 1995 con la AFP Davivir S.A. hoy Protección S.A. Condenó a los fondos privados a devolver a Colpensiones, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de aquel, como cotizaciones, bonos pensionales, todos los frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C. con los rendimientos que se hubieren causado, sin descuento alguno. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM que una vez cumplido lo anterior, acepte el traslado de la demandante desde el RAIS al régimen que ésta administra. Gravó en costas solamente a la AFP Protección S.A.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio Porvenir S.A. ni Protección S.A., cumplieron con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada al demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas.

RECURSOS DE APELACIÓN: **-Colpensiones-** busca dejar sin efectos la sentencia. Manifestó que no es posible aceptar el traslado de la actora a la luz de lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 que modificó literal e), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al establecer que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para adquirir la pensión de vejez; evento que satisface la incoante al encontrarse en el rango de edad prescrito. En cuanto a la ineficacia del traslado, indica que no es viable, en la medida que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, ya que, se realizó ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su artículo 48, sin que se observen vicios en el consentimiento. Asevera que a partir del acto de traslado, la afiliada contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los casi 20 años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes

a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió; con el agravante que la acción se halla prescrita. Acotó que el traslado de masivo de personas que alegan omisión de asesoría, supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados.

Porvenir S.A. también aspira a que se revoque íntegramente la decisión. Manifestó que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones, como asegura, lo son los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción generó gastos a la AFP que la misma ley reconoce como comisiones de administración por la gestión de los aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil.

Protección eleva petición de revocatoria. Discrepa de la orden de devolución conjuntamente las comisiones de administración y rendimientos porque se trata de prestaciones ya acaecidas que emanan de la buena gestión desplegada por el fondo. Menos, el seguro previsual en tanto afirma se trata de un concepto girado en favor de un tercero de buena fe, como lo es la aseguradora correspondiente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Colpensiones y Porvenir S.A. replicaron los argumentos expuestos en la apelación elevada ante el juez *A-Quo*.

El extremo activo ni Protección alegaron.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado de la petente del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, primero ante Protección y luego a Porvenir S.A., adolece o no del consentimiento informado de aquélla. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que las encartadas del RAIS restituyan lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las

administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre

características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de las AFP Protección y Porvenir S.A., al argumentar la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio García Sánchez para hacer efectivas las mutaciones de régimen pensional, fue informado, es decir, si las AFP codemandadas cumplieron o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta

corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Se tiene que la protagonista procesal suscribió un formulario de afiliación a Davivir SA (hoy Protección SA), el 25 de julio de 1995 (fl. 19), el 6 de agosto de 1997 otro documento de igual naturaleza ante Colpatria S.A. (fl. 167) y un tercer escrito fechado el 1 de julio del 1999 en el que interviene Porvenir S.A. Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a la AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo activo de que ninguna de las AFP encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitieron al accionante sopesar la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Martha Eufemia García Sánchez de la anotación: “*hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)*”, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado. Situación que ratifica la protagonista procesal al momento de rendir interrogatorio de parte (minuto 14:00 al 20:16, archivo digital 12), pues afirma en que no fue asesorada en debida forma recibiendo y que solo se limitó a firmar los formularios que le pusieron de presente los asesores de las AFP sin leer su contenido ni realizar averiguación posterior.

No asumieron entonces Protección ni Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como les correspondía, los hechos aducidos por la deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplieron con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalaran en sus contestaciones de demanda que sí brindaron la asesoría en donde le explicaron en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuaron. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, los fondos de pensiones convocados a juicio, se sustrajeron al momento de suscribirse los distintos formularios de traslado y en perjuicio del demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltaron a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

Se desestima el dicho de Colpensiones sobre la imposibilidad del traslado luego que le faltaren menos de 10 años al afiliado para alcanzar la edad, ya que, de que se trata es de la ineficacia de un acto, valga decir, de la inexistencia del mismo (traslado). Igual suerte corre la afirmación de que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Menos puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación

de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrimó sobre ello.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión de la juez *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo la demandante del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Protección S.A., ni en su oportunidad Porvenir S.A., con el deber de información, deberá ésta como última administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Martha Eufemia García Sánchez, devolver todas las prestaciones que de la afiliada hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, realicen la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de las administradoras privadas, éstas también deben asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tienen acogida las afirmaciones de las codemandadas pertenecientes al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Se advierte que, contrario a lo discutido por Protección S.A. sobre tal tópico, es claro que ambas AFP han de responder conjuntamente por los anteriores rubros, y de cara a los periodos en que se gestó la afiliación de la demandante. Dado que tal como lo señaló el órgano de cúspide de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral en la sentencia hito proferida sobre tal tópico (radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008), más allá de que la omisión en el suministro de información se configuró a partir del acto primigenio del traslado perfeccionado ante Protección, al mantenerse dicha conducta en el movimiento perpetrado ante Porvenir S.A., corresponde a cada fondo responder por los deterioros sufridos por el capital de la cuenta de ahorro individual de cara al espacio temporal en que se mantuvo el vínculo pensional.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole

pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de sistema pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó la juez de primera instancia, siendo ineludible la confirmación íntegra de dicha decisión.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección, por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$500.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO: CONDENAR en costas Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de

\$500.000 a cargo de cada una de ellas. Liquídense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-002-2020-00024-01
RADICADO INTERNO:	19.609
DEMANDANTE:	BENJAMÍN DE CRISTO VITOLA LACOMBRE
DEMANDADO:	COLPENSIONES y PROTECCION S.A.

**MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES**

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a conocer el recurso de apelación interpuesto por las demandadas COLPENSIONES, y PROTECCION S.A., así como del grado jurisdiccional de consulta, sobre la sentencia del 3 de noviembre de 2021 que fue proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

El señor BENJAMÍN DE CRISTO VITOLA LACOMBRE interpuso demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y la A.F.P. PROTECCION S.A, solicitando que se declare la nulidad del traslado del régimen de prima media al de ahorro individual por haberse materializado mediante inducción a error por ser una decisión con información restringida, errada y engañosa que la convierte en ineficaz; que se ordena a PROTECCIÓN a trasladar todos los aportes y componentes de su cuenta de ahorro individual a COLPENSIONES, y a esta a aceptar su afiliación sin solución de continuidad recibiendo dichos aportes.

Expuso como fundamentos fácticos que nació el 17 de junio de 1956 y estuvo afiliado al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL desde el 21 de noviembre de 1984 a través de su empleador COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CLINKER S.A. y hasta el 28 de febrero de 1999 permaneció allí cotizando 737.14 semanas; que en ese momento la fuerza comercial de AFP PROTECCIÓN se acercó a la empresa donde laboraba y ofreció el traslado al RAIS, argumentando beneficios de pensión a cualquier edad, de mesadas del 100% del ingresos mensual, que bastaba con un formulario y que el seguro social iba a desaparecer; siendo toda esta indebida información que solo era conveniente para el fondo y no tenía ningún sustento, haciéndolo incurrir en error al no sopesar las consecuencias negativas. Que actualmente ha solicitado una proyección de mesada y en PROTECCIÓN le informan que pese a un promedio de ingreso superior a SIETE MILLONES DE PESOS, su mesada quedaría en \$1.910.762,44, es decir un 27.14% de tasa de reemplazo mientras en el RPM alcanzaría la suma de \$6.490.417 pues su tasa sería de 79% según sus semanas cotizadas, evidenciando el engaño en que se incurrió al aceptar el traslado. Por lo anterior solicitó directamente a las entidades su retorno por ineficacia, pero ha sido negado.

La demandada AFP PROTECCION al contestar la demanda, a través de apoderado judicial manifestó:

- Que se opone a las pretensiones pues todas las actuaciones de la AFP estuvieron sometidas al imperio de la ley y solo se puede reconocer prestaciones respaldadas por los presupuestos legales, resaltando que la afiliación a su entidad viene precedida de una asesoría profesional y transparente, por agentes con capacitación y exposición a un estudio

profundo del sistema general de pensiones; siendo el RAIS un sistema reglado cuyo funcionamiento no puede desconocerse y alegar asalto a la buena fe o engaño por cuanto la ignorancia de la ley no es excusa para no cumplirla.

- Que en todo caso el actor ha permanecido más de 10 años en la AFP y cuando realizó su traslado la norma contemplaba como único requisito solemne la firma del formulario consagrado en el Decreto 692 de 1994; sin que en todo caso sea admisible proceder a retornar todos los gastos y descuentos legalmente consagrados en el RAIS, sin garantizar el régimen de restituciones mutuas.
- Propone como excepciones de mérito INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EL DESCUENTO DE SEGURO PROVISIONAL e INNOMINADA.

La demandada COLPENSIONES a través de apoderada judicial contestó:

- Que atiene a las resultas del proceso, entendiendo que el actor se trasladó del RPM al RAIS de manera libre, voluntaria y espontánea, por lo que dicho acto goza de plena validez y debe demostrarse cualquier vicio del consentimiento alegado, existiendo inclusive imposibilidad para retornar por tener menos de 10 años para la edad de pensión y actualmente para todos los efectos su afiliación al RAIS sigue siendo válida.
- Que le constan los hechos verificables en la documental, como la fecha de nacimiento y las cotizaciones efectuadas en su época de afiliado al I.S.S., pero los demás deben ser demostrados por el interesado.
- Propone como excepciones la INEXISTENCIA DEL DERECHO PARA RECLAMAR, INNOMINADA, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE, COBRO DE LO NO DEBIDO, INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD, RESPONSABILIDAD SUIGENERIS DE LAS ENTIDADES DEL RAIS y JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PONDERACIÓN.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 3 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: *Declarar la inexistencia de la afiliación del señor BENJAMIN DEL CRISTO VITOLA LACOMBE a la Administradora del Fondo de Pensiones y cesantías Protección S.A. por los motivos expuestos. En consecuencia declarar que para todos los efectos legales el traslado del régimen de ahorro individual al consolidado no surtió efectos*

SEGUNDO.- Ordenar a la Administradora de Fondo de Pensiones y **Cesantías Protección S.A.** a devolver al sistema todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación del Demandante como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales dela aseguradora con todo sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del código civil, esto es con los rendimientos que se hubieren causado en virtud del regreso automático del régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

TERCERO. -Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones que una vez la Administradora de Fondo de Pensiones y cesanteas Protección S.A. de cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda aceptar el traslado del señor BENJAMIN DEL CRISTO VITOLA LACOMBE del régimen de ahorro individual al regimen de prima media con prestación definida

CUARTO. - Condenar a la Administradora de Fondo y Pensiones cesantías Protección S.A. a asumir los deterioros sufridos por el bien administrado en caso de que se hubieren causado, esto es la misma sufrida en el capital destinado a la financiación de pensión de vejez por los gastos de administración y demás

conceptos establecidos en el artículo 2060 de la ley 100 de 1993 en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos en su propio patrimonio siguiendo las reglas del artículo 963 del código civil.

QUINTO. - *Condenar en costas a la Administradora de Fondo y Pensiones cesantías Protección S.A., fijar como agencia en derecho a favor de la parte demandante la suma de un salario mínimo legal vigente.*

SEXTO: *Remitir el presente expediente a la oficina judicial, para que se surta el grado jurisdiccional de consulta”*

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que el litigio se fijó en determinar si hay lugar a ordenar el retorno o traslado del demandante BENJAMIN DEL CRISTO VITOLA LACOMBE del régimen de ahorro individual solido administrado por Protección S.A. al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, y si hay lugar de ordenar el traslado de todos los dineros que se encuentran depositados en su cuenta de ahorro individual con sus rendimientos, bonos pensionales y demás emolumentos a que haya lugar y si Colpensiones tiene la obligación de recibir al mismo al interior del régimen de prima media con presentación definida; siendo hechos aceptados su vinculación al I.S.S. entre 1984 y 1999, que se trasladó a AFP PROTECCIÓN donde ha seguido cotizando hasta tener más de 1800 semanas.

- Estudió la eficacia de la afiliación a los regímenes del sistema general de pensiones, a partir del análisis de las características del mismo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, con especial énfasis en el los literales b) que versa sobre la afiliación libre y voluntaria y e) que señala que el afiliado se puede pasar de un régimen a otro, siempre que haya permanecido como mínimo cinco años en el régimen al cual quiere trasladarse, así como tampoco podrá cambiar de régimen cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad que le dé derecho a la pensión.

- Con fundamento en los artículos 271 y 272 ibídem, advirtió sobre las consecuencias, de atentar contra el derecho de afiliación de manera libre y voluntaria, señaló que la afiliada es libre de elegir el régimen y el fondo de pensiones tanto en la primera vez que se afilia, como en las veces que decida cambiarse. Resaltando en este caso, que no se aportó el formulario suscrito por el actor para acreditar la existencia y validez de su traslado.

- Teniendo en cuenta que se observó el aspecto referente a la no afiliación por no haber sido suscrito por parte del actor el formulario de afiliación según los términos del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, resaltando que el formulario es un elemento determinante y formal para consumar el traslado, pues no solo se dejó de aportar sino que el demandante indicó que este traslado lo decidió su empleador y no se materializó su voluntad, por lo que deben aplicarse las consecuencias jurídicas por existir una indebida afiliación o traslado entre regímenes pensionales, a partir de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, Sala de Casación Laboral exhibiendo lo dicho mediante Sentencia SL4360-2019/68852 de octubre 9 de 2019.

- Al descender al caso concreto, sostuvo que se dieron los presupuestos de la citada jurisprudencia para entender la inexistencia del traslado del RPM del actor al RAIS administrado por la AFP PROTECCIÓN, recordando que el acto es inexistente cuando se celebra sin las solemnidades que la ley sustancial exige para su formación o cuando falta alguno de los elementos esenciales, conforme al artículo 11 del decreto 692 de 1994, por no evidenciarse prueba del formulario de afiliación y esta carga de la prueba correspondía a la administradora de pensiones, así como las demás circunstancias paralelas como la entrega de suficiente información sobre las consecuencias del cambio de régimen pensional.

- Advierte que la declaratoria no depende de un perjuicio sobre el derecho pensional y la consecuencia es la orden de retorno al RPM con todos sus aportes, así como cualquier pasivo o faltante que exista para el afiliado a cargo de los recursos de la propia AFP por ser la determinadora de la nulidad, incluyendo los gastos de

administración y demás conceptos, siguiendo los parámetros jurisprudenciales. Igualmente se ha señalado que la prescripción no procede para esta clase de pretensión por ser inherente al derecho fundamental de seguridad social.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la parte demandada PROTECCION:

El apoderado de PROTECCIÓN interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Advierte que acorde a la normatividad vigente, el actor tuvo plena libertad para la elección o traslado de régimen.

- Considera que no es procedente ordenar la devolución íntegra de todos los dineros incluyendo gastos de administración y seguros, que fueron cobrados por disposición legal para el funcionamiento de la actividad de aseguradora y se trata de situaciones ya acaecidas, no siendo dable devolverlos pues se estaría desconociendo el trabajo que ha desplegado la administradora desde hace muchos años, vulnerándose el derecho a las restituciones propias y que se adquirieron de buena fe. Inclusive destaca que el seguro previsional es un descuento obligatorio y con una finalidad que no benefició a la demandada.

3.2 De la parte demandada COLPENSIONES:

La apoderada de COLPENSIONES interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que no es procedente acceder a la nulidad de traslado, porque acorde al artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 al faltarle menos de 10 años para cumplir su edad de jubilación, ya contando con esta al presentar la demanda.

- Que en todo caso el traslado goza de plena validez, el demandante estaba en plena facultad para trasladarse libre y voluntariamente entre regímenes pensionales bajo la libertad de elección consagrada en la Ley 100, sin que COLPENSIONES interviniera en momento alguno para la elección que realizó el demandante al estimar libremente que le era más favorable elegir un régimen de ahorro individual y en todo caso el actor ha permanecido más de 20 años allí, convalidando su decisión, debiendo revisarse la procedencia de la prescripción.

- Que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2004, donde se resalta que el límite legal para trasladarse entre regímenes es razonable y admisible para el fin perseguido, que es evitar la descapitalización del régimen de prima media.

4. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES, se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de la sentencia, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

5. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• PARTE DEMANDANTE:

El apoderado de la parte actora refiere que está conforme con la conclusión alcanzada por el juez sobre que no existe en el expediente copia del formulario suscrito por el demandante para materializar su traslado y por tanto deviene en inexistente; pero además agrega que es un deber de las AFP desde su creación como entidades del sistema financiero, proveer información clara y objetiva a los usuarios para que tomaran las mejores opciones del mercado, responsabilidad que se

extiende a sus promotores. Considera que se debe confirmar lo resuelto en primera instancia por la falta de pruebas de la demandada sobre el cumplimiento de su deber de información al usuario y aplicando el parámetro jurisprudencial vigente.

• PARTE DEMANDADA

La apoderada de COLPENSIONES solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, señalando que esa entidad no está llamada a aceptar el traslado de la demandante teniendo en cuenta que ha actuado conforme a las normas legales vigentes para el presente caso, por cuanto a la fecha, el traslado efectuado al RAIS tiene plena validez y que el traslado de régimen no procede por cuanto la actora ya cumplió la edad requerida para pensionarse.

Que le corresponden a PORVENIR S.A, probar que la información que brindó a la actora al momento de afiliarla y del cambio de régimen, fue idónea y la suficiente para que la decisión de traslado fuera libre de vicios.

Mencionó que la ineficacia o nulidad, resultaría inoponible frente a terceros de buena fe y en su caso se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, teniendo alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

Solicita que, en caso de prosperar la pretensión de la actora, se revise si se encuentra en condición de pensionado, pues no se puede retrotraer el estado mismo de las cosas por haber un hecho consumado, y el tener dicha condición implicaría dejar sin piso los actos administrativos que mediaron en el reconocimiento de la garantía.

6. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

7. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala es el siguiente:

¿Si en este caso resultaba procedente declarar la nulidad del traslado del señor BENJAMÍN DE CRISTO VITOLA LACOMBRE del RPMPD al RAIS a través de la A.F.P. PROTECCION S.A.?, y de ser procedente, ¿si la declaratoria de nulidad del traslado implica la devolución de aportes, de los gastos de administración y demás conceptos ordenados?

8. CONSIDERACIONES:

Procede esta Sala a determinar en primer lugar si el traslado del señor BENJAMÍN DE CRISTO VITOLA LACOMBRE del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad que se efectuó en el año 1999, se dio con pleno cumplimiento al deber de información que radicaba en cabeza de la demandada Administradora de Fondo de Pensiones PROTECCION S.A., o si en su defecto, procede la declaratoria de ineficacia del traslado inicial que se dio del RPMPD al RAIS y el orden de devolución de los aportes, gastos de administración y demás conceptos a COLPENSIONES.

Al respecto el A Quo resolvió que no existiendo prueba alguna sobre la forma en que se materializó el traslado, como el formulario de afiliación, efectivamente este debía declararse inexistente pero dado que el actor pertenecía a COLPENSIONES, por lo que accedió a las pretensiones.

A esta conclusión se opuso PROTECCION S.A. alegando que cumplió con los deberes de información y que no está de acuerdo con la orden de restituir los gastos de administración y lo pagado por seguro de previsional, por considerar que dicha determinación resulta en contravía del inciso final del artículo 964 del Código Civil y de la Ley 100 de 1993.

Por su parte Colpensiones manifestó que no es procedente la declaratoria de la ineficacia del traslado del demandante porque se evidencia una falta de interés del demandante para resolver oportunamente su situación pensional ya que ha permanecido más de 20 años en el RAIS y se encuentra en la edad límite consagrada por la ley para cambiar de régimen.

En esa medida, se tiene que lo pretendido por la parte actora es la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional por el incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora y con ello la constitución de un vicio del consentimiento; pretensión que tiene fundamento en que una de las características del sistema general de pensiones es la selección libre y voluntaria del régimen pensional por parte de los afiliados, conforme al artículo 13 de la ley 100 de 1993.

Para que un traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual adquiera plena determinación, dicha actuación debe contener un pleno acatamiento de este deber para que de esa decisión se pueda predicar la libertad y voluntariedad exigida, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia sentada desde el año 2008 ha determinado que previo a su decisión, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar, porque de no ser así, bien por brindarse una incorrecta u omitirse la relevante, puede entenderse que existe un error que vicia su voluntad. En otras palabras, es posible predicar la ineficacia de la vinculación al RAIS por un vicio en el consentimiento denominado error, que hace imposible que la selección del nuevo régimen sea soberana y potestativa

Sobre la procedibilidad de estas pretensiones, la jurisprudencia en providencias como SL19447 de 2017, ha señalado que existirá ineficacia de la afiliación cuando i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados; providencia que ha sido reiterada en SL2611 del 1 de julio de 2020.

En decisión SL1452 del 3 de abril de 2019 (Rad. 68.852 y M.P. CLARA DUEÑAS) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realiza un profundo análisis del presente problema jurídico, señalando que la prosperidad de la pretensión de nulidad de afiliación a una AFP por incumplimiento del deber de información no depende de que la persona tenga una expectativa pensional ni se trata de una imposición novedosa e inexigible para traslados anteriores al año 2009, puesto que **el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación.**

Cabe recordar que, el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia, dentro de las cuales se entienden: la transparencia, la vigilancia, y el deber de información. Ello, según ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las responsabilidades que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación.

Al respecto la sentencia SL1452 de 2019 hace un recuento de las etapas de este deber de información, reiterando que surge con el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que sus decisiones previas identifican que inclusive en el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 1º del artículo 97 impone a las entidades el deber de suministrar la información necesaria a los usuarios para las operaciones que realicen y que ello implica entender la transparencia como *“una norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las*

reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro”.

Prosigue la Corte identificando las normativas de diversa índole que se han proferido desde entonces para garantizar el cumplimiento de este deber a favor de los afiliados, imponiendo 3 puntos fundamentales:

(i) La constatación del deber de información es ineludible, pues si desde el principio las AFP tenían el deber de brindar información con el paso del tiempo este grado de exigencia se ha intensificado y los jueces tienen el deber *“de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”.*

(ii) En desarrollo de lo anterior, agrega la Corte que *“El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente”* de manera que existe la necesidad de un consentimiento informado, pues *“la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, **no son suficientes para dar por demostrado el deber de información**”* dado que *“el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado”.*

(iii) Por ende, afirma la Corte que la carga de la prueba debe invertirse en favor del afiliado puesto que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”*, de manera que *“si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo”* el afiliado no puede demostrar un supuesto negativo como sería el que no recibió la información y de allí que es la AFP quien debe demostrar que suministró la asesoría en forma correcta.

De ahí que, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son estos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual: (i) las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, (ii) las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y (iii) las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Estos preceptos han venido siendo reiterados, como puede verse en providencia SL587 de 2021 donde la Corte resalta que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”* y por lo tanto *“si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se vinculó, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede acreditarse materialmente por quien lo invoca”*, máxime cuando el deber de información *“es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones y su ejercicio debe ser de tal diligencia que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión”*, indicando que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia y tampoco resultaría razonable invertirla contra la parte débil de la relación contractual.

Aplicando estos preceptos legales y jurisprudenciales al caso concreto, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad está en cabeza de la A.F.P PPROTECCION S.A.; pues

argumenta el demandante que la aparente decisión libre y voluntaria de trasladarse de régimen no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte del fondo que la recibió, por lo que no existe tal consentimiento libre y voluntario, y atendiendo a la carga de la prueba mencionada, se hace necesario auscultar el material probatorio a efectos de determinar si por el contrario, la información fue correcta, oportuna y suficiente.

El demandante manifestó que estuvo afiliada al RPMPD administrado por el entonces ISS (hoy COLPENSIONES), donde alcanzó a cotizar 737,14 semanas y se trasladó al RAIS en marzo de 1999 a través de la firma de formulario de vinculación del Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCION S.A.

Del expediente se puede evidenciar que el actor se encontraba afiliado al RPMPD desde noviembre de 1984, cotizando acorde a la historia laboral aportada por COLPENSIONES un total de 737,14 semanas y conforme certificado expedido por PROTECCION S.A., surtió traslado efectivo a dicha administradora desde el 1 de marzo de 1999, donde a la fecha de interposición de la demanda ha sumado otras 1061,43 semanas para un total de 1801,72.

Al plenario sobre la afiliación al RAIS obran solo como pruebas regularmente aportadas, las historias laborales en ambas entidades del demandante y las negativas a aceptar su traslado, no aportándose siquiera el formulario de afiliación. Si bien el *a quo* señaló que esto era el elemento determinante para acceder a esta pretensión, estima la Sala que está debidamente acreditado que el actor sí perteneció al RAIS; ese traslado fue efectivo porque se acepta que hubo cotizaciones y se mantuvieron desde 1999 a la fecha, adelantando PROTECCIÓN inclusive el trámite de liquidación del bono pensional para recibir los aportes de COLPENSIONES. Por lo que el análisis debió enfocarse a si se demostró por parte de la A.F.P. que cumpliera con los estándares de información suficientes para evitar una decisión aparentemente voluntaria pero ausente de conocimiento sobre sus efectos que determina el vicio del consentimiento.

Como se explicó, no obra prueba alguna que dé cuenta si PROTECCION S.A. brindó al afiliado previo a su traslado, toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; esto es, que para febrero y marzo de 1999, momento en que se alega firmó el formulario de solicitud de vinculación o traslado, se le haya indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual; que si no se completaba el suficiente capital para obtener por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del SMLMV), debía seguir cotizando o aceptar la devolución de saldos; y que existen diferentes modalidades pensionales. Tampoco obra prueba de la que pueda desprenderse que a la fecha indicada se hubieren efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones y otras tantas observaciones respecto a los riesgos que asumía la referida con su traslado, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario.

De acuerdo con lo explicado, en su momento PROTECCION S.A., no actuó cumpliendo con su deber de información, pues conforme se expuso tenía la carga de acreditar que así lo hizo, y no aportó documento o prueba alguna que lo acreditara, y con las pruebas aportadas al proceso no se infiere con certeza que la situación pensional particular del actor haya sido estudiada y ante ello se puede concluir que la demandada no logró acreditar que la activa hubiere recibido la información del traslado bajo los siguientes parámetros: información necesaria, completa, eficiente, suficiente, eficaz, cierta, oportuna y comprensible de las reales implicaciones que conllevaría el traslado y las posibles consecuencias futuras. Tampoco allegó prueba sobre los datos proporcionados a BENJAMÍN DE CRISTO VITOLA LACOMBRE donde consten los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

En atención a los lineamientos jurisprudenciales citados, a que para la fecha del ultimo traslado al RAIS ya estaba en vigencia la Ley 1328 de 2009, así como el Decreto 2241 de 2010, y con sustento en las pruebas analizadas, la Sala concluye que en el presente caso, sí se presentó un vicio en el consentimiento de la afiliada, traducido en un engaño por la *“Falta del deber de información en un asunto neurálgico para una persona, como es el cambio de régimen pensional”*, que lo indujo en error de hecho sobre el objeto o identidad de la cosa específica de que se trata, como señala el artículo 1510 del Código Civil, al tomar la decisión de su traslado al

régimen de ahorro individual y de esa manera los argumentos iniciales del recurso de apelación de ambas demandadas son desestimados, pues para enervar la decisión debía enfocarse la demandada en un ejercicio adecuado de la carga de la prueba que le correspondía, respecto de un deber legal que existe desde la concepción del Sistema General de Seguridad Social.

Por otra parte, sobre la prescripción que podría beneficiar a COLPENSIONES en virtud de la consulta, se advierte que al tratarse el presente asunto de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la Seguridad Social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento., Por lo tanto, la acción encaminada a lograr la ineficacia de la afiliación en los fondos privados por cambio de régimen pensional no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada.

Así lo ha expresado en diversos pronunciamientos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluye por ejemplo en providencia SL361 de 2019 que *“la acción encaminada a lograr la nulidad de la afiliación en fondos privados por cambio de régimen no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada”*; por lo que esta excepción no está llamada en prosperar.

Abordando lo correspondiente a las restituciones contenidas en la condena, específicamente la devolución de los descuentos realizados por la AFP por gastos de administración a la cuenta del actor, se ha concluido que PROTECCION S.A., incumplió con su deber de información sobre las incidencias, ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio al RAIS, por lo que, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración incluyen que se realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y descuentos realizados por gastos de administración y seguro previsional a COLPENSIONES, tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló en lo pertinente lo siguiente: «...las prestaciones acaecidas no son plenamente retroactivas...», por lo que, al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen se encuentra nulo por vicio del consentimiento, PROTECCION S.A., deberá devolver completamente todas las prestaciones que recibieron de la afiliada, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones. Los cuáles están en custodia de la Administradora y no de la aseguradora, para quien la presente condena no se hace extensible por no tener responsabilidad alguna en las pretensiones o el objeto del litigio, sin perjuicio de que se puedan adelantar acciones futuras para determinar la procedibilidad de recobros.

Esto ha sido recientemente reiterado por la Sala de Casación Laboral en proveído SL2877 de 2020, donde se dijo:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS **debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante** en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, **incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.***

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros

términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989).

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que PROTECCIÓN S.A. y PROTECCIÓN S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar **los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.**»*

Lo anterior permite desestimar el argumento de la apoderada de COLPENSIONES sobre que aceptar al actor desequilibraría la financiación del régimen de prima media; pues los aportes deben ser devueltos a dicha entidad a plenitud, como si se hubieran realizado en igualdad de condiciones y por lo tanto conformando íntegramente el mismo capital pensional que hubiera generado la mesada de haber permanecido desde 1999 en esa entidad.

Así mismo, ha señalado la Corte desde providencia SL1688 de 2019 que “a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”; por ende, no es posible señalar que la permanencia en la entidad por el actor pueda entenderse como un acto de relacionamiento que sanee la irregularidad que avala la pretensión.

Respecto de los demás argumentos de los apelantes sobre la imposibilidad de devolver descuentos legalmente realizados en su momento, advierte la Sala de Casación Laboral en providencia SL3199 de 2021 reiterada en SL3895 de 2021:

*“como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adocinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- **con cargo a sus propias utilidades**, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.”*

De lo anterior se desprende, que es la AFP quien, al predeterminar la ineficacia, está llamada a responder de su patrimonio por todas las consecuencias que de ello se deriven.

Conforme a lo anterior, la Sala deberá confirmar la decisión adoptada por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta en sentencia del 3 de noviembre de 2021; finalmente, se condenará en costas de segunda instancia a las demandadas PROTECCION S.A, y COLPENSIONES, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fijense como agencias en derecho a favor del actor, por la segunda instancia, la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha del 3 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a la parte demandada PROTECCION S.A y COLPENSIONES. Fijar como agencias en derecho a favor del demandante la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-002-2020-00035-01
RADICADO INTERNO:	19.610
DEMANDANTE:	ISABEL BUITRAGO GAMBOA
DEMANDADO:	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. y ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a conocer los recursos de apelación interpuestos por las demandadas COLPENSIONES y PORVENIR S.A., así como del grado jurisdiccional de consulta, sobre la sentencia del 03 de noviembre de 2021 que fue proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

La señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA interpuso demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y la A.F.P. PORVENIR S.A, solicitando que se declare la nulidad o ineficacia del traslado del régimen de prima media al de ahorro individual que realizó en septiembre de 2.008, y, en consecuencia, se ordene a PORVENIR trasladar a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de su afiliación con todos sus frutos e intereses, y a esta última dar continuidad a su afiliación. También solicitó que se condene a PORVENIR a asumir el deterioro sufrido por los dineros administrados

Expuso como fundamentos fácticos de sus pretensiones:

- Que se afilió al ISS en septiembre de 2.001 y en septiembre de 2008 se trasladó al RAIS debido a una visita previa de un asesor del fondo privado, quien le propuso trasladarse de régimen, pero no le suministró la ilustración suficiente y las explicaciones necesarias para la toma de esa decisión, ya que no le informó los beneficios particulares de cada régimen, no le realizó una proyección de su eventual pensión en estos para que hubiera podido comparar objetivamente los beneficios ofrecidos por ambos regímenes y así poder tomar una decisión razonada, y solo se limitó a explicarle que en el RAIS el valor de la pensión de vejez sería más alto que en el RPMPD para las personas más jóvenes que realizaran aportes sobre una base de cotización alta y que a diferencia del ISS, los aportes después de las 1.400 semanas se tenían en cuenta. Expresó que es una persona inexperta en los aspectos técnicos financieros y actuariales que tienen que ver con el manejo de las pensiones por lo que aceptó de buena fe suscribir los documentos para realizar el traslado.
- Que cuenta con 55 años y por restricción legal no puede trasladarse voluntariamente de PORVENIR S.A a COLPENSIONES.

- Que el 25 de noviembre de 2019 adelantó reclamación administrativa ante PORVENIR S.A. y COLPENSIONES.
- Que mediante comunicación de fecha 26 de noviembre de 2019 COLPENSIONES le contestó que ella realizó el traslado de manera directa y voluntaria, ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, por lo que no es procedente anular la afiliación.
- Que PORVENIR S.A. contestó su petición mediante comunicado radicado N° 0106327018504200 del 13 de enero de 2020 en donde le indicó que ella se vinculó a ese fondo de manera libre y voluntaria mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación en el que ratificó la asesoría que se brindó de manera verbal y le aclararon que si continua cotizando el beneficio pensional está representado por una garantía estatal de pensión mínima a los 73 años, y en caso contrario procede la devolución de saldos.
- Que PORVENIR solo le está reconociendo 12 de las 538,57 semanas que cotizó en el RPMPD y no le tiene en cuenta las semanas que aportó a través del Consorcio Colombia Mayor o Prosperar, perdiendo más de 10 años de cotizaciones.
- Que realizó petición de nulidad e ineficacia del traslado el 25 de noviembre de 201149 ante PORVENIR S.A., respecto de la cual recibió comunicación radicado N° 0106327018504100 del 02 de enero de 2022 en la que le indican que no es procedente realizar la desvinculación del régimen porque esa administradora dio cumplimiento a cada uno de los presupuestos legales.

La demandada COLPENSIONES a través de apoderada judicial contestó:

- Que son ciertos los hechos verificables en la documental, como que la demandante estuvo afiliada al extinto ISS y que por su edad ya no puede trasladarse de régimen. Sobre los demás hechos manifestó que no le constan y son susceptibles de la fijación del litigio.
- Que se atiene a las resultas del proceso, pero que se evidencia que la demandante realizó el acto del traslado de régimen de forma libre y voluntaria, ejerciendo su derecho a la libre elección y cumpliendo con los requisitos legales. Que la carga de la prueba radica en cabeza del actor y que esa entidad no puede reconocer por vía de jurisprudencia prestaciones económicas que no estén consagradas en la ley, por lo que negó el traslado.
- Que la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular 019 de 1998 indicó que el afiliado que decida trasladarse de régimen o de administradora expresara su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o la nueva administradora y en Circular 016 estableció los mecanismos para que las A.F.P. realicen la asesoría a los afiliados a partir del 01 de octubre de 2016, fecha en las que mujeres de 42 años o más y los hombres de 47 años o mas no pueden trasladarse de régimen sin dicha asesoría, orden que no es retroactiva.
- Que cuando la A.F.P. no entrega la información pertinente a los afiliados ocasionando con el traslado del RPMPD al RAIS perjuicios económicos, esta entidad debe indemnizarlos de acuerdo a la responsabilidad profesional de las entidades financieras que realizan la actividad de gestión fiduciaria. Que las A.F.P. del RAIS no pueden reconocer, liquidar y pagar pensiones bajo el sistema del RPMPD, pero por falta de información son obligadas a reconocerlas bajo esa modalidad, por la no eficacia del traslado del afiliado, por lo que deben conmutar la respectiva pensión con COLPENSIONES, lo que está autorizado en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993.
- Que hasta el año 2016 las leyes para probar el conocimiento y asentimiento del afiliado respecto del traslado solo exigían el consentimiento de este vertido en el formulario de afiliación.
- Que la existencia de circunstancias técnicas especiales de cada régimen pensional sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados, lo que no

puede interpretarse como una situación universal que invierta la carga de la prueba y desconozca las actividades, cotizaciones y movimientos financieros que a lo largo de la vida laboral le permiten al afiliado escoger acertadamente el régimen pensional.

- Que respecto al traslado de régimen la Corte hace una errónea e indebida interpretación del artículo 1604 del Código Civil al convertir la responsabilidad en cabeza de los fondos como objetiva, ya que este tipo de responsabilidad no aplica en estos procesos dado que los potenciales pensionados cuentan con el deber de asesorarse, aunado a que existen obligaciones legales del demandante según el Decreto 2241 de 2010 y obligaciones recíprocas en el contrato de afiliación, entre las que destaco que como deber mínimo en cabeza de los afiliados al Sistema General de Pensiones se entiende el silencio en el transcurso del tiempo como una decisión consciente de permanecer en el régimen seleccionado, la cual solo se puede desvirtuar demostrando la preexistencia de una fuerza que hubiere viciado el consentimiento.
- Que existen diferencias entre los afiliados al sistema de pensiones y no todos pueden ser considerados como inexpertos o incapaces de tomar una decisión acertada.
- Que el derecho a trasladarse no es absoluto y debe atender a criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales
- Propuso las excepciones de mérito de: inexistencia del derecho para reclamar la prestación económica, la innominada, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, la inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social y la de sugerir un juicio de proporcionalidad y ponderación.

La demandada AFP PORVENIR al contestar la demanda a través de apoderado judicial manifestó:

- Que son ciertos los hechos relativos a la edad de la actora y que esta no puede trasladarse a COLPENSIONES. Respecto de los demás hechos indicó que no le constan, que los mismos deben probarse y que se opone a las pretensiones porque no existe vicio alguno que amerite o genere la nulidad o ineficacia del traslado y acceder a las suplicas de la demanda sería como que la demandante desconociera su propio acto, lo que contraviene el principio de buena fe negocial.
- Que la parte demandante no realizó esfuerzo argumentativo y probatorio alguno para establecer qué clase de error se alega, ni la entidad del mismo, para poder determinar si tiene la virtualidad de anular el consentimiento y se limitó en un relato difuso e impreciso a endilgarle responsabilidad.
- Que las pruebas documentales que aporta, en particular el formulario de vinculación o traslado suscrito por el demandante bajo la gravedad del juramento, dan constancia de que hubo una debida asesoría y que la actora tomó su decisión de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la posible ocurrencia de un vicio de la voluntad, y hace necesaria su absolución.
- Que tan consiente y valida fue la decisión de la demandante que el art. 3 del Decreto 1161 de 1994 le ofrecía la posibilidad de retractarse dentro de los 5 días siguientes a su elección, y no lo hizo.
- Que informó a sus afiliados sobre las posibilidades de traslado de régimen a través de los canales dispuestos por la Administradora y con el envío de los extractos trimestrales y en el año 2004 realizó campañas a través del envío de comunicaciones masivas a sus afiliados a través de medios de comunicación, informando la posibilidad de retornar al RPM de acreditar con

los requisitos establecidos en las normas y la demandante no hizo uso de ese legítimo derecho.

- Que al momento de realizarse la afiliación o traslado a esa A.F.P. no existía disposición en la ley 100 de 1993 que regulara expresamente la forma en que se debía dar asesoría para el cambio de régimen, asunto que vino a ser regulado con la expedición de la Ley 1328/2009 en su artículo 48.
- Que la demandante después de muchos años demanda la nulidad de su traslado, cuando durante ese lapso, ya existía información decantada y accesible al público en general acerca de las diferencias e implicaciones de los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993, y dejó pasar todas las oportunidades que las disposiciones legales le ofrecían para hacer válidamente un nuevo traslado de régimen pensional y además, se encuentra incurso en la prohibición legal de traslado de régimen, del art. 2 de la ley 797/2003, pues se encuentra a menos de 10 años de la edad de pensión, lo que evidencia conformismo o en el peor de los casos, desidia sobre el asunto, no puede ahora alegar su propia torpeza.
- Que la H. Corte Constitucional ha trazado una clara línea jurisprudencial en las sentencias SU-062/2010, C-1024/2004 y SU-130/2013 en los eventos en los cuales le es permitido a los afiliados trasladarse de regímenes en cualquier tiempo, sin estar sujetos a la restricción del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 2 de la Ley 797 de 2003, estableciéndose que los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994 fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para trabajadores del sector privado o 30 de junio de 1995 para el caso de servidores públicos departamentales, municipales y distritales, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, lo que no está acreditado en este caso.
- Que en la sentencia de la CSJ-Sala Laboral, SL19447-2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, Radicado No 47125, MP Gerardo Botero Zuluaga, se establece como uno de los requisitos de procedencia para declarar ineficaz la afiliación, que la insuficiencia de información impida el acceso al derecho a pensión y para este caso, el acceso al derecho a pensión en el régimen de ahorro individual se tiene garantizado como lo evidencian las liquidaciones pensionales allegadas.
- Que en el remoto e improbable evento de acceder a las suplicas de la demanda, se debe considerar que de conformidad con la sentencia SU-62/2010 y el Decreto 3995/2008 es requisito *sine qua non* para que se produzca el traslado de regímenes que exista equivalencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media y de existir diferencia debe ser asumida por el afiliado, en consonancia con el art. 1746 del CC que contiene los efectos de la declaración de nulidad.
- Propuso las excepciones de: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia sobre los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada contra la Sentencia del 03 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: Declarar la ineficacia en el sentido estricto de la afiliación de la señora Isabel Buitrago Gamboa a la Administradora de Fondo de Pensión y Cesantía Porvenir S.A. suscrita el día 1 de agosto 2008, por los motivos expuestos, en consecuencia, declarar que para todos los efectos legales el traslado al régimen de ahorro individual consolidaridad no surte efectos.

SEGUNDO: Ordenar a la administradora de fondos de pensiones y cesantías PORVENIR S.A. a devolver al sistema todos los valores que hubiese recibido con motivo de la afiliación de la actora, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, en virtud del regreso automático al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.

TERCERO: Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, que, una vez la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. de cumplimiento a lo aquí ordenado, proceda a aceptar el traslado de la señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA del régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida.

CUARTO: Condenar a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., a asumir los deterioros posiblemente sufridos por el bien administrado en caso de que se hubieren causado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración y demás conceptos establecidos en el artículo 20 y 60 de la Ley 100 de 1993 en que hubiere incurrido, los cuáles serán asumidos de su propio patrimonio siguiendo las reglas del artículo 963 del Código Civil.

QUINTO: Condenar en costas a la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., fijar como agencias en derecho a favor de la parte demandante la suma de un salario mínimo legal vigente.

SEXTO: Remitir el presente expediente a la oficina judicial para que surta el grado jurisdiccional de consulta ante la Sala Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta.”

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que se tienen como hechos ciertos que la actora se vinculó al Sistema General de Pensiones a través del RPMPD en el mes de septiembre de 2.001, en el cual estuvo hasta septiembre de 2.008, momento en que se trasladó al RAIS administrado hoy por PORVENIR S.A. al cual se encuentra afiliada, así como que el 25 de noviembre de 2.019 elevó solicitud de retorno al RPMPD ante las entidades demandadas, sobre lo cual obtuvo una respuesta negativa.

- Que el litigio se fijó en determinar si a la demandante le asiste el derecho al retorno o traslado del RAIS al RPMPD, para lo que se entra a verificar si el traslado que se produjo entre regímenes surtió efecto o es ineficaz, inexistente o nulo, frente a lo cual ese despacho sostiene una tesis positiva y accede a las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que la demandada PORVENIR S.A. no acreditó haber suministrado a la actora la información necesaria para lograr la mayor transparencia al momento del traslado a través de elementos de juicios claros y objetivos.

- Estudió la validez de la afiliación a los regímenes del sistema general de pensiones, a partir del análisis de las características del mismo dispuestas en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, con especial énfasis en los literales: a) relativo a la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores al Sistema General de Pensiones, b) que versa sobre la afiliación a uno u otro régimen pensional de forma libre y voluntaria, c) que consagra el derecho de los afiliados al reconocimiento y pago de las prestaciones, así como de las pensiones de invalidez, vejez y muerte, d) que estipula que la afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en la ley y e) en el cual según la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 797 del año 2.003 se señala que el afiliado se puede pasar de un régimen a otro, siempre que haya permanecido como mínimo cinco años en el régimen del cual quiere trasladarse, y no podrá cambiar de régimen pensional cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad que le dé derecho a la pensión.

- Resaltó los artículos 271 y 272 ibídem, en los que se establecen las consecuencias de atentar contra el derecho de afiliación de forma libre y voluntaria, se advierte que cuando se impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral esta quedara sin efecto y podrá realizarse nuevamente, y

que el Sistema Integral de Seguridad Social no tendrá aplicación cuando menoscabe la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores, siendo aplicables los principios del derecho laboral establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.

- Destacó que la consecuencia por existir un vicio de consentimiento o una debida información o ausencia de esta al momento del traslado entre regímenes pensionales, es la ineficacia, como se señala en la sentencia 4360 de 2019 de la Sala Labora de la Corte Suprema de Justicia.

- Señaló que las administradoras de fondos de pensiones tienen la exigencia del cuidado de los intereses de quienes las elijan, el cual inicia desde las etapas previas y preparatorias para la formalización de la afiliación, durante la misma y cuando se tenga el derecho del disfrute de las prestaciones, dada la confiabilidad de quienes van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, invalidez o una eventual pensión de sobreviviente para sus beneficiarios.

- Que se entiende que dichas entidades tienen la obligación de prestar de forma eficiente, eficaz y adecuada la provisión del servicio público de pensiones con fundamento en el artículo 48 constitucional, desarrollado en los artículos 90 y siguientes de la ley 100 de 1993, así como en los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1.994, obligaciones que se deben cumplir de acuerdo a los establecido en el artículo 1603 del Código Civil y resaltó que las administradores de Fondo de pensiones tiene la carga probatoria para este caso, por lo que trajo a colación la sentencia del radicado 46292 del 18 de octubre de 2017 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia SL1452 del 2019.

- Recordó las etapas históricas del deber de información: deber de información necesaria, deber de asesoría y buen consejo y finalmente el deber de doble asesoría; el cual ha sido más riguroso con el transcurrir del tiempo e indicó que teniendo en cuenta que el traslado de la demandante se produjo en el mes de septiembre y octubre de 2.008, se resalta la primera de las etapas mencionadas, señalando que la misma inicia conforme a lo consagrado en el artículo 97 del Decreto 663 del 93, en donde se estableció que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realizan, y que en el artículo 11 del Decreto 692 de 1.994 se estableció la obligación de que siempre que se realice afiliación a fondo de pensiones o traslado del RPMPD al RAIS se hace necesario suscribir formulario de afiliación, pero como se dijo en sentencia SL1452 del año 2019, el simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación no es suficiente prueba para acreditar el cumplimiento del deber de información.

- Al descender al caso concreto, sostuvo que se observa que se aportó al plenario el formulario de afiliación o vinculación de la actora al Fondo de Pensiones y Cesantías HORIZONTE, hoy PORVENIR S.A., de fecha 1. ° de agosto de 2.008, con el que se trasladó del RPMPD al RAIS, en el cual se dejó plasmado que su traslado se dio de manera voluntaria y sin presiones, lo que no se encuentra debidamente acreditado con el acervo probatorio allegado y que en virtud de la carga de la prueba en cabeza de PORVENIR S.A., se tiene que esa entidad no aportó elemento probatorio que acreditara que en este caso en particular suministró a la demandante la información necesaria y relevante que llevara consigo la migración del régimen pensional bajo postulados claros y objetivos.

- Que del análisis del material probatorio se observa que el fondo de pensiones demandado únicamente allegó pruebas documentales que dan cuenta de los aportes efectuados por la demandante y el movimiento individual de los mismos, certificados de bonos pensionales, respuestas a derechos de petición y presentación de los mismos, formulario de afiliación e historia laboral, así como certificaciones de ASOFONDOS sobre la afiliación de la actora.

- Resaltó que la viabilidad del retorno al RPMPD no depende de situaciones particulares como lo dispuso la Corte Constitucional en sentencias C-789 de 2.002 y C-1024 DE 2.004 porque conforme a la jurisprudencia actual la violación al deber de información puede darse si la persona tiene o no un derecho consolidado, es o no beneficiaria del régimen de transición, o está cerca o no de cumplir la edad para pensionarse.

- Indico que por lo expuesto el traslado del RPMPD al RAIS de la actora no surte efectos y teniendo en cuenta que esto conlleva el retorno de la accionante al RPMPD en su estado original, se emiten las ordenes correspondientes para la devolución de todos los aportes que hubiere recibido la pasiva con motivo de la afiliación de la demandante y por el incumplimiento al deber de información que le asistía se le condena asumir de su propio patrimonio las mermas sufridas en el capital destinado para la pensión de vejez conforme a la sentencia con radicación 31989 del 09 de septiembre de 2.008 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

- Respecto a la prescripción alegada manifestó que no procede para esta clase de pretensión por ser inherente al derecho fundamental de seguridad social.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la parte demandada PORVENIR:

La apoderada de PORVENIR interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que la sentencia se debe revocar porque resulta en contravía del artículo 964 del Código Civil y de la Ley 100 de 1993, pues como fondo, por su actividad generó los rendimientos o frutos que se ordenan restituir y se le deben reconocer los gastos de administración y comisiones ya que son la retribución por los servicios prestados y se utilizan para cubrir los costos y gastos en la producción de frutos.
- Que, si bien es cierto, con la declaratoria de ineficacia de los actos jurídicos se busca retrotraer los efectos del mismo como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones como son las situaciones jurídicas consolidadas y los hechos consumados, y para este caso el fondo prestó sus servicios por todo el tiempo que la demandante estuvo afiliada al mismo y se lograron los rendimientos años tras año, por lo que resulta imposible dejar sin efecto los servicios prestados. Que los mismo sucede con el seguro previsional debido a que las aseguradoras ya prestaron sus servicios, lo que no se puede retrotraer, máxime cuando son terceros ajenos al proceso.
- Que de acuerdo a un reciente ejercicio efectuado por ASOFONDOS, los rendimientos en el RAIS corresponden aproximadamente al 74% del capital acumulado por un afiliado, por lo que al operar la declaración de nulidad y/o ineficacia del traslado no habría lugar a restituir los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, pues consecuencia de la nulidad declarada se debe presumir que nunca existió afiliación al RAIS y al no existir esta tales rendimientos no se hubieran generado, no obstante, entiende que dichos rendimientos son un beneficio obtenido por el afiliado y hacen parte de su cuenta de ahorro individual, pero no se entiende que se ordene devolver los gastos de administración que remuneran la gestión de esa entidad, toda vez que gracias a su buena administración el afiliado a incrementado su capital, por lo que de acuerdo al artículo 1746 del Código Civil se considera que frete los gastos de administración debe operar las restituciones mutuas o en su defecto abstenerse de ordenar su devolución, porque de mantenerse la decisión se afectaría de manera injustificada su patrimonio y se aumentaría de forma injusta el patrimonio de COLPENSIONES y de sus afiliados, y es deber se la judicatura velar por la protección patrimonial de las instituciones que conforman de seguridad social.

3.2 De la parte demandada COLPENSIONES:

La apoderada de COLPENSIONES interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que no es posible aceptar el traslado de la demandante teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por faltarle menos de 10 años para cumplir su edad de jubilación al momento de la admisión de la demanda.

- Que la declaratoria de nulidad no resulta procedente teniendo en cuenta que el traslado goza de plena validez, ya que la demandante lo realizó ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen establecido en la Ley 100 de 1.993 y según la Ley 1328 de 2.009, y esa entidad no intervino al momento en que se brindó información a la actora.
- Que la Corte Constitucional en sentencia C-1024 de 2004, resalta que el límite legal para trasladarse entre regímenes es razonable y admisible para el fin perseguido, que es evitar la descapitalización del régimen de prima media y defender la equidad del reconocimiento de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad.
- Reiteró la excepción de prescripción.

4. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES, se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de la sentencia, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

5. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• **PARTE DEMANDANTE:** No presentó alegatos de conclusión.

• **PARTE DEMANDADA:**

El apoderado de PORVENIR solicitó que se revoque la sentencia y se absuelva a su representada, teniendo en cuenta que para la fecha en que fue realizado el traslado, no existía disposición legal que estableciera de manera clara y precisa el mínimo y/o máximo de información que debía ser suministrada para considerarse que se brindó una debida asesoría; la cual efectivamente se brindó, pero de forma verbal, dejando constancia, de que el traslado se realizó de manera libre, espontánea y sin precisiones, pues la demandante suscribió el formulario exigido, luego la AFP cumplió con la carga de dejar la evidencia de que el traslado fue conforme a la ley.

Indicó que, revisadas las pruebas documentales allegadas por la parte demandante, se tiene que ninguna de ellas, desacreditan que se brindó una debida asesoría, conforme con las disposiciones y jurisprudencia de la época de suscripción del formulario de afiliación. Así mismo, que, para este caso, el acceso al derecho a pensión en el régimen de ahorro individual se tiene garantizado como lo evidencian las liquidaciones pensionales allegadas.

Señaló que no está de acuerdo en devolver los gastos de administración y otras erogaciones realizadas por la AFP, porque se relacionan con gastos ordinarios en la producción de la rentabilidad del capital. Igualmente, que la rentabilidad generada en la cuenta de ahorro individual se debe a la buena administración efectuada por la entidad administradora, por lo que al operar la declaración de nulidad y/o ineficacia del traslado, no habría lugar a restituir los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, no obstante, lo anterior, la sociedad administradora de pensiones entiende que dichos rendimientos son un beneficio obtenido por el afiliado y hacen parte de su cuenta individual, lo que no se entiende es que se ordene devolver los gastos de administración que remuneran la gestión del Fondo de Pensiones. Que, además, debe tenerse en cuenta que la administradora del RPM no efectuó ninguna gestión de administración en ese mismo período y podría constituirse en un enriquecimiento sin justa causa. Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el artículo 1746 del Código Civil, considera que frente a los gastos de administración debe operar las restituciones mutuas, y/o en su defecto, abstenerse de ordenar su devolución. También señaló, que las obligaciones que se generan como consecuencia del acuerdo de voluntades plasmado en el acto de afiliación al régimen de ahorro individual, se pueden asemejar con los efectos que produce un contrato de mandato.

La apoderada de COLPENSIONES solicita que se revoque la decisión, proferida en primera instancia y se absuelva a su representada de las pretensiones de la demandante, manifestando que esa entidad no está llamada a aceptar el traslado de la actora, teniendo en cuenta que ha actuado conforme a las normas legales vigentes para el caso, y que por vía administrativa no lo pudo reconocer por falta de requisitos legales, por cuanto a la fecha, el traslado efectuado al RAIS, en donde ha permanecido por más de 13 años, tiene plena validez y se cobija bajo el derecho a la libre elección de régimen que se encuentra consagrado en el artículo 13, literal B de la Ley 100 de 1993 y el artículo 48 de la Ley 1328 del 2009, aunado a que se encuentra vencida la oportunidad legal para trasladarse porque la demandante se encuentra del rango de edad para jubilarse, en virtud a que nació el día 10 de enero de 1.965, contando a la fecha con 57 años de edad.

Expresó que COLPENSIONES no tuvo ninguna intervención al momento de brindar información al demandante y que se debe probar que el traslado se efectuó bajo algún vicio del consentimiento de la demandante, lo que le corresponde a la A.F.P. PORVENIR S.A.

Indicó que reconocer la nulidad o ineficacia del traslado y trasladar la totalidad de los aportes a Colpensiones, atenta contra la estabilidad del sistema pensional que administra y transgrede la finalidad constitucional del término establecido en la norma para realizar dicho traslado. También señaló que la nulidad resultaría inoponible frente a terceros de buena fe, como es su caso, de donde se deriva la seguridad jurídica que pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, que tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional, en aras de evitar la descapitalización del fondo común del RPMPD y defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del RAIS. Reiteró la excepción de prescripción y se opuso a la condena en costas.

6. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

7. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala es el siguiente:

¿Si en este caso resultaba procedente declarar la nulidad y/o ineficacia del traslado de la señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA del RPMPD al RAIS a través de la A.F.P. HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A.?, y de ser procedente, ¿si la declaratoria de nulidad del traslado implica la devolución de aportes, de los gastos de administración y demás conceptos ordenados?

8. CONSIDERACIONES:

El eje central del presente litigio radica en determinar si el traslado de la señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, se dio con pleno cumplimiento al deber de información que radicaba en cabeza de la demandada Administradora de Fondo de Pensiones HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A., o si en su defecto, procedía la declaratoria de ineficacia y orden de devolución de los aportes, gastos de administración y demás conceptos a COLPENSIONES.

Al respecto el A Quo concluyó que era procedente declarar la ineficacia dado que desde la creación de las A.F.P. estas tenían el deber de suministrar información suficiente a los usuarios y a sus afiliados para que al momento de solicitar la afiliación a dichas entidades existiera un consentimiento informado que fuera realmente libre y voluntario, lo que no se demuestra con la sola suscripción del formulario, por lo que en ausencia de prueba que demostrara que efectivamente se brindó la debida información a la demandante, consideró que el traslado entre regímenes no surtió efecto, por lo que ordenó la devolución de los aportes que la actora hizo al RAIS, con sus frutos e intereses, debiendo asumir el régimen privado de pensiones las mermas que haya sufrido dicho capital.

Conclusión a la que se opone COLPENSIONES por estimar que la actora tenía capacidad para decidir su traslado, que ya paso la edad permitida para trasladarse de régimen pensional y que no es posible imponer esta consecuencia porque se genera una descapitalización del RPMPD.

A esta conclusión se opuso PORVENIR S.A. alegando que la sentencia se debe revocar pues se le deben reconocer los gastos de administración y comisiones, y deben operar las restituciones mutuas o en su defecto abstenerse de ordenar su devolución, pues estos son la retribución por los servicios prestados y se utilizan para cubrir los costos y gastos en la producción de frutos, y resulta imposible dejar sin efecto estos servicios, como igualmente sucede con el seguro previsional.

En esa medida, se tiene que lo pretendido por la parte actora es la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional por el incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora y con ello la constitución de un vicio del consentimiento; pretensión que tiene fundamento en que una de las características del sistema general de pensiones es la selección libre y voluntaria del régimen pensional por parte de los afiliados, conforme al artículo 13 de la ley 100 de 1993.

Para que un traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual adquiera plena determinación, dicha actuación debe contener un pleno acatamiento de este deber para que de esa decisión se pueda predicar la libertad y voluntariedad exigida, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia sentada desde el año 2008 ha determinado que previo a su decisión, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar, porque de no ser así, bien por brindarse una incorrecta u omitirse la relevante, puede entenderse que existe un error que vicia su voluntad. En otras palabras, es posible predicar la ineficacia de la vinculación al RAIS por un vicio en el consentimiento denominado error, que hace imposible que la selección del nuevo régimen sea soberana y potestativa

Sobre la procedibilidad de estas pretensiones, la jurisprudencia en providencias como SL19447 de 2017, ha señalado que existirá ineficacia de la afiliación cuando i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados; providencia que ha sido reiterada en SL2611 del 1 de julio de 2020.

En decisión SL1452 del 3 de abril de 2019 (Rad. 68.852 y M.P. CLARA DUEÑAS) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realiza un profundo análisis del presente problema jurídico, señalando que la prosperidad de la pretensión de nulidad de afiliación a una AFP por incumplimiento del deber de información no depende de que la persona tenga una expectativa pensional ni se trata de una imposición novedosa e inexigible para traslados anteriores al año 2009, puesto que **el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación.**

Cabe recordar que, el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia, dentro de las cuales se entienden: la transparencia, la vigilancia, y el deber de información. Ello, según ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las responsabilidades que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación.

Al respecto la sentencia SL1452 de 2019 hace un recuento de las etapas de este deber de información, reiterando que surge con el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que sus decisiones previas identifican que inclusive en el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 1° del artículo 97 impone a las entidades el deber de suministrar la información necesaria a los usuarios para las operaciones que realicen y que ello implica entender la transparencia como “una

norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro”.

Prosigue la Corte identificando las normativas de diversa índole que se han proferido desde entonces para garantizar el cumplimiento de este deber a favor de los afiliados, imponiendo 3 puntos fundamentales:

(i) La constatación del deber de información es ineludible, pues si desde el principio las AFP tenían el deber de brindar información con el paso del tiempo este grado de exigencia se ha intensificado y los jueces tienen el deber *“de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”.*

(ii) En desarrollo de lo anterior, agrega la Corte que *“El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente”* de manera que existe la necesidad de un consentimiento informado, pues *“la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, **no son suficientes para dar por demostrado el deber de información**”* dado que *“el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado”.*

(iii) Por ende, afirma la Corte que la carga de la prueba debe invertirse en favor del afiliado puesto que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”*, de manera que *“si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo”* el afiliado no puede demostrar un supuesto negativo como sería el que no recibió la información y de allí que es la AFP quien debe demostrar que suministró la asesoría en forma correcta.

De ahí que, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son estos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual: (i) las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, (ii) las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y (iii) las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Estos preceptos han venido siendo reiterados, como puede verse en providencia SL587 de 2021 donde la Corte resalta que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”* y por lo tanto *“si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se vinculó, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede acreditarse materialmente por quien lo invoca”*, máxime cuando el deber de información *“es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones y su ejercicio debe ser de tal diligencia que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión”*, indicando que la inversión de la

carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia y tampoco resultaría razonable invertirla contra la parte débil de la relación contractual.

Aplicando estos preceptos legales y jurisprudenciales al caso concreto, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad está en cabeza de la A.F.P. PORVENIR S.A.; pues argumenta la demandante que su traslado no estuvo precedido de la suficiente ilustración, por lo que atendiendo a la carga de la prueba mencionada, se hace necesario auscultar el material probatorio a efectos de determinar si por el contrario, la información fue correcta, oportuna y suficiente.

La demandante manifestó que estuvo afiliado al ISS desde septiembre de 2.001 y que se trasladó al RAIS en septiembre de 2.008, pero que su decisión no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte de la A.F.P. HORIZONTE S.A.

Del expediente se puede evidenciar que la actora se encontraba afiliada al RPMPD desde el 02 de julio de 2.001 y el 01 de octubre de 2.008 se trasladó al RAIS con afiliación a la A.F.P. HORIZONTE S.A. que se realizó con solicitud de vinculación o traslado N° 0993919 del 1.º de agosto del mismo año.

Lo primero a destacar, es que la administradora de fondos de pensiones HORIZONTE S.A. conforma hoy la AFP PORVENIR S.A.¹; por lo tanto, no existe duda sobre la legitimación en la causa por pasiva, al corresponder cualquier responsabilidad sobre la actual afiliación de la actora a la aquí demandada.

Se resalta que aparte del formulario de afiliación a PORVENIR S.A. de fecha 01/08/2008, no obran otras pruebas al plenario sobre lo acontecido al momento del traslado de régimen pensional, es necesario reiterar que la carga de la prueba no recae para estos asuntos en la demandante, es decir, la señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA no se encontraba en la obligación de demostrar con grado de certeza que se le indujo a error o se vició su consentimiento al suscribir el formulario para alcanzar sus pretensiones; pues se ha asignado a la Administradora de Pensiones el deber de demostrarle al operador judicial que garantizó el deber de información y expuso las consecuencias que conllevaba el cambio: como identificar que la pensión mínima dependía de un ahorro determinado o las estimaciones sobre la diferencia en la forma de estructurar el valor final de la mesada pensional para que tuviera idea sobre los resultados de su traslado, no siendo dable tampoco demostrar un perjuicio para acceder a la pretensión.

Fluye del relato probatorio, que no obra prueba alguna que dé cuenta si PORVENIR S.A. brindó a la afiliado previo a su traslado, toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; esto es, que antes de octubre de 2.008, momento en que se efectuó el traslado, se le haya indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual; que si no se completaba el suficiente capital para obtener por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del SMLMV), debía seguir cotizando o aceptar la devolución de saldos; y que existen diferentes modalidades pensionales. Tampoco obra prueba de la que pueda desprenderse que a la fecha indicada se hubieren efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones y otras tantas observaciones respecto a los riesgos que asumía la referida con su traslado, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario.

De acuerdo con lo explicado, en su momento PORVENIR S.A., no actuó cumpliendo con su deber de información, pues conforme se expuso tenía la carga de acreditar que así lo hizo, y no aportó documento o prueba alguna que lo acreditara, y con las pruebas aportadas al proceso no se infiere con certeza que la situación pensional particular del actor haya sido estudiada y ante ello se puede concluir que la demandada no logró acreditar que la activa hubiere recibido la información del traslado bajo los siguientes parámetros: información necesaria, completa, eficiente, suficiente, eficaz, cierta, oportuna y comprensible de las reales implicaciones que conllevaría el traslado y las posibles consecuencias futuras. Tampoco allegó prueba sobre los datos proporcionados a la señora ISABEL BUITRAGO GAMBOA, donde

¹ Ver reportes en prensa:

<https://www.semana.com/empresas/articulo/fusion-entre-porvenir-horizonte/190254/>

consten los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Respecto a la suficiencia del formulario de afiliación, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL2917 de 2020 señaló que *“si bien la suscripción del formulario de afiliación al régimen de ahorro individual por parte de la accionante, pudo haber sido libre y voluntaria, por sí sola no hace desaparecer la omisión del deber de informar de manera diáfana, sobre las incidencias del cambio de régimen”*; por lo que este elemento probatorio pese a las formalidades que se suscitaba es insuficiente para enervar las pretensiones.

En atención a los lineamientos jurisprudenciales citados y con sustento en las pruebas analizadas, la Sala concluye que en el presente caso, sí se presentó un vicio en el consentimiento del afiliado, traducido en un engaño por la *“Falta del deber de información en un asunto neurálgico para una persona, como es el cambio de régimen pensional”*, que como señala el artículo 1510 del Código Civil, lo indujo en error de hecho sobre el objeto o identidad de la cosa específica de que se trata, al tomar la decisión de su traslado al régimen de ahorro individual y de esa manera los argumentos iniciales del recurso de apelación de ambas demandadas son desestimados, pues para enervar la decisión debía enfocarse la parte demandada en un ejercicio adecuado de la carga de la prueba que le correspondía, respecto de un deber legal que existe desde la concepción del Sistema General de Seguridad Social.

Por otra parte, sobre la prescripción que podría beneficiar a COLPENSIONES en virtud de la consulta, se advierte que, al tratarse el presente asunto de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la Seguridad Social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su íntegro reconocimiento. Por lo tanto, la acción encaminada a lograr la ineficacia de la afiliación en los fondos privados por cambio de régimen pensional no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales del afiliado.

Así lo ha expresado en diversos pronunciamientos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que concluye por ejemplo en providencia SL361 de 2019 que *“la acción encaminada a lograr la nulidad de la afiliación en fondos privados por cambio de régimen no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada”*; por lo que esta excepción no está llamada a prosperar.

Abordando lo correspondiente a las restituciones contenidas en la condena, específicamente la devolución de los descuentos realizados por la AFP por gastos de administración a la cuenta de la actora, se ha concluido que PORVENIR S.A. incumplió con su deber de información sobre las incidencias, ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio al RAIS efectuado por la demandante en el año 2.008, por lo que, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración incluyen que esta realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN a COLPENSIONES, tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral, donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló en lo pertinente lo siguiente: *«...las prestaciones acaecidas no son plenamente retroactivas...»*, por lo que, al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen se encuentra nulo por vicio del consentimiento, PORVENIR S.A. deberá devolver completamente todas las prestaciones que la afiliada hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, así como los valores descontados por seguro previsional, los cuáles están en custodia de las administradoras y no de las aseguradoras, para quienes la presente condena no se hace extensible por no tener responsabilidad alguna en las pretensiones o el objeto del litigio, sin perjuicio de que se puedan adelantar acciones futuras para determinar la procedibilidad de recobros.

Esto ha sido recientemente reiterado por la Sala de Casación Laboral en proveído SL2877 de 2020, donde se dijo:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS **debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante** en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, **incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.***

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989).

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que PORVENIR S.A. y PORVENIR S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar **los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.**”*

Lo anterior permite desestimar el argumento de la apoderada de COLPENSIONES sobre que aceptar al actor desequilibraría la financiación del régimen de prima media; pues los aportes deben ser devueltos a dicha entidad a plenitud, como si se hubieran realizado en igualdad de condiciones y por lo tanto conformando íntegramente el mismo capital pensional que hubiera generado la mesada de haber permanecido desde 2.008 en esa entidad.

Así mismo, ha señalado la Corte desde providencia SL1688 de 2019 que “a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”; por ende, no es posible señalar que la permanencia en la entidad por el actor pueda entenderse como un acto de relacionamiento que sanee la irregularidad que avala la pretensión.

Respecto de los demás argumentos de los apelantes sobre la imposibilidad de devolver descuentos legalmente realizados en su momento, advierte la Sala de Casación Laboral en providencia SL3199 de 2021 reiterada en SL3895 de 2021:

“como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con

prestación definida administrado por Colpensiones, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.”

De lo anterior se desprende, que es la AFP quien, al predeterminar la ineficacia, está llamada a responder de su patrimonio por todas las consecuencias que de ello se deriven.

Conforme a lo anterior, la Sala deberá confirmar la decisión adoptada por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta en sentencia del 03 de noviembre de 2021. Finalmente, se condenará en costas de segunda instancia a las demandadas PORVENIR S.A, y COLPENSIONES, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fíjense como agencias en derecho a favor del actor, por la segunda instancia, la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

9. DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 03 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a las demandadas PORVENIR S.A y COLPENSIONES. Fijar como agencias en derecho a favor de la demandante la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO : ORDINARIO EN APELACIÓN
RAD. ÚNICO : 54-001-31-05-002-2020-00053 01
P.T. : 19732
DEMANDANTE : NELLY BELTRÁN RONDEROS
DEMANDADO : MARTHA ARANA DÍAZ y JANETH ARANA DÍAZ

MAGISTRADA PONENTE:
DRA. NIDIAN BÈLEN QUINTERO GELVES

Realizado el examen preliminar, se admite el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la sentencia del 22 de febrero de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso de la referencia,

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

NIDIAM BÈLEN QUINTERO GELVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 1 de abril de 2022

Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-003-2015-00257-00
RADICADO INTERNO:	18.844
DEMANDANTE:	LUIS DOMINGO PICO QUINTERO Y OTROS
DEMANDADO:	CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER

MAGISTRADA SUSTANCIADORA:
DR. NIDIAM BÉLEN QUINTERO GELVES

En término oportuno dentro del proceso ordinario seguido por LUIS DOMINGO PICO QUINTERO, MIGUEL ANGEL YARURO BOADA, OSCAR BAUTISTA QUINTERO, ADRIANO DE JESÚS GUERRERO MANZANO, CARLOS ALBERTO SILVA, EUSEBIO CASTRO VELASQUEZ, JAVIER C. CONSUEGRA MORA, TERESA DE JESUS CARRASCAL DE ROJAS, MARCO ELI SÁNCHEZ SANTIAGO, LILIA ROSA ARIAS HERNANDEZ, EFREN AVENDAÑO PEÑA, MARIO RANGEL YAÑEZ, ELIA M. DEL CARMEN LATORRE ORDOÑEZ, MANUEL MERCHAN DUQUE, JOSÉ DOLORES LEAL SANDOVAL, HERNANDO A. GALVIZ GALVIZ, OCTAVIO BONILLA LIZCANO, ORLANDO RANGEL ORTIZ, IVÁN HUMBERTO ARAMBULA RAMÍREZ, JORGE E. GONZALEZ RUBACETE, JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN, CARMEN L. HERNANDEZ DE RAMÍREZ, IVÁN LEAL VEGA, PEDRO ALONSO PEDRAZA GÓMEZ, CARMEN A. GUTIERREZ DE SUAREZ, LUIS RAÚL MORA SANDOVAL, GERMAN ALVAREZ MOLINA, JORGE E. NIÑO TOSCANO, GERMAN ARDILA MENESES, NUBIA BOADA DUEÑAS, RAMÓN A. URQUIJO LOBO, RAFAEL ENRIQUE ARAMBULA RAMÍREZ, GLADYS JAIMES MALDONADO, FANNY ZAFRA CALDERÓN, JOSÉ EDRULFO RODRIGUEZ SOLANO, HÉCTOR ARMANDO PAEZ SARMIENTO, CARLOS JESUS SANCHEZ CLAVIJO, OTILIO AREVALO ROPERO, CESAR AUGUSTO MENDOZA GUZMAN, ELVIRA CARVAJALINO, JAIME ALONSO LEAL TRIGOS, LIBARDO ENRIQUE DAZA PINEDA, RODRIGO MARTINEZ DUARTE, JESUS ENRIQUE PADILLA ALFONSO, FRANCISCO JOSÉ

PÉREZ ARÉVALO, LUIS DEL CARMEN ROPERO MANOSALVA, MANUEL DOLORES BECERRA GENTIL, JAIME ALIRIO LAZARO MEZA, MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN, EDGAR ALFONSO SANTOS HIDALGO, SUSANA YANET PAEZ PACHECO, LUZ MARINA CÁRDENAS DIAZ, LUIS FRANCISCO RAMIREZ, MARINA ELISA CARVAJAL GARCÍA, RAMÓN ALBERTO CHINCHILLA ARENAS, JOSÉ MIGUEL GARCIA CELIS, JEÚS EMIRO GENTIL PINEDA, GEORGINA GUERRERO, MARIA CELINA SANCHEZ DE GUERRERO y CIRO ALFONSO TORRES ORTEGA en contra de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P., el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Sala en el proceso de la referencia.

La Ley Procesal Laboral establece que la cuantía para la viabilidad del recurso de casación, debe ser superior a los ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2020 equivalía a \$877.803 y por ende el interés para casación asciende a \$105.336.360.

A su vez la H. Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el valor del interés para recurrir en casación de la parte demandante, si el juez colegiado confirma íntegramente la absolución dispuesta por el A quo, no será otro que el valor de las peticiones impetradas en el escrito inaugural del proceso y que a la postre, desde luego, les fueron negadas con la sentencia recurrida.

En este caso, lo pretendido principalmente por el actor era que se reliquidara la pensión de jubilación reconocida por la demandada a partir de la indexación de su primera mesada, se ordene el pago de las diferencias a que haya lugar desde la fecha de reconocimiento y el pago de intereses moratorios.

Al resolver las decisiones de instancia, se resolvió que siguiendo la fórmula e indicaciones ordinarias de la indexación de primera mesada no había lugar a reajuste alguno; sin embargo, en el curso del proceso el apoderado de los actores alegó que el cálculo demandado era diferente y para ejemplificar aportó una serie de liquidaciones para estimar el valor que estima debía reajustarse, de la siguiente manera:

Nº	DEMANDANTES	Valor mesada reajustada	de Diferencia	Fecha de causación	Interés recurrir	para
1	LUIS DOMINGO PICO	\$521.884,04	\$96.189,29	30/12/1994	\$111.347.122,06	

	QUINTERO				
2	MIGUEL ANGEL YARURO BOADA	\$1.716.468,77	\$139.164,02	01/12/2000	\$214.779.265,18
3	OSCAR BAUTISTA QUINTERO	\$2.333.005,36	\$92.144,36	19/04/2006	\$67.268.001,97
4	ADRIANO DE JESÚS GUERRERO MANZANO	\$1.160.631,63	\$205.787,88	01/10/1996	\$162.665.148,92
5	CARLOS ALBERTO SILVA	\$2.273.926,73	\$94.031,73	01/12/2006	\$64.354.281,74
6	EUSEBIO CASTRO VELASQUEZ	\$4.041.083,81	\$218.932,81	02/05/2008	\$118.100.720,36
7	JAVIER C. CONSUEGRA MORA	\$1.241.062,08	\$82.434,08	25/10/2003	\$84.039.959,75
8	TERESA DE JESUS CARRASCAL DE ROJAS	No se aportó liquidación			
9	MARCO ELI SÁNCHEZ SANTIAGO	\$739.986,25	\$138.791,50	01/07/1994	\$160.662.731,70
10	LILIA ROSA ARIAS HERNANDEZ sustituta de JUAN TOMÁS CORTÉS HERNÁNDEZ	\$1.322.747,45	\$206.757,20	09/05/1997	\$134.367.630,08
11	EFREN AVENDAÑO PEÑA	\$2.457.811,77	\$101.635,77	01/12/2006	\$69.558.403,07
12	MARIO RANGEL YAÑEZ	\$2.653.201,40	\$119.696,40	29/09/2006	\$82.973.113,66
13	ELIA M. DEL CARMEN LATORRE ORDOÑEZ	\$1.640.883,08	\$108.991,08	25/10/2003	\$110.677.104,45
14	MANUEL MERCHAN DUQUE	\$3.224.638,23	\$174.300,23	30/05/2009	\$77.895.551,86
15	JOSÉ DOLORES LEAL SANDOVAL	No se aportó liquidación			
16	HERNANDO A. GALVIZ GALVIZ	\$2.913.891,08	\$193.547,08	16/10/2003	\$195.488.277,38
17	OCTAVIO BONILLA LIZCANO	\$2.143.985,42	\$157.522,42	05/07/2001	\$208.313.616,93
18	ORLANDO RANGEL ORTIZ	\$2.758.860,73	\$160.758,73	16/02/2004	\$150.760.964,48
19	IVÁN HUMBERTO ARAMBULA RAMÍREZ	\$708.336,02	\$129.514,52	30/11/1994	\$149.923.853,97
20	JORGE E. GONZALEZ RUBACETE	\$2.147.932,20	\$102.993,20	17/06/2005	\$85.171.172,51
21	JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN	\$1.234.896,75	\$71.954,75	01/08/2004	\$65.462.358,77
22	CARMEN L. DE HERNANDEZ RAMÍREZ sustituta de NICANOR RAMÍREZ	\$176.404,61	\$37.547,36	31/03/1989	\$141.160.136,04
23	IVÁN LEAL VEGA	\$2.097.999,31	\$185.082,31	26/07/2000	\$278.736.151,94
24	PEDRO ALONSO PEDRAZA GÓMEZ	\$3.043.356,52	\$169.507,52	22/11/2004	\$151.089.158,59
25	CARMEN A. DE GUTIERREZ SUAREZ sustituta de FRANCISCO ELEAZAR SÚAREZ RAMIREZ	No se aportó liquidación			
26	LUIS RAÚL MORA SANDOVAL	\$279.241,62	\$53.391,87	01/07/1989	\$200.727.924,21
27	GERMAN ALVAREZ MOLINA	\$2.340.691,84	\$192.994,09	29/11/2000	\$286.396.553,53
28	JORGE E. NIÑO TOSCANO	\$1.199.776,58	\$212.347,58	01/08/1995	\$200.513.929,65
29	GERMAN ARDILA MENESES	\$1.940.445,69	\$128.888,69	25/10/2003	\$130.634.761,49
30	NUBIA BOADA DUEÑAS	\$2.204.795,81	\$113.198,81	19/12/2007	\$68.088.802,21
31	RAMÓN A. URQUIJO LOBO	\$1.880.771,22	\$110.615,22	01/07/2002	\$129.066.944,3
32	RAFAEL ENRIQUE ARAMBULA RAMÍREZ	\$288.387,61	\$55.140,61	01/07/1989	\$207.302.351,19
33	GLADYS JAIMES MALDONADO sustituta de CIRO ALFONSO SILVA	\$124.577,39	\$23.698,89	30/12/1985	\$209.668.885,11
34	FANNY ZAFRA CALDERÓN	\$1.246.423,13	\$97.563,13	22/01/2001	\$132.265.084,97
35	JOSÉ EDRULFO RODRIGUEZ SOLANO	\$3.072.627,08	\$166.078,08	30/05/2009	\$74.221.036,28
36	HÉCTOR ARMANDO PAEZ SARMIENTO	\$3.044.204,74	\$138.015,74	05/06/2009	\$61.267.515,27
37	CARLOS JESUS SANCHEZ CLAVIJO	\$599.136,78	\$109.537,53	30/12/1993	\$155.455.356,57

38	OTILIO AREVALO ROPERO	\$3.219.209,32	\$140.890,32	13/10/2006	\$97.594.217,57
39	CESAR AUGUSTO MENDOZA GUZMAN	\$2.739.191,46	\$141.089,46	02/02/2005	\$117.861.954,02
40	ELVIRA CARVAJALINO sustituta de CARLOS DANIEL PAREDES	\$1.548.067,69	\$270.092,44	12/09/1996	\$213.494.725,61
41	JAIME ALONSO LEAL TRIGOS	\$3.119.921,69	\$223.867,69	11/12/2008	\$113.555.222,78
42	LIBARDO ENRIQUE DAZA PINEDA	\$2.407.607,61	\$159.918,61	01/10/2003	\$161.758.323,64
43	RODRIGO MARTINEZ DUARTE	\$2.833.005,21	\$203.280,21	11/06/2008	\$111.705.287,07
44	JESUS ENRIQUE PADILLA ALFONSO	\$2.010.356,71	\$162.991,21	01/12/2000	\$241.873.316,17
45	FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ARÉVALO	\$2.838.516,74	\$208.791,74	12/11/2008	\$105.908.059,13
46	LUIS DEL CARMEN ROPERO MANOSALVA	\$4.108.969,59	\$159.496,59	28/06/2006	\$113.983.951,08
47	MANUEL DOLORES BECERRA GENTIL	\$2.087.191,58	\$122.755,58	05/07/2002	\$143.232.445,19
48	JAIME ALIRIO LAZARO MEZA	\$2.791.426,95	\$108.353,95	20/06/2006	\$77.456.626,2
49	MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN sustituta de MARCOS PUENTES GONZÁLEZ	\$219.151,76	\$52.629,26	17/07/1991	\$118.527.521,92
50	EDGAR ALFONSO SANTOS HIDALGO	\$3.237.828,04	\$276.042,04	23/11/1999	\$130.627.834,61
51	SUSANA YANET PAEZ PACHECO	\$2.311.925,35	\$92.887,35	30/11/2006	\$63.573.867,27
52	LUZ MARINA CÁRDENAS DIAZ sustituta de ARMANDO RANGEL	\$678.805,70	\$118.150,70	01/09/1993	\$167.679.143,37
53	LUIS FRANCISCO RAMIREZ	\$1.198.477,90	\$181.097,65	29/11/1997	\$117.691.969,35
54	MARINA ELISA CARVAJAL GARCÍA	\$1.537.229,15	\$102.106,15	01/10/2003	\$104.095.259,7
55	RAMÓN ALBERTO CHINCHILLA ARENAS	\$2.516.008,38	\$110.114,38	17/10/2006	\$76.275.825,4
56	JOSÉ MIGUEL GARCIA CELIS	\$3.259.114,01	\$126.508,01	01/12/2006	\$86.580.690,49
57	JEÚS EMIRO GENTIL PINEDA	\$4.369.473,36	\$248.643,36	05/07/2007	\$153.314.215,16
58	GEORGINA GUERRERO sustituta de EMILIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ	\$86.130,14	\$20.684,14	03/08/1991	\$205.048.438,9
59	MARIA CELINA SANCHEZ DE GUERRERO sustituta de OSCAR ANTONIO GUERRERO	\$55.873,81	\$11.690,65	30/12/1981	\$223.596.681,25
60	CIRO ALFONSO TORRES ORTEGA	\$3.088.048,45	\$81.088,45	25/11/2009	\$34.215.390,39

La Sala, conforme a los cálculos realizados para cada demandante, considera que es procedente conceder el recurso de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante respecto de los demandantes LUIS DOMINGO PICO QUINTERO, MIGUEL ANGEL YARURO BOADA, ADRIANO DE JESÚS GUERRERO MANZANO, EUSEBIO CASTRO VELASQUEZ, MARCO ELI SÁNCHEZ SANTIAGO, LILIA ROSA ARIAS HERNANDEZ, ELIA M. DEL CARMEN LATORRE ORDOÑEZ, HERNANDO A. GALVIZ GALVIZ, OCTAVIO BONILLA LIZCANO, ORLANDO RANGEL ORTIZ, IVÁN HUMBERTO ARAMBULA RAMÍREZ, CARMEN L. HERNANDEZ DE RAMÍREZ, IVÁN LEAL VEGA, PEDRO ALONSO PEDRAZA GÓMEZ, LUIS RAÚL MORA SANDOVAL, GERMAN ALVAREZ MOLINA,

JORGE E. NIÑO TOSCANO, GERMAN ARDILA MENESES, RAMÓN A. URQUIJO LOBO, RAFAEL ENRIQUE ARAMBULA RAMÍREZ, GLADYS JAIMES MALDONADO, FANNY ZAFRA CALDERÓN, CARLOS JESUS SANCHEZ CLAVIJO, CESAR AUGUSTO MENDOZA GUZMAN, ELVIRA CARVAJALINO, JAIME ALONSO LEAL TRIGOS, LIBARDO ENRIQUE DAZA PINEDA, RODRIGO MARTINEZ DUARTE, JESUS ENRIQUE PADILLA ALFONSO, FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ARÉVALO, LUIS DEL CARMEN ROPERO MANOSALVA, MANUEL DOLORES BECERRA GENTIL, MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN, EDGAR ALFONSO SANTOS HIDALGO, LUZ MARINA CÁRDENAS DIAZ, LUIS FRANCISCO RAMIREZ, JEÚS EMIRO GENTIL PINEDA, GEORGINA GUERRERO y MARIA CELINA SANCHEZ DE GUERRERO, por cuanto las pretensiones negadas superan el límite legal y se denegará respecto de los restantes dado que sus pretensiones no superan el límite para recurrir en casación.

Por lo expuesto la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior,

R E S U E L V E

PRIMERO: CONCEDER ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el recurso extraordinario de Casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante respecto de LUIS DOMINGO PICO QUINTERO, MIGUEL ANGEL YARURO BOADA, ADRIANO DE JESÚS GUERRERO MANZANO, EUSEBIO CASTRO VELASQUEZ, MARCO ELI SÁNCHEZ SANTIAGO, LILIA ROSA ARIAS HERNANDEZ, ELIA M. DEL CARMEN LATORRE ORDOÑEZ, HERNANDO A. GALVIZ GALVIZ, OCTAVIO BONILLA LIZCANO, ORLANDO RANGEL ORTIZ, IVÁN HUMBERTO ARAMBULA RAMÍREZ, CARMEN L. HERNANDEZ DE RAMÍREZ, IVÁN LEAL VEGA, PEDRO ALONSO PEDRAZA GÓMEZ, LUIS RAÚL MORA SANDOVAL, GERMAN ALVAREZ MOLINA, JORGE E. NIÑO TOSCANO, GERMAN ARDILA MENESES, RAMÓN A. URQUIJO LOBO, RAFAEL ENRIQUE ARAMBULA RAMÍREZ, GLADYS JAIMES MALDONADO, FANNY ZAFRA CALDERÓN, CARLOS JESUS SANCHEZ CLAVIJO, CESAR AUGUSTO MENDOZA GUZMAN, ELVIRA CARVAJALINO, JAIME ALONSO LEAL TRIGOS, LIBARDO ENRIQUE DAZA PINEDA, RODRIGO MARTINEZ DUARTE, JESUS ENRIQUE PADILLA ALFONSO, FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ARÉVALO, LUIS DEL CARMEN ROPERO MANOSALVA, MANUEL DOLORES BECERRA GENTIL, MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN, EDGAR ALFONSO SANTOS HIDALGO, LUZ MARINA CÁRDENAS DIAZ, LUIS FRANCISCO RAMIREZ, JEÚS EMIRO

GENTIL PINEDA, GEORGINA GUERRERO y MARIA CELINA SANCHEZ DE GUERRERO, contra la sentencia dictada el día veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: NEGAR la concesión del recurso de casación a los demandantes OSCAR BAUTISTA QUINTERO, CARLOS ALBERTO SILVA, JAVIER C. CONSUEGRA MORA, TERESA DE JESUS CARRASCAL DE ROJAS, EFREN AVENDAÑO PEÑA, MARIO RANGEL YAÑEZ, MANUEL MERCHAN DUQUE, JOSÉ DOLORES LEAL SANDOVAL, JORGE E. GONZALEZ RUBACETE, JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN, CARMEN A. GUTIERREZ DE SUAREZ, NUBIA BOADA DUEÑAS, JOSÉ EDRULFO RODRIGUEZ SOLANO, HÉCTOR ARMANDO PAEZ SARMIENTO, OTILIO AREVALO ROPERO, JAIME ALIRIO LAZARO MEZA, SUSANA YANET PAEZ PACHECO, MARINA ELISA CARVAJAL GARCÍA, RAMÓN ALBERTO CHINCHILLA ARENAS, JOSÉ MIGUEL GARCIA CELIS y CIRO ALFONSO TORRES ORTEGA, por no superar la cuantía para recurrir.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto, remítase el expediente a la mencionada Superioridad, dejándose las debidas constancias de su salida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

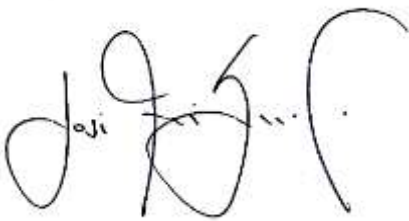


**NIDIAM BELEN QUINTERO GELVEZ
MAGISTRADA**



ELVER NARANJO

MAGISTRADO



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8
a.m. Cúcuta, 1 de abril de 2022



Secretario

ANEXO – LIQUIDACIONES

1. LUIS DOMINGO PICO QUINTERO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1994	\$ 96.189,29	22,59%	0,03	\$ 2.885,68
1995	\$ 117.918,45	19,46%	14	\$ 1.650.858,31
1996	\$ 140.865,38	21,63%	14	\$ 1.972.115,34
1997	\$ 171.334,56	17,68%	14	\$ 2.398.683,88
1998	\$ 201.626,51	16,70%	14	\$ 2.822.771,19
1999	\$ 235.298,14	9,23%	14	\$ 3.294.173,98
2000	\$ 257.016,16	8,75%	14	\$ 3.598.226,24
2001	\$ 279.505,07	7,65%	14	\$ 3.913.071,04
2002	\$ 300.887,21	6,99%	14	\$ 4.212.420,97
2003	\$ 321.919,23	6,49%	14	\$ 4.506.869,20
2004	\$ 342.811,79	5,50%	14	\$ 4.799.365,01
2005	\$ 361.666,43	4,85%	14	\$ 5.063.330,08
2006	\$ 379.207,26	4,48%	14	\$ 5.308.901,59
2007	\$ 396.195,74	5,69%	14	\$ 5.546.740,38
2008	\$ 418.739,28	7,67%	14	\$ 5.862.349,91
2009	\$ 450.856,58	2,00%	14	\$ 6.311.992,15
2010	\$ 459.873,71	3,17%	14	\$ 6.438.231,99
2011	\$ 474.451,71	3,73%	14	\$ 6.642.323,95
2012	\$ 492.148,76	2,44%	14	\$ 6.890.082,63
2013	\$ 504.157,19	1,94%	14	\$ 7.058.200,65
2014	\$ 513.937,84	3,66%	14	\$ 7.195.129,74
2015	\$ 532.747,96	6,77%	14	\$ 7.458.471,49
2016	\$ 568.815,00	5,75%	14	\$ 7.963.410,01
2017	\$ 601.521,86	4,09%	14	\$ 8.421.306,08
2018	\$ 626.124,11	3,18%	14	\$ 8.765.737,50
2019	\$ 646.034,85	3,80%	14	\$ 9.044.487,95
2020	\$ 670.584,18	1,61%	11	\$ 7.376.425,96

				\$ 111.347.122,06

2. MIGUEL ANGEL YARURO BOADA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2000	\$ 139.164,02	8,75%	1	\$ 139.164,02
2001	\$ 151.340,87	7,65%	14	\$ 2.118.772,20
2002	\$ 162.918,45	6,99%	14	\$ 2.280.858,28
2003	\$ 174.306,45	6,49%	14	\$ 2.440.290,27
2004	\$ 185.618,94	5,50%	14	\$ 2.598.665,11
2005	\$ 195.827,98	4,85%	14	\$ 2.741.591,69
2006	\$ 205.325,63	4,48%	14	\$ 2.874.558,89
2007	\$ 214.524,22	5,69%	14	\$ 3.003.339,13
2008	\$ 226.730,65	7,67%	14	\$ 3.174.229,12
2009	\$ 244.120,89	2,00%	14	\$ 3.417.692,50
2010	\$ 249.003,31	3,17%	14	\$ 3.486.046,35
2011	\$ 256.896,72	3,73%	14	\$ 3.596.554,02
2012	\$ 266.478,96	2,44%	14	\$ 3.730.705,48
2013	\$ 272.981,05	1,94%	14	\$ 3.821.734,69
2014	\$ 278.276,88	3,66%	14	\$ 3.895.876,35
2015	\$ 288.461,82	6,77%	14	\$ 4.038.465,42
2016	\$ 307.990,68	5,75%	14	\$ 4.311.869,53
2017	\$ 325.700,14	4,09%	14	\$ 4.559.802,03
2018	\$ 339.021,28	3,18%	14	\$ 4.746.297,93
2019	\$ 349.802,16	3,80%	14	\$ 4.897.230,21
2020	\$ 363.094,64	1,61%	11	\$ 3.994.041,04
				\$ 60.290.034,37

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2000	12	\$ 139.164	2,02%	239	\$ 671.855,96	\$ 671.855,96
2001	01	\$ 151.341	2,02%	238	\$ 727.586,38	\$ 1.399.442,33
2001	02	\$ 151.341	2,02%	237	\$ 724.529,29	\$ 2.123.971,62
2001	03	\$ 151.341	2,02%	236	\$ 721.472,20	\$ 2.845.443,83
2001	04	\$ 151.341	2,02%	235	\$ 718.415,12	\$ 3.563.858,95
2001	05	\$ 151.341	2,02%	234	\$ 715.358,03	\$ 4.279.216,98
2001	06	\$ 151.341	2,02%	233	\$ 712.300,95	\$ 4.991.517,93
2001	M13	\$ 151.341	2,02%	233	\$ 712.300,95	\$ 5.703.818,87
2001	07	\$ 151.341	2,02%	232	\$ 709.243,86	\$ 6.413.062,73
2001	08	\$ 151.341	2,02%	231	\$ 706.186,78	\$ 7.119.249,51
2001	09	\$ 151.341	2,02%	230	\$ 703.129,69	\$ 7.822.379,20
2001	10	\$ 151.341	2,02%	229	\$ 700.072,60	\$ 8.522.451,80
2001	11	\$ 151.341	2,02%	228	\$ 697.015,52	\$ 9.219.467,32
2001	12	\$ 151.341	2,02%	227	\$ 693.958,43	\$ 9.913.425,76
2001	M14	\$ 151.341	2,02%	227	\$ 693.958,43	\$ 10.607.384,19
2002	01	\$ 162.918	2,02%	226	\$ 743.755,30	\$ 11.351.139,49
2002	02	\$ 162.918	2,02%	225	\$ 740.464,35	\$ 12.091.603,84
2002	03	\$ 162.918	2,02%	224	\$ 737.173,40	\$ 12.828.777,23
2002	04	\$ 162.918	2,02%	223	\$ 733.882,44	\$ 13.562.659,68
2002	05	\$ 162.918	2,02%	222	\$ 730.591,49	\$ 14.293.251,17
2002	06	\$ 162.918	2,02%	221	\$ 727.300,54	\$ 15.020.551,70
2002	M13	\$ 162.918	2,02%	221	\$ 727.300,54	\$ 15.747.852,24
2002	07	\$ 162.918	2,02%	220	\$ 724.009,58	\$ 16.471.861,83
2002	08	\$ 162.918	2,02%	219	\$ 720.718,63	\$ 17.192.580,46
2002	09	\$ 162.918	2,02%	218	\$ 717.427,68	\$ 17.910.008,14
2002	10	\$ 162.918	2,02%	217	\$ 714.136,73	\$ 18.624.144,87
2002	11	\$ 162.918	2,02%	216	\$ 710.845,77	\$ 19.334.990,64
2002	12	\$ 162.918	2,02%	215	\$ 707.554,82	\$ 20.042.545,46
2002	M14	\$ 162.918	2,02%	215	\$ 707.554,82	\$ 20.750.100,28

2003	01	\$ 174.306	2,02%	214	\$ 753.491,91	\$ 21.503.592,20
2003	02	\$ 174.306	2,02%	213	\$ 749.970,92	\$ 22.253.563,12
2003	03	\$ 174.306	2,02%	212	\$ 746.449,93	\$ 23.000.013,05
2003	04	\$ 174.306	2,02%	211	\$ 742.928,94	\$ 23.742.941,99
2003	05	\$ 174.306	2,02%	210	\$ 739.407,95	\$ 24.482.349,95
2003	06	\$ 174.306	2,02%	209	\$ 735.886,96	\$ 25.218.236,91
2003	M13	\$ 174.306	2,02%	209	\$ 735.886,96	\$ 25.954.123,87
2003	07	\$ 174.306	2,02%	208	\$ 732.365,97	\$ 26.686.489,84
2003	08	\$ 174.306	2,02%	207	\$ 728.844,98	\$ 27.415.334,82
2003	09	\$ 174.306	2,02%	206	\$ 725.323,99	\$ 28.140.658,82
2003	10	\$ 174.306	2,02%	205	\$ 721.803,00	\$ 28.862.461,82
2003	11	\$ 174.306	2,02%	204	\$ 718.282,01	\$ 29.580.743,83
2003	12	\$ 174.306	2,02%	203	\$ 714.761,02	\$ 30.295.504,85
2003	M14	\$ 174.306	2,02%	203	\$ 714.761,02	\$ 31.010.265,87
2004	01	\$ 185.619	2,02%	202	\$ 757.399,51	\$ 31.767.665,38
2004	02	\$ 185.619	2,02%	201	\$ 753.650,01	\$ 32.521.315,38
2004	03	\$ 185.619	2,02%	200	\$ 749.900,50	\$ 33.271.215,89
2004	04	\$ 185.619	2,02%	199	\$ 746.151,00	\$ 34.017.366,89
2004	05	\$ 185.619	2,02%	198	\$ 742.401,50	\$ 34.759.768,39
2004	06	\$ 185.619	2,02%	197	\$ 738.652,00	\$ 35.498.420,38
2004	M13	\$ 185.619	2,02%	197	\$ 738.652,00	\$ 36.237.072,38
2004	07	\$ 185.619	2,02%	196	\$ 734.902,49	\$ 36.971.974,87
2004	08	\$ 185.619	2,02%	195	\$ 731.152,99	\$ 37.703.127,86
2004	09	\$ 185.619	2,02%	194	\$ 727.403,49	\$ 38.430.531,35
2004	10	\$ 185.619	2,02%	193	\$ 723.653,99	\$ 39.154.185,34
2004	11	\$ 185.619	2,02%	192	\$ 719.904,48	\$ 39.874.089,82
2004	12	\$ 185.619	2,02%	191	\$ 716.154,98	\$ 40.590.244,80
2004	M14	\$ 185.619	2,02%	191	\$ 716.154,98	\$ 41.306.399,78
2005	01	\$ 195.828	2,02%	190	\$ 751.587,78	\$ 42.057.987,56
2005	02	\$ 195.828	2,02%	189	\$ 747.632,05	\$ 42.805.619,61
2005	03	\$ 195.828	2,02%	188	\$ 743.676,33	\$ 43.549.295,94
2005	04	\$ 195.828	2,02%	187	\$ 739.720,60	\$ 44.289.016,55
2005	05	\$ 195.828	2,02%	186	\$ 735.764,88	\$ 45.024.781,43
2005	06	\$ 195.828	2,02%	185	\$ 731.809,15	\$ 45.756.590,58
2005	M13	\$ 195.828	2,02%	185	\$ 731.809,15	\$ 46.488.399,73
2005	07	\$ 195.828	2,02%	184	\$ 727.853,43	\$ 47.216.253,16
2005	08	\$ 195.828	2,02%	183	\$ 723.897,70	\$ 47.940.150,86
2005	09	\$ 195.828	2,02%	182	\$ 719.941,98	\$ 48.660.092,84
2005	10	\$ 195.828	2,02%	181	\$ 715.986,25	\$ 49.376.079,10
2005	11	\$ 195.828	2,02%	180	\$ 712.030,53	\$ 50.088.109,62
2005	12	\$ 195.828	2,02%	179	\$ 708.074,80	\$ 50.796.184,43
2005	M14	\$ 195.828	2,02%	179	\$ 708.074,80	\$ 51.504.259,23
2006	01	\$ 205.326	2,02%	178	\$ 738.268,85	\$ 52.242.528,08
2006	02	\$ 205.326	2,02%	177	\$ 734.121,28	\$ 52.976.649,36
2006	03	\$ 205.326	2,02%	176	\$ 729.973,70	\$ 53.706.623,05
2006	04	\$ 205.326	2,02%	175	\$ 725.826,12	\$ 54.432.449,17
2006	05	\$ 205.326	2,02%	174	\$ 721.678,54	\$ 55.154.127,71
2006	06	\$ 205.326	2,02%	173	\$ 717.530,96	\$ 55.871.658,68
2006	M13	\$ 205.326	2,02%	173	\$ 717.530,96	\$ 56.589.189,64
2006	07	\$ 205.326	2,02%	172	\$ 713.383,39	\$ 57.302.573,03
2006	08	\$ 205.326	2,02%	171	\$ 709.235,81	\$ 58.011.808,84
2006	09	\$ 205.326	2,02%	170	\$ 705.088,23	\$ 58.716.897,07
2006	10	\$ 205.326	2,02%	169	\$ 700.940,65	\$ 59.417.837,72
2006	11	\$ 205.326	2,02%	168	\$ 696.793,07	\$ 60.114.630,79
2006	12	\$ 205.326	2,02%	167	\$ 692.645,50	\$ 60.807.276,29
2006	M14	\$ 205.326	2,02%	167	\$ 692.645,50	\$ 61.499.921,79
2007	01	\$ 214.524	2,02%	166	\$ 719.342,63	\$ 62.219.264,41
2007	02	\$ 214.524	2,02%	165	\$ 715.009,24	\$ 62.934.273,65
2007	03	\$ 214.524	2,02%	164	\$ 710.675,85	\$ 63.644.949,50

2007	04	\$ 214.524	2,02%	163	\$ 706.342,46	\$ 64.351.291,95
2007	05	\$ 214.524	2,02%	162	\$ 702.009,07	\$ 65.053.301,02
2007	06	\$ 214.524	2,02%	161	\$ 697.675,68	\$ 65.750.976,70
2007	M13	\$ 214.524	2,02%	161	\$ 697.675,68	\$ 66.448.652,38
2007	07	\$ 214.524	2,02%	160	\$ 693.342,29	\$ 67.141.994,67
2007	08	\$ 214.524	2,02%	159	\$ 689.008,90	\$ 67.831.003,57
2007	09	\$ 214.524	2,02%	158	\$ 684.675,51	\$ 68.515.679,08
2007	10	\$ 214.524	2,02%	157	\$ 680.342,12	\$ 69.196.021,20
2007	11	\$ 214.524	2,02%	156	\$ 676.008,73	\$ 69.872.029,94
2007	12	\$ 214.524	2,02%	155	\$ 671.675,34	\$ 70.543.705,28
2007	M14	\$ 214.524	2,02%	155	\$ 671.675,34	\$ 71.215.380,62
2008	01	\$ 226.731	2,02%	154	\$ 705.313,71	\$ 71.920.694,33
2008	02	\$ 226.731	2,02%	153	\$ 700.733,75	\$ 72.621.428,09
2008	03	\$ 226.731	2,02%	152	\$ 696.153,79	\$ 73.317.581,88
2008	04	\$ 226.731	2,02%	151	\$ 691.573,83	\$ 74.009.155,71
2008	05	\$ 226.731	2,02%	150	\$ 686.993,87	\$ 74.696.149,59
2008	06	\$ 226.731	2,02%	149	\$ 682.413,92	\$ 75.378.563,50
2008	M13	\$ 226.731	2,02%	149	\$ 682.413,92	\$ 76.060.977,42
2008	07	\$ 226.731	2,02%	148	\$ 677.833,96	\$ 76.738.811,37
2008	08	\$ 226.731	2,02%	147	\$ 673.254,00	\$ 77.412.065,37
2008	09	\$ 226.731	2,02%	146	\$ 668.674,04	\$ 78.080.739,41
2008	10	\$ 226.731	2,02%	145	\$ 664.094,08	\$ 78.744.833,49
2008	11	\$ 226.731	2,02%	144	\$ 659.514,12	\$ 79.404.347,61
2008	12	\$ 226.731	2,02%	143	\$ 654.934,16	\$ 80.059.281,77
2008	M14	\$ 226.731	2,02%	143	\$ 654.934,16	\$ 80.714.215,93
2009	01	\$ 244.121	2,02%	142	\$ 700.236,37	\$ 81.414.452,30
2009	02	\$ 244.121	2,02%	141	\$ 695.305,13	\$ 82.109.757,42
2009	03	\$ 244.121	2,02%	140	\$ 690.373,88	\$ 82.800.131,31
2009	04	\$ 244.121	2,02%	139	\$ 685.442,64	\$ 83.485.573,95
2009	05	\$ 244.121	2,02%	138	\$ 680.511,40	\$ 84.166.085,35
2009	06	\$ 244.121	2,02%	137	\$ 675.580,16	\$ 84.841.665,51
2009	M13	\$ 244.121	2,02%	137	\$ 675.580,16	\$ 85.517.245,67
2009	07	\$ 244.121	2,02%	136	\$ 670.648,92	\$ 86.187.894,58
2009	08	\$ 244.121	2,02%	135	\$ 665.717,67	\$ 86.853.612,26
2009	09	\$ 244.121	2,02%	134	\$ 660.786,43	\$ 87.514.398,69
2009	10	\$ 244.121	2,02%	133	\$ 655.855,19	\$ 88.170.253,88
2009	11	\$ 244.121	2,02%	132	\$ 650.923,95	\$ 88.821.177,83
2009	12	\$ 244.121	2,02%	131	\$ 645.992,71	\$ 89.467.170,53
2009	M14	\$ 244.121	2,02%	131	\$ 645.992,71	\$ 90.113.163,24
2010	01	\$ 249.003	2,02%	130	\$ 653.882,69	\$ 90.767.045,93
2010	02	\$ 249.003	2,02%	129	\$ 648.852,83	\$ 91.415.898,76
2010	03	\$ 249.003	2,02%	128	\$ 643.822,96	\$ 92.059.721,72
2010	04	\$ 249.003	2,02%	127	\$ 638.793,09	\$ 92.698.514,81
2010	05	\$ 249.003	2,02%	126	\$ 633.763,23	\$ 93.332.278,04
2010	06	\$ 249.003	2,02%	125	\$ 628.733,36	\$ 93.961.011,40
2010	M13	\$ 249.003	2,02%	125	\$ 628.733,36	\$ 94.589.744,75
2010	07	\$ 249.003	2,02%	124	\$ 623.703,49	\$ 95.213.448,25
2010	08	\$ 249.003	2,02%	123	\$ 618.673,63	\$ 95.832.121,87
2010	09	\$ 249.003	2,02%	122	\$ 613.643,76	\$ 96.445.765,63
2010	10	\$ 249.003	2,02%	121	\$ 608.613,89	\$ 97.054.379,52
2010	11	\$ 249.003	2,02%	120	\$ 603.584,02	\$ 97.657.963,55
2010	12	\$ 249.003	2,02%	119	\$ 598.554,16	\$ 98.256.517,70
2010	M14	\$ 249.003	2,02%	119	\$ 598.554,16	\$ 98.855.071,86
2011	01	\$ 256.897	2,02%	118	\$ 612.339,01	\$ 99.467.410,87
2011	02	\$ 256.897	2,02%	117	\$ 607.149,70	\$ 100.074.560,57
2011	03	\$ 256.897	2,02%	116	\$ 601.960,38	\$ 100.676.520,95
2011	04	\$ 256.897	2,02%	115	\$ 596.771,07	\$ 101.273.292,02
2011	05	\$ 256.897	2,02%	114	\$ 591.581,76	\$ 101.864.873,78
2011	06	\$ 256.897	2,02%	113	\$ 586.392,44	\$ 102.451.266,22

2011	M13	\$ 256.897	2,02%	113	\$ 586.392,44	\$ 103.037.658,67
2011	07	\$ 256.897	2,02%	112	\$ 581.203,13	\$ 103.618.861,79
2011	08	\$ 256.897	2,02%	111	\$ 576.013,82	\$ 104.194.875,61
2011	09	\$ 256.897	2,02%	110	\$ 570.824,50	\$ 104.765.700,11
2011	10	\$ 256.897	2,02%	109	\$ 565.635,19	\$ 105.331.335,30
2011	11	\$ 256.897	2,02%	108	\$ 560.445,87	\$ 105.891.781,17
2011	12	\$ 256.897	2,02%	107	\$ 555.256,56	\$ 106.447.037,73
2011	M14	\$ 256.897	2,02%	107	\$ 555.256,56	\$ 107.002.294,29
2012	01	\$ 266.479	2,02%	106	\$ 570.584,76	\$ 107.572.879,05
2012	02	\$ 266.479	2,02%	105	\$ 565.201,88	\$ 108.138.080,93
2012	03	\$ 266.479	2,02%	104	\$ 559.819,01	\$ 0,00
2012	04	\$ 266.479	2,02%	103	\$ 554.436,13	\$ 109.252.336,07
2012	05	\$ 266.479	2,02%	102	\$ 549.053,26	\$ 109.801.389,32
2012	06	\$ 266.479	2,02%	101	\$ 543.670,38	\$ 110.345.059,70
2012	M13	\$ 266.479	2,02%	101	\$ 543.670,38	\$ 110.888.730,08
2012	07	\$ 266.479	2,02%	100	\$ 538.287,51	\$ 111.427.017,59
2012	08	\$ 266.479	2,02%	99	\$ 532.904,63	\$ 111.959.922,22
2012	09	\$ 266.479	2,02%	98	\$ 527.521,75	\$ 112.487.443,97
2012	10	\$ 266.479	2,02%	97	\$ 522.138,88	\$ 113.009.582,85
2012	11	\$ 266.479	2,02%	96	\$ 516.756,00	\$ 113.526.338,86
2012	12	\$ 266.479	2,02%	95	\$ 511.373,13	\$ 114.037.711,99
2012	M14	\$ 266.479	2,02%	95	\$ 511.373,13	\$ 114.549.085,12
2013	01	\$ 272.981	2,02%	94	\$ 518.336,42	\$ 115.067.421,53
2013	02	\$ 272.981	2,02%	93	\$ 512.822,20	\$ 115.580.243,73
2013	03	\$ 272.981	2,02%	92	\$ 507.307,98	\$ 116.087.551,72
2013	04	\$ 272.981	2,02%	91	\$ 501.793,77	\$ 116.589.345,48
2013	05	\$ 272.981	2,02%	90	\$ 496.279,55	\$ 117.085.625,03
2013	06	\$ 272.981	2,02%	89	\$ 490.765,33	\$ 117.576.390,36
2013	M13	\$ 272.981	2,02%	89	\$ 490.765,33	\$ 118.067.155,69
2013	07	\$ 272.981	2,02%	88	\$ 485.251,11	\$ 118.552.406,80
2013	08	\$ 272.981	2,02%	87	\$ 479.736,90	\$ 119.032.143,70
2013	09	\$ 272.981	2,02%	86	\$ 474.222,68	\$ 119.506.366,38
2013	10	\$ 272.981	2,02%	85	\$ 468.708,46	\$ 119.975.074,84
2013	11	\$ 272.981	2,02%	84	\$ 463.194,24	\$ 120.438.269,09
2013	12	\$ 272.981	2,02%	83	\$ 457.680,03	\$ 120.895.949,12
2013	M14	\$ 272.981	2,02%	83	\$ 457.680,03	\$ 121.353.629,14
2014	01	\$ 278.277	2,02%	82	\$ 460.937,83	\$ 121.814.566,97
2014	02	\$ 278.277	2,02%	81	\$ 455.316,63	\$ 122.269.883,60
2014	03	\$ 278.277	2,02%	80	\$ 449.695,44	\$ 122.719.579,05
2014	04	\$ 278.277	2,02%	79	\$ 444.074,25	\$ 123.163.653,29
2014	05	\$ 278.277	2,02%	78	\$ 438.453,06	\$ 123.602.106,35
2014	06	\$ 278.277	2,02%	77	\$ 432.831,86	\$ 124.034.938,21
2014	M13	\$ 278.277	2,02%	77	\$ 432.831,86	\$ 124.467.770,07
2014	07	\$ 278.277	2,02%	76	\$ 427.210,67	\$ 124.894.980,74
2014	08	\$ 278.277	2,02%	75	\$ 421.589,48	\$ 125.316.570,22
2014	09	\$ 278.277	2,02%	74	\$ 415.968,28	\$ 125.732.538,50
2014	10	\$ 278.277	2,02%	73	\$ 410.347,09	\$ 126.142.885,59
2014	11	\$ 278.277	2,02%	72	\$ 404.725,90	\$ 126.547.611,49
2014	12	\$ 278.277	2,02%	71	\$ 399.104,70	\$ 126.946.716,19
2014	M14	\$ 278.277	2,02%	71	\$ 399.104,70	\$ 127.345.820,90
2015	01	\$ 288.462	2,02%	70	\$ 407.885,01	\$ 127.753.705,91
2015	02	\$ 288.462	2,02%	69	\$ 402.058,08	\$ 128.155.763,98
2015	03	\$ 288.462	2,02%	68	\$ 396.231,15	\$ 128.551.995,13
2015	04	\$ 288.462	2,02%	67	\$ 390.404,22	\$ 128.942.399,36
2015	05	\$ 288.462	2,02%	66	\$ 384.577,29	\$ 129.326.976,65
2015	06	\$ 288.462	2,02%	65	\$ 378.750,36	\$ 129.705.727,01
2015	M13	\$ 288.462	2,02%	65	\$ 378.750,36	\$ 130.084.477,38
2015	07	\$ 288.462	2,02%	64	\$ 372.923,44	\$ 130.457.400,81
2015	08	\$ 288.462	2,02%	63	\$ 367.096,51	\$ 130.824.497,32

2015	09	\$ 288.462	2,02%	62	\$ 361.269,58	\$ 131.185.766,90
2015	10	\$ 288.462	2,02%	61	\$ 355.442,65	\$ 131.541.209,55
2015	11	\$ 288.462	2,02%	60	\$ 349.615,72	\$ 131.890.825,27
2015	12	\$ 288.462	2,02%	59	\$ 343.788,79	\$ 132.234.614,06
2015	M14	\$ 288.462	2,02%	59	\$ 343.788,79	\$ 132.578.402,85
2016	01	\$ 307.991	2,02%	58	\$ 360.841,88	\$ 132.939.244,73
2016	02	\$ 307.991	2,02%	57	\$ 354.620,47	\$ 133.293.865,20
2016	03	\$ 307.991	2,02%	56	\$ 348.399,06	\$ 133.642.264,26
2016	04	\$ 307.991	2,02%	55	\$ 342.177,65	\$ 133.984.441,91
2016	05	\$ 307.991	2,02%	54	\$ 335.956,23	\$ 134.320.398,14
2016	06	\$ 307.991	2,02%	53	\$ 329.734,82	\$ 134.650.132,97
2016	M13	\$ 307.991	2,02%	53	\$ 329.734,82	\$ 134.979.867,79
2016	07	\$ 307.991	2,02%	52	\$ 323.513,41	\$ 135.303.381,20
2016	08	\$ 307.991	2,02%	51	\$ 317.292,00	\$ 135.620.673,20
2016	09	\$ 307.991	2,02%	50	\$ 311.070,59	\$ 135.931.743,79
2016	10	\$ 307.991	2,02%	49	\$ 304.849,18	\$ 136.236.592,96
2016	11	\$ 307.991	2,02%	48	\$ 298.627,76	\$ 136.535.220,73
2016	12	\$ 307.991	2,02%	47	\$ 292.406,35	\$ 136.827.627,08
2016	M14	\$ 307.991	2,02%	47	\$ 292.406,35	\$ 137.120.033,43
2017	01	\$ 325.700	2,02%	46	\$ 302.640,57	\$ 137.422.674,01
2017	02	\$ 325.700	2,02%	45	\$ 296.061,43	\$ 137.718.735,44
2017	03	\$ 325.700	2,02%	44	\$ 289.482,29	\$ 138.008.217,73
2017	04	\$ 325.700	2,02%	43	\$ 282.903,15	\$ 138.291.120,87
2017	05	\$ 325.700	2,02%	42	\$ 276.324,00	\$ 138.567.444,88
2017	06	\$ 325.700	2,02%	41	\$ 269.744,86	\$ 138.837.189,74
2017	M13	\$ 325.700	2,02%	41	\$ 269.744,86	\$ 139.106.934,60
2017	07	\$ 325.700	2,02%	40	\$ 263.165,72	\$ 139.370.100,31
2017	08	\$ 325.700	2,02%	39	\$ 256.586,57	\$ 139.626.686,89
2017	09	\$ 325.700	2,02%	38	\$ 250.007,43	\$ 139.876.694,32
2017	10	\$ 325.700	2,02%	37	\$ 243.428,29	\$ 140.120.122,61
2017	11	\$ 325.700	2,02%	36	\$ 236.849,15	\$ 140.356.971,75
2017	12	\$ 325.700	2,02%	35	\$ 230.270,00	\$ 140.587.241,75
2017	M14	\$ 325.700	2,02%	35	\$ 230.270,00	\$ 140.817.511,76
2018	01	\$ 339.021	2,02%	34	\$ 232.839,82	\$ 141.050.351,57
2018	02	\$ 339.021	2,02%	33	\$ 225.991,59	\$ 141.276.343,16
2018	03	\$ 339.021	2,02%	32	\$ 219.143,36	\$ 141.495.486,51
2018	04	\$ 339.021	2,02%	31	\$ 212.295,13	\$ 141.707.781,64
2018	05	\$ 339.021	2,02%	30	\$ 205.446,90	\$ 141.913.228,54
2018	06	\$ 339.021	2,02%	29	\$ 198.598,67	\$ 142.111.827,20
2018	M13	\$ 339.021	2,02%	29	\$ 198.598,67	\$ 142.310.425,87
2018	07	\$ 339.021	2,02%	28	\$ 191.750,44	\$ 142.502.176,31
2018	08	\$ 339.021	2,02%	27	\$ 184.902,21	\$ 142.687.078,51
2018	09	\$ 339.021	2,02%	26	\$ 178.053,98	\$ 142.865.132,49
2018	10	\$ 339.021	2,02%	25	\$ 171.205,75	\$ 143.036.338,24
2018	11	\$ 339.021	2,02%	24	\$ 164.357,52	\$ 143.200.695,75
2018	12	\$ 339.021	2,02%	23	\$ 157.509,29	\$ 143.358.205,04
2018	M14	\$ 339.021	2,02%	23	\$ 157.509,29	\$ 143.515.714,33
2019	01	\$ 349.802	2,02%	22	\$ 155.452,08	\$ 143.671.166,41
2019	02	\$ 349.802	2,02%	21	\$ 148.386,08	\$ 143.819.552,48
2019	03	\$ 349.802	2,02%	20	\$ 141.320,07	\$ 143.960.872,55
2019	04	\$ 349.802	2,02%	19	\$ 134.254,07	\$ 144.095.126,62
2019	05	\$ 349.802	2,02%	18	\$ 127.188,06	\$ 144.222.314,69
2019	06	\$ 349.802	2,02%	17	\$ 120.122,06	\$ 144.342.436,75
2019	M13	\$ 349.802	2,02%	17	\$ 120.122,06	\$ 144.462.558,81
2019	07	\$ 349.802	2,02%	16	\$ 113.056,06	\$ 144.575.614,86
2019	08	\$ 349.802	2,02%	15	\$ 105.990,05	\$ 144.681.604,92
2019	09	\$ 349.802	2,02%	14	\$ 98.924,05	\$ 144.780.528,97
2019	10	\$ 349.802	2,02%	13	\$ 91.858,05	\$ 144.872.387,01
2019	11	\$ 349.802	2,02%	12	\$ 84.792,04	\$ 144.957.179,06

2019	12	\$ 349.802	2,02%	11	\$ 77.726,04	\$ 145.034.905,10
2019	M14	\$ 349.802	2,02%	11	\$ 77.726,04	\$ 145.112.631,14
2020	01	\$ 363.095	2,02%	10	\$ 73.345,12	\$ 145.185.976,25
2020	02	\$ 363.095	2,02%	9	\$ 66.010,61	\$ 145.251.986,86
2020	03	\$ 363.095	2,02%	8	\$ 58.676,09	\$ 145.310.662,95
2020	04	\$ 363.095	2,02%	7	\$ 51.341,58	\$ 145.362.004,54
2020	05	\$ 363.095	2,02%	6	\$ 44.007,07	\$ 145.406.011,61
2020	06	\$ 363.095	2,02%	5	\$ 36.672,56	\$ 145.442.684,16
2020	M13	\$ 363.095	2,02%	5	\$ 36.672,56	\$ 145.479.356,72
2020	07	\$ 363.095	2,02%	4	\$ 29.338,05	\$ 145.508.694,77
2020	08	\$ 363.095	2,02%	3	\$ 22.003,54	\$ 145.530.698,30
2020	09	\$ 363.095	2,02%	2	\$ 14.669,02	\$ 145.545.367,33
2020	10	\$ 363.095	2,02%	1	\$ 7.334,51	\$ 145.552.701,84

3. OSCAR BAUTISTA QUINTERO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 92.144,36	4,48%	9,3	\$ 856.942,55
2007	\$ 96.272,43	5,69%	14	\$ 1.347.813,98
2008	\$ 101.750,33	7,67%	14	\$ 1.424.504,60
2009	\$ 109.554,58	2,00%	14	\$ 1.533.764,10
2010	\$ 111.745,67	3,17%	14	\$ 1.564.439,38
2011	\$ 115.288,01	3,73%	14	\$ 1.614.032,11
2012	\$ 119.588,25	2,44%	14	\$ 1.674.235,51
2013	\$ 122.506,20	1,94%	14	\$ 1.715.086,86
2014	\$ 124.882,82	3,66%	14	\$ 1.748.359,54
2015	\$ 129.453,54	6,77%	14	\$ 1.812.349,50
2016	\$ 138.217,54	5,75%	14	\$ 1.935.045,56
2017	\$ 146.165,05	4,09%	14	\$ 2.046.310,68
2018	\$ 152.143,20	3,18%	14	\$ 2.130.004,79
2019	\$ 156.981,35	3,80%	14	\$ 2.197.738,94
2020	\$ 162.946,64	1,61%	11	\$ 1.792.413,09
				\$ 25.393.041,18

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	02	\$ 92.144	2,02%	177	\$ 329.451,66	\$ 329.451,66
2006	03	\$ 92.144	2,02%	176	\$ 327.590,35	\$ 657.042,01
2006	04	\$ 92.144	2,02%	175	\$ 325.729,04	\$ 982.771,05
2006	05	\$ 92.144	2,02%	174	\$ 323.867,73	\$ 1.306.638,78
2006	06	\$ 92.144	2,02%	173	\$ 322.006,42	\$ 1.628.645,20
2006	M13	\$ 92.144	2,02%	173	\$ 322.006,42	\$ 1.950.651,62
2006	07	\$ 92.144	2,02%	172	\$ 320.145,11	\$ 2.270.796,74
2006	08	\$ 92.144	2,02%	171	\$ 318.283,80	\$ 2.589.080,54
2006	09	\$ 92.144	2,02%	170	\$ 316.422,50	\$ 2.905.503,04
2006	10	\$ 92.144	2,02%	169	\$ 314.561,19	\$ 3.220.064,22
2006	11	\$ 92.144	2,02%	168	\$ 312.699,88	\$ 3.532.764,10
2006	12	\$ 92.144	2,02%	167	\$ 310.838,57	\$ 3.843.602,67
2006	M14	\$ 92.144	2,02%	167	\$ 310.838,57	\$ 4.154.441,24
2007	01	\$ 96.272	2,02%	166	\$ 322.820,70	\$ 4.477.261,94
2007	02	\$ 96.272	2,02%	165	\$ 320.876,00	\$ 4.798.137,95
2007	03	\$ 96.272	2,02%	164	\$ 318.931,30	\$ 5.117.069,24
2007	04	\$ 96.272	2,02%	163	\$ 316.986,59	\$ 5.434.055,84
2007	05	\$ 96.272	2,02%	162	\$ 315.041,89	\$ 5.749.097,73
2007	06	\$ 96.272	2,02%	161	\$ 313.097,19	\$ 6.062.194,92
2007	M13	\$ 96.272	2,02%	161	\$ 313.097,19	\$ 6.375.292,10

2007	07	\$ 96.272	2,02%	160	\$ 311.152,49	\$ 6.686.444,59
2007	08	\$ 96.272	2,02%	159	\$ 309.207,78	\$ 6.995.652,37
2007	09	\$ 96.272	2,02%	158	\$ 307.263,08	\$ 7.302.915,45
2007	10	\$ 96.272	2,02%	157	\$ 305.318,38	\$ 7.608.233,83
2007	11	\$ 96.272	2,02%	156	\$ 303.373,67	\$ 7.911.607,50
2007	12	\$ 96.272	2,02%	155	\$ 301.428,97	\$ 8.213.036,47
2007	M14	\$ 96.272	2,02%	155	\$ 301.428,97	\$ 8.514.465,44
2008	01	\$ 101.750	2,02%	154	\$ 316.524,92	\$ 8.830.990,36
2008	02	\$ 101.750	2,02%	153	\$ 314.469,57	\$ 9.145.459,93
2008	03	\$ 101.750	2,02%	152	\$ 312.414,21	\$ 9.457.874,13
2008	04	\$ 101.750	2,02%	151	\$ 310.358,85	\$ 9.768.232,99
2008	05	\$ 101.750	2,02%	150	\$ 308.303,50	\$ 10.076.536,48
2008	06	\$ 101.750	2,02%	149	\$ 306.248,14	\$ 10.382.784,62
2008	M13	\$ 101.750	2,02%	149	\$ 306.248,14	\$ 10.689.032,76
2008	07	\$ 101.750	2,02%	148	\$ 304.192,78	\$ 10.993.225,54
2008	08	\$ 101.750	2,02%	147	\$ 302.137,43	\$ 11.295.362,97
2008	09	\$ 101.750	2,02%	146	\$ 300.082,07	\$ 11.595.445,03
2008	10	\$ 101.750	2,02%	145	\$ 298.026,71	\$ 11.893.471,75
2008	11	\$ 101.750	2,02%	144	\$ 295.971,36	\$ 12.189.443,10
2008	12	\$ 101.750	2,02%	143	\$ 293.916,00	\$ 12.483.359,10
2008	M14	\$ 101.750	2,02%	143	\$ 293.916,00	\$ 12.777.275,10
2009	01	\$ 109.555	2,02%	142	\$ 314.246,35	\$ 13.091.521,45
2009	02	\$ 109.555	2,02%	141	\$ 312.033,35	\$ 13.403.554,80
2009	03	\$ 109.555	2,02%	140	\$ 309.820,35	\$ 13.713.375,15
2009	04	\$ 109.555	2,02%	139	\$ 307.607,35	\$ 14.020.982,50
2009	05	\$ 109.555	2,02%	138	\$ 305.394,34	\$ 14.326.376,84
2009	06	\$ 109.555	2,02%	137	\$ 303.181,34	\$ 14.629.558,18
2009	M13	\$ 109.555	2,02%	137	\$ 303.181,34	\$ 14.932.739,52
2009	07	\$ 109.555	2,02%	136	\$ 300.968,34	\$ 15.233.707,86
2009	08	\$ 109.555	2,02%	135	\$ 298.755,34	\$ 15.532.463,20
2009	09	\$ 109.555	2,02%	134	\$ 296.542,33	\$ 15.829.005,53
2009	10	\$ 109.555	2,02%	133	\$ 294.329,33	\$ 16.123.334,86
2009	11	\$ 109.555	2,02%	132	\$ 292.116,33	\$ 16.415.451,19
2009	12	\$ 109.555	2,02%	131	\$ 289.903,33	\$ 16.705.354,52
2009	M14	\$ 109.555	2,02%	131	\$ 289.903,33	\$ 16.995.257,84
2010	01	\$ 111.746	2,02%	130	\$ 293.444,13	\$ 17.288.701,97
2010	02	\$ 111.746	2,02%	129	\$ 291.186,87	\$ 17.579.888,84
2010	03	\$ 111.746	2,02%	128	\$ 288.929,60	\$ 17.868.818,44
2010	04	\$ 111.746	2,02%	127	\$ 286.672,34	\$ 18.155.490,79
2010	05	\$ 111.746	2,02%	126	\$ 284.415,08	\$ 18.439.905,87
2010	06	\$ 111.746	2,02%	125	\$ 282.157,82	\$ 18.722.063,68
2010	M13	\$ 111.746	2,02%	125	\$ 282.157,82	\$ 19.004.221,50
2010	07	\$ 111.746	2,02%	124	\$ 279.900,55	\$ 19.284.122,06
2010	08	\$ 111.746	2,02%	123	\$ 277.643,29	\$ 19.561.765,35
2010	09	\$ 111.746	2,02%	122	\$ 275.386,03	\$ 19.837.151,38
2010	10	\$ 111.746	2,02%	121	\$ 273.128,77	\$ 20.110.280,15
2010	11	\$ 111.746	2,02%	120	\$ 270.871,50	\$ 20.381.151,65
2010	12	\$ 111.746	2,02%	119	\$ 268.614,24	\$ 20.649.765,89
2010	M14	\$ 111.746	2,02%	119	\$ 268.614,24	\$ 20.918.380,13
2011	01	\$ 115.288	2,02%	118	\$ 274.800,50	\$ 21.193.180,63
2011	02	\$ 115.288	2,02%	117	\$ 272.471,68	\$ 21.465.652,31
2011	03	\$ 115.288	2,02%	116	\$ 270.142,86	\$ 21.735.795,17
2011	04	\$ 115.288	2,02%	115	\$ 267.814,04	\$ 22.003.609,21
2011	05	\$ 115.288	2,02%	114	\$ 265.485,22	\$ 22.269.094,43
2011	06	\$ 115.288	2,02%	113	\$ 263.156,41	\$ 22.532.250,84
2011	M13	\$ 115.288	2,02%	113	\$ 263.156,41	\$ 22.795.407,25
2011	07	\$ 115.288	2,02%	112	\$ 260.827,59	\$ 23.056.234,84

2011	08	\$ 115.288	2,02%	111	\$ 258.498,77	\$ 23.314.733,61
2011	09	\$ 115.288	2,02%	110	\$ 256.169,95	\$ 23.570.903,56
2011	10	\$ 115.288	2,02%	109	\$ 253.841,14	\$ 23.824.744,70
2011	11	\$ 115.288	2,02%	108	\$ 251.512,32	\$ 24.076.257,02
2011	12	\$ 115.288	2,02%	107	\$ 249.183,50	\$ 24.325.440,52
2011	M14	\$ 115.288	2,02%	107	\$ 249.183,50	\$ 24.574.624,02
2012	01	\$ 119.588	2,02%	106	\$ 256.062,36	\$ 24.830.686,38
2012	02	\$ 119.588	2,02%	105	\$ 253.646,68	\$ 25.084.333,06
2012	03	\$ 119.588	2,02%	104	\$ 251.231,00	\$ 0,00
2012	04	\$ 119.588	2,02%	103	\$ 248.815,31	\$ 25.584.379,37
2012	05	\$ 119.588	2,02%	102	\$ 246.399,63	\$ 25.830.779,00
2012	06	\$ 119.588	2,02%	101	\$ 243.983,95	\$ 26.074.762,95
2012	M13	\$ 119.588	2,02%	101	\$ 243.983,95	\$ 26.318.746,90
2012	07	\$ 119.588	2,02%	100	\$ 241.568,27	\$ 26.560.315,17
2012	08	\$ 119.588	2,02%	99	\$ 239.152,58	\$ 26.799.467,75
2012	09	\$ 119.588	2,02%	98	\$ 236.736,90	\$ 27.036.204,65
2012	10	\$ 119.588	2,02%	97	\$ 234.321,22	\$ 27.270.525,87
2012	11	\$ 119.588	2,02%	96	\$ 231.905,54	\$ 27.502.431,41
2012	12	\$ 119.588	2,02%	95	\$ 229.489,85	\$ 27.731.921,26
2012	M14	\$ 119.588	2,02%	95	\$ 229.489,85	\$ 27.961.411,11
2013	01	\$ 122.506	2,02%	94	\$ 232.614,78	\$ 28.194.025,89
2013	02	\$ 122.506	2,02%	93	\$ 230.140,15	\$ 28.424.166,05
2013	03	\$ 122.506	2,02%	92	\$ 227.665,53	\$ 28.651.831,58
2013	04	\$ 122.506	2,02%	91	\$ 225.190,90	\$ 28.877.022,48
2013	05	\$ 122.506	2,02%	90	\$ 222.716,28	\$ 29.099.738,76
2013	06	\$ 122.506	2,02%	89	\$ 220.241,65	\$ 29.319.980,41
2013	M13	\$ 122.506	2,02%	89	\$ 220.241,65	\$ 29.540.222,07
2013	07	\$ 122.506	2,02%	88	\$ 217.767,03	\$ 29.757.989,09
2013	08	\$ 122.506	2,02%	87	\$ 215.292,40	\$ 29.973.281,50
2013	09	\$ 122.506	2,02%	86	\$ 212.817,78	\$ 30.186.099,27
2013	10	\$ 122.506	2,02%	85	\$ 210.343,15	\$ 30.396.442,43
2013	11	\$ 122.506	2,02%	84	\$ 207.868,53	\$ 30.604.310,95
2013	12	\$ 122.506	2,02%	83	\$ 205.393,90	\$ 30.809.704,86
2013	M14	\$ 122.506	2,02%	83	\$ 205.393,90	\$ 31.015.098,76
2014	01	\$ 124.883	2,02%	82	\$ 206.855,91	\$ 31.221.954,67
2014	02	\$ 124.883	2,02%	81	\$ 204.333,28	\$ 31.426.287,94
2014	03	\$ 124.883	2,02%	80	\$ 201.810,64	\$ 31.628.098,59
2014	04	\$ 124.883	2,02%	79	\$ 199.288,01	\$ 31.827.386,60
2014	05	\$ 124.883	2,02%	78	\$ 196.765,38	\$ 32.024.151,98
2014	06	\$ 124.883	2,02%	77	\$ 194.242,74	\$ 32.218.394,72
2014	M13	\$ 124.883	2,02%	77	\$ 194.242,74	\$ 32.412.637,47
2014	07	\$ 124.883	2,02%	76	\$ 191.720,11	\$ 32.604.357,58
2014	08	\$ 124.883	2,02%	75	\$ 189.197,48	\$ 32.793.555,06
2014	09	\$ 124.883	2,02%	74	\$ 186.674,85	\$ 32.980.229,90
2014	10	\$ 124.883	2,02%	73	\$ 184.152,21	\$ 33.164.382,12
2014	11	\$ 124.883	2,02%	72	\$ 181.629,58	\$ 33.346.011,70
2014	12	\$ 124.883	2,02%	71	\$ 179.106,95	\$ 33.525.118,64
2014	M14	\$ 124.883	2,02%	71	\$ 179.106,95	\$ 33.704.225,59
2015	01	\$ 129.454	2,02%	70	\$ 183.047,30	\$ 33.887.272,89
2015	02	\$ 129.454	2,02%	69	\$ 180.432,34	\$ 34.067.705,23
2015	03	\$ 129.454	2,02%	68	\$ 177.817,38	\$ 34.245.522,60
2015	04	\$ 129.454	2,02%	67	\$ 175.202,42	\$ 34.420.725,02
2015	05	\$ 129.454	2,02%	66	\$ 172.587,45	\$ 34.593.312,47
2015	06	\$ 129.454	2,02%	65	\$ 169.972,49	\$ 34.763.284,96
2015	M13	\$ 129.454	2,02%	65	\$ 169.972,49	\$ 34.933.257,46
2015	07	\$ 129.454	2,02%	64	\$ 167.357,53	\$ 35.100.614,99
2015	08	\$ 129.454	2,02%	63	\$ 164.742,57	\$ 35.265.357,56

2015	09	\$ 129.454	2,02%	62	\$ 162.127,61	\$ 35.427.485,17
2015	10	\$ 129.454	2,02%	61	\$ 159.512,65	\$ 35.586.997,81
2015	11	\$ 129.454	2,02%	60	\$ 156.897,69	\$ 35.743.895,50
2015	12	\$ 129.454	2,02%	59	\$ 154.282,72	\$ 35.898.178,22
2015	M14	\$ 129.454	2,02%	59	\$ 154.282,72	\$ 36.052.460,95
2016	01	\$ 138.218	2,02%	58	\$ 161.935,67	\$ 36.214.396,62
2016	02	\$ 138.218	2,02%	57	\$ 159.143,68	\$ 36.373.540,29
2016	03	\$ 138.218	2,02%	56	\$ 156.351,68	\$ 36.529.891,97
2016	04	\$ 138.218	2,02%	55	\$ 153.559,69	\$ 36.683.451,66
2016	05	\$ 138.218	2,02%	54	\$ 150.767,69	\$ 36.834.219,35
2016	06	\$ 138.218	2,02%	53	\$ 147.975,70	\$ 36.982.195,05
2016	M13	\$ 138.218	2,02%	53	\$ 147.975,70	\$ 37.130.170,75
2016	07	\$ 138.218	2,02%	52	\$ 145.183,70	\$ 37.275.354,45
2016	08	\$ 138.218	2,02%	51	\$ 142.391,71	\$ 37.417.746,16
2016	09	\$ 138.218	2,02%	50	\$ 139.599,72	\$ 37.557.345,88
2016	10	\$ 138.218	2,02%	49	\$ 136.807,72	\$ 37.694.153,60
2016	11	\$ 138.218	2,02%	48	\$ 134.015,73	\$ 37.828.169,33
2016	12	\$ 138.218	2,02%	47	\$ 131.223,73	\$ 37.959.393,06
2016	M14	\$ 138.218	2,02%	47	\$ 131.223,73	\$ 38.090.616,79
2017	01	\$ 146.165	2,02%	46	\$ 135.816,56	\$ 38.226.433,35
2017	02	\$ 146.165	2,02%	45	\$ 132.864,03	\$ 38.359.297,38
2017	03	\$ 146.165	2,02%	44	\$ 129.911,50	\$ 38.489.208,88
2017	04	\$ 146.165	2,02%	43	\$ 126.958,96	\$ 38.616.167,84
2017	05	\$ 146.165	2,02%	42	\$ 124.006,43	\$ 38.740.174,27
2017	06	\$ 146.165	2,02%	41	\$ 121.053,89	\$ 38.861.228,16
2017	M13	\$ 146.165	2,02%	41	\$ 121.053,89	\$ 38.982.282,05
2017	07	\$ 146.165	2,02%	40	\$ 118.101,36	\$ 39.100.383,41
2017	08	\$ 146.165	2,02%	39	\$ 115.148,83	\$ 39.215.532,24
2017	09	\$ 146.165	2,02%	38	\$ 112.196,29	\$ 39.327.728,53
2017	10	\$ 146.165	2,02%	37	\$ 109.243,76	\$ 39.436.972,29
2017	11	\$ 146.165	2,02%	36	\$ 106.291,22	\$ 39.543.263,51
2017	12	\$ 146.165	2,02%	35	\$ 103.338,69	\$ 39.646.602,20
2017	M14	\$ 146.165	2,02%	35	\$ 103.338,69	\$ 39.749.940,89
2018	01	\$ 152.143	2,02%	34	\$ 104.491,95	\$ 39.854.432,84
2018	02	\$ 152.143	2,02%	33	\$ 101.418,66	\$ 39.955.851,49
2018	03	\$ 152.143	2,02%	32	\$ 98.345,36	\$ 40.054.196,86
2018	04	\$ 152.143	2,02%	31	\$ 95.272,07	\$ 40.149.468,93
2018	05	\$ 152.143	2,02%	30	\$ 92.198,78	\$ 40.241.667,71
2018	06	\$ 152.143	2,02%	29	\$ 89.125,49	\$ 40.330.793,19
2018	M13	\$ 152.143	2,02%	29	\$ 89.125,49	\$ 40.419.918,68
2018	07	\$ 152.143	2,02%	28	\$ 86.052,19	\$ 40.505.970,87
2018	08	\$ 152.143	2,02%	27	\$ 82.978,90	\$ 40.588.949,77
2018	09	\$ 152.143	2,02%	26	\$ 79.905,61	\$ 40.668.855,38
2018	10	\$ 152.143	2,02%	25	\$ 76.832,32	\$ 40.745.687,70
2018	11	\$ 152.143	2,02%	24	\$ 73.759,02	\$ 40.819.446,72
2018	12	\$ 152.143	2,02%	23	\$ 70.685,73	\$ 40.890.132,45
2018	M14	\$ 152.143	2,02%	23	\$ 70.685,73	\$ 40.960.818,18
2019	01	\$ 156.981	2,02%	22	\$ 69.762,51	\$ 41.030.580,70
2019	02	\$ 156.981	2,02%	21	\$ 66.591,49	\$ 41.097.172,19
2019	03	\$ 156.981	2,02%	20	\$ 63.420,47	\$ 41.160.592,65
2019	04	\$ 156.981	2,02%	19	\$ 60.249,44	\$ 41.220.842,09
2019	05	\$ 156.981	2,02%	18	\$ 57.078,42	\$ 41.277.920,51
2019	06	\$ 156.981	2,02%	17	\$ 53.907,40	\$ 41.331.827,91
2019	M13	\$ 156.981	2,02%	17	\$ 53.907,40	\$ 41.385.735,31
2019	07	\$ 156.981	2,02%	16	\$ 50.736,37	\$ 41.436.471,68
2019	08	\$ 156.981	2,02%	15	\$ 47.565,35	\$ 41.484.037,03
2019	09	\$ 156.981	2,02%	14	\$ 44.394,33	\$ 41.528.431,36

2019	10	\$ 156.981	2,02%	13	\$ 41.223,30	\$ 41.569.654,66
2019	11	\$ 156.981	2,02%	12	\$ 38.052,28	\$ 41.607.706,94
2019	12	\$ 156.981	2,02%	11	\$ 34.881,26	\$ 41.642.588,20
2019	M14	\$ 156.981	2,02%	11	\$ 34.881,26	\$ 41.677.469,45
2020	01	\$ 162.947	2,02%	10	\$ 32.915,22	\$ 41.710.384,68
2020	02	\$ 162.947	2,02%	9	\$ 29.623,70	\$ 41.740.008,38
2020	03	\$ 162.947	2,02%	8	\$ 26.332,18	\$ 41.766.340,55
2020	04	\$ 162.947	2,02%	7	\$ 23.040,66	\$ 41.789.381,21
2020	05	\$ 162.947	2,02%	6	\$ 19.749,13	\$ 41.809.130,34
2020	06	\$ 162.947	2,02%	5	\$ 16.457,61	\$ 41.825.587,95
2020	M13	\$ 162.947	2,02%	5	\$ 16.457,61	\$ 41.842.045,56
2020	07	\$ 162.947	2,02%	4	\$ 13.166,09	\$ 41.855.211,65
2020	08	\$ 162.947	2,02%	3	\$ 9.874,57	\$ 41.865.086,22
2020	09	\$ 162.947	2,02%	2	\$ 6.583,04	\$ 41.871.669,26
2020	10	\$ 162.947	2,02%	1	\$ 3.291,52	\$ 41.874.960,79

4. ADRIANO DE JESÚS GUERRERO MANZANO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1996	\$ 205.787,88	21,63%	4	\$ 823.151,52
1997	\$ 250.299,80	17,68%	14	\$ 3.504.197,18
1998	\$ 294.552,80	16,70%	14	\$ 4.123.739,24
1999	\$ 343.743,12	9,23%	14	\$ 4.812.403,69
2000	\$ 375.470,61	8,75%	14	\$ 5.256.588,55
2001	\$ 408.324,29	7,65%	14	\$ 5.716.540,05
2002	\$ 439.561,10	6,99%	14	\$ 6.153.855,37
2003	\$ 470.286,42	6,49%	14	\$ 6.584.009,86
2004	\$ 500.808,01	5,50%	14	\$ 7.011.312,10
2005	\$ 528.352,45	4,85%	14	\$ 7.396.934,26
2006	\$ 553.977,54	4,48%	14	\$ 7.755.685,57
2007	\$ 578.795,73	5,69%	14	\$ 8.103.140,29
2008	\$ 611.729,21	7,67%	14	\$ 8.564.208,97
2009	\$ 658.648,84	2,00%	14	\$ 9.221.083,80
2010	\$ 671.821,82	3,17%	14	\$ 9.405.505,47
2011	\$ 693.118,57	3,73%	14	\$ 9.703.660,00
2012	\$ 718.971,89	2,44%	14	\$ 10.065.606,51
2013	\$ 736.514,81	1,94%	14	\$ 10.311.207,31
2014	\$ 750.803,20	3,66%	14	\$ 10.511.244,73
2015	\$ 778.282,59	6,77%	14	\$ 10.895.956,29
2016	\$ 830.972,32	5,75%	14	\$ 11.633.612,53
2017	\$ 878.753,23	4,09%	14	\$ 12.302.545,25
2018	\$ 914.694,24	3,18%	14	\$ 12.805.719,35
2019	\$ 943.781,52	3,80%	14	\$ 13.212.941,23
2020	\$ 979.645,21	1,61%	11	\$ 10.776.097,35
				\$ 162.665.148,92

5. CARLOS ALBERTO SILVA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 94.031,73	4,48%	2	\$ 188.063,46
2007	\$ 98.244,35	5,69%	14	\$ 1.375.420,92
2008	\$ 103.834,46	7,67%	14	\$ 1.453.682,37
2009	\$ 111.798,56	2,00%	14	\$ 1.565.179,81
2010	\$ 114.034,53	3,17%	14	\$ 1.596.483,41
2011	\$ 117.649,42	3,73%	14	\$ 1.647.091,93
2012	\$ 122.037,75	2,44%	14	\$ 1.708.528,46

2013	\$ 125.015,47	1,94%	14	\$ 1.750.216,55
2014	\$ 127.440,77	3,66%	14	\$ 1.784.170,75
2015	\$ 132.105,10	6,77%	14	\$ 1.849.471,40
2016	\$ 141.048,62	5,75%	14	\$ 1.974.680,62
2017	\$ 149.158,91	4,09%	14	\$ 2.088.224,75
2018	\$ 155.259,51	3,18%	14	\$ 2.173.633,15
2019	\$ 160.196,76	3,80%	14	\$ 2.242.754,68
2020	\$ 166.284,24	1,61%	11	\$ 1.829.126,64
				\$ 25.226.728,90

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	12	\$ 94.032	2,02%	167	\$ 317.206,64	\$ 317.206,64
2006	M14	\$ 94.032	2,02%	167	\$ 317.206,64	\$ 634.413,28
2007	01	\$ 98.244	2,02%	166	\$ 329.432,96	\$ 963.846,24
2007	02	\$ 98.244	2,02%	165	\$ 327.448,42	\$ 1.291.294,66
2007	03	\$ 98.244	2,02%	164	\$ 325.463,89	\$ 1.616.758,55
2007	04	\$ 98.244	2,02%	163	\$ 323.479,35	\$ 1.940.237,90
2007	05	\$ 98.244	2,02%	162	\$ 321.494,82	\$ 2.261.732,71
2007	06	\$ 98.244	2,02%	161	\$ 319.510,28	\$ 2.581.242,99
2007	M13	\$ 98.244	2,02%	161	\$ 319.510,28	\$ 2.900.753,27
2007	07	\$ 98.244	2,02%	160	\$ 317.525,74	\$ 3.218.279,02
2007	08	\$ 98.244	2,02%	159	\$ 315.541,21	\$ 3.533.820,23
2007	09	\$ 98.244	2,02%	158	\$ 313.556,67	\$ 3.847.376,90
2007	10	\$ 98.244	2,02%	157	\$ 311.572,14	\$ 4.158.949,04
2007	11	\$ 98.244	2,02%	156	\$ 309.587,60	\$ 4.468.536,64
2007	12	\$ 98.244	2,02%	155	\$ 307.603,06	\$ 4.776.139,70
2007	M14	\$ 98.244	2,02%	155	\$ 307.603,06	\$ 5.083.742,76
2008	01	\$ 103.834	2,02%	154	\$ 323.008,22	\$ 5.406.750,99
2008	02	\$ 103.834	2,02%	153	\$ 320.910,77	\$ 5.727.661,75
2008	03	\$ 103.834	2,02%	152	\$ 318.813,31	\$ 6.046.475,07
2008	04	\$ 103.834	2,02%	151	\$ 316.715,85	\$ 6.363.190,92
2008	05	\$ 103.834	2,02%	150	\$ 314.618,40	\$ 6.677.809,32
2008	06	\$ 103.834	2,02%	149	\$ 312.520,94	\$ 6.990.330,26
2008	M13	\$ 103.834	2,02%	149	\$ 312.520,94	\$ 7.302.851,21
2008	07	\$ 103.834	2,02%	148	\$ 310.423,49	\$ 7.613.274,69
2008	08	\$ 103.834	2,02%	147	\$ 308.326,03	\$ 7.921.600,72
2008	09	\$ 103.834	2,02%	146	\$ 306.228,57	\$ 8.227.829,30
2008	10	\$ 103.834	2,02%	145	\$ 304.131,12	\$ 8.531.960,42
2008	11	\$ 103.834	2,02%	144	\$ 302.033,66	\$ 8.833.994,08
2008	12	\$ 103.834	2,02%	143	\$ 299.936,21	\$ 9.133.930,29
2008	M14	\$ 103.834	2,02%	143	\$ 299.936,21	\$ 9.433.866,49
2009	01	\$ 111.799	2,02%	142	\$ 320.682,98	\$ 9.754.549,48
2009	02	\$ 111.799	2,02%	141	\$ 318.424,65	\$ 10.072.974,13
2009	03	\$ 111.799	2,02%	140	\$ 316.166,32	\$ 10.389.140,45
2009	04	\$ 111.799	2,02%	139	\$ 313.907,99	\$ 10.703.048,44
2009	05	\$ 111.799	2,02%	138	\$ 311.649,66	\$ 11.014.698,10
2009	06	\$ 111.799	2,02%	137	\$ 309.391,33	\$ 11.324.089,43
2009	M13	\$ 111.799	2,02%	137	\$ 309.391,33	\$ 11.633.480,76
2009	07	\$ 111.799	2,02%	136	\$ 307.133,00	\$ 11.940.613,76
2009	08	\$ 111.799	2,02%	135	\$ 304.874,67	\$ 12.245.488,42
2009	09	\$ 111.799	2,02%	134	\$ 302.616,34	\$ 12.548.104,76
2009	10	\$ 111.799	2,02%	133	\$ 300.358,01	\$ 12.848.462,77
2009	11	\$ 111.799	2,02%	132	\$ 298.099,67	\$ 13.146.562,44
2009	12	\$ 111.799	2,02%	131	\$ 295.841,34	\$ 13.442.403,78
2009	M14	\$ 111.799	2,02%	131	\$ 295.841,34	\$ 13.738.245,13

2010	01	\$ 114.035	2,02%	130	\$ 299.454,67	\$ 14.037.699,80
2010	02	\$ 114.035	2,02%	129	\$ 297.151,18	\$ 14.334.850,98
2010	03	\$ 114.035	2,02%	128	\$ 294.847,68	\$ 14.629.698,66
2010	04	\$ 114.035	2,02%	127	\$ 292.544,18	\$ 14.922.242,84
2010	05	\$ 114.035	2,02%	126	\$ 290.240,68	\$ 15.212.483,52
2010	06	\$ 114.035	2,02%	125	\$ 287.937,19	\$ 15.500.420,70
2010	M13	\$ 114.035	2,02%	125	\$ 287.937,19	\$ 15.788.357,89
2010	07	\$ 114.035	2,02%	124	\$ 285.633,69	\$ 16.073.991,58
2010	08	\$ 114.035	2,02%	123	\$ 283.330,19	\$ 16.357.321,77
2010	09	\$ 114.035	2,02%	122	\$ 281.026,69	\$ 16.638.348,46
2010	10	\$ 114.035	2,02%	121	\$ 278.723,20	\$ 16.917.071,66
2010	11	\$ 114.035	2,02%	120	\$ 276.419,70	\$ 17.193.491,36
2010	12	\$ 114.035	2,02%	119	\$ 274.116,20	\$ 17.467.607,56
2010	M14	\$ 114.035	2,02%	119	\$ 274.116,20	\$ 17.741.723,76
2011	01	\$ 117.649	2,02%	118	\$ 280.429,17	\$ 18.022.152,92
2011	02	\$ 117.649	2,02%	117	\$ 278.052,65	\$ 18.300.205,57
2011	03	\$ 117.649	2,02%	116	\$ 275.676,13	\$ 18.575.881,70
2011	04	\$ 117.649	2,02%	115	\$ 273.299,61	\$ 18.849.181,31
2011	05	\$ 117.649	2,02%	114	\$ 270.923,09	\$ 19.120.104,40
2011	06	\$ 117.649	2,02%	113	\$ 268.546,57	\$ 19.388.650,98
2011	M13	\$ 117.649	2,02%	113	\$ 268.546,57	\$ 19.657.197,55
2011	07	\$ 117.649	2,02%	112	\$ 266.170,06	\$ 19.923.367,61
2011	08	\$ 117.649	2,02%	111	\$ 263.793,54	\$ 20.187.161,15
2011	09	\$ 117.649	2,02%	110	\$ 261.417,02	\$ 20.448.578,16
2011	10	\$ 117.649	2,02%	109	\$ 259.040,50	\$ 20.707.618,67
2011	11	\$ 117.649	2,02%	108	\$ 256.663,98	\$ 20.964.282,65
2011	12	\$ 117.649	2,02%	107	\$ 254.287,46	\$ 21.218.570,11
2011	M14	\$ 117.649	2,02%	107	\$ 254.287,46	\$ 21.472.857,58
2012	01	\$ 122.038	2,02%	106	\$ 261.307,22	\$ 21.734.164,80
2012	02	\$ 122.038	2,02%	105	\$ 258.842,06	\$ 21.993.006,86
2012	03	\$ 122.038	2,02%	104	\$ 256.376,90	\$ 0,00
2012	04	\$ 122.038	2,02%	103	\$ 253.911,74	\$ 22.503.295,50
2012	05	\$ 122.038	2,02%	102	\$ 251.446,57	\$ 22.754.742,07
2012	06	\$ 122.038	2,02%	101	\$ 248.981,41	\$ 23.003.723,48
2012	M13	\$ 122.038	2,02%	101	\$ 248.981,41	\$ 23.252.704,89
2012	07	\$ 122.038	2,02%	100	\$ 246.516,25	\$ 23.499.221,14
2012	08	\$ 122.038	2,02%	99	\$ 244.051,09	\$ 23.743.272,23
2012	09	\$ 122.038	2,02%	98	\$ 241.585,92	\$ 23.984.858,15
2012	10	\$ 122.038	2,02%	97	\$ 239.120,76	\$ 24.223.978,91
2012	11	\$ 122.038	2,02%	96	\$ 236.655,60	\$ 24.460.634,51
2012	12	\$ 122.038	2,02%	95	\$ 234.190,44	\$ 24.694.824,95
2012	M14	\$ 122.038	2,02%	95	\$ 234.190,44	\$ 24.929.015,39
2013	01	\$ 125.015	2,02%	94	\$ 237.379,37	\$ 25.166.394,76
2013	02	\$ 125.015	2,02%	93	\$ 234.854,06	\$ 25.401.248,82
2013	03	\$ 125.015	2,02%	92	\$ 232.328,75	\$ 25.633.577,56
2013	04	\$ 125.015	2,02%	91	\$ 229.803,43	\$ 25.863.380,99
2013	05	\$ 125.015	2,02%	90	\$ 227.278,12	\$ 26.090.659,12
2013	06	\$ 125.015	2,02%	89	\$ 224.752,81	\$ 26.315.411,92
2013	M13	\$ 125.015	2,02%	89	\$ 224.752,81	\$ 26.540.164,73
2013	07	\$ 125.015	2,02%	88	\$ 222.227,50	\$ 26.762.392,23
2013	08	\$ 125.015	2,02%	87	\$ 219.702,18	\$ 26.982.094,41
2013	09	\$ 125.015	2,02%	86	\$ 217.176,87	\$ 27.199.271,28
2013	10	\$ 125.015	2,02%	85	\$ 214.651,56	\$ 27.413.922,84
2013	11	\$ 125.015	2,02%	84	\$ 212.126,25	\$ 27.626.049,09
2013	12	\$ 125.015	2,02%	83	\$ 209.600,93	\$ 27.835.650,02
2013	M14	\$ 125.015	2,02%	83	\$ 209.600,93	\$ 28.045.250,96
2014	01	\$ 127.441	2,02%	82	\$ 211.092,89	\$ 28.256.343,84

2014	02	\$ 127.441	2,02%	81	\$ 208.518,58	\$ 28.464.862,43
2014	03	\$ 127.441	2,02%	80	\$ 205.944,28	\$ 28.670.806,71
2014	04	\$ 127.441	2,02%	79	\$ 203.369,98	\$ 28.874.176,69
2014	05	\$ 127.441	2,02%	78	\$ 200.795,67	\$ 29.074.972,36
2014	06	\$ 127.441	2,02%	77	\$ 198.221,37	\$ 29.273.193,73
2014	M13	\$ 127.441	2,02%	77	\$ 198.221,37	\$ 29.471.415,10
2014	07	\$ 127.441	2,02%	76	\$ 195.647,07	\$ 29.667.062,17
2014	08	\$ 127.441	2,02%	75	\$ 193.072,76	\$ 29.860.134,93
2014	09	\$ 127.441	2,02%	74	\$ 190.498,46	\$ 30.050.633,40
2014	10	\$ 127.441	2,02%	73	\$ 187.924,16	\$ 30.238.557,55
2014	11	\$ 127.441	2,02%	72	\$ 185.349,85	\$ 30.423.907,41
2014	12	\$ 127.441	2,02%	71	\$ 182.775,55	\$ 30.606.682,95
2014	M14	\$ 127.441	2,02%	71	\$ 182.775,55	\$ 30.789.458,50
2015	01	\$ 132.105	2,02%	70	\$ 186.796,61	\$ 30.976.255,12
2015	02	\$ 132.105	2,02%	69	\$ 184.128,09	\$ 31.160.383,20
2015	03	\$ 132.105	2,02%	68	\$ 181.459,57	\$ 31.341.842,77
2015	04	\$ 132.105	2,02%	67	\$ 178.791,04	\$ 31.520.633,81
2015	05	\$ 132.105	2,02%	66	\$ 176.122,52	\$ 31.696.756,33
2015	06	\$ 132.105	2,02%	65	\$ 173.454,00	\$ 31.870.210,33
2015	M13	\$ 132.105	2,02%	65	\$ 173.454,00	\$ 32.043.664,33
2015	07	\$ 132.105	2,02%	64	\$ 170.785,47	\$ 32.214.449,80
2015	08	\$ 132.105	2,02%	63	\$ 168.116,95	\$ 32.382.566,75
2015	09	\$ 132.105	2,02%	62	\$ 165.448,43	\$ 32.548.015,18
2015	10	\$ 132.105	2,02%	61	\$ 162.779,90	\$ 32.710.795,08
2015	11	\$ 132.105	2,02%	60	\$ 160.111,38	\$ 32.870.906,46
2015	12	\$ 132.105	2,02%	59	\$ 157.442,86	\$ 33.028.349,32
2015	M14	\$ 132.105	2,02%	59	\$ 157.442,86	\$ 33.185.792,18
2016	01	\$ 141.049	2,02%	58	\$ 165.252,56	\$ 33.351.044,74
2016	02	\$ 141.049	2,02%	57	\$ 162.403,38	\$ 33.513.448,11
2016	03	\$ 141.049	2,02%	56	\$ 159.554,19	\$ 33.673.002,31
2016	04	\$ 141.049	2,02%	55	\$ 156.705,01	\$ 33.829.707,32
2016	05	\$ 141.049	2,02%	54	\$ 153.855,83	\$ 33.983.563,15
2016	06	\$ 141.049	2,02%	53	\$ 151.006,65	\$ 34.134.569,80
2016	M13	\$ 141.049	2,02%	53	\$ 151.006,65	\$ 34.285.576,45
2016	07	\$ 141.049	2,02%	52	\$ 148.157,47	\$ 34.433.733,91
2016	08	\$ 141.049	2,02%	51	\$ 145.308,28	\$ 34.579.042,20
2016	09	\$ 141.049	2,02%	50	\$ 142.459,10	\$ 34.721.501,30
2016	10	\$ 141.049	2,02%	49	\$ 139.609,92	\$ 34.861.111,22
2016	11	\$ 141.049	2,02%	48	\$ 136.760,74	\$ 34.997.871,95
2016	12	\$ 141.049	2,02%	47	\$ 133.911,56	\$ 35.131.783,51
2016	M14	\$ 141.049	2,02%	47	\$ 133.911,56	\$ 35.265.695,07
2017	01	\$ 149.159	2,02%	46	\$ 138.598,46	\$ 35.404.293,53
2017	02	\$ 149.159	2,02%	45	\$ 135.585,45	\$ 35.539.878,98
2017	03	\$ 149.159	2,02%	44	\$ 132.572,44	\$ 35.672.451,42
2017	04	\$ 149.159	2,02%	43	\$ 129.559,43	\$ 35.802.010,85
2017	05	\$ 149.159	2,02%	42	\$ 126.546,42	\$ 35.928.557,27
2017	06	\$ 149.159	2,02%	41	\$ 123.533,41	\$ 36.052.090,68
2017	M13	\$ 149.159	2,02%	41	\$ 123.533,41	\$ 36.175.624,09
2017	07	\$ 149.159	2,02%	40	\$ 120.520,40	\$ 36.296.144,49
2017	08	\$ 149.159	2,02%	39	\$ 117.507,39	\$ 36.413.651,88
2017	09	\$ 149.159	2,02%	38	\$ 114.494,38	\$ 36.528.146,26
2017	10	\$ 149.159	2,02%	37	\$ 111.481,37	\$ 36.639.627,63
2017	11	\$ 149.159	2,02%	36	\$ 108.468,36	\$ 36.748.095,99
2017	12	\$ 149.159	2,02%	35	\$ 105.455,35	\$ 36.853.551,34
2017	M14	\$ 149.159	2,02%	35	\$ 105.455,35	\$ 36.959.006,69
2018	01	\$ 155.260	2,02%	34	\$ 106.632,23	\$ 37.065.638,92
2018	02	\$ 155.260	2,02%	33	\$ 103.495,99	\$ 37.169.134,91

2018	03	\$ 155.260	2,02%	32	\$ 100.359,75	\$ 37.269.494,66
2018	04	\$ 155.260	2,02%	31	\$ 97.223,51	\$ 37.366.718,16
2018	05	\$ 155.260	2,02%	30	\$ 94.087,26	\$ 37.460.805,42
2018	06	\$ 155.260	2,02%	29	\$ 90.951,02	\$ 37.551.756,45
2018	M13	\$ 155.260	2,02%	29	\$ 90.951,02	\$ 37.642.707,47
2018	07	\$ 155.260	2,02%	28	\$ 87.814,78	\$ 37.730.522,25
2018	08	\$ 155.260	2,02%	27	\$ 84.678,54	\$ 37.815.200,78
2018	09	\$ 155.260	2,02%	26	\$ 81.542,29	\$ 37.896.743,08
2018	10	\$ 155.260	2,02%	25	\$ 78.406,05	\$ 37.975.149,13
2018	11	\$ 155.260	2,02%	24	\$ 75.269,81	\$ 38.050.418,94
2018	12	\$ 155.260	2,02%	23	\$ 72.133,57	\$ 38.122.552,51
2018	M14	\$ 155.260	2,02%	23	\$ 72.133,57	\$ 38.194.686,08
2019	01	\$ 160.197	2,02%	22	\$ 71.191,44	\$ 38.265.877,52
2019	02	\$ 160.197	2,02%	21	\$ 67.955,47	\$ 38.333.832,99
2019	03	\$ 160.197	2,02%	20	\$ 64.719,49	\$ 38.398.552,48
2019	04	\$ 160.197	2,02%	19	\$ 61.483,52	\$ 38.460.036,00
2019	05	\$ 160.197	2,02%	18	\$ 58.247,54	\$ 38.518.283,54
2019	06	\$ 160.197	2,02%	17	\$ 55.011,57	\$ 38.573.295,11
2019	M13	\$ 160.197	2,02%	17	\$ 55.011,57	\$ 38.628.306,68
2019	07	\$ 160.197	2,02%	16	\$ 51.775,59	\$ 38.680.082,27
2019	08	\$ 160.197	2,02%	15	\$ 48.539,62	\$ 38.728.621,89
2019	09	\$ 160.197	2,02%	14	\$ 45.303,64	\$ 38.773.925,53
2019	10	\$ 160.197	2,02%	13	\$ 42.067,67	\$ 38.815.993,20
2019	11	\$ 160.197	2,02%	12	\$ 38.831,70	\$ 38.854.824,90
2019	12	\$ 160.197	2,02%	11	\$ 35.595,72	\$ 38.890.420,62
2019	M14	\$ 160.197	2,02%	11	\$ 35.595,72	\$ 38.926.016,34
2020	01	\$ 166.284	2,02%	10	\$ 33.589,42	\$ 38.959.605,76
2020	02	\$ 166.284	2,02%	9	\$ 30.230,47	\$ 38.989.836,23
2020	03	\$ 166.284	2,02%	8	\$ 26.871,53	\$ 39.016.707,76
2020	04	\$ 166.284	2,02%	7	\$ 23.512,59	\$ 39.040.220,36
2020	05	\$ 166.284	2,02%	6	\$ 20.153,65	\$ 39.060.374,01
2020	06	\$ 166.284	2,02%	5	\$ 16.794,71	\$ 39.077.168,71
2020	M13	\$ 166.284	2,02%	5	\$ 16.794,71	\$ 39.093.963,42
2020	07	\$ 166.284	2,02%	4	\$ 13.435,77	\$ 39.107.399,19
2020	08	\$ 166.284	2,02%	3	\$ 10.076,82	\$ 39.117.476,01
2020	09	\$ 166.284	2,02%	2	\$ 6.717,88	\$ 39.124.193,90
2020	10	\$ 166.284	2,02%	1	\$ 3.358,94	\$ 39.127.552,84

6. EUSEBIO CASTRO VELÁSQUEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 218.932,81	7,67%	10	\$ 2.189.328,10
2009	\$ 235.724,96	2,00%	14	\$ 3.300.149,39
2010	\$ 240.439,46	3,17%	14	\$ 3.366.152,38
2011	\$ 248.061,39	3,73%	14	\$ 3.472.859,41
2012	\$ 257.314,08	2,44%	14	\$ 3.602.397,07
2013	\$ 263.592,54	1,94%	14	\$ 3.690.295,55
2014	\$ 268.706,23	3,66%	14	\$ 3.761.887,29
2015	\$ 278.540,88	6,77%	14	\$ 3.899.572,36
2016	\$ 297.398,10	5,75%	14	\$ 4.163.573,41
2017	\$ 314.498,49	4,09%	14	\$ 4.402.978,88
2018	\$ 327.361,48	3,18%	14	\$ 4.583.060,72
2019	\$ 337.771,57	3,80%	14	\$ 4.728.802,05
2020	\$ 350.606,89	1,61%	11	\$ 3.856.675,84
				\$ 49.017.732,46

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	05	\$ 218.933	2,02%	150	\$ 663.366,99	\$ 663.366,99
2008	06	\$ 218.933	2,02%	149	\$ 658.944,54	\$ 1.322.311,53
2008	M13	\$ 218.933	2,02%	149	\$ 658.944,54	\$ 1.981.256,08
2008	07	\$ 218.933	2,02%	148	\$ 654.522,10	\$ 2.635.778,17
2008	08	\$ 218.933	2,02%	147	\$ 650.099,65	\$ 3.285.877,82
2008	09	\$ 218.933	2,02%	146	\$ 645.677,20	\$ 3.931.555,03
2008	10	\$ 218.933	2,02%	145	\$ 641.254,76	\$ 4.572.809,78
2008	11	\$ 218.933	2,02%	144	\$ 636.832,31	\$ 5.209.642,09
2008	12	\$ 218.933	2,02%	143	\$ 632.409,86	\$ 5.842.051,96
2008	M14	\$ 218.933	2,02%	143	\$ 632.409,86	\$ 6.474.461,82
2009	01	\$ 235.725	2,02%	142	\$ 676.153,47	\$ 7.150.615,29
2009	02	\$ 235.725	2,02%	141	\$ 671.391,82	\$ 7.822.007,11
2009	03	\$ 235.725	2,02%	140	\$ 666.630,18	\$ 8.488.637,29
2009	04	\$ 235.725	2,02%	139	\$ 661.868,53	\$ 9.150.505,82
2009	05	\$ 235.725	2,02%	138	\$ 657.106,89	\$ 9.807.612,71
2009	06	\$ 235.725	2,02%	137	\$ 652.345,24	\$ 10.459.957,95
2009	M13	\$ 235.725	2,02%	137	\$ 652.345,24	\$ 11.112.303,20
2009	07	\$ 235.725	2,02%	136	\$ 647.583,60	\$ 11.759.886,80
2009	08	\$ 235.725	2,02%	135	\$ 642.821,96	\$ 12.402.708,75
2009	09	\$ 235.725	2,02%	134	\$ 638.060,31	\$ 13.040.769,07
2009	10	\$ 235.725	2,02%	133	\$ 633.298,67	\$ 13.674.067,73
2009	11	\$ 235.725	2,02%	132	\$ 628.537,02	\$ 14.302.604,76
2009	12	\$ 235.725	2,02%	131	\$ 623.775,38	\$ 14.926.380,14
2009	M14	\$ 235.725	2,02%	131	\$ 623.775,38	\$ 15.550.155,52
2010	01	\$ 240.439	2,02%	130	\$ 631.394,01	\$ 16.181.549,53
2010	02	\$ 240.439	2,02%	129	\$ 626.537,13	\$ 16.808.086,66
2010	03	\$ 240.439	2,02%	128	\$ 621.680,26	\$ 17.429.766,92
2010	04	\$ 240.439	2,02%	127	\$ 616.823,38	\$ 18.046.590,30
2010	05	\$ 240.439	2,02%	126	\$ 611.966,50	\$ 18.658.556,80
2010	06	\$ 240.439	2,02%	125	\$ 607.109,63	\$ 19.265.666,43
2010	M13	\$ 240.439	2,02%	125	\$ 607.109,63	\$ 19.872.776,05
2010	07	\$ 240.439	2,02%	124	\$ 602.252,75	\$ 20.475.028,80
2010	08	\$ 240.439	2,02%	123	\$ 597.395,87	\$ 21.072.424,67
2010	09	\$ 240.439	2,02%	122	\$ 592.538,99	\$ 21.664.963,67
2010	10	\$ 240.439	2,02%	121	\$ 587.682,12	\$ 22.252.645,78
2010	11	\$ 240.439	2,02%	120	\$ 582.825,24	\$ 22.835.471,03
2010	12	\$ 240.439	2,02%	119	\$ 577.968,36	\$ 23.413.439,39
2010	M14	\$ 240.439	2,02%	119	\$ 577.968,36	\$ 23.991.407,75
2011	01	\$ 248.061	2,02%	118	\$ 591.279,12	\$ 24.582.686,87
2011	02	\$ 248.061	2,02%	117	\$ 586.268,28	\$ 25.168.955,15
2011	03	\$ 248.061	2,02%	116	\$ 581.257,44	\$ 25.750.212,59
2011	04	\$ 248.061	2,02%	115	\$ 576.246,60	\$ 26.326.459,19
2011	05	\$ 248.061	2,02%	114	\$ 571.235,76	\$ 26.897.694,96
2011	06	\$ 248.061	2,02%	113	\$ 566.224,92	\$ 27.463.919,88
2011	M13	\$ 248.061	2,02%	113	\$ 566.224,92	\$ 28.030.144,80
2011	07	\$ 248.061	2,02%	112	\$ 561.214,08	\$ 28.591.358,88
2011	08	\$ 248.061	2,02%	111	\$ 556.203,24	\$ 29.147.562,12
2011	09	\$ 248.061	2,02%	110	\$ 551.192,40	\$ 29.698.754,52
2011	10	\$ 248.061	2,02%	109	\$ 546.181,56	\$ 30.244.936,08
2011	11	\$ 248.061	2,02%	108	\$ 541.170,72	\$ 30.786.106,80
2011	12	\$ 248.061	2,02%	107	\$ 536.159,88	\$ 31.322.266,68
2011	M14	\$ 248.061	2,02%	107	\$ 536.159,88	\$ 31.858.426,56
2012	01	\$ 257.314	2,02%	106	\$ 550.960,90	\$ 32.409.387,46
2012	02	\$ 257.314	2,02%	105	\$ 545.763,16	\$ 32.955.150,62
2012	03	\$ 257.314	2,02%	104	\$ 540.565,41	\$ 0,00

2012	04	\$ 257.314	2,02%	103	\$ 535.367,67	\$ 34.031.083,69
2012	05	\$ 257.314	2,02%	102	\$ 530.169,92	\$ 34.561.253,62
2012	06	\$ 257.314	2,02%	101	\$ 524.972,18	\$ 35.086.225,79
2012	M13	\$ 257.314	2,02%	101	\$ 524.972,18	\$ 35.611.197,97
2012	07	\$ 257.314	2,02%	100	\$ 519.774,43	\$ 36.130.972,41
2012	08	\$ 257.314	2,02%	99	\$ 514.576,69	\$ 36.645.549,10
2012	09	\$ 257.314	2,02%	98	\$ 509.378,95	\$ 37.154.928,04
2012	10	\$ 257.314	2,02%	97	\$ 504.181,20	\$ 37.659.109,24
2012	11	\$ 257.314	2,02%	96	\$ 498.983,46	\$ 38.158.092,70
2012	12	\$ 257.314	2,02%	95	\$ 493.785,71	\$ 38.651.878,41
2012	M14	\$ 257.314	2,02%	95	\$ 493.785,71	\$ 39.145.664,12
2013	01	\$ 263.593	2,02%	94	\$ 500.509,51	\$ 39.646.173,64
2013	02	\$ 263.593	2,02%	93	\$ 495.184,94	\$ 40.141.358,58
2013	03	\$ 263.593	2,02%	92	\$ 489.860,38	\$ 40.631.218,96
2013	04	\$ 263.593	2,02%	91	\$ 484.535,81	\$ 41.115.754,76
2013	05	\$ 263.593	2,02%	90	\$ 479.211,24	\$ 41.594.966,00
2013	06	\$ 263.593	2,02%	89	\$ 473.886,67	\$ 42.068.852,67
2013	M13	\$ 263.593	2,02%	89	\$ 473.886,67	\$ 42.542.739,33
2013	07	\$ 263.593	2,02%	88	\$ 468.562,10	\$ 43.011.301,43
2013	08	\$ 263.593	2,02%	87	\$ 463.237,53	\$ 43.474.538,96
2013	09	\$ 263.593	2,02%	86	\$ 457.912,96	\$ 43.932.451,92
2013	10	\$ 263.593	2,02%	85	\$ 452.588,39	\$ 44.385.040,31
2013	11	\$ 263.593	2,02%	84	\$ 447.263,82	\$ 44.832.304,13
2013	12	\$ 263.593	2,02%	83	\$ 441.939,25	\$ 45.274.243,39
2013	M14	\$ 263.593	2,02%	83	\$ 441.939,25	\$ 45.716.182,64
2014	01	\$ 268.706	2,02%	82	\$ 445.085,01	\$ 46.161.267,64
2014	02	\$ 268.706	2,02%	81	\$ 439.657,14	\$ 46.600.924,79
2014	03	\$ 268.706	2,02%	80	\$ 434.229,28	\$ 47.035.154,06
2014	04	\$ 268.706	2,02%	79	\$ 428.801,41	\$ 47.463.955,47
2014	05	\$ 268.706	2,02%	78	\$ 423.373,54	\$ 47.887.329,01
2014	06	\$ 268.706	2,02%	77	\$ 417.945,68	\$ 48.305.274,69
2014	M13	\$ 268.706	2,02%	77	\$ 417.945,68	\$ 48.723.220,37
2014	07	\$ 268.706	2,02%	76	\$ 412.517,81	\$ 49.135.738,18
2014	08	\$ 268.706	2,02%	75	\$ 407.089,95	\$ 49.542.828,13
2014	09	\$ 268.706	2,02%	74	\$ 401.662,08	\$ 49.944.490,21
2014	10	\$ 268.706	2,02%	73	\$ 396.234,21	\$ 50.340.724,42
2014	11	\$ 268.706	2,02%	72	\$ 390.806,35	\$ 50.731.530,77
2014	12	\$ 268.706	2,02%	71	\$ 385.378,48	\$ 51.116.909,25
2014	M14	\$ 268.706	2,02%	71	\$ 385.378,48	\$ 51.502.287,73
2015	01	\$ 278.541	2,02%	70	\$ 393.856,81	\$ 51.896.144,54
2015	02	\$ 278.541	2,02%	69	\$ 388.230,28	\$ 52.284.374,82
2015	03	\$ 278.541	2,02%	68	\$ 382.603,76	\$ 52.666.978,58
2015	04	\$ 278.541	2,02%	67	\$ 376.977,23	\$ 53.043.955,81
2015	05	\$ 278.541	2,02%	66	\$ 371.350,71	\$ 53.415.306,52
2015	06	\$ 278.541	2,02%	65	\$ 365.724,18	\$ 53.781.030,70
2015	M13	\$ 278.541	2,02%	65	\$ 365.724,18	\$ 54.146.754,88
2015	07	\$ 278.541	2,02%	64	\$ 360.097,65	\$ 54.506.852,53
2015	08	\$ 278.541	2,02%	63	\$ 354.471,13	\$ 54.861.323,66
2015	09	\$ 278.541	2,02%	62	\$ 348.844,60	\$ 55.210.168,26
2015	10	\$ 278.541	2,02%	61	\$ 343.218,08	\$ 55.553.386,34
2015	11	\$ 278.541	2,02%	60	\$ 337.591,55	\$ 55.890.977,89
2015	12	\$ 278.541	2,02%	59	\$ 331.965,02	\$ 56.222.942,91
2015	M14	\$ 278.541	2,02%	59	\$ 331.965,02	\$ 56.554.907,93
2016	01	\$ 297.398	2,02%	58	\$ 348.431,61	\$ 56.903.339,55
2016	02	\$ 297.398	2,02%	57	\$ 342.424,17	\$ 57.245.763,72
2016	03	\$ 297.398	2,02%	56	\$ 336.416,73	\$ 57.582.180,45
2016	04	\$ 297.398	2,02%	55	\$ 330.409,29	\$ 57.912.589,74

2016	05	\$ 297.398	2,02%	54	\$ 324.401,85	\$ 58.236.991,59
2016	06	\$ 297.398	2,02%	53	\$ 318.394,41	\$ 58.555.386,00
2016	M13	\$ 297.398	2,02%	53	\$ 318.394,41	\$ 58.873.780,41
2016	07	\$ 297.398	2,02%	52	\$ 312.386,97	\$ 59.186.167,37
2016	08	\$ 297.398	2,02%	51	\$ 306.379,52	\$ 59.492.546,90
2016	09	\$ 297.398	2,02%	50	\$ 300.372,08	\$ 59.792.918,98
2016	10	\$ 297.398	2,02%	49	\$ 294.364,64	\$ 60.087.283,62
2016	11	\$ 297.398	2,02%	48	\$ 288.357,20	\$ 60.375.640,82
2016	12	\$ 297.398	2,02%	47	\$ 282.349,76	\$ 60.657.990,57
2016	M14	\$ 297.398	2,02%	47	\$ 282.349,76	\$ 60.940.340,33
2017	01	\$ 314.498	2,02%	46	\$ 292.232,00	\$ 61.232.572,33
2017	02	\$ 314.498	2,02%	45	\$ 285.879,13	\$ 61.518.451,46
2017	03	\$ 314.498	2,02%	44	\$ 279.526,26	\$ 61.797.977,72
2017	04	\$ 314.498	2,02%	43	\$ 273.173,39	\$ 62.071.151,11
2017	05	\$ 314.498	2,02%	42	\$ 266.820,52	\$ 62.337.971,63
2017	06	\$ 314.498	2,02%	41	\$ 260.467,65	\$ 62.598.439,28
2017	M13	\$ 314.498	2,02%	41	\$ 260.467,65	\$ 62.858.906,93
2017	07	\$ 314.498	2,02%	40	\$ 254.114,78	\$ 63.113.021,71
2017	08	\$ 314.498	2,02%	39	\$ 247.761,91	\$ 63.360.783,62
2017	09	\$ 314.498	2,02%	38	\$ 241.409,04	\$ 63.602.192,66
2017	10	\$ 314.498	2,02%	37	\$ 235.056,17	\$ 63.837.248,84
2017	11	\$ 314.498	2,02%	36	\$ 228.703,30	\$ 64.065.952,14
2017	12	\$ 314.498	2,02%	35	\$ 222.350,43	\$ 64.288.302,57
2017	M14	\$ 314.498	2,02%	35	\$ 222.350,43	\$ 64.510.653,01
2018	01	\$ 327.361	2,02%	34	\$ 224.831,86	\$ 64.735.484,87
2018	02	\$ 327.361	2,02%	33	\$ 218.219,16	\$ 64.953.704,03
2018	03	\$ 327.361	2,02%	32	\$ 211.606,46	\$ 65.165.310,49
2018	04	\$ 327.361	2,02%	31	\$ 204.993,76	\$ 65.370.304,25
2018	05	\$ 327.361	2,02%	30	\$ 198.381,06	\$ 65.568.685,31
2018	06	\$ 327.361	2,02%	29	\$ 191.768,35	\$ 65.760.453,66
2018	M13	\$ 327.361	2,02%	29	\$ 191.768,35	\$ 65.952.222,02
2018	07	\$ 327.361	2,02%	28	\$ 185.155,65	\$ 66.137.377,67
2018	08	\$ 327.361	2,02%	27	\$ 178.542,95	\$ 66.315.920,62
2018	09	\$ 327.361	2,02%	26	\$ 171.930,25	\$ 66.487.850,87
2018	10	\$ 327.361	2,02%	25	\$ 165.317,55	\$ 66.653.168,42
2018	11	\$ 327.361	2,02%	24	\$ 158.704,85	\$ 66.811.873,27
2018	12	\$ 327.361	2,02%	23	\$ 152.092,14	\$ 66.963.965,41
2018	M14	\$ 327.361	2,02%	23	\$ 152.092,14	\$ 67.116.057,55
2019	01	\$ 337.772	2,02%	22	\$ 150.105,69	\$ 67.266.163,24
2019	02	\$ 337.772	2,02%	21	\$ 143.282,70	\$ 67.409.445,94
2019	03	\$ 337.772	2,02%	20	\$ 136.459,72	\$ 67.545.905,66
2019	04	\$ 337.772	2,02%	19	\$ 129.636,73	\$ 67.675.542,39
2019	05	\$ 337.772	2,02%	18	\$ 122.813,74	\$ 67.798.356,13
2019	06	\$ 337.772	2,02%	17	\$ 115.990,76	\$ 67.914.346,89
2019	M13	\$ 337.772	2,02%	17	\$ 115.990,76	\$ 68.030.337,65
2019	07	\$ 337.772	2,02%	16	\$ 109.167,77	\$ 68.139.505,42
2019	08	\$ 337.772	2,02%	15	\$ 102.344,79	\$ 68.241.850,21
2019	09	\$ 337.772	2,02%	14	\$ 95.521,80	\$ 68.337.372,01
2019	10	\$ 337.772	2,02%	13	\$ 88.698,82	\$ 68.426.070,83
2019	11	\$ 337.772	2,02%	12	\$ 81.875,83	\$ 68.507.946,66
2019	12	\$ 337.772	2,02%	11	\$ 75.052,84	\$ 68.582.999,50
2019	M14	\$ 337.772	2,02%	11	\$ 75.052,84	\$ 68.658.052,35
2020	01	\$ 350.607	2,02%	10	\$ 70.822,59	\$ 68.728.874,94
2020	02	\$ 350.607	2,02%	9	\$ 63.740,33	\$ 68.792.615,27
2020	03	\$ 350.607	2,02%	8	\$ 56.658,07	\$ 68.849.273,35
2020	04	\$ 350.607	2,02%	7	\$ 49.575,81	\$ 68.898.849,16
2020	05	\$ 350.607	2,02%	6	\$ 42.493,56	\$ 68.941.342,72

2020	06	\$ 350.607	2,02%	5	\$ 35.411,30	\$ 68.976.754,01
2020	M13	\$ 350.607	2,02%	5	\$ 35.411,30	\$ 69.012.165,31
2020	07	\$ 350.607	2,02%	4	\$ 28.329,04	\$ 69.040.494,35
2020	08	\$ 350.607	2,02%	3	\$ 21.246,78	\$ 69.061.741,12
2020	09	\$ 350.607	2,02%	2	\$ 14.164,52	\$ 69.075.905,64
2020	10	\$ 350.607	2,02%	1	\$ 7.082,26	\$ 69.082.987,90

7. JAVIER CONSUEGRA MORA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 82.434,08	6,49%	4	\$ 329.736,32
2004	\$ 87.784,05	5,50%	14	\$ 1.228.976,73
2005	\$ 92.612,17	4,85%	14	\$ 1.296.570,44
2006	\$ 97.103,87	4,48%	14	\$ 1.359.454,11
2007	\$ 101.454,12	5,69%	14	\$ 1.420.357,66
2008	\$ 107.226,86	7,67%	14	\$ 1.501.176,01
2009	\$ 115.451,16	2,00%	14	\$ 1.616.316,21
2010	\$ 117.760,18	3,17%	14	\$ 1.648.642,53
2011	\$ 121.493,18	3,73%	14	\$ 1.700.904,50
2012	\$ 126.024,87	2,44%	14	\$ 1.764.348,24
2013	\$ 129.099,88	1,94%	14	\$ 1.807.398,33
2014	\$ 131.604,42	3,66%	14	\$ 1.842.461,86
2015	\$ 136.421,14	6,77%	14	\$ 1.909.895,96
2016	\$ 145.656,85	5,75%	14	\$ 2.039.195,92
2017	\$ 154.032,12	4,09%	14	\$ 2.156.449,69
2018	\$ 160.332,03	3,18%	14	\$ 2.244.648,48
2019	\$ 165.430,59	3,80%	14	\$ 2.316.028,30
2020	\$ 171.716,96	1,61%	11	\$ 1.888.886,51
				\$ 28.512.734,75

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2003	10	\$ 82.434	2,02%	205	\$ 341.359,19	\$ 341.359,19
2003	11	\$ 82.434	2,02%	204	\$ 339.694,03	\$ 681.053,22
2003	12	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.019.082,08
2003	M14	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.357.110,94
2004	01	\$ 87.784	2,02%	202	\$ 358.194,04	\$ 1.715.304,99
2004	02	\$ 87.784	2,02%	201	\$ 356.420,81	\$ 2.071.725,79
2004	03	\$ 87.784	2,02%	200	\$ 354.647,57	\$ 2.426.373,36
2004	04	\$ 87.784	2,02%	199	\$ 352.874,33	\$ 2.779.247,69
2004	05	\$ 87.784	2,02%	198	\$ 351.101,09	\$ 3.130.348,79
2004	06	\$ 87.784	2,02%	197	\$ 349.327,86	\$ 3.479.676,64
2004	M13	\$ 87.784	2,02%	197	\$ 349.327,86	\$ 3.829.004,50
2004	07	\$ 87.784	2,02%	196	\$ 347.554,62	\$ 4.176.559,12
2004	08	\$ 87.784	2,02%	195	\$ 345.781,38	\$ 4.522.340,50
2004	09	\$ 87.784	2,02%	194	\$ 344.008,14	\$ 4.866.348,64
2004	10	\$ 87.784	2,02%	193	\$ 342.234,90	\$ 5.208.583,54
2004	11	\$ 87.784	2,02%	192	\$ 340.461,67	\$ 5.549.045,21
2004	12	\$ 87.784	2,02%	191	\$ 338.688,43	\$ 5.887.733,64
2004	M14	\$ 87.784	2,02%	191	\$ 338.688,43	\$ 6.226.422,07
2005	01	\$ 92.612	2,02%	190	\$ 355.445,53	\$ 6.581.867,59
2005	02	\$ 92.612	2,02%	189	\$ 353.574,76	\$ 6.935.442,35
2005	03	\$ 92.612	2,02%	188	\$ 351.703,99	\$ 7.287.146,35
2005	04	\$ 92.612	2,02%	187	\$ 349.833,23	\$ 7.636.979,58
2005	05	\$ 92.612	2,02%	186	\$ 347.962,46	\$ 7.984.942,04

2005	06	\$ 92.612	2,02%	185	\$ 346.091,70	\$ 8.331.033,74
2005	M13	\$ 92.612	2,02%	185	\$ 346.091,70	\$ 8.677.125,43
2005	07	\$ 92.612	2,02%	184	\$ 344.220,93	\$ 9.021.346,36
2005	08	\$ 92.612	2,02%	183	\$ 342.350,16	\$ 9.363.696,53
2005	09	\$ 92.612	2,02%	182	\$ 340.479,40	\$ 9.704.175,93
2005	10	\$ 92.612	2,02%	181	\$ 338.608,63	\$ 10.042.784,56
2005	11	\$ 92.612	2,02%	180	\$ 336.737,87	\$ 10.379.522,43
2005	12	\$ 92.612	2,02%	179	\$ 334.867,10	\$ 10.714.389,53
2005	M14	\$ 92.612	2,02%	179	\$ 334.867,10	\$ 11.049.256,63
2006	01	\$ 97.104	2,02%	178	\$ 349.146,66	\$ 11.398.403,29
2006	02	\$ 97.104	2,02%	177	\$ 347.185,16	\$ 11.745.588,45
2006	03	\$ 97.104	2,02%	176	\$ 345.223,66	\$ 12.090.812,11
2006	04	\$ 97.104	2,02%	175	\$ 343.262,16	\$ 12.434.074,27
2006	05	\$ 97.104	2,02%	174	\$ 341.300,67	\$ 12.775.374,94
2006	06	\$ 97.104	2,02%	173	\$ 339.339,17	\$ 13.114.714,10
2006	M13	\$ 97.104	2,02%	173	\$ 339.339,17	\$ 13.454.053,27
2006	07	\$ 97.104	2,02%	172	\$ 337.377,67	\$ 13.791.430,94
2006	08	\$ 97.104	2,02%	171	\$ 335.416,17	\$ 14.126.847,11
2006	09	\$ 97.104	2,02%	170	\$ 333.454,67	\$ 14.460.301,78
2006	10	\$ 97.104	2,02%	169	\$ 331.493,17	\$ 14.791.794,96
2006	11	\$ 97.104	2,02%	168	\$ 329.531,68	\$ 15.121.326,63
2006	12	\$ 97.104	2,02%	167	\$ 327.570,18	\$ 15.448.896,81
2006	M14	\$ 97.104	2,02%	167	\$ 327.570,18	\$ 15.776.466,99
2007	01	\$ 101.454	2,02%	166	\$ 340.195,95	\$ 16.116.662,94
2007	02	\$ 101.454	2,02%	165	\$ 338.146,58	\$ 16.454.809,52
2007	03	\$ 101.454	2,02%	164	\$ 336.097,20	\$ 16.790.906,72
2007	04	\$ 101.454	2,02%	163	\$ 334.047,83	\$ 17.124.954,55
2007	05	\$ 101.454	2,02%	162	\$ 331.998,46	\$ 17.456.953,01
2007	06	\$ 101.454	2,02%	161	\$ 329.949,08	\$ 17.786.902,09
2007	M13	\$ 101.454	2,02%	161	\$ 329.949,08	\$ 18.116.851,17
2007	07	\$ 101.454	2,02%	160	\$ 327.899,71	\$ 18.444.750,88
2007	08	\$ 101.454	2,02%	159	\$ 325.850,34	\$ 18.770.601,22
2007	09	\$ 101.454	2,02%	158	\$ 323.800,96	\$ 19.094.402,18
2007	10	\$ 101.454	2,02%	157	\$ 321.751,59	\$ 19.416.153,77
2007	11	\$ 101.454	2,02%	156	\$ 319.702,22	\$ 19.735.855,99
2007	12	\$ 101.454	2,02%	155	\$ 317.652,84	\$ 20.053.508,84
2007	M14	\$ 101.454	2,02%	155	\$ 317.652,84	\$ 20.371.161,68
2008	01	\$ 107.227	2,02%	154	\$ 333.561,31	\$ 20.704.722,99
2008	02	\$ 107.227	2,02%	153	\$ 331.395,33	\$ 21.036.118,32
2008	03	\$ 107.227	2,02%	152	\$ 329.229,34	\$ 21.365.347,66
2008	04	\$ 107.227	2,02%	151	\$ 327.063,36	\$ 21.692.411,02
2008	05	\$ 107.227	2,02%	150	\$ 324.897,38	\$ 22.017.308,40
2008	06	\$ 107.227	2,02%	149	\$ 322.731,40	\$ 22.340.039,79
2008	M13	\$ 107.227	2,02%	149	\$ 322.731,40	\$ 22.662.771,19
2008	07	\$ 107.227	2,02%	148	\$ 320.565,41	\$ 22.983.336,60
2008	08	\$ 107.227	2,02%	147	\$ 318.399,43	\$ 23.301.736,03
2008	09	\$ 107.227	2,02%	146	\$ 316.233,45	\$ 23.617.969,48
2008	10	\$ 107.227	2,02%	145	\$ 314.067,47	\$ 23.932.036,95
2008	11	\$ 107.227	2,02%	144	\$ 311.901,48	\$ 24.243.938,43
2008	12	\$ 107.227	2,02%	143	\$ 309.735,50	\$ 24.553.673,93
2008	M14	\$ 107.227	2,02%	143	\$ 309.735,50	\$ 24.863.409,43
2009	01	\$ 115.451	2,02%	142	\$ 331.160,10	\$ 25.194.569,53
2009	02	\$ 115.451	2,02%	141	\$ 328.827,99	\$ 25.523.397,52
2009	03	\$ 115.451	2,02%	140	\$ 326.495,87	\$ 25.849.893,40
2009	04	\$ 115.451	2,02%	139	\$ 324.163,76	\$ 26.174.057,16
2009	05	\$ 115.451	2,02%	138	\$ 321.831,65	\$ 26.495.888,80
2009	06	\$ 115.451	2,02%	137	\$ 319.499,53	\$ 26.815.388,34

2009	M13	\$ 115.451	2,02%	137	\$ 319.499,53	\$ 27.134.887,87
2009	07	\$ 115.451	2,02%	136	\$ 317.167,42	\$ 27.452.055,29
2009	08	\$ 115.451	2,02%	135	\$ 314.835,31	\$ 27.766.890,60
2009	09	\$ 115.451	2,02%	134	\$ 312.503,19	\$ 28.079.393,79
2009	10	\$ 115.451	2,02%	133	\$ 310.171,08	\$ 28.389.564,87
2009	11	\$ 115.451	2,02%	132	\$ 307.838,97	\$ 28.697.403,84
2009	12	\$ 115.451	2,02%	131	\$ 305.506,85	\$ 29.002.910,69
2009	M14	\$ 115.451	2,02%	131	\$ 305.506,85	\$ 29.308.417,54
2010	01	\$ 117.760	2,02%	130	\$ 309.238,23	\$ 29.617.655,78
2010	02	\$ 117.760	2,02%	129	\$ 306.859,48	\$ 29.924.515,26
2010	03	\$ 117.760	2,02%	128	\$ 304.480,72	\$ 30.228.995,98
2010	04	\$ 117.760	2,02%	127	\$ 302.101,97	\$ 30.531.097,95
2010	05	\$ 117.760	2,02%	126	\$ 299.723,21	\$ 30.830.821,16
2010	06	\$ 117.760	2,02%	125	\$ 297.344,46	\$ 31.128.165,61
2010	M13	\$ 117.760	2,02%	125	\$ 297.344,46	\$ 31.425.510,07
2010	07	\$ 117.760	2,02%	124	\$ 294.965,70	\$ 31.720.475,77
2010	08	\$ 117.760	2,02%	123	\$ 292.586,95	\$ 32.013.062,72
2010	09	\$ 117.760	2,02%	122	\$ 290.208,19	\$ 32.303.270,91
2010	10	\$ 117.760	2,02%	121	\$ 287.829,43	\$ 32.591.100,34
2010	11	\$ 117.760	2,02%	120	\$ 285.450,68	\$ 32.876.551,02
2010	12	\$ 117.760	2,02%	119	\$ 283.071,92	\$ 33.159.622,94
2010	M14	\$ 117.760	2,02%	119	\$ 283.071,92	\$ 33.442.694,86
2011	01	\$ 121.493	2,02%	118	\$ 289.591,14	\$ 33.732.286,00
2011	02	\$ 121.493	2,02%	117	\$ 287.136,98	\$ 34.019.422,98
2011	03	\$ 121.493	2,02%	116	\$ 284.682,82	\$ 34.304.105,80
2011	04	\$ 121.493	2,02%	115	\$ 282.228,65	\$ 34.586.334,45
2011	05	\$ 121.493	2,02%	114	\$ 279.774,49	\$ 34.866.108,94
2011	06	\$ 121.493	2,02%	113	\$ 277.320,33	\$ 35.143.429,27
2011	M13	\$ 121.493	2,02%	113	\$ 277.320,33	\$ 35.420.749,60
2011	07	\$ 121.493	2,02%	112	\$ 274.866,17	\$ 35.695.615,77
2011	08	\$ 121.493	2,02%	111	\$ 272.412,00	\$ 35.968.027,77
2011	09	\$ 121.493	2,02%	110	\$ 269.957,84	\$ 36.237.985,61
2011	10	\$ 121.493	2,02%	109	\$ 267.503,68	\$ 36.505.489,29
2011	11	\$ 121.493	2,02%	108	\$ 265.049,52	\$ 36.770.538,81
2011	12	\$ 121.493	2,02%	107	\$ 262.595,36	\$ 37.033.134,17
2011	M14	\$ 121.493	2,02%	107	\$ 262.595,36	\$ 37.295.729,52
2012	01	\$ 126.025	2,02%	106	\$ 269.844,46	\$ 37.565.573,98
2012	02	\$ 126.025	2,02%	105	\$ 267.298,76	\$ 37.832.872,74
2012	03	\$ 126.025	2,02%	104	\$ 264.753,06	\$ 0,00
2012	04	\$ 126.025	2,02%	103	\$ 262.207,35	\$ 38.359.833,15
2012	05	\$ 126.025	2,02%	102	\$ 259.661,65	\$ 38.619.494,80
2012	06	\$ 126.025	2,02%	101	\$ 257.115,95	\$ 38.876.610,75
2012	M13	\$ 126.025	2,02%	101	\$ 257.115,95	\$ 39.133.726,70
2012	07	\$ 126.025	2,02%	100	\$ 254.570,25	\$ 39.388.296,94
2012	08	\$ 126.025	2,02%	99	\$ 252.024,54	\$ 39.640.321,49
2012	09	\$ 126.025	2,02%	98	\$ 249.478,84	\$ 39.889.800,33
2012	10	\$ 126.025	2,02%	97	\$ 246.933,14	\$ 40.136.733,46
2012	11	\$ 126.025	2,02%	96	\$ 244.387,44	\$ 40.381.120,90
2012	12	\$ 126.025	2,02%	95	\$ 241.841,73	\$ 40.622.962,63
2012	M14	\$ 126.025	2,02%	95	\$ 241.841,73	\$ 40.864.804,37
2013	01	\$ 129.100	2,02%	94	\$ 245.134,85	\$ 41.109.939,22
2013	02	\$ 129.100	2,02%	93	\$ 242.527,04	\$ 41.352.466,26
2013	03	\$ 129.100	2,02%	92	\$ 239.919,22	\$ 41.592.385,48
2013	04	\$ 129.100	2,02%	91	\$ 237.311,40	\$ 41.829.696,88
2013	05	\$ 129.100	2,02%	90	\$ 234.703,58	\$ 42.064.400,46
2013	06	\$ 129.100	2,02%	89	\$ 232.095,77	\$ 42.296.496,23
2013	M13	\$ 129.100	2,02%	89	\$ 232.095,77	\$ 42.528.591,99

2013	07	\$ 129.100	2,02%	88	\$ 229.487,95	\$ 42.758.079,94
2013	08	\$ 129.100	2,02%	87	\$ 226.880,13	\$ 42.984.960,07
2013	09	\$ 129.100	2,02%	86	\$ 224.272,31	\$ 43.209.232,38
2013	10	\$ 129.100	2,02%	85	\$ 221.664,50	\$ 43.430.896,88
2013	11	\$ 129.100	2,02%	84	\$ 219.056,68	\$ 43.649.953,56
2013	12	\$ 129.100	2,02%	83	\$ 216.448,86	\$ 43.866.402,42
2013	M14	\$ 129.100	2,02%	83	\$ 216.448,86	\$ 44.082.851,28
2014	01	\$ 131.604	2,02%	82	\$ 217.989,56	\$ 44.300.840,84
2014	02	\$ 131.604	2,02%	81	\$ 215.331,15	\$ 44.516.171,99
2014	03	\$ 131.604	2,02%	80	\$ 212.672,74	\$ 44.728.844,73
2014	04	\$ 131.604	2,02%	79	\$ 210.014,33	\$ 44.938.859,06
2014	05	\$ 131.604	2,02%	78	\$ 207.355,92	\$ 45.146.214,98
2014	06	\$ 131.604	2,02%	77	\$ 204.697,51	\$ 45.350.912,49
2014	M13	\$ 131.604	2,02%	77	\$ 204.697,51	\$ 45.555.610,01
2014	07	\$ 131.604	2,02%	76	\$ 202.039,10	\$ 45.757.649,11
2014	08	\$ 131.604	2,02%	75	\$ 199.380,69	\$ 45.957.029,80
2014	09	\$ 131.604	2,02%	74	\$ 196.722,28	\$ 46.153.752,09
2014	10	\$ 131.604	2,02%	73	\$ 194.063,88	\$ 46.347.815,96
2014	11	\$ 131.604	2,02%	72	\$ 191.405,47	\$ 46.539.221,43
2014	12	\$ 131.604	2,02%	71	\$ 188.747,06	\$ 46.727.968,49
2014	M14	\$ 131.604	2,02%	71	\$ 188.747,06	\$ 46.916.715,55
2015	01	\$ 136.421	2,02%	70	\$ 192.899,49	\$ 47.109.615,04
2015	02	\$ 136.421	2,02%	69	\$ 190.143,79	\$ 47.299.758,82
2015	03	\$ 136.421	2,02%	68	\$ 187.388,08	\$ 47.487.146,90
2015	04	\$ 136.421	2,02%	67	\$ 184.632,37	\$ 47.671.779,27
2015	05	\$ 136.421	2,02%	66	\$ 181.876,66	\$ 47.853.655,94
2015	06	\$ 136.421	2,02%	65	\$ 179.120,96	\$ 48.032.776,90
2015	M13	\$ 136.421	2,02%	65	\$ 179.120,96	\$ 48.211.897,85
2015	07	\$ 136.421	2,02%	64	\$ 176.365,25	\$ 48.388.263,10
2015	08	\$ 136.421	2,02%	63	\$ 173.609,54	\$ 48.561.872,65
2015	09	\$ 136.421	2,02%	62	\$ 170.853,84	\$ 48.732.726,48
2015	10	\$ 136.421	2,02%	61	\$ 168.098,13	\$ 48.900.824,61
2015	11	\$ 136.421	2,02%	60	\$ 165.342,42	\$ 49.066.167,03
2015	12	\$ 136.421	2,02%	59	\$ 162.586,72	\$ 49.228.753,75
2015	M14	\$ 136.421	2,02%	59	\$ 162.586,72	\$ 49.391.340,46
2016	01	\$ 145.657	2,02%	58	\$ 170.651,57	\$ 49.561.992,03
2016	02	\$ 145.657	2,02%	57	\$ 167.709,30	\$ 49.729.701,33
2016	03	\$ 145.657	2,02%	56	\$ 164.767,03	\$ 49.894.468,36
2016	04	\$ 145.657	2,02%	55	\$ 161.824,76	\$ 50.056.293,12
2016	05	\$ 145.657	2,02%	54	\$ 158.882,49	\$ 50.215.175,62
2016	06	\$ 145.657	2,02%	53	\$ 155.940,23	\$ 50.371.115,84
2016	M13	\$ 145.657	2,02%	53	\$ 155.940,23	\$ 50.527.056,07
2016	07	\$ 145.657	2,02%	52	\$ 152.997,96	\$ 50.680.054,02
2016	08	\$ 145.657	2,02%	51	\$ 150.055,69	\$ 50.830.109,71
2016	09	\$ 145.657	2,02%	50	\$ 147.113,42	\$ 50.977.223,13
2016	10	\$ 145.657	2,02%	49	\$ 144.171,15	\$ 51.121.394,28
2016	11	\$ 145.657	2,02%	48	\$ 141.228,88	\$ 51.262.623,17
2016	12	\$ 145.657	2,02%	47	\$ 138.286,61	\$ 51.400.909,78
2016	M14	\$ 145.657	2,02%	47	\$ 138.286,61	\$ 51.539.196,40
2017	01	\$ 154.032	2,02%	46	\$ 143.126,65	\$ 51.682.323,04
2017	02	\$ 154.032	2,02%	45	\$ 140.015,20	\$ 51.822.338,24
2017	03	\$ 154.032	2,02%	44	\$ 136.903,75	\$ 51.959.241,99
2017	04	\$ 154.032	2,02%	43	\$ 133.792,30	\$ 52.093.034,29
2017	05	\$ 154.032	2,02%	42	\$ 130.680,85	\$ 52.223.715,14
2017	06	\$ 154.032	2,02%	41	\$ 127.569,40	\$ 52.351.284,54
2017	M13	\$ 154.032	2,02%	41	\$ 127.569,40	\$ 52.478.853,94
2017	07	\$ 154.032	2,02%	40	\$ 124.457,95	\$ 52.603.311,90

2017	08	\$ 154.032	2,02%	39	\$ 121.346,50	\$ 52.724.658,40
2017	09	\$ 154.032	2,02%	38	\$ 118.235,06	\$ 52.842.893,46
2017	10	\$ 154.032	2,02%	37	\$ 115.123,61	\$ 52.958.017,06
2017	11	\$ 154.032	2,02%	36	\$ 112.012,16	\$ 53.070.029,22
2017	12	\$ 154.032	2,02%	35	\$ 108.900,71	\$ 53.178.929,93
2017	M14	\$ 154.032	2,02%	35	\$ 108.900,71	\$ 53.287.830,64
2018	01	\$ 160.332	2,02%	34	\$ 110.116,04	\$ 53.397.946,68
2018	02	\$ 160.332	2,02%	33	\$ 106.877,33	\$ 53.504.824,02
2018	03	\$ 160.332	2,02%	32	\$ 103.638,63	\$ 53.608.462,64
2018	04	\$ 160.332	2,02%	31	\$ 100.399,92	\$ 53.708.862,56
2018	05	\$ 160.332	2,02%	30	\$ 97.161,21	\$ 53.806.023,78
2018	06	\$ 160.332	2,02%	29	\$ 93.922,51	\$ 53.899.946,28
2018	M13	\$ 160.332	2,02%	29	\$ 93.922,51	\$ 53.993.868,79
2018	07	\$ 160.332	2,02%	28	\$ 90.683,80	\$ 54.084.552,59
2018	08	\$ 160.332	2,02%	27	\$ 87.445,09	\$ 54.171.997,68
2018	09	\$ 160.332	2,02%	26	\$ 84.206,38	\$ 54.256.204,06
2018	10	\$ 160.332	2,02%	25	\$ 80.967,68	\$ 54.337.171,74
2018	11	\$ 160.332	2,02%	24	\$ 77.728,97	\$ 54.414.900,71
2018	12	\$ 160.332	2,02%	23	\$ 74.490,26	\$ 54.489.390,97
2018	M14	\$ 160.332	2,02%	23	\$ 74.490,26	\$ 54.563.881,24
2019	01	\$ 165.431	2,02%	22	\$ 73.517,36	\$ 54.637.398,59
2019	02	\$ 165.431	2,02%	21	\$ 70.175,66	\$ 54.707.574,25
2019	03	\$ 165.431	2,02%	20	\$ 66.833,96	\$ 54.774.408,21
2019	04	\$ 165.431	2,02%	19	\$ 63.492,26	\$ 54.837.900,47
2019	05	\$ 165.431	2,02%	18	\$ 60.150,56	\$ 54.898.051,03
2019	06	\$ 165.431	2,02%	17	\$ 56.808,87	\$ 54.954.859,90
2019	M13	\$ 165.431	2,02%	17	\$ 56.808,87	\$ 55.011.668,76
2019	07	\$ 165.431	2,02%	16	\$ 53.467,17	\$ 55.065.135,93
2019	08	\$ 165.431	2,02%	15	\$ 50.125,47	\$ 55.115.261,40
2019	09	\$ 165.431	2,02%	14	\$ 46.783,77	\$ 55.162.045,17
2019	10	\$ 165.431	2,02%	13	\$ 43.442,07	\$ 55.205.487,25
2019	11	\$ 165.431	2,02%	12	\$ 40.100,38	\$ 55.245.587,62
2019	12	\$ 165.431	2,02%	11	\$ 36.758,68	\$ 55.282.346,30
2019	M14	\$ 165.431	2,02%	11	\$ 36.758,68	\$ 55.319.104,98
2020	01	\$ 171.717	2,02%	10	\$ 34.686,83	\$ 55.353.791,80
2020	02	\$ 171.717	2,02%	9	\$ 31.218,14	\$ 55.385.009,95
2020	03	\$ 171.717	2,02%	8	\$ 27.749,46	\$ 55.412.759,41
2020	04	\$ 171.717	2,02%	7	\$ 24.280,78	\$ 55.437.040,18
2020	05	\$ 171.717	2,02%	6	\$ 20.812,10	\$ 55.457.852,28
2020	06	\$ 171.717	2,02%	5	\$ 17.343,41	\$ 55.475.195,69
2020	M13	\$ 171.717	2,02%	5	\$ 17.343,41	\$ 55.492.539,10
2020	07	\$ 171.717	2,02%	4	\$ 13.874,73	\$ 55.506.413,83
2020	08	\$ 171.717	2,02%	3	\$ 10.406,05	\$ 55.516.819,88
2020	09	\$ 171.717	2,02%	2	\$ 6.937,37	\$ 55.523.757,25
2020	10	\$ 171.717	2,02%	1	\$ 3.468,68	\$ 55.527.225,93

9. MARCO ELÍ SÁNCHEZ SANTIAGO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1994	\$ 138.791,50	22,59%	7	\$ 971.540,50
1995	\$ 170.144,50	19,46%	14	\$ 2.382.023,00
1996	\$ 203.254,62	21,63%	14	\$ 2.845.564,67
1997	\$ 247.218,59	17,68%	14	\$ 3.461.060,31
1998	\$ 290.926,84	16,70%	14	\$ 4.072.975,78
1999	\$ 339.511,62	9,23%	14	\$ 4.753.162,73

2000	\$ 370.848,55	8,75%	14	\$ 5.191.879,65
2001	\$ 403.297,79	7,65%	14	\$ 5.646.169,12
2002	\$ 434.150,08	6,99%	14	\$ 6.078.101,06
2003	\$ 464.497,17	6,49%	14	\$ 6.502.960,32
2004	\$ 494.643,03	5,50%	14	\$ 6.925.002,45
2005	\$ 521.848,40	4,85%	14	\$ 7.305.877,58
2006	\$ 547.158,05	4,48%	14	\$ 7.660.212,64
2007	\$ 571.670,73	5,69%	14	\$ 8.003.390,17
2008	\$ 604.198,79	7,67%	14	\$ 8.458.783,07
2009	\$ 650.540,84	2,00%	14	\$ 9.107.571,73
2010	\$ 663.551,65	3,17%	14	\$ 9.289.723,17
2011	\$ 684.586,24	3,73%	14	\$ 9.584.207,39
2012	\$ 710.121,31	2,44%	14	\$ 9.941.698,33
2013	\$ 727.448,27	1,94%	14	\$ 10.184.275,76
2014	\$ 741.560,77	3,66%	14	\$ 10.381.850,71
2015	\$ 768.701,89	6,77%	14	\$ 10.761.826,45
2016	\$ 820.743,01	5,75%	14	\$ 11.490.402,10
2017	\$ 867.935,73	4,09%	14	\$ 12.151.100,22
2018	\$ 903.434,30	3,18%	14	\$ 12.648.080,22
2019	\$ 932.163,51	3,80%	14	\$ 13.050.289,17
2020	\$ 967.585,73	1,61%	11	\$ 10.643.442,98
				\$ 160.662.731,70

10. LILIA ROSA ARIAS HERNANDEZ sustituta de JUAN TOMÁS CORTÉS HERNÁNDEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1997	\$ 206.757,20	17,68%	9,75	\$ 2.015.882,70
1998	\$ 243.311,87	16,70%	14	\$ 3.406.366,22
1999	\$ 283.944,96	9,23%	14	\$ 3.975.229,38
2000	\$ 310.153,08	8,75%	14	\$ 4.342.143,05
2001	\$ 337.291,47	7,65%	14	\$ 4.722.080,57
2002	\$ 363.094,27	6,99%	14	\$ 5.083.319,73
2003	\$ 388.474,56	6,49%	14	\$ 5.438.643,78
2004	\$ 413.686,55	5,50%	14	\$ 5.791.611,76
2005	\$ 436.439,32	4,85%	14	\$ 6.110.150,41
2006	\$ 457.606,62	4,48%	14	\$ 6.406.492,71
2007	\$ 478.107,40	5,69%	14	\$ 6.693.503,58
2008	\$ 505.311,71	7,67%	14	\$ 7.074.363,93
2009	\$ 544.069,12	2,00%	14	\$ 7.616.967,65
2010	\$ 554.950,50	3,17%	14	\$ 7.769.307,00
2011	\$ 572.542,43	3,73%	14	\$ 8.015.594,03
2012	\$ 593.898,26	2,44%	14	\$ 8.314.575,69
2013	\$ 608.389,38	1,94%	14	\$ 8.517.451,33
2014	\$ 620.192,14	3,66%	14	\$ 8.682.689,89
2015	\$ 642.891,17	6,77%	14	\$ 9.000.476,34
2016	\$ 686.414,90	5,75%	14	\$ 9.609.808,59
2017	\$ 725.883,76	4,09%	14	\$ 10.162.372,58
2018	\$ 755.572,40	3,18%	14	\$ 10.578.013,62
2019	\$ 779.599,60	3,80%	14	\$ 10.914.394,45
2020	\$ 809.224,39	1,61%	11	\$ 8.901.468,28
				\$ 134.367.630,08

11. EFREN AVENDAÑO PEÑA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 101.635,77	4,48%	2	\$ 203.271,54

2007	\$ 106.189,05	5,69%	14	\$ 1.486.646,73
2008	\$ 112.231,21	7,67%	14	\$ 1.571.236,93
2009	\$ 120.839,34	2,00%	14	\$ 1.691.750,81
2010	\$ 123.256,13	3,17%	14	\$ 1.725.585,82
2011	\$ 127.163,35	3,73%	14	\$ 1.780.286,89
2012	\$ 131.906,54	2,44%	14	\$ 1.846.691,59
2013	\$ 135.125,06	1,94%	14	\$ 1.891.750,87
2014	\$ 137.746,49	3,66%	14	\$ 1.928.450,84
2015	\$ 142.788,01	6,77%	14	\$ 1.999.032,14
2016	\$ 152.454,76	5,75%	14	\$ 2.134.366,61
2017	\$ 161.220,91	4,09%	14	\$ 2.257.092,69
2018	\$ 167.814,84	3,18%	14	\$ 2.349.407,78
2019	\$ 173.151,35	3,80%	14	\$ 2.424.118,95
2020	\$ 179.731,11	1,61%	11	\$ 1.977.042,16
				\$ 27.266.732,37

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	12	\$ 101.636	2,02%	167	\$ 342.858,11	\$ 342.858,11
2006	M14	\$ 101.636	2,02%	167	\$ 342.858,11	\$ 685.716,21
2007	01	\$ 106.189	2,02%	166	\$ 356.073,13	\$ 1.041.789,34
2007	02	\$ 106.189	2,02%	165	\$ 353.928,11	\$ 1.395.717,46
2007	03	\$ 106.189	2,02%	164	\$ 351.783,09	\$ 1.747.500,55
2007	04	\$ 106.189	2,02%	163	\$ 349.638,07	\$ 2.097.138,62
2007	05	\$ 106.189	2,02%	162	\$ 347.493,06	\$ 2.444.631,68
2007	06	\$ 106.189	2,02%	161	\$ 345.348,04	\$ 2.789.979,72
2007	M13	\$ 106.189	2,02%	161	\$ 345.348,04	\$ 3.135.327,75
2007	07	\$ 106.189	2,02%	160	\$ 343.203,02	\$ 3.478.530,77
2007	08	\$ 106.189	2,02%	159	\$ 341.058,00	\$ 3.819.588,77
2007	09	\$ 106.189	2,02%	158	\$ 338.912,98	\$ 4.158.501,75
2007	10	\$ 106.189	2,02%	157	\$ 336.767,96	\$ 4.495.269,71
2007	11	\$ 106.189	2,02%	156	\$ 334.622,94	\$ 4.829.892,65
2007	12	\$ 106.189	2,02%	155	\$ 332.477,92	\$ 5.162.370,57
2007	M14	\$ 106.189	2,02%	155	\$ 332.477,92	\$ 5.494.848,50
2008	01	\$ 112.231	2,02%	154	\$ 349.128,85	\$ 5.843.977,34
2008	02	\$ 112.231	2,02%	153	\$ 346.861,78	\$ 6.190.839,12
2008	03	\$ 112.231	2,02%	152	\$ 344.594,71	\$ 6.535.433,83
2008	04	\$ 112.231	2,02%	151	\$ 342.327,64	\$ 6.877.761,46
2008	05	\$ 112.231	2,02%	150	\$ 340.060,57	\$ 7.217.822,03
2008	06	\$ 112.231	2,02%	149	\$ 337.793,49	\$ 7.555.615,52
2008	M13	\$ 112.231	2,02%	149	\$ 337.793,49	\$ 7.893.409,02
2008	07	\$ 112.231	2,02%	148	\$ 335.526,42	\$ 8.228.935,44
2008	08	\$ 112.231	2,02%	147	\$ 333.259,35	\$ 8.562.194,79
2008	09	\$ 112.231	2,02%	146	\$ 330.992,28	\$ 8.893.187,08
2008	10	\$ 112.231	2,02%	145	\$ 328.725,21	\$ 9.221.912,29
2008	11	\$ 112.231	2,02%	144	\$ 326.458,14	\$ 9.548.370,43
2008	12	\$ 112.231	2,02%	143	\$ 324.191,07	\$ 9.872.561,51
2008	M14	\$ 112.231	2,02%	143	\$ 324.191,07	\$ 10.196.752,58
2009	01	\$ 120.839	2,02%	142	\$ 346.615,57	\$ 10.543.368,15
2009	02	\$ 120.839	2,02%	141	\$ 344.174,62	\$ 10.887.542,77
2009	03	\$ 120.839	2,02%	140	\$ 341.733,66	\$ 11.229.276,43
2009	04	\$ 120.839	2,02%	139	\$ 339.292,71	\$ 11.568.569,14
2009	05	\$ 120.839	2,02%	138	\$ 336.851,75	\$ 11.905.420,89
2009	06	\$ 120.839	2,02%	137	\$ 334.410,80	\$ 12.239.831,69
2009	M13	\$ 120.839	2,02%	137	\$ 334.410,80	\$ 12.574.242,49
2009	07	\$ 120.839	2,02%	136	\$ 331.969,84	\$ 12.906.212,33

2009	08	\$ 120.839	2,02%	135	\$ 329.528,89	\$ 13.235.741,22
2009	09	\$ 120.839	2,02%	134	\$ 327.087,93	\$ 13.562.829,16
2009	10	\$ 120.839	2,02%	133	\$ 324.646,98	\$ 13.887.476,14
2009	11	\$ 120.839	2,02%	132	\$ 322.206,03	\$ 14.209.682,16
2009	12	\$ 120.839	2,02%	131	\$ 319.765,07	\$ 14.529.447,23
2009	M14	\$ 120.839	2,02%	131	\$ 319.765,07	\$ 14.849.212,30
2010	01	\$ 123.256	2,02%	130	\$ 323.670,60	\$ 15.172.882,90
2010	02	\$ 123.256	2,02%	129	\$ 321.180,82	\$ 15.494.063,73
2010	03	\$ 123.256	2,02%	128	\$ 318.691,05	\$ 15.812.754,78
2010	04	\$ 123.256	2,02%	127	\$ 316.201,28	\$ 16.128.956,05
2010	05	\$ 123.256	2,02%	126	\$ 313.711,50	\$ 16.442.667,56
2010	06	\$ 123.256	2,02%	125	\$ 311.221,73	\$ 16.753.889,28
2010	M13	\$ 123.256	2,02%	125	\$ 311.221,73	\$ 17.065.111,01
2010	07	\$ 123.256	2,02%	124	\$ 308.731,95	\$ 17.373.842,97
2010	08	\$ 123.256	2,02%	123	\$ 306.242,18	\$ 17.680.085,15
2010	09	\$ 123.256	2,02%	122	\$ 303.752,41	\$ 17.983.837,56
2010	10	\$ 123.256	2,02%	121	\$ 301.262,63	\$ 18.285.100,19
2010	11	\$ 123.256	2,02%	120	\$ 298.772,86	\$ 18.583.873,05
2010	12	\$ 123.256	2,02%	119	\$ 296.283,09	\$ 18.880.156,14
2010	M14	\$ 123.256	2,02%	119	\$ 296.283,09	\$ 19.176.439,22
2011	01	\$ 127.163	2,02%	118	\$ 303.106,56	\$ 19.479.545,78
2011	02	\$ 127.163	2,02%	117	\$ 300.537,86	\$ 19.780.083,64
2011	03	\$ 127.163	2,02%	116	\$ 297.969,16	\$ 20.078.052,80
2011	04	\$ 127.163	2,02%	115	\$ 295.400,46	\$ 20.373.453,26
2011	05	\$ 127.163	2,02%	114	\$ 292.831,76	\$ 20.666.285,02
2011	06	\$ 127.163	2,02%	113	\$ 290.263,06	\$ 20.956.548,09
2011	M13	\$ 127.163	2,02%	113	\$ 290.263,06	\$ 21.246.811,15
2011	07	\$ 127.163	2,02%	112	\$ 287.694,36	\$ 21.534.505,51
2011	08	\$ 127.163	2,02%	111	\$ 285.125,66	\$ 21.819.631,17
2011	09	\$ 127.163	2,02%	110	\$ 282.556,96	\$ 22.102.188,14
2011	10	\$ 127.163	2,02%	109	\$ 279.988,26	\$ 22.382.176,40
2011	11	\$ 127.163	2,02%	108	\$ 277.419,56	\$ 22.659.595,96
2011	12	\$ 127.163	2,02%	107	\$ 274.850,86	\$ 22.934.446,83
2011	M14	\$ 127.163	2,02%	107	\$ 274.850,86	\$ 23.209.297,69
2012	01	\$ 131.907	2,02%	106	\$ 282.438,29	\$ 23.491.735,98
2012	02	\$ 131.907	2,02%	105	\$ 279.773,78	\$ 23.771.509,75
2012	03	\$ 131.907	2,02%	104	\$ 277.109,26	\$ 0,00
2012	04	\$ 131.907	2,02%	103	\$ 274.444,75	\$ 24.323.063,77
2012	05	\$ 131.907	2,02%	102	\$ 271.780,24	\$ 24.594.844,01
2012	06	\$ 131.907	2,02%	101	\$ 269.115,73	\$ 24.863.959,74
2012	M13	\$ 131.907	2,02%	101	\$ 269.115,73	\$ 25.133.075,47
2012	07	\$ 131.907	2,02%	100	\$ 266.451,22	\$ 25.399.526,68
2012	08	\$ 131.907	2,02%	99	\$ 263.786,70	\$ 25.663.313,39
2012	09	\$ 131.907	2,02%	98	\$ 261.122,19	\$ 25.924.435,58
2012	10	\$ 131.907	2,02%	97	\$ 258.457,68	\$ 26.182.893,26
2012	11	\$ 131.907	2,02%	96	\$ 255.793,17	\$ 26.438.686,42
2012	12	\$ 131.907	2,02%	95	\$ 253.128,66	\$ 26.691.815,08
2012	M14	\$ 131.907	2,02%	95	\$ 253.128,66	\$ 26.944.943,74
2013	01	\$ 135.125	2,02%	94	\$ 256.575,47	\$ 27.201.519,20
2013	02	\$ 135.125	2,02%	93	\$ 253.845,94	\$ 27.455.365,14
2013	03	\$ 135.125	2,02%	92	\$ 251.116,42	\$ 27.706.481,56
2013	04	\$ 135.125	2,02%	91	\$ 248.386,89	\$ 27.954.868,45
2013	05	\$ 135.125	2,02%	90	\$ 245.657,36	\$ 28.200.525,81
2013	06	\$ 135.125	2,02%	89	\$ 242.927,84	\$ 28.443.453,65
2013	M13	\$ 135.125	2,02%	89	\$ 242.927,84	\$ 28.686.381,49
2013	07	\$ 135.125	2,02%	88	\$ 240.198,31	\$ 28.926.579,80
2013	08	\$ 135.125	2,02%	87	\$ 237.468,78	\$ 29.164.048,58

2013	09	\$ 135.125	2,02%	86	\$ 234.739,26	\$ 29.398.787,84
2013	10	\$ 135.125	2,02%	85	\$ 232.009,73	\$ 29.630.797,57
2013	11	\$ 135.125	2,02%	84	\$ 229.280,21	\$ 29.860.077,78
2013	12	\$ 135.125	2,02%	83	\$ 226.550,68	\$ 30.086.628,45
2013	M14	\$ 135.125	2,02%	83	\$ 226.550,68	\$ 30.313.179,13
2014	01	\$ 137.746	2,02%	82	\$ 228.163,28	\$ 30.541.342,42
2014	02	\$ 137.746	2,02%	81	\$ 225.380,80	\$ 30.766.723,22
2014	03	\$ 137.746	2,02%	80	\$ 222.598,33	\$ 30.989.321,55
2014	04	\$ 137.746	2,02%	79	\$ 219.815,85	\$ 31.209.137,39
2014	05	\$ 137.746	2,02%	78	\$ 217.033,37	\$ 31.426.170,76
2014	06	\$ 137.746	2,02%	77	\$ 214.250,89	\$ 31.640.421,65
2014	M13	\$ 137.746	2,02%	77	\$ 214.250,89	\$ 31.854.672,54
2014	07	\$ 137.746	2,02%	76	\$ 211.468,41	\$ 32.066.140,94
2014	08	\$ 137.746	2,02%	75	\$ 208.685,93	\$ 32.274.826,87
2014	09	\$ 137.746	2,02%	74	\$ 205.903,45	\$ 32.480.730,32
2014	10	\$ 137.746	2,02%	73	\$ 203.120,97	\$ 32.683.851,30
2014	11	\$ 137.746	2,02%	72	\$ 200.338,49	\$ 32.884.189,79
2014	12	\$ 137.746	2,02%	71	\$ 197.556,01	\$ 33.081.745,80
2014	M14	\$ 137.746	2,02%	71	\$ 197.556,01	\$ 33.279.301,82
2015	01	\$ 142.788	2,02%	70	\$ 201.902,25	\$ 33.481.204,06
2015	02	\$ 142.788	2,02%	69	\$ 199.017,93	\$ 33.680.221,99
2015	03	\$ 142.788	2,02%	68	\$ 196.133,61	\$ 33.876.355,60
2015	04	\$ 142.788	2,02%	67	\$ 193.249,29	\$ 34.069.604,89
2015	05	\$ 142.788	2,02%	66	\$ 190.364,97	\$ 34.259.969,87
2015	06	\$ 142.788	2,02%	65	\$ 187.480,66	\$ 34.447.450,52
2015	M13	\$ 142.788	2,02%	65	\$ 187.480,66	\$ 34.634.931,18
2015	07	\$ 142.788	2,02%	64	\$ 184.596,34	\$ 34.819.527,52
2015	08	\$ 142.788	2,02%	63	\$ 181.712,02	\$ 35.001.239,54
2015	09	\$ 142.788	2,02%	62	\$ 178.827,70	\$ 35.180.067,25
2015	10	\$ 142.788	2,02%	61	\$ 175.943,39	\$ 35.356.010,63
2015	11	\$ 142.788	2,02%	60	\$ 173.059,07	\$ 35.529.069,70
2015	12	\$ 142.788	2,02%	59	\$ 170.174,75	\$ 35.699.244,45
2015	M14	\$ 142.788	2,02%	59	\$ 170.174,75	\$ 35.869.419,20
2016	01	\$ 152.455	2,02%	58	\$ 178.615,99	\$ 36.048.035,19
2016	02	\$ 152.455	2,02%	57	\$ 175.536,41	\$ 36.223.571,60
2016	03	\$ 152.455	2,02%	56	\$ 172.456,82	\$ 36.396.028,42
2016	04	\$ 152.455	2,02%	55	\$ 169.377,24	\$ 36.565.405,66
2016	05	\$ 152.455	2,02%	54	\$ 166.297,65	\$ 36.731.703,31
2016	06	\$ 152.455	2,02%	53	\$ 163.218,06	\$ 36.894.921,37
2016	M13	\$ 152.455	2,02%	53	\$ 163.218,06	\$ 37.058.139,44
2016	07	\$ 152.455	2,02%	52	\$ 160.138,48	\$ 37.218.277,92
2016	08	\$ 152.455	2,02%	51	\$ 157.058,89	\$ 37.375.336,81
2016	09	\$ 152.455	2,02%	50	\$ 153.979,31	\$ 37.529.316,11
2016	10	\$ 152.455	2,02%	49	\$ 150.899,72	\$ 37.680.215,83
2016	11	\$ 152.455	2,02%	48	\$ 147.820,13	\$ 37.828.035,97
2016	12	\$ 152.455	2,02%	47	\$ 144.740,55	\$ 37.972.776,51
2016	M14	\$ 152.455	2,02%	47	\$ 144.740,55	\$ 38.117.517,06
2017	01	\$ 161.221	2,02%	46	\$ 149.806,47	\$ 38.267.323,53
2017	02	\$ 161.221	2,02%	45	\$ 146.549,80	\$ 38.413.873,33
2017	03	\$ 161.221	2,02%	44	\$ 143.293,14	\$ 38.557.166,47
2017	04	\$ 161.221	2,02%	43	\$ 140.036,48	\$ 38.697.202,95
2017	05	\$ 161.221	2,02%	42	\$ 136.779,82	\$ 38.833.982,77
2017	06	\$ 161.221	2,02%	41	\$ 133.523,15	\$ 38.967.505,93
2017	M13	\$ 161.221	2,02%	41	\$ 133.523,15	\$ 39.101.029,08
2017	07	\$ 161.221	2,02%	40	\$ 130.266,49	\$ 39.231.295,57
2017	08	\$ 161.221	2,02%	39	\$ 127.009,83	\$ 39.358.305,40
2017	09	\$ 161.221	2,02%	38	\$ 123.753,17	\$ 39.482.058,57

2017	10	\$ 161.221	2,02%	37	\$ 120.496,51	\$ 39.602.555,08
2017	11	\$ 161.221	2,02%	36	\$ 117.239,84	\$ 39.719.794,92
2017	12	\$ 161.221	2,02%	35	\$ 113.983,18	\$ 39.833.778,10
2017	M14	\$ 161.221	2,02%	35	\$ 113.983,18	\$ 39.947.761,28
2018	01	\$ 167.815	2,02%	34	\$ 115.255,23	\$ 40.063.016,52
2018	02	\$ 167.815	2,02%	33	\$ 111.865,37	\$ 40.174.881,89
2018	03	\$ 167.815	2,02%	32	\$ 108.475,51	\$ 40.283.357,40
2018	04	\$ 167.815	2,02%	31	\$ 105.085,65	\$ 40.388.443,06
2018	05	\$ 167.815	2,02%	30	\$ 101.695,79	\$ 40.490.138,85
2018	06	\$ 167.815	2,02%	29	\$ 98.305,93	\$ 40.588.444,79
2018	M13	\$ 167.815	2,02%	29	\$ 98.305,93	\$ 40.686.750,72
2018	07	\$ 167.815	2,02%	28	\$ 94.916,07	\$ 40.781.666,79
2018	08	\$ 167.815	2,02%	27	\$ 91.526,21	\$ 40.873.193,01
2018	09	\$ 167.815	2,02%	26	\$ 88.136,35	\$ 40.961.329,36
2018	10	\$ 167.815	2,02%	25	\$ 84.746,50	\$ 41.046.075,86
2018	11	\$ 167.815	2,02%	24	\$ 81.356,64	\$ 41.127.432,49
2018	12	\$ 167.815	2,02%	23	\$ 77.966,78	\$ 41.205.399,27
2018	M14	\$ 167.815	2,02%	23	\$ 77.966,78	\$ 41.283.366,04
2019	01	\$ 173.151	2,02%	22	\$ 76.948,46	\$ 41.360.314,51
2019	02	\$ 173.151	2,02%	21	\$ 73.450,80	\$ 41.433.765,31
2019	03	\$ 173.151	2,02%	20	\$ 69.953,15	\$ 41.503.718,46
2019	04	\$ 173.151	2,02%	19	\$ 66.455,49	\$ 41.570.173,95
2019	05	\$ 173.151	2,02%	18	\$ 62.957,83	\$ 41.633.131,78
2019	06	\$ 173.151	2,02%	17	\$ 59.460,17	\$ 41.692.591,95
2019	M13	\$ 173.151	2,02%	17	\$ 59.460,17	\$ 41.752.052,13
2019	07	\$ 173.151	2,02%	16	\$ 55.962,52	\$ 41.808.014,65
2019	08	\$ 173.151	2,02%	15	\$ 52.464,86	\$ 41.860.479,51
2019	09	\$ 173.151	2,02%	14	\$ 48.967,20	\$ 41.909.446,71
2019	10	\$ 173.151	2,02%	13	\$ 45.469,55	\$ 41.954.916,25
2019	11	\$ 173.151	2,02%	12	\$ 41.971,89	\$ 41.996.888,14
2019	12	\$ 173.151	2,02%	11	\$ 38.474,23	\$ 42.035.362,37
2019	M14	\$ 173.151	2,02%	11	\$ 38.474,23	\$ 42.073.836,60
2020	01	\$ 179.731	2,02%	10	\$ 36.305,68	\$ 42.110.142,29
2020	02	\$ 179.731	2,02%	9	\$ 32.675,11	\$ 42.142.817,40
2020	03	\$ 179.731	2,02%	8	\$ 29.044,55	\$ 42.171.861,95
2020	04	\$ 179.731	2,02%	7	\$ 25.413,98	\$ 42.197.275,93
2020	05	\$ 179.731	2,02%	6	\$ 21.783,41	\$ 42.219.059,34
2020	06	\$ 179.731	2,02%	5	\$ 18.152,84	\$ 42.237.212,18
2020	M13	\$ 179.731	2,02%	5	\$ 18.152,84	\$ 42.255.365,02
2020	07	\$ 179.731	2,02%	4	\$ 14.522,27	\$ 42.269.887,29
2020	08	\$ 179.731	2,02%	3	\$ 10.891,70	\$ 42.280.779,00
2020	09	\$ 179.731	2,02%	2	\$ 7.261,14	\$ 42.288.040,14
2020	10	\$ 179.731	2,02%	1	\$ 3.630,57	\$ 42.291.670,70

12. MARIO RANGEL YÁÑEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 119.696,40	4,48%	4	\$ 478.785,60
2007	\$ 125.058,80	5,69%	14	\$ 1.750.823,18
2008	\$ 132.174,64	7,67%	14	\$ 1.850.445,02
2009	\$ 142.312,44	2,00%	14	\$ 1.992.374,15
2010	\$ 145.158,69	3,17%	14	\$ 2.032.221,64
2011	\$ 149.760,22	3,73%	14	\$ 2.096.643,06
2012	\$ 155.346,27	2,44%	14	\$ 2.174.847,85
2013	\$ 159.136,72	1,94%	14	\$ 2.227.914,14
2014	\$ 162.223,98	3,66%	14	\$ 2.271.135,67

2015	\$ 168.161,37	6,77%	14	\$ 2.354.259,24
2016	\$ 179.545,90	5,75%	14	\$ 2.513.642,59
2017	\$ 189.869,79	4,09%	14	\$ 2.658.177,04
2018	\$ 197.635,46	3,18%	14	\$ 2.766.896,48
2019	\$ 203.920,27	3,80%	14	\$ 2.854.883,78
2020	\$ 211.669,24	1,61%	11	\$ 2.328.361,65
				\$ 32.351.411,08

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	10	\$ 119.696	2,02%	169	\$ 408.619,57	\$ 408.619,57
2006	11	\$ 119.696	2,02%	168	\$ 406.201,70	\$ 814.821,27
2006	12	\$ 119.696	2,02%	167	\$ 403.783,84	\$ 1.218.605,11
2006	M14	\$ 119.696	2,02%	167	\$ 403.783,84	\$ 1.622.388,94
2007	01	\$ 125.059	2,02%	166	\$ 419.347,16	\$ 2.041.736,11
2007	02	\$ 125.059	2,02%	165	\$ 416.820,98	\$ 2.458.557,08
2007	03	\$ 125.059	2,02%	164	\$ 414.294,79	\$ 2.872.851,87
2007	04	\$ 125.059	2,02%	163	\$ 411.768,60	\$ 3.284.620,47
2007	05	\$ 125.059	2,02%	162	\$ 409.242,41	\$ 3.693.862,89
2007	06	\$ 125.059	2,02%	161	\$ 406.716,23	\$ 4.100.579,11
2007	M13	\$ 125.059	2,02%	161	\$ 406.716,23	\$ 4.507.295,34
2007	07	\$ 125.059	2,02%	160	\$ 404.190,04	\$ 4.911.485,37
2007	08	\$ 125.059	2,02%	159	\$ 401.663,85	\$ 5.313.149,22
2007	09	\$ 125.059	2,02%	158	\$ 399.137,66	\$ 5.712.286,89
2007	10	\$ 125.059	2,02%	157	\$ 396.611,47	\$ 6.108.898,36
2007	11	\$ 125.059	2,02%	156	\$ 394.085,29	\$ 6.502.983,65
2007	12	\$ 125.059	2,02%	155	\$ 391.559,10	\$ 6.894.542,75
2007	M14	\$ 125.059	2,02%	155	\$ 391.559,10	\$ 7.286.101,84
2008	01	\$ 132.175	2,02%	154	\$ 411.168,88	\$ 7.697.270,73
2008	02	\$ 132.175	2,02%	153	\$ 408.498,96	\$ 8.105.769,68
2008	03	\$ 132.175	2,02%	152	\$ 405.829,03	\$ 8.511.598,71
2008	04	\$ 132.175	2,02%	151	\$ 403.159,10	\$ 8.914.757,81
2008	05	\$ 132.175	2,02%	150	\$ 400.489,17	\$ 9.315.246,99
2008	06	\$ 132.175	2,02%	149	\$ 397.819,24	\$ 9.713.066,23
2008	M13	\$ 132.175	2,02%	149	\$ 397.819,24	\$ 10.110.885,47
2008	07	\$ 132.175	2,02%	148	\$ 395.149,32	\$ 10.506.034,79
2008	08	\$ 132.175	2,02%	147	\$ 392.479,39	\$ 10.898.514,18
2008	09	\$ 132.175	2,02%	146	\$ 389.809,46	\$ 11.288.323,64
2008	10	\$ 132.175	2,02%	145	\$ 387.139,53	\$ 11.675.463,17
2008	11	\$ 132.175	2,02%	144	\$ 384.469,61	\$ 12.059.932,78
2008	12	\$ 132.175	2,02%	143	\$ 381.799,68	\$ 12.441.732,46
2008	M14	\$ 132.175	2,02%	143	\$ 381.799,68	\$ 12.823.532,14
2009	01	\$ 142.312	2,02%	142	\$ 408.209,00	\$ 13.231.741,14
2009	02	\$ 142.312	2,02%	141	\$ 405.334,29	\$ 13.637.075,43
2009	03	\$ 142.312	2,02%	140	\$ 402.459,58	\$ 14.039.535,01
2009	04	\$ 142.312	2,02%	139	\$ 399.584,87	\$ 14.439.119,87
2009	05	\$ 142.312	2,02%	138	\$ 396.710,16	\$ 14.835.830,03
2009	06	\$ 142.312	2,02%	137	\$ 393.835,45	\$ 15.229.665,48
2009	M13	\$ 142.312	2,02%	137	\$ 393.835,45	\$ 15.623.500,92
2009	07	\$ 142.312	2,02%	136	\$ 390.960,73	\$ 16.014.461,66
2009	08	\$ 142.312	2,02%	135	\$ 388.086,02	\$ 16.402.547,68
2009	09	\$ 142.312	2,02%	134	\$ 385.211,31	\$ 16.787.758,99
2009	10	\$ 142.312	2,02%	133	\$ 382.336,60	\$ 17.170.095,59
2009	11	\$ 142.312	2,02%	132	\$ 379.461,89	\$ 17.549.557,48
2009	12	\$ 142.312	2,02%	131	\$ 376.587,18	\$ 17.926.144,66
2009	M14	\$ 142.312	2,02%	131	\$ 376.587,18	\$ 18.302.731,83

2010	01	\$ 145.159	2,02%	130	\$ 381.186,72	\$ 18.683.918,55
2010	02	\$ 145.159	2,02%	129	\$ 378.254,51	\$ 19.062.173,06
2010	03	\$ 145.159	2,02%	128	\$ 375.322,30	\$ 19.437.495,37
2010	04	\$ 145.159	2,02%	127	\$ 372.390,10	\$ 19.809.885,46
2010	05	\$ 145.159	2,02%	126	\$ 369.457,89	\$ 20.179.343,36
2010	06	\$ 145.159	2,02%	125	\$ 366.525,69	\$ 20.545.869,05
2010	M13	\$ 145.159	2,02%	125	\$ 366.525,69	\$ 20.912.394,73
2010	07	\$ 145.159	2,02%	124	\$ 363.593,48	\$ 21.275.988,22
2010	08	\$ 145.159	2,02%	123	\$ 360.661,28	\$ 21.636.649,49
2010	09	\$ 145.159	2,02%	122	\$ 357.729,07	\$ 21.994.378,57
2010	10	\$ 145.159	2,02%	121	\$ 354.796,87	\$ 22.349.175,43
2010	11	\$ 145.159	2,02%	120	\$ 351.864,66	\$ 22.701.040,09
2010	12	\$ 145.159	2,02%	119	\$ 348.932,46	\$ 23.049.972,55
2010	M14	\$ 145.159	2,02%	119	\$ 348.932,46	\$ 23.398.905,00
2011	01	\$ 149.760	2,02%	118	\$ 356.968,46	\$ 23.755.873,46
2011	02	\$ 149.760	2,02%	117	\$ 353.943,30	\$ 24.109.816,76
2011	03	\$ 149.760	2,02%	116	\$ 350.918,14	\$ 24.460.734,91
2011	04	\$ 149.760	2,02%	115	\$ 347.892,99	\$ 24.808.627,89
2011	05	\$ 149.760	2,02%	114	\$ 344.867,83	\$ 25.153.495,73
2011	06	\$ 149.760	2,02%	113	\$ 341.842,68	\$ 25.495.338,40
2011	M13	\$ 149.760	2,02%	113	\$ 341.842,68	\$ 25.837.181,08
2011	07	\$ 149.760	2,02%	112	\$ 338.817,52	\$ 26.175.998,60
2011	08	\$ 149.760	2,02%	111	\$ 335.792,36	\$ 26.511.790,96
2011	09	\$ 149.760	2,02%	110	\$ 332.767,21	\$ 26.844.558,17
2011	10	\$ 149.760	2,02%	109	\$ 329.742,05	\$ 27.174.300,22
2011	11	\$ 149.760	2,02%	108	\$ 326.716,89	\$ 27.501.017,11
2011	12	\$ 149.760	2,02%	107	\$ 323.691,74	\$ 27.824.708,85
2011	M14	\$ 149.760	2,02%	107	\$ 323.691,74	\$ 28.148.400,58
2012	01	\$ 155.346	2,02%	106	\$ 332.627,44	\$ 28.481.028,03
2012	02	\$ 155.346	2,02%	105	\$ 329.489,45	\$ 28.810.517,48
2012	03	\$ 155.346	2,02%	104	\$ 326.351,45	\$ 0,00
2012	04	\$ 155.346	2,02%	103	\$ 323.213,46	\$ 29.460.082,39
2012	05	\$ 155.346	2,02%	102	\$ 320.075,46	\$ 29.780.157,85
2012	06	\$ 155.346	2,02%	101	\$ 316.937,47	\$ 30.097.095,32
2012	M13	\$ 155.346	2,02%	101	\$ 316.937,47	\$ 30.414.032,79
2012	07	\$ 155.346	2,02%	100	\$ 313.799,48	\$ 30.727.832,27
2012	08	\$ 155.346	2,02%	99	\$ 310.661,48	\$ 31.038.493,75
2012	09	\$ 155.346	2,02%	98	\$ 307.523,49	\$ 31.346.017,24
2012	10	\$ 155.346	2,02%	97	\$ 304.385,49	\$ 31.650.402,73
2012	11	\$ 155.346	2,02%	96	\$ 301.247,50	\$ 31.951.650,22
2012	12	\$ 155.346	2,02%	95	\$ 298.109,50	\$ 32.249.759,73
2012	M14	\$ 155.346	2,02%	95	\$ 298.109,50	\$ 32.547.869,23
2013	01	\$ 159.137	2,02%	94	\$ 302.168,81	\$ 32.850.038,04
2013	02	\$ 159.137	2,02%	93	\$ 298.954,25	\$ 33.148.992,29
2013	03	\$ 159.137	2,02%	92	\$ 295.739,69	\$ 33.444.731,98
2013	04	\$ 159.137	2,02%	91	\$ 292.525,13	\$ 33.737.257,10
2013	05	\$ 159.137	2,02%	90	\$ 289.310,56	\$ 34.026.567,67
2013	06	\$ 159.137	2,02%	89	\$ 286.096,00	\$ 34.312.663,67
2013	M13	\$ 159.137	2,02%	89	\$ 286.096,00	\$ 34.598.759,67
2013	07	\$ 159.137	2,02%	88	\$ 282.881,44	\$ 34.881.641,11
2013	08	\$ 159.137	2,02%	87	\$ 279.666,88	\$ 35.161.307,99
2013	09	\$ 159.137	2,02%	86	\$ 276.452,32	\$ 35.437.760,31
2013	10	\$ 159.137	2,02%	85	\$ 273.237,76	\$ 35.710.998,06
2013	11	\$ 159.137	2,02%	84	\$ 270.023,19	\$ 35.981.021,26
2013	12	\$ 159.137	2,02%	83	\$ 266.808,63	\$ 36.247.829,89
2013	M14	\$ 159.137	2,02%	83	\$ 266.808,63	\$ 36.514.638,52
2014	01	\$ 162.224	2,02%	82	\$ 268.707,79	\$ 36.783.346,32

2014	02	\$ 162.224	2,02%	81	\$ 265.430,87	\$ 37.048.777,19
2014	03	\$ 162.224	2,02%	80	\$ 262.153,95	\$ 37.310.931,13
2014	04	\$ 162.224	2,02%	79	\$ 258.877,02	\$ 37.569.808,15
2014	05	\$ 162.224	2,02%	78	\$ 255.600,10	\$ 37.825.408,25
2014	06	\$ 162.224	2,02%	77	\$ 252.323,17	\$ 38.077.731,42
2014	M13	\$ 162.224	2,02%	77	\$ 252.323,17	\$ 38.330.054,60
2014	07	\$ 162.224	2,02%	76	\$ 249.046,25	\$ 38.579.100,85
2014	08	\$ 162.224	2,02%	75	\$ 245.769,32	\$ 38.824.870,17
2014	09	\$ 162.224	2,02%	74	\$ 242.492,40	\$ 39.067.362,57
2014	10	\$ 162.224	2,02%	73	\$ 239.215,48	\$ 39.306.578,05
2014	11	\$ 162.224	2,02%	72	\$ 235.938,55	\$ 39.542.516,60
2014	12	\$ 162.224	2,02%	71	\$ 232.661,63	\$ 39.775.178,23
2014	M14	\$ 162.224	2,02%	71	\$ 232.661,63	\$ 40.007.839,85
2015	01	\$ 168.161	2,02%	70	\$ 237.780,18	\$ 40.245.620,04
2015	02	\$ 168.161	2,02%	69	\$ 234.383,32	\$ 40.480.003,36
2015	03	\$ 168.161	2,02%	68	\$ 230.986,46	\$ 40.710.989,82
2015	04	\$ 168.161	2,02%	67	\$ 227.589,60	\$ 40.938.579,43
2015	05	\$ 168.161	2,02%	66	\$ 224.192,74	\$ 41.162.772,17
2015	06	\$ 168.161	2,02%	65	\$ 220.795,88	\$ 41.383.568,05
2015	M13	\$ 168.161	2,02%	65	\$ 220.795,88	\$ 41.604.363,94
2015	07	\$ 168.161	2,02%	64	\$ 217.399,02	\$ 41.821.762,96
2015	08	\$ 168.161	2,02%	63	\$ 214.002,16	\$ 42.035.765,13
2015	09	\$ 168.161	2,02%	62	\$ 210.605,30	\$ 42.246.370,43
2015	10	\$ 168.161	2,02%	61	\$ 207.208,45	\$ 42.453.578,88
2015	11	\$ 168.161	2,02%	60	\$ 203.811,59	\$ 42.657.390,46
2015	12	\$ 168.161	2,02%	59	\$ 200.414,73	\$ 42.857.805,19
2015	M14	\$ 168.161	2,02%	59	\$ 200.414,73	\$ 43.058.219,91
2016	01	\$ 179.546	2,02%	58	\$ 210.355,98	\$ 43.268.575,89
2016	02	\$ 179.546	2,02%	57	\$ 206.729,15	\$ 43.475.305,04
2016	03	\$ 179.546	2,02%	56	\$ 203.102,32	\$ 43.678.407,36
2016	04	\$ 179.546	2,02%	55	\$ 199.475,49	\$ 43.877.882,85
2016	05	\$ 179.546	2,02%	54	\$ 195.848,67	\$ 44.073.731,52
2016	06	\$ 179.546	2,02%	53	\$ 192.221,84	\$ 44.265.953,36
2016	M13	\$ 179.546	2,02%	53	\$ 192.221,84	\$ 44.458.175,20
2016	07	\$ 179.546	2,02%	52	\$ 188.595,01	\$ 44.646.770,21
2016	08	\$ 179.546	2,02%	51	\$ 184.968,19	\$ 44.831.738,40
2016	09	\$ 179.546	2,02%	50	\$ 181.341,36	\$ 45.013.079,75
2016	10	\$ 179.546	2,02%	49	\$ 177.714,53	\$ 45.190.794,28
2016	11	\$ 179.546	2,02%	48	\$ 174.087,70	\$ 45.364.881,99
2016	12	\$ 179.546	2,02%	47	\$ 170.460,88	\$ 45.535.342,86
2016	M14	\$ 179.546	2,02%	47	\$ 170.460,88	\$ 45.705.803,74
2017	01	\$ 189.870	2,02%	46	\$ 176.427,01	\$ 45.882.230,75
2017	02	\$ 189.870	2,02%	45	\$ 172.591,64	\$ 46.054.822,39
2017	03	\$ 189.870	2,02%	44	\$ 168.756,27	\$ 46.223.578,65
2017	04	\$ 189.870	2,02%	43	\$ 164.920,90	\$ 46.388.499,55
2017	05	\$ 189.870	2,02%	42	\$ 161.085,53	\$ 46.549.585,08
2017	06	\$ 189.870	2,02%	41	\$ 157.250,16	\$ 46.706.835,24
2017	M13	\$ 189.870	2,02%	41	\$ 157.250,16	\$ 46.864.085,40
2017	07	\$ 189.870	2,02%	40	\$ 153.414,79	\$ 47.017.500,19
2017	08	\$ 189.870	2,02%	39	\$ 149.579,42	\$ 47.167.079,61
2017	09	\$ 189.870	2,02%	38	\$ 145.744,05	\$ 47.312.823,66
2017	10	\$ 189.870	2,02%	37	\$ 141.908,68	\$ 47.454.732,34
2017	11	\$ 189.870	2,02%	36	\$ 138.073,31	\$ 47.592.805,65
2017	12	\$ 189.870	2,02%	35	\$ 134.237,94	\$ 47.727.043,59
2017	M14	\$ 189.870	2,02%	35	\$ 134.237,94	\$ 47.861.281,53
2018	01	\$ 197.635	2,02%	34	\$ 135.736,04	\$ 47.997.017,56
2018	02	\$ 197.635	2,02%	33	\$ 131.743,80	\$ 48.128.761,36

2018	03	\$ 197.635	2,02%	32	\$ 127.751,56	\$ 48.256.512,92
2018	04	\$ 197.635	2,02%	31	\$ 123.759,33	\$ 48.380.272,25
2018	05	\$ 197.635	2,02%	30	\$ 119.767,09	\$ 48.500.039,34
2018	06	\$ 197.635	2,02%	29	\$ 115.774,85	\$ 48.615.814,20
2018	M13	\$ 197.635	2,02%	29	\$ 115.774,85	\$ 48.731.589,05
2018	07	\$ 197.635	2,02%	28	\$ 111.782,62	\$ 48.843.371,67
2018	08	\$ 197.635	2,02%	27	\$ 107.790,38	\$ 48.951.162,05
2018	09	\$ 197.635	2,02%	26	\$ 103.798,14	\$ 49.054.960,19
2018	10	\$ 197.635	2,02%	25	\$ 99.805,91	\$ 49.154.766,10
2018	11	\$ 197.635	2,02%	24	\$ 95.813,67	\$ 49.250.579,77
2018	12	\$ 197.635	2,02%	23	\$ 91.821,44	\$ 49.342.401,21
2018	M14	\$ 197.635	2,02%	23	\$ 91.821,44	\$ 49.434.222,65
2019	01	\$ 203.920	2,02%	22	\$ 90.622,17	\$ 49.524.844,81
2019	02	\$ 203.920	2,02%	21	\$ 86.502,98	\$ 49.611.347,79
2019	03	\$ 203.920	2,02%	20	\$ 82.383,79	\$ 49.693.731,58
2019	04	\$ 203.920	2,02%	19	\$ 78.264,60	\$ 49.771.996,18
2019	05	\$ 203.920	2,02%	18	\$ 74.145,41	\$ 49.846.141,59
2019	06	\$ 203.920	2,02%	17	\$ 70.026,22	\$ 49.916.167,81
2019	M13	\$ 203.920	2,02%	17	\$ 70.026,22	\$ 49.986.194,03
2019	07	\$ 203.920	2,02%	16	\$ 65.907,03	\$ 50.052.101,06
2019	08	\$ 203.920	2,02%	15	\$ 61.787,84	\$ 50.113.888,91
2019	09	\$ 203.920	2,02%	14	\$ 57.668,65	\$ 50.171.557,56
2019	10	\$ 203.920	2,02%	13	\$ 53.549,46	\$ 50.225.107,02
2019	11	\$ 203.920	2,02%	12	\$ 49.430,27	\$ 50.274.537,30
2019	12	\$ 203.920	2,02%	11	\$ 45.311,08	\$ 50.319.848,38
2019	M14	\$ 203.920	2,02%	11	\$ 45.311,08	\$ 50.365.159,46
2020	01	\$ 211.669	2,02%	10	\$ 42.757,19	\$ 50.407.916,65
2020	02	\$ 211.669	2,02%	9	\$ 38.481,47	\$ 50.446.398,12
2020	03	\$ 211.669	2,02%	8	\$ 34.205,75	\$ 50.480.603,87
2020	04	\$ 211.669	2,02%	7	\$ 29.930,03	\$ 50.510.533,90
2020	05	\$ 211.669	2,02%	6	\$ 25.654,31	\$ 50.536.188,21
2020	06	\$ 211.669	2,02%	5	\$ 21.378,59	\$ 50.557.566,80
2020	M13	\$ 211.669	2,02%	5	\$ 21.378,59	\$ 50.578.945,40
2020	07	\$ 211.669	2,02%	4	\$ 17.102,87	\$ 50.596.048,27
2020	08	\$ 211.669	2,02%	3	\$ 12.827,16	\$ 50.608.875,43
2020	09	\$ 211.669	2,02%	2	\$ 8.551,44	\$ 50.617.426,86
2020	10	\$ 211.669	2,02%	1	\$ 4.275,72	\$ 50.621.702,58

13. ELIA M. DEL CARMEN LATORRE ORDOÑEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 108.991,08	6,49%	4	\$ 435.964,32
2004	\$ 116.064,60	5,50%	14	\$ 1.624.904,42
2005	\$ 122.448,15	4,85%	14	\$ 1.714.274,16
2006	\$ 128.386,89	4,48%	14	\$ 1.797.416,45
2007	\$ 134.138,62	5,69%	14	\$ 1.877.940,71
2008	\$ 141.771,11	7,67%	14	\$ 1.984.795,54
2009	\$ 152.644,95	2,00%	14	\$ 2.137.029,36
2010	\$ 155.697,85	3,17%	14	\$ 2.179.769,94
2011	\$ 160.633,48	3,73%	14	\$ 2.248.868,65
2012	\$ 166.625,10	2,44%	14	\$ 2.332.751,45
2013	\$ 170.690,76	1,94%	14	\$ 2.389.670,59
2014	\$ 174.002,16	3,66%	14	\$ 2.436.030,20
2015	\$ 180.370,64	6,77%	14	\$ 2.525.188,90
2016	\$ 192.581,73	5,75%	14	\$ 2.696.144,19
2017	\$ 203.655,18	4,09%	14	\$ 2.851.172,48

2018	\$ 211.984,67	3,18%	14	\$ 2.967.785,44
2019	\$ 218.725,79	3,80%	14	\$ 3.062.161,01
2020	\$ 227.037,37	1,61%	11	\$ 2.497.411,03
				\$ 37.698.410,10

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2003	10	\$ 82.434	2,02%	205	\$ 341.359,19	\$ 341.359,19
2003	11	\$ 82.434	2,02%	204	\$ 339.694,03	\$ 681.053,22
2003	12	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.019.082,08
2003	M14	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.357.110,94
2004	01	\$ 116.065	2,02%	202	\$ 473.590,00	\$ 1.830.700,94
2004	02	\$ 116.065	2,02%	201	\$ 471.245,49	\$ 2.301.946,43
2004	03	\$ 116.065	2,02%	200	\$ 468.900,99	\$ 2.770.847,42
2004	04	\$ 116.065	2,02%	199	\$ 466.556,48	\$ 3.237.403,91
2004	05	\$ 116.065	2,02%	198	\$ 464.211,98	\$ 3.701.615,88
2004	06	\$ 116.065	2,02%	197	\$ 461.867,47	\$ 4.163.483,36
2004	M13	\$ 116.065	2,02%	197	\$ 461.867,47	\$ 4.625.350,83
2004	07	\$ 116.065	2,02%	196	\$ 459.522,97	\$ 5.084.873,80
2004	08	\$ 116.065	2,02%	195	\$ 457.178,46	\$ 5.542.052,26
2004	09	\$ 116.065	2,02%	194	\$ 454.833,96	\$ 5.996.886,22
2004	10	\$ 116.065	2,02%	193	\$ 452.489,45	\$ 6.449.375,68
2004	11	\$ 116.065	2,02%	192	\$ 450.144,95	\$ 6.899.520,63
2004	12	\$ 116.065	2,02%	191	\$ 447.800,44	\$ 7.347.321,07
2004	M14	\$ 116.065	2,02%	191	\$ 447.800,44	\$ 7.795.121,51
2005	01	\$ 122.448	2,02%	190	\$ 469.956,02	\$ 8.265.077,53
2005	02	\$ 122.448	2,02%	189	\$ 467.482,56	\$ 8.732.560,09
2005	03	\$ 122.448	2,02%	188	\$ 465.009,11	\$ 9.197.569,20
2005	04	\$ 122.448	2,02%	187	\$ 462.535,66	\$ 9.660.104,86
2005	05	\$ 122.448	2,02%	186	\$ 460.062,20	\$ 10.120.167,06
2005	06	\$ 122.448	2,02%	185	\$ 457.588,75	\$ 10.577.755,82
2005	M13	\$ 122.448	2,02%	185	\$ 457.588,75	\$ 11.035.344,57
2005	07	\$ 122.448	2,02%	184	\$ 455.115,30	\$ 11.490.459,87
2005	08	\$ 122.448	2,02%	183	\$ 452.641,85	\$ 11.943.101,71
2005	09	\$ 122.448	2,02%	182	\$ 450.168,39	\$ 12.393.270,11
2005	10	\$ 122.448	2,02%	181	\$ 447.694,94	\$ 12.840.965,05
2005	11	\$ 122.448	2,02%	180	\$ 445.221,49	\$ 13.286.186,54
2005	12	\$ 122.448	2,02%	179	\$ 442.748,04	\$ 13.728.934,57
2005	M14	\$ 122.448	2,02%	179	\$ 442.748,04	\$ 14.171.682,61
2006	01	\$ 128.387	2,02%	178	\$ 461.627,90	\$ 14.633.310,51
2006	02	\$ 128.387	2,02%	177	\$ 459.034,49	\$ 15.092.344,99
2006	03	\$ 128.387	2,02%	176	\$ 456.441,07	\$ 15.548.786,06
2006	04	\$ 128.387	2,02%	175	\$ 453.847,65	\$ 16.002.633,72
2006	05	\$ 128.387	2,02%	174	\$ 451.254,24	\$ 16.453.887,96
2006	06	\$ 128.387	2,02%	173	\$ 448.660,82	\$ 16.902.548,78
2006	M13	\$ 128.387	2,02%	173	\$ 448.660,82	\$ 17.351.209,61
2006	07	\$ 128.387	2,02%	172	\$ 446.067,41	\$ 17.797.277,02
2006	08	\$ 128.387	2,02%	171	\$ 443.473,99	\$ 18.240.751,01
2006	09	\$ 128.387	2,02%	170	\$ 440.880,58	\$ 18.681.631,59
2006	10	\$ 128.387	2,02%	169	\$ 438.287,16	\$ 19.119.918,75
2006	11	\$ 128.387	2,02%	168	\$ 435.693,75	\$ 19.555.612,50
2006	12	\$ 128.387	2,02%	167	\$ 433.100,33	\$ 19.988.712,84
2006	M14	\$ 128.387	2,02%	167	\$ 433.100,33	\$ 20.421.813,17
2007	01	\$ 134.139	2,02%	166	\$ 449.793,63	\$ 20.871.606,80
2007	02	\$ 134.139	2,02%	165	\$ 447.084,03	\$ 21.318.690,83
2007	03	\$ 134.139	2,02%	164	\$ 444.374,43	\$ 21.763.065,25
2007	04	\$ 134.139	2,02%	163	\$ 441.664,83	\$ 22.204.730,08

2007	05	\$ 134.139	2,02%	162	\$ 438.955,23	\$ 22.643.685,31
2007	06	\$ 134.139	2,02%	161	\$ 436.245,63	\$ 23.079.930,94
2007	M13	\$ 134.139	2,02%	161	\$ 436.245,63	\$ 23.516.176,56
2007	07	\$ 134.139	2,02%	160	\$ 433.536,03	\$ 23.949.712,59
2007	08	\$ 134.139	2,02%	159	\$ 430.826,43	\$ 24.380.539,02
2007	09	\$ 134.139	2,02%	158	\$ 428.116,83	\$ 24.808.655,85
2007	10	\$ 134.139	2,02%	157	\$ 425.407,23	\$ 25.234.063,07
2007	11	\$ 134.139	2,02%	156	\$ 422.697,63	\$ 25.656.760,70
2007	12	\$ 134.139	2,02%	155	\$ 419.988,03	\$ 26.076.748,73
2007	M14	\$ 134.139	2,02%	155	\$ 419.988,03	\$ 26.496.736,75
2008	01	\$ 141.771	2,02%	154	\$ 441.021,57	\$ 26.937.758,32
2008	02	\$ 141.771	2,02%	153	\$ 438.157,79	\$ 27.375.916,11
2008	03	\$ 141.771	2,02%	152	\$ 435.294,02	\$ 27.811.210,13
2008	04	\$ 141.771	2,02%	151	\$ 432.430,24	\$ 28.243.640,37
2008	05	\$ 141.771	2,02%	150	\$ 429.566,46	\$ 28.673.206,83
2008	06	\$ 141.771	2,02%	149	\$ 426.702,69	\$ 29.099.909,52
2008	M13	\$ 141.771	2,02%	149	\$ 426.702,69	\$ 29.526.612,20
2008	07	\$ 141.771	2,02%	148	\$ 423.838,91	\$ 29.950.451,11
2008	08	\$ 141.771	2,02%	147	\$ 420.975,13	\$ 30.371.426,25
2008	09	\$ 141.771	2,02%	146	\$ 418.111,36	\$ 30.789.537,60
2008	10	\$ 141.771	2,02%	145	\$ 415.247,58	\$ 31.204.785,19
2008	11	\$ 141.771	2,02%	144	\$ 412.383,80	\$ 31.617.168,99
2008	12	\$ 141.771	2,02%	143	\$ 409.520,03	\$ 32.026.689,02
2008	M14	\$ 141.771	2,02%	143	\$ 409.520,03	\$ 32.436.209,05
2009	01	\$ 152.645	2,02%	142	\$ 437.846,79	\$ 32.874.055,83
2009	02	\$ 152.645	2,02%	141	\$ 434.763,36	\$ 33.308.819,19
2009	03	\$ 152.645	2,02%	140	\$ 431.679,93	\$ 33.740.499,12
2009	04	\$ 152.645	2,02%	139	\$ 428.596,50	\$ 34.169.095,62
2009	05	\$ 152.645	2,02%	138	\$ 425.513,07	\$ 34.594.608,70
2009	06	\$ 152.645	2,02%	137	\$ 422.429,65	\$ 35.017.038,34
2009	M13	\$ 152.645	2,02%	137	\$ 422.429,65	\$ 35.439.467,99
2009	07	\$ 152.645	2,02%	136	\$ 419.346,22	\$ 35.858.814,21
2009	08	\$ 152.645	2,02%	135	\$ 416.262,79	\$ 36.275.076,99
2009	09	\$ 152.645	2,02%	134	\$ 413.179,36	\$ 36.688.256,36
2009	10	\$ 152.645	2,02%	133	\$ 410.095,93	\$ 37.098.352,29
2009	11	\$ 152.645	2,02%	132	\$ 407.012,51	\$ 37.505.364,80
2009	12	\$ 152.645	2,02%	131	\$ 403.929,08	\$ 37.909.293,87
2009	M14	\$ 152.645	2,02%	131	\$ 403.929,08	\$ 38.313.222,95
2010	01	\$ 155.698	2,02%	130	\$ 408.862,56	\$ 38.722.085,51
2010	02	\$ 155.698	2,02%	129	\$ 405.717,47	\$ 39.127.802,98
2010	03	\$ 155.698	2,02%	128	\$ 402.572,37	\$ 39.530.375,35
2010	04	\$ 155.698	2,02%	127	\$ 399.427,27	\$ 39.929.802,62
2010	05	\$ 155.698	2,02%	126	\$ 396.282,18	\$ 40.326.084,79
2010	06	\$ 155.698	2,02%	125	\$ 393.137,08	\$ 40.719.221,87
2010	M13	\$ 155.698	2,02%	125	\$ 393.137,08	\$ 41.112.358,95
2010	07	\$ 155.698	2,02%	124	\$ 389.991,98	\$ 41.502.350,94
2010	08	\$ 155.698	2,02%	123	\$ 386.846,89	\$ 41.889.197,82
2010	09	\$ 155.698	2,02%	122	\$ 383.701,79	\$ 42.272.899,61
2010	10	\$ 155.698	2,02%	121	\$ 380.556,69	\$ 42.653.456,30
2010	11	\$ 155.698	2,02%	120	\$ 377.411,60	\$ 43.030.867,90
2010	12	\$ 155.698	2,02%	119	\$ 374.266,50	\$ 43.405.134,40
2010	M14	\$ 155.698	2,02%	119	\$ 374.266,50	\$ 43.779.400,90
2011	01	\$ 160.633	2,02%	118	\$ 382.885,95	\$ 44.162.286,85
2011	02	\$ 160.633	2,02%	117	\$ 379.641,15	\$ 44.541.928,00
2011	03	\$ 160.633	2,02%	116	\$ 376.396,36	\$ 44.918.324,36
2011	04	\$ 160.633	2,02%	115	\$ 373.151,56	\$ 45.291.475,92
2011	05	\$ 160.633	2,02%	114	\$ 369.906,77	\$ 45.661.382,69

2011	06	\$ 160.633	2,02%	113	\$ 366.661,97	\$ 46.028.044,66
2011	M13	\$ 160.633	2,02%	113	\$ 366.661,97	\$ 46.394.706,63
2011	07	\$ 160.633	2,02%	112	\$ 363.417,17	\$ 46.758.123,81
2011	08	\$ 160.633	2,02%	111	\$ 360.172,38	\$ 47.118.296,18
2011	09	\$ 160.633	2,02%	110	\$ 356.927,58	\$ 47.475.223,76
2011	10	\$ 160.633	2,02%	109	\$ 353.682,79	\$ 47.828.906,55
2011	11	\$ 160.633	2,02%	108	\$ 350.437,99	\$ 48.179.344,54
2011	12	\$ 160.633	2,02%	107	\$ 347.193,19	\$ 48.526.537,73
2011	M14	\$ 160.633	2,02%	107	\$ 347.193,19	\$ 48.873.730,93
2012	01	\$ 166.625	2,02%	106	\$ 356.777,67	\$ 49.230.508,60
2012	02	\$ 166.625	2,02%	105	\$ 353.411,84	\$ 49.583.920,44
2012	03	\$ 166.625	2,02%	104	\$ 350.046,02	\$ 0,00
2012	04	\$ 166.625	2,02%	103	\$ 346.680,19	\$ 50.280.646,65
2012	05	\$ 166.625	2,02%	102	\$ 343.314,36	\$ 50.623.961,01
2012	06	\$ 166.625	2,02%	101	\$ 339.948,54	\$ 50.963.909,55
2012	M13	\$ 166.625	2,02%	101	\$ 339.948,54	\$ 51.303.858,09
2012	07	\$ 166.625	2,02%	100	\$ 336.582,71	\$ 51.640.440,80
2012	08	\$ 166.625	2,02%	99	\$ 333.216,88	\$ 51.973.657,68
2012	09	\$ 166.625	2,02%	98	\$ 329.851,06	\$ 52.303.508,73
2012	10	\$ 166.625	2,02%	97	\$ 326.485,23	\$ 52.629.993,96
2012	11	\$ 166.625	2,02%	96	\$ 323.119,40	\$ 52.953.113,36
2012	12	\$ 166.625	2,02%	95	\$ 319.753,57	\$ 53.272.866,94
2012	M14	\$ 166.625	2,02%	95	\$ 319.753,57	\$ 53.592.620,51
2013	01	\$ 170.691	2,02%	94	\$ 324.107,61	\$ 53.916.728,12
2013	02	\$ 170.691	2,02%	93	\$ 320.659,65	\$ 54.237.387,77
2013	03	\$ 170.691	2,02%	92	\$ 317.211,70	\$ 54.554.599,47
2013	04	\$ 170.691	2,02%	91	\$ 313.763,75	\$ 54.868.363,22
2013	05	\$ 170.691	2,02%	90	\$ 310.315,79	\$ 55.178.679,02
2013	06	\$ 170.691	2,02%	89	\$ 306.867,84	\$ 55.485.546,86
2013	M13	\$ 170.691	2,02%	89	\$ 306.867,84	\$ 55.792.414,70
2013	07	\$ 170.691	2,02%	88	\$ 303.419,89	\$ 56.095.834,59
2013	08	\$ 170.691	2,02%	87	\$ 299.971,93	\$ 56.395.806,52
2013	09	\$ 170.691	2,02%	86	\$ 296.523,98	\$ 56.692.330,51
2013	10	\$ 170.691	2,02%	85	\$ 293.076,03	\$ 56.985.406,53
2013	11	\$ 170.691	2,02%	84	\$ 289.628,08	\$ 57.275.034,61
2013	12	\$ 170.691	2,02%	83	\$ 286.180,12	\$ 57.561.214,73
2013	M14	\$ 170.691	2,02%	83	\$ 286.180,12	\$ 57.847.394,85
2014	01	\$ 174.002	2,02%	82	\$ 288.217,17	\$ 58.135.612,02
2014	02	\$ 174.002	2,02%	81	\$ 284.702,33	\$ 58.420.314,35
2014	03	\$ 174.002	2,02%	80	\$ 281.187,49	\$ 58.701.501,84
2014	04	\$ 174.002	2,02%	79	\$ 277.672,64	\$ 58.979.174,48
2014	05	\$ 174.002	2,02%	78	\$ 274.157,80	\$ 59.253.332,28
2014	06	\$ 174.002	2,02%	77	\$ 270.642,95	\$ 59.523.975,23
2014	M13	\$ 174.002	2,02%	77	\$ 270.642,95	\$ 59.794.618,19
2014	07	\$ 174.002	2,02%	76	\$ 267.128,11	\$ 60.061.746,30
2014	08	\$ 174.002	2,02%	75	\$ 263.613,27	\$ 60.325.359,57
2014	09	\$ 174.002	2,02%	74	\$ 260.098,42	\$ 60.585.457,99
2014	10	\$ 174.002	2,02%	73	\$ 256.583,58	\$ 60.842.041,57
2014	11	\$ 174.002	2,02%	72	\$ 253.068,74	\$ 61.095.110,31
2014	12	\$ 174.002	2,02%	71	\$ 249.553,89	\$ 61.344.664,20
2014	M14	\$ 174.002	2,02%	71	\$ 249.553,89	\$ 61.594.218,10
2015	01	\$ 180.371	2,02%	70	\$ 255.044,08	\$ 61.849.262,18
2015	02	\$ 180.371	2,02%	69	\$ 251.400,59	\$ 62.100.662,77
2015	03	\$ 180.371	2,02%	68	\$ 247.757,11	\$ 62.348.419,87
2015	04	\$ 180.371	2,02%	67	\$ 244.113,62	\$ 62.592.533,49
2015	05	\$ 180.371	2,02%	66	\$ 240.470,13	\$ 62.833.003,62
2015	06	\$ 180.371	2,02%	65	\$ 236.826,64	\$ 63.069.830,27

2015	M13	\$ 180.371	2,02%	65	\$ 236.826,64	\$ 63.306.656,91
2015	07	\$ 180.371	2,02%	64	\$ 233.183,16	\$ 63.539.840,07
2015	08	\$ 180.371	2,02%	63	\$ 229.539,67	\$ 63.769.379,74
2015	09	\$ 180.371	2,02%	62	\$ 225.896,18	\$ 63.995.275,93
2015	10	\$ 180.371	2,02%	61	\$ 222.252,70	\$ 64.217.528,62
2015	11	\$ 180.371	2,02%	60	\$ 218.609,21	\$ 64.436.137,83
2015	12	\$ 180.371	2,02%	59	\$ 214.965,72	\$ 64.651.103,56
2015	M14	\$ 180.371	2,02%	59	\$ 214.965,72	\$ 64.866.069,28
2016	01	\$ 192.582	2,02%	58	\$ 225.628,75	\$ 65.091.698,03
2016	02	\$ 192.582	2,02%	57	\$ 221.738,60	\$ 65.313.436,64
2016	03	\$ 192.582	2,02%	56	\$ 217.848,45	\$ 65.531.285,09
2016	04	\$ 192.582	2,02%	55	\$ 213.958,30	\$ 65.745.243,39
2016	05	\$ 192.582	2,02%	54	\$ 210.068,15	\$ 65.955.311,53
2016	06	\$ 192.582	2,02%	53	\$ 206.178,00	\$ 66.161.489,53
2016	M13	\$ 192.582	2,02%	53	\$ 206.178,00	\$ 66.367.667,53
2016	07	\$ 192.582	2,02%	52	\$ 202.287,85	\$ 66.569.955,38
2016	08	\$ 192.582	2,02%	51	\$ 198.397,70	\$ 66.768.353,07
2016	09	\$ 192.582	2,02%	50	\$ 194.507,55	\$ 66.962.860,62
2016	10	\$ 192.582	2,02%	49	\$ 190.617,39	\$ 67.153.478,01
2016	11	\$ 192.582	2,02%	48	\$ 186.727,24	\$ 67.340.205,26
2016	12	\$ 192.582	2,02%	47	\$ 182.837,09	\$ 67.523.042,35
2016	M14	\$ 192.582	2,02%	47	\$ 182.837,09	\$ 67.705.879,44
2017	01	\$ 203.655	2,02%	46	\$ 189.236,39	\$ 67.895.115,83
2017	02	\$ 203.655	2,02%	45	\$ 185.122,56	\$ 68.080.238,39
2017	03	\$ 203.655	2,02%	44	\$ 181.008,72	\$ 68.261.247,11
2017	04	\$ 203.655	2,02%	43	\$ 176.894,89	\$ 68.438.142,00
2017	05	\$ 203.655	2,02%	42	\$ 172.781,05	\$ 68.610.923,05
2017	06	\$ 203.655	2,02%	41	\$ 168.667,22	\$ 68.779.590,27
2017	M13	\$ 203.655	2,02%	41	\$ 168.667,22	\$ 68.948.257,48
2017	07	\$ 203.655	2,02%	40	\$ 164.553,38	\$ 69.112.810,87
2017	08	\$ 203.655	2,02%	39	\$ 160.439,55	\$ 69.273.250,42
2017	09	\$ 203.655	2,02%	38	\$ 156.325,71	\$ 69.429.576,13
2017	10	\$ 203.655	2,02%	37	\$ 152.211,88	\$ 69.581.788,01
2017	11	\$ 203.655	2,02%	36	\$ 148.098,04	\$ 69.729.886,05
2017	12	\$ 203.655	2,02%	35	\$ 143.984,21	\$ 69.873.870,26
2017	M14	\$ 203.655	2,02%	35	\$ 143.984,21	\$ 70.017.854,47
2018	01	\$ 211.985	2,02%	34	\$ 145.591,07	\$ 70.163.445,55
2018	02	\$ 211.985	2,02%	33	\$ 141.308,98	\$ 70.304.754,53
2018	03	\$ 211.985	2,02%	32	\$ 137.026,89	\$ 70.441.781,43
2018	04	\$ 211.985	2,02%	31	\$ 132.744,80	\$ 70.574.526,23
2018	05	\$ 211.985	2,02%	30	\$ 128.462,71	\$ 70.702.988,94
2018	06	\$ 211.985	2,02%	29	\$ 124.180,62	\$ 70.827.169,56
2018	M13	\$ 211.985	2,02%	29	\$ 124.180,62	\$ 70.951.350,18
2018	07	\$ 211.985	2,02%	28	\$ 119.898,53	\$ 71.071.248,72
2018	08	\$ 211.985	2,02%	27	\$ 115.616,44	\$ 71.186.865,16
2018	09	\$ 211.985	2,02%	26	\$ 111.334,35	\$ 71.298.199,51
2018	10	\$ 211.985	2,02%	25	\$ 107.052,26	\$ 71.405.251,77
2018	11	\$ 211.985	2,02%	24	\$ 102.770,17	\$ 71.508.021,94
2018	12	\$ 211.985	2,02%	23	\$ 98.488,08	\$ 71.606.510,02
2018	M14	\$ 211.985	2,02%	23	\$ 98.488,08	\$ 71.704.998,10
2019	01	\$ 218.726	2,02%	22	\$ 97.201,74	\$ 71.802.199,84
2019	02	\$ 218.726	2,02%	21	\$ 92.783,48	\$ 71.894.983,32
2019	03	\$ 218.726	2,02%	20	\$ 88.365,22	\$ 71.983.348,53
2019	04	\$ 218.726	2,02%	19	\$ 83.946,96	\$ 72.067.295,49
2019	05	\$ 218.726	2,02%	18	\$ 79.528,70	\$ 72.146.824,19
2019	06	\$ 218.726	2,02%	17	\$ 75.110,44	\$ 72.221.934,62
2019	M13	\$ 218.726	2,02%	17	\$ 75.110,44	\$ 72.297.045,06

2019	07	\$ 218.726	2,02%	16	\$ 70.692,17	\$ 72.367.737,23
2019	08	\$ 218.726	2,02%	15	\$ 66.273,91	\$ 72.434.011,14
2019	09	\$ 218.726	2,02%	14	\$ 61.855,65	\$ 72.495.866,80
2019	10	\$ 218.726	2,02%	13	\$ 57.437,39	\$ 72.553.304,19
2019	11	\$ 218.726	2,02%	12	\$ 53.019,13	\$ 72.606.323,32
2019	12	\$ 218.726	2,02%	11	\$ 48.600,87	\$ 72.654.924,19
2019	M14	\$ 218.726	2,02%	11	\$ 48.600,87	\$ 72.703.525,06
2020	01	\$ 227.037	2,02%	10	\$ 45.861,55	\$ 72.749.386,61
2020	02	\$ 227.037	2,02%	9	\$ 41.275,39	\$ 72.790.662,00
2020	03	\$ 227.037	2,02%	8	\$ 36.689,24	\$ 72.827.351,24
2020	04	\$ 227.037	2,02%	7	\$ 32.103,08	\$ 72.859.454,32
2020	05	\$ 227.037	2,02%	6	\$ 27.516,93	\$ 72.886.971,25
2020	06	\$ 227.037	2,02%	5	\$ 22.930,77	\$ 72.909.902,02
2020	M13	\$ 227.037	2,02%	5	\$ 22.930,77	\$ 72.932.832,80
2020	07	\$ 227.037	2,02%	4	\$ 18.344,62	\$ 72.951.177,42
2020	08	\$ 227.037	2,02%	3	\$ 13.758,46	\$ 72.964.935,88
2020	09	\$ 227.037	2,02%	2	\$ 9.172,31	\$ 72.974.108,19
2020	10	\$ 227.037	2,02%	1	\$ 4.586,15	\$ 72.978.694,35

14. MANUEL MERCHÁN DUQUE

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 174.300,23	2,00%	8	\$ 1.394.401,84
2010	\$ 177.786,23	3,17%	14	\$ 2.489.007,28
2011	\$ 183.422,06	3,73%	14	\$ 2.567.908,82
2012	\$ 190.263,70	2,44%	14	\$ 2.663.691,81
2013	\$ 194.906,14	1,94%	14	\$ 2.728.685,89
2014	\$ 198.687,31	3,66%	14	\$ 2.781.622,40
2015	\$ 205.959,27	6,77%	14	\$ 2.883.429,78
2016	\$ 219.902,71	5,75%	14	\$ 3.078.637,98
2017	\$ 232.547,12	4,09%	14	\$ 3.255.659,66
2018	\$ 242.058,30	3,18%	14	\$ 3.388.816,14
2019	\$ 249.755,75	3,80%	14	\$ 3.496.580,49
2020	\$ 259.246,47	1,61%	11	\$ 2.851.711,15
				\$ 33.580.153,25

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	05	\$ 174.300	2,02%	138	\$ 485.879,32	\$ 485.879,32
2009	06	\$ 174.300	2,02%	137	\$ 482.358,46	\$ 968.237,78
2009	M13	\$ 174.300	2,02%	137	\$ 482.358,46	\$ 1.450.596,23
2009	07	\$ 174.300	2,02%	136	\$ 478.837,59	\$ 1.929.433,83
2009	08	\$ 174.300	2,02%	135	\$ 475.316,73	\$ 2.404.750,55
2009	09	\$ 174.300	2,02%	134	\$ 471.795,86	\$ 2.876.546,42
2009	10	\$ 174.300	2,02%	133	\$ 468.275,00	\$ 3.344.821,41
2009	11	\$ 174.300	2,02%	132	\$ 464.754,13	\$ 3.809.575,55
2009	12	\$ 174.300	2,02%	131	\$ 461.233,27	\$ 4.270.808,82
2009	M14	\$ 174.300	2,02%	131	\$ 461.233,27	\$ 4.732.042,08
2010	01	\$ 177.786	2,02%	130	\$ 466.866,65	\$ 5.198.908,74
2010	02	\$ 177.786	2,02%	129	\$ 463.275,37	\$ 5.662.184,11
2010	03	\$ 177.786	2,02%	128	\$ 459.684,09	\$ 6.121.868,19
2010	04	\$ 177.786	2,02%	127	\$ 456.092,81	\$ 6.577.961,00
2010	05	\$ 177.786	2,02%	126	\$ 452.501,52	\$ 7.030.462,53
2010	06	\$ 177.786	2,02%	125	\$ 448.910,24	\$ 7.479.372,77
2010	M13	\$ 177.786	2,02%	125	\$ 448.910,24	\$ 7.928.283,01
2010	07	\$ 177.786	2,02%	124	\$ 445.318,96	\$ 8.373.601,97
2010	08	\$ 177.786	2,02%	123	\$ 441.727,68	\$ 8.815.329,65

2010	09	\$ 177.786	2,02%	122	\$ 438.136,40	\$ 9.253.466,05
2010	10	\$ 177.786	2,02%	121	\$ 434.545,11	\$ 9.688.011,16
2010	11	\$ 177.786	2,02%	120	\$ 430.953,83	\$ 10.118.964,99
2010	12	\$ 177.786	2,02%	119	\$ 427.362,55	\$ 10.546.327,54
2010	M14	\$ 177.786	2,02%	119	\$ 427.362,55	\$ 10.973.690,09
2011	01	\$ 183.422	2,02%	118	\$ 437.204,82	\$ 11.410.894,91
2011	02	\$ 183.422	2,02%	117	\$ 433.499,69	\$ 11.844.394,60
2011	03	\$ 183.422	2,02%	116	\$ 429.794,57	\$ 12.274.189,17
2011	04	\$ 183.422	2,02%	115	\$ 426.089,44	\$ 12.700.278,61
2011	05	\$ 183.422	2,02%	114	\$ 422.384,32	\$ 13.122.662,93
2011	06	\$ 183.422	2,02%	113	\$ 418.679,19	\$ 13.541.342,12
2011	M13	\$ 183.422	2,02%	113	\$ 418.679,19	\$ 13.960.021,31
2011	07	\$ 183.422	2,02%	112	\$ 414.974,06	\$ 14.374.995,37
2011	08	\$ 183.422	2,02%	111	\$ 411.268,94	\$ 14.786.264,31
2011	09	\$ 183.422	2,02%	110	\$ 407.563,81	\$ 15.193.828,13
2011	10	\$ 183.422	2,02%	109	\$ 403.858,69	\$ 15.597.686,81
2011	11	\$ 183.422	2,02%	108	\$ 400.153,56	\$ 15.997.840,38
2011	12	\$ 183.422	2,02%	107	\$ 396.448,44	\$ 16.394.288,81
2011	M14	\$ 183.422	2,02%	107	\$ 396.448,44	\$ 16.790.737,25
2012	01	\$ 190.264	2,02%	106	\$ 407.392,64	\$ 17.198.129,89
2012	02	\$ 190.264	2,02%	105	\$ 403.549,31	\$ 17.601.679,20
2012	03	\$ 190.264	2,02%	104	\$ 399.705,98	\$ 0,00
2012	04	\$ 190.264	2,02%	103	\$ 395.862,66	\$ 18.397.247,83
2012	05	\$ 190.264	2,02%	102	\$ 392.019,33	\$ 18.789.267,16
2012	06	\$ 190.264	2,02%	101	\$ 388.176,00	\$ 19.177.443,17
2012	M13	\$ 190.264	2,02%	101	\$ 388.176,00	\$ 19.565.619,17
2012	07	\$ 190.264	2,02%	100	\$ 384.332,68	\$ 19.949.951,85
2012	08	\$ 190.264	2,02%	99	\$ 380.489,35	\$ 20.330.441,20
2012	09	\$ 190.264	2,02%	98	\$ 376.646,02	\$ 20.707.087,22
2012	10	\$ 190.264	2,02%	97	\$ 372.802,70	\$ 21.079.889,91
2012	11	\$ 190.264	2,02%	96	\$ 368.959,37	\$ 21.448.849,28
2012	12	\$ 190.264	2,02%	95	\$ 365.116,04	\$ 21.813.965,32
2012	M14	\$ 190.264	2,02%	95	\$ 365.116,04	\$ 22.179.081,37
2013	01	\$ 194.906	2,02%	94	\$ 370.087,77	\$ 22.549.169,14
2013	02	\$ 194.906	2,02%	93	\$ 366.150,67	\$ 22.915.319,80
2013	03	\$ 194.906	2,02%	92	\$ 362.213,56	\$ 23.277.533,36
2013	04	\$ 194.906	2,02%	91	\$ 358.276,46	\$ 23.635.809,82
2013	05	\$ 194.906	2,02%	90	\$ 354.339,35	\$ 23.990.149,18
2013	06	\$ 194.906	2,02%	89	\$ 350.402,25	\$ 24.340.551,43
2013	M13	\$ 194.906	2,02%	89	\$ 350.402,25	\$ 24.690.953,68
2013	07	\$ 194.906	2,02%	88	\$ 346.465,15	\$ 25.037.418,82
2013	08	\$ 194.906	2,02%	87	\$ 342.528,04	\$ 25.379.946,86
2013	09	\$ 194.906	2,02%	86	\$ 338.590,94	\$ 25.718.537,80
2013	10	\$ 194.906	2,02%	85	\$ 334.653,83	\$ 26.053.191,64
2013	11	\$ 194.906	2,02%	84	\$ 330.716,73	\$ 26.383.908,37
2013	12	\$ 194.906	2,02%	83	\$ 326.779,63	\$ 26.710.687,99
2013	M14	\$ 194.906	2,02%	83	\$ 326.779,63	\$ 27.037.467,62
2014	01	\$ 198.687	2,02%	82	\$ 329.105,67	\$ 27.366.573,29
2014	02	\$ 198.687	2,02%	81	\$ 325.092,18	\$ 27.691.665,47
2014	03	\$ 198.687	2,02%	80	\$ 321.078,70	\$ 28.012.744,17
2014	04	\$ 198.687	2,02%	79	\$ 317.065,22	\$ 28.329.809,39
2014	05	\$ 198.687	2,02%	78	\$ 313.051,73	\$ 28.642.861,12
2014	06	\$ 198.687	2,02%	77	\$ 309.038,25	\$ 28.951.899,37
2014	M13	\$ 198.687	2,02%	77	\$ 309.038,25	\$ 29.260.937,62
2014	07	\$ 198.687	2,02%	76	\$ 305.024,76	\$ 29.565.962,38
2014	08	\$ 198.687	2,02%	75	\$ 301.011,28	\$ 29.866.973,66
2014	09	\$ 198.687	2,02%	74	\$ 296.997,80	\$ 30.163.971,46

2014	10	\$ 198.687	2,02%	73	\$ 292.984,31	\$ 30.456.955,78
2014	11	\$ 198.687	2,02%	72	\$ 288.970,83	\$ 30.745.926,61
2014	12	\$ 198.687	2,02%	71	\$ 284.957,35	\$ 31.030.883,95
2014	M14	\$ 198.687	2,02%	71	\$ 284.957,35	\$ 31.315.841,30
2015	01	\$ 205.959	2,02%	70	\$ 291.226,41	\$ 31.607.067,71
2015	02	\$ 205.959	2,02%	69	\$ 287.066,03	\$ 31.894.133,74
2015	03	\$ 205.959	2,02%	68	\$ 282.905,65	\$ 32.177.039,39
2015	04	\$ 205.959	2,02%	67	\$ 278.745,28	\$ 32.455.784,67
2015	05	\$ 205.959	2,02%	66	\$ 274.584,90	\$ 32.730.369,56
2015	06	\$ 205.959	2,02%	65	\$ 270.424,52	\$ 33.000.794,09
2015	M13	\$ 205.959	2,02%	65	\$ 270.424,52	\$ 33.271.218,61
2015	07	\$ 205.959	2,02%	64	\$ 266.264,14	\$ 33.537.482,75
2015	08	\$ 205.959	2,02%	63	\$ 262.103,77	\$ 33.799.586,52
2015	09	\$ 205.959	2,02%	62	\$ 257.943,39	\$ 34.057.529,91
2015	10	\$ 205.959	2,02%	61	\$ 253.783,01	\$ 34.311.312,92
2015	11	\$ 205.959	2,02%	60	\$ 249.622,64	\$ 34.560.935,56
2015	12	\$ 205.959	2,02%	59	\$ 245.462,26	\$ 34.806.397,81
2015	M14	\$ 205.959	2,02%	59	\$ 245.462,26	\$ 35.051.860,07
2016	01	\$ 219.903	2,02%	58	\$ 257.638,02	\$ 35.309.498,09
2016	02	\$ 219.903	2,02%	57	\$ 253.195,98	\$ 35.562.694,07
2016	03	\$ 219.903	2,02%	56	\$ 248.753,95	\$ 35.811.448,02
2016	04	\$ 219.903	2,02%	55	\$ 244.311,91	\$ 36.055.759,94
2016	05	\$ 219.903	2,02%	54	\$ 239.869,88	\$ 36.295.629,82
2016	06	\$ 219.903	2,02%	53	\$ 235.427,84	\$ 36.531.057,66
2016	M13	\$ 219.903	2,02%	53	\$ 235.427,84	\$ 36.766.485,50
2016	07	\$ 219.903	2,02%	52	\$ 230.985,81	\$ 36.997.471,31
2016	08	\$ 219.903	2,02%	51	\$ 226.543,77	\$ 37.224.015,09
2016	09	\$ 219.903	2,02%	50	\$ 222.101,74	\$ 37.446.116,83
2016	10	\$ 219.903	2,02%	49	\$ 217.659,70	\$ 37.663.776,53
2016	11	\$ 219.903	2,02%	48	\$ 213.217,67	\$ 37.876.994,20
2016	12	\$ 219.903	2,02%	47	\$ 208.775,64	\$ 38.085.769,84
2016	M14	\$ 219.903	2,02%	47	\$ 208.775,64	\$ 38.294.545,47
2017	01	\$ 232.547	2,02%	46	\$ 216.082,78	\$ 38.510.628,26
2017	02	\$ 232.547	2,02%	45	\$ 211.385,33	\$ 38.722.013,59
2017	03	\$ 232.547	2,02%	44	\$ 206.687,88	\$ 38.928.701,47
2017	04	\$ 232.547	2,02%	43	\$ 201.990,43	\$ 39.130.691,89
2017	05	\$ 232.547	2,02%	42	\$ 197.292,98	\$ 39.327.984,87
2017	06	\$ 232.547	2,02%	41	\$ 192.595,52	\$ 39.520.580,39
2017	M13	\$ 232.547	2,02%	41	\$ 192.595,52	\$ 39.713.175,92
2017	07	\$ 232.547	2,02%	40	\$ 187.898,07	\$ 39.901.073,99
2017	08	\$ 232.547	2,02%	39	\$ 183.200,62	\$ 40.084.274,61
2017	09	\$ 232.547	2,02%	38	\$ 178.503,17	\$ 40.262.777,78
2017	10	\$ 232.547	2,02%	37	\$ 173.805,72	\$ 40.436.583,49
2017	11	\$ 232.547	2,02%	36	\$ 169.108,26	\$ 40.605.691,76
2017	12	\$ 232.547	2,02%	35	\$ 164.410,81	\$ 40.770.102,57
2017	M14	\$ 232.547	2,02%	35	\$ 164.410,81	\$ 40.934.513,38
2018	01	\$ 242.058	2,02%	34	\$ 166.245,64	\$ 41.100.759,02
2018	02	\$ 242.058	2,02%	33	\$ 161.356,06	\$ 41.262.115,08
2018	03	\$ 242.058	2,02%	32	\$ 156.466,48	\$ 41.418.581,56
2018	04	\$ 242.058	2,02%	31	\$ 151.576,90	\$ 41.570.158,47
2018	05	\$ 242.058	2,02%	30	\$ 146.687,33	\$ 41.716.845,79
2018	06	\$ 242.058	2,02%	29	\$ 141.797,75	\$ 41.858.643,54
2018	M13	\$ 242.058	2,02%	29	\$ 141.797,75	\$ 42.000.441,29
2018	07	\$ 242.058	2,02%	28	\$ 136.908,17	\$ 42.137.349,47
2018	08	\$ 242.058	2,02%	27	\$ 132.018,59	\$ 42.269.368,06
2018	09	\$ 242.058	2,02%	26	\$ 127.129,02	\$ 42.396.497,08
2018	10	\$ 242.058	2,02%	25	\$ 122.239,44	\$ 42.518.736,52

2018	11	\$ 242.058	2,02%	24	\$ 117.349,86	\$ 42.636.086,38
2018	12	\$ 242.058	2,02%	23	\$ 112.460,28	\$ 42.748.546,66
2018	M14	\$ 242.058	2,02%	23	\$ 112.460,28	\$ 42.861.006,95
2019	01	\$ 249.756	2,02%	22	\$ 110.991,46	\$ 42.971.998,40
2019	02	\$ 249.756	2,02%	21	\$ 105.946,39	\$ 43.077.944,79
2019	03	\$ 249.756	2,02%	20	\$ 100.901,32	\$ 43.178.846,11
2019	04	\$ 249.756	2,02%	19	\$ 95.856,26	\$ 43.274.702,37
2019	05	\$ 249.756	2,02%	18	\$ 90.811,19	\$ 43.365.513,56
2019	06	\$ 249.756	2,02%	17	\$ 85.766,12	\$ 43.451.279,69
2019	M13	\$ 249.756	2,02%	17	\$ 85.766,12	\$ 43.537.045,81
2019	07	\$ 249.756	2,02%	16	\$ 80.721,06	\$ 43.617.766,87
2019	08	\$ 249.756	2,02%	15	\$ 75.675,99	\$ 43.693.442,86
2019	09	\$ 249.756	2,02%	14	\$ 70.630,93	\$ 43.764.073,79
2019	10	\$ 249.756	2,02%	13	\$ 65.585,86	\$ 43.829.659,65
2019	11	\$ 249.756	2,02%	12	\$ 60.540,79	\$ 43.890.200,44
2019	12	\$ 249.756	2,02%	11	\$ 55.495,73	\$ 43.945.696,17
2019	M14	\$ 249.756	2,02%	11	\$ 55.495,73	\$ 44.001.191,89
2020	01	\$ 259.246	2,02%	10	\$ 52.367,79	\$ 44.053.559,68
2020	02	\$ 259.246	2,02%	9	\$ 47.131,01	\$ 44.100.690,69
2020	03	\$ 259.246	2,02%	8	\$ 41.894,23	\$ 44.142.584,92
2020	04	\$ 259.246	2,02%	7	\$ 36.657,45	\$ 44.179.242,37
2020	05	\$ 259.246	2,02%	6	\$ 31.420,67	\$ 44.210.663,04
2020	06	\$ 259.246	2,02%	5	\$ 26.183,89	\$ 44.236.846,93
2020	M13	\$ 259.246	2,02%	5	\$ 26.183,89	\$ 44.263.030,83
2020	07	\$ 259.246	2,02%	4	\$ 20.947,11	\$ 44.283.977,94
2020	08	\$ 259.246	2,02%	3	\$ 15.710,34	\$ 44.299.688,28
2020	09	\$ 259.246	2,02%	2	\$ 10.473,56	\$ 44.310.161,84
2020	10	\$ 259.246	2,02%	1	\$ 5.236,78	\$ 44.315.398,61

16. HERNANDO GALVIZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 193.547,08	6,49%	4	\$ 774.188,32
2004	\$ 206.108,29	5,50%	14	\$ 2.885.516,00
2005	\$ 217.444,24	4,85%	14	\$ 3.044.219,38
2006	\$ 227.990,29	4,48%	14	\$ 3.191.864,02
2007	\$ 238.204,25	5,69%	14	\$ 3.334.859,52
2008	\$ 251.758,07	7,67%	14	\$ 3.524.613,03
2009	\$ 271.067,92	2,00%	14	\$ 3.794.950,85
2010	\$ 276.489,28	3,17%	14	\$ 3.870.849,87
2011	\$ 285.253,99	3,73%	14	\$ 3.993.555,81
2012	\$ 295.893,96	2,44%	14	\$ 4.142.515,44
2013	\$ 303.113,77	1,94%	14	\$ 4.243.592,82
2014	\$ 308.994,18	3,66%	14	\$ 4.325.918,52
2015	\$ 320.303,37	6,77%	14	\$ 4.484.247,14
2016	\$ 341.987,90	5,75%	14	\$ 4.787.830,67
2017	\$ 361.652,21	4,09%	14	\$ 5.063.130,93
2018	\$ 376.443,78	3,18%	14	\$ 5.270.212,98
2019	\$ 388.414,70	3,80%	14	\$ 5.437.805,76
2020	\$ 403.174,46	1,61%	11	\$ 4.434.919,01
				\$ 66.945.085,74

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados

2003	10	\$ 82.434	2,02%	205	\$ 341.359,19	\$ 341.359,19
2003	11	\$ 82.434	2,02%	204	\$ 339.694,03	\$ 681.053,22
2003	12	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.019.082,08
2003	M14	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.357.110,94
2004	01	\$ 206.108	2,02%	202	\$ 841.004,25	\$ 2.198.115,19
2004	02	\$ 206.108	2,02%	201	\$ 836.840,86	\$ 3.034.956,05
2004	03	\$ 206.108	2,02%	200	\$ 832.677,47	\$ 3.867.633,52
2004	04	\$ 206.108	2,02%	199	\$ 828.514,09	\$ 4.696.147,61
2004	05	\$ 206.108	2,02%	198	\$ 824.350,70	\$ 5.520.498,31
2004	06	\$ 206.108	2,02%	197	\$ 820.187,31	\$ 6.340.685,62
2004	M13	\$ 206.108	2,02%	197	\$ 820.187,31	\$ 7.160.872,93
2004	07	\$ 206.108	2,02%	196	\$ 816.023,92	\$ 7.976.896,86
2004	08	\$ 206.108	2,02%	195	\$ 811.860,54	\$ 8.788.757,39
2004	09	\$ 206.108	2,02%	194	\$ 807.697,15	\$ 9.596.454,54
2004	10	\$ 206.108	2,02%	193	\$ 803.533,76	\$ 10.399.988,30
2004	11	\$ 206.108	2,02%	192	\$ 799.370,37	\$ 11.199.358,68
2004	12	\$ 206.108	2,02%	191	\$ 795.206,99	\$ 11.994.565,66
2004	M14	\$ 206.108	2,02%	191	\$ 795.206,99	\$ 12.789.772,65
2005	01	\$ 217.444	2,02%	190	\$ 834.551,00	\$ 13.624.323,65
2005	02	\$ 217.444	2,02%	189	\$ 830.158,62	\$ 14.454.482,27
2005	03	\$ 217.444	2,02%	188	\$ 825.766,25	\$ 15.280.248,52
2005	04	\$ 217.444	2,02%	187	\$ 821.373,88	\$ 16.101.622,40
2005	05	\$ 217.444	2,02%	186	\$ 816.981,50	\$ 16.918.603,90
2005	06	\$ 217.444	2,02%	185	\$ 812.589,13	\$ 17.731.193,03
2005	M13	\$ 217.444	2,02%	185	\$ 812.589,13	\$ 18.543.782,16
2005	07	\$ 217.444	2,02%	184	\$ 808.196,76	\$ 19.351.978,92
2005	08	\$ 217.444	2,02%	183	\$ 803.804,38	\$ 20.155.783,30
2005	09	\$ 217.444	2,02%	182	\$ 799.412,01	\$ 20.955.195,31
2005	10	\$ 217.444	2,02%	181	\$ 795.019,63	\$ 21.750.214,94
2005	11	\$ 217.444	2,02%	180	\$ 790.627,26	\$ 22.540.842,20
2005	12	\$ 217.444	2,02%	179	\$ 786.234,89	\$ 23.327.077,09
2005	M14	\$ 217.444	2,02%	179	\$ 786.234,89	\$ 24.113.311,98
2006	01	\$ 227.990	2,02%	178	\$ 819.761,88	\$ 24.933.073,85
2006	02	\$ 227.990	2,02%	177	\$ 815.156,47	\$ 25.748.230,33
2006	03	\$ 227.990	2,02%	176	\$ 810.551,07	\$ 26.558.781,39
2006	04	\$ 227.990	2,02%	175	\$ 805.945,66	\$ 27.364.727,06
2006	05	\$ 227.990	2,02%	174	\$ 801.340,26	\$ 28.166.067,32
2006	06	\$ 227.990	2,02%	173	\$ 796.734,86	\$ 28.962.802,17
2006	M13	\$ 227.990	2,02%	173	\$ 796.734,86	\$ 29.759.537,03
2006	07	\$ 227.990	2,02%	172	\$ 792.129,45	\$ 30.551.666,48
2006	08	\$ 227.990	2,02%	171	\$ 787.524,05	\$ 31.339.190,53
2006	09	\$ 227.990	2,02%	170	\$ 782.918,65	\$ 32.122.109,18
2006	10	\$ 227.990	2,02%	169	\$ 778.313,24	\$ 32.900.422,42
2006	11	\$ 227.990	2,02%	168	\$ 773.707,84	\$ 33.674.130,26
2006	12	\$ 227.990	2,02%	167	\$ 769.102,43	\$ 34.443.232,69
2006	M14	\$ 227.990	2,02%	167	\$ 769.102,43	\$ 35.212.335,12
2007	01	\$ 238.204	2,02%	166	\$ 798.746,50	\$ 36.011.081,62
2007	02	\$ 238.204	2,02%	165	\$ 793.934,77	\$ 36.805.016,39
2007	03	\$ 238.204	2,02%	164	\$ 789.123,05	\$ 37.594.139,44
2007	04	\$ 238.204	2,02%	163	\$ 784.311,32	\$ 38.378.450,76
2007	05	\$ 238.204	2,02%	162	\$ 779.499,59	\$ 39.157.950,35
2007	06	\$ 238.204	2,02%	161	\$ 774.687,87	\$ 39.932.638,22
2007	M13	\$ 238.204	2,02%	161	\$ 774.687,87	\$ 40.707.326,09
2007	07	\$ 238.204	2,02%	160	\$ 769.876,14	\$ 41.477.202,23
2007	08	\$ 238.204	2,02%	159	\$ 765.064,42	\$ 42.242.266,64
2007	09	\$ 238.204	2,02%	158	\$ 760.252,69	\$ 43.002.519,33
2007	10	\$ 238.204	2,02%	157	\$ 755.440,96	\$ 43.757.960,30

2007	11	\$ 238.204	2,02%	156	\$ 750.629,24	\$ 44.508.589,54
2007	12	\$ 238.204	2,02%	155	\$ 745.817,51	\$ 45.254.407,05
2007	M14	\$ 238.204	2,02%	155	\$ 745.817,51	\$ 46.000.224,56
2008	01	\$ 251.758	2,02%	154	\$ 783.169,02	\$ 46.783.393,58
2008	02	\$ 251.758	2,02%	153	\$ 778.083,50	\$ 47.561.477,08
2008	03	\$ 251.758	2,02%	152	\$ 772.997,99	\$ 48.334.475,07
2008	04	\$ 251.758	2,02%	151	\$ 767.912,48	\$ 49.102.387,54
2008	05	\$ 251.758	2,02%	150	\$ 762.826,96	\$ 49.865.214,51
2008	06	\$ 251.758	2,02%	149	\$ 757.741,45	\$ 50.622.955,96
2008	M13	\$ 251.758	2,02%	149	\$ 757.741,45	\$ 51.380.697,41
2008	07	\$ 251.758	2,02%	148	\$ 752.655,94	\$ 52.133.353,34
2008	08	\$ 251.758	2,02%	147	\$ 747.570,42	\$ 52.880.923,77
2008	09	\$ 251.758	2,02%	146	\$ 742.484,91	\$ 53.623.408,68
2008	10	\$ 251.758	2,02%	145	\$ 737.399,40	\$ 54.360.808,08
2008	11	\$ 251.758	2,02%	144	\$ 732.313,88	\$ 55.093.121,96
2008	12	\$ 251.758	2,02%	143	\$ 727.228,37	\$ 55.820.350,33
2008	M14	\$ 251.758	2,02%	143	\$ 727.228,37	\$ 56.547.578,70
2009	01	\$ 271.068	2,02%	142	\$ 777.531,22	\$ 57.325.109,92
2009	02	\$ 271.068	2,02%	141	\$ 772.055,64	\$ 58.097.165,56
2009	03	\$ 271.068	2,02%	140	\$ 766.580,07	\$ 58.863.745,64
2009	04	\$ 271.068	2,02%	139	\$ 761.104,50	\$ 59.624.850,14
2009	05	\$ 271.068	2,02%	138	\$ 755.628,93	\$ 60.380.479,06
2009	06	\$ 271.068	2,02%	137	\$ 750.153,36	\$ 61.130.632,42
2009	M13	\$ 271.068	2,02%	137	\$ 750.153,36	\$ 61.880.785,78
2009	07	\$ 271.068	2,02%	136	\$ 744.677,78	\$ 62.625.463,56
2009	08	\$ 271.068	2,02%	135	\$ 739.202,21	\$ 63.364.665,77
2009	09	\$ 271.068	2,02%	134	\$ 733.726,64	\$ 64.098.392,41
2009	10	\$ 271.068	2,02%	133	\$ 728.251,07	\$ 64.826.643,48
2009	11	\$ 271.068	2,02%	132	\$ 722.775,50	\$ 65.549.418,98
2009	12	\$ 271.068	2,02%	131	\$ 717.299,92	\$ 66.266.718,90
2009	M14	\$ 271.068	2,02%	131	\$ 717.299,92	\$ 66.984.018,83
2010	01	\$ 276.489	2,02%	130	\$ 726.060,84	\$ 67.710.079,67
2010	02	\$ 276.489	2,02%	129	\$ 720.475,76	\$ 68.430.555,42
2010	03	\$ 276.489	2,02%	128	\$ 714.890,67	\$ 69.145.446,09
2010	04	\$ 276.489	2,02%	127	\$ 709.305,59	\$ 69.854.751,68
2010	05	\$ 276.489	2,02%	126	\$ 703.720,51	\$ 70.558.472,19
2010	06	\$ 276.489	2,02%	125	\$ 698.135,42	\$ 71.256.607,61
2010	M13	\$ 276.489	2,02%	125	\$ 698.135,42	\$ 71.954.743,03
2010	07	\$ 276.489	2,02%	124	\$ 692.550,34	\$ 72.647.293,37
2010	08	\$ 276.489	2,02%	123	\$ 686.965,26	\$ 73.334.258,63
2010	09	\$ 276.489	2,02%	122	\$ 681.380,17	\$ 74.015.638,80
2010	10	\$ 276.489	2,02%	121	\$ 675.795,09	\$ 74.691.433,89
2010	11	\$ 276.489	2,02%	120	\$ 670.210,01	\$ 75.361.643,90
2010	12	\$ 276.489	2,02%	119	\$ 664.624,92	\$ 76.026.268,82
2010	M14	\$ 276.489	2,02%	119	\$ 664.624,92	\$ 76.690.893,74
2011	01	\$ 285.254	2,02%	118	\$ 679.931,40	\$ 77.370.825,14
2011	02	\$ 285.254	2,02%	117	\$ 674.169,27	\$ 78.044.994,41
2011	03	\$ 285.254	2,02%	116	\$ 668.407,14	\$ 78.713.401,56
2011	04	\$ 285.254	2,02%	115	\$ 662.645,01	\$ 79.376.046,57
2011	05	\$ 285.254	2,02%	114	\$ 656.882,88	\$ 80.032.929,45
2011	06	\$ 285.254	2,02%	113	\$ 651.120,75	\$ 80.684.050,19
2011	M13	\$ 285.254	2,02%	113	\$ 651.120,75	\$ 81.335.170,94
2011	07	\$ 285.254	2,02%	112	\$ 645.358,62	\$ 81.980.529,56
2011	08	\$ 285.254	2,02%	111	\$ 639.596,49	\$ 82.620.126,05
2011	09	\$ 285.254	2,02%	110	\$ 633.834,36	\$ 83.253.960,41
2011	10	\$ 285.254	2,02%	109	\$ 628.072,23	\$ 83.882.032,64
2011	11	\$ 285.254	2,02%	108	\$ 622.310,10	\$ 84.504.342,73

2011	12	\$ 285.254	2,02%	107	\$ 616.547,97	\$ 85.120.890,70
2011	M14	\$ 285.254	2,02%	107	\$ 616.547,97	\$ 85.737.438,66
2012	01	\$ 295.894	2,02%	106	\$ 633.568,15	\$ 86.371.006,81
2012	02	\$ 295.894	2,02%	105	\$ 627.591,09	\$ 86.998.597,90
2012	03	\$ 295.894	2,02%	104	\$ 621.614,03	\$ 0,00
2012	04	\$ 295.894	2,02%	103	\$ 615.636,97	\$ 88.235.848,91
2012	05	\$ 295.894	2,02%	102	\$ 609.659,92	\$ 88.845.508,82
2012	06	\$ 295.894	2,02%	101	\$ 603.682,86	\$ 89.449.191,68
2012	M13	\$ 295.894	2,02%	101	\$ 603.682,86	\$ 90.052.874,53
2012	07	\$ 295.894	2,02%	100	\$ 597.705,80	\$ 90.650.580,33
2012	08	\$ 295.894	2,02%	99	\$ 591.728,74	\$ 91.242.309,08
2012	09	\$ 295.894	2,02%	98	\$ 585.751,68	\$ 91.828.060,76
2012	10	\$ 295.894	2,02%	97	\$ 579.774,63	\$ 92.407.835,38
2012	11	\$ 295.894	2,02%	96	\$ 573.797,57	\$ 92.981.632,95
2012	12	\$ 295.894	2,02%	95	\$ 567.820,51	\$ 93.549.453,46
2012	M14	\$ 295.894	2,02%	95	\$ 567.820,51	\$ 94.117.273,97
2013	01	\$ 303.114	2,02%	94	\$ 575.552,43	\$ 94.692.826,40
2013	02	\$ 303.114	2,02%	93	\$ 569.429,53	\$ 95.262.255,93
2013	03	\$ 303.114	2,02%	92	\$ 563.306,64	\$ 95.825.562,57
2013	04	\$ 303.114	2,02%	91	\$ 557.183,74	\$ 96.382.746,31
2013	05	\$ 303.114	2,02%	90	\$ 551.060,84	\$ 96.933.807,15
2013	06	\$ 303.114	2,02%	89	\$ 544.937,94	\$ 97.478.745,09
2013	M13	\$ 303.114	2,02%	89	\$ 544.937,94	\$ 98.023.683,03
2013	07	\$ 303.114	2,02%	88	\$ 538.815,04	\$ 98.562.498,07
2013	08	\$ 303.114	2,02%	87	\$ 532.692,14	\$ 99.095.190,21
2013	09	\$ 303.114	2,02%	86	\$ 526.569,25	\$ 99.621.759,46
2013	10	\$ 303.114	2,02%	85	\$ 520.446,35	\$ 100.142.205,81
2013	11	\$ 303.114	2,02%	84	\$ 514.323,45	\$ 100.656.529,26
2013	12	\$ 303.114	2,02%	83	\$ 508.200,55	\$ 101.164.729,81
2013	M14	\$ 303.114	2,02%	83	\$ 508.200,55	\$ 101.672.930,36
2014	01	\$ 308.994	2,02%	82	\$ 511.817,96	\$ 102.184.748,32
2014	02	\$ 308.994	2,02%	81	\$ 505.576,28	\$ 102.690.324,59
2014	03	\$ 308.994	2,02%	80	\$ 499.334,59	\$ 103.189.659,19
2014	04	\$ 308.994	2,02%	79	\$ 493.092,91	\$ 103.682.752,10
2014	05	\$ 308.994	2,02%	78	\$ 486.851,23	\$ 104.169.603,33
2014	06	\$ 308.994	2,02%	77	\$ 480.609,55	\$ 104.650.212,88
2014	M13	\$ 308.994	2,02%	77	\$ 480.609,55	\$ 105.130.822,43
2014	07	\$ 308.994	2,02%	76	\$ 474.367,86	\$ 105.605.190,29
2014	08	\$ 308.994	2,02%	75	\$ 468.126,18	\$ 106.073.316,47
2014	09	\$ 308.994	2,02%	74	\$ 461.884,50	\$ 106.535.200,97
2014	10	\$ 308.994	2,02%	73	\$ 455.642,82	\$ 106.990.843,79
2014	11	\$ 308.994	2,02%	72	\$ 449.401,14	\$ 107.440.244,93
2014	12	\$ 308.994	2,02%	71	\$ 443.159,45	\$ 107.883.404,38
2014	M14	\$ 308.994	2,02%	71	\$ 443.159,45	\$ 108.326.563,83
2015	01	\$ 320.303	2,02%	70	\$ 452.908,96	\$ 108.779.472,79
2015	02	\$ 320.303	2,02%	69	\$ 446.438,83	\$ 109.225.911,62
2015	03	\$ 320.303	2,02%	68	\$ 439.968,70	\$ 109.665.880,33
2015	04	\$ 320.303	2,02%	67	\$ 433.498,58	\$ 110.099.378,91
2015	05	\$ 320.303	2,02%	66	\$ 427.028,45	\$ 110.526.407,35
2015	06	\$ 320.303	2,02%	65	\$ 420.558,32	\$ 110.946.965,68
2015	M13	\$ 320.303	2,02%	65	\$ 420.558,32	\$ 111.367.524,00
2015	07	\$ 320.303	2,02%	64	\$ 414.088,19	\$ 111.781.612,19
2015	08	\$ 320.303	2,02%	63	\$ 407.618,06	\$ 112.189.230,25
2015	09	\$ 320.303	2,02%	62	\$ 401.147,94	\$ 112.590.378,19
2015	10	\$ 320.303	2,02%	61	\$ 394.677,81	\$ 112.985.056,00
2015	11	\$ 320.303	2,02%	60	\$ 388.207,68	\$ 113.373.263,68
2015	12	\$ 320.303	2,02%	59	\$ 381.737,55	\$ 113.755.001,23

2015	M14	\$ 320.303	2,02%	59	\$ 381.737,55	\$ 114.136.738,78
2016	01	\$ 341.988	2,02%	58	\$ 400.673,03	\$ 114.537.411,81
2016	02	\$ 341.988	2,02%	57	\$ 393.764,87	\$ 114.931.176,69
2016	03	\$ 341.988	2,02%	56	\$ 386.856,72	\$ 115.318.033,40
2016	04	\$ 341.988	2,02%	55	\$ 379.948,56	\$ 115.697.981,97
2016	05	\$ 341.988	2,02%	54	\$ 373.040,41	\$ 116.071.022,37
2016	06	\$ 341.988	2,02%	53	\$ 366.132,25	\$ 116.437.154,62
2016	M13	\$ 341.988	2,02%	53	\$ 366.132,25	\$ 116.803.286,87
2016	07	\$ 341.988	2,02%	52	\$ 359.224,10	\$ 117.162.510,97
2016	08	\$ 341.988	2,02%	51	\$ 352.315,94	\$ 117.514.826,91
2016	09	\$ 341.988	2,02%	50	\$ 345.407,78	\$ 117.860.234,69
2016	10	\$ 341.988	2,02%	49	\$ 338.499,63	\$ 118.198.734,32
2016	11	\$ 341.988	2,02%	48	\$ 331.591,47	\$ 118.530.325,79
2016	12	\$ 341.988	2,02%	47	\$ 324.683,32	\$ 118.855.009,11
2016	M14	\$ 341.988	2,02%	47	\$ 324.683,32	\$ 119.179.692,43
2017	01	\$ 361.652	2,02%	46	\$ 336.047,23	\$ 119.515.739,66
2017	02	\$ 361.652	2,02%	45	\$ 328.741,86	\$ 119.844.481,52
2017	03	\$ 361.652	2,02%	44	\$ 321.436,48	\$ 120.165.918,00
2017	04	\$ 361.652	2,02%	43	\$ 314.131,11	\$ 120.480.049,11
2017	05	\$ 361.652	2,02%	42	\$ 306.825,73	\$ 120.786.874,85
2017	06	\$ 361.652	2,02%	41	\$ 299.520,36	\$ 121.086.395,21
2017	M13	\$ 361.652	2,02%	41	\$ 299.520,36	\$ 121.385.915,56
2017	07	\$ 361.652	2,02%	40	\$ 292.214,99	\$ 121.678.130,55
2017	08	\$ 361.652	2,02%	39	\$ 284.909,61	\$ 121.963.040,16
2017	09	\$ 361.652	2,02%	38	\$ 277.604,24	\$ 122.240.644,40
2017	10	\$ 361.652	2,02%	37	\$ 270.298,86	\$ 122.510.943,26
2017	11	\$ 361.652	2,02%	36	\$ 262.993,49	\$ 122.773.936,74
2017	12	\$ 361.652	2,02%	35	\$ 255.688,11	\$ 123.029.624,86
2017	M14	\$ 361.652	2,02%	35	\$ 255.688,11	\$ 123.285.312,97
2018	01	\$ 376.444	2,02%	34	\$ 258.541,59	\$ 123.543.854,56
2018	02	\$ 376.444	2,02%	33	\$ 250.937,43	\$ 123.794.791,99
2018	03	\$ 376.444	2,02%	32	\$ 243.333,26	\$ 124.038.125,25
2018	04	\$ 376.444	2,02%	31	\$ 235.729,10	\$ 124.273.854,35
2018	05	\$ 376.444	2,02%	30	\$ 228.124,93	\$ 124.501.979,28
2018	06	\$ 376.444	2,02%	29	\$ 220.520,77	\$ 124.722.500,05
2018	M13	\$ 376.444	2,02%	29	\$ 220.520,77	\$ 124.943.020,82
2018	07	\$ 376.444	2,02%	28	\$ 212.916,60	\$ 125.155.937,42
2018	08	\$ 376.444	2,02%	27	\$ 205.312,44	\$ 125.361.249,86
2018	09	\$ 376.444	2,02%	26	\$ 197.708,28	\$ 125.558.958,14
2018	10	\$ 376.444	2,02%	25	\$ 190.104,11	\$ 125.749.062,25
2018	11	\$ 376.444	2,02%	24	\$ 182.499,95	\$ 125.931.562,20
2018	12	\$ 376.444	2,02%	23	\$ 174.895,78	\$ 126.106.457,98
2018	M14	\$ 376.444	2,02%	23	\$ 174.895,78	\$ 126.281.353,76
2019	01	\$ 388.415	2,02%	22	\$ 172.611,49	\$ 126.453.965,25
2019	02	\$ 388.415	2,02%	21	\$ 164.765,51	\$ 126.618.730,77
2019	03	\$ 388.415	2,02%	20	\$ 156.919,54	\$ 126.775.650,30
2019	04	\$ 388.415	2,02%	19	\$ 149.073,56	\$ 126.924.723,87
2019	05	\$ 388.415	2,02%	18	\$ 141.227,58	\$ 127.065.951,45
2019	06	\$ 388.415	2,02%	17	\$ 133.381,61	\$ 127.199.333,06
2019	M13	\$ 388.415	2,02%	17	\$ 133.381,61	\$ 127.332.714,66
2019	07	\$ 388.415	2,02%	16	\$ 125.535,63	\$ 127.458.250,29
2019	08	\$ 388.415	2,02%	15	\$ 117.689,65	\$ 127.575.939,95
2019	09	\$ 388.415	2,02%	14	\$ 109.843,68	\$ 127.685.783,62
2019	10	\$ 388.415	2,02%	13	\$ 101.997,70	\$ 127.787.781,32
2019	11	\$ 388.415	2,02%	12	\$ 94.151,72	\$ 127.881.933,04
2019	12	\$ 388.415	2,02%	11	\$ 86.305,75	\$ 127.968.238,79
2019	M14	\$ 388.415	2,02%	11	\$ 86.305,75	\$ 128.054.544,54

2020	01	\$ 403.174	2,02%	10	\$ 81.441,24	\$ 128.135.985,78
2020	02	\$ 403.174	2,02%	9	\$ 73.297,12	\$ 128.209.282,89
2020	03	\$ 403.174	2,02%	8	\$ 65.152,99	\$ 128.274.435,88
2020	04	\$ 403.174	2,02%	7	\$ 57.008,87	\$ 128.331.444,75
2020	05	\$ 403.174	2,02%	6	\$ 48.864,74	\$ 128.380.309,50
2020	06	\$ 403.174	2,02%	5	\$ 40.720,62	\$ 128.421.030,12
2020	M13	\$ 403.174	2,02%	5	\$ 40.720,62	\$ 128.461.750,74
2020	07	\$ 403.174	2,02%	4	\$ 32.576,50	\$ 128.494.327,23
2020	08	\$ 403.174	2,02%	3	\$ 24.432,37	\$ 128.518.759,60
2020	09	\$ 403.174	2,02%	2	\$ 16.288,25	\$ 128.535.047,85
2020	10	\$ 403.174	2,02%	1	\$ 8.144,12	\$ 128.543.191,98

17. OCTAVIO BONILLA LIZCANO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2001	\$ 157.522,42	7,65%	7	\$ 1.102.656,94
2002	\$ 169.572,89	6,99%	14	\$ 2.374.020,39
2003	\$ 181.426,03	6,49%	14	\$ 2.539.964,42
2004	\$ 193.200,58	5,50%	14	\$ 2.704.808,11
2005	\$ 203.826,61	4,85%	14	\$ 2.853.572,55
2006	\$ 213.712,20	4,48%	14	\$ 2.991.970,82
2007	\$ 223.286,51	5,69%	14	\$ 3.126.011,12
2008	\$ 235.991,51	7,67%	14	\$ 3.303.881,15
2009	\$ 254.092,06	2,00%	14	\$ 3.557.288,83
2010	\$ 259.173,90	3,17%	14	\$ 3.628.434,61
2011	\$ 267.389,71	3,73%	14	\$ 3.743.455,99
2012	\$ 277.363,35	2,44%	14	\$ 3.883.086,89
2013	\$ 284.131,02	1,94%	14	\$ 3.977.834,21
2014	\$ 289.643,16	3,66%	14	\$ 4.055.004,20
2015	\$ 300.244,10	6,77%	14	\$ 4.203.417,35
2016	\$ 320.570,62	5,75%	14	\$ 4.487.988,71
2017	\$ 339.003,43	4,09%	14	\$ 4.746.048,06
2018	\$ 352.868,67	3,18%	14	\$ 4.940.161,42
2019	\$ 364.089,90	3,80%	14	\$ 5.097.258,56
2020	\$ 377.925,31	1,61%	11	\$ 4.157.178,44
				\$ 62.752.592,91

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2001	07	\$ 157.522	2,02%	232	\$ 738.211,10	\$ 738.211,10
2001	08	\$ 157.522	2,02%	231	\$ 735.029,16	\$ 1.473.240,26
2001	09	\$ 157.522	2,02%	230	\$ 731.847,21	\$ 2.205.087,47
2001	10	\$ 157.522	2,02%	229	\$ 728.665,27	\$ 2.933.752,74
2001	11	\$ 157.522	2,02%	228	\$ 725.483,32	\$ 3.659.236,06
2001	12	\$ 157.522	2,02%	227	\$ 722.301,38	\$ 4.381.537,44
2001	M14	\$ 157.522	2,02%	227	\$ 722.301,38	\$ 5.103.838,82
2002	01	\$ 169.573	2,02%	226	\$ 774.134,14	\$ 5.877.972,95
2002	02	\$ 169.573	2,02%	225	\$ 770.708,76	\$ 6.648.681,72
2002	03	\$ 169.573	2,02%	224	\$ 767.283,39	\$ 7.415.965,11
2002	04	\$ 169.573	2,02%	223	\$ 763.858,02	\$ 8.179.823,12
2002	05	\$ 169.573	2,02%	222	\$ 760.432,65	\$ 8.940.255,77
2002	06	\$ 169.573	2,02%	221	\$ 757.007,27	\$ 9.697.263,04
2002	M13	\$ 169.573	2,02%	221	\$ 757.007,27	\$ 10.454.270,32
2002	07	\$ 169.573	2,02%	220	\$ 753.581,90	\$ 11.207.852,22
2002	08	\$ 169.573	2,02%	219	\$ 750.156,53	\$ 11.958.008,75
2002	09	\$ 169.573	2,02%	218	\$ 746.731,16	\$ 12.704.739,91
2002	10	\$ 169.573	2,02%	217	\$ 743.305,78	\$ 13.448.045,69
2002	11	\$ 169.573	2,02%	216	\$ 739.880,41	\$ 14.187.926,10

2002	12	\$ 169.573	2,02%	215	\$ 736.455,04	\$ 14.924.381,14
2002	M14	\$ 169.573	2,02%	215	\$ 736.455,04	\$ 15.660.836,18
2003	01	\$ 181.426	2,02%	214	\$ 784.268,44	\$ 16.445.104,63
2003	02	\$ 181.426	2,02%	213	\$ 780.603,64	\$ 17.225.708,26
2003	03	\$ 181.426	2,02%	212	\$ 776.938,83	\$ 18.002.647,09
2003	04	\$ 181.426	2,02%	211	\$ 773.274,02	\$ 18.775.921,12
2003	05	\$ 181.426	2,02%	210	\$ 769.609,22	\$ 19.545.530,33
2003	06	\$ 181.426	2,02%	209	\$ 765.944,41	\$ 20.311.474,75
2003	M13	\$ 181.426	2,02%	209	\$ 765.944,41	\$ 21.077.419,16
2003	07	\$ 181.426	2,02%	208	\$ 762.279,61	\$ 21.839.698,77
2003	08	\$ 181.426	2,02%	207	\$ 758.614,80	\$ 22.598.313,57
2003	09	\$ 181.426	2,02%	206	\$ 754.950,00	\$ 23.353.263,56
2003	10	\$ 181.426	2,02%	205	\$ 751.285,19	\$ 24.104.548,75
2003	11	\$ 181.426	2,02%	204	\$ 747.620,38	\$ 24.852.169,13
2003	12	\$ 181.426	2,02%	203	\$ 743.955,58	\$ 25.596.124,71
2003	M14	\$ 181.426	2,02%	203	\$ 743.955,58	\$ 26.340.080,29
2004	01	\$ 193.201	2,02%	202	\$ 788.335,64	\$ 27.128.415,93
2004	02	\$ 193.201	2,02%	201	\$ 784.432,99	\$ 27.912.848,92
2004	03	\$ 193.201	2,02%	200	\$ 780.530,34	\$ 28.693.379,26
2004	04	\$ 193.201	2,02%	199	\$ 776.627,69	\$ 29.470.006,95
2004	05	\$ 193.201	2,02%	198	\$ 772.725,04	\$ 30.242.731,99
2004	06	\$ 193.201	2,02%	197	\$ 768.822,38	\$ 31.011.554,37
2004	M13	\$ 193.201	2,02%	197	\$ 768.822,38	\$ 31.780.376,76
2004	07	\$ 193.201	2,02%	196	\$ 764.919,73	\$ 32.545.296,49
2004	08	\$ 193.201	2,02%	195	\$ 761.017,08	\$ 33.306.313,57
2004	09	\$ 193.201	2,02%	194	\$ 757.114,43	\$ 34.063.428,00
2004	10	\$ 193.201	2,02%	193	\$ 753.211,78	\$ 34.816.639,78
2004	11	\$ 193.201	2,02%	192	\$ 749.309,13	\$ 35.565.948,91
2004	12	\$ 193.201	2,02%	191	\$ 745.406,47	\$ 36.311.355,38
2004	M14	\$ 193.201	2,02%	191	\$ 745.406,47	\$ 37.056.761,85
2005	01	\$ 203.827	2,02%	190	\$ 782.286,53	\$ 37.839.048,39
2005	02	\$ 203.827	2,02%	189	\$ 778.169,24	\$ 38.617.217,62
2005	03	\$ 203.827	2,02%	188	\$ 774.051,94	\$ 39.391.269,56
2005	04	\$ 203.827	2,02%	187	\$ 769.934,64	\$ 40.161.204,20
2005	05	\$ 203.827	2,02%	186	\$ 765.817,34	\$ 40.927.021,54
2005	06	\$ 203.827	2,02%	185	\$ 761.700,05	\$ 41.688.721,59
2005	M13	\$ 203.827	2,02%	185	\$ 761.700,05	\$ 42.450.421,63
2005	07	\$ 203.827	2,02%	184	\$ 757.582,75	\$ 43.208.004,38
2005	08	\$ 203.827	2,02%	183	\$ 753.465,45	\$ 43.961.469,83
2005	09	\$ 203.827	2,02%	182	\$ 749.348,15	\$ 44.710.817,98
2005	10	\$ 203.827	2,02%	181	\$ 745.230,86	\$ 45.456.048,84
2005	11	\$ 203.827	2,02%	180	\$ 741.113,56	\$ 46.197.162,40
2005	12	\$ 203.827	2,02%	179	\$ 736.996,26	\$ 46.934.158,66
2005	M14	\$ 203.827	2,02%	179	\$ 736.996,26	\$ 47.671.154,92
2006	01	\$ 213.712	2,02%	178	\$ 768.423,59	\$ 48.439.578,51
2006	02	\$ 213.712	2,02%	177	\$ 764.106,61	\$ 49.203.685,12
2006	03	\$ 213.712	2,02%	176	\$ 759.789,62	\$ 49.963.474,73
2006	04	\$ 213.712	2,02%	175	\$ 755.472,63	\$ 50.718.947,37
2006	05	\$ 213.712	2,02%	174	\$ 751.155,65	\$ 51.470.103,01
2006	06	\$ 213.712	2,02%	173	\$ 746.838,66	\$ 52.216.941,67
2006	M13	\$ 213.712	2,02%	173	\$ 746.838,66	\$ 52.963.780,33
2006	07	\$ 213.712	2,02%	172	\$ 742.521,67	\$ 53.706.302,01
2006	08	\$ 213.712	2,02%	171	\$ 738.204,69	\$ 54.444.506,69
2006	09	\$ 213.712	2,02%	170	\$ 733.887,70	\$ 55.178.394,39
2006	10	\$ 213.712	2,02%	169	\$ 729.570,71	\$ 55.907.965,11
2006	11	\$ 213.712	2,02%	168	\$ 725.253,73	\$ 56.633.218,83
2006	12	\$ 213.712	2,02%	167	\$ 720.936,74	\$ 57.354.155,58
2006	M14	\$ 213.712	2,02%	167	\$ 720.936,74	\$ 58.075.092,32
2007	01	\$ 223.287	2,02%	166	\$ 748.724,32	\$ 58.823.816,64

2007	02	\$ 223.287	2,02%	165	\$ 744.213,93	\$ 59.568.030,57
2007	03	\$ 223.287	2,02%	164	\$ 739.703,54	\$ 60.307.734,11
2007	04	\$ 223.287	2,02%	163	\$ 735.193,16	\$ 61.042.927,27
2007	05	\$ 223.287	2,02%	162	\$ 730.682,77	\$ 61.773.610,04
2007	06	\$ 223.287	2,02%	161	\$ 726.172,38	\$ 62.499.782,42
2007	M13	\$ 223.287	2,02%	161	\$ 726.172,38	\$ 63.225.954,80
2007	07	\$ 223.287	2,02%	160	\$ 721.661,99	\$ 63.947.616,80
2007	08	\$ 223.287	2,02%	159	\$ 717.151,61	\$ 64.664.768,41
2007	09	\$ 223.287	2,02%	158	\$ 712.641,22	\$ 65.377.409,63
2007	10	\$ 223.287	2,02%	157	\$ 708.130,83	\$ 66.085.540,46
2007	11	\$ 223.287	2,02%	156	\$ 703.620,44	\$ 66.789.160,90
2007	12	\$ 223.287	2,02%	155	\$ 699.110,06	\$ 67.488.270,96
2007	M14	\$ 223.287	2,02%	155	\$ 699.110,06	\$ 68.187.381,02
2008	01	\$ 235.992	2,02%	154	\$ 734.122,39	\$ 68.921.503,41
2008	02	\$ 235.992	2,02%	153	\$ 729.355,36	\$ 69.650.858,77
2008	03	\$ 235.992	2,02%	152	\$ 724.588,33	\$ 70.375.447,10
2008	04	\$ 235.992	2,02%	151	\$ 719.821,31	\$ 71.095.268,41
2008	05	\$ 235.992	2,02%	150	\$ 715.054,28	\$ 71.810.322,69
2008	06	\$ 235.992	2,02%	149	\$ 710.287,25	\$ 72.520.609,94
2008	M13	\$ 235.992	2,02%	149	\$ 710.287,25	\$ 73.230.897,18
2008	07	\$ 235.992	2,02%	148	\$ 705.520,22	\$ 73.936.417,40
2008	08	\$ 235.992	2,02%	147	\$ 700.753,19	\$ 74.637.170,60
2008	09	\$ 235.992	2,02%	146	\$ 695.986,16	\$ 75.333.156,76
2008	10	\$ 235.992	2,02%	145	\$ 691.219,13	\$ 76.024.375,89
2008	11	\$ 235.992	2,02%	144	\$ 686.452,11	\$ 76.710.828,00
2008	12	\$ 235.992	2,02%	143	\$ 681.685,08	\$ 77.392.513,08
2008	M14	\$ 235.992	2,02%	143	\$ 681.685,08	\$ 78.074.198,15
2009	01	\$ 254.092	2,02%	142	\$ 728.837,66	\$ 78.803.035,82
2009	02	\$ 254.092	2,02%	141	\$ 723.705,00	\$ 79.526.740,82
2009	03	\$ 254.092	2,02%	140	\$ 718.572,34	\$ 80.245.313,17
2009	04	\$ 254.092	2,02%	139	\$ 713.439,68	\$ 80.958.752,85
2009	05	\$ 254.092	2,02%	138	\$ 708.307,02	\$ 81.667.059,87
2009	06	\$ 254.092	2,02%	137	\$ 703.174,37	\$ 82.370.234,24
2009	M13	\$ 254.092	2,02%	137	\$ 703.174,37	\$ 83.073.408,61
2009	07	\$ 254.092	2,02%	136	\$ 698.041,71	\$ 83.771.450,31
2009	08	\$ 254.092	2,02%	135	\$ 692.909,05	\$ 84.464.359,36
2009	09	\$ 254.092	2,02%	134	\$ 687.776,39	\$ 85.152.135,74
2009	10	\$ 254.092	2,02%	133	\$ 682.643,73	\$ 85.834.779,47
2009	11	\$ 254.092	2,02%	132	\$ 677.511,07	\$ 86.512.290,54
2009	12	\$ 254.092	2,02%	131	\$ 672.378,41	\$ 87.184.668,95
2009	M14	\$ 254.092	2,02%	131	\$ 672.378,41	\$ 87.857.047,35
2010	01	\$ 259.174	2,02%	130	\$ 680.590,66	\$ 88.537.638,02
2010	02	\$ 259.174	2,02%	129	\$ 675.355,35	\$ 89.212.993,37
2010	03	\$ 259.174	2,02%	128	\$ 670.120,04	\$ 89.883.113,40
2010	04	\$ 259.174	2,02%	127	\$ 664.884,72	\$ 90.547.998,13
2010	05	\$ 259.174	2,02%	126	\$ 659.649,41	\$ 91.207.647,54
2010	06	\$ 259.174	2,02%	125	\$ 654.414,10	\$ 91.862.061,64
2010	M13	\$ 259.174	2,02%	125	\$ 654.414,10	\$ 92.516.475,74
2010	07	\$ 259.174	2,02%	124	\$ 649.178,79	\$ 93.165.654,52
2010	08	\$ 259.174	2,02%	123	\$ 643.943,47	\$ 93.809.598,00
2010	09	\$ 259.174	2,02%	122	\$ 638.708,16	\$ 94.448.306,16
2010	10	\$ 259.174	2,02%	121	\$ 633.472,85	\$ 95.081.779,01
2010	11	\$ 259.174	2,02%	120	\$ 628.237,54	\$ 95.710.016,54
2010	12	\$ 259.174	2,02%	119	\$ 623.002,22	\$ 96.333.018,76
2010	M14	\$ 259.174	2,02%	119	\$ 623.002,22	\$ 96.956.020,99
2011	01	\$ 267.390	2,02%	118	\$ 637.350,12	\$ 97.593.371,11
2011	02	\$ 267.390	2,02%	117	\$ 631.948,85	\$ 98.225.319,96
2011	03	\$ 267.390	2,02%	116	\$ 626.547,58	\$ 98.851.867,53
2011	04	\$ 267.390	2,02%	115	\$ 621.146,30	\$ 99.473.013,84

2011	05	\$ 267.390	2,02%	114	\$ 615.745,03	\$ 100.088.758,87
2011	06	\$ 267.390	2,02%	113	\$ 610.343,76	\$ 100.699.102,63
2011	M13	\$ 267.390	2,02%	113	\$ 610.343,76	\$ 101.309.446,39
2011	07	\$ 267.390	2,02%	112	\$ 604.942,49	\$ 101.914.388,87
2011	08	\$ 267.390	2,02%	111	\$ 599.541,22	\$ 102.513.930,09
2011	09	\$ 267.390	2,02%	110	\$ 594.139,94	\$ 103.108.070,03
2011	10	\$ 267.390	2,02%	109	\$ 588.738,67	\$ 103.696.808,70
2011	11	\$ 267.390	2,02%	108	\$ 583.337,40	\$ 104.280.146,10
2011	12	\$ 267.390	2,02%	107	\$ 577.936,13	\$ 104.858.082,23
2011	M14	\$ 267.390	2,02%	107	\$ 577.936,13	\$ 105.436.018,35
2012	01	\$ 277.363	2,02%	106	\$ 593.890,40	\$ 106.029.908,76
2012	02	\$ 277.363	2,02%	105	\$ 588.287,66	\$ 106.618.196,42
2012	03	\$ 277.363	2,02%	104	\$ 582.684,92	\$ 0,00
2012	04	\$ 277.363	2,02%	103	\$ 577.082,19	\$ 107.777.963,53
2012	05	\$ 277.363	2,02%	102	\$ 571.479,45	\$ 108.349.442,98
2012	06	\$ 277.363	2,02%	101	\$ 565.876,71	\$ 108.915.319,68
2012	M13	\$ 277.363	2,02%	101	\$ 565.876,71	\$ 109.481.196,39
2012	07	\$ 277.363	2,02%	100	\$ 560.273,97	\$ 110.041.470,35
2012	08	\$ 277.363	2,02%	99	\$ 554.671,23	\$ 110.596.141,58
2012	09	\$ 277.363	2,02%	98	\$ 549.068,49	\$ 111.145.210,07
2012	10	\$ 277.363	2,02%	97	\$ 543.465,75	\$ 111.688.675,82
2012	11	\$ 277.363	2,02%	96	\$ 537.863,01	\$ 112.226.538,82
2012	12	\$ 277.363	2,02%	95	\$ 532.260,27	\$ 112.758.799,09
2012	M14	\$ 277.363	2,02%	95	\$ 532.260,27	\$ 113.291.059,36
2013	01	\$ 284.131	2,02%	94	\$ 539.507,97	\$ 113.830.567,33
2013	02	\$ 284.131	2,02%	93	\$ 533.768,53	\$ 114.364.335,86
2013	03	\$ 284.131	2,02%	92	\$ 528.029,08	\$ 114.892.364,93
2013	04	\$ 284.131	2,02%	91	\$ 522.289,63	\$ 115.414.654,57
2013	05	\$ 284.131	2,02%	90	\$ 516.550,19	\$ 115.931.204,75
2013	06	\$ 284.131	2,02%	89	\$ 510.810,74	\$ 116.442.015,49
2013	M13	\$ 284.131	2,02%	89	\$ 510.810,74	\$ 116.952.826,23
2013	07	\$ 284.131	2,02%	88	\$ 505.071,29	\$ 117.457.897,52
2013	08	\$ 284.131	2,02%	87	\$ 499.331,85	\$ 117.957.229,37
2013	09	\$ 284.131	2,02%	86	\$ 493.592,40	\$ 118.450.821,77
2013	10	\$ 284.131	2,02%	85	\$ 487.852,95	\$ 118.938.674,72
2013	11	\$ 284.131	2,02%	84	\$ 482.113,51	\$ 119.420.788,23
2013	12	\$ 284.131	2,02%	83	\$ 476.374,06	\$ 119.897.162,29
2013	M14	\$ 284.131	2,02%	83	\$ 476.374,06	\$ 120.373.536,35
2014	01	\$ 289.643	2,02%	82	\$ 479.764,93	\$ 120.853.301,28
2014	02	\$ 289.643	2,02%	81	\$ 473.914,13	\$ 121.327.215,41
2014	03	\$ 289.643	2,02%	80	\$ 468.063,34	\$ 121.795.278,75
2014	04	\$ 289.643	2,02%	79	\$ 462.212,55	\$ 122.257.491,30
2014	05	\$ 289.643	2,02%	78	\$ 456.361,76	\$ 122.713.853,06
2014	06	\$ 289.643	2,02%	77	\$ 450.510,97	\$ 123.164.364,03
2014	M13	\$ 289.643	2,02%	77	\$ 450.510,97	\$ 123.614.874,99
2014	07	\$ 289.643	2,02%	76	\$ 444.660,17	\$ 124.059.535,17
2014	08	\$ 289.643	2,02%	75	\$ 438.809,38	\$ 124.498.344,55
2014	09	\$ 289.643	2,02%	74	\$ 432.958,59	\$ 124.931.303,14
2014	10	\$ 289.643	2,02%	73	\$ 427.107,80	\$ 125.358.410,94
2014	11	\$ 289.643	2,02%	72	\$ 421.257,01	\$ 125.779.667,95
2014	12	\$ 289.643	2,02%	71	\$ 415.406,22	\$ 126.195.074,16
2014	M14	\$ 289.643	2,02%	71	\$ 415.406,22	\$ 126.610.480,38
2015	01	\$ 300.244	2,02%	70	\$ 424.545,15	\$ 127.035.025,53
2015	02	\$ 300.244	2,02%	69	\$ 418.480,22	\$ 127.453.505,75
2015	03	\$ 300.244	2,02%	68	\$ 412.415,29	\$ 127.865.921,04
2015	04	\$ 300.244	2,02%	67	\$ 406.350,36	\$ 128.272.271,40
2015	05	\$ 300.244	2,02%	66	\$ 400.285,43	\$ 128.672.556,83
2015	06	\$ 300.244	2,02%	65	\$ 394.220,50	\$ 129.066.777,33
2015	M13	\$ 300.244	2,02%	65	\$ 394.220,50	\$ 129.460.997,83

2015	07	\$ 300.244	2,02%	64	\$ 388.155,57	\$ 129.849.153,40
2015	08	\$ 300.244	2,02%	63	\$ 382.090,64	\$ 130.231.244,04
2015	09	\$ 300.244	2,02%	62	\$ 376.025,71	\$ 130.607.269,74
2015	10	\$ 300.244	2,02%	61	\$ 369.960,78	\$ 130.977.230,52
2015	11	\$ 300.244	2,02%	60	\$ 363.895,85	\$ 131.341.126,36
2015	12	\$ 300.244	2,02%	59	\$ 357.830,91	\$ 131.698.957,28
2015	M14	\$ 300.244	2,02%	59	\$ 357.830,91	\$ 132.056.788,19
2016	01	\$ 320.571	2,02%	58	\$ 375.580,54	\$ 132.432.368,73
2016	02	\$ 320.571	2,02%	57	\$ 369.105,01	\$ 132.801.473,75
2016	03	\$ 320.571	2,02%	56	\$ 362.629,49	\$ 133.164.103,24
2016	04	\$ 320.571	2,02%	55	\$ 356.153,96	\$ 133.520.257,20
2016	05	\$ 320.571	2,02%	54	\$ 349.678,43	\$ 133.869.935,63
2016	06	\$ 320.571	2,02%	53	\$ 343.202,91	\$ 134.213.138,54
2016	M13	\$ 320.571	2,02%	53	\$ 343.202,91	\$ 134.556.341,45
2016	07	\$ 320.571	2,02%	52	\$ 336.727,38	\$ 134.893.068,83
2016	08	\$ 320.571	2,02%	51	\$ 330.251,85	\$ 135.223.320,68
2016	09	\$ 320.571	2,02%	50	\$ 323.776,33	\$ 135.547.097,01
2016	10	\$ 320.571	2,02%	49	\$ 317.300,80	\$ 135.864.397,81
2016	11	\$ 320.571	2,02%	48	\$ 310.825,27	\$ 136.175.223,09
2016	12	\$ 320.571	2,02%	47	\$ 304.349,75	\$ 136.479.572,83
2016	M14	\$ 320.571	2,02%	47	\$ 304.349,75	\$ 136.783.922,58
2017	01	\$ 339.003	2,02%	46	\$ 315.001,99	\$ 137.098.924,57
2017	02	\$ 339.003	2,02%	45	\$ 308.154,12	\$ 137.407.078,69
2017	03	\$ 339.003	2,02%	44	\$ 301.306,25	\$ 137.708.384,94
2017	04	\$ 339.003	2,02%	43	\$ 294.458,38	\$ 138.002.843,33
2017	05	\$ 339.003	2,02%	42	\$ 287.610,51	\$ 138.290.453,84
2017	06	\$ 339.003	2,02%	41	\$ 280.762,64	\$ 138.571.216,48
2017	M13	\$ 339.003	2,02%	41	\$ 280.762,64	\$ 138.851.979,12
2017	07	\$ 339.003	2,02%	40	\$ 273.914,77	\$ 139.125.893,90
2017	08	\$ 339.003	2,02%	39	\$ 267.066,90	\$ 139.392.960,80
2017	09	\$ 339.003	2,02%	38	\$ 260.219,03	\$ 139.653.179,84
2017	10	\$ 339.003	2,02%	37	\$ 253.371,17	\$ 139.906.551,00
2017	11	\$ 339.003	2,02%	36	\$ 246.523,30	\$ 140.153.074,30
2017	12	\$ 339.003	2,02%	35	\$ 239.675,43	\$ 140.392.749,73
2017	M14	\$ 339.003	2,02%	35	\$ 239.675,43	\$ 140.632.425,15
2018	01	\$ 352.869	2,02%	34	\$ 242.350,20	\$ 140.874.775,36
2018	02	\$ 352.869	2,02%	33	\$ 235.222,26	\$ 141.109.997,61
2018	03	\$ 352.869	2,02%	32	\$ 228.094,31	\$ 141.338.091,92
2018	04	\$ 352.869	2,02%	31	\$ 220.966,36	\$ 141.559.058,29
2018	05	\$ 352.869	2,02%	30	\$ 213.838,42	\$ 141.772.896,70
2018	06	\$ 352.869	2,02%	29	\$ 206.710,47	\$ 141.979.607,17
2018	M13	\$ 352.869	2,02%	29	\$ 206.710,47	\$ 142.186.317,64
2018	07	\$ 352.869	2,02%	28	\$ 199.582,52	\$ 142.385.900,16
2018	08	\$ 352.869	2,02%	27	\$ 192.454,57	\$ 142.578.354,74
2018	09	\$ 352.869	2,02%	26	\$ 185.326,63	\$ 142.763.681,36
2018	10	\$ 352.869	2,02%	25	\$ 178.198,68	\$ 142.941.880,04
2018	11	\$ 352.869	2,02%	24	\$ 171.070,73	\$ 143.112.950,78
2018	12	\$ 352.869	2,02%	23	\$ 163.942,79	\$ 143.276.893,56
2018	M14	\$ 352.869	2,02%	23	\$ 163.942,79	\$ 143.440.836,35
2019	01	\$ 364.090	2,02%	22	\$ 161.801,55	\$ 143.602.637,90
2019	02	\$ 364.090	2,02%	21	\$ 154.446,93	\$ 143.757.084,83
2019	03	\$ 364.090	2,02%	20	\$ 147.092,32	\$ 143.904.177,15
2019	04	\$ 364.090	2,02%	19	\$ 139.737,70	\$ 144.043.914,85
2019	05	\$ 364.090	2,02%	18	\$ 132.383,09	\$ 144.176.297,94
2019	06	\$ 364.090	2,02%	17	\$ 125.028,47	\$ 144.301.326,41
2019	M13	\$ 364.090	2,02%	17	\$ 125.028,47	\$ 144.426.354,88
2019	07	\$ 364.090	2,02%	16	\$ 117.673,85	\$ 144.544.028,73
2019	08	\$ 364.090	2,02%	15	\$ 110.319,24	\$ 144.654.347,97
2019	09	\$ 364.090	2,02%	14	\$ 102.964,62	\$ 144.757.312,60

2019	10	\$ 364.090	2,02%	13	\$ 95.610,01	\$ 144.852.922,60
2019	11	\$ 364.090	2,02%	12	\$ 88.255,39	\$ 144.941.177,99
2019	12	\$ 364.090	2,02%	11	\$ 80.900,78	\$ 145.022.078,77
2019	M14	\$ 364.090	2,02%	11	\$ 80.900,78	\$ 145.102.979,54
2020	01	\$ 377.925	2,02%	10	\$ 76.340,91	\$ 145.179.320,46
2020	02	\$ 377.925	2,02%	9	\$ 68.706,82	\$ 145.248.027,28
2020	03	\$ 377.925	2,02%	8	\$ 61.072,73	\$ 145.309.100,01
2020	04	\$ 377.925	2,02%	7	\$ 53.438,64	\$ 145.362.538,65
2020	05	\$ 377.925	2,02%	6	\$ 45.804,55	\$ 145.408.343,20
2020	06	\$ 377.925	2,02%	5	\$ 38.170,46	\$ 145.446.513,65
2020	M13	\$ 377.925	2,02%	5	\$ 38.170,46	\$ 145.484.684,11
2020	07	\$ 377.925	2,02%	4	\$ 30.536,37	\$ 145.515.220,48
2020	08	\$ 377.925	2,02%	3	\$ 22.902,27	\$ 145.538.122,75
2020	09	\$ 377.925	2,02%	2	\$ 15.268,18	\$ 145.553.390,93
2020	10	\$ 377.925	2,02%	1	\$ 7.634,09	\$ 145.561.025,02

18. ORLANDO RANGEL ORTIZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2004	\$ 160.758,73	5,50%	10,5	\$ 1.687.966,67
2005	\$ 169.600,46	4,85%	14	\$ 2.374.406,44
2006	\$ 177.826,08	4,48%	14	\$ 2.489.565,15
2007	\$ 185.792,69	5,69%	14	\$ 2.601.097,67
2008	\$ 196.364,30	7,67%	14	\$ 2.749.100,13
2009	\$ 211.425,44	2,00%	14	\$ 2.959.956,11
2010	\$ 215.653,95	3,17%	14	\$ 3.019.155,23
2011	\$ 222.490,18	3,73%	14	\$ 3.114.862,45
2012	\$ 230.789,06	2,44%	14	\$ 3.231.046,82
2013	\$ 236.420,31	1,94%	14	\$ 3.309.884,37
2014	\$ 241.006,87	3,66%	14	\$ 3.374.096,12
2015	\$ 249.827,72	6,77%	14	\$ 3.497.588,04
2016	\$ 266.741,05	5,75%	14	\$ 3.734.374,75
2017	\$ 282.078,66	4,09%	14	\$ 3.949.101,30
2018	\$ 293.615,68	3,18%	14	\$ 4.110.619,54
2019	\$ 302.952,66	3,80%	14	\$ 4.241.337,24
2020	\$ 314.464,86	1,61%	11	\$ 3.459.113,48
				\$ 52.215.304,87

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2004	02	\$ 160.759	2,02%	201	\$ 652.713,69	\$ 652.713,69
2004	03	\$ 160.759	2,02%	200	\$ 649.466,36	\$ 1.302.180,05
2004	04	\$ 160.759	2,02%	199	\$ 646.219,03	\$ 1.948.399,08
2004	05	\$ 160.759	2,02%	198	\$ 642.971,70	\$ 2.591.370,78
2004	06	\$ 160.759	2,02%	197	\$ 639.724,36	\$ 3.231.095,14
2004	M13	\$ 160.759	2,02%	197	\$ 639.724,36	\$ 3.870.819,51
2004	07	\$ 160.759	2,02%	196	\$ 636.477,03	\$ 4.507.296,54
2004	08	\$ 160.759	2,02%	195	\$ 633.229,70	\$ 5.140.526,24
2004	09	\$ 160.759	2,02%	194	\$ 629.982,37	\$ 5.770.508,61
2004	10	\$ 160.759	2,02%	193	\$ 626.735,04	\$ 6.397.243,65
2004	11	\$ 160.759	2,02%	192	\$ 623.487,71	\$ 7.020.731,35
2004	12	\$ 160.759	2,02%	191	\$ 620.240,37	\$ 7.640.971,73
2004	M14	\$ 160.759	2,02%	191	\$ 620.240,37	\$ 8.261.212,10
2005	01	\$ 169.600	2,02%	190	\$ 650.926,57	\$ 8.912.138,67
2005	02	\$ 169.600	2,02%	189	\$ 647.500,64	\$ 9.559.639,30
2005	03	\$ 169.600	2,02%	188	\$ 644.074,71	\$ 10.203.714,01
2005	04	\$ 169.600	2,02%	187	\$ 640.648,78	\$ 10.844.362,79

2005	05	\$ 169.600	2,02%	186	\$ 637.222,85	\$ 11.481.585,64
2005	06	\$ 169.600	2,02%	185	\$ 633.796,92	\$ 12.115.382,56
2005	M13	\$ 169.600	2,02%	185	\$ 633.796,92	\$ 12.749.179,48
2005	07	\$ 169.600	2,02%	184	\$ 630.370,99	\$ 13.379.550,47
2005	08	\$ 169.600	2,02%	183	\$ 626.945,06	\$ 14.006.495,53
2005	09	\$ 169.600	2,02%	182	\$ 623.519,13	\$ 14.630.014,66
2005	10	\$ 169.600	2,02%	181	\$ 620.093,20	\$ 15.250.107,86
2005	11	\$ 169.600	2,02%	180	\$ 616.667,27	\$ 15.866.775,13
2005	12	\$ 169.600	2,02%	179	\$ 613.241,34	\$ 16.480.016,48
2005	M14	\$ 169.600	2,02%	179	\$ 613.241,34	\$ 17.093.257,82
2006	01	\$ 177.826	2,02%	178	\$ 639.391,46	\$ 17.732.649,28
2006	02	\$ 177.826	2,02%	177	\$ 635.799,38	\$ 18.368.448,66
2006	03	\$ 177.826	2,02%	176	\$ 632.207,29	\$ 19.000.655,95
2006	04	\$ 177.826	2,02%	175	\$ 628.615,20	\$ 19.629.271,15
2006	05	\$ 177.826	2,02%	174	\$ 625.023,11	\$ 20.254.294,26
2006	06	\$ 177.826	2,02%	173	\$ 621.431,03	\$ 20.875.725,29
2006	M13	\$ 177.826	2,02%	173	\$ 621.431,03	\$ 21.497.156,32
2006	07	\$ 177.826	2,02%	172	\$ 617.838,94	\$ 22.114.995,26
2006	08	\$ 177.826	2,02%	171	\$ 614.246,85	\$ 22.729.242,11
2006	09	\$ 177.826	2,02%	170	\$ 610.654,77	\$ 23.339.896,88
2006	10	\$ 177.826	2,02%	169	\$ 607.062,68	\$ 23.946.959,56
2006	11	\$ 177.826	2,02%	168	\$ 603.470,59	\$ 24.550.430,16
2006	12	\$ 177.826	2,02%	167	\$ 599.878,51	\$ 25.150.308,66
2006	M14	\$ 177.826	2,02%	167	\$ 599.878,51	\$ 25.750.187,17
2007	01	\$ 185.793	2,02%	166	\$ 623.000,05	\$ 26.373.187,22
2007	02	\$ 185.793	2,02%	165	\$ 619.247,04	\$ 26.992.434,26
2007	03	\$ 185.793	2,02%	164	\$ 615.494,03	\$ 27.607.928,29
2007	04	\$ 185.793	2,02%	163	\$ 611.741,01	\$ 28.219.669,30
2007	05	\$ 185.793	2,02%	162	\$ 607.988,00	\$ 28.827.657,30
2007	06	\$ 185.793	2,02%	161	\$ 604.234,99	\$ 29.431.892,29
2007	M13	\$ 185.793	2,02%	161	\$ 604.234,99	\$ 30.036.127,28
2007	07	\$ 185.793	2,02%	160	\$ 600.481,98	\$ 30.636.609,26
2007	08	\$ 185.793	2,02%	159	\$ 596.728,96	\$ 31.233.338,22
2007	09	\$ 185.793	2,02%	158	\$ 592.975,95	\$ 31.826.314,18
2007	10	\$ 185.793	2,02%	157	\$ 589.222,94	\$ 32.415.537,12
2007	11	\$ 185.793	2,02%	156	\$ 585.469,93	\$ 33.001.007,04
2007	12	\$ 185.793	2,02%	155	\$ 581.716,92	\$ 33.582.723,96
2007	M14	\$ 185.793	2,02%	155	\$ 581.716,92	\$ 34.164.440,87
2008	01	\$ 196.364	2,02%	154	\$ 610.850,05	\$ 34.775.290,92
2008	02	\$ 196.364	2,02%	153	\$ 606.883,49	\$ 35.382.174,41
2008	03	\$ 196.364	2,02%	152	\$ 602.916,93	\$ 35.985.091,34
2008	04	\$ 196.364	2,02%	151	\$ 598.950,37	\$ 36.584.041,72
2008	05	\$ 196.364	2,02%	150	\$ 594.983,81	\$ 37.179.025,53
2008	06	\$ 196.364	2,02%	149	\$ 591.017,26	\$ 37.770.042,79
2008	M13	\$ 196.364	2,02%	149	\$ 591.017,26	\$ 38.361.060,04
2008	07	\$ 196.364	2,02%	148	\$ 587.050,70	\$ 38.948.110,74
2008	08	\$ 196.364	2,02%	147	\$ 583.084,14	\$ 39.531.194,88
2008	09	\$ 196.364	2,02%	146	\$ 579.117,58	\$ 40.110.312,46
2008	10	\$ 196.364	2,02%	145	\$ 575.151,02	\$ 40.685.463,48
2008	11	\$ 196.364	2,02%	144	\$ 571.184,46	\$ 41.256.647,94
2008	12	\$ 196.364	2,02%	143	\$ 567.217,90	\$ 41.823.865,84
2008	M14	\$ 196.364	2,02%	143	\$ 567.217,90	\$ 42.391.083,74
2009	01	\$ 211.425	2,02%	142	\$ 606.452,72	\$ 42.997.536,47
2009	02	\$ 211.425	2,02%	141	\$ 602.181,93	\$ 43.599.718,39
2009	03	\$ 211.425	2,02%	140	\$ 597.911,13	\$ 44.197.629,53
2009	04	\$ 211.425	2,02%	139	\$ 593.640,34	\$ 44.791.269,87
2009	05	\$ 211.425	2,02%	138	\$ 589.369,55	\$ 45.380.639,42

2009	06	\$ 211.425	2,02%	137	\$ 585.098,75	\$ 45.965.738,17
2009	M13	\$ 211.425	2,02%	137	\$ 585.098,75	\$ 46.550.836,92
2009	07	\$ 211.425	2,02%	136	\$ 580.827,96	\$ 47.131.664,88
2009	08	\$ 211.425	2,02%	135	\$ 576.557,17	\$ 47.708.222,05
2009	09	\$ 211.425	2,02%	134	\$ 572.286,37	\$ 48.280.508,42
2009	10	\$ 211.425	2,02%	133	\$ 568.015,58	\$ 48.848.524,00
2009	11	\$ 211.425	2,02%	132	\$ 563.744,78	\$ 49.412.268,78
2009	12	\$ 211.425	2,02%	131	\$ 559.473,99	\$ 49.971.742,77
2009	M14	\$ 211.425	2,02%	131	\$ 559.473,99	\$ 50.531.216,76
2010	01	\$ 215.654	2,02%	130	\$ 566.307,26	\$ 51.097.524,02
2010	02	\$ 215.654	2,02%	129	\$ 561.951,05	\$ 51.659.475,07
2010	03	\$ 215.654	2,02%	128	\$ 557.594,84	\$ 52.217.069,91
2010	04	\$ 215.654	2,02%	127	\$ 553.238,63	\$ 52.770.308,54
2010	05	\$ 215.654	2,02%	126	\$ 548.882,42	\$ 53.319.190,96
2010	06	\$ 215.654	2,02%	125	\$ 544.526,21	\$ 53.863.717,18
2010	M13	\$ 215.654	2,02%	125	\$ 544.526,21	\$ 54.408.243,39
2010	07	\$ 215.654	2,02%	124	\$ 540.170,00	\$ 54.948.413,39
2010	08	\$ 215.654	2,02%	123	\$ 535.813,79	\$ 55.484.227,18
2010	09	\$ 215.654	2,02%	122	\$ 531.457,58	\$ 56.015.684,76
2010	10	\$ 215.654	2,02%	121	\$ 527.101,37	\$ 56.542.786,14
2010	11	\$ 215.654	2,02%	120	\$ 522.745,16	\$ 57.065.531,30
2010	12	\$ 215.654	2,02%	119	\$ 518.388,95	\$ 57.583.920,25
2010	M14	\$ 215.654	2,02%	119	\$ 518.388,95	\$ 58.102.309,21
2011	01	\$ 222.490	2,02%	118	\$ 530.327,58	\$ 58.632.636,79
2011	02	\$ 222.490	2,02%	117	\$ 525.833,28	\$ 59.158.470,07
2011	03	\$ 222.490	2,02%	116	\$ 521.338,98	\$ 59.679.809,05
2011	04	\$ 222.490	2,02%	115	\$ 516.844,68	\$ 60.196.653,73
2011	05	\$ 222.490	2,02%	114	\$ 512.350,38	\$ 60.709.004,10
2011	06	\$ 222.490	2,02%	113	\$ 507.856,07	\$ 61.216.860,18
2011	M13	\$ 222.490	2,02%	113	\$ 507.856,07	\$ 61.724.716,25
2011	07	\$ 222.490	2,02%	112	\$ 503.361,77	\$ 62.228.078,02
2011	08	\$ 222.490	2,02%	111	\$ 498.867,47	\$ 62.726.945,49
2011	09	\$ 222.490	2,02%	110	\$ 494.373,17	\$ 63.221.318,66
2011	10	\$ 222.490	2,02%	109	\$ 489.878,87	\$ 63.711.197,53
2011	11	\$ 222.490	2,02%	108	\$ 485.384,57	\$ 64.196.582,10
2011	12	\$ 222.490	2,02%	107	\$ 480.890,26	\$ 64.677.472,36
2011	M14	\$ 222.490	2,02%	107	\$ 480.890,26	\$ 65.158.362,63
2012	01	\$ 230.789	2,02%	106	\$ 494.165,53	\$ 65.652.528,16
2012	02	\$ 230.789	2,02%	105	\$ 489.503,59	\$ 66.142.031,75
2012	03	\$ 230.789	2,02%	104	\$ 484.841,65	\$ 0,00
2012	04	\$ 230.789	2,02%	103	\$ 480.179,72	\$ 67.107.053,12
2012	05	\$ 230.789	2,02%	102	\$ 475.517,78	\$ 67.582.570,90
2012	06	\$ 230.789	2,02%	101	\$ 470.855,84	\$ 68.053.426,74
2012	M13	\$ 230.789	2,02%	101	\$ 470.855,84	\$ 68.524.282,58
2012	07	\$ 230.789	2,02%	100	\$ 466.193,90	\$ 68.990.476,48
2012	08	\$ 230.789	2,02%	99	\$ 461.531,96	\$ 69.452.008,44
2012	09	\$ 230.789	2,02%	98	\$ 456.870,02	\$ 69.908.878,46
2012	10	\$ 230.789	2,02%	97	\$ 452.208,08	\$ 70.361.086,54
2012	11	\$ 230.789	2,02%	96	\$ 447.546,14	\$ 70.808.632,68
2012	12	\$ 230.789	2,02%	95	\$ 442.884,20	\$ 71.251.516,89
2012	M14	\$ 230.789	2,02%	95	\$ 442.884,20	\$ 71.694.401,09
2013	01	\$ 236.420	2,02%	94	\$ 448.914,89	\$ 72.143.315,98
2013	02	\$ 236.420	2,02%	93	\$ 444.139,20	\$ 72.587.455,18
2013	03	\$ 236.420	2,02%	92	\$ 439.363,51	\$ 73.026.818,68
2013	04	\$ 236.420	2,02%	91	\$ 434.587,82	\$ 73.461.406,50
2013	05	\$ 236.420	2,02%	90	\$ 429.812,13	\$ 73.891.218,63
2013	06	\$ 236.420	2,02%	89	\$ 425.036,44	\$ 74.316.255,06

2013	M13	\$ 236.420	2,02%	89	\$ 425.036,44	\$ 74.741.291,50
2013	07	\$ 236.420	2,02%	88	\$ 420.260,75	\$ 75.161.552,25
2013	08	\$ 236.420	2,02%	87	\$ 415.485,06	\$ 75.577.037,30
2013	09	\$ 236.420	2,02%	86	\$ 410.709,37	\$ 75.987.746,67
2013	10	\$ 236.420	2,02%	85	\$ 405.933,68	\$ 76.393.680,34
2013	11	\$ 236.420	2,02%	84	\$ 401.157,99	\$ 76.794.838,33
2013	12	\$ 236.420	2,02%	83	\$ 396.382,29	\$ 77.191.220,62
2013	M14	\$ 236.420	2,02%	83	\$ 396.382,29	\$ 77.587.602,92
2014	01	\$ 241.007	2,02%	82	\$ 399.203,77	\$ 77.986.806,69
2014	02	\$ 241.007	2,02%	81	\$ 394.335,43	\$ 78.381.142,13
2014	03	\$ 241.007	2,02%	80	\$ 389.467,10	\$ 78.770.609,22
2014	04	\$ 241.007	2,02%	79	\$ 384.598,76	\$ 79.155.207,98
2014	05	\$ 241.007	2,02%	78	\$ 379.730,42	\$ 79.534.938,40
2014	06	\$ 241.007	2,02%	77	\$ 374.862,08	\$ 79.909.800,48
2014	M13	\$ 241.007	2,02%	77	\$ 374.862,08	\$ 80.284.662,55
2014	07	\$ 241.007	2,02%	76	\$ 369.993,74	\$ 80.654.656,29
2014	08	\$ 241.007	2,02%	75	\$ 365.125,40	\$ 81.019.781,70
2014	09	\$ 241.007	2,02%	74	\$ 360.257,06	\$ 81.380.038,76
2014	10	\$ 241.007	2,02%	73	\$ 355.388,72	\$ 81.735.427,48
2014	11	\$ 241.007	2,02%	72	\$ 350.520,39	\$ 82.085.947,87
2014	12	\$ 241.007	2,02%	71	\$ 345.652,05	\$ 82.431.599,92
2014	M14	\$ 241.007	2,02%	71	\$ 345.652,05	\$ 82.777.251,96
2015	01	\$ 249.828	2,02%	70	\$ 353.256,39	\$ 83.130.508,36
2015	02	\$ 249.828	2,02%	69	\$ 348.209,87	\$ 83.478.718,23
2015	03	\$ 249.828	2,02%	68	\$ 343.163,35	\$ 83.821.881,58
2015	04	\$ 249.828	2,02%	67	\$ 338.116,83	\$ 84.159.998,41
2015	05	\$ 249.828	2,02%	66	\$ 333.070,31	\$ 84.493.068,73
2015	06	\$ 249.828	2,02%	65	\$ 328.023,79	\$ 84.821.092,52
2015	M13	\$ 249.828	2,02%	65	\$ 328.023,79	\$ 85.149.116,31
2015	07	\$ 249.828	2,02%	64	\$ 322.977,27	\$ 85.472.093,58
2015	08	\$ 249.828	2,02%	63	\$ 317.930,75	\$ 85.790.024,34
2015	09	\$ 249.828	2,02%	62	\$ 312.884,23	\$ 86.102.908,57
2015	10	\$ 249.828	2,02%	61	\$ 307.837,71	\$ 86.410.746,28
2015	11	\$ 249.828	2,02%	60	\$ 302.791,19	\$ 86.713.537,48
2015	12	\$ 249.828	2,02%	59	\$ 297.744,67	\$ 87.011.282,15
2015	M14	\$ 249.828	2,02%	59	\$ 297.744,67	\$ 87.309.026,82
2016	01	\$ 266.741	2,02%	58	\$ 312.513,82	\$ 87.621.540,64
2016	02	\$ 266.741	2,02%	57	\$ 307.125,65	\$ 87.928.666,29
2016	03	\$ 266.741	2,02%	56	\$ 301.737,48	\$ 88.230.403,77
2016	04	\$ 266.741	2,02%	55	\$ 296.349,31	\$ 88.526.753,08
2016	05	\$ 266.741	2,02%	54	\$ 290.961,14	\$ 88.817.714,22
2016	06	\$ 266.741	2,02%	53	\$ 285.572,97	\$ 89.103.287,20
2016	M13	\$ 266.741	2,02%	53	\$ 285.572,97	\$ 89.388.860,17
2016	07	\$ 266.741	2,02%	52	\$ 280.184,80	\$ 89.669.044,97
2016	08	\$ 266.741	2,02%	51	\$ 274.796,63	\$ 89.943.841,60
2016	09	\$ 266.741	2,02%	50	\$ 269.408,46	\$ 90.213.250,07
2016	10	\$ 266.741	2,02%	49	\$ 264.020,29	\$ 90.477.270,36
2016	11	\$ 266.741	2,02%	48	\$ 258.632,13	\$ 90.735.902,49
2016	12	\$ 266.741	2,02%	47	\$ 253.243,96	\$ 90.989.146,45
2016	M14	\$ 266.741	2,02%	47	\$ 253.243,96	\$ 91.242.390,40
2017	01	\$ 282.079	2,02%	46	\$ 262.107,49	\$ 91.504.497,90
2017	02	\$ 282.079	2,02%	45	\$ 256.409,51	\$ 91.760.907,40
2017	03	\$ 282.079	2,02%	44	\$ 250.711,52	\$ 92.011.618,92
2017	04	\$ 282.079	2,02%	43	\$ 245.013,53	\$ 92.256.632,45
2017	05	\$ 282.079	2,02%	42	\$ 239.315,54	\$ 92.495.947,99
2017	06	\$ 282.079	2,02%	41	\$ 233.617,55	\$ 92.729.565,54
2017	M13	\$ 282.079	2,02%	41	\$ 233.617,55	\$ 92.963.183,08

2017	07	\$ 282.079	2,02%	40	\$ 227.919,56	\$ 93.191.102,65
2017	08	\$ 282.079	2,02%	39	\$ 222.221,57	\$ 93.413.324,22
2017	09	\$ 282.079	2,02%	38	\$ 216.523,58	\$ 93.629.847,80
2017	10	\$ 282.079	2,02%	37	\$ 210.825,59	\$ 93.840.673,39
2017	11	\$ 282.079	2,02%	36	\$ 205.127,60	\$ 94.045.801,00
2017	12	\$ 282.079	2,02%	35	\$ 199.429,62	\$ 94.245.230,61
2017	M14	\$ 282.079	2,02%	35	\$ 199.429,62	\$ 94.444.660,23
2018	01	\$ 293.616	2,02%	34	\$ 201.655,25	\$ 94.646.315,48
2018	02	\$ 293.616	2,02%	33	\$ 195.724,21	\$ 94.842.039,69
2018	03	\$ 293.616	2,02%	32	\$ 189.793,18	\$ 95.031.832,87
2018	04	\$ 293.616	2,02%	31	\$ 183.862,14	\$ 95.215.695,01
2018	05	\$ 293.616	2,02%	30	\$ 177.931,10	\$ 95.393.626,11
2018	06	\$ 293.616	2,02%	29	\$ 172.000,07	\$ 95.565.626,18
2018	M13	\$ 293.616	2,02%	29	\$ 172.000,07	\$ 95.737.626,25
2018	07	\$ 293.616	2,02%	28	\$ 166.069,03	\$ 95.903.695,27
2018	08	\$ 293.616	2,02%	27	\$ 160.137,99	\$ 96.063.833,27
2018	09	\$ 293.616	2,02%	26	\$ 154.206,96	\$ 96.218.040,22
2018	10	\$ 293.616	2,02%	25	\$ 148.275,92	\$ 96.366.316,14
2018	11	\$ 293.616	2,02%	24	\$ 142.344,88	\$ 96.508.661,03
2018	12	\$ 293.616	2,02%	23	\$ 136.413,85	\$ 96.645.074,87
2018	M14	\$ 293.616	2,02%	23	\$ 136.413,85	\$ 96.781.488,72
2019	01	\$ 302.953	2,02%	22	\$ 134.632,16	\$ 96.916.120,88
2019	02	\$ 302.953	2,02%	21	\$ 128.512,52	\$ 97.044.633,40
2019	03	\$ 302.953	2,02%	20	\$ 122.392,87	\$ 97.167.026,27
2019	04	\$ 302.953	2,02%	19	\$ 116.273,23	\$ 97.283.299,50
2019	05	\$ 302.953	2,02%	18	\$ 110.153,59	\$ 97.393.453,09
2019	06	\$ 302.953	2,02%	17	\$ 104.033,94	\$ 97.497.487,03
2019	M13	\$ 302.953	2,02%	17	\$ 104.033,94	\$ 97.601.520,98
2019	07	\$ 302.953	2,02%	16	\$ 97.914,30	\$ 97.699.435,28
2019	08	\$ 302.953	2,02%	15	\$ 91.794,66	\$ 97.791.229,93
2019	09	\$ 302.953	2,02%	14	\$ 85.675,01	\$ 97.876.904,95
2019	10	\$ 302.953	2,02%	13	\$ 79.555,37	\$ 97.956.460,31
2019	11	\$ 302.953	2,02%	12	\$ 73.435,72	\$ 98.029.896,04
2019	12	\$ 302.953	2,02%	11	\$ 67.316,08	\$ 98.097.212,12
2019	M14	\$ 302.953	2,02%	11	\$ 67.316,08	\$ 98.164.528,20
2020	01	\$ 314.465	2,02%	10	\$ 63.521,90	\$ 98.228.050,10
2020	02	\$ 314.465	2,02%	9	\$ 57.169,71	\$ 98.285.219,82
2020	03	\$ 314.465	2,02%	8	\$ 50.817,52	\$ 98.336.037,34
2020	04	\$ 314.465	2,02%	7	\$ 44.465,33	\$ 98.380.502,67
2020	05	\$ 314.465	2,02%	6	\$ 38.113,14	\$ 98.418.615,81
2020	06	\$ 314.465	2,02%	5	\$ 31.760,95	\$ 98.450.376,76
2020	M13	\$ 314.465	2,02%	5	\$ 31.760,95	\$ 98.482.137,71
2020	07	\$ 314.465	2,02%	4	\$ 25.408,76	\$ 98.507.546,47
2020	08	\$ 314.465	2,02%	3	\$ 19.056,57	\$ 98.526.603,04
2020	09	\$ 314.465	2,02%	2	\$ 12.704,38	\$ 98.539.307,42
2020	10	\$ 314.465	2,02%	1	\$ 6.352,19	\$ 98.545.659,61

19. IVÁN HUMBERTO ARAMBULA RAMÍREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1994	\$ 129.514,52	22,59%	1,03	\$ 133.399,96
1995	\$ 158.771,85	19,46%	14	\$ 2.222.805,90
1996	\$ 189.668,85	21,63%	14	\$ 2.655.363,93
1997	\$ 230.694,22	17,68%	14	\$ 3.229.719,15
1998	\$ 271.480,96	16,70%	14	\$ 3.800.733,49
1999	\$ 316.818,28	9,23%	14	\$ 4.435.455,99
2000	\$ 346.060,61	8,75%	14	\$ 4.844.848,57
2001	\$ 376.340,92	7,65%	14	\$ 5.268.772,82

2002	\$ 405.131,00	6,99%	14	\$ 5.671.833,94
2003	\$ 433.449,65	6,49%	14	\$ 6.068.295,14
2004	\$ 461.580,54	5,50%	14	\$ 6.462.127,49
2005	\$ 486.967,46	4,85%	14	\$ 6.817.544,50
2006	\$ 510.585,39	4,48%	14	\$ 7.148.195,41
2007	\$ 533.459,61	5,69%	14	\$ 7.468.434,57
2008	\$ 563.813,46	7,67%	14	\$ 7.893.388,49
2009	\$ 607.057,96	2,00%	14	\$ 8.498.811,39
2010	\$ 619.199,12	3,17%	14	\$ 8.668.787,62
2011	\$ 638.827,73	3,73%	14	\$ 8.943.588,19
2012	\$ 662.656,00	2,44%	14	\$ 9.277.184,03
2013	\$ 678.824,81	1,94%	14	\$ 9.503.547,32
2014	\$ 691.994,01	3,66%	14	\$ 9.687.916,13
2015	\$ 717.320,99	6,77%	14	\$ 10.042.493,86
2016	\$ 765.883,62	5,75%	14	\$ 10.722.370,70
2017	\$ 809.921,93	4,09%	14	\$ 11.338.907,01
2018	\$ 843.047,74	3,18%	14	\$ 11.802.668,31
2019	\$ 869.856,65	3,80%	14	\$ 12.177.993,16
2020	\$ 902.911,21	1,61%	11	\$ 9.932.023,28
				\$ 149.923.853,97

20. JORGE GONZÁLEZ RUBACETE

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2005	\$ 102.993,20	4,85%	7,5	\$ 772.449,00
2006	\$ 107.988,37	4,48%	14	\$ 1.511.837,18
2007	\$ 112.826,25	5,69%	14	\$ 1.579.567,49
2008	\$ 119.246,06	7,67%	14	\$ 1.669.444,88
2009	\$ 128.392,24	2,00%	14	\$ 1.797.491,30
2010	\$ 130.960,08	3,17%	14	\$ 1.833.441,13
2011	\$ 135.111,52	3,73%	14	\$ 1.891.561,21
2012	\$ 140.151,17	2,44%	14	\$ 1.962.116,44
2013	\$ 143.570,86	1,94%	14	\$ 2.009.992,09
2014	\$ 146.356,14	3,66%	14	\$ 2.048.985,93
2015	\$ 151.712,77	6,77%	14	\$ 2.123.978,82
2016	\$ 161.983,73	5,75%	14	\$ 2.267.772,18
2017	\$ 171.297,79	4,09%	14	\$ 2.398.169,08
2018	\$ 178.303,87	3,18%	14	\$ 2.496.254,20
2019	\$ 183.973,93	3,80%	14	\$ 2.575.635,08
2020	\$ 190.964,94	1,61%	11	\$ 2.100.614,38
				\$ 31.039.310,39

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2005	06	\$ 141.089	2,02%	185	\$ 527.249,59	\$ 527.249,59
2005	M13	\$ 141.089	2,02%	185	\$ 527.249,59	\$ 1.054.499,19
2005	07	\$ 141.089	2,02%	184	\$ 524.399,60	\$ 1.578.898,78
2005	08	\$ 141.089	2,02%	183	\$ 521.549,60	\$ 2.100.448,38
2005	09	\$ 141.089	2,02%	182	\$ 518.699,60	\$ 2.619.147,98
2005	10	\$ 141.089	2,02%	181	\$ 515.849,60	\$ 3.134.997,58
2005	11	\$ 141.089	2,02%	180	\$ 512.999,60	\$ 3.647.997,18
2005	12	\$ 141.089	2,02%	179	\$ 510.149,61	\$ 4.158.146,79
2005	M14	\$ 141.089	2,02%	179	\$ 510.149,61	\$ 4.668.296,40
2006	01	\$ 107.988	2,02%	178	\$ 388.282,98	\$ 5.056.579,38
2006	02	\$ 107.988	2,02%	177	\$ 386.101,62	\$ 5.442.681,00
2006	03	\$ 107.988	2,02%	176	\$ 383.920,25	\$ 5.826.601,25

2006	04	\$ 107.988	2,02%	175	\$ 381.738,89	\$ 6.208.340,14
2006	05	\$ 107.988	2,02%	174	\$ 379.557,52	\$ 6.587.897,67
2006	06	\$ 107.988	2,02%	173	\$ 377.376,16	\$ 6.965.273,82
2006	M13	\$ 107.988	2,02%	173	\$ 377.376,16	\$ 7.342.649,98
2006	07	\$ 107.988	2,02%	172	\$ 375.194,79	\$ 7.717.844,78
2006	08	\$ 107.988	2,02%	171	\$ 373.013,43	\$ 8.090.858,20
2006	09	\$ 107.988	2,02%	170	\$ 370.832,06	\$ 8.461.690,27
2006	10	\$ 107.988	2,02%	169	\$ 368.650,70	\$ 8.830.340,97
2006	11	\$ 107.988	2,02%	168	\$ 366.469,33	\$ 9.196.810,30
2006	12	\$ 107.988	2,02%	167	\$ 364.287,97	\$ 9.561.098,27
2006	M14	\$ 107.988	2,02%	167	\$ 364.287,97	\$ 9.925.386,23
2007	01	\$ 112.826	2,02%	166	\$ 378.328,98	\$ 10.303.715,21
2007	02	\$ 112.826	2,02%	165	\$ 376.049,89	\$ 10.679.765,10
2007	03	\$ 112.826	2,02%	164	\$ 373.770,80	\$ 11.053.535,90
2007	04	\$ 112.826	2,02%	163	\$ 371.491,71	\$ 11.425.027,61
2007	05	\$ 112.826	2,02%	162	\$ 369.212,62	\$ 11.794.240,23
2007	06	\$ 112.826	2,02%	161	\$ 366.933,53	\$ 12.161.173,75
2007	M13	\$ 112.826	2,02%	161	\$ 366.933,53	\$ 12.528.107,28
2007	07	\$ 112.826	2,02%	160	\$ 364.654,44	\$ 12.892.761,72
2007	08	\$ 112.826	2,02%	159	\$ 362.375,35	\$ 13.255.137,07
2007	09	\$ 112.826	2,02%	158	\$ 360.096,26	\$ 13.615.233,32
2007	10	\$ 112.826	2,02%	157	\$ 357.817,17	\$ 13.973.050,49
2007	11	\$ 112.826	2,02%	156	\$ 355.538,08	\$ 14.328.588,57
2007	12	\$ 112.826	2,02%	155	\$ 353.258,99	\$ 14.681.847,55
2007	M14	\$ 112.826	2,02%	155	\$ 353.258,99	\$ 15.035.106,54
2008	01	\$ 119.246	2,02%	154	\$ 370.950,65	\$ 15.406.057,19
2008	02	\$ 119.246	2,02%	153	\$ 368.541,88	\$ 15.774.599,07
2008	03	\$ 119.246	2,02%	152	\$ 366.133,11	\$ 16.140.732,18
2008	04	\$ 119.246	2,02%	151	\$ 363.724,34	\$ 16.504.456,52
2008	05	\$ 119.246	2,02%	150	\$ 361.315,57	\$ 16.865.772,09
2008	06	\$ 119.246	2,02%	149	\$ 358.906,80	\$ 17.224.678,89
2008	M13	\$ 119.246	2,02%	149	\$ 358.906,80	\$ 17.583.585,69
2008	07	\$ 119.246	2,02%	148	\$ 356.498,03	\$ 17.940.083,72
2008	08	\$ 119.246	2,02%	147	\$ 354.089,26	\$ 18.294.172,98
2008	09	\$ 119.246	2,02%	146	\$ 351.680,49	\$ 18.645.853,47
2008	10	\$ 119.246	2,02%	145	\$ 349.271,72	\$ 18.995.125,19
2008	11	\$ 119.246	2,02%	144	\$ 346.862,95	\$ 19.341.988,13
2008	12	\$ 119.246	2,02%	143	\$ 344.454,18	\$ 19.686.442,31
2008	M14	\$ 119.246	2,02%	143	\$ 344.454,18	\$ 20.030.896,49
2009	01	\$ 128.392	2,02%	142	\$ 368.280,29	\$ 20.399.176,78
2009	02	\$ 128.392	2,02%	141	\$ 365.686,77	\$ 20.764.863,54
2009	03	\$ 128.392	2,02%	140	\$ 363.093,24	\$ 21.127.956,79
2009	04	\$ 128.392	2,02%	139	\$ 360.499,72	\$ 21.488.456,51
2009	05	\$ 128.392	2,02%	138	\$ 357.906,20	\$ 21.846.362,70
2009	06	\$ 128.392	2,02%	137	\$ 355.312,67	\$ 22.201.675,38
2009	M13	\$ 128.392	2,02%	137	\$ 355.312,67	\$ 22.556.988,05
2009	07	\$ 128.392	2,02%	136	\$ 352.719,15	\$ 22.909.707,20
2009	08	\$ 128.392	2,02%	135	\$ 350.125,63	\$ 23.259.832,83
2009	09	\$ 128.392	2,02%	134	\$ 347.532,10	\$ 23.607.364,93
2009	10	\$ 128.392	2,02%	133	\$ 344.938,58	\$ 23.952.303,51
2009	11	\$ 128.392	2,02%	132	\$ 342.345,06	\$ 24.294.648,57
2009	12	\$ 128.392	2,02%	131	\$ 339.751,53	\$ 24.634.400,10
2009	M14	\$ 128.392	2,02%	131	\$ 339.751,53	\$ 24.974.151,64
2010	01	\$ 130.960	2,02%	130	\$ 343.901,17	\$ 25.318.052,81
2010	02	\$ 130.960	2,02%	129	\$ 341.255,78	\$ 25.659.308,59
2010	03	\$ 130.960	2,02%	128	\$ 338.610,38	\$ 25.997.918,97
2010	04	\$ 130.960	2,02%	127	\$ 335.964,99	\$ 26.333.883,96

2010	05	\$ 130.960	2,02%	126	\$ 333.319,60	\$ 26.667.203,56
2010	06	\$ 130.960	2,02%	125	\$ 330.674,20	\$ 26.997.877,76
2010	M13	\$ 130.960	2,02%	125	\$ 330.674,20	\$ 27.328.551,96
2010	07	\$ 130.960	2,02%	124	\$ 328.028,81	\$ 27.656.580,77
2010	08	\$ 130.960	2,02%	123	\$ 325.383,42	\$ 27.981.964,19
2010	09	\$ 130.960	2,02%	122	\$ 322.738,02	\$ 28.304.702,21
2010	10	\$ 130.960	2,02%	121	\$ 320.092,63	\$ 28.624.794,84
2010	11	\$ 130.960	2,02%	120	\$ 317.447,24	\$ 28.942.242,08
2010	12	\$ 130.960	2,02%	119	\$ 314.801,84	\$ 29.257.043,92
2010	M14	\$ 130.960	2,02%	119	\$ 314.801,84	\$ 29.571.845,76
2011	01	\$ 135.112	2,02%	118	\$ 322.051,81	\$ 29.893.897,57
2011	02	\$ 135.112	2,02%	117	\$ 319.322,55	\$ 30.213.220,12
2011	03	\$ 135.112	2,02%	116	\$ 316.593,30	\$ 30.529.813,42
2011	04	\$ 135.112	2,02%	115	\$ 313.864,05	\$ 30.843.677,47
2011	05	\$ 135.112	2,02%	114	\$ 311.134,80	\$ 31.154.812,27
2011	06	\$ 135.112	2,02%	113	\$ 308.405,54	\$ 31.463.217,81
2011	M13	\$ 135.112	2,02%	113	\$ 308.405,54	\$ 31.771.623,36
2011	07	\$ 135.112	2,02%	112	\$ 305.676,29	\$ 32.077.299,65
2011	08	\$ 135.112	2,02%	111	\$ 302.947,04	\$ 32.380.246,69
2011	09	\$ 135.112	2,02%	110	\$ 300.217,79	\$ 32.680.464,47
2011	10	\$ 135.112	2,02%	109	\$ 297.488,53	\$ 32.977.953,01
2011	11	\$ 135.112	2,02%	108	\$ 294.759,28	\$ 33.272.712,29
2011	12	\$ 135.112	2,02%	107	\$ 292.030,03	\$ 33.564.742,32
2011	M14	\$ 135.112	2,02%	107	\$ 292.030,03	\$ 33.856.772,35
2012	01	\$ 140.151	2,02%	106	\$ 300.091,69	\$ 34.156.864,04
2012	02	\$ 140.151	2,02%	105	\$ 297.260,64	\$ 34.454.124,68
2012	03	\$ 140.151	2,02%	104	\$ 294.429,59	\$ 0,00
2012	04	\$ 140.151	2,02%	103	\$ 291.598,53	\$ 35.040.152,80
2012	05	\$ 140.151	2,02%	102	\$ 288.767,48	\$ 35.328.920,28
2012	06	\$ 140.151	2,02%	101	\$ 285.936,43	\$ 35.614.856,71
2012	M13	\$ 140.151	2,02%	101	\$ 285.936,43	\$ 35.900.793,14
2012	07	\$ 140.151	2,02%	100	\$ 283.105,37	\$ 36.183.898,51
2012	08	\$ 140.151	2,02%	99	\$ 280.274,32	\$ 36.464.172,83
2012	09	\$ 140.151	2,02%	98	\$ 277.443,27	\$ 36.741.616,09
2012	10	\$ 140.151	2,02%	97	\$ 274.612,21	\$ 37.016.228,30
2012	11	\$ 140.151	2,02%	96	\$ 271.781,16	\$ 37.288.009,46
2012	12	\$ 140.151	2,02%	95	\$ 268.950,10	\$ 37.556.959,57
2012	M14	\$ 140.151	2,02%	95	\$ 268.950,10	\$ 37.825.909,67
2013	01	\$ 143.571	2,02%	94	\$ 272.612,36	\$ 38.098.522,03
2013	02	\$ 143.571	2,02%	93	\$ 269.712,22	\$ 38.368.234,25
2013	03	\$ 143.571	2,02%	92	\$ 266.812,09	\$ 38.635.046,34
2013	04	\$ 143.571	2,02%	91	\$ 263.911,96	\$ 38.898.958,30
2013	05	\$ 143.571	2,02%	90	\$ 261.011,83	\$ 39.159.970,13
2013	06	\$ 143.571	2,02%	89	\$ 258.111,70	\$ 39.418.081,83
2013	M13	\$ 143.571	2,02%	89	\$ 258.111,70	\$ 39.676.193,53
2013	07	\$ 143.571	2,02%	88	\$ 255.211,57	\$ 39.931.405,09
2013	08	\$ 143.571	2,02%	87	\$ 252.311,44	\$ 40.183.716,53
2013	09	\$ 143.571	2,02%	86	\$ 249.411,30	\$ 40.433.127,83
2013	10	\$ 143.571	2,02%	85	\$ 246.511,17	\$ 40.679.639,00
2013	11	\$ 143.571	2,02%	84	\$ 243.611,04	\$ 40.923.250,05
2013	12	\$ 143.571	2,02%	83	\$ 240.710,91	\$ 41.163.960,95
2013	M14	\$ 143.571	2,02%	83	\$ 240.710,91	\$ 41.404.671,86
2014	01	\$ 146.356	2,02%	82	\$ 242.424,31	\$ 41.647.096,17
2014	02	\$ 146.356	2,02%	81	\$ 239.467,91	\$ 41.886.564,08
2014	03	\$ 146.356	2,02%	80	\$ 236.511,52	\$ 42.123.075,60
2014	04	\$ 146.356	2,02%	79	\$ 233.555,12	\$ 42.356.630,73
2014	05	\$ 146.356	2,02%	78	\$ 230.598,73	\$ 42.587.229,46

2014	06	\$ 146.356	2,02%	77	\$ 227.642,34	\$ 42.814.871,80
2014	M13	\$ 146.356	2,02%	77	\$ 227.642,34	\$ 43.042.514,13
2014	07	\$ 146.356	2,02%	76	\$ 224.685,94	\$ 43.267.200,08
2014	08	\$ 146.356	2,02%	75	\$ 221.729,55	\$ 43.488.929,62
2014	09	\$ 146.356	2,02%	74	\$ 218.773,16	\$ 43.707.702,78
2014	10	\$ 146.356	2,02%	73	\$ 215.816,76	\$ 43.923.519,54
2014	11	\$ 146.356	2,02%	72	\$ 212.860,37	\$ 44.136.379,91
2014	12	\$ 146.356	2,02%	71	\$ 209.903,97	\$ 44.346.283,88
2014	M14	\$ 146.356	2,02%	71	\$ 209.903,97	\$ 44.556.187,85
2015	01	\$ 151.713	2,02%	70	\$ 214.521,86	\$ 44.770.709,71
2015	02	\$ 151.713	2,02%	69	\$ 211.457,26	\$ 44.982.166,98
2015	03	\$ 151.713	2,02%	68	\$ 208.392,66	\$ 45.190.559,64
2015	04	\$ 151.713	2,02%	67	\$ 205.328,07	\$ 45.395.887,71
2015	05	\$ 151.713	2,02%	66	\$ 202.263,47	\$ 45.598.151,18
2015	06	\$ 151.713	2,02%	65	\$ 199.198,87	\$ 45.797.350,05
2015	M13	\$ 151.713	2,02%	65	\$ 199.198,87	\$ 45.996.548,92
2015	07	\$ 151.713	2,02%	64	\$ 196.134,27	\$ 46.192.683,19
2015	08	\$ 151.713	2,02%	63	\$ 193.069,67	\$ 46.385.752,86
2015	09	\$ 151.713	2,02%	62	\$ 190.005,08	\$ 46.575.757,94
2015	10	\$ 151.713	2,02%	61	\$ 186.940,48	\$ 46.762.698,42
2015	11	\$ 151.713	2,02%	60	\$ 183.875,88	\$ 46.946.574,30
2015	12	\$ 151.713	2,02%	59	\$ 180.811,28	\$ 47.127.385,58
2015	M14	\$ 151.713	2,02%	59	\$ 180.811,28	\$ 47.308.196,86
2016	01	\$ 161.984	2,02%	58	\$ 189.780,13	\$ 47.497.977,00
2016	02	\$ 161.984	2,02%	57	\$ 186.508,06	\$ 47.684.485,06
2016	03	\$ 161.984	2,02%	56	\$ 183.235,99	\$ 47.867.721,05
2016	04	\$ 161.984	2,02%	55	\$ 179.963,92	\$ 48.047.684,98
2016	05	\$ 161.984	2,02%	54	\$ 176.691,85	\$ 48.224.376,83
2016	06	\$ 161.984	2,02%	53	\$ 173.419,78	\$ 48.397.796,60
2016	M13	\$ 161.984	2,02%	53	\$ 173.419,78	\$ 48.571.216,38
2016	07	\$ 161.984	2,02%	52	\$ 170.147,71	\$ 48.741.364,09
2016	08	\$ 161.984	2,02%	51	\$ 166.875,64	\$ 48.908.239,73
2016	09	\$ 161.984	2,02%	50	\$ 163.603,56	\$ 49.071.843,29
2016	10	\$ 161.984	2,02%	49	\$ 160.331,49	\$ 49.232.174,78
2016	11	\$ 161.984	2,02%	48	\$ 157.059,42	\$ 49.389.234,21
2016	12	\$ 161.984	2,02%	47	\$ 153.787,35	\$ 49.543.021,56
2016	M14	\$ 161.984	2,02%	47	\$ 153.787,35	\$ 49.696.808,91
2017	01	\$ 171.298	2,02%	46	\$ 159.169,91	\$ 49.855.978,81
2017	02	\$ 171.298	2,02%	45	\$ 155.709,69	\$ 50.011.688,51
2017	03	\$ 171.298	2,02%	44	\$ 152.249,48	\$ 50.163.937,98
2017	04	\$ 171.298	2,02%	43	\$ 148.789,26	\$ 50.312.727,25
2017	05	\$ 171.298	2,02%	42	\$ 145.329,05	\$ 50.458.056,29
2017	06	\$ 171.298	2,02%	41	\$ 141.868,83	\$ 50.599.925,12
2017	M13	\$ 171.298	2,02%	41	\$ 141.868,83	\$ 50.741.793,95
2017	07	\$ 171.298	2,02%	40	\$ 138.408,62	\$ 50.880.202,57
2017	08	\$ 171.298	2,02%	39	\$ 134.948,40	\$ 51.015.150,97
2017	09	\$ 171.298	2,02%	38	\$ 131.488,18	\$ 51.146.639,16
2017	10	\$ 171.298	2,02%	37	\$ 128.027,97	\$ 51.274.667,12
2017	11	\$ 171.298	2,02%	36	\$ 124.567,75	\$ 51.399.234,88
2017	12	\$ 171.298	2,02%	35	\$ 121.107,54	\$ 51.520.342,42
2017	M14	\$ 171.298	2,02%	35	\$ 121.107,54	\$ 51.641.449,96
2018	01	\$ 178.304	2,02%	34	\$ 122.459,10	\$ 51.763.909,06
2018	02	\$ 178.304	2,02%	33	\$ 118.857,36	\$ 51.882.766,42
2018	03	\$ 178.304	2,02%	32	\$ 115.255,62	\$ 51.998.022,04
2018	04	\$ 178.304	2,02%	31	\$ 111.653,88	\$ 52.109.675,92
2018	05	\$ 178.304	2,02%	30	\$ 108.052,15	\$ 52.217.728,07
2018	06	\$ 178.304	2,02%	29	\$ 104.450,41	\$ 52.322.178,48

2018	M13	\$ 178.304	2,02%	29	\$ 104.450,41	\$ 52.426.628,88
2018	07	\$ 178.304	2,02%	28	\$ 100.848,67	\$ 52.527.477,55
2018	08	\$ 178.304	2,02%	27	\$ 97.246,93	\$ 52.624.724,49
2018	09	\$ 178.304	2,02%	26	\$ 93.645,19	\$ 52.718.369,68
2018	10	\$ 178.304	2,02%	25	\$ 90.043,46	\$ 52.808.413,13
2018	11	\$ 178.304	2,02%	24	\$ 86.441,72	\$ 52.894.854,85
2018	12	\$ 178.304	2,02%	23	\$ 82.839,98	\$ 52.977.694,83
2018	M14	\$ 178.304	2,02%	23	\$ 82.839,98	\$ 53.060.534,81
2019	01	\$ 183.974	2,02%	22	\$ 81.758,02	\$ 53.142.292,82
2019	02	\$ 183.974	2,02%	21	\$ 78.041,74	\$ 53.220.334,57
2019	03	\$ 183.974	2,02%	20	\$ 74.325,47	\$ 53.294.660,04
2019	04	\$ 183.974	2,02%	19	\$ 70.609,20	\$ 53.365.269,23
2019	05	\$ 183.974	2,02%	18	\$ 66.892,92	\$ 53.432.162,15
2019	06	\$ 183.974	2,02%	17	\$ 63.176,65	\$ 53.495.338,80
2019	M13	\$ 183.974	2,02%	17	\$ 63.176,65	\$ 53.558.515,45
2019	07	\$ 183.974	2,02%	16	\$ 59.460,38	\$ 53.617.975,83
2019	08	\$ 183.974	2,02%	15	\$ 55.744,10	\$ 53.673.719,93
2019	09	\$ 183.974	2,02%	14	\$ 52.027,83	\$ 53.725.747,76
2019	10	\$ 183.974	2,02%	13	\$ 48.311,56	\$ 53.774.059,31
2019	11	\$ 183.974	2,02%	12	\$ 44.595,28	\$ 53.818.654,60
2019	12	\$ 183.974	2,02%	11	\$ 40.879,01	\$ 53.859.533,60
2019	M14	\$ 183.974	2,02%	11	\$ 40.879,01	\$ 53.900.412,61
2020	01	\$ 190.965	2,02%	10	\$ 38.574,92	\$ 53.938.987,53
2020	02	\$ 190.965	2,02%	9	\$ 34.717,43	\$ 53.973.704,96
2020	03	\$ 190.965	2,02%	8	\$ 30.859,93	\$ 54.004.564,89
2020	04	\$ 190.965	2,02%	7	\$ 27.002,44	\$ 54.031.567,34
2020	05	\$ 190.965	2,02%	6	\$ 23.144,95	\$ 54.054.712,29
2020	06	\$ 190.965	2,02%	5	\$ 19.287,46	\$ 54.073.999,75
2020	M13	\$ 190.965	2,02%	5	\$ 19.287,46	\$ 54.093.287,21
2020	07	\$ 190.965	2,02%	4	\$ 15.429,97	\$ 54.108.717,17
2020	08	\$ 190.965	2,02%	3	\$ 11.572,48	\$ 54.120.289,65
2020	09	\$ 190.965	2,02%	2	\$ 7.714,98	\$ 54.128.004,63
2020	10	\$ 190.965	2,02%	1	\$ 3.857,49	\$ 54.131.862,12

21. JUAN BAUTISTA FUENTES LEÓN

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2004	\$ 71.954,75	5,50%	5	\$ 359.773,75
2005	\$ 75.912,26	4,85%	14	\$ 1.062.771,66
2006	\$ 79.594,01	4,48%	14	\$ 1.114.316,08
2007	\$ 83.159,82	5,69%	14	\$ 1.164.237,44
2008	\$ 87.891,61	7,67%	14	\$ 1.230.482,55
2009	\$ 94.632,90	2,00%	14	\$ 1.324.860,57
2010	\$ 96.525,56	3,17%	14	\$ 1.351.357,78
2011	\$ 99.585,42	3,73%	14	\$ 1.394.195,82
2012	\$ 103.299,95	2,44%	14	\$ 1.446.199,32
2013	\$ 105.820,47	1,94%	14	\$ 1.481.486,59
2014	\$ 107.873,39	3,66%	14	\$ 1.510.227,43
2015	\$ 111.821,55	6,77%	14	\$ 1.565.501,75
2016	\$ 119.391,87	5,75%	14	\$ 1.671.486,22
2017	\$ 126.256,91	4,09%	14	\$ 1.767.596,68
2018	\$ 131.420,81	3,18%	14	\$ 1.839.891,38
2019	\$ 135.599,99	3,80%	14	\$ 1.898.399,93
2020	\$ 140.752,79	1,61%	11	\$ 1.548.280,74
				\$ 23.371.291,92

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2004	08	\$ 71.955	2,02%	195	\$ 283.429,76	\$ 283.429,76
2004	09	\$ 71.955	2,02%	194	\$ 281.976,27	\$ 565.406,03
2004	10	\$ 71.955	2,02%	193	\$ 280.522,79	\$ 845.928,82
2004	11	\$ 71.955	2,02%	192	\$ 279.069,30	\$ 1.124.998,13
2004	12	\$ 71.955	2,02%	191	\$ 277.615,82	\$ 1.402.613,94
2004	M14	\$ 71.955	2,02%	191	\$ 277.615,82	\$ 1.680.229,76
2005	01	\$ 75.912	2,02%	190	\$ 291.351,26	\$ 1.971.581,02
2005	02	\$ 75.912	2,02%	189	\$ 289.817,83	\$ 2.261.398,85
2005	03	\$ 75.912	2,02%	188	\$ 288.284,40	\$ 2.549.683,25
2005	04	\$ 75.912	2,02%	187	\$ 286.750,98	\$ 2.836.434,23
2005	05	\$ 75.912	2,02%	186	\$ 285.217,55	\$ 3.121.651,77
2005	06	\$ 75.912	2,02%	185	\$ 283.684,12	\$ 3.405.335,90
2005	M13	\$ 75.912	2,02%	185	\$ 283.684,12	\$ 3.689.020,02
2005	07	\$ 75.912	2,02%	184	\$ 282.150,69	\$ 3.971.170,71
2005	08	\$ 75.912	2,02%	183	\$ 280.617,26	\$ 4.251.787,97
2005	09	\$ 75.912	2,02%	182	\$ 279.083,84	\$ 4.530.871,81
2005	10	\$ 75.912	2,02%	181	\$ 277.550,41	\$ 4.808.422,22
2005	11	\$ 75.912	2,02%	180	\$ 276.016,98	\$ 5.084.439,20
2005	12	\$ 75.912	2,02%	179	\$ 274.483,55	\$ 5.358.922,76
2005	M14	\$ 75.912	2,02%	179	\$ 274.483,55	\$ 5.633.406,31
2006	01	\$ 79.594	2,02%	178	\$ 286.188,21	\$ 5.919.594,52
2006	02	\$ 79.594	2,02%	177	\$ 284.580,41	\$ 6.204.174,93
2006	03	\$ 79.594	2,02%	176	\$ 282.972,61	\$ 6.487.147,54
2006	04	\$ 79.594	2,02%	175	\$ 281.364,81	\$ 6.768.512,35
2006	05	\$ 79.594	2,02%	174	\$ 279.757,01	\$ 7.048.269,36
2006	06	\$ 79.594	2,02%	173	\$ 278.149,21	\$ 7.326.418,57
2006	M13	\$ 79.594	2,02%	173	\$ 278.149,21	\$ 7.604.567,79
2006	07	\$ 79.594	2,02%	172	\$ 276.541,41	\$ 7.881.109,20
2006	08	\$ 79.594	2,02%	171	\$ 274.933,62	\$ 8.156.042,81
2006	09	\$ 79.594	2,02%	170	\$ 273.325,82	\$ 8.429.368,63
2006	10	\$ 79.594	2,02%	169	\$ 271.718,02	\$ 8.701.086,65
2006	11	\$ 79.594	2,02%	168	\$ 270.110,22	\$ 8.971.196,87
2006	12	\$ 79.594	2,02%	167	\$ 268.502,42	\$ 9.239.699,29
2006	M14	\$ 79.594	2,02%	167	\$ 268.502,42	\$ 9.508.201,71
2007	01	\$ 83.160	2,02%	166	\$ 278.851,50	\$ 9.787.053,21
2007	02	\$ 83.160	2,02%	165	\$ 277.171,67	\$ 10.064.224,88
2007	03	\$ 83.160	2,02%	164	\$ 275.491,84	\$ 10.339.716,72
2007	04	\$ 83.160	2,02%	163	\$ 273.812,01	\$ 10.613.528,74
2007	05	\$ 83.160	2,02%	162	\$ 272.132,19	\$ 10.885.660,92
2007	06	\$ 83.160	2,02%	161	\$ 270.452,36	\$ 11.156.113,28
2007	M13	\$ 83.160	2,02%	161	\$ 270.452,36	\$ 11.426.565,64
2007	07	\$ 83.160	2,02%	160	\$ 268.772,53	\$ 11.695.338,17
2007	08	\$ 83.160	2,02%	159	\$ 267.092,70	\$ 11.962.430,87
2007	09	\$ 83.160	2,02%	158	\$ 265.412,87	\$ 12.227.843,74
2007	10	\$ 83.160	2,02%	157	\$ 263.733,04	\$ 12.491.576,79
2007	11	\$ 83.160	2,02%	156	\$ 262.053,22	\$ 12.753.630,00
2007	12	\$ 83.160	2,02%	155	\$ 260.373,39	\$ 13.014.003,39
2007	M14	\$ 83.160	2,02%	155	\$ 260.373,39	\$ 13.274.376,78
2008	01	\$ 87.892	2,02%	154	\$ 273.413,22	\$ 13.547.790,00
2008	02	\$ 87.892	2,02%	153	\$ 271.637,81	\$ 13.819.427,82
2008	03	\$ 87.892	2,02%	152	\$ 269.862,40	\$ 14.089.290,22
2008	04	\$ 87.892	2,02%	151	\$ 268.086,99	\$ 14.357.377,21
2008	05	\$ 87.892	2,02%	150	\$ 266.311,58	\$ 14.623.688,79
2008	06	\$ 87.892	2,02%	149	\$ 264.536,17	\$ 14.888.224,96

2008	M13	\$ 87.892	2,02%	149	\$ 264.536,17	\$ 15.152.761,13
2008	07	\$ 87.892	2,02%	148	\$ 262.760,76	\$ 15.415.521,89
2008	08	\$ 87.892	2,02%	147	\$ 260.985,35	\$ 15.676.507,24
2008	09	\$ 87.892	2,02%	146	\$ 259.209,94	\$ 15.935.717,18
2008	10	\$ 87.892	2,02%	145	\$ 257.434,53	\$ 16.193.151,71
2008	11	\$ 87.892	2,02%	144	\$ 255.659,12	\$ 16.448.810,83
2008	12	\$ 87.892	2,02%	143	\$ 253.883,71	\$ 16.702.694,54
2008	M14	\$ 87.892	2,02%	143	\$ 253.883,71	\$ 16.956.578,24
2009	01	\$ 94.633	2,02%	142	\$ 271.445,00	\$ 17.228.023,25
2009	02	\$ 94.633	2,02%	141	\$ 269.533,42	\$ 17.497.556,67
2009	03	\$ 94.633	2,02%	140	\$ 267.621,83	\$ 17.765.178,50
2009	04	\$ 94.633	2,02%	139	\$ 265.710,25	\$ 18.030.888,75
2009	05	\$ 94.633	2,02%	138	\$ 263.798,67	\$ 18.294.687,42
2009	06	\$ 94.633	2,02%	137	\$ 261.887,08	\$ 18.556.574,50
2009	M13	\$ 94.633	2,02%	137	\$ 261.887,08	\$ 18.818.461,58
2009	07	\$ 94.633	2,02%	136	\$ 259.975,50	\$ 19.078.437,07
2009	08	\$ 94.633	2,02%	135	\$ 258.063,91	\$ 19.336.500,99
2009	09	\$ 94.633	2,02%	134	\$ 256.152,33	\$ 19.592.653,31
2009	10	\$ 94.633	2,02%	133	\$ 254.240,74	\$ 19.846.894,05
2009	11	\$ 94.633	2,02%	132	\$ 252.329,16	\$ 20.099.223,21
2009	12	\$ 94.633	2,02%	131	\$ 250.417,57	\$ 20.349.640,79
2009	M14	\$ 94.633	2,02%	131	\$ 250.417,57	\$ 20.600.058,36
2010	01	\$ 96.526	2,02%	130	\$ 253.476,11	\$ 20.853.534,47
2010	02	\$ 96.526	2,02%	129	\$ 251.526,29	\$ 21.105.060,76
2010	03	\$ 96.526	2,02%	128	\$ 249.576,48	\$ 21.354.637,24
2010	04	\$ 96.526	2,02%	127	\$ 247.626,66	\$ 21.602.263,90
2010	05	\$ 96.526	2,02%	126	\$ 245.676,84	\$ 21.847.940,74
2010	06	\$ 96.526	2,02%	125	\$ 243.727,03	\$ 22.091.667,77
2010	M13	\$ 96.526	2,02%	125	\$ 243.727,03	\$ 22.335.394,80
2010	07	\$ 96.526	2,02%	124	\$ 241.777,21	\$ 22.577.172,01
2010	08	\$ 96.526	2,02%	123	\$ 239.827,40	\$ 22.816.999,40
2010	09	\$ 96.526	2,02%	122	\$ 237.877,58	\$ 23.054.876,98
2010	10	\$ 96.526	2,02%	121	\$ 235.927,76	\$ 23.290.804,75
2010	11	\$ 96.526	2,02%	120	\$ 233.977,95	\$ 23.524.782,69
2010	12	\$ 96.526	2,02%	119	\$ 232.028,13	\$ 23.756.810,82
2010	M14	\$ 96.526	2,02%	119	\$ 232.028,13	\$ 23.988.838,95
2011	01	\$ 99.585	2,02%	118	\$ 237.371,80	\$ 24.226.210,75
2011	02	\$ 99.585	2,02%	117	\$ 235.360,17	\$ 24.461.570,92
2011	03	\$ 99.585	2,02%	116	\$ 233.348,55	\$ 24.694.919,47
2011	04	\$ 99.585	2,02%	115	\$ 231.336,92	\$ 24.926.256,39
2011	05	\$ 99.585	2,02%	114	\$ 229.325,30	\$ 25.155.581,68
2011	06	\$ 99.585	2,02%	113	\$ 227.313,67	\$ 25.382.895,35
2011	M13	\$ 99.585	2,02%	113	\$ 227.313,67	\$ 25.610.209,02
2011	07	\$ 99.585	2,02%	112	\$ 225.302,04	\$ 25.835.511,07
2011	08	\$ 99.585	2,02%	111	\$ 223.290,42	\$ 26.058.801,48
2011	09	\$ 99.585	2,02%	110	\$ 221.278,79	\$ 26.280.080,28
2011	10	\$ 99.585	2,02%	109	\$ 219.267,17	\$ 26.499.347,45
2011	11	\$ 99.585	2,02%	108	\$ 217.255,54	\$ 26.716.602,99
2011	12	\$ 99.585	2,02%	107	\$ 215.243,92	\$ 26.931.846,91
2011	M14	\$ 99.585	2,02%	107	\$ 215.243,92	\$ 27.147.090,82
2012	01	\$ 103.300	2,02%	106	\$ 221.185,86	\$ 27.368.276,68
2012	02	\$ 103.300	2,02%	105	\$ 219.099,20	\$ 27.587.375,88
2012	03	\$ 103.300	2,02%	104	\$ 217.012,54	\$ 0,00
2012	04	\$ 103.300	2,02%	103	\$ 214.925,88	\$ 28.019.314,29
2012	05	\$ 103.300	2,02%	102	\$ 212.839,22	\$ 28.232.153,52
2012	06	\$ 103.300	2,02%	101	\$ 210.752,56	\$ 28.442.906,08
2012	M13	\$ 103.300	2,02%	101	\$ 210.752,56	\$ 28.653.658,64

2012	07	\$ 103.300	2,02%	100	\$ 208.665,90	\$ 28.862.324,54
2012	08	\$ 103.300	2,02%	99	\$ 206.579,24	\$ 29.068.903,78
2012	09	\$ 103.300	2,02%	98	\$ 204.492,58	\$ 29.273.396,37
2012	10	\$ 103.300	2,02%	97	\$ 202.405,93	\$ 29.475.802,29
2012	11	\$ 103.300	2,02%	96	\$ 200.319,27	\$ 29.676.121,56
2012	12	\$ 103.300	2,02%	95	\$ 198.232,61	\$ 29.874.354,17
2012	M14	\$ 103.300	2,02%	95	\$ 198.232,61	\$ 30.072.586,77
2013	01	\$ 105.820	2,02%	94	\$ 200.931,91	\$ 30.273.518,68
2013	02	\$ 105.820	2,02%	93	\$ 198.794,34	\$ 30.472.313,02
2013	03	\$ 105.820	2,02%	92	\$ 196.656,76	\$ 30.668.969,78
2013	04	\$ 105.820	2,02%	91	\$ 194.519,19	\$ 30.863.488,97
2013	05	\$ 105.820	2,02%	90	\$ 192.381,62	\$ 31.055.870,58
2013	06	\$ 105.820	2,02%	89	\$ 190.244,04	\$ 31.246.114,63
2013	M13	\$ 105.820	2,02%	89	\$ 190.244,04	\$ 31.436.358,67
2013	07	\$ 105.820	2,02%	88	\$ 188.106,47	\$ 31.624.465,14
2013	08	\$ 105.820	2,02%	87	\$ 185.968,89	\$ 31.810.434,03
2013	09	\$ 105.820	2,02%	86	\$ 183.831,32	\$ 31.994.265,35
2013	10	\$ 105.820	2,02%	85	\$ 181.693,75	\$ 32.175.959,10
2013	11	\$ 105.820	2,02%	84	\$ 179.556,17	\$ 32.355.515,27
2013	12	\$ 105.820	2,02%	83	\$ 177.418,60	\$ 32.532.933,88
2013	M14	\$ 105.820	2,02%	83	\$ 177.418,60	\$ 32.710.352,48
2014	01	\$ 107.873	2,02%	82	\$ 178.681,48	\$ 32.889.033,96
2014	02	\$ 107.873	2,02%	81	\$ 176.502,44	\$ 33.065.536,39
2014	03	\$ 107.873	2,02%	80	\$ 174.323,39	\$ 33.239.859,79
2014	04	\$ 107.873	2,02%	79	\$ 172.144,35	\$ 33.412.004,14
2014	05	\$ 107.873	2,02%	78	\$ 169.965,31	\$ 33.581.969,45
2014	06	\$ 107.873	2,02%	77	\$ 167.786,27	\$ 33.749.755,71
2014	M13	\$ 107.873	2,02%	77	\$ 167.786,27	\$ 33.917.541,98
2014	07	\$ 107.873	2,02%	76	\$ 165.607,22	\$ 34.083.149,21
2014	08	\$ 107.873	2,02%	75	\$ 163.428,18	\$ 34.246.577,39
2014	09	\$ 107.873	2,02%	74	\$ 161.249,14	\$ 34.407.826,53
2014	10	\$ 107.873	2,02%	73	\$ 159.070,10	\$ 34.566.896,63
2014	11	\$ 107.873	2,02%	72	\$ 156.891,05	\$ 34.723.787,68
2014	12	\$ 107.873	2,02%	71	\$ 154.712,01	\$ 34.878.499,69
2014	M14	\$ 107.873	2,02%	71	\$ 154.712,01	\$ 35.033.211,71
2015	01	\$ 111.822	2,02%	70	\$ 158.115,68	\$ 35.191.327,38
2015	02	\$ 111.822	2,02%	69	\$ 155.856,88	\$ 35.347.184,26
2015	03	\$ 111.822	2,02%	68	\$ 153.598,09	\$ 35.500.782,35
2015	04	\$ 111.822	2,02%	67	\$ 151.339,29	\$ 35.652.121,64
2015	05	\$ 111.822	2,02%	66	\$ 149.080,50	\$ 35.801.202,13
2015	06	\$ 111.822	2,02%	65	\$ 146.821,70	\$ 35.948.023,83
2015	M13	\$ 111.822	2,02%	65	\$ 146.821,70	\$ 36.094.845,53
2015	07	\$ 111.822	2,02%	64	\$ 144.562,90	\$ 36.239.408,44
2015	08	\$ 111.822	2,02%	63	\$ 142.304,11	\$ 36.381.712,55
2015	09	\$ 111.822	2,02%	62	\$ 140.045,31	\$ 36.521.757,86
2015	10	\$ 111.822	2,02%	61	\$ 137.786,52	\$ 36.659.544,38
2015	11	\$ 111.822	2,02%	60	\$ 135.527,72	\$ 36.795.072,10
2015	12	\$ 111.822	2,02%	59	\$ 133.268,93	\$ 36.928.341,03
2015	M14	\$ 111.822	2,02%	59	\$ 133.268,93	\$ 37.061.609,96
2016	01	\$ 119.392	2,02%	58	\$ 139.879,52	\$ 37.201.489,48
2016	02	\$ 119.392	2,02%	57	\$ 137.467,80	\$ 37.338.957,28
2016	03	\$ 119.392	2,02%	56	\$ 135.056,09	\$ 37.474.013,36
2016	04	\$ 119.392	2,02%	55	\$ 132.644,37	\$ 37.606.657,74
2016	05	\$ 119.392	2,02%	54	\$ 130.232,65	\$ 37.736.890,39
2016	06	\$ 119.392	2,02%	53	\$ 127.820,94	\$ 37.864.711,33
2016	M13	\$ 119.392	2,02%	53	\$ 127.820,94	\$ 37.992.532,27
2016	07	\$ 119.392	2,02%	52	\$ 125.409,22	\$ 38.117.941,49

2016	08	\$ 119.392	2,02%	51	\$ 122.997,51	\$ 38.240.939,00
2016	09	\$ 119.392	2,02%	50	\$ 120.585,79	\$ 38.361.524,79
2016	10	\$ 119.392	2,02%	49	\$ 118.174,08	\$ 38.479.698,87
2016	11	\$ 119.392	2,02%	48	\$ 115.762,36	\$ 38.595.461,23
2016	12	\$ 119.392	2,02%	47	\$ 113.350,64	\$ 38.708.811,87
2016	M14	\$ 119.392	2,02%	47	\$ 113.350,64	\$ 38.822.162,51
2017	01	\$ 126.257	2,02%	46	\$ 117.317,92	\$ 38.939.480,43
2017	02	\$ 126.257	2,02%	45	\$ 114.767,53	\$ 39.054.247,96
2017	03	\$ 126.257	2,02%	44	\$ 112.217,14	\$ 39.166.465,09
2017	04	\$ 126.257	2,02%	43	\$ 109.666,75	\$ 39.276.131,84
2017	05	\$ 126.257	2,02%	42	\$ 107.116,36	\$ 39.383.248,20
2017	06	\$ 126.257	2,02%	41	\$ 104.565,97	\$ 39.487.814,17
2017	M13	\$ 126.257	2,02%	41	\$ 104.565,97	\$ 39.592.380,14
2017	07	\$ 126.257	2,02%	40	\$ 102.015,58	\$ 39.694.395,72
2017	08	\$ 126.257	2,02%	39	\$ 99.465,19	\$ 39.793.860,91
2017	09	\$ 126.257	2,02%	38	\$ 96.914,80	\$ 39.890.775,71
2017	10	\$ 126.257	2,02%	37	\$ 94.364,41	\$ 39.985.140,12
2017	11	\$ 126.257	2,02%	36	\$ 91.814,02	\$ 40.076.954,14
2017	12	\$ 126.257	2,02%	35	\$ 89.263,63	\$ 40.166.217,77
2017	M14	\$ 126.257	2,02%	35	\$ 89.263,63	\$ 40.255.481,41
2018	01	\$ 131.421	2,02%	34	\$ 90.259,81	\$ 40.345.741,22
2018	02	\$ 131.421	2,02%	33	\$ 87.605,11	\$ 40.433.346,33
2018	03	\$ 131.421	2,02%	32	\$ 84.950,41	\$ 40.518.296,75
2018	04	\$ 131.421	2,02%	31	\$ 82.295,71	\$ 40.600.592,46
2018	05	\$ 131.421	2,02%	30	\$ 79.641,01	\$ 40.680.233,47
2018	06	\$ 131.421	2,02%	29	\$ 76.986,31	\$ 40.757.219,79
2018	M13	\$ 131.421	2,02%	29	\$ 76.986,31	\$ 40.834.206,10
2018	07	\$ 131.421	2,02%	28	\$ 74.331,61	\$ 40.908.537,71
2018	08	\$ 131.421	2,02%	27	\$ 71.676,91	\$ 40.980.214,62
2018	09	\$ 131.421	2,02%	26	\$ 69.022,21	\$ 41.049.236,83
2018	10	\$ 131.421	2,02%	25	\$ 66.367,51	\$ 41.115.604,34
2018	11	\$ 131.421	2,02%	24	\$ 63.712,81	\$ 41.179.317,15
2018	12	\$ 131.421	2,02%	23	\$ 61.058,11	\$ 41.240.375,26
2018	M14	\$ 131.421	2,02%	23	\$ 61.058,11	\$ 41.301.433,37
2019	01	\$ 135.600	2,02%	22	\$ 60.260,64	\$ 41.361.694,01
2019	02	\$ 135.600	2,02%	21	\$ 57.521,52	\$ 41.419.215,53
2019	03	\$ 135.600	2,02%	20	\$ 54.782,40	\$ 41.473.997,92
2019	04	\$ 135.600	2,02%	19	\$ 52.043,28	\$ 41.526.041,20
2019	05	\$ 135.600	2,02%	18	\$ 49.304,16	\$ 41.575.345,36
2019	06	\$ 135.600	2,02%	17	\$ 46.565,04	\$ 41.621.910,40
2019	M13	\$ 135.600	2,02%	17	\$ 46.565,04	\$ 41.668.475,44
2019	07	\$ 135.600	2,02%	16	\$ 43.825,92	\$ 41.712.301,36
2019	08	\$ 135.600	2,02%	15	\$ 41.086,80	\$ 41.753.388,15
2019	09	\$ 135.600	2,02%	14	\$ 38.347,68	\$ 41.791.735,83
2019	10	\$ 135.600	2,02%	13	\$ 35.608,56	\$ 41.827.344,39
2019	11	\$ 135.600	2,02%	12	\$ 32.869,44	\$ 41.860.213,83
2019	12	\$ 135.600	2,02%	11	\$ 30.130,32	\$ 41.890.344,15
2019	M14	\$ 135.600	2,02%	11	\$ 30.130,32	\$ 41.920.474,47
2020	01	\$ 140.753	2,02%	10	\$ 28.432,06	\$ 41.948.906,53
2020	02	\$ 140.753	2,02%	9	\$ 25.588,86	\$ 41.974.495,39
2020	03	\$ 140.753	2,02%	8	\$ 22.745,65	\$ 41.997.241,04
2020	04	\$ 140.753	2,02%	7	\$ 19.902,45	\$ 42.017.143,49
2020	05	\$ 140.753	2,02%	6	\$ 17.059,24	\$ 42.034.202,73
2020	06	\$ 140.753	2,02%	5	\$ 14.216,03	\$ 42.048.418,76
2020	M13	\$ 140.753	2,02%	5	\$ 14.216,03	\$ 42.062.634,79
2020	07	\$ 140.753	2,02%	4	\$ 11.372,83	\$ 42.074.007,62
2020	08	\$ 140.753	2,02%	3	\$ 8.529,62	\$ 42.082.537,23

2020	09	\$ 140.753	2,02%	2	\$ 5.686,41	\$ 42.088.223,65
2020	10	\$ 140.753	2,02%	1	\$ 2.843,21	\$ 42.091.066,85

22. CARMEN L. HERNANDEZ DE RAMÍREZ sustituta de NICANOR RAMÍREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1989	\$ 37.547,36	26,12%	11	\$ 413.020,96
1990	\$ 47.354,73	32,36%	14	\$ 662.966,23
1991	\$ 62.678,72	26,82%	14	\$ 877.502,10
1992	\$ 79.489,15	25,13%	14	\$ 1.112.848,16
1993	\$ 99.464,78	22,60%	14	\$ 1.392.506,90
1994	\$ 121.943,82	22,59%	14	\$ 1.707.213,46
1995	\$ 149.490,93	19,46%	14	\$ 2.092.872,98
1996	\$ 178.581,86	21,63%	14	\$ 2.500.146,06
1997	\$ 217.209,12	17,68%	14	\$ 3.040.927,66
1998	\$ 255.611,69	16,70%	14	\$ 3.578.563,67
1999	\$ 298.298,84	9,23%	14	\$ 4.176.183,80
2000	\$ 325.831,83	8,75%	14	\$ 4.561.645,57
2001	\$ 354.342,11	7,65%	14	\$ 4.960.789,55
2002	\$ 381.449,28	6,99%	14	\$ 5.340.289,95
2003	\$ 408.112,59	6,49%	14	\$ 5.713.576,22
2004	\$ 434.599,09	5,50%	14	\$ 6.084.387,32
2005	\$ 458.502,04	4,85%	14	\$ 6.419.028,62
2006	\$ 480.739,39	4,48%	14	\$ 6.730.351,51
2007	\$ 502.276,52	5,69%	14	\$ 7.031.871,26
2008	\$ 530.856,05	7,67%	14	\$ 7.431.984,73
2009	\$ 571.572,71	2,00%	14	\$ 8.002.017,96
2010	\$ 583.004,17	3,17%	14	\$ 8.162.058,32
2011	\$ 601.485,40	3,73%	14	\$ 8.420.795,57
2012	\$ 623.920,80	2,44%	14	\$ 8.734.891,24
2013	\$ 639.144,47	1,94%	14	\$ 8.948.022,59
2014	\$ 651.543,87	3,66%	14	\$ 9.121.614,23
2015	\$ 675.390,38	6,77%	14	\$ 9.455.465,31
2016	\$ 721.114,31	5,75%	14	\$ 10.095.600,31
2017	\$ 762.578,38	4,09%	14	\$ 10.676.097,33
2018	\$ 793.767,84	3,18%	14	\$ 11.112.749,71
2019	\$ 819.009,65	3,80%	14	\$ 11.466.135,15
2020	\$ 850.132,02	1,61%	11	\$ 9.351.452,22
				\$ 141.160.136,04

23. IVÁN LEAL VEGA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2000	\$ 185.082,31	8,75%	6,2	\$ 1.147.510,32
2001	\$ 201.277,01	7,65%	14	\$ 2.817.878,17
2002	\$ 216.674,70	6,99%	14	\$ 3.033.445,85
2003	\$ 231.820,27	6,49%	14	\$ 3.245.483,71
2004	\$ 246.865,40	5,50%	14	\$ 3.456.115,61
2005	\$ 260.443,00	4,85%	14	\$ 3.646.201,97
2006	\$ 273.074,48	4,48%	14	\$ 3.823.042,76
2007	\$ 285.308,22	5,69%	14	\$ 3.994.315,08
2008	\$ 301.542,26	7,67%	14	\$ 4.221.591,61
2009	\$ 324.670,55	2,00%	14	\$ 4.545.387,68
2010	\$ 331.163,96	3,17%	14	\$ 4.636.295,43
2011	\$ 341.661,86	3,73%	14	\$ 4.783.266,00
2012	\$ 354.405,84	2,44%	14	\$ 4.961.681,82
2013	\$ 363.053,35	1,94%	14	\$ 5.082.746,86
2014	\$ 370.096,58	3,66%	14	\$ 5.181.352,15

2015	\$ 383.642,12	6,77%	14	\$ 5.370.989,64
2016	\$ 409.614,69	5,75%	14	\$ 5.734.605,63
2017	\$ 433.167,53	4,09%	14	\$ 6.064.345,46
2018	\$ 450.884,08	3,18%	14	\$ 6.312.377,19
2019	\$ 465.222,20	3,80%	14	\$ 6.513.110,78
2020	\$ 482.900,64	1,61%	11	\$ 5.311.907,07
				\$ 80.183.217,12

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2000	07	\$ 185.082	2,02%	244	\$ 912.232,16	\$ 912.232,16
2000	08	\$ 185.082	2,02%	243	\$ 908.493,51	\$ 1.820.725,67
2000	09	\$ 185.082	2,02%	242	\$ 904.754,85	\$ 2.725.480,52
2000	10	\$ 185.082	2,02%	241	\$ 901.016,19	\$ 3.626.496,71
2000	11	\$ 185.082	2,02%	240	\$ 897.277,54	\$ 4.523.774,24
2000	12	\$ 139.164	2,02%	239	\$ 671.855,96	\$ 5.195.630,20
2000	M14	\$ 139.164	2,02%	239	\$ 671.855,96	\$ 5.867.486,16
2001	01	\$ 201.277	2,02%	238	\$ 967.659,36	\$ 6.835.145,53
2001	02	\$ 201.277	2,02%	237	\$ 963.593,57	\$ 7.798.739,09
2001	03	\$ 201.277	2,02%	236	\$ 959.527,77	\$ 8.758.266,87
2001	04	\$ 201.277	2,02%	235	\$ 955.461,98	\$ 9.713.728,84
2001	05	\$ 201.277	2,02%	234	\$ 951.396,18	\$ 10.665.125,02
2001	06	\$ 201.277	2,02%	233	\$ 947.330,39	\$ 11.612.455,41
2001	M13	\$ 201.277	2,02%	233	\$ 947.330,39	\$ 12.559.785,79
2001	07	\$ 201.277	2,02%	232	\$ 943.264,59	\$ 13.503.050,38
2001	08	\$ 201.277	2,02%	231	\$ 939.198,79	\$ 14.442.249,18
2001	09	\$ 201.277	2,02%	230	\$ 935.133,00	\$ 15.377.382,18
2001	10	\$ 201.277	2,02%	229	\$ 931.067,20	\$ 16.308.449,38
2001	11	\$ 201.277	2,02%	228	\$ 927.001,41	\$ 17.235.450,79
2001	12	\$ 201.277	2,02%	227	\$ 922.935,61	\$ 18.158.386,40
2001	M14	\$ 201.277	2,02%	227	\$ 922.935,61	\$ 19.081.322,01
2002	01	\$ 216.675	2,02%	226	\$ 989.163,36	\$ 20.070.485,37
2002	02	\$ 216.675	2,02%	225	\$ 984.786,53	\$ 21.055.271,89
2002	03	\$ 216.675	2,02%	224	\$ 980.409,70	\$ 22.035.681,59
2002	04	\$ 216.675	2,02%	223	\$ 976.032,87	\$ 23.011.714,46
2002	05	\$ 216.675	2,02%	222	\$ 971.656,04	\$ 23.983.370,50
2002	06	\$ 216.675	2,02%	221	\$ 967.279,21	\$ 24.950.649,71
2002	M13	\$ 216.675	2,02%	221	\$ 967.279,21	\$ 25.917.928,92
2002	07	\$ 216.675	2,02%	220	\$ 962.902,38	\$ 26.880.831,31
2002	08	\$ 216.675	2,02%	219	\$ 958.525,55	\$ 27.839.356,86
2002	09	\$ 216.675	2,02%	218	\$ 954.148,72	\$ 28.793.505,59
2002	10	\$ 216.675	2,02%	217	\$ 949.771,90	\$ 29.743.277,48
2002	11	\$ 216.675	2,02%	216	\$ 945.395,07	\$ 30.688.672,55
2002	12	\$ 216.675	2,02%	215	\$ 941.018,24	\$ 31.629.690,79
2002	M14	\$ 216.675	2,02%	215	\$ 941.018,24	\$ 32.570.709,02
2003	01	\$ 231.820	2,02%	214	\$ 1.002.112,64	\$ 33.572.821,67
2003	02	\$ 231.820	2,02%	213	\$ 997.429,87	\$ 34.570.251,54
2003	03	\$ 231.820	2,02%	212	\$ 992.747,10	\$ 35.562.998,64
2003	04	\$ 231.820	2,02%	211	\$ 988.064,33	\$ 36.551.062,98
2003	05	\$ 231.820	2,02%	210	\$ 983.381,57	\$ 37.534.444,54
2003	06	\$ 231.820	2,02%	209	\$ 978.698,80	\$ 38.513.143,34
2003	M13	\$ 231.820	2,02%	209	\$ 978.698,80	\$ 39.491.842,14
2003	07	\$ 231.820	2,02%	208	\$ 974.016,03	\$ 40.465.858,16
2003	08	\$ 231.820	2,02%	207	\$ 969.333,26	\$ 41.435.191,42
2003	09	\$ 231.820	2,02%	206	\$ 964.650,49	\$ 42.399.841,91
2003	10	\$ 231.820	2,02%	205	\$ 959.967,72	\$ 43.359.809,63
2003	11	\$ 231.820	2,02%	204	\$ 955.284,95	\$ 44.315.094,58
2003	12	\$ 231.820	2,02%	203	\$ 950.602,18	\$ 45.265.696,76

2003	M14	\$ 231.820	2,02%	203	\$ 950.602,18	\$ 46.216.298,94
2004	01	\$ 246.865	2,02%	202	\$ 1.007.309,58	\$ 47.223.608,52
2004	02	\$ 246.865	2,02%	201	\$ 1.002.322,90	\$ 48.225.931,42
2004	03	\$ 246.865	2,02%	200	\$ 997.336,22	\$ 49.223.267,63
2004	04	\$ 246.865	2,02%	199	\$ 992.349,54	\$ 50.215.617,17
2004	05	\$ 246.865	2,02%	198	\$ 987.362,86	\$ 51.202.980,03
2004	06	\$ 246.865	2,02%	197	\$ 982.376,17	\$ 52.185.356,20
2004	M13	\$ 246.865	2,02%	197	\$ 982.376,17	\$ 53.167.732,38
2004	07	\$ 246.865	2,02%	196	\$ 977.389,49	\$ 54.145.121,87
2004	08	\$ 246.865	2,02%	195	\$ 972.402,81	\$ 55.117.524,68
2004	09	\$ 246.865	2,02%	194	\$ 967.416,13	\$ 56.084.940,82
2004	10	\$ 246.865	2,02%	193	\$ 962.429,45	\$ 57.047.370,27
2004	11	\$ 246.865	2,02%	192	\$ 957.442,77	\$ 58.004.813,04
2004	12	\$ 246.865	2,02%	191	\$ 952.456,09	\$ 58.957.269,12
2004	M14	\$ 246.865	2,02%	191	\$ 952.456,09	\$ 59.909.725,21
2005	01	\$ 260.443	2,02%	190	\$ 999.580,22	\$ 60.909.305,44
2005	02	\$ 260.443	2,02%	189	\$ 994.319,28	\$ 61.903.624,71
2005	03	\$ 260.443	2,02%	188	\$ 989.058,33	\$ 62.892.683,04
2005	04	\$ 260.443	2,02%	187	\$ 983.797,38	\$ 63.876.480,42
2005	05	\$ 260.443	2,02%	186	\$ 978.536,43	\$ 64.855.016,85
2005	06	\$ 260.443	2,02%	185	\$ 973.275,48	\$ 65.828.292,33
2005	M13	\$ 260.443	2,02%	185	\$ 973.275,48	\$ 66.801.567,82
2005	07	\$ 260.443	2,02%	184	\$ 968.014,53	\$ 67.769.582,35
2005	08	\$ 260.443	2,02%	183	\$ 962.753,58	\$ 68.732.335,93
2005	09	\$ 260.443	2,02%	182	\$ 957.492,64	\$ 69.689.828,57
2005	10	\$ 260.443	2,02%	181	\$ 952.231,69	\$ 70.642.060,26
2005	11	\$ 260.443	2,02%	180	\$ 946.970,74	\$ 71.589.031,00
2005	12	\$ 260.443	2,02%	179	\$ 941.709,79	\$ 72.530.740,79
2005	M14	\$ 260.443	2,02%	179	\$ 941.709,79	\$ 73.472.450,58
2006	01	\$ 273.074	2,02%	178	\$ 981.866,61	\$ 74.454.317,19
2006	02	\$ 273.074	2,02%	177	\$ 976.350,51	\$ 75.430.667,70
2006	03	\$ 273.074	2,02%	176	\$ 970.834,40	\$ 76.401.502,10
2006	04	\$ 273.074	2,02%	175	\$ 965.318,30	\$ 77.366.820,39
2006	05	\$ 273.074	2,02%	174	\$ 959.802,19	\$ 78.326.622,59
2006	06	\$ 273.074	2,02%	173	\$ 954.286,09	\$ 79.280.908,68
2006	M13	\$ 273.074	2,02%	173	\$ 954.286,09	\$ 80.235.194,76
2006	07	\$ 273.074	2,02%	172	\$ 948.769,98	\$ 81.183.964,75
2006	08	\$ 273.074	2,02%	171	\$ 943.253,88	\$ 82.127.218,63
2006	09	\$ 273.074	2,02%	170	\$ 937.737,77	\$ 83.064.956,40
2006	10	\$ 273.074	2,02%	169	\$ 932.221,67	\$ 83.997.178,07
2006	11	\$ 273.074	2,02%	168	\$ 926.705,57	\$ 84.923.883,64
2006	12	\$ 273.074	2,02%	167	\$ 921.189,46	\$ 85.845.073,10
2006	M14	\$ 273.074	2,02%	167	\$ 921.189,46	\$ 86.766.262,56
2007	01	\$ 285.308	2,02%	166	\$ 956.695,52	\$ 87.722.958,08
2007	02	\$ 285.308	2,02%	165	\$ 950.932,30	\$ 88.673.890,38
2007	03	\$ 285.308	2,02%	164	\$ 945.169,07	\$ 89.619.059,45
2007	04	\$ 285.308	2,02%	163	\$ 939.405,84	\$ 90.558.465,29
2007	05	\$ 285.308	2,02%	162	\$ 933.642,62	\$ 91.492.107,91
2007	06	\$ 285.308	2,02%	161	\$ 927.879,39	\$ 92.419.987,30
2007	M13	\$ 285.308	2,02%	161	\$ 927.879,39	\$ 93.347.866,70
2007	07	\$ 285.308	2,02%	160	\$ 922.116,17	\$ 94.269.982,86
2007	08	\$ 285.308	2,02%	159	\$ 916.352,94	\$ 95.186.335,80
2007	09	\$ 285.308	2,02%	158	\$ 910.589,71	\$ 96.096.925,52
2007	10	\$ 285.308	2,02%	157	\$ 904.826,49	\$ 97.001.752,00
2007	11	\$ 285.308	2,02%	156	\$ 899.063,26	\$ 97.900.815,27
2007	12	\$ 285.308	2,02%	155	\$ 893.300,04	\$ 98.794.115,30
2007	M14	\$ 285.308	2,02%	155	\$ 893.300,04	\$ 99.687.415,34

2008	01	\$ 301.542	2,02%	154	\$ 938.037,65	\$ 100.625.452,99
2008	02	\$ 301.542	2,02%	153	\$ 931.946,50	\$ 101.557.399,49
2008	03	\$ 301.542	2,02%	152	\$ 925.855,35	\$ 102.483.254,84
2008	04	\$ 301.542	2,02%	151	\$ 919.764,19	\$ 103.403.019,04
2008	05	\$ 301.542	2,02%	150	\$ 913.673,04	\$ 104.316.692,08
2008	06	\$ 301.542	2,02%	149	\$ 907.581,89	\$ 105.224.273,96
2008	M13	\$ 301.542	2,02%	149	\$ 907.581,89	\$ 106.131.855,85
2008	07	\$ 301.542	2,02%	148	\$ 901.490,73	\$ 107.033.346,58
2008	08	\$ 301.542	2,02%	147	\$ 895.399,58	\$ 107.928.746,16
2008	09	\$ 301.542	2,02%	146	\$ 889.308,43	\$ 108.818.054,59
2008	10	\$ 301.542	2,02%	145	\$ 883.217,27	\$ 109.701.271,86
2008	11	\$ 301.542	2,02%	144	\$ 877.126,12	\$ 110.578.397,98
2008	12	\$ 301.542	2,02%	143	\$ 871.034,97	\$ 111.449.432,94
2008	M14	\$ 301.542	2,02%	143	\$ 871.034,97	\$ 112.320.467,91
2009	01	\$ 324.671	2,02%	142	\$ 931.285,00	\$ 113.251.752,91
2009	02	\$ 324.671	2,02%	141	\$ 924.726,66	\$ 114.176.479,57
2009	03	\$ 324.671	2,02%	140	\$ 918.168,31	\$ 115.094.647,88
2009	04	\$ 324.671	2,02%	139	\$ 911.609,97	\$ 116.006.257,85
2009	05	\$ 324.671	2,02%	138	\$ 905.051,62	\$ 116.911.309,47
2009	06	\$ 324.671	2,02%	137	\$ 898.493,28	\$ 117.809.802,74
2009	M13	\$ 324.671	2,02%	137	\$ 898.493,28	\$ 118.708.296,02
2009	07	\$ 324.671	2,02%	136	\$ 891.934,93	\$ 119.600.230,95
2009	08	\$ 324.671	2,02%	135	\$ 885.376,59	\$ 120.485.607,54
2009	09	\$ 324.671	2,02%	134	\$ 878.818,24	\$ 121.364.425,78
2009	10	\$ 324.671	2,02%	133	\$ 872.259,90	\$ 122.236.685,67
2009	11	\$ 324.671	2,02%	132	\$ 865.701,55	\$ 123.102.387,23
2009	12	\$ 324.671	2,02%	131	\$ 859.143,21	\$ 123.961.530,43
2009	M14	\$ 324.671	2,02%	131	\$ 859.143,21	\$ 124.820.673,64
2010	01	\$ 331.164	2,02%	130	\$ 869.636,56	\$ 125.690.310,19
2010	02	\$ 331.164	2,02%	129	\$ 862.947,05	\$ 126.553.257,24
2010	03	\$ 331.164	2,02%	128	\$ 856.257,53	\$ 127.409.514,77
2010	04	\$ 331.164	2,02%	127	\$ 849.568,02	\$ 128.259.082,80
2010	05	\$ 331.164	2,02%	126	\$ 842.878,51	\$ 129.101.961,31
2010	06	\$ 331.164	2,02%	125	\$ 836.189,00	\$ 129.938.150,31
2010	M13	\$ 331.164	2,02%	125	\$ 836.189,00	\$ 130.774.339,30
2010	07	\$ 331.164	2,02%	124	\$ 829.499,49	\$ 131.603.838,79
2010	08	\$ 331.164	2,02%	123	\$ 822.809,97	\$ 132.426.648,76
2010	09	\$ 331.164	2,02%	122	\$ 816.120,46	\$ 133.242.769,23
2010	10	\$ 331.164	2,02%	121	\$ 809.430,95	\$ 134.052.200,18
2010	11	\$ 331.164	2,02%	120	\$ 802.741,44	\$ 134.854.941,61
2010	12	\$ 331.164	2,02%	119	\$ 796.051,93	\$ 135.650.993,54
2010	M14	\$ 331.164	2,02%	119	\$ 796.051,93	\$ 136.447.045,47
2011	01	\$ 341.662	2,02%	118	\$ 814.385,20	\$ 137.261.430,67
2011	02	\$ 341.662	2,02%	117	\$ 807.483,63	\$ 138.068.914,30
2011	03	\$ 341.662	2,02%	116	\$ 800.582,06	\$ 138.869.496,37
2011	04	\$ 341.662	2,02%	115	\$ 793.680,49	\$ 139.663.176,86
2011	05	\$ 341.662	2,02%	114	\$ 786.778,92	\$ 140.449.955,78
2011	06	\$ 341.662	2,02%	113	\$ 779.877,36	\$ 141.229.833,14
2011	M13	\$ 341.662	2,02%	113	\$ 779.877,36	\$ 142.009.710,49
2011	07	\$ 341.662	2,02%	112	\$ 772.975,79	\$ 142.782.686,28
2011	08	\$ 341.662	2,02%	111	\$ 766.074,22	\$ 143.548.760,50
2011	09	\$ 341.662	2,02%	110	\$ 759.172,65	\$ 144.307.933,14
2011	10	\$ 341.662	2,02%	109	\$ 752.271,08	\$ 145.060.204,22
2011	11	\$ 341.662	2,02%	108	\$ 745.369,51	\$ 145.805.573,73
2011	12	\$ 341.662	2,02%	107	\$ 738.467,94	\$ 146.544.041,67
2011	M14	\$ 341.662	2,02%	107	\$ 738.467,94	\$ 147.282.509,60
2012	01	\$ 354.406	2,02%	106	\$ 758.853,79	\$ 148.041.363,40
2012	02	\$ 354.406	2,02%	105	\$ 751.694,80	\$ 148.793.058,19
2012	03	\$ 354.406	2,02%	104	\$ 744.535,80	\$ 0,00

2012	04	\$ 354.406	2,02%	103	\$ 737.376,80	\$ 150.274.970,79
2012	05	\$ 354.406	2,02%	102	\$ 730.217,80	\$ 151.005.188,59
2012	06	\$ 354.406	2,02%	101	\$ 723.058,80	\$ 151.728.247,40
2012	M13	\$ 354.406	2,02%	101	\$ 723.058,80	\$ 152.451.306,20
2012	07	\$ 354.406	2,02%	100	\$ 715.899,81	\$ 153.167.206,01
2012	08	\$ 354.406	2,02%	99	\$ 708.740,81	\$ 153.875.946,81
2012	09	\$ 354.406	2,02%	98	\$ 701.581,81	\$ 154.577.528,62
2012	10	\$ 354.406	2,02%	97	\$ 694.422,81	\$ 155.271.951,44
2012	11	\$ 354.406	2,02%	96	\$ 687.263,81	\$ 155.959.215,25
2012	12	\$ 354.406	2,02%	95	\$ 680.104,82	\$ 156.639.320,06
2012	M14	\$ 354.406	2,02%	95	\$ 680.104,82	\$ 157.319.424,88
2013	01	\$ 363.053	2,02%	94	\$ 689.365,70	\$ 158.008.790,58
2013	02	\$ 363.053	2,02%	93	\$ 682.032,02	\$ 158.690.822,59
2013	03	\$ 363.053	2,02%	92	\$ 674.698,34	\$ 159.365.520,93
2013	04	\$ 363.053	2,02%	91	\$ 667.364,66	\$ 160.032.885,60
2013	05	\$ 363.053	2,02%	90	\$ 660.030,98	\$ 160.692.916,58
2013	06	\$ 363.053	2,02%	89	\$ 652.697,31	\$ 161.345.613,89
2013	M13	\$ 363.053	2,02%	89	\$ 652.697,31	\$ 161.998.311,20
2013	07	\$ 363.053	2,02%	88	\$ 645.363,63	\$ 162.643.674,83
2013	08	\$ 363.053	2,02%	87	\$ 638.029,95	\$ 163.281.704,78
2013	09	\$ 363.053	2,02%	86	\$ 630.696,27	\$ 163.912.401,05
2013	10	\$ 363.053	2,02%	85	\$ 623.362,60	\$ 164.535.763,65
2013	11	\$ 363.053	2,02%	84	\$ 616.028,92	\$ 165.151.792,57
2013	12	\$ 363.053	2,02%	83	\$ 608.695,24	\$ 165.760.487,81
2013	M14	\$ 363.053	2,02%	83	\$ 608.695,24	\$ 166.369.183,05
2014	01	\$ 370.097	2,02%	82	\$ 613.027,98	\$ 166.982.211,03
2014	02	\$ 370.097	2,02%	81	\$ 605.552,03	\$ 167.587.763,06
2014	03	\$ 370.097	2,02%	80	\$ 598.076,08	\$ 168.185.839,13
2014	04	\$ 370.097	2,02%	79	\$ 590.600,13	\$ 168.776.439,26
2014	05	\$ 370.097	2,02%	78	\$ 583.124,17	\$ 169.359.563,43
2014	06	\$ 370.097	2,02%	77	\$ 575.648,22	\$ 169.935.211,66
2014	M13	\$ 370.097	2,02%	77	\$ 575.648,22	\$ 170.510.859,88
2014	07	\$ 370.097	2,02%	76	\$ 568.172,27	\$ 171.079.032,15
2014	08	\$ 370.097	2,02%	75	\$ 560.696,32	\$ 171.639.728,47
2014	09	\$ 370.097	2,02%	74	\$ 553.220,37	\$ 172.192.948,85
2014	10	\$ 370.097	2,02%	73	\$ 545.744,42	\$ 172.738.693,27
2014	11	\$ 370.097	2,02%	72	\$ 538.268,47	\$ 173.276.961,73
2014	12	\$ 370.097	2,02%	71	\$ 530.792,52	\$ 173.807.754,25
2014	M14	\$ 370.097	2,02%	71	\$ 530.792,52	\$ 174.338.546,77
2015	01	\$ 383.642	2,02%	70	\$ 542.469,95	\$ 174.881.016,72
2015	02	\$ 383.642	2,02%	69	\$ 534.720,38	\$ 175.415.737,11
2015	03	\$ 383.642	2,02%	68	\$ 526.970,81	\$ 175.942.707,92
2015	04	\$ 383.642	2,02%	67	\$ 519.221,24	\$ 176.461.929,16
2015	05	\$ 383.642	2,02%	66	\$ 511.471,67	\$ 176.973.400,83
2015	06	\$ 383.642	2,02%	65	\$ 503.722,10	\$ 177.477.122,93
2015	M13	\$ 383.642	2,02%	65	\$ 503.722,10	\$ 177.980.845,03
2015	07	\$ 383.642	2,02%	64	\$ 495.972,53	\$ 178.476.817,56
2015	08	\$ 383.642	2,02%	63	\$ 488.222,96	\$ 178.965.040,51
2015	09	\$ 383.642	2,02%	62	\$ 480.473,39	\$ 179.445.513,90
2015	10	\$ 383.642	2,02%	61	\$ 472.723,82	\$ 179.918.237,72
2015	11	\$ 383.642	2,02%	60	\$ 464.974,25	\$ 180.383.211,96
2015	12	\$ 383.642	2,02%	59	\$ 457.224,67	\$ 180.840.436,64
2015	M14	\$ 383.642	2,02%	59	\$ 457.224,67	\$ 181.297.661,31
2016	01	\$ 409.615	2,02%	58	\$ 479.904,57	\$ 181.777.565,88
2016	02	\$ 409.615	2,02%	57	\$ 471.630,35	\$ 182.249.196,23
2016	03	\$ 409.615	2,02%	56	\$ 463.356,14	\$ 182.712.552,37
2016	04	\$ 409.615	2,02%	55	\$ 455.081,92	\$ 183.167.634,29
2016	05	\$ 409.615	2,02%	54	\$ 446.807,70	\$ 183.614.441,99
2016	06	\$ 409.615	2,02%	53	\$ 438.533,49	\$ 184.052.975,47

2016	M13	\$ 409.615	2,02%	53	\$ 438.533,49	\$ 184.491.508,96
2016	07	\$ 409.615	2,02%	52	\$ 430.259,27	\$ 184.921.768,23
2016	08	\$ 409.615	2,02%	51	\$ 421.985,05	\$ 185.343.753,28
2016	09	\$ 409.615	2,02%	50	\$ 413.710,84	\$ 185.757.464,11
2016	10	\$ 409.615	2,02%	49	\$ 405.436,62	\$ 186.162.900,73
2016	11	\$ 409.615	2,02%	48	\$ 397.162,40	\$ 186.560.063,13
2016	12	\$ 409.615	2,02%	47	\$ 388.888,18	\$ 186.948.951,32
2016	M14	\$ 409.615	2,02%	47	\$ 388.888,18	\$ 187.337.839,50
2017	01	\$ 433.168	2,02%	46	\$ 402.499,27	\$ 187.740.338,78
2017	02	\$ 433.168	2,02%	45	\$ 393.749,29	\$ 188.134.088,06
2017	03	\$ 433.168	2,02%	44	\$ 384.999,30	\$ 188.519.087,37
2017	04	\$ 433.168	2,02%	43	\$ 376.249,32	\$ 188.895.336,68
2017	05	\$ 433.168	2,02%	42	\$ 367.499,33	\$ 189.262.836,02
2017	06	\$ 433.168	2,02%	41	\$ 358.749,35	\$ 189.621.585,37
2017	M13	\$ 433.168	2,02%	41	\$ 358.749,35	\$ 189.980.334,72
2017	07	\$ 433.168	2,02%	40	\$ 349.999,37	\$ 190.330.334,09
2017	08	\$ 433.168	2,02%	39	\$ 341.249,38	\$ 190.671.583,47
2017	09	\$ 433.168	2,02%	38	\$ 332.499,40	\$ 191.004.082,87
2017	10	\$ 433.168	2,02%	37	\$ 323.749,41	\$ 191.327.832,28
2017	11	\$ 433.168	2,02%	36	\$ 314.999,43	\$ 191.642.831,71
2017	12	\$ 433.168	2,02%	35	\$ 306.249,45	\$ 191.949.081,16
2017	M14	\$ 433.168	2,02%	35	\$ 306.249,45	\$ 192.255.330,60
2018	01	\$ 450.884	2,02%	34	\$ 309.667,19	\$ 192.564.997,79
2018	02	\$ 450.884	2,02%	33	\$ 300.559,33	\$ 192.865.557,12
2018	03	\$ 450.884	2,02%	32	\$ 291.451,47	\$ 193.157.008,60
2018	04	\$ 450.884	2,02%	31	\$ 282.343,61	\$ 193.439.352,21
2018	05	\$ 450.884	2,02%	30	\$ 273.235,76	\$ 193.712.587,97
2018	06	\$ 450.884	2,02%	29	\$ 264.127,90	\$ 193.976.715,86
2018	M13	\$ 450.884	2,02%	29	\$ 264.127,90	\$ 194.240.843,76
2018	07	\$ 450.884	2,02%	28	\$ 255.020,04	\$ 194.495.863,80
2018	08	\$ 450.884	2,02%	27	\$ 245.912,18	\$ 194.741.775,98
2018	09	\$ 450.884	2,02%	26	\$ 236.804,32	\$ 194.978.580,30
2018	10	\$ 450.884	2,02%	25	\$ 227.696,46	\$ 195.206.276,76
2018	11	\$ 450.884	2,02%	24	\$ 218.588,60	\$ 195.424.865,37
2018	12	\$ 450.884	2,02%	23	\$ 209.480,75	\$ 195.634.346,11
2018	M14	\$ 450.884	2,02%	23	\$ 209.480,75	\$ 195.843.826,86
2019	01	\$ 465.222	2,02%	22	\$ 206.744,75	\$ 196.050.571,60
2019	02	\$ 465.222	2,02%	21	\$ 197.347,26	\$ 196.247.918,86
2019	03	\$ 465.222	2,02%	20	\$ 187.949,77	\$ 196.435.868,63
2019	04	\$ 465.222	2,02%	19	\$ 178.552,28	\$ 196.614.420,91
2019	05	\$ 465.222	2,02%	18	\$ 169.154,79	\$ 196.783.575,70
2019	06	\$ 465.222	2,02%	17	\$ 159.757,30	\$ 196.943.333,00
2019	M13	\$ 465.222	2,02%	17	\$ 159.757,30	\$ 197.103.090,30
2019	07	\$ 465.222	2,02%	16	\$ 150.359,81	\$ 197.253.450,12
2019	08	\$ 465.222	2,02%	15	\$ 140.962,33	\$ 197.394.412,45
2019	09	\$ 465.222	2,02%	14	\$ 131.564,84	\$ 197.525.977,28
2019	10	\$ 465.222	2,02%	13	\$ 122.167,35	\$ 197.648.144,63
2019	11	\$ 465.222	2,02%	12	\$ 112.769,86	\$ 197.760.914,49
2019	12	\$ 465.222	2,02%	11	\$ 103.372,37	\$ 197.864.286,87
2019	M14	\$ 465.222	2,02%	11	\$ 103.372,37	\$ 197.967.659,24
2020	01	\$ 482.901	2,02%	10	\$ 97.545,93	\$ 198.065.205,17
2020	02	\$ 482.901	2,02%	9	\$ 87.791,34	\$ 198.152.996,51
2020	03	\$ 482.901	2,02%	8	\$ 78.036,74	\$ 198.231.033,25
2020	04	\$ 482.901	2,02%	7	\$ 68.282,15	\$ 198.299.315,40
2020	05	\$ 482.901	2,02%	6	\$ 58.527,56	\$ 198.357.842,96
2020	06	\$ 482.901	2,02%	5	\$ 48.772,96	\$ 198.406.615,92
2020	M13	\$ 482.901	2,02%	5	\$ 48.772,96	\$ 198.455.388,89
2020	07	\$ 482.901	2,02%	4	\$ 39.018,37	\$ 198.494.407,26
2020	08	\$ 482.901	2,02%	3	\$ 29.263,78	\$ 198.523.671,04

2020	09	\$ 482.901	2,02%	2	\$ 19.509,19	\$ 198.543.180,22
2020	10	\$ 482.901	2,02%	1	\$ 9.754,59	\$ 198.552.934,82

24. PEDRO ALONSO PEDRAZA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2004	\$ 169.507,52	5,50%	2,3	\$ 389.867,30
2005	\$ 178.830,43	4,85%	14	\$ 2.503.626,07
2006	\$ 187.503,71	4,48%	14	\$ 2.625.051,93
2007	\$ 195.903,88	5,69%	14	\$ 2.742.654,26
2008	\$ 207.050,81	7,67%	14	\$ 2.898.711,29
2009	\$ 222.931,60	2,00%	14	\$ 3.121.042,44
2010	\$ 227.390,24	3,17%	14	\$ 3.183.463,29
2011	\$ 234.598,51	3,73%	14	\$ 3.284.379,08
2012	\$ 243.349,03	2,44%	14	\$ 3.406.886,42
2013	\$ 249.286,75	1,94%	14	\$ 3.490.014,45
2014	\$ 254.122,91	3,66%	14	\$ 3.557.720,73
2015	\$ 263.423,81	6,77%	14	\$ 3.687.933,31
2016	\$ 281.257,60	5,75%	14	\$ 3.937.606,39
2017	\$ 297.429,91	4,09%	14	\$ 4.164.018,76
2018	\$ 309.594,79	3,18%	14	\$ 4.334.327,13
2019	\$ 319.439,91	3,80%	14	\$ 4.472.158,73
2020	\$ 331.578,63	1,61%	11	\$ 3.647.364,88
				\$ 55.056.959,17

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2004	11	\$ 71.955	2,02%	192	\$ 279.070,27	\$ 279.070,27
2004	12	\$ 71.955	2,02%	191	\$ 277.616,78	\$ 556.687,05
2004	M14	\$ 71.955	2,02%	191	\$ 277.616,78	\$ 834.303,83
2005	01	\$ 178.830	2,02%	190	\$ 686.351,20	\$ 1.520.655,04
2005	02	\$ 178.830	2,02%	189	\$ 682.738,83	\$ 2.203.393,87
2005	03	\$ 178.830	2,02%	188	\$ 679.126,45	\$ 2.882.520,32
2005	04	\$ 178.830	2,02%	187	\$ 675.514,08	\$ 3.558.034,40
2005	05	\$ 178.830	2,02%	186	\$ 671.901,71	\$ 4.229.936,11
2005	06	\$ 178.830	2,02%	185	\$ 668.289,33	\$ 4.898.225,44
2005	M13	\$ 178.830	2,02%	185	\$ 668.289,33	\$ 5.566.514,77
2005	07	\$ 178.830	2,02%	184	\$ 664.676,96	\$ 6.231.191,72
2005	08	\$ 178.830	2,02%	183	\$ 661.064,58	\$ 6.892.256,30
2005	09	\$ 178.830	2,02%	182	\$ 657.452,21	\$ 7.549.708,51
2005	10	\$ 178.830	2,02%	181	\$ 653.839,83	\$ 8.203.548,34
2005	11	\$ 178.830	2,02%	180	\$ 650.227,46	\$ 8.853.775,80
2005	12	\$ 178.830	2,02%	179	\$ 646.615,08	\$ 9.500.390,88
2005	M14	\$ 178.830	2,02%	179	\$ 646.615,08	\$ 10.147.005,96
2006	01	\$ 187.504	2,02%	178	\$ 674.188,34	\$ 10.821.194,30
2006	02	\$ 187.504	2,02%	177	\$ 670.400,76	\$ 11.491.595,06
2006	03	\$ 187.504	2,02%	176	\$ 666.613,19	\$ 12.158.208,25
2006	04	\$ 187.504	2,02%	175	\$ 662.825,61	\$ 12.821.033,87
2006	05	\$ 187.504	2,02%	174	\$ 659.038,04	\$ 13.480.071,90
2006	06	\$ 187.504	2,02%	173	\$ 655.250,46	\$ 14.135.322,37
2006	M13	\$ 187.504	2,02%	173	\$ 655.250,46	\$ 14.790.572,83
2006	07	\$ 187.504	2,02%	172	\$ 651.462,89	\$ 15.442.035,72
2006	08	\$ 187.504	2,02%	171	\$ 647.675,31	\$ 16.089.711,03
2006	09	\$ 187.504	2,02%	170	\$ 643.887,74	\$ 16.733.598,77
2006	10	\$ 187.504	2,02%	169	\$ 640.100,16	\$ 17.373.698,94
2006	11	\$ 187.504	2,02%	168	\$ 636.312,59	\$ 18.010.011,53

2006	12	\$ 187.504	2,02%	167	\$ 632.525,01	\$ 18.642.536,54
2006	M14	\$ 187.504	2,02%	167	\$ 632.525,01	\$ 19.275.061,55
2007	01	\$ 195.904	2,02%	166	\$ 656.904,88	\$ 19.931.966,43
2007	02	\$ 195.904	2,02%	165	\$ 652.947,62	\$ 20.584.914,05
2007	03	\$ 195.904	2,02%	164	\$ 648.990,36	\$ 21.233.904,41
2007	04	\$ 195.904	2,02%	163	\$ 645.033,10	\$ 21.878.937,51
2007	05	\$ 195.904	2,02%	162	\$ 641.075,84	\$ 22.520.013,35
2007	06	\$ 195.904	2,02%	161	\$ 637.118,58	\$ 23.157.131,94
2007	M13	\$ 195.904	2,02%	161	\$ 637.118,58	\$ 23.794.250,52
2007	07	\$ 195.904	2,02%	160	\$ 633.161,33	\$ 24.427.411,85
2007	08	\$ 195.904	2,02%	159	\$ 629.204,07	\$ 25.056.615,92
2007	09	\$ 195.904	2,02%	158	\$ 625.246,81	\$ 25.681.862,73
2007	10	\$ 195.904	2,02%	157	\$ 621.289,55	\$ 26.303.152,28
2007	11	\$ 195.904	2,02%	156	\$ 617.332,29	\$ 26.920.484,57
2007	12	\$ 195.904	2,02%	155	\$ 613.375,04	\$ 27.533.859,61
2007	M14	\$ 195.904	2,02%	155	\$ 613.375,04	\$ 28.147.234,64
2008	01	\$ 207.051	2,02%	154	\$ 644.093,65	\$ 28.791.328,29
2008	02	\$ 207.051	2,02%	153	\$ 639.911,22	\$ 29.431.239,51
2008	03	\$ 207.051	2,02%	152	\$ 635.728,80	\$ 30.066.968,31
2008	04	\$ 207.051	2,02%	151	\$ 631.546,37	\$ 30.698.514,68
2008	05	\$ 207.051	2,02%	150	\$ 627.363,94	\$ 31.325.878,62
2008	06	\$ 207.051	2,02%	149	\$ 623.181,52	\$ 31.949.060,14
2008	M13	\$ 207.051	2,02%	149	\$ 623.181,52	\$ 32.572.241,66
2008	07	\$ 207.051	2,02%	148	\$ 618.999,09	\$ 33.191.240,75
2008	08	\$ 207.051	2,02%	147	\$ 614.816,66	\$ 33.806.057,41
2008	09	\$ 207.051	2,02%	146	\$ 610.634,24	\$ 34.416.691,65
2008	10	\$ 207.051	2,02%	145	\$ 606.451,81	\$ 35.023.143,46
2008	11	\$ 207.051	2,02%	144	\$ 602.269,39	\$ 35.625.412,85
2008	12	\$ 207.051	2,02%	143	\$ 598.086,96	\$ 36.223.499,81
2008	M14	\$ 207.051	2,02%	143	\$ 598.086,96	\$ 36.821.586,77
2009	01	\$ 222.932	2,02%	142	\$ 639.457,01	\$ 37.461.043,78
2009	02	\$ 222.932	2,02%	141	\$ 634.953,79	\$ 38.095.997,57
2009	03	\$ 222.932	2,02%	140	\$ 630.450,57	\$ 38.726.448,14
2009	04	\$ 222.932	2,02%	139	\$ 625.947,36	\$ 39.352.395,50
2009	05	\$ 222.932	2,02%	138	\$ 621.444,14	\$ 39.973.839,64
2009	06	\$ 222.932	2,02%	137	\$ 616.940,92	\$ 40.590.780,55
2009	M13	\$ 222.932	2,02%	137	\$ 616.940,92	\$ 41.207.721,47
2009	07	\$ 222.932	2,02%	136	\$ 612.437,70	\$ 41.820.159,17
2009	08	\$ 222.932	2,02%	135	\$ 607.934,48	\$ 42.428.093,65
2009	09	\$ 222.932	2,02%	134	\$ 603.431,26	\$ 43.031.524,92
2009	10	\$ 222.932	2,02%	133	\$ 598.928,05	\$ 43.630.452,96
2009	11	\$ 222.932	2,02%	132	\$ 594.424,83	\$ 44.224.877,79
2009	12	\$ 222.932	2,02%	131	\$ 589.921,61	\$ 44.814.799,40
2009	M14	\$ 222.932	2,02%	131	\$ 589.921,61	\$ 45.404.721,01
2010	01	\$ 227.390	2,02%	130	\$ 597.126,76	\$ 46.001.847,77
2010	02	\$ 227.390	2,02%	129	\$ 592.533,48	\$ 46.594.381,24
2010	03	\$ 227.390	2,02%	128	\$ 587.940,19	\$ 47.182.321,43
2010	04	\$ 227.390	2,02%	127	\$ 583.346,91	\$ 47.765.668,34
2010	05	\$ 227.390	2,02%	126	\$ 578.753,63	\$ 48.344.421,97
2010	06	\$ 227.390	2,02%	125	\$ 574.160,34	\$ 48.918.582,31
2010	M13	\$ 227.390	2,02%	125	\$ 574.160,34	\$ 49.492.742,66
2010	07	\$ 227.390	2,02%	124	\$ 569.567,06	\$ 50.062.309,72
2010	08	\$ 227.390	2,02%	123	\$ 564.973,78	\$ 50.627.283,50
2010	09	\$ 227.390	2,02%	122	\$ 560.380,50	\$ 51.187.663,99
2010	10	\$ 227.390	2,02%	121	\$ 555.787,21	\$ 51.743.451,21
2010	11	\$ 227.390	2,02%	120	\$ 551.193,93	\$ 52.294.645,14
2010	12	\$ 227.390	2,02%	119	\$ 546.600,65	\$ 52.841.245,78

2010	M14	\$ 227.390	2,02%	119	\$ 546.600,65	\$ 53.387.846,43
2011	01	\$ 234.599	2,02%	118	\$ 559.189,00	\$ 53.947.035,43
2011	02	\$ 234.599	2,02%	117	\$ 554.450,11	\$ 54.501.485,54
2011	03	\$ 234.599	2,02%	116	\$ 549.711,22	\$ 55.051.196,76
2011	04	\$ 234.599	2,02%	115	\$ 544.972,33	\$ 55.596.169,08
2011	05	\$ 234.599	2,02%	114	\$ 540.233,44	\$ 56.136.402,52
2011	06	\$ 234.599	2,02%	113	\$ 535.494,55	\$ 56.671.897,07
2011	M13	\$ 234.599	2,02%	113	\$ 535.494,55	\$ 57.207.391,62
2011	07	\$ 234.599	2,02%	112	\$ 530.755,66	\$ 57.738.147,28
2011	08	\$ 234.599	2,02%	111	\$ 526.016,77	\$ 58.264.164,05
2011	09	\$ 234.599	2,02%	110	\$ 521.277,88	\$ 58.785.441,93
2011	10	\$ 234.599	2,02%	109	\$ 516.538,99	\$ 59.301.980,92
2011	11	\$ 234.599	2,02%	108	\$ 511.800,10	\$ 59.813.781,02
2011	12	\$ 234.599	2,02%	107	\$ 507.061,21	\$ 60.320.842,23
2011	M14	\$ 234.599	2,02%	107	\$ 507.061,21	\$ 60.827.903,44
2012	01	\$ 243.349	2,02%	106	\$ 521.058,94	\$ 61.348.962,38
2012	02	\$ 243.349	2,02%	105	\$ 516.143,29	\$ 61.865.105,68
2012	03	\$ 243.349	2,02%	104	\$ 511.227,64	\$ 0,00
2012	04	\$ 243.349	2,02%	103	\$ 506.311,99	\$ 62.882.645,31
2012	05	\$ 243.349	2,02%	102	\$ 501.396,34	\$ 63.384.041,65
2012	06	\$ 243.349	2,02%	101	\$ 496.480,69	\$ 63.880.522,34
2012	M13	\$ 243.349	2,02%	101	\$ 496.480,69	\$ 64.377.003,03
2012	07	\$ 243.349	2,02%	100	\$ 491.565,04	\$ 64.868.568,07
2012	08	\$ 243.349	2,02%	99	\$ 486.649,39	\$ 65.355.217,47
2012	09	\$ 243.349	2,02%	98	\$ 481.733,74	\$ 65.836.951,20
2012	10	\$ 243.349	2,02%	97	\$ 476.818,09	\$ 66.313.769,29
2012	11	\$ 243.349	2,02%	96	\$ 471.902,44	\$ 66.785.671,73
2012	12	\$ 243.349	2,02%	95	\$ 466.986,79	\$ 67.252.658,52
2012	M14	\$ 243.349	2,02%	95	\$ 466.986,79	\$ 67.719.645,31
2013	01	\$ 249.287	2,02%	94	\$ 473.345,67	\$ 68.192.990,98
2013	02	\$ 249.287	2,02%	93	\$ 468.310,08	\$ 68.661.301,07
2013	03	\$ 249.287	2,02%	92	\$ 463.274,49	\$ 69.124.575,56
2013	04	\$ 249.287	2,02%	91	\$ 458.238,90	\$ 69.582.814,45
2013	05	\$ 249.287	2,02%	90	\$ 453.203,30	\$ 70.036.017,76
2013	06	\$ 249.287	2,02%	89	\$ 448.167,71	\$ 70.484.185,47
2013	M13	\$ 249.287	2,02%	89	\$ 448.167,71	\$ 70.932.353,18
2013	07	\$ 249.287	2,02%	88	\$ 443.132,12	\$ 71.375.485,30
2013	08	\$ 249.287	2,02%	87	\$ 438.096,53	\$ 71.813.581,83
2013	09	\$ 249.287	2,02%	86	\$ 433.060,94	\$ 72.246.642,77
2013	10	\$ 249.287	2,02%	85	\$ 428.025,34	\$ 72.674.668,11
2013	11	\$ 249.287	2,02%	84	\$ 422.989,75	\$ 73.097.657,86
2013	12	\$ 249.287	2,02%	83	\$ 417.954,16	\$ 73.515.612,02
2013	M14	\$ 249.287	2,02%	83	\$ 417.954,16	\$ 73.933.566,18
2014	01	\$ 254.123	2,02%	82	\$ 420.929,19	\$ 74.354.495,37
2014	02	\$ 254.123	2,02%	81	\$ 415.795,90	\$ 74.770.291,27
2014	03	\$ 254.123	2,02%	80	\$ 410.662,62	\$ 75.180.953,89
2014	04	\$ 254.123	2,02%	79	\$ 405.529,34	\$ 75.586.483,23
2014	05	\$ 254.123	2,02%	78	\$ 400.396,06	\$ 75.986.879,28
2014	06	\$ 254.123	2,02%	77	\$ 395.262,77	\$ 76.382.142,06
2014	M13	\$ 254.123	2,02%	77	\$ 395.262,77	\$ 76.777.404,83
2014	07	\$ 254.123	2,02%	76	\$ 390.129,49	\$ 77.167.534,32
2014	08	\$ 254.123	2,02%	75	\$ 384.996,21	\$ 77.552.530,53
2014	09	\$ 254.123	2,02%	74	\$ 379.862,92	\$ 77.932.393,45
2014	10	\$ 254.123	2,02%	73	\$ 374.729,64	\$ 78.307.123,09
2014	11	\$ 254.123	2,02%	72	\$ 369.596,36	\$ 78.676.719,45
2014	12	\$ 254.123	2,02%	71	\$ 364.463,08	\$ 79.041.182,53
2014	M14	\$ 254.123	2,02%	71	\$ 364.463,08	\$ 79.405.645,61

2015	01	\$ 263.424	2,02%	70	\$ 372.481,26	\$ 79.778.126,87
2015	02	\$ 263.424	2,02%	69	\$ 367.160,10	\$ 80.145.286,97
2015	03	\$ 263.424	2,02%	68	\$ 361.838,94	\$ 80.507.125,92
2015	04	\$ 263.424	2,02%	67	\$ 356.517,78	\$ 80.863.643,70
2015	05	\$ 263.424	2,02%	66	\$ 351.196,62	\$ 81.214.840,32
2015	06	\$ 263.424	2,02%	65	\$ 345.875,46	\$ 81.560.715,78
2015	M13	\$ 263.424	2,02%	65	\$ 345.875,46	\$ 81.906.591,24
2015	07	\$ 263.424	2,02%	64	\$ 340.554,30	\$ 82.247.145,54
2015	08	\$ 263.424	2,02%	63	\$ 335.233,14	\$ 82.582.378,67
2015	09	\$ 263.424	2,02%	62	\$ 329.911,98	\$ 82.912.290,65
2015	10	\$ 263.424	2,02%	61	\$ 324.590,82	\$ 83.236.881,47
2015	11	\$ 263.424	2,02%	60	\$ 319.269,65	\$ 83.556.151,12
2015	12	\$ 263.424	2,02%	59	\$ 313.948,49	\$ 83.870.099,61
2015	M14	\$ 263.424	2,02%	59	\$ 313.948,49	\$ 84.184.048,11
2016	01	\$ 281.258	2,02%	58	\$ 329.521,40	\$ 84.513.569,51
2016	02	\$ 281.258	2,02%	57	\$ 323.840,00	\$ 84.837.409,51
2016	03	\$ 281.258	2,02%	56	\$ 318.158,60	\$ 85.155.568,11
2016	04	\$ 281.258	2,02%	55	\$ 312.477,19	\$ 85.468.045,30
2016	05	\$ 281.258	2,02%	54	\$ 306.795,79	\$ 85.774.841,09
2016	06	\$ 281.258	2,02%	53	\$ 301.114,39	\$ 86.075.955,48
2016	M13	\$ 281.258	2,02%	53	\$ 301.114,39	\$ 86.377.069,86
2016	07	\$ 281.258	2,02%	52	\$ 295.432,98	\$ 86.672.502,85
2016	08	\$ 281.258	2,02%	51	\$ 289.751,58	\$ 86.962.254,42
2016	09	\$ 281.258	2,02%	50	\$ 284.070,18	\$ 87.246.324,60
2016	10	\$ 281.258	2,02%	49	\$ 278.388,77	\$ 87.524.713,37
2016	11	\$ 281.258	2,02%	48	\$ 272.707,37	\$ 87.797.420,74
2016	12	\$ 281.258	2,02%	47	\$ 267.025,96	\$ 88.064.446,71
2016	M14	\$ 281.258	2,02%	47	\$ 267.025,96	\$ 88.331.472,67
2017	01	\$ 297.430	2,02%	46	\$ 276.371,87	\$ 88.607.844,54
2017	02	\$ 297.430	2,02%	45	\$ 270.363,79	\$ 88.878.208,33
2017	03	\$ 297.430	2,02%	44	\$ 264.355,71	\$ 89.142.564,04
2017	04	\$ 297.430	2,02%	43	\$ 258.347,62	\$ 89.400.911,66
2017	05	\$ 297.430	2,02%	42	\$ 252.339,54	\$ 89.653.251,20
2017	06	\$ 297.430	2,02%	41	\$ 246.331,45	\$ 89.899.582,65
2017	M13	\$ 297.430	2,02%	41	\$ 246.331,45	\$ 90.145.914,10
2017	07	\$ 297.430	2,02%	40	\$ 240.323,37	\$ 90.386.237,47
2017	08	\$ 297.430	2,02%	39	\$ 234.315,28	\$ 90.620.552,75
2017	09	\$ 297.430	2,02%	38	\$ 228.307,20	\$ 90.848.859,95
2017	10	\$ 297.430	2,02%	37	\$ 222.299,12	\$ 91.071.159,07
2017	11	\$ 297.430	2,02%	36	\$ 216.291,03	\$ 91.287.450,10
2017	12	\$ 297.430	2,02%	35	\$ 210.282,95	\$ 91.497.733,05
2017	M14	\$ 297.430	2,02%	35	\$ 210.282,95	\$ 91.708.016,00
2018	01	\$ 309.595	2,02%	34	\$ 212.629,71	\$ 91.920.645,70
2018	02	\$ 309.595	2,02%	33	\$ 206.375,89	\$ 92.127.021,59
2018	03	\$ 309.595	2,02%	32	\$ 200.122,08	\$ 92.327.143,67
2018	04	\$ 309.595	2,02%	31	\$ 193.868,26	\$ 92.521.011,93
2018	05	\$ 309.595	2,02%	30	\$ 187.614,45	\$ 92.708.626,37
2018	06	\$ 309.595	2,02%	29	\$ 181.360,63	\$ 92.889.987,00
2018	M13	\$ 309.595	2,02%	29	\$ 181.360,63	\$ 93.071.347,63
2018	07	\$ 309.595	2,02%	28	\$ 175.106,82	\$ 93.246.454,45
2018	08	\$ 309.595	2,02%	27	\$ 168.853,00	\$ 93.415.307,45
2018	09	\$ 309.595	2,02%	26	\$ 162.599,19	\$ 93.577.906,64
2018	10	\$ 309.595	2,02%	25	\$ 156.345,37	\$ 93.734.252,01
2018	11	\$ 309.595	2,02%	24	\$ 150.091,56	\$ 93.884.343,57
2018	12	\$ 309.595	2,02%	23	\$ 143.837,74	\$ 94.028.181,31
2018	M14	\$ 309.595	2,02%	23	\$ 143.837,74	\$ 94.172.019,05
2019	01	\$ 319.440	2,02%	22	\$ 141.959,10	\$ 94.313.978,15

2019	02	\$ 319.440	2,02%	21	\$ 135.506,41	\$ 94.449.484,55
2019	03	\$ 319.440	2,02%	20	\$ 129.053,72	\$ 94.578.538,28
2019	04	\$ 319.440	2,02%	19	\$ 122.601,04	\$ 94.701.139,32
2019	05	\$ 319.440	2,02%	18	\$ 116.148,35	\$ 94.817.287,67
2019	06	\$ 319.440	2,02%	17	\$ 109.695,66	\$ 94.926.983,33
2019	M13	\$ 319.440	2,02%	17	\$ 109.695,66	\$ 95.036.679,00
2019	07	\$ 319.440	2,02%	16	\$ 103.242,98	\$ 95.139.921,97
2019	08	\$ 319.440	2,02%	15	\$ 96.790,29	\$ 95.236.712,27
2019	09	\$ 319.440	2,02%	14	\$ 90.337,61	\$ 95.327.049,87
2019	10	\$ 319.440	2,02%	13	\$ 83.884,92	\$ 95.410.934,79
2019	11	\$ 319.440	2,02%	12	\$ 77.432,23	\$ 95.488.367,03
2019	12	\$ 319.440	2,02%	11	\$ 70.979,55	\$ 95.559.346,58
2019	M14	\$ 319.440	2,02%	11	\$ 70.979,55	\$ 95.630.326,12
2020	01	\$ 331.579	2,02%	10	\$ 66.978,88	\$ 95.697.305,01
2020	02	\$ 331.579	2,02%	9	\$ 60.280,99	\$ 95.757.586,00
2020	03	\$ 331.579	2,02%	8	\$ 53.583,11	\$ 95.811.169,11
2020	04	\$ 331.579	2,02%	7	\$ 46.885,22	\$ 95.858.054,32
2020	05	\$ 331.579	2,02%	6	\$ 40.187,33	\$ 95.898.241,65
2020	06	\$ 331.579	2,02%	5	\$ 33.489,44	\$ 95.931.731,09
2020	M13	\$ 331.579	2,02%	5	\$ 33.489,44	\$ 95.965.220,54
2020	07	\$ 331.579	2,02%	4	\$ 26.791,55	\$ 95.992.012,09
2020	08	\$ 331.579	2,02%	3	\$ 20.093,66	\$ 96.012.105,75
2020	09	\$ 331.579	2,02%	2	\$ 13.395,78	\$ 96.025.501,53
2020	10	\$ 331.579	2,02%	1	\$ 6.697,89	\$ 96.032.199,42

26. LUIS RAÚL MORA SANDOVAL

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1989	\$ 53.391,87	26,12%	7	\$ 373.743,09
1990	\$ 67.337,83	32,36%	14	\$ 942.729,57
1991	\$ 89.128,35	26,82%	14	\$ 1.247.796,86
1992	\$ 113.032,57	25,13%	14	\$ 1.582.455,98
1993	\$ 141.437,65	22,60%	14	\$ 1.980.127,16
1994	\$ 173.402,56	22,59%	14	\$ 2.427.635,90
1995	\$ 212.574,20	19,46%	14	\$ 2.976.038,85
1996	\$ 253.941,14	21,63%	14	\$ 3.555.176,01
1997	\$ 308.868,61	17,68%	14	\$ 4.324.160,59
1998	\$ 363.476,58	16,70%	14	\$ 5.088.672,18
1999	\$ 424.177,17	9,23%	14	\$ 5.938.480,43
2000	\$ 463.328,73	8,75%	14	\$ 6.486.602,17
2001	\$ 503.869,99	7,65%	14	\$ 7.054.179,87
2002	\$ 542.416,04	6,99%	14	\$ 7.593.824,62
2003	\$ 580.330,93	6,49%	14	\$ 8.124.632,97
2004	\$ 617.994,40	5,50%	14	\$ 8.651.921,65
2005	\$ 651.984,10	4,85%	14	\$ 9.127.777,34
2006	\$ 683.605,32	4,48%	14	\$ 9.570.474,54
2007	\$ 714.230,84	5,69%	14	\$ 9.999.231,80
2008	\$ 754.870,58	7,67%	14	\$ 10.568.188,09
2009	\$ 812.769,15	2,00%	14	\$ 11.378.768,11
2010	\$ 829.024,53	3,17%	14	\$ 11.606.343,47
2011	\$ 855.304,61	3,73%	14	\$ 11.974.264,56
2012	\$ 887.207,47	2,44%	14	\$ 12.420.904,63
2013	\$ 908.855,34	1,94%	14	\$ 12.723.974,70
2014	\$ 926.487,13	3,66%	14	\$ 12.970.819,81
2015	\$ 960.396,56	6,77%	14	\$ 13.445.551,82
2016	\$1.025.415,41	5,75%	14	\$ 14.355.815,68
2017	\$1.084.376,79	4,09%	14	\$ 15.181.275,08

2018	\$1.128.727,80	3,18%	14	\$ 15.802.189,23
2019	\$1.164.621,35	3,80%	14	\$ 16.304.698,84
2020	\$1.208.876,96	1,61%	11	\$ 13.297.646,53
				\$ 200.727.924,21

27. GERMAN ALVAREZ MOLINA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2000	\$ 192.994,09	8,75%	1,03	\$ 198.783,91
2001	\$ 209.881,07	7,65%	14	\$ 2.938.335,02
2002	\$ 225.936,97	6,99%	14	\$ 3.163.117,65
2003	\$ 241.729,97	6,49%	14	\$ 3.384.219,57
2004	\$ 257.418,24	5,50%	14	\$ 3.603.855,42
2005	\$ 271.576,25	4,85%	14	\$ 3.802.067,47
2006	\$ 284.747,70	4,48%	14	\$ 3.986.467,74
2007	\$ 297.504,39	5,69%	14	\$ 4.165.061,50
2008	\$ 314.432,39	7,67%	14	\$ 4.402.053,50
2009	\$ 338.549,36	2,00%	14	\$ 4.739.691,00
2010	\$ 345.320,34	3,17%	14	\$ 4.834.484,82
2011	\$ 356.267,00	3,73%	14	\$ 4.987.737,99
2012	\$ 369.555,76	2,44%	14	\$ 5.173.780,62
2013	\$ 378.572,92	1,94%	14	\$ 5.300.020,86
2014	\$ 385.917,23	3,66%	14	\$ 5.402.841,27
2015	\$ 400.041,80	6,77%	14	\$ 5.600.585,26
2016	\$ 427.124,63	5,75%	14	\$ 5.979.744,88
2017	\$ 451.684,30	4,09%	14	\$ 6.323.580,21
2018	\$ 470.158,19	3,18%	14	\$ 6.582.214,64
2019	\$ 485.109,22	3,80%	14	\$ 6.791.529,07
2020	\$ 503.543,37	1,61%	11	\$ 5.538.977,06
				\$ 83.610.837,91

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2000	12	\$ 192.994	2,02%	239	\$ 931.736,43	\$ 931.736,43
2000	M14	\$ 192.994	2,02%	239	\$ 931.736,43	\$ 1.863.472,87
2001	01	\$ 209.881	2,02%	238	\$ 1.009.024,25	\$ 2.872.497,11
2001	02	\$ 209.881	2,02%	237	\$ 1.004.784,65	\$ 3.877.281,76
2001	03	\$ 209.881	2,02%	236	\$ 1.000.545,05	\$ 4.877.826,81
2001	04	\$ 209.881	2,02%	235	\$ 996.305,45	\$ 5.874.132,26
2001	05	\$ 209.881	2,02%	234	\$ 992.065,86	\$ 6.866.198,12
2001	06	\$ 209.881	2,02%	233	\$ 987.826,26	\$ 7.854.024,38
2001	M13	\$ 209.881	2,02%	233	\$ 987.826,26	\$ 8.841.850,63
2001	07	\$ 209.881	2,02%	232	\$ 983.586,66	\$ 9.825.437,29
2001	08	\$ 209.881	2,02%	231	\$ 979.347,06	\$ 10.804.784,36
2001	09	\$ 209.881	2,02%	230	\$ 975.107,46	\$ 11.779.891,82
2001	10	\$ 209.881	2,02%	229	\$ 970.867,87	\$ 12.750.759,69
2001	11	\$ 209.881	2,02%	228	\$ 966.628,27	\$ 13.717.387,96
2001	12	\$ 209.881	2,02%	227	\$ 962.388,67	\$ 14.679.776,63
2001	M14	\$ 209.881	2,02%	227	\$ 962.388,67	\$ 15.642.165,30
2002	01	\$ 225.937	2,02%	226	\$ 1.031.447,48	\$ 16.673.612,78
2002	02	\$ 225.937	2,02%	225	\$ 1.026.883,55	\$ 17.700.496,33
2002	03	\$ 225.937	2,02%	224	\$ 1.022.319,62	\$ 18.722.815,95
2002	04	\$ 225.937	2,02%	223	\$ 1.017.755,70	\$ 19.740.571,65
2002	05	\$ 225.937	2,02%	222	\$ 1.013.191,77	\$ 20.753.763,42
2002	06	\$ 225.937	2,02%	221	\$ 1.008.627,84	\$ 21.762.391,27
2002	M13	\$ 225.937	2,02%	221	\$ 1.008.627,84	\$ 22.771.019,11
2002	07	\$ 225.937	2,02%	220	\$ 1.004.063,92	\$ 23.775.083,03
2002	08	\$ 225.937	2,02%	219	\$ 999.499,99	\$ 24.774.583,02
2002	09	\$ 225.937	2,02%	218	\$ 994.936,06	\$ 25.769.519,08

2002	10	\$ 225.937	2,02%	217	\$ 990.372,14	\$ 26.759.891,21
2002	11	\$ 225.937	2,02%	216	\$ 985.808,21	\$ 27.745.699,42
2002	12	\$ 225.937	2,02%	215	\$ 981.244,28	\$ 28.726.943,71
2002	M14	\$ 225.937	2,02%	215	\$ 981.244,28	\$ 29.708.187,99
2003	01	\$ 241.730	2,02%	214	\$ 1.044.950,31	\$ 30.753.138,30
2003	02	\$ 241.730	2,02%	213	\$ 1.040.067,37	\$ 31.793.205,67
2003	03	\$ 241.730	2,02%	212	\$ 1.035.184,42	\$ 32.828.390,09
2003	04	\$ 241.730	2,02%	211	\$ 1.030.301,48	\$ 33.858.691,56
2003	05	\$ 241.730	2,02%	210	\$ 1.025.418,53	\$ 34.884.110,09
2003	06	\$ 241.730	2,02%	209	\$ 1.020.535,59	\$ 35.904.645,68
2003	M13	\$ 241.730	2,02%	209	\$ 1.020.535,59	\$ 36.925.181,27
2003	07	\$ 241.730	2,02%	208	\$ 1.015.652,64	\$ 37.940.833,91
2003	08	\$ 241.730	2,02%	207	\$ 1.010.769,69	\$ 38.951.603,60
2003	09	\$ 241.730	2,02%	206	\$ 1.005.886,75	\$ 39.957.490,35
2003	10	\$ 241.730	2,02%	205	\$ 1.001.003,80	\$ 40.958.494,15
2003	11	\$ 241.730	2,02%	204	\$ 996.120,86	\$ 41.954.615,01
2003	12	\$ 241.730	2,02%	203	\$ 991.237,91	\$ 42.945.852,92
2003	M14	\$ 241.730	2,02%	203	\$ 991.237,91	\$ 43.937.090,84
2004	01	\$ 257.418	2,02%	202	\$ 1.050.369,40	\$ 44.987.460,24
2004	02	\$ 257.418	2,02%	201	\$ 1.045.169,56	\$ 46.032.629,80
2004	03	\$ 257.418	2,02%	200	\$ 1.039.969,71	\$ 47.072.599,51
2004	04	\$ 257.418	2,02%	199	\$ 1.034.769,86	\$ 48.107.369,37
2004	05	\$ 257.418	2,02%	198	\$ 1.029.570,01	\$ 49.136.939,38
2004	06	\$ 257.418	2,02%	197	\$ 1.024.370,16	\$ 50.161.309,54
2004	M13	\$ 257.418	2,02%	197	\$ 1.024.370,16	\$ 51.185.679,70
2004	07	\$ 257.418	2,02%	196	\$ 1.019.170,31	\$ 52.204.850,01
2004	08	\$ 257.418	2,02%	195	\$ 1.013.970,47	\$ 53.218.820,48
2004	09	\$ 257.418	2,02%	194	\$ 1.008.770,62	\$ 54.227.591,10
2004	10	\$ 257.418	2,02%	193	\$ 1.003.570,77	\$ 55.231.161,86
2004	11	\$ 257.418	2,02%	192	\$ 998.370,92	\$ 56.229.532,78
2004	12	\$ 257.418	2,02%	191	\$ 993.171,07	\$ 57.222.703,85
2004	M14	\$ 257.418	2,02%	191	\$ 993.171,07	\$ 58.215.874,93
2005	01	\$ 271.576	2,02%	190	\$ 1.042.309,64	\$ 59.258.184,57
2005	02	\$ 271.576	2,02%	189	\$ 1.036.823,80	\$ 60.295.008,36
2005	03	\$ 271.576	2,02%	188	\$ 1.031.337,96	\$ 61.326.346,32
2005	04	\$ 271.576	2,02%	187	\$ 1.025.852,12	\$ 62.352.198,44
2005	05	\$ 271.576	2,02%	186	\$ 1.020.366,28	\$ 63.372.564,72
2005	06	\$ 271.576	2,02%	185	\$ 1.014.880,44	\$ 64.387.445,16
2005	M13	\$ 271.576	2,02%	185	\$ 1.014.880,44	\$ 65.402.325,60
2005	07	\$ 271.576	2,02%	184	\$ 1.009.394,60	\$ 66.411.720,20
2005	08	\$ 271.576	2,02%	183	\$ 1.003.908,76	\$ 67.415.628,96
2005	09	\$ 271.576	2,02%	182	\$ 998.422,92	\$ 68.414.051,87
2005	10	\$ 271.576	2,02%	181	\$ 992.937,08	\$ 69.406.988,95
2005	11	\$ 271.576	2,02%	180	\$ 987.451,24	\$ 70.394.440,19
2005	12	\$ 271.576	2,02%	179	\$ 981.965,40	\$ 71.376.405,59
2005	M14	\$ 271.576	2,02%	179	\$ 981.965,40	\$ 72.358.370,98
2006	01	\$ 284.748	2,02%	178	\$ 1.023.838,82	\$ 73.382.209,80
2006	02	\$ 284.748	2,02%	177	\$ 1.018.086,91	\$ 74.400.296,71
2006	03	\$ 284.748	2,02%	176	\$ 1.012.335,01	\$ 75.412.631,72
2006	04	\$ 284.748	2,02%	175	\$ 1.006.583,11	\$ 76.419.214,83
2006	05	\$ 284.748	2,02%	174	\$ 1.000.831,20	\$ 77.420.046,03
2006	06	\$ 284.748	2,02%	173	\$ 995.079,30	\$ 78.415.125,33
2006	M13	\$ 284.748	2,02%	173	\$ 995.079,30	\$ 79.410.204,62
2006	07	\$ 284.748	2,02%	172	\$ 989.327,39	\$ 80.399.532,02
2006	08	\$ 284.748	2,02%	171	\$ 983.575,49	\$ 81.383.107,51
2006	09	\$ 284.748	2,02%	170	\$ 977.823,59	\$ 82.360.931,10
2006	10	\$ 284.748	2,02%	169	\$ 972.071,68	\$ 83.333.002,78
2006	11	\$ 284.748	2,02%	168	\$ 966.319,78	\$ 84.299.322,57
2006	12	\$ 284.748	2,02%	167	\$ 960.567,88	\$ 85.259.890,44

2006	M14	\$ 284.748	2,02%	167	\$ 960.567,88	\$ 86.220.458,32
2007	01	\$ 297.504	2,02%	166	\$ 997.591,73	\$ 87.218.050,05
2007	02	\$ 297.504	2,02%	165	\$ 991.582,14	\$ 88.209.632,19
2007	03	\$ 297.504	2,02%	164	\$ 985.572,55	\$ 89.195.204,74
2007	04	\$ 297.504	2,02%	163	\$ 979.562,96	\$ 90.174.767,71
2007	05	\$ 297.504	2,02%	162	\$ 973.553,37	\$ 91.148.321,08
2007	06	\$ 297.504	2,02%	161	\$ 967.543,79	\$ 92.115.864,87
2007	M13	\$ 297.504	2,02%	161	\$ 967.543,79	\$ 93.083.408,65
2007	07	\$ 297.504	2,02%	160	\$ 961.534,20	\$ 94.044.942,85
2007	08	\$ 297.504	2,02%	159	\$ 955.524,61	\$ 95.000.467,46
2007	09	\$ 297.504	2,02%	158	\$ 949.515,02	\$ 95.949.982,48
2007	10	\$ 297.504	2,02%	157	\$ 943.505,43	\$ 96.893.487,91
2007	11	\$ 297.504	2,02%	156	\$ 937.495,84	\$ 97.830.983,75
2007	12	\$ 297.504	2,02%	155	\$ 931.486,25	\$ 98.762.470,01
2007	M14	\$ 297.504	2,02%	155	\$ 931.486,25	\$ 99.693.956,26
2008	01	\$ 314.432	2,02%	154	\$ 978.136,29	\$ 100.672.092,55
2008	02	\$ 314.432	2,02%	153	\$ 971.784,75	\$ 101.643.877,30
2008	03	\$ 314.432	2,02%	152	\$ 965.433,22	\$ 102.609.310,52
2008	04	\$ 314.432	2,02%	151	\$ 959.081,68	\$ 103.568.392,21
2008	05	\$ 314.432	2,02%	150	\$ 952.730,15	\$ 104.521.122,36
2008	06	\$ 314.432	2,02%	149	\$ 946.378,62	\$ 105.467.500,97
2008	M13	\$ 314.432	2,02%	149	\$ 946.378,62	\$ 106.413.879,59
2008	07	\$ 314.432	2,02%	148	\$ 940.027,08	\$ 107.353.906,67
2008	08	\$ 314.432	2,02%	147	\$ 933.675,55	\$ 108.287.582,21
2008	09	\$ 314.432	2,02%	146	\$ 927.324,01	\$ 109.214.906,23
2008	10	\$ 314.432	2,02%	145	\$ 920.972,48	\$ 110.135.878,71
2008	11	\$ 314.432	2,02%	144	\$ 914.620,94	\$ 111.050.499,65
2008	12	\$ 314.432	2,02%	143	\$ 908.269,41	\$ 111.958.769,06
2008	M14	\$ 314.432	2,02%	143	\$ 908.269,41	\$ 112.867.038,47
2009	01	\$ 338.549	2,02%	142	\$ 971.094,98	\$ 113.838.133,45
2009	02	\$ 338.549	2,02%	141	\$ 964.256,28	\$ 114.802.389,72
2009	03	\$ 338.549	2,02%	140	\$ 957.417,58	\$ 115.759.807,31
2009	04	\$ 338.549	2,02%	139	\$ 950.578,89	\$ 116.710.386,19
2009	05	\$ 338.549	2,02%	138	\$ 943.740,19	\$ 117.654.126,38
2009	06	\$ 338.549	2,02%	137	\$ 936.901,49	\$ 118.591.027,87
2009	M13	\$ 338.549	2,02%	137	\$ 936.901,49	\$ 119.527.929,36
2009	07	\$ 338.549	2,02%	136	\$ 930.062,79	\$ 120.457.992,16
2009	08	\$ 338.549	2,02%	135	\$ 923.224,10	\$ 121.381.216,25
2009	09	\$ 338.549	2,02%	134	\$ 916.385,40	\$ 122.297.601,65
2009	10	\$ 338.549	2,02%	133	\$ 909.546,70	\$ 123.207.148,36
2009	11	\$ 338.549	2,02%	132	\$ 902.708,01	\$ 124.109.856,36
2009	12	\$ 338.549	2,02%	131	\$ 895.869,31	\$ 125.005.725,67
2009	M14	\$ 338.549	2,02%	131	\$ 895.869,31	\$ 125.901.594,98
2010	01	\$ 345.320	2,02%	130	\$ 906.811,22	\$ 126.808.406,21
2010	02	\$ 345.320	2,02%	129	\$ 899.835,75	\$ 127.708.241,96
2010	03	\$ 345.320	2,02%	128	\$ 892.860,28	\$ 128.601.102,24
2010	04	\$ 345.320	2,02%	127	\$ 885.884,81	\$ 129.486.987,05
2010	05	\$ 345.320	2,02%	126	\$ 878.909,34	\$ 130.365.896,39
2010	06	\$ 345.320	2,02%	125	\$ 871.933,87	\$ 131.237.830,26
2010	M13	\$ 345.320	2,02%	125	\$ 871.933,87	\$ 132.109.764,13
2010	07	\$ 345.320	2,02%	124	\$ 864.958,40	\$ 132.974.722,53
2010	08	\$ 345.320	2,02%	123	\$ 857.982,93	\$ 133.832.705,46
2010	09	\$ 345.320	2,02%	122	\$ 851.007,46	\$ 134.683.712,92
2010	10	\$ 345.320	2,02%	121	\$ 844.031,99	\$ 135.527.744,90
2010	11	\$ 345.320	2,02%	120	\$ 837.056,51	\$ 136.364.801,42
2010	12	\$ 345.320	2,02%	119	\$ 830.081,04	\$ 137.194.882,46
2010	M14	\$ 345.320	2,02%	119	\$ 830.081,04	\$ 138.024.963,50
2011	01	\$ 356.267	2,02%	118	\$ 849.198,02	\$ 138.874.161,52
2011	02	\$ 356.267	2,02%	117	\$ 842.001,43	\$ 139.716.162,95

2011	03	\$ 356.267	2,02%	116	\$ 834.804,83	\$ 140.550.967,78
2011	04	\$ 356.267	2,02%	115	\$ 827.608,24	\$ 141.378.576,02
2011	05	\$ 356.267	2,02%	114	\$ 820.411,65	\$ 142.198.987,67
2011	06	\$ 356.267	2,02%	113	\$ 813.215,05	\$ 143.012.202,72
2011	M13	\$ 356.267	2,02%	113	\$ 813.215,05	\$ 143.825.417,77
2011	07	\$ 356.267	2,02%	112	\$ 806.018,46	\$ 144.631.436,23
2011	08	\$ 356.267	2,02%	111	\$ 798.821,87	\$ 145.430.258,10
2011	09	\$ 356.267	2,02%	110	\$ 791.625,27	\$ 146.221.883,37
2011	10	\$ 356.267	2,02%	109	\$ 784.428,68	\$ 147.006.312,05
2011	11	\$ 356.267	2,02%	108	\$ 777.232,09	\$ 147.783.544,14
2011	12	\$ 356.267	2,02%	107	\$ 770.035,49	\$ 148.553.579,63
2011	M14	\$ 356.267	2,02%	107	\$ 770.035,49	\$ 149.323.615,12
2012	01	\$ 369.556	2,02%	106	\$ 791.292,79	\$ 150.114.907,91
2012	02	\$ 369.556	2,02%	105	\$ 783.827,76	\$ 150.898.735,67
2012	03	\$ 369.556	2,02%	104	\$ 776.362,74	\$ 0,00
2012	04	\$ 369.556	2,02%	103	\$ 768.897,71	\$ 152.443.996,12
2012	05	\$ 369.556	2,02%	102	\$ 761.432,68	\$ 153.205.428,81
2012	06	\$ 369.556	2,02%	101	\$ 753.967,66	\$ 153.959.396,47
2012	M13	\$ 369.556	2,02%	101	\$ 753.967,66	\$ 154.713.364,12
2012	07	\$ 369.556	2,02%	100	\$ 746.502,63	\$ 155.459.866,76
2012	08	\$ 369.556	2,02%	99	\$ 739.037,61	\$ 156.198.904,36
2012	09	\$ 369.556	2,02%	98	\$ 731.572,58	\$ 156.930.476,94
2012	10	\$ 369.556	2,02%	97	\$ 724.107,55	\$ 157.654.584,49
2012	11	\$ 369.556	2,02%	96	\$ 716.642,53	\$ 158.371.227,02
2012	12	\$ 369.556	2,02%	95	\$ 709.177,50	\$ 159.080.404,52
2012	M14	\$ 369.556	2,02%	95	\$ 709.177,50	\$ 159.789.582,02
2013	01	\$ 378.573	2,02%	94	\$ 718.834,26	\$ 160.508.416,28
2013	02	\$ 378.573	2,02%	93	\$ 711.187,09	\$ 161.219.603,36
2013	03	\$ 378.573	2,02%	92	\$ 703.539,91	\$ 161.923.143,28
2013	04	\$ 378.573	2,02%	91	\$ 695.892,74	\$ 162.619.036,02
2013	05	\$ 378.573	2,02%	90	\$ 688.245,57	\$ 163.307.281,58
2013	06	\$ 378.573	2,02%	89	\$ 680.598,39	\$ 163.987.879,98
2013	M13	\$ 378.573	2,02%	89	\$ 680.598,39	\$ 164.668.478,37
2013	07	\$ 378.573	2,02%	88	\$ 672.951,22	\$ 165.341.429,59
2013	08	\$ 378.573	2,02%	87	\$ 665.304,05	\$ 166.006.733,64
2013	09	\$ 378.573	2,02%	86	\$ 657.656,87	\$ 166.664.390,51
2013	10	\$ 378.573	2,02%	85	\$ 650.009,70	\$ 167.314.400,21
2013	11	\$ 378.573	2,02%	84	\$ 642.362,53	\$ 167.956.762,74
2013	12	\$ 378.573	2,02%	83	\$ 634.715,36	\$ 168.591.478,10
2013	M14	\$ 378.573	2,02%	83	\$ 634.715,36	\$ 169.226.193,46
2014	01	\$ 385.917	2,02%	82	\$ 639.233,31	\$ 169.865.426,76
2014	02	\$ 385.917	2,02%	81	\$ 631.437,78	\$ 170.496.864,54
2014	03	\$ 385.917	2,02%	80	\$ 623.642,25	\$ 171.120.506,79
2014	04	\$ 385.917	2,02%	79	\$ 615.846,72	\$ 171.736.353,51
2014	05	\$ 385.917	2,02%	78	\$ 608.051,19	\$ 172.344.404,70
2014	06	\$ 385.917	2,02%	77	\$ 600.255,67	\$ 172.944.660,37
2014	M13	\$ 385.917	2,02%	77	\$ 600.255,67	\$ 173.544.916,03
2014	07	\$ 385.917	2,02%	76	\$ 592.460,14	\$ 174.137.376,17
2014	08	\$ 385.917	2,02%	75	\$ 584.664,61	\$ 174.722.040,78
2014	09	\$ 385.917	2,02%	74	\$ 576.869,08	\$ 175.298.909,86
2014	10	\$ 385.917	2,02%	73	\$ 569.073,55	\$ 175.867.983,41
2014	11	\$ 385.917	2,02%	72	\$ 561.278,02	\$ 176.429.261,44
2014	12	\$ 385.917	2,02%	71	\$ 553.482,50	\$ 176.982.743,93
2014	M14	\$ 385.917	2,02%	71	\$ 553.482,50	\$ 177.536.226,43
2015	01	\$ 400.042	2,02%	70	\$ 565.659,11	\$ 178.101.885,54
2015	02	\$ 400.042	2,02%	69	\$ 557.578,27	\$ 178.659.463,81
2015	03	\$ 400.042	2,02%	68	\$ 549.497,42	\$ 179.208.961,23
2015	04	\$ 400.042	2,02%	67	\$ 541.416,58	\$ 179.750.377,81
2015	05	\$ 400.042	2,02%	66	\$ 533.335,73	\$ 180.283.713,54

2015	06	\$ 400.042	2,02%	65	\$ 525.254,89	\$ 180.808.968,43
2015	M13	\$ 400.042	2,02%	65	\$ 525.254,89	\$ 181.334.223,32
2015	07	\$ 400.042	2,02%	64	\$ 517.174,04	\$ 181.851.397,36
2015	08	\$ 400.042	2,02%	63	\$ 509.093,20	\$ 182.360.490,56
2015	09	\$ 400.042	2,02%	62	\$ 501.012,36	\$ 182.861.502,92
2015	10	\$ 400.042	2,02%	61	\$ 492.931,51	\$ 183.354.434,43
2015	11	\$ 400.042	2,02%	60	\$ 484.850,67	\$ 183.839.285,10
2015	12	\$ 400.042	2,02%	59	\$ 476.769,82	\$ 184.316.054,92
2015	M14	\$ 400.042	2,02%	59	\$ 476.769,82	\$ 184.792.824,74
2016	01	\$ 427.125	2,02%	58	\$ 500.419,22	\$ 185.293.243,96
2016	02	\$ 427.125	2,02%	57	\$ 491.791,30	\$ 185.785.035,27
2016	03	\$ 427.125	2,02%	56	\$ 483.163,39	\$ 186.268.198,65
2016	04	\$ 427.125	2,02%	55	\$ 474.535,47	\$ 186.742.734,12
2016	05	\$ 427.125	2,02%	54	\$ 465.907,55	\$ 187.208.641,67
2016	06	\$ 427.125	2,02%	53	\$ 457.279,63	\$ 187.665.921,31
2016	M13	\$ 427.125	2,02%	53	\$ 457.279,63	\$ 188.123.200,94
2016	07	\$ 427.125	2,02%	52	\$ 448.651,72	\$ 188.571.852,66
2016	08	\$ 427.125	2,02%	51	\$ 440.023,80	\$ 189.011.876,45
2016	09	\$ 427.125	2,02%	50	\$ 431.395,88	\$ 189.443.272,33
2016	10	\$ 427.125	2,02%	49	\$ 422.767,96	\$ 189.866.040,30
2016	11	\$ 427.125	2,02%	48	\$ 414.140,05	\$ 190.280.180,34
2016	12	\$ 427.125	2,02%	47	\$ 405.512,13	\$ 190.685.692,47
2016	M14	\$ 427.125	2,02%	47	\$ 405.512,13	\$ 191.091.204,60
2017	01	\$ 451.684	2,02%	46	\$ 419.705,05	\$ 191.510.909,65
2017	02	\$ 451.684	2,02%	45	\$ 410.581,03	\$ 191.921.490,68
2017	03	\$ 451.684	2,02%	44	\$ 401.457,01	\$ 192.322.947,69
2017	04	\$ 451.684	2,02%	43	\$ 392.332,98	\$ 192.715.280,67
2017	05	\$ 451.684	2,02%	42	\$ 383.208,96	\$ 193.098.489,63
2017	06	\$ 451.684	2,02%	41	\$ 374.084,94	\$ 193.472.574,57
2017	M13	\$ 451.684	2,02%	41	\$ 374.084,94	\$ 193.846.659,51
2017	07	\$ 451.684	2,02%	40	\$ 364.960,92	\$ 194.211.620,42
2017	08	\$ 451.684	2,02%	39	\$ 355.836,89	\$ 194.567.457,32
2017	09	\$ 451.684	2,02%	38	\$ 346.712,87	\$ 194.914.170,19
2017	10	\$ 451.684	2,02%	37	\$ 337.588,85	\$ 195.251.759,03
2017	11	\$ 451.684	2,02%	36	\$ 328.464,82	\$ 195.580.223,86
2017	12	\$ 451.684	2,02%	35	\$ 319.340,80	\$ 195.899.564,66
2017	M14	\$ 451.684	2,02%	35	\$ 319.340,80	\$ 196.218.905,46
2018	01	\$ 470.158	2,02%	34	\$ 322.904,64	\$ 196.541.810,10
2018	02	\$ 470.158	2,02%	33	\$ 313.407,45	\$ 196.855.217,55
2018	03	\$ 470.158	2,02%	32	\$ 303.910,25	\$ 197.159.127,80
2018	04	\$ 470.158	2,02%	31	\$ 294.413,06	\$ 197.453.540,86
2018	05	\$ 470.158	2,02%	30	\$ 284.915,86	\$ 197.738.456,72
2018	06	\$ 470.158	2,02%	29	\$ 275.418,67	\$ 198.013.875,39
2018	M13	\$ 470.158	2,02%	29	\$ 275.418,67	\$ 198.289.294,06
2018	07	\$ 470.158	2,02%	28	\$ 265.921,47	\$ 198.555.215,53
2018	08	\$ 470.158	2,02%	27	\$ 256.424,28	\$ 198.811.639,80
2018	09	\$ 470.158	2,02%	26	\$ 246.927,08	\$ 199.058.566,89
2018	10	\$ 470.158	2,02%	25	\$ 237.429,89	\$ 199.295.996,77
2018	11	\$ 470.158	2,02%	24	\$ 227.932,69	\$ 199.523.929,46
2018	12	\$ 470.158	2,02%	23	\$ 218.435,49	\$ 199.742.364,96
2018	M14	\$ 470.158	2,02%	23	\$ 218.435,49	\$ 199.960.800,45
2019	01	\$ 485.109	2,02%	22	\$ 215.582,54	\$ 200.176.382,99
2019	02	\$ 485.109	2,02%	21	\$ 205.783,33	\$ 200.382.166,32
2019	03	\$ 485.109	2,02%	20	\$ 195.984,12	\$ 200.578.150,44
2019	04	\$ 485.109	2,02%	19	\$ 186.184,92	\$ 200.764.335,36
2019	05	\$ 485.109	2,02%	18	\$ 176.385,71	\$ 200.940.721,07
2019	06	\$ 485.109	2,02%	17	\$ 166.586,51	\$ 201.107.307,58
2019	M13	\$ 485.109	2,02%	17	\$ 166.586,51	\$ 201.273.894,08
2019	07	\$ 485.109	2,02%	16	\$ 156.787,30	\$ 201.430.681,38

2019	08	\$ 485.109	2,02%	15	\$ 146.988,09	\$ 201.577.669,48
2019	09	\$ 485.109	2,02%	14	\$ 137.188,89	\$ 201.714.858,36
2019	10	\$ 485.109	2,02%	13	\$ 127.389,68	\$ 201.842.248,05
2019	11	\$ 485.109	2,02%	12	\$ 117.590,47	\$ 201.959.838,52
2019	12	\$ 485.109	2,02%	11	\$ 107.791,27	\$ 202.067.629,79
2019	M14	\$ 485.109	2,02%	11	\$ 107.791,27	\$ 202.175.421,06
2020	01	\$ 503.543	2,02%	10	\$ 101.715,76	\$ 202.277.136,82
2020	02	\$ 503.543	2,02%	9	\$ 91.544,18	\$ 202.368.681,00
2020	03	\$ 503.543	2,02%	8	\$ 81.372,61	\$ 202.450.053,61
2020	04	\$ 503.543	2,02%	7	\$ 71.201,03	\$ 202.521.254,64
2020	05	\$ 503.543	2,02%	6	\$ 61.029,46	\$ 202.582.284,10
2020	06	\$ 503.543	2,02%	5	\$ 50.857,88	\$ 202.633.141,98
2020	M13	\$ 503.543	2,02%	5	\$ 50.857,88	\$ 202.683.999,86
2020	07	\$ 503.543	2,02%	4	\$ 40.686,30	\$ 202.724.686,16
2020	08	\$ 503.543	2,02%	3	\$ 30.514,73	\$ 202.755.200,89
2020	09	\$ 503.543	2,02%	2	\$ 20.343,15	\$ 202.775.544,04
2020	10	\$ 503.543	2,02%	1	\$ 10.171,58	\$ 202.785.715,62

28. JORGE E. NIÑO TOSCANO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1995	\$ 212.347,58	19,46%	1,06	\$ 225.088,43
1996	\$ 253.670,42	21,63%	14	\$ 3.551.385,87
1997	\$ 308.539,33	17,68%	14	\$ 4.319.550,63
1998	\$ 363.089,08	16,70%	14	\$ 5.083.247,18
1999	\$ 423.724,96	9,23%	14	\$ 5.932.149,46
2000	\$ 462.834,78	8,75%	14	\$ 6.479.686,86
2001	\$ 503.332,82	7,65%	14	\$ 7.046.659,46
2002	\$ 541.837,78	6,99%	14	\$ 7.585.728,90
2003	\$ 579.712,24	6,49%	14	\$ 8.115.971,35
2004	\$ 617.335,56	5,50%	14	\$ 8.642.697,90
2005	\$ 651.289,02	4,85%	14	\$ 9.118.046,28
2006	\$ 682.876,54	4,48%	14	\$ 9.560.271,52
2007	\$ 713.469,41	5,69%	14	\$ 9.988.571,69
2008	\$ 754.065,82	7,67%	14	\$ 10.556.921,42
2009	\$ 811.902,66	2,00%	14	\$ 11.366.637,29
2010	\$ 828.140,72	3,17%	14	\$ 11.593.970,04
2011	\$ 854.392,78	3,73%	14	\$ 11.961.498,89
2012	\$ 886.261,63	2,44%	14	\$ 12.407.662,79
2013	\$ 907.886,41	1,94%	14	\$ 12.710.409,77
2014	\$ 925.499,41	3,66%	14	\$ 12.956.991,72
2015	\$ 959.372,69	6,77%	14	\$ 13.431.217,61
2016	\$1.024.322,22	5,75%	14	\$ 14.340.511,05
2017	\$1.083.220,75	4,09%	14	\$ 15.165.090,43
2018	\$1.127.524,47	3,18%	14	\$ 15.785.342,63
2019	\$1.163.379,75	3,80%	14	\$ 16.287.316,52
2020	\$1.207.588,18	1,61%	11	\$ 13.283.470,01
				\$ 200.513.929,65

29. GERMAN ARDILA MENESES

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 128.888,69	6,49%	4	\$ 515.554,76
2004	\$ 137.253,57	5,50%	14	\$ 1.921.549,92
2005	\$ 144.802,51	4,85%	14	\$ 2.027.235,17
2006	\$ 151.825,43	4,48%	14	\$ 2.125.556,08
2007	\$ 158.627,21	5,69%	14	\$ 2.220.780,99

2008	\$ 167.653,10	7,67%	14	\$ 2.347.143,43
2009	\$ 180.512,09	2,00%	14	\$ 2.527.169,33
2010	\$ 184.122,34	3,17%	14	\$ 2.577.712,71
2011	\$ 189.959,01	3,73%	14	\$ 2.659.426,21
2012	\$ 197.044,49	2,44%	14	\$ 2.758.622,80
2013	\$ 201.852,37	1,94%	14	\$ 2.825.933,20
2014	\$ 205.768,31	3,66%	14	\$ 2.880.756,30
2015	\$ 213.299,43	6,77%	14	\$ 2.986.191,98
2016	\$ 227.739,80	5,75%	14	\$ 3.188.357,18
2017	\$ 240.834,84	4,09%	14	\$ 3.371.687,72
2018	\$ 250.684,98	3,18%	14	\$ 3.509.589,75
2019	\$ 258.656,76	3,80%	14	\$ 3.621.194,70
2020	\$ 268.485,72	1,61%	11	\$ 2.953.342,94
				\$ 44.580.700,48

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2003	10	\$ 82.434	2,02%	205	\$ 341.359,19	\$ 341.359,19
2003	11	\$ 82.434	2,02%	204	\$ 339.694,03	\$ 681.053,22
2003	12	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.019.082,08
2003	M14	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.357.110,94
2004	01	\$ 137.254	2,02%	202	\$ 560.049,45	\$ 1.917.160,39
2004	02	\$ 137.254	2,02%	201	\$ 557.276,93	\$ 2.474.437,32
2004	03	\$ 137.254	2,02%	200	\$ 554.504,41	\$ 3.028.941,73
2004	04	\$ 137.254	2,02%	199	\$ 551.731,88	\$ 3.580.673,61
2004	05	\$ 137.254	2,02%	198	\$ 548.959,36	\$ 4.129.632,97
2004	06	\$ 137.254	2,02%	197	\$ 546.186,84	\$ 4.675.819,82
2004	M13	\$ 137.254	2,02%	197	\$ 546.186,84	\$ 5.222.006,66
2004	07	\$ 137.254	2,02%	196	\$ 543.414,32	\$ 5.765.420,97
2004	08	\$ 137.254	2,02%	195	\$ 540.641,80	\$ 6.306.062,77
2004	09	\$ 137.254	2,02%	194	\$ 537.869,27	\$ 6.843.932,04
2004	10	\$ 137.254	2,02%	193	\$ 535.096,75	\$ 7.379.028,80
2004	11	\$ 137.254	2,02%	192	\$ 532.324,23	\$ 7.911.353,03
2004	12	\$ 137.254	2,02%	191	\$ 529.551,71	\$ 8.440.904,74
2004	M14	\$ 137.254	2,02%	191	\$ 529.551,71	\$ 8.970.456,44
2005	01	\$ 144.803	2,02%	190	\$ 555.752,04	\$ 9.526.208,49
2005	02	\$ 144.803	2,02%	189	\$ 552.827,03	\$ 10.079.035,52
2005	03	\$ 144.803	2,02%	188	\$ 549.902,02	\$ 10.628.937,54
2005	04	\$ 144.803	2,02%	187	\$ 546.977,01	\$ 11.175.914,55
2005	05	\$ 144.803	2,02%	186	\$ 544.052,00	\$ 11.719.966,54
2005	06	\$ 144.803	2,02%	185	\$ 541.126,99	\$ 12.261.093,53
2005	M13	\$ 144.803	2,02%	185	\$ 541.126,99	\$ 12.802.220,52
2005	07	\$ 144.803	2,02%	184	\$ 538.201,98	\$ 13.340.422,50
2005	08	\$ 144.803	2,02%	183	\$ 535.276,97	\$ 13.875.699,46
2005	09	\$ 144.803	2,02%	182	\$ 532.351,96	\$ 14.408.051,42
2005	10	\$ 144.803	2,02%	181	\$ 529.426,94	\$ 14.937.478,36
2005	11	\$ 144.803	2,02%	180	\$ 526.501,93	\$ 15.463.980,30
2005	12	\$ 144.803	2,02%	179	\$ 523.576,92	\$ 15.987.557,22
2005	M14	\$ 144.803	2,02%	179	\$ 523.576,92	\$ 16.511.134,14
2006	01	\$ 151.825	2,02%	178	\$ 545.903,53	\$ 17.057.037,67
2006	02	\$ 151.825	2,02%	177	\$ 542.836,66	\$ 17.599.874,33
2006	03	\$ 151.825	2,02%	176	\$ 539.769,78	\$ 18.139.644,11
2006	04	\$ 151.825	2,02%	175	\$ 536.702,91	\$ 18.676.347,02
2006	05	\$ 151.825	2,02%	174	\$ 533.636,04	\$ 19.209.983,06
2006	06	\$ 151.825	2,02%	173	\$ 530.569,16	\$ 19.740.552,22
2006	M13	\$ 151.825	2,02%	173	\$ 530.569,16	\$ 20.271.121,38

2006	07	\$ 151.825	2,02%	172	\$ 527.502,29	\$ 20.798.623,67
2006	08	\$ 151.825	2,02%	171	\$ 524.435,41	\$ 21.323.059,08
2006	09	\$ 151.825	2,02%	170	\$ 521.368,54	\$ 21.844.427,62
2006	10	\$ 151.825	2,02%	169	\$ 518.301,67	\$ 22.362.729,29
2006	11	\$ 151.825	2,02%	168	\$ 515.234,79	\$ 22.877.964,08
2006	12	\$ 151.825	2,02%	167	\$ 512.167,92	\$ 23.390.132,00
2006	M14	\$ 151.825	2,02%	167	\$ 512.167,92	\$ 23.902.299,92
2007	01	\$ 158.627	2,02%	166	\$ 531.908,77	\$ 24.434.208,69
2007	02	\$ 158.627	2,02%	165	\$ 528.704,50	\$ 24.962.913,19
2007	03	\$ 158.627	2,02%	164	\$ 525.500,23	\$ 25.488.413,43
2007	04	\$ 158.627	2,02%	163	\$ 522.295,96	\$ 26.010.709,39
2007	05	\$ 158.627	2,02%	162	\$ 519.091,69	\$ 26.529.801,08
2007	06	\$ 158.627	2,02%	161	\$ 515.887,42	\$ 27.045.688,51
2007	M13	\$ 158.627	2,02%	161	\$ 515.887,42	\$ 27.561.575,93
2007	07	\$ 158.627	2,02%	160	\$ 512.683,15	\$ 28.074.259,08
2007	08	\$ 158.627	2,02%	159	\$ 509.478,88	\$ 28.583.737,97
2007	09	\$ 158.627	2,02%	158	\$ 506.274,61	\$ 29.090.012,58
2007	10	\$ 158.627	2,02%	157	\$ 503.070,34	\$ 29.593.082,92
2007	11	\$ 158.627	2,02%	156	\$ 499.866,07	\$ 30.092.949,00
2007	12	\$ 158.627	2,02%	155	\$ 496.661,81	\$ 30.589.610,80
2007	M14	\$ 158.627	2,02%	155	\$ 496.661,81	\$ 31.086.272,61
2008	01	\$ 167.653	2,02%	154	\$ 521.535,27	\$ 31.607.807,88
2008	02	\$ 167.653	2,02%	153	\$ 518.148,68	\$ 32.125.956,56
2008	03	\$ 167.653	2,02%	152	\$ 514.762,08	\$ 32.640.718,64
2008	04	\$ 167.653	2,02%	151	\$ 511.375,49	\$ 33.152.094,13
2008	05	\$ 167.653	2,02%	150	\$ 507.988,90	\$ 33.660.083,03
2008	06	\$ 167.653	2,02%	149	\$ 504.602,31	\$ 34.164.685,34
2008	M13	\$ 167.653	2,02%	149	\$ 504.602,31	\$ 34.669.287,64
2008	07	\$ 167.653	2,02%	148	\$ 501.215,71	\$ 35.170.503,35
2008	08	\$ 167.653	2,02%	147	\$ 497.829,12	\$ 35.668.332,47
2008	09	\$ 167.653	2,02%	146	\$ 494.442,53	\$ 36.162.775,00
2008	10	\$ 167.653	2,02%	145	\$ 491.055,94	\$ 36.653.830,94
2008	11	\$ 167.653	2,02%	144	\$ 487.669,34	\$ 37.141.500,28
2008	12	\$ 167.653	2,02%	143	\$ 484.282,75	\$ 37.625.783,03
2008	M14	\$ 167.653	2,02%	143	\$ 484.282,75	\$ 38.110.065,78
2009	01	\$ 180.512	2,02%	142	\$ 517.780,89	\$ 38.627.846,67
2009	02	\$ 180.512	2,02%	141	\$ 514.134,55	\$ 39.141.981,22
2009	03	\$ 180.512	2,02%	140	\$ 510.488,20	\$ 39.652.469,43
2009	04	\$ 180.512	2,02%	139	\$ 506.841,86	\$ 40.159.311,28
2009	05	\$ 180.512	2,02%	138	\$ 503.195,52	\$ 40.662.506,80
2009	06	\$ 180.512	2,02%	137	\$ 499.549,17	\$ 41.162.055,97
2009	M13	\$ 180.512	2,02%	137	\$ 499.549,17	\$ 41.661.605,14
2009	07	\$ 180.512	2,02%	136	\$ 495.902,83	\$ 42.157.507,97
2009	08	\$ 180.512	2,02%	135	\$ 492.256,48	\$ 42.649.764,45
2009	09	\$ 180.512	2,02%	134	\$ 488.610,14	\$ 43.138.374,59
2009	10	\$ 180.512	2,02%	133	\$ 484.963,79	\$ 43.623.338,38
2009	11	\$ 180.512	2,02%	132	\$ 481.317,45	\$ 44.104.655,83
2009	12	\$ 180.512	2,02%	131	\$ 477.671,11	\$ 44.582.326,94
2009	M14	\$ 180.512	2,02%	131	\$ 477.671,11	\$ 45.059.998,04
2010	01	\$ 184.122	2,02%	130	\$ 483.505,26	\$ 45.543.503,30
2010	02	\$ 184.122	2,02%	129	\$ 479.785,98	\$ 46.023.289,28
2010	03	\$ 184.122	2,02%	128	\$ 476.066,71	\$ 46.499.356,00
2010	04	\$ 184.122	2,02%	127	\$ 472.347,44	\$ 46.971.703,44
2010	05	\$ 184.122	2,02%	126	\$ 468.628,17	\$ 47.440.331,61
2010	06	\$ 184.122	2,02%	125	\$ 464.908,90	\$ 47.905.240,51
2010	M13	\$ 184.122	2,02%	125	\$ 464.908,90	\$ 48.370.149,41
2010	07	\$ 184.122	2,02%	124	\$ 461.189,63	\$ 48.831.339,04

2010	08	\$ 184.122	2,02%	123	\$ 457.470,36	\$ 49.288.809,40
2010	09	\$ 184.122	2,02%	122	\$ 453.751,09	\$ 49.742.560,48
2010	10	\$ 184.122	2,02%	121	\$ 450.031,82	\$ 50.192.592,30
2010	11	\$ 184.122	2,02%	120	\$ 446.312,54	\$ 50.638.904,84
2010	12	\$ 184.122	2,02%	119	\$ 442.593,27	\$ 51.081.498,12
2010	M14	\$ 184.122	2,02%	119	\$ 442.593,27	\$ 51.524.091,39
2011	01	\$ 189.959	2,02%	118	\$ 452.786,31	\$ 51.976.877,70
2011	02	\$ 189.959	2,02%	117	\$ 448.949,14	\$ 52.425.826,83
2011	03	\$ 189.959	2,02%	116	\$ 445.111,96	\$ 52.870.938,79
2011	04	\$ 189.959	2,02%	115	\$ 441.274,79	\$ 53.312.213,59
2011	05	\$ 189.959	2,02%	114	\$ 437.437,62	\$ 53.749.651,20
2011	06	\$ 189.959	2,02%	113	\$ 433.600,45	\$ 54.183.251,65
2011	M13	\$ 189.959	2,02%	113	\$ 433.600,45	\$ 54.616.852,10
2011	07	\$ 189.959	2,02%	112	\$ 429.763,27	\$ 55.046.615,37
2011	08	\$ 189.959	2,02%	111	\$ 425.926,10	\$ 55.472.541,48
2011	09	\$ 189.959	2,02%	110	\$ 422.088,93	\$ 55.894.630,41
2011	10	\$ 189.959	2,02%	109	\$ 418.251,76	\$ 56.312.882,17
2011	11	\$ 189.959	2,02%	108	\$ 414.414,59	\$ 56.727.296,75
2011	12	\$ 189.959	2,02%	107	\$ 410.577,41	\$ 57.137.874,17
2011	M14	\$ 189.959	2,02%	107	\$ 410.577,41	\$ 57.548.451,58
2012	01	\$ 197.044	2,02%	106	\$ 421.911,65	\$ 57.970.363,23
2012	02	\$ 197.044	2,02%	105	\$ 417.931,35	\$ 58.388.294,59
2012	03	\$ 197.044	2,02%	104	\$ 413.951,06	\$ 0,00
2012	04	\$ 197.044	2,02%	103	\$ 409.970,76	\$ 59.212.216,40
2012	05	\$ 197.044	2,02%	102	\$ 405.990,46	\$ 59.618.206,86
2012	06	\$ 197.044	2,02%	101	\$ 402.010,16	\$ 60.020.217,02
2012	M13	\$ 197.044	2,02%	101	\$ 402.010,16	\$ 60.422.227,18
2012	07	\$ 197.044	2,02%	100	\$ 398.029,86	\$ 60.820.257,04
2012	08	\$ 197.044	2,02%	99	\$ 394.049,56	\$ 61.214.306,61
2012	09	\$ 197.044	2,02%	98	\$ 390.069,26	\$ 61.604.375,87
2012	10	\$ 197.044	2,02%	97	\$ 386.088,97	\$ 61.990.464,84
2012	11	\$ 197.044	2,02%	96	\$ 382.108,67	\$ 62.372.573,50
2012	12	\$ 197.044	2,02%	95	\$ 378.128,37	\$ 62.750.701,87
2012	M14	\$ 197.044	2,02%	95	\$ 378.128,37	\$ 63.128.830,24
2013	01	\$ 201.852	2,02%	94	\$ 383.277,28	\$ 63.512.107,52
2013	02	\$ 201.852	2,02%	93	\$ 379.199,86	\$ 63.891.307,39
2013	03	\$ 201.852	2,02%	92	\$ 375.122,45	\$ 64.266.429,84
2013	04	\$ 201.852	2,02%	91	\$ 371.045,03	\$ 64.637.474,86
2013	05	\$ 201.852	2,02%	90	\$ 366.967,61	\$ 65.004.442,48
2013	06	\$ 201.852	2,02%	89	\$ 362.890,19	\$ 65.367.332,67
2013	M13	\$ 201.852	2,02%	89	\$ 362.890,19	\$ 65.730.222,86
2013	07	\$ 201.852	2,02%	88	\$ 358.812,78	\$ 66.089.035,64
2013	08	\$ 201.852	2,02%	87	\$ 354.735,36	\$ 66.443.771,00
2013	09	\$ 201.852	2,02%	86	\$ 350.657,94	\$ 66.794.428,93
2013	10	\$ 201.852	2,02%	85	\$ 346.580,52	\$ 67.141.009,46
2013	11	\$ 201.852	2,02%	84	\$ 342.503,10	\$ 67.483.512,56
2013	12	\$ 201.852	2,02%	83	\$ 338.425,69	\$ 67.821.938,25
2013	M14	\$ 201.852	2,02%	83	\$ 338.425,69	\$ 68.160.363,93
2014	01	\$ 205.768	2,02%	82	\$ 340.834,62	\$ 68.501.198,56
2014	02	\$ 205.768	2,02%	81	\$ 336.678,10	\$ 68.837.876,66
2014	03	\$ 205.768	2,02%	80	\$ 332.521,58	\$ 69.170.398,25
2014	04	\$ 205.768	2,02%	79	\$ 328.365,06	\$ 69.498.763,31
2014	05	\$ 205.768	2,02%	78	\$ 324.208,55	\$ 69.822.971,86
2014	06	\$ 205.768	2,02%	77	\$ 320.052,03	\$ 70.143.023,88
2014	M13	\$ 205.768	2,02%	77	\$ 320.052,03	\$ 70.463.075,91
2014	07	\$ 205.768	2,02%	76	\$ 315.895,51	\$ 70.778.971,41
2014	08	\$ 205.768	2,02%	75	\$ 311.738,99	\$ 71.090.710,40

2014	09	\$ 205.768	2,02%	74	\$ 307.582,47	\$ 71.398.292,86
2014	10	\$ 205.768	2,02%	73	\$ 303.425,95	\$ 71.701.718,81
2014	11	\$ 205.768	2,02%	72	\$ 299.269,43	\$ 72.000.988,24
2014	12	\$ 205.768	2,02%	71	\$ 295.112,91	\$ 72.296.101,14
2014	M14	\$ 205.768	2,02%	71	\$ 295.112,91	\$ 72.591.214,05
2015	01	\$ 213.299	2,02%	70	\$ 301.605,39	\$ 72.892.819,44
2015	02	\$ 213.299	2,02%	69	\$ 297.296,74	\$ 73.190.116,18
2015	03	\$ 213.299	2,02%	68	\$ 292.988,09	\$ 73.483.104,28
2015	04	\$ 213.299	2,02%	67	\$ 288.679,45	\$ 73.771.783,72
2015	05	\$ 213.299	2,02%	66	\$ 284.370,80	\$ 74.056.154,52
2015	06	\$ 213.299	2,02%	65	\$ 280.062,15	\$ 74.336.216,67
2015	M13	\$ 213.299	2,02%	65	\$ 280.062,15	\$ 74.616.278,81
2015	07	\$ 213.299	2,02%	64	\$ 275.753,50	\$ 74.892.032,31
2015	08	\$ 213.299	2,02%	63	\$ 271.444,85	\$ 75.163.477,17
2015	09	\$ 213.299	2,02%	62	\$ 267.136,20	\$ 75.430.613,37
2015	10	\$ 213.299	2,02%	61	\$ 262.827,55	\$ 75.693.440,92
2015	11	\$ 213.299	2,02%	60	\$ 258.518,91	\$ 75.951.959,83
2015	12	\$ 213.299	2,02%	59	\$ 254.210,26	\$ 76.206.170,09
2015	M14	\$ 213.299	2,02%	59	\$ 254.210,26	\$ 76.460.380,34
2016	01	\$ 227.740	2,02%	58	\$ 266.819,95	\$ 76.727.200,29
2016	02	\$ 227.740	2,02%	57	\$ 262.219,60	\$ 76.989.419,90
2016	03	\$ 227.740	2,02%	56	\$ 257.619,26	\$ 77.247.039,16
2016	04	\$ 227.740	2,02%	55	\$ 253.018,92	\$ 77.500.058,07
2016	05	\$ 227.740	2,02%	54	\$ 248.418,57	\$ 77.748.476,65
2016	06	\$ 227.740	2,02%	53	\$ 243.818,23	\$ 77.992.294,87
2016	M13	\$ 227.740	2,02%	53	\$ 243.818,23	\$ 78.236.113,10
2016	07	\$ 227.740	2,02%	52	\$ 239.217,88	\$ 78.475.330,99
2016	08	\$ 227.740	2,02%	51	\$ 234.617,54	\$ 78.709.948,53
2016	09	\$ 227.740	2,02%	50	\$ 230.017,20	\$ 78.939.965,72
2016	10	\$ 227.740	2,02%	49	\$ 225.416,85	\$ 79.165.382,58
2016	11	\$ 227.740	2,02%	48	\$ 220.816,51	\$ 79.386.199,09
2016	12	\$ 227.740	2,02%	47	\$ 216.216,16	\$ 79.602.415,25
2016	M14	\$ 227.740	2,02%	47	\$ 216.216,16	\$ 79.818.631,42
2017	01	\$ 240.835	2,02%	46	\$ 223.783,73	\$ 80.042.415,15
2017	02	\$ 240.835	2,02%	45	\$ 218.918,87	\$ 80.261.334,01
2017	03	\$ 240.835	2,02%	44	\$ 214.054,00	\$ 80.475.388,02
2017	04	\$ 240.835	2,02%	43	\$ 209.189,14	\$ 80.684.577,16
2017	05	\$ 240.835	2,02%	42	\$ 204.324,28	\$ 80.888.901,43
2017	06	\$ 240.835	2,02%	41	\$ 199.459,41	\$ 81.088.360,84
2017	M13	\$ 240.835	2,02%	41	\$ 199.459,41	\$ 81.287.820,26
2017	07	\$ 240.835	2,02%	40	\$ 194.594,55	\$ 81.482.414,80
2017	08	\$ 240.835	2,02%	39	\$ 189.729,68	\$ 81.672.144,49
2017	09	\$ 240.835	2,02%	38	\$ 184.864,82	\$ 81.857.009,31
2017	10	\$ 240.835	2,02%	37	\$ 179.999,96	\$ 82.037.009,27
2017	11	\$ 240.835	2,02%	36	\$ 175.135,09	\$ 82.212.144,36
2017	12	\$ 240.835	2,02%	35	\$ 170.270,23	\$ 82.382.414,59
2017	M14	\$ 240.835	2,02%	35	\$ 170.270,23	\$ 82.552.684,82
2018	01	\$ 250.685	2,02%	34	\$ 172.170,45	\$ 82.724.855,27
2018	02	\$ 250.685	2,02%	33	\$ 167.106,61	\$ 82.891.961,88
2018	03	\$ 250.685	2,02%	32	\$ 162.042,77	\$ 83.054.004,65
2018	04	\$ 250.685	2,02%	31	\$ 156.978,94	\$ 83.210.983,58
2018	05	\$ 250.685	2,02%	30	\$ 151.915,10	\$ 83.362.898,68
2018	06	\$ 250.685	2,02%	29	\$ 146.851,26	\$ 83.509.749,95
2018	M13	\$ 250.685	2,02%	29	\$ 146.851,26	\$ 83.656.601,21
2018	07	\$ 250.685	2,02%	28	\$ 141.787,43	\$ 83.798.388,63
2018	08	\$ 250.685	2,02%	27	\$ 136.723,59	\$ 83.935.112,22
2018	09	\$ 250.685	2,02%	26	\$ 131.659,75	\$ 84.066.771,98

2018	10	\$ 250.685	2,02%	25	\$ 126.595,92	\$ 84.193.367,89
2018	11	\$ 250.685	2,02%	24	\$ 121.532,08	\$ 84.314.899,97
2018	12	\$ 250.685	2,02%	23	\$ 116.468,24	\$ 84.431.368,21
2018	M14	\$ 250.685	2,02%	23	\$ 116.468,24	\$ 84.547.836,46
2019	01	\$ 258.657	2,02%	22	\$ 114.947,07	\$ 84.662.783,52
2019	02	\$ 258.657	2,02%	21	\$ 109.722,20	\$ 84.772.505,72
2019	03	\$ 258.657	2,02%	20	\$ 104.497,33	\$ 84.877.003,05
2019	04	\$ 258.657	2,02%	19	\$ 99.272,47	\$ 84.976.275,52
2019	05	\$ 258.657	2,02%	18	\$ 94.047,60	\$ 85.070.323,12
2019	06	\$ 258.657	2,02%	17	\$ 88.822,73	\$ 85.159.145,85
2019	M13	\$ 258.657	2,02%	17	\$ 88.822,73	\$ 85.247.968,59
2019	07	\$ 258.657	2,02%	16	\$ 83.597,87	\$ 85.331.566,45
2019	08	\$ 258.657	2,02%	15	\$ 78.373,00	\$ 85.409.939,45
2019	09	\$ 258.657	2,02%	14	\$ 73.148,13	\$ 85.483.087,58
2019	10	\$ 258.657	2,02%	13	\$ 67.923,27	\$ 85.551.010,85
2019	11	\$ 258.657	2,02%	12	\$ 62.698,40	\$ 85.613.709,25
2019	12	\$ 258.657	2,02%	11	\$ 57.473,53	\$ 85.671.182,78
2019	M14	\$ 258.657	2,02%	11	\$ 57.473,53	\$ 85.728.656,32
2020	01	\$ 268.486	2,02%	10	\$ 54.234,12	\$ 85.782.890,43
2020	02	\$ 268.486	2,02%	9	\$ 48.810,70	\$ 85.831.701,14
2020	03	\$ 268.486	2,02%	8	\$ 43.387,29	\$ 85.875.088,43
2020	04	\$ 268.486	2,02%	7	\$ 37.963,88	\$ 85.913.052,31
2020	05	\$ 268.486	2,02%	6	\$ 32.540,47	\$ 85.945.592,78
2020	06	\$ 268.486	2,02%	5	\$ 27.117,06	\$ 85.972.709,84
2020	M13	\$ 268.486	2,02%	5	\$ 27.117,06	\$ 85.999.826,90
2020	07	\$ 268.486	2,02%	4	\$ 21.693,65	\$ 86.021.520,54
2020	08	\$ 268.486	2,02%	3	\$ 16.270,23	\$ 86.037.790,78
2020	09	\$ 268.486	2,02%	2	\$ 10.846,82	\$ 86.048.637,60
2020	10	\$ 268.486	2,02%	1	\$ 5.423,41	\$ 86.054.061,01

30. NUBIA BOADA DUEÑAS

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2007	\$ 113.198,81	5,69%	0,36	\$ 40.751,57
2008	\$ 119.639,82	7,67%	14	\$ 1.674.957,51
2009	\$ 128.816,20	2,00%	14	\$ 1.803.426,75
2010	\$ 131.392,52	3,17%	14	\$ 1.839.495,29
2011	\$ 135.557,66	3,73%	14	\$ 1.897.807,29
2012	\$ 140.613,96	2,44%	14	\$ 1.968.595,50
2013	\$ 144.044,95	1,94%	14	\$ 2.016.629,23
2014	\$ 146.839,42	3,66%	14	\$ 2.055.751,84
2015	\$ 152.213,74	6,77%	14	\$ 2.130.992,36
2016	\$ 162.518,61	5,75%	14	\$ 2.275.260,54
2017	\$ 171.863,43	4,09%	14	\$ 2.406.088,02
2018	\$ 178.892,64	3,18%	14	\$ 2.504.497,02
2019	\$ 184.581,43	3,80%	14	\$ 2.584.140,02
2020	\$ 191.595,52	1,61%	11	\$ 2.107.550,77
				\$ 27.305.943,71

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2007	12	\$ 248.643	2,02%	155	\$ 778.501,23	\$ 778.501,23
2007	M14	\$ 248.643	2,02%	155	\$ 778.501,23	\$ 1.557.002,47
2008	01	\$ 119.640	2,02%	154	\$ 372.175,56	\$ 1.929.178,03
2008	02	\$ 119.640	2,02%	153	\$ 369.758,83	\$ 2.298.936,86
2008	03	\$ 119.640	2,02%	152	\$ 367.342,11	\$ 2.666.278,97

2008	04	\$ 119.640	2,02%	151	\$ 364.925,39	\$ 3.031.204,36
2008	05	\$ 119.640	2,02%	150	\$ 362.508,66	\$ 3.393.713,02
2008	06	\$ 119.640	2,02%	149	\$ 360.091,94	\$ 3.753.804,95
2008	M13	\$ 119.640	2,02%	149	\$ 360.091,94	\$ 4.113.896,89
2008	07	\$ 119.640	2,02%	148	\$ 357.675,21	\$ 4.471.572,10
2008	08	\$ 119.640	2,02%	147	\$ 355.258,49	\$ 4.826.830,59
2008	09	\$ 119.640	2,02%	146	\$ 352.841,76	\$ 5.179.672,36
2008	10	\$ 119.640	2,02%	145	\$ 350.425,04	\$ 5.530.097,40
2008	11	\$ 119.640	2,02%	144	\$ 348.008,32	\$ 5.878.105,71
2008	12	\$ 119.640	2,02%	143	\$ 345.591,59	\$ 6.223.697,30
2008	M14	\$ 119.640	2,02%	143	\$ 345.591,59	\$ 6.569.288,89
2009	01	\$ 128.816	2,02%	142	\$ 369.496,38	\$ 6.938.785,27
2009	02	\$ 128.816	2,02%	141	\$ 366.894,29	\$ 7.305.679,56
2009	03	\$ 128.816	2,02%	140	\$ 364.292,20	\$ 7.669.971,77
2009	04	\$ 128.816	2,02%	139	\$ 361.690,12	\$ 8.031.661,88
2009	05	\$ 128.816	2,02%	138	\$ 359.088,03	\$ 8.390.749,91
2009	06	\$ 128.816	2,02%	137	\$ 356.485,94	\$ 8.747.235,86
2009	M13	\$ 128.816	2,02%	137	\$ 356.485,94	\$ 9.103.721,80
2009	07	\$ 128.816	2,02%	136	\$ 353.883,86	\$ 9.457.605,65
2009	08	\$ 128.816	2,02%	135	\$ 351.281,77	\$ 9.808.887,42
2009	09	\$ 128.816	2,02%	134	\$ 348.679,68	\$ 10.157.567,10
2009	10	\$ 128.816	2,02%	133	\$ 346.077,59	\$ 10.503.644,70
2009	11	\$ 128.816	2,02%	132	\$ 343.475,51	\$ 10.847.120,20
2009	12	\$ 128.816	2,02%	131	\$ 340.873,42	\$ 11.187.993,62
2009	M14	\$ 128.816	2,02%	131	\$ 340.873,42	\$ 11.528.867,04
2010	01	\$ 131.393	2,02%	130	\$ 345.036,76	\$ 11.873.903,80
2010	02	\$ 131.393	2,02%	129	\$ 342.382,63	\$ 12.216.286,43
2010	03	\$ 131.393	2,02%	128	\$ 339.728,50	\$ 12.556.014,93
2010	04	\$ 131.393	2,02%	127	\$ 337.074,37	\$ 12.893.089,31
2010	05	\$ 131.393	2,02%	126	\$ 334.420,24	\$ 13.227.509,55
2010	06	\$ 131.393	2,02%	125	\$ 331.766,11	\$ 13.559.275,66
2010	M13	\$ 131.393	2,02%	125	\$ 331.766,11	\$ 13.891.041,78
2010	07	\$ 131.393	2,02%	124	\$ 329.111,99	\$ 14.220.153,76
2010	08	\$ 131.393	2,02%	123	\$ 326.457,86	\$ 14.546.611,62
2010	09	\$ 131.393	2,02%	122	\$ 323.803,73	\$ 14.870.415,35
2010	10	\$ 131.393	2,02%	121	\$ 321.149,60	\$ 15.191.564,95
2010	11	\$ 131.393	2,02%	120	\$ 318.495,47	\$ 15.510.060,42
2010	12	\$ 131.393	2,02%	119	\$ 315.841,34	\$ 15.825.901,76
2010	M14	\$ 131.393	2,02%	119	\$ 315.841,34	\$ 16.141.743,10
2011	01	\$ 135.558	2,02%	118	\$ 323.115,25	\$ 16.464.858,35
2011	02	\$ 135.558	2,02%	117	\$ 320.376,98	\$ 16.785.235,33
2011	03	\$ 135.558	2,02%	116	\$ 317.638,72	\$ 17.102.874,05
2011	04	\$ 135.558	2,02%	115	\$ 314.900,45	\$ 17.417.774,50
2011	05	\$ 135.558	2,02%	114	\$ 312.162,19	\$ 17.729.936,69
2011	06	\$ 135.558	2,02%	113	\$ 309.423,92	\$ 18.039.360,61
2011	M13	\$ 135.558	2,02%	113	\$ 309.423,92	\$ 18.348.784,53
2011	07	\$ 135.558	2,02%	112	\$ 306.685,66	\$ 18.655.470,19
2011	08	\$ 135.558	2,02%	111	\$ 303.947,39	\$ 18.959.417,58
2011	09	\$ 135.558	2,02%	110	\$ 301.209,13	\$ 19.260.626,71
2011	10	\$ 135.558	2,02%	109	\$ 298.470,86	\$ 19.559.097,57
2011	11	\$ 135.558	2,02%	108	\$ 295.732,60	\$ 19.854.830,17
2011	12	\$ 135.558	2,02%	107	\$ 292.994,33	\$ 20.147.824,51
2011	M14	\$ 135.558	2,02%	107	\$ 292.994,33	\$ 20.440.818,84
2012	01	\$ 140.614	2,02%	106	\$ 301.082,62	\$ 20.741.901,46
2012	02	\$ 140.614	2,02%	105	\$ 298.242,22	\$ 21.040.143,68
2012	03	\$ 140.614	2,02%	104	\$ 295.401,82	\$ 0,00
2012	04	\$ 140.614	2,02%	103	\$ 292.561,41	\$ 21.628.106,91

2012	05	\$ 140.614	2,02%	102	\$ 289.721,01	\$ 21.917.827,92
2012	06	\$ 140.614	2,02%	101	\$ 286.880,61	\$ 22.204.708,53
2012	M13	\$ 140.614	2,02%	101	\$ 286.880,61	\$ 22.491.589,14
2012	07	\$ 140.614	2,02%	100	\$ 284.040,21	\$ 22.775.629,35
2012	08	\$ 140.614	2,02%	99	\$ 281.199,81	\$ 23.056.829,16
2012	09	\$ 140.614	2,02%	98	\$ 278.359,40	\$ 23.335.188,56
2012	10	\$ 140.614	2,02%	97	\$ 275.519,00	\$ 23.610.707,56
2012	11	\$ 140.614	2,02%	96	\$ 272.678,60	\$ 23.883.386,16
2012	12	\$ 140.614	2,02%	95	\$ 269.838,20	\$ 24.153.224,36
2012	M14	\$ 140.614	2,02%	95	\$ 269.838,20	\$ 24.423.062,56
2013	01	\$ 144.045	2,02%	94	\$ 273.512,54	\$ 24.696.575,10
2013	02	\$ 144.045	2,02%	93	\$ 270.602,83	\$ 24.967.177,93
2013	03	\$ 144.045	2,02%	92	\$ 267.693,13	\$ 25.234.871,06
2013	04	\$ 144.045	2,02%	91	\$ 264.783,42	\$ 25.499.654,47
2013	05	\$ 144.045	2,02%	90	\$ 261.873,71	\$ 25.761.528,19
2013	06	\$ 144.045	2,02%	89	\$ 258.964,00	\$ 26.020.492,19
2013	M13	\$ 144.045	2,02%	89	\$ 258.964,00	\$ 26.279.456,19
2013	07	\$ 144.045	2,02%	88	\$ 256.054,29	\$ 26.535.510,48
2013	08	\$ 144.045	2,02%	87	\$ 253.144,59	\$ 26.788.655,07
2013	09	\$ 144.045	2,02%	86	\$ 250.234,88	\$ 27.038.889,95
2013	10	\$ 144.045	2,02%	85	\$ 247.325,17	\$ 27.286.215,12
2013	11	\$ 144.045	2,02%	84	\$ 244.415,46	\$ 27.530.630,58
2013	12	\$ 144.045	2,02%	83	\$ 241.505,75	\$ 27.772.136,34
2013	M14	\$ 144.045	2,02%	83	\$ 241.505,75	\$ 28.013.642,09
2014	01	\$ 146.839	2,02%	82	\$ 243.224,81	\$ 28.256.866,90
2014	02	\$ 146.839	2,02%	81	\$ 240.258,65	\$ 28.497.125,56
2014	03	\$ 146.839	2,02%	80	\$ 237.292,50	\$ 28.734.418,05
2014	04	\$ 146.839	2,02%	79	\$ 234.326,34	\$ 28.968.744,40
2014	05	\$ 146.839	2,02%	78	\$ 231.360,19	\$ 29.200.104,58
2014	06	\$ 146.839	2,02%	77	\$ 228.394,03	\$ 29.428.498,61
2014	M13	\$ 146.839	2,02%	77	\$ 228.394,03	\$ 29.656.892,64
2014	07	\$ 146.839	2,02%	76	\$ 225.427,87	\$ 29.882.320,51
2014	08	\$ 146.839	2,02%	75	\$ 222.461,72	\$ 30.104.782,23
2014	09	\$ 146.839	2,02%	74	\$ 219.495,56	\$ 30.324.277,79
2014	10	\$ 146.839	2,02%	73	\$ 216.529,40	\$ 30.540.807,19
2014	11	\$ 146.839	2,02%	72	\$ 213.563,25	\$ 30.754.370,44
2014	12	\$ 146.839	2,02%	71	\$ 210.597,09	\$ 30.964.967,53
2014	M14	\$ 146.839	2,02%	71	\$ 210.597,09	\$ 31.175.564,63
2015	01	\$ 152.214	2,02%	70	\$ 215.230,23	\$ 31.390.794,85
2015	02	\$ 152.214	2,02%	69	\$ 212.155,51	\$ 31.602.950,36
2015	03	\$ 152.214	2,02%	68	\$ 209.080,79	\$ 31.812.031,16
2015	04	\$ 152.214	2,02%	67	\$ 206.006,08	\$ 32.018.037,23
2015	05	\$ 152.214	2,02%	66	\$ 202.931,36	\$ 32.220.968,59
2015	06	\$ 152.214	2,02%	65	\$ 199.856,64	\$ 32.420.825,23
2015	M13	\$ 152.214	2,02%	65	\$ 199.856,64	\$ 32.620.681,87
2015	07	\$ 152.214	2,02%	64	\$ 196.781,92	\$ 32.817.463,79
2015	08	\$ 152.214	2,02%	63	\$ 193.707,21	\$ 33.011.171,00
2015	09	\$ 152.214	2,02%	62	\$ 190.632,49	\$ 33.201.803,49
2015	10	\$ 152.214	2,02%	61	\$ 187.557,77	\$ 33.389.361,26
2015	11	\$ 152.214	2,02%	60	\$ 184.483,05	\$ 33.573.844,31
2015	12	\$ 152.214	2,02%	59	\$ 181.408,33	\$ 33.755.252,64
2015	M14	\$ 152.214	2,02%	59	\$ 181.408,33	\$ 33.936.660,98
2016	01	\$ 162.519	2,02%	58	\$ 190.406,80	\$ 34.127.067,78
2016	02	\$ 162.519	2,02%	57	\$ 187.123,93	\$ 34.314.191,71
2016	03	\$ 162.519	2,02%	56	\$ 183.841,05	\$ 34.498.032,76
2016	04	\$ 162.519	2,02%	55	\$ 180.558,18	\$ 34.678.590,94
2016	05	\$ 162.519	2,02%	54	\$ 177.275,30	\$ 34.855.866,24

2016	06	\$ 162.519	2,02%	53	\$ 173.992,42	\$ 35.029.858,66
2016	M13	\$ 162.519	2,02%	53	\$ 173.992,42	\$ 35.203.851,08
2016	07	\$ 162.519	2,02%	52	\$ 170.709,55	\$ 35.374.560,63
2016	08	\$ 162.519	2,02%	51	\$ 167.426,67	\$ 35.541.987,30
2016	09	\$ 162.519	2,02%	50	\$ 164.143,80	\$ 35.706.131,10
2016	10	\$ 162.519	2,02%	49	\$ 160.860,92	\$ 35.866.992,02
2016	11	\$ 162.519	2,02%	48	\$ 157.578,04	\$ 36.024.570,06
2016	12	\$ 162.519	2,02%	47	\$ 154.295,17	\$ 36.178.865,23
2016	M14	\$ 162.519	2,02%	47	\$ 154.295,17	\$ 36.333.160,40
2017	01	\$ 171.863	2,02%	46	\$ 159.695,50	\$ 36.492.855,90
2017	02	\$ 171.863	2,02%	45	\$ 156.223,86	\$ 36.649.079,76
2017	03	\$ 171.863	2,02%	44	\$ 152.752,22	\$ 36.801.831,97
2017	04	\$ 171.863	2,02%	43	\$ 149.280,58	\$ 36.951.112,55
2017	05	\$ 171.863	2,02%	42	\$ 145.808,93	\$ 37.096.921,48
2017	06	\$ 171.863	2,02%	41	\$ 142.337,29	\$ 37.239.258,77
2017	M13	\$ 171.863	2,02%	41	\$ 142.337,29	\$ 37.381.596,07
2017	07	\$ 171.863	2,02%	40	\$ 138.865,65	\$ 37.520.461,72
2017	08	\$ 171.863	2,02%	39	\$ 135.394,01	\$ 37.655.855,73
2017	09	\$ 171.863	2,02%	38	\$ 131.922,37	\$ 37.787.778,10
2017	10	\$ 171.863	2,02%	37	\$ 128.450,73	\$ 37.916.228,83
2017	11	\$ 171.863	2,02%	36	\$ 124.979,09	\$ 38.041.207,91
2017	12	\$ 171.863	2,02%	35	\$ 121.507,44	\$ 38.162.715,36
2017	M14	\$ 171.863	2,02%	35	\$ 121.507,44	\$ 38.284.222,80
2018	01	\$ 178.893	2,02%	34	\$ 122.863,47	\$ 38.407.086,27
2018	02	\$ 178.893	2,02%	33	\$ 119.249,84	\$ 38.526.336,11
2018	03	\$ 178.893	2,02%	32	\$ 115.636,21	\$ 38.641.972,31
2018	04	\$ 178.893	2,02%	31	\$ 112.022,57	\$ 38.753.994,88
2018	05	\$ 178.893	2,02%	30	\$ 108.408,94	\$ 38.862.403,83
2018	06	\$ 178.893	2,02%	29	\$ 104.795,31	\$ 38.967.199,14
2018	M13	\$ 178.893	2,02%	29	\$ 104.795,31	\$ 39.071.994,45
2018	07	\$ 178.893	2,02%	28	\$ 101.181,68	\$ 39.173.176,13
2018	08	\$ 178.893	2,02%	27	\$ 97.568,05	\$ 39.270.744,18
2018	09	\$ 178.893	2,02%	26	\$ 93.954,42	\$ 39.364.698,59
2018	10	\$ 178.893	2,02%	25	\$ 90.340,79	\$ 39.455.039,38
2018	11	\$ 178.893	2,02%	24	\$ 86.727,15	\$ 39.541.766,53
2018	12	\$ 178.893	2,02%	23	\$ 83.113,52	\$ 39.624.880,06
2018	M14	\$ 178.893	2,02%	23	\$ 83.113,52	\$ 39.707.993,58
2019	01	\$ 184.581	2,02%	22	\$ 82.027,99	\$ 39.790.021,57
2019	02	\$ 184.581	2,02%	21	\$ 78.299,44	\$ 39.868.321,01
2019	03	\$ 184.581	2,02%	20	\$ 74.570,90	\$ 39.942.891,91
2019	04	\$ 184.581	2,02%	19	\$ 70.842,35	\$ 40.013.734,26
2019	05	\$ 184.581	2,02%	18	\$ 67.113,81	\$ 40.080.848,07
2019	06	\$ 184.581	2,02%	17	\$ 63.385,26	\$ 40.144.233,33
2019	M13	\$ 184.581	2,02%	17	\$ 63.385,26	\$ 40.207.618,59
2019	07	\$ 184.581	2,02%	16	\$ 59.656,72	\$ 40.267.275,31
2019	08	\$ 184.581	2,02%	15	\$ 55.928,17	\$ 40.323.203,48
2019	09	\$ 184.581	2,02%	14	\$ 52.199,63	\$ 40.375.403,11
2019	10	\$ 184.581	2,02%	13	\$ 48.471,08	\$ 40.423.874,20
2019	11	\$ 184.581	2,02%	12	\$ 44.742,54	\$ 40.468.616,74
2019	12	\$ 184.581	2,02%	11	\$ 41.013,99	\$ 40.509.630,73
2019	M14	\$ 184.581	2,02%	11	\$ 41.013,99	\$ 40.550.644,72
2020	01	\$ 191.596	2,02%	10	\$ 38.702,30	\$ 40.589.347,02
2020	02	\$ 191.596	2,02%	9	\$ 34.832,07	\$ 40.624.179,09
2020	03	\$ 191.596	2,02%	8	\$ 30.961,84	\$ 40.655.140,92
2020	04	\$ 191.596	2,02%	7	\$ 27.091,61	\$ 40.682.232,53
2020	05	\$ 191.596	2,02%	6	\$ 23.221,38	\$ 40.705.453,91
2020	06	\$ 191.596	2,02%	5	\$ 19.351,15	\$ 40.724.805,06

2020	M13	\$ 191.596	2,02%	5	\$ 19.351,15	\$ 40.744.156,20
2020	07	\$ 191.596	2,02%	4	\$ 15.480,92	\$ 40.759.637,12
2020	08	\$ 191.596	2,02%	3	\$ 11.610,69	\$ 40.771.247,81
2020	09	\$ 191.596	2,02%	2	\$ 7.740,46	\$ 40.778.988,27
2020	10	\$ 191.596	2,02%	1	\$ 3.870,23	\$ 40.782.858,50

31. RAMÓN URQUIJO LOBO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2002	\$ 110.615,22	6,99%	7	\$ 774.306,54
2003	\$ 118.347,22	6,49%	14	\$ 1.656.861,13
2004	\$ 126.027,96	5,50%	14	\$ 1.764.391,42
2005	\$ 132.959,50	4,85%	14	\$ 1.861.432,95
2006	\$ 139.408,03	4,48%	14	\$ 1.951.712,45
2007	\$ 145.653,51	5,69%	14	\$ 2.039.149,17
2008	\$ 153.941,20	7,67%	14	\$ 2.155.176,75
2009	\$ 165.748,49	2,00%	14	\$ 2.320.478,81
2010	\$ 169.063,46	3,17%	14	\$ 2.366.888,39
2011	\$ 174.422,77	3,73%	14	\$ 2.441.918,75
2012	\$ 180.928,74	2,44%	14	\$ 2.533.002,32
2013	\$ 185.343,40	1,94%	14	\$ 2.594.807,57
2014	\$ 188.939,06	3,66%	14	\$ 2.645.146,84
2015	\$ 195.854,23	6,77%	14	\$ 2.741.959,22
2016	\$ 209.113,56	5,75%	14	\$ 2.927.589,85
2017	\$ 221.137,59	4,09%	14	\$ 3.095.926,27
2018	\$ 230.182,12	3,18%	14	\$ 3.222.549,66
2019	\$ 237.501,91	3,80%	14	\$ 3.325.026,73
2020	\$ 246.526,98	1,61%	11	\$ 2.711.796,80
				\$ 40.934.562,53

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2002	07	\$ 110.615	2,02%	220	\$ 491.573,06	\$ 491.573,06
2002	08	\$ 110.615	2,02%	219	\$ 489.338,64	\$ 980.911,70
2002	09	\$ 110.615	2,02%	218	\$ 487.104,21	\$ 1.468.015,91
2002	10	\$ 110.615	2,02%	217	\$ 484.869,79	\$ 1.952.885,70
2002	11	\$ 110.615	2,02%	216	\$ 482.635,37	\$ 2.435.521,07
2002	12	\$ 110.615	2,02%	215	\$ 480.400,95	\$ 2.915.922,02
2002	M14	\$ 110.615	2,02%	215	\$ 480.400,95	\$ 3.396.322,96
2003	01	\$ 118.347	2,02%	214	\$ 511.591,38	\$ 3.907.914,34
2003	02	\$ 118.347	2,02%	213	\$ 509.200,77	\$ 4.417.115,10
2003	03	\$ 118.347	2,02%	212	\$ 506.810,15	\$ 4.923.925,26
2003	04	\$ 118.347	2,02%	211	\$ 504.419,54	\$ 5.428.344,79
2003	05	\$ 118.347	2,02%	210	\$ 502.028,92	\$ 5.930.373,72
2003	06	\$ 118.347	2,02%	209	\$ 499.638,31	\$ 6.430.012,03
2003	M13	\$ 118.347	2,02%	209	\$ 499.638,31	\$ 6.929.650,34
2003	07	\$ 118.347	2,02%	208	\$ 497.247,70	\$ 7.426.898,03
2003	08	\$ 118.347	2,02%	207	\$ 494.857,08	\$ 7.921.755,11
2003	09	\$ 118.347	2,02%	206	\$ 492.466,47	\$ 8.414.221,58
2003	10	\$ 118.347	2,02%	205	\$ 490.075,85	\$ 8.904.297,44
2003	11	\$ 118.347	2,02%	204	\$ 487.685,24	\$ 9.391.982,68
2003	12	\$ 118.347	2,02%	203	\$ 485.294,63	\$ 9.877.277,30
2003	M14	\$ 118.347	2,02%	203	\$ 485.294,63	\$ 10.362.571,93
2004	01	\$ 126.028	2,02%	202	\$ 514.244,48	\$ 10.876.816,41
2004	02	\$ 126.028	2,02%	201	\$ 511.698,72	\$ 11.388.515,13
2004	03	\$ 126.028	2,02%	200	\$ 509.152,95	\$ 11.897.668,08
2004	04	\$ 126.028	2,02%	199	\$ 506.607,19	\$ 12.404.275,27
2004	05	\$ 126.028	2,02%	198	\$ 504.061,42	\$ 12.908.336,70

2004	06	\$ 126.028	2,02%	197	\$ 501.515,66	\$ 13.409.852,35
2004	M13	\$ 126.028	2,02%	197	\$ 501.515,66	\$ 13.911.368,01
2004	07	\$ 126.028	2,02%	196	\$ 498.969,89	\$ 14.410.337,91
2004	08	\$ 126.028	2,02%	195	\$ 496.424,13	\$ 14.906.762,04
2004	09	\$ 126.028	2,02%	194	\$ 493.878,36	\$ 15.400.640,40
2004	10	\$ 126.028	2,02%	193	\$ 491.332,60	\$ 15.891.973,00
2004	11	\$ 126.028	2,02%	192	\$ 488.786,84	\$ 16.380.759,84
2004	12	\$ 126.028	2,02%	191	\$ 486.241,07	\$ 16.867.000,91
2004	M14	\$ 126.028	2,02%	191	\$ 486.241,07	\$ 17.353.241,98
2005	01	\$ 132.959	2,02%	190	\$ 510.298,55	\$ 17.863.540,52
2005	02	\$ 132.959	2,02%	189	\$ 507.612,77	\$ 18.371.153,29
2005	03	\$ 132.959	2,02%	188	\$ 504.926,98	\$ 18.876.080,27
2005	04	\$ 132.959	2,02%	187	\$ 502.241,20	\$ 19.378.321,48
2005	05	\$ 132.959	2,02%	186	\$ 499.555,42	\$ 19.877.876,90
2005	06	\$ 132.959	2,02%	185	\$ 496.869,64	\$ 20.374.746,53
2005	M13	\$ 132.959	2,02%	185	\$ 496.869,64	\$ 20.871.616,17
2005	07	\$ 132.959	2,02%	184	\$ 494.183,86	\$ 21.365.800,03
2005	08	\$ 132.959	2,02%	183	\$ 491.498,07	\$ 21.857.298,10
2005	09	\$ 132.959	2,02%	182	\$ 488.812,29	\$ 22.346.110,40
2005	10	\$ 132.959	2,02%	181	\$ 486.126,51	\$ 22.832.236,91
2005	11	\$ 132.959	2,02%	180	\$ 483.440,73	\$ 23.315.677,64
2005	12	\$ 132.959	2,02%	179	\$ 480.754,95	\$ 23.796.432,58
2005	M14	\$ 132.959	2,02%	179	\$ 480.754,95	\$ 24.277.187,53
2006	01	\$ 139.408	2,02%	178	\$ 501.255,52	\$ 24.778.443,05
2006	02	\$ 139.408	2,02%	177	\$ 498.439,48	\$ 25.276.882,53
2006	03	\$ 139.408	2,02%	176	\$ 495.623,44	\$ 25.772.505,96
2006	04	\$ 139.408	2,02%	175	\$ 492.807,39	\$ 26.265.313,36
2006	05	\$ 139.408	2,02%	174	\$ 489.991,35	\$ 26.755.304,71
2006	06	\$ 139.408	2,02%	173	\$ 487.175,31	\$ 27.242.480,02
2006	M13	\$ 139.408	2,02%	173	\$ 487.175,31	\$ 27.729.655,32
2006	07	\$ 139.408	2,02%	172	\$ 484.359,27	\$ 28.214.014,59
2006	08	\$ 139.408	2,02%	171	\$ 481.543,22	\$ 28.695.557,81
2006	09	\$ 139.408	2,02%	170	\$ 478.727,18	\$ 29.174.285,00
2006	10	\$ 139.408	2,02%	169	\$ 475.911,14	\$ 29.650.196,14
2006	11	\$ 139.408	2,02%	168	\$ 473.095,10	\$ 30.123.291,23
2006	12	\$ 139.408	2,02%	167	\$ 470.279,06	\$ 30.593.570,29
2006	M14	\$ 139.408	2,02%	167	\$ 470.279,06	\$ 31.063.849,34
2007	01	\$ 145.654	2,02%	166	\$ 488.405,36	\$ 31.552.254,70
2007	02	\$ 145.654	2,02%	165	\$ 485.463,15	\$ 32.037.717,85
2007	03	\$ 145.654	2,02%	164	\$ 482.520,95	\$ 32.520.238,81
2007	04	\$ 145.654	2,02%	163	\$ 479.578,75	\$ 32.999.817,56
2007	05	\$ 145.654	2,02%	162	\$ 476.636,55	\$ 33.476.454,11
2007	06	\$ 145.654	2,02%	161	\$ 473.694,35	\$ 33.950.148,47
2007	M13	\$ 145.654	2,02%	161	\$ 473.694,35	\$ 34.423.842,82
2007	07	\$ 145.654	2,02%	160	\$ 470.752,15	\$ 34.894.594,97
2007	08	\$ 145.654	2,02%	159	\$ 467.809,95	\$ 35.362.404,92
2007	09	\$ 145.654	2,02%	158	\$ 464.867,75	\$ 35.827.272,66
2007	10	\$ 145.654	2,02%	157	\$ 461.925,55	\$ 36.289.198,21
2007	11	\$ 145.654	2,02%	156	\$ 458.983,35	\$ 36.748.181,56
2007	12	\$ 145.654	2,02%	155	\$ 456.041,15	\$ 37.204.222,70
2007	M14	\$ 145.654	2,02%	155	\$ 456.041,15	\$ 37.660.263,85
2008	01	\$ 153.941	2,02%	154	\$ 478.880,27	\$ 38.139.144,12
2008	02	\$ 153.941	2,02%	153	\$ 475.770,66	\$ 38.614.914,79
2008	03	\$ 153.941	2,02%	152	\$ 472.661,05	\$ 39.087.575,84
2008	04	\$ 153.941	2,02%	151	\$ 469.551,44	\$ 39.557.127,28
2008	05	\$ 153.941	2,02%	150	\$ 466.441,83	\$ 40.023.569,10
2008	06	\$ 153.941	2,02%	149	\$ 463.332,21	\$ 40.486.901,31
2008	M13	\$ 153.941	2,02%	149	\$ 463.332,21	\$ 40.950.233,53
2008	07	\$ 153.941	2,02%	148	\$ 460.222,60	\$ 41.410.456,13

2008	08	\$ 153.941	2,02%	147	\$ 457.112,99	\$ 41.867.569,12
2008	09	\$ 153.941	2,02%	146	\$ 454.003,38	\$ 42.321.572,50
2008	10	\$ 153.941	2,02%	145	\$ 450.893,77	\$ 42.772.466,26
2008	11	\$ 153.941	2,02%	144	\$ 447.784,15	\$ 43.220.250,41
2008	12	\$ 153.941	2,02%	143	\$ 444.674,54	\$ 43.664.924,96
2008	M14	\$ 153.941	2,02%	143	\$ 444.674,54	\$ 44.109.599,50
2009	01	\$ 165.748	2,02%	142	\$ 475.432,96	\$ 44.585.032,45
2009	02	\$ 165.748	2,02%	141	\$ 472.084,84	\$ 45.057.117,29
2009	03	\$ 165.748	2,02%	140	\$ 468.736,72	\$ 45.525.854,01
2009	04	\$ 165.748	2,02%	139	\$ 465.388,60	\$ 45.991.242,61
2009	05	\$ 165.748	2,02%	138	\$ 462.040,48	\$ 46.453.283,09
2009	06	\$ 165.748	2,02%	137	\$ 458.692,36	\$ 46.911.975,46
2009	M13	\$ 165.748	2,02%	137	\$ 458.692,36	\$ 47.370.667,82
2009	07	\$ 165.748	2,02%	136	\$ 455.344,24	\$ 47.826.012,06
2009	08	\$ 165.748	2,02%	135	\$ 451.996,12	\$ 48.278.008,18
2009	09	\$ 165.748	2,02%	134	\$ 448.648,00	\$ 48.726.656,19
2009	10	\$ 165.748	2,02%	133	\$ 445.299,88	\$ 49.171.956,07
2009	11	\$ 165.748	2,02%	132	\$ 441.951,76	\$ 49.613.907,83
2009	12	\$ 165.748	2,02%	131	\$ 438.603,64	\$ 50.052.511,48
2009	M14	\$ 165.748	2,02%	131	\$ 438.603,64	\$ 50.491.115,12
2010	01	\$ 169.063	2,02%	130	\$ 443.960,64	\$ 50.935.075,76
2010	02	\$ 169.063	2,02%	129	\$ 440.545,55	\$ 51.375.621,31
2010	03	\$ 169.063	2,02%	128	\$ 437.130,47	\$ 51.812.751,79
2010	04	\$ 169.063	2,02%	127	\$ 433.715,39	\$ 52.246.467,18
2010	05	\$ 169.063	2,02%	126	\$ 430.300,31	\$ 52.676.767,48
2010	06	\$ 169.063	2,02%	125	\$ 426.885,23	\$ 53.103.652,71
2010	M13	\$ 169.063	2,02%	125	\$ 426.885,23	\$ 53.530.537,94
2010	07	\$ 169.063	2,02%	124	\$ 423.470,15	\$ 53.954.008,08
2010	08	\$ 169.063	2,02%	123	\$ 420.055,06	\$ 54.374.063,15
2010	09	\$ 169.063	2,02%	122	\$ 416.639,98	\$ 54.790.703,13
2010	10	\$ 169.063	2,02%	121	\$ 413.224,90	\$ 55.203.928,03
2010	11	\$ 169.063	2,02%	120	\$ 409.809,82	\$ 55.613.737,85
2010	12	\$ 169.063	2,02%	119	\$ 406.394,74	\$ 56.020.132,58
2010	M14	\$ 169.063	2,02%	119	\$ 406.394,74	\$ 56.426.527,32
2011	01	\$ 174.423	2,02%	118	\$ 415.754,11	\$ 56.842.281,43
2011	02	\$ 174.423	2,02%	117	\$ 412.230,77	\$ 57.254.512,20
2011	03	\$ 174.423	2,02%	116	\$ 408.707,43	\$ 57.663.219,63
2011	04	\$ 174.423	2,02%	115	\$ 405.184,09	\$ 58.068.403,71
2011	05	\$ 174.423	2,02%	114	\$ 401.660,75	\$ 58.470.064,46
2011	06	\$ 174.423	2,02%	113	\$ 398.137,41	\$ 58.868.201,87
2011	M13	\$ 174.423	2,02%	113	\$ 398.137,41	\$ 59.266.339,28
2011	07	\$ 174.423	2,02%	112	\$ 394.614,07	\$ 59.660.953,35
2011	08	\$ 174.423	2,02%	111	\$ 391.090,73	\$ 60.052.044,08
2011	09	\$ 174.423	2,02%	110	\$ 387.567,39	\$ 60.439.611,47
2011	10	\$ 174.423	2,02%	109	\$ 384.044,05	\$ 60.823.655,52
2011	11	\$ 174.423	2,02%	108	\$ 380.520,71	\$ 61.204.176,23
2011	12	\$ 174.423	2,02%	107	\$ 376.997,37	\$ 61.581.173,60
2011	M14	\$ 174.423	2,02%	107	\$ 376.997,37	\$ 61.958.170,97
2012	01	\$ 180.929	2,02%	106	\$ 387.404,61	\$ 62.345.575,59
2012	02	\$ 180.929	2,02%	105	\$ 383.749,85	\$ 62.729.325,44
2012	03	\$ 180.929	2,02%	104	\$ 380.095,09	\$ 0,00
2012	04	\$ 180.929	2,02%	103	\$ 376.440,33	\$ 63.485.860,86
2012	05	\$ 180.929	2,02%	102	\$ 372.785,57	\$ 63.858.646,43
2012	06	\$ 180.929	2,02%	101	\$ 369.130,81	\$ 64.227.777,24
2012	M13	\$ 180.929	2,02%	101	\$ 369.130,81	\$ 64.596.908,05
2012	07	\$ 180.929	2,02%	100	\$ 365.476,05	\$ 64.962.384,09
2012	08	\$ 180.929	2,02%	99	\$ 361.821,29	\$ 65.324.205,38
2012	09	\$ 180.929	2,02%	98	\$ 358.166,53	\$ 65.682.371,91
2012	10	\$ 180.929	2,02%	97	\$ 354.511,77	\$ 66.036.883,68

2012	11	\$ 180.929	2,02%	96	\$ 350.857,01	\$ 66.387.740,68
2012	12	\$ 180.929	2,02%	95	\$ 347.202,25	\$ 66.734.942,93
2012	M14	\$ 180.929	2,02%	95	\$ 347.202,25	\$ 67.082.145,18
2013	01	\$ 185.343	2,02%	94	\$ 351.930,04	\$ 67.434.075,22
2013	02	\$ 185.343	2,02%	93	\$ 348.186,11	\$ 67.782.261,33
2013	03	\$ 185.343	2,02%	92	\$ 344.442,17	\$ 68.126.703,50
2013	04	\$ 185.343	2,02%	91	\$ 340.698,23	\$ 68.467.401,73
2013	05	\$ 185.343	2,02%	90	\$ 336.954,30	\$ 68.804.356,03
2013	06	\$ 185.343	2,02%	89	\$ 333.210,36	\$ 69.137.566,39
2013	M13	\$ 185.343	2,02%	89	\$ 333.210,36	\$ 69.470.776,75
2013	07	\$ 185.343	2,02%	88	\$ 329.466,42	\$ 69.800.243,18
2013	08	\$ 185.343	2,02%	87	\$ 325.722,49	\$ 70.125.965,67
2013	09	\$ 185.343	2,02%	86	\$ 321.978,55	\$ 70.447.944,22
2013	10	\$ 185.343	2,02%	85	\$ 318.234,61	\$ 70.766.178,83
2013	11	\$ 185.343	2,02%	84	\$ 314.490,68	\$ 71.080.669,51
2013	12	\$ 185.343	2,02%	83	\$ 310.746,74	\$ 71.391.416,25
2013	M14	\$ 185.343	2,02%	83	\$ 310.746,74	\$ 71.702.162,99
2014	01	\$ 188.939	2,02%	82	\$ 312.958,66	\$ 72.015.121,65
2014	02	\$ 188.939	2,02%	81	\$ 309.142,09	\$ 72.324.263,74
2014	03	\$ 188.939	2,02%	80	\$ 305.325,52	\$ 72.629.589,26
2014	04	\$ 188.939	2,02%	79	\$ 301.508,95	\$ 72.931.098,22
2014	05	\$ 188.939	2,02%	78	\$ 297.692,38	\$ 73.228.790,60
2014	06	\$ 188.939	2,02%	77	\$ 293.875,81	\$ 73.522.666,41
2014	M13	\$ 188.939	2,02%	77	\$ 293.875,81	\$ 73.816.542,23
2014	07	\$ 188.939	2,02%	76	\$ 290.059,25	\$ 74.106.601,47
2014	08	\$ 188.939	2,02%	75	\$ 286.242,68	\$ 74.392.844,15
2014	09	\$ 188.939	2,02%	74	\$ 282.426,11	\$ 74.675.270,26
2014	10	\$ 188.939	2,02%	73	\$ 278.609,54	\$ 74.953.879,79
2014	11	\$ 188.939	2,02%	72	\$ 274.792,97	\$ 75.228.672,76
2014	12	\$ 188.939	2,02%	71	\$ 270.976,40	\$ 75.499.649,16
2014	M14	\$ 188.939	2,02%	71	\$ 270.976,40	\$ 75.770.625,56
2015	01	\$ 195.854	2,02%	70	\$ 276.937,88	\$ 76.047.563,44
2015	02	\$ 195.854	2,02%	69	\$ 272.981,63	\$ 76.320.545,07
2015	03	\$ 195.854	2,02%	68	\$ 269.025,37	\$ 76.589.570,44
2015	04	\$ 195.854	2,02%	67	\$ 265.069,11	\$ 76.854.639,55
2015	05	\$ 195.854	2,02%	66	\$ 261.112,86	\$ 77.115.752,41
2015	06	\$ 195.854	2,02%	65	\$ 257.156,60	\$ 77.372.909,02
2015	M13	\$ 195.854	2,02%	65	\$ 257.156,60	\$ 77.630.065,62
2015	07	\$ 195.854	2,02%	64	\$ 253.200,35	\$ 77.883.265,97
2015	08	\$ 195.854	2,02%	63	\$ 249.244,09	\$ 78.132.510,06
2015	09	\$ 195.854	2,02%	62	\$ 245.287,84	\$ 78.377.797,90
2015	10	\$ 195.854	2,02%	61	\$ 241.331,58	\$ 78.619.129,48
2015	11	\$ 195.854	2,02%	60	\$ 237.375,33	\$ 78.856.504,81
2015	12	\$ 195.854	2,02%	59	\$ 233.419,07	\$ 79.089.923,88
2015	M14	\$ 195.854	2,02%	59	\$ 233.419,07	\$ 79.323.342,95
2016	01	\$ 209.114	2,02%	58	\$ 244.997,45	\$ 79.568.340,40
2016	02	\$ 209.114	2,02%	57	\$ 240.773,35	\$ 79.809.113,75
2016	03	\$ 209.114	2,02%	56	\$ 236.549,26	\$ 80.045.663,01
2016	04	\$ 209.114	2,02%	55	\$ 232.325,17	\$ 80.277.988,18
2016	05	\$ 209.114	2,02%	54	\$ 228.101,07	\$ 80.506.089,25
2016	06	\$ 209.114	2,02%	53	\$ 223.876,98	\$ 80.729.966,23
2016	M13	\$ 209.114	2,02%	53	\$ 223.876,98	\$ 80.953.843,21
2016	07	\$ 209.114	2,02%	52	\$ 219.652,88	\$ 81.173.496,09
2016	08	\$ 209.114	2,02%	51	\$ 215.428,79	\$ 81.388.924,88
2016	09	\$ 209.114	2,02%	50	\$ 211.204,70	\$ 81.600.129,58
2016	10	\$ 209.114	2,02%	49	\$ 206.980,60	\$ 81.807.110,18
2016	11	\$ 209.114	2,02%	48	\$ 202.756,51	\$ 82.009.866,69
2016	12	\$ 209.114	2,02%	47	\$ 198.532,41	\$ 82.208.399,10
2016	M14	\$ 209.114	2,02%	47	\$ 198.532,41	\$ 82.406.931,52

2017	01	\$ 221.138	2,02%	46	\$ 205.481,05	\$ 82.612.412,57
2017	02	\$ 221.138	2,02%	45	\$ 201.014,07	\$ 82.813.426,64
2017	03	\$ 221.138	2,02%	44	\$ 196.547,09	\$ 83.009.973,73
2017	04	\$ 221.138	2,02%	43	\$ 192.080,11	\$ 83.202.053,84
2017	05	\$ 221.138	2,02%	42	\$ 187.613,13	\$ 83.389.666,97
2017	06	\$ 221.138	2,02%	41	\$ 183.146,15	\$ 83.572.813,13
2017	M13	\$ 221.138	2,02%	41	\$ 183.146,15	\$ 83.755.959,28
2017	07	\$ 221.138	2,02%	40	\$ 178.679,17	\$ 83.934.638,45
2017	08	\$ 221.138	2,02%	39	\$ 174.212,19	\$ 84.108.850,65
2017	09	\$ 221.138	2,02%	38	\$ 169.745,21	\$ 84.278.595,86
2017	10	\$ 221.138	2,02%	37	\$ 165.278,24	\$ 84.443.874,10
2017	11	\$ 221.138	2,02%	36	\$ 160.811,26	\$ 84.604.685,35
2017	12	\$ 221.138	2,02%	35	\$ 156.344,28	\$ 84.761.029,63
2017	M14	\$ 221.138	2,02%	35	\$ 156.344,28	\$ 84.917.373,90
2018	01	\$ 230.182	2,02%	34	\$ 158.089,08	\$ 85.075.462,98
2018	02	\$ 230.182	2,02%	33	\$ 153.439,40	\$ 85.228.902,38
2018	03	\$ 230.182	2,02%	32	\$ 148.789,72	\$ 85.377.692,10
2018	04	\$ 230.182	2,02%	31	\$ 144.140,04	\$ 85.521.832,15
2018	05	\$ 230.182	2,02%	30	\$ 139.490,36	\$ 85.661.322,51
2018	06	\$ 230.182	2,02%	29	\$ 134.840,68	\$ 85.796.163,20
2018	M13	\$ 230.182	2,02%	29	\$ 134.840,68	\$ 85.931.003,88
2018	07	\$ 230.182	2,02%	28	\$ 130.191,01	\$ 86.061.194,89
2018	08	\$ 230.182	2,02%	27	\$ 125.541,33	\$ 86.186.736,21
2018	09	\$ 230.182	2,02%	26	\$ 120.891,65	\$ 86.307.627,86
2018	10	\$ 230.182	2,02%	25	\$ 116.241,97	\$ 86.423.869,83
2018	11	\$ 230.182	2,02%	24	\$ 111.592,29	\$ 86.535.462,12
2018	12	\$ 230.182	2,02%	23	\$ 106.942,61	\$ 86.642.404,74
2018	M14	\$ 230.182	2,02%	23	\$ 106.942,61	\$ 86.749.347,35
2019	01	\$ 237.502	2,02%	22	\$ 105.545,85	\$ 86.854.893,20
2019	02	\$ 237.502	2,02%	21	\$ 100.748,31	\$ 86.955.641,51
2019	03	\$ 237.502	2,02%	20	\$ 95.950,77	\$ 87.051.592,28
2019	04	\$ 237.502	2,02%	19	\$ 91.153,23	\$ 87.142.745,51
2019	05	\$ 237.502	2,02%	18	\$ 86.355,69	\$ 87.229.101,20
2019	06	\$ 237.502	2,02%	17	\$ 81.558,16	\$ 87.310.659,36
2019	M13	\$ 237.502	2,02%	17	\$ 81.558,16	\$ 87.392.217,52
2019	07	\$ 237.502	2,02%	16	\$ 76.760,62	\$ 87.468.978,13
2019	08	\$ 237.502	2,02%	15	\$ 71.963,08	\$ 87.540.941,21
2019	09	\$ 237.502	2,02%	14	\$ 67.165,54	\$ 87.608.106,75
2019	10	\$ 237.502	2,02%	13	\$ 62.368,00	\$ 87.670.474,75
2019	11	\$ 237.502	2,02%	12	\$ 57.570,46	\$ 87.728.045,22
2019	12	\$ 237.502	2,02%	11	\$ 52.772,92	\$ 87.780.818,14
2019	M14	\$ 237.502	2,02%	11	\$ 52.772,92	\$ 87.833.591,07
2020	01	\$ 246.527	2,02%	10	\$ 49.798,45	\$ 87.883.389,52
2020	02	\$ 246.527	2,02%	9	\$ 44.818,61	\$ 87.928.208,12
2020	03	\$ 246.527	2,02%	8	\$ 39.838,76	\$ 87.968.046,88
2020	04	\$ 246.527	2,02%	7	\$ 34.858,92	\$ 88.002.905,80
2020	05	\$ 246.527	2,02%	6	\$ 29.879,07	\$ 88.032.784,87
2020	06	\$ 246.527	2,02%	5	\$ 24.899,23	\$ 88.057.684,09
2020	M13	\$ 246.527	2,02%	5	\$ 24.899,23	\$ 88.082.583,32
2020	07	\$ 246.527	2,02%	4	\$ 19.919,38	\$ 88.102.502,70
2020	08	\$ 246.527	2,02%	3	\$ 14.939,54	\$ 88.117.442,23
2020	09	\$ 246.527	2,02%	2	\$ 9.959,69	\$ 88.127.401,92
2020	10	\$ 246.527	2,02%	1	\$ 4.979,85	\$ 88.132.381,77
2020	11	\$ 246.527	2,02%	0	\$ 0,00	\$ 88.132.381,77

32. RAFAEL ENRIQUE ARAMBULA RAMÍREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo

1989	\$ 55.140,61	26,12%	7	\$ 385.984,27
1990	\$ 69.543,34	32,36%	14	\$ 973.606,72
1991	\$ 92.047,56	26,82%	14	\$ 1.288.665,86
1992	\$ 116.734,72	25,13%	14	\$ 1.634.286,04
1993	\$ 146.070,15	22,60%	14	\$ 2.044.982,12
1994	\$ 179.082,01	22,59%	14	\$ 2.507.148,08
1995	\$ 219.536,63	19,46%	14	\$ 3.073.512,84
1996	\$ 262.258,46	21,63%	14	\$ 3.671.618,43
1997	\$ 318.984,96	17,68%	14	\$ 4.465.789,50
1998	\$ 375.381,51	16,70%	14	\$ 5.255.341,08
1999	\$ 438.070,22	9,23%	14	\$ 6.132.983,04
2000	\$ 478.504,10	8,75%	14	\$ 6.699.057,38
2001	\$ 520.373,21	7,65%	14	\$ 7.285.224,90
2002	\$ 560.181,76	6,99%	14	\$ 7.842.544,61
2003	\$ 599.338,46	6,49%	14	\$ 8.390.738,47
2004	\$ 638.235,53	5,50%	14	\$ 8.935.297,40
2005	\$ 673.338,48	4,85%	14	\$ 9.426.738,76
2006	\$ 705.995,40	4,48%	14	\$ 9.883.935,59
2007	\$ 737.623,99	5,69%	14	\$ 10.326.735,90
2008	\$ 779.594,80	7,67%	14	\$ 10.914.327,17
2009	\$ 839.389,72	2,00%	14	\$ 11.751.456,07
2010	\$ 856.177,51	3,17%	14	\$ 11.986.485,19
2011	\$ 883.318,34	3,73%	14	\$ 12.366.456,77
2012	\$ 916.266,11	2,44%	14	\$ 12.827.725,61
2013	\$ 938.623,01	1,94%	14	\$ 13.140.722,11
2014	\$ 956.832,29	3,66%	14	\$ 13.395.652,12
2015	\$ 991.852,36	6,77%	14	\$ 13.885.932,99
2016	\$1.059.000,76	5,75%	14	\$ 14.826.010,65
2017	\$1.119.893,30	4,09%	14	\$ 15.678.506,27
2018	\$1.165.696,94	3,18%	14	\$ 16.319.757,17
2019	\$1.202.766,10	3,80%	14	\$ 16.838.725,45
2020	\$1.248.471,22	1,61%	11	\$ 13.733.183,37
				\$ 207.302.351,19

33- GLADYS JAIMES MALDONADO sustituta de CIRO ALFONSO SILVA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1985	\$ 23.698,89	22,45%	14	\$ 331.784,46
1986	\$ 29.019,29	20,95%	14	\$ 406.270,07
1987	\$ 35.098,83	24,02%	14	\$ 491.383,65
1988	\$ 43.529,57	28,12%	14	\$ 609.414,00
1989	\$ 55.770,09	26,12%	14	\$ 780.781,22
1990	\$ 70.337,23	32,36%	14	\$ 984.721,28
1991	\$ 93.098,36	26,82%	14	\$ 1.303.377,08
1992	\$ 118.067,34	25,13%	14	\$ 1.652.942,82
1993	\$ 147.737,67	22,60%	14	\$ 2.068.327,35
1994	\$ 181.126,38	22,59%	14	\$ 2.535.769,33
1995	\$ 222.042,83	19,46%	14	\$ 3.108.599,62
1996	\$ 265.252,36	21,63%	14	\$ 3.713.533,10
1997	\$ 322.626,45	17,68%	14	\$ 4.516.770,31
1998	\$ 379.666,81	16,70%	14	\$ 5.315.335,30
1999	\$ 443.071,16	9,23%	14	\$ 6.202.996,30
2000	\$ 483.966,63	8,75%	14	\$ 6.775.532,86
2001	\$ 526.313,71	7,65%	14	\$ 7.368.391,98
2002	\$ 566.576,71	6,99%	14	\$ 7.932.073,97
2003	\$ 606.180,42	6,49%	14	\$ 8.486.525,94
2004	\$ 645.521,53	5,50%	14	\$ 9.037.301,47
2005	\$ 681.025,22	4,85%	14	\$ 9.534.353,06

2006	\$ 714.054,94	4,48%	14	\$ 9.996.769,18
2007	\$ 746.044,60	5,69%	14	\$ 10.444.624,44
2008	\$ 788.494,54	7,67%	14	\$ 11.038.923,57
2009	\$ 848.972,07	2,00%	14	\$ 11.885.609,01
2010	\$ 865.951,51	3,17%	14	\$ 12.123.321,19
2011	\$ 893.402,18	3,73%	14	\$ 12.507.630,47
2012	\$ 926.726,08	2,44%	14	\$ 12.974.165,08
2013	\$ 949.338,19	1,94%	14	\$ 13.290.734,71
2014	\$ 967.755,35	3,66%	14	\$ 13.548.574,97
2015	\$1.003.175,20	6,77%	14	\$ 14.044.452,81
2016	\$1.071.090,16	5,75%	14	\$ 14.995.262,27
2017	\$1.132.677,85	4,09%	14	\$ 15.857.489,85
2018	\$1.179.004,37	3,18%	14	\$ 16.506.061,18
2019	\$1.216.496,71	3,80%	14	\$ 17.030.953,93
2020	\$1.262.723,58	1,61%	11	\$ 13.889.959,42
				\$ 209.668.885,11

34. FANNY ZAFRA CALDERÓN

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2001	\$ 97.563,13	7,65%	13,4	\$ 1.307.345,94
2002	\$ 105.026,71	6,99%	14	\$ 1.470.373,93
2003	\$ 112.368,08	6,49%	14	\$ 1.573.153,07
2004	\$ 119.660,76	5,50%	14	\$ 1.675.250,70
2005	\$ 126.242,11	4,85%	14	\$ 1.767.389,49
2006	\$ 132.364,85	4,48%	14	\$ 1.853.107,88
2007	\$ 138.294,79	5,69%	14	\$ 1.936.127,12
2008	\$ 146.163,77	7,67%	14	\$ 2.046.292,75
2009	\$ 157.374,53	2,00%	14	\$ 2.203.243,40
2010	\$ 160.522,02	3,17%	14	\$ 2.247.308,27
2011	\$ 165.610,57	3,73%	14	\$ 2.318.547,94
2012	\$ 171.787,84	2,44%	14	\$ 2.405.029,78
2013	\$ 175.979,46	1,94%	14	\$ 2.463.712,51
2014	\$ 179.393,47	3,66%	14	\$ 2.511.508,53
2015	\$ 185.959,27	6,77%	14	\$ 2.603.429,74
2016	\$ 198.548,71	5,75%	14	\$ 2.779.681,94
2017	\$ 209.965,26	4,09%	14	\$ 2.939.513,65
2018	\$ 218.552,84	3,18%	14	\$ 3.059.739,76
2019	\$ 225.502,82	3,80%	14	\$ 3.157.039,48
2020	\$ 234.071,93	1,61%	11	\$ 2.574.791,20
				\$ 38.866.463,45

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2001	01	\$ 97.563	2,02%	238	\$ 469.044,50	\$ 469.044,50
2001	02	\$ 97.563	2,02%	237	\$ 467.073,73	\$ 936.118,23
2001	03	\$ 97.563	2,02%	236	\$ 465.102,95	\$ 1.401.221,19
2001	04	\$ 97.563	2,02%	235	\$ 463.132,18	\$ 1.864.353,36
2001	05	\$ 97.563	2,02%	234	\$ 461.161,40	\$ 2.325.514,77
2001	06	\$ 97.563	2,02%	233	\$ 459.190,63	\$ 2.784.705,39
2001	M13	\$ 97.563	2,02%	233	\$ 459.190,63	\$ 3.243.896,02
2001	07	\$ 97.563	2,02%	232	\$ 457.219,85	\$ 3.701.115,87
2001	08	\$ 97.563	2,02%	231	\$ 455.249,08	\$ 4.156.364,95
2001	09	\$ 97.563	2,02%	230	\$ 453.278,30	\$ 4.609.643,25
2001	10	\$ 97.563	2,02%	229	\$ 451.307,53	\$ 5.060.950,78
2001	11	\$ 97.563	2,02%	228	\$ 449.336,75	\$ 5.510.287,53
2001	12	\$ 97.563	2,02%	227	\$ 447.365,98	\$ 5.957.653,51

2001	M14	\$ 97.563	2,02%	227	\$ 447.365,98	\$ 6.405.019,48
2002	01	\$ 105.027	2,02%	226	\$ 479.467,93	\$ 6.884.487,42
2002	02	\$ 105.027	2,02%	225	\$ 477.346,39	\$ 7.361.833,81
2002	03	\$ 105.027	2,02%	224	\$ 475.224,85	\$ 7.837.058,67
2002	04	\$ 105.027	2,02%	223	\$ 473.103,32	\$ 8.310.161,98
2002	05	\$ 105.027	2,02%	222	\$ 470.981,78	\$ 8.781.143,76
2002	06	\$ 105.027	2,02%	221	\$ 468.860,24	\$ 9.250.004,00
2002	M13	\$ 105.027	2,02%	221	\$ 468.860,24	\$ 9.718.864,23
2002	07	\$ 105.027	2,02%	220	\$ 466.738,70	\$ 10.185.602,93
2002	08	\$ 105.027	2,02%	219	\$ 464.617,16	\$ 10.650.220,09
2002	09	\$ 105.027	2,02%	218	\$ 462.495,62	\$ 11.112.715,70
2002	10	\$ 105.027	2,02%	217	\$ 460.374,08	\$ 11.573.089,78
2002	11	\$ 105.027	2,02%	216	\$ 458.252,54	\$ 12.031.342,32
2002	12	\$ 105.027	2,02%	215	\$ 456.131,00	\$ 12.487.473,32
2002	M14	\$ 105.027	2,02%	215	\$ 456.131,00	\$ 12.943.604,32
2003	01	\$ 112.368	2,02%	214	\$ 485.744,72	\$ 13.429.349,04
2003	02	\$ 112.368	2,02%	213	\$ 483.474,89	\$ 13.912.823,92
2003	03	\$ 112.368	2,02%	212	\$ 481.205,05	\$ 14.394.028,98
2003	04	\$ 112.368	2,02%	211	\$ 478.935,22	\$ 14.872.964,19
2003	05	\$ 112.368	2,02%	210	\$ 476.665,38	\$ 15.349.629,57
2003	06	\$ 112.368	2,02%	209	\$ 474.395,55	\$ 15.824.025,12
2003	M13	\$ 112.368	2,02%	209	\$ 474.395,55	\$ 16.298.420,66
2003	07	\$ 112.368	2,02%	208	\$ 472.125,71	\$ 16.770.546,37
2003	08	\$ 112.368	2,02%	207	\$ 469.855,87	\$ 17.240.402,25
2003	09	\$ 112.368	2,02%	206	\$ 467.586,04	\$ 17.707.988,29
2003	10	\$ 112.368	2,02%	205	\$ 465.316,20	\$ 18.173.304,49
2003	11	\$ 112.368	2,02%	204	\$ 463.046,37	\$ 18.636.350,86
2003	12	\$ 112.368	2,02%	203	\$ 460.776,53	\$ 19.097.127,39
2003	M14	\$ 112.368	2,02%	203	\$ 460.776,53	\$ 19.557.903,93
2004	01	\$ 119.661	2,02%	202	\$ 488.263,78	\$ 20.046.167,71
2004	02	\$ 119.661	2,02%	201	\$ 485.846,64	\$ 20.532.014,35
2004	03	\$ 119.661	2,02%	200	\$ 483.429,49	\$ 21.015.443,84
2004	04	\$ 119.661	2,02%	199	\$ 481.012,34	\$ 21.496.456,18
2004	05	\$ 119.661	2,02%	198	\$ 478.595,19	\$ 21.975.051,37
2004	06	\$ 119.661	2,02%	197	\$ 476.178,05	\$ 22.451.229,42
2004	M13	\$ 119.661	2,02%	197	\$ 476.178,05	\$ 22.927.407,47
2004	07	\$ 119.661	2,02%	196	\$ 473.760,90	\$ 23.401.168,37
2004	08	\$ 119.661	2,02%	195	\$ 471.343,75	\$ 23.872.512,12
2004	09	\$ 119.661	2,02%	194	\$ 468.926,60	\$ 24.341.438,72
2004	10	\$ 119.661	2,02%	193	\$ 466.509,46	\$ 24.807.948,18
2004	11	\$ 119.661	2,02%	192	\$ 464.092,31	\$ 25.272.040,49
2004	12	\$ 119.661	2,02%	191	\$ 461.675,16	\$ 25.733.715,65
2004	M14	\$ 119.661	2,02%	191	\$ 461.675,16	\$ 26.195.390,81
2005	01	\$ 126.242	2,02%	190	\$ 484.517,21	\$ 26.679.908,02
2005	02	\$ 126.242	2,02%	189	\$ 481.967,11	\$ 27.161.875,13
2005	03	\$ 126.242	2,02%	188	\$ 479.417,02	\$ 27.641.292,16
2005	04	\$ 126.242	2,02%	187	\$ 476.866,93	\$ 28.118.159,09
2005	05	\$ 126.242	2,02%	186	\$ 474.316,84	\$ 28.592.475,93
2005	06	\$ 126.242	2,02%	185	\$ 471.766,75	\$ 29.064.242,69
2005	M13	\$ 126.242	2,02%	185	\$ 471.766,75	\$ 29.536.009,44
2005	07	\$ 126.242	2,02%	184	\$ 469.216,66	\$ 30.005.226,10
2005	08	\$ 126.242	2,02%	183	\$ 466.666,57	\$ 30.471.892,67
2005	09	\$ 126.242	2,02%	182	\$ 464.116,48	\$ 30.936.009,15
2005	10	\$ 126.242	2,02%	181	\$ 461.566,39	\$ 31.397.575,54
2005	11	\$ 126.242	2,02%	180	\$ 459.016,30	\$ 31.856.591,84
2005	12	\$ 126.242	2,02%	179	\$ 456.466,21	\$ 32.313.058,05
2005	M14	\$ 126.242	2,02%	179	\$ 456.466,21	\$ 32.769.524,26
2006	01	\$ 132.365	2,02%	178	\$ 475.931,05	\$ 33.245.455,31
2006	02	\$ 132.365	2,02%	177	\$ 473.257,28	\$ 33.718.712,59

2006	03	\$ 132.365	2,02%	176	\$ 470.583,51	\$ 34.189.296,10
2006	04	\$ 132.365	2,02%	175	\$ 467.909,74	\$ 34.657.205,84
2006	05	\$ 132.365	2,02%	174	\$ 465.235,97	\$ 35.122.441,81
2006	06	\$ 132.365	2,02%	173	\$ 462.562,20	\$ 35.585.004,01
2006	M13	\$ 132.365	2,02%	173	\$ 462.562,20	\$ 36.047.566,21
2006	07	\$ 132.365	2,02%	172	\$ 459.888,43	\$ 36.507.454,65
2006	08	\$ 132.365	2,02%	171	\$ 457.214,66	\$ 36.964.669,31
2006	09	\$ 132.365	2,02%	170	\$ 454.540,89	\$ 37.419.210,20
2006	10	\$ 132.365	2,02%	169	\$ 451.867,12	\$ 37.871.077,32
2006	11	\$ 132.365	2,02%	168	\$ 449.193,35	\$ 38.320.270,67
2006	12	\$ 132.365	2,02%	167	\$ 446.519,58	\$ 38.766.790,25
2006	M14	\$ 132.365	2,02%	167	\$ 446.519,58	\$ 39.213.309,83
2007	01	\$ 138.295	2,02%	166	\$ 463.730,10	\$ 39.677.039,93
2007	02	\$ 138.295	2,02%	165	\$ 460.936,55	\$ 40.137.976,48
2007	03	\$ 138.295	2,02%	164	\$ 458.142,99	\$ 40.596.119,48
2007	04	\$ 138.295	2,02%	163	\$ 455.349,44	\$ 41.051.468,92
2007	05	\$ 138.295	2,02%	162	\$ 452.555,88	\$ 41.504.024,80
2007	06	\$ 138.295	2,02%	161	\$ 449.762,33	\$ 41.953.787,13
2007	M13	\$ 138.295	2,02%	161	\$ 449.762,33	\$ 42.403.549,46
2007	07	\$ 138.295	2,02%	160	\$ 446.968,77	\$ 42.850.518,23
2007	08	\$ 138.295	2,02%	159	\$ 444.175,22	\$ 43.294.693,45
2007	09	\$ 138.295	2,02%	158	\$ 441.381,66	\$ 43.736.075,12
2007	10	\$ 138.295	2,02%	157	\$ 438.588,11	\$ 44.174.663,23
2007	11	\$ 138.295	2,02%	156	\$ 435.794,56	\$ 44.610.457,78
2007	12	\$ 138.295	2,02%	155	\$ 433.001,00	\$ 45.043.458,78
2007	M14	\$ 138.295	2,02%	155	\$ 433.001,00	\$ 45.476.459,78
2008	01	\$ 146.164	2,02%	154	\$ 454.686,25	\$ 45.931.146,03
2008	02	\$ 146.164	2,02%	153	\$ 451.733,74	\$ 46.382.879,77
2008	03	\$ 146.164	2,02%	152	\$ 448.781,23	\$ 46.831.661,00
2008	04	\$ 146.164	2,02%	151	\$ 445.828,72	\$ 47.277.489,73
2008	05	\$ 146.164	2,02%	150	\$ 442.876,22	\$ 47.720.365,95
2008	06	\$ 146.164	2,02%	149	\$ 439.923,71	\$ 48.160.289,65
2008	M13	\$ 146.164	2,02%	149	\$ 439.923,71	\$ 48.600.213,36
2008	07	\$ 146.164	2,02%	148	\$ 436.971,20	\$ 49.037.184,56
2008	08	\$ 146.164	2,02%	147	\$ 434.018,69	\$ 49.471.203,25
2008	09	\$ 146.164	2,02%	146	\$ 431.066,18	\$ 49.902.269,44
2008	10	\$ 146.164	2,02%	145	\$ 428.113,68	\$ 50.330.383,11
2008	11	\$ 146.164	2,02%	144	\$ 425.161,17	\$ 50.755.544,28
2008	12	\$ 146.164	2,02%	143	\$ 422.208,66	\$ 51.177.752,94
2008	M14	\$ 146.164	2,02%	143	\$ 422.208,66	\$ 51.599.961,60
2009	01	\$ 157.375	2,02%	142	\$ 451.413,10	\$ 52.051.374,70
2009	02	\$ 157.375	2,02%	141	\$ 448.234,13	\$ 52.499.608,83
2009	03	\$ 157.375	2,02%	140	\$ 445.055,17	\$ 52.944.664,00
2009	04	\$ 157.375	2,02%	139	\$ 441.876,20	\$ 53.386.540,20
2009	05	\$ 157.375	2,02%	138	\$ 438.697,24	\$ 53.825.237,44
2009	06	\$ 157.375	2,02%	137	\$ 435.518,27	\$ 54.260.755,71
2009	M13	\$ 157.375	2,02%	137	\$ 435.518,27	\$ 54.696.273,98
2009	07	\$ 157.375	2,02%	136	\$ 432.339,31	\$ 55.128.613,29
2009	08	\$ 157.375	2,02%	135	\$ 429.160,34	\$ 55.557.773,63
2009	09	\$ 157.375	2,02%	134	\$ 425.981,37	\$ 55.983.755,00
2009	10	\$ 157.375	2,02%	133	\$ 422.802,41	\$ 56.406.557,41
2009	11	\$ 157.375	2,02%	132	\$ 419.623,44	\$ 56.826.180,85
2009	12	\$ 157.375	2,02%	131	\$ 416.444,48	\$ 57.242.625,33
2009	M14	\$ 157.375	2,02%	131	\$ 416.444,48	\$ 57.659.069,81
2010	01	\$ 160.522	2,02%	130	\$ 421.530,82	\$ 58.080.600,63
2010	02	\$ 160.522	2,02%	129	\$ 418.288,28	\$ 58.498.888,91
2010	03	\$ 160.522	2,02%	128	\$ 415.045,73	\$ 58.913.934,65
2010	04	\$ 160.522	2,02%	127	\$ 411.803,19	\$ 59.325.737,83
2010	05	\$ 160.522	2,02%	126	\$ 408.560,64	\$ 59.734.298,48

2010	06	\$ 160.522	2,02%	125	\$ 405.318,10	\$ 60.139.616,58
2010	M13	\$ 160.522	2,02%	125	\$ 405.318,10	\$ 60.544.934,68
2010	07	\$ 160.522	2,02%	124	\$ 402.075,55	\$ 60.947.010,23
2010	08	\$ 160.522	2,02%	123	\$ 398.833,01	\$ 61.345.843,24
2010	09	\$ 160.522	2,02%	122	\$ 395.590,46	\$ 61.741.433,70
2010	10	\$ 160.522	2,02%	121	\$ 392.347,92	\$ 62.133.781,62
2010	11	\$ 160.522	2,02%	120	\$ 389.105,38	\$ 62.522.887,00
2010	12	\$ 160.522	2,02%	119	\$ 385.862,83	\$ 62.908.749,83
2010	M14	\$ 160.522	2,02%	119	\$ 385.862,83	\$ 63.294.612,66
2011	01	\$ 165.611	2,02%	118	\$ 394.749,35	\$ 63.689.362,01
2011	02	\$ 165.611	2,02%	117	\$ 391.404,02	\$ 64.080.766,02
2011	03	\$ 165.611	2,02%	116	\$ 388.058,68	\$ 64.468.824,70
2011	04	\$ 165.611	2,02%	115	\$ 384.713,35	\$ 64.853.538,05
2011	05	\$ 165.611	2,02%	114	\$ 381.368,01	\$ 65.234.906,07
2011	06	\$ 165.611	2,02%	113	\$ 378.022,68	\$ 65.612.928,75
2011	M13	\$ 165.611	2,02%	113	\$ 378.022,68	\$ 65.990.951,43
2011	07	\$ 165.611	2,02%	112	\$ 374.677,35	\$ 66.365.628,78
2011	08	\$ 165.611	2,02%	111	\$ 371.332,01	\$ 66.736.960,79
2011	09	\$ 165.611	2,02%	110	\$ 367.986,68	\$ 67.104.947,47
2011	10	\$ 165.611	2,02%	109	\$ 364.641,35	\$ 67.469.588,82
2011	11	\$ 165.611	2,02%	108	\$ 361.296,01	\$ 67.830.884,83
2011	12	\$ 165.611	2,02%	107	\$ 357.950,68	\$ 68.188.835,51
2011	M14	\$ 165.611	2,02%	107	\$ 357.950,68	\$ 68.546.786,19
2012	01	\$ 171.788	2,02%	106	\$ 367.832,13	\$ 68.914.618,32
2012	02	\$ 171.788	2,02%	105	\$ 364.362,01	\$ 69.278.980,33
2012	03	\$ 171.788	2,02%	104	\$ 360.891,90	\$ 0,00
2012	04	\$ 171.788	2,02%	103	\$ 357.421,78	\$ 69.997.294,01
2012	05	\$ 171.788	2,02%	102	\$ 353.951,67	\$ 70.351.245,68
2012	06	\$ 171.788	2,02%	101	\$ 350.481,55	\$ 70.701.727,24
2012	M13	\$ 171.788	2,02%	101	\$ 350.481,55	\$ 71.052.208,79
2012	07	\$ 171.788	2,02%	100	\$ 347.011,44	\$ 71.399.220,23
2012	08	\$ 171.788	2,02%	99	\$ 343.541,33	\$ 71.742.761,56
2012	09	\$ 171.788	2,02%	98	\$ 340.071,21	\$ 72.082.832,77
2012	10	\$ 171.788	2,02%	97	\$ 336.601,10	\$ 72.419.433,86
2012	11	\$ 171.788	2,02%	96	\$ 333.130,98	\$ 72.752.564,85
2012	12	\$ 171.788	2,02%	95	\$ 329.660,87	\$ 73.082.225,71
2012	M14	\$ 171.788	2,02%	95	\$ 329.660,87	\$ 73.411.886,58
2013	01	\$ 175.979	2,02%	94	\$ 334.149,81	\$ 73.746.036,39
2013	02	\$ 175.979	2,02%	93	\$ 330.595,02	\$ 74.076.631,41
2013	03	\$ 175.979	2,02%	92	\$ 327.040,24	\$ 74.403.671,65
2013	04	\$ 175.979	2,02%	91	\$ 323.485,45	\$ 74.727.157,10
2013	05	\$ 175.979	2,02%	90	\$ 319.930,67	\$ 75.047.087,77
2013	06	\$ 175.979	2,02%	89	\$ 316.375,88	\$ 75.363.463,65
2013	M13	\$ 175.979	2,02%	89	\$ 316.375,88	\$ 75.679.839,53
2013	07	\$ 175.979	2,02%	88	\$ 312.821,10	\$ 75.992.660,63
2013	08	\$ 175.979	2,02%	87	\$ 309.266,31	\$ 76.301.926,94
2013	09	\$ 175.979	2,02%	86	\$ 305.711,53	\$ 76.607.638,47
2013	10	\$ 175.979	2,02%	85	\$ 302.156,74	\$ 76.909.795,21
2013	11	\$ 175.979	2,02%	84	\$ 298.601,96	\$ 77.208.397,17
2013	12	\$ 175.979	2,02%	83	\$ 295.047,17	\$ 77.503.444,34
2013	M14	\$ 175.979	2,02%	83	\$ 295.047,17	\$ 77.798.491,51
2014	01	\$ 179.393	2,02%	82	\$ 297.147,34	\$ 78.095.638,85
2014	02	\$ 179.393	2,02%	81	\$ 293.523,59	\$ 78.389.162,44
2014	03	\$ 179.393	2,02%	80	\$ 289.899,84	\$ 78.679.062,28
2014	04	\$ 179.393	2,02%	79	\$ 286.276,09	\$ 78.965.338,37
2014	05	\$ 179.393	2,02%	78	\$ 282.652,35	\$ 79.247.990,72
2014	06	\$ 179.393	2,02%	77	\$ 279.028,60	\$ 79.527.019,32
2014	M13	\$ 179.393	2,02%	77	\$ 279.028,60	\$ 79.806.047,91
2014	07	\$ 179.393	2,02%	76	\$ 275.404,85	\$ 80.081.452,76

2014	08	\$ 179.393	2,02%	75	\$ 271.781,10	\$ 80.353.233,87
2014	09	\$ 179.393	2,02%	74	\$ 268.157,35	\$ 80.621.391,22
2014	10	\$ 179.393	2,02%	73	\$ 264.533,61	\$ 80.885.924,83
2014	11	\$ 179.393	2,02%	72	\$ 260.909,86	\$ 81.146.834,68
2014	12	\$ 179.393	2,02%	71	\$ 257.286,11	\$ 81.404.120,79
2014	M14	\$ 179.393	2,02%	71	\$ 257.286,11	\$ 81.661.406,90
2015	01	\$ 185.959	2,02%	70	\$ 262.946,40	\$ 81.924.353,31
2015	02	\$ 185.959	2,02%	69	\$ 259.190,03	\$ 82.183.543,33
2015	03	\$ 185.959	2,02%	68	\$ 255.433,65	\$ 82.438.976,98
2015	04	\$ 185.959	2,02%	67	\$ 251.677,27	\$ 82.690.654,26
2015	05	\$ 185.959	2,02%	66	\$ 247.920,90	\$ 82.938.575,15
2015	06	\$ 185.959	2,02%	65	\$ 244.164,52	\$ 83.182.739,67
2015	M13	\$ 185.959	2,02%	65	\$ 244.164,52	\$ 83.426.904,19
2015	07	\$ 185.959	2,02%	64	\$ 240.408,14	\$ 83.667.312,33
2015	08	\$ 185.959	2,02%	63	\$ 236.651,76	\$ 83.903.964,09
2015	09	\$ 185.959	2,02%	62	\$ 232.895,39	\$ 84.136.859,48
2015	10	\$ 185.959	2,02%	61	\$ 229.139,01	\$ 84.365.998,49
2015	11	\$ 185.959	2,02%	60	\$ 225.382,63	\$ 84.591.381,12
2015	12	\$ 185.959	2,02%	59	\$ 221.626,25	\$ 84.813.007,37
2015	M14	\$ 185.959	2,02%	59	\$ 221.626,25	\$ 85.034.633,63
2016	01	\$ 198.549	2,02%	58	\$ 232.619,67	\$ 85.267.253,30
2016	02	\$ 198.549	2,02%	57	\$ 228.608,98	\$ 85.495.862,28
2016	03	\$ 198.549	2,02%	56	\$ 224.598,30	\$ 85.720.460,58
2016	04	\$ 198.549	2,02%	55	\$ 220.587,62	\$ 85.941.048,20
2016	05	\$ 198.549	2,02%	54	\$ 216.576,93	\$ 86.157.625,13
2016	06	\$ 198.549	2,02%	53	\$ 212.566,25	\$ 86.370.191,38
2016	M13	\$ 198.549	2,02%	53	\$ 212.566,25	\$ 86.582.757,63
2016	07	\$ 198.549	2,02%	52	\$ 208.555,56	\$ 86.791.313,19
2016	08	\$ 198.549	2,02%	51	\$ 204.544,88	\$ 86.995.858,08
2016	09	\$ 198.549	2,02%	50	\$ 200.534,20	\$ 87.196.392,27
2016	10	\$ 198.549	2,02%	49	\$ 196.523,51	\$ 87.392.915,79
2016	11	\$ 198.549	2,02%	48	\$ 192.512,83	\$ 87.585.428,61
2016	12	\$ 198.549	2,02%	47	\$ 188.502,15	\$ 87.773.930,76
2016	M14	\$ 198.549	2,02%	47	\$ 188.502,15	\$ 87.962.432,90
2017	01	\$ 209.965	2,02%	46	\$ 195.099,72	\$ 88.157.532,62
2017	02	\$ 209.965	2,02%	45	\$ 190.858,42	\$ 88.348.391,05
2017	03	\$ 209.965	2,02%	44	\$ 186.617,12	\$ 88.535.008,17
2017	04	\$ 209.965	2,02%	43	\$ 182.375,83	\$ 88.717.384,00
2017	05	\$ 209.965	2,02%	42	\$ 178.134,53	\$ 88.895.518,52
2017	06	\$ 209.965	2,02%	41	\$ 173.893,23	\$ 89.069.411,75
2017	M13	\$ 209.965	2,02%	41	\$ 173.893,23	\$ 89.243.304,98
2017	07	\$ 209.965	2,02%	40	\$ 169.651,93	\$ 89.412.956,91
2017	08	\$ 209.965	2,02%	39	\$ 165.410,63	\$ 89.578.367,54
2017	09	\$ 209.965	2,02%	38	\$ 161.169,33	\$ 89.739.536,88
2017	10	\$ 209.965	2,02%	37	\$ 156.928,04	\$ 89.896.464,91
2017	11	\$ 209.965	2,02%	36	\$ 152.686,74	\$ 90.049.151,65
2017	12	\$ 209.965	2,02%	35	\$ 148.445,44	\$ 90.197.597,09
2017	M14	\$ 209.965	2,02%	35	\$ 148.445,44	\$ 90.346.042,53
2018	01	\$ 218.553	2,02%	34	\$ 150.102,09	\$ 90.496.144,62
2018	02	\$ 218.553	2,02%	33	\$ 145.687,32	\$ 90.641.831,94
2018	03	\$ 218.553	2,02%	32	\$ 141.272,56	\$ 90.783.104,50
2018	04	\$ 218.553	2,02%	31	\$ 136.857,79	\$ 90.919.962,29
2018	05	\$ 218.553	2,02%	30	\$ 132.443,02	\$ 91.052.405,31
2018	06	\$ 218.553	2,02%	29	\$ 128.028,25	\$ 91.180.433,56
2018	M13	\$ 218.553	2,02%	29	\$ 128.028,25	\$ 91.308.461,81
2018	07	\$ 218.553	2,02%	28	\$ 123.613,49	\$ 91.432.075,30
2018	08	\$ 218.553	2,02%	27	\$ 119.198,72	\$ 91.551.274,02
2018	09	\$ 218.553	2,02%	26	\$ 114.783,95	\$ 91.666.057,97
2018	10	\$ 218.553	2,02%	25	\$ 110.369,18	\$ 91.776.427,15

2018	11	\$ 218.553	2,02%	24	\$ 105.954,42	\$ 91.882.381,57
2018	12	\$ 218.553	2,02%	23	\$ 101.539,65	\$ 91.983.921,22
2018	M14	\$ 218.553	2,02%	23	\$ 101.539,65	\$ 92.085.460,87
2019	01	\$ 225.503	2,02%	22	\$ 100.213,45	\$ 92.185.674,32
2019	02	\$ 225.503	2,02%	21	\$ 95.658,30	\$ 92.281.332,62
2019	03	\$ 225.503	2,02%	20	\$ 91.103,14	\$ 92.372.435,76
2019	04	\$ 225.503	2,02%	19	\$ 86.547,98	\$ 92.458.983,74
2019	05	\$ 225.503	2,02%	18	\$ 81.992,83	\$ 92.540.976,57
2019	06	\$ 225.503	2,02%	17	\$ 77.437,67	\$ 92.618.414,24
2019	M13	\$ 225.503	2,02%	17	\$ 77.437,67	\$ 92.695.851,90
2019	07	\$ 225.503	2,02%	16	\$ 72.882,51	\$ 92.768.734,42
2019	08	\$ 225.503	2,02%	15	\$ 68.327,35	\$ 92.837.061,77
2019	09	\$ 225.503	2,02%	14	\$ 63.772,20	\$ 92.900.833,97
2019	10	\$ 225.503	2,02%	13	\$ 59.217,04	\$ 92.960.051,01
2019	11	\$ 225.503	2,02%	12	\$ 54.661,88	\$ 93.014.712,89
2019	12	\$ 225.503	2,02%	11	\$ 50.106,73	\$ 93.064.819,62
2019	M14	\$ 225.503	2,02%	11	\$ 50.106,73	\$ 93.114.926,34
2020	01	\$ 234.072	2,02%	10	\$ 47.282,53	\$ 93.162.208,87
2020	02	\$ 234.072	2,02%	9	\$ 42.554,28	\$ 93.204.763,15
2020	03	\$ 234.072	2,02%	8	\$ 37.826,02	\$ 93.242.589,17
2020	04	\$ 234.072	2,02%	7	\$ 33.097,77	\$ 93.275.686,94
2020	05	\$ 234.072	2,02%	6	\$ 28.369,52	\$ 93.304.056,46
2020	06	\$ 234.072	2,02%	5	\$ 23.641,26	\$ 93.327.697,73
2020	M13	\$ 234.072	2,02%	5	\$ 23.641,26	\$ 93.351.338,99
2020	07	\$ 234.072	2,02%	4	\$ 18.913,01	\$ 93.370.252,00
2020	08	\$ 234.072	2,02%	3	\$ 14.184,76	\$ 93.384.436,76
2020	09	\$ 234.072	2,02%	2	\$ 9.456,51	\$ 93.393.893,27
2020	10	\$ 234.072	2,02%	1	\$ 4.728,25	\$ 93.398.621,52
2020	11	\$ 234.072	2,02%	0	\$ 0,00	\$ 93.398.621,52

35. JOSÉ ERDULFO RODRÍGUEZ SOLANO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 166.078,08	2,00%	8	\$ 1.328.624,64
2010	\$ 169.399,64	3,17%	14	\$ 2.371.594,98
2011	\$ 174.769,61	3,73%	14	\$ 2.446.774,54
2012	\$ 181.288,52	2,44%	14	\$ 2.538.039,23
2013	\$ 185.711,96	1,94%	14	\$ 2.599.967,39
2014	\$ 189.314,77	3,66%	14	\$ 2.650.406,76
2015	\$ 196.243,69	6,77%	14	\$ 2.747.411,65
2016	\$ 209.529,39	5,75%	14	\$ 2.933.411,41
2017	\$ 221.577,33	4,09%	14	\$ 3.102.082,57
2018	\$ 230.639,84	3,18%	14	\$ 3.228.957,75
2019	\$ 237.974,19	3,80%	14	\$ 3.331.638,60
2020	\$ 247.017,21	1,61%	11	\$ 2.717.189,26
				\$ 31.996.098,79

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	05	\$ 166.078	2,02%	138	\$ 462.959,26	\$ 462.959,26
2009	06	\$ 166.078	2,02%	137	\$ 459.604,48	\$ 922.563,73
2009	M13	\$ 166.078	2,02%	137	\$ 459.604,48	\$ 1.382.168,21
2009	07	\$ 166.078	2,02%	136	\$ 456.249,70	\$ 1.838.417,91
2009	08	\$ 166.078	2,02%	135	\$ 452.894,92	\$ 2.291.312,84
2009	09	\$ 166.078	2,02%	134	\$ 449.540,15	\$ 2.740.852,99
2009	10	\$ 166.078	2,02%	133	\$ 446.185,37	\$ 3.187.038,36
2009	11	\$ 166.078	2,02%	132	\$ 442.830,59	\$ 3.629.868,95

2009	12	\$ 166.078	2,02%	131	\$ 439.475,82	\$ 4.069.344,76
2009	M14	\$ 166.078	2,02%	131	\$ 439.475,82	\$ 4.508.820,58
2010	01	\$ 169.400	2,02%	130	\$ 444.843,46	\$ 4.953.664,04
2010	02	\$ 169.400	2,02%	129	\$ 441.421,59	\$ 5.395.085,62
2010	03	\$ 169.400	2,02%	128	\$ 437.999,71	\$ 5.833.085,34
2010	04	\$ 169.400	2,02%	127	\$ 434.577,84	\$ 6.267.663,18
2010	05	\$ 169.400	2,02%	126	\$ 431.155,97	\$ 6.698.819,14
2010	06	\$ 169.400	2,02%	125	\$ 427.734,10	\$ 7.126.553,24
2010	M13	\$ 169.400	2,02%	125	\$ 427.734,10	\$ 7.554.287,33
2010	07	\$ 169.400	2,02%	124	\$ 424.312,22	\$ 7.978.599,56
2010	08	\$ 169.400	2,02%	123	\$ 420.890,35	\$ 8.399.489,91
2010	09	\$ 169.400	2,02%	122	\$ 417.468,48	\$ 8.816.958,38
2010	10	\$ 169.400	2,02%	121	\$ 414.046,60	\$ 9.231.004,99
2010	11	\$ 169.400	2,02%	120	\$ 410.624,73	\$ 9.641.629,72
2010	12	\$ 169.400	2,02%	119	\$ 407.202,86	\$ 10.048.832,58
2010	M14	\$ 169.400	2,02%	119	\$ 407.202,86	\$ 10.456.035,44
2011	01	\$ 174.770	2,02%	118	\$ 416.580,84	\$ 10.872.616,28
2011	02	\$ 174.770	2,02%	117	\$ 413.050,50	\$ 11.285.666,78
2011	03	\$ 174.770	2,02%	116	\$ 409.520,15	\$ 11.695.186,93
2011	04	\$ 174.770	2,02%	115	\$ 405.989,80	\$ 12.101.176,73
2011	05	\$ 174.770	2,02%	114	\$ 402.459,46	\$ 12.503.636,19
2011	06	\$ 174.770	2,02%	113	\$ 398.929,11	\$ 12.902.565,30
2011	M13	\$ 174.770	2,02%	113	\$ 398.929,11	\$ 13.301.494,41
2011	07	\$ 174.770	2,02%	112	\$ 395.398,77	\$ 13.696.893,18
2011	08	\$ 174.770	2,02%	111	\$ 391.868,42	\$ 14.088.761,60
2011	09	\$ 174.770	2,02%	110	\$ 388.338,07	\$ 14.477.099,67
2011	10	\$ 174.770	2,02%	109	\$ 384.807,73	\$ 14.861.907,40
2011	11	\$ 174.770	2,02%	108	\$ 381.277,38	\$ 15.243.184,78
2011	12	\$ 174.770	2,02%	107	\$ 377.747,04	\$ 15.620.931,82
2011	M14	\$ 174.770	2,02%	107	\$ 377.747,04	\$ 15.998.678,85
2012	01	\$ 181.289	2,02%	106	\$ 388.174,97	\$ 16.386.853,83
2012	02	\$ 181.289	2,02%	105	\$ 384.512,94	\$ 16.771.366,77
2012	03	\$ 181.289	2,02%	104	\$ 380.850,92	\$ 0,00
2012	04	\$ 181.289	2,02%	103	\$ 377.188,89	\$ 17.529.406,57
2012	05	\$ 181.289	2,02%	102	\$ 373.526,86	\$ 17.902.933,43
2012	06	\$ 181.289	2,02%	101	\$ 369.864,83	\$ 18.272.798,27
2012	M13	\$ 181.289	2,02%	101	\$ 369.864,83	\$ 18.642.663,10
2012	07	\$ 181.289	2,02%	100	\$ 366.202,80	\$ 19.008.865,90
2012	08	\$ 181.289	2,02%	99	\$ 362.540,78	\$ 19.371.406,68
2012	09	\$ 181.289	2,02%	98	\$ 358.878,75	\$ 19.730.285,42
2012	10	\$ 181.289	2,02%	97	\$ 355.216,72	\$ 20.085.502,14
2012	11	\$ 181.289	2,02%	96	\$ 351.554,69	\$ 20.437.056,84
2012	12	\$ 181.289	2,02%	95	\$ 347.892,66	\$ 20.784.949,50
2012	M14	\$ 181.289	2,02%	95	\$ 347.892,66	\$ 21.132.842,16
2013	01	\$ 185.712	2,02%	94	\$ 352.629,86	\$ 21.485.472,03
2013	02	\$ 185.712	2,02%	93	\$ 348.878,48	\$ 21.834.350,51
2013	03	\$ 185.712	2,02%	92	\$ 345.127,10	\$ 22.179.477,61
2013	04	\$ 185.712	2,02%	91	\$ 341.375,72	\$ 22.520.853,33
2013	05	\$ 185.712	2,02%	90	\$ 337.624,34	\$ 22.858.477,66
2013	06	\$ 185.712	2,02%	89	\$ 333.872,96	\$ 23.192.350,62
2013	M13	\$ 185.712	2,02%	89	\$ 333.872,96	\$ 23.526.223,57
2013	07	\$ 185.712	2,02%	88	\$ 330.121,57	\$ 23.856.345,15
2013	08	\$ 185.712	2,02%	87	\$ 326.370,19	\$ 24.182.715,34
2013	09	\$ 185.712	2,02%	86	\$ 322.618,81	\$ 24.505.334,15
2013	10	\$ 185.712	2,02%	85	\$ 318.867,43	\$ 24.824.201,58
2013	11	\$ 185.712	2,02%	84	\$ 315.116,05	\$ 25.139.317,63
2013	12	\$ 185.712	2,02%	83	\$ 311.364,67	\$ 25.450.682,29

2013	M14	\$ 185.712	2,02%	83	\$ 311.364,67	\$ 25.762.046,96
2014	01	\$ 189.315	2,02%	82	\$ 313.580,98	\$ 26.075.627,94
2014	02	\$ 189.315	2,02%	81	\$ 309.756,82	\$ 26.385.384,77
2014	03	\$ 189.315	2,02%	80	\$ 305.932,67	\$ 26.691.317,43
2014	04	\$ 189.315	2,02%	79	\$ 302.108,51	\$ 26.993.425,94
2014	05	\$ 189.315	2,02%	78	\$ 298.284,35	\$ 27.291.710,29
2014	06	\$ 189.315	2,02%	77	\$ 294.460,19	\$ 27.586.170,48
2014	M13	\$ 189.315	2,02%	77	\$ 294.460,19	\$ 27.880.630,67
2014	07	\$ 189.315	2,02%	76	\$ 290.636,03	\$ 28.171.266,70
2014	08	\$ 189.315	2,02%	75	\$ 286.811,87	\$ 28.458.078,58
2014	09	\$ 189.315	2,02%	74	\$ 282.987,72	\$ 28.741.066,29
2014	10	\$ 189.315	2,02%	73	\$ 279.163,56	\$ 29.020.229,85
2014	11	\$ 189.315	2,02%	72	\$ 275.339,40	\$ 29.295.569,25
2014	12	\$ 189.315	2,02%	71	\$ 271.515,24	\$ 29.567.084,49
2014	M14	\$ 189.315	2,02%	71	\$ 271.515,24	\$ 29.838.599,73
2015	01	\$ 196.244	2,02%	70	\$ 277.488,58	\$ 30.116.088,31
2015	02	\$ 196.244	2,02%	69	\$ 273.524,45	\$ 30.389.612,76
2015	03	\$ 196.244	2,02%	68	\$ 269.560,33	\$ 30.659.173,09
2015	04	\$ 196.244	2,02%	67	\$ 265.596,21	\$ 30.924.769,30
2015	05	\$ 196.244	2,02%	66	\$ 261.632,09	\$ 31.186.401,39
2015	06	\$ 196.244	2,02%	65	\$ 257.667,96	\$ 31.444.069,35
2015	M13	\$ 196.244	2,02%	65	\$ 257.667,96	\$ 31.701.737,32
2015	07	\$ 196.244	2,02%	64	\$ 253.703,84	\$ 31.955.441,16
2015	08	\$ 196.244	2,02%	63	\$ 249.739,72	\$ 32.205.180,88
2015	09	\$ 196.244	2,02%	62	\$ 245.775,60	\$ 32.450.956,47
2015	10	\$ 196.244	2,02%	61	\$ 241.811,47	\$ 32.692.767,95
2015	11	\$ 196.244	2,02%	60	\$ 237.847,35	\$ 32.930.615,30
2015	12	\$ 196.244	2,02%	59	\$ 233.883,23	\$ 33.164.498,53
2015	M14	\$ 196.244	2,02%	59	\$ 233.883,23	\$ 33.398.381,75
2016	01	\$ 209.529	2,02%	58	\$ 245.484,63	\$ 33.643.866,38
2016	02	\$ 209.529	2,02%	57	\$ 241.252,14	\$ 33.885.118,52
2016	03	\$ 209.529	2,02%	56	\$ 237.019,64	\$ 34.122.138,16
2016	04	\$ 209.529	2,02%	55	\$ 232.787,15	\$ 34.354.925,31
2016	05	\$ 209.529	2,02%	54	\$ 228.554,66	\$ 34.583.479,97
2016	06	\$ 209.529	2,02%	53	\$ 224.322,16	\$ 34.807.802,13
2016	M13	\$ 209.529	2,02%	53	\$ 224.322,16	\$ 35.032.124,29
2016	07	\$ 209.529	2,02%	52	\$ 220.089,67	\$ 35.252.213,96
2016	08	\$ 209.529	2,02%	51	\$ 215.857,17	\$ 35.468.071,13
2016	09	\$ 209.529	2,02%	50	\$ 211.624,68	\$ 35.679.695,81
2016	10	\$ 209.529	2,02%	49	\$ 207.392,19	\$ 35.887.088,00
2016	11	\$ 209.529	2,02%	48	\$ 203.159,69	\$ 36.090.247,69
2016	12	\$ 209.529	2,02%	47	\$ 198.927,20	\$ 36.289.174,89
2016	M14	\$ 209.529	2,02%	47	\$ 198.927,20	\$ 36.488.102,09
2017	01	\$ 221.577	2,02%	46	\$ 205.889,65	\$ 36.693.991,74
2017	02	\$ 221.577	2,02%	45	\$ 201.413,79	\$ 36.895.405,53
2017	03	\$ 221.577	2,02%	44	\$ 196.937,93	\$ 37.092.343,46
2017	04	\$ 221.577	2,02%	43	\$ 192.462,07	\$ 37.284.805,53
2017	05	\$ 221.577	2,02%	42	\$ 187.986,20	\$ 37.472.791,73
2017	06	\$ 221.577	2,02%	41	\$ 183.510,34	\$ 37.656.302,07
2017	M13	\$ 221.577	2,02%	41	\$ 183.510,34	\$ 37.839.812,41
2017	07	\$ 221.577	2,02%	40	\$ 179.034,48	\$ 38.018.846,89
2017	08	\$ 221.577	2,02%	39	\$ 174.558,62	\$ 38.193.405,51
2017	09	\$ 221.577	2,02%	38	\$ 170.082,76	\$ 38.363.488,27
2017	10	\$ 221.577	2,02%	37	\$ 165.606,89	\$ 38.529.095,16
2017	11	\$ 221.577	2,02%	36	\$ 161.131,03	\$ 38.690.226,19
2017	12	\$ 221.577	2,02%	35	\$ 156.655,17	\$ 38.846.881,36
2017	M14	\$ 221.577	2,02%	35	\$ 156.655,17	\$ 39.003.536,53

2018	01	\$ 230.640	2,02%	34	\$ 158.403,44	\$ 39.161.939,97
2018	02	\$ 230.640	2,02%	33	\$ 153.744,52	\$ 39.315.684,49
2018	03	\$ 230.640	2,02%	32	\$ 149.085,59	\$ 39.464.770,08
2018	04	\$ 230.640	2,02%	31	\$ 144.426,67	\$ 39.609.196,75
2018	05	\$ 230.640	2,02%	30	\$ 139.767,74	\$ 39.748.964,49
2018	06	\$ 230.640	2,02%	29	\$ 135.108,82	\$ 39.884.073,31
2018	M13	\$ 230.640	2,02%	29	\$ 135.108,82	\$ 40.019.182,13
2018	07	\$ 230.640	2,02%	28	\$ 130.449,89	\$ 40.149.632,02
2018	08	\$ 230.640	2,02%	27	\$ 125.790,97	\$ 40.275.422,99
2018	09	\$ 230.640	2,02%	26	\$ 121.132,04	\$ 40.396.555,03
2018	10	\$ 230.640	2,02%	25	\$ 116.473,12	\$ 40.513.028,15
2018	11	\$ 230.640	2,02%	24	\$ 111.814,19	\$ 40.624.842,34
2018	12	\$ 230.640	2,02%	23	\$ 107.155,27	\$ 40.731.997,61
2018	M14	\$ 230.640	2,02%	23	\$ 107.155,27	\$ 40.839.152,88
2019	01	\$ 237.974	2,02%	22	\$ 105.755,73	\$ 40.944.908,61
2019	02	\$ 237.974	2,02%	21	\$ 100.948,65	\$ 41.045.857,26
2019	03	\$ 237.974	2,02%	20	\$ 96.141,57	\$ 41.141.998,83
2019	04	\$ 237.974	2,02%	19	\$ 91.334,49	\$ 41.233.333,32
2019	05	\$ 237.974	2,02%	18	\$ 86.527,41	\$ 41.319.860,74
2019	06	\$ 237.974	2,02%	17	\$ 81.720,34	\$ 41.401.581,07
2019	M13	\$ 237.974	2,02%	17	\$ 81.720,34	\$ 41.483.301,41
2019	07	\$ 237.974	2,02%	16	\$ 76.913,26	\$ 41.560.214,67
2019	08	\$ 237.974	2,02%	15	\$ 72.106,18	\$ 41.632.320,85
2019	09	\$ 237.974	2,02%	14	\$ 67.299,10	\$ 41.699.619,95
2019	10	\$ 237.974	2,02%	13	\$ 62.492,02	\$ 41.762.111,97
2019	11	\$ 237.974	2,02%	12	\$ 57.684,94	\$ 41.819.796,91
2019	12	\$ 237.974	2,02%	11	\$ 52.877,86	\$ 41.872.674,77
2019	M14	\$ 237.974	2,02%	11	\$ 52.877,86	\$ 41.925.552,64
2020	01	\$ 247.017	2,02%	10	\$ 49.897,48	\$ 41.975.450,11
2020	02	\$ 247.017	2,02%	9	\$ 44.907,73	\$ 42.020.357,84
2020	03	\$ 247.017	2,02%	8	\$ 39.917,98	\$ 42.060.275,82
2020	04	\$ 247.017	2,02%	7	\$ 34.928,23	\$ 42.095.204,05
2020	05	\$ 247.017	2,02%	6	\$ 29.938,49	\$ 42.125.142,54
2020	06	\$ 247.017	2,02%	5	\$ 24.948,74	\$ 42.150.091,28
2020	M13	\$ 247.017	2,02%	5	\$ 24.948,74	\$ 42.175.040,01
2020	07	\$ 247.017	2,02%	4	\$ 19.958,99	\$ 42.194.999,00
2020	08	\$ 247.017	2,02%	3	\$ 14.969,24	\$ 42.209.968,25
2020	09	\$ 247.017	2,02%	2	\$ 9.979,50	\$ 42.219.947,74
2020	10	\$ 247.017	2,02%	1	\$ 4.989,75	\$ 42.224.937,49

36. HECTOR ARMANDO PÁEZ SARMIENTO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 138.015,74	2,00%	7,8	\$ 1.076.522,77
2010	\$ 140.776,05	3,17%	14	\$ 1.970.864,77
2011	\$ 145.238,66	3,73%	14	\$ 2.033.341,18
2012	\$ 150.656,06	2,44%	14	\$ 2.109.184,81
2013	\$ 154.332,07	1,94%	14	\$ 2.160.648,92
2014	\$ 157.326,11	3,66%	14	\$ 2.202.565,50
2015	\$ 163.084,24	6,77%	14	\$ 2.283.179,40
2016	\$ 174.125,05	5,75%	14	\$ 2.437.750,65
2017	\$ 184.137,24	4,09%	14	\$ 2.577.921,31
2018	\$ 191.668,45	3,18%	14	\$ 2.683.358,29
2019	\$ 197.763,51	3,80%	14	\$ 2.768.689,09
2020	\$ 205.278,52	1,61%	11	\$ 2.258.063,71
				\$ 26.562.090,39

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	06	\$ 138.016	2,02%	137	\$ 381.944,76	\$ 381.944,76
2009	M13	\$ 138.016	2,02%	137	\$ 381.944,76	\$ 763.889,52
2009	07	\$ 138.016	2,02%	136	\$ 379.156,84	\$ 1.143.046,36
2009	08	\$ 138.016	2,02%	135	\$ 376.368,92	\$ 1.519.415,28
2009	09	\$ 138.016	2,02%	134	\$ 373.581,01	\$ 1.892.996,29
2009	10	\$ 138.016	2,02%	133	\$ 370.793,09	\$ 2.263.789,37
2009	11	\$ 138.016	2,02%	132	\$ 368.005,17	\$ 2.631.794,54
2009	12	\$ 138.016	2,02%	131	\$ 365.217,25	\$ 2.997.011,79
2009	M14	\$ 138.016	2,02%	131	\$ 365.217,25	\$ 3.362.229,05
2010	01	\$ 140.776	2,02%	130	\$ 369.677,92	\$ 3.731.906,97
2010	02	\$ 140.776	2,02%	129	\$ 366.834,24	\$ 4.098.741,21
2010	03	\$ 140.776	2,02%	128	\$ 363.990,57	\$ 4.462.731,78
2010	04	\$ 140.776	2,02%	127	\$ 361.146,89	\$ 4.823.878,67
2010	05	\$ 140.776	2,02%	126	\$ 358.303,21	\$ 5.182.181,88
2010	06	\$ 140.776	2,02%	125	\$ 355.459,54	\$ 5.537.641,42
2010	M13	\$ 140.776	2,02%	125	\$ 355.459,54	\$ 5.893.100,96
2010	07	\$ 140.776	2,02%	124	\$ 352.615,86	\$ 6.245.716,82
2010	08	\$ 140.776	2,02%	123	\$ 349.772,19	\$ 6.595.489,01
2010	09	\$ 140.776	2,02%	122	\$ 346.928,51	\$ 6.942.417,52
2010	10	\$ 140.776	2,02%	121	\$ 344.084,83	\$ 7.286.502,35
2010	11	\$ 140.776	2,02%	120	\$ 341.241,16	\$ 7.627.743,51
2010	12	\$ 140.776	2,02%	119	\$ 338.397,48	\$ 7.966.140,99
2010	M14	\$ 140.776	2,02%	119	\$ 338.397,48	\$ 8.304.538,47
2011	01	\$ 145.239	2,02%	118	\$ 346.190,86	\$ 8.650.729,33
2011	02	\$ 145.239	2,02%	117	\$ 343.257,04	\$ 8.993.986,37
2011	03	\$ 145.239	2,02%	116	\$ 340.323,22	\$ 9.334.309,58
2011	04	\$ 145.239	2,02%	115	\$ 337.389,40	\$ 9.671.698,98
2011	05	\$ 145.239	2,02%	114	\$ 334.455,58	\$ 10.006.154,56
2011	06	\$ 145.239	2,02%	113	\$ 331.521,76	\$ 10.337.676,31
2011	M13	\$ 145.239	2,02%	113	\$ 331.521,76	\$ 10.669.198,07
2011	07	\$ 145.239	2,02%	112	\$ 328.587,93	\$ 10.997.786,00
2011	08	\$ 145.239	2,02%	111	\$ 325.654,11	\$ 11.323.440,12
2011	09	\$ 145.239	2,02%	110	\$ 322.720,29	\$ 11.646.160,41
2011	10	\$ 145.239	2,02%	109	\$ 319.786,47	\$ 11.965.946,88
2011	11	\$ 145.239	2,02%	108	\$ 316.852,65	\$ 12.282.799,53
2011	12	\$ 145.239	2,02%	107	\$ 313.918,83	\$ 12.596.718,36
2011	M14	\$ 145.239	2,02%	107	\$ 313.918,83	\$ 12.910.637,19
2012	01	\$ 150.656	2,02%	106	\$ 322.584,75	\$ 13.233.221,95
2012	02	\$ 150.656	2,02%	105	\$ 319.541,50	\$ 13.552.763,44
2012	03	\$ 150.656	2,02%	104	\$ 316.498,25	\$ 0,00
2012	04	\$ 150.656	2,02%	103	\$ 313.454,99	\$ 14.182.716,68
2012	05	\$ 150.656	2,02%	102	\$ 310.411,74	\$ 14.493.128,42
2012	06	\$ 150.656	2,02%	101	\$ 307.368,49	\$ 14.800.496,91
2012	M13	\$ 150.656	2,02%	101	\$ 307.368,49	\$ 15.107.865,40
2012	07	\$ 150.656	2,02%	100	\$ 304.325,24	\$ 15.412.190,64
2012	08	\$ 150.656	2,02%	99	\$ 301.281,98	\$ 15.713.472,62
2012	09	\$ 150.656	2,02%	98	\$ 298.238,73	\$ 16.011.711,35
2012	10	\$ 150.656	2,02%	97	\$ 295.195,48	\$ 16.306.906,83
2012	11	\$ 150.656	2,02%	96	\$ 292.152,23	\$ 16.599.059,06
2012	12	\$ 150.656	2,02%	95	\$ 289.108,97	\$ 16.888.168,03
2012	M14	\$ 150.656	2,02%	95	\$ 289.108,97	\$ 17.177.277,01
2013	01	\$ 154.332	2,02%	94	\$ 293.045,73	\$ 17.470.322,73
2013	02	\$ 154.332	2,02%	93	\$ 289.928,22	\$ 17.760.250,95
2013	03	\$ 154.332	2,02%	92	\$ 286.810,71	\$ 18.047.061,66
2013	04	\$ 154.332	2,02%	91	\$ 283.693,20	\$ 18.330.754,87

2013	05	\$ 154.332	2,02%	90	\$ 280.575,69	\$ 18.611.330,56
2013	06	\$ 154.332	2,02%	89	\$ 277.458,19	\$ 18.888.788,75
2013	M13	\$ 154.332	2,02%	89	\$ 277.458,19	\$ 19.166.246,93
2013	07	\$ 154.332	2,02%	88	\$ 274.340,68	\$ 19.440.587,61
2013	08	\$ 154.332	2,02%	87	\$ 271.223,17	\$ 19.711.810,79
2013	09	\$ 154.332	2,02%	86	\$ 268.105,66	\$ 19.979.916,45
2013	10	\$ 154.332	2,02%	85	\$ 264.988,16	\$ 20.244.904,61
2013	11	\$ 154.332	2,02%	84	\$ 261.870,65	\$ 20.506.775,25
2013	12	\$ 154.332	2,02%	83	\$ 258.753,14	\$ 20.765.528,40
2013	M14	\$ 154.332	2,02%	83	\$ 258.753,14	\$ 21.024.281,54
2014	01	\$ 157.326	2,02%	82	\$ 260.594,96	\$ 21.284.876,50
2014	02	\$ 157.326	2,02%	81	\$ 257.416,98	\$ 21.542.293,48
2014	03	\$ 157.326	2,02%	80	\$ 254.238,99	\$ 21.796.532,47
2014	04	\$ 157.326	2,02%	79	\$ 251.061,00	\$ 22.047.593,47
2014	05	\$ 157.326	2,02%	78	\$ 247.883,01	\$ 22.295.476,48
2014	06	\$ 157.326	2,02%	77	\$ 244.705,03	\$ 22.540.181,51
2014	M13	\$ 157.326	2,02%	77	\$ 244.705,03	\$ 22.784.886,54
2014	07	\$ 157.326	2,02%	76	\$ 241.527,04	\$ 23.026.413,58
2014	08	\$ 157.326	2,02%	75	\$ 238.349,05	\$ 23.264.762,63
2014	09	\$ 157.326	2,02%	74	\$ 235.171,07	\$ 23.499.933,70
2014	10	\$ 157.326	2,02%	73	\$ 231.993,08	\$ 23.731.926,78
2014	11	\$ 157.326	2,02%	72	\$ 228.815,09	\$ 23.960.741,87
2014	12	\$ 157.326	2,02%	71	\$ 225.637,10	\$ 24.186.378,97
2014	M14	\$ 157.326	2,02%	71	\$ 225.637,10	\$ 24.412.016,07
2015	01	\$ 163.084	2,02%	70	\$ 230.601,12	\$ 24.642.617,19
2015	02	\$ 163.084	2,02%	69	\$ 227.306,82	\$ 24.869.924,01
2015	03	\$ 163.084	2,02%	68	\$ 224.012,52	\$ 25.093.936,53
2015	04	\$ 163.084	2,02%	67	\$ 220.718,21	\$ 25.314.654,74
2015	05	\$ 163.084	2,02%	66	\$ 217.423,91	\$ 25.532.078,65
2015	06	\$ 163.084	2,02%	65	\$ 214.129,61	\$ 25.746.208,27
2015	M13	\$ 163.084	2,02%	65	\$ 214.129,61	\$ 25.960.337,88
2015	07	\$ 163.084	2,02%	64	\$ 210.835,31	\$ 26.171.173,19
2015	08	\$ 163.084	2,02%	63	\$ 207.541,01	\$ 26.378.714,19
2015	09	\$ 163.084	2,02%	62	\$ 204.246,71	\$ 26.582.960,90
2015	10	\$ 163.084	2,02%	61	\$ 200.952,40	\$ 26.783.913,30
2015	11	\$ 163.084	2,02%	60	\$ 197.658,10	\$ 26.981.571,41
2015	12	\$ 163.084	2,02%	59	\$ 194.363,80	\$ 27.175.935,21
2015	M14	\$ 163.084	2,02%	59	\$ 194.363,80	\$ 27.370.299,01
2016	01	\$ 174.125	2,02%	58	\$ 204.004,90	\$ 27.574.303,91
2016	02	\$ 174.125	2,02%	57	\$ 200.487,58	\$ 27.774.791,49
2016	03	\$ 174.125	2,02%	56	\$ 196.970,25	\$ 27.971.761,74
2016	04	\$ 174.125	2,02%	55	\$ 193.452,93	\$ 28.165.214,67
2016	05	\$ 174.125	2,02%	54	\$ 189.935,60	\$ 28.355.150,27
2016	06	\$ 174.125	2,02%	53	\$ 186.418,27	\$ 28.541.568,54
2016	M13	\$ 174.125	2,02%	53	\$ 186.418,27	\$ 28.727.986,82
2016	07	\$ 174.125	2,02%	52	\$ 182.900,95	\$ 28.910.887,77
2016	08	\$ 174.125	2,02%	51	\$ 179.383,62	\$ 29.090.271,39
2016	09	\$ 174.125	2,02%	50	\$ 175.866,30	\$ 29.266.137,69
2016	10	\$ 174.125	2,02%	49	\$ 172.348,97	\$ 29.438.486,66
2016	11	\$ 174.125	2,02%	48	\$ 168.831,64	\$ 29.607.318,30
2016	12	\$ 174.125	2,02%	47	\$ 165.314,32	\$ 29.772.632,62
2016	M14	\$ 174.125	2,02%	47	\$ 165.314,32	\$ 29.937.946,94
2017	01	\$ 184.137	2,02%	46	\$ 171.100,32	\$ 30.109.047,26
2017	02	\$ 184.137	2,02%	45	\$ 167.380,75	\$ 30.276.428,01
2017	03	\$ 184.137	2,02%	44	\$ 163.661,18	\$ 30.440.089,18
2017	04	\$ 184.137	2,02%	43	\$ 159.941,60	\$ 30.600.030,79
2017	05	\$ 184.137	2,02%	42	\$ 156.222,03	\$ 30.756.252,82

2017	06	\$ 184.137	2,02%	41	\$ 152.502,46	\$ 30.908.755,28
2017	M13	\$ 184.137	2,02%	41	\$ 152.502,46	\$ 31.061.257,74
2017	07	\$ 184.137	2,02%	40	\$ 148.782,89	\$ 31.210.040,62
2017	08	\$ 184.137	2,02%	39	\$ 145.063,31	\$ 31.355.103,94
2017	09	\$ 184.137	2,02%	38	\$ 141.343,74	\$ 31.496.447,68
2017	10	\$ 184.137	2,02%	37	\$ 137.624,17	\$ 31.634.071,85
2017	11	\$ 184.137	2,02%	36	\$ 133.904,60	\$ 31.767.976,45
2017	12	\$ 184.137	2,02%	35	\$ 130.185,03	\$ 31.898.161,48
2017	M14	\$ 184.137	2,02%	35	\$ 130.185,03	\$ 32.028.346,50
2018	01	\$ 191.668	2,02%	34	\$ 131.637,89	\$ 32.159.984,39
2018	02	\$ 191.668	2,02%	33	\$ 127.766,19	\$ 32.287.750,58
2018	03	\$ 191.668	2,02%	32	\$ 123.894,49	\$ 32.411.645,07
2018	04	\$ 191.668	2,02%	31	\$ 120.022,78	\$ 32.531.667,85
2018	05	\$ 191.668	2,02%	30	\$ 116.151,08	\$ 32.647.818,93
2018	06	\$ 191.668	2,02%	29	\$ 112.279,38	\$ 32.760.098,31
2018	M13	\$ 191.668	2,02%	29	\$ 112.279,38	\$ 32.872.377,69
2018	07	\$ 191.668	2,02%	28	\$ 108.407,67	\$ 32.980.785,36
2018	08	\$ 191.668	2,02%	27	\$ 104.535,97	\$ 33.085.321,33
2018	09	\$ 191.668	2,02%	26	\$ 100.664,27	\$ 33.185.985,60
2018	10	\$ 191.668	2,02%	25	\$ 96.792,57	\$ 33.282.778,17
2018	11	\$ 191.668	2,02%	24	\$ 92.920,86	\$ 33.375.699,03
2018	12	\$ 191.668	2,02%	23	\$ 89.049,16	\$ 33.464.748,20
2018	M14	\$ 191.668	2,02%	23	\$ 89.049,16	\$ 33.553.797,36
2019	01	\$ 197.764	2,02%	22	\$ 87.886,10	\$ 33.641.683,46
2019	02	\$ 197.764	2,02%	21	\$ 83.891,28	\$ 33.725.574,74
2019	03	\$ 197.764	2,02%	20	\$ 79.896,46	\$ 33.805.471,20
2019	04	\$ 197.764	2,02%	19	\$ 75.901,63	\$ 33.881.372,83
2019	05	\$ 197.764	2,02%	18	\$ 71.906,81	\$ 33.953.279,64
2019	06	\$ 197.764	2,02%	17	\$ 67.911,99	\$ 34.021.191,63
2019	M13	\$ 197.764	2,02%	17	\$ 67.911,99	\$ 34.089.103,62
2019	07	\$ 197.764	2,02%	16	\$ 63.917,17	\$ 34.153.020,78
2019	08	\$ 197.764	2,02%	15	\$ 59.922,34	\$ 34.212.943,12
2019	09	\$ 197.764	2,02%	14	\$ 55.927,52	\$ 34.268.870,64
2019	10	\$ 197.764	2,02%	13	\$ 51.932,70	\$ 34.320.803,34
2019	11	\$ 197.764	2,02%	12	\$ 47.937,87	\$ 34.368.741,21
2019	12	\$ 197.764	2,02%	11	\$ 43.943,05	\$ 34.412.684,26
2019	M14	\$ 197.764	2,02%	11	\$ 43.943,05	\$ 34.456.627,32
2020	01	\$ 205.279	2,02%	10	\$ 41.466,26	\$ 34.498.093,58
2020	02	\$ 205.279	2,02%	9	\$ 37.319,63	\$ 34.535.413,21
2020	03	\$ 205.279	2,02%	8	\$ 33.173,01	\$ 34.568.586,22
2020	04	\$ 205.279	2,02%	7	\$ 29.026,38	\$ 34.597.612,60
2020	05	\$ 205.279	2,02%	6	\$ 24.879,76	\$ 34.622.492,36
2020	06	\$ 205.279	2,02%	5	\$ 20.733,13	\$ 34.643.225,49
2020	M13	\$ 205.279	2,02%	5	\$ 20.733,13	\$ 34.663.958,62
2020	07	\$ 205.279	2,02%	4	\$ 16.586,50	\$ 34.680.545,12
2020	08	\$ 205.279	2,02%	3	\$ 12.439,88	\$ 34.692.985,00
2020	09	\$ 205.279	2,02%	2	\$ 8.293,25	\$ 34.701.278,25
2020	10	\$ 205.279	2,02%	1	\$ 4.146,63	\$ 34.705.424,88

37. CARLOS JESUS SANCHEZ CLAVIJO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1993	\$ 109.537,53	22,60%	0,03	\$ 3.286,13
1994	\$ 134.293,01	22,59%	14	\$ 1.880.102,16
1995	\$ 164.629,80	19,46%	14	\$ 2.304.817,24
1996	\$ 196.666,76	21,63%	14	\$ 2.753.334,68

1997	\$ 239.205,78	17,68%	14	\$ 3.348.880,97
1998	\$ 281.497,37	16,70%	14	\$ 3.940.963,13
1999	\$ 328.507,43	9,23%	14	\$ 4.599.103,97
2000	\$ 358.828,66	8,75%	14	\$ 5.023.601,26
2001	\$ 390.226,17	7,65%	14	\$ 5.463.166,38
2002	\$ 420.078,47	6,99%	14	\$ 5.881.098,60
2003	\$ 449.441,96	6,49%	14	\$ 6.292.187,40
2004	\$ 478.610,74	5,50%	14	\$ 6.700.550,36
2005	\$ 504.934,33	4,85%	14	\$ 7.069.080,63
2006	\$ 529.423,65	4,48%	14	\$ 7.411.931,04
2007	\$ 553.141,82	5,69%	14	\$ 7.743.985,55
2008	\$ 584.615,59	7,67%	14	\$ 8.184.618,33
2009	\$ 629.455,61	2,00%	14	\$ 8.812.378,55
2010	\$ 642.044,72	3,17%	14	\$ 8.988.626,12
2011	\$ 662.397,54	3,73%	14	\$ 9.273.565,57
2012	\$ 687.104,97	2,44%	14	\$ 9.619.469,57
2013	\$ 703.870,33	1,94%	14	\$ 9.854.184,62
2014	\$ 717.525,41	3,66%	14	\$ 10.045.355,81
2015	\$ 743.786,84	6,77%	14	\$ 10.413.015,83
2016	\$ 794.141,21	5,75%	14	\$ 11.117.977,00
2017	\$ 839.804,33	4,09%	14	\$ 11.757.260,68
2018	\$ 874.152,33	3,18%	14	\$ 12.238.132,64
2019	\$ 901.950,38	3,80%	14	\$ 12.627.305,26
2020	\$ 936.224,49	1,61%	11	\$ 10.298.469,39
				\$ 155.455.356,57

38. OTILIO AREVALO ROPERO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 140.890,32	4,48%	3,5	\$ 493.116,12
2007	\$ 147.202,21	5,69%	14	\$ 2.060.830,89
2008	\$ 155.578,01	7,67%	14	\$ 2.178.092,17
2009	\$ 167.510,85	2,00%	14	\$ 2.345.151,84
2010	\$ 170.861,06	3,17%	14	\$ 2.392.054,87
2011	\$ 176.277,36	3,73%	14	\$ 2.467.883,01
2012	\$ 182.852,50	2,44%	14	\$ 2.559.935,05
2013	\$ 187.314,10	1,94%	14	\$ 2.622.397,46
2014	\$ 190.948,00	3,66%	14	\$ 2.673.271,97
2015	\$ 197.936,69	6,77%	14	\$ 2.771.113,73
2016	\$ 211.337,01	5,75%	14	\$ 2.958.718,13
2017	\$ 223.488,89	4,09%	14	\$ 3.128.844,42
2018	\$ 232.629,58	3,18%	14	\$ 3.256.814,16
2019	\$ 240.027,20	3,80%	14	\$ 3.360.380,85
2020	\$ 249.148,24	1,61%	11	\$ 2.740.630,61
				\$ 38.009.235,27

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	10	\$ 140.890	2,02%	169	\$ 480.971,37	\$ 480.971,37
2006	11	\$ 140.890	2,02%	168	\$ 478.125,39	\$ 959.096,76
2006	12	\$ 140.890	2,02%	167	\$ 475.279,41	\$ 1.434.376,17
2006	M14	\$ 140.890	2,02%	167	\$ 475.279,41	\$ 1.909.655,58
2007	01	\$ 147.202	2,02%	166	\$ 493.598,44	\$ 2.403.254,01
2007	02	\$ 147.202	2,02%	165	\$ 490.624,95	\$ 2.893.878,97
2007	03	\$ 147.202	2,02%	164	\$ 487.651,47	\$ 3.381.530,44
2007	04	\$ 147.202	2,02%	163	\$ 484.677,98	\$ 3.866.208,42

2007	05	\$ 147.202	2,02%	162	\$ 481.704,50	\$ 4.347.912,92
2007	06	\$ 147.202	2,02%	161	\$ 478.731,02	\$ 4.826.643,94
2007	M13	\$ 147.202	2,02%	161	\$ 478.731,02	\$ 5.305.374,95
2007	07	\$ 147.202	2,02%	160	\$ 475.757,53	\$ 5.781.132,48
2007	08	\$ 147.202	2,02%	159	\$ 472.784,05	\$ 6.253.916,53
2007	09	\$ 147.202	2,02%	158	\$ 469.810,56	\$ 6.723.727,09
2007	10	\$ 147.202	2,02%	157	\$ 466.837,08	\$ 7.190.564,17
2007	11	\$ 147.202	2,02%	156	\$ 463.863,59	\$ 7.654.427,76
2007	12	\$ 147.202	2,02%	155	\$ 460.890,11	\$ 8.115.317,87
2007	M14	\$ 147.202	2,02%	155	\$ 460.890,11	\$ 8.576.207,98
2008	01	\$ 155.578	2,02%	154	\$ 483.972,08	\$ 9.060.180,06
2008	02	\$ 155.578	2,02%	153	\$ 480.829,40	\$ 9.541.009,46
2008	03	\$ 155.578	2,02%	152	\$ 477.686,73	\$ 10.018.696,19
2008	04	\$ 155.578	2,02%	151	\$ 474.544,05	\$ 10.493.240,24
2008	05	\$ 155.578	2,02%	150	\$ 471.401,38	\$ 10.964.641,62
2008	06	\$ 155.578	2,02%	149	\$ 468.258,70	\$ 11.432.900,32
2008	M13	\$ 155.578	2,02%	149	\$ 468.258,70	\$ 11.901.159,02
2008	07	\$ 155.578	2,02%	148	\$ 465.116,02	\$ 12.366.275,04
2008	08	\$ 155.578	2,02%	147	\$ 461.973,35	\$ 12.828.248,39
2008	09	\$ 155.578	2,02%	146	\$ 458.830,67	\$ 13.287.079,06
2008	10	\$ 155.578	2,02%	145	\$ 455.688,00	\$ 13.742.767,06
2008	11	\$ 155.578	2,02%	144	\$ 452.545,32	\$ 14.195.312,38
2008	12	\$ 155.578	2,02%	143	\$ 449.402,65	\$ 14.644.715,02
2008	M14	\$ 155.578	2,02%	143	\$ 449.402,65	\$ 15.094.117,67
2009	01	\$ 167.511	2,02%	142	\$ 480.488,11	\$ 15.574.605,78
2009	02	\$ 167.511	2,02%	141	\$ 477.104,39	\$ 16.051.710,17
2009	03	\$ 167.511	2,02%	140	\$ 473.720,67	\$ 16.525.430,84
2009	04	\$ 167.511	2,02%	139	\$ 470.336,95	\$ 16.995.767,79
2009	05	\$ 167.511	2,02%	138	\$ 466.953,23	\$ 17.462.721,02
2009	06	\$ 167.511	2,02%	137	\$ 463.569,51	\$ 17.926.290,54
2009	M13	\$ 167.511	2,02%	137	\$ 463.569,51	\$ 18.389.860,05
2009	07	\$ 167.511	2,02%	136	\$ 460.185,79	\$ 18.850.045,84
2009	08	\$ 167.511	2,02%	135	\$ 456.802,08	\$ 19.306.847,92
2009	09	\$ 167.511	2,02%	134	\$ 453.418,36	\$ 19.760.266,28
2009	10	\$ 167.511	2,02%	133	\$ 450.034,64	\$ 20.210.300,91
2009	11	\$ 167.511	2,02%	132	\$ 446.650,92	\$ 20.656.951,83
2009	12	\$ 167.511	2,02%	131	\$ 443.267,20	\$ 21.100.219,03
2009	M14	\$ 167.511	2,02%	131	\$ 443.267,20	\$ 21.543.486,23
2010	01	\$ 170.861	2,02%	130	\$ 448.681,15	\$ 21.992.167,38
2010	02	\$ 170.861	2,02%	129	\$ 445.229,76	\$ 22.437.397,13
2010	03	\$ 170.861	2,02%	128	\$ 441.778,36	\$ 22.879.175,50
2010	04	\$ 170.861	2,02%	127	\$ 438.326,97	\$ 23.317.502,47
2010	05	\$ 170.861	2,02%	126	\$ 434.875,58	\$ 23.752.378,04
2010	06	\$ 170.861	2,02%	125	\$ 431.424,18	\$ 24.183.802,22
2010	M13	\$ 170.861	2,02%	125	\$ 431.424,18	\$ 24.615.226,41
2010	07	\$ 170.861	2,02%	124	\$ 427.972,79	\$ 25.043.199,20
2010	08	\$ 170.861	2,02%	123	\$ 424.521,40	\$ 25.467.720,59
2010	09	\$ 170.861	2,02%	122	\$ 421.070,00	\$ 25.888.790,59
2010	10	\$ 170.861	2,02%	121	\$ 417.618,61	\$ 26.306.409,20
2010	11	\$ 170.861	2,02%	120	\$ 414.167,22	\$ 26.720.576,42
2010	12	\$ 170.861	2,02%	119	\$ 410.715,82	\$ 27.131.292,24
2010	M14	\$ 170.861	2,02%	119	\$ 410.715,82	\$ 27.542.008,06
2011	01	\$ 176.277	2,02%	118	\$ 420.174,71	\$ 27.962.182,77
2011	02	\$ 176.277	2,02%	117	\$ 416.613,91	\$ 28.378.796,68
2011	03	\$ 176.277	2,02%	116	\$ 413.053,11	\$ 28.791.849,78
2011	04	\$ 176.277	2,02%	115	\$ 409.492,30	\$ 29.201.342,09
2011	05	\$ 176.277	2,02%	114	\$ 405.931,50	\$ 29.607.273,59

2011	06	\$ 176.277	2,02%	113	\$ 402.370,70	\$ 30.009.644,28
2011	M13	\$ 176.277	2,02%	113	\$ 402.370,70	\$ 30.412.014,98
2011	07	\$ 176.277	2,02%	112	\$ 398.809,89	\$ 30.810.824,88
2011	08	\$ 176.277	2,02%	111	\$ 395.249,09	\$ 31.206.073,97
2011	09	\$ 176.277	2,02%	110	\$ 391.688,29	\$ 31.597.762,26
2011	10	\$ 176.277	2,02%	109	\$ 388.127,49	\$ 31.985.889,74
2011	11	\$ 176.277	2,02%	108	\$ 384.566,68	\$ 32.370.456,43
2011	12	\$ 176.277	2,02%	107	\$ 381.005,88	\$ 32.751.462,31
2011	M14	\$ 176.277	2,02%	107	\$ 381.005,88	\$ 33.132.468,19
2012	01	\$ 182.853	2,02%	106	\$ 391.523,78	\$ 33.523.991,97
2012	02	\$ 182.853	2,02%	105	\$ 387.830,16	\$ 33.911.822,13
2012	03	\$ 182.853	2,02%	104	\$ 384.136,54	\$ 0,00
2012	04	\$ 182.853	2,02%	103	\$ 380.442,92	\$ 34.676.401,59
2012	05	\$ 182.853	2,02%	102	\$ 376.749,30	\$ 35.053.150,89
2012	06	\$ 182.853	2,02%	101	\$ 373.055,68	\$ 35.426.206,56
2012	M13	\$ 182.853	2,02%	101	\$ 373.055,68	\$ 35.799.262,24
2012	07	\$ 182.853	2,02%	100	\$ 369.362,06	\$ 36.168.624,30
2012	08	\$ 182.853	2,02%	99	\$ 365.668,44	\$ 36.534.292,73
2012	09	\$ 182.853	2,02%	98	\$ 361.974,82	\$ 36.896.267,55
2012	10	\$ 182.853	2,02%	97	\$ 358.281,20	\$ 37.254.548,75
2012	11	\$ 182.853	2,02%	96	\$ 354.587,57	\$ 37.609.136,32
2012	12	\$ 182.853	2,02%	95	\$ 350.893,95	\$ 37.960.030,27
2012	M14	\$ 182.853	2,02%	95	\$ 350.893,95	\$ 38.310.924,23
2013	01	\$ 187.314	2,02%	94	\$ 355.672,02	\$ 38.666.596,25
2013	02	\$ 187.314	2,02%	93	\$ 351.888,28	\$ 39.018.484,53
2013	03	\$ 187.314	2,02%	92	\$ 348.104,53	\$ 39.366.589,06
2013	04	\$ 187.314	2,02%	91	\$ 344.320,79	\$ 39.710.909,85
2013	05	\$ 187.314	2,02%	90	\$ 340.537,04	\$ 40.051.446,89
2013	06	\$ 187.314	2,02%	89	\$ 336.753,30	\$ 40.388.200,18
2013	M13	\$ 187.314	2,02%	89	\$ 336.753,30	\$ 40.724.953,48
2013	07	\$ 187.314	2,02%	88	\$ 332.969,55	\$ 41.057.923,03
2013	08	\$ 187.314	2,02%	87	\$ 329.185,81	\$ 41.387.108,84
2013	09	\$ 187.314	2,02%	86	\$ 325.402,06	\$ 41.712.510,90
2013	10	\$ 187.314	2,02%	85	\$ 321.618,32	\$ 42.034.129,22
2013	11	\$ 187.314	2,02%	84	\$ 317.834,57	\$ 42.351.963,79
2013	12	\$ 187.314	2,02%	83	\$ 314.050,83	\$ 42.666.014,62
2013	M14	\$ 187.314	2,02%	83	\$ 314.050,83	\$ 42.980.065,45
2014	01	\$ 190.948	2,02%	82	\$ 316.286,26	\$ 43.296.351,71
2014	02	\$ 190.948	2,02%	81	\$ 312.429,11	\$ 43.608.780,83
2014	03	\$ 190.948	2,02%	80	\$ 308.571,96	\$ 43.917.352,79
2014	04	\$ 190.948	2,02%	79	\$ 304.714,82	\$ 44.222.067,61
2014	05	\$ 190.948	2,02%	78	\$ 300.857,67	\$ 44.522.925,27
2014	06	\$ 190.948	2,02%	77	\$ 297.000,52	\$ 44.819.925,79
2014	M13	\$ 190.948	2,02%	77	\$ 297.000,52	\$ 45.116.926,31
2014	07	\$ 190.948	2,02%	76	\$ 293.143,37	\$ 45.410.069,67
2014	08	\$ 190.948	2,02%	75	\$ 289.286,22	\$ 45.699.355,89
2014	09	\$ 190.948	2,02%	74	\$ 285.429,07	\$ 45.984.784,96
2014	10	\$ 190.948	2,02%	73	\$ 281.571,92	\$ 46.266.356,88
2014	11	\$ 190.948	2,02%	72	\$ 277.714,77	\$ 46.544.071,64
2014	12	\$ 190.948	2,02%	71	\$ 273.857,62	\$ 46.817.929,26
2014	M14	\$ 190.948	2,02%	71	\$ 273.857,62	\$ 47.091.786,88
2015	01	\$ 197.937	2,02%	70	\$ 279.882,49	\$ 47.371.669,37
2015	02	\$ 197.937	2,02%	69	\$ 275.884,17	\$ 47.647.553,53
2015	03	\$ 197.937	2,02%	68	\$ 271.885,84	\$ 47.919.439,38
2015	04	\$ 197.937	2,02%	67	\$ 267.887,52	\$ 48.187.326,90
2015	05	\$ 197.937	2,02%	66	\$ 263.889,20	\$ 48.451.216,10
2015	06	\$ 197.937	2,02%	65	\$ 259.890,88	\$ 48.711.106,98

2015	M13	\$ 197.937	2,02%	65	\$ 259.890,88	\$ 48.970.997,86
2015	07	\$ 197.937	2,02%	64	\$ 255.892,56	\$ 49.226.890,42
2015	08	\$ 197.937	2,02%	63	\$ 251.894,24	\$ 49.478.784,66
2015	09	\$ 197.937	2,02%	62	\$ 247.895,92	\$ 49.726.680,58
2015	10	\$ 197.937	2,02%	61	\$ 243.897,60	\$ 49.970.578,17
2015	11	\$ 197.937	2,02%	60	\$ 239.899,27	\$ 50.210.477,45
2015	12	\$ 197.937	2,02%	59	\$ 235.900,95	\$ 50.446.378,40
2015	M14	\$ 197.937	2,02%	59	\$ 235.900,95	\$ 50.682.279,35
2016	01	\$ 211.337	2,02%	58	\$ 247.602,44	\$ 50.929.881,79
2016	02	\$ 211.337	2,02%	57	\$ 243.333,43	\$ 51.173.215,22
2016	03	\$ 211.337	2,02%	56	\$ 239.064,42	\$ 51.412.279,65
2016	04	\$ 211.337	2,02%	55	\$ 234.795,42	\$ 51.647.075,07
2016	05	\$ 211.337	2,02%	54	\$ 230.526,41	\$ 51.877.601,48
2016	06	\$ 211.337	2,02%	53	\$ 226.257,40	\$ 52.103.858,88
2016	M13	\$ 211.337	2,02%	53	\$ 226.257,40	\$ 52.330.116,28
2016	07	\$ 211.337	2,02%	52	\$ 221.988,39	\$ 52.552.104,67
2016	08	\$ 211.337	2,02%	51	\$ 217.719,39	\$ 52.769.824,06
2016	09	\$ 211.337	2,02%	50	\$ 213.450,38	\$ 52.983.274,44
2016	10	\$ 211.337	2,02%	49	\$ 209.181,37	\$ 53.192.455,81
2016	11	\$ 211.337	2,02%	48	\$ 204.912,36	\$ 53.397.368,18
2016	12	\$ 211.337	2,02%	47	\$ 200.643,36	\$ 53.598.011,53
2016	M14	\$ 211.337	2,02%	47	\$ 200.643,36	\$ 53.798.654,89
2017	01	\$ 223.489	2,02%	46	\$ 207.665,87	\$ 54.006.320,76
2017	02	\$ 223.489	2,02%	45	\$ 203.151,40	\$ 54.209.472,16
2017	03	\$ 223.489	2,02%	44	\$ 198.636,92	\$ 54.408.109,08
2017	04	\$ 223.489	2,02%	43	\$ 194.122,45	\$ 54.602.231,53
2017	05	\$ 223.489	2,02%	42	\$ 189.607,97	\$ 54.791.839,50
2017	06	\$ 223.489	2,02%	41	\$ 185.093,50	\$ 54.976.933,00
2017	M13	\$ 223.489	2,02%	41	\$ 185.093,50	\$ 55.162.026,50
2017	07	\$ 223.489	2,02%	40	\$ 180.579,02	\$ 55.342.605,52
2017	08	\$ 223.489	2,02%	39	\$ 176.064,55	\$ 55.518.670,06
2017	09	\$ 223.489	2,02%	38	\$ 171.550,07	\$ 55.690.220,13
2017	10	\$ 223.489	2,02%	37	\$ 167.035,59	\$ 55.857.255,73
2017	11	\$ 223.489	2,02%	36	\$ 162.521,12	\$ 56.019.776,84
2017	12	\$ 223.489	2,02%	35	\$ 158.006,64	\$ 56.177.783,49
2017	M14	\$ 223.489	2,02%	35	\$ 158.006,64	\$ 56.335.790,13
2018	01	\$ 232.630	2,02%	34	\$ 159.770,00	\$ 56.495.560,13
2018	02	\$ 232.630	2,02%	33	\$ 155.070,88	\$ 56.650.631,01
2018	03	\$ 232.630	2,02%	32	\$ 150.371,76	\$ 56.801.002,77
2018	04	\$ 232.630	2,02%	31	\$ 145.672,64	\$ 56.946.675,41
2018	05	\$ 232.630	2,02%	30	\$ 140.973,53	\$ 57.087.648,94
2018	06	\$ 232.630	2,02%	29	\$ 136.274,41	\$ 57.223.923,35
2018	M13	\$ 232.630	2,02%	29	\$ 136.274,41	\$ 57.360.197,76
2018	07	\$ 232.630	2,02%	28	\$ 131.575,29	\$ 57.491.773,05
2018	08	\$ 232.630	2,02%	27	\$ 126.876,17	\$ 57.618.649,23
2018	09	\$ 232.630	2,02%	26	\$ 122.177,06	\$ 57.740.826,28
2018	10	\$ 232.630	2,02%	25	\$ 117.477,94	\$ 57.858.304,22
2018	11	\$ 232.630	2,02%	24	\$ 112.778,82	\$ 57.971.083,04
2018	12	\$ 232.630	2,02%	23	\$ 108.079,70	\$ 58.079.162,75
2018	M14	\$ 232.630	2,02%	23	\$ 108.079,70	\$ 58.187.242,45
2019	01	\$ 240.027	2,02%	22	\$ 106.668,09	\$ 58.293.910,54
2019	02	\$ 240.027	2,02%	21	\$ 101.819,54	\$ 58.395.730,08
2019	03	\$ 240.027	2,02%	20	\$ 96.970,99	\$ 58.492.701,07
2019	04	\$ 240.027	2,02%	19	\$ 92.122,44	\$ 58.584.823,51
2019	05	\$ 240.027	2,02%	18	\$ 87.273,89	\$ 58.672.097,40
2019	06	\$ 240.027	2,02%	17	\$ 82.425,34	\$ 58.754.522,75
2019	M13	\$ 240.027	2,02%	17	\$ 82.425,34	\$ 58.836.948,09

2019	07	\$ 240.027	2,02%	16	\$ 77.576,79	\$ 58.914.524,88
2019	08	\$ 240.027	2,02%	15	\$ 72.728,24	\$ 58.987.253,12
2019	09	\$ 240.027	2,02%	14	\$ 67.879,69	\$ 59.055.132,81
2019	10	\$ 240.027	2,02%	13	\$ 63.031,14	\$ 59.118.163,96
2019	11	\$ 240.027	2,02%	12	\$ 58.182,59	\$ 59.176.346,55
2019	12	\$ 240.027	2,02%	11	\$ 53.334,04	\$ 59.229.680,60
2019	M14	\$ 240.027	2,02%	11	\$ 53.334,04	\$ 59.283.014,64
2020	01	\$ 249.148	2,02%	10	\$ 50.327,94	\$ 59.333.342,59
2020	02	\$ 249.148	2,02%	9	\$ 45.295,15	\$ 59.378.637,73
2020	03	\$ 249.148	2,02%	8	\$ 40.262,36	\$ 59.418.900,09
2020	04	\$ 249.148	2,02%	7	\$ 35.229,56	\$ 59.454.129,65
2020	05	\$ 249.148	2,02%	6	\$ 30.196,77	\$ 59.484.326,42
2020	06	\$ 249.148	2,02%	5	\$ 25.163,97	\$ 59.509.490,39
2020	M13	\$ 249.148	2,02%	5	\$ 25.163,97	\$ 59.534.654,36
2020	07	\$ 249.148	2,02%	4	\$ 20.131,18	\$ 59.554.785,54
2020	08	\$ 249.148	2,02%	3	\$ 15.098,38	\$ 59.569.883,92
2020	09	\$ 249.148	2,02%	2	\$ 10.065,59	\$ 59.579.949,51
2020	10	\$ 249.148	2,02%	1	\$ 5.032,79	\$ 59.584.982,30

39. CESAR AUGUSTO MENDOZA GUZMÁN

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2005	\$ 141.089,46	4,85%	13	\$ 1.834.162,98
2006	\$ 147.932,30	4,48%	14	\$ 2.071.052,18
2007	\$ 154.559,67	5,69%	14	\$ 2.163.835,32
2008	\$ 163.354,11	7,67%	14	\$ 2.286.957,55
2009	\$ 175.883,37	2,00%	14	\$ 2.462.367,20
2010	\$ 179.401,04	3,17%	14	\$ 2.511.614,54
2011	\$ 185.088,05	3,73%	14	\$ 2.591.232,72
2012	\$ 191.991,84	2,44%	14	\$ 2.687.885,70
2013	\$ 196.676,44	1,94%	14	\$ 2.753.470,11
2014	\$ 200.491,96	3,66%	14	\$ 2.806.887,43
2015	\$ 207.829,97	6,77%	14	\$ 2.909.619,51
2016	\$ 221.900,05	5,75%	14	\$ 3.106.600,75
2017	\$ 234.659,31	4,09%	14	\$ 3.285.230,30
2018	\$ 244.256,87	3,18%	14	\$ 3.419.596,21
2019	\$ 252.024,24	3,80%	14	\$ 3.528.339,37
2020	\$ 261.601,16	1,61%	11	\$ 2.877.612,78
				\$ 43.296.464,67

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2005	02	\$ 141.089	2,02%	189	\$ 538.649,58	\$ 538.649,58
2005	03	\$ 141.089	2,02%	188	\$ 535.799,59	\$ 1.074.449,17
2005	04	\$ 141.089	2,02%	187	\$ 532.949,59	\$ 1.607.398,76
2005	05	\$ 141.089	2,02%	186	\$ 530.099,59	\$ 2.137.498,35
2005	06	\$ 141.089	2,02%	185	\$ 527.249,59	\$ 2.664.747,94
2005	M13	\$ 141.089	2,02%	185	\$ 527.249,59	\$ 3.191.997,54
2005	07	\$ 141.089	2,02%	184	\$ 524.399,60	\$ 3.716.397,13
2005	08	\$ 141.089	2,02%	183	\$ 521.549,60	\$ 4.237.946,73
2005	09	\$ 141.089	2,02%	182	\$ 518.699,60	\$ 4.756.646,33
2005	10	\$ 141.089	2,02%	181	\$ 515.849,60	\$ 5.272.495,93
2005	11	\$ 141.089	2,02%	180	\$ 512.999,60	\$ 5.785.495,53
2005	12	\$ 141.089	2,02%	179	\$ 510.149,61	\$ 6.295.645,14
2005	M14	\$ 141.089	2,02%	179	\$ 510.149,61	\$ 6.805.794,75

2006	01	\$ 147.932	2,02%	178	\$ 531.905,37	\$ 7.337.700,12
2006	02	\$ 147.932	2,02%	177	\$ 528.917,14	\$ 7.866.617,26
2006	03	\$ 147.932	2,02%	176	\$ 525.928,91	\$ 8.392.546,17
2006	04	\$ 147.932	2,02%	175	\$ 522.940,68	\$ 8.915.486,85
2006	05	\$ 147.932	2,02%	174	\$ 519.952,44	\$ 9.435.439,29
2006	06	\$ 147.932	2,02%	173	\$ 516.964,21	\$ 9.952.403,50
2006	M13	\$ 147.932	2,02%	173	\$ 516.964,21	\$ 10.469.367,71
2006	07	\$ 147.932	2,02%	172	\$ 513.975,98	\$ 10.983.343,69
2006	08	\$ 147.932	2,02%	171	\$ 510.987,75	\$ 11.494.331,44
2006	09	\$ 147.932	2,02%	170	\$ 507.999,51	\$ 12.002.330,95
2006	10	\$ 147.932	2,02%	169	\$ 505.011,28	\$ 12.507.342,23
2006	11	\$ 147.932	2,02%	168	\$ 502.023,05	\$ 13.009.365,28
2006	12	\$ 147.932	2,02%	167	\$ 499.034,82	\$ 13.508.400,10
2006	M14	\$ 147.932	2,02%	167	\$ 499.034,82	\$ 14.007.434,92
2007	01	\$ 154.560	2,02%	166	\$ 518.269,47	\$ 14.525.704,39
2007	02	\$ 154.560	2,02%	165	\$ 515.147,37	\$ 15.040.851,75
2007	03	\$ 154.560	2,02%	164	\$ 512.025,26	\$ 15.552.877,02
2007	04	\$ 154.560	2,02%	163	\$ 508.903,16	\$ 16.061.780,17
2007	05	\$ 154.560	2,02%	162	\$ 505.781,05	\$ 16.567.561,22
2007	06	\$ 154.560	2,02%	161	\$ 502.658,95	\$ 17.070.220,17
2007	M13	\$ 154.560	2,02%	161	\$ 502.658,95	\$ 17.572.879,11
2007	07	\$ 154.560	2,02%	160	\$ 499.536,84	\$ 18.072.415,95
2007	08	\$ 154.560	2,02%	159	\$ 496.414,73	\$ 18.568.830,69
2007	09	\$ 154.560	2,02%	158	\$ 493.292,63	\$ 19.062.123,32
2007	10	\$ 154.560	2,02%	157	\$ 490.170,52	\$ 19.552.293,84
2007	11	\$ 154.560	2,02%	156	\$ 487.048,42	\$ 20.039.342,26
2007	12	\$ 154.560	2,02%	155	\$ 483.926,31	\$ 20.523.268,57
2007	M14	\$ 154.560	2,02%	155	\$ 483.926,31	\$ 21.007.194,89
2008	01	\$ 163.354	2,02%	154	\$ 508.161,97	\$ 21.515.356,85
2008	02	\$ 163.354	2,02%	153	\$ 504.862,21	\$ 22.020.219,07
2008	03	\$ 163.354	2,02%	152	\$ 501.562,46	\$ 22.521.781,53
2008	04	\$ 163.354	2,02%	151	\$ 498.262,71	\$ 23.020.044,24
2008	05	\$ 163.354	2,02%	150	\$ 494.962,96	\$ 23.515.007,19
2008	06	\$ 163.354	2,02%	149	\$ 491.663,20	\$ 24.006.670,40
2008	M13	\$ 163.354	2,02%	149	\$ 491.663,20	\$ 24.498.333,60
2008	07	\$ 163.354	2,02%	148	\$ 488.363,45	\$ 24.986.697,05
2008	08	\$ 163.354	2,02%	147	\$ 485.063,70	\$ 25.471.760,75
2008	09	\$ 163.354	2,02%	146	\$ 481.763,94	\$ 25.953.524,69
2008	10	\$ 163.354	2,02%	145	\$ 478.464,19	\$ 26.431.988,88
2008	11	\$ 163.354	2,02%	144	\$ 475.164,44	\$ 26.907.153,32
2008	12	\$ 163.354	2,02%	143	\$ 471.864,68	\$ 27.379.018,00
2008	M14	\$ 163.354	2,02%	143	\$ 471.864,68	\$ 27.850.882,69
2009	01	\$ 175.883	2,02%	142	\$ 504.503,86	\$ 28.355.386,55
2009	02	\$ 175.883	2,02%	141	\$ 500.951,02	\$ 28.856.337,56
2009	03	\$ 175.883	2,02%	140	\$ 497.398,17	\$ 29.353.735,74
2009	04	\$ 175.883	2,02%	139	\$ 493.845,33	\$ 29.847.581,07
2009	05	\$ 175.883	2,02%	138	\$ 490.292,49	\$ 30.337.873,55
2009	06	\$ 175.883	2,02%	137	\$ 486.739,64	\$ 30.824.613,19
2009	M13	\$ 175.883	2,02%	137	\$ 486.739,64	\$ 31.311.352,84
2009	07	\$ 175.883	2,02%	136	\$ 483.186,80	\$ 31.794.539,63
2009	08	\$ 175.883	2,02%	135	\$ 479.633,95	\$ 32.274.173,59
2009	09	\$ 175.883	2,02%	134	\$ 476.081,11	\$ 32.750.254,69
2009	10	\$ 175.883	2,02%	133	\$ 472.528,26	\$ 33.222.782,96
2009	11	\$ 175.883	2,02%	132	\$ 468.975,42	\$ 33.691.758,38
2009	12	\$ 175.883	2,02%	131	\$ 465.422,58	\$ 34.157.180,96
2009	M14	\$ 175.883	2,02%	131	\$ 465.422,58	\$ 34.622.603,53
2010	01	\$ 179.401	2,02%	130	\$ 471.107,13	\$ 35.093.710,66

2010	02	\$ 179.401	2,02%	129	\$ 467.483,23	\$ 35.561.193,89
2010	03	\$ 179.401	2,02%	128	\$ 463.859,33	\$ 36.025.053,21
2010	04	\$ 179.401	2,02%	127	\$ 460.235,42	\$ 36.485.288,63
2010	05	\$ 179.401	2,02%	126	\$ 456.611,52	\$ 36.941.900,16
2010	06	\$ 179.401	2,02%	125	\$ 452.987,62	\$ 37.394.887,78
2010	M13	\$ 179.401	2,02%	125	\$ 452.987,62	\$ 37.847.875,40
2010	07	\$ 179.401	2,02%	124	\$ 449.363,72	\$ 38.297.239,12
2010	08	\$ 179.401	2,02%	123	\$ 445.739,82	\$ 38.742.978,94
2010	09	\$ 179.401	2,02%	122	\$ 442.115,92	\$ 39.185.094,86
2010	10	\$ 179.401	2,02%	121	\$ 438.492,02	\$ 39.623.586,88
2010	11	\$ 179.401	2,02%	120	\$ 434.868,12	\$ 40.058.455,00
2010	12	\$ 179.401	2,02%	119	\$ 431.244,22	\$ 40.489.699,22
2010	M14	\$ 179.401	2,02%	119	\$ 431.244,22	\$ 40.920.943,43
2011	01	\$ 185.088	2,02%	118	\$ 441.175,88	\$ 41.362.119,31
2011	02	\$ 185.088	2,02%	117	\$ 437.437,10	\$ 41.799.556,41
2011	03	\$ 185.088	2,02%	116	\$ 433.698,32	\$ 42.233.254,73
2011	04	\$ 185.088	2,02%	115	\$ 429.959,54	\$ 42.663.214,28
2011	05	\$ 185.088	2,02%	114	\$ 426.220,76	\$ 43.089.435,04
2011	06	\$ 185.088	2,02%	113	\$ 422.481,99	\$ 43.511.917,03
2011	M13	\$ 185.088	2,02%	113	\$ 422.481,99	\$ 43.934.399,01
2011	07	\$ 185.088	2,02%	112	\$ 418.743,21	\$ 44.353.142,22
2011	08	\$ 185.088	2,02%	111	\$ 415.004,43	\$ 44.768.146,65
2011	09	\$ 185.088	2,02%	110	\$ 411.265,65	\$ 45.179.412,30
2011	10	\$ 185.088	2,02%	109	\$ 407.526,87	\$ 45.586.939,17
2011	11	\$ 185.088	2,02%	108	\$ 403.788,09	\$ 45.990.727,27
2011	12	\$ 185.088	2,02%	107	\$ 400.049,31	\$ 46.390.776,58
2011	M14	\$ 185.088	2,02%	107	\$ 400.049,31	\$ 46.790.825,89
2012	01	\$ 191.992	2,02%	106	\$ 411.092,92	\$ 47.201.918,81
2012	02	\$ 191.992	2,02%	105	\$ 407.214,68	\$ 47.609.133,50
2012	03	\$ 191.992	2,02%	104	\$ 403.336,45	\$ 0,00
2012	04	\$ 191.992	2,02%	103	\$ 399.458,21	\$ 48.411.928,16
2012	05	\$ 191.992	2,02%	102	\$ 395.579,98	\$ 48.807.508,14
2012	06	\$ 191.992	2,02%	101	\$ 391.701,74	\$ 49.199.209,88
2012	M13	\$ 191.992	2,02%	101	\$ 391.701,74	\$ 49.590.911,62
2012	07	\$ 191.992	2,02%	100	\$ 387.823,51	\$ 49.978.735,13
2012	08	\$ 191.992	2,02%	99	\$ 383.945,27	\$ 50.362.680,40
2012	09	\$ 191.992	2,02%	98	\$ 380.067,04	\$ 50.742.747,44
2012	10	\$ 191.992	2,02%	97	\$ 376.188,80	\$ 51.118.936,25
2012	11	\$ 191.992	2,02%	96	\$ 372.310,57	\$ 51.491.246,81
2012	12	\$ 191.992	2,02%	95	\$ 368.432,33	\$ 51.859.679,15
2012	M14	\$ 191.992	2,02%	95	\$ 368.432,33	\$ 52.228.111,48
2013	01	\$ 196.676	2,02%	94	\$ 373.449,22	\$ 52.601.560,70
2013	02	\$ 196.676	2,02%	93	\$ 369.476,35	\$ 52.971.037,05
2013	03	\$ 196.676	2,02%	92	\$ 365.503,49	\$ 53.336.540,54
2013	04	\$ 196.676	2,02%	91	\$ 361.530,63	\$ 53.698.071,17
2013	05	\$ 196.676	2,02%	90	\$ 357.557,76	\$ 54.055.628,93
2013	06	\$ 196.676	2,02%	89	\$ 353.584,90	\$ 54.409.213,82
2013	M13	\$ 196.676	2,02%	89	\$ 353.584,90	\$ 54.762.798,72
2013	07	\$ 196.676	2,02%	88	\$ 349.612,03	\$ 55.112.410,76
2013	08	\$ 196.676	2,02%	87	\$ 345.639,17	\$ 55.458.049,93
2013	09	\$ 196.676	2,02%	86	\$ 341.666,31	\$ 55.799.716,23
2013	10	\$ 196.676	2,02%	85	\$ 337.693,44	\$ 56.137.409,67
2013	11	\$ 196.676	2,02%	84	\$ 333.720,58	\$ 56.471.130,25
2013	12	\$ 196.676	2,02%	83	\$ 329.747,71	\$ 56.800.877,96
2013	M14	\$ 196.676	2,02%	83	\$ 329.747,71	\$ 57.130.625,68
2014	01	\$ 200.492	2,02%	82	\$ 332.094,88	\$ 57.462.720,56
2014	02	\$ 200.492	2,02%	81	\$ 328.044,94	\$ 57.790.765,50

2014	03	\$ 200.492	2,02%	80	\$ 323.995,01	\$ 58.114.760,51
2014	04	\$ 200.492	2,02%	79	\$ 319.945,07	\$ 58.434.705,58
2014	05	\$ 200.492	2,02%	78	\$ 315.895,13	\$ 58.750.600,71
2014	06	\$ 200.492	2,02%	77	\$ 311.845,19	\$ 59.062.445,90
2014	M13	\$ 200.492	2,02%	77	\$ 311.845,19	\$ 59.374.291,10
2014	07	\$ 200.492	2,02%	76	\$ 307.795,26	\$ 59.682.086,35
2014	08	\$ 200.492	2,02%	75	\$ 303.745,32	\$ 59.985.831,67
2014	09	\$ 200.492	2,02%	74	\$ 299.695,38	\$ 60.285.527,05
2014	10	\$ 200.492	2,02%	73	\$ 295.645,44	\$ 60.581.172,50
2014	11	\$ 200.492	2,02%	72	\$ 291.595,51	\$ 60.872.768,00
2014	12	\$ 200.492	2,02%	71	\$ 287.545,57	\$ 61.160.313,57
2014	M14	\$ 200.492	2,02%	71	\$ 287.545,57	\$ 61.447.859,14
2015	01	\$ 207.830	2,02%	70	\$ 293.871,57	\$ 61.741.730,71
2015	02	\$ 207.830	2,02%	69	\$ 289.673,41	\$ 62.031.404,11
2015	03	\$ 207.830	2,02%	68	\$ 285.475,24	\$ 62.316.879,35
2015	04	\$ 207.830	2,02%	67	\$ 281.277,07	\$ 62.598.156,43
2015	05	\$ 207.830	2,02%	66	\$ 277.078,91	\$ 62.875.235,34
2015	06	\$ 207.830	2,02%	65	\$ 272.880,74	\$ 63.148.116,08
2015	M13	\$ 207.830	2,02%	65	\$ 272.880,74	\$ 63.420.996,83
2015	07	\$ 207.830	2,02%	64	\$ 268.682,58	\$ 63.689.679,40
2015	08	\$ 207.830	2,02%	63	\$ 264.484,41	\$ 63.954.163,82
2015	09	\$ 207.830	2,02%	62	\$ 260.286,25	\$ 64.214.450,07
2015	10	\$ 207.830	2,02%	61	\$ 256.088,08	\$ 64.470.538,15
2015	11	\$ 207.830	2,02%	60	\$ 251.889,92	\$ 64.722.428,07
2015	12	\$ 207.830	2,02%	59	\$ 247.691,75	\$ 64.970.119,82
2015	M14	\$ 207.830	2,02%	59	\$ 247.691,75	\$ 65.217.811,57
2016	01	\$ 221.900	2,02%	58	\$ 259.978,10	\$ 65.477.789,68
2016	02	\$ 221.900	2,02%	57	\$ 255.495,72	\$ 65.733.285,40
2016	03	\$ 221.900	2,02%	56	\$ 251.013,34	\$ 65.984.298,74
2016	04	\$ 221.900	2,02%	55	\$ 246.530,96	\$ 66.230.829,70
2016	05	\$ 221.900	2,02%	54	\$ 242.048,58	\$ 66.472.878,28
2016	06	\$ 221.900	2,02%	53	\$ 237.566,20	\$ 66.710.444,47
2016	M13	\$ 221.900	2,02%	53	\$ 237.566,20	\$ 66.948.010,67
2016	07	\$ 221.900	2,02%	52	\$ 233.083,82	\$ 67.181.094,49
2016	08	\$ 221.900	2,02%	51	\$ 228.601,44	\$ 67.409.695,92
2016	09	\$ 221.900	2,02%	50	\$ 224.119,05	\$ 67.633.814,98
2016	10	\$ 221.900	2,02%	49	\$ 219.636,67	\$ 67.853.451,65
2016	11	\$ 221.900	2,02%	48	\$ 215.154,29	\$ 68.068.605,94
2016	12	\$ 221.900	2,02%	47	\$ 210.671,91	\$ 68.279.277,85
2016	M14	\$ 221.900	2,02%	47	\$ 210.671,91	\$ 68.489.949,77
2017	01	\$ 234.659	2,02%	46	\$ 218.045,43	\$ 68.707.995,19
2017	02	\$ 234.659	2,02%	45	\$ 213.305,31	\$ 68.921.300,50
2017	03	\$ 234.659	2,02%	44	\$ 208.565,19	\$ 69.129.865,69
2017	04	\$ 234.659	2,02%	43	\$ 203.825,07	\$ 69.333.690,77
2017	05	\$ 234.659	2,02%	42	\$ 199.084,96	\$ 69.532.775,72
2017	06	\$ 234.659	2,02%	41	\$ 194.344,84	\$ 69.727.120,56
2017	M13	\$ 234.659	2,02%	41	\$ 194.344,84	\$ 69.921.465,40
2017	07	\$ 234.659	2,02%	40	\$ 189.604,72	\$ 70.111.070,12
2017	08	\$ 234.659	2,02%	39	\$ 184.864,60	\$ 70.295.934,72
2017	09	\$ 234.659	2,02%	38	\$ 180.124,48	\$ 70.476.059,21
2017	10	\$ 234.659	2,02%	37	\$ 175.384,37	\$ 70.651.443,57
2017	11	\$ 234.659	2,02%	36	\$ 170.644,25	\$ 70.822.087,82
2017	12	\$ 234.659	2,02%	35	\$ 165.904,13	\$ 70.987.991,95
2017	M14	\$ 234.659	2,02%	35	\$ 165.904,13	\$ 71.153.896,08
2018	01	\$ 244.257	2,02%	34	\$ 167.755,62	\$ 71.321.651,70
2018	02	\$ 244.257	2,02%	33	\$ 162.821,63	\$ 71.484.473,33
2018	03	\$ 244.257	2,02%	32	\$ 157.887,64	\$ 71.642.360,97

2018	04	\$ 244.257	2,02%	31	\$ 152.953,65	\$ 71.795.314,63
2018	05	\$ 244.257	2,02%	30	\$ 148.019,66	\$ 71.943.334,29
2018	06	\$ 244.257	2,02%	29	\$ 143.085,68	\$ 72.086.419,97
2018	M13	\$ 244.257	2,02%	29	\$ 143.085,68	\$ 72.229.505,64
2018	07	\$ 244.257	2,02%	28	\$ 138.151,69	\$ 72.367.657,33
2018	08	\$ 244.257	2,02%	27	\$ 133.217,70	\$ 72.500.875,03
2018	09	\$ 244.257	2,02%	26	\$ 128.283,71	\$ 72.629.158,74
2018	10	\$ 244.257	2,02%	25	\$ 123.349,72	\$ 72.752.508,46
2018	11	\$ 244.257	2,02%	24	\$ 118.415,73	\$ 72.870.924,19
2018	12	\$ 244.257	2,02%	23	\$ 113.481,74	\$ 72.984.405,93
2018	M14	\$ 244.257	2,02%	23	\$ 113.481,74	\$ 73.097.887,68
2019	01	\$ 252.024	2,02%	22	\$ 111.999,57	\$ 73.209.887,25
2019	02	\$ 252.024	2,02%	21	\$ 106.908,68	\$ 73.316.795,93
2019	03	\$ 252.024	2,02%	20	\$ 101.817,79	\$ 73.418.613,73
2019	04	\$ 252.024	2,02%	19	\$ 96.726,90	\$ 73.515.340,63
2019	05	\$ 252.024	2,02%	18	\$ 91.636,01	\$ 73.606.976,64
2019	06	\$ 252.024	2,02%	17	\$ 86.545,12	\$ 73.693.521,77
2019	M13	\$ 252.024	2,02%	17	\$ 86.545,12	\$ 73.780.066,89
2019	07	\$ 252.024	2,02%	16	\$ 81.454,23	\$ 73.861.521,13
2019	08	\$ 252.024	2,02%	15	\$ 76.363,35	\$ 73.937.884,47
2019	09	\$ 252.024	2,02%	14	\$ 71.272,46	\$ 74.009.156,93
2019	10	\$ 252.024	2,02%	13	\$ 66.181,57	\$ 74.075.338,49
2019	11	\$ 252.024	2,02%	12	\$ 61.090,68	\$ 74.136.429,17
2019	12	\$ 252.024	2,02%	11	\$ 55.999,79	\$ 74.192.428,96
2019	M14	\$ 252.024	2,02%	11	\$ 55.999,79	\$ 74.248.428,74
2020	01	\$ 261.601	2,02%	10	\$ 52.843,43	\$ 74.301.272,18
2020	02	\$ 261.601	2,02%	9	\$ 47.559,09	\$ 74.348.831,27
2020	03	\$ 261.601	2,02%	8	\$ 42.274,75	\$ 74.391.106,02
2020	04	\$ 261.601	2,02%	7	\$ 36.990,40	\$ 74.428.096,42
2020	05	\$ 261.601	2,02%	6	\$ 31.706,06	\$ 74.459.802,48
2020	06	\$ 261.601	2,02%	5	\$ 26.421,72	\$ 74.486.224,20
2020	M13	\$ 261.601	2,02%	5	\$ 26.421,72	\$ 74.512.645,92
2020	07	\$ 261.601	2,02%	4	\$ 21.137,37	\$ 74.533.783,29
2020	08	\$ 261.601	2,02%	3	\$ 15.853,03	\$ 74.549.636,32
2020	09	\$ 261.601	2,02%	2	\$ 10.568,69	\$ 74.560.205,01
2020	10	\$ 261.601	2,02%	1	\$ 5.284,34	\$ 74.565.489,35

40. ELVIRA CARVAJALINO sustituta de CARLOS DANIEL PAREDES

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1996	\$ 270.092,44	21,63%	4,5	\$ 1.215.415,98
1997	\$ 328.513,43	17,68%	14	\$ 4.599.188,09
1998	\$ 386.594,61	16,70%	14	\$ 5.412.324,54
1999	\$ 451.155,91	9,23%	14	\$ 6.316.182,74
2000	\$ 492.797,60	8,75%	14	\$ 6.899.166,41
2001	\$ 535.917,39	7,65%	14	\$ 7.502.843,47
2002	\$ 576.915,07	6,99%	14	\$ 8.076.810,99
2003	\$ 617.241,43	6,49%	14	\$ 8.641.380,08
2004	\$ 657.300,40	5,50%	14	\$ 9.202.205,65
2005	\$ 693.451,93	4,85%	14	\$ 9.708.326,96
2006	\$ 727.084,34	4,48%	14	\$ 10.179.180,81
2007	\$ 759.657,72	5,69%	14	\$ 10.635.208,12
2008	\$ 802.882,25	7,67%	14	\$ 11.240.351,46
2009	\$ 864.463,32	2,00%	14	\$ 12.102.486,41
2010	\$ 881.752,58	3,17%	14	\$ 12.344.536,14
2011	\$ 909.704,14	3,73%	14	\$ 12.735.857,94

2012	\$ 943.636,10	2,44%	14	\$ 13.210.905,44
2013	\$ 966.660,82	1,94%	14	\$ 13.533.251,53
2014	\$ 985.414,04	3,66%	14	\$ 13.795.796,61
2015	\$1.021.480,20	6,77%	14	\$ 14.300.722,77
2016	\$1.090.634,41	5,75%	14	\$ 15.268.881,70
2017	\$1.153.345,89	4,09%	14	\$ 16.146.842,40
2018	\$1.200.517,73	3,18%	14	\$ 16.807.248,25
2019	\$1.238.694,20	3,80%	14	\$ 17.341.718,74
2020	\$1.285.764,58	1,61%	11	\$ 14.143.410,33
				\$ 213.494.725,61

41. JAIME ALONSO LEAL TRIGOS

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 223.867,69	7,67%	1,6	\$ 358.188,30
2009	\$ 241.038,34	2,00%	14	\$ 3.374.536,79
2010	\$ 245.859,11	3,17%	14	\$ 3.442.027,52
2011	\$ 253.652,84	3,73%	14	\$ 3.551.139,79
2012	\$ 263.114,09	2,44%	14	\$ 3.683.597,31
2013	\$ 269.534,08	1,94%	14	\$ 3.773.477,08
2014	\$ 274.763,04	3,66%	14	\$ 3.846.682,54
2015	\$ 284.819,37	6,77%	14	\$ 3.987.471,12
2016	\$ 304.101,64	5,75%	14	\$ 4.257.422,91
2017	\$ 321.587,48	4,09%	14	\$ 4.502.224,73
2018	\$ 334.740,41	3,18%	14	\$ 4.686.365,72
2019	\$ 345.385,15	3,80%	14	\$ 4.835.392,15
2020	\$ 358.509,79	1,61%	11	\$ 3.943.607,69
				\$ 48.242.133,65

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	12	\$ 223.868	2,02%	143	\$ 646.664,21	\$ 646.664,21
2008	M14	\$ 223.868	2,02%	143	\$ 646.664,21	\$ 1.293.328,42
2009	01	\$ 241.038	2,02%	142	\$ 691.394,38	\$ 1.984.722,80
2009	02	\$ 241.038	2,02%	141	\$ 686.525,41	\$ 2.671.248,20
2009	03	\$ 241.038	2,02%	140	\$ 681.656,43	\$ 3.352.904,63
2009	04	\$ 241.038	2,02%	139	\$ 676.787,46	\$ 4.029.692,09
2009	05	\$ 241.038	2,02%	138	\$ 671.918,48	\$ 4.701.610,57
2009	06	\$ 241.038	2,02%	137	\$ 667.049,51	\$ 5.368.660,08
2009	M13	\$ 241.038	2,02%	137	\$ 667.049,51	\$ 6.035.709,59
2009	07	\$ 241.038	2,02%	136	\$ 662.180,53	\$ 6.697.890,12
2009	08	\$ 241.038	2,02%	135	\$ 657.311,56	\$ 7.355.201,68
2009	09	\$ 241.038	2,02%	134	\$ 652.442,58	\$ 8.007.644,26
2009	10	\$ 241.038	2,02%	133	\$ 647.573,61	\$ 8.655.217,87
2009	11	\$ 241.038	2,02%	132	\$ 642.704,63	\$ 9.297.922,50
2009	12	\$ 241.038	2,02%	131	\$ 637.835,66	\$ 9.935.758,16
2009	M14	\$ 241.038	2,02%	131	\$ 637.835,66	\$ 10.573.593,82
2010	01	\$ 245.859	2,02%	130	\$ 645.626,02	\$ 11.219.219,84
2010	02	\$ 245.859	2,02%	129	\$ 640.659,67	\$ 11.859.879,51
2010	03	\$ 245.859	2,02%	128	\$ 635.693,31	\$ 12.495.572,82
2010	04	\$ 245.859	2,02%	127	\$ 630.726,96	\$ 13.126.299,78
2010	05	\$ 245.859	2,02%	126	\$ 625.760,60	\$ 13.752.060,38
2010	06	\$ 245.859	2,02%	125	\$ 620.794,25	\$ 14.372.854,63
2010	M13	\$ 245.859	2,02%	125	\$ 620.794,25	\$ 14.993.648,88
2010	07	\$ 245.859	2,02%	124	\$ 615.827,90	\$ 15.609.476,78
2010	08	\$ 245.859	2,02%	123	\$ 610.861,54	\$ 16.220.338,32

2010	09	\$ 245.859	2,02%	122	\$ 605.895,19	\$ 16.826.233,50
2010	10	\$ 245.859	2,02%	121	\$ 600.928,83	\$ 17.427.162,34
2010	11	\$ 245.859	2,02%	120	\$ 595.962,48	\$ 18.023.124,82
2010	12	\$ 245.859	2,02%	119	\$ 590.996,13	\$ 18.614.120,94
2010	M14	\$ 245.859	2,02%	119	\$ 590.996,13	\$ 19.205.117,07
2011	01	\$ 253.653	2,02%	118	\$ 604.606,92	\$ 19.809.723,98
2011	02	\$ 253.653	2,02%	117	\$ 599.483,13	\$ 20.409.207,11
2011	03	\$ 253.653	2,02%	116	\$ 594.359,34	\$ 21.003.566,45
2011	04	\$ 253.653	2,02%	115	\$ 589.235,55	\$ 21.592.802,00
2011	05	\$ 253.653	2,02%	114	\$ 584.111,77	\$ 22.176.913,77
2011	06	\$ 253.653	2,02%	113	\$ 578.987,98	\$ 22.755.901,75
2011	M13	\$ 253.653	2,02%	113	\$ 578.987,98	\$ 23.334.889,73
2011	07	\$ 253.653	2,02%	112	\$ 573.864,19	\$ 23.908.753,92
2011	08	\$ 253.653	2,02%	111	\$ 568.740,40	\$ 24.477.494,32
2011	09	\$ 253.653	2,02%	110	\$ 563.616,62	\$ 25.041.110,94
2011	10	\$ 253.653	2,02%	109	\$ 558.492,83	\$ 25.599.603,76
2011	11	\$ 253.653	2,02%	108	\$ 553.369,04	\$ 26.152.972,80
2011	12	\$ 253.653	2,02%	107	\$ 548.245,25	\$ 26.701.218,06
2011	M14	\$ 253.653	2,02%	107	\$ 548.245,25	\$ 27.249.463,31
2012	01	\$ 263.114	2,02%	106	\$ 563.379,90	\$ 27.812.843,21
2012	02	\$ 263.114	2,02%	105	\$ 558.064,99	\$ 28.370.908,20
2012	03	\$ 263.114	2,02%	104	\$ 552.750,09	\$ 0,00
2012	04	\$ 263.114	2,02%	103	\$ 547.435,18	\$ 29.471.093,47
2012	05	\$ 263.114	2,02%	102	\$ 542.120,28	\$ 30.013.213,75
2012	06	\$ 263.114	2,02%	101	\$ 536.805,37	\$ 30.550.019,12
2012	M13	\$ 263.114	2,02%	101	\$ 536.805,37	\$ 31.086.824,50
2012	07	\$ 263.114	2,02%	100	\$ 531.490,47	\$ 31.618.314,96
2012	08	\$ 263.114	2,02%	99	\$ 526.175,56	\$ 32.144.490,53
2012	09	\$ 263.114	2,02%	98	\$ 520.860,66	\$ 32.665.351,19
2012	10	\$ 263.114	2,02%	97	\$ 515.545,75	\$ 33.180.896,94
2012	11	\$ 263.114	2,02%	96	\$ 510.230,85	\$ 33.691.127,79
2012	12	\$ 263.114	2,02%	95	\$ 504.915,95	\$ 34.196.043,74
2012	M14	\$ 263.114	2,02%	95	\$ 504.915,95	\$ 34.700.959,68
2013	01	\$ 269.534	2,02%	94	\$ 511.791,31	\$ 35.212.750,99
2013	02	\$ 269.534	2,02%	93	\$ 506.346,72	\$ 35.719.097,71
2013	03	\$ 269.534	2,02%	92	\$ 500.902,13	\$ 36.219.999,84
2013	04	\$ 269.534	2,02%	91	\$ 495.457,54	\$ 36.715.457,38
2013	05	\$ 269.534	2,02%	90	\$ 490.012,95	\$ 37.205.470,33
2013	06	\$ 269.534	2,02%	89	\$ 484.568,36	\$ 37.690.038,69
2013	M13	\$ 269.534	2,02%	89	\$ 484.568,36	\$ 38.174.607,06
2013	07	\$ 269.534	2,02%	88	\$ 479.123,78	\$ 38.653.730,83
2013	08	\$ 269.534	2,02%	87	\$ 473.679,19	\$ 39.127.410,02
2013	09	\$ 269.534	2,02%	86	\$ 468.234,60	\$ 39.595.644,62
2013	10	\$ 269.534	2,02%	85	\$ 462.790,01	\$ 40.058.434,63
2013	11	\$ 269.534	2,02%	84	\$ 457.345,42	\$ 40.515.780,05
2013	12	\$ 269.534	2,02%	83	\$ 451.900,83	\$ 40.967.680,89
2013	M14	\$ 269.534	2,02%	83	\$ 451.900,83	\$ 41.419.581,72
2014	01	\$ 274.763	2,02%	82	\$ 455.117,50	\$ 41.874.699,22
2014	02	\$ 274.763	2,02%	81	\$ 449.567,28	\$ 42.324.266,50
2014	03	\$ 274.763	2,02%	80	\$ 444.017,07	\$ 42.768.283,57
2014	04	\$ 274.763	2,02%	79	\$ 438.466,86	\$ 43.206.750,43
2014	05	\$ 274.763	2,02%	78	\$ 432.916,64	\$ 43.639.667,07
2014	06	\$ 274.763	2,02%	77	\$ 427.366,43	\$ 44.067.033,50
2014	M13	\$ 274.763	2,02%	77	\$ 427.366,43	\$ 44.494.399,93
2014	07	\$ 274.763	2,02%	76	\$ 421.816,22	\$ 44.916.216,15
2014	08	\$ 274.763	2,02%	75	\$ 416.266,00	\$ 45.332.482,15
2014	09	\$ 274.763	2,02%	74	\$ 410.715,79	\$ 45.743.197,94

2014	10	\$ 274.763	2,02%	73	\$ 405.165,58	\$ 46.148.363,52
2014	11	\$ 274.763	2,02%	72	\$ 399.615,36	\$ 46.547.978,88
2014	12	\$ 274.763	2,02%	71	\$ 394.065,15	\$ 46.942.044,03
2014	M14	\$ 274.763	2,02%	71	\$ 394.065,15	\$ 47.336.109,18
2015	01	\$ 284.819	2,02%	70	\$ 402.734,58	\$ 47.738.843,76
2015	02	\$ 284.819	2,02%	69	\$ 396.981,23	\$ 48.135.825,00
2015	03	\$ 284.819	2,02%	68	\$ 391.227,88	\$ 48.527.052,88
2015	04	\$ 284.819	2,02%	67	\$ 385.474,53	\$ 48.912.527,41
2015	05	\$ 284.819	2,02%	66	\$ 379.721,18	\$ 49.292.248,58
2015	06	\$ 284.819	2,02%	65	\$ 373.967,83	\$ 49.666.216,41
2015	M13	\$ 284.819	2,02%	65	\$ 373.967,83	\$ 50.040.184,24
2015	07	\$ 284.819	2,02%	64	\$ 368.214,48	\$ 50.408.398,71
2015	08	\$ 284.819	2,02%	63	\$ 362.461,12	\$ 50.770.859,84
2015	09	\$ 284.819	2,02%	62	\$ 356.707,77	\$ 51.127.567,61
2015	10	\$ 284.819	2,02%	61	\$ 350.954,42	\$ 51.478.522,03
2015	11	\$ 284.819	2,02%	60	\$ 345.201,07	\$ 51.823.723,10
2015	12	\$ 284.819	2,02%	59	\$ 339.447,72	\$ 52.163.170,82
2015	M14	\$ 284.819	2,02%	59	\$ 339.447,72	\$ 52.502.618,54
2016	01	\$ 304.102	2,02%	58	\$ 356.285,48	\$ 52.858.904,02
2016	02	\$ 304.102	2,02%	57	\$ 350.142,62	\$ 53.209.046,65
2016	03	\$ 304.102	2,02%	56	\$ 343.999,77	\$ 53.553.046,42
2016	04	\$ 304.102	2,02%	55	\$ 337.856,92	\$ 53.890.903,34
2016	05	\$ 304.102	2,02%	54	\$ 331.714,07	\$ 54.222.617,40
2016	06	\$ 304.102	2,02%	53	\$ 325.571,21	\$ 54.548.188,61
2016	M13	\$ 304.102	2,02%	53	\$ 325.571,21	\$ 54.873.759,83
2016	07	\$ 304.102	2,02%	52	\$ 319.428,36	\$ 55.193.188,19
2016	08	\$ 304.102	2,02%	51	\$ 313.285,51	\$ 55.506.473,69
2016	09	\$ 304.102	2,02%	50	\$ 307.142,65	\$ 55.813.616,34
2016	10	\$ 304.102	2,02%	49	\$ 300.999,80	\$ 56.114.616,14
2016	11	\$ 304.102	2,02%	48	\$ 294.856,95	\$ 56.409.473,09
2016	12	\$ 304.102	2,02%	47	\$ 288.714,09	\$ 56.698.187,19
2016	M14	\$ 304.102	2,02%	47	\$ 288.714,09	\$ 56.986.901,28
2017	01	\$ 321.587	2,02%	46	\$ 298.819,09	\$ 57.285.720,37
2017	02	\$ 321.587	2,02%	45	\$ 292.323,02	\$ 57.578.043,39
2017	03	\$ 321.587	2,02%	44	\$ 285.826,95	\$ 57.863.870,34
2017	04	\$ 321.587	2,02%	43	\$ 279.330,89	\$ 58.143.201,22
2017	05	\$ 321.587	2,02%	42	\$ 272.834,82	\$ 58.416.036,04
2017	06	\$ 321.587	2,02%	41	\$ 266.338,75	\$ 58.682.374,80
2017	M13	\$ 321.587	2,02%	41	\$ 266.338,75	\$ 58.948.713,55
2017	07	\$ 321.587	2,02%	40	\$ 259.842,68	\$ 59.208.556,23
2017	08	\$ 321.587	2,02%	39	\$ 253.346,62	\$ 59.461.902,85
2017	09	\$ 321.587	2,02%	38	\$ 246.850,55	\$ 59.708.753,40
2017	10	\$ 321.587	2,02%	37	\$ 240.354,48	\$ 59.949.107,88
2017	11	\$ 321.587	2,02%	36	\$ 233.858,42	\$ 60.182.966,30
2017	12	\$ 321.587	2,02%	35	\$ 227.362,35	\$ 60.410.328,65
2017	M14	\$ 321.587	2,02%	35	\$ 227.362,35	\$ 60.637.691,00
2018	01	\$ 334.740	2,02%	34	\$ 229.899,71	\$ 60.867.590,71
2018	02	\$ 334.740	2,02%	33	\$ 223.137,96	\$ 61.090.728,66
2018	03	\$ 334.740	2,02%	32	\$ 216.376,20	\$ 61.307.104,86
2018	04	\$ 334.740	2,02%	31	\$ 209.614,44	\$ 61.516.719,31
2018	05	\$ 334.740	2,02%	30	\$ 202.852,69	\$ 61.719.572,00
2018	06	\$ 334.740	2,02%	29	\$ 196.090,93	\$ 61.915.662,93
2018	M13	\$ 334.740	2,02%	29	\$ 196.090,93	\$ 62.111.753,86
2018	07	\$ 334.740	2,02%	28	\$ 189.329,18	\$ 62.301.083,03
2018	08	\$ 334.740	2,02%	27	\$ 182.567,42	\$ 62.483.650,45
2018	09	\$ 334.740	2,02%	26	\$ 175.805,66	\$ 62.659.456,12
2018	10	\$ 334.740	2,02%	25	\$ 169.043,91	\$ 62.828.500,02

2018	11	\$ 334.740	2,02%	24	\$ 162.282,15	\$ 62.990.782,17
2018	12	\$ 334.740	2,02%	23	\$ 155.520,39	\$ 63.146.302,57
2018	M14	\$ 334.740	2,02%	23	\$ 155.520,39	\$ 63.301.822,96
2019	01	\$ 345.385	2,02%	22	\$ 153.489,16	\$ 63.455.312,12
2019	02	\$ 345.385	2,02%	21	\$ 146.512,38	\$ 63.601.824,51
2019	03	\$ 345.385	2,02%	20	\$ 139.535,60	\$ 63.741.360,11
2019	04	\$ 345.385	2,02%	19	\$ 132.558,82	\$ 63.873.918,93
2019	05	\$ 345.385	2,02%	18	\$ 125.582,04	\$ 63.999.500,97
2019	06	\$ 345.385	2,02%	17	\$ 118.605,26	\$ 64.118.106,23
2019	M13	\$ 345.385	2,02%	17	\$ 118.605,26	\$ 64.236.711,49
2019	07	\$ 345.385	2,02%	16	\$ 111.628,48	\$ 64.348.339,98
2019	08	\$ 345.385	2,02%	15	\$ 104.651,70	\$ 64.452.991,68
2019	09	\$ 345.385	2,02%	14	\$ 97.674,92	\$ 64.550.666,60
2019	10	\$ 345.385	2,02%	13	\$ 90.698,14	\$ 64.641.364,74
2019	11	\$ 345.385	2,02%	12	\$ 83.721,36	\$ 64.725.086,10
2019	12	\$ 345.385	2,02%	11	\$ 76.744,58	\$ 64.801.830,68
2019	M14	\$ 345.385	2,02%	11	\$ 76.744,58	\$ 64.878.575,26
2020	01	\$ 358.510	2,02%	10	\$ 72.418,98	\$ 64.950.994,24
2020	02	\$ 358.510	2,02%	9	\$ 65.177,08	\$ 65.016.171,32
2020	03	\$ 358.510	2,02%	8	\$ 57.935,18	\$ 65.074.106,50
2020	04	\$ 358.510	2,02%	7	\$ 50.693,28	\$ 65.124.799,79
2020	05	\$ 358.510	2,02%	6	\$ 43.451,39	\$ 65.168.251,17
2020	06	\$ 358.510	2,02%	5	\$ 36.209,49	\$ 65.204.460,66
2020	M13	\$ 358.510	2,02%	5	\$ 36.209,49	\$ 65.240.670,15
2020	07	\$ 358.510	2,02%	4	\$ 28.967,59	\$ 65.269.637,74
2020	08	\$ 358.510	2,02%	3	\$ 21.725,69	\$ 65.291.363,44
2020	09	\$ 358.510	2,02%	2	\$ 14.483,80	\$ 65.305.847,23
2020	10	\$ 358.510	2,02%	1	\$ 7.241,90	\$ 65.313.089,13

42. LIBARDO ENRIQUE DAZA PINEDA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 159.918,61	6,49%	4	\$ 639.674,44
2004	\$ 170.297,33	5,50%	14	\$ 2.384.162,59
2005	\$ 179.663,68	4,85%	14	\$ 2.515.291,53
2006	\$ 188.377,37	4,48%	14	\$ 2.637.283,17
2007	\$ 196.816,68	5,69%	14	\$ 2.755.433,46
2008	\$ 208.015,54	7,67%	14	\$ 2.912.217,62
2009	\$ 223.970,34	2,00%	14	\$ 3.135.584,71
2010	\$ 228.449,74	3,17%	14	\$ 3.198.296,41
2011	\$ 235.691,60	3,73%	14	\$ 3.299.682,40
2012	\$ 244.482,90	2,44%	14	\$ 3.422.760,56
2013	\$ 250.448,28	1,94%	14	\$ 3.506.275,91
2014	\$ 255.306,98	3,66%	14	\$ 3.574.297,67
2015	\$ 264.651,21	6,77%	14	\$ 3.705.116,96
2016	\$ 282.568,10	5,75%	14	\$ 3.955.953,38
2017	\$ 298.815,76	4,09%	14	\$ 4.183.420,70
2018	\$ 311.037,33	3,18%	14	\$ 4.354.522,60
2019	\$ 320.928,32	3,80%	14	\$ 4.492.996,42
2020	\$ 333.123,59	1,61%	11	\$ 3.664.359,51
				\$ 55.313.493,01

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2003	10	\$ 82.434	2,02%	205	\$ 341.359,19	\$ 341.359,19

2003	11	\$ 82.434	2,02%	204	\$ 339.694,03	\$ 681.053,22
2003	12	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.019.082,08
2003	M14	\$ 82.434	2,02%	203	\$ 338.028,86	\$ 1.357.110,94
2004	01	\$ 170.297	2,02%	202	\$ 694.881,22	\$ 2.051.992,16
2004	02	\$ 170.297	2,02%	201	\$ 691.441,21	\$ 2.743.433,37
2004	03	\$ 170.297	2,02%	200	\$ 688.001,20	\$ 3.431.434,57
2004	04	\$ 170.297	2,02%	199	\$ 684.561,20	\$ 4.115.995,77
2004	05	\$ 170.297	2,02%	198	\$ 681.121,19	\$ 4.797.116,96
2004	06	\$ 170.297	2,02%	197	\$ 677.681,19	\$ 5.474.798,15
2004	M13	\$ 170.297	2,02%	197	\$ 677.681,19	\$ 6.152.479,34
2004	07	\$ 170.297	2,02%	196	\$ 674.241,18	\$ 6.826.720,52
2004	08	\$ 170.297	2,02%	195	\$ 670.801,17	\$ 7.497.521,69
2004	09	\$ 170.297	2,02%	194	\$ 667.361,17	\$ 8.164.882,86
2004	10	\$ 170.297	2,02%	193	\$ 663.921,16	\$ 8.828.804,02
2004	11	\$ 170.297	2,02%	192	\$ 660.481,16	\$ 9.489.285,18
2004	12	\$ 170.297	2,02%	191	\$ 657.041,15	\$ 10.146.326,33
2004	M14	\$ 170.297	2,02%	191	\$ 657.041,15	\$ 10.803.367,48
2005	01	\$ 179.664	2,02%	190	\$ 689.549,21	\$ 11.492.916,68
2005	02	\$ 179.664	2,02%	189	\$ 685.920,00	\$ 12.178.836,68
2005	03	\$ 179.664	2,02%	188	\$ 682.290,79	\$ 12.861.127,48
2005	04	\$ 179.664	2,02%	187	\$ 678.661,59	\$ 13.539.789,07
2005	05	\$ 179.664	2,02%	186	\$ 675.032,38	\$ 14.214.821,45
2005	06	\$ 179.664	2,02%	185	\$ 671.403,18	\$ 14.886.224,62
2005	M13	\$ 179.664	2,02%	185	\$ 671.403,18	\$ 15.557.627,80
2005	07	\$ 179.664	2,02%	184	\$ 667.773,97	\$ 16.225.401,77
2005	08	\$ 179.664	2,02%	183	\$ 664.144,76	\$ 16.889.546,53
2005	09	\$ 179.664	2,02%	182	\$ 660.515,56	\$ 17.550.062,09
2005	10	\$ 179.664	2,02%	181	\$ 656.886,35	\$ 18.206.948,44
2005	11	\$ 179.664	2,02%	180	\$ 653.257,14	\$ 18.860.205,58
2005	12	\$ 179.664	2,02%	179	\$ 649.627,94	\$ 19.509.833,52
2005	M14	\$ 179.664	2,02%	179	\$ 649.627,94	\$ 20.159.461,45
2006	01	\$ 188.377	2,02%	178	\$ 677.329,67	\$ 20.836.791,12
2006	02	\$ 188.377	2,02%	177	\$ 673.524,45	\$ 21.510.315,57
2006	03	\$ 188.377	2,02%	176	\$ 669.719,22	\$ 22.180.034,79
2006	04	\$ 188.377	2,02%	175	\$ 665.914,00	\$ 22.845.948,79
2006	05	\$ 188.377	2,02%	174	\$ 662.108,78	\$ 23.508.057,57
2006	06	\$ 188.377	2,02%	173	\$ 658.303,55	\$ 24.166.361,13
2006	M13	\$ 188.377	2,02%	173	\$ 658.303,55	\$ 24.824.664,68
2006	07	\$ 188.377	2,02%	172	\$ 654.498,33	\$ 25.479.163,01
2006	08	\$ 188.377	2,02%	171	\$ 650.693,11	\$ 26.129.856,12
2006	09	\$ 188.377	2,02%	170	\$ 646.887,89	\$ 26.776.744,01
2006	10	\$ 188.377	2,02%	169	\$ 643.082,66	\$ 27.419.826,67
2006	11	\$ 188.377	2,02%	168	\$ 639.277,44	\$ 28.059.104,11
2006	12	\$ 188.377	2,02%	167	\$ 635.472,22	\$ 28.694.576,33
2006	M14	\$ 188.377	2,02%	167	\$ 635.472,22	\$ 29.330.048,55
2007	01	\$ 196.817	2,02%	166	\$ 659.965,68	\$ 29.990.014,22
2007	02	\$ 196.817	2,02%	165	\$ 655.989,98	\$ 30.646.004,20
2007	03	\$ 196.817	2,02%	164	\$ 652.014,28	\$ 31.298.018,49
2007	04	\$ 196.817	2,02%	163	\$ 648.038,59	\$ 31.946.057,07
2007	05	\$ 196.817	2,02%	162	\$ 644.062,89	\$ 32.590.119,96
2007	06	\$ 196.817	2,02%	161	\$ 640.087,19	\$ 33.230.207,15
2007	M13	\$ 196.817	2,02%	161	\$ 640.087,19	\$ 33.870.294,34
2007	07	\$ 196.817	2,02%	160	\$ 636.111,50	\$ 34.506.405,84
2007	08	\$ 196.817	2,02%	159	\$ 632.135,80	\$ 35.138.541,64
2007	09	\$ 196.817	2,02%	158	\$ 628.160,10	\$ 35.766.701,74
2007	10	\$ 196.817	2,02%	157	\$ 624.184,40	\$ 36.390.886,14
2007	11	\$ 196.817	2,02%	156	\$ 620.208,71	\$ 37.011.094,85

2007	12	\$ 196.817	2,02%	155	\$ 616.233,01	\$ 37.627.327,86
2007	M14	\$ 196.817	2,02%	155	\$ 616.233,01	\$ 38.243.560,87
2008	01	\$ 208.016	2,02%	154	\$ 647.094,76	\$ 38.890.655,63
2008	02	\$ 208.016	2,02%	153	\$ 642.892,84	\$ 39.533.548,47
2008	03	\$ 208.016	2,02%	152	\$ 638.690,93	\$ 40.172.239,40
2008	04	\$ 208.016	2,02%	151	\$ 634.489,01	\$ 40.806.728,41
2008	05	\$ 208.016	2,02%	150	\$ 630.287,10	\$ 41.437.015,51
2008	06	\$ 208.016	2,02%	149	\$ 626.085,19	\$ 42.063.100,70
2008	M13	\$ 208.016	2,02%	149	\$ 626.085,19	\$ 42.689.185,88
2008	07	\$ 208.016	2,02%	148	\$ 621.883,27	\$ 43.311.069,15
2008	08	\$ 208.016	2,02%	147	\$ 617.681,36	\$ 43.928.750,51
2008	09	\$ 208.016	2,02%	146	\$ 613.479,44	\$ 44.542.229,95
2008	10	\$ 208.016	2,02%	145	\$ 609.277,53	\$ 45.151.507,48
2008	11	\$ 208.016	2,02%	144	\$ 605.075,62	\$ 45.756.583,10
2008	12	\$ 208.016	2,02%	143	\$ 600.873,70	\$ 46.357.456,80
2008	M14	\$ 208.016	2,02%	143	\$ 600.873,70	\$ 46.958.330,50
2009	01	\$ 223.970	2,02%	142	\$ 642.436,51	\$ 47.600.767,01
2009	02	\$ 223.970	2,02%	141	\$ 637.912,31	\$ 48.238.679,33
2009	03	\$ 223.970	2,02%	140	\$ 633.388,11	\$ 48.872.067,44
2009	04	\$ 223.970	2,02%	139	\$ 628.863,91	\$ 49.500.931,35
2009	05	\$ 223.970	2,02%	138	\$ 624.339,71	\$ 50.125.271,06
2009	06	\$ 223.970	2,02%	137	\$ 619.815,51	\$ 50.745.086,57
2009	M13	\$ 223.970	2,02%	137	\$ 619.815,51	\$ 51.364.902,08
2009	07	\$ 223.970	2,02%	136	\$ 615.291,31	\$ 51.980.193,39
2009	08	\$ 223.970	2,02%	135	\$ 610.767,11	\$ 52.590.960,49
2009	09	\$ 223.970	2,02%	134	\$ 606.242,91	\$ 53.197.203,40
2009	10	\$ 223.970	2,02%	133	\$ 601.718,71	\$ 53.798.922,11
2009	11	\$ 223.970	2,02%	132	\$ 597.194,51	\$ 54.396.116,61
2009	12	\$ 223.970	2,02%	131	\$ 592.670,30	\$ 54.988.786,92
2009	M14	\$ 223.970	2,02%	131	\$ 592.670,30	\$ 55.581.457,22
2010	01	\$ 228.450	2,02%	130	\$ 599.909,03	\$ 56.181.366,25
2010	02	\$ 228.450	2,02%	129	\$ 595.294,34	\$ 56.776.660,59
2010	03	\$ 228.450	2,02%	128	\$ 590.679,66	\$ 57.367.340,25
2010	04	\$ 228.450	2,02%	127	\$ 586.064,97	\$ 57.953.405,22
2010	05	\$ 228.450	2,02%	126	\$ 581.450,29	\$ 58.534.855,50
2010	06	\$ 228.450	2,02%	125	\$ 576.835,60	\$ 59.111.691,10
2010	M13	\$ 228.450	2,02%	125	\$ 576.835,60	\$ 59.688.526,71
2010	07	\$ 228.450	2,02%	124	\$ 572.220,92	\$ 60.260.747,62
2010	08	\$ 228.450	2,02%	123	\$ 567.606,23	\$ 60.828.353,86
2010	09	\$ 228.450	2,02%	122	\$ 562.991,55	\$ 61.391.345,40
2010	10	\$ 228.450	2,02%	121	\$ 558.376,86	\$ 61.949.722,27
2010	11	\$ 228.450	2,02%	120	\$ 553.762,18	\$ 62.503.484,44
2010	12	\$ 228.450	2,02%	119	\$ 549.147,49	\$ 63.052.631,94
2010	M14	\$ 228.450	2,02%	119	\$ 549.147,49	\$ 63.601.779,43
2011	01	\$ 235.692	2,02%	118	\$ 561.794,50	\$ 64.163.573,93
2011	02	\$ 235.692	2,02%	117	\$ 557.033,53	\$ 64.720.607,46
2011	03	\$ 235.692	2,02%	116	\$ 552.272,56	\$ 65.272.880,01
2011	04	\$ 235.692	2,02%	115	\$ 547.511,59	\$ 65.820.391,60
2011	05	\$ 235.692	2,02%	114	\$ 542.750,62	\$ 66.363.142,22
2011	06	\$ 235.692	2,02%	113	\$ 537.989,65	\$ 66.901.131,86
2011	M13	\$ 235.692	2,02%	113	\$ 537.989,65	\$ 67.439.121,51
2011	07	\$ 235.692	2,02%	112	\$ 533.228,68	\$ 67.972.350,19
2011	08	\$ 235.692	2,02%	111	\$ 528.467,71	\$ 68.500.817,89
2011	09	\$ 235.692	2,02%	110	\$ 523.706,74	\$ 69.024.524,63
2011	10	\$ 235.692	2,02%	109	\$ 518.945,77	\$ 69.543.470,39
2011	11	\$ 235.692	2,02%	108	\$ 514.184,79	\$ 70.057.655,19
2011	12	\$ 235.692	2,02%	107	\$ 509.423,82	\$ 70.567.079,01

2011	M14	\$ 235.692	2,02%	107	\$ 509.423,82	\$ 71.076.502,84
2012	01	\$ 244.483	2,02%	106	\$ 523.486,78	\$ 71.599.989,62
2012	02	\$ 244.483	2,02%	105	\$ 518.548,22	\$ 72.118.537,84
2012	03	\$ 244.483	2,02%	104	\$ 513.609,67	\$ 0,00
2012	04	\$ 244.483	2,02%	103	\$ 508.671,12	\$ 73.140.818,62
2012	05	\$ 244.483	2,02%	102	\$ 503.732,56	\$ 73.644.551,19
2012	06	\$ 244.483	2,02%	101	\$ 498.794,01	\$ 74.143.345,19
2012	M13	\$ 244.483	2,02%	101	\$ 498.794,01	\$ 74.642.139,20
2012	07	\$ 244.483	2,02%	100	\$ 493.855,45	\$ 75.135.994,65
2012	08	\$ 244.483	2,02%	99	\$ 488.916,90	\$ 75.624.911,55
2012	09	\$ 244.483	2,02%	98	\$ 483.978,34	\$ 76.108.889,89
2012	10	\$ 244.483	2,02%	97	\$ 479.039,79	\$ 76.587.929,68
2012	11	\$ 244.483	2,02%	96	\$ 474.101,23	\$ 77.062.030,91
2012	12	\$ 244.483	2,02%	95	\$ 469.162,68	\$ 77.531.193,59
2012	M14	\$ 244.483	2,02%	95	\$ 469.162,68	\$ 78.000.356,27
2013	01	\$ 250.448	2,02%	94	\$ 475.551,19	\$ 78.475.907,46
2013	02	\$ 250.448	2,02%	93	\$ 470.492,14	\$ 78.946.399,60
2013	03	\$ 250.448	2,02%	92	\$ 465.433,08	\$ 79.411.832,68
2013	04	\$ 250.448	2,02%	91	\$ 460.374,03	\$ 79.872.206,71
2013	05	\$ 250.448	2,02%	90	\$ 455.314,97	\$ 80.327.521,68
2013	06	\$ 250.448	2,02%	89	\$ 450.255,92	\$ 80.777.777,60
2013	M13	\$ 250.448	2,02%	89	\$ 450.255,92	\$ 81.228.033,52
2013	07	\$ 250.448	2,02%	88	\$ 445.196,86	\$ 81.673.230,38
2013	08	\$ 250.448	2,02%	87	\$ 440.137,81	\$ 82.113.368,18
2013	09	\$ 250.448	2,02%	86	\$ 435.078,75	\$ 82.548.446,94
2013	10	\$ 250.448	2,02%	85	\$ 430.019,70	\$ 82.978.466,63
2013	11	\$ 250.448	2,02%	84	\$ 424.960,64	\$ 83.403.427,27
2013	12	\$ 250.448	2,02%	83	\$ 419.901,59	\$ 83.823.328,86
2013	M14	\$ 250.448	2,02%	83	\$ 419.901,59	\$ 84.243.230,44
2014	01	\$ 255.307	2,02%	82	\$ 422.890,48	\$ 84.666.120,92
2014	02	\$ 255.307	2,02%	81	\$ 417.733,27	\$ 85.083.854,19
2014	03	\$ 255.307	2,02%	80	\$ 412.576,07	\$ 85.496.430,27
2014	04	\$ 255.307	2,02%	79	\$ 407.418,87	\$ 85.903.849,14
2014	05	\$ 255.307	2,02%	78	\$ 402.261,67	\$ 86.306.110,81
2014	06	\$ 255.307	2,02%	77	\$ 397.104,47	\$ 86.703.215,28
2014	M13	\$ 255.307	2,02%	77	\$ 397.104,47	\$ 87.100.319,75
2014	07	\$ 255.307	2,02%	76	\$ 391.947,27	\$ 87.492.267,02
2014	08	\$ 255.307	2,02%	75	\$ 386.790,07	\$ 87.879.057,09
2014	09	\$ 255.307	2,02%	74	\$ 381.632,87	\$ 88.260.689,96
2014	10	\$ 255.307	2,02%	73	\$ 376.475,67	\$ 88.637.165,63
2014	11	\$ 255.307	2,02%	72	\$ 371.318,47	\$ 89.008.484,09
2014	12	\$ 255.307	2,02%	71	\$ 366.161,27	\$ 89.374.645,36
2014	M14	\$ 255.307	2,02%	71	\$ 366.161,27	\$ 89.740.806,62
2015	01	\$ 264.651	2,02%	70	\$ 374.216,81	\$ 90.115.023,44
2015	02	\$ 264.651	2,02%	69	\$ 368.870,86	\$ 90.483.894,29
2015	03	\$ 264.651	2,02%	68	\$ 363.524,90	\$ 90.847.419,20
2015	04	\$ 264.651	2,02%	67	\$ 358.178,95	\$ 91.205.598,15
2015	05	\$ 264.651	2,02%	66	\$ 352.833,00	\$ 91.558.431,14
2015	06	\$ 264.651	2,02%	65	\$ 347.487,04	\$ 91.905.918,18
2015	M13	\$ 264.651	2,02%	65	\$ 347.487,04	\$ 92.253.405,22
2015	07	\$ 264.651	2,02%	64	\$ 342.141,09	\$ 92.595.546,31
2015	08	\$ 264.651	2,02%	63	\$ 336.795,13	\$ 92.932.341,44
2015	09	\$ 264.651	2,02%	62	\$ 331.449,18	\$ 93.263.790,62
2015	10	\$ 264.651	2,02%	61	\$ 326.103,22	\$ 93.589.893,84
2015	11	\$ 264.651	2,02%	60	\$ 320.757,27	\$ 93.910.651,11
2015	12	\$ 264.651	2,02%	59	\$ 315.411,31	\$ 94.226.062,42
2015	M14	\$ 264.651	2,02%	59	\$ 315.411,31	\$ 94.541.473,74

2016	01	\$ 282.568	2,02%	58	\$ 331.056,78	\$ 94.872.530,52
2016	02	\$ 282.568	2,02%	57	\$ 325.348,91	\$ 95.197.879,43
2016	03	\$ 282.568	2,02%	56	\$ 319.641,03	\$ 95.517.520,46
2016	04	\$ 282.568	2,02%	55	\$ 313.933,16	\$ 95.831.453,62
2016	05	\$ 282.568	2,02%	54	\$ 308.225,28	\$ 96.139.678,90
2016	06	\$ 282.568	2,02%	53	\$ 302.517,41	\$ 96.442.196,31
2016	M13	\$ 282.568	2,02%	53	\$ 302.517,41	\$ 96.744.713,72
2016	07	\$ 282.568	2,02%	52	\$ 296.809,53	\$ 97.041.523,25
2016	08	\$ 282.568	2,02%	51	\$ 291.101,66	\$ 97.332.624,90
2016	09	\$ 282.568	2,02%	50	\$ 285.393,78	\$ 97.618.018,68
2016	10	\$ 282.568	2,02%	49	\$ 279.685,90	\$ 97.897.704,58
2016	11	\$ 282.568	2,02%	48	\$ 273.978,03	\$ 98.171.682,61
2016	12	\$ 282.568	2,02%	47	\$ 268.270,15	\$ 98.439.952,77
2016	M14	\$ 282.568	2,02%	47	\$ 268.270,15	\$ 98.708.222,92
2017	01	\$ 298.816	2,02%	46	\$ 277.659,61	\$ 98.985.882,53
2017	02	\$ 298.816	2,02%	45	\$ 271.623,53	\$ 99.257.506,06
2017	03	\$ 298.816	2,02%	44	\$ 265.587,45	\$ 99.523.093,51
2017	04	\$ 298.816	2,02%	43	\$ 259.551,37	\$ 99.782.644,88
2017	05	\$ 298.816	2,02%	42	\$ 253.515,29	\$ 100.036.160,17
2017	06	\$ 298.816	2,02%	41	\$ 247.479,22	\$ 100.283.639,39
2017	M13	\$ 298.816	2,02%	41	\$ 247.479,22	\$ 100.531.118,61
2017	07	\$ 298.816	2,02%	40	\$ 241.443,14	\$ 100.772.561,74
2017	08	\$ 298.816	2,02%	39	\$ 235.407,06	\$ 101.007.968,80
2017	09	\$ 298.816	2,02%	38	\$ 229.370,98	\$ 101.237.339,78
2017	10	\$ 298.816	2,02%	37	\$ 223.334,90	\$ 101.460.674,69
2017	11	\$ 298.816	2,02%	36	\$ 217.298,82	\$ 101.677.973,51
2017	12	\$ 298.816	2,02%	35	\$ 211.262,75	\$ 101.889.236,25
2017	M14	\$ 298.816	2,02%	35	\$ 211.262,75	\$ 102.100.499,00
2018	01	\$ 311.037	2,02%	34	\$ 213.620,44	\$ 102.314.119,44
2018	02	\$ 311.037	2,02%	33	\$ 207.337,48	\$ 102.521.456,92
2018	03	\$ 311.037	2,02%	32	\$ 201.054,53	\$ 102.722.511,45
2018	04	\$ 311.037	2,02%	31	\$ 194.771,58	\$ 102.917.283,03
2018	05	\$ 311.037	2,02%	30	\$ 188.488,62	\$ 103.105.771,65
2018	06	\$ 311.037	2,02%	29	\$ 182.205,67	\$ 103.287.977,31
2018	M13	\$ 311.037	2,02%	29	\$ 182.205,67	\$ 103.470.182,98
2018	07	\$ 311.037	2,02%	28	\$ 175.922,71	\$ 103.646.105,69
2018	08	\$ 311.037	2,02%	27	\$ 169.639,76	\$ 103.815.745,45
2018	09	\$ 311.037	2,02%	26	\$ 163.356,81	\$ 103.979.102,26
2018	10	\$ 311.037	2,02%	25	\$ 157.073,85	\$ 104.136.176,11
2018	11	\$ 311.037	2,02%	24	\$ 150.790,90	\$ 104.286.967,01
2018	12	\$ 311.037	2,02%	23	\$ 144.507,94	\$ 104.431.474,95
2018	M14	\$ 311.037	2,02%	23	\$ 144.507,94	\$ 104.575.982,89
2019	01	\$ 320.928	2,02%	22	\$ 142.620,54	\$ 104.718.603,44
2019	02	\$ 320.928	2,02%	21	\$ 136.137,79	\$ 104.854.741,23
2019	03	\$ 320.928	2,02%	20	\$ 129.655,04	\$ 104.984.396,27
2019	04	\$ 320.928	2,02%	19	\$ 123.172,29	\$ 105.107.568,56
2019	05	\$ 320.928	2,02%	18	\$ 116.689,54	\$ 105.224.258,09
2019	06	\$ 320.928	2,02%	17	\$ 110.206,78	\$ 105.334.464,87
2019	M13	\$ 320.928	2,02%	17	\$ 110.206,78	\$ 105.444.671,66
2019	07	\$ 320.928	2,02%	16	\$ 103.724,03	\$ 105.548.395,69
2019	08	\$ 320.928	2,02%	15	\$ 97.241,28	\$ 105.645.636,97
2019	09	\$ 320.928	2,02%	14	\$ 90.758,53	\$ 105.736.395,50
2019	10	\$ 320.928	2,02%	13	\$ 84.275,78	\$ 105.820.671,27
2019	11	\$ 320.928	2,02%	12	\$ 77.793,02	\$ 105.898.464,30
2019	12	\$ 320.928	2,02%	11	\$ 71.310,27	\$ 105.969.774,57
2019	M14	\$ 320.928	2,02%	11	\$ 71.310,27	\$ 106.041.084,84
2020	01	\$ 333.124	2,02%	10	\$ 67.290,97	\$ 106.108.375,81

2020	02	\$ 333.124	2,02%	9	\$ 60.561,87	\$ 106.168.937,68
2020	03	\$ 333.124	2,02%	8	\$ 53.832,77	\$ 106.222.770,45
2020	04	\$ 333.124	2,02%	7	\$ 47.103,68	\$ 106.269.874,12
2020	05	\$ 333.124	2,02%	6	\$ 40.374,58	\$ 106.310.248,70
2020	06	\$ 333.124	2,02%	5	\$ 33.645,48	\$ 106.343.894,19
2020	M13	\$ 333.124	2,02%	5	\$ 33.645,48	\$ 106.377.539,67
2020	07	\$ 333.124	2,02%	4	\$ 26.916,39	\$ 106.404.456,06
2020	08	\$ 333.124	2,02%	3	\$ 20.187,29	\$ 106.424.643,34
2020	09	\$ 333.124	2,02%	2	\$ 13.458,19	\$ 106.438.101,54
2020	10	\$ 333.124	2,02%	1	\$ 6.729,10	\$ 106.444.830,63

43. RODRIGO MARTÍNEZ DUARTE

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 208.791,74	7,67%	8,6	\$ 1.795.608,96
2009	\$ 224.806,07	2,00%	14	\$ 3.147.284,93
2010	\$ 229.302,19	3,17%	14	\$ 3.210.230,63
2011	\$ 236.571,07	3,73%	14	\$ 3.311.994,94
2012	\$ 245.395,17	2,44%	14	\$ 3.435.532,35
2013	\$ 251.382,81	1,94%	14	\$ 3.519.359,34
2014	\$ 256.259,64	3,66%	14	\$ 3.587.634,91
2015	\$ 265.638,74	6,77%	14	\$ 3.718.942,35
2016	\$ 283.622,48	5,75%	14	\$ 3.970.714,75
2017	\$ 299.930,77	4,09%	14	\$ 4.199.030,84
2018	\$ 312.197,94	3,18%	14	\$ 4.370.771,21
2019	\$ 322.125,84	3,80%	14	\$ 4.509.761,73
2020	\$ 334.366,62	1,61%	11	\$ 3.678.032,82
				\$ 46.454.899,76

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	06	\$ 208.792	2,02%	149	\$ 628.421,38	\$ 628.421,38
2008	M13	\$ 208.792	2,02%	149	\$ 628.421,38	\$ 1.256.842,76
2008	07	\$ 208.792	2,02%	148	\$ 624.203,79	\$ 1.881.046,54
2008	08	\$ 208.792	2,02%	147	\$ 619.986,19	\$ 2.501.032,74
2008	09	\$ 208.792	2,02%	146	\$ 615.768,60	\$ 3.116.801,34
2008	10	\$ 208.792	2,02%	145	\$ 611.551,01	\$ 3.728.352,34
2008	11	\$ 208.792	2,02%	144	\$ 607.333,41	\$ 4.335.685,76
2008	12	\$ 208.792	2,02%	143	\$ 603.115,82	\$ 4.938.801,58
2008	M14	\$ 208.792	2,02%	143	\$ 603.115,82	\$ 5.541.917,40
2009	01	\$ 224.806	2,02%	142	\$ 644.833,72	\$ 6.186.751,12
2009	02	\$ 224.806	2,02%	141	\$ 640.292,64	\$ 6.827.043,76
2009	03	\$ 224.806	2,02%	140	\$ 635.751,56	\$ 7.462.795,31
2009	04	\$ 224.806	2,02%	139	\$ 631.210,47	\$ 8.094.005,79
2009	05	\$ 224.806	2,02%	138	\$ 626.669,39	\$ 8.720.675,18
2009	06	\$ 224.806	2,02%	137	\$ 622.128,31	\$ 9.342.803,48
2009	M13	\$ 224.806	2,02%	137	\$ 622.128,31	\$ 9.964.931,79
2009	07	\$ 224.806	2,02%	136	\$ 617.587,23	\$ 10.582.519,02
2009	08	\$ 224.806	2,02%	135	\$ 613.046,14	\$ 11.195.565,16
2009	09	\$ 224.806	2,02%	134	\$ 608.505,06	\$ 11.804.070,22
2009	10	\$ 224.806	2,02%	133	\$ 603.963,98	\$ 12.408.034,20
2009	11	\$ 224.806	2,02%	132	\$ 599.422,90	\$ 13.007.457,10
2009	12	\$ 224.806	2,02%	131	\$ 594.881,81	\$ 13.602.338,91
2009	M14	\$ 224.806	2,02%	131	\$ 594.881,81	\$ 14.197.220,72
2010	01	\$ 229.302	2,02%	130	\$ 602.147,55	\$ 14.799.368,27
2010	02	\$ 229.302	2,02%	129	\$ 597.515,64	\$ 15.396.883,91

2010	03	\$ 229.302	2,02%	128	\$ 592.883,74	\$ 15.989.767,65
2010	04	\$ 229.302	2,02%	127	\$ 588.251,83	\$ 16.578.019,48
2010	05	\$ 229.302	2,02%	126	\$ 583.619,93	\$ 17.161.639,41
2010	06	\$ 229.302	2,02%	125	\$ 578.988,02	\$ 17.740.627,43
2010	M13	\$ 229.302	2,02%	125	\$ 578.988,02	\$ 18.319.615,45
2010	07	\$ 229.302	2,02%	124	\$ 574.356,12	\$ 18.893.971,57
2010	08	\$ 229.302	2,02%	123	\$ 569.724,22	\$ 19.463.695,79
2010	09	\$ 229.302	2,02%	122	\$ 565.092,31	\$ 20.028.788,10
2010	10	\$ 229.302	2,02%	121	\$ 560.460,41	\$ 20.589.248,51
2010	11	\$ 229.302	2,02%	120	\$ 555.828,50	\$ 21.145.077,01
2010	12	\$ 229.302	2,02%	119	\$ 551.196,60	\$ 21.696.273,61
2010	M14	\$ 229.302	2,02%	119	\$ 551.196,60	\$ 22.247.470,21
2011	01	\$ 236.571	2,02%	118	\$ 563.890,80	\$ 22.811.361,01
2011	02	\$ 236.571	2,02%	117	\$ 559.112,06	\$ 23.370.473,07
2011	03	\$ 236.571	2,02%	116	\$ 554.333,32	\$ 23.924.806,39
2011	04	\$ 236.571	2,02%	115	\$ 549.554,59	\$ 24.474.360,98
2011	05	\$ 236.571	2,02%	114	\$ 544.775,85	\$ 25.019.136,83
2011	06	\$ 236.571	2,02%	113	\$ 539.997,12	\$ 25.559.133,95
2011	M13	\$ 236.571	2,02%	113	\$ 539.997,12	\$ 26.099.131,07
2011	07	\$ 236.571	2,02%	112	\$ 535.218,38	\$ 26.634.349,45
2011	08	\$ 236.571	2,02%	111	\$ 530.439,65	\$ 27.164.789,10
2011	09	\$ 236.571	2,02%	110	\$ 525.660,91	\$ 27.690.450,01
2011	10	\$ 236.571	2,02%	109	\$ 520.882,18	\$ 28.211.332,18
2011	11	\$ 236.571	2,02%	108	\$ 516.103,44	\$ 28.727.435,62
2011	12	\$ 236.571	2,02%	107	\$ 511.324,70	\$ 29.238.760,33
2011	M14	\$ 236.571	2,02%	107	\$ 511.324,70	\$ 29.750.085,03
2012	01	\$ 245.395	2,02%	106	\$ 525.440,13	\$ 30.275.525,17
2012	02	\$ 245.395	2,02%	105	\$ 520.483,15	\$ 30.796.008,32
2012	03	\$ 245.395	2,02%	104	\$ 515.526,17	\$ 0,00
2012	04	\$ 245.395	2,02%	103	\$ 510.569,19	\$ 31.822.103,67
2012	05	\$ 245.395	2,02%	102	\$ 505.612,20	\$ 32.327.715,88
2012	06	\$ 245.395	2,02%	101	\$ 500.655,22	\$ 32.828.371,10
2012	M13	\$ 245.395	2,02%	101	\$ 500.655,22	\$ 33.329.026,32
2012	07	\$ 245.395	2,02%	100	\$ 495.698,24	\$ 33.824.724,56
2012	08	\$ 245.395	2,02%	99	\$ 490.741,26	\$ 34.315.465,82
2012	09	\$ 245.395	2,02%	98	\$ 485.784,27	\$ 34.801.250,09
2012	10	\$ 245.395	2,02%	97	\$ 480.827,29	\$ 35.282.077,38
2012	11	\$ 245.395	2,02%	96	\$ 475.870,31	\$ 35.757.947,69
2012	12	\$ 245.395	2,02%	95	\$ 470.913,33	\$ 36.228.861,02
2012	M14	\$ 245.395	2,02%	95	\$ 470.913,33	\$ 36.699.774,35
2013	01	\$ 251.383	2,02%	94	\$ 477.325,68	\$ 37.177.100,03
2013	02	\$ 251.383	2,02%	93	\$ 472.247,75	\$ 37.649.347,77
2013	03	\$ 251.383	2,02%	92	\$ 467.169,81	\$ 38.116.517,59
2013	04	\$ 251.383	2,02%	91	\$ 462.091,88	\$ 38.578.609,47
2013	05	\$ 251.383	2,02%	90	\$ 457.013,95	\$ 39.035.623,42
2013	06	\$ 251.383	2,02%	89	\$ 451.936,02	\$ 39.487.559,43
2013	M13	\$ 251.383	2,02%	89	\$ 451.936,02	\$ 39.939.495,45
2013	07	\$ 251.383	2,02%	88	\$ 446.858,08	\$ 40.386.353,53
2013	08	\$ 251.383	2,02%	87	\$ 441.780,15	\$ 40.828.133,68
2013	09	\$ 251.383	2,02%	86	\$ 436.702,22	\$ 41.264.835,90
2013	10	\$ 251.383	2,02%	85	\$ 431.624,28	\$ 41.696.460,19
2013	11	\$ 251.383	2,02%	84	\$ 426.546,35	\$ 42.123.006,54
2013	12	\$ 251.383	2,02%	83	\$ 421.468,42	\$ 42.544.474,96
2013	M14	\$ 251.383	2,02%	83	\$ 421.468,42	\$ 42.965.943,38
2014	01	\$ 256.260	2,02%	82	\$ 424.468,46	\$ 43.390.411,84
2014	02	\$ 256.260	2,02%	81	\$ 419.292,02	\$ 43.809.703,86
2014	03	\$ 256.260	2,02%	80	\$ 414.115,57	\$ 44.223.819,43

2014	04	\$ 256.260	2,02%	79	\$ 408.939,13	\$ 44.632.758,56
2014	05	\$ 256.260	2,02%	78	\$ 403.762,68	\$ 45.036.521,24
2014	06	\$ 256.260	2,02%	77	\$ 398.586,24	\$ 45.435.107,48
2014	M13	\$ 256.260	2,02%	77	\$ 398.586,24	\$ 45.833.693,72
2014	07	\$ 256.260	2,02%	76	\$ 393.409,79	\$ 46.227.103,51
2014	08	\$ 256.260	2,02%	75	\$ 388.233,35	\$ 46.615.336,86
2014	09	\$ 256.260	2,02%	74	\$ 383.056,90	\$ 46.998.393,77
2014	10	\$ 256.260	2,02%	73	\$ 377.880,46	\$ 47.376.274,23
2014	11	\$ 256.260	2,02%	72	\$ 372.704,02	\$ 47.748.978,24
2014	12	\$ 256.260	2,02%	71	\$ 367.527,57	\$ 48.116.505,81
2014	M14	\$ 256.260	2,02%	71	\$ 367.527,57	\$ 48.484.033,38
2015	01	\$ 265.639	2,02%	70	\$ 375.613,18	\$ 48.859.646,56
2015	02	\$ 265.639	2,02%	69	\$ 370.247,27	\$ 49.229.893,84
2015	03	\$ 265.639	2,02%	68	\$ 364.881,37	\$ 49.594.775,21
2015	04	\$ 265.639	2,02%	67	\$ 359.515,47	\$ 49.954.290,68
2015	05	\$ 265.639	2,02%	66	\$ 354.149,57	\$ 50.308.440,24
2015	06	\$ 265.639	2,02%	65	\$ 348.783,66	\$ 50.657.223,91
2015	M13	\$ 265.639	2,02%	65	\$ 348.783,66	\$ 51.006.007,57
2015	07	\$ 265.639	2,02%	64	\$ 343.417,76	\$ 51.349.425,34
2015	08	\$ 265.639	2,02%	63	\$ 338.051,86	\$ 51.687.477,20
2015	09	\$ 265.639	2,02%	62	\$ 332.685,96	\$ 52.020.163,15
2015	10	\$ 265.639	2,02%	61	\$ 327.320,05	\$ 52.347.483,21
2015	11	\$ 265.639	2,02%	60	\$ 321.954,15	\$ 52.669.437,36
2015	12	\$ 265.639	2,02%	59	\$ 316.588,25	\$ 52.986.025,61
2015	M14	\$ 265.639	2,02%	59	\$ 316.588,25	\$ 53.302.613,86
2016	01	\$ 283.622	2,02%	58	\$ 332.292,10	\$ 53.634.905,96
2016	02	\$ 283.622	2,02%	57	\$ 326.562,93	\$ 53.961.468,88
2016	03	\$ 283.622	2,02%	56	\$ 320.833,75	\$ 54.282.302,63
2016	04	\$ 283.622	2,02%	55	\$ 315.104,58	\$ 54.597.407,21
2016	05	\$ 283.622	2,02%	54	\$ 309.375,40	\$ 54.906.782,62
2016	06	\$ 283.622	2,02%	53	\$ 303.646,23	\$ 55.210.428,84
2016	M13	\$ 283.622	2,02%	53	\$ 303.646,23	\$ 55.514.075,07
2016	07	\$ 283.622	2,02%	52	\$ 297.917,05	\$ 55.811.992,13
2016	08	\$ 283.622	2,02%	51	\$ 292.187,88	\$ 56.104.180,01
2016	09	\$ 283.622	2,02%	50	\$ 286.458,71	\$ 56.390.638,72
2016	10	\$ 283.622	2,02%	49	\$ 280.729,53	\$ 56.671.368,25
2016	11	\$ 283.622	2,02%	48	\$ 275.000,36	\$ 56.946.368,61
2016	12	\$ 283.622	2,02%	47	\$ 269.271,18	\$ 57.215.639,79
2016	M14	\$ 283.622	2,02%	47	\$ 269.271,18	\$ 57.484.910,98
2017	01	\$ 299.931	2,02%	46	\$ 278.695,68	\$ 57.763.606,65
2017	02	\$ 299.931	2,02%	45	\$ 272.637,07	\$ 58.036.243,73
2017	03	\$ 299.931	2,02%	44	\$ 266.578,47	\$ 58.302.822,20
2017	04	\$ 299.931	2,02%	43	\$ 260.519,87	\$ 58.563.342,07
2017	05	\$ 299.931	2,02%	42	\$ 254.461,27	\$ 58.817.803,34
2017	06	\$ 299.931	2,02%	41	\$ 248.402,67	\$ 59.066.206,01
2017	M13	\$ 299.931	2,02%	41	\$ 248.402,67	\$ 59.314.608,67
2017	07	\$ 299.931	2,02%	40	\$ 242.344,07	\$ 59.556.952,74
2017	08	\$ 299.931	2,02%	39	\$ 236.285,46	\$ 59.793.238,20
2017	09	\$ 299.931	2,02%	38	\$ 230.226,86	\$ 60.023.465,07
2017	10	\$ 299.931	2,02%	37	\$ 224.168,26	\$ 60.247.633,33
2017	11	\$ 299.931	2,02%	36	\$ 218.109,66	\$ 60.465.742,99
2017	12	\$ 299.931	2,02%	35	\$ 212.051,06	\$ 60.677.794,04
2017	M14	\$ 299.931	2,02%	35	\$ 212.051,06	\$ 60.889.845,10
2018	01	\$ 312.198	2,02%	34	\$ 214.417,55	\$ 61.104.262,65
2018	02	\$ 312.198	2,02%	33	\$ 208.111,15	\$ 61.312.373,80
2018	03	\$ 312.198	2,02%	32	\$ 201.804,75	\$ 61.514.178,55
2018	04	\$ 312.198	2,02%	31	\$ 195.498,35	\$ 61.709.676,90

2018	05	\$ 312.198	2,02%	30	\$ 189.191,95	\$ 61.898.868,85
2018	06	\$ 312.198	2,02%	29	\$ 182.885,56	\$ 62.081.754,41
2018	M13	\$ 312.198	2,02%	29	\$ 182.885,56	\$ 62.264.639,96
2018	07	\$ 312.198	2,02%	28	\$ 176.579,16	\$ 62.441.219,12
2018	08	\$ 312.198	2,02%	27	\$ 170.272,76	\$ 62.611.491,88
2018	09	\$ 312.198	2,02%	26	\$ 163.966,36	\$ 62.775.458,24
2018	10	\$ 312.198	2,02%	25	\$ 157.659,96	\$ 62.933.118,20
2018	11	\$ 312.198	2,02%	24	\$ 151.353,56	\$ 63.084.471,76
2018	12	\$ 312.198	2,02%	23	\$ 145.047,16	\$ 63.229.518,93
2018	M14	\$ 312.198	2,02%	23	\$ 145.047,16	\$ 63.374.566,09
2019	01	\$ 322.126	2,02%	22	\$ 143.152,72	\$ 63.517.718,82
2019	02	\$ 322.126	2,02%	21	\$ 136.645,78	\$ 63.654.364,60
2019	03	\$ 322.126	2,02%	20	\$ 130.138,84	\$ 63.784.503,43
2019	04	\$ 322.126	2,02%	19	\$ 123.631,90	\$ 63.908.135,33
2019	05	\$ 322.126	2,02%	18	\$ 117.124,95	\$ 64.025.260,29
2019	06	\$ 322.126	2,02%	17	\$ 110.618,01	\$ 64.135.878,30
2019	M13	\$ 322.126	2,02%	17	\$ 110.618,01	\$ 64.246.496,31
2019	07	\$ 322.126	2,02%	16	\$ 104.111,07	\$ 64.350.607,38
2019	08	\$ 322.126	2,02%	15	\$ 97.604,13	\$ 64.448.211,51
2019	09	\$ 322.126	2,02%	14	\$ 91.097,19	\$ 64.539.308,70
2019	10	\$ 322.126	2,02%	13	\$ 84.590,25	\$ 64.623.898,94
2019	11	\$ 322.126	2,02%	12	\$ 78.083,30	\$ 64.701.982,25
2019	12	\$ 322.126	2,02%	11	\$ 71.576,36	\$ 64.773.558,61
2019	M14	\$ 322.126	2,02%	11	\$ 71.576,36	\$ 64.845.134,97
2020	01	\$ 334.367	2,02%	10	\$ 67.542,06	\$ 64.912.677,02
2020	02	\$ 334.367	2,02%	9	\$ 60.787,85	\$ 64.973.464,88
2020	03	\$ 334.367	2,02%	8	\$ 54.033,65	\$ 65.027.498,52
2020	04	\$ 334.367	2,02%	7	\$ 47.279,44	\$ 65.074.777,96
2020	05	\$ 334.367	2,02%	6	\$ 40.525,23	\$ 65.115.303,20
2020	06	\$ 334.367	2,02%	5	\$ 33.771,03	\$ 65.149.074,23
2020	M13	\$ 334.367	2,02%	5	\$ 33.771,03	\$ 65.182.845,25
2020	07	\$ 334.367	2,02%	4	\$ 27.016,82	\$ 65.209.862,08
2020	08	\$ 334.367	2,02%	3	\$ 20.262,62	\$ 65.230.124,69
2020	09	\$ 334.367	2,02%	2	\$ 13.508,41	\$ 65.243.633,11
2020	10	\$ 334.367	2,02%	1	\$ 6.754,21	\$ 65.250.387,31

44. JESÚS ENRIQUE PADILLA ALFONSO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2000	\$ 162.991,21	8,75%	1	\$ 162.991,21
2001	\$ 177.252,94	7,65%	14	\$ 2.481.541,17
2002	\$ 190.812,79	6,99%	14	\$ 2.671.379,07
2003	\$ 204.150,60	6,49%	14	\$ 2.858.108,47
2004	\$ 217.399,98	5,50%	14	\$ 3.043.599,71
2005	\$ 229.356,98	4,85%	14	\$ 3.210.997,69
2006	\$ 240.480,79	4,48%	14	\$ 3.366.731,08
2007	\$ 251.254,33	5,69%	14	\$ 3.517.560,63
2008	\$ 265.550,70	7,67%	14	\$ 3.717.709,83
2009	\$ 285.918,44	2,00%	14	\$ 4.002.858,18
2010	\$ 291.636,81	3,17%	14	\$ 4.082.915,34
2011	\$ 300.881,70	3,73%	14	\$ 4.212.343,76
2012	\$ 312.104,58	2,44%	14	\$ 4.369.464,18
2013	\$ 319.719,94	1,94%	14	\$ 4.476.079,11
2014	\$ 325.922,50	3,66%	14	\$ 4.562.915,04
2015	\$ 337.851,27	6,77%	14	\$ 4.729.917,73
2016	\$ 360.723,80	5,75%	14	\$ 5.050.133,16
2017	\$ 381.465,42	4,09%	14	\$ 5.340.515,82

2018	\$ 397.067,35	3,18%	14	\$ 5.558.942,91
2019	\$ 409.694,09	3,80%	14	\$ 5.735.717,30
2020	\$ 425.262,47	1,61%	11	\$ 4.677.887,15
				\$ 70.612.688,91

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2000	12	\$ 162.991	2,02%	239	\$ 786.887,95	\$ 786.887,95
2000	M14	\$ 162.991	2,02%	239	\$ 786.887,95	\$ 1.573.775,90
2001	01	\$ 177.253	2,02%	238	\$ 852.161,24	\$ 2.425.937,14
2001	02	\$ 177.253	2,02%	237	\$ 848.580,73	\$ 3.274.517,87
2001	03	\$ 177.253	2,02%	236	\$ 845.000,22	\$ 4.119.518,09
2001	04	\$ 177.253	2,02%	235	\$ 841.419,71	\$ 4.960.937,80
2001	05	\$ 177.253	2,02%	234	\$ 837.839,20	\$ 5.798.777,00
2001	06	\$ 177.253	2,02%	233	\$ 834.258,69	\$ 6.633.035,69
2001	M13	\$ 177.253	2,02%	233	\$ 834.258,69	\$ 7.467.294,38
2001	07	\$ 177.253	2,02%	232	\$ 830.678,18	\$ 8.297.972,56
2001	08	\$ 177.253	2,02%	231	\$ 827.097,67	\$ 9.125.070,24
2001	09	\$ 177.253	2,02%	230	\$ 823.517,16	\$ 9.948.587,40
2001	10	\$ 177.253	2,02%	229	\$ 819.936,65	\$ 10.768.524,05
2001	11	\$ 177.253	2,02%	228	\$ 816.356,14	\$ 11.584.880,20
2001	12	\$ 177.253	2,02%	227	\$ 812.775,64	\$ 12.397.655,83
2001	M14	\$ 177.253	2,02%	227	\$ 812.775,64	\$ 13.210.431,47
2002	01	\$ 190.813	2,02%	226	\$ 871.098,55	\$ 14.081.530,02
2002	02	\$ 190.813	2,02%	225	\$ 867.244,13	\$ 14.948.774,16
2002	03	\$ 190.813	2,02%	224	\$ 863.389,72	\$ 15.812.163,87
2002	04	\$ 190.813	2,02%	223	\$ 859.535,30	\$ 16.671.699,17
2002	05	\$ 190.813	2,02%	222	\$ 855.680,88	\$ 17.527.380,05
2002	06	\$ 190.813	2,02%	221	\$ 851.826,46	\$ 18.379.206,51
2002	M13	\$ 190.813	2,02%	221	\$ 851.826,46	\$ 19.231.032,97
2002	07	\$ 190.813	2,02%	220	\$ 847.972,04	\$ 20.079.005,01
2002	08	\$ 190.813	2,02%	219	\$ 844.117,62	\$ 20.923.122,64
2002	09	\$ 190.813	2,02%	218	\$ 840.263,21	\$ 21.763.385,84
2002	10	\$ 190.813	2,02%	217	\$ 836.408,79	\$ 22.599.794,63
2002	11	\$ 190.813	2,02%	216	\$ 832.554,37	\$ 23.432.349,00
2002	12	\$ 190.813	2,02%	215	\$ 828.699,95	\$ 24.261.048,95
2002	M14	\$ 190.813	2,02%	215	\$ 828.699,95	\$ 25.089.748,90
2003	01	\$ 204.151	2,02%	214	\$ 882.502,24	\$ 25.972.251,14
2003	02	\$ 204.151	2,02%	213	\$ 878.378,39	\$ 26.850.629,53
2003	03	\$ 204.151	2,02%	212	\$ 874.254,55	\$ 27.724.884,08
2003	04	\$ 204.151	2,02%	211	\$ 870.130,71	\$ 28.595.014,79
2003	05	\$ 204.151	2,02%	210	\$ 866.006,87	\$ 29.461.021,65
2003	06	\$ 204.151	2,02%	209	\$ 861.883,02	\$ 30.322.904,68
2003	M13	\$ 204.151	2,02%	209	\$ 861.883,02	\$ 31.184.787,70
2003	07	\$ 204.151	2,02%	208	\$ 857.759,18	\$ 32.042.546,88
2003	08	\$ 204.151	2,02%	207	\$ 853.635,34	\$ 32.896.182,22
2003	09	\$ 204.151	2,02%	206	\$ 849.511,50	\$ 33.745.693,72
2003	10	\$ 204.151	2,02%	205	\$ 845.387,66	\$ 34.591.081,37
2003	11	\$ 204.151	2,02%	204	\$ 841.263,81	\$ 35.432.345,19
2003	12	\$ 204.151	2,02%	203	\$ 837.139,97	\$ 36.269.485,16
2003	M14	\$ 204.151	2,02%	203	\$ 837.139,97	\$ 37.106.625,13
2004	01	\$ 217.400	2,02%	202	\$ 887.078,88	\$ 37.993.704,00
2004	02	\$ 217.400	2,02%	201	\$ 882.687,40	\$ 38.876.391,40
2004	03	\$ 217.400	2,02%	200	\$ 878.295,92	\$ 39.754.687,32
2004	04	\$ 217.400	2,02%	199	\$ 873.904,44	\$ 40.628.591,75
2004	05	\$ 217.400	2,02%	198	\$ 869.512,96	\$ 41.498.104,71
2004	06	\$ 217.400	2,02%	197	\$ 865.121,48	\$ 42.363.226,19
2004	M13	\$ 217.400	2,02%	197	\$ 865.121,48	\$ 43.228.347,66
2004	07	\$ 217.400	2,02%	196	\$ 860.730,00	\$ 44.089.077,66

2004	08	\$ 217.400	2,02%	195	\$ 856.338,52	\$ 44.945.416,18
2004	09	\$ 217.400	2,02%	194	\$ 851.947,04	\$ 45.797.363,22
2004	10	\$ 217.400	2,02%	193	\$ 847.555,56	\$ 46.644.918,78
2004	11	\$ 217.400	2,02%	192	\$ 843.164,08	\$ 47.488.082,85
2004	12	\$ 217.400	2,02%	191	\$ 838.772,60	\$ 48.326.855,45
2004	M14	\$ 217.400	2,02%	191	\$ 838.772,60	\$ 49.165.628,05
2005	01	\$ 229.357	2,02%	190	\$ 880.272,08	\$ 50.045.900,14
2005	02	\$ 229.357	2,02%	189	\$ 875.639,07	\$ 50.921.539,21
2005	03	\$ 229.357	2,02%	188	\$ 871.006,06	\$ 51.792.545,27
2005	04	\$ 229.357	2,02%	187	\$ 866.373,05	\$ 52.658.918,32
2005	05	\$ 229.357	2,02%	186	\$ 861.740,04	\$ 53.520.658,35
2005	06	\$ 229.357	2,02%	185	\$ 857.107,03	\$ 54.377.765,38
2005	M13	\$ 229.357	2,02%	185	\$ 857.107,03	\$ 55.234.872,41
2005	07	\$ 229.357	2,02%	184	\$ 852.474,02	\$ 56.087.346,42
2005	08	\$ 229.357	2,02%	183	\$ 847.841,01	\$ 56.935.187,43
2005	09	\$ 229.357	2,02%	182	\$ 843.207,99	\$ 57.778.395,42
2005	10	\$ 229.357	2,02%	181	\$ 838.574,98	\$ 58.616.970,41
2005	11	\$ 229.357	2,02%	180	\$ 833.941,97	\$ 59.450.912,38
2005	12	\$ 229.357	2,02%	179	\$ 829.308,96	\$ 60.280.221,34
2005	M14	\$ 229.357	2,02%	179	\$ 829.308,96	\$ 61.109.530,30
2006	01	\$ 240.481	2,02%	178	\$ 864.672,73	\$ 61.974.203,03
2006	02	\$ 240.481	2,02%	177	\$ 859.815,02	\$ 62.834.018,06
2006	03	\$ 240.481	2,02%	176	\$ 854.957,31	\$ 63.688.975,37
2006	04	\$ 240.481	2,02%	175	\$ 850.099,60	\$ 64.539.074,96
2006	05	\$ 240.481	2,02%	174	\$ 845.241,89	\$ 65.384.316,85
2006	06	\$ 240.481	2,02%	173	\$ 840.384,17	\$ 66.224.701,02
2006	M13	\$ 240.481	2,02%	173	\$ 840.384,17	\$ 67.065.085,20
2006	07	\$ 240.481	2,02%	172	\$ 835.526,46	\$ 67.900.611,66
2006	08	\$ 240.481	2,02%	171	\$ 830.668,75	\$ 68.731.280,41
2006	09	\$ 240.481	2,02%	170	\$ 825.811,04	\$ 69.557.091,45
2006	10	\$ 240.481	2,02%	169	\$ 820.953,33	\$ 70.378.044,77
2006	11	\$ 240.481	2,02%	168	\$ 816.095,61	\$ 71.194.140,39
2006	12	\$ 240.481	2,02%	167	\$ 811.237,90	\$ 72.005.378,29
2006	M14	\$ 240.481	2,02%	167	\$ 811.237,90	\$ 72.816.616,19
2007	01	\$ 251.254	2,02%	166	\$ 842.506,02	\$ 73.659.122,21
2007	02	\$ 251.254	2,02%	165	\$ 837.430,69	\$ 74.496.552,90
2007	03	\$ 251.254	2,02%	164	\$ 832.355,35	\$ 75.328.908,25
2007	04	\$ 251.254	2,02%	163	\$ 827.280,01	\$ 76.156.188,26
2007	05	\$ 251.254	2,02%	162	\$ 822.204,67	\$ 76.978.392,93
2007	06	\$ 251.254	2,02%	161	\$ 817.129,34	\$ 77.795.522,26
2007	M13	\$ 251.254	2,02%	161	\$ 817.129,34	\$ 78.612.651,60
2007	07	\$ 251.254	2,02%	160	\$ 812.054,00	\$ 79.424.705,60
2007	08	\$ 251.254	2,02%	159	\$ 806.978,66	\$ 80.231.684,26
2007	09	\$ 251.254	2,02%	158	\$ 801.903,32	\$ 81.033.587,58
2007	10	\$ 251.254	2,02%	157	\$ 796.827,99	\$ 81.830.415,56
2007	11	\$ 251.254	2,02%	156	\$ 791.752,65	\$ 82.622.168,21
2007	12	\$ 251.254	2,02%	155	\$ 786.677,31	\$ 83.408.845,52
2007	M14	\$ 251.254	2,02%	155	\$ 786.677,31	\$ 84.195.522,83
2008	01	\$ 265.551	2,02%	154	\$ 826.075,12	\$ 85.021.597,96
2008	02	\$ 265.551	2,02%	153	\$ 820.711,00	\$ 85.842.308,96
2008	03	\$ 265.551	2,02%	152	\$ 815.346,88	\$ 86.657.655,84
2008	04	\$ 265.551	2,02%	151	\$ 809.982,75	\$ 87.467.638,59
2008	05	\$ 265.551	2,02%	150	\$ 804.618,63	\$ 88.272.257,22
2008	06	\$ 265.551	2,02%	149	\$ 799.254,50	\$ 89.071.511,72
2008	M13	\$ 265.551	2,02%	149	\$ 799.254,50	\$ 89.870.766,22
2008	07	\$ 265.551	2,02%	148	\$ 793.890,38	\$ 90.664.656,60
2008	08	\$ 265.551	2,02%	147	\$ 788.526,26	\$ 91.453.182,86
2008	09	\$ 265.551	2,02%	146	\$ 783.162,13	\$ 92.236.344,99
2008	10	\$ 265.551	2,02%	145	\$ 777.798,01	\$ 93.014.143,00

2008	11	\$ 265.551	2,02%	144	\$ 772.433,88	\$ 93.786.576,88
2008	12	\$ 265.551	2,02%	143	\$ 767.069,76	\$ 94.553.646,64
2008	M14	\$ 265.551	2,02%	143	\$ 767.069,76	\$ 95.320.716,40
2009	01	\$ 285.918	2,02%	142	\$ 820.128,46	\$ 96.140.844,86
2009	02	\$ 285.918	2,02%	141	\$ 814.352,90	\$ 96.955.197,76
2009	03	\$ 285.918	2,02%	140	\$ 808.577,35	\$ 97.763.775,11
2009	04	\$ 285.918	2,02%	139	\$ 802.801,80	\$ 98.566.576,91
2009	05	\$ 285.918	2,02%	138	\$ 797.026,25	\$ 99.363.603,16
2009	06	\$ 285.918	2,02%	137	\$ 791.250,69	\$ 100.154.853,85
2009	M13	\$ 285.918	2,02%	137	\$ 791.250,69	\$ 100.946.104,55
2009	07	\$ 285.918	2,02%	136	\$ 785.475,14	\$ 101.731.579,69
2009	08	\$ 285.918	2,02%	135	\$ 779.699,59	\$ 102.511.279,28
2009	09	\$ 285.918	2,02%	134	\$ 773.924,04	\$ 103.285.203,31
2009	10	\$ 285.918	2,02%	133	\$ 768.148,48	\$ 104.053.351,80
2009	11	\$ 285.918	2,02%	132	\$ 762.372,93	\$ 104.815.724,73
2009	12	\$ 285.918	2,02%	131	\$ 756.597,38	\$ 105.572.322,11
2009	M14	\$ 285.918	2,02%	131	\$ 756.597,38	\$ 106.328.919,49
2010	01	\$ 291.637	2,02%	130	\$ 765.838,26	\$ 107.094.757,75
2010	02	\$ 291.637	2,02%	129	\$ 759.947,20	\$ 107.854.704,95
2010	03	\$ 291.637	2,02%	128	\$ 754.056,14	\$ 108.608.761,09
2010	04	\$ 291.637	2,02%	127	\$ 748.165,07	\$ 109.356.926,16
2010	05	\$ 291.637	2,02%	126	\$ 742.274,01	\$ 110.099.200,17
2010	06	\$ 291.637	2,02%	125	\$ 736.382,95	\$ 110.835.583,11
2010	M13	\$ 291.637	2,02%	125	\$ 736.382,95	\$ 111.571.966,06
2010	07	\$ 291.637	2,02%	124	\$ 730.491,88	\$ 112.302.457,94
2010	08	\$ 291.637	2,02%	123	\$ 724.600,82	\$ 113.027.058,76
2010	09	\$ 291.637	2,02%	122	\$ 718.709,75	\$ 113.745.768,51
2010	10	\$ 291.637	2,02%	121	\$ 712.818,69	\$ 114.458.587,21
2010	11	\$ 291.637	2,02%	120	\$ 706.927,63	\$ 115.165.514,83
2010	12	\$ 291.637	2,02%	119	\$ 701.036,56	\$ 115.866.551,40
2010	M14	\$ 291.637	2,02%	119	\$ 701.036,56	\$ 116.567.587,96
2011	01	\$ 300.882	2,02%	118	\$ 717.181,61	\$ 117.284.769,57
2011	02	\$ 300.882	2,02%	117	\$ 711.103,80	\$ 117.995.873,38
2011	03	\$ 300.882	2,02%	116	\$ 705.025,99	\$ 118.700.899,37
2011	04	\$ 300.882	2,02%	115	\$ 698.948,18	\$ 119.399.847,55
2011	05	\$ 300.882	2,02%	114	\$ 692.870,37	\$ 120.092.717,92
2011	06	\$ 300.882	2,02%	113	\$ 686.792,56	\$ 120.779.510,48
2011	M13	\$ 300.882	2,02%	113	\$ 686.792,56	\$ 121.466.303,05
2011	07	\$ 300.882	2,02%	112	\$ 680.714,75	\$ 122.147.017,80
2011	08	\$ 300.882	2,02%	111	\$ 674.636,94	\$ 122.821.654,74
2011	09	\$ 300.882	2,02%	110	\$ 668.559,13	\$ 123.490.213,87
2011	10	\$ 300.882	2,02%	109	\$ 662.481,32	\$ 124.152.695,19
2011	11	\$ 300.882	2,02%	108	\$ 656.403,51	\$ 124.809.098,70
2011	12	\$ 300.882	2,02%	107	\$ 650.325,70	\$ 125.459.424,40
2011	M14	\$ 300.882	2,02%	107	\$ 650.325,70	\$ 126.109.750,10
2012	01	\$ 312.105	2,02%	106	\$ 668.278,34	\$ 126.778.028,43
2012	02	\$ 312.105	2,02%	105	\$ 661.973,82	\$ 127.440.002,26
2012	03	\$ 312.105	2,02%	104	\$ 655.669,31	\$ 0,00
2012	04	\$ 312.105	2,02%	103	\$ 649.364,80	\$ 128.745.036,37
2012	05	\$ 312.105	2,02%	102	\$ 643.060,29	\$ 129.388.096,65
2012	06	\$ 312.105	2,02%	101	\$ 636.755,77	\$ 130.024.852,42
2012	M13	\$ 312.105	2,02%	101	\$ 636.755,77	\$ 130.661.608,20
2012	07	\$ 312.105	2,02%	100	\$ 630.451,26	\$ 131.292.059,46
2012	08	\$ 312.105	2,02%	99	\$ 624.146,75	\$ 131.916.206,21
2012	09	\$ 312.105	2,02%	98	\$ 617.842,23	\$ 132.534.048,44
2012	10	\$ 312.105	2,02%	97	\$ 611.537,72	\$ 133.145.586,16
2012	11	\$ 312.105	2,02%	96	\$ 605.233,21	\$ 133.750.819,37
2012	12	\$ 312.105	2,02%	95	\$ 598.928,70	\$ 134.349.748,07
2012	M14	\$ 312.105	2,02%	95	\$ 598.928,70	\$ 134.948.676,77

2013	01	\$ 319.720	2,02%	94	\$ 607.084,21	\$ 135.555.760,98
2013	02	\$ 319.720	2,02%	93	\$ 600.625,87	\$ 136.156.386,85
2013	03	\$ 319.720	2,02%	92	\$ 594.167,53	\$ 136.750.554,38
2013	04	\$ 319.720	2,02%	91	\$ 587.709,19	\$ 137.338.263,57
2013	05	\$ 319.720	2,02%	90	\$ 581.250,84	\$ 137.919.514,41
2013	06	\$ 319.720	2,02%	89	\$ 574.792,50	\$ 138.494.306,91
2013	M13	\$ 319.720	2,02%	89	\$ 574.792,50	\$ 139.069.099,41
2013	07	\$ 319.720	2,02%	88	\$ 568.334,16	\$ 139.637.433,57
2013	08	\$ 319.720	2,02%	87	\$ 561.875,82	\$ 140.199.309,39
2013	09	\$ 319.720	2,02%	86	\$ 555.417,47	\$ 140.754.726,86
2013	10	\$ 319.720	2,02%	85	\$ 548.959,13	\$ 141.303.685,99
2013	11	\$ 319.720	2,02%	84	\$ 542.500,79	\$ 141.846.186,78
2013	12	\$ 319.720	2,02%	83	\$ 536.042,44	\$ 142.382.229,22
2013	M14	\$ 319.720	2,02%	83	\$ 536.042,44	\$ 142.918.271,67
2014	01	\$ 325.923	2,02%	82	\$ 539.858,03	\$ 143.458.129,70
2014	02	\$ 325.923	2,02%	81	\$ 533.274,40	\$ 143.991.404,10
2014	03	\$ 325.923	2,02%	80	\$ 526.690,76	\$ 144.518.094,87
2014	04	\$ 325.923	2,02%	79	\$ 520.107,13	\$ 145.038.202,00
2014	05	\$ 325.923	2,02%	78	\$ 513.523,50	\$ 145.551.725,49
2014	06	\$ 325.923	2,02%	77	\$ 506.939,86	\$ 146.058.665,35
2014	M13	\$ 325.923	2,02%	77	\$ 506.939,86	\$ 146.565.605,21
2014	07	\$ 325.923	2,02%	76	\$ 500.356,23	\$ 147.065.961,44
2014	08	\$ 325.923	2,02%	75	\$ 493.772,59	\$ 147.559.734,03
2014	09	\$ 325.923	2,02%	74	\$ 487.188,96	\$ 148.046.922,99
2014	10	\$ 325.923	2,02%	73	\$ 480.605,32	\$ 148.527.528,31
2014	11	\$ 325.923	2,02%	72	\$ 474.021,69	\$ 149.001.550,00
2014	12	\$ 325.923	2,02%	71	\$ 467.438,05	\$ 149.468.988,05
2014	M14	\$ 325.923	2,02%	71	\$ 467.438,05	\$ 149.936.426,11
2015	01	\$ 337.851	2,02%	70	\$ 477.721,69	\$ 150.414.147,80
2015	02	\$ 337.851	2,02%	69	\$ 470.897,10	\$ 150.885.044,89
2015	03	\$ 337.851	2,02%	68	\$ 464.072,50	\$ 151.349.117,39
2015	04	\$ 337.851	2,02%	67	\$ 457.247,90	\$ 151.806.365,30
2015	05	\$ 337.851	2,02%	66	\$ 450.423,31	\$ 152.256.788,61
2015	06	\$ 337.851	2,02%	65	\$ 443.598,71	\$ 152.700.387,32
2015	M13	\$ 337.851	2,02%	65	\$ 443.598,71	\$ 153.143.986,03
2015	07	\$ 337.851	2,02%	64	\$ 436.774,12	\$ 153.580.760,15
2015	08	\$ 337.851	2,02%	63	\$ 429.949,52	\$ 154.010.709,67
2015	09	\$ 337.851	2,02%	62	\$ 423.124,93	\$ 154.433.834,60
2015	10	\$ 337.851	2,02%	61	\$ 416.300,33	\$ 154.850.134,93
2015	11	\$ 337.851	2,02%	60	\$ 409.475,73	\$ 155.259.610,66
2015	12	\$ 337.851	2,02%	59	\$ 402.651,14	\$ 155.662.261,80
2015	M14	\$ 337.851	2,02%	59	\$ 402.651,14	\$ 156.064.912,94
2016	01	\$ 360.724	2,02%	58	\$ 422.624,00	\$ 156.487.536,94
2016	02	\$ 360.724	2,02%	57	\$ 415.337,38	\$ 156.902.874,32
2016	03	\$ 360.724	2,02%	56	\$ 408.050,76	\$ 157.310.925,08
2016	04	\$ 360.724	2,02%	55	\$ 400.764,14	\$ 157.711.689,22
2016	05	\$ 360.724	2,02%	54	\$ 393.477,52	\$ 158.105.166,74
2016	06	\$ 360.724	2,02%	53	\$ 386.190,90	\$ 158.491.357,64
2016	M13	\$ 360.724	2,02%	53	\$ 386.190,90	\$ 158.877.548,53
2016	07	\$ 360.724	2,02%	52	\$ 378.904,28	\$ 159.256.452,81
2016	08	\$ 360.724	2,02%	51	\$ 371.617,66	\$ 159.628.070,47
2016	09	\$ 360.724	2,02%	50	\$ 364.331,04	\$ 159.992.401,50
2016	10	\$ 360.724	2,02%	49	\$ 357.044,41	\$ 160.349.445,92
2016	11	\$ 360.724	2,02%	48	\$ 349.757,79	\$ 160.699.203,71
2016	12	\$ 360.724	2,02%	47	\$ 342.471,17	\$ 161.041.674,88
2016	M14	\$ 360.724	2,02%	47	\$ 342.471,17	\$ 161.384.146,06
2017	01	\$ 381.465	2,02%	46	\$ 354.457,66	\$ 161.738.603,72
2017	02	\$ 381.465	2,02%	45	\$ 346.752,06	\$ 162.085.355,78
2017	03	\$ 381.465	2,02%	44	\$ 339.046,46	\$ 162.424.402,24

2017	04	\$ 381.465	2,02%	43	\$ 331.340,86	\$ 162.755.743,10
2017	05	\$ 381.465	2,02%	42	\$ 323.635,26	\$ 163.079.378,36
2017	06	\$ 381.465	2,02%	41	\$ 315.929,66	\$ 163.395.308,02
2017	M13	\$ 381.465	2,02%	41	\$ 315.929,66	\$ 163.711.237,68
2017	07	\$ 381.465	2,02%	40	\$ 308.224,06	\$ 164.019.461,73
2017	08	\$ 381.465	2,02%	39	\$ 300.518,45	\$ 164.319.980,19
2017	09	\$ 381.465	2,02%	38	\$ 292.812,85	\$ 164.612.793,04
2017	10	\$ 381.465	2,02%	37	\$ 285.107,25	\$ 164.897.900,29
2017	11	\$ 381.465	2,02%	36	\$ 277.401,65	\$ 165.175.301,94
2017	12	\$ 381.465	2,02%	35	\$ 269.696,05	\$ 165.444.997,99
2017	M14	\$ 381.465	2,02%	35	\$ 269.696,05	\$ 165.714.694,04
2018	01	\$ 397.067	2,02%	34	\$ 272.705,86	\$ 165.987.399,90
2018	02	\$ 397.067	2,02%	33	\$ 264.685,10	\$ 166.252.084,99
2018	03	\$ 397.067	2,02%	32	\$ 256.664,34	\$ 166.508.749,33
2018	04	\$ 397.067	2,02%	31	\$ 248.643,58	\$ 166.757.392,90
2018	05	\$ 397.067	2,02%	30	\$ 240.622,81	\$ 166.998.015,72
2018	06	\$ 397.067	2,02%	29	\$ 232.602,05	\$ 167.230.617,77
2018	M13	\$ 397.067	2,02%	29	\$ 232.602,05	\$ 167.463.219,83
2018	07	\$ 397.067	2,02%	28	\$ 224.581,29	\$ 167.687.801,12
2018	08	\$ 397.067	2,02%	27	\$ 216.560,53	\$ 167.904.361,65
2018	09	\$ 397.067	2,02%	26	\$ 208.539,77	\$ 168.112.901,43
2018	10	\$ 397.067	2,02%	25	\$ 200.519,01	\$ 168.313.420,44
2018	11	\$ 397.067	2,02%	24	\$ 192.498,25	\$ 168.505.918,69
2018	12	\$ 397.067	2,02%	23	\$ 184.477,49	\$ 168.690.396,18
2018	M14	\$ 397.067	2,02%	23	\$ 184.477,49	\$ 168.874.873,67
2019	01	\$ 409.694	2,02%	22	\$ 182.068,05	\$ 169.056.941,73
2019	02	\$ 409.694	2,02%	21	\$ 173.792,23	\$ 169.230.733,96
2019	03	\$ 409.694	2,02%	20	\$ 165.516,41	\$ 169.396.250,37
2019	04	\$ 409.694	2,02%	19	\$ 157.240,59	\$ 169.553.490,97
2019	05	\$ 409.694	2,02%	18	\$ 148.964,77	\$ 169.702.455,74
2019	06	\$ 409.694	2,02%	17	\$ 140.688,95	\$ 169.843.144,69
2019	M13	\$ 409.694	2,02%	17	\$ 140.688,95	\$ 169.983.833,64
2019	07	\$ 409.694	2,02%	16	\$ 132.413,13	\$ 170.116.246,77
2019	08	\$ 409.694	2,02%	15	\$ 124.137,31	\$ 170.240.384,08
2019	09	\$ 409.694	2,02%	14	\$ 115.861,49	\$ 170.356.245,57
2019	10	\$ 409.694	2,02%	13	\$ 107.585,67	\$ 170.463.831,24
2019	11	\$ 409.694	2,02%	12	\$ 99.309,85	\$ 170.563.141,09
2019	12	\$ 409.694	2,02%	11	\$ 91.034,03	\$ 170.654.175,12
2019	M14	\$ 409.694	2,02%	11	\$ 91.034,03	\$ 170.745.209,14
2020	01	\$ 425.262	2,02%	10	\$ 85.903,02	\$ 170.831.112,16
2020	02	\$ 425.262	2,02%	9	\$ 77.312,72	\$ 170.908.424,88
2020	03	\$ 425.262	2,02%	8	\$ 68.722,41	\$ 170.977.147,29
2020	04	\$ 425.262	2,02%	7	\$ 60.132,11	\$ 171.037.279,41
2020	05	\$ 425.262	2,02%	6	\$ 51.541,81	\$ 171.088.821,22
2020	06	\$ 425.262	2,02%	5	\$ 42.951,51	\$ 171.131.772,73
2020	M13	\$ 425.262	2,02%	5	\$ 42.951,51	\$ 171.174.724,24
2020	07	\$ 425.262	2,02%	4	\$ 34.361,21	\$ 171.209.085,44
2020	08	\$ 425.262	2,02%	3	\$ 25.770,91	\$ 171.234.856,35
2020	09	\$ 425.262	2,02%	2	\$ 17.180,60	\$ 171.252.036,95
2020	10	\$ 425.262	2,02%	1	\$ 8.590,30	\$ 171.260.627,26

45. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ ARÉVALO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 208.791,74	7,67%	1,6	\$ 334.066,78
2009	\$ 224.806,07	2,00%	14	\$ 3.147.284,93
2010	\$ 229.302,19	3,17%	14	\$ 3.210.230,63

2011	\$ 236.571,07	3,73%	14	\$ 3.311.994,94
2012	\$ 245.395,17	2,44%	14	\$ 3.435.532,35
2013	\$ 251.382,81	1,94%	14	\$ 3.519.359,34
2014	\$ 256.259,64	3,66%	14	\$ 3.587.634,91
2015	\$ 265.638,74	6,77%	14	\$ 3.718.942,35
2016	\$ 283.622,48	5,75%	14	\$ 3.970.714,75
2017	\$ 299.930,77	4,09%	14	\$ 4.199.030,84
2018	\$ 312.197,94	3,18%	14	\$ 4.370.771,21
2019	\$ 322.125,84	3,80%	14	\$ 4.509.761,73
2020	\$ 334.366,62	1,61%	11	\$ 3.678.032,82
				\$ 44.993.357,58

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	12	\$ 208.792	2,02%	143	\$ 603.115,82	\$ 603.115,82
2008	M14	\$ 208.792	2,02%	143	\$ 603.115,82	\$ 1.206.231,64
2009	01	\$ 224.806	2,02%	142	\$ 644.833,72	\$ 1.851.065,36
2009	02	\$ 224.806	2,02%	141	\$ 640.292,64	\$ 2.491.358,00
2009	03	\$ 224.806	2,02%	140	\$ 635.751,56	\$ 3.127.109,56
2009	04	\$ 224.806	2,02%	139	\$ 631.210,47	\$ 3.758.320,03
2009	05	\$ 224.806	2,02%	138	\$ 626.669,39	\$ 4.384.989,42
2009	06	\$ 224.806	2,02%	137	\$ 622.128,31	\$ 5.007.117,73
2009	M13	\$ 224.806	2,02%	137	\$ 622.128,31	\$ 5.629.246,04
2009	07	\$ 224.806	2,02%	136	\$ 617.587,23	\$ 6.246.833,26
2009	08	\$ 224.806	2,02%	135	\$ 613.046,14	\$ 6.859.879,41
2009	09	\$ 224.806	2,02%	134	\$ 608.505,06	\$ 7.468.384,47
2009	10	\$ 224.806	2,02%	133	\$ 603.963,98	\$ 8.072.348,44
2009	11	\$ 224.806	2,02%	132	\$ 599.422,90	\$ 8.671.771,34
2009	12	\$ 224.806	2,02%	131	\$ 594.881,81	\$ 9.266.653,15
2009	M14	\$ 224.806	2,02%	131	\$ 594.881,81	\$ 9.861.534,97
2010	01	\$ 229.302	2,02%	130	\$ 602.147,55	\$ 10.463.682,51
2010	02	\$ 229.302	2,02%	129	\$ 597.515,64	\$ 11.061.198,15
2010	03	\$ 229.302	2,02%	128	\$ 592.883,74	\$ 11.654.081,89
2010	04	\$ 229.302	2,02%	127	\$ 588.251,83	\$ 12.242.333,72
2010	05	\$ 229.302	2,02%	126	\$ 583.619,93	\$ 12.825.953,65
2010	06	\$ 229.302	2,02%	125	\$ 578.988,02	\$ 13.404.941,67
2010	M13	\$ 229.302	2,02%	125	\$ 578.988,02	\$ 13.983.929,70
2010	07	\$ 229.302	2,02%	124	\$ 574.356,12	\$ 14.558.285,82
2010	08	\$ 229.302	2,02%	123	\$ 569.724,22	\$ 15.128.010,03
2010	09	\$ 229.302	2,02%	122	\$ 565.092,31	\$ 15.693.102,35
2010	10	\$ 229.302	2,02%	121	\$ 560.460,41	\$ 16.253.562,75
2010	11	\$ 229.302	2,02%	120	\$ 555.828,50	\$ 16.809.391,26
2010	12	\$ 229.302	2,02%	119	\$ 551.196,60	\$ 17.360.587,86
2010	M14	\$ 229.302	2,02%	119	\$ 551.196,60	\$ 17.911.784,45
2011	01	\$ 236.571	2,02%	118	\$ 563.890,80	\$ 18.475.675,25
2011	02	\$ 236.571	2,02%	117	\$ 559.112,06	\$ 19.034.787,31
2011	03	\$ 236.571	2,02%	116	\$ 554.333,32	\$ 19.589.120,63
2011	04	\$ 236.571	2,02%	115	\$ 549.554,59	\$ 20.138.675,22
2011	05	\$ 236.571	2,02%	114	\$ 544.775,85	\$ 20.683.451,08
2011	06	\$ 236.571	2,02%	113	\$ 539.997,12	\$ 21.223.448,19
2011	M13	\$ 236.571	2,02%	113	\$ 539.997,12	\$ 21.763.445,31
2011	07	\$ 236.571	2,02%	112	\$ 535.218,38	\$ 22.298.663,69
2011	08	\$ 236.571	2,02%	111	\$ 530.439,65	\$ 22.829.103,34
2011	09	\$ 236.571	2,02%	110	\$ 525.660,91	\$ 23.354.764,25
2011	10	\$ 236.571	2,02%	109	\$ 520.882,18	\$ 23.875.646,43
2011	11	\$ 236.571	2,02%	108	\$ 516.103,44	\$ 24.391.749,87

2011	12	\$ 236.571	2,02%	107	\$ 511.324,70	\$ 24.903.074,57
2011	M14	\$ 236.571	2,02%	107	\$ 511.324,70	\$ 25.414.399,28
2012	01	\$ 245.395	2,02%	106	\$ 525.440,13	\$ 25.939.839,41
2012	02	\$ 245.395	2,02%	105	\$ 520.483,15	\$ 26.460.322,56
2012	03	\$ 245.395	2,02%	104	\$ 515.526,17	\$ 0,00
2012	04	\$ 245.395	2,02%	103	\$ 510.569,19	\$ 27.486.417,92
2012	05	\$ 245.395	2,02%	102	\$ 505.612,20	\$ 27.992.030,12
2012	06	\$ 245.395	2,02%	101	\$ 500.655,22	\$ 28.492.685,34
2012	M13	\$ 245.395	2,02%	101	\$ 500.655,22	\$ 28.993.340,56
2012	07	\$ 245.395	2,02%	100	\$ 495.698,24	\$ 29.489.038,80
2012	08	\$ 245.395	2,02%	99	\$ 490.741,26	\$ 29.979.780,06
2012	09	\$ 245.395	2,02%	98	\$ 485.784,27	\$ 30.465.564,34
2012	10	\$ 245.395	2,02%	97	\$ 480.827,29	\$ 30.946.391,63
2012	11	\$ 245.395	2,02%	96	\$ 475.870,31	\$ 31.422.261,94
2012	12	\$ 245.395	2,02%	95	\$ 470.913,33	\$ 31.893.175,26
2012	M14	\$ 245.395	2,02%	95	\$ 470.913,33	\$ 32.364.088,59
2013	01	\$ 251.383	2,02%	94	\$ 477.325,68	\$ 32.841.414,27
2013	02	\$ 251.383	2,02%	93	\$ 472.247,75	\$ 33.313.662,02
2013	03	\$ 251.383	2,02%	92	\$ 467.169,81	\$ 33.780.831,83
2013	04	\$ 251.383	2,02%	91	\$ 462.091,88	\$ 34.242.923,71
2013	05	\$ 251.383	2,02%	90	\$ 457.013,95	\$ 34.699.937,66
2013	06	\$ 251.383	2,02%	89	\$ 451.936,02	\$ 35.151.873,68
2013	M13	\$ 251.383	2,02%	89	\$ 451.936,02	\$ 35.603.809,69
2013	07	\$ 251.383	2,02%	88	\$ 446.858,08	\$ 36.050.667,78
2013	08	\$ 251.383	2,02%	87	\$ 441.780,15	\$ 36.492.447,93
2013	09	\$ 251.383	2,02%	86	\$ 436.702,22	\$ 36.929.150,15
2013	10	\$ 251.383	2,02%	85	\$ 431.624,28	\$ 37.360.774,43
2013	11	\$ 251.383	2,02%	84	\$ 426.546,35	\$ 37.787.320,78
2013	12	\$ 251.383	2,02%	83	\$ 421.468,42	\$ 38.208.789,20
2013	M14	\$ 251.383	2,02%	83	\$ 421.468,42	\$ 38.630.257,62
2014	01	\$ 256.260	2,02%	82	\$ 424.468,46	\$ 39.054.726,08
2014	02	\$ 256.260	2,02%	81	\$ 419.292,02	\$ 39.474.018,10
2014	03	\$ 256.260	2,02%	80	\$ 414.115,57	\$ 39.888.133,67
2014	04	\$ 256.260	2,02%	79	\$ 408.939,13	\$ 40.297.072,80
2014	05	\$ 256.260	2,02%	78	\$ 403.762,68	\$ 40.700.835,48
2014	06	\$ 256.260	2,02%	77	\$ 398.586,24	\$ 41.099.421,72
2014	M13	\$ 256.260	2,02%	77	\$ 398.586,24	\$ 41.498.007,96
2014	07	\$ 256.260	2,02%	76	\$ 393.409,79	\$ 41.891.417,76
2014	08	\$ 256.260	2,02%	75	\$ 388.233,35	\$ 42.279.651,11
2014	09	\$ 256.260	2,02%	74	\$ 383.056,90	\$ 42.662.708,01
2014	10	\$ 256.260	2,02%	73	\$ 377.880,46	\$ 43.040.588,47
2014	11	\$ 256.260	2,02%	72	\$ 372.704,02	\$ 43.413.292,49
2014	12	\$ 256.260	2,02%	71	\$ 367.527,57	\$ 43.780.820,06
2014	M14	\$ 256.260	2,02%	71	\$ 367.527,57	\$ 44.148.347,63
2015	01	\$ 265.639	2,02%	70	\$ 375.613,18	\$ 44.523.960,80
2015	02	\$ 265.639	2,02%	69	\$ 370.247,27	\$ 44.894.208,08
2015	03	\$ 265.639	2,02%	68	\$ 364.881,37	\$ 45.259.089,45
2015	04	\$ 265.639	2,02%	67	\$ 359.515,47	\$ 45.618.604,92
2015	05	\$ 265.639	2,02%	66	\$ 354.149,57	\$ 45.972.754,49
2015	06	\$ 265.639	2,02%	65	\$ 348.783,66	\$ 46.321.538,15
2015	M13	\$ 265.639	2,02%	65	\$ 348.783,66	\$ 46.670.321,82
2015	07	\$ 265.639	2,02%	64	\$ 343.417,76	\$ 47.013.739,58
2015	08	\$ 265.639	2,02%	63	\$ 338.051,86	\$ 47.351.791,44
2015	09	\$ 265.639	2,02%	62	\$ 332.685,96	\$ 47.684.477,40
2015	10	\$ 265.639	2,02%	61	\$ 327.320,05	\$ 48.011.797,45
2015	11	\$ 265.639	2,02%	60	\$ 321.954,15	\$ 48.333.751,60
2015	12	\$ 265.639	2,02%	59	\$ 316.588,25	\$ 48.650.339,85

2015	M14	\$ 265.639	2,02%	59	\$ 316.588,25	\$ 48.966.928,10
2016	01	\$ 283.622	2,02%	58	\$ 332.292,10	\$ 49.299.220,20
2016	02	\$ 283.622	2,02%	57	\$ 326.562,93	\$ 49.625.783,13
2016	03	\$ 283.622	2,02%	56	\$ 320.833,75	\$ 49.946.616,88
2016	04	\$ 283.622	2,02%	55	\$ 315.104,58	\$ 50.261.721,46
2016	05	\$ 283.622	2,02%	54	\$ 309.375,40	\$ 50.571.096,86
2016	06	\$ 283.622	2,02%	53	\$ 303.646,23	\$ 50.874.743,09
2016	M13	\$ 283.622	2,02%	53	\$ 303.646,23	\$ 51.178.389,32
2016	07	\$ 283.622	2,02%	52	\$ 297.917,05	\$ 51.476.306,37
2016	08	\$ 283.622	2,02%	51	\$ 292.187,88	\$ 51.768.494,25
2016	09	\$ 283.622	2,02%	50	\$ 286.458,71	\$ 52.054.952,96
2016	10	\$ 283.622	2,02%	49	\$ 280.729,53	\$ 52.335.682,49
2016	11	\$ 283.622	2,02%	48	\$ 275.000,36	\$ 52.610.682,85
2016	12	\$ 283.622	2,02%	47	\$ 269.271,18	\$ 52.879.954,04
2016	M14	\$ 283.622	2,02%	47	\$ 269.271,18	\$ 53.149.225,22
2017	01	\$ 299.931	2,02%	46	\$ 278.695,68	\$ 53.427.920,90
2017	02	\$ 299.931	2,02%	45	\$ 272.637,07	\$ 53.700.557,97
2017	03	\$ 299.931	2,02%	44	\$ 266.578,47	\$ 53.967.136,44
2017	04	\$ 299.931	2,02%	43	\$ 260.519,87	\$ 54.227.656,31
2017	05	\$ 299.931	2,02%	42	\$ 254.461,27	\$ 54.482.117,58
2017	06	\$ 299.931	2,02%	41	\$ 248.402,67	\$ 54.730.520,25
2017	M13	\$ 299.931	2,02%	41	\$ 248.402,67	\$ 54.978.922,92
2017	07	\$ 299.931	2,02%	40	\$ 242.344,07	\$ 55.221.266,98
2017	08	\$ 299.931	2,02%	39	\$ 236.285,46	\$ 55.457.552,45
2017	09	\$ 299.931	2,02%	38	\$ 230.226,86	\$ 55.687.779,31
2017	10	\$ 299.931	2,02%	37	\$ 224.168,26	\$ 55.911.947,57
2017	11	\$ 299.931	2,02%	36	\$ 218.109,66	\$ 56.130.057,23
2017	12	\$ 299.931	2,02%	35	\$ 212.051,06	\$ 56.342.108,29
2017	M14	\$ 299.931	2,02%	35	\$ 212.051,06	\$ 56.554.159,35
2018	01	\$ 312.198	2,02%	34	\$ 214.417,55	\$ 56.768.576,89
2018	02	\$ 312.198	2,02%	33	\$ 208.111,15	\$ 56.976.688,04
2018	03	\$ 312.198	2,02%	32	\$ 201.804,75	\$ 57.178.492,79
2018	04	\$ 312.198	2,02%	31	\$ 195.498,35	\$ 57.373.991,14
2018	05	\$ 312.198	2,02%	30	\$ 189.191,95	\$ 57.563.183,10
2018	06	\$ 312.198	2,02%	29	\$ 182.885,56	\$ 57.746.068,65
2018	M13	\$ 312.198	2,02%	29	\$ 182.885,56	\$ 57.928.954,21
2018	07	\$ 312.198	2,02%	28	\$ 176.579,16	\$ 58.105.533,37
2018	08	\$ 312.198	2,02%	27	\$ 170.272,76	\$ 58.275.806,12
2018	09	\$ 312.198	2,02%	26	\$ 163.966,36	\$ 58.439.772,48
2018	10	\$ 312.198	2,02%	25	\$ 157.659,96	\$ 58.597.432,44
2018	11	\$ 312.198	2,02%	24	\$ 151.353,56	\$ 58.748.786,01
2018	12	\$ 312.198	2,02%	23	\$ 145.047,16	\$ 58.893.833,17
2018	M14	\$ 312.198	2,02%	23	\$ 145.047,16	\$ 59.038.880,34
2019	01	\$ 322.126	2,02%	22	\$ 143.152,72	\$ 59.182.033,06
2019	02	\$ 322.126	2,02%	21	\$ 136.645,78	\$ 59.318.678,84
2019	03	\$ 322.126	2,02%	20	\$ 130.138,84	\$ 59.448.817,68
2019	04	\$ 322.126	2,02%	19	\$ 123.631,90	\$ 59.572.449,57
2019	05	\$ 322.126	2,02%	18	\$ 117.124,95	\$ 59.689.574,53
2019	06	\$ 322.126	2,02%	17	\$ 110.618,01	\$ 59.800.192,54
2019	M13	\$ 322.126	2,02%	17	\$ 110.618,01	\$ 59.910.810,55
2019	07	\$ 322.126	2,02%	16	\$ 104.111,07	\$ 60.014.921,63
2019	08	\$ 322.126	2,02%	15	\$ 97.604,13	\$ 60.112.525,75
2019	09	\$ 322.126	2,02%	14	\$ 91.097,19	\$ 60.203.622,94
2019	10	\$ 322.126	2,02%	13	\$ 84.590,25	\$ 60.288.213,19
2019	11	\$ 322.126	2,02%	12	\$ 78.083,30	\$ 60.366.296,49
2019	12	\$ 322.126	2,02%	11	\$ 71.576,36	\$ 60.437.872,85
2019	M14	\$ 322.126	2,02%	11	\$ 71.576,36	\$ 60.509.449,21

2020	01	\$ 334.367	2,02%	10	\$ 67.542,06	\$ 60.576.991,27
2020	02	\$ 334.367	2,02%	9	\$ 60.787,85	\$ 60.637.779,12
2020	03	\$ 334.367	2,02%	8	\$ 54.033,65	\$ 60.691.812,77
2020	04	\$ 334.367	2,02%	7	\$ 47.279,44	\$ 60.739.092,21
2020	05	\$ 334.367	2,02%	6	\$ 40.525,23	\$ 60.779.617,44
2020	06	\$ 334.367	2,02%	5	\$ 33.771,03	\$ 60.813.388,47
2020	M13	\$ 334.367	2,02%	5	\$ 33.771,03	\$ 60.847.159,50
2020	07	\$ 334.367	2,02%	4	\$ 27.016,82	\$ 60.874.176,32
2020	08	\$ 334.367	2,02%	3	\$ 20.262,62	\$ 60.894.438,94
2020	09	\$ 334.367	2,02%	2	\$ 13.508,41	\$ 60.907.947,35
2020	10	\$ 334.367	2,02%	1	\$ 6.754,21	\$ 60.914.701,55

46. LUIS DEL CARMEN ROPERO MANOSALVA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 159.496,59	4,48%	8,1	\$ 1.291.922,38
2007	\$ 166.642,04	5,69%	14	\$ 2.332.988,52
2008	\$ 176.123,97	7,67%	14	\$ 2.465.735,57
2009	\$ 189.632,68	2,00%	14	\$ 2.654.857,49
2010	\$ 193.425,33	3,17%	14	\$ 2.707.954,64
2011	\$ 199.556,91	3,73%	14	\$ 2.793.796,80
2012	\$ 207.000,39	2,44%	14	\$ 2.898.005,42
2013	\$ 212.051,20	1,94%	14	\$ 2.968.716,75
2014	\$ 216.164,99	3,66%	14	\$ 3.026.309,86
2015	\$ 224.076,63	6,77%	14	\$ 3.137.072,80
2016	\$ 239.246,62	5,75%	14	\$ 3.349.452,62
2017	\$ 253.003,30	4,09%	14	\$ 3.542.046,15
2018	\$ 263.351,13	3,18%	14	\$ 3.686.915,84
2019	\$ 271.725,70	3,80%	14	\$ 3.804.159,76
2020	\$ 282.051,27	1,61%	11	\$ 3.102.564,01
				\$ 43.762.498,60

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	06	\$ 159.497	2,02%	173	\$ 557.376,78	\$ 557.376,78
2006	M13	\$ 159.497	2,02%	173	\$ 557.376,78	\$ 1.114.753,57
2006	07	\$ 159.497	2,02%	172	\$ 554.154,95	\$ 1.668.908,52
2006	08	\$ 159.497	2,02%	171	\$ 550.933,12	\$ 2.219.841,64
2006	09	\$ 159.497	2,02%	170	\$ 547.711,29	\$ 2.767.552,93
2006	10	\$ 159.497	2,02%	169	\$ 544.489,46	\$ 3.312.042,39
2006	11	\$ 159.497	2,02%	168	\$ 541.267,63	\$ 3.853.310,02
2006	12	\$ 159.497	2,02%	167	\$ 538.045,80	\$ 4.391.355,81
2006	M14	\$ 159.497	2,02%	167	\$ 538.045,80	\$ 4.929.401,61
2007	01	\$ 166.642	2,02%	166	\$ 558.784,08	\$ 5.488.185,69
2007	02	\$ 166.642	2,02%	165	\$ 555.417,91	\$ 6.043.603,60
2007	03	\$ 166.642	2,02%	164	\$ 552.051,74	\$ 6.595.655,34
2007	04	\$ 166.642	2,02%	163	\$ 548.685,57	\$ 7.144.340,91
2007	05	\$ 166.642	2,02%	162	\$ 545.319,40	\$ 7.689.660,32
2007	06	\$ 166.642	2,02%	161	\$ 541.953,23	\$ 8.231.613,55
2007	M13	\$ 166.642	2,02%	161	\$ 541.953,23	\$ 8.773.566,78
2007	07	\$ 166.642	2,02%	160	\$ 538.587,06	\$ 9.312.153,85
2007	08	\$ 166.642	2,02%	159	\$ 535.220,90	\$ 9.847.374,74
2007	09	\$ 166.642	2,02%	158	\$ 531.854,73	\$ 10.379.229,47
2007	10	\$ 166.642	2,02%	157	\$ 528.488,56	\$ 10.907.718,02
2007	11	\$ 166.642	2,02%	156	\$ 525.122,39	\$ 11.432.840,41

2007	12	\$ 166.642	2,02%	155	\$ 521.756,22	\$ 11.954.596,63
2007	M14	\$ 166.642	2,02%	155	\$ 521.756,22	\$ 12.476.352,85
2008	01	\$ 176.124	2,02%	154	\$ 547.886,44	\$ 13.024.239,29
2008	02	\$ 176.124	2,02%	153	\$ 544.328,74	\$ 13.568.568,03
2008	03	\$ 176.124	2,02%	152	\$ 540.771,03	\$ 14.109.339,07
2008	04	\$ 176.124	2,02%	151	\$ 537.213,33	\$ 14.646.552,40
2008	05	\$ 176.124	2,02%	150	\$ 533.655,63	\$ 15.180.208,02
2008	06	\$ 176.124	2,02%	149	\$ 530.097,92	\$ 15.710.305,95
2008	M13	\$ 176.124	2,02%	149	\$ 530.097,92	\$ 16.240.403,87
2008	07	\$ 176.124	2,02%	148	\$ 526.540,22	\$ 16.766.944,09
2008	08	\$ 176.124	2,02%	147	\$ 522.982,51	\$ 17.289.926,60
2008	09	\$ 176.124	2,02%	146	\$ 519.424,81	\$ 17.809.351,41
2008	10	\$ 176.124	2,02%	145	\$ 515.867,11	\$ 18.325.218,52
2008	11	\$ 176.124	2,02%	144	\$ 512.309,40	\$ 18.837.527,92
2008	12	\$ 176.124	2,02%	143	\$ 508.751,70	\$ 19.346.279,61
2008	M14	\$ 176.124	2,02%	143	\$ 508.751,70	\$ 19.855.031,31
2009	01	\$ 189.633	2,02%	142	\$ 543.942,37	\$ 20.398.973,68
2009	02	\$ 189.633	2,02%	141	\$ 540.111,79	\$ 20.939.085,48
2009	03	\$ 189.633	2,02%	140	\$ 536.281,21	\$ 21.475.366,69
2009	04	\$ 189.633	2,02%	139	\$ 532.450,63	\$ 22.007.817,32
2009	05	\$ 189.633	2,02%	138	\$ 528.620,05	\$ 22.536.437,37
2009	06	\$ 189.633	2,02%	137	\$ 524.789,47	\$ 23.061.226,85
2009	M13	\$ 189.633	2,02%	137	\$ 524.789,47	\$ 23.586.016,32
2009	07	\$ 189.633	2,02%	136	\$ 520.958,89	\$ 24.106.975,21
2009	08	\$ 189.633	2,02%	135	\$ 517.128,31	\$ 24.624.103,52
2009	09	\$ 189.633	2,02%	134	\$ 513.297,73	\$ 25.137.401,25
2009	10	\$ 189.633	2,02%	133	\$ 509.467,15	\$ 25.646.868,40
2009	11	\$ 189.633	2,02%	132	\$ 505.636,57	\$ 26.152.504,98
2009	12	\$ 189.633	2,02%	131	\$ 501.805,99	\$ 26.654.310,97
2009	M14	\$ 189.633	2,02%	131	\$ 501.805,99	\$ 27.156.116,96
2010	01	\$ 193.425	2,02%	130	\$ 507.934,92	\$ 27.664.051,88
2010	02	\$ 193.425	2,02%	129	\$ 504.027,73	\$ 28.168.079,61
2010	03	\$ 193.425	2,02%	128	\$ 500.120,54	\$ 28.668.200,14
2010	04	\$ 193.425	2,02%	127	\$ 496.213,34	\$ 29.164.413,49
2010	05	\$ 193.425	2,02%	126	\$ 492.306,15	\$ 29.656.719,64
2010	06	\$ 193.425	2,02%	125	\$ 488.398,96	\$ 30.145.118,60
2010	M13	\$ 193.425	2,02%	125	\$ 488.398,96	\$ 30.633.517,56
2010	07	\$ 193.425	2,02%	124	\$ 484.491,77	\$ 31.118.009,33
2010	08	\$ 193.425	2,02%	123	\$ 480.584,58	\$ 31.598.593,91
2010	09	\$ 193.425	2,02%	122	\$ 476.677,39	\$ 32.075.271,29
2010	10	\$ 193.425	2,02%	121	\$ 472.770,19	\$ 32.548.041,49
2010	11	\$ 193.425	2,02%	120	\$ 468.863,00	\$ 33.016.904,49
2010	12	\$ 193.425	2,02%	119	\$ 464.955,81	\$ 33.481.860,30
2010	M14	\$ 193.425	2,02%	119	\$ 464.955,81	\$ 33.946.816,11
2011	01	\$ 199.557	2,02%	118	\$ 475.663,86	\$ 34.422.479,97
2011	02	\$ 199.557	2,02%	117	\$ 471.632,81	\$ 34.894.112,79
2011	03	\$ 199.557	2,02%	116	\$ 467.601,76	\$ 35.361.714,55
2011	04	\$ 199.557	2,02%	115	\$ 463.570,71	\$ 35.825.285,26
2011	05	\$ 199.557	2,02%	114	\$ 459.539,66	\$ 36.284.824,92
2011	06	\$ 199.557	2,02%	113	\$ 455.508,61	\$ 36.740.333,53
2011	M13	\$ 199.557	2,02%	113	\$ 455.508,61	\$ 37.195.842,14
2011	07	\$ 199.557	2,02%	112	\$ 451.477,56	\$ 37.647.319,71
2011	08	\$ 199.557	2,02%	111	\$ 447.446,51	\$ 38.094.766,22
2011	09	\$ 199.557	2,02%	110	\$ 443.415,46	\$ 38.538.181,68
2011	10	\$ 199.557	2,02%	109	\$ 439.384,41	\$ 38.977.566,10
2011	11	\$ 199.557	2,02%	108	\$ 435.353,36	\$ 39.412.919,46
2011	12	\$ 199.557	2,02%	107	\$ 431.322,31	\$ 39.844.241,77

2011	M14	\$ 199.557	2,02%	107	\$ 431.322,31	\$ 40.275.564,09
2012	01	\$ 207.000	2,02%	106	\$ 443.229,23	\$ 40.718.793,32
2012	02	\$ 207.000	2,02%	105	\$ 439.047,82	\$ 41.157.841,14
2012	03	\$ 207.000	2,02%	104	\$ 434.866,41	\$ 0,00
2012	04	\$ 207.000	2,02%	103	\$ 430.685,01	\$ 42.023.392,56
2012	05	\$ 207.000	2,02%	102	\$ 426.503,60	\$ 42.449.896,15
2012	06	\$ 207.000	2,02%	101	\$ 422.322,19	\$ 42.872.218,34
2012	M13	\$ 207.000	2,02%	101	\$ 422.322,19	\$ 43.294.540,53
2012	07	\$ 207.000	2,02%	100	\$ 418.140,78	\$ 43.712.681,32
2012	08	\$ 207.000	2,02%	99	\$ 413.959,37	\$ 44.126.640,69
2012	09	\$ 207.000	2,02%	98	\$ 409.777,97	\$ 44.536.418,66
2012	10	\$ 207.000	2,02%	97	\$ 405.596,56	\$ 44.942.015,21
2012	11	\$ 207.000	2,02%	96	\$ 401.415,15	\$ 45.343.430,36
2012	12	\$ 207.000	2,02%	95	\$ 397.233,74	\$ 45.740.664,11
2012	M14	\$ 207.000	2,02%	95	\$ 397.233,74	\$ 46.137.897,85
2013	01	\$ 212.051	2,02%	94	\$ 402.642,81	\$ 46.540.540,66
2013	02	\$ 212.051	2,02%	93	\$ 398.359,38	\$ 46.938.900,04
2013	03	\$ 212.051	2,02%	92	\$ 394.075,94	\$ 47.332.975,98
2013	04	\$ 212.051	2,02%	91	\$ 389.792,51	\$ 47.722.768,49
2013	05	\$ 212.051	2,02%	90	\$ 385.509,08	\$ 48.108.277,57
2013	06	\$ 212.051	2,02%	89	\$ 381.225,64	\$ 48.489.503,21
2013	M13	\$ 212.051	2,02%	89	\$ 381.225,64	\$ 48.870.728,85
2013	07	\$ 212.051	2,02%	88	\$ 376.942,21	\$ 49.247.671,06
2013	08	\$ 212.051	2,02%	87	\$ 372.658,77	\$ 49.620.329,83
2013	09	\$ 212.051	2,02%	86	\$ 368.375,34	\$ 49.988.705,17
2013	10	\$ 212.051	2,02%	85	\$ 364.091,90	\$ 50.352.797,07
2013	11	\$ 212.051	2,02%	84	\$ 359.808,47	\$ 50.712.605,54
2013	12	\$ 212.051	2,02%	83	\$ 355.525,04	\$ 51.068.130,58
2013	M14	\$ 212.051	2,02%	83	\$ 355.525,04	\$ 51.423.655,61
2014	01	\$ 216.165	2,02%	82	\$ 358.055,69	\$ 51.781.711,30
2014	02	\$ 216.165	2,02%	81	\$ 353.689,16	\$ 52.135.400,46
2014	03	\$ 216.165	2,02%	80	\$ 349.322,62	\$ 52.484.723,08
2014	04	\$ 216.165	2,02%	79	\$ 344.956,09	\$ 52.829.679,17
2014	05	\$ 216.165	2,02%	78	\$ 340.589,56	\$ 53.170.268,73
2014	06	\$ 216.165	2,02%	77	\$ 336.223,02	\$ 53.506.491,76
2014	M13	\$ 216.165	2,02%	77	\$ 336.223,02	\$ 53.842.714,78
2014	07	\$ 216.165	2,02%	76	\$ 331.856,49	\$ 54.174.571,27
2014	08	\$ 216.165	2,02%	75	\$ 327.489,96	\$ 54.502.061,23
2014	09	\$ 216.165	2,02%	74	\$ 323.123,43	\$ 54.825.184,66
2014	10	\$ 216.165	2,02%	73	\$ 318.756,89	\$ 55.143.941,55
2014	11	\$ 216.165	2,02%	72	\$ 314.390,36	\$ 55.458.331,91
2014	12	\$ 216.165	2,02%	71	\$ 310.023,83	\$ 55.768.355,74
2014	M14	\$ 216.165	2,02%	71	\$ 310.023,83	\$ 56.078.379,57
2015	01	\$ 224.077	2,02%	70	\$ 316.844,35	\$ 56.395.223,92
2015	02	\$ 224.077	2,02%	69	\$ 312.318,00	\$ 56.707.541,93
2015	03	\$ 224.077	2,02%	68	\$ 307.791,66	\$ 57.015.333,58
2015	04	\$ 224.077	2,02%	67	\$ 303.265,31	\$ 57.318.598,89
2015	05	\$ 224.077	2,02%	66	\$ 298.738,96	\$ 57.617.337,85
2015	06	\$ 224.077	2,02%	65	\$ 294.212,61	\$ 57.911.550,47
2015	M13	\$ 224.077	2,02%	65	\$ 294.212,61	\$ 58.205.763,08
2015	07	\$ 224.077	2,02%	64	\$ 289.686,27	\$ 58.495.449,34
2015	08	\$ 224.077	2,02%	63	\$ 285.159,92	\$ 58.780.609,26
2015	09	\$ 224.077	2,02%	62	\$ 280.633,57	\$ 59.061.242,83
2015	10	\$ 224.077	2,02%	61	\$ 276.107,22	\$ 59.337.350,05
2015	11	\$ 224.077	2,02%	60	\$ 271.580,87	\$ 59.608.930,93
2015	12	\$ 224.077	2,02%	59	\$ 267.054,53	\$ 59.875.985,45
2015	M14	\$ 224.077	2,02%	59	\$ 267.054,53	\$ 60.143.039,98

2016	01	\$ 239.247	2,02%	58	\$ 280.301,34	\$ 60.423.341,31
2016	02	\$ 239.247	2,02%	57	\$ 275.468,55	\$ 60.698.809,87
2016	03	\$ 239.247	2,02%	56	\$ 270.635,77	\$ 60.969.445,64
2016	04	\$ 239.247	2,02%	55	\$ 265.802,99	\$ 61.235.248,63
2016	05	\$ 239.247	2,02%	54	\$ 260.970,21	\$ 61.496.218,84
2016	06	\$ 239.247	2,02%	53	\$ 256.137,43	\$ 61.752.356,26
2016	M13	\$ 239.247	2,02%	53	\$ 256.137,43	\$ 62.008.493,69
2016	07	\$ 239.247	2,02%	52	\$ 251.304,65	\$ 62.259.798,34
2016	08	\$ 239.247	2,02%	51	\$ 246.471,86	\$ 62.506.270,20
2016	09	\$ 239.247	2,02%	50	\$ 241.639,08	\$ 62.747.909,28
2016	10	\$ 239.247	2,02%	49	\$ 236.806,30	\$ 62.984.715,58
2016	11	\$ 239.247	2,02%	48	\$ 231.973,52	\$ 63.216.689,10
2016	12	\$ 239.247	2,02%	47	\$ 227.140,74	\$ 63.443.829,84
2016	M14	\$ 239.247	2,02%	47	\$ 227.140,74	\$ 63.670.970,58
2017	01	\$ 253.003	2,02%	46	\$ 235.090,66	\$ 63.906.061,24
2017	02	\$ 253.003	2,02%	45	\$ 229.980,00	\$ 64.136.041,24
2017	03	\$ 253.003	2,02%	44	\$ 224.869,33	\$ 64.360.910,57
2017	04	\$ 253.003	2,02%	43	\$ 219.758,66	\$ 64.580.669,23
2017	05	\$ 253.003	2,02%	42	\$ 214.648,00	\$ 64.795.317,23
2017	06	\$ 253.003	2,02%	41	\$ 209.537,33	\$ 65.004.854,56
2017	M13	\$ 253.003	2,02%	41	\$ 209.537,33	\$ 65.214.391,89
2017	07	\$ 253.003	2,02%	40	\$ 204.426,66	\$ 65.418.818,55
2017	08	\$ 253.003	2,02%	39	\$ 199.316,00	\$ 65.618.134,55
2017	09	\$ 253.003	2,02%	38	\$ 194.205,33	\$ 65.812.339,88
2017	10	\$ 253.003	2,02%	37	\$ 189.094,66	\$ 66.001.434,54
2017	11	\$ 253.003	2,02%	36	\$ 183.984,00	\$ 66.185.418,54
2017	12	\$ 253.003	2,02%	35	\$ 178.873,33	\$ 66.364.291,87
2017	M14	\$ 253.003	2,02%	35	\$ 178.873,33	\$ 66.543.165,20
2018	01	\$ 263.351	2,02%	34	\$ 180.869,56	\$ 66.724.034,76
2018	02	\$ 263.351	2,02%	33	\$ 175.549,86	\$ 66.899.584,62
2018	03	\$ 263.351	2,02%	32	\$ 170.230,17	\$ 67.069.814,79
2018	04	\$ 263.351	2,02%	31	\$ 164.910,48	\$ 67.234.725,27
2018	05	\$ 263.351	2,02%	30	\$ 159.590,79	\$ 67.394.316,06
2018	06	\$ 263.351	2,02%	29	\$ 154.271,09	\$ 67.548.587,15
2018	M13	\$ 263.351	2,02%	29	\$ 154.271,09	\$ 67.702.858,24
2018	07	\$ 263.351	2,02%	28	\$ 148.951,40	\$ 67.851.809,64
2018	08	\$ 263.351	2,02%	27	\$ 143.631,71	\$ 67.995.441,35
2018	09	\$ 263.351	2,02%	26	\$ 138.312,01	\$ 68.133.753,36
2018	10	\$ 263.351	2,02%	25	\$ 132.992,32	\$ 68.266.745,68
2018	11	\$ 263.351	2,02%	24	\$ 127.672,63	\$ 68.394.418,31
2018	12	\$ 263.351	2,02%	23	\$ 122.352,94	\$ 68.516.771,25
2018	M14	\$ 263.351	2,02%	23	\$ 122.352,94	\$ 68.639.124,18
2019	01	\$ 271.726	2,02%	22	\$ 120.754,90	\$ 68.759.879,08
2019	02	\$ 271.726	2,02%	21	\$ 115.266,04	\$ 68.875.145,12
2019	03	\$ 271.726	2,02%	20	\$ 109.777,18	\$ 68.984.922,31
2019	04	\$ 271.726	2,02%	19	\$ 104.288,32	\$ 69.089.210,63
2019	05	\$ 271.726	2,02%	18	\$ 98.799,46	\$ 69.188.010,09
2019	06	\$ 271.726	2,02%	17	\$ 93.310,60	\$ 69.281.320,70
2019	M13	\$ 271.726	2,02%	17	\$ 93.310,60	\$ 69.374.631,30
2019	07	\$ 271.726	2,02%	16	\$ 87.821,75	\$ 69.462.453,05
2019	08	\$ 271.726	2,02%	15	\$ 82.332,89	\$ 69.544.785,93
2019	09	\$ 271.726	2,02%	14	\$ 76.844,03	\$ 69.621.629,96
2019	10	\$ 271.726	2,02%	13	\$ 71.355,17	\$ 69.692.985,13
2019	11	\$ 271.726	2,02%	12	\$ 65.866,31	\$ 69.758.851,44
2019	12	\$ 271.726	2,02%	11	\$ 60.377,45	\$ 69.819.228,89
2019	M14	\$ 271.726	2,02%	11	\$ 60.377,45	\$ 69.879.606,34
2020	01	\$ 282.051	2,02%	10	\$ 56.974,36	\$ 69.936.580,69

2020	02	\$ 282.051	2,02%	9	\$ 51.276,92	\$ 69.987.857,62
2020	03	\$ 282.051	2,02%	8	\$ 45.579,49	\$ 70.033.437,10
2020	04	\$ 282.051	2,02%	7	\$ 39.882,05	\$ 70.073.319,15
2020	05	\$ 282.051	2,02%	6	\$ 34.184,61	\$ 70.107.503,77
2020	06	\$ 282.051	2,02%	5	\$ 28.487,18	\$ 70.135.990,94
2020	M13	\$ 282.051	2,02%	5	\$ 28.487,18	\$ 70.164.478,12
2020	07	\$ 282.051	2,02%	4	\$ 22.789,74	\$ 70.187.267,87
2020	08	\$ 282.051	2,02%	3	\$ 17.092,31	\$ 70.204.360,17
2020	09	\$ 282.051	2,02%	2	\$ 11.394,87	\$ 70.215.755,04
2020	10	\$ 282.051	2,02%	1	\$ 5.697,44	\$ 70.221.452,48

47. MANUEL DOLORES BECERRA GENTIL

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2002	\$ 122.755,58	6,99%	7	\$ 859.289,06
2003	\$ 131.336,20	6,49%	14	\$ 1.838.706,73
2004	\$ 139.859,91	5,50%	14	\$ 1.958.038,80
2005	\$ 147.552,21	4,85%	14	\$ 2.065.730,93
2006	\$ 154.708,49	4,48%	14	\$ 2.165.918,88
2007	\$ 161.639,43	5,69%	14	\$ 2.262.952,05
2008	\$ 170.836,72	7,67%	14	\$ 2.391.714,02
2009	\$ 183.939,89	2,00%	14	\$ 2.575.158,48
2010	\$ 187.618,69	3,17%	14	\$ 2.626.661,65
2011	\$ 193.566,20	3,73%	14	\$ 2.709.926,83
2012	\$ 200.786,22	2,44%	14	\$ 2.811.007,10
2013	\$ 205.685,41	1,94%	14	\$ 2.879.595,67
2014	\$ 209.675,70	3,66%	14	\$ 2.935.459,83
2015	\$ 217.349,83	6,77%	14	\$ 3.042.897,66
2016	\$ 232.064,42	5,75%	14	\$ 3.248.901,83
2017	\$ 245.408,12	4,09%	14	\$ 3.435.713,68
2018	\$ 255.445,31	3,18%	14	\$ 3.576.234,37
2019	\$ 263.568,47	3,80%	14	\$ 3.689.958,63
2020	\$ 273.584,08	1,61%	11	\$ 3.009.424,83
				\$ 45.427.256,45

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2002	07	\$ 122.756	2,02%	220	\$ 545.525,80	\$ 545.525,80
2002	08	\$ 122.756	2,02%	219	\$ 543.046,13	\$ 1.088.571,93
2002	09	\$ 122.756	2,02%	218	\$ 540.566,47	\$ 1.629.138,40
2002	10	\$ 122.756	2,02%	217	\$ 538.086,81	\$ 2.167.225,21
2002	11	\$ 122.756	2,02%	216	\$ 535.607,15	\$ 2.702.832,36
2002	12	\$ 122.756	2,02%	215	\$ 533.127,48	\$ 3.235.959,84
2002	M14	\$ 122.756	2,02%	215	\$ 533.127,48	\$ 3.769.087,33
2003	01	\$ 131.336	2,02%	214	\$ 567.740,10	\$ 4.336.827,43
2003	02	\$ 131.336	2,02%	213	\$ 565.087,11	\$ 4.901.914,55
2003	03	\$ 131.336	2,02%	212	\$ 562.434,12	\$ 5.464.348,67
2003	04	\$ 131.336	2,02%	211	\$ 559.781,13	\$ 6.024.129,80
2003	05	\$ 131.336	2,02%	210	\$ 557.128,14	\$ 6.581.257,94
2003	06	\$ 131.336	2,02%	209	\$ 554.475,15	\$ 7.135.733,08
2003	M13	\$ 131.336	2,02%	209	\$ 554.475,15	\$ 7.690.208,23
2003	07	\$ 131.336	2,02%	208	\$ 551.822,16	\$ 8.242.030,39
2003	08	\$ 131.336	2,02%	207	\$ 549.169,17	\$ 8.791.199,56
2003	09	\$ 131.336	2,02%	206	\$ 546.516,17	\$ 9.337.715,73
2003	10	\$ 131.336	2,02%	205	\$ 543.863,18	\$ 9.881.578,91
2003	11	\$ 131.336	2,02%	204	\$ 541.210,19	\$ 10.422.789,11

2003	12	\$ 131.336	2,02%	203	\$ 538.557,20	\$ 10.961.346,31
2003	M14	\$ 131.336	2,02%	203	\$ 538.557,20	\$ 11.499.903,51
2004	01	\$ 139.860	2,02%	202	\$ 570.684,39	\$ 12.070.587,90
2004	02	\$ 139.860	2,02%	201	\$ 567.859,22	\$ 12.638.447,13
2004	03	\$ 139.860	2,02%	200	\$ 565.034,05	\$ 13.203.481,18
2004	04	\$ 139.860	2,02%	199	\$ 562.208,88	\$ 13.765.690,06
2004	05	\$ 139.860	2,02%	198	\$ 559.383,71	\$ 14.325.073,77
2004	06	\$ 139.860	2,02%	197	\$ 556.558,54	\$ 14.881.632,32
2004	M13	\$ 139.860	2,02%	197	\$ 556.558,54	\$ 15.438.190,86
2004	07	\$ 139.860	2,02%	196	\$ 553.733,37	\$ 15.991.924,23
2004	08	\$ 139.860	2,02%	195	\$ 550.908,20	\$ 16.542.832,43
2004	09	\$ 139.860	2,02%	194	\$ 548.083,03	\$ 17.090.915,46
2004	10	\$ 139.860	2,02%	193	\$ 545.257,86	\$ 17.636.173,33
2004	11	\$ 139.860	2,02%	192	\$ 542.432,69	\$ 18.178.606,02
2004	12	\$ 139.860	2,02%	191	\$ 539.607,52	\$ 18.718.213,54
2004	M14	\$ 139.860	2,02%	191	\$ 539.607,52	\$ 19.257.821,06
2005	01	\$ 147.552	2,02%	190	\$ 566.305,38	\$ 19.824.126,44
2005	02	\$ 147.552	2,02%	189	\$ 563.324,82	\$ 20.387.451,26
2005	03	\$ 147.552	2,02%	188	\$ 560.344,27	\$ 20.947.795,53
2005	04	\$ 147.552	2,02%	187	\$ 557.363,72	\$ 21.505.159,25
2005	05	\$ 147.552	2,02%	186	\$ 554.383,16	\$ 22.059.542,41
2005	06	\$ 147.552	2,02%	185	\$ 551.402,61	\$ 22.610.945,02
2005	M13	\$ 147.552	2,02%	185	\$ 551.402,61	\$ 23.162.347,62
2005	07	\$ 147.552	2,02%	184	\$ 548.422,05	\$ 23.710.769,67
2005	08	\$ 147.552	2,02%	183	\$ 545.441,50	\$ 24.256.211,17
2005	09	\$ 147.552	2,02%	182	\$ 542.460,94	\$ 24.798.672,11
2005	10	\$ 147.552	2,02%	181	\$ 539.480,39	\$ 25.338.152,50
2005	11	\$ 147.552	2,02%	180	\$ 536.499,83	\$ 25.874.652,33
2005	12	\$ 147.552	2,02%	179	\$ 533.519,28	\$ 26.408.171,61
2005	M14	\$ 147.552	2,02%	179	\$ 533.519,28	\$ 26.941.690,89
2006	01	\$ 154.708	2,02%	178	\$ 556.269,85	\$ 27.497.960,74
2006	02	\$ 154.708	2,02%	177	\$ 553.144,74	\$ 28.051.105,48
2006	03	\$ 154.708	2,02%	176	\$ 550.019,63	\$ 28.601.125,11
2006	04	\$ 154.708	2,02%	175	\$ 546.894,52	\$ 29.148.019,63
2006	05	\$ 154.708	2,02%	174	\$ 543.769,41	\$ 29.691.789,04
2006	06	\$ 154.708	2,02%	173	\$ 540.644,29	\$ 30.232.433,33
2006	M13	\$ 154.708	2,02%	173	\$ 540.644,29	\$ 30.773.077,63
2006	07	\$ 154.708	2,02%	172	\$ 537.519,18	\$ 31.310.596,81
2006	08	\$ 154.708	2,02%	171	\$ 534.394,07	\$ 31.844.990,88
2006	09	\$ 154.708	2,02%	170	\$ 531.268,96	\$ 32.376.259,84
2006	10	\$ 154.708	2,02%	169	\$ 528.143,85	\$ 32.904.403,69
2006	11	\$ 154.708	2,02%	168	\$ 525.018,74	\$ 33.429.422,43
2006	12	\$ 154.708	2,02%	167	\$ 521.893,63	\$ 33.951.316,05
2006	M14	\$ 154.708	2,02%	167	\$ 521.893,63	\$ 34.473.209,68
2007	01	\$ 161.639	2,02%	166	\$ 542.009,34	\$ 35.015.219,02
2007	02	\$ 161.639	2,02%	165	\$ 538.744,23	\$ 35.553.963,25
2007	03	\$ 161.639	2,02%	164	\$ 535.479,11	\$ 36.089.442,36
2007	04	\$ 161.639	2,02%	163	\$ 532.213,99	\$ 36.621.656,35
2007	05	\$ 161.639	2,02%	162	\$ 528.948,88	\$ 37.150.605,23
2007	06	\$ 161.639	2,02%	161	\$ 525.683,76	\$ 37.676.288,99
2007	M13	\$ 161.639	2,02%	161	\$ 525.683,76	\$ 38.201.972,75
2007	07	\$ 161.639	2,02%	160	\$ 522.418,64	\$ 38.724.391,39
2007	08	\$ 161.639	2,02%	159	\$ 519.153,53	\$ 39.243.544,92
2007	09	\$ 161.639	2,02%	158	\$ 515.888,41	\$ 39.759.433,33
2007	10	\$ 161.639	2,02%	157	\$ 512.623,29	\$ 40.272.056,63
2007	11	\$ 161.639	2,02%	156	\$ 509.358,18	\$ 40.781.414,80
2007	12	\$ 161.639	2,02%	155	\$ 506.093,06	\$ 41.287.507,86

2007	M14	\$ 161.639	2,02%	155	\$ 506.093,06	\$ 41.793.600,93
2008	01	\$ 170.837	2,02%	154	\$ 531.438,85	\$ 42.325.039,78
2008	02	\$ 170.837	2,02%	153	\$ 527.987,95	\$ 42.853.027,73
2008	03	\$ 170.837	2,02%	152	\$ 524.537,05	\$ 43.377.564,79
2008	04	\$ 170.837	2,02%	151	\$ 521.086,15	\$ 43.898.650,94
2008	05	\$ 170.837	2,02%	150	\$ 517.635,25	\$ 44.416.286,18
2008	06	\$ 170.837	2,02%	149	\$ 514.184,35	\$ 44.930.470,53
2008	M13	\$ 170.837	2,02%	149	\$ 514.184,35	\$ 45.444.654,88
2008	07	\$ 170.837	2,02%	148	\$ 510.733,45	\$ 45.955.388,32
2008	08	\$ 170.837	2,02%	147	\$ 507.282,54	\$ 46.462.670,87
2008	09	\$ 170.837	2,02%	146	\$ 503.831,64	\$ 46.966.502,51
2008	10	\$ 170.837	2,02%	145	\$ 500.380,74	\$ 47.466.883,25
2008	11	\$ 170.837	2,02%	144	\$ 496.929,84	\$ 47.963.813,09
2008	12	\$ 170.837	2,02%	143	\$ 493.478,94	\$ 48.457.292,02
2008	M14	\$ 170.837	2,02%	143	\$ 493.478,94	\$ 48.950.770,96
2009	01	\$ 183.940	2,02%	142	\$ 527.613,19	\$ 49.478.384,15
2009	02	\$ 183.940	2,02%	141	\$ 523.897,60	\$ 50.002.281,75
2009	03	\$ 183.940	2,02%	140	\$ 520.182,01	\$ 50.522.463,76
2009	04	\$ 183.940	2,02%	139	\$ 516.466,43	\$ 51.038.930,19
2009	05	\$ 183.940	2,02%	138	\$ 512.750,84	\$ 51.551.681,03
2009	06	\$ 183.940	2,02%	137	\$ 509.035,26	\$ 52.060.716,29
2009	M13	\$ 183.940	2,02%	137	\$ 509.035,26	\$ 52.569.751,54
2009	07	\$ 183.940	2,02%	136	\$ 505.319,67	\$ 53.075.071,21
2009	08	\$ 183.940	2,02%	135	\$ 501.604,08	\$ 53.576.675,30
2009	09	\$ 183.940	2,02%	134	\$ 497.888,50	\$ 54.074.563,80
2009	10	\$ 183.940	2,02%	133	\$ 494.172,91	\$ 54.568.736,71
2009	11	\$ 183.940	2,02%	132	\$ 490.457,33	\$ 55.059.194,04
2009	12	\$ 183.940	2,02%	131	\$ 486.741,74	\$ 55.545.935,78
2009	M14	\$ 183.940	2,02%	131	\$ 486.741,74	\$ 56.032.677,52
2010	01	\$ 187.619	2,02%	130	\$ 492.686,68	\$ 56.525.364,20
2010	02	\$ 187.619	2,02%	129	\$ 488.896,78	\$ 57.014.260,98
2010	03	\$ 187.619	2,02%	128	\$ 485.106,88	\$ 57.499.367,86
2010	04	\$ 187.619	2,02%	127	\$ 481.316,99	\$ 57.980.684,85
2010	05	\$ 187.619	2,02%	126	\$ 477.527,09	\$ 58.458.211,94
2010	06	\$ 187.619	2,02%	125	\$ 473.737,19	\$ 58.931.949,13
2010	M13	\$ 187.619	2,02%	125	\$ 473.737,19	\$ 59.405.686,32
2010	07	\$ 187.619	2,02%	124	\$ 469.947,29	\$ 59.875.633,61
2010	08	\$ 187.619	2,02%	123	\$ 466.157,40	\$ 60.341.791,01
2010	09	\$ 187.619	2,02%	122	\$ 462.367,50	\$ 60.804.158,51
2010	10	\$ 187.619	2,02%	121	\$ 458.577,60	\$ 61.262.736,11
2010	11	\$ 187.619	2,02%	120	\$ 454.787,70	\$ 61.717.523,81
2010	12	\$ 187.619	2,02%	119	\$ 450.997,81	\$ 62.168.521,62
2010	M14	\$ 187.619	2,02%	119	\$ 450.997,81	\$ 62.619.519,42
2011	01	\$ 193.566	2,02%	118	\$ 461.384,40	\$ 63.080.903,82
2011	02	\$ 193.566	2,02%	117	\$ 457.474,36	\$ 63.538.378,19
2011	03	\$ 193.566	2,02%	116	\$ 453.564,32	\$ 63.991.942,51
2011	04	\$ 193.566	2,02%	115	\$ 449.654,29	\$ 64.441.596,80
2011	05	\$ 193.566	2,02%	114	\$ 445.744,25	\$ 64.887.341,05
2011	06	\$ 193.566	2,02%	113	\$ 441.834,21	\$ 65.329.175,26
2011	M13	\$ 193.566	2,02%	113	\$ 441.834,21	\$ 65.771.009,47
2011	07	\$ 193.566	2,02%	112	\$ 437.924,18	\$ 66.208.933,65
2011	08	\$ 193.566	2,02%	111	\$ 434.014,14	\$ 66.642.947,79
2011	09	\$ 193.566	2,02%	110	\$ 430.104,10	\$ 67.073.051,89
2011	10	\$ 193.566	2,02%	109	\$ 426.194,06	\$ 67.499.245,95
2011	11	\$ 193.566	2,02%	108	\$ 422.284,03	\$ 67.921.529,98
2011	12	\$ 193.566	2,02%	107	\$ 418.373,99	\$ 68.339.903,97
2011	M14	\$ 193.566	2,02%	107	\$ 418.373,99	\$ 68.758.277,96

2012	01	\$ 200.786	2,02%	106	\$ 429.923,46	\$ 69.188.201,41
2012	02	\$ 200.786	2,02%	105	\$ 425.867,58	\$ 69.614.068,99
2012	03	\$ 200.786	2,02%	104	\$ 421.811,69	\$ 0,00
2012	04	\$ 200.786	2,02%	103	\$ 417.755,81	\$ 70.453.636,49
2012	05	\$ 200.786	2,02%	102	\$ 413.699,93	\$ 70.867.336,42
2012	06	\$ 200.786	2,02%	101	\$ 409.644,05	\$ 71.276.980,47
2012	M13	\$ 200.786	2,02%	101	\$ 409.644,05	\$ 71.686.624,52
2012	07	\$ 200.786	2,02%	100	\$ 405.588,17	\$ 72.092.212,69
2012	08	\$ 200.786	2,02%	99	\$ 401.532,29	\$ 72.493.744,97
2012	09	\$ 200.786	2,02%	98	\$ 397.476,40	\$ 72.891.221,38
2012	10	\$ 200.786	2,02%	97	\$ 393.420,52	\$ 73.284.641,90
2012	11	\$ 200.786	2,02%	96	\$ 389.364,64	\$ 73.674.006,54
2012	12	\$ 200.786	2,02%	95	\$ 385.308,76	\$ 74.059.315,30
2012	M14	\$ 200.786	2,02%	95	\$ 385.308,76	\$ 74.444.624,06
2013	01	\$ 205.685	2,02%	94	\$ 390.555,45	\$ 74.835.179,51
2013	02	\$ 205.685	2,02%	93	\$ 386.400,60	\$ 75.221.580,11
2013	03	\$ 205.685	2,02%	92	\$ 382.245,76	\$ 75.603.825,86
2013	04	\$ 205.685	2,02%	91	\$ 378.090,91	\$ 75.981.916,78
2013	05	\$ 205.685	2,02%	90	\$ 373.936,07	\$ 76.355.852,84
2013	06	\$ 205.685	2,02%	89	\$ 369.781,22	\$ 76.725.634,06
2013	M13	\$ 205.685	2,02%	89	\$ 369.781,22	\$ 77.095.415,29
2013	07	\$ 205.685	2,02%	88	\$ 365.626,38	\$ 77.461.041,66
2013	08	\$ 205.685	2,02%	87	\$ 361.471,53	\$ 77.822.513,19
2013	09	\$ 205.685	2,02%	86	\$ 357.316,69	\$ 78.179.829,88
2013	10	\$ 205.685	2,02%	85	\$ 353.161,84	\$ 78.532.991,72
2013	11	\$ 205.685	2,02%	84	\$ 349.007,00	\$ 78.881.998,71
2013	12	\$ 205.685	2,02%	83	\$ 344.852,15	\$ 79.226.850,86
2013	M14	\$ 205.685	2,02%	83	\$ 344.852,15	\$ 79.571.703,02
2014	01	\$ 209.676	2,02%	82	\$ 347.306,83	\$ 79.919.009,85
2014	02	\$ 209.676	2,02%	81	\$ 343.071,38	\$ 80.262.081,23
2014	03	\$ 209.676	2,02%	80	\$ 338.835,93	\$ 80.600.917,17
2014	04	\$ 209.676	2,02%	79	\$ 334.600,49	\$ 80.935.517,65
2014	05	\$ 209.676	2,02%	78	\$ 330.365,04	\$ 81.265.882,69
2014	06	\$ 209.676	2,02%	77	\$ 326.129,59	\$ 81.592.012,27
2014	M13	\$ 209.676	2,02%	77	\$ 326.129,59	\$ 81.918.141,86
2014	07	\$ 209.676	2,02%	76	\$ 321.894,14	\$ 82.240.036,00
2014	08	\$ 209.676	2,02%	75	\$ 317.658,69	\$ 82.557.694,69
2014	09	\$ 209.676	2,02%	74	\$ 313.423,24	\$ 82.871.117,93
2014	10	\$ 209.676	2,02%	73	\$ 309.187,79	\$ 83.180.305,72
2014	11	\$ 209.676	2,02%	72	\$ 304.952,34	\$ 83.485.258,06
2014	12	\$ 209.676	2,02%	71	\$ 300.716,89	\$ 83.785.974,95
2014	M14	\$ 209.676	2,02%	71	\$ 300.716,89	\$ 84.086.691,84
2015	01	\$ 217.350	2,02%	70	\$ 307.332,66	\$ 84.394.024,51
2015	02	\$ 217.350	2,02%	69	\$ 302.942,20	\$ 84.696.966,70
2015	03	\$ 217.350	2,02%	68	\$ 298.551,73	\$ 84.995.518,43
2015	04	\$ 217.350	2,02%	67	\$ 294.161,26	\$ 85.289.679,70
2015	05	\$ 217.350	2,02%	66	\$ 289.770,80	\$ 85.579.450,49
2015	06	\$ 217.350	2,02%	65	\$ 285.380,33	\$ 85.864.830,82
2015	M13	\$ 217.350	2,02%	65	\$ 285.380,33	\$ 86.150.211,15
2015	07	\$ 217.350	2,02%	64	\$ 280.989,86	\$ 86.431.201,02
2015	08	\$ 217.350	2,02%	63	\$ 276.599,40	\$ 86.707.800,41
2015	09	\$ 217.350	2,02%	62	\$ 272.208,93	\$ 86.980.009,34
2015	10	\$ 217.350	2,02%	61	\$ 267.818,46	\$ 87.247.827,81
2015	11	\$ 217.350	2,02%	60	\$ 263.428,00	\$ 87.511.255,81
2015	12	\$ 217.350	2,02%	59	\$ 259.037,53	\$ 87.770.293,34
2015	M14	\$ 217.350	2,02%	59	\$ 259.037,53	\$ 88.029.330,87
2016	01	\$ 232.064	2,02%	58	\$ 271.886,67	\$ 88.301.217,54

2016	02	\$ 232.064	2,02%	57	\$ 267.198,97	\$ 88.568.416,51
2016	03	\$ 232.064	2,02%	56	\$ 262.511,27	\$ 88.830.927,77
2016	04	\$ 232.064	2,02%	55	\$ 257.823,57	\$ 89.088.751,34
2016	05	\$ 232.064	2,02%	54	\$ 253.135,87	\$ 89.341.887,21
2016	06	\$ 232.064	2,02%	53	\$ 248.448,16	\$ 89.590.335,37
2016	M13	\$ 232.064	2,02%	53	\$ 248.448,16	\$ 89.838.783,53
2016	07	\$ 232.064	2,02%	52	\$ 243.760,46	\$ 90.082.544,00
2016	08	\$ 232.064	2,02%	51	\$ 239.072,76	\$ 90.321.616,76
2016	09	\$ 232.064	2,02%	50	\$ 234.385,06	\$ 90.556.001,82
2016	10	\$ 232.064	2,02%	49	\$ 229.697,36	\$ 90.785.699,18
2016	11	\$ 232.064	2,02%	48	\$ 225.009,66	\$ 91.010.708,84
2016	12	\$ 232.064	2,02%	47	\$ 220.321,96	\$ 91.231.030,79
2016	M14	\$ 232.064	2,02%	47	\$ 220.321,96	\$ 91.451.352,75
2017	01	\$ 245.408	2,02%	46	\$ 228.033,23	\$ 91.679.385,98
2017	02	\$ 245.408	2,02%	45	\$ 223.075,98	\$ 91.902.461,96
2017	03	\$ 245.408	2,02%	44	\$ 218.118,74	\$ 92.120.580,69
2017	04	\$ 245.408	2,02%	43	\$ 213.161,49	\$ 92.333.742,19
2017	05	\$ 245.408	2,02%	42	\$ 208.204,25	\$ 92.541.946,44
2017	06	\$ 245.408	2,02%	41	\$ 203.247,01	\$ 92.745.193,44
2017	M13	\$ 245.408	2,02%	41	\$ 203.247,01	\$ 92.948.440,45
2017	07	\$ 245.408	2,02%	40	\$ 198.289,76	\$ 93.146.730,21
2017	08	\$ 245.408	2,02%	39	\$ 193.332,52	\$ 93.340.062,73
2017	09	\$ 245.408	2,02%	38	\$ 188.375,27	\$ 93.528.438,00
2017	10	\$ 245.408	2,02%	37	\$ 183.418,03	\$ 93.711.856,03
2017	11	\$ 245.408	2,02%	36	\$ 178.460,79	\$ 93.890.316,81
2017	12	\$ 245.408	2,02%	35	\$ 173.503,54	\$ 94.063.820,35
2017	M14	\$ 245.408	2,02%	35	\$ 173.503,54	\$ 94.237.323,90
2018	01	\$ 255.445	2,02%	34	\$ 175.439,84	\$ 94.412.763,74
2018	02	\$ 255.445	2,02%	33	\$ 170.279,85	\$ 94.583.043,58
2018	03	\$ 255.445	2,02%	32	\$ 165.119,85	\$ 94.748.163,43
2018	04	\$ 255.445	2,02%	31	\$ 159.959,85	\$ 94.908.123,29
2018	05	\$ 255.445	2,02%	30	\$ 154.799,86	\$ 95.062.923,15
2018	06	\$ 255.445	2,02%	29	\$ 149.639,86	\$ 95.212.563,01
2018	M13	\$ 255.445	2,02%	29	\$ 149.639,86	\$ 95.362.202,87
2018	07	\$ 255.445	2,02%	28	\$ 144.479,87	\$ 95.506.682,74
2018	08	\$ 255.445	2,02%	27	\$ 139.319,87	\$ 95.646.002,62
2018	09	\$ 255.445	2,02%	26	\$ 134.159,88	\$ 95.780.162,49
2018	10	\$ 255.445	2,02%	25	\$ 128.999,88	\$ 95.909.162,38
2018	11	\$ 255.445	2,02%	24	\$ 123.839,89	\$ 96.033.002,26
2018	12	\$ 255.445	2,02%	23	\$ 118.679,89	\$ 96.151.682,16
2018	M14	\$ 255.445	2,02%	23	\$ 118.679,89	\$ 96.270.362,05
2019	01	\$ 263.568	2,02%	22	\$ 117.129,83	\$ 96.387.491,88
2019	02	\$ 263.568	2,02%	21	\$ 111.805,75	\$ 96.499.297,62
2019	03	\$ 263.568	2,02%	20	\$ 106.481,66	\$ 96.605.779,29
2019	04	\$ 263.568	2,02%	19	\$ 101.157,58	\$ 96.706.936,87
2019	05	\$ 263.568	2,02%	18	\$ 95.833,50	\$ 96.802.770,36
2019	06	\$ 263.568	2,02%	17	\$ 90.509,41	\$ 96.893.279,78
2019	M13	\$ 263.568	2,02%	17	\$ 90.509,41	\$ 96.983.789,19
2019	07	\$ 263.568	2,02%	16	\$ 85.185,33	\$ 97.068.974,52
2019	08	\$ 263.568	2,02%	15	\$ 79.861,25	\$ 97.148.835,77
2019	09	\$ 263.568	2,02%	14	\$ 74.537,16	\$ 97.223.372,93
2019	10	\$ 263.568	2,02%	13	\$ 69.213,08	\$ 97.292.586,02
2019	11	\$ 263.568	2,02%	12	\$ 63.889,00	\$ 97.356.475,01
2019	12	\$ 263.568	2,02%	11	\$ 58.564,91	\$ 97.415.039,93
2019	M14	\$ 263.568	2,02%	11	\$ 58.564,91	\$ 97.473.604,84
2020	01	\$ 273.584	2,02%	10	\$ 55.263,98	\$ 97.528.868,83
2020	02	\$ 273.584	2,02%	9	\$ 49.737,58	\$ 97.578.606,41

2020	03	\$ 273.584	2,02%	8	\$ 44.211,19	\$ 97.622.817,60
2020	04	\$ 273.584	2,02%	7	\$ 38.684,79	\$ 97.661.502,39
2020	05	\$ 273.584	2,02%	6	\$ 33.158,39	\$ 97.694.660,78
2020	06	\$ 273.584	2,02%	5	\$ 27.631,99	\$ 97.722.292,77
2020	M13	\$ 273.584	2,02%	5	\$ 27.631,99	\$ 97.749.924,76
2020	07	\$ 273.584	2,02%	4	\$ 22.105,59	\$ 97.772.030,35
2020	08	\$ 273.584	2,02%	3	\$ 16.579,19	\$ 97.788.609,55
2020	09	\$ 273.584	2,02%	2	\$ 11.052,80	\$ 97.799.662,34
2020	10	\$ 273.584	2,02%	1	\$ 5.526,40	\$ 97.805.188,74

48. JAIME ALIRIO LÁZARO MEZA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 108.353,95	4,48%	9,3	\$ 1.007.691,74
2007	\$ 113.208,21	5,69%	14	\$ 1.584.914,90
2008	\$ 119.649,75	7,67%	14	\$ 1.675.096,56
2009	\$ 128.826,89	2,00%	14	\$ 1.803.576,46
2010	\$ 131.403,43	3,17%	14	\$ 1.839.647,99
2011	\$ 135.568,92	3,73%	14	\$ 1.897.964,83
2012	\$ 140.625,64	2,44%	14	\$ 1.968.758,92
2013	\$ 144.056,90	1,94%	14	\$ 2.016.796,64
2014	\$ 146.851,61	3,66%	14	\$ 2.055.922,49
2015	\$ 152.226,38	6,77%	14	\$ 2.131.169,26
2016	\$ 162.532,10	5,75%	14	\$ 2.275.449,41
2017	\$ 171.877,70	4,09%	14	\$ 2.406.287,76
2018	\$ 178.907,49	3,18%	14	\$ 2.504.704,92
2019	\$ 184.596,75	3,80%	14	\$ 2.584.354,54
2020	\$ 191.611,43	1,61%	11	\$ 2.107.725,72
				\$ 29.860.062,13

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	06	\$ 108.354	2,02%	173	\$ 378.653,71	\$ 378.653,71
2006	M13	\$ 108.354	2,02%	173	\$ 378.653,71	\$ 757.307,43
2006	07	\$ 108.354	2,02%	172	\$ 376.464,96	\$ 1.133.772,39
2006	08	\$ 108.354	2,02%	171	\$ 374.276,21	\$ 1.508.048,61
2006	09	\$ 108.354	2,02%	170	\$ 372.087,46	\$ 1.880.136,07
2006	10	\$ 108.354	2,02%	169	\$ 369.898,71	\$ 2.250.034,78
2006	11	\$ 108.354	2,02%	168	\$ 367.709,96	\$ 2.617.744,75
2006	12	\$ 108.354	2,02%	167	\$ 365.521,21	\$ 2.983.265,96
2006	M14	\$ 108.354	2,02%	167	\$ 365.521,21	\$ 3.348.787,18
2007	01	\$ 113.208	2,02%	166	\$ 379.609,76	\$ 3.728.396,94
2007	02	\$ 113.208	2,02%	165	\$ 377.322,95	\$ 4.105.719,89
2007	03	\$ 113.208	2,02%	164	\$ 375.036,15	\$ 4.480.756,04
2007	04	\$ 113.208	2,02%	163	\$ 372.749,34	\$ 4.853.505,38
2007	05	\$ 113.208	2,02%	162	\$ 370.462,54	\$ 5.223.967,92
2007	06	\$ 113.208	2,02%	161	\$ 368.175,73	\$ 5.592.143,65
2007	M13	\$ 113.208	2,02%	161	\$ 368.175,73	\$ 5.960.319,38
2007	07	\$ 113.208	2,02%	160	\$ 365.888,92	\$ 6.326.208,31
2007	08	\$ 113.208	2,02%	159	\$ 363.602,12	\$ 6.689.810,42
2007	09	\$ 113.208	2,02%	158	\$ 361.315,31	\$ 7.051.125,74
2007	10	\$ 113.208	2,02%	157	\$ 359.028,51	\$ 7.410.154,25
2007	11	\$ 113.208	2,02%	156	\$ 356.741,70	\$ 7.766.895,95
2007	12	\$ 113.208	2,02%	155	\$ 354.454,90	\$ 8.121.350,84
2007	M14	\$ 113.208	2,02%	155	\$ 354.454,90	\$ 8.475.805,74

2008	01	\$ 119.650	2,02%	154	\$ 372.206,45	\$ 8.848.012,19
2008	02	\$ 119.650	2,02%	153	\$ 369.789,53	\$ 9.217.801,72
2008	03	\$ 119.650	2,02%	152	\$ 367.372,60	\$ 9.585.174,33
2008	04	\$ 119.650	2,02%	151	\$ 364.955,68	\$ 9.950.130,01
2008	05	\$ 119.650	2,02%	150	\$ 362.538,75	\$ 10.312.668,76
2008	06	\$ 119.650	2,02%	149	\$ 360.121,83	\$ 10.672.790,59
2008	M13	\$ 119.650	2,02%	149	\$ 360.121,83	\$ 11.032.912,42
2008	07	\$ 119.650	2,02%	148	\$ 357.704,90	\$ 11.390.617,32
2008	08	\$ 119.650	2,02%	147	\$ 355.287,98	\$ 11.745.905,30
2008	09	\$ 119.650	2,02%	146	\$ 352.871,05	\$ 12.098.776,36
2008	10	\$ 119.650	2,02%	145	\$ 350.454,13	\$ 12.449.230,49
2008	11	\$ 119.650	2,02%	144	\$ 348.037,20	\$ 12.797.267,69
2008	12	\$ 119.650	2,02%	143	\$ 345.620,28	\$ 13.142.887,97
2008	M14	\$ 119.650	2,02%	143	\$ 345.620,28	\$ 13.488.508,25
2009	01	\$ 128.827	2,02%	142	\$ 369.527,05	\$ 13.858.035,30
2009	02	\$ 128.827	2,02%	141	\$ 366.924,75	\$ 14.224.960,05
2009	03	\$ 128.827	2,02%	140	\$ 364.322,45	\$ 14.589.282,49
2009	04	\$ 128.827	2,02%	139	\$ 361.720,14	\$ 14.951.002,64
2009	05	\$ 128.827	2,02%	138	\$ 359.117,84	\$ 15.310.120,48
2009	06	\$ 128.827	2,02%	137	\$ 356.515,54	\$ 15.666.636,01
2009	M13	\$ 128.827	2,02%	137	\$ 356.515,54	\$ 16.023.151,55
2009	07	\$ 128.827	2,02%	136	\$ 353.913,23	\$ 16.377.064,78
2009	08	\$ 128.827	2,02%	135	\$ 351.310,93	\$ 16.728.375,71
2009	09	\$ 128.827	2,02%	134	\$ 348.708,63	\$ 17.077.084,33
2009	10	\$ 128.827	2,02%	133	\$ 346.106,32	\$ 17.423.190,66
2009	11	\$ 128.827	2,02%	132	\$ 343.504,02	\$ 17.766.694,68
2009	12	\$ 128.827	2,02%	131	\$ 340.901,72	\$ 18.107.596,39
2009	M14	\$ 128.827	2,02%	131	\$ 340.901,72	\$ 18.448.498,11
2010	01	\$ 131.403	2,02%	130	\$ 345.065,40	\$ 18.793.563,51
2010	02	\$ 131.403	2,02%	129	\$ 342.411,05	\$ 19.135.974,56
2010	03	\$ 131.403	2,02%	128	\$ 339.756,70	\$ 19.475.731,27
2010	04	\$ 131.403	2,02%	127	\$ 337.102,35	\$ 19.812.833,62
2010	05	\$ 131.403	2,02%	126	\$ 334.448,00	\$ 20.147.281,63
2010	06	\$ 131.403	2,02%	125	\$ 331.793,66	\$ 20.479.075,28
2010	M13	\$ 131.403	2,02%	125	\$ 331.793,66	\$ 20.810.868,94
2010	07	\$ 131.403	2,02%	124	\$ 329.139,31	\$ 21.140.008,24
2010	08	\$ 131.403	2,02%	123	\$ 326.484,96	\$ 21.466.493,20
2010	09	\$ 131.403	2,02%	122	\$ 323.830,61	\$ 21.790.323,81
2010	10	\$ 131.403	2,02%	121	\$ 321.176,26	\$ 22.111.500,06
2010	11	\$ 131.403	2,02%	120	\$ 318.521,91	\$ 22.430.021,97
2010	12	\$ 131.403	2,02%	119	\$ 315.867,56	\$ 22.745.889,53
2010	M14	\$ 131.403	2,02%	119	\$ 315.867,56	\$ 23.061.757,09
2011	01	\$ 135.569	2,02%	118	\$ 323.142,07	\$ 23.384.899,16
2011	02	\$ 135.569	2,02%	117	\$ 320.403,58	\$ 23.705.302,74
2011	03	\$ 135.569	2,02%	116	\$ 317.665,09	\$ 24.022.967,83
2011	04	\$ 135.569	2,02%	115	\$ 314.926,59	\$ 24.337.894,42
2011	05	\$ 135.569	2,02%	114	\$ 312.188,10	\$ 24.650.082,52
2011	06	\$ 135.569	2,02%	113	\$ 309.449,61	\$ 24.959.532,13
2011	M13	\$ 135.569	2,02%	113	\$ 309.449,61	\$ 25.268.981,74
2011	07	\$ 135.569	2,02%	112	\$ 306.711,12	\$ 25.575.692,85
2011	08	\$ 135.569	2,02%	111	\$ 303.972,62	\$ 25.879.665,48
2011	09	\$ 135.569	2,02%	110	\$ 301.234,13	\$ 26.180.899,61
2011	10	\$ 135.569	2,02%	109	\$ 298.495,64	\$ 26.479.395,25
2011	11	\$ 135.569	2,02%	108	\$ 295.757,15	\$ 26.775.152,40
2011	12	\$ 135.569	2,02%	107	\$ 293.018,66	\$ 27.068.171,06
2011	M14	\$ 135.569	2,02%	107	\$ 293.018,66	\$ 27.361.189,71
2012	01	\$ 140.626	2,02%	106	\$ 301.107,61	\$ 27.662.297,33

2012	02	\$ 140.626	2,02%	105	\$ 298.266,98	\$ 27.960.564,30
2012	03	\$ 140.626	2,02%	104	\$ 295.426,34	\$ 0,00
2012	04	\$ 140.626	2,02%	103	\$ 292.585,70	\$ 28.548.576,34
2012	05	\$ 140.626	2,02%	102	\$ 289.745,06	\$ 28.838.321,40
2012	06	\$ 140.626	2,02%	101	\$ 286.904,42	\$ 29.125.225,83
2012	M13	\$ 140.626	2,02%	101	\$ 286.904,42	\$ 29.412.130,25
2012	07	\$ 140.626	2,02%	100	\$ 284.063,79	\$ 29.696.194,04
2012	08	\$ 140.626	2,02%	99	\$ 281.223,15	\$ 29.977.417,19
2012	09	\$ 140.626	2,02%	98	\$ 278.382,51	\$ 30.255.799,70
2012	10	\$ 140.626	2,02%	97	\$ 275.541,87	\$ 30.531.341,58
2012	11	\$ 140.626	2,02%	96	\$ 272.701,24	\$ 30.804.042,81
2012	12	\$ 140.626	2,02%	95	\$ 269.860,60	\$ 31.073.903,41
2012	M14	\$ 140.626	2,02%	95	\$ 269.860,60	\$ 31.343.764,01
2013	01	\$ 144.057	2,02%	94	\$ 273.535,25	\$ 31.617.299,25
2013	02	\$ 144.057	2,02%	93	\$ 270.625,30	\$ 31.887.924,55
2013	03	\$ 144.057	2,02%	92	\$ 267.715,35	\$ 32.155.639,90
2013	04	\$ 144.057	2,02%	91	\$ 264.805,40	\$ 32.420.445,30
2013	05	\$ 144.057	2,02%	90	\$ 261.895,45	\$ 32.682.340,75
2013	06	\$ 144.057	2,02%	89	\$ 258.985,50	\$ 32.941.326,24
2013	M13	\$ 144.057	2,02%	89	\$ 258.985,50	\$ 33.200.311,74
2013	07	\$ 144.057	2,02%	88	\$ 256.075,55	\$ 33.456.387,29
2013	08	\$ 144.057	2,02%	87	\$ 253.165,60	\$ 33.709.552,90
2013	09	\$ 144.057	2,02%	86	\$ 250.255,65	\$ 33.959.808,55
2013	10	\$ 144.057	2,02%	85	\$ 247.345,70	\$ 34.207.154,25
2013	11	\$ 144.057	2,02%	84	\$ 244.435,75	\$ 34.451.590,00
2013	12	\$ 144.057	2,02%	83	\$ 241.525,80	\$ 34.693.115,80
2013	M14	\$ 144.057	2,02%	83	\$ 241.525,80	\$ 34.934.641,61
2014	01	\$ 146.852	2,02%	82	\$ 243.245,00	\$ 35.177.886,61
2014	02	\$ 146.852	2,02%	81	\$ 240.278,60	\$ 35.418.165,21
2014	03	\$ 146.852	2,02%	80	\$ 237.312,20	\$ 35.655.477,40
2014	04	\$ 146.852	2,02%	79	\$ 234.345,79	\$ 35.889.823,20
2014	05	\$ 146.852	2,02%	78	\$ 231.379,39	\$ 36.121.202,59
2014	06	\$ 146.852	2,02%	77	\$ 228.412,99	\$ 36.349.615,58
2014	M13	\$ 146.852	2,02%	77	\$ 228.412,99	\$ 36.578.028,57
2014	07	\$ 146.852	2,02%	76	\$ 225.446,59	\$ 36.803.475,15
2014	08	\$ 146.852	2,02%	75	\$ 222.480,18	\$ 37.025.955,34
2014	09	\$ 146.852	2,02%	74	\$ 219.513,78	\$ 37.245.469,12
2014	10	\$ 146.852	2,02%	73	\$ 216.547,38	\$ 37.462.016,50
2014	11	\$ 146.852	2,02%	72	\$ 213.580,98	\$ 37.675.597,47
2014	12	\$ 146.852	2,02%	71	\$ 210.614,57	\$ 37.886.212,05
2014	M14	\$ 146.852	2,02%	71	\$ 210.614,57	\$ 38.096.826,62
2015	01	\$ 152.226	2,02%	70	\$ 215.248,09	\$ 38.312.074,72
2015	02	\$ 152.226	2,02%	69	\$ 212.173,12	\$ 38.524.247,84
2015	03	\$ 152.226	2,02%	68	\$ 209.098,15	\$ 38.733.345,99
2015	04	\$ 152.226	2,02%	67	\$ 206.023,18	\$ 38.939.369,16
2015	05	\$ 152.226	2,02%	66	\$ 202.948,20	\$ 39.142.317,37
2015	06	\$ 152.226	2,02%	65	\$ 199.873,23	\$ 39.342.190,60
2015	M13	\$ 152.226	2,02%	65	\$ 199.873,23	\$ 39.542.063,83
2015	07	\$ 152.226	2,02%	64	\$ 196.798,26	\$ 39.738.862,09
2015	08	\$ 152.226	2,02%	63	\$ 193.723,29	\$ 39.932.585,37
2015	09	\$ 152.226	2,02%	62	\$ 190.648,31	\$ 40.123.233,69
2015	10	\$ 152.226	2,02%	61	\$ 187.573,34	\$ 40.310.807,03
2015	11	\$ 152.226	2,02%	60	\$ 184.498,37	\$ 40.495.305,39
2015	12	\$ 152.226	2,02%	59	\$ 181.423,39	\$ 40.676.728,79
2015	M14	\$ 152.226	2,02%	59	\$ 181.423,39	\$ 40.858.152,18
2016	01	\$ 162.532	2,02%	58	\$ 190.422,61	\$ 41.048.574,79
2016	02	\$ 162.532	2,02%	57	\$ 187.139,46	\$ 41.235.714,25

2016	03	\$ 162.532	2,02%	56	\$ 183.856,31	\$ 41.419.570,56
2016	04	\$ 162.532	2,02%	55	\$ 180.573,16	\$ 41.600.143,73
2016	05	\$ 162.532	2,02%	54	\$ 177.290,02	\$ 41.777.433,74
2016	06	\$ 162.532	2,02%	53	\$ 174.006,87	\$ 41.951.440,61
2016	M13	\$ 162.532	2,02%	53	\$ 174.006,87	\$ 42.125.447,48
2016	07	\$ 162.532	2,02%	52	\$ 170.723,72	\$ 42.296.171,20
2016	08	\$ 162.532	2,02%	51	\$ 167.440,57	\$ 42.463.611,77
2016	09	\$ 162.532	2,02%	50	\$ 164.157,42	\$ 42.627.769,19
2016	10	\$ 162.532	2,02%	49	\$ 160.874,27	\$ 42.788.643,46
2016	11	\$ 162.532	2,02%	48	\$ 157.591,13	\$ 42.946.234,59
2016	12	\$ 162.532	2,02%	47	\$ 154.307,98	\$ 43.100.542,56
2016	M14	\$ 162.532	2,02%	47	\$ 154.307,98	\$ 43.254.850,54
2017	01	\$ 171.878	2,02%	46	\$ 159.708,76	\$ 43.414.559,30
2017	02	\$ 171.878	2,02%	45	\$ 156.236,83	\$ 43.570.796,12
2017	03	\$ 171.878	2,02%	44	\$ 152.764,90	\$ 43.723.561,02
2017	04	\$ 171.878	2,02%	43	\$ 149.292,97	\$ 43.872.853,99
2017	05	\$ 171.878	2,02%	42	\$ 145.821,04	\$ 44.018.675,03
2017	06	\$ 171.878	2,02%	41	\$ 142.349,11	\$ 44.161.024,13
2017	M13	\$ 171.878	2,02%	41	\$ 142.349,11	\$ 44.303.373,24
2017	07	\$ 171.878	2,02%	40	\$ 138.877,18	\$ 44.442.250,42
2017	08	\$ 171.878	2,02%	39	\$ 135.405,25	\$ 44.577.655,67
2017	09	\$ 171.878	2,02%	38	\$ 131.933,32	\$ 44.709.588,99
2017	10	\$ 171.878	2,02%	37	\$ 128.461,39	\$ 44.838.050,38
2017	11	\$ 171.878	2,02%	36	\$ 124.989,46	\$ 44.963.039,84
2017	12	\$ 171.878	2,02%	35	\$ 121.517,53	\$ 45.084.557,37
2017	M14	\$ 171.878	2,02%	35	\$ 121.517,53	\$ 45.206.074,91
2018	01	\$ 178.907	2,02%	34	\$ 122.873,67	\$ 45.328.948,57
2018	02	\$ 178.907	2,02%	33	\$ 119.259,74	\$ 45.448.208,31
2018	03	\$ 178.907	2,02%	32	\$ 115.645,80	\$ 45.563.854,11
2018	04	\$ 178.907	2,02%	31	\$ 112.031,87	\$ 45.675.885,99
2018	05	\$ 178.907	2,02%	30	\$ 108.417,94	\$ 45.784.303,93
2018	06	\$ 178.907	2,02%	29	\$ 104.804,01	\$ 45.889.107,94
2018	M13	\$ 178.907	2,02%	29	\$ 104.804,01	\$ 45.993.911,95
2018	07	\$ 178.907	2,02%	28	\$ 101.190,08	\$ 46.095.102,03
2018	08	\$ 178.907	2,02%	27	\$ 97.576,15	\$ 46.192.678,18
2018	09	\$ 178.907	2,02%	26	\$ 93.962,22	\$ 46.286.640,39
2018	10	\$ 178.907	2,02%	25	\$ 90.348,28	\$ 46.376.988,68
2018	11	\$ 178.907	2,02%	24	\$ 86.734,35	\$ 46.463.723,03
2018	12	\$ 178.907	2,02%	23	\$ 83.120,42	\$ 46.546.843,45
2018	M14	\$ 178.907	2,02%	23	\$ 83.120,42	\$ 46.629.963,87
2019	01	\$ 184.597	2,02%	22	\$ 82.034,80	\$ 46.711.998,67
2019	02	\$ 184.597	2,02%	21	\$ 78.305,94	\$ 46.790.304,61
2019	03	\$ 184.597	2,02%	20	\$ 74.577,09	\$ 46.864.881,70
2019	04	\$ 184.597	2,02%	19	\$ 70.848,23	\$ 46.935.729,94
2019	05	\$ 184.597	2,02%	18	\$ 67.119,38	\$ 47.002.849,32
2019	06	\$ 184.597	2,02%	17	\$ 63.390,52	\$ 47.066.239,84
2019	M13	\$ 184.597	2,02%	17	\$ 63.390,52	\$ 47.129.630,37
2019	07	\$ 184.597	2,02%	16	\$ 59.661,67	\$ 47.189.292,04
2019	08	\$ 184.597	2,02%	15	\$ 55.932,82	\$ 47.245.224,85
2019	09	\$ 184.597	2,02%	14	\$ 52.203,96	\$ 47.297.428,81
2019	10	\$ 184.597	2,02%	13	\$ 48.475,11	\$ 47.345.903,92
2019	11	\$ 184.597	2,02%	12	\$ 44.746,25	\$ 47.390.650,17
2019	12	\$ 184.597	2,02%	11	\$ 41.017,40	\$ 47.431.667,57
2019	M14	\$ 184.597	2,02%	11	\$ 41.017,40	\$ 47.472.684,97
2020	01	\$ 191.611	2,02%	10	\$ 38.705,51	\$ 47.511.390,48
2020	02	\$ 191.611	2,02%	9	\$ 34.834,96	\$ 47.546.225,44
2020	03	\$ 191.611	2,02%	8	\$ 30.964,41	\$ 47.577.189,84

2020	04	\$ 191.611	2,02%	7	\$ 27.093,86	\$ 47.604.283,70
2020	05	\$ 191.611	2,02%	6	\$ 23.223,31	\$ 47.627.507,01
2020	06	\$ 191.611	2,02%	5	\$ 19.352,75	\$ 47.646.859,76
2020	M13	\$ 191.611	2,02%	5	\$ 19.352,75	\$ 47.666.212,51
2020	07	\$ 191.611	2,02%	4	\$ 15.482,20	\$ 47.681.694,72
2020	08	\$ 191.611	2,02%	3	\$ 11.611,65	\$ 47.693.306,37
2020	09	\$ 191.611	2,02%	2	\$ 7.741,10	\$ 47.701.047,47
2020	10	\$ 191.611	2,02%	1	\$ 3.870,55	\$ 47.704.918,02

49. MARÍA DEL ROSARIO CALDERÓN sustituta de MARCOS PUENTES GONZÁLEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1991	\$ 52.629,26	26,82%	14	\$ 736.809,64
1992	\$ 66.744,43	25,13%	14	\$ 934.421,99
1993	\$ 83.517,30	22,60%	14	\$ 1.169.242,23
1994	\$ 102.392,21	22,59%	14	\$ 1.433.490,97
1995	\$ 125.522,61	19,46%	14	\$ 1.757.316,59
1996	\$ 149.949,31	21,63%	14	\$ 2.099.290,39
1997	\$ 182.383,35	17,68%	14	\$ 2.553.366,91
1998	\$ 214.628,73	16,70%	14	\$ 3.004.802,17
1999	\$ 250.471,72	9,23%	14	\$ 3.506.604,14
2000	\$ 273.590,26	8,75%	14	\$ 3.830.263,70
2001	\$ 297.529,41	7,65%	14	\$ 4.165.411,77
2002	\$ 320.290,41	6,99%	14	\$ 4.484.065,77
2003	\$ 342.678,71	6,49%	14	\$ 4.797.501,97
2004	\$ 364.918,56	5,50%	14	\$ 5.108.859,85
2005	\$ 384.989,08	4,85%	14	\$ 5.389.847,14
2006	\$ 403.661,05	4,48%	14	\$ 5.651.254,73
2007	\$ 421.745,07	5,69%	14	\$ 5.904.430,94
2008	\$ 445.742,36	7,67%	14	\$ 6.240.393,06
2009	\$ 479.930,80	2,00%	14	\$ 6.719.031,21
2010	\$ 489.529,42	3,17%	14	\$ 6.853.411,83
2011	\$ 505.047,50	3,73%	14	\$ 7.070.664,99
2012	\$ 523.885,77	2,44%	14	\$ 7.334.400,79
2013	\$ 536.668,58	1,94%	14	\$ 7.513.360,17
2014	\$ 547.079,95	3,66%	14	\$ 7.659.119,36
2015	\$ 567.103,08	6,77%	14	\$ 7.939.443,12
2016	\$ 605.495,96	5,75%	14	\$ 8.476.943,42
2017	\$ 640.311,98	4,09%	14	\$ 8.964.367,67
2018	\$ 666.500,74	3,18%	14	\$ 9.331.010,31
2019	\$ 687.695,46	3,80%	14	\$ 9.627.736,44
2020	\$ 713.827,89	1,61%	11	\$ 7.852.106,76
				\$ 118.527.521,92

50. EDGAR ALFONSO SANTOS HIDALGO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1999	\$ 276.042,04	9,23%	1,3	\$ 358.854,65
2000	\$ 301.520,72	8,75%	14	\$ 4.221.290,08
2001	\$ 327.903,78	7,65%	14	\$ 4.590.652,97
2002	\$ 352.988,42	6,99%	14	\$ 4.941.837,92
2003	\$ 377.662,31	6,49%	14	\$ 5.287.272,39
2004	\$ 402.172,60	5,50%	14	\$ 5.630.416,37
2005	\$ 424.292,09	4,85%	14	\$ 5.940.089,27
2006	\$ 444.870,26	4,48%	14	\$ 6.228.183,60
2007	\$ 464.800,44	5,69%	14	\$ 6.507.206,22
2008	\$ 491.247,59	7,67%	14	\$ 6.877.466,26

2009	\$ 528.926,28	2,00%	14	\$ 7.404.967,92
2010	\$ 539.504,81	3,17%	14	\$ 7.553.067,28
2011	\$ 556.607,11	3,73%	14	\$ 7.792.499,51
2012	\$ 577.368,55	2,44%	14	\$ 8.083.159,74
2013	\$ 591.456,35	1,94%	14	\$ 8.280.388,84
2014	\$ 602.930,60	3,66%	14	\$ 8.441.028,38
2015	\$ 624.997,86	6,77%	14	\$ 8.749.970,02
2016	\$ 667.310,21	5,75%	14	\$ 9.342.342,99
2017	\$ 705.680,55	4,09%	14	\$ 9.879.527,71
2018	\$ 734.542,89	3,18%	14	\$ 10.283.600,40
2019	\$ 757.901,35	3,80%	14	\$ 10.610.618,89
2020	\$ 786.701,60	1,61%	11	\$ 8.653.717,60
				\$ 130.627.834,61

51. SUSANA YANET PAEZ PACHECO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 92.887,35	4,48%	2,03	\$ 188.561,32
2007	\$ 97.048,70	5,69%	14	\$ 1.358.681,85
2008	\$ 102.570,77	7,67%	14	\$ 1.435.990,84
2009	\$ 110.437,95	2,00%	14	\$ 1.546.131,34
2010	\$ 112.646,71	3,17%	14	\$ 1.577.053,97
2011	\$ 116.217,61	3,73%	14	\$ 1.627.046,58
2012	\$ 120.552,53	2,44%	14	\$ 1.687.735,42
2013	\$ 123.494,01	1,94%	14	\$ 1.728.916,16
2014	\$ 125.889,80	3,66%	14	\$ 1.762.457,13
2015	\$ 130.497,36	6,77%	14	\$ 1.826.963,06
2016	\$ 139.332,03	5,75%	14	\$ 1.950.648,46
2017	\$ 147.343,63	4,09%	14	\$ 2.062.810,75
2018	\$ 153.369,98	3,18%	14	\$ 2.147.179,71
2019	\$ 158.247,14	3,80%	14	\$ 2.215.460,02
2020	\$ 164.260,54	1,61%	11	\$ 1.806.865,90
				\$ 24.922.502,51

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	12	\$ 92.887	2,02%	167	\$ 313.346,19	\$ 313.346,19
2006	M14	\$ 92.887	2,02%	167	\$ 313.346,19	\$ 626.692,37
2007	01	\$ 97.049	2,02%	166	\$ 325.423,71	\$ 952.116,08
2007	02	\$ 97.049	2,02%	165	\$ 323.463,33	\$ 1.275.579,41
2007	03	\$ 97.049	2,02%	164	\$ 321.502,94	\$ 1.597.082,36
2007	04	\$ 97.049	2,02%	163	\$ 319.542,56	\$ 1.916.624,92
2007	05	\$ 97.049	2,02%	162	\$ 317.582,18	\$ 2.234.207,09
2007	06	\$ 97.049	2,02%	161	\$ 315.621,79	\$ 2.549.828,89
2007	M13	\$ 97.049	2,02%	161	\$ 315.621,79	\$ 2.865.450,68
2007	07	\$ 97.049	2,02%	160	\$ 313.661,41	\$ 3.179.112,09
2007	08	\$ 97.049	2,02%	159	\$ 311.701,03	\$ 3.490.813,11
2007	09	\$ 97.049	2,02%	158	\$ 309.740,64	\$ 3.800.553,76
2007	10	\$ 97.049	2,02%	157	\$ 307.780,26	\$ 4.108.334,01
2007	11	\$ 97.049	2,02%	156	\$ 305.819,87	\$ 4.414.153,89
2007	12	\$ 97.049	2,02%	155	\$ 303.859,49	\$ 4.718.013,38
2007	M14	\$ 97.049	2,02%	155	\$ 303.859,49	\$ 5.021.872,87
2008	01	\$ 102.571	2,02%	154	\$ 319.077,17	\$ 5.340.950,03
2008	02	\$ 102.571	2,02%	153	\$ 317.005,24	\$ 5.657.955,27
2008	03	\$ 102.571	2,02%	152	\$ 314.933,31	\$ 5.972.888,57
2008	04	\$ 102.571	2,02%	151	\$ 312.861,38	\$ 6.285.749,95

2008	05	\$ 102.571	2,02%	150	\$ 310.789,45	\$ 6.596.539,40
2008	06	\$ 102.571	2,02%	149	\$ 308.717,52	\$ 6.905.256,91
2008	M13	\$ 102.571	2,02%	149	\$ 308.717,52	\$ 7.213.974,43
2008	07	\$ 102.571	2,02%	148	\$ 306.645,59	\$ 7.520.620,02
2008	08	\$ 102.571	2,02%	147	\$ 304.573,66	\$ 7.825.193,68
2008	09	\$ 102.571	2,02%	146	\$ 302.501,73	\$ 8.127.695,40
2008	10	\$ 102.571	2,02%	145	\$ 300.429,80	\$ 8.428.125,20
2008	11	\$ 102.571	2,02%	144	\$ 298.357,87	\$ 8.726.483,07
2008	12	\$ 102.571	2,02%	143	\$ 296.285,94	\$ 9.022.769,01
2008	M14	\$ 102.571	2,02%	143	\$ 296.285,94	\$ 9.319.054,95
2009	01	\$ 110.438	2,02%	142	\$ 316.780,22	\$ 9.635.835,17
2009	02	\$ 110.438	2,02%	141	\$ 314.549,38	\$ 9.950.384,55
2009	03	\$ 110.438	2,02%	140	\$ 312.318,53	\$ 10.262.703,08
2009	04	\$ 110.438	2,02%	139	\$ 310.087,68	\$ 10.572.790,77
2009	05	\$ 110.438	2,02%	138	\$ 307.856,84	\$ 10.880.647,60
2009	06	\$ 110.438	2,02%	137	\$ 305.625,99	\$ 11.186.273,59
2009	M13	\$ 110.438	2,02%	137	\$ 305.625,99	\$ 11.491.899,59
2009	07	\$ 110.438	2,02%	136	\$ 303.395,14	\$ 11.795.294,73
2009	08	\$ 110.438	2,02%	135	\$ 301.164,30	\$ 12.096.459,03
2009	09	\$ 110.438	2,02%	134	\$ 298.933,45	\$ 12.395.392,48
2009	10	\$ 110.438	2,02%	133	\$ 296.702,60	\$ 12.692.095,08
2009	11	\$ 110.438	2,02%	132	\$ 294.471,76	\$ 12.986.566,84
2009	12	\$ 110.438	2,02%	131	\$ 292.240,91	\$ 13.278.807,75
2009	M14	\$ 110.438	2,02%	131	\$ 292.240,91	\$ 13.571.048,66
2010	01	\$ 112.647	2,02%	130	\$ 295.810,27	\$ 13.866.858,93
2010	02	\$ 112.647	2,02%	129	\$ 293.534,80	\$ 14.160.393,73
2010	03	\$ 112.647	2,02%	128	\$ 291.259,34	\$ 14.451.653,07
2010	04	\$ 112.647	2,02%	127	\$ 288.983,87	\$ 14.740.636,94
2010	05	\$ 112.647	2,02%	126	\$ 286.708,41	\$ 15.027.345,35
2010	06	\$ 112.647	2,02%	125	\$ 284.432,95	\$ 15.311.778,30
2010	M13	\$ 112.647	2,02%	125	\$ 284.432,95	\$ 15.596.211,25
2010	07	\$ 112.647	2,02%	124	\$ 282.157,48	\$ 15.878.368,73
2010	08	\$ 112.647	2,02%	123	\$ 279.882,02	\$ 16.158.250,75
2010	09	\$ 112.647	2,02%	122	\$ 277.606,56	\$ 16.435.857,31
2010	10	\$ 112.647	2,02%	121	\$ 275.331,09	\$ 16.711.188,40
2010	11	\$ 112.647	2,02%	120	\$ 273.055,63	\$ 16.984.244,03
2010	12	\$ 112.647	2,02%	119	\$ 270.780,17	\$ 17.255.024,20
2010	M14	\$ 112.647	2,02%	119	\$ 270.780,17	\$ 17.525.804,37
2011	01	\$ 116.218	2,02%	118	\$ 277.016,30	\$ 17.802.820,67
2011	02	\$ 116.218	2,02%	117	\$ 274.668,71	\$ 18.077.489,37
2011	03	\$ 116.218	2,02%	116	\$ 272.321,11	\$ 18.349.810,48
2011	04	\$ 116.218	2,02%	115	\$ 269.973,51	\$ 18.619.784,00
2011	05	\$ 116.218	2,02%	114	\$ 267.625,92	\$ 18.887.409,92
2011	06	\$ 116.218	2,02%	113	\$ 265.278,32	\$ 19.152.688,24
2011	M13	\$ 116.218	2,02%	113	\$ 265.278,32	\$ 19.417.966,56
2011	07	\$ 116.218	2,02%	112	\$ 262.930,73	\$ 19.680.897,29
2011	08	\$ 116.218	2,02%	111	\$ 260.583,13	\$ 19.941.480,42
2011	09	\$ 116.218	2,02%	110	\$ 258.235,54	\$ 20.199.715,96
2011	10	\$ 116.218	2,02%	109	\$ 255.887,94	\$ 20.455.603,90
2011	11	\$ 116.218	2,02%	108	\$ 253.540,34	\$ 20.709.144,24
2011	12	\$ 116.218	2,02%	107	\$ 251.192,75	\$ 20.960.336,99
2011	M14	\$ 116.218	2,02%	107	\$ 251.192,75	\$ 21.211.529,74
2012	01	\$ 120.553	2,02%	106	\$ 258.127,08	\$ 21.469.656,81
2012	02	\$ 120.553	2,02%	105	\$ 255.691,92	\$ 21.725.348,73
2012	03	\$ 120.553	2,02%	104	\$ 253.256,75	\$ 0,00
2012	04	\$ 120.553	2,02%	103	\$ 250.821,59	\$ 22.229.427,08
2012	05	\$ 120.553	2,02%	102	\$ 248.386,43	\$ 22.477.813,51

2012	06	\$ 120.553	2,02%	101	\$ 245.951,27	\$ 22.723.764,78
2012	M13	\$ 120.553	2,02%	101	\$ 245.951,27	\$ 22.969.716,05
2012	07	\$ 120.553	2,02%	100	\$ 243.516,11	\$ 23.213.232,16
2012	08	\$ 120.553	2,02%	99	\$ 241.080,95	\$ 23.454.313,11
2012	09	\$ 120.553	2,02%	98	\$ 238.645,79	\$ 23.692.958,90
2012	10	\$ 120.553	2,02%	97	\$ 236.210,63	\$ 23.929.169,52
2012	11	\$ 120.553	2,02%	96	\$ 233.775,47	\$ 24.162.944,99
2012	12	\$ 120.553	2,02%	95	\$ 231.340,30	\$ 24.394.285,29
2012	M14	\$ 120.553	2,02%	95	\$ 231.340,30	\$ 24.625.625,60
2013	01	\$ 123.494	2,02%	94	\$ 234.490,43	\$ 24.860.116,03
2013	02	\$ 123.494	2,02%	93	\$ 231.995,85	\$ 25.092.111,88
2013	03	\$ 123.494	2,02%	92	\$ 229.501,27	\$ 25.321.613,15
2013	04	\$ 123.494	2,02%	91	\$ 227.006,69	\$ 25.548.619,84
2013	05	\$ 123.494	2,02%	90	\$ 224.512,11	\$ 25.773.131,95
2013	06	\$ 123.494	2,02%	89	\$ 222.017,53	\$ 25.995.149,49
2013	M13	\$ 123.494	2,02%	89	\$ 222.017,53	\$ 26.217.167,02
2013	07	\$ 123.494	2,02%	88	\$ 219.522,95	\$ 26.436.689,97
2013	08	\$ 123.494	2,02%	87	\$ 217.028,38	\$ 26.653.718,35
2013	09	\$ 123.494	2,02%	86	\$ 214.533,80	\$ 26.868.252,15
2013	10	\$ 123.494	2,02%	85	\$ 212.039,22	\$ 27.080.291,36
2013	11	\$ 123.494	2,02%	84	\$ 209.544,64	\$ 27.289.836,00
2013	12	\$ 123.494	2,02%	83	\$ 207.050,06	\$ 27.496.886,06
2013	M14	\$ 123.494	2,02%	83	\$ 207.050,06	\$ 27.703.936,12
2014	01	\$ 125.890	2,02%	82	\$ 208.523,86	\$ 27.912.459,98
2014	02	\$ 125.890	2,02%	81	\$ 205.980,88	\$ 28.118.440,86
2014	03	\$ 125.890	2,02%	80	\$ 203.437,91	\$ 28.321.878,77
2014	04	\$ 125.890	2,02%	79	\$ 200.894,94	\$ 28.522.773,71
2014	05	\$ 125.890	2,02%	78	\$ 198.351,96	\$ 28.721.125,67
2014	06	\$ 125.890	2,02%	77	\$ 195.808,99	\$ 28.916.934,66
2014	M13	\$ 125.890	2,02%	77	\$ 195.808,99	\$ 29.112.743,64
2014	07	\$ 125.890	2,02%	76	\$ 193.266,01	\$ 29.306.009,66
2014	08	\$ 125.890	2,02%	75	\$ 190.723,04	\$ 29.496.732,70
2014	09	\$ 125.890	2,02%	74	\$ 188.180,07	\$ 29.684.912,76
2014	10	\$ 125.890	2,02%	73	\$ 185.637,09	\$ 29.870.549,85
2014	11	\$ 125.890	2,02%	72	\$ 183.094,12	\$ 30.053.643,97
2014	12	\$ 125.890	2,02%	71	\$ 180.551,14	\$ 30.234.195,12
2014	M14	\$ 125.890	2,02%	71	\$ 180.551,14	\$ 30.414.746,26
2015	01	\$ 130.497	2,02%	70	\$ 184.523,27	\$ 30.599.269,53
2015	02	\$ 130.497	2,02%	69	\$ 181.887,22	\$ 30.781.156,75
2015	03	\$ 130.497	2,02%	68	\$ 179.251,18	\$ 30.960.407,93
2015	04	\$ 130.497	2,02%	67	\$ 176.615,13	\$ 31.137.023,06
2015	05	\$ 130.497	2,02%	66	\$ 173.979,08	\$ 31.311.002,14
2015	06	\$ 130.497	2,02%	65	\$ 171.343,04	\$ 31.482.345,18
2015	M13	\$ 130.497	2,02%	65	\$ 171.343,04	\$ 31.653.688,21
2015	07	\$ 130.497	2,02%	64	\$ 168.706,99	\$ 31.822.395,20
2015	08	\$ 130.497	2,02%	63	\$ 166.070,94	\$ 31.988.466,14
2015	09	\$ 130.497	2,02%	62	\$ 163.434,90	\$ 32.151.901,04
2015	10	\$ 130.497	2,02%	61	\$ 160.798,85	\$ 32.312.699,89
2015	11	\$ 130.497	2,02%	60	\$ 158.162,80	\$ 32.470.862,69
2015	12	\$ 130.497	2,02%	59	\$ 155.526,76	\$ 32.626.389,45
2015	M14	\$ 130.497	2,02%	59	\$ 155.526,76	\$ 32.781.916,20
2016	01	\$ 139.332	2,02%	58	\$ 163.241,41	\$ 32.945.157,61
2016	02	\$ 139.332	2,02%	57	\$ 160.426,90	\$ 33.105.584,52
2016	03	\$ 139.332	2,02%	56	\$ 157.612,40	\$ 33.263.196,91
2016	04	\$ 139.332	2,02%	55	\$ 154.797,89	\$ 33.417.994,80
2016	05	\$ 139.332	2,02%	54	\$ 151.983,38	\$ 33.569.978,18
2016	06	\$ 139.332	2,02%	53	\$ 149.168,87	\$ 33.719.147,06

2016	M13	\$ 139.332	2,02%	53	\$ 149.168,87	\$ 33.868.315,93
2016	07	\$ 139.332	2,02%	52	\$ 146.354,37	\$ 34.014.670,30
2016	08	\$ 139.332	2,02%	51	\$ 143.539,86	\$ 34.158.210,16
2016	09	\$ 139.332	2,02%	50	\$ 140.725,35	\$ 34.298.935,51
2016	10	\$ 139.332	2,02%	49	\$ 137.910,85	\$ 34.436.846,36
2016	11	\$ 139.332	2,02%	48	\$ 135.096,34	\$ 34.571.942,70
2016	12	\$ 139.332	2,02%	47	\$ 132.281,83	\$ 34.704.224,53
2016	M14	\$ 139.332	2,02%	47	\$ 132.281,83	\$ 34.836.506,36
2017	01	\$ 147.344	2,02%	46	\$ 136.911,70	\$ 34.973.418,06
2017	02	\$ 147.344	2,02%	45	\$ 133.935,36	\$ 35.107.353,42
2017	03	\$ 147.344	2,02%	44	\$ 130.959,01	\$ 35.238.312,43
2017	04	\$ 147.344	2,02%	43	\$ 127.982,67	\$ 35.366.295,10
2017	05	\$ 147.344	2,02%	42	\$ 125.006,33	\$ 35.491.301,43
2017	06	\$ 147.344	2,02%	41	\$ 122.029,99	\$ 35.613.331,42
2017	M13	\$ 147.344	2,02%	41	\$ 122.029,99	\$ 35.735.361,41
2017	07	\$ 147.344	2,02%	40	\$ 119.053,65	\$ 35.854.415,06
2017	08	\$ 147.344	2,02%	39	\$ 116.077,31	\$ 35.970.492,37
2017	09	\$ 147.344	2,02%	38	\$ 113.100,97	\$ 36.083.593,34
2017	10	\$ 147.344	2,02%	37	\$ 110.124,63	\$ 36.193.717,96
2017	11	\$ 147.344	2,02%	36	\$ 107.148,28	\$ 36.300.866,25
2017	12	\$ 147.344	2,02%	35	\$ 104.171,94	\$ 36.405.038,19
2017	M14	\$ 147.344	2,02%	35	\$ 104.171,94	\$ 36.509.210,13
2018	01	\$ 153.370	2,02%	34	\$ 105.334,50	\$ 36.614.544,63
2018	02	\$ 153.370	2,02%	33	\$ 102.236,43	\$ 36.716.781,06
2018	03	\$ 153.370	2,02%	32	\$ 99.138,35	\$ 36.815.919,42
2018	04	\$ 153.370	2,02%	31	\$ 96.040,28	\$ 36.911.959,70
2018	05	\$ 153.370	2,02%	30	\$ 92.942,21	\$ 37.004.901,91
2018	06	\$ 153.370	2,02%	29	\$ 89.844,13	\$ 37.094.746,04
2018	M13	\$ 153.370	2,02%	29	\$ 89.844,13	\$ 37.184.590,17
2018	07	\$ 153.370	2,02%	28	\$ 86.746,06	\$ 37.271.336,23
2018	08	\$ 153.370	2,02%	27	\$ 83.647,99	\$ 37.354.984,22
2018	09	\$ 153.370	2,02%	26	\$ 80.549,91	\$ 37.435.534,13
2018	10	\$ 153.370	2,02%	25	\$ 77.451,84	\$ 37.512.985,97
2018	11	\$ 153.370	2,02%	24	\$ 74.353,77	\$ 37.587.339,74
2018	12	\$ 153.370	2,02%	23	\$ 71.255,69	\$ 37.658.595,43
2018	M14	\$ 153.370	2,02%	23	\$ 71.255,69	\$ 37.729.851,12
2019	01	\$ 158.247	2,02%	22	\$ 70.325,03	\$ 37.800.176,16
2019	02	\$ 158.247	2,02%	21	\$ 67.128,44	\$ 37.867.304,59
2019	03	\$ 158.247	2,02%	20	\$ 63.931,85	\$ 37.931.236,44
2019	04	\$ 158.247	2,02%	19	\$ 60.735,25	\$ 37.991.971,69
2019	05	\$ 158.247	2,02%	18	\$ 57.538,66	\$ 38.049.510,36
2019	06	\$ 158.247	2,02%	17	\$ 54.342,07	\$ 38.103.852,43
2019	M13	\$ 158.247	2,02%	17	\$ 54.342,07	\$ 38.158.194,50
2019	07	\$ 158.247	2,02%	16	\$ 51.145,48	\$ 38.209.339,97
2019	08	\$ 158.247	2,02%	15	\$ 47.948,88	\$ 38.257.288,86
2019	09	\$ 158.247	2,02%	14	\$ 44.752,29	\$ 38.302.041,15
2019	10	\$ 158.247	2,02%	13	\$ 41.555,70	\$ 38.343.596,85
2019	11	\$ 158.247	2,02%	12	\$ 38.359,11	\$ 38.381.955,96
2019	12	\$ 158.247	2,02%	11	\$ 35.162,52	\$ 38.417.118,47
2019	M14	\$ 158.247	2,02%	11	\$ 35.162,52	\$ 38.452.280,99
2020	01	\$ 164.261	2,02%	10	\$ 33.180,63	\$ 38.485.461,62
2020	02	\$ 164.261	2,02%	9	\$ 29.862,57	\$ 38.515.324,18
2020	03	\$ 164.261	2,02%	8	\$ 26.544,50	\$ 38.541.868,69
2020	04	\$ 164.261	2,02%	7	\$ 23.226,44	\$ 38.565.095,12
2020	05	\$ 164.261	2,02%	6	\$ 19.908,38	\$ 38.585.003,50
2020	06	\$ 164.261	2,02%	5	\$ 16.590,31	\$ 38.601.593,82
2020	M13	\$ 164.261	2,02%	5	\$ 16.590,31	\$ 38.618.184,13

2020	07	\$ 164.261	2,02%	4	\$ 13.272,25	\$ 38.631.456,38
2020	08	\$ 164.261	2,02%	3	\$ 9.954,19	\$ 38.641.410,57
2020	09	\$ 164.261	2,02%	2	\$ 6.636,13	\$ 38.648.046,70
2020	10	\$ 164.261	2,02%	1	\$ 3.318,06	\$ 38.651.364,76

52. LUZ MARINA CÁRDENAS DIAZ sustituta de ARMANDO RANGEL

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1993	\$ 118.150,70	22,60%	5	\$ 590.753,50
1994	\$ 144.852,76	22,59%	14	\$ 2.027.938,61
1995	\$ 177.575,00	19,46%	14	\$ 2.486.049,95
1996	\$ 212.131,09	21,63%	14	\$ 2.969.835,27
1997	\$ 258.015,05	17,68%	14	\$ 3.612.210,64
1998	\$ 303.632,11	16,70%	14	\$ 4.250.849,48
1999	\$ 354.338,67	9,23%	14	\$ 4.960.741,34
2000	\$ 387.044,13	8,75%	14	\$ 5.418.617,76
2001	\$ 420.910,49	7,65%	14	\$ 5.892.746,82
2002	\$ 453.110,14	6,99%	14	\$ 6.343.541,95
2003	\$ 484.782,54	6,49%	14	\$ 6.786.955,53
2004	\$ 516.244,92	5,50%	14	\$ 7.227.428,95
2005	\$ 544.638,40	4,85%	14	\$ 7.624.937,54
2006	\$ 571.053,36	4,48%	14	\$ 7.994.747,01
2007	\$ 596.636,55	5,69%	14	\$ 8.352.911,68
2008	\$ 630.585,17	7,67%	14	\$ 8.828.192,35
2009	\$ 678.951,05	2,00%	14	\$ 9.505.314,70
2010	\$ 692.530,07	3,17%	14	\$ 9.695.421,00
2011	\$ 714.483,27	3,73%	14	\$ 10.002.765,84
2012	\$ 741.133,50	2,44%	14	\$ 10.375.869,01
2013	\$ 759.217,16	1,94%	14	\$ 10.629.040,21
2014	\$ 773.945,97	3,66%	14	\$ 10.835.243,59
2015	\$ 802.272,39	6,77%	14	\$ 11.231.813,51
2016	\$ 856.586,23	5,75%	14	\$ 11.992.207,28
2017	\$ 905.839,94	4,09%	14	\$ 12.681.759,20
2018	\$ 942.888,80	3,18%	14	\$ 13.200.443,15
2019	\$ 972.872,66	3,80%	14	\$ 13.620.217,25
2020	\$1.009.841,82	1,61%	11	\$ 11.108.260,04
				\$ 167.679.143,37

53. LUIS FRANCISCO RAMIREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1997	\$ 181.097,65	17,68%	1,03	\$ 186.530,58
1998	\$ 213.115,71	16,70%	14	\$ 2.983.620,00
1999	\$ 248.706,04	9,23%	14	\$ 3.481.884,54
2000	\$ 271.661,61	8,75%	14	\$ 3.803.262,49
2001	\$ 295.432,00	7,65%	14	\$ 4.136.047,95
2002	\$ 318.032,54	6,99%	14	\$ 4.452.455,62
2003	\$ 340.263,02	6,49%	14	\$ 4.763.682,27
2004	\$ 362.346,09	5,50%	14	\$ 5.072.845,25
2005	\$ 382.275,12	4,85%	14	\$ 5.351.851,74
2006	\$ 400.815,47	4,48%	14	\$ 5.611.416,55
2007	\$ 418.772,00	5,69%	14	\$ 5.862.808,01
2008	\$ 442.600,13	7,67%	14	\$ 6.196.401,79
2009	\$ 476.547,56	2,00%	14	\$ 6.671.665,80
2010	\$ 486.078,51	3,17%	14	\$ 6.805.099,12
2011	\$ 501.487,20	3,73%	14	\$ 7.020.820,76
2012	\$ 520.192,67	2,44%	14	\$ 7.282.697,38
2013	\$ 532.885,37	1,94%	14	\$ 7.460.395,19

2014	\$ 543.223,35	3,66%	14	\$ 7.605.126,86
2015	\$ 563.105,32	6,77%	14	\$ 7.883.474,50
2016	\$ 601.227,55	5,75%	14	\$ 8.417.185,73
2017	\$ 635.798,14	4,09%	14	\$ 8.901.173,90
2018	\$ 661.802,28	3,18%	14	\$ 9.265.231,92
2019	\$ 682.847,59	3,80%	14	\$ 9.559.866,29
2020	\$ 708.795,80	1,61%	11	\$ 7.796.753,81
				\$ 117.691.969,35

54. MARINA ELISA CARVAJAL GARCÍA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2003	\$ 102.106,15	6,49%	4	\$ 408.424,60
2004	\$ 108.732,84	5,50%	14	\$ 1.522.259,75
2005	\$ 114.713,15	4,85%	14	\$ 1.605.984,03
2006	\$ 120.276,73	4,48%	14	\$ 1.683.874,26
2007	\$ 125.665,13	5,69%	14	\$ 1.759.311,83
2008	\$ 132.815,48	7,67%	14	\$ 1.859.416,67
2009	\$ 143.002,42	2,00%	14	\$ 2.002.033,93
2010	\$ 145.862,47	3,17%	14	\$ 2.042.074,61
2011	\$ 150.486,31	3,73%	14	\$ 2.106.808,37
2012	\$ 156.099,45	2,44%	14	\$ 2.185.392,32
2013	\$ 159.908,28	1,94%	14	\$ 2.238.715,90
2014	\$ 163.010,50	3,66%	14	\$ 2.282.146,98
2015	\$ 168.976,68	6,77%	14	\$ 2.365.673,56
2016	\$ 180.416,40	5,75%	14	\$ 2.525.829,66
2017	\$ 190.790,35	4,09%	14	\$ 2.671.064,87
2018	\$ 198.593,67	3,18%	14	\$ 2.780.311,42
2019	\$ 204.908,95	3,80%	14	\$ 2.868.725,33
2020	\$ 212.695,49	1,61%	11	\$ 2.339.650,41
				\$ 35.317.014,17

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2003	10	\$ 102.106	2,02%	205	\$ 422.821,57	\$ 422.821,57
2003	11	\$ 102.106	2,02%	204	\$ 420.759,02	\$ 843.580,59
2003	12	\$ 102.106	2,02%	203	\$ 418.696,48	\$ 1.262.277,07
2003	M14	\$ 102.106	2,02%	203	\$ 418.696,48	\$ 1.680.973,55
2004	01	\$ 108.733	2,02%	202	\$ 443.673,48	\$ 2.124.647,02
2004	02	\$ 108.733	2,02%	201	\$ 441.477,07	\$ 2.566.124,10
2004	03	\$ 108.733	2,02%	200	\$ 439.280,67	\$ 3.005.404,77
2004	04	\$ 108.733	2,02%	199	\$ 437.084,27	\$ 3.442.489,03
2004	05	\$ 108.733	2,02%	198	\$ 434.887,86	\$ 3.877.376,90
2004	06	\$ 108.733	2,02%	197	\$ 432.691,46	\$ 4.310.068,36
2004	M13	\$ 108.733	2,02%	197	\$ 432.691,46	\$ 4.742.759,82
2004	07	\$ 108.733	2,02%	196	\$ 430.495,06	\$ 5.173.254,87
2004	08	\$ 108.733	2,02%	195	\$ 428.298,65	\$ 5.601.553,53
2004	09	\$ 108.733	2,02%	194	\$ 426.102,25	\$ 6.027.655,78
2004	10	\$ 108.733	2,02%	193	\$ 423.905,85	\$ 6.451.561,62
2004	11	\$ 108.733	2,02%	192	\$ 421.709,44	\$ 6.873.271,07
2004	12	\$ 108.733	2,02%	191	\$ 419.513,04	\$ 7.292.784,11
2004	M14	\$ 108.733	2,02%	191	\$ 419.513,04	\$ 7.712.297,15
2005	01	\$ 114.713	2,02%	190	\$ 440.269,05	\$ 8.152.566,20
2005	02	\$ 114.713	2,02%	189	\$ 437.951,85	\$ 8.590.518,05
2005	03	\$ 114.713	2,02%	188	\$ 435.634,64	\$ 9.026.152,69
2005	04	\$ 114.713	2,02%	187	\$ 433.317,44	\$ 9.459.470,12

2005	05	\$ 114.713	2,02%	186	\$ 431.000,23	\$ 9.890.470,35
2005	06	\$ 114.713	2,02%	185	\$ 428.683,02	\$ 10.319.153,37
2005	M13	\$ 114.713	2,02%	185	\$ 428.683,02	\$ 10.747.836,40
2005	07	\$ 114.713	2,02%	184	\$ 426.365,82	\$ 11.174.202,22
2005	08	\$ 114.713	2,02%	183	\$ 424.048,61	\$ 11.598.250,83
2005	09	\$ 114.713	2,02%	182	\$ 421.731,41	\$ 12.019.982,24
2005	10	\$ 114.713	2,02%	181	\$ 419.414,20	\$ 12.439.396,44
2005	11	\$ 114.713	2,02%	180	\$ 417.097,00	\$ 12.856.493,44
2005	12	\$ 114.713	2,02%	179	\$ 414.779,79	\$ 13.271.273,23
2005	M14	\$ 114.713	2,02%	179	\$ 414.779,79	\$ 13.686.053,02
2006	01	\$ 120.277	2,02%	178	\$ 432.467,02	\$ 14.118.520,04
2006	02	\$ 120.277	2,02%	177	\$ 430.037,43	\$ 14.548.557,47
2006	03	\$ 120.277	2,02%	176	\$ 427.607,84	\$ 14.976.165,31
2006	04	\$ 120.277	2,02%	175	\$ 425.178,25	\$ 15.401.343,56
2006	05	\$ 120.277	2,02%	174	\$ 422.748,66	\$ 15.824.092,22
2006	06	\$ 120.277	2,02%	173	\$ 420.319,07	\$ 16.244.411,29
2006	M13	\$ 120.277	2,02%	173	\$ 420.319,07	\$ 16.664.730,36
2006	07	\$ 120.277	2,02%	172	\$ 417.889,48	\$ 17.082.619,84
2006	08	\$ 120.277	2,02%	171	\$ 415.459,89	\$ 17.498.079,73
2006	09	\$ 120.277	2,02%	170	\$ 413.030,30	\$ 17.911.110,03
2006	10	\$ 120.277	2,02%	169	\$ 410.600,71	\$ 18.321.710,74
2006	11	\$ 120.277	2,02%	168	\$ 408.171,12	\$ 18.729.881,86
2006	12	\$ 120.277	2,02%	167	\$ 405.741,53	\$ 19.135.623,39
2006	M14	\$ 120.277	2,02%	167	\$ 405.741,53	\$ 19.541.364,92
2007	01	\$ 125.665	2,02%	166	\$ 421.380,32	\$ 19.962.745,24
2007	02	\$ 125.665	2,02%	165	\$ 418.841,88	\$ 20.381.587,12
2007	03	\$ 125.665	2,02%	164	\$ 416.303,44	\$ 20.797.890,56
2007	04	\$ 125.665	2,02%	163	\$ 413.765,01	\$ 21.211.655,57
2007	05	\$ 125.665	2,02%	162	\$ 411.226,57	\$ 21.622.882,15
2007	06	\$ 125.665	2,02%	161	\$ 408.688,14	\$ 22.031.570,28
2007	M13	\$ 125.665	2,02%	161	\$ 408.688,14	\$ 22.440.258,42
2007	07	\$ 125.665	2,02%	160	\$ 406.149,70	\$ 22.846.408,12
2007	08	\$ 125.665	2,02%	159	\$ 403.611,27	\$ 23.250.019,39
2007	09	\$ 125.665	2,02%	158	\$ 401.072,83	\$ 23.651.092,22
2007	10	\$ 125.665	2,02%	157	\$ 398.534,39	\$ 24.049.626,61
2007	11	\$ 125.665	2,02%	156	\$ 395.995,96	\$ 24.445.622,57
2007	12	\$ 125.665	2,02%	155	\$ 393.457,52	\$ 24.839.080,10
2007	M14	\$ 125.665	2,02%	155	\$ 393.457,52	\$ 25.232.537,62
2008	01	\$ 132.815	2,02%	154	\$ 413.162,38	\$ 25.645.700,00
2008	02	\$ 132.815	2,02%	153	\$ 410.479,51	\$ 26.056.179,51
2008	03	\$ 132.815	2,02%	152	\$ 407.796,64	\$ 26.463.976,15
2008	04	\$ 132.815	2,02%	151	\$ 405.113,77	\$ 26.869.089,92
2008	05	\$ 132.815	2,02%	150	\$ 402.430,89	\$ 27.271.520,81
2008	06	\$ 132.815	2,02%	149	\$ 399.748,02	\$ 27.671.268,83
2008	M13	\$ 132.815	2,02%	149	\$ 399.748,02	\$ 28.071.016,85
2008	07	\$ 132.815	2,02%	148	\$ 397.065,15	\$ 28.468.082,00
2008	08	\$ 132.815	2,02%	147	\$ 394.382,28	\$ 28.862.464,28
2008	09	\$ 132.815	2,02%	146	\$ 391.699,40	\$ 29.254.163,68
2008	10	\$ 132.815	2,02%	145	\$ 389.016,53	\$ 29.643.180,21
2008	11	\$ 132.815	2,02%	144	\$ 386.333,66	\$ 30.029.513,87
2008	12	\$ 132.815	2,02%	143	\$ 383.650,79	\$ 30.413.164,65
2008	M14	\$ 132.815	2,02%	143	\$ 383.650,79	\$ 30.796.815,44
2009	01	\$ 143.002	2,02%	142	\$ 410.188,15	\$ 31.207.003,59
2009	02	\$ 143.002	2,02%	141	\$ 407.299,50	\$ 31.614.303,09
2009	03	\$ 143.002	2,02%	140	\$ 404.410,85	\$ 32.018.713,95
2009	04	\$ 143.002	2,02%	139	\$ 401.522,20	\$ 32.420.236,15
2009	05	\$ 143.002	2,02%	138	\$ 398.633,56	\$ 32.818.869,71

2009	06	\$ 143.002	2,02%	137	\$ 395.744,91	\$ 33.214.614,61
2009	M13	\$ 143.002	2,02%	137	\$ 395.744,91	\$ 33.610.359,52
2009	07	\$ 143.002	2,02%	136	\$ 392.856,26	\$ 34.003.215,78
2009	08	\$ 143.002	2,02%	135	\$ 389.967,61	\$ 34.393.183,39
2009	09	\$ 143.002	2,02%	134	\$ 387.078,96	\$ 34.780.262,35
2009	10	\$ 143.002	2,02%	133	\$ 384.190,31	\$ 35.164.452,66
2009	11	\$ 143.002	2,02%	132	\$ 381.301,66	\$ 35.545.754,32
2009	12	\$ 143.002	2,02%	131	\$ 378.413,01	\$ 35.924.167,33
2009	M14	\$ 143.002	2,02%	131	\$ 378.413,01	\$ 36.302.580,34
2010	01	\$ 145.862	2,02%	130	\$ 383.034,85	\$ 36.685.615,20
2010	02	\$ 145.862	2,02%	129	\$ 380.088,43	\$ 37.065.703,62
2010	03	\$ 145.862	2,02%	128	\$ 377.142,01	\$ 37.442.845,63
2010	04	\$ 145.862	2,02%	127	\$ 374.195,59	\$ 37.817.041,22
2010	05	\$ 145.862	2,02%	126	\$ 371.249,16	\$ 38.188.290,38
2010	06	\$ 145.862	2,02%	125	\$ 368.302,74	\$ 38.556.593,12
2010	M13	\$ 145.862	2,02%	125	\$ 368.302,74	\$ 38.924.895,86
2010	07	\$ 145.862	2,02%	124	\$ 365.356,32	\$ 39.290.252,18
2010	08	\$ 145.862	2,02%	123	\$ 362.409,90	\$ 39.652.662,08
2010	09	\$ 145.862	2,02%	122	\$ 359.463,48	\$ 40.012.125,56
2010	10	\$ 145.862	2,02%	121	\$ 356.517,05	\$ 40.368.642,61
2010	11	\$ 145.862	2,02%	120	\$ 353.570,63	\$ 40.722.213,24
2010	12	\$ 145.862	2,02%	119	\$ 350.624,21	\$ 41.072.837,45
2010	M14	\$ 145.862	2,02%	119	\$ 350.624,21	\$ 41.423.461,66
2011	01	\$ 150.486	2,02%	118	\$ 358.699,17	\$ 41.782.160,84
2011	02	\$ 150.486	2,02%	117	\$ 355.659,35	\$ 42.137.820,19
2011	03	\$ 150.486	2,02%	116	\$ 352.619,53	\$ 42.490.439,71
2011	04	\$ 150.486	2,02%	115	\$ 349.579,70	\$ 42.840.019,42
2011	05	\$ 150.486	2,02%	114	\$ 346.539,88	\$ 43.186.559,30
2011	06	\$ 150.486	2,02%	113	\$ 343.500,06	\$ 43.530.059,35
2011	M13	\$ 150.486	2,02%	113	\$ 343.500,06	\$ 43.873.559,41
2011	07	\$ 150.486	2,02%	112	\$ 340.460,23	\$ 44.214.019,64
2011	08	\$ 150.486	2,02%	111	\$ 337.420,41	\$ 44.551.440,05
2011	09	\$ 150.486	2,02%	110	\$ 334.380,59	\$ 44.885.820,64
2011	10	\$ 150.486	2,02%	109	\$ 331.340,76	\$ 45.217.161,40
2011	11	\$ 150.486	2,02%	108	\$ 328.300,94	\$ 45.545.462,34
2011	12	\$ 150.486	2,02%	107	\$ 325.261,12	\$ 45.870.723,45
2011	M14	\$ 150.486	2,02%	107	\$ 325.261,12	\$ 46.195.984,57
2012	01	\$ 156.099	2,02%	106	\$ 334.240,15	\$ 46.530.224,72
2012	02	\$ 156.099	2,02%	105	\$ 331.086,94	\$ 46.861.311,65
2012	03	\$ 156.099	2,02%	104	\$ 327.933,73	\$ 0,00
2012	04	\$ 156.099	2,02%	103	\$ 324.780,52	\$ 47.514.025,90
2012	05	\$ 156.099	2,02%	102	\$ 321.627,31	\$ 47.835.653,21
2012	06	\$ 156.099	2,02%	101	\$ 318.474,10	\$ 48.154.127,31
2012	M13	\$ 156.099	2,02%	101	\$ 318.474,10	\$ 48.472.601,41
2012	07	\$ 156.099	2,02%	100	\$ 315.320,89	\$ 48.787.922,31
2012	08	\$ 156.099	2,02%	99	\$ 312.167,68	\$ 49.100.089,99
2012	09	\$ 156.099	2,02%	98	\$ 309.014,47	\$ 49.409.104,46
2012	10	\$ 156.099	2,02%	97	\$ 305.861,27	\$ 49.714.965,73
2012	11	\$ 156.099	2,02%	96	\$ 302.708,06	\$ 50.017.673,79
2012	12	\$ 156.099	2,02%	95	\$ 299.554,85	\$ 50.317.228,63
2012	M14	\$ 156.099	2,02%	95	\$ 299.554,85	\$ 50.616.783,48
2013	01	\$ 159.908	2,02%	94	\$ 303.633,84	\$ 50.920.417,32
2013	02	\$ 159.908	2,02%	93	\$ 300.403,69	\$ 51.220.821,01
2013	03	\$ 159.908	2,02%	92	\$ 297.173,54	\$ 51.517.994,56
2013	04	\$ 159.908	2,02%	91	\$ 293.943,40	\$ 51.811.937,95
2013	05	\$ 159.908	2,02%	90	\$ 290.713,25	\$ 52.102.651,20
2013	06	\$ 159.908	2,02%	89	\$ 287.483,10	\$ 52.390.134,31

2013	M13	\$ 159.908	2,02%	89	\$ 287.483,10	\$ 52.677.617,41
2013	07	\$ 159.908	2,02%	88	\$ 284.252,96	\$ 52.961.870,36
2013	08	\$ 159.908	2,02%	87	\$ 281.022,81	\$ 53.242.893,17
2013	09	\$ 159.908	2,02%	86	\$ 277.792,66	\$ 53.520.685,83
2013	10	\$ 159.908	2,02%	85	\$ 274.562,51	\$ 53.795.248,35
2013	11	\$ 159.908	2,02%	84	\$ 271.332,37	\$ 54.066.580,71
2013	12	\$ 159.908	2,02%	83	\$ 268.102,22	\$ 54.334.682,93
2013	M14	\$ 159.908	2,02%	83	\$ 268.102,22	\$ 54.602.785,15
2014	01	\$ 163.010	2,02%	82	\$ 270.010,59	\$ 54.872.795,74
2014	02	\$ 163.010	2,02%	81	\$ 266.717,78	\$ 55.139.513,52
2014	03	\$ 163.010	2,02%	80	\$ 263.424,97	\$ 55.402.938,49
2014	04	\$ 163.010	2,02%	79	\$ 260.132,15	\$ 55.663.070,64
2014	05	\$ 163.010	2,02%	78	\$ 256.839,34	\$ 55.919.909,98
2014	06	\$ 163.010	2,02%	77	\$ 253.546,53	\$ 56.173.456,51
2014	M13	\$ 163.010	2,02%	77	\$ 253.546,53	\$ 56.427.003,04
2014	07	\$ 163.010	2,02%	76	\$ 250.253,72	\$ 56.677.256,76
2014	08	\$ 163.010	2,02%	75	\$ 246.960,91	\$ 56.924.217,67
2014	09	\$ 163.010	2,02%	74	\$ 243.668,09	\$ 57.167.885,76
2014	10	\$ 163.010	2,02%	73	\$ 240.375,28	\$ 57.408.261,04
2014	11	\$ 163.010	2,02%	72	\$ 237.082,47	\$ 57.645.343,51
2014	12	\$ 163.010	2,02%	71	\$ 233.789,66	\$ 57.879.133,17
2014	M14	\$ 163.010	2,02%	71	\$ 233.789,66	\$ 58.112.922,83
2015	01	\$ 168.977	2,02%	70	\$ 238.933,03	\$ 58.351.855,86
2015	02	\$ 168.977	2,02%	69	\$ 235.519,70	\$ 58.587.375,56
2015	03	\$ 168.977	2,02%	68	\$ 232.106,37	\$ 58.819.481,93
2015	04	\$ 168.977	2,02%	67	\$ 228.693,04	\$ 59.048.174,97
2015	05	\$ 168.977	2,02%	66	\$ 225.279,71	\$ 59.273.454,69
2015	06	\$ 168.977	2,02%	65	\$ 221.866,39	\$ 59.495.321,07
2015	M13	\$ 168.977	2,02%	65	\$ 221.866,39	\$ 59.717.187,46
2015	07	\$ 168.977	2,02%	64	\$ 218.453,06	\$ 59.935.640,51
2015	08	\$ 168.977	2,02%	63	\$ 215.039,73	\$ 60.150.680,24
2015	09	\$ 168.977	2,02%	62	\$ 211.626,40	\$ 60.362.306,64
2015	10	\$ 168.977	2,02%	61	\$ 208.213,07	\$ 60.570.519,71
2015	11	\$ 168.977	2,02%	60	\$ 204.799,74	\$ 60.775.319,45
2015	12	\$ 168.977	2,02%	59	\$ 201.386,41	\$ 60.976.705,86
2015	M14	\$ 168.977	2,02%	59	\$ 201.386,41	\$ 61.178.092,27
2016	01	\$ 180.416	2,02%	58	\$ 211.375,86	\$ 61.389.468,13
2016	02	\$ 180.416	2,02%	57	\$ 207.731,45	\$ 61.597.199,58
2016	03	\$ 180.416	2,02%	56	\$ 204.087,04	\$ 61.801.286,62
2016	04	\$ 180.416	2,02%	55	\$ 200.442,63	\$ 62.001.729,24
2016	05	\$ 180.416	2,02%	54	\$ 196.798,21	\$ 62.198.527,46
2016	06	\$ 180.416	2,02%	53	\$ 193.153,80	\$ 62.391.681,26
2016	M13	\$ 180.416	2,02%	53	\$ 193.153,80	\$ 62.584.835,06
2016	07	\$ 180.416	2,02%	52	\$ 189.509,39	\$ 62.774.344,45
2016	08	\$ 180.416	2,02%	51	\$ 185.864,98	\$ 62.960.209,43
2016	09	\$ 180.416	2,02%	50	\$ 182.220,57	\$ 63.142.430,00
2016	10	\$ 180.416	2,02%	49	\$ 178.576,16	\$ 63.321.006,16
2016	11	\$ 180.416	2,02%	48	\$ 174.931,75	\$ 63.495.937,90
2016	12	\$ 180.416	2,02%	47	\$ 171.287,33	\$ 63.667.225,24
2016	M14	\$ 180.416	2,02%	47	\$ 171.287,33	\$ 63.838.512,57
2017	01	\$ 190.790	2,02%	46	\$ 177.282,39	\$ 64.015.794,97
2017	02	\$ 190.790	2,02%	45	\$ 173.428,43	\$ 64.189.223,39
2017	03	\$ 190.790	2,02%	44	\$ 169.574,46	\$ 64.358.797,85
2017	04	\$ 190.790	2,02%	43	\$ 165.720,50	\$ 64.524.518,35
2017	05	\$ 190.790	2,02%	42	\$ 161.866,53	\$ 64.686.384,88
2017	06	\$ 190.790	2,02%	41	\$ 158.012,57	\$ 64.844.397,45
2017	M13	\$ 190.790	2,02%	41	\$ 158.012,57	\$ 65.002.410,01

2017	07	\$ 190.790	2,02%	40	\$ 154.158,60	\$ 65.156.568,61
2017	08	\$ 190.790	2,02%	39	\$ 150.304,64	\$ 65.306.873,25
2017	09	\$ 190.790	2,02%	38	\$ 146.450,67	\$ 65.453.323,92
2017	10	\$ 190.790	2,02%	37	\$ 142.596,71	\$ 65.595.920,63
2017	11	\$ 190.790	2,02%	36	\$ 138.742,74	\$ 65.734.663,37
2017	12	\$ 190.790	2,02%	35	\$ 134.888,78	\$ 65.869.552,14
2017	M14	\$ 190.790	2,02%	35	\$ 134.888,78	\$ 66.004.440,92
2018	01	\$ 198.594	2,02%	34	\$ 136.394,13	\$ 66.140.835,05
2018	02	\$ 198.594	2,02%	33	\$ 132.382,54	\$ 66.273.217,60
2018	03	\$ 198.594	2,02%	32	\$ 128.370,95	\$ 66.401.588,55
2018	04	\$ 198.594	2,02%	31	\$ 124.359,36	\$ 66.525.947,91
2018	05	\$ 198.594	2,02%	30	\$ 120.347,77	\$ 66.646.295,67
2018	06	\$ 198.594	2,02%	29	\$ 116.336,17	\$ 66.762.631,84
2018	M13	\$ 198.594	2,02%	29	\$ 116.336,17	\$ 66.878.968,02
2018	07	\$ 198.594	2,02%	28	\$ 112.324,58	\$ 66.991.292,60
2018	08	\$ 198.594	2,02%	27	\$ 108.312,99	\$ 67.099.605,59
2018	09	\$ 198.594	2,02%	26	\$ 104.301,40	\$ 67.203.906,99
2018	10	\$ 198.594	2,02%	25	\$ 100.289,80	\$ 67.304.196,79
2018	11	\$ 198.594	2,02%	24	\$ 96.278,21	\$ 67.400.475,00
2018	12	\$ 198.594	2,02%	23	\$ 92.266,62	\$ 67.492.741,62
2018	M14	\$ 198.594	2,02%	23	\$ 92.266,62	\$ 67.585.008,25
2019	01	\$ 204.909	2,02%	22	\$ 91.061,54	\$ 67.676.069,78
2019	02	\$ 204.909	2,02%	21	\$ 86.922,38	\$ 67.762.992,16
2019	03	\$ 204.909	2,02%	20	\$ 82.783,22	\$ 67.845.775,38
2019	04	\$ 204.909	2,02%	19	\$ 78.644,06	\$ 67.924.419,43
2019	05	\$ 204.909	2,02%	18	\$ 74.504,89	\$ 67.998.924,33
2019	06	\$ 204.909	2,02%	17	\$ 70.365,73	\$ 68.069.290,06
2019	M13	\$ 204.909	2,02%	17	\$ 70.365,73	\$ 68.139.655,80
2019	07	\$ 204.909	2,02%	16	\$ 66.226,57	\$ 68.205.882,37
2019	08	\$ 204.909	2,02%	15	\$ 62.087,41	\$ 68.267.969,78
2019	09	\$ 204.909	2,02%	14	\$ 57.948,25	\$ 68.325.918,03
2019	10	\$ 204.909	2,02%	13	\$ 53.809,09	\$ 68.379.727,12
2019	11	\$ 204.909	2,02%	12	\$ 49.669,93	\$ 68.429.397,05
2019	12	\$ 204.909	2,02%	11	\$ 45.530,77	\$ 68.474.927,82
2019	M14	\$ 204.909	2,02%	11	\$ 45.530,77	\$ 68.520.458,59
2020	01	\$ 212.695	2,02%	10	\$ 42.964,49	\$ 68.563.423,08
2020	02	\$ 212.695	2,02%	9	\$ 38.668,04	\$ 68.602.091,12
2020	03	\$ 212.695	2,02%	8	\$ 34.371,59	\$ 68.636.462,71
2020	04	\$ 212.695	2,02%	7	\$ 30.075,14	\$ 68.666.537,86
2020	05	\$ 212.695	2,02%	6	\$ 25.778,69	\$ 68.692.316,55
2020	06	\$ 212.695	2,02%	5	\$ 21.482,24	\$ 68.713.798,79
2020	M13	\$ 212.695	2,02%	5	\$ 21.482,24	\$ 68.735.281,04
2020	07	\$ 212.695	2,02%	4	\$ 17.185,80	\$ 68.752.466,84
2020	08	\$ 212.695	2,02%	3	\$ 12.889,35	\$ 68.765.356,18
2020	09	\$ 212.695	2,02%	2	\$ 8.592,90	\$ 68.773.949,08
2020	10	\$ 212.695	2,02%	1	\$ 4.296,45	\$ 68.778.245,53

55. RAMÓN ALBERTO CHINCHILLA ARENAS

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 110.114,38	4,48%	3,5	\$ 385.400,33
2007	\$ 115.047,50	5,69%	14	\$ 1.610.665,06
2008	\$ 121.593,71	7,67%	14	\$ 1.702.311,90
2009	\$ 130.919,94	2,00%	14	\$ 1.832.879,22
2010	\$ 133.538,34	3,17%	14	\$ 1.869.536,81
2011	\$ 137.771,51	3,73%	14	\$ 1.928.801,13
2012	\$ 142.910,39	2,44%	14	\$ 2.000.745,41

2013	\$ 146.397,40	1,94%	14	\$ 2.049.563,60
2014	\$ 149.237,51	3,66%	14	\$ 2.089.325,13
2015	\$ 154.699,60	6,77%	14	\$ 2.165.794,43
2016	\$ 165.172,77	5,75%	14	\$ 2.312.418,71
2017	\$ 174.670,20	4,09%	14	\$ 2.445.382,79
2018	\$ 181.814,21	3,18%	14	\$ 2.545.398,94
2019	\$ 187.595,90	3,80%	14	\$ 2.626.342,63
2020	\$ 194.724,55	1,61%	11	\$ 2.141.970,01
				\$ 29.706.536,09

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	10	\$ 110.114	2,02%	169	\$ 375.908,47	\$ 375.908,47
2006	11	\$ 110.114	2,02%	168	\$ 373.684,16	\$ 749.592,63
2006	12	\$ 110.114	2,02%	167	\$ 371.459,85	\$ 1.121.052,48
2006	M14	\$ 110.114	2,02%	167	\$ 371.459,85	\$ 1.492.512,33
2007	01	\$ 115.048	2,02%	166	\$ 385.777,29	\$ 1.878.289,62
2007	02	\$ 115.048	2,02%	165	\$ 383.453,33	\$ 2.261.742,95
2007	03	\$ 115.048	2,02%	164	\$ 381.129,37	\$ 2.642.872,32
2007	04	\$ 115.048	2,02%	163	\$ 378.805,41	\$ 3.021.677,74
2007	05	\$ 115.048	2,02%	162	\$ 376.481,45	\$ 3.398.159,19
2007	06	\$ 115.048	2,02%	161	\$ 374.157,49	\$ 3.772.316,68
2007	M13	\$ 115.048	2,02%	161	\$ 374.157,49	\$ 4.146.474,18
2007	07	\$ 115.048	2,02%	160	\$ 371.833,53	\$ 4.518.307,71
2007	08	\$ 115.048	2,02%	159	\$ 369.509,57	\$ 4.887.817,28
2007	09	\$ 115.048	2,02%	158	\$ 367.185,61	\$ 5.255.002,90
2007	10	\$ 115.048	2,02%	157	\$ 364.861,65	\$ 5.619.864,55
2007	11	\$ 115.048	2,02%	156	\$ 362.537,70	\$ 5.982.402,25
2007	12	\$ 115.048	2,02%	155	\$ 360.213,74	\$ 6.342.615,98
2007	M14	\$ 115.048	2,02%	155	\$ 360.213,74	\$ 6.702.829,72
2008	01	\$ 121.594	2,02%	154	\$ 378.253,70	\$ 7.081.083,42
2008	02	\$ 121.594	2,02%	153	\$ 375.797,51	\$ 7.456.880,94
2008	03	\$ 121.594	2,02%	152	\$ 373.341,32	\$ 7.830.222,25
2008	04	\$ 121.594	2,02%	151	\$ 370.885,13	\$ 8.201.107,38
2008	05	\$ 121.594	2,02%	150	\$ 368.428,93	\$ 8.569.536,31
2008	06	\$ 121.594	2,02%	149	\$ 365.972,74	\$ 8.935.509,05
2008	M13	\$ 121.594	2,02%	149	\$ 365.972,74	\$ 9.301.481,79
2008	07	\$ 121.594	2,02%	148	\$ 363.516,55	\$ 9.664.998,34
2008	08	\$ 121.594	2,02%	147	\$ 361.060,35	\$ 10.026.058,69
2008	09	\$ 121.594	2,02%	146	\$ 358.604,16	\$ 10.384.662,86
2008	10	\$ 121.594	2,02%	145	\$ 356.147,97	\$ 10.740.810,82
2008	11	\$ 121.594	2,02%	144	\$ 353.691,78	\$ 11.094.502,60
2008	12	\$ 121.594	2,02%	143	\$ 351.235,58	\$ 11.445.738,18
2008	M14	\$ 121.594	2,02%	143	\$ 351.235,58	\$ 11.796.973,76
2009	01	\$ 130.920	2,02%	142	\$ 375.530,77	\$ 12.172.504,53
2009	02	\$ 130.920	2,02%	141	\$ 372.886,19	\$ 12.545.390,72
2009	03	\$ 130.920	2,02%	140	\$ 370.241,60	\$ 12.915.632,32
2009	04	\$ 130.920	2,02%	139	\$ 367.597,02	\$ 13.283.229,34
2009	05	\$ 130.920	2,02%	138	\$ 364.952,44	\$ 13.648.181,78
2009	06	\$ 130.920	2,02%	137	\$ 362.307,85	\$ 14.010.489,64
2009	M13	\$ 130.920	2,02%	137	\$ 362.307,85	\$ 14.372.797,49
2009	07	\$ 130.920	2,02%	136	\$ 359.663,27	\$ 14.732.460,76
2009	08	\$ 130.920	2,02%	135	\$ 357.018,69	\$ 15.089.479,45
2009	09	\$ 130.920	2,02%	134	\$ 354.374,11	\$ 15.443.853,56
2009	10	\$ 130.920	2,02%	133	\$ 351.729,52	\$ 15.795.583,08
2009	11	\$ 130.920	2,02%	132	\$ 349.084,94	\$ 16.144.668,02

2009	12	\$ 130.920	2,02%	131	\$ 346.440,36	\$ 16.491.108,38
2009	M14	\$ 130.920	2,02%	131	\$ 346.440,36	\$ 16.837.548,73
2010	01	\$ 133.538	2,02%	130	\$ 350.671,69	\$ 17.188.220,42
2010	02	\$ 133.538	2,02%	129	\$ 347.974,22	\$ 17.536.194,64
2010	03	\$ 133.538	2,02%	128	\$ 345.276,74	\$ 17.881.471,38
2010	04	\$ 133.538	2,02%	127	\$ 342.579,27	\$ 18.224.050,65
2010	05	\$ 133.538	2,02%	126	\$ 339.881,79	\$ 18.563.932,44
2010	06	\$ 133.538	2,02%	125	\$ 337.184,32	\$ 18.901.116,76
2010	M13	\$ 133.538	2,02%	125	\$ 337.184,32	\$ 19.238.301,07
2010	07	\$ 133.538	2,02%	124	\$ 334.486,84	\$ 19.572.787,92
2010	08	\$ 133.538	2,02%	123	\$ 331.789,37	\$ 19.904.577,28
2010	09	\$ 133.538	2,02%	122	\$ 329.091,89	\$ 20.233.669,18
2010	10	\$ 133.538	2,02%	121	\$ 326.394,42	\$ 20.560.063,60
2010	11	\$ 133.538	2,02%	120	\$ 323.696,94	\$ 20.883.760,54
2010	12	\$ 133.538	2,02%	119	\$ 320.999,47	\$ 21.204.760,01
2010	M14	\$ 133.538	2,02%	119	\$ 320.999,47	\$ 21.525.759,48
2011	01	\$ 137.772	2,02%	118	\$ 328.392,17	\$ 21.854.151,65
2011	02	\$ 137.772	2,02%	117	\$ 325.609,18	\$ 22.179.760,83
2011	03	\$ 137.772	2,02%	116	\$ 322.826,20	\$ 22.502.587,03
2011	04	\$ 137.772	2,02%	115	\$ 320.043,22	\$ 22.822.630,25
2011	05	\$ 137.772	2,02%	114	\$ 317.260,23	\$ 23.139.890,48
2011	06	\$ 137.772	2,02%	113	\$ 314.477,25	\$ 23.454.367,73
2011	M13	\$ 137.772	2,02%	113	\$ 314.477,25	\$ 23.768.844,97
2011	07	\$ 137.772	2,02%	112	\$ 311.694,26	\$ 24.080.539,23
2011	08	\$ 137.772	2,02%	111	\$ 308.911,28	\$ 24.389.450,51
2011	09	\$ 137.772	2,02%	110	\$ 306.128,29	\$ 24.695.578,80
2011	10	\$ 137.772	2,02%	109	\$ 303.345,31	\$ 24.998.924,11
2011	11	\$ 137.772	2,02%	108	\$ 300.562,32	\$ 25.299.486,44
2011	12	\$ 137.772	2,02%	107	\$ 297.779,34	\$ 25.597.265,78
2011	M14	\$ 137.772	2,02%	107	\$ 297.779,34	\$ 25.895.045,11
2012	01	\$ 142.910	2,02%	106	\$ 305.999,72	\$ 26.201.044,83
2012	02	\$ 142.910	2,02%	105	\$ 303.112,93	\$ 26.504.157,76
2012	03	\$ 142.910	2,02%	104	\$ 300.226,14	\$ 0,00
2012	04	\$ 142.910	2,02%	103	\$ 297.339,35	\$ 27.101.723,25
2012	05	\$ 142.910	2,02%	102	\$ 294.452,56	\$ 27.396.175,81
2012	06	\$ 142.910	2,02%	101	\$ 291.565,77	\$ 27.687.741,58
2012	M13	\$ 142.910	2,02%	101	\$ 291.565,77	\$ 27.979.307,35
2012	07	\$ 142.910	2,02%	100	\$ 288.678,98	\$ 28.267.986,33
2012	08	\$ 142.910	2,02%	99	\$ 285.792,19	\$ 28.553.778,52
2012	09	\$ 142.910	2,02%	98	\$ 282.905,40	\$ 28.836.683,92
2012	10	\$ 142.910	2,02%	97	\$ 280.018,61	\$ 29.116.702,53
2012	11	\$ 142.910	2,02%	96	\$ 277.131,82	\$ 29.393.834,35
2012	12	\$ 142.910	2,02%	95	\$ 274.245,03	\$ 29.668.079,39
2012	M14	\$ 142.910	2,02%	95	\$ 274.245,03	\$ 29.942.324,42
2013	01	\$ 146.397	2,02%	94	\$ 277.979,38	\$ 30.220.303,80
2013	02	\$ 146.397	2,02%	93	\$ 275.022,15	\$ 30.495.325,95
2013	03	\$ 146.397	2,02%	92	\$ 272.064,93	\$ 30.767.390,88
2013	04	\$ 146.397	2,02%	91	\$ 269.107,70	\$ 31.036.498,58
2013	05	\$ 146.397	2,02%	90	\$ 266.150,47	\$ 31.302.649,05
2013	06	\$ 146.397	2,02%	89	\$ 263.193,25	\$ 31.565.842,30
2013	M13	\$ 146.397	2,02%	89	\$ 263.193,25	\$ 31.829.035,54
2013	07	\$ 146.397	2,02%	88	\$ 260.236,02	\$ 32.089.271,56
2013	08	\$ 146.397	2,02%	87	\$ 257.278,79	\$ 32.346.550,35
2013	09	\$ 146.397	2,02%	86	\$ 254.321,56	\$ 32.600.871,91
2013	10	\$ 146.397	2,02%	85	\$ 251.364,34	\$ 32.852.236,25
2013	11	\$ 146.397	2,02%	84	\$ 248.407,11	\$ 33.100.643,36
2013	12	\$ 146.397	2,02%	83	\$ 245.449,88	\$ 33.346.093,24

2013	M14	\$ 146.397	2,02%	83	\$ 245.449,88	\$ 33.591.543,12
2014	01	\$ 149.238	2,02%	82	\$ 247.197,01	\$ 33.838.740,13
2014	02	\$ 149.238	2,02%	81	\$ 244.182,41	\$ 34.082.922,54
2014	03	\$ 149.238	2,02%	80	\$ 241.167,81	\$ 34.324.090,36
2014	04	\$ 149.238	2,02%	79	\$ 238.153,22	\$ 34.562.243,57
2014	05	\$ 149.238	2,02%	78	\$ 235.138,62	\$ 34.797.382,19
2014	06	\$ 149.238	2,02%	77	\$ 232.124,02	\$ 35.029.506,21
2014	M13	\$ 149.238	2,02%	77	\$ 232.124,02	\$ 35.261.630,24
2014	07	\$ 149.238	2,02%	76	\$ 229.109,42	\$ 35.490.739,66
2014	08	\$ 149.238	2,02%	75	\$ 226.094,83	\$ 35.716.834,49
2014	09	\$ 149.238	2,02%	74	\$ 223.080,23	\$ 35.939.914,72
2014	10	\$ 149.238	2,02%	73	\$ 220.065,63	\$ 36.159.980,35
2014	11	\$ 149.238	2,02%	72	\$ 217.051,03	\$ 36.377.031,38
2014	12	\$ 149.238	2,02%	71	\$ 214.036,44	\$ 36.591.067,82
2014	M14	\$ 149.238	2,02%	71	\$ 214.036,44	\$ 36.805.104,25
2015	01	\$ 154.700	2,02%	70	\$ 218.745,24	\$ 37.023.849,49
2015	02	\$ 154.700	2,02%	69	\$ 215.620,31	\$ 37.239.469,79
2015	03	\$ 154.700	2,02%	68	\$ 212.495,37	\$ 37.451.965,17
2015	04	\$ 154.700	2,02%	67	\$ 209.370,44	\$ 37.661.335,61
2015	05	\$ 154.700	2,02%	66	\$ 206.245,51	\$ 37.867.581,12
2015	06	\$ 154.700	2,02%	65	\$ 203.120,58	\$ 38.070.701,70
2015	M13	\$ 154.700	2,02%	65	\$ 203.120,58	\$ 38.273.822,27
2015	07	\$ 154.700	2,02%	64	\$ 199.995,65	\$ 38.473.817,92
2015	08	\$ 154.700	2,02%	63	\$ 196.870,71	\$ 38.670.688,63
2015	09	\$ 154.700	2,02%	62	\$ 193.745,78	\$ 38.864.434,41
2015	10	\$ 154.700	2,02%	61	\$ 190.620,85	\$ 39.055.055,26
2015	11	\$ 154.700	2,02%	60	\$ 187.495,92	\$ 39.242.551,18
2015	12	\$ 154.700	2,02%	59	\$ 184.370,99	\$ 39.426.922,17
2015	M14	\$ 154.700	2,02%	59	\$ 184.370,99	\$ 39.611.293,15
2016	01	\$ 165.173	2,02%	58	\$ 193.516,41	\$ 39.804.809,56
2016	02	\$ 165.173	2,02%	57	\$ 190.179,92	\$ 39.994.989,49
2016	03	\$ 165.173	2,02%	56	\$ 186.843,43	\$ 40.181.832,92
2016	04	\$ 165.173	2,02%	55	\$ 183.506,94	\$ 40.365.339,86
2016	05	\$ 165.173	2,02%	54	\$ 180.170,45	\$ 40.545.510,31
2016	06	\$ 165.173	2,02%	53	\$ 176.833,96	\$ 40.722.344,27
2016	M13	\$ 165.173	2,02%	53	\$ 176.833,96	\$ 40.899.178,24
2016	07	\$ 165.173	2,02%	52	\$ 173.497,47	\$ 41.072.675,71
2016	08	\$ 165.173	2,02%	51	\$ 170.160,98	\$ 41.242.836,69
2016	09	\$ 165.173	2,02%	50	\$ 166.824,49	\$ 41.409.661,18
2016	10	\$ 165.173	2,02%	49	\$ 163.488,00	\$ 41.573.149,19
2016	11	\$ 165.173	2,02%	48	\$ 160.151,51	\$ 41.733.300,70
2016	12	\$ 165.173	2,02%	47	\$ 156.815,02	\$ 41.890.115,72
2016	M14	\$ 165.173	2,02%	47	\$ 156.815,02	\$ 42.046.930,75
2017	01	\$ 174.670	2,02%	46	\$ 162.303,55	\$ 42.209.234,30
2017	02	\$ 174.670	2,02%	45	\$ 158.775,21	\$ 42.368.009,51
2017	03	\$ 174.670	2,02%	44	\$ 155.246,87	\$ 42.523.256,38
2017	04	\$ 174.670	2,02%	43	\$ 151.718,53	\$ 42.674.974,91
2017	05	\$ 174.670	2,02%	42	\$ 148.190,20	\$ 42.823.165,11
2017	06	\$ 174.670	2,02%	41	\$ 144.661,86	\$ 42.967.826,97
2017	M13	\$ 174.670	2,02%	41	\$ 144.661,86	\$ 43.112.488,83
2017	07	\$ 174.670	2,02%	40	\$ 141.133,52	\$ 43.253.622,35
2017	08	\$ 174.670	2,02%	39	\$ 137.605,18	\$ 43.391.227,53
2017	09	\$ 174.670	2,02%	38	\$ 134.076,84	\$ 43.525.304,38
2017	10	\$ 174.670	2,02%	37	\$ 130.548,51	\$ 43.655.852,88
2017	11	\$ 174.670	2,02%	36	\$ 127.020,17	\$ 43.782.873,05
2017	12	\$ 174.670	2,02%	35	\$ 123.491,83	\$ 43.906.364,88
2017	M14	\$ 174.670	2,02%	35	\$ 123.491,83	\$ 44.029.856,71

2018	01	\$ 181.814	2,02%	34	\$ 124.870,00	\$ 44.154.726,71
2018	02	\$ 181.814	2,02%	33	\$ 121.197,35	\$ 44.275.924,07
2018	03	\$ 181.814	2,02%	32	\$ 117.524,71	\$ 44.393.448,77
2018	04	\$ 181.814	2,02%	31	\$ 113.852,06	\$ 44.507.300,83
2018	05	\$ 181.814	2,02%	30	\$ 110.179,41	\$ 44.617.480,24
2018	06	\$ 181.814	2,02%	29	\$ 106.506,76	\$ 44.723.987,01
2018	M13	\$ 181.814	2,02%	29	\$ 106.506,76	\$ 44.830.493,77
2018	07	\$ 181.814	2,02%	28	\$ 102.834,12	\$ 44.933.327,89
2018	08	\$ 181.814	2,02%	27	\$ 99.161,47	\$ 45.032.489,36
2018	09	\$ 181.814	2,02%	26	\$ 95.488,82	\$ 45.127.978,18
2018	10	\$ 181.814	2,02%	25	\$ 91.816,18	\$ 45.219.794,36
2018	11	\$ 181.814	2,02%	24	\$ 88.143,53	\$ 45.307.937,89
2018	12	\$ 181.814	2,02%	23	\$ 84.470,88	\$ 45.392.408,77
2018	M14	\$ 181.814	2,02%	23	\$ 84.470,88	\$ 45.476.879,65
2019	01	\$ 187.596	2,02%	22	\$ 83.367,62	\$ 45.560.247,27
2019	02	\$ 187.596	2,02%	21	\$ 79.578,18	\$ 45.639.825,45
2019	03	\$ 187.596	2,02%	20	\$ 75.788,74	\$ 45.715.614,20
2019	04	\$ 187.596	2,02%	19	\$ 71.999,31	\$ 45.787.613,50
2019	05	\$ 187.596	2,02%	18	\$ 68.209,87	\$ 45.855.823,37
2019	06	\$ 187.596	2,02%	17	\$ 64.420,43	\$ 45.920.243,81
2019	M13	\$ 187.596	2,02%	17	\$ 64.420,43	\$ 45.984.664,24
2019	07	\$ 187.596	2,02%	16	\$ 60.631,00	\$ 46.045.295,23
2019	08	\$ 187.596	2,02%	15	\$ 56.841,56	\$ 46.102.136,79
2019	09	\$ 187.596	2,02%	14	\$ 53.052,12	\$ 46.155.188,91
2019	10	\$ 187.596	2,02%	13	\$ 49.262,68	\$ 46.204.451,60
2019	11	\$ 187.596	2,02%	12	\$ 45.473,25	\$ 46.249.924,84
2019	12	\$ 187.596	2,02%	11	\$ 41.683,81	\$ 46.291.608,65
2019	M14	\$ 187.596	2,02%	11	\$ 41.683,81	\$ 46.333.292,46
2020	01	\$ 194.725	2,02%	10	\$ 39.334,36	\$ 46.372.626,82
2020	02	\$ 194.725	2,02%	9	\$ 35.400,92	\$ 46.408.027,74
2020	03	\$ 194.725	2,02%	8	\$ 31.467,49	\$ 46.439.495,23
2020	04	\$ 194.725	2,02%	7	\$ 27.534,05	\$ 46.467.029,28
2020	05	\$ 194.725	2,02%	6	\$ 23.600,62	\$ 46.490.629,90
2020	06	\$ 194.725	2,02%	5	\$ 19.667,18	\$ 46.510.297,08
2020	M13	\$ 194.725	2,02%	5	\$ 19.667,18	\$ 46.529.964,25
2020	07	\$ 194.725	2,02%	4	\$ 15.733,74	\$ 46.545.698,00
2020	08	\$ 194.725	2,02%	3	\$ 11.800,31	\$ 46.557.498,31
2020	09	\$ 194.725	2,02%	2	\$ 7.866,87	\$ 46.565.365,18
2020	10	\$ 194.725	2,02%	1	\$ 3.933,44	\$ 46.569.298,61

56. JOSÉ MIGUEL GARCÍA CELIS

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 126.508,01	4,48%	2	\$ 253.016,02
2007	\$ 132.175,57	5,69%	14	\$ 1.850.457,96
2008	\$ 139.696,36	7,67%	14	\$ 1.955.749,02
2009	\$ 150.411,07	2,00%	14	\$ 2.105.754,97
2010	\$ 153.419,29	3,17%	14	\$ 2.147.870,07
2011	\$ 158.282,68	3,73%	14	\$ 2.215.957,55
2012	\$ 164.186,63	2,44%	14	\$ 2.298.612,77
2013	\$ 168.192,78	1,94%	14	\$ 2.354.698,92
2014	\$ 171.455,72	3,66%	14	\$ 2.400.380,08
2015	\$ 177.731,00	6,77%	14	\$ 2.488.233,99
2016	\$ 189.763,39	5,75%	14	\$ 2.656.687,43
2017	\$ 200.674,78	4,09%	14	\$ 2.809.446,96
2018	\$ 208.882,38	3,18%	14	\$ 2.924.353,34

2019	\$ 215.524,84	3,80%	14	\$ 3.017.347,78
2020	\$ 223.714,79	1,61%	11	\$ 2.460.862,64
				\$ 33.939.429,51

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	12	\$ 126.508	2,02%	167	\$ 426.762,09	\$ 426.762,09
2006	M14	\$ 126.508	2,02%	167	\$ 426.762,09	\$ 853.524,17
2007	01	\$ 132.176	2,02%	166	\$ 443.211,12	\$ 1.296.735,29
2007	02	\$ 132.176	2,02%	165	\$ 440.541,17	\$ 1.737.276,46
2007	03	\$ 132.176	2,02%	164	\$ 437.871,22	\$ 2.175.147,69
2007	04	\$ 132.176	2,02%	163	\$ 435.201,28	\$ 2.610.348,97
2007	05	\$ 132.176	2,02%	162	\$ 432.531,33	\$ 3.042.880,30
2007	06	\$ 132.176	2,02%	161	\$ 429.861,39	\$ 3.472.741,68
2007	M13	\$ 132.176	2,02%	161	\$ 429.861,39	\$ 3.902.603,07
2007	07	\$ 132.176	2,02%	160	\$ 427.191,44	\$ 4.329.794,51
2007	08	\$ 132.176	2,02%	159	\$ 424.521,49	\$ 4.754.316,00
2007	09	\$ 132.176	2,02%	158	\$ 421.851,55	\$ 5.176.167,54
2007	10	\$ 132.176	2,02%	157	\$ 419.181,60	\$ 5.595.349,14
2007	11	\$ 132.176	2,02%	156	\$ 416.511,65	\$ 6.011.860,79
2007	12	\$ 132.176	2,02%	155	\$ 413.841,71	\$ 6.425.702,50
2007	M14	\$ 132.176	2,02%	155	\$ 413.841,71	\$ 6.839.544,21
2008	01	\$ 139.696	2,02%	154	\$ 434.567,43	\$ 7.274.111,64
2008	02	\$ 139.696	2,02%	153	\$ 431.745,57	\$ 7.705.857,21
2008	03	\$ 139.696	2,02%	152	\$ 428.923,70	\$ 8.134.780,91
2008	04	\$ 139.696	2,02%	151	\$ 426.101,83	\$ 8.560.882,74
2008	05	\$ 139.696	2,02%	150	\$ 423.279,97	\$ 8.984.162,71
2008	06	\$ 139.696	2,02%	149	\$ 420.458,10	\$ 9.404.620,81
2008	M13	\$ 139.696	2,02%	149	\$ 420.458,10	\$ 9.825.078,91
2008	07	\$ 139.696	2,02%	148	\$ 417.636,23	\$ 10.242.715,14
2008	08	\$ 139.696	2,02%	147	\$ 414.814,37	\$ 10.657.529,51
2008	09	\$ 139.696	2,02%	146	\$ 411.992,50	\$ 11.069.522,01
2008	10	\$ 139.696	2,02%	145	\$ 409.170,63	\$ 11.478.692,64
2008	11	\$ 139.696	2,02%	144	\$ 406.348,77	\$ 11.885.041,41
2008	12	\$ 139.696	2,02%	143	\$ 403.526,90	\$ 12.288.568,31
2008	M14	\$ 139.696	2,02%	143	\$ 403.526,90	\$ 12.692.095,22
2009	01	\$ 150.411	2,02%	142	\$ 431.439,11	\$ 13.123.534,33
2009	02	\$ 150.411	2,02%	141	\$ 428.400,81	\$ 13.551.935,14
2009	03	\$ 150.411	2,02%	140	\$ 425.362,50	\$ 13.977.297,64
2009	04	\$ 150.411	2,02%	139	\$ 422.324,20	\$ 14.399.621,84
2009	05	\$ 150.411	2,02%	138	\$ 419.285,90	\$ 14.818.907,74
2009	06	\$ 150.411	2,02%	137	\$ 416.247,59	\$ 15.235.155,33
2009	M13	\$ 150.411	2,02%	137	\$ 416.247,59	\$ 15.651.402,92
2009	07	\$ 150.411	2,02%	136	\$ 413.209,29	\$ 16.064.612,21
2009	08	\$ 150.411	2,02%	135	\$ 410.170,99	\$ 16.474.783,20
2009	09	\$ 150.411	2,02%	134	\$ 407.132,68	\$ 16.881.915,88
2009	10	\$ 150.411	2,02%	133	\$ 404.094,38	\$ 17.286.010,26
2009	11	\$ 150.411	2,02%	132	\$ 401.056,08	\$ 17.687.066,34
2009	12	\$ 150.411	2,02%	131	\$ 398.017,77	\$ 18.085.084,11
2009	M14	\$ 150.411	2,02%	131	\$ 398.017,77	\$ 18.483.101,88
2010	01	\$ 153.419	2,02%	130	\$ 402.879,06	\$ 18.885.980,94
2010	02	\$ 153.419	2,02%	129	\$ 399.779,99	\$ 19.285.760,93
2010	03	\$ 153.419	2,02%	128	\$ 396.680,92	\$ 19.682.441,85
2010	04	\$ 153.419	2,02%	127	\$ 393.581,85	\$ 20.076.023,69
2010	05	\$ 153.419	2,02%	126	\$ 390.482,78	\$ 20.466.506,47
2010	06	\$ 153.419	2,02%	125	\$ 387.383,71	\$ 20.853.890,18
2010	M13	\$ 153.419	2,02%	125	\$ 387.383,71	\$ 21.241.273,89

2010	07	\$ 153.419	2,02%	124	\$ 384.284,64	\$ 21.625.558,53
2010	08	\$ 153.419	2,02%	123	\$ 381.185,57	\$ 22.006.744,10
2010	09	\$ 153.419	2,02%	122	\$ 378.086,50	\$ 22.384.830,60
2010	10	\$ 153.419	2,02%	121	\$ 374.987,43	\$ 22.759.818,03
2010	11	\$ 153.419	2,02%	120	\$ 371.888,36	\$ 23.131.706,39
2010	12	\$ 153.419	2,02%	119	\$ 368.789,29	\$ 23.500.495,69
2010	M14	\$ 153.419	2,02%	119	\$ 368.789,29	\$ 23.869.284,98
2011	01	\$ 158.283	2,02%	118	\$ 377.282,60	\$ 24.246.567,58
2011	02	\$ 158.283	2,02%	117	\$ 374.085,29	\$ 24.620.652,87
2011	03	\$ 158.283	2,02%	116	\$ 370.887,98	\$ 24.991.540,85
2011	04	\$ 158.283	2,02%	115	\$ 367.690,67	\$ 25.359.231,52
2011	05	\$ 158.283	2,02%	114	\$ 364.493,36	\$ 25.723.724,88
2011	06	\$ 158.283	2,02%	113	\$ 361.296,05	\$ 26.085.020,93
2011	M13	\$ 158.283	2,02%	113	\$ 361.296,05	\$ 26.446.316,98
2011	07	\$ 158.283	2,02%	112	\$ 358.098,74	\$ 26.804.415,72
2011	08	\$ 158.283	2,02%	111	\$ 354.901,43	\$ 27.159.317,15
2011	09	\$ 158.283	2,02%	110	\$ 351.704,12	\$ 27.511.021,27
2011	10	\$ 158.283	2,02%	109	\$ 348.506,81	\$ 27.859.528,08
2011	11	\$ 158.283	2,02%	108	\$ 345.309,50	\$ 28.204.837,58
2011	12	\$ 158.283	2,02%	107	\$ 342.112,19	\$ 28.546.949,77
2011	M14	\$ 158.283	2,02%	107	\$ 342.112,19	\$ 28.889.061,96
2012	01	\$ 164.187	2,02%	106	\$ 351.556,40	\$ 29.240.618,37
2012	02	\$ 164.187	2,02%	105	\$ 348.239,83	\$ 29.588.858,20
2012	03	\$ 164.187	2,02%	104	\$ 344.923,26	\$ 0,00
2012	04	\$ 164.187	2,02%	103	\$ 341.606,69	\$ 30.275.388,16
2012	05	\$ 164.187	2,02%	102	\$ 338.290,13	\$ 30.613.678,29
2012	06	\$ 164.187	2,02%	101	\$ 334.973,56	\$ 30.948.651,84
2012	M13	\$ 164.187	2,02%	101	\$ 334.973,56	\$ 31.283.625,40
2012	07	\$ 164.187	2,02%	100	\$ 331.656,99	\$ 31.615.282,38
2012	08	\$ 164.187	2,02%	99	\$ 328.340,42	\$ 31.943.622,80
2012	09	\$ 164.187	2,02%	98	\$ 325.023,85	\$ 32.268.646,64
2012	10	\$ 164.187	2,02%	97	\$ 321.707,28	\$ 32.590.353,92
2012	11	\$ 164.187	2,02%	96	\$ 318.390,71	\$ 32.908.744,63
2012	12	\$ 164.187	2,02%	95	\$ 315.074,14	\$ 33.223.818,76
2012	M14	\$ 164.187	2,02%	95	\$ 315.074,14	\$ 33.538.892,90
2013	01	\$ 168.193	2,02%	94	\$ 319.364,45	\$ 33.858.257,35
2013	02	\$ 168.193	2,02%	93	\$ 315.966,96	\$ 34.174.224,31
2013	03	\$ 168.193	2,02%	92	\$ 312.569,46	\$ 34.486.793,77
2013	04	\$ 168.193	2,02%	91	\$ 309.171,97	\$ 34.795.965,74
2013	05	\$ 168.193	2,02%	90	\$ 305.774,47	\$ 35.101.740,21
2013	06	\$ 168.193	2,02%	89	\$ 302.376,98	\$ 35.404.117,19
2013	M13	\$ 168.193	2,02%	89	\$ 302.376,98	\$ 35.706.494,17
2013	07	\$ 168.193	2,02%	88	\$ 298.979,49	\$ 36.005.473,66
2013	08	\$ 168.193	2,02%	87	\$ 295.581,99	\$ 36.301.055,65
2013	09	\$ 168.193	2,02%	86	\$ 292.184,50	\$ 36.593.240,15
2013	10	\$ 168.193	2,02%	85	\$ 288.787,00	\$ 36.882.027,15
2013	11	\$ 168.193	2,02%	84	\$ 285.389,51	\$ 37.167.416,66
2013	12	\$ 168.193	2,02%	83	\$ 281.992,02	\$ 37.449.408,67
2013	M14	\$ 168.193	2,02%	83	\$ 281.992,02	\$ 37.731.400,69
2014	01	\$ 171.456	2,02%	82	\$ 283.999,25	\$ 38.015.399,94
2014	02	\$ 171.456	2,02%	81	\$ 280.535,85	\$ 38.295.935,79
2014	03	\$ 171.456	2,02%	80	\$ 277.072,44	\$ 38.573.008,24
2014	04	\$ 171.456	2,02%	79	\$ 273.609,04	\$ 38.846.617,27
2014	05	\$ 171.456	2,02%	78	\$ 270.145,63	\$ 39.116.762,91
2014	06	\$ 171.456	2,02%	77	\$ 266.682,23	\$ 39.383.445,13
2014	M13	\$ 171.456	2,02%	77	\$ 266.682,23	\$ 39.650.127,36
2014	07	\$ 171.456	2,02%	76	\$ 263.218,82	\$ 39.913.346,18

2014	08	\$ 171.456	2,02%	75	\$ 259.755,42	\$ 40.173.101,60
2014	09	\$ 171.456	2,02%	74	\$ 256.292,01	\$ 40.429.393,61
2014	10	\$ 171.456	2,02%	73	\$ 252.828,60	\$ 40.682.222,21
2014	11	\$ 171.456	2,02%	72	\$ 249.365,20	\$ 40.931.587,41
2014	12	\$ 171.456	2,02%	71	\$ 245.901,79	\$ 41.177.489,20
2014	M14	\$ 171.456	2,02%	71	\$ 245.901,79	\$ 41.423.391,00
2015	01	\$ 177.731	2,02%	70	\$ 251.311,63	\$ 41.674.702,63
2015	02	\$ 177.731	2,02%	69	\$ 247.721,47	\$ 41.922.424,10
2015	03	\$ 177.731	2,02%	68	\$ 244.131,30	\$ 42.166.555,40
2015	04	\$ 177.731	2,02%	67	\$ 240.541,13	\$ 42.407.096,53
2015	05	\$ 177.731	2,02%	66	\$ 236.950,97	\$ 42.644.047,50
2015	06	\$ 177.731	2,02%	65	\$ 233.360,80	\$ 42.877.408,30
2015	M13	\$ 177.731	2,02%	65	\$ 233.360,80	\$ 43.110.769,11
2015	07	\$ 177.731	2,02%	64	\$ 229.770,64	\$ 43.340.539,74
2015	08	\$ 177.731	2,02%	63	\$ 226.180,47	\$ 43.566.720,21
2015	09	\$ 177.731	2,02%	62	\$ 222.590,30	\$ 43.789.310,52
2015	10	\$ 177.731	2,02%	61	\$ 219.000,14	\$ 44.008.310,65
2015	11	\$ 177.731	2,02%	60	\$ 215.409,97	\$ 44.223.720,62
2015	12	\$ 177.731	2,02%	59	\$ 211.819,81	\$ 44.435.540,43
2015	M14	\$ 177.731	2,02%	59	\$ 211.819,81	\$ 44.647.360,23
2016	01	\$ 189.763	2,02%	58	\$ 222.326,79	\$ 44.869.687,02
2016	02	\$ 189.763	2,02%	57	\$ 218.493,56	\$ 45.088.180,58
2016	03	\$ 189.763	2,02%	56	\$ 214.660,34	\$ 45.302.840,93
2016	04	\$ 189.763	2,02%	55	\$ 210.827,12	\$ 45.513.668,05
2016	05	\$ 189.763	2,02%	54	\$ 206.993,90	\$ 45.720.661,96
2016	06	\$ 189.763	2,02%	53	\$ 203.160,68	\$ 45.923.822,64
2016	M13	\$ 189.763	2,02%	53	\$ 203.160,68	\$ 46.126.983,32
2016	07	\$ 189.763	2,02%	52	\$ 199.327,46	\$ 46.326.310,79
2016	08	\$ 189.763	2,02%	51	\$ 195.494,24	\$ 46.521.805,03
2016	09	\$ 189.763	2,02%	50	\$ 191.661,02	\$ 46.713.466,05
2016	10	\$ 189.763	2,02%	49	\$ 187.827,80	\$ 46.901.293,85
2016	11	\$ 189.763	2,02%	48	\$ 183.994,58	\$ 47.085.288,43
2016	12	\$ 189.763	2,02%	47	\$ 180.161,36	\$ 47.265.449,79
2016	M14	\$ 189.763	2,02%	47	\$ 180.161,36	\$ 47.445.611,15
2017	01	\$ 200.675	2,02%	46	\$ 186.467,01	\$ 47.632.078,16
2017	02	\$ 200.675	2,02%	45	\$ 182.413,38	\$ 47.814.491,54
2017	03	\$ 200.675	2,02%	44	\$ 178.359,75	\$ 47.992.851,29
2017	04	\$ 200.675	2,02%	43	\$ 174.306,12	\$ 48.167.157,40
2017	05	\$ 200.675	2,02%	42	\$ 170.252,49	\$ 48.337.409,89
2017	06	\$ 200.675	2,02%	41	\$ 166.198,86	\$ 48.503.608,74
2017	M13	\$ 200.675	2,02%	41	\$ 166.198,86	\$ 48.669.807,60
2017	07	\$ 200.675	2,02%	40	\$ 162.145,22	\$ 48.831.952,82
2017	08	\$ 200.675	2,02%	39	\$ 158.091,59	\$ 48.990.044,42
2017	09	\$ 200.675	2,02%	38	\$ 154.037,96	\$ 49.144.082,38
2017	10	\$ 200.675	2,02%	37	\$ 149.984,33	\$ 49.294.066,71
2017	11	\$ 200.675	2,02%	36	\$ 145.930,70	\$ 49.439.997,42
2017	12	\$ 200.675	2,02%	35	\$ 141.877,07	\$ 49.581.874,49
2017	M14	\$ 200.675	2,02%	35	\$ 141.877,07	\$ 49.723.751,56
2018	01	\$ 208.882	2,02%	34	\$ 143.460,42	\$ 49.867.211,98
2018	02	\$ 208.882	2,02%	33	\$ 139.241,00	\$ 50.006.452,97
2018	03	\$ 208.882	2,02%	32	\$ 135.021,57	\$ 50.141.474,54
2018	04	\$ 208.882	2,02%	31	\$ 130.802,15	\$ 50.272.276,69
2018	05	\$ 208.882	2,02%	30	\$ 126.582,72	\$ 50.398.859,42
2018	06	\$ 208.882	2,02%	29	\$ 122.363,30	\$ 50.521.222,71
2018	M13	\$ 208.882	2,02%	29	\$ 122.363,30	\$ 50.643.586,01
2018	07	\$ 208.882	2,02%	28	\$ 118.143,87	\$ 50.761.729,89
2018	08	\$ 208.882	2,02%	27	\$ 113.924,45	\$ 50.875.654,34

2018	09	\$ 208.882	2,02%	26	\$ 109.705,03	\$ 50.985.359,37
2018	10	\$ 208.882	2,02%	25	\$ 105.485,60	\$ 51.090.844,97
2018	11	\$ 208.882	2,02%	24	\$ 101.266,18	\$ 51.192.111,15
2018	12	\$ 208.882	2,02%	23	\$ 97.046,75	\$ 51.289.157,90
2018	M14	\$ 208.882	2,02%	23	\$ 97.046,75	\$ 51.386.204,66
2019	01	\$ 215.525	2,02%	22	\$ 95.779,24	\$ 51.481.983,90
2019	02	\$ 215.525	2,02%	21	\$ 91.425,64	\$ 51.573.409,53
2019	03	\$ 215.525	2,02%	20	\$ 87.072,04	\$ 51.660.481,57
2019	04	\$ 215.525	2,02%	19	\$ 82.718,43	\$ 51.743.200,00
2019	05	\$ 215.525	2,02%	18	\$ 78.364,83	\$ 51.821.564,83
2019	06	\$ 215.525	2,02%	17	\$ 74.011,23	\$ 51.895.576,07
2019	M13	\$ 215.525	2,02%	17	\$ 74.011,23	\$ 51.969.587,30
2019	07	\$ 215.525	2,02%	16	\$ 69.657,63	\$ 52.039.244,92
2019	08	\$ 215.525	2,02%	15	\$ 65.304,03	\$ 52.104.548,95
2019	09	\$ 215.525	2,02%	14	\$ 60.950,43	\$ 52.165.499,38
2019	10	\$ 215.525	2,02%	13	\$ 56.596,82	\$ 52.222.096,20
2019	11	\$ 215.525	2,02%	12	\$ 52.243,22	\$ 52.274.339,42
2019	12	\$ 215.525	2,02%	11	\$ 47.889,62	\$ 52.322.229,04
2019	M14	\$ 215.525	2,02%	11	\$ 47.889,62	\$ 52.370.118,66
2020	01	\$ 223.715	2,02%	10	\$ 45.190,39	\$ 52.415.309,05
2020	02	\$ 223.715	2,02%	9	\$ 40.671,35	\$ 52.455.980,40
2020	03	\$ 223.715	2,02%	8	\$ 36.152,31	\$ 52.492.132,70
2020	04	\$ 223.715	2,02%	7	\$ 31.633,27	\$ 52.523.765,98
2020	05	\$ 223.715	2,02%	6	\$ 27.114,23	\$ 52.550.880,21
2020	06	\$ 223.715	2,02%	5	\$ 22.595,19	\$ 52.573.475,40
2020	M13	\$ 223.715	2,02%	5	\$ 22.595,19	\$ 52.596.070,59
2020	07	\$ 223.715	2,02%	4	\$ 18.076,15	\$ 52.614.146,75
2020	08	\$ 223.715	2,02%	3	\$ 13.557,12	\$ 52.627.703,86
2020	09	\$ 223.715	2,02%	2	\$ 9.038,08	\$ 52.636.741,94
2020	10	\$ 223.715	2,02%	1	\$ 4.519,04	\$ 52.641.260,98

57. JESÚS EMIRO GENTIL PINEDA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2007	\$ 248.643,36	5,69%	7	\$ 1.740.503,52
2008	\$ 262.791,17	7,67%	14	\$ 3.679.076,34
2009	\$ 282.947,25	2,00%	14	\$ 3.961.261,50
2010	\$ 288.606,19	3,17%	14	\$ 4.040.486,73
2011	\$ 297.755,01	3,73%	14	\$ 4.168.570,16
2012	\$ 308.861,27	2,44%	14	\$ 4.324.057,82
2013	\$ 316.397,49	1,94%	14	\$ 4.429.564,83
2014	\$ 322.535,60	3,66%	14	\$ 4.515.498,39
2015	\$ 334.340,40	6,77%	14	\$ 4.680.765,63
2016	\$ 356.975,25	5,75%	14	\$ 4.997.653,46
2017	\$ 377.501,32	4,09%	14	\$ 5.285.018,54
2018	\$ 392.941,13	3,18%	14	\$ 5.501.175,80
2019	\$ 405.436,66	3,80%	14	\$ 5.676.113,19
2020	\$ 420.843,25	1,61%	11	\$ 4.629.275,74
				\$ 61.629.021,64

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2007	07	\$ 248.643	2,02%	160	\$ 803.614,18	\$ 803.614,18
2007	08	\$ 248.643	2,02%	159	\$ 798.591,59	\$ 1.602.205,76
2007	09	\$ 248.643	2,02%	158	\$ 793.569,00	\$ 2.395.774,76
2007	10	\$ 248.643	2,02%	157	\$ 788.546,41	\$ 3.184.321,17

2007	11	\$ 248.643	2,02%	156	\$ 783.523,82	\$ 3.967.844,99
2007	12	\$ 248.643	2,02%	155	\$ 778.501,23	\$ 4.746.346,23
2007	M14	\$ 248.643	2,02%	155	\$ 778.501,23	\$ 5.524.847,46
2008	01	\$ 262.791	2,02%	154	\$ 817.490,76	\$ 6.342.338,22
2008	02	\$ 262.791	2,02%	153	\$ 812.182,38	\$ 7.154.520,60
2008	03	\$ 262.791	2,02%	152	\$ 806.874,00	\$ 7.961.394,60
2008	04	\$ 262.791	2,02%	151	\$ 801.565,62	\$ 8.762.960,22
2008	05	\$ 262.791	2,02%	150	\$ 796.257,24	\$ 9.559.217,46
2008	06	\$ 262.791	2,02%	149	\$ 790.948,85	\$ 10.350.166,31
2008	M13	\$ 262.791	2,02%	149	\$ 790.948,85	\$ 11.141.115,17
2008	07	\$ 262.791	2,02%	148	\$ 785.640,47	\$ 11.926.755,64
2008	08	\$ 262.791	2,02%	147	\$ 780.332,09	\$ 12.707.087,73
2008	09	\$ 262.791	2,02%	146	\$ 775.023,71	\$ 13.482.111,44
2008	10	\$ 262.791	2,02%	145	\$ 769.715,33	\$ 14.251.826,77
2008	11	\$ 262.791	2,02%	144	\$ 764.406,95	\$ 15.016.233,72
2008	12	\$ 262.791	2,02%	143	\$ 759.098,57	\$ 15.775.332,29
2008	M14	\$ 262.791	2,02%	143	\$ 759.098,57	\$ 16.534.430,85
2009	01	\$ 282.947	2,02%	142	\$ 811.605,89	\$ 17.346.036,74
2009	02	\$ 282.947	2,02%	141	\$ 805.890,36	\$ 18.151.927,10
2009	03	\$ 282.947	2,02%	140	\$ 800.174,82	\$ 18.952.101,92
2009	04	\$ 282.947	2,02%	139	\$ 794.459,29	\$ 19.746.561,21
2009	05	\$ 282.947	2,02%	138	\$ 788.743,75	\$ 20.535.304,96
2009	06	\$ 282.947	2,02%	137	\$ 783.028,22	\$ 21.318.333,18
2009	M13	\$ 282.947	2,02%	137	\$ 783.028,22	\$ 22.101.361,40
2009	07	\$ 282.947	2,02%	136	\$ 777.312,68	\$ 22.878.674,08
2009	08	\$ 282.947	2,02%	135	\$ 771.597,15	\$ 23.650.271,23
2009	09	\$ 282.947	2,02%	134	\$ 765.881,62	\$ 24.416.152,85
2009	10	\$ 282.947	2,02%	133	\$ 760.166,08	\$ 25.176.318,93
2009	11	\$ 282.947	2,02%	132	\$ 754.450,55	\$ 25.930.769,48
2009	12	\$ 282.947	2,02%	131	\$ 748.735,01	\$ 26.679.504,49
2009	M14	\$ 282.947	2,02%	131	\$ 748.735,01	\$ 27.428.239,50
2010	01	\$ 288.606	2,02%	130	\$ 757.879,87	\$ 28.186.119,37
2010	02	\$ 288.606	2,02%	129	\$ 752.050,02	\$ 28.938.169,39
2010	03	\$ 288.606	2,02%	128	\$ 746.220,18	\$ 29.684.389,57
2010	04	\$ 288.606	2,02%	127	\$ 740.390,33	\$ 30.424.779,90
2010	05	\$ 288.606	2,02%	126	\$ 734.560,49	\$ 31.159.340,39
2010	06	\$ 288.606	2,02%	125	\$ 728.730,64	\$ 31.888.071,03
2010	M13	\$ 288.606	2,02%	125	\$ 728.730,64	\$ 32.616.801,67
2010	07	\$ 288.606	2,02%	124	\$ 722.900,80	\$ 33.339.702,47
2010	08	\$ 288.606	2,02%	123	\$ 717.070,95	\$ 34.056.773,42
2010	09	\$ 288.606	2,02%	122	\$ 711.241,11	\$ 34.768.014,52
2010	10	\$ 288.606	2,02%	121	\$ 705.411,26	\$ 35.473.425,78
2010	11	\$ 288.606	2,02%	120	\$ 699.581,42	\$ 36.173.007,20
2010	12	\$ 288.606	2,02%	119	\$ 693.751,57	\$ 36.866.758,77
2010	M14	\$ 288.606	2,02%	119	\$ 693.751,57	\$ 37.560.510,34
2011	01	\$ 297.755	2,02%	118	\$ 709.728,84	\$ 38.270.239,19
2011	02	\$ 297.755	2,02%	117	\$ 703.714,19	\$ 38.973.953,38
2011	03	\$ 297.755	2,02%	116	\$ 697.699,54	\$ 39.671.652,92
2011	04	\$ 297.755	2,02%	115	\$ 691.684,89	\$ 40.363.337,81
2011	05	\$ 297.755	2,02%	114	\$ 685.670,24	\$ 41.049.008,05
2011	06	\$ 297.755	2,02%	113	\$ 679.655,59	\$ 41.728.663,64
2011	M13	\$ 297.755	2,02%	113	\$ 679.655,59	\$ 42.408.319,23
2011	07	\$ 297.755	2,02%	112	\$ 673.640,94	\$ 43.081.960,17
2011	08	\$ 297.755	2,02%	111	\$ 667.626,29	\$ 43.749.586,45
2011	09	\$ 297.755	2,02%	110	\$ 661.611,63	\$ 44.411.198,09
2011	10	\$ 297.755	2,02%	109	\$ 655.596,98	\$ 45.066.795,07
2011	11	\$ 297.755	2,02%	108	\$ 649.582,33	\$ 45.716.377,40

2011	12	\$ 297.755	2,02%	107	\$ 643.567,68	\$ 46.359.945,08
2011	M14	\$ 297.755	2,02%	107	\$ 643.567,68	\$ 47.003.512,76
2012	01	\$ 308.861	2,02%	106	\$ 661.333,76	\$ 47.664.846,52
2012	02	\$ 308.861	2,02%	105	\$ 655.094,76	\$ 48.319.941,28
2012	03	\$ 308.861	2,02%	104	\$ 648.855,76	\$ 0,00
2012	04	\$ 308.861	2,02%	103	\$ 642.616,76	\$ 49.611.413,81
2012	05	\$ 308.861	2,02%	102	\$ 636.377,77	\$ 50.247.791,58
2012	06	\$ 308.861	2,02%	101	\$ 630.138,77	\$ 50.877.930,34
2012	M13	\$ 308.861	2,02%	101	\$ 630.138,77	\$ 51.508.069,11
2012	07	\$ 308.861	2,02%	100	\$ 623.899,77	\$ 52.131.968,88
2012	08	\$ 308.861	2,02%	99	\$ 617.660,77	\$ 52.749.629,66
2012	09	\$ 308.861	2,02%	98	\$ 611.421,78	\$ 53.361.051,43
2012	10	\$ 308.861	2,02%	97	\$ 605.182,78	\$ 53.966.234,21
2012	11	\$ 308.861	2,02%	96	\$ 598.943,78	\$ 54.565.177,99
2012	12	\$ 308.861	2,02%	95	\$ 592.704,78	\$ 55.157.882,78
2012	M14	\$ 308.861	2,02%	95	\$ 592.704,78	\$ 55.750.587,56
2013	01	\$ 316.397	2,02%	94	\$ 600.775,55	\$ 56.351.363,11
2013	02	\$ 316.397	2,02%	93	\$ 594.384,32	\$ 56.945.747,43
2013	03	\$ 316.397	2,02%	92	\$ 587.993,09	\$ 57.533.740,52
2013	04	\$ 316.397	2,02%	91	\$ 581.601,86	\$ 58.115.342,38
2013	05	\$ 316.397	2,02%	90	\$ 575.210,63	\$ 58.690.553,02
2013	06	\$ 316.397	2,02%	89	\$ 568.819,40	\$ 59.259.372,42
2013	M13	\$ 316.397	2,02%	89	\$ 568.819,40	\$ 59.828.191,83
2013	07	\$ 316.397	2,02%	88	\$ 562.428,17	\$ 60.390.620,00
2013	08	\$ 316.397	2,02%	87	\$ 556.036,95	\$ 60.946.656,95
2013	09	\$ 316.397	2,02%	86	\$ 549.645,72	\$ 61.496.302,66
2013	10	\$ 316.397	2,02%	85	\$ 543.254,49	\$ 62.039.557,15
2013	11	\$ 316.397	2,02%	84	\$ 536.863,26	\$ 62.576.420,41
2013	12	\$ 316.397	2,02%	83	\$ 530.472,03	\$ 63.106.892,44
2013	M14	\$ 316.397	2,02%	83	\$ 530.472,03	\$ 63.637.364,46
2014	01	\$ 322.536	2,02%	82	\$ 534.247,97	\$ 64.171.612,43
2014	02	\$ 322.536	2,02%	81	\$ 527.732,75	\$ 64.699.345,18
2014	03	\$ 322.536	2,02%	80	\$ 521.217,53	\$ 65.220.562,71
2014	04	\$ 322.536	2,02%	79	\$ 514.702,31	\$ 65.735.265,02
2014	05	\$ 322.536	2,02%	78	\$ 508.187,09	\$ 66.243.452,11
2014	06	\$ 322.536	2,02%	77	\$ 501.671,87	\$ 66.745.123,98
2014	M13	\$ 322.536	2,02%	77	\$ 501.671,87	\$ 67.246.795,85
2014	07	\$ 322.536	2,02%	76	\$ 495.156,65	\$ 67.741.952,50
2014	08	\$ 322.536	2,02%	75	\$ 488.641,43	\$ 68.230.593,93
2014	09	\$ 322.536	2,02%	74	\$ 482.126,21	\$ 68.712.720,15
2014	10	\$ 322.536	2,02%	73	\$ 475.610,99	\$ 69.188.331,14
2014	11	\$ 322.536	2,02%	72	\$ 469.095,78	\$ 69.657.426,92
2014	12	\$ 322.536	2,02%	71	\$ 462.580,56	\$ 70.120.007,47
2014	M14	\$ 322.536	2,02%	71	\$ 462.580,56	\$ 70.582.588,03
2015	01	\$ 334.340	2,02%	70	\$ 472.757,33	\$ 71.055.345,36
2015	02	\$ 334.340	2,02%	69	\$ 466.003,65	\$ 71.521.349,01
2015	03	\$ 334.340	2,02%	68	\$ 459.249,98	\$ 71.980.598,99
2015	04	\$ 334.340	2,02%	67	\$ 452.496,30	\$ 72.433.095,29
2015	05	\$ 334.340	2,02%	66	\$ 445.742,62	\$ 72.878.837,91
2015	06	\$ 334.340	2,02%	65	\$ 438.988,95	\$ 73.317.826,86
2015	M13	\$ 334.340	2,02%	65	\$ 438.988,95	\$ 73.756.815,81
2015	07	\$ 334.340	2,02%	64	\$ 432.235,27	\$ 74.189.051,08
2015	08	\$ 334.340	2,02%	63	\$ 425.481,60	\$ 74.614.532,68
2015	09	\$ 334.340	2,02%	62	\$ 418.727,92	\$ 75.033.260,60
2015	10	\$ 334.340	2,02%	61	\$ 411.974,24	\$ 75.445.234,84
2015	11	\$ 334.340	2,02%	60	\$ 405.220,57	\$ 75.850.455,41
2015	12	\$ 334.340	2,02%	59	\$ 398.466,89	\$ 76.248.922,30

2015	M14	\$ 334.340	2,02%	59	\$ 398.466,89	\$ 76.647.389,19
2016	01	\$ 356.975	2,02%	58	\$ 418.232,20	\$ 77.065.621,39
2016	02	\$ 356.975	2,02%	57	\$ 411.021,30	\$ 77.476.642,69
2016	03	\$ 356.975	2,02%	56	\$ 403.810,40	\$ 77.880.453,09
2016	04	\$ 356.975	2,02%	55	\$ 396.599,50	\$ 78.277.052,59
2016	05	\$ 356.975	2,02%	54	\$ 389.388,60	\$ 78.666.441,19
2016	06	\$ 356.975	2,02%	53	\$ 382.177,70	\$ 79.048.618,89
2016	M13	\$ 356.975	2,02%	53	\$ 382.177,70	\$ 79.430.796,59
2016	07	\$ 356.975	2,02%	52	\$ 374.966,80	\$ 79.805.763,39
2016	08	\$ 356.975	2,02%	51	\$ 367.755,90	\$ 80.173.519,29
2016	09	\$ 356.975	2,02%	50	\$ 360.545,00	\$ 80.534.064,29
2016	10	\$ 356.975	2,02%	49	\$ 353.334,10	\$ 80.887.398,39
2016	11	\$ 356.975	2,02%	48	\$ 346.123,20	\$ 81.233.521,59
2016	12	\$ 356.975	2,02%	47	\$ 338.912,30	\$ 81.572.433,89
2016	M14	\$ 356.975	2,02%	47	\$ 338.912,30	\$ 81.911.346,19
2017	01	\$ 377.501	2,02%	46	\$ 350.774,23	\$ 82.262.120,42
2017	02	\$ 377.501	2,02%	45	\$ 343.148,70	\$ 82.605.269,13
2017	03	\$ 377.501	2,02%	44	\$ 335.523,18	\$ 82.940.792,30
2017	04	\$ 377.501	2,02%	43	\$ 327.897,65	\$ 83.268.689,95
2017	05	\$ 377.501	2,02%	42	\$ 320.272,12	\$ 83.588.962,08
2017	06	\$ 377.501	2,02%	41	\$ 312.646,60	\$ 83.901.608,67
2017	M13	\$ 377.501	2,02%	41	\$ 312.646,60	\$ 84.214.255,27
2017	07	\$ 377.501	2,02%	40	\$ 305.021,07	\$ 84.519.276,34
2017	08	\$ 377.501	2,02%	39	\$ 297.395,54	\$ 84.816.671,88
2017	09	\$ 377.501	2,02%	38	\$ 289.770,02	\$ 85.106.441,90
2017	10	\$ 377.501	2,02%	37	\$ 282.144,49	\$ 85.388.586,39
2017	11	\$ 377.501	2,02%	36	\$ 274.518,96	\$ 85.663.105,35
2017	12	\$ 377.501	2,02%	35	\$ 266.893,44	\$ 85.929.998,79
2017	M14	\$ 377.501	2,02%	35	\$ 266.893,44	\$ 86.196.892,22
2018	01	\$ 392.941	2,02%	34	\$ 269.871,97	\$ 86.466.764,19
2018	02	\$ 392.941	2,02%	33	\$ 261.934,56	\$ 86.728.698,75
2018	03	\$ 392.941	2,02%	32	\$ 253.997,15	\$ 86.982.695,89
2018	04	\$ 392.941	2,02%	31	\$ 246.059,73	\$ 87.228.755,63
2018	05	\$ 392.941	2,02%	30	\$ 238.122,32	\$ 87.466.877,95
2018	06	\$ 392.941	2,02%	29	\$ 230.184,91	\$ 87.697.062,86
2018	M13	\$ 392.941	2,02%	29	\$ 230.184,91	\$ 87.927.247,78
2018	07	\$ 392.941	2,02%	28	\$ 222.247,50	\$ 88.149.495,28
2018	08	\$ 392.941	2,02%	27	\$ 214.310,09	\$ 88.363.805,37
2018	09	\$ 392.941	2,02%	26	\$ 206.372,68	\$ 88.570.178,05
2018	10	\$ 392.941	2,02%	25	\$ 198.435,27	\$ 88.768.613,32
2018	11	\$ 392.941	2,02%	24	\$ 190.497,86	\$ 88.959.111,18
2018	12	\$ 392.941	2,02%	23	\$ 182.560,45	\$ 89.141.671,63
2018	M14	\$ 392.941	2,02%	23	\$ 182.560,45	\$ 89.324.232,08
2019	01	\$ 405.437	2,02%	22	\$ 180.176,05	\$ 89.504.408,13
2019	02	\$ 405.437	2,02%	21	\$ 171.986,23	\$ 89.676.394,36
2019	03	\$ 405.437	2,02%	20	\$ 163.796,41	\$ 89.840.190,77
2019	04	\$ 405.437	2,02%	19	\$ 155.606,59	\$ 89.995.797,35
2019	05	\$ 405.437	2,02%	18	\$ 147.416,77	\$ 90.143.214,12
2019	06	\$ 405.437	2,02%	17	\$ 139.226,95	\$ 90.282.441,07
2019	M13	\$ 405.437	2,02%	17	\$ 139.226,95	\$ 90.421.668,02
2019	07	\$ 405.437	2,02%	16	\$ 131.037,13	\$ 90.552.705,15
2019	08	\$ 405.437	2,02%	15	\$ 122.847,31	\$ 90.675.552,45
2019	09	\$ 405.437	2,02%	14	\$ 114.657,49	\$ 90.790.209,94
2019	10	\$ 405.437	2,02%	13	\$ 106.467,67	\$ 90.896.677,60
2019	11	\$ 405.437	2,02%	12	\$ 98.277,85	\$ 90.994.955,45
2019	12	\$ 405.437	2,02%	11	\$ 90.088,03	\$ 91.085.043,47
2019	M14	\$ 405.437	2,02%	11	\$ 90.088,03	\$ 91.175.131,50

2020	01	\$ 420.843	2,02%	10	\$ 85.010,34	\$ 91.260.141,84
2020	02	\$ 420.843	2,02%	9	\$ 76.509,30	\$ 91.336.651,14
2020	03	\$ 420.843	2,02%	8	\$ 68.008,27	\$ 91.404.659,41
2020	04	\$ 420.843	2,02%	7	\$ 59.507,24	\$ 91.464.166,64
2020	05	\$ 420.843	2,02%	6	\$ 51.006,20	\$ 91.515.172,85
2020	06	\$ 420.843	2,02%	5	\$ 42.505,17	\$ 91.557.678,01
2020	M13	\$ 420.843	2,02%	5	\$ 42.505,17	\$ 91.600.183,18
2020	07	\$ 420.843	2,02%	4	\$ 34.004,13	\$ 91.634.187,32
2020	08	\$ 420.843	2,02%	3	\$ 25.503,10	\$ 91.659.690,42
2020	09	\$ 420.843	2,02%	2	\$ 17.002,07	\$ 91.676.692,48
2020	10	\$ 420.843	2,02%	1	\$ 8.501,03	\$ 91.685.193,52

58. GEORGINA GUERRERO sustituta de EMILIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1991	\$ 20.684,14	26,82%	6	\$ 124.104,84
1992	\$ 26.231,63	25,13%	14	\$ 367.242,77
1993	\$ 32.823,63	22,60%	14	\$ 459.530,88
1994	\$ 40.241,78	22,59%	14	\$ 563.384,85
1995	\$ 49.332,39	19,46%	14	\$ 690.653,49
1996	\$ 58.932,48	21,63%	14	\$ 825.054,66
1997	\$ 71.679,57	17,68%	14	\$ 1.003.513,99
1998	\$ 84.352,52	16,70%	14	\$ 1.180.935,26
1999	\$ 98.439,39	9,23%	14	\$ 1.378.151,45
2000	\$ 107.525,34	8,75%	14	\$ 1.505.354,83
2001	\$ 116.933,81	7,65%	14	\$ 1.637.073,37
2002	\$ 125.879,25	6,99%	14	\$ 1.762.309,49
2003	\$ 134.678,21	6,49%	14	\$ 1.885.494,92
2004	\$ 143.418,82	5,50%	14	\$ 2.007.863,54
2005	\$ 151.306,86	4,85%	14	\$ 2.118.296,04
2006	\$ 158.645,24	4,48%	14	\$ 2.221.033,39
2007	\$ 165.752,55	5,69%	14	\$ 2.320.535,69
2008	\$ 175.183,87	7,67%	14	\$ 2.452.574,17
2009	\$ 188.620,47	2,00%	14	\$ 2.640.686,61
2010	\$ 192.392,88	3,17%	14	\$ 2.693.500,34
2011	\$ 198.491,74	3,73%	14	\$ 2.778.884,30
2012	\$ 205.895,48	2,44%	14	\$ 2.882.536,69
2013	\$ 210.919,33	1,94%	14	\$ 2.952.870,58
2014	\$ 215.011,16	3,66%	14	\$ 3.010.156,27
2015	\$ 222.880,57	6,77%	14	\$ 3.120.327,99
2016	\$ 237.969,59	5,75%	14	\$ 3.331.574,20
2017	\$ 251.652,84	4,09%	14	\$ 3.523.139,71
2018	\$ 261.945,44	3,18%	14	\$ 3.667.236,13
2019	\$ 270.275,30	3,80%	14	\$ 3.783.854,23
2020	\$ 280.545,76	1,61%	11	\$ 3.086.003,40
				\$ 46.583.209,75

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
1991	01	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 133.284,46
1991	02	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 266.568,92
1991	03	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 399.853,38
1991	04	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 533.137,85
1991	05	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 666.422,31
1991	06	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 799.706,77
1991	M13	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 932.991,23
1991	07	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.066.275,69

1991	08	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.199.560,15
1991	09	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.332.844,61
1991	10	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.466.129,07
1991	11	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.599.413,54
1991	12	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.732.698,00
1991	M14	\$ 20.684	2,02%	319	\$ 133.284,46	\$ 1.865.982,46
1992	01	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.035.013,81
1992	02	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.204.045,17
1992	03	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.373.076,52
1992	04	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.542.107,87
1992	05	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.711.139,23
1992	06	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 2.880.170,58
1992	M13	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.049.201,94
1992	07	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.218.233,29
1992	08	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.387.264,64
1992	09	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.556.296,00
1992	10	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.725.327,35
1992	11	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 3.894.358,70
1992	12	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 4.063.390,06
1992	M14	\$ 26.232	2,02%	319	\$ 169.031,35	\$ 4.232.421,41
1993	01	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 4.443.930,35
1993	02	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 4.655.439,28
1993	03	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 4.866.948,21
1993	04	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 5.078.457,15
1993	05	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 5.289.966,08
1993	06	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 5.501.475,01
1993	M13	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 5.712.983,94
1993	07	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 5.924.492,88
1993	08	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 6.136.001,81
1993	09	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 6.347.510,74
1993	10	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 6.559.019,68
1993	11	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 6.770.528,61
1993	12	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 6.982.037,54
1993	M14	\$ 32.824	2,02%	319	\$ 211.508,93	\$ 7.193.546,48
1994	01	\$ 40.242	2,02%	319	\$ 259.309,95	\$ 7.452.856,43
1994	02	\$ 40.242	2,02%	319	\$ 259.309,95	\$ 7.712.166,38
1994	03	\$ 40.242	2,02%	319	\$ 259.309,95	\$ 7.971.476,33
1994	04	\$ 40.242	2,02%	319	\$ 259.309,95	\$ 8.230.786,28
1994	05	\$ 40.242	2,02%	318	\$ 258.497,07	\$ 8.489.283,35
1994	06	\$ 40.242	2,02%	317	\$ 257.684,18	\$ 8.746.967,54
1994	M13	\$ 40.242	2,02%	317	\$ 257.684,18	\$ 9.004.651,72
1994	07	\$ 40.242	2,02%	316	\$ 256.871,30	\$ 9.261.523,02
1994	08	\$ 40.242	2,02%	315	\$ 256.058,42	\$ 9.517.581,44
1994	09	\$ 40.242	2,02%	314	\$ 255.245,53	\$ 9.772.826,97
1994	10	\$ 40.242	2,02%	313	\$ 254.432,65	\$ 10.027.259,62
1994	11	\$ 40.242	2,02%	312	\$ 253.619,76	\$ 10.280.879,38
1994	12	\$ 40.242	2,02%	311	\$ 252.806,88	\$ 10.533.686,26
1994	M14	\$ 40.242	2,02%	311	\$ 252.806,88	\$ 10.786.493,15
1995	01	\$ 49.332	2,02%	310	\$ 308.919,44	\$ 11.095.412,59
1995	02	\$ 49.332	2,02%	309	\$ 307.922,93	\$ 11.403.335,51
1995	03	\$ 49.332	2,02%	308	\$ 306.926,41	\$ 11.710.261,93
1995	04	\$ 49.332	2,02%	307	\$ 305.929,90	\$ 12.016.191,82
1995	05	\$ 49.332	2,02%	306	\$ 304.933,38	\$ 12.321.125,21
1995	06	\$ 49.332	2,02%	305	\$ 303.936,87	\$ 12.625.062,08
1995	07	\$ 49.332	2,02%	305	\$ 303.936,87	\$ 12.928.998,95
1995	07	\$ 49.332	2,02%	304	\$ 302.940,36	\$ 13.231.939,30
1995	08	\$ 49.332	2,02%	303	\$ 301.943,84	\$ 13.533.883,14
1995	09	\$ 49.332	2,02%	302	\$ 300.947,33	\$ 13.834.830,47
1995	10	\$ 49.332	2,02%	301	\$ 299.950,81	\$ 14.134.781,28
1995	11	\$ 49.332	2,02%	300	\$ 298.954,30	\$ 14.433.735,58
1995	12	\$ 49.332	2,02%	299	\$ 297.957,78	\$ 14.731.693,36
1995	M14	\$ 49.332	2,02%	299	\$ 297.957,78	\$ 15.029.651,15

1996	01	\$ 58.932	2,02%	298	\$ 354.749,93	\$ 15.384.401,08
1996	02	\$ 58.932	2,02%	297	\$ 353.559,50	\$ 15.737.960,58
1996	03	\$ 58.932	2,02%	296	\$ 352.369,06	\$ 16.090.329,64
1996	04	\$ 58.932	2,02%	295	\$ 351.178,62	\$ 16.441.508,26
1996	05	\$ 58.932	2,02%	294	\$ 349.988,19	\$ 16.791.496,45
1996	06	\$ 58.932	2,02%	293	\$ 348.797,75	\$ 17.140.294,20
1996	M13	\$ 58.932	2,02%	293	\$ 348.797,75	\$ 17.489.091,95
1996	07	\$ 58.932	2,02%	292	\$ 347.607,32	\$ 17.836.699,27
1996	08	\$ 58.932	2,02%	291	\$ 346.416,88	\$ 18.183.116,15
1996	09	\$ 58.932	2,02%	290	\$ 345.226,44	\$ 18.528.342,59
1996	10	\$ 58.932	2,02%	289	\$ 344.036,01	\$ 18.872.378,60
1996	11	\$ 58.932	2,02%	288	\$ 342.845,57	\$ 19.215.224,17
1996	12	\$ 58.932	2,02%	287	\$ 341.655,14	\$ 19.556.879,31
1996	M14	\$ 58.932	2,02%	287	\$ 341.655,14	\$ 19.898.534,45
1997	01	\$ 71.680	2,02%	286	\$ 414.107,21	\$ 20.312.641,66
1997	02	\$ 71.680	2,02%	285	\$ 412.659,29	\$ 20.725.300,95
1997	03	\$ 71.680	2,02%	284	\$ 411.211,36	\$ 21.136.512,31
1997	04	\$ 71.680	2,02%	283	\$ 409.763,43	\$ 21.546.275,74
1997	05	\$ 71.680	2,02%	282	\$ 408.315,51	\$ 21.954.591,25
1997	06	\$ 71.680	2,02%	281	\$ 406.867,58	\$ 22.361.458,82
1997	M13	\$ 71.680	2,02%	281	\$ 406.867,58	\$ 22.768.326,40
1997	07	\$ 71.680	2,02%	280	\$ 405.419,65	\$ 23.173.746,05
1997	08	\$ 71.680	2,02%	279	\$ 403.971,72	\$ 23.577.717,78
1997	09	\$ 71.680	2,02%	278	\$ 402.523,80	\$ 23.980.241,57
1997	10	\$ 71.680	2,02%	277	\$ 401.075,87	\$ 24.381.317,44
1997	11	\$ 71.680	2,02%	276	\$ 399.627,94	\$ 24.780.945,38
1997	12	\$ 71.680	2,02%	275	\$ 398.180,01	\$ 25.179.125,40
1997	M14	\$ 71.680	2,02%	275	\$ 398.180,01	\$ 25.577.305,41
1998	01	\$ 84.353	2,02%	274	\$ 466.874,32	\$ 26.044.179,73
1998	02	\$ 84.353	2,02%	273	\$ 465.170,40	\$ 26.509.350,13
1998	03	\$ 84.353	2,02%	272	\$ 463.466,48	\$ 26.972.816,61
1998	04	\$ 84.353	2,02%	271	\$ 461.762,56	\$ 27.434.579,17
1998	05	\$ 84.353	2,02%	270	\$ 460.058,64	\$ 27.894.637,80
1998	06	\$ 84.353	2,02%	269	\$ 458.354,72	\$ 28.352.992,52
1998	M13	\$ 84.353	2,02%	269	\$ 458.354,72	\$ 28.811.347,23
1998	07	\$ 84.353	2,02%	268	\$ 456.650,79	\$ 29.267.998,03
1998	08	\$ 84.353	2,02%	267	\$ 454.946,87	\$ 29.722.944,90
1998	09	\$ 84.353	2,02%	266	\$ 453.242,95	\$ 30.176.187,85
1998	10	\$ 84.353	2,02%	265	\$ 451.539,03	\$ 30.627.726,89
1998	11	\$ 84.353	2,02%	264	\$ 449.835,11	\$ 31.077.562,00
1998	12	\$ 84.353	2,02%	263	\$ 448.131,19	\$ 31.525.693,19
1998	M14	\$ 84.353	2,02%	263	\$ 448.131,19	\$ 31.973.824,38
1999	01	\$ 98.439	2,02%	262	\$ 520.980,62	\$ 32.494.805,00
1999	02	\$ 98.439	2,02%	261	\$ 518.992,15	\$ 33.013.797,15
1999	03	\$ 98.439	2,02%	260	\$ 517.003,67	\$ 33.530.800,82
1999	04	\$ 98.439	2,02%	259	\$ 515.015,20	\$ 34.045.816,02
1999	05	\$ 98.439	2,02%	258	\$ 513.026,72	\$ 34.558.842,74
1999	06	\$ 98.439	2,02%	257	\$ 511.038,24	\$ 35.069.880,98
1999	M13	\$ 98.439	2,02%	257	\$ 511.038,24	\$ 35.580.919,23
1999	07	\$ 98.439	2,02%	256	\$ 509.049,77	\$ 36.089.969,00
1999	08	\$ 98.439	2,02%	255	\$ 507.061,29	\$ 36.597.030,29
1999	09	\$ 98.439	2,02%	254	\$ 505.072,82	\$ 37.102.103,11
1999	10	\$ 98.439	2,02%	253	\$ 503.084,34	\$ 37.605.187,45
1999	11	\$ 98.439	2,02%	252	\$ 501.095,87	\$ 38.106.283,32
1999	12	\$ 98.439	2,02%	251	\$ 499.107,39	\$ 38.605.390,71
1999	M14	\$ 98.439	2,02%	251	\$ 499.107,39	\$ 39.104.498,10
2000	01	\$ 107.525	2,02%	250	\$ 543.002,99	\$ 39.647.501,09
2000	02	\$ 107.525	2,02%	249	\$ 540.830,98	\$ 40.188.332,07
2000	03	\$ 107.525	2,02%	248	\$ 538.658,97	\$ 40.726.991,04

2000	04	\$ 107.525	2,02%	247	\$ 536.486,96	\$ 41.263.477,99
2000	05	\$ 107.525	2,02%	246	\$ 534.314,94	\$ 41.797.792,93
2000	06	\$ 107.525	2,02%	245	\$ 532.142,93	\$ 42.329.935,87
2000	M13	\$ 107.525	2,02%	245	\$ 532.142,93	\$ 42.862.078,80
2000	07	\$ 107.525	2,02%	244	\$ 529.970,92	\$ 43.392.049,72
2000	08	\$ 107.525	2,02%	243	\$ 527.798,91	\$ 43.919.848,62
2000	09	\$ 107.525	2,02%	242	\$ 525.626,90	\$ 44.445.475,52
2000	10	\$ 107.525	2,02%	241	\$ 523.454,88	\$ 44.968.930,40
2000	11	\$ 107.525	2,02%	240	\$ 521.282,87	\$ 45.490.213,27
2000	12	\$ 107.525	2,02%	239	\$ 519.110,86	\$ 46.009.324,13
2000	M14	\$ 107.525	2,02%	239	\$ 519.110,86	\$ 46.528.434,99
2001	01	\$ 116.934	2,02%	238	\$ 562.171,00	\$ 47.090.605,99
2001	02	\$ 116.934	2,02%	237	\$ 559.808,93	\$ 47.650.414,92
2001	03	\$ 116.934	2,02%	236	\$ 557.446,87	\$ 48.207.861,79
2001	04	\$ 116.934	2,02%	235	\$ 555.084,81	\$ 48.762.946,60
2001	05	\$ 116.934	2,02%	234	\$ 552.722,74	\$ 49.315.669,35
2001	06	\$ 116.934	2,02%	233	\$ 550.360,68	\$ 49.866.030,03
2001	M13	\$ 116.934	2,02%	233	\$ 550.360,68	\$ 50.416.390,71
2001	07	\$ 116.934	2,02%	232	\$ 547.998,62	\$ 50.964.389,33
2001	08	\$ 116.934	2,02%	231	\$ 545.636,56	\$ 51.510.025,88
2001	09	\$ 116.934	2,02%	230	\$ 543.274,49	\$ 52.053.300,38
2001	10	\$ 116.934	2,02%	229	\$ 540.912,43	\$ 52.594.212,81
2001	11	\$ 116.934	2,02%	228	\$ 538.550,37	\$ 53.132.763,17
2001	12	\$ 116.934	2,02%	227	\$ 536.188,30	\$ 53.668.951,48
2001	M14	\$ 116.934	2,02%	227	\$ 536.188,30	\$ 54.205.139,78
2002	01	\$ 125.879	2,02%	226	\$ 574.663,95	\$ 54.779.803,73
2002	02	\$ 125.879	2,02%	225	\$ 572.121,19	\$ 55.351.924,92
2002	03	\$ 125.879	2,02%	224	\$ 569.578,43	\$ 55.921.503,34
2002	04	\$ 125.879	2,02%	223	\$ 567.035,67	\$ 56.488.539,01
2002	05	\$ 125.879	2,02%	222	\$ 564.492,90	\$ 57.053.031,91
2002	06	\$ 125.879	2,02%	221	\$ 561.950,14	\$ 57.614.982,06
2002	M13	\$ 125.879	2,02%	221	\$ 561.950,14	\$ 58.176.932,20
2002	07	\$ 125.879	2,02%	220	\$ 559.407,38	\$ 58.736.339,58
2002	08	\$ 125.879	2,02%	219	\$ 556.864,62	\$ 59.293.204,21
2002	09	\$ 125.879	2,02%	218	\$ 554.321,86	\$ 59.847.526,07
2002	10	\$ 125.879	2,02%	217	\$ 551.779,10	\$ 60.399.305,17
2002	11	\$ 125.879	2,02%	216	\$ 549.236,34	\$ 60.948.541,51
2002	12	\$ 125.879	2,02%	215	\$ 546.693,58	\$ 61.495.235,09
2002	M14	\$ 125.879	2,02%	215	\$ 546.693,58	\$ 62.041.928,67
2003	01	\$ 134.678	2,02%	214	\$ 582.186,96	\$ 62.624.115,63
2003	02	\$ 134.678	2,02%	213	\$ 579.466,46	\$ 63.203.582,09
2003	03	\$ 134.678	2,02%	212	\$ 576.745,96	\$ 63.780.328,05
2003	04	\$ 134.678	2,02%	211	\$ 574.025,46	\$ 64.354.353,51
2003	05	\$ 134.678	2,02%	210	\$ 571.304,96	\$ 64.925.658,47
2003	06	\$ 134.678	2,02%	209	\$ 568.584,46	\$ 65.494.242,93
2003	M13	\$ 134.678	2,02%	209	\$ 568.584,46	\$ 66.062.827,39
2003	07	\$ 134.678	2,02%	208	\$ 565.863,96	\$ 66.628.691,35
2003	08	\$ 134.678	2,02%	207	\$ 563.143,46	\$ 67.191.834,81
2003	09	\$ 134.678	2,02%	206	\$ 560.422,96	\$ 67.752.257,78
2003	10	\$ 134.678	2,02%	205	\$ 557.702,46	\$ 68.309.960,24
2003	11	\$ 134.678	2,02%	204	\$ 554.981,96	\$ 68.864.942,20
2003	12	\$ 134.678	2,02%	203	\$ 552.261,46	\$ 69.417.203,66
2003	M14	\$ 134.678	2,02%	203	\$ 552.261,46	\$ 69.969.465,12
2004	01	\$ 143.419	2,02%	202	\$ 585.206,17	\$ 70.554.671,30
2004	02	\$ 143.419	2,02%	201	\$ 582.309,11	\$ 71.136.980,41
2004	03	\$ 143.419	2,02%	200	\$ 579.412,05	\$ 71.716.392,46
2004	04	\$ 143.419	2,02%	199	\$ 576.514,99	\$ 72.292.907,45
2004	05	\$ 143.419	2,02%	198	\$ 573.617,93	\$ 72.866.525,38
2004	06	\$ 143.419	2,02%	197	\$ 570.720,87	\$ 73.437.246,25

2004	M13	\$ 143.419	2,02%	197	\$ 570.720,87	\$ 74.007.967,12
2004	07	\$ 143.419	2,02%	196	\$ 567.823,81	\$ 74.575.790,93
2004	08	\$ 143.419	2,02%	195	\$ 564.926,75	\$ 75.140.717,67
2004	09	\$ 143.419	2,02%	194	\$ 562.029,69	\$ 75.702.747,36
2004	10	\$ 143.419	2,02%	193	\$ 559.132,63	\$ 76.261.879,99
2004	11	\$ 143.419	2,02%	192	\$ 556.235,57	\$ 76.818.115,56
2004	12	\$ 143.419	2,02%	191	\$ 553.338,51	\$ 77.371.454,07
2004	M14	\$ 143.419	2,02%	191	\$ 553.338,51	\$ 77.924.792,58
2005	01	\$ 151.307	2,02%	190	\$ 580.715,73	\$ 78.505.508,30
2005	02	\$ 151.307	2,02%	189	\$ 577.659,33	\$ 79.083.167,63
2005	03	\$ 151.307	2,02%	188	\$ 574.602,93	\$ 79.657.770,56
2005	04	\$ 151.307	2,02%	187	\$ 571.546,53	\$ 80.229.317,10
2005	05	\$ 151.307	2,02%	186	\$ 568.490,13	\$ 80.797.807,23
2005	06	\$ 151.307	2,02%	185	\$ 565.433,73	\$ 81.363.240,96
2005	M13	\$ 151.307	2,02%	185	\$ 565.433,73	\$ 81.928.674,70
2005	07	\$ 151.307	2,02%	184	\$ 562.377,34	\$ 82.491.052,03
2005	08	\$ 151.307	2,02%	183	\$ 559.320,94	\$ 83.050.372,97
2005	09	\$ 151.307	2,02%	182	\$ 556.264,54	\$ 83.606.637,51
2005	10	\$ 151.307	2,02%	181	\$ 553.208,14	\$ 84.159.845,65
2005	11	\$ 151.307	2,02%	180	\$ 550.151,74	\$ 84.709.997,39
2005	12	\$ 151.307	2,02%	179	\$ 547.095,34	\$ 85.257.092,74
2005	M14	\$ 151.307	2,02%	179	\$ 547.095,34	\$ 85.804.188,08
2006	01	\$ 158.645	2,02%	178	\$ 570.424,83	\$ 86.374.612,91
2006	02	\$ 158.645	2,02%	177	\$ 567.220,20	\$ 86.941.833,11
2006	03	\$ 158.645	2,02%	176	\$ 564.015,57	\$ 87.505.848,68
2006	04	\$ 158.645	2,02%	175	\$ 560.810,93	\$ 88.066.659,61
2006	05	\$ 158.645	2,02%	174	\$ 557.606,30	\$ 88.624.265,91
2006	06	\$ 158.645	2,02%	173	\$ 554.401,66	\$ 89.178.667,57
2006	M13	\$ 158.645	2,02%	173	\$ 554.401,66	\$ 89.733.069,24
2006	07	\$ 158.645	2,02%	172	\$ 551.197,03	\$ 90.284.266,27
2006	08	\$ 158.645	2,02%	171	\$ 547.992,40	\$ 90.832.258,66
2006	09	\$ 158.645	2,02%	170	\$ 544.787,76	\$ 91.377.046,43
2006	10	\$ 158.645	2,02%	169	\$ 541.583,13	\$ 91.918.629,55
2006	11	\$ 158.645	2,02%	168	\$ 538.378,49	\$ 92.457.008,05
2006	12	\$ 158.645	2,02%	167	\$ 535.173,86	\$ 92.992.181,91
2006	M14	\$ 158.645	2,02%	167	\$ 535.173,86	\$ 93.527.355,77
2007	01	\$ 165.753	2,02%	166	\$ 555.801,45	\$ 94.083.157,22
2007	02	\$ 165.753	2,02%	165	\$ 552.453,25	\$ 94.635.610,47
2007	03	\$ 165.753	2,02%	164	\$ 549.105,05	\$ 95.184.715,51
2007	04	\$ 165.753	2,02%	163	\$ 545.756,84	\$ 95.730.472,35
2007	05	\$ 165.753	2,02%	162	\$ 542.408,64	\$ 96.272.881,00
2007	06	\$ 165.753	2,02%	161	\$ 539.060,44	\$ 96.811.941,44
2007	M13	\$ 165.753	2,02%	161	\$ 539.060,44	\$ 97.351.001,88
2007	07	\$ 165.753	2,02%	160	\$ 535.712,24	\$ 97.886.714,12
2007	08	\$ 165.753	2,02%	159	\$ 532.364,04	\$ 98.419.078,15
2007	09	\$ 165.753	2,02%	158	\$ 529.015,84	\$ 98.948.093,99
2007	10	\$ 165.753	2,02%	157	\$ 525.667,63	\$ 99.473.761,63
2007	11	\$ 165.753	2,02%	156	\$ 522.319,43	\$ 99.996.081,06
2007	12	\$ 165.753	2,02%	155	\$ 518.971,23	\$ 100.515.052,29
2007	M14	\$ 165.753	2,02%	155	\$ 518.971,23	\$ 101.034.023,52
2008	01	\$ 175.184	2,02%	154	\$ 544.961,98	\$ 101.578.985,50
2008	02	\$ 175.184	2,02%	153	\$ 541.423,27	\$ 102.120.408,77
2008	03	\$ 175.184	2,02%	152	\$ 537.884,55	\$ 102.658.293,32
2008	04	\$ 175.184	2,02%	151	\$ 534.345,84	\$ 103.192.639,16
2008	05	\$ 175.184	2,02%	150	\$ 530.807,12	\$ 103.723.446,28
2008	06	\$ 175.184	2,02%	149	\$ 527.268,41	\$ 104.250.714,69
2008	M13	\$ 175.184	2,02%	149	\$ 527.268,41	\$ 104.777.983,10
2008	07	\$ 175.184	2,02%	148	\$ 523.729,70	\$ 105.301.712,80
2008	08	\$ 175.184	2,02%	147	\$ 520.190,98	\$ 105.821.903,78

2008	09	\$ 175.184	2,02%	146	\$ 516.652,27	\$ 106.338.556,05
2008	10	\$ 175.184	2,02%	145	\$ 513.113,55	\$ 106.851.669,60
2008	11	\$ 175.184	2,02%	144	\$ 509.574,84	\$ 107.361.244,44
2008	12	\$ 175.184	2,02%	143	\$ 506.036,12	\$ 107.867.280,57
2008	M14	\$ 175.184	2,02%	143	\$ 506.036,12	\$ 108.373.316,69
2009	01	\$ 188.620	2,02%	142	\$ 541.038,96	\$ 108.914.355,65
2009	02	\$ 188.620	2,02%	141	\$ 537.228,83	\$ 109.451.584,48
2009	03	\$ 188.620	2,02%	140	\$ 533.418,70	\$ 109.985.003,18
2009	04	\$ 188.620	2,02%	139	\$ 529.608,56	\$ 110.514.611,74
2009	05	\$ 188.620	2,02%	138	\$ 525.798,43	\$ 111.040.410,17
2009	06	\$ 188.620	2,02%	137	\$ 521.988,29	\$ 111.562.398,46
2009	M13	\$ 188.620	2,02%	137	\$ 521.988,29	\$ 112.084.386,75
2009	07	\$ 188.620	2,02%	136	\$ 518.178,16	\$ 112.602.564,92
2009	08	\$ 188.620	2,02%	135	\$ 514.368,03	\$ 113.116.932,94
2009	09	\$ 188.620	2,02%	134	\$ 510.557,89	\$ 113.627.490,84
2009	10	\$ 188.620	2,02%	133	\$ 506.747,76	\$ 114.134.238,60
2009	11	\$ 188.620	2,02%	132	\$ 502.937,63	\$ 114.637.176,22
2009	12	\$ 188.620	2,02%	131	\$ 499.127,49	\$ 115.136.303,72
2009	M14	\$ 188.620	2,02%	131	\$ 499.127,49	\$ 115.635.431,21
2010	01	\$ 192.393	2,02%	130	\$ 505.223,71	\$ 116.140.654,92
2010	02	\$ 192.393	2,02%	129	\$ 501.337,37	\$ 116.641.992,29
2010	03	\$ 192.393	2,02%	128	\$ 497.451,03	\$ 117.139.443,32
2010	04	\$ 192.393	2,02%	127	\$ 493.564,70	\$ 117.633.008,02
2010	05	\$ 192.393	2,02%	126	\$ 489.678,36	\$ 118.122.686,38
2010	06	\$ 192.393	2,02%	125	\$ 485.792,03	\$ 118.608.478,41
2010	M13	\$ 192.393	2,02%	125	\$ 485.792,03	\$ 119.094.270,43
2010	07	\$ 192.393	2,02%	124	\$ 481.905,69	\$ 119.576.176,12
2010	08	\$ 192.393	2,02%	123	\$ 478.019,35	\$ 120.054.195,48
2010	09	\$ 192.393	2,02%	122	\$ 474.133,02	\$ 120.528.328,50
2010	10	\$ 192.393	2,02%	121	\$ 470.246,68	\$ 120.998.575,18
2010	11	\$ 192.393	2,02%	120	\$ 466.360,34	\$ 121.464.935,52
2010	12	\$ 192.393	2,02%	119	\$ 462.474,01	\$ 121.927.409,53
2010	M14	\$ 192.393	2,02%	119	\$ 462.474,01	\$ 122.389.883,54
2011	01	\$ 198.492	2,02%	118	\$ 473.124,90	\$ 122.863.008,44
2011	02	\$ 198.492	2,02%	117	\$ 469.115,37	\$ 123.332.123,81
2011	03	\$ 198.492	2,02%	116	\$ 465.105,84	\$ 123.797.229,64
2011	04	\$ 198.492	2,02%	115	\$ 461.096,30	\$ 124.258.325,95
2011	05	\$ 198.492	2,02%	114	\$ 457.086,77	\$ 124.715.412,72
2011	06	\$ 198.492	2,02%	113	\$ 453.077,24	\$ 125.168.489,95
2011	M13	\$ 198.492	2,02%	113	\$ 453.077,24	\$ 125.621.567,19
2011	07	\$ 198.492	2,02%	112	\$ 449.067,70	\$ 126.070.634,89
2011	08	\$ 198.492	2,02%	111	\$ 445.058,17	\$ 126.515.693,06
2011	09	\$ 198.492	2,02%	110	\$ 441.048,64	\$ 126.956.741,70
2011	10	\$ 198.492	2,02%	109	\$ 437.039,10	\$ 127.393.780,80
2011	11	\$ 198.492	2,02%	108	\$ 433.029,57	\$ 127.826.810,37
2011	12	\$ 198.492	2,02%	107	\$ 429.020,04	\$ 128.255.830,41
2011	M14	\$ 198.492	2,02%	107	\$ 429.020,04	\$ 128.684.850,45
2012	01	\$ 205.895	2,02%	106	\$ 440.863,40	\$ 129.125.713,85
2012	02	\$ 205.895	2,02%	105	\$ 436.704,31	\$ 129.562.418,15
2012	03	\$ 205.895	2,02%	104	\$ 432.545,22	\$ 702.169,20
2012	04	\$ 205.895	2,02%	103	\$ 428.386,13	\$ 130.423.349,50
2012	05	\$ 205.895	2,02%	102	\$ 424.227,04	\$ 130.847.576,55
2012	06	\$ 205.895	2,02%	101	\$ 420.067,95	\$ 131.267.644,50
2012	M13	\$ 205.895	2,02%	101	\$ 420.067,95	\$ 131.687.712,45
2012	07	\$ 205.895	2,02%	100	\$ 415.908,86	\$ 132.103.621,32
2012	08	\$ 205.895	2,02%	99	\$ 411.749,78	\$ 132.515.371,09
2012	09	\$ 205.895	2,02%	98	\$ 407.590,69	\$ 132.922.961,78
2012	10	\$ 205.895	2,02%	97	\$ 403.431,60	\$ 133.326.393,38
2012	11	\$ 205.895	2,02%	96	\$ 399.272,51	\$ 133.725.665,89

2012	12	\$ 205.895	2,02%	95	\$ 395.113,42	\$ 134.120.779,31
2012	M14	\$ 205.895	2,02%	95	\$ 395.113,42	\$ 134.515.892,73
2013	01	\$ 210.919	2,02%	94	\$ 400.493,62	\$ 134.916.386,35
2013	02	\$ 210.919	2,02%	93	\$ 396.233,05	\$ 135.312.619,40
2013	03	\$ 210.919	2,02%	92	\$ 391.972,48	\$ 135.704.591,88
2013	04	\$ 210.919	2,02%	91	\$ 387.711,91	\$ 136.092.303,79
2013	05	\$ 210.919	2,02%	90	\$ 383.451,34	\$ 136.475.755,12
2013	06	\$ 210.919	2,02%	89	\$ 379.190,77	\$ 136.854.945,89
2013	M13	\$ 210.919	2,02%	89	\$ 379.190,77	\$ 137.234.136,66
2013	07	\$ 210.919	2,02%	88	\$ 374.930,20	\$ 137.609.066,85
2013	08	\$ 210.919	2,02%	87	\$ 370.669,63	\$ 137.979.736,48
2013	09	\$ 210.919	2,02%	86	\$ 366.409,06	\$ 138.346.145,53
2013	10	\$ 210.919	2,02%	85	\$ 362.148,48	\$ 138.708.294,02
2013	11	\$ 210.919	2,02%	84	\$ 357.887,91	\$ 139.066.181,93
2013	12	\$ 210.919	2,02%	83	\$ 353.627,34	\$ 139.419.809,28
2013	M14	\$ 210.919	2,02%	83	\$ 353.627,34	\$ 139.773.436,62
2014	01	\$ 215.011	2,02%	82	\$ 356.144,49	\$ 140.129.581,11
2014	02	\$ 215.011	2,02%	81	\$ 351.801,26	\$ 140.481.382,37
2014	03	\$ 215.011	2,02%	80	\$ 347.458,04	\$ 140.828.840,41
2014	04	\$ 215.011	2,02%	79	\$ 343.114,81	\$ 141.171.955,23
2014	05	\$ 215.011	2,02%	78	\$ 338.771,59	\$ 141.510.726,81
2014	06	\$ 215.011	2,02%	77	\$ 334.428,36	\$ 141.845.155,17
2014	M13	\$ 215.011	2,02%	77	\$ 334.428,36	\$ 142.179.583,54
2014	07	\$ 215.011	2,02%	76	\$ 330.085,14	\$ 142.509.668,67
2014	08	\$ 215.011	2,02%	75	\$ 325.741,91	\$ 142.835.410,58
2014	09	\$ 215.011	2,02%	74	\$ 321.398,69	\$ 143.156.809,27
2014	10	\$ 215.011	2,02%	73	\$ 317.055,46	\$ 143.473.864,73
2014	11	\$ 215.011	2,02%	72	\$ 312.712,23	\$ 143.786.576,96
2014	12	\$ 215.011	2,02%	71	\$ 308.369,01	\$ 144.094.945,97
2014	M14	\$ 215.011	2,02%	71	\$ 308.369,01	\$ 144.403.314,98
2015	01	\$ 222.881	2,02%	70	\$ 315.153,13	\$ 144.718.468,11
2015	02	\$ 222.881	2,02%	69	\$ 310.650,94	\$ 145.029.119,05
2015	03	\$ 222.881	2,02%	68	\$ 306.148,75	\$ 145.335.267,80
2015	04	\$ 222.881	2,02%	67	\$ 301.646,56	\$ 145.636.914,36
2015	05	\$ 222.881	2,02%	66	\$ 297.144,38	\$ 145.934.058,74
2015	06	\$ 222.881	2,02%	65	\$ 292.642,19	\$ 146.226.700,93
2015	M13	\$ 222.881	2,02%	65	\$ 292.642,19	\$ 146.519.343,12
2015	07	\$ 222.881	2,02%	64	\$ 288.140,00	\$ 146.807.483,12
2015	08	\$ 222.881	2,02%	63	\$ 283.637,81	\$ 147.091.120,93
2015	09	\$ 222.881	2,02%	62	\$ 279.135,63	\$ 147.370.256,56
2015	10	\$ 222.881	2,02%	61	\$ 274.633,44	\$ 147.644.890,00
2015	11	\$ 222.881	2,02%	60	\$ 270.131,25	\$ 147.915.021,25
2015	12	\$ 222.881	2,02%	59	\$ 265.629,06	\$ 148.180.650,32
2015	M14	\$ 222.881	2,02%	59	\$ 265.629,06	\$ 148.446.279,38
2016	01	\$ 237.970	2,02%	58	\$ 278.805,17	\$ 148.725.084,55
2016	02	\$ 237.970	2,02%	57	\$ 273.998,18	\$ 148.999.082,73
2016	03	\$ 237.970	2,02%	56	\$ 269.191,20	\$ 149.268.273,92
2016	04	\$ 237.970	2,02%	55	\$ 264.384,21	\$ 149.532.658,13
2016	05	\$ 237.970	2,02%	54	\$ 259.577,22	\$ 149.792.235,36
2016	06	\$ 237.970	2,02%	53	\$ 254.770,24	\$ 150.047.005,59
2016	M13	\$ 237.970	2,02%	53	\$ 254.770,24	\$ 150.301.775,83
2016	07	\$ 237.970	2,02%	52	\$ 249.963,25	\$ 150.551.739,09
2016	08	\$ 237.970	2,02%	51	\$ 245.156,27	\$ 150.796.895,35
2016	09	\$ 237.970	2,02%	50	\$ 240.349,28	\$ 151.037.244,63
2016	10	\$ 237.970	2,02%	49	\$ 235.542,30	\$ 151.272.786,93
2016	11	\$ 237.970	2,02%	48	\$ 230.735,31	\$ 151.503.522,24
2016	12	\$ 237.970	2,02%	47	\$ 225.928,32	\$ 151.729.450,56
2016	M14	\$ 237.970	2,02%	47	\$ 225.928,32	\$ 151.955.378,89
2017	01	\$ 251.653	2,02%	46	\$ 233.835,82	\$ 152.189.214,70

2017	02	\$ 251.653	2,02%	45	\$ 228.752,43	\$ 152.417.967,13
2017	03	\$ 251.653	2,02%	44	\$ 223.669,04	\$ 152.641.636,17
2017	04	\$ 251.653	2,02%	43	\$ 218.585,65	\$ 152.860.221,83
2017	05	\$ 251.653	2,02%	42	\$ 213.502,27	\$ 153.073.724,09
2017	06	\$ 251.653	2,02%	41	\$ 208.418,88	\$ 153.282.142,97
2017	M13	\$ 251.653	2,02%	41	\$ 208.418,88	\$ 153.490.561,85
2017	07	\$ 251.653	2,02%	40	\$ 203.335,49	\$ 153.693.897,34
2017	08	\$ 251.653	2,02%	39	\$ 198.252,10	\$ 153.892.149,45
2017	09	\$ 251.653	2,02%	38	\$ 193.168,72	\$ 154.085.318,17
2017	10	\$ 251.653	2,02%	37	\$ 188.085,33	\$ 154.273.403,50
2017	11	\$ 251.653	2,02%	36	\$ 183.001,94	\$ 154.456.405,44
2017	12	\$ 251.653	2,02%	35	\$ 177.918,56	\$ 154.634.323,99
2017	M14	\$ 251.653	2,02%	35	\$ 177.918,56	\$ 154.812.242,55
2018	01	\$ 261.945	2,02%	34	\$ 179.904,13	\$ 154.992.146,68
2018	02	\$ 261.945	2,02%	33	\$ 174.612,83	\$ 155.166.759,50
2018	03	\$ 261.945	2,02%	32	\$ 169.321,53	\$ 155.336.081,04
2018	04	\$ 261.945	2,02%	31	\$ 164.030,23	\$ 155.500.111,27
2018	05	\$ 261.945	2,02%	30	\$ 158.738,94	\$ 155.658.850,20
2018	06	\$ 261.945	2,02%	29	\$ 153.447,64	\$ 155.812.297,84
2018	M13	\$ 261.945	2,02%	29	\$ 153.447,64	\$ 155.965.745,48
2018	07	\$ 261.945	2,02%	28	\$ 148.156,34	\$ 156.113.901,82
2018	08	\$ 261.945	2,02%	27	\$ 142.865,04	\$ 156.256.766,86
2018	09	\$ 261.945	2,02%	26	\$ 137.573,74	\$ 156.394.340,60
2018	10	\$ 261.945	2,02%	25	\$ 132.282,45	\$ 156.526.623,05
2018	11	\$ 261.945	2,02%	24	\$ 126.991,15	\$ 156.653.614,20
2018	12	\$ 261.945	2,02%	23	\$ 121.699,85	\$ 156.775.314,05
2018	M14	\$ 261.945	2,02%	23	\$ 121.699,85	\$ 156.897.013,90
2019	01	\$ 270.275	2,02%	22	\$ 120.110,34	\$ 157.017.124,24
2019	02	\$ 270.275	2,02%	21	\$ 114.650,78	\$ 157.131.775,03
2019	03	\$ 270.275	2,02%	20	\$ 109.191,22	\$ 157.240.966,25
2019	04	\$ 270.275	2,02%	19	\$ 103.731,66	\$ 157.344.697,91
2019	05	\$ 270.275	2,02%	18	\$ 98.272,10	\$ 157.442.970,01
2019	06	\$ 270.275	2,02%	17	\$ 92.812,54	\$ 157.535.782,55
2019	M13	\$ 270.275	2,02%	17	\$ 92.812,54	\$ 157.628.595,09
2019	07	\$ 270.275	2,02%	16	\$ 87.352,98	\$ 157.715.948,06
2019	08	\$ 270.275	2,02%	15	\$ 81.893,42	\$ 157.797.841,48
2019	09	\$ 270.275	2,02%	14	\$ 76.433,86	\$ 157.874.275,34
2019	10	\$ 270.275	2,02%	13	\$ 70.974,29	\$ 157.945.249,63
2019	11	\$ 270.275	2,02%	12	\$ 65.514,73	\$ 158.010.764,36
2019	12	\$ 270.275	2,02%	11	\$ 60.055,17	\$ 158.070.819,54
2019	M14	\$ 270.275	2,02%	11	\$ 60.055,17	\$ 158.130.874,71
2020	01	\$ 280.546	2,02%	10	\$ 56.670,24	\$ 158.187.544,95
2020	02	\$ 280.546	2,02%	9	\$ 51.003,22	\$ 158.238.548,17
2020	03	\$ 280.546	2,02%	8	\$ 45.336,20	\$ 158.283.884,37
2020	04	\$ 280.546	2,02%	7	\$ 39.669,17	\$ 158.323.553,54
2020	05	\$ 280.546	2,02%	6	\$ 34.002,15	\$ 158.357.555,69
2020	06	\$ 280.546	2,02%	5	\$ 28.335,12	\$ 158.385.890,81
2020	M13	\$ 280.546	2,02%	5	\$ 28.335,12	\$ 158.414.225,93
2020	07	\$ 280.546	2,02%	4	\$ 22.668,10	\$ 158.436.894,03
2020	08	\$ 280.546	2,02%	3	\$ 17.001,07	\$ 158.453.895,10
2020	09	\$ 280.546	2,02%	2	\$ 11.334,05	\$ 158.465.229,15
2020	10	\$ 280.546	2,02%	1	\$ 5.667,02	\$ 158.470.896,18
2020	11	\$ 280.546	2,02%	0	\$ 0,00	\$ 158.470.896,18
2020	12	\$ 280.546	2,02%	-1	-\$ 5.667,02	\$ 158.465.229,15
2020	M14	\$ 280.546	2,02%	-1	-\$ 5.667,02	\$ 158.459.562,13

59. MARIA CELINA SANCHEZ DE GUERRERO sustituta de OSCAR ANTONIO GUERRERO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
1981	\$ 11.690,65	26,36%	0,03	\$ 350,72
1982	\$ 14.772,31	24,03%	14	\$ 206.812,27
1983	\$ 18.322,09	16,62%	14	\$ 256.509,26
1984	\$ 21.367,22	18,28%	14	\$ 299.141,10
1985	\$ 25.273,15	22,45%	14	\$ 353.824,10
1986	\$ 30.946,97	20,95%	14	\$ 433.257,61
1987	\$ 37.430,36	24,02%	14	\$ 524.025,08
1988	\$ 46.421,14	28,12%	14	\$ 649.895,90
1989	\$ 59.474,76	26,12%	14	\$ 832.646,63
1990	\$ 75.009,57	32,36%	14	\$ 1.050.133,93
1991	\$ 99.282,66	26,82%	14	\$ 1.389.957,27
1992	\$ 125.910,27	25,13%	14	\$ 1.762.743,80
1993	\$ 157.551,52	22,60%	14	\$ 2.205.721,32
1994	\$ 193.158,17	22,59%	14	\$ 2.704.214,34
1995	\$ 236.792,60	19,46%	14	\$ 3.315.096,36
1996	\$ 282.872,44	21,63%	14	\$ 3.960.214,11
1997	\$ 344.057,74	17,68%	14	\$ 4.816.808,42
1998	\$ 404.887,15	16,70%	14	\$ 5.668.420,15
1999	\$ 472.503,31	9,23%	14	\$ 6.615.046,32
2000	\$ 516.115,36	8,75%	14	\$ 7.225.615,09
2001	\$ 561.275,46	7,65%	14	\$ 7.857.856,41
2002	\$ 604.213,03	6,99%	14	\$ 8.458.982,43
2003	\$ 646.447,52	6,49%	14	\$ 9.050.265,30
2004	\$ 688.401,97	5,50%	14	\$ 9.637.627,52
2005	\$ 726.264,07	4,85%	14	\$ 10.167.697,03
2006	\$ 761.487,88	4,48%	14	\$ 10.660.830,34
2007	\$ 795.602,54	5,69%	14	\$ 11.138.435,54
2008	\$ 840.872,32	7,67%	14	\$ 11.772.212,52
2009	\$ 905.367,23	2,00%	14	\$ 12.675.141,22
2010	\$ 923.474,57	3,17%	14	\$ 12.928.644,05
2011	\$ 952.748,72	3,73%	14	\$ 13.338.482,06
2012	\$ 988.286,25	2,44%	14	\$ 13.836.007,44
2013	\$1.012.400,43	1,94%	14	\$ 14.173.606,02
2014	\$1.032.041,00	3,66%	14	\$ 14.448.573,98
2015	\$1.069.813,70	6,77%	14	\$ 14.977.391,79
2016	\$1.142.240,09	5,75%	14	\$ 15.991.361,21
2017	\$1.207.918,89	4,09%	14	\$ 16.910.864,48
2018	\$1.257.322,77	3,18%	14	\$ 17.602.518,84
2019	\$1.297.305,64	3,80%	14	\$ 18.162.278,94
2020	\$1.346.603,25	1,61%	11	\$ 14.812.635,78
				\$ 223.596.681,25

60. CIRO ALFONSO TORRES ORTEGA

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 81.088,45	2,00%	2,2	\$ 178.394,59
2010	\$ 82.710,22	3,17%	14	\$ 1.157.943,07
2011	\$ 85.332,13	3,73%	14	\$ 1.194.649,86
2012	\$ 88.515,02	2,44%	14	\$ 1.239.210,30
2013	\$ 90.674,79	1,94%	14	\$ 1.269.447,03
2014	\$ 92.433,88	3,66%	14	\$ 1.294.074,30
2015	\$ 95.816,96	6,77%	14	\$ 1.341.437,42
2016	\$ 102.303,77	5,75%	14	\$ 1.432.252,74
2017	\$ 108.186,23	4,09%	14	\$ 1.514.607,27
2018	\$ 112.611,05	3,18%	14	\$ 1.576.554,71
2019	\$ 116.192,08	3,80%	14	\$ 1.626.689,15

2020	\$ 120.607,38	1,61%	11	\$ 1.326.681,19
				\$ 15.151.941,64

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	11	\$ 81.088	2,02%	132	\$ 216.214,24	\$ 216.214,24
2009	12	\$ 81.088	2,02%	131	\$ 214.576,26	\$ 430.790,50
2009	M14	\$ 81.088	2,02%	131	\$ 214.576,26	\$ 645.366,76
2010	01	\$ 82.710	2,02%	130	\$ 217.197,04	\$ 862.563,79
2010	02	\$ 82.710	2,02%	129	\$ 215.526,29	\$ 1.078.090,08
2010	03	\$ 82.710	2,02%	128	\$ 213.855,54	\$ 1.291.945,62
2010	04	\$ 82.710	2,02%	127	\$ 212.184,80	\$ 1.504.130,42
2010	05	\$ 82.710	2,02%	126	\$ 210.514,05	\$ 1.714.644,47
2010	06	\$ 82.710	2,02%	125	\$ 208.843,30	\$ 1.923.487,77
2010	M13	\$ 82.710	2,02%	125	\$ 208.843,30	\$ 2.132.331,07
2010	07	\$ 82.710	2,02%	124	\$ 207.172,56	\$ 2.339.503,63
2010	08	\$ 82.710	2,02%	123	\$ 205.501,81	\$ 2.545.005,44
2010	09	\$ 82.710	2,02%	122	\$ 203.831,06	\$ 2.748.836,50
2010	10	\$ 82.710	2,02%	121	\$ 202.160,32	\$ 2.950.996,82
2010	11	\$ 82.710	2,02%	120	\$ 200.489,57	\$ 3.151.486,39
2010	12	\$ 82.710	2,02%	119	\$ 198.818,82	\$ 3.350.305,22
2010	M14	\$ 82.710	2,02%	119	\$ 198.818,82	\$ 3.549.124,04
2011	01	\$ 85.332	2,02%	118	\$ 203.397,67	\$ 3.752.521,71
2011	02	\$ 85.332	2,02%	117	\$ 201.673,96	\$ 3.954.195,68
2011	03	\$ 85.332	2,02%	116	\$ 199.950,25	\$ 4.154.145,93
2011	04	\$ 85.332	2,02%	115	\$ 198.226,54	\$ 4.352.372,47
2011	05	\$ 85.332	2,02%	114	\$ 196.502,84	\$ 4.548.875,31
2011	06	\$ 85.332	2,02%	113	\$ 194.779,13	\$ 4.743.654,44
2011	M13	\$ 85.332	2,02%	113	\$ 194.779,13	\$ 4.938.433,56
2011	07	\$ 85.332	2,02%	112	\$ 193.055,42	\$ 5.131.488,98
2011	08	\$ 85.332	2,02%	111	\$ 191.331,71	\$ 5.322.820,69
2011	09	\$ 85.332	2,02%	110	\$ 189.608,00	\$ 5.512.428,69
2011	10	\$ 85.332	2,02%	109	\$ 187.884,29	\$ 5.700.312,98
2011	11	\$ 85.332	2,02%	108	\$ 186.160,58	\$ 5.886.473,56
2011	12	\$ 85.332	2,02%	107	\$ 184.436,87	\$ 6.070.910,43
2011	M14	\$ 85.332	2,02%	107	\$ 184.436,87	\$ 6.255.347,30
2012	01	\$ 88.515	2,02%	106	\$ 189.528,36	\$ 6.444.875,67
2012	02	\$ 88.515	2,02%	105	\$ 187.740,36	\$ 6.632.616,03
2012	03	\$ 88.515	2,02%	104	\$ 185.952,36	\$ 0,00
2012	04	\$ 88.515	2,02%	103	\$ 184.164,35	\$ 7.002.732,74
2012	05	\$ 88.515	2,02%	102	\$ 182.376,35	\$ 7.185.109,09
2012	06	\$ 88.515	2,02%	101	\$ 180.588,35	\$ 7.365.697,44
2012	M13	\$ 88.515	2,02%	101	\$ 180.588,35	\$ 7.546.285,78
2012	07	\$ 88.515	2,02%	100	\$ 178.800,34	\$ 7.725.086,13
2012	08	\$ 88.515	2,02%	99	\$ 177.012,34	\$ 7.902.098,47
2012	09	\$ 88.515	2,02%	98	\$ 175.224,34	\$ 8.077.322,80
2012	10	\$ 88.515	2,02%	97	\$ 173.436,33	\$ 8.250.759,14
2012	11	\$ 88.515	2,02%	96	\$ 171.648,33	\$ 8.422.407,47
2012	12	\$ 88.515	2,02%	95	\$ 169.860,33	\$ 8.592.267,79
2012	M14	\$ 88.515	2,02%	95	\$ 169.860,33	\$ 8.762.128,12
2013	01	\$ 90.675	2,02%	94	\$ 172.173,29	\$ 8.934.301,41
2013	02	\$ 90.675	2,02%	93	\$ 170.341,66	\$ 9.104.643,06
2013	03	\$ 90.675	2,02%	92	\$ 168.510,03	\$ 9.273.153,09
2013	04	\$ 90.675	2,02%	91	\$ 166.678,40	\$ 9.439.831,49
2013	05	\$ 90.675	2,02%	90	\$ 164.846,76	\$ 9.604.678,25
2013	06	\$ 90.675	2,02%	89	\$ 163.015,13	\$ 9.767.693,38
2013	M13	\$ 90.675	2,02%	89	\$ 163.015,13	\$ 9.930.708,52

2013	07	\$ 90.675	2,02%	88	\$ 161.183,50	\$ 10.091.892,02
2013	08	\$ 90.675	2,02%	87	\$ 159.351,87	\$ 10.251.243,89
2013	09	\$ 90.675	2,02%	86	\$ 157.520,24	\$ 10.408.764,14
2013	10	\$ 90.675	2,02%	85	\$ 155.688,61	\$ 10.564.452,75
2013	11	\$ 90.675	2,02%	84	\$ 153.856,98	\$ 10.718.309,73
2013	12	\$ 90.675	2,02%	83	\$ 152.025,35	\$ 10.870.335,08
2013	M14	\$ 90.675	2,02%	83	\$ 152.025,35	\$ 11.022.360,43
2014	01	\$ 92.434	2,02%	82	\$ 153.107,48	\$ 11.175.467,90
2014	02	\$ 92.434	2,02%	81	\$ 151.240,31	\$ 11.326.708,22
2014	03	\$ 92.434	2,02%	80	\$ 149.373,15	\$ 11.476.081,36
2014	04	\$ 92.434	2,02%	79	\$ 147.505,98	\$ 11.623.587,35
2014	05	\$ 92.434	2,02%	78	\$ 145.638,82	\$ 11.769.226,17
2014	06	\$ 92.434	2,02%	77	\$ 143.771,66	\$ 11.912.997,82
2014	M13	\$ 92.434	2,02%	77	\$ 143.771,66	\$ 12.056.769,48
2014	07	\$ 92.434	2,02%	76	\$ 141.904,49	\$ 12.198.673,97
2014	08	\$ 92.434	2,02%	75	\$ 140.037,33	\$ 12.338.711,30
2014	09	\$ 92.434	2,02%	74	\$ 138.170,16	\$ 12.476.881,46
2014	10	\$ 92.434	2,02%	73	\$ 136.303,00	\$ 12.613.184,46
2014	11	\$ 92.434	2,02%	72	\$ 134.435,83	\$ 12.747.620,29
2014	12	\$ 92.434	2,02%	71	\$ 132.568,67	\$ 12.880.188,96
2014	M14	\$ 92.434	2,02%	71	\$ 132.568,67	\$ 13.012.757,63
2015	01	\$ 95.817	2,02%	70	\$ 135.485,18	\$ 13.148.242,81
2015	02	\$ 95.817	2,02%	69	\$ 133.549,68	\$ 13.281.792,48
2015	03	\$ 95.817	2,02%	68	\$ 131.614,17	\$ 13.413.406,66
2015	04	\$ 95.817	2,02%	67	\$ 129.678,67	\$ 13.543.085,33
2015	05	\$ 95.817	2,02%	66	\$ 127.743,17	\$ 13.670.828,50
2015	06	\$ 95.817	2,02%	65	\$ 125.807,67	\$ 13.796.636,17
2015	M13	\$ 95.817	2,02%	65	\$ 125.807,67	\$ 13.922.443,83
2015	07	\$ 95.817	2,02%	64	\$ 123.872,16	\$ 14.046.316,00
2015	08	\$ 95.817	2,02%	63	\$ 121.936,66	\$ 14.168.252,66
2015	09	\$ 95.817	2,02%	62	\$ 120.001,16	\$ 14.288.253,82
2015	10	\$ 95.817	2,02%	61	\$ 118.065,66	\$ 14.406.319,48
2015	11	\$ 95.817	2,02%	60	\$ 116.130,15	\$ 14.522.449,63
2015	12	\$ 95.817	2,02%	59	\$ 114.194,65	\$ 14.636.644,28
2015	M14	\$ 95.817	2,02%	59	\$ 114.194,65	\$ 14.750.838,93
2016	01	\$ 102.304	2,02%	58	\$ 119.859,09	\$ 14.870.698,03
2016	02	\$ 102.304	2,02%	57	\$ 117.792,56	\$ 14.988.490,59
2016	03	\$ 102.304	2,02%	56	\$ 115.726,02	\$ 15.104.216,61
2016	04	\$ 102.304	2,02%	55	\$ 113.659,49	\$ 15.217.876,09
2016	05	\$ 102.304	2,02%	54	\$ 111.592,95	\$ 15.329.469,04
2016	06	\$ 102.304	2,02%	53	\$ 109.526,41	\$ 15.438.995,45
2016	M13	\$ 102.304	2,02%	53	\$ 109.526,41	\$ 15.548.521,87
2016	07	\$ 102.304	2,02%	52	\$ 107.459,88	\$ 15.655.981,74
2016	08	\$ 102.304	2,02%	51	\$ 105.393,34	\$ 15.761.375,08
2016	09	\$ 102.304	2,02%	50	\$ 103.326,80	\$ 15.864.701,89
2016	10	\$ 102.304	2,02%	49	\$ 101.260,27	\$ 15.965.962,16
2016	11	\$ 102.304	2,02%	48	\$ 99.193,73	\$ 16.065.155,89
2016	12	\$ 102.304	2,02%	47	\$ 97.127,20	\$ 16.162.283,09
2016	M14	\$ 102.304	2,02%	47	\$ 97.127,20	\$ 16.259.410,28
2017	01	\$ 108.186	2,02%	46	\$ 100.526,65	\$ 16.359.936,93
2017	02	\$ 108.186	2,02%	45	\$ 98.341,29	\$ 16.458.278,22
2017	03	\$ 108.186	2,02%	44	\$ 96.155,92	\$ 16.554.434,14
2017	04	\$ 108.186	2,02%	43	\$ 93.970,56	\$ 16.648.404,70
2017	05	\$ 108.186	2,02%	42	\$ 91.785,20	\$ 16.740.189,90
2017	06	\$ 108.186	2,02%	41	\$ 89.599,84	\$ 16.829.789,74
2017	M13	\$ 108.186	2,02%	41	\$ 89.599,84	\$ 16.919.389,58
2017	07	\$ 108.186	2,02%	40	\$ 87.414,48	\$ 17.006.804,06

2017	08	\$ 108.186	2,02%	39	\$ 85.229,11	\$ 17.092.033,17
2017	09	\$ 108.186	2,02%	38	\$ 83.043,75	\$ 17.175.076,93
2017	10	\$ 108.186	2,02%	37	\$ 80.858,39	\$ 17.255.935,32
2017	11	\$ 108.186	2,02%	36	\$ 78.673,03	\$ 17.334.608,35
2017	12	\$ 108.186	2,02%	35	\$ 76.487,67	\$ 17.411.096,01
2017	M14	\$ 108.186	2,02%	35	\$ 76.487,67	\$ 17.487.583,68
2018	01	\$ 112.611	2,02%	34	\$ 77.341,27	\$ 17.564.924,95
2018	02	\$ 112.611	2,02%	33	\$ 75.066,53	\$ 17.639.991,48
2018	03	\$ 112.611	2,02%	32	\$ 72.791,78	\$ 17.712.783,26
2018	04	\$ 112.611	2,02%	31	\$ 70.517,04	\$ 17.783.300,30
2018	05	\$ 112.611	2,02%	30	\$ 68.242,30	\$ 17.851.542,60
2018	06	\$ 112.611	2,02%	29	\$ 65.967,55	\$ 17.917.510,15
2018	M13	\$ 112.611	2,02%	29	\$ 65.967,55	\$ 17.983.477,70
2018	07	\$ 112.611	2,02%	28	\$ 63.692,81	\$ 18.047.170,51
2018	08	\$ 112.611	2,02%	27	\$ 61.418,07	\$ 18.108.588,58
2018	09	\$ 112.611	2,02%	26	\$ 59.143,32	\$ 18.167.731,90
2018	10	\$ 112.611	2,02%	25	\$ 56.868,58	\$ 18.224.600,48
2018	11	\$ 112.611	2,02%	24	\$ 54.593,84	\$ 18.279.194,32
2018	12	\$ 112.611	2,02%	23	\$ 52.319,09	\$ 18.331.513,42
2018	M14	\$ 112.611	2,02%	23	\$ 52.319,09	\$ 18.383.832,51
2019	01	\$ 116.192	2,02%	22	\$ 51.635,76	\$ 18.435.468,27
2019	02	\$ 116.192	2,02%	21	\$ 49.288,68	\$ 18.484.756,95
2019	03	\$ 116.192	2,02%	20	\$ 46.941,60	\$ 18.531.698,55
2019	04	\$ 116.192	2,02%	19	\$ 44.594,52	\$ 18.576.293,07
2019	05	\$ 116.192	2,02%	18	\$ 42.247,44	\$ 18.618.540,52
2019	06	\$ 116.192	2,02%	17	\$ 39.900,36	\$ 18.658.440,88
2019	M13	\$ 116.192	2,02%	17	\$ 39.900,36	\$ 18.698.341,24
2019	07	\$ 116.192	2,02%	16	\$ 37.553,28	\$ 18.735.894,52
2019	08	\$ 116.192	2,02%	15	\$ 35.206,20	\$ 18.771.100,72
2019	09	\$ 116.192	2,02%	14	\$ 32.859,12	\$ 18.803.959,84
2019	10	\$ 116.192	2,02%	13	\$ 30.512,04	\$ 18.834.471,88
2019	11	\$ 116.192	2,02%	12	\$ 28.164,96	\$ 18.862.636,84
2019	12	\$ 116.192	2,02%	11	\$ 25.817,88	\$ 18.888.454,72
2019	M14	\$ 116.192	2,02%	11	\$ 25.817,88	\$ 18.914.272,60
2020	01	\$ 120.607	2,02%	10	\$ 24.362,69	\$ 18.938.635,29
2020	02	\$ 120.607	2,02%	9	\$ 21.926,42	\$ 18.960.561,72
2020	03	\$ 120.607	2,02%	8	\$ 19.490,15	\$ 18.980.051,87
2020	04	\$ 120.607	2,02%	7	\$ 17.053,88	\$ 18.997.105,75
2020	05	\$ 120.607	2,02%	6	\$ 14.617,61	\$ 19.011.723,37
2020	06	\$ 120.607	2,02%	5	\$ 12.181,35	\$ 19.023.904,71
2020	M13	\$ 120.607	2,02%	5	\$ 12.181,35	\$ 19.036.086,06
2020	07	\$ 120.607	2,02%	4	\$ 9.745,08	\$ 19.045.831,13
2020	08	\$ 120.607	2,02%	3	\$ 7.308,81	\$ 19.053.139,94
2020	09	\$ 120.607	2,02%	2	\$ 4.872,54	\$ 19.058.012,48
2020	10	\$ 120.607	2,02%	1	\$ 2.436,27	\$ 19.060.448,75



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**

Cúcuta, Treinta y uno (31) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-003-2017-00206-00
RADICADO INTERNO:	18.460
DEMANDANTE:	JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS
DEMANDADO:	EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A y ZAINÉ SUSANA AWAD LÓPEZ

**MAGISTRADA PONENTE:
DRA. NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES**

Procede la Sala dentro del proceso ordinario Laboral de primera instancia instaurado por el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS contra EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A y ZAINÉ SUSANA AWAD LÓPEZ, con radicación única 54-001-31-05-003-2017-00206-00 y radicado interno No 18.460, a resolver la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

1.1 DE LA PARTE DEMANDANTE.

El señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS interpone demanda ordinaria laboral contra la empresa EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A., para que se declare la existencia de un contrato laboral a término fijo inferior a un año del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2013, que se fue prorrogando por no terminarlo y está vigente a la fecha; que la suspensión del contrato que se suscitó del 18 de noviembre de 2013 al 11 de octubre de 2016 fue injusta, ilegal y contraria a derecho, por lo que solicita se condene al pago del salario dejado de percibir (\$25.571,86 diarios por 1042 días para un total de \$26.645.846,86) así como al pago de cesantías, intereses a cesantías, sanción por no cancelar intereses a cesantías, sanción por no consignación oportuna de las cesantías, primas de servicio, vacaciones, dotación, seguridad social, indexación y extra y ultra petita.

Expone como fundamentos de hecho los siguientes:

- Que se vinculó a la empresa EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A., como conductor de vehículo de servicio público en la modalidad de radio de acción nacional desde el 1 de septiembre de 2013, mediante contrato de trabajo a término fijo inferior a un año; siendo su función cumplir con el plan de rodamiento estipulado por la empresa, siguiendo el recorrido de rutas y horarios despachado por la empresa, transportando pasajero, giros y encomiendas en los horarios asignados.

- Que el 18 de noviembre de 2013, EDUAR CÁCERES NAVARRO en su condición de jefe de rutas de la demandada, ordenó publicar en la cartelera de la oficina de pasajes de la Terminal de Transportes de Cúcuta, que el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA no tenía orden de despacho y debía presentarse en la gerencia; así mismo, informado por conductores y propietarios presentes, él mismo se presentó en la oficina de pasajes para manifestar verbalmente que JORGE ESPINOSA debía presentarse en gerencia para suspensión, lo que le ratificó personalmente cuando llegó de su ruta.

- Que al presentarse en la gerencia y preguntar a EDUAR CÁCERES sobre las razones para no tener órdenes de despacho, le dijo que por no pagar los \$300.000 de cambio de ruta de Pamplona a Bucaramanga, por lo que quedaba suspendido de forma indefinida; a lo que reclamó que se le informaran las razones por escrito para ejercer su derecho de defensa, dado que no tuvo derecho a descargos, pero que de manera arrogante se le negaron y que luego se le notificaría la decisión de la junta directiva, lo que nunca sucedió.

- Que efectivamente se negó a pagar los \$300.000 por cambio de ruta dado que no están contenidos en el reglamento y a quienes lo cancelan no les entregan recibo de caja; además es un cobro ilegal, que desconoce la naturaleza del servicio público de transporte.

- Que desde ese 18 de noviembre de 2013 no recibió nuevas noticias sobre la suspensión indefinida, en enero de 2014 acudió con su esposa a dialogar con el gerente, quien indicó no desautorizaría al jefe de rutas y desvió la conversación a supuestos actos de indisciplina del 16 de julio de 2013, sobre los que no se ejerció inmediatamente sanción alguna. Procediendo en febrero de 2014 a cancelar solo un día de seguridad social y reportando retiro en riesgos laborales.

- Que se procedió en enero de 2016 a iniciar las formalidades para vincular un nuevo conductor para el vehículo que conducía y que es propiedad de su esposa ZAIRE SUSANA AWAD LÓPEZ, pero la gerente NELCY CONSUELO PEÑARANDA contestó en oficio del 4 de octubre de 2016 que no había necesidad porque JORGE ESPINOSA tenía contrato laboral vigente y en otro oficio de la misma fecha se le comunicó a él, que como no había asistido a prestar servicios desde el 19 de noviembre de 2013 se entendía suspendido el contrato desde dicha fecha hasta que se presentara a cumplir sus obligaciones.

- Que volvió a ser despachado como conductor al servicio de la empresa desde el 12 de octubre de 2016, conforme planilla de despacho No. AGA1010255.

- Que la empresa descuenta un valor mensual desde 2013 que afirma corresponde al pago de seguridad social integral y parafiscales, entonces de \$386.393 y para 2017 de \$427.000, sin dar recibo alguno para demostrarlo.

- Que presentó petición el 19 de septiembre de 2016 para reclamar por los derechos salariales y prestaciones dejadas de percibir durante el período de suspensión alegado, interrumpiendo con ello la prescripción.

1.2 DE LA PARTE DEMANDADA

La demandada EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A., contestó aceptando el contrato de trabajo y oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, por estimar que el actor no laboró entre el 19 de noviembre de 2013 hasta el 11

de octubre de 2016, no siendo dable alegar su propia culpa en su beneficio; expuso como hechos:

- Que las afirmaciones del demandante no son ciertas, que mensual y semanalmente se fijan los despachos de los vehículos que deben ser cumplidos, toda disposición de la gerencia se hace por escrito y las programaciones de ruta se fijan en cartelera ordenadas por el Jefe Operativo.

- Que el procedimiento para suspender a un trabajador se da cumpliendo el reglamento interno, haciendo un llamado a descargos pero esto no se hizo porque no había voluntad para suspender y lo que sucedió es que el actor dejó de laborar del 19 de noviembre de 2013 al 11 de octubre de 2016, sin que existiera nunca un proceso disciplinario.

- Niega que se cobren las sumas denunciadas y alega que fue un error del funcionario a cargo de la seguridad social reportar el retiro, sin autorización de la gerencia.

- Advierte que conforme al contrato de vinculación, el propietario del vehículo es el encargado de pagar los salarios al conductor y éste a su vez debe realizar las deducciones de ley, cobrándose mediante planilla el valor de \$528.000 por concepto de administración; siendo los propietarios del vehículo el mismo demandante y la señora ZAINÉ SUSANA AWAD LÓPEZ.

En auto del 9 de agosto de 2017 se resolvió integrar como litisconsorcio necesario por pasiva a JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS y ZAINÉ SUSANA AWAD LÓPEZ, como propietarios del vehículo de servicio público; quienes contestaron la demanda solicitando que se declarara la inexistencia de la solidaridad por mala fe de la empresa demandada, indicando que fueron sus actos los determinantes de la ausencia en la prestación de servicios durante el período reclamado.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

2.1. Identificación del Tema de Decisión

En la presente diligencia, la Sala conoce del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra La Sentencia del 24 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la empresa EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A., y en consecuencia absolver a ésta de las pretensiones de la demanda que abarca a los litis consorcios necesarios.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante por resultar vencida en el proceso.

TERCERO: CONSULTAR esta providencia en caso de no ser impugnada.

2.2. Fundamento de la decisión impugnada

La jueza, fundamentó la decisión de primera instancia así:

- Planteó como problema jurídico si resulta aplicable en el presente caso, la figura del salario sin prestación del servicio que trata el artículo 140 del C.S.T.

- Para ello, trajo a colación La Sentencia SL3764 de 2018, mediante la cual, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, señala que debe exigirse unos supuestos para la aplicación del art. 140 del C.S.T los cuales corresponden a: (i) la ausencia de prestación de servicios del trabajador por culpa o disposición del empleador y, (ii) la vigencia del contrato de trabajo.

- Seguidamente, procedió a valorar las pruebas obrantes al plenario para efectos de determinar si se acreditaron en el presente caso los supuestos jurisprudenciales para la aplicación del artículo 140 del C.S.T.

- En relación con el primer requisito, esto es, la vigencia del contrato de trabajo, la jueza indicó que, de conformidad con las pruebas documentales, la contestación a los hechos 6,18 y 19, así como del interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la demandada, se logró acreditar el primer supuesto exigido por el artículo 140 del C.S.T que se refiere a la vigencia del contrato de trabajo.

- Que de igual forma se acreditó que efectivamente el actor no prestó sus servicios desde el 19 de noviembre de 2013 al 11 de octubre de 2016, por lo que procedió a establecer, si la ausencia de prestación de servicios obedeció a la culpa o disposición del empleador.

- Frente a ello, precisó la jueza que el artículo 51 del C.S.T establece de manera taxativa las causales de suspensión del contrato de trabajo, dentro de las cuales, fue incluida la suspensión disciplinaria, por lo que, en este caso, conforme evidenció de las pruebas surtidas en el proceso, no se cumplió un proceso disciplinario para suspender el contrato, y así lo aceptó la representante legal en el interrogatorio rendido.

- Indicó, que la representante legal alegó en su defensa que la suspensión no obedeció a una sanción disciplinaria sino a la ausencia del trabajador que dejó de asistir a su puesto de trabajo; mientras que el demandante alega que si se le impuso una sanción por parte del director operativo el día 18 de noviembre de 2013, cuando éste le cobro una suma de dinero para cubrir el cambio de ruta, y al no entregar dicho dinero se le canceló el despacho y le informó que estaba suspendido indefinidamente.

- Luego de valorar los testimonios de OCTAVIO MALABER ROJAS, HÉCTOR GARCÍA DÁVILA, WILBREY MORANTES MANTILLA la jueza de conocimiento indicó, que los mismos no le ofrecieron la credibilidad necesaria para dar por demostrado que este fue suspendido por el señor Eduar Cáceres por negarse a pagar una suma de dinero para modificar la ruta del vehículo que conducía, ya que si bien, todos los testigos habían señalado que vieron el aviso en la cartelera que citaba al demandante a gerencia y que anunciaba que no tenía despacho hasta que se hiciera presente, no era menos cierto que en lo relativo a la suspensión, todos afirmaron que conocían de la misma por las manifestaciones que le realizó el mismo actor.

- Que de acuerdo con el análisis de las pruebas practicadas, concluyó que no se acreditó que éste hubiese sido suspendido por decisión unilateral del empleador, en razón a que ninguno de los testigos dieron fe del conocimiento directo o verídico en cuanto a que el señor EDUAR CÁCERES suspendiera al actor como retaliación a la negativa de efectuar el pago de una suma de dinero, ya que todas las declaraciones que hicieron respecto a este hecho se originaron por la referencia que les hizo el mismo demandante, y el único que afirmó escuchar al director operativo esa afirmación, fue contradictorio e incoherente en su misma declaración, por lo que se le restó valor probatorio.

3. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

- **De la parte Demandante**

El apoderado de la parte demandante sustenta su recurso de apelación señalando lo siguiente:

1. Que la jueza no valoró de manera correcta las pruebas obrantes en el plenario, en especial los testimonios que evidencian la suspensión del actor por orden del director operativo de la empresa.
2. Se omitió realizar una valoración de fondo al procedimiento de suspensión en donde no se cumplió con el debido proceso de las suspensiones.
3. No es cierto que la demandada hubiere cumplido con el pago de prestaciones sociales al actor, ya que la accionada únicamente hizo el pago de un solo día para proceder a desvincularlo de la seguridad social.

4. ALEGATOS

- **De la parte demandante:**

El apoderado de la parte actora manifestó que está demostrada y aceptada la vinculación como trabajador desde el 1 de septiembre de 2013 mediante contrato de trabajo a término inferior a un año, cumpliendo con la prestación del servicio de conductor en las rutas y horarios despachados por la empresa, reiterando que fue suspendido por el jefe de operativo EDUAR CÁCERES NAVARRO ante su negativa de cancelar un valor cobrado ilícitamente para asignar cambio de ruta y por el cual se mantuvo sin prestar servicio hasta octubre de 2016, cuando volvió a asignársele ruta.

Señala que los testigos OCTAVIO MALAVER ROJAS, HECTOR GARCÍA DÁVILA Y WILBREY JARBREY MORANTES MANTILLA; quienes laboraban como conductores para la misma empresa demandada; manifestaron que les constaba haber **VISTO** por varios días en la cartelera de la empresa EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES, la orden del señor EDUAR CACERES NAVARRO, como Jefe Operativo de la empresa demandada. Que el conductor del carro #100 no tenía orden de despacho porque debía presentarse a la Gerencia. También informaron estos testigos, que el señor JORGE ESPINOSA, les había comentado, que el señor EDUAR CACERES, Jefe Operativo de la demandada, lo había suspendido indefinidamente porque no le había querido pagar los \$300.000 que le pedía para cambiarlo del Grupo de Pamplona, para el Grupo de Bucaramanga. Así mismo declararon los mismos testigos, que a partir de ese momento no volvieron a ver a su compañero de trabajo el señor JORGE ESPINOSA, conduciendo vehículos de la empresa; que cuando lo veían era en Bucaramanga en el Terminal de Transportes pidiéndoles ayuda o colaboración a sus compañeros; y que ellos lo parchaban cuando podían. Y declaran que el señor EDUAR CACERES, como Jefe Operativo tenía la facultad de sancionarlos; y que cuando eran citados a la Gerencia tenían que ir solos y nunca les pasaban nada por escrito.

Que la decisión de primera instancia no valoró adecuadamente el acervo probatorio, desconociendo integralmente las contradicciones en el interrogatorio de parte del gerente y lo informado por los testigos, desconociendo que hay prueba suficiente de la suspensión del contrato de parte del empleador por más de 34 meses.

- **De la parte Demandada:**

El apoderado de la empresa demandada reiteró que el contrato de trabajo con el actor está vigente a la fecha, siendo él quien voluntariamente dejó de prestar servicio al no acudir a su puesto de trabajo entre el 19 de noviembre de 2013 al 12 de octubre de 2016; que nunca se le inició proceso disciplinario, no lo sancionó por no haberse presentado, ni se le suspendió el contrato de trabajo unilateralmente y por el contrario, de buena fe, se mantuvo el vínculo. Que el jefe operativo presentó informes sobre la no asistencia del trabajador y el contrato en su cláusula quinta señala que será el propietario del vehículo el encargado del pago del salario del conductor, resaltando que el actor y su esposa son los propietarios del vehículo que conduce. Resalta además que existen contradicciones en los hechos alegados para reclamar una suspensión, que deben valorarse desfavorablemente.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

6. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala, es el siguiente:

¿Si el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS en calidad de trabajador, tiene derecho a que La Empresa EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A, le reconozca y pague los salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social dejados de percibir desde el 18 de noviembre de 2013 al 11 de octubre de 2016, período en que alega estuvo suspendido ilegalmente de su empleo?

7. CONSIDERACIONES:

En este caso, procede la Sala a determinar si le asiste la razón al demandante JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, en sus pretensiones, al esgrimir que se le debe reconocer el salario y las prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 18 de noviembre de 2013 al 11 de octubre de 2016, por haber sido suspendido ilegalmente de su puesto de trabajo; a lo que se opone la demandada EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES, por estimar que durante el período reclamado no existió sanción, suspensión ni disciplinario alguno contra el actor, quien dejó de prestar servicios voluntariamente y no puede ahora reclamar, entre otras cosas, por ser propietario del vehículo que conducía.

Al resolver el litigio, la jueza *a quo* absolvió a la empresa demandada de las pretensiones incoadas en su contra, considerando que la situación fáctica que genera la aplicación del artículo 140 del C.S.T exige, que el trabajador JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, demostrara efectivamente que no prestó el servicio por disposición o culpa de la empresa EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES S.A., y que de acuerdo con el análisis de las pruebas practicadas, no se acreditó tal supuesto, por cuanto, el actor no logró probar que hubiese sido suspendido por decisión unilateral del empleador, en razón a que ninguno de los testigos dio fe de que en efecto tenían conocimiento directo o verídico de que el jefe de ruta lo hubiese suspendido.

Señalando, además, que en las declaraciones donde se indago respecto a este hecho, indican que tuvieron conocimiento por la manifestación que les hizo el mismo demandante, y que el único que afirmó escuchar sobre la suspensión es el director operativo, quien en su dicho fue contradictorio e

incoherente, por lo que concluyó, que no podía considerarse que el demandante no prestó su servicio por culpa o disposición del empleador.

La anterior decisión fue impugnada por la parte actora, señalando que existe una valoración incorrecta de las pruebas obrantes en el plenario que evidencian la suspensión del actor por orden del director operativo de la empresa, en donde no se cumplió con el debido proceso que refiere el reglamento interno de trabajo para las suspensiones.

Por aplicación del principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del C.P.T.Y.S.S., la sentencia de segunda instancia debe estar acorde a las materias objeto de apelación y ante ello, la competencia de esta Sala se limita a los asuntos sobre los que controvertió el apelante.

No es objeto de controversia entonces que, el demandante JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, y la empresa EXTRA RAPIDO MOTILONES S.A. suscribieron un contrato de trabajo a término fijo desde el 1° de septiembre de 2013 para desarrollar la labor de conductor del vehículo de su propiedad; que conforme aceptan ambos extremos sigue vigente y por ende, se entiende que ha venido siendo prorrogado por los períodos legales tras cada vencimiento.

La controversia acorde al recurso de apelación, gira en torno a examinar si el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, tiene derecho a que se le reconozcan y paguen los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, dotación de uniformes y aportes a la seguridad social, la sanción por el no pago de los intereses de cesantías, la indemnización moratoria por la no consignación de cesantías, durante el periodo en que no prestó el servicio como conductor del vehículo de transporte público.

Al respecto, debe decirse, que la legislación que regula las relaciones contractuales de los conductores de servicio público y su naturaleza, es el artículo 15 de la Ley 15 de 1959, que señala *«El contrato de trabajo verbal o escrito, de los choferes asalariados del servicio público, se entenderá celebrados con las empresas respectivas, pero para efecto de pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, las empresas y los propietarios de los vehículos, sean socios o afiliados, serán solidariamente responsables»*.

Y el artículo 36 de la Ley 336 de 1996, refiere: *“Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo. La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción u operación de los equipos destinados al servicio público de transporte será la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes”*.

De la norma anterior se desprende, que la contratación laboral de los conductores se verifica de forma directa con la empresa operadora del transporte, consagrando una responsabilidad solidaria entre ésta y el propietario del equipo respecto del pago de las prestaciones e indemnizaciones correspondientes. Aspecto que será objeto de análisis, exclusivamente si llega a evidenciarse condena alguna que amerite valorar las consecuencias de que uno de los solidariamente responsables sea el mismo demandante.

El litigio se enfoca en el reclamo de la parte demandante respecto del pago de los salarios y prestaciones sociales que alega dejó de percibir entre el 18 de noviembre de 2013 y el 11 de octubre de 2016, lapso en que aduce estuvo suspendido ilegalmente por orden del director operativo de rutas y no le fue asignado ningún despacho hasta nueva orden, ante su negativa a cancelar

un cobro indebido para cambio de ruta y que esta situación se prolongó hasta que le permitieron volver a despachar.

Al respecto, la norma aplicable es entonces exclusivamente el numeral cuarto del artículo 51 del C.S.T., que reza:

“ARTICULO 51. SUSPENSION. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de trabajo se suspende:

4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria.”

Al respecto de la legalidad de las suspensiones del contrato de trabajo, en providencia SL3238 de 2020 señala la Sala de Casación Laboral que *“En cuanto a la suspensión del contrato de trabajo, conviene precisar que existen normas de orden público que contienen un mínimo de derechos y garantías en favor de los trabajadores, contra las cuales **no es posible realizar pactos o acuerdos en contrario tendientes a cercenar los derechos mínimos de aquéllos, ya que, en caso de presentarse esa situación, el acto se reputa ineficaz**”*; lo que implica que, en caso de utilizarse esta figura para desconocer derechos laborales al no configurarse realmente un procedimiento sancionatorio adecuado, la misma deviene en ineficaz.

Para resolver adecuadamente el problema jurídico, lo correspondiente es analizar si efectivamente está demostrado que el actor dejó de prestar servicios por que el empleador decidió suspender unilateralmente el contrato de trabajo sin agotar el debido proceso previo y configurar así la causal consagrada en la norma o si realmente esta suspensión no existió y fue el trabajador quien dejó de asistir a prestar servicios; situación que se deriva de los hechos alegados por ambas partes en sus oportunidades procesales y respecto de lo cual giró el debate probatorio.

Para resolver el principal problema jurídico, vemos que dentro del expediente obran como pruebas, las siguientes:

- Contrato Laboral a término fijo inferior a un año suscrito entre la EMPRESA EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A., y el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, para desempeñar la labor de conductor en el municipio de Cúcuta desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2013 (fol. 2 a 4); destacando la cláusula segunda que dice *“El salario que se pacta con el propietario/conductor, es el producido de su propio vehículo, y las demás asignaciones que reciba, son producto de la utilidad que produzca su mismo vehículo, sin perjuicio de la obligación del pago de planillas, conduces o cualquier otra denominación o autorización de salida de rutas o de viajes de la empresa”*.
- Declaración extrajudicial rendida por el señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, ante el Notario Primero de Pamplona, el día 20 de mayo de 2017, en la cual bajo la gravedad del juramento declaró que en el año 2013, se vinculó a La Empresa de Transporte EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A., con el vehículo de servicio público de placas XVL-817 que fue comprado al señor JUAN DE DIOS HERNANDEZ PARADA, mediante documento privado y cuya negociación posteriormente fue aceptada y formalizada en la empresa antes mencionada, quedando como conductor de dicho vehículo, y que el día 1° de septiembre de 2013 suscribió contrato de trabajo con la empresa demandada la que le cobraba mensualmente por concepto de seguridad social para el año 2013 la suma de \$386.393, y adicionalmente, le descontaban en cada planilla de despacho un

porcentaje que llamaba la empresa como “gastos de administración” (fol. 5 a 6).

- Planillas de viajes del vehículo con placas XVL-817 con numero interno 100, desde el 25 de julio al 18 de noviembre de 2013, y del 2 de enero al 18 de julio de 2017, en donde se registra como propietarios al señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS y la señora ZAINÉ SUSANA (fol. 7 a 55)
- Oficio de fecha 6 de septiembre de 2016, dirigido a la empresa EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A., mediante el cual se postula al señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA como nuevo conductor del vehículo con placas XVL 817 con número interno 100 (fol. 60)
- Oficio GER425-16 de fecha 4 de octubre de 2016, mediante el cual la gerente de EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A. informa que en atención a que el señor ESPINOSA BARRIOS tiene contrato laboral vigente con la empresa no era necesaria la de presentación de nueva postulación como conductor (fol. 61)
- Oficio GER424-16 de fecha 4 de octubre de 2016, mediante el cual la gerente le comunica al señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, que *“por cuanto a partir del 19 de noviembre de 2013, usted no ha concurrido más a su puesto de trabajo a prestar servicios laborales para con la empresa, inclusive en el mes de septiembre de 2016, por lo tanto su contrato se encuentra suspendido desde dicha fecha hasta que usted se presente a cumplir sus obligaciones ante la empresa”* (fol. 62).
- Oficio GER459-16 de fecha 6 de octubre de 2016, en el cual, la gerente de la empresa demandada en respuesta al derecho de petición presentado por el actor señaló: *“En lo relacionado al oficio GER12-16 de fecha 21 de enero de 2016, dirigido al señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS y ZAINÉ SUSANA AWAD LOPEZ, en su condición de propietarios del vehículo de placas XVL-817, hace referencia es al aviso de desvinculación administrativa del vehículo de placa XVL-817 número interno 100 y en el nada dice del incumplimiento o no de las obligaciones y deberes del señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS como trabajador de la empresa EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A”* (fol. 64).
- Certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, del señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, (fol 73 a 116).
- Oficio GER12-16 de fecha 21 de enero de 2016, en el cual, la gerente de EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES, avisa al señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS y a la señora ZAINÉ SUSANA AWAD LOPEZ, como propietarios del vehículo XVL-817 con número interno 100, que de no presentarse en gerencia se procedería a desvincular el vehículo de su propiedad (fol. 117).
- Reportes de novedades por inasistencia del señor JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS al lugar de trabajo, mes a mes desde noviembre de 2013 a octubre de 2016 (FOL. 155 a 175).
- Contrato de vinculación suscrito entre EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A y JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, y ZAINÉ SUSANA AWAD LOPEZ, el día 19 de agosto de 2016 (fol. 186).

- Reglamento interno de trabajo (Folios 228-260), aunque no existe prueba de que se hubiera puesto en conocimiento del trabajador.
- Reporte de “conduces” (sic) por empresa de conductor de la Terminal de Transportes de Bucaramanga de noviembre 1 al 30 de 2013, donde no se evidencia que JORGE ESPINOSA tenga llegadas o salidas posteriores al último registro de noviembre 17 de 2013 a las 13:00 p.m. (Fol. 261-268)
- Interrogatorio de parte absuelto por NELCY CONSUELO PEÑARANDA, representante legal de la demandada, quien aceptó haber suscrito el oficio GER424-16 de fecha 4 de octubre de 2016 y haber recibido los informes de que el actor no se presentaba a laborar, indicando al ser cuestionada sobre qué actividades ejerció para verificar las razones de esto o por qué no se adelantó ningún proceso disciplinario, que no se inició nada pues se esperó que se presentara a trabajar y explica que en el caso del actor, este es propietario del bus que conduce y estos tienen la facultad de decidir, por lo que no se inició ningún proceso. Niega que el director operativo tenga facultades sancionatorias, y que este pudiera realizar los cobros que alega el actor para cambios de ruta. Advierte, que en el contrato de vinculación quedó estipulado que es el propietario quien paga el salario, este lo reporta a la empresa para que esta pague la seguridad social. Señala que el oficio dice contrato suspendido porque él no volvió a laborar según los reportes del director operativo y que no se comunicó con la otra propietaria para informar sobre esto. Al ser cuestionada por la jueza sobre la suspensión, señala que no fue suspendido como trabajador por cuestiones disciplinarias sino que el contrato se entendió suspendido porque él no volvió a trabajar.
- Interrogatorio de parte rendido por SONIA SUSANA AWAD LÓPEZ, abogada de profesión y cónyuge del señor JORGE ESPINOSA, relata que el 18 de noviembre cuando él llegó de la ruta la llamo preocupado porque los compañeros le comentaban que debía ir a la gerencia y que lo citaban a través de un cartel, informándole que el director operativo lo suspendió indefinidamente sin que se siguiera el proceso adecuado y meses después comenzaron a buscar apoyo legal, luego buscaron ser atendidos por la señora Consuelo y el señor Edgar – director operativo – pero la gerente señaló que no iba a contradecir las decisiones del director de rutas y que ella tenía entendido que la suspensión era por un comportamiento indebido. Señala que como propietaria del vehículo no le pago salarios a su esposo, pues estima que su contrato con la empresa era de vinculación y no era la empleadora del conductor. Explicó que siempre estuvieron reclamando por los descuentos mensuales que se afirmaban iban a seguridad social pero nunca entregaron recibos y esa era parte de la inconformidad de Edgar.
- El demandante JORGE ESPINOSA, aceptó haber suscrito los contratos de trabajo y de afiliación como propietario, indicó que se presentó por solicitud del director de rutas a su disposición cuando fue suspendido y que si bien tuvo un altercado con otro conductor no tuvo nada que ver con la empresa. Manifiesta que ya eran los propietarios del vehículo cuando comenzó a conducir, que no tenía salario sino que pagaba la planilla y se quedaba con el restante como producido, es decir que sí era quien manejaba su salario. Que no volvió a despachar porque se negó a pagar un valor que le exigía Eduar, director operativo, y este no le ordenó volver a despachar, luego acudieron a pedir explicaciones a la gerente pero esta apoyó al director y fue tiempo después que la empresa los convocó. Que en ese lapso de tiempo el vehículo estuvo guardado y no recibió salario ni

prestaciones.

- OCTAVIO MALAVER ROJAS, tachado de sospechoso por tener una demanda contra la misma demandada, informa que actualmente es desempleado por una enfermedad que le impide laborar y conoce al actor porque fueron compañeros, laborando 10 años en la demandada; expone que el 18 de noviembre de 2013 llegó a la empresa y tenía el carro dañado por lo que fue a buscar a la oficina el repuesto, y observó en el tablero que estaban convocando al conductor 100, que no tendría despacho hasta no acudir a la gerencia. Luego se encontró al demandante quien le indicó que no podía volver a despachar porque fue suspendido indefinidamente, alegando que le estaban cobrando \$300.000 por el cambio de ruta que se negó a pagar. Explica que también era propietario del vehículo que conducía, devengando el restante del producido luego de los descuentos de administración y pago de planillas de la empresa. Advierte que desde su conocimiento supo de la suspensión porque Jorge le comentó esto, siendo víctima directa él de los cobros adicionales para tramitar los permisos de cambio de ruta y las presiones para su pago. Niega que hubiera presentado queja alguna, porque no estaba interesado en discutir con el jefe de ruta.
- HECTOR GARCÍA DÁVILA, tachado de sospecha por tener una demanda contra la misma demandada donde reclama aportes de seguridad social, señala conocer y ser amigo del demandante y haber laborado para la demandada; expone que el actor laboraba con él como conductor, un día observó un cartel donde indicaban que JORGE ESPINOSA debía presentarse a gerencia y hasta tanto no tenía despacho, luego de eso él les informó que lo había suspendido el director operativo. Explicó que cuando estuvo afiliado, la empresa les cobraba la cuota respectiva y las planillas, quedándole el restante de sueldo. Desconoce si se cumplió el trámite o procedimiento de suspensión en el caso del actor.
- WILBREY MORANTES MANTILLA, tachado de sospecha por tener una demanda contra la empresa demandada, conociendo al demandante cuando laboró en la misma y explica que adelanta proceso contra esta por los aportes a seguridad social, indicando que en 2013 vio un letrado que decía que el señor del vehículo 100 no tenía despacho hasta que se presentara a gerencia y que luego él les informó que estaba suspendido porque no había querido pagar los 300 mil pesos que le exigió el director de ruta por cambiarlo del despacho a Bucaramanga de Pamplona. Que la suspensión inició en noviembre de 2013 pero no sabe cuándo volvió porque para abril de 2016 salió de la empresa, aclarando que eso lo sabe porque el señor ESPINOSA le dijo.
- EDUAR CÁCERES NAVARRO, indica que labora como director operativo en la empresa demandada, expone sobre la relación laboral del demandante JORGE ESPINOSA que ingresó en 2013 y a finales de noviembre no lo volvieron a ver, desconoce que le pasaría y volvió a finales de 2016 para manejar su vehículo después de rato sin hacerlo. Advierte que no conoce la causa, indica que él es quien programa los vehículos y el actor dejó de presentarse, lo que fue reportando mes a mes hasta que se volvió a incorporar. La jueza a quo dispuso realizar un careo entre el testigo y el demandante, ante él niega el señor CÁCERES que hubiera convocado a gerencia mediante un aviso o letrado al actor y también que hubiera solicitado 300 mil pesos so pena de suspensión, para el cambio de ruta a Bucaramanga de Pamplona. Ejecutando también el careo con los demás testigos presentes, quienes ratificaron haber visto el cartel y esto fue negado por el señor

CÁCERES. Expone que la gerencia es la única encargada de ejercer acción disciplinaria, adelantar procesos de suspensión y revisión frente a quienes no asisten, por lo que desconoce las razones para que no se atendieran sus 35 informes sobre la inasistencia del demandante y no es parte de sus funciones reclamar a su superior por no adelantarlos.

- FREDDY PEÑALOZA VILLAMIZAR, indica que es conductor-propietario de un vehículo de la demandada y como tal, expone que las rutas se publican y todos pueden observarla, que en el caso del demandante recuerda que luego de un incidente en Bucaramanga este no volvió y dejó de asistir a cubrir sus rutas, entiende que por una pelea con otro compañero a quien le cortó la cara y por la cual adelantaron en su contra una investigación en la Fiscalía, volviendo luego de dos años y medio aproximadamente, indicando que pese a no asistir al señor ESPINOSA se le seguía asignando ruta y lo recuerda porque iba antes que en el clavijero donde se tomaba la planilla. Que el señor CÁCERES solo se ocupa del ámbito operativo y cualquier ámbito disciplinario lo maneja la gerencia.
- CARLOS MONTERO GONZÁLEZ, indica que es conductor de la empresa demandada y le consta que el actor también como conductor, tuvo una pelea con otro empleado en la terminal de Bucaramanga a quien le cortó la cara y desde entonces se desapareció, hasta que volvió a verlo trabajar en el año 2016, desconociendo las razones para no volver pero entiende que fue por huir debido a ese conflicto, que recuerda haber oído que lo buscaba la Fiscalía con orden de captura y cree que fue por eso.

Respecto de la valoración probatoria, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL21157-2017, Radicación No 55951 y con M.P. ERNESTO FORERO VARGAS, se refiere las facultades del juez recordando que *“no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo. 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto”* y concluyen que las decisiones se deben fundamentar en los *“elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico”*

Bajo esta libertad de configurarse un criterio a partir de los elementos probatorios, esta Sala procederá a establecer si le asiste razón al apelante que reclama una indebida valoración probatoria de la jueza *a quo* por estimar no probada la existencia de la suspensión del contrato de trabajo por parte del empleador.

El primer aspecto a destacar, es que no existe controversia frente a que el señor JORGE ESPINOSA además de ser el conductor del vehículo con placas XVL-817 con número interno 100, ostenta la calidad de propietario con su esposa SUSANA AWAD LÓPEZ; situación que si bien no demerita la existencia del contrato de trabajo aceptado entre las partes y que en todo caso este no fue objeto de controversia en momento alguno, si está llamado a tener efectos en la valoración probatoria pues la relación entre demandante y demandado no solo está reglamentada por el contrato de trabajo sino además por el contrato civil de vinculación del vehículo automotor.

Del contrato de vinculación se resalta que en la cláusula de obligaciones al

propietario del automotor, este se compromete entre otras a “cancelar al conductor de su vehículo vinculado el salario mensual, que no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente”, “En el evento que el conductor por cualquier circunstancia no pueda conducir el vehículo objeto de este contrato, el Propietario se compromete y obliga a seguir pagando los salarios”, y que “el propietario que solicite autorización para prestar el servicio en una ruta distinta a las aprobadas por esta empresa, se obliga a cancelar a la empresa como administración, el valor que ésta fije para otorgar la correspondiente autorización”.

Además de este marco contractual aceptado por ambas partes, se resalta la solidaridad de fuente legal para las obligaciones del contrato de trabajo que se consagró en el citado artículo 36 de la Ley 336 de 1996 y de esto se deriva una particularidad especial en la ejecución de este contrato de trabajo, en la medida que el propietario al ejercer como conductor y ostentar una doble calidad frente a la empresa para la que presta servicios, está en el deber de cumplir paralelamente las obligaciones de este doble rol y evitar así aprovecharse de su posición para predeterminar situaciones donde reclame por prestaciones de las que también está obligado a responder.

Verbigracia de ello es que en el contrato de trabajo suscrito entre JORGE ESPINOSA y EXTRARÁPIDO LOS MOTILONES, se fijó como salario el producto de la utilidad del mismo vehículo que conduce, y en el contrato de vinculación que el propietario estaba obligado a reconocer este valor directamente al conductor; por lo que en ausencia de un tercero a quien reportar esta utilidad, es evidente que el conductor-propietario mantiene total control sobre el producido y esto se ratifica en las diferentes declaraciones de los testigos que ostentan esta misma calidad, al explicar que ellos cancelaban a la empresa las planillas y administración para quedarse con el restante.

Ahora bien, específicamente en lo que atañe a si existió o no una suspensión proveniente del empleador está aceptado por ambas partes, que el actor no prestó servicios en el período reclamado y por ende tampoco percibió contraprestación alguna; sobre la razón de esto, el único documento proveniente del demandado que refiere alguna causa es el Oficio GER424-16 de fecha 4 de octubre de 2016, donde se indica que el contrato está suspendido pero por causa imputable al trabajador y de su lectura no se deriva aceptación alguna de los hechos imputados por el demandante.

La declaración extraproceso rendida por el mismo demandante y las manifestaciones dadas en su interrogatorio de parte, así como en el de su cónyuge, no pueden servir para convalidar su versión de los hechos dado que a las partes no les es dable crear sus propias pruebas y jurisprudencialmente se ha señalado que “la parte que hace una declaración de un hecho que lo favorece, no puede pretender en el proceso hacerlo valer en su propio beneficio” (SL092-2022 reitera rad. 31.637 del 15 de julio de 2008).

Descartado lo anterior, queda por verificar si de los testimonios recepcionados se deriva prueba suficiente para convalidar la versión de la parte demandante; evidenciando que los testigos conforman dos bloques totalmente opuestos en sus declaraciones, por una parte los señores OCTAVIO MALAVER ROJAS, HECTOR GARCÍA DÁVILA y WILBREY MORANTES MANTILLA aseguran que desde su conocimiento el actor fue citado a gerencia el 18 de noviembre de 2013 y desde ese momento estuvo suspendido hasta que regresó a finales de 2016, mientras que los señores EDUAR CÁCERES NAVARRO, FREDDY PEÑALOZA VILLAMIZAR y CARLOS MONTERO GONZÁLEZ afirmaron que el actor no fue suspendido, sino que él no volvió a prestar servicios por cuanto tuvo un inconveniente al agredir físicamente a un compañero y fue denunciado, ausentándose desde ese

momento sin justificarlo a la empresa.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral en múltiples pronunciamientos como la reciente SL1950 de 2019, ha señalado *“en presencia de varios testimonios contradictorios u opuestos, que permiten arribar conclusiones enfrentadas o disímiles, corresponde al juzgador, dentro de su libertad y autonomía y en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, establecer, conforme a la libre formación del convencimiento previsto en el artículo 61 del CPTSS, su mayor o menor credibilidad, pudiendo escoger a un grupo de deponentes como fundamento de la decisión y desechar el otro, lo cual no configura de ninguna manera un yerro, tal como se expuso en Sentencia CSJ SL, 23 nov. 2016, rad. 47003”*.

Igualmente, en providencia SL18102 de 2016 se indicó que *“El artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social concede al juzgador un amplio margen de libertad para valorar las pruebas, y si bien puede cernirse sobre un deponente alguna duda sobre su imparcialidad, v. gr. por ser contraparte de uno de los intervinientes en un proceso distinto, ese hecho por sí mismo no descalifica su atestación si no existen otros elementos de juicio que evidencien la iniquidad. Podrá entonces el juez si lo encuentra razonable, darle credibilidad al testimonio en esas condiciones, y fundar en él su convicción sobre un determinado hecho del proceso, sin que quepa predicar mácula en la sentencia por dicho motivo”*

Aplicando estos parámetros jurisprudenciales, encuentra la Sala que asistió razón a la jueza *a quo* cuando expuso que los testigos aportados por el demandante no pueden servir para edificar su versión dado que su conocimiento sobre la alegada suspensión proviene enteramente de manifestaciones dadas a ellos, por el mismo demandante y no de una percepción directa y propia de la situación; es decir, en este aspecto son testigos de oídas y carecen de eficacia probatoria.

Nótese, que todos afirman haber presenciado el cartel donde se citaba a JORGE ESPINOSA a gerencia y que no tenía despachos hasta acudir allí, pero explican que fue el actor, quien les contó el resultado de dicha reunión; por ende, mal podría conferírseles credibilidad cuando su conocimiento viene edificado por el propio demandante. Errando así el apelante cuando señala, que estos testigos presenciaron la orden de suspensión, pues solo percibieron que fue convocado y no el resultado de dicha citación.

En esa medida, carece el plenario de una prueba que dé certeza a la Sala que el empleador sí ejerció de alguna manera su potestad sancionatoria y decidiera unilateralmente suspender el contrato de trabajo del actor, impidiéndole prestar servicio desde el 18 de noviembre de 2013.

Ahora bien, como resalta el apelante, pese a la inexistencia de prueba de suspensión está demostrada la vigencia del contrato de trabajo y que el empleador no reconoció prestaciones al trabajador; situación que se encuentra contemplada en el artículo 140 del C.S.T. que dice: *“Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del empleador.”*

Sobre como interpretar esta normativa, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL2041 de 2021 explica:

“(…) la jurisprudencia de la Sala ha indicado que dos son los elementos esenciales para la procedencia de lo previsto en el artículo referido: i) la ausencia de prestación de servicios del trabajador por culpa o disposición del empleador y, (ii) la vigencia del contrato de trabajo. En efecto, en providencia CSJ SL 20 oct. 2010, rad. 38949, reiterada en la CSJ

SL10106-2014, la Corte razonó en los siguientes términos:

[...] Cumple reiterar que para que se genere la consecuencia prevista en la norma que se comenta, consistente en la obligación de pagar salarios, debe presentarse no solamente la no prestación del servicio por culpa o disposición empresarial, sino que además, y con el carácter de preponderante, debe concurrir el otro supuesto fáctico, que es la vigencia del contrato de trabajo, que es el marco contractual, con el alcance de regla general, dentro del cual surge la obligación de pagar salarios, dado que, sólo excepcionalmente, en casos como el presente, se impone al empleador esa obligación, así no se haya prestado el servicio.

(...) el contrato de trabajo tiene una naturaleza bilateral y conmutativa, para la Sala, el supuesto fáctico contemplado en tal disposición puede ser aplicable para los eventos particulares en los cuales la no prestación del servicio es imputable al trabajador”

Conforme a este criterio jurisprudencial, estima la Sala que el actor tendría derecho a las prestaciones reclamadas si se demuestra que dejó de prestar los servicios por culpa o disposición del empleador; sin embargo, en este punto adquiere relevancia la referida doble calidad del señor JORGE ESPINOSA como propietario y conductor del vehículo afiliado a la empresa demandada, así como las particularidades de su contrato de vinculación y de trabajo.

Bajo la bilateralidad y consensualidad de estos dos contratos, el actor aceptó que pondría a disposición de EXTRA RÁPIDO LOS MOTILONES el vehículo de servicio público de su propiedad, con un conductor que se rigiera por las rutas, planillas y horarios de la empresa cubriendo conjuntamente el salario por virtud de la solidaridad legal; en este marco dispuso ser él mismo quien obrara como conductor y que su salario correspondería al producido de las rutas asignadas. No evidenciándose que desde el 18 de noviembre de 2013 que se le dejaron de asignar rutas, ejerciera como propietario algún trámite o reclamo derivado a exigir el cumplimiento de su contrato de vinculación y es que solo hasta septiembre de 2016, obra prueba de su regreso a la empresa al volverse a vincular como conductor, cuando la empresa le informa que ha entendido suspendido el contrato por su cuenta y que obran pruebas de los reportes del director de operaciones sobre su inasistencia.

Estima la Sala, que no existe justificación, para que el señor JORGE ESPINOSA y su esposa, como propietarios del vehículo, hubiesen dejado transcurrir casi 3 años con el vehículo parado y sin asignarle un conductor que atendiera las obligaciones del contrato de vinculación. Término en que no se indica, que la empresa demandada hubiera ejecutado el cobro de cuotas de administración y que le obligaran a asignar rutas y por lo tanto, mal podría ahora aprovecharse de la falta de diligencia para reclamar con la intención de reclamar salarios y prestaciones, los cuáles en todo caso dependen de la productividad derivada de la prestación del servicio y de la cual como propietario es tan responsable como a quien demanda.

En consecuencia, la Sala confirmará la Sentencia de fecha 24 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, y condenará en costas de segunda instancia a favor de la parte demandante, al ser desfavorable el recurso de apelación interpuesto, fijándose como agencias en derecho de segunda instancia la suma correspondiente a un salario S.M.L.MV.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada de fecha 24 de enero de 2019, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a favor de la parte demandada EXTRA RAPIDO LOS MOTILONES S.A y a cargo del demandante JORGE ENRIQUE ESPINOSA BARRIOS, al ser desfavorable el recurso de apelación interpuesto, fijándose como agencias en derecho de segunda instancia la suma correspondiente a un S.M.L.MV de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 365 del C.G.P.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


NIDIA BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-003-2019-00279-00 promovido por **Héctor Carlos Fernando Herrera Reyes** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** y la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (fls. 3-20, archivo digital 02): Depreca el actor se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones; trasladando la totalidad de cotizaciones y rendimientos sin descuento alguno, así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 21 de junio de 1955 y desde junio de 1985 inició a efectuar aportes al sistema general de pensiones administrado por Colpensiones, cotizando por un lapso de 9 años. **2) Que** mutó en febrero de

1998 con destino a la administradora de pensiones Porvenir S.A., cotizando un total 1182 semanas en ambos regímenes. **3) Que** la vinculación al RAIS se realizó a través de formularios que fueron diligenciados por asesores de la AFP que ingresaron a su lugar de trabajo, pero nunca fue advertido de los efectos negativos que conllevaba el traslado, indicando que dichos movimientos no fueron libres ni voluntarios al no mediar una verdadera asesoría sobre los riesgos y consecuencias que acarreaban los cambios; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, lo que genera nulidad de dicho acto. **4) Que** nunca le fue informado que podía trasladarse al RPM, pese a tener tal obligatoriedad Porvenir SA. **5) Que** el 20 de mayo de 2019 solicitó a las demandadas la ineficacia del traslado, recibiendo respuesta negativa.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: La **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** (fls. 75-86, archivo digital 02) se opuso a lo pretendido. Aceptó el hecho relacionado con la edad del actor y la reclamación administrativa, adujo no constarle las demás circunstancias fácticas. Argumentó que el precitado se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria y, se encuentra inmerso en la prohibición de trasladarse de régimen establecida en el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en la medida en que, está a menos de diez años para pensionarse. Propuso las excepciones que denominó: cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación pretendida, buena fe, prescripción, e innominada.

La **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** (fls. 144-152, archivo digital 02) también se resistió a las súplicas. Desconoce la totalidad de los hechos, por no constarle o ser opiniones del accionante. Adujo que el incoante suscribió formulario de vinculación o traslado, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad, aunó que las AFP brindaron información a sus afiliados a través de los extractos trimestrales y mediante medios de comunicación la posibilidad de retornar al RPM, posibilidad que omitió el actor. Se refirió al artículo 1746

del CC y la sentencia SU 062 de 2010 para fundamentar su oposición tendiente a obtener la restitución en el mismo estado en que se encontraba antes del acto acreditado como nulo, o en su lugar que el actor asuma la diferencia que surja de la equivalencia entre lo ahorrado en el RAIS y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el RPM. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe, pago, prescripción, e innominada.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación.

INTERVENCIÓN MINISTERIO PUBLICO: La **Procuraduría 10 Judicial I para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social** (fls. 105-116, archivo digital 02), expuso que le corresponde probar a la administradora que suministró a sus potenciales usuarios información clara y suficiente de los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declararse ineficaz el traslado. Que tal declaratoria conlleva la devolución a Colpensiones de todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, debiendo asumir de su propio patrimonio los deterioros que hubiere sufrido el bien administrado, tales como los gastos de administración descontados de las cotizaciones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 27 de enero de 2022, resolvió declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que el accionante surtió con la AFP Porvenir S.A. Condenó a la AFP demandada a devolver a –Colpensiones- la totalidad de los valores recibidos con motivo de la afiliación del actor, con los rendimientos que se hubieren causado sin realizar descuento alguno, debiendo asumir de su patrimonio los gastos ocasionados. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM valide la afiliación del precitado, reciba e incorpore a su historia laboral los aportes que le sean remitidos por los fondos privados para financiar las prestaciones económicas del régimen de prima media con prestación definida. En tal línea, desestimó las excepciones formuladas por las encartadas y las gravó en costas.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio Porvenir S.A. no cumplió con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada al demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas, en tanto que únicamente fue aportado el formulario de solicitud de vinculación suscrito aquel, cuales no resultan suficientes para demostrar la validez del traslado, como ha sido explicado suficientemente por la jurisprudencia.

RECURSOS DE APELACIÓN: **-Colpensiones-** busca dejar sin efectos la sentencia. Indicó que no se observan vicios en el consentimiento o incompleta información al accionante al momento de realizar el traslado al RAIS, en la medida que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS fue de manera voluntaria y sin coacción. Aseveró que a partir del acto de traslado, el afiliado contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió, al contrario, se convalidó la permanencia por un lapso igual o superior a los 20 años. Disiente de la condena en costas argumentando que previo al pronunciamiento de la autoridad judicial respectiva, le está vedado admitir el traslado de un afiliado que la ley proscribe tajantemente.

Porvenir S.A. también aspira a que se revoque la decisión. Manifestó que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones, como asegura, lo son los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción le generó gastos que la misma ley reconoce como comisiones de administración por la gestión de los

aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil. Discute que ningún detrimento de la cuenta del afiliado se puede reputar porque arguye, los rendimientos generados por el RAIS siempre serán superiores a los del RPM en tanto que éste último es un fondo común que no garantiza siquiera la rentabilidad mínima que las AFP están obligadas a reconocer incluso con su propio patrimonio. Y que, el acogimiento de las pretensiones representa una merma contraria a derecho del patrimonio del fondo privado y el aumento injustificado del perteneciente al RPM y el afiliado.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Porvenir S.A. replicó los argumentos expuestos en la apelación elevada ante la juez *A-Quo*. Colpensiones no hizo pronunciamiento alguno en esta etapa.

Por su parte, el extremo activo pide la confirmación íntegra de la decisión de primer grado.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado del actor del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, ante Porvenir SA, adolece o no del consentimiento informado de aquél. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que la encartada del RAIS restituya lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas. Asimismo, si la condena en costas a cargo de Colpensiones resulta ajustada a derecho.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la

disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se le describiera al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de

los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar

que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de la AFP. Luego, esta entidad debe detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de la AFP Porvenir S.A., al argumentar el demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Herrera Reyes para hacer efectiva la mutación de régimen pensional, fue informado, es decir, si la AFP demandada cumplió o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Se tiene que el actor suscribió un formulario de afiliación al Fondo de Pensiones Porvenir SA, el 11 de febrero de 1998 (fl. 39, archivo digital 02). Momento histórico en el que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a la AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que la AFP encartada le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a ésta desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dio cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitió al accionante sopesar la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá del mismo formulario de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Héctor Carlos Fernando Herrera Reyes de la anotación: “*bago constar que realizo de forma libre, espontánea y sin presiones la escogencia al régimen de ahorro individual (...)*”, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado.

No asumió entonces Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como le correspondía, los hechos aducidos por el deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplieron con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalara en su contestación de demanda que sí brindaron la asesoría en donde le explicaron de manera profesional y en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuaron. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, el fondo de pensiones convocado a juicio, se sustrajo al momento de suscribirse los distintos formularios de traslado y en perjuicio del demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltó a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones, sobre que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida

cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Menos puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrimó sobre ello.

Igualmente, no se tendrá como acertada la afirmación de Porvenir S.A. y Colpensiones sobre que la existencia de cualquier falencia fue superada con la permanencia por espacio temporal considerable en el RAIS, ya que, la actuación irregular de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por la fidelidad dentro de este último régimen. Ciertamente, la decisión de permanecer en una y otra administradora de ahorro individual o incluso efectuar traslados entre éstas, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva a modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales.

Y es que si bien el demandante se vinculó a Porvenir SA donde permaneció por más de 20 años, no de ello puede inferirse que el afiliado conocía todos los elementos ya referidos para concluir que tales brindaron la información pertinente, transparente y legal.

Nótese que solo se aportó como prueba del cumplimiento del deber de información, el formato de vinculación, que precisamente se trata de preimpresos que no detallan el estudio de las circunstancias particulares del demandante que en cumplimiento del deber legal debieron analizarse.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión de la juez *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo el demandante del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Porvenir S.A., con el deber de información, deberá ésta como la única administradora del RAIS que afilió y cuenta con los

aportes de Héctor Carlos Fernando Herrera Reyes, a devolver todas las prestaciones que del afiliado hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación del demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de la administradora privada, esta también debe asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tiene acogida la afirmación de la AFP demandada, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta

individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Condena en costas a Colpensiones en primer grado.

Como quiera que Colpensiones disiente de la condena en costas, se rememora que el artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las costas, orientado a que éstas sean cubiertas por la parte que pierde el litigio. Como las pretensiones prosperaron en este juicio, habiéndose opuesto a ello la AFP del RPM no cabe duda que debe ser condenada al pago de las costas del proceso en primera instancia.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de régimen pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó la primera instancia, siendo ineludible la confirmación íntegra de dicha decisión.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones y Porvenir S.A., por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$400.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 27 de enero de 2022 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO: CONDENAR en costas Colpensiones y Porvenir S.A. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$400.000 a cargo de cada una de ellas. Liquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO

Nidia Belén Quintero G .

Nidiam Belén Quintero Gélves

José Andrés Serrano Mendoza

José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.

U.

Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 6 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-003-2020-00102-00 promovido por **Ricardo Alberto Schweiger Alonso** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.**, la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.** y la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (fls. 2-11, archivo digital 01): Depreca el actor se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones; así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso. Subsidiariamente, depreca el reconocimiento a cargo de Protección y/o Porvenir S.A., de la pensión de vejez o la diferencia que arroje la mesada otorgada en el RAIS y la

calculada conforme los parámetros legales que gobiernan el RPM. Esto, a título de indemnización por perjuicios ocasionados.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 15 de enero de 1955 y desde el 1º marzo de 1973 inició a efectuar aportes al sistema general de pensiones a través del ISS, cotizando un total de 1168,57 semanas. **2) Que** mutó el 16 de septiembre de 1998 con destino a la administradora de pensiones Colpatria hoy Porvenir S.A. y el 7 de mayo de 2001 se trasladó a la AFP Protección, cotizando en este régimen 920 semanas y un total de 2095 semanas al sistema general de pensiones. **3) Que** la vinculación al RAIS se realizó a través de formularios de vinculación, pero nunca fue advertido de los efectos negativos que conllevaba el traslado, indicando que dichos movimientos no fueron libres ni voluntarios al no mediar una verdadera asesoría sobre los riesgos y consecuencias que acarrearían los cambios; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, lo que genera nulidad de dicho acto. **4) Que** la AFP lo afectó pues era beneficiario del régimen de transición, y nunca le fue informado sobre el periodo de gracia para trasladarse consagrado en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. **5) Que** cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez, no obstante, no ha solicitado la misma ni se encuentra en nómina de pensionados. **6) Que** de acuerdo a sus aportes y tasa de reemplazo, en el RPM le correspondería una mesada equivalente a \$4.625.512, mientras que en el RAIS sería de \$1.734.897. **7) Que** el 8 de noviembre de 2019 solicitó a los fondos privados la nulidad o ineficacia del traslado efectuado el 16 de septiembre de 1998 y a -Colpensiones- le adicionó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA (fls. 13-24, archivo digital 03):

La **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.** se opuso a las peticiones. Admitió la data de nacimiento del actor y el traslado efectuado ante el fondo, último aspecto sobre el que explicó, se hizo con profesionalismo y transparencia de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, por lo tanto, no hay lugar a decretar la nulidad en los

términos solicitados, ni a acceder a las demás súplicas. Afirmó, que el actor no se encuentra dentro de las posibilidades que otorga la jurisprudencia y reglamentación vigente para trasladarse al RPM. Sobre los demás factuales dijo que no son ciertos o no le constan. Propuso como excepciones de mérito las de falta de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro provisional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, e innominada.

La **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** (fls. 1-21, archivo digital 09.4) se opuso a lo pretendido. Aceptó el hecho relacionado con la edad del actor, no admitió la reclamación administrativa ni las demás circunstancias fácticas de las cuales desconoce su veracidad. Argumentó que el precitado se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria y, se encuentra inmerso en la prohibición de trasladarse de régimen establecida en el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en la medida en que, está a menos de diez años para pensionarse. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, imposibilidad de materializar los efectos de la ineficacia cuando el demandante ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirió el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual, prescripción, e innominada.

La **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** (fls. 1-11, archivo digital 17) también se resistió a las súplicas. Desconoce la totalidad de los hechos, por no constarle o ser opiniones del accionante. Adujo que el incoante suscribió formulario de vinculación o

traslado, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad, aunó que las AFP brindaron información a sus afiliados a través de los extractos trimestrales y mediante medios de comunicación la posibilidad de retornar al RPM, posibilidad que omitió el actor. Se refirió al artículo 1746 del CC y la sentencia SU 062 de 2010 para fundamentar su oposición tendiente a obtener la restitución en el mismo estado en que se encontraba antes del acto acreditado como nulo, o en su lugar que el actor asuma la diferencia que surja de la equivalencia entre lo ahorrado en el RAIS y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el RPM. Propuso las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe, pago, prescripción, e innominada.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 6 de diciembre de 2021, resolvió declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que el accionante surtió con la AFP Porvenir S.A. Condenó a las AFP demandadas a devolver al sistema los valores recibidos con motivo de la afiliación del actor, con los rendimientos que se hubieren causado. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM valide la afiliación del precitado, reciba e incorpore a su historia laboral los aportes que le sean remitidos por los fondos privados para financiar las prestaciones económicas del régimen de prima media con prestación definida. En tal línea, desestimó las excepciones formuladas por las encartadas y las gravó en costas.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio Protección ni Porvenir

S.A. cumplieron con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada al demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas, en tanto que únicamente fueron aportados los formularios de solicitud de vinculación suscrito aquélla, cuales no resultan suficientes para demostrar la validez del traslado, como ha sido explicado suficientemente por la jurisprudencia. Se apartó de la teoría de actos de relacionamientos alegada por Porvenir S.A., pues las sentencias emitidas por la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia no constituyen una línea jurisprudencial que se acompase con lo sostenido de manera pacífica por la Sala Laboral del órgano de cierre laboral.

RECURSOS DE APELACIÓN: **-Colpensiones-** busca dejar sin efectos la sentencia. Indicó que no se observan vicios en el consentimiento o incompleta información al accionante al momento de realizar el traslado al RAIS, en la medida que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez y que el demandante en su interrogatorio dijo que le habían hablado de los beneficios del fondo privado. Aseveró que a partir del acto de traslado, el afiliado contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió, al contrario, se convalidó la permanencia con los traslados entre AFP de dicho régimen. Afirmó que la diferencia en el monto pensional no es causal para alegar la nulidad de la afiliación y menos cuando no existe proyección pensional por alguna de las demandadas. Disiente de la condena en costas argumentando que previo al pronunciamiento de la autoridad judicial respectiva, le está vedado admitir el traslado de un afiliado que la ley proscribe tajantemente.

Porvenir S.A. también aspira a que se revoque la decisión. Manifestó que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones,

como asegura, lo son los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción le generó gastos que la misma ley reconoce como comisiones de administración por la gestión de los aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil. Discute que ningún detrimento de la cuenta del afiliado se puede reputar porque arguye, los rendimientos generados por el RAIS siempre serán superiores a los del RPM en tanto que éste último es un fondo común que no garantiza siquiera la rentabilidad mínima que las AFP están obligadas a reconocer incluso con su propio patrimonio. Y que, el acogimiento de las pretensiones representa una merma contraria a derecho del patrimonio del fondo privado y el aumento injustificado del perteneciente al RPM y el afiliado.

Protección SA elevó petición de revocatoria. Discrepa de la orden de devolución conjuntamente las comisiones y rendimientos porque se trata de prestaciones ya acaecidas que emanan de la buena gestión desplegada. Menos dice, el seguro previsional en tanto afirma se trata de un concepto girado en favor de un tercero de buena fe, como lo es la aseguradora correspondiente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: -Colpensiones-, Porvenir S.A. y Protección replicaron los argumentos expuestos en la apelación elevada ante la juez *A-Quo*.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado del actor del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, primero ante Colpatria hoy Porvenir SA y luego a Protección S.A., adolece o no del consentimiento informado de aquél. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no

que las encartadas del RAIS restituyan lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas. Asimismo, si la condena en costas resulta ajustada a derecho.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se le describiera al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos

por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de las AFP Protección y Porvenir S.A., al argumentar el demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Schweiger Alonso para hacer efectivas las mutaciones de régimen pensional, fue informado, es decir, si las AFP codemandadas cumplieron o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Se tiene que el actor suscribió un formulario de afiliación al Fondo de Pensiones Colpatria hoy representado por Porvenir SA, el 15 de septiembre de 1998 (fl. 40) y el 7 de mayo de 2001 (fl. 41) otro documento de igual

naturaleza ante Protección S.A. Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a la AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que ninguna de las AFP encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitieron al accionante sopesar la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Ricardo Alberto Schweiger Alonso de la anotación: “*hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)*”, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado. Situación que ratifica el protagonista procesal al momento de rendir interrogatorio de parte (minuto 26:00 al 31:20, archivo digital 22), pues insiste en que no fue asesorado en debida forma recibiendo solo la información de que el ISS se iba a acabar y que en los fondos privados se podría pensionar más rápido, que no se acercó posteriormente a ampliar su conocimiento al respecto y busca el traslado pues se siente engañado ya que todo lo que dijeron en un principio no es real.

No asumieron entonces Protección ni Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como les correspondía, los hechos aducidos por el deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplieron con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalaran en sus contestaciones de demanda que sí brindaron la asesoría en donde le explicaron en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los

regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuaron. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, los fondos de pensiones convocados a juicio, se sustrajeron al momento de suscribirse los distintos formularios de traslado y en perjuicio del demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltaron a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones sobre que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Menos puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrimó sobre ello.

También se desestima la afirmación de Colpensiones, coadyuvada por Porvenir SA de que no se encuentra probada la lesión o perjuicio al accionante por la insuficiencia de la información que impida el acceso al derecho pensional, citando para el efecto la sentencia SL 19447 de 2017, en donde se señaló que existirá ineficacia de la afiliación cuando *“la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado impidiéndole su acceso al derecho”*, resulta menester indicarle que la regla jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, tal y como ya se ilustró, enseña que no se requiere demostrar que el acto de

traslado causó un perjuicio, verbigracia por tener un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse, dado que lo que se analiza es el deber de información, el cual opera para todos los afiliados, en tanto ello se dirige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado.

Igualmente, no se tendrá como acertada la afirmación de Porvenir S.A. y Colpensiones sobre que la existencia de cualquier falencia fue superada con la permanencia por espacio temporal considerable en el RAIS, ya que, la actuación irregular de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por la fidelidad dentro de este último régimen. Ciertamente, la decisión de permanecer en una y otra administradora de ahorro individual o incluso efectuar traslados entre éstas, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva a modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales.

Y es que si bien el demandante se vinculó primero a Porvenir SA y posteriormente a Protección S.A., no de ello puede inferirse que el afiliado conocía todos los elementos ya referidos para concluir que tales brindaron la información pertinente, transparente y legal.

Nótese que solo se aportó como prueba del cumplimiento del deber de información, los formatos de vinculación, que precisamente se trata de preimpresos que no detallan el estudio de las circunstancias particulares del demandante que en cumplimiento del deber legal debieron analizarse.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión de la juez *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo el demandante del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Porvenir S.A., ni en su oportunidad Protección S.A., con el deber de información, deberá ésta como última administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Ricardo Alberto Schweiger Alonso, devolver todas las prestaciones que del afiliado hubiera

recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación del demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de las administradoras privadas, estas también deben asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tienen acogida las afirmaciones de las codemandadas pertenecientes al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir

los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Condena en costas a Colpensiones en primer grado.

Como quiera que Colpensiones disiente de la condena en costas, se rememora que el artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las costas, orientado a que éstas sean cubiertas por la parte que pierde el litigio. Como las pretensiones prosperaron en este juicio, habiéndose opuesto a ello la AFP del RPM no cabe duda que debe ser condenada al pago de las costas del proceso en primera instancia.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de régimen pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta

ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó la primera instancia, siendo ineludible la confirmación íntegra de dicha decisión.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A., por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$400.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO: CONDENAR en costas Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$400.000 a cargo de cada una de ellas. Líquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO

Nidia Belén Quintero G .

Nidiam Belén Quintero Gélves

José Andrés Serrano Mendoza

José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.

U.

Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Treinta (30) de Marzo de Dos Mil Veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-003-2020-00179-00
RADICADO INTERNO:	19.567
DEMANDANTE:	COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.
DEMANDADO:	SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO y SINTRAINDAL

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala, dentro del proceso ordinario laboral promovido por COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES S.A.S. - ATENCOM contra SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL”, Radicado bajo el No. 54-001-31-05-003-2020-00179-00, y Radicación interna No. 19.567 de este Tribunal Superior, para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 20 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

La Empresa COMPAÑÍA DE SERVICIOS COMERCIALES S.A.S. - ATENCOM, mediante apoderado judicial, solicita se declare la ilegalidad de la afiliación de la trabajadora SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 60.450.067 de Cúcuta, al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS “SINTRAINDAL”, por cuanto la Compañía de Servicios Comerciales ATENCOM S.A.S. no desarrolla actividades económicas que pertenezcan a la industria que agrupa dicha organización sindical. Que se declare que sus trabajadores no pueden afiliarse ni constituir subdirectivas de dicha organización sindical o pueden ser directivos de la misma y sus seccionales. Que se declare la ineficacia de esa afiliación y la de cualquier otro trabajador de su empresa a esa organización sindical, ordenando al MINISTERIO DEL TRABAJO y a SINTRAINDAL dejar sin efecto ese registro sindical y abstenerse de admitir inscripciones futuras semejantes.

Como fundamento fáctico refiere:

- Que ATECOM S.A.S. se constituyó mediante documento privado el 26 de diciembre de 2012, inscrito en el registro mercantil el 3 de enero de 2013 y tiene como actividad *“la prestación de servicios de asesoría o consultoría, así como prestar o recibir servicios compartidos, principalmente en las áreas de administración, soporte, comercio, operaciones o ventas, así como la realización en Colombia y en el exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil”*.
- Que SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO se encuentra vinculada a la empresa mediante contrato de trabajo desde el 1 de mayo de 2013, vigente a la fecha y presta servicios en Cúcuta; siendo informados el 4 de julio de 2017 por la Organización Sindical SINTRAINDAL que esta se afilió y es miembro de su junta directiva en calidad de secretaria general.
- Que SINTRAINDAL representa a trabajadores de la industria de alimentos, acorde a registro sindical No. 049 del 10 de julio de 2017 y su estatuto consagra que está conformado por “trabajadores y trabajadoras de la industria de los alimentos y de afines, conexas o complementarias, vinculados bajo formas diversas de relación laboral o modalidades de trabajo dependiente, independiente o autogestionario que laboren en toda actividad relacionada con cultivar, cortar, recolectar, fabricar, pulverizar, envasar, preparar, comprar, vender, distribuir, preservar, mezclar, transportar, comercializar, importar, exportar alimentos de consumo animal o humano”; es decir, se acogió la Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia por la DIAN en Resolución No. 000139 del 21 de noviembre de 2012.
- Que las actividades desarrolladas por ATENCOM S.A.S., se encuadran en las secciones 14.1 y 14.2, “Actividades profesionales, científicas y técnicas”, concretamente en la División 70 relacionada con “Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión”; y “Comercio al por Mayor y al por Menor” División 46 “Comercio al por Mayor y en Comisión o por Contrata”; por lo que se trata de una industria y actividad económica diferente a la que representa SINTRAINDAL.
- Que por lo anterior, no es posible predicar validez de una afiliación a sindicatos de industria de empleados que presten sus servicios en empresas de industrias o actividades económicas disímiles a la industria o actividad económica que agrupa el sindicato, por lo que ninguno de sus trabajadores puede afiliarse a esa organización.
- Que existe un precedente en este caso, dado que Juzgado Tercero Laboral del Circuito Judicial de Cúcuta y confirmado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, ya resolvieron declarar la ilegalidad de la afiliación de la misma trabajadora a otro sindicato de industria agroalimentaria, SINALTRAINAL.

Las demandadas SONIA ESPERANZA BLANCA ACEVEDO y SINTRAINDAL, contestaron conjuntamente a la demanda, indicando que se oponen a las pretensiones dado que la empresa demandante realmente ejecuta contratos de prestación de servicios a la preventa de productos incluyendo del sistema

agroalimentario: bebidas azucaradas y agua, de la contratante INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS INDEGA S.A. propiedad de COCA COLA FEMSA, para quien la trabajadora ha prestado servicios como prevendedora de productos desde 2005, 8 años a través de la empresa PROSERVIS y luego con la aquí demandante; advirtiéndole que debe analizarse el concepto de agroindustria de manera amplia, pues esta incluye las actividades relacionadas a elaborar, transformar y comercializar productos de tipo agropecuario, siendo labor de la demandada la venta de productos procesados de la caña de azúcar (bebidas azucaradas, jugos de frutas y derivados de esta. Propone como excepciones INEXISTENCIA DE LA CAUSAL INVOCADA, alegando que no se consagra ninguna causa de nulidad o ineficacia de afiliación sindical en el ordenamiento jurídico laboral.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 20 de octubre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

*“**PRIMERO: DECLARAR** la ilegalidad de la afiliación de la señora SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO al Sindicato de Trabajadores de la industria de los alimentos, ya que ésta no ejerce actividades ni desarrolla de negocios dentro de la misma rama económica, agrícola y de alimentos, conforme lo he explicado.*

***SEGUNDO: ORDENAR** el Sindicato de Trabajadores de la industria de los alimentos, que proceda de manera inmediata, una vez por ejecutoria de la presente sentencia. A expulsar a la señora SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO de la organización sindical, y procede a remover las de aquellos cargos que ocupa en la directiva de la misma, efectuando las notificaciones pertinentes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.*

***TERCERO: CONDENAR** en costas a los demandados SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO y a la organización sindical.*

***CUARTO: ABSTENERSE** de pronunciarse sobre las pretensiones formuladas de manera general y abstractas respecto a los demás trabajadores de la empresa.”*

2.2. Fundamento de la Decisión.

La jueza de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que, el objeto del litigio se centra en establecer si hay lugar a declarar la ilegalidad y la ineficacia de la afiliación que realizó la trabajadora demandada SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL, en razón a que su empleador, la empresa demandante ATENCOM S.A.S., no desarrolla actividades económicas que pertenezcan a la industria que agrupa dicha organización sindical.

- Señala, que la jurisdicción laboral es competente para conocer de los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo y mediante un proceso ordinario se tramita todo lo que no requiera un procedimiento especial; como es del presente caso donde se persigue exclusivamente deshacer la afiliación a un sindicato y no se reclama la terminación de un contrato de trabajo, sino la legalidad y validez de una afiliación para que el empleador siga reconociendo los derechos y garantías de asociación sindical.

- Explica, que el acto de afiliación de la demandada al sindicato es un ejercicio del derecho derivado del artículo 29 de la Constitución y reglado en el artículo 353 y 358 del C.S.T., así como una garantía derivada del Convenio 87 de la OIT que hace parte del bloque de constitucionalidad y por él, las autoridades públicas deben abstenerse de toda intervención que tienda a limitar ese derecho de asociación sindical. Así mismo, refiere diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional que en sede de control abstracto y concreto ha desarrollado los alcances del derecho de asociación y libertad sindical, correlativos al de observar los estatutos y respetar la legalidad que los rige para los trabajadores, por lo que no es absoluto, sin perjuicio del principio de no injerencia del Estado y los empleadores en su constitución y autonomía. Resaltando que el ejercicio del derecho de asociación no es absoluto, debiendo preservar los requisitos mínimos, límites y condiciones que eviten la arbitrariedad y discrecionalidad.

- Refiere que conforme al literal b del artículo 356 del C.S.T., un sindicato de industria o por rama de actividad económica, está conformado por individuos que prestan sus servicios a varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica, derivándose de su lectura y de la doctrina que es un supuesto para su conformación la unidad de objeto de explotación industrial o de actividad económica y la heterogeneidad de oficio o labores que ejerzan sus trabajadores; por lo que acorde a la jurisprudencia y norma en cita, la afiliación a estos debe preservar los principios de legalidad.

- Advierte, que la Corte Constitucional ha descartado que el Ministerio del Trabajo esté facultado para rechazar la inscripción de un sindicato y por ende sus registros no confieren por sí mismos legalidad a sus modos de conformación, dado que si existe alguna irregularidad debe demandarla ante la jurisdicción ordinaria laboral para su verificación; de manera que es procedente examinar si el estatuto de la demandada se ajusta a las inscripciones realizadas.

- Ante el vacío legal que existe para definir a un sindicato de industria o por rama de actividad económica, señala que es entendido principalmente por el Consejo de Estado como *la transformación de materias primas y elementos de producción de artículos en general*, aunque se de esta connotación a otras actividades de consumo, agregando en su providencia que el hecho de realizar actividades complementarias o conexas, no las identifica en el mismo ramo industrial pues de su definición se desprende que son distintas y que adicional a ello se debe tener en cuenta la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, adoptada por el DANE como una serie de parámetros y divisiones que discriminan las producciones en sectores específicos e inclusive diferencian las actividades secundarias, complementarias y auxiliares, de las principales como son Agricultura, Ganadería, Minería,

etc.; clasificación que rechaza la demandada pero no solo se constituye como una herramienta doctrinal auxiliar a la función judicial sino que fue aportada debidamente como prueba por la demandante.

- Al Aplicar esta división, que si bien no es obligatoria, si es útil y aplicable, para verificar los requisitos de unidad de objeto de explotación industrial o actividad económica y de heterogeneidad de oficios o actividades de los trabajadores; resaltando que las actividades conexas o secundarias, son distintas, dado que si bien colaboran para el desarrollo de la actividad económica o industria, no puede alegarse que pertenecen a la misma y es bajo esta mirada que se analizará la afiliación de la demandada al sindicato SINTRAINDAL, dado que ATENCOM S.A.S. desarrolla como objeto social actividades de asesoría, consultoría, prestación de servicios compartidos en áreas de administración, soporte, comercio, operaciones o ventas, que pertenecen a una industria diferente; el sindicato demandado cobija a los trabajadores de la industria de alimentos y de afines conexas o complementarias y la trabajadora fue contratada para desempeñar el cargo de prevendedora con funciones de visitar a los clientes, tomar y validar los pedidos de los productos de Coca Cola, sugerir el pedido al cliente en función del inventario y la rotación del mismo, acomodar y limpiar el producto en los anaqueles o enfriadores, entre otras similares.

- Concluye, que si bien el ámbito de cobertura del artículo 2° del estatuto de SINALTRAINAL refiere incluir industrias distintas a las de alimentos, como sería la manufactura de alimentos y bebidas, el DANE circunscribe la industria agrícola a AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA y PESCA, por lo que actividades como las de la demandada rebasan el ámbito del derecho colectivo legalmente instituido para integrar un sindicato de industria, al no predicarse identidad con la industria alimenticia; igualmente al incluir en los estatutos las actividades de comercialización, distribución y transporte de alimentos y bebidas, está refiriéndose a actividades de tipo auxiliares, que respaldan las actividades de producción principales, que se llevan a cabo para facilitar éstas, es decir, que se trata de actividades conexas o complementarias, que tampoco permite predicar identidad.

- Agrega, que si bien ATENCOM S.A.S. se alega como una subsidiaria de COCA COLA FEMSA, como empresa de la industria agroalimentaria, el requisito legal es que el empleador sea una empresa que preste servicios de la actividad principal y no una complementaria o conexas; igualmente la Resolución N° 000000719 del 11 de marzo de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, no es pertinente ni conducente para resolver este litigio dado que se refiere a aspectos de salubridad y no económicos.

- Entonces determina que las labores de prevendedora para ATENCOM S.A.S. de la demandada, no pueden entenderse como catalogadas en la industria agrícola o alimentaria, sino se refiere a labores conexas, complementarias o auxiliares que legalmente no son admisibles en el artículo 356 del C.S.T., no ajustándose a derecho su afiliación y la declaración de ineficacia no transgrede el derecho a la asociación y a la libertad sindical, debido a que éstos no tienen un carácter absoluto o ilimitado, sino que debe ejercerse en cumplimiento del parámetro legal, siendo respaldada jurisprudencialmente la facultad del juez para declarar la ilegalidad de afiliación a un sindicato por no cumplir el parámetro legal.

- En consecuencia, ordena la expulsión de la trabajadora del sindicato y se abstiene de resolver las peticiones de la demandante para impedir futuras afiliaciones sindicales, debido a que por su generalidad y abstracción, implicaría decidir sobre hechos futuros e inciertos, y derechos de trabajadores que no fueron vinculados al proceso, por lo que no tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a la contradicción y defensa

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la demandada

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión señalando lo siguiente:

- Indicó que no hay una valoración completa del acervo probatorio, dado que dentro del certificado de existencia y representación legal que se presenta de INDEGA S.A.S – COCA COLA FEMSA, se incluye el objeto social la venta de productos que esta fábrica y ante ello hay una relación entre la trabajadora y su objeto social, siendo aplicable la jurisprudencia que entiende su actividad como una trabajadora en misión, pues realiza actividades de venta ante clientes de la industria, lo que no puede considerarse conexas o auxiliares, siendo de total injerencia la venta para la subsistencia de la empresa y su objeto social.

- Señala, que se desconoce el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pues el objeto social de ATENCOM S.A.S. no se desarrolla como está registrado sino una labor ligada al objeto misional de INDEGA S.A.S., como actividad principal que es la venta para la industria de los alimentos y por ello el análisis de la doctrina que define industria exige la conexión que es evidente entre producción y venta, sin que se logre probar que INDEGA venda sus productos a ATENCOM S.A.S. solo le traslada su misión de ventas disfrazada de asesoría cuando realmente esos trabajadores venden los productos de la principal.

4. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

- **Parte demandante:**

El apoderado de ATENCOM indica que reafirma los hechos y pretensiones de la demanda, en la medida que están acreditadas las situaciones de hecho que componen la pretensión, sobre que el objeto social de la empresa no está cubierto por el Sindicato al cual se afilió la trabajadora demandada, por lo que no puede ser parte de un sindicato de industria si la empresa no presta servicios en la misma industria o actividad económica, existiendo restricción legal para agruparse indebidamente en la asociación sindical. Advierte que la trabajadora ha intentado afiliarse a diferentes sindicatos con otra actividad económica en dos oportunidades, ya existiendo declaración de ilegalidad de la anterior afiliación y esta situación es exactamente igual, solo que con otro sindicato.

- **Parte demandada:** No presentó alegatos.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

6. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala es el siguiente:

¿Si resulta procedente declarar ilegal la afiliación de la trabajadora Sonia Esperanza Blanco Acevedo al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL”, por cuanto la empresa demandante Compañía de Servicios Comerciales ATENCOM S.A.S no desarrolla actividades económicas que pertenezcan a la industria que agrupa dicha organización sindical?

7. CONSIDERACIONES:

El debate en esta instancia está encaminado a determinar si la afiliación de la señora SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL”, en su condición de trabajadora de la empresa ATENCOM S.A.S., es susceptible de ser declarada ilegal y sin efectos por no corresponder la actividad económica del empleador, a la industria que cobija la organización sindical.

La jueza *a quo* accedió a las pretensiones indicando, que el ejercicio constitucional del derecho de asociación sindical no es absoluto y debe ser ejercido con apego a la legalidad, evitando la arbitrariedad y verificado que efectivamente la actividad económica de ATENCOM S.A.S. no coincide con el ámbito de protección de SINTRAINDAL, por lo que accede a las pretensiones y ordena desafiliar a la demandada por abusar del derecho de asociación. Conclusión a la que se opone la parte demandada, quien reclama una indebida interpretación del principio de primacía de la realidad sobre las formas respecto de la labor ejercida por ATENCOM S.A.S. a favor de su sociedad matriz COCA COLA FEMSA, quien sí se circunscribe en el ámbito de protección de SINTRAINDAL.

De conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66^a del C.P.T.Y.S.S., la competencia de esta Sala se circunscribe exclusivamente a lo controvertido por la parte demandada y queda excluida la facultad de pronunciarse sobre las pretensiones que fueron negadas a la empresa demandante, al no interponer recurso frente a la negativa de la jueza *a quo* a la solicitud de impedir futuras afiliaciones.

Con fundamento en lo expuesto, pasa esta Sala de Decisión a estudiar si es procedente la solicitud de la empresa demandante de declarar ilegal la afiliación de una de sus trabajadoras a un sindicato de industria, por considerar que la vinculación no cumple el parámetro legal y ante ello, corresponde al juez del trabajo determinar si objetivamente el ejercicio del derecho de asociación sindical que llevó a la señora SONIA BLANCO ACEVEDO a afiliarse a SINTRAINDAL, estuvo ajustado a derecho o no, y las consecuencias en caso de esto último.

Sea lo primero señalar que en el artículo 39 de la Constitución Política se elevó a rango constitucional la garantía del fuero sindical:

“ARTÍCULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.

La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos.

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía judicial.

Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.”

Así mismo, la Corte Constitucional en providencia T-619 de 2016 advierte.

“...este derecho se encuentra reforzado en el ordenamiento jurídico a través del bloque de constitucionalidad que integra diferentes instrumentos de derechos internacional, tales como los Convenios 87 y 98 de la Organización del Trabajo, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 8º del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales establecen que (i) todas las personas tienen derecho a asociarse libremente y a constituir sindicatos para defender sus intereses; (ii) los trabajadores deben tener total libertad de elección; (iii) los requisitos para fundar y hacer parte de una organización sindical sólo los puede establecer el propio sindicato; (iv) el derecho de asociación sindical puede restringirse vía legal en interés de la seguridad nacional y la defensa del orden público; (v) y los Estados miembros del Convenio de la OIT no pueden adoptar ninguna medida legislativa que afecte la libertad sindical y en general el derecho a la sindicalización.

...los derechos de asociación y a la libertad sindical no son absolutos. En particular, en la sentencia C-466 de 2008, la Corte indicó que no se puede admitir el carácter absoluto de tales derechos, toda vez que la Norma Superior establece como límite el orden legal y los principios democráticos. Asimismo, indicó que los Convenios Internacionales autorizan a los Estados a imponer restricciones a los derechos sindicales, siempre y cuando sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas, con el fin de garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moralidad pública, y en general cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. No obstante, este Tribunal advirtió que las restricciones a los derechos sindicales no pueden afectar el núcleo esencial del derecho de libertad sindical, de tal forma que lo desnaturalice o impida su normal y ejercicio.”

Resalta la Sala, que el ejercicio del derecho de asociación sindical, implica, para ambas partes de la relación laboral, una dimensión de derechos y deberes.

Por parte de los trabajadores sindicalizados, el derecho de asociación para la defensa de sus intereses tiene como fin, el deber de un ejercicio adecuado y justo de los mecanismos legales, mientras para el empleador, el deber de garantizar el ejercicio sindical y el derecho de reclamar ante la jurisdicción cuando se abusa del mismo. Ello, con el fin de alcanzar el objeto del derecho laboral, de lograr la justicia en las relaciones entre empleadores y trabajadores en un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.

Entonces, el asunto a debatir bajo este marco constitucional y legal, es determinar si la señora BLANCO ACEVEDO en su condición de trabajadora de la empresa ATENCOM S.A.S., en ejercicio de su derecho de asociación sindical estaba facultada para afiliarse al SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL”; dado que considera el empleador, que existió una indebida inscripción de una trabajadora a un sindicato, por ejercer este su labor de representación en un ámbito industrial diferente.

Al respecto, el artículo 356 del C.S.T subrogado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990, refiere que los sindicatos de los trabajadores se clasifican así:

“a). De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución;

b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica;

c). Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad,

d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia”.

La Corte Constitucional en Sentencia C-180 de 2016 explica que el núcleo esencial del derecho fundamental de libertad de afiliación sindical, esto es el mínimo contenido que el legislador debe respetar para el goce del derecho, incluye “el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones”, resaltando a su vez que el objeto del derecho social a la sindicalización es garantizar de manera colectiva la representación de los trabajadores y su participación en la protección de sus derechos.

Agrega la Corte en la sentencia referida, que el parámetro de constitucionalidad y legal de cualquier actuación referente al derecho de sindicación es el Convenio No. 87 de la OIT, ratificado por Colombia el 16 de noviembre de 1976 e incorporado al ordenamiento jurídico en la ley 26 de 1976 y el artículo 53 de la Constitución Política; siendo esta la base jurídica para concluir que el Estado, a través de su órgano legislativo, puede establecer: (i) el marco general de las organizaciones, (ii) los requisitos de

constitución de un sindicato y (iii) algunas formalidades para la creación de las organizaciones, sin que ello implique afectar su autonomía de funcionamiento o imponer trámites dilatorios.

De esta manera, entre las posibilidades reconocidas por el Convenio 87 a los Estados, está la de clasificar a las organizaciones como de empresa, industria y oficio, advirtiéndole la Corte que *“la tipificación de las clases de organizaciones que se pueden constituir, constituyen un medio para el desarrollo de las finalidades de asociación, siempre y cuando dicha regulación no afecte su autonomía”* y agrega la Corte que esta clasificación no afecta el contenido intrínseco del derecho de sindicalización, mientras no existan trabas del Estado en la constitución o funcionamiento de los sindicatos, es decir, que conserven y se garantice *“la potestad de autoconformarse y autoregularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden los miembros, con el límite que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos.”*

Fluye de lo expuesto, que el derecho de libre asociación sindical está delimitado para el trabajador en que su afiliación debe suscitarse en el ámbito legal previsto para ello, específicamente en este caso que se tratara de un sindicato que, pese a estar conformado por individuos que prestan servicios en distintas empresas, lo hacen en el mismo ámbito industrial o actividad económica.

Destaca la Sala, que este último punto constituye una situación indispensable para que el derecho de asociación sindical se ejerza adecuadamente, pues la naturaleza de la representación sindical es contar con una colectividad que garantiza y defiende los intereses en común de todos los trabajadores, exigiendo para ello, condiciones de identidad y uniformidad respecto de los sujetos representados para alcanzar acuerdos que les sean igualmente aplicables y se adecúen a las situaciones fácticas de su actividad económica o industria.

En esa medida, de las pruebas obrantes en el expediente, se destacan las siguientes:

- La señora Sonia Esperanza Blanco Acevedo, suscribió contrato de trabajo a término indefinido con la Compañía de Servicios Comerciales S.A.S para desempeñar el cargo de “prevendedora” desde el 1° de mayo del 2013, conforme se desprende de certificado aportado por la demandante, el cual se mantiene vigente aunque advierte que desde el 24 de agosto de 2017 se mantiene incapacitada y describe como funciones: *“Visitar al cliente con el fin de realizar la toma de pedido y validación del mismo; Sugerir pedido al cliente en función del inventario y la rotación del mismo, teniendo en cuenta la disponibilidad de envase y focalizándolo en categorías; Acomodar y limpiar producto, anaquel y enfriador; Verificar frescura del producto; Colocar material POP, ejecutar y dar seguimiento a estrategias comerciales y de marketing; Cumplir con el presupuesto de ventas mediante la ejecución y seguimiento a los objetivos de volumen; Apoyo a la ejecución del proceso de incorporación de nuevos clientes; Detectar oportunidades en el mercado e implementar planes de acción en conjunto con el jefe de ventas; Negociar la ejecución de la PdE; Ejecutar y dar seguimiento al plan de coberturas; Asegurar el buen uso del equipo, correcta ejecución y mantenimiento de los recursos asignados a los clientes; Fomentar en el cliente la cultura de*

ejecución de PdE, y las demás que se indiquen, conforme a la ejecución de buena fe del contrato de trabajo”.

- La Compañía de Servicios Comerciales S.A.S en sigla ATENCOM S.A.S, según el certificado de existencia y representación legal, tiene por objeto social *“la prestación del servicio de asesoría o consultoría, así como prestar o recibir servicios compartidos, principalmente en las áreas de administración, soporte, comercio, operaciones o ventas, así como la realización en Colombia y en el exterior la realización de cualquier actividad lícita, comercial, o civil”.*
- INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. y EMBOTELLADORA DEL HUILA S.A., suscribieron contrato de prestación de servicios con ATENCOM S.A.S., para prestar o suministrar los servicios de desarrollo comercial, preventa y televenta de los productos de bebidas gaseosas y aguas de la primera, encomendándole la gestión comercial para su ejecución autónoma administrativa, operativa, técnica y financiera
- El día 4 de julio de 2017, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS “SINTRAINDAL”, le notificó a la compañía demandante que en asamblea del 2 de julio de 2017 se constituyó esa organización y se conformó su junta directiva, incluyendo en el cargo de SECRETARIA GENERAL – SONIA ESPERANZA BLANCO ACEVEDO.
- Los estatutos del Sindicato de Trabajadores de la Industria de los Alimentos – SINTRAINDAL -, evidencian que está conformada por *“trabajadores y trabajadoras de la industria de los alimentos y de afines conexas o complementarias vinculados bajo formas diversas de relación laboral o modalidades de trabajo dependiente, independiente o autogestionario que laboren en toda actividad relacionada con cultivar, cortar, recolectar, fabricar, deshidratar, pulverizar, envasar, preparar, comprar, vender, distribuir, preservar, mezclar, transportar, comercializar, importar, exportar alimentos de consumo animal o humano o que laboren en toda actividad relacionada con los recursos naturales agroalimentarios – clima, suelo, agua, bosques, biodiversidad, recursos agrícolas y pecuarios, porcicultura, avicultura, piscicultura, lombricultura, apicultura, agricultura, agroindustria, industria agrícola, incluido la producción de alimentos de origen animal, vegetal, fluvial, lacustre o marino y cuyo objetivo sea la producción de alimentos destinados al consumo humano o animal; la producción de materias primas para la industria, transformación, preparación de alimentos y bebidas; la comercialización nacional e internacional, la distribución,, importación, exportación de todo tipo de alimentos bebidas o de materia prima; el transporte de todo tipo de mercancías, productos o servicios agroalimentario o de otras ramas de transformación relacionadas con ésta, como los insumos, maquinarias, equipos, empaques utilizados en estos procesos. La fabricación, comercialización, distribución, todas las actividades productivas o de servicios relacionadas con el suministro de vapor y agua, la captación, depuración y distribución de agua, eliminación de desperdicios y aguas residuales, el saneamiento y actividades similares; agroindustria de café, cacao, banano, caña de azúcar, palma africana, cereales, oleaginosas, hortalizas, legumbres,*

frutas, nueces, otros productos aromáticos, industria de transformación de frutas, legumbres, hortalizas, aceites, grasas, lácteos, productos de molinería, almidones y sus derivados, panadería, pastas y farináceos, café, confitería, golosinas, culinarios y otros productos alimenticios; cárnicos y sus derivados; industria de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, extracción y explotación de sal, biotecnologías, semillas, abonos, restaurantes, hotelería, preparación, nutrición y servicios de alimentación.”

En dicha medida, para que se cumpla el requisito legal de una debida afiliación de la demandada SONIA BLANCO SALCEDO a SITRAINDAL, se debe establecer si la empresa a que esta presta servicios, ATENCOM S.A.S., pertenece a la industria o ejerce su actividad económica en la industria de los alimentos y de afines conexas o complementarias.

Sobre la definición de qué actividades engloba la industria de los alimentos, resalta la Sala que en la Ley 9 de 1979 se determinan las normas generales para preservar la salud y bienestar, incluyendo la reglamentación para la fabricación y suministro de alimentos; específicamente el artículo 243 establece que al sector de alimentos se sujetan:

*“a) Los alimentos, aditivos, bebidas o materias primas correspondientes o las mismas que se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, almacenen, transporten, **expendan**, consuman, importen o exporten;*

b) Los establecimientos industriales y comerciales en que se realice cualquiera de las actividades mencionadas en este artículo, y

c) El personal y el transporte relacionado con ellos.

PARAGRAFO. En la expresión bebidas se incluyen las alcohólicas, analcohólicas no alimenticias, estimulantes y otras que el Ministerio de Salud determine”

Bajo aplicación de esta norma se fundamentan las diferentes actuaciones del MINISTERIO DE SALUD, la DIAN y el INVIMA que regulan la clasificación de las actividades del sector de alimentos.

De otra parte, y como señaló la jueza *a quo*, un parámetro adecuado para la distinción oficial de las actividades económicas es la Clasificación CIIU adoptada por la DIAN y el DANE a través de Resolución No. 000139 del 21 de noviembre de 2012, para uso obligatorio en todas las entidades privadas o pública; donde se hace una división general entre las que se destacan: i) SECCIÓN A: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA, ii) SECCIÓN C: INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (donde se incluye la producción de alimentos y bebidas), y iii) SECCIÓN H: COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR.

En esa medida, lo primero que debe resaltar la Sala es que ATENCOM S.A.S. no está constituida ante el Registro Mercantil como una empresa industrial que pertenezca al sistema alimentario, pues se trata de una sociedad cuya actividad económica está dirigida especialmente a gestiones comerciales y de operaciones o ventas sin un marco limitado o específico, por lo que en principio no se adecúa a la imposición legal de que la empresa en su identidad se corresponda con la industria que el sindicato representa.

Ahora bien, en el curso del proceso y conforme a los documentos anexos, como es el caso de la certificación de funciones de la accionada (Fol. 15-16) y su contrato de trabajo a término indefinido (Fol. 29-35), se desprende que el servicio prestado por ella correspondía a la gestión comercial y de oferta sobre productos de la marca COCA COLA, a través de trabajo de campo en las diferentes localidades con establecimientos de comercio que ofrecen esta marca y para lo cual debía realizar tomas de pedido, sugerir inventario, acomodar anaquel, seguir estrategias de marketing y verificar lo que permitiera dar cumplimiento al plan de cobertura.

Es necesario entonces identificar, que en la estructura o cadena de funcionamiento de la industria alimentaria, la gestión comercial de los productos se corresponde con una actividad paralela y que comprende particularidades propias como estudios de sistemas de prevención, protección y seguridad industrial diferentes a los que ejercen su labores propiamente hablando en el sector de alimentación; lo que desnaturaliza su vinculación a un sindicato, cuya naturaleza es disímil con la actividad comercial ejecutada y ante lo cual no puede predicarse una correspondencia entre la afiliación y el fin de representación pretendido.

Nótese que el citado artículo 243 de la Ley 9 de 1979 enmarca la actividad de expender alimentos (concepto que incluye las bebidas no alcohólicas acorde al parágrafo), y este es definido por la RAE como “Vender al menudeo (al por menor)”; es decir, no incluye la actividad de la demandada pues, por el contrario, ejerce la venta al por mayor de estos productos, como parte de una agencia comercial. Igualmente, la clasificación de actividades económicas consagra en apartes diferentes el ejercicio de producción, distribución y manufactura de alimentos respecto de la comercialización al por mayor de las mismas.

De lo anterior se desprende que la accionada no se desempeña en una empresa ni presta servicios relacionados a la industria de *producción, transformación y distribución de alimentos*, sino que se circunscribe en la agencia comercial, específicamente de un producto de bebida gaseosa azucarada y agua embotellada, y ante ello mal podría entenderse como adecuada su inscripción en el sindicato SINTRAINDAL, puesto que es un requisito de orden legal que el trabajador afiliado preste servicios en una empresa de la misma industria o actividad comercial sobre la cual se constituyó la organización sindical.

Respecto de los argumentos del apelante que reclaman una indebida valoración de la actividad que despliega ATENCOM S.A.S. a favor de COCA COLA FEMSA y por ende hubo un indebido uso del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas; se advierte que, en sentencia C-193 de 2016, la Corte Constitucional recuerda que este principio puede referirse a diferentes situaciones como que: “(i) la norma adjetiva debe buscar la garantía del derecho sustancial y, por ende, no se puede convertir en una barrera de efectividad de éste; (ii) la regulación procesal debe propender por la realización de los derechos sustanciales al suministrar una vía para la solución de controversias sobre los mismos; y, (iii) el derecho adjetivo al cumplir una función instrumental que no es un fin en sí mismo, debe ceñirse y estar al servicio del derecho sustancial el cual se debe privilegiar para proteger las garantías fundamentales”.

En esa medida, el proceso es un instrumento para la efectividad de los derechos sustanciales y la protección de las garantías fundamentales, que

como se ha indicado previamente en el caso del derecho de asociación sindical, demanda que ambos extremos de la relación laboral no abusen de sus derechos en detrimento del equilibrio social que busca la justicia del trabajo; lo que sucede cuando se desconoce la identidad de la labor que representa un sindicato de industria y se busca la representación de un trabajador que ejerce funciones en una empresa ajena a su marco económico.

Finalmente, es necesario referir que sobre esta misma trabajadora y empleador se resolvió una situación idéntica respecto de su afiliación a otro sindicato, SINALTRAINAL; donde también se accedió a las pretensiones y contra esta decisión se interpuso acción de tutela por parte de la demandada SONIA BLANCO y en providencia STL14747 de 2019 la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se negó que la interpretación allí dada, que aquí se reitera, pueda constituir una vía de hecho judicial pues *“no existen las «vías de hecho» sostenidas por los accionantes, sino la aplicación razonada e imprescindible de la Constitución y de la ley, como debidamente sustentaron los Juzgadores cuestionados, en el cabal desarrollo de su función judicial. Simplemente, se está en presencia de unos fallos legítimos y rectos, con el que los demandantes en esta oportunidad, están en desacuerdo (...) el contenido de las providencias objetadas en sede de tutela mantiene incólume la intangibilidad reconocida por esta Corporación, al tratarse de una decisión razonada en ambas instancias, con fundamento en una interpretación válida de la legislación y la jurisprudencia actual de la Sala de Casación Laboral, proferida respetando la Constitución Política de Colombia. Así, no existen las «vías de hecho» sostenidas por los solicitantes, sino la aplicación razonada e imprescindible de la Constitución y de la ley.”*

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que dispuso declarar ilegal la afiliación de la señora BLANCO ACEVEDO al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO – SINTRAINDAL, y cuya consecuencia es su expulsión de la organización sindical. Al no prosperar el recurso de apelación se condenará en costas de segunda instancia a la demandada, fijando como agencias en derecho el equivalente a \$350.000 a favor de la demandante.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de octubre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandada. Fijar como agencias en derecho de segunda instancia, la suma de \$350.000 a favor de la demandante.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuestos contra la sentencia del 11 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-003-2020-00191-00 promovido por **Yolanda Rojas Castro** contra la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección** y la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-**.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (Expediente digital): Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 5 de febrero de 1965 y en noviembre de 1984 se afilió al régimen de prima media con prestación definida, de donde mutó el 7 de julio de 1994 con destino a Protección. **2) Que** la vinculación al RAIS se realizó a través de formularios de vinculación, pero nunca fue advertida de los efectos negativos que conllevaba el traslado, indicando que dichos movimientos no fueron libres ni voluntarios al no mediar una verdadera asesoría sobre los riesgos y consecuencias que acarrearían los cambios; falta de

información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, lo que genera nulidad de dicho acto. **3) Que** solicitó a Protección la entrega de simulación de reconocimiento pensional tanto en el RAIS con el RPMPD, pero guardó silencio. **4) Que** formuló ante las administradoras de pensiones convocadas a juicio petición de nulidad del traslado de régimen sin éxito alguno.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: **La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** se opuso a lo pretendido. Acepta como ciertos los hechos relacionados con la edad de la actora y la reclamación administrativa elevada. De los demás dijo no ser ciertos y no constarle. Argumentó que la precitada nunca estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida y que del contenido del expediente administrativo no se colige tal situación. Señaló que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas de las cuales desconoce su veracidad y de la que no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad. Indicó que no era posible el reconocimiento a la pensión de vejez pues no se encontraba afiliada al RPM sino al RAIS, siendo Protección la encargada de la prestación solicitada. Propuso las excepciones que denominó: cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación pretendida, buena fe, prescripción, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, e innominada.

Protección se muestra en contra de las peticiones. Admitió la edad de la actora y su traslado efectuado ante el fondo, aspecto sobre el que explicó, se hizo de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, por lo tanto, no hay lugar a decretar la nulidad en los términos solicitados, ni a acceder a las demás súplicas. Más, afirma, cuando el término previsto para este tipo de reclamos se encuentra afectado por el fenómeno extintivo de la prescripción. Sobre los demás factuales dijo que no son ciertos. Propuso como excepciones de mérito las de: falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la

obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y la genérica.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta el 11 de agosto de 2021, resolvió declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación, absolviendo a las encartadas de la totalidad de pretensiones elevadas por la actora, a quien condenó en costas.

Consideró que aun cuando era obligación de Protección cumplir con el deber de información en los términos del numeral 1° del artículo 97 del Estatuto Financiero, lo cierto es que para el momento en que la demandante decide trasladarse al RAIS, venía desempeñándose como asesora comercial de la pasiva desde hace 27 años, y al rendir interrogatorio confesó conocer la dinámica de dichos fondos, por lo que no es factible, bajo alegar desconocimiento u omisión en el suministro de información determinante previo a la perfección del movimiento que dé lugar a la declaratoria de ineficacia del mismo.

RECURSO DE APELACIÓN: La activa persigue la revocatoria de la decisión, para que, en consecuencia se reconozcan la totalidad de pedimentos de la demanda. Aduce que cuando admitió conocer la dinámica que opera en el RPM y el RAIS, lógicamente, se trata de lo que le enseñaron por medio de las capacitaciones, que, asegura, fue insuficiente, porque de ser consciente de los efectos adversos de la decisión, nunca se hubiera traslado, puntualizando que *“nadie, frente a dos opciones, escoge lo peor”*. Acota que nunca tuvo un cargo de dirección en la AFP, sino que se limitaba a asesorar clientes para finalmente captarlos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Protección y Colpensiones replicaron los argumentos expuestos en la apelación elevada ante la juez *A-Quo*. El extremo activo no alegó.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado de la petente del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, ante Protección, adolece o no del consentimiento informado de aquélla. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que la encartada del RAIS restituya lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de

traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de la AFP Protección, al argumentar la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Rojas Castro para hacer efectivas las mutaciones de régimen pensional, fue informado, es decir, si la AFP encartada cumplió o no con su deber legal de

información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Sea lo primero indicar que la actora estuvo válidamente afiliada al régimen de prima media con prestación definida, pues aunque aportó a las Cajas de Previsión Social Municipal de San José de Cúcuta, diáfano resulta que cuando entró a regir el sistema general de pensiones en dicho sector-, su incorporación a dicho sistema operó por ministerio de la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 1° y 2° del Decreto 691 de 1994, cuyo contenido reza:

*“Art. 1°.- Incorporación de servidores públicos. **Incorpórase al Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993** a los siguientes servidores públicos:*

*a) Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, **departamental, municipal** o distrital, así como de sus entidades descentralizadas;*

Parágrafo. La incorporación de los servidores públicos de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio de los establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 104 de 1994, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las normas que los modifiquen y adicionen.

Art. 2°.- Vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos. El Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del orden nacional incorporados mediante el artículo 1o. de este Decreto, el 1o. de abril de 1994” -Se resalta-

De otro lado, se observa que la hoy incoante, suscribió formulario de afiliación al RAIS el 7 de julio de 1994 ante Protección, data en la que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a la AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que la enjuiciada no le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a ésta desvirtuar este aserto, aportando los

elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que, en efecto, permitieron a la accionante sopesara la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Yolanda Rojas Castro la anotación: *“hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)”*, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado. Situación que ratifica la protagonista procesal al momento de rendir interrogatorio de parte, pues insiste en que no fue asesorada en debida forma ya que solo le entregaron un formulario para imponer su firma, porque en idéntica data fue contratada para prestar su fuerza de trabajo al servicio de Protección.

Escenario fáctico al que restó importancia la jueza de primer grado, al considerar que aun cuando correspondía al fondo suministrar a la afiliada, información suficiente y certeza sobre las implicaciones de su mutación, al desempeñarse aquélla como asesora comercial de la pasiva hace alrededor de 27 años, conocía plenamente las dinámicas de ambos regímenes pensionales, por lo que concluyó, mal puede alegarse tiempo después la ineficacia del traslado por ignorancia de sus consecuencias.

Intelección que no se comparte porque como bien lo explicó la accionante al momento de rendir interrogatorio de parte, su afiliación a la AFP Protección, el 7 de julio de 1994, fue concomitante con la vinculación como trabajadora dependiente de dicha entidad. Significa ello que, cuando suscribió el formulario no era una persona docta en el campo de asesorías pensionales, y por lo mismo, ninguna responsabilidad de discernimiento preciso sobre las particularidades de los regímenes de PMPD y ahorro individual le era exigible, menos, sobre los efectos adversos que su decisión acarrearía.

Máxime, cuando es claro que a la luz de la jurisprudencia del órgano de cierre de la especialidad laboral, el cumplimiento del deber de información ha de materializarse en el momento mismo en que se perfecciona la afiliación del futuro aportante, sin que las situaciones fácticas acontecidas a la postre, convaliden y/o justifiquen las consecuencias de la omisión de dicho precepto, dígase, ineficacia del acto. En otras palabras, la experticia adquirida por Yolanda Rojas Castro con ocasión a su desempeño como asesora comercial al servicio de la AFP Protección durante 27 años, no implica *per sé*, inviabilidad de controvertir las circunstancias en que se perfeccionó la mutación de régimen pensional, como erradamente sostuvo la *A Quo*. Esto, puesto que, además de haberse reunido luego de materializado el traslado, lo cierto es que la obligación de entrega de información siempre es del fondo de pensiones.

En tal línea, resulta claro que Protección no asumió la carga de desvirtuar, como le correspondía, los hechos aducidos por la deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplió con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalara en su contestación de demanda que sí brindó la asesoría en donde le explicó en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debió haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuó. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, el fondo de pensiones convocado a juicio, se sustrajo al momento de suscribirse el formulario de traslado y en perjuicio de la demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltó a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que el trabajo de asesora comercial desempeñado por la accionante demuestre que existió una decisión informada precedida de las

explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones sobre la imposibilidad del traslado luego que le faltaren menos de 10 años al afiliado para alcanzar la edad, ya que, de que se trata es de la ineficacia de un acto, valga decir, de la inexistencia del mismo (traslado). Igual suerte corre la afirmación de que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Menos puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrimó sobre ello.

Suficiente lo expuesto para revocar la decisión de la juez *A-Quo* en lo que se refiere a la no declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo la demandante del régimen de prima media al RAIS, con ocasión a las labores por ella desempeñadas. En su lugar, se declarará tal situación.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su oportunidad Protección, con el deber de información, deberá ésta como administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Yolanda Rojas Castro, devolver todas las prestaciones que de la afiliada hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la

ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló :*“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de la administradora privada, ésta también debe asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tienen acogida las afirmaciones de la codemandada perteneciente al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Por todo lo dicho, refulge nítido que no prosperan los medios exceptivos formulados por las encartadas. Los de inexistencia de la obligación, cobro de

lo no debido, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, en la medida en que quedó plenamente demostrado que la omisión de suministro de información al momento de perfeccionarse el traslado, deviene en la ineficacia de dicho acto.

Las de buena fe, inoponibilidad por ser tercero de buena fe y falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que es claro que Protección es la llamada a responder por las consecuencias de la inobservancia del precepto legal que la obliga a ilustrar a las potenciales afiliados con antelación a la vinculación al fondo, sin que las justificaciones esbozadas sobre su conducta le sean oponibles a la actora. Además, porque al haber mutado la actora del RPMPD administrado por Colpensiones, corresponde a ésta entidad, al restarse validez al movimiento, reactivar la afiliación de la misma y recibir los respectivos aportes.

Y la de prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de sistema pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta desacertada la intelección que frente a dicho tópico, efectuó la juez de primera instancia, siendo ineludible la revocatoria íntegra de dicha decisión. Declarando no probados los medios exceptivos que en dicho sentido formularon las convocadas a juicio.

En atendimento de lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, se condenará en costas de ambas instancias a Colpensiones y Protección, debiendo incluirse como agencias en derecho de la alzada \$400.000, para cada una de las entidades. Monto acorde con el Acuerdo N° PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 11 de agosto de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta. En su lugar, **DECLARAR** la ineficacia del acto de traslado efectuado el 7 de julio de 1994 por Yolanda Rojas Castro ante Protección. En consecuencia, condenar a la AFP del RAIS a devolver al sistema los valores recibidos con motivo de la afiliación de la actora, con los rendimientos que se hubieren causado. Debiendo Colpensiones, como administradora del RPM validar la afiliación de la precitada, recibir e incorporar a su historia laboral los aportes que le sean remitidos por el fondo privado para financiar las prestaciones económicas del régimen de prima media con prestación definida.

SEGUNDO: DECLARAR no probadas las excepciones formuladas.

TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a Colpensiones y Protección. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada \$400.000 a cargo de cada una de las entidades. Líquidense de manera concentrada en el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Géves



José Andrés Serrano Mendoza

KattyM

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO : OEDINARIO LABORAL
RAD. ÚNICO : 54-001-31-05-003-2020-00200-01
P.T. : 19727
DEMANDANTE : JESÚS TARAZONA JAIMES
DEMANDADO : FORMA EQUIPOS LTDA

MAGISTRADO PONENTE: Dra
NIDIAM BÉLEM QUINTERO GELVES

Realizado el estudio del recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante contra el auto de fecha 23 de noviembre de 2021 en su numeral 5 que ordena rehacer la notificación a una de las partes dentro del proceso de la referencia, considera este despacho que dicho auto no es susceptible de recurso de apelación, toda vez que a luz del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social modificado por el artículo 29 de la ley 712 de 2001, el mismo no se encuentra enlistado dentro de las providencias apelables que consagra la norma.

Por tal razón, no se le dará trámite al recurso referido y se dispondrá la devolución del proceso al juzgado de conocimiento, para lo de su competencia.

En consecuencia, el Despacho,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen, dejando constancias de su salida en los libros respectivos y en el sistema Siglo XXI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Nidia Belen Quintero G.

**NIDIAM BELEN QUINTERO GELVES
MAGISTRADA**

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 1 de abril de 2022



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-003-2021-00011-01
RADICADO INTERNO:	19.620
DEMANDANTE:	CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
DEMANDADO:	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a conocer el recurso de apelación interpuesto por las demandadas COLPENSIONES y PORVENIR S.A., así como del grado jurisdiccional de consulta, sobre la sentencia del 29 de noviembre de 2021 que fue proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

El señor CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA por intermedio de apoderado judicial interpuso demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y la A.F.P. PORVENIR S.A, solicitando que se declare la ineficacia del traslado que efectuó al RAIS con la afiliación a esta última, que se mantenga activo en el RPMPD, y como consecuencia, se ordene a PORVENIR S.A. devolver a COLPENSIONES la totalidad de los aportes, bonos pensionales, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora, que hubiere recibido con motivo de su afiliación con todos sus frutos e intereses.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones principales relata:

- Que nació el 15 de diciembre de 1.961 y al momento de presentar la demanda contaba con 59 años de edad.
- Que el 12 de julio de 1.990 se afilió al Régimen de Prima Media Con Prestación Definida administrado por el I.S.S., hoy COLPENSIONES y en el año 2.000 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, mediante afiliación a PORVENIR S.A que se realizó por medio de solicitud de traslado N° 01363640 del 30 de abril de ese año.
- Que PORVENIR S.A. no le suministró información clara, concreta, real, seria y detallada del mejor plan de pensión, ni de los beneficios, inconvenientes y las consecuencias del traslado de régimen o de las características, condiciones y requisitos de los regímenes pensionales, y tampoco le indicó la forma en que sería calculada su mesada pensional, ni le realizaron proyecciones de la misma y no le revisaron sus antecedentes, lo que conllevó a que firmara el formulario de vinculación con que se efectuó el traslado de régimen pensional.

- Que PORVENIR S.A. no le informó que podría devolverse al RPMPD hasta antes de que le faltaran 10 años para el cumplimiento de la edad de pensión de vejez y tampoco que la conformación de su núcleo familiar tendría incidencia en el cálculo de su mesada pensional.
- Que PORVENIR S.A. no le indicó la probabilidad de pensionarse en cada régimen, ni le proporcionó información sobre otros mecanismos de la protección a la vejez vigentes dentro de la legislación, ni le realizó una proyección del valor de la indemnización sustitutiva o devolución de saldos frente a la posibilidad de no cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez a la edad prevista en la normatividad vigente. Que tampoco le informó los requisitos para acceder a la garantía de la pensión mínima.
- Que el 06 de noviembre de 2020 solicitó a COLPENSIONES la declaración de la nulidad e ineficacia de la afiliación realizada al RAIS, así como la devolución de los valores, aportes, cotizaciones, bonos pensionales, gastos de administración, frutos e intereses, respecto de lo cual recibió respuesta el 09 de noviembre de 2020 a través de oficio BZ2020_11369040_2334761, en el que se le informó que no era procedente
- Que el 01 de diciembre de 2020 solicitó a PORVENIR S.A. la declaración de la nulidad e ineficacia del traslado realizado al RAIS, junto con los rendimientos generados y los descuentos por administración, y no recibió respuesta.

La demandada COLPENSIONES a través de apoderada judicial contestó:

- Que admitía la fecha de nacimiento del actor, así como que este se afilió al RPMPD el 12 de julio de 1.990 y que el 06 de noviembre de 2.020 solicitó ante esa entidad la declaración de la nulidad e ineficacia de la afiliación realizada al RAIS, petición que fue negada a través de oficio BZ2020_11369040_2334761 del 09 de noviembre de 2020. Respecto a los demás hechos manifestó que no le constan.
- Que se opone a la declaratoria de ineficacia de la afiliación y traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, pues goza de plena validez, teniendo en cuenta que el demandante realizó su afiliación al RAIS de manera voluntaria y autónoma, firmando formulario de afiliación al fondo privado en ejercicio del derecho a la libre elección de régimen establecido en el art. 13 literal B de la ley 100/93, sin que en dicho acto jurídico haya intervenido esa entidad. Que la afirmación de indebida y engañosa información, deberá alegarse y demostrarse en el transcurso del proceso judicial.
- Expuso que no puede predicarse ausencia absoluta de información al afiliado cuando ha recibido información acerca de su saldo en su cuenta de ahorro individual, modalidades de pensión y/o cualquier tipo de notificación a través de los canales de servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones y con todo esto, permanecer un número de años considerables al Fondo Privado, demostrando el deseo de seguir perteneciendo al mismo.
- Señaló que a pesar de que los fondos privados trasladen la totalidad de cotizaciones, rendimientos financieros y gastos de administración, pertenecientes a la cuenta individual del actor, debidamente indexados por el periodo en que este permaneció afiliado al mismo, se genera una afectación al sistema pensional y se atenta contra la estabilidad de este, y según la Corte, el fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría. También indicó que se transgrede lo ordenado por la ley 100 de 1993 en su artículo 13 que solo permite trasladarse antes de los 10 últimos años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.
- Respecto a la carga dinámica de la prueba manifestó que la posición jurisprudencial invierte la carga de la prueba en cabeza del fondo privado y exime al demandante de probar la existencia de un vicio del consentimiento al momento de afiliarse al RAIS, por lo que creó una situación ventajosa que favorece a los afiliados, puesto que su simple afirmación respecto a que el fondo no les brindó información precisa, clara y exacta, plasmada en una demanda interpuesta en cualquier tiempo, les viene permitiendo obtener el

traslado al Régimen de Prima Media, sin que sea necesario que allegue el más mínimo elemento probatorio al interior del proceso, y ya que los fondos de pensiones no han podido acreditar la exigencia probatoria de la suficiencia de la información suministrada al momento del traslado puesto que cuentan únicamente con los formularios de afiliación, los fallos judiciales en la actualidad se expiden en contra de dichas entidades y de manera colateral afectan los intereses de Colpensiones.

- Manifestó que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL 373-2021, moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual, respecto de quienes se produce la imposibilidad de retornar al estatus quo anterior.
- Propuso las excepciones de mérito de: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, imposibilidad de materializar los efectos de la ineficacia cuando el demandante ya tiene una situación jurídica consolidada o adquirió el estatus de pensionado en el régimen de ahorro individual, prescripción y la innominada o genérica.

La demandada AFP PORVENIR al contestar la demanda a través de apoderado judicial manifestó:

- Que son ciertos los hechos relativos a que el actor se trasladó al RAIS en el año 2.00 mediante afiliación a esa entidad. Respecto de los demás hechos indicó que no le constan, que los mismos deben probarse y que se opone a las pretensiones porque no existe vicio alguno que amerite o genere la nulidad o ineficacia del traslado y acceder a las suplicas de la demanda sería como que la demandante desconociera su propio acto, lo que contraviene el principio de buena fe negocial.
- Que la parte demandante no realizó esfuerzo argumentativo y probatorio alguno para establecer qué clase de error se alega, ni la entidad del mismo, para poder determinar si tiene la virtualidad de anular el consentimiento y se limitó en un relato difuso e impreciso a endilgarle responsabilidad.
- Que las pruebas documentales que aporta, en particular el formulario de vinculación o traslado suscrito por el demandante bajo la gravedad del juramento, dan constancia de que hubo una debida asesoría y que el actor tomó su decisión de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la posible ocurrencia de un vicio de la voluntad, y hace necesaria su absolución.
- Que tan consiente y valida fue la decisión del demandante que el art. 3 del Decreto 1161 de 1994 le ofrecía la posibilidad de retractarse dentro de los 5 días siguientes a su elección, y no lo hizo.
- Que informó a sus afiliados sobre las posibilidades de traslado de régimen a través de los canales dispuestos por la Administradora y con el envío de los extractos trimestrales y en el año 2004 realizó campañas a través del envío de comunicaciones masivas a sus afiliados a través de medios de comunicación, informando la posibilidad de retornar al RPM de acreditar con los requisitos establecidos en las normas y el demandante no hizo uso de ese legítimo derecho.
- Que al momento de realizarse la afiliación o traslado a esa A.F.P. no existía disposición en la ley 100 de 1993 que regulara expresamente la forma en que se debía dar asesoría para el cambio de régimen, asunto que vino a ser regulado con la expedición de la Ley 1328/2009 en su artículo 48.

- Que el demandante después de muchos años demanda la nulidad de su traslado, cuando durante ese lapso, ya existía información decantada y accesible al público en general acerca de las diferencias e implicaciones de los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993, y dejó pasar todas las oportunidades que las disposiciones legales le ofrecían para hacer válidamente un nuevo traslado de régimen pensional y además, se encuentra incurso en la prohibición legal de traslado de régimen, del art. 2 de la ley 797/2003, pues se encuentra a menos de 10 años de la edad de pensión, lo que evidencia conformismo o en el peor de los casos, desidia sobre el asunto, no puede ahora alegar su propia torpeza.
- Que la H. Corte Constitucional ha trazado una clara línea jurisprudencial en las sentencias SU-062/2010, C-1024/2004 y SU-130/2013 en los eventos en los cuales le es permitido a los afiliados trasladarse de regímenes en cualquier tiempo, sin estar sujetos a la restricción del literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 2 de la Ley 797 de 2003, estableciéndose que los afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994 fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para trabajadores del sector privado o 30 de junio de 1995 para el caso de servidores públicos departamentales, municipales y distritales, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, lo que no está acreditado en este caso.
- Que en la sentencia de la CSJ-Sala Laboral, SL19447-2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, Radicado No 47125, MP Gerardo Botero Zuluaga, se establece como uno de los requisitos de procedencia para declarar ineficaz la afiliación, que la insuficiencia de información impida el acceso al derecho a pensión y para este caso, el acceso al derecho a pensión en el régimen de ahorro individual se tiene garantizado como lo evidencian las liquidaciones pensionales allegadas.
- Que en el remoto e improbable evento de acceder a las suplicas de la demanda, se debe considerar que de conformidad con la sentencia SU-62/2010 y el Decreto 3995/2008 es requisito *sine qua non* para que se produzca el traslado de regímenes que exista equivalencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media y de existir diferencia debe ser asumida por el afiliado, en consonancia con el art. 1746 del CC que contiene los efectos de la declaración de nulidad.
- Propuso las excepciones de: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 29 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERA: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y PORVENIR S.A.

SEGUNDO: DECLARAR la ineficacia de la afiliación del señor CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA a la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA en el régimen de ahorro individual, y en consecuencia declarar que para todos los efectos legales el afiliado nunca se trasladó al RAIS y por tanto siempre permaneció afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR SA, a devolver a COLPENSIONES la totalidad de las cotizaciones realizadas por el demandante, así como aquellas sumas que percibió por conceptos de gastos de administración, rendimiento financiero, comisiones,

fondo de garantía a la pensión mínima y seguro provisional con cargo a sus propias utilidades.

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES que valide la afiliación del demandante CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA al régimen de prima media con prestación definida, reciba e incorpore a su historial laboral los aportes que sean remitidos por PORVENIR SA, para financiar aquellas prestaciones económicas a las que tenga derecho eventualmente el demandante en el Régimen de Prima Media.

QUINTO: CONDENAR en costas a las entidades demandadas.

SEXTO: CONSULTAR esta providencia a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.T. y S.S.”

2.2. Fundamento de la Decisión.

La Jueza de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

Que se debe establecer si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional realizado por el actor desde el RPMPD al RAIS administrado por PORVENIR S.A., y como consecuencia de ello, si hay lugar a condenar a esta última entidad a trasladar a la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES, el ahorro de la cuenta individual del demandante, incluyendo los intereses, rendimientos financieros, bono pensional y demás sumas que se hayan causado en virtud de dichos aportes.

Precisó que se encuentra demostrado de acuerdo al registro civil de nacimiento obrante a folio 23 del expediente que el demandante nació el 15 de diciembre de 1.961; que conforme a la historia laboral de COLPENSIONES que se encuentra a folios 38 a 41 del archivo PDF 01 del plenario, el actor se afilió al ISS el 12 de julio de 1.990 y cotizó hasta el 31 de diciembre de 1.997 un total de 154; que el demandante con solicitud de vinculación de traslado N° 01363640 del 30 de abril de 2.000 se trasladó desde el RPMPD al RAIS como consta a folio 36 del archivo PDF 01 del expediente y que conforme a la certificación de PORVENIR S.A. del 31 de agosto de 2.021 que se encuentra a folio 37 ibidem, el actor se encuentra efectivamente afiliado a esa entidad desde el 1. ° de junio de 2.000.

Advirtió que el traslado de la demandante del RPMPD al RAIS se dio el 24 de julio de 1.996, época en la cual las administradoras de fondos de pensiones tenían el deber de información necesaria, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 97 del Decreto 663 de 1993, deber que se concreta con lo explicado en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1688 de 2019, correspondiéndole a la AFP del RAIS en los casos en que se pretende la declaratoria de la ineficacia del traslado por falta de información, demostrar que actuó de forma diligente y cuidadosa, y correlativamente cumplió con la obligación de suministrar al afiliado la información clara, suficiente y precisa para que tomara libremente la determinación del cambio de régimen, debiendo concretarse la manifestación del derecho a libre elección en el verdadero conocimiento de las consecuencia positivas y negativas de su decisión y no con la simple suscripción de un formulario preexistente, pues esto no es prueba suficiente para acreditar la validez del traslado.

Señaló que PORVENIR S.A. tenía la obligación de demostrar que al momento del traslado entre regímenes del actor, le suministró información clara, suficiente y precisa sobre las consecuencia positivas y negativas de la decisión, debiendo existir una certeza del afiliado sobre la incidencia de esta, sin embargo, la AFP demanda únicamente aportó la solicitud de vinculación suscrita por el demandante y tal documento no es suficiente para demostrar la validez del traslado, por lo que no cumplió con el deber contemplado en el artículo 167 del C. G del P. debido a que el incumplimiento del deber de información constituye una negación indefinida, y al no existir elementos de juicio en el plenario de conformidad con el artículo 61 del C.P.T. y S.S., trae como consecuencia la declaratoria de la ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, determinación que implica privar de todo efecto práctico el traslado bajo la ficción jurídica de que siempre estuvo en el RPMPD, por lo que no

prosperan las excepciones. También indicó que no se acreditó que el actor tuviera la condición de pensionado.

Declaró no probada la excepción de prescripción, señalando que tal fenómeno no afecta la ineficacia del traslado debido a que este tiene el carácter de imprescriptible por corresponder a un estado jurídico de conformidad con lo explicado en la sentencia SL1688 de 2019.

Estableció que como consecuencia de la ineficacia del traslado la AFP PROVENIR S.A. está obligada a devolver a COLPENSIONES la totalidad de las cotizaciones recibidas del demandante, así como las sumas percibidas por conceptos de gastos de administración, rendimientos financieros, comisiones, fondo de garantía a la pensión mínima y seguro previsional, con cargo a las propias utilidades de la AFP, conforme a lo señalado por la Sala de Casación Laboral en la sentencia SL2877 del 2020.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la parte demandada PORVENIR:

La apoderada de PORVENIR interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que la sentencia se debe revocar porque resulta en contravía del artículo 964 del Código Civil y de la Ley 100 de 1993, pues como fondo, por su actividad generó los rendimientos o frutos que se ordenan restituir y se le deben reconocer los gastos de administración y comisiones ya que son la retribución por los servicios prestados y se utilizan para cubrir los costos y gastos en la producción de frutos.
- Que, si bien es cierto, con la declaratoria de ineficacia de los actos jurídicos se busca retrotraer los efectos del mismo como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones como son las situaciones jurídicas consolidadas y los hechos consumados, y para este caso el fondo prestó sus servicios por todo el tiempo que la demandante estuvo afiliada al mismo y se lograron los rendimientos años tras año, por lo que resulta imposible dejar sin efecto los servicios prestados. Que los mismo sucede con el seguro previsional debido a que las aseguradoras ya prestaron sus servicios, lo que no se puede retrotraer, máxime cuando son terceros ajenos al proceso.
- Que de acuerdo a un reciente ejercicio efectuado por ASOFONDOS, los rendimientos en el RAIS corresponden aproximadamente al 74% del capital acumulado por un afiliado, por lo que al operar la declaración de nulidad y/o ineficacia del traslado no habría lugar a restituir los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, pues consecuencia de la nulidad declarada se debe presumir que nunca existió afiliación al RAIS y al no existir esta tales rendimientos no se hubieran generado, no obstante, entiende que dichos rendimientos son un beneficio obtenido por el afiliado y hacen parte de su cuenta de ahorro individual, pero no se entiende que se ordene devolver los gastos de administración que remuneran la gestión de esa entidad, toda vez que gracias a su buena administración el afiliado incrementó su capital, por lo que de acuerdo al artículo 1746 del Código Civil se considera que frete los gastos de administración debe operar las restituciones mutuas o en su defecto abstenerse de ordenar su devolución, porque de mantenerse la decisión se afectaría de manera injustificada su patrimonio y se aumentaría de forma injusta el patrimonio de COLPENSIONES y de sus afiliados, y es deber de la judicatura velar por la protección patrimonial de las instituciones que conforman la seguridad social.

3.2 De la parte demandada COLPENSIONES:

La apoderada de COLPENSIONES interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que hay varios elementos que demostraron que no hubo indebida, insuficiente información o cualquier tipo de engaño al momento de realizarse el traslado de

régimen por parte del demandante, ya que el demandante manifestó que no recuerda cómo se dio su traslado y decidió continuar en el RAIS por más de 20 años.

- Que el deseo de traslado del demandante a COLPENSIONES obedece a un mejor monto pensional y que considera que esta más protegido por esa entidad, lo que no es un argumento válido ya que cada uno de los regímenes tiene normatividades y cálculos diferentes, y esto no pone en peligro su derecho pensional, aunado a que el actor no ha recibido proyección pensional de su parte que permita ratificar sus manifestaciones.
- Que disiente de la condena en costas porque esa entidad se encuentra sujeta a lo normativamente instituido y el demandante no podía trasladarse al RAIS sin acudir a un proceso judicial por faltarle menos de 10 años para obtener su derecho pensional.

4. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES, se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de la sentencia, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

5. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, se presentaron los alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• **Demandante:** No presentó alegatos de conclusión.

• **Demandado:**

El apoderado de PORVENIR solicitó que se revoque la sentencia y se absuelva a su representada, teniendo en cuenta que para la fecha en que fue realizado el traslado, no existía disposición legal que estableciera de manera clara y precisa el mínimo y/o máximo de información que debía ser suministrada para considerarse que se brindó una debida asesoría; la cual efectivamente se brindó, pero de forma verbal, dejando constancia, de que el traslado se realizó de manera libre, espontánea y sin precisiones, pues el demandante suscribió el formulario exigido, luego la AFP cumplió con la carga de dejar la evidencia de que el traslado fue conforme a la ley.

Indicó que, revisadas las pruebas documentales allegadas por la parte demandante, se tiene que ninguna de ellas, desacreditan que se brindó una debida asesoría, conforme con las disposiciones y jurisprudencia de la época de suscripción del formulario de afiliación. Así mismo, que, para este caso, el acceso al derecho a pensión en el régimen de ahorro individual se tiene garantizado como lo evidencian las liquidaciones pensionales allegadas.

Señaló que no está de acuerdo en devolver los gastos de administración y otras erogaciones realizadas por la AFP, porque se relacionan con gastos ordinarios en la producción de la rentabilidad del capital. Igualmente, que la rentabilidad generada en la cuenta de ahorro individual se debe a la buena administración efectuada por la entidad administradora, por lo que al operar la declaración de nulidad y/o ineficacia del traslado, no habría lugar a restituir los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, no obstante, lo anterior, la sociedad administradora de pensiones entiende que dichos rendimientos son un beneficio obtenido por el afiliado y hacen parte de su cuenta individual, lo que no se entiende es que se ordene devolver los gastos de administración que remuneran la gestión del Fondo de Pensiones. Que, además, debe tenerse en cuenta que la administradora del RPM no efectuó ninguna gestión de administración en ese mismo período y podría constituirse en un enriquecimiento sin justa causa. Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el artículo 1746 del Código Civil, considera que frente a los gastos de administración debe operar las restituciones mutuas, y/o en su defecto, abstenerse de ordenar su devolución. También señaló, que las obligaciones que se generan como consecuencia del acuerdo de voluntades plasmado en el acto de afiliación al régimen de ahorro individual, se pueden asemejar con los efectos que produce un contrato de mandato.

La apoderada de COLPENSIONES solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia señalando que, a lo largo del debate probatorio llevado a cabo en la primera instancia, no se logró demostrar esa indebida o insuficiente información por parte del fondo privado al momento de realizarse el traslado del demandante, razón por la cual, no es procedente su declaratoria y que el mismo se realizó bajo el derecho a la libre elección de régimen que le asiste al demandante, quien lo hizo en forma libre, voluntaria y cumpliendo con los requisitos legales de capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Así mismo, señaló que la Corte también ha indicado que existen ciertos comportamientos y actividades que demuestran el compromiso de un afiliado de permanecer en un régimen pensional.

Hizo referencia a los argumentos de la Corte Constitucional en sentencia C-1024/2004 respecto a que el período de carencia previsto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, pues resulta razonable para evitar un perjuicio a la sostenibilidad económica del sistema pensional.

Expresó que no puede predicarse ausencia absoluta de información al afiliado cuando ha recibido información acerca de su saldo en su cuenta de ahorro individual, modalidades de pensión y/o cualquier tipo de notificación a través de los canales de servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones y con todo esto, permanecer un número de años considerables al Fondo Privado, demostrando el deseo de seguir perteneciendo al mismo.

Manifestó que no existen fundamentos de hecho o de derecho suficientes que sustenten la declaratoria de la ineficacia o nulidad de traslado pretendida y, por consiguiente, la condena al reconocimiento de pensión de vejez por parte de su representada al demandante, ya que no basta la simple afirmación de “no haber recibido una debida información” al momento de realizarse el traslado.

También indicó que la carga de la prueba radica en cabeza de la parte actora, y la entidad que representa por vía de jurisprudencia no puede otorgar prestaciones económicas que no estén expresamente consagradas en la ley, razón por la cual negó el traslado en sede administrativa.

6. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto de la Jueza de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

7. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

Los problemas jurídicos propuestos a consideración de esta Sala son los siguientes:

¿Si en este caso resultaba procedente declarar la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado por el señor CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA del RPMPD al RAIS por medio de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.?, y de ser procedente, ¿si la declaratoria de la nulidad y/o ineficacia del traslado implica la devolución de la totalidad de las cotizaciones realizadas por el demandante, así como aquellas sumas que la A.F.P. PORVENIR S.A. percibió por conceptos de gastos de administración, rendimientos financieros, comisiones, fondo de garantía a la pensión mínima y seguro provisional con cargo a sus propias utilidades.?

8. CONSIDERACIONES:

Procede esta Sala a determinar en primer lugar si el traslado del señor CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad que se efectuó en el año 2.000, se dio con pleno cumplimiento al deber de información que radicaba en cabeza de la demandada Administradora de Fondo de Pensiones PORVENIR S.A., o si en su defecto, procede la declaratoria de ineficacia del traslado inicial que se dio del RPMPD al RAIS y la orden de devolución de los aportes, gastos de administración y demás conceptos a

COLPENSIONES, pues esto implicaría que el demandante siempre estuvo afiliado al RPMPD.

Al respecto la Jueza A Quo concluyó que era procedente declarar la ineficacia dado que la jurisprudencia ha identificado claramente que, desde su nacimiento, las A.F.P. tenían el deber de suministrar información suficiente para que el consentimiento fuera realmente libre y voluntario, lo que no se demuestra con la sola suscripción del formulario, por lo que en ausencia de otra prueba accede a las pretensiones y ordena la devolución de los aportes con todos los valores descontados.

A esta conclusión se opuso PORVENIR S.A. alegando que la sentencia se debe revocar pues se le deben reconocer los gastos de administración y comisiones, debe operar las restituciones mutuas o en su defecto abstenerse de ordenar su devolución, pues estos son la retribución por los servicios prestados y se utilizan para cubrir los costos y gastos en la producción de frutos, y resulta imposible dejar sin efecto estos servicios, como igualmente sucede con el seguro previsional.

Por su parte Colpensiones manifestó que se demostró que no hubo insuficiente información al momento de realizarse el traslado de régimen por parte del demandante y su deseo de traslado al RPMPD obedece a un monto pensional.

En esa medida, se tiene que lo pretendido por la parte actora es la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional por el incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora y con ello la constitución de un vicio del consentimiento; pretensión que tiene fundamento en que una de las características del sistema general de pensiones es la selección libre y voluntaria del régimen pensional por parte de los afiliados, conforme al artículo 13 de la ley 100 de 1993.

Para que un traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual adquiera plena determinación, dicha actuación debe contener un pleno acatamiento de este deber para que de esa decisión se pueda predicar la libertad y voluntariedad exigida, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia sentada desde el año 2008 ha determinado que previo a su decisión, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar, porque de no ser así, bien por brindarse una incorrecta u omitirse la relevante, puede entenderse que existe un error que vicia su voluntad. En otras palabras, es posible predicar la ineficacia de la vinculación al RAIS por un vicio en el consentimiento denominado error, que hace imposible que la selección del nuevo régimen sea soberana y potestativa

Sobre la procedibilidad de estas pretensiones, la jurisprudencia en providencias como SL19447 de 2017, ha señalado que existirá ineficacia de la afiliación cuando i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados; providencia que ha sido reiterada en SL2611 del 1 de julio de 2020.

En decisión SL1452 del 3 de abril de 2019 (Rad. 68.852 y M.P. CLARA DUEÑAS) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realiza un profundo análisis del presente problema jurídico, señalando que la prosperidad de la pretensión de nulidad de afiliación a una AFP por incumplimiento del deber de información no depende de que la persona tenga una expectativa pensional ni se trata de una imposición novedosa e inexigible para traslados anteriores al año 2009, puesto que **el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación.**

Cabe recordar que, el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia, dentro de las cuales se entienden: la transparencia, la vigilancia, y el deber de información. Ello, según ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que

las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las responsabilidades que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación.

Al respecto la sentencia SL1452 de 2019 hace un recuento de las etapas de este deber de información, reiterando que surge con el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que sus decisiones previas identifican que inclusive en el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 1° del artículo 97 impone a las entidades el deber de suministrar la información necesaria a los usuarios para las operaciones que realicen y que ello implica entender la transparencia como *“una norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro”*.

Prosigue la Corte identificando las normativas de diversa índole que se han proferido desde entonces para garantizar el cumplimiento de este deber a favor de los afiliados, imponiendo 3 puntos fundamentales:

(i) La constatación del deber de información es ineludible, pues si desde el principio las AFP tenían el deber de brindar información con el paso del tiempo este grado de exigencia se ha intensificado y los jueces tienen el deber *“de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”*.

(ii) En desarrollo de lo anterior, agrega la Corte que *“El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente”* de manera que existe la necesidad de un consentimiento informado, pues *“la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, **no son suficientes para dar por demostrado el deber de información**”* dado que *“el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado”*.

(iii) Por ende, afirma la Corte que la carga de la prueba debe invertirse en favor del afiliado puesto que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”*, de manera que *“si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo”* el afiliado no puede demostrar un supuesto negativo como sería el que no recibió la información y de allí que es la AFP quien debe demostrar que suministró la asesoría en forma correcta.

De ahí que, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son estos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual: (i) las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, (ii) las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y (iii) las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Estos preceptos han venido siendo reiterados, como puede verse en providencia SL587 de 2021 donde la Corte resalta que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”* y por lo tanto *“si el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se vinculó, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede acreditarse materialmente por quien lo invoca”*, máxime cuando el deber de información *“es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones y su ejercicio debe ser de tal diligencia que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión”*, indicando que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia y tampoco resultaría razonable invertirla contra la parte débil de la relación contractual.

Aplicando estos preceptos legales y jurisprudenciales al caso concreto, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad está en cabeza de la A.F.P PPORVENIR S.A.; pues argumenta el demandante que la aparente decisión libre y voluntaria de trasladarse de régimen no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte del fondo que lo recibió, por lo que no existe tal consentimiento libre y voluntario, por lo que atendiendo a la carga de la prueba mencionada, se hace necesario auscultar el material probatorio a efectos de determinar si por el contrario, la información fue correcta, oportuna y suficiente.

El demandante manifestó que el 12 de julio de 1.990 se afilió al RPMPD administrado por el I.S.S., hoy COLPENSIONES y en el año 2.000 se trasladó al RAIS mediante afiliación a PORVENIR S.A que se realizó por medio de solicitud de traslado N° 01363640 del 30 de abril de ese año, sin que previamente se le suministrara información clara, concreta, real, seria y detallada de las características, condiciones, requisitos, beneficios e inconvenientes de los regímenes pensionales, ni de las consecuencias del traslado de régimen y tampoco le indicaron la forma en que sería calculada su mesada pensional, ni le realizaron proyecciones de la misma. Que el 06 de noviembre de 2020 solicitó a COLPENSIONES la declaración de la nulidad e ineficacia de la afiliación realizada al RAIS, respecto de lo cual recibió respuesta negativa y que el 01 de diciembre de 2020 solicitó lo mismo PORVENIR S.A. y no recibió respuesta.

Del expediente se puede evidenciar que el actor se encontraba afiliado al RPMPD desde el 12 de julio de 1990 donde cotizó un total de 154,29 semanas, y el 01 de junio de 2.000 se trasladó al RAIS con afiliación a la AFP PORVENIR S.A que se realizó con solicitud de vinculación o traslado N° 01363640 del 30 de abril del mismo año.

Se resalta que aparte del formulario de afiliación a PORVENIR S.A. de fecha 30/04/2.000, no obran otras pruebas al plenario sobre lo acontecido al momento del traslado de régimen pensional, es necesario reiterar que la carga de la prueba no recae para estos asuntos en la demandante, es decir, el señor CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA no se encontraba en la obligación de demostrar con grado de certeza que se le indujo a error o se vició su consentimiento al suscribir el formulario, para alcanzar sus pretensiones; pues se ha asignado a la Administradora de Pensiones el deber de demostrarle al operador judicial que garantizó el deber de información y expuso las consecuencias que conllevaba el cambio: como identificar que la pensión mínima dependía de un ahorro determinado o las estimaciones sobre la diferencia en la forma de estructurar el valor final de la mesada pensional para que tuviera idea sobre los resultados de su traslado, no siendo dable tampoco demostrar un perjuicio para acceder a la pretensión.

Fluye del relato probatorio, que no obra prueba alguna que dé cuenta si PORVENIR S.A brindó al afiliado previo a su traslado, toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; esto es, que para el 30 de abril de 2.000 se le haya indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual; que si no se completaba el suficiente capital para obtener por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del SMLMV), debía seguir cotizando o aceptar la devolución de saldos; y que existen diferentes modalidades pensionales. Tampoco obra prueba de la que pueda desprenderse que a la fecha indicada se hubieren efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones y otras tantas

observaciones respecto a los riesgos que asumía el referido con su traslado, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario.

De acuerdo con lo explicado, en su momento PORVENIR S.A., no actuó cumpliendo con su deber de información, pues conforme se expuso tenía la carga de acreditar que así lo hizo, y no aportó prueba alguna que lo confirmara, ya que con las aportadas al proceso no se infiere con certeza que la situación pensional particular del actor haya sido estudiada y ante ello se puede concluir que la demandada no logró acreditar que la activa hubiere recibido la información del traslado bajo los siguientes parámetros: información necesaria, completa, eficiente, suficiente, eficaz, cierta, oportuna y comprensible de las reales implicaciones que conllevaría el traslado y las posibles consecuencias futuras. Tampoco allegó prueba sobre los datos proporcionados a CARLOS HUMBERTO CASTELLANOS BAUTISTA donde consten los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

Respecto a la suficiencia del formulario de afiliación, la Sala de Casación Laboral en sentencia SL2917 de 2020 señaló que *“si bien la suscripción del formulario de afiliación al régimen de ahorro individual por parte de la accionante, pudo haber sido libre y voluntaria, por sí sola no hace desaparecer la omisión del deber de informar de manera diáfana, sobre las incidencias del cambio de régimen”*; por lo que este elemento probatorio pese a las formalidades que se suscitaba es insuficiente para enervar las pretensiones.

En atención a los lineamientos jurisprudenciales citados, a que para la fecha del ultimo traslado al RAIS ya estaba en vigencia la Ley 1328 de 2009, así como el Decreto 2241 de 2010, y con sustento en las pruebas analizadas, la Sala concluye que en el presente caso, sí se presentó un vicio en el consentimiento del afiliado, traducido en un engaño por la *“Falta del deber de información en un asunto neurálgico para una persona, como es el cambio de régimen pensional”*, que lo indujo en error de hecho sobre el objeto o identidad de la cosa específica de que se trata, como señala el artículo 1510 del Código Civil, al tomar la decisión de su traslado al régimen de ahorro individual y de esa manera los argumentos iniciales del recurso de apelación de ambas demandadas son desestimados, pues para enervar la decisión debía enfocarse la demandada en un ejercicio adecuado de la carga de la prueba que le correspondía, respecto de un deber legal que existe desde la concepción del Sistema General de Seguridad Social.

Por otra parte, sobre la prescripción alegada por las demandadas, se advierte que, al tratarse el presente asunto de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la Seguridad Social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Por lo tanto, la acción encaminada a lograr la ineficacia de la afiliación en los fondos privados por cambio de régimen pensional no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada.

Así lo ha expresado en diversos pronunciamientos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluye por ejemplo en providencia SL361 de 2019 que *“la acción encaminada a lograr la nulidad de la afiliación en fondos privados por cambio de régimen no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada”*; por lo que esta excepción no está llamada en prosperar.

Abordando lo correspondiente a las restituciones contenidas en la condena, específicamente la devolución de los descuentos realizados por la AFP por gastos de administración a la cuenta del actor, se ha concluido que PORVENIR S.A., incumplió con su deber de información sobre las incidencias, ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio al RAIS, por lo que, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración incluyen que se realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y descuentos realizados por gastos de administración y seguro previsional a COLPENSIONES, tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló en lo pertinente lo siguiente: «...las prestaciones acaecidas no son plenamente retroactivas...», por lo que, al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen se encuentra nulo por vicio del consentimiento, PORVENIR S.A., deberá

devolver completamente todas las prestaciones que recibieron del afiliado, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones. Los cuáles están en custodia de la Administradora y no de la aseguradora, para quien la presente condena no se hace extensible por no tener responsabilidad alguna en las pretensiones o el objeto del litigio, sin perjuicio de que se puedan adelantar acciones futuras para determinar la procedibilidad de recobros.

Esto ha sido recientemente reiterado por la Sala de Casación Laboral en proveído SL2877 de 2020, donde se dijo:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS **debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante** en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, **incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.***

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989).

*De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que PROTECCIÓN S.A. y PROTECCIÓN S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar **los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.**”*

Por lo anterior, los aportes deben ser trasladados a plenitud a COLPENSIONES, como si se hubieran realizado en igualdad de condiciones y por lo tanto conformando íntegramente el mismo capital pensional que hubiera generado la mesada de haber permanecido desde 2.000 en esa entidad, lo que desestima el argumento de que generaría una descapitalización del sistema.

Así mismo, ha señalado la Corte desde providencia SL1688 de 2019 que “*a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos*”; por ende, no es posible señalar que la permanencia en la entidad por la actora pueda entenderse como un acto de relacionamiento que sanee la irregularidad que avala la pretensión.

Respecto de los demás argumentos de los apelantes sobre la imposibilidad de devolver descuentos legalmente realizados en su momento, advierte la Sala de Casación Laboral en providencia SL3199 de 2021 reiterada en SL3895 de 2021:

*“como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- **con cargo a sus propias utilidades**, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.”*

De lo anterior se desprende, que es la AFP quien, al predeterminar la ineficacia, está llamada a responder de su patrimonio por todas las consecuencias que de ello se deriven.

Finalmente, sobre la condena en costas debe decirse que conforme al artículo 365 del C.G.P., esta procede contra la parte vencida en el juicio, además que PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y ejercieron su actividad procesal contra las mismas, por lo que resultaron vencidas en este asunto y contra ellas procede plenamente la condena en costas.

Conforme a lo anterior, la Sala deberá confirmar la decisión adoptada por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de Cúcuta en sentencia del 29 de noviembre de 2021; finalmente, se condenará en costas de segunda instancia a las demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fíjense como agencias en derecho a favor de la actora, por la segunda instancia, la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a las demandadas PORVENIR S.A y COLPENSIONES. Fijar como agencias en derecho a favor del demandante la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Ref. Proceso Ejecutivo Rad. 54001-31-05-003-2021-00029-01

Ejecutante: Porvenir S.A.

Ejecutado: ESE Hospital Regional Centro

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

1º. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 5 de octubre de 2021, del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta.

2º. ANTECEDENTES

Soportada en la mora en el pago de aportes a pensiones y la liquidación de los mismos fechada del 10 de noviembre de 2020, la AFP ejecutante solicita se libre mandamiento de pago en su favor y en contra de la convocada a juicio, por \$48.589.797 a título de capital de cotizaciones obligatorias impagadas entre mayo de 1997 y junio de 2019, e intereses moratorios por valor de \$241.760.600. Para ello adujo que, pese a agotarse las gestiones de cobro pre jurídico en los términos dispuestos por la normatividad vigente, el empleador accionado continúa renuente al cumplimiento de su obligación.

La acción fue repartida inicialmente al Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña, el 23 de noviembre de 2020, que a través de auto del

26 del mismo mes y año, determinó librar orden de apremio. Actuación que posteriormente se nulitó a través de proveído del 7 de diciembre de 2020 bajo el argumento de carecer de competencia, por el factor territorial, para adelantar el trámite ejecutivo, disponiendo la remisión de las piezas procesales a la oficina judicial de Cúcuta para reparto entre los juzgados laborales del circuito de la ciudad.

Efectuado el segundo reparto, correspondió al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta, el 25 de enero de 2021, agencia que suscitó conflicto negativo de competencia bajo la tesis de haber operado la prorrogabilidad de la misma en cabeza de la primera autoridad judicial, luego de librado el mandamiento ejecutivo. La disparidad de criterios fue zanjada el 24 de mayo de 2021 por este colegiado, asignado el conocimiento al juzgado tercero.

Por auto del 5 de octubre de 2021, el último juzgador mentado se abstuvo de librar orden de apremio. Consideró que si bien el requerimiento previo que se presenta como título base del recaudo fue remitido al buzón electrónico de la ejecutada, al no existir certeza sobre el recibo efectivo por parte del deudor, no se cumplen las exigencias previstas en el artículo 5° del Decreto 2633 de 1994. Amén de que, las sumas de dinero contenidas en la liquidación distan de las plasmadas en el acápite de pretensiones de la demanda.

La anterior decisión no fue del agrado de la activa, quien buscando su revocatoria, interpuso el recurso de apelación. Sostiene que los argumentos esbozados carecen de fundamento normativo y ponen en peligro la finalidad del proceso ejecutivo. Asegura que cumplió a cabalidad con los requisitos de ley dado que tan solo se exige el requerimiento al empleador luego de efectuada la respectiva liquidación jurídica. Por auto del 14 de octubre de 2021, la primera instancia concedió la alzada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: No fueron presentados.

3°. CONSIDERACIONES

Se encuentra que el eje central del presente litigio radica en determinar si el trámite pre judicial adelantado por la AFP incoante en procura de recaudar los aportes pensionales adeudados, cumple o no con las exigencias legales que den lugar a librar orden de apremio con apego en la liquidación presentada como título ejecutivo.

En tal sendero, comoquiera que la obligación cuyo cumplimiento se demanda guarda relación con el pago de aportes para pensión, además de examinar el contenido del artículo 100 del CPL, que establece: “*Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme*”, se hace necesario acudir al 24 de la ley 100 de 1993, cuyo literal reza: “*Corresponde a las entidades administradoras de los diferentes regímenes adelantar las acciones de cobro con motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Para tal efecto, la liquidación mediante la cual la administradora determine el valor adeudado, prestará mérito ejecutivo*”.

Asimismo, al 2° del Decreto 2633 de 1994 que reglamentó la disposición en cita, precisando que: “*vencidos los plazos señalados para efectuar las consignaciones respectivas por parte de los empleadores, la entidad administradora, mediante comunicación dirigida al empleador moroso lo requerirá, **si dentro de los quince (15) días siguientes a dicho requerimiento el empleador no se ha pronunciado, se procederá a elaborar la liquidación, la cual prestará mérito ejecutivo** de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993*”. -Se destaca-

Bajo esos parámetros, diáfano deviene que para que exista título ejecutivo relacionado con el cobro de deudas pensionales cuyo recaudo corresponde a la respectiva administradora de fondos de pensiones, se requiere el agotamiento de dos etapas ineludibles, a saber:

1. Una vez evidenciada la mora en la consignación de aportes pensionales, han de agotarse las acciones persuasivas frente al deudor con aviso de incumplimiento, que tiene como finalidad incentivar el pago voluntario o promover el reporte de las novedades que les permitan a las AFP depurar la información de la deuda presunta. Y,
2. La expedición dentro de los quince (15) días siguientes, contados a partir de la data de notificación del evasivo empleador, de la liquidación que corresponde a las cotizaciones en mora, que preste mérito ejecutivo.

Sobre la primera exigencia (requerimiento al empleador), el mencionado artículo 5° del Decreto 2633 de 1994, solo demanda que la AFP dirija comunicación al empleador moroso. No obstante, resulta obvio que la intención del legislador al estipular la necesidad de agotar un requerimiento pre judicial frente a dicho empleador, tiene como fin primordial el que ese destinatario del cobro de aportes pensionales tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, que solo se entiende materializado siempre y cuando exista certeza de que el aviso correspondiente fue puesto en conocimiento de aquél.

Por manera que cuando se llega al caso presente y se observa que la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., realizó el requerimiento de los aportes en mora, previsto en el artículo 5° del decreto 2633 de 1994 a la ESE Hospital Regional Centro, remitiendo comunicación a la dirección electrónica esecentro@gmail.com, que no se ampara en certificado de existencia y representación alguno, pues, del acápite de pruebas y anexos aportados con la demanda se colige que la AFP obvió aportar dicho documento que es en últimas, el que da cuenta sobre la información dispuesta por la

hoy ejecutada para su notificación judicial. Máxime, cuando al ingresar a la página web oficial de la Empresa Social del Estado www.esecentro.com se extrae que el buzón electrónico creado para efecto de contacto es esecretariageneral@esecentro.com.co, no el reseñado por la activa, teniendo como dirección física la Calle 1N # 2E-85, Barrio Quinta Bosch de Cúcuta, límpido deviene que las acciones persuasivas de contacto al deudor, no están agotadas dentro de los términos legales, ya que, ninguna constancia de recepción de las mismas fue acreditada por la entidad cobradora.

Así, no resulta de recibo el argumento esbozado por la AFP respecto a que agotó el trámite de notificación en debida forma, puesto que, además de no allegarse junto con la demanda prueba alguna del recibido del requerimiento, ciertamente, la referida como lugar de dirección electrónica de notificación judicial es disímil a la certificada por la pasiva en el sitio web oficial, y como no fue aportado el certificado de existencia y representación de la misma, no es factible constatar que el correo esecentro@gmail.com, a donde se remitió el acto persuasivo sea el medio electrónico en que con mayor facilidad se puede lograr la intimación personal del sujeto, por así disponerlo.

En el anterior orden de ideas, resulta obvio que la finalidad del artículo 5º del decreto 2633 de 1994, tendiente a que de manera efectiva, el empleador moroso tenga oportunidad de cumplir su obligación o controvertirla, no quedó acreditada por la AFP actora, pues, se itera, no se tiene conocimiento del cabal recibimiento de la encomienda por parte del destinatario.

Tampoco le asiste razón a la recurrente en reprochar la negativa de librar mandamiento ejecutivo por no coincidir plenamente las sumas de dinero contenidas en las pretensiones con las plasmadas en la liquidación de aportes adeudados realizada el 10 de noviembre de 2020, en tanto que si bien, entre esta fecha y el momento de radicación de la demanda, dígase,

23 del mismo mes y año, transcurrieron 13 días que tienen incidencia en el aumento de los intereses moratorios cobrados, no menos cierto es que por un lado, tanto la liquidación como las peticiones señalan un capital adeudado entre mayo de 1997 y junio de 2019 de \$48.589.797, el requerimiento remitido al empleador, que por demás, también contiene un histórico de cálculos, da cuenta de una deuda por capital de \$50.353.572, sin explicación alguna. Inconsistencia que afecta la claridad del título base de recaudo.

Frente a tal aspecto, el jurista Hernán Fabio López Blanco, ha señalado que cuando el legislador utiliza la expresión “*clara*” quiere decir que los elementos constitutivos del título “*emerjan con toda perfección de la lectura misma de este, en fin, que no se necesiten esfuerzos de interpretación para establecer cuál es la conducta que puede exigirse al deudor*”. Lo que no se cumple en el sub judice, pues por un lado al liquidarse unas sumas, requerir por otras y demandar vía ejecutiva el pago de otros valores, da cuenta indefectiblemente de una contrariedad que transgrede la claridad del título.

Suficientes las razones hasta aquí expuestas, para tildar de acertada la intelección del *A Quo* al negar el mandamiento de pago por falta de acreditación de los requisitos legales del título ejecutivo presentado, por lo que procede su confirmación.

Sin costas en esta instancia por no haberse trabado la litis.

4º DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cúcuta, **RESUELVE.- PRIMERO: CONFIRMAR** el auto del 5 de octubre de 2021 proferido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cúcuta. **SEGUNDO.- Sin costas. TERCERO.- DEVOLVER** el expediente al juzgado de origen para los efectos pertinentes, previas las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE

Los magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

KattyM

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÒN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-3105-004-2019-00276-02
RADICADO INTERNO:	19.449
DEMANDANTE:	GRACIELA ANGARITA CORDERO
DEMANDADO:	PORVENIR S.A. y COLPENSIONES

Magistrada Ponente:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala de Decisión Laboral a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual el despacho aprobó la liquidación de costas; a continuación se dicta el siguiente:

AUTO

1. Antecedentes

La señora GRACIELA ANGARITA CORDERO interpuso demanda ordinaria laboral contra PORVENIR y COLPENSIONES, para que se declarara la ineficacia de su traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, y se ordenara a PORVENIR S.A a devolver a Colpensiones S.A y ésta a recibir, el total del monto del recaudo por aportes hechos por la parte demandante y su empleador, así como a COLPENSIONES a afiliarse y recibir estos aportes. Agotado el trámite procesal, en audiencia del 5 de marzo de 2020, se dictó sentencia de primera instancia donde se accedió plenamente a las pretensiones de la parte actora. Decisión que fue confirmada íntegramente en segunda instancia, mediante sentencia del 24 de febrero de 2021, descartando los recursos de apelación de ambas demandadas y el Grado de Consulta en favor de Colpensiones, respecto de quien se adicionó condena en costas de ambas instancias.

Devuelto el expediente en marzo 25 de 2021, mediante auto del 15 de junio de 2021 el juzgado dispuso obedecer y cumplir lo resuelto, ordenando proceder con la liquidación de costas.

2. Decisión que se pretende recurrir

En actuación del 12 de julio de 2021, la secretaría dando cumplimiento al numeral sexto de la providencia de primera instancia y el numeral segundo de la de segunda instancia, estimó las costas en \$3.511.212 y \$250.000 respectivamente para PORVENIR y para COLPENSIONES de \$250.000 solo por segunda instancia, para un total de \$4.419.738, lo que fue aprobado en auto del 16 de julio de 2021.

Contra esta decisión interpuso recurso el apoderado de la parte demandante, reclamando que se omitió liquidar las costas de primera

instancia que fueron adicionadas a cargo de COLPENSIONES en la sentencia de segunda instancia.

3. Recurso de apelación

El apoderado de la parte demandada PORVENIR S.A. presenta recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que, no comparte el valor fijado por resultar excesivo y no acomodarse con las directrices establecidas en el Acuerdo PSAA16- 10554 de 5 de agosto de 2016 del CS de la J., dado que si bien se trata de un proceso declarativo de doble instancia que carece de cuantía por el que pueden fijarse de 1 a 10 smlv, esto depende de la naturaleza del asunto, duración y calidad de la gestión, sin que se demuestre una extensiva labor de la parte demandante.
- Que, lo a aquí tratado se encuentra más que decantado jurisprudencialmente pues existe una línea jurisprudencial desde el año 2008 reiterada hasta la fecha, con lineamientos tales como que, se invierte la carga de la prueba, sin que sea necesario que el demandante despliegue mayor actividad probatoria, como efectivamente ocurrió en este caso. Adicional a esto, la duración del proceso no fue extensa, pues se resolvió con prontitud.
- Que, sin perjuicio de la postura conciliatoria o no de PORVENIR, la negativa de COLPENSIONES a conciliar obligaba al trámite del proceso, siendo absuelto COLPENSIONES de costas, por lo tanto, resulta injusto que deba PORVENIR S.A asumir tan altas costas, si de todas formas se debía tramitar el proceso por la negativa a conciliar de COLPENSIONES

En decisión del 5 de agosto de 2021, el juzgado accedió al recurso de la parte demandante y adicionó costas de primera instancia a cargo de COLPENSIONES en \$877.803; respecto del recurso de PORVENIR, no accedió a reponer lo actuado, indicando que efectivamente en el Acuerdo PSAA-16-10554 numeral 5°, del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa se determina el rango para este caso entre 1 y 10 S.M.M.L.V., por lo que el monto establecido cumple con este límite y no excede la condena máxima, siendo adecuada conforme a los criterios de la sana lógica. Por lo anterior, concedió el recurso de apelación interpuesto.

4. Alegatos de conclusión

Dentro de la oportunidad legal concedida, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• PARTE DEMANDANTE:

El apoderado de la parte actora solicita que se confirme lo decidido en primera instancia sobre la aprobación de la liquidación de costas a cargo de AFP PORVENIR, por ser totalmente proporcionales al tiempo de duración del proceso, la naturaleza del litigio y la gestión desplegada desde la reclamación administrativa.

• PARTE DEMANDADA:

El apoderado de PORVENIR solicita que se revoque la providencia impugnada, por cuanto considera las agencias en derecho excesivas, por tratarse de un asunto con jurisprudencia establecida desde 2008, con inversión de la carga de la prueba a la parte demandada y la duración del

proceso no fue extensa, estando imposibilitado para conciliar ante la postura de COLPENSIONES.

La apoderada de COLPENSIONES indica que se atiene a lo que resuelva la Sala.

5. Consideraciones de la Sala:

Teniendo en cuenta los antecedentes, es preciso concluir, que la providencia apelada es susceptible de tal recurso, según lo dispuesto en el numeral 11° del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que señala que es apelable el auto “(...) *que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho*”.

Le corresponde entonces a la Sala de Decisión Laboral analizar, si en el presente caso es procedente o no el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante contra la providencia de fecha 16 de julio de 2021, mediante el cual el juez a quo, ordenó la aprobación de la liquidación de las costas.

Pues bien, debe decirse que, en relación con las costas, el artículo 365 numeral 1° del C.G.P., aplicable por analogía a los procesos laborales de acuerdo con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dispone que hay lugar a la condena en costas, entre otros, cuando la parte sea vencida en el proceso.

Ahora, la liquidación de costas, en las cuales se incluyen las agencias en derecho, se concreta en una condena procesal, derivada del resultado del proceso, y su finalidad es que las partes comprometidas en la controversia que son vencidas en el juicio asuman el valor de las expensas procesales, que son las costas y las agencias en derecho, que son los gastos de apoderamiento de la contraparte. Y para la aplicación de la condena, el legislador ha escogido el criterio objetivo, esto es, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido, abstracción hecha de su intención y de su conducta en el trámite del proceso, entendiéndose, además, que las agencias en derecho son una porción de las costas imputables a los gastos de defensa judicial de parte vencedora.

No obstante, si bien la imposición de la condena en costas y agencias en derecho es automática, el valor de ésta se fija teniendo en cuenta las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura, y si éstas establecen un mínimo o un máximo, el juez debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte demandante, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales para la liquidación de las mismas, según lo dispone el numeral 4° del artículo 366 del C.G.P.

La H. Corte Constitucional, en la sentencia C-539 de 1999, define las costas de la siguiente manera:

“(...) Las costas pueden ser definidas como aquella erogación económica que corresponde efectuar a la parte que resulte vencida en un proceso judicial. Esta carga económica comprende, por una parte, las expensas, es decir, todos aquellos gastos necesarios para el trámite del juicio distintos del pago de apoderados (honorarios de peritos, impuestos de timbre, copias, gastos de desplazamiento en diligencias realizadas fuera de la sede del despacho judicial, etc.) y, de otro lado, las agencias en derecho, correspondientes a los gastos efectuados por concepto de apoderamiento, las cuales - vale la pena precisarlo - se decretan en favor de la parte y no de su representante judicial.

Aunque las agencias en derecho representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses, es el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393-3 del Código de Procedimiento Civil (tarifas establecidas por el Ministerio de Justicia o por el colegio de abogados del respectivo distrito y naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el representante judicial o la parte que litigó personalmente). Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado (...)."

Al revisar el trámite surtido en primera y segunda instancia, se advierte, que la demandada PORVENIR S.A. fue vencida en el proceso, y en consecuencia hay lugar a condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada, como se indicó en las sentencias que resolvieron el litigio.

En lo referente a las agencias en derecho, teniendo en cuenta que el proceso ordinario laboral inició en el año 2019, la norma aplicable es el Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de Agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo artículo 1° dice: *"El presente acuerdo regula las tarifas para efectos de la fijación de agencias en derecho y se aplica a los procesos que se tramiten en las especialidades civil, familia, **laboral** y penal de la jurisdicción ordinaria y a los de la jurisdicción de lo contencioso administrativo."*

Seguidamente, el artículo 2° señala que *"...Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites."*

La parte demandante, indica, en el recurso de apelación, que la liquidación realizada por el juez a quo, no tuvo en cuenta que el asunto sometido a su consideración no requirió mayor actividad procesal, era un tema con jurisprudencia sólida desde 2008, no hubo despliegue probatorio y además estuvo supeditado a la negativa de COLPENSIONES, no a la suya para conciliar.

En este caso, se observa que el secretario del juzgado en cumplimiento a lo ordenado por el juez, practicó la liquidación de costas concentradas causadas en primera y segunda instancia fijándola así: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS MCTE (\$3.511.212) en primera instancia, conforme a los 4 salarios mínimos ordenados y NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE (\$908.526) de segunda instancia, conforme a lo ordenado por esta Sala de Decisión.

Como señalaron el juez *a quo* y el recurrente, el artículo 5° del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 determina que para los procesos de primera instancia, que por la naturaleza de su asunto carezca de cuantía o pretensiones pecuniarias, el rango en primera instancia corresponderá entre 1 y 10 salarios mínimos; lo que es aplicable en este caso, dado que la pretensión buscaba la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional y su consecuencia fue imponer a los vencidos en juicio, una obligación de hacer.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que esos límites corresponden a los máximos permitidos por el Acuerdo y el juez para fijar el monto de las

agencias en derecho debe seguir los criterios a los que nos referimos inicialmente, esto es, naturaleza y duración del proceso

En este caso, la parte demandante presentó la demanda ordinaria el 2 de agosto de 2019, fue admitida el 6 de septiembre de 2019, y se notificó a PORVENIR S.A. el 20 de enero de 2020 y a COLPENSIONES el 7 de octubre de 2019. En auto del 13 de febrero de 2020 se fijó fecha para audiencia el 3 de marzo de 2020, día en el que se adelantaron todas las etapas procesales hasta alegaciones y se dictó sentencia de primera instancia al día siguiente; es decir, entre la admisión y la fijación del litigio transcurrieron cuatro meses, donde la única actividad del actor fue notificar a las demandadas y luego en una sola fecha se agotó la totalidad de la actuación, incluyendo la recepción de pruebas y alegatos.

En el ejercicio procesal desatado se aprecia que no hubo un desgaste de actividad a cargo del actor, no se interpusieron recursos ni se ejercieron despliegues diferentes a la práctica de pruebas ejecutada el mismo día que todas las demás etapas; además el debate suscitado fue eminentemente jurídico y como señala el apoderado de la demandada, debió tenerse en cuenta que existe jurisprudencia asentada sobre la materia desde 2008 y en ella se determinó que la carga de la prueba en este asunto recae sobre las administradoras de pensiones.

Así las cosas, al realizar un análisis de las circunstancias procesales descritas, se concluye que es procedente ajustar las agencias en derecho fijadas por el juez de primera instancia y disminuir el monto fijado para adecuarlo a una tasa que se corresponda con la duración y la gestión ejecutada por la parte vencedora en primera instancia; que por ser inferior a un año y no requerir siquiera un despliegue de carga probatoria activo, se estima deben ser equivalentes a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, dado que sí se evidencia una actividad jurídica de la recurrente para evitar la prosperidad de las pretensiones.

Por lo anterior, se revocará la decisión del juez a quo, contenida en la providencia de fecha 16 de julio de 2021, que aprobó la liquidación de las costas realizada el día 12 de julio de 2021, para en su lugar, rehacer las mismas y fijar como agencias en derecho de primera instancia la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$1'755.606), equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la actora. En consecuencia, al no controvertirse las agencias en derecho de segunda instancia fijadas en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$250.000) se dispone la Sala a APROBAR como liquidación de costas a cargo de PORVENIR la suma de DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$2.005.606).

Teniendo en cuenta que resultó favorable a la parte demandada la decisión del recurso de apelación, no se condenará en costas y así mismo se dispone devolver el expediente al juzgado de origen para los efectos pertinentes, previos las anotaciones del caso.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto impugnado del dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021) proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva y en su lugar fijar como agencias en derecho de primera instancia la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS

MCTE (\$1'755.606), equivalente a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes a cargo de PORVENIR S.A. y a favor de la actora. En consecuencia, APROBAR como liquidación de costas a cargo de PORVENIR la suma de DOS MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$2.005.606).

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al juzgado de origen para los efectos pertinentes, previas las anotaciones del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo dos mil veintidós (2022)

PROCESO : ORDINARIO EN APELACIÓN Y CONSULTA
RAD. ÚNICO : 54-001-31-05-004-2020-00246-01
P.T. : 19738
DEMANDANTE : JAVIER OMAR MORALES
DEMANDADO : COLPENSIONES

MAGISTRADA PONENTE:
DRA. NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Realizado el examen preliminar, se ordena dar trámite al grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta de fecha (01) de marzo de dos mil veintidós (2022), en cuanto fue adversa a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones -, conforme a lo dispuesto por la honorable Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral, en providencia de fecha 23 de julio de 2014, radicación AL40800-2014 (60.884), siendo Magistrado Ponente el Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve.

Se admite también el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada respecto de la sentencia antes mencionada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 1 de abril de 2022

Secretario



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**

Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-004-2020-00302-01
RADICADO INTERNO:	19.644
DEMANDANTE:	JHONNY ALEXANDER MUÑOZ PEREZ
DEMANDADO:	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

**MAGISTRADA PONENTE:
DRA. NIDIAM BELEM QUINTERO GELVES**

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra del auto dictado en audiencia de fecha 15 de diciembre del año 2.021, a través del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta negó el decreto de una prueba.

1. ANTECEDENTES

El señor JHONNY ALEXANDER MUÑOZ PEREZ por medio de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la A.F.P. PORVENIR S.A. y de la A.R.L. POSITIVA S.A., con ocasión de la negativa de la A.R.L. a reconocer y pagar la pensión de invalidez que solicitó acorde a la calificación de pérdida de capacidad laboral que obtuvo por los diagnósticos derivados del accidente que sufrió el 12 de noviembre de 2.015 mientras se encontraba compitiendo en la modalidad de gimnasia artística en los XX Juegos Deportivos Nacionales.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se declare que cuenta con la pérdida de capacidad laboral que fue reconocida en el dictamen N° 1093769829-1280 del 22 de noviembre de 2.018 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander; así mismo, solicitó que se ordene a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. a reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen laboral por ser la A.F.P. a la que se encontraba afiliado al momento del accidente y de la estructuración de su pérdida de capacidad laboral, así como a pagar las mesadas pensionales de forma indexada desde el 26 de septiembre de 2.018.

Como pretensiones subsidiarias solicitó que se declare que la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. debe reconocer y pagar su pensión de invalidez de origen común por ser la administradora de fondos de pensiones a la que se encontraba afiliado al momento del accidente y de la estructuración de su pérdida de capacidad laboral, y por contar con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a esta última fecha; también solicitó que se

condene a dicha entidad a pagar de forma indexada las mesadas pensionales causadas desde el 26 de septiembre de 2.018.

Con la demanda se allegaron como pruebas documentales en copia: contrato de prestación de servicios N° 303 del 24 de junio de 2.015, certificación de afiliación a POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. del 25 de septiembre de 2.020, historia laboral expedida por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A. el 27 de febrero de 2.020, constancia de participación en los XX Juegos Deportivos Nacionales de 2.015, dictamen N° 1093769829-1280 del 22 de noviembre de 2.018 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander junto con la citación para notificarse del mismo y la constancia de notificación, derecho de petición presentado el 27 de junio de 2.019 ante POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con la respuesta de esa entidad de fecha 09 de julio de 2.019 y la historia clínica.

El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta. El 23 de febrero de 2.021 se profirió auto admisorio de la demanda.

La demandada A.F.P. PORVENIR S.A. al contestar la demanda a través de apoderado judicial, aportó como prueba documental el expediente pensional del demandante, conformado por: calificación inicial del origen del accidente realizada por Colmena Seguros el 27 de julio de 2018 junto con la comunicación por medio de la cual le fue notificada al actor, certificación de afiliación, formulario de afiliación a Horizonte, formulario de afiliación a esa entidad, historia laboral, relación de aportes y relación de movimientos.

La demandada A.R.L. POSITIVA S.A. al contestar la demanda a través de apoderado judicial, aportó como prueba documental el expediente del demandante, conformado por: formulario de afiliación a esa entidad, certificado de afiliación, información web de la afiliación y del trabajador, certificado de permanencia, certificación de aportes, reporte de cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales, comprobantes de Servientrega, el dictamen de determinación de origen que emitió con la comunicación con la que envió la notificación del mismo, comunicación por medio de la cual solicitan documentación a DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER con el fin de establecer el origen del evento, comunicación remitida a DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER por medio de la cual informan que las prestaciones reclamadas por el actor no serán reconocidas, derecho de petición presentado por el demandante para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez con sus documentos anexos y la respuesta negativa que emitió respecto a dicha petición y derecho de petición presentado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander por medio del cual solicita copia del expediente de las evaluaciones adelantadas al actor y se informen los motivos por los cuales adelantaron dichas evaluaciones. Solicita que de oficio se ordene a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander certificar si esa entidad fue parte o no en el dictamen emitido al actor y remitir el expediente de calificación de Pérdida de Capacidad Laboral con las evaluaciones adelantadas en los años 2.017 y 2.018. También solicitó que de oficio se ordene al INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE de Cúcuta remitir la copia digital de la hoja de vida del demandante e informar el sitio donde debía ejecutar el contrato de prestación de servicios, si debía hacerlo en la ciudad de Ibagué el día 12 de noviembre de 2015 y si dicho instituto tuvo conocimiento de algún siniestro laboral del señor MUÑOZ PEREZ con ocasión de su contrato de prestación de servicios. Finalmente solicitó que se practique el interrogatorio de parte al demandante.

Posteriormente la apoderada de la A.R.L. POSITIVA S.A. allegó la respuesta que recibió por la petición presentada ante el INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE – IMRD, por medio de la cual su director le informa que en el contrato de prestación de servicios que celebró esa entidad con el demandante quedo establecido como domicilio la ciudad de Cúcuta y que en los archivos de esa entidad no existe información sobre algún siniestro laboral. Solicitó que de oficio se ordenara al IMRD remitir los contratos de prestación de servicios del señor JHONNY ALEXANDER MUÑOZ PEREZ. También solicitó que se decrete la práctica de un dictamen de evaluación de origen y pérdida de capacidad laboral ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander con la finalidad de ejercer la correspondiente contradicción al mismo.

El apoderado de la parte demandante presentó reforma de la demanda solicitando como nueva prueba la práctica de un dictamen pericial en el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES para que se realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del actor teniendo en cuenta toda su historia clínica y se determine el origen.

En audiencia de conciliación, decisión de excepciones, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas que se llevó a cabo el 15 de diciembre del 2.021, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, excepto las solicitadas por medio de oficio y los dictámenes periciales solicitados por la apoderada de POSITIVA S.A. y el apoderado judicial del demandante, respecto a los cuales no accedió el juez de instancia.

2. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL AUTO IMPUGNADO:

2.1. Identificación del Tema de Decisión

En la presente diligencia, la Sala se pronuncia para resolver el recurso de apelación incoado por la apoderada de la parte demandante contra el auto dictado en audiencia del 15 de diciembre del año en curso, proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, que resolvió negar la solicitud de remitir a su poderdante al CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES para que se realice una calificación integral de su pérdida de capacidad laboral teniendo en cuenta toda su historia clínica y se determine el origen, para que sea tenido como dictamen pericial.

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez *a quo* fundamentó la decisión de negar el decreto de la prueba, argumentando, que en la prueba pericial aportada con la demanda se calificaron en forma definitiva las patologías del demandante y se definió una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, lo cual en derecho de acuerdo a la normativa genera invalidez, y teniendo en cuenta que el objeto de la prueba pedida en la reforma de la demanda es que se realice una calificación integral, lo que no es objeto de controversia, dicha prueba no tiene un fundamento factico, razón por la que no se decreta.

3. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la anterior decisión, expresando que la práctica del dictamen se solicitó con el fin de que se realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del accionante teniendo en cuenta toda su historia clínica y el origen de las patologías que sufre, y también para que se establezca la fecha de estructuración de la invalidez, toda vez que se pretende determinar el reconocimiento y pago de una pensión por dicho motivo. Indicó que teniendo en cuenta la libertad probatoria de los sujetos procesales para lograr una respuesta al problema jurídico a favor de sus

intereses, considera que la prueba solicitada resulta conducente, pertinente y útil para demostrar los hechos y pretensiones planteados en la demanda.

En cuanto al recurso de reposición el juez de instancia señaló que no modifica su decisión, debido a que no se presentaron nuevos razonamientos, manifestando que no es posible decretar pruebas de entidades privadas como perito para calificación de invalidez de acuerdo a lo establecido en la ley y que según lo definido por el artículo 142 del Decreto 019 del año 2.012, obran como peritos las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y en el proceso existen dos pronunciamientos de dicha entidad. Por lo anterior, no repuso y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

4. ALEGATOS:

Dentro de la oportunidad legal concedida las partes no presentaron alegatos de conclusión

- **Parte demandante:**

La apoderada de la parte demandante solicita que se acceda al decreto de la prueba pericial pedida alegando que es útil, pertinente y que se solicitó en la oportunidad procesal correspondiente.

Manifestó que, si bien es cierto, en el plenario se encuentra el dictamen N° 1093769829-1280 del 22 de noviembre de 2.018 que fue proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, en virtud del principio de libertad probatoria solicitó el dictamen con el fin de sustentar las pretensiones subsidiarias realizadas en la demanda.

Señaló que no comparte la postura del A quo respecto a que las Juntas de Calificación de Invalidez son las únicas entidades acreditadas para expedir los dictámenes periciales, pues la jurisprudencia ha reiterado que los dictámenes de esas entidades no son prueba solemne para demostrar la pérdida de capacidad laboral y su origen.

- **Parte demandada:**

El apoderado de PORVENIR S.A. solicita que se mantenga la decisión de primera instancia teniendo en cuenta que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander le practicó al demandante dos dictámenes, los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados al no ser controvertidos en la oportunidad debida y que dichas entidades tienen prohibido realizar doble calificación de acuerdo con el artículo 2.2.5.1.30 del Decreto 1072 de 2.015. Que, por lo anterior, la prueba es superflua e impertinente.

La apoderada de POSITIVA S.A. solicita que se confirme el auto objeto de apelación, teniendo en cuenta que la prueba es inconducente porque el objeto del litigio no incluye la calificación integral de la parte demandante, e igualmente, impertinente, por solicitarse que una institución prestadora de servicios del sector privado realice la evaluación de pérdida de capacidad laboral u origen de la patología, por no ser un perito acreditado que se encuentre determinado en la norma. Indicó que si lo que se pretende probar está relacionado al reconocimiento de una pensión de invalidez por patologías mixtas, se generaría la ineptitud de la demanda y el quebrantamiento del debido proceso, al no agostarse el trámite de reclamación administrativa ante esa entidad y la jurisdicción ordinaria no tendría competencia.

5. CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 4 del artículo 65 del C.P.T.S.S., modificado por el artículo 29 de la Ley 712 de 2001, es apelable el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba, por lo que esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la impugnación presentada.

El apoderado de la parte demandante en el escrito de reforma de la demanda solicitó que el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del actor teniendo en cuenta toda su historia clínica y determine el origen de la misma, para que sea tenida como dictamen pericial, a lo cual no accedió el juez de instancia.

Cabe resaltar que el artículo 167 del C.G.P., aplicable por analogía por remisión del artículo 145 del C.P.T., dispone que *“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*, es decir, que estas tienen la responsabilidad de demostrar procesalmente, dentro de las oportunidades correspondientes y por los medios probatorios autorizados por la ley, los hechos en que se fundamentan sus pretensiones o excepciones.

De tal modo que, en el momento de presentar la demanda, su reforma o realizar la contestación de esta, las partes deben aportar o solicitar la práctica de todas aquellas pruebas que conciernen al litigio, con el fin de suministrar al juez los elementos de juicio suficientes para resolver el mismo en la sentencia.

Frente a las oportunidades probatorias el estatuto procesal civil colombiano en su artículo 173, aplicable por analogía por remisión del artículo 145 del C.P.T.S.S., establece:

“Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este código.

En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción.”

En relación con el decreto de pruebas, el artículo 53 del C.P.T.S.S. modificado por el artículo 8 de la Ley 1149 de 2007, dispone que *“El juez podrá, en decisión motivada, rechazar la práctica de pruebas y diligencias inconducentes o superfluas en relación con el objeto del pleito”*.

Teniendo en cuenta las disposiciones legales citadas, es pertinente manifestar, que el aspecto probatorio en materia procesal tiene dos ámbitos, el primero de ellos, se refiere a la obligación de las partes de presentar en los términos y oportunidades legales, las pruebas en las cuales se fundamentan sus pretensiones o su defensa, salvo cuando el juez traslada esa carga a la otra parte por considerar que se encuentra en mejor posición probatoria, y el segundo, implica que es el juez quien determina al

momento de decretar las pruebas si éstas son idóneas, conducentes y pertinentes para resolver el litigio; por lo tanto, tiene la facultad de decretarlas o negarlas, según considere.

En este caso, dentro de las oportunidades probatorias que tenían las partes se allegaron al proceso múltiples documentos como medios de prueba y se solicitó que se decretará interrogatorio a la parte demandante, frente a lo cual el juez de instancia resolvió de manera favorable decretando las pruebas solicitadas excepto a la solicitud presentada por el apoderado judicial de la parte demandante en la reforma a la demanda, como fue, la práctica de un dictamen pericial en el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES que realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del actor teniendo en cuenta toda su historia clínica y se determine el origen de la misma.

A esta petición no accedió el juez *a quo*, argumentando que acuerdo a la normativa, genera invalidez, y teniendo en cuenta que el objeto de la prueba pedida en la reforma de la demanda es que se realice una calificación integral, lo que no es objeto de controversia, dicha prueba no tiene un fundamento factico, para decretarla.

Decisión contra la cual presentó recurso de apelación la apoderada del demandante, manifestando, que con esta prueba se pretende determinar el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, y que la misma resulta conducente, pertinente y útil para demostrar los hechos y pretensiones planteados en la demanda.

Frente a lo expuesto, esta Sala de Decisión debe señalar, que como se advirtió inicialmente la solicitud y el decreto de las pruebas está obligatoriamente ligada a los hechos que se pretendan demostrar, por ello, para establecer su idoneidad, pertinencia y conducencia se debe examinar si estas guardan relación con los hechos y pretensiones que fundamentan el litigio; es decir, para el decreto de una prueba debe proveerse por la parte interesada suficiente información para evaluar si la misma cumple con los requisitos enunciados y no basta con enunciarlas, sino que se debe desplegar un ejercicio argumentativo que evidencie la utilidad de las mismas.

Pasando a evaluar el caso concreto, considera la Sala que el medio de prueba objeto del presente recurso hace referencia al trámite de calificación de la pérdida de capacidad laboral a nombre del demandante, así mismo, que las pretensiones principales del presente litigio giran en torno a que se reconozca y pague al actor la pensión de invalidez por parte de la A.R.L. demandada, con ocasión de las patologías que presenta por motivo de un accidente que sufría mientras se encontraba vinculado al INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IMRD a través de un contrato de prestación de servicios.

Revisado el plenario se observa que tanto el demandante como la demandada A.R.L. POSITIVA aportaron de forma oportuna y regular el dictamen N° 1093769829-1280 del 22 de noviembre de 2.018 que fue emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, en el que se otorga al actor una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 56,25%, con origen de accidente por riesgo laboral, con fecha de estructura ración del 26 de septiembre de 2.018 e invalidez como nivel de perdida. Prueba que es adecuada para analizar los hechos narrados por el actor y establecer la viabilidad de sus pretensiones, así como lo alegado por la pasiva.

Encuentra la Sala que le asiste razón al juez *a quo* en su decisión de negar la prueba solicitada para que el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y

SALUD – CENDES realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del actor teniendo en cuenta toda su historia clínica y determine el origen de la misma, para que sea tenida como dictamen pericial, porque al existir en el plenario dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional emitida al actor por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander, respecto del cual no se desconoce su validez, la prueba solicitada por la parte demandante si bien es pertinente y conducente, se torna inútil o superflua al existir otra prueba al interior del proceso que es suficiente para establecer la viabilidad de las pretensiones.

Es necesario precisar que el dictamen de la junta de calificación de invalidez no es prueba solemne para demostrar la pérdida de capacidad laboral y su origen, pues los mismos pueden ser demostrados por otros medios y no exclusivamente por lo contemplado en el artículo 142 del Decreto 19 del 2012, de acuerdo a lo mencionado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL-23492021 (83859) del 28 de abril de 2021, esto debido a que los dictámenes que certifican la incapacidad laboral no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada, lo que solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.

Por lo anterior, se confirmará la decisión del juez *a quo*, que denegó decretar de la prueba solicitada por la parte demandante relativa a que el CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHO Y SALUD – CENDES realice una calificación integral de la pérdida de capacidad laboral del actor teniendo en cuenta toda su historia clínica y determine el origen de la misma.

Se condenará en costas de segunda instancia al demandante, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fíjense como agencias en derecho a favor de la pasiva, por la segunda instancia, la suma de \$200.000 a cargo del actor.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Confirmar el auto dictado en audiencia del 15 de diciembre de 2021 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: Condenar en costas de segunda instancia al demandante, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fíjense como agencias en derecho a favor de la pasiva, por la segunda instancia, la suma de \$200.000 a cargo del actor.

Tercero: Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELEM QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA**

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-004-2021-00087-01
RADICADO INTERNO:	19.595
DEMANDANTE:	LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL
DEMANDADO:	COLPENSIONES y PORVENIR S.A.

**MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES**

Procede la Sala dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a conocer el recurso de apelación interpuesto por las demandadas COLPENSIONES, y PORVENIR S.A., así como del grado jurisdiccional de consulta, sobre la sentencia del 5 de noviembre de 2021, que fue proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES

La señora LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL interpuso demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y la A.F.P. PORVENIR S.A, solicitando que se declare la ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS y se deje sin efecto su afiliación a este último materializada el 1 de noviembre de 1995, ordenando su retorno al primero con todos sus aportes pensionales, rendimientos financieros y demás componentes de la cuenta de ahorro individual.

Expuso como fundamentos fácticos que la actora nació el 26 de agosto de 1968, cuenta actualmente con 1146 semanas de cotización y desde el 1 de noviembre de 1995 tiene sus aportes en A.F.P. PORVENIR, pero antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 estaba afiliada al I.S.S. contando entonces con 143.57 semanas cotizadas y cuando comenzaron las campañas de afiliación masivas de trabajadores, se utilizaron estrategias de miedo, desinformación y engaño, no estando debidamente asesorada de los efectos del traslado por ningún funcionario y desconociendo las particularidades del sistema pensional; tampoco fue informada posteriormente del límite de edad para retornar al RPM y ha solicitado su traslado pero le ha sido negado por encontrarse en este rango.

La demandada AFP PORVENIR al contestar la demanda y su reforma, a través de apoderado judicial manifestó:

- Que no le constan los hechos, que los mismos deben probarse y las pretensiones de la demanda deben negarse. Que efectivamente la actora se afilio suscribiendo debidamente el formulario el 14 de octubre de 1995 y este traslado fue libre y espontáneo, precedido de la información pertinente.
- Que el traslado de régimen se realizó conforme y no existe vicio alguno que amerite o genere la nulidad o ineficacia del traslado; en todo caso, advierte que conforme al artículo 1746 del código civil, la declaratoria de nulidad da derecho a las partes para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; y en el caso de las restituciones mutuas que hayan de hacerse, *“será cada cual responsable de la perdida de las especies o de su deterioro, de los intereses o los frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o voluptuarias, tomándose en consideración los*

casos fortuitos, y la posesión de buena fe o mala fe de las partes.”; señalando que desde providencia SU062 de 2010 se determinó la equivalencia entre lo ahorrado en el RAIS y el monto del aporte del RPM, sin que la AFP deba asumir esa diferencia.

- Que los vicios del consentimiento deben ser probados por la parte que los alega y ninguna prueba aporta el demandante para respaldar el error alegado como vicio, limitándose a dar un relato difuso e impreciso que endilga responsabilidades a PORVENIR pero sin sustento probatorio; a diferencia, se aporta el formulario de vinculación suscrito por el demandante, bajo la gravedad del juramento, donde se da constancia de que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones. Igualmente indicó que tan consiente y válida fue la decisión del demandante que el art. 3 del Decreto 1161 de 1994 le ofrecía la posibilidad de retractarse dentro de los 5 días siguientes a su elección, y no lo hizo.
- Que al momento de realizarse la afiliación o traslado a esa A.F.P., no existía disposición en la ley 100 de 1993, que regulara expresamente la forma en que se debía dar asesoría para el cambio de régimen. Asunto que vino a ser regulado con la expedición de la Ley 1328/2009, que en su artículo 48 modificatorio de la Ley 100 de 1993 estableció que *“la Administradora tendrá la obligación expresa de informar a los afiliados sus derechos y obligaciones de manera tal que les permita la adopción de decisiones informadas”*.
- Que debe considerar el despacho que la demandante después de muchos años demanda la nulidad de su traslado, cuando durante ese lapso, ya existía información decantada y accesible al público en general acerca de las diferencias e implicaciones de los regímenes pensionales de la Ley 100 de 1993, y dejó pasar todas las oportunidades que las disposiciones legales le ofrecían para hacer válidamente un nuevo traslado de régimen pensional y además, se encuentra incurso en la prohibición legal de traslado de régimen, del art. 2 de la ley 797/2003, pues se encuentra a menos de 10 años de la edad de pensión
- Propuso las excepciones de: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la innominada o genérica.

La demandada COLPENSIONES a través de apoderada judicial contestó:

- Que admitía la fecha de afiliación de la demandante al RPMPD, así como que la actora presentó reclamación administrativa y se le dio respuesta. Respecto a los demás hechos manifestó que no le constan.
- Indicó que se opone porque no existe fundamento que permita la declaratoria de ineficacia y/o nulidad del acto que dio origen al traslado de régimen pensional al RAIS, puesto que, por una parte, es un acto libre y voluntario del afiliado y por otra parte existe una imposibilidad legal que impide realizar el traslado de régimen faltando menos de 10 años para pensionarse.
- Expresó oponerse a la declaratoria de nulidad y/o ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS, teniendo en cuenta que, a la fecha, el traslado efectuado por el demandante al RAIS, goza de plena validez a la luz de las leyes colombianas, ya que el mismo se realizó ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen establecido en el art. 13 literal B de la ley 100/93 y la afirmación de indebida y engañosa información, deberá alegarse y demostrarse en el transcurso del proceso judicial.
- Manifestó que esa entidad no intervino en el acto jurídico de afiliación de la demandante al RAIS, que la actora hizo de manera voluntaria y autónoma desde la libertad que le otorga la ley para hacerlo, firmando formulario de afiliación al fondo privado. Así mismo, que no pueden desconocerse los preceptos legales, sacrificando la estabilidad financiera del sistema pensional que administra, sin que se demuestre total y contundentemente que existió un real y evidente vicio en el consentimiento.

- Señaló no puede predicarse ausencia absoluta de información al afiliado cuando ha recibido información acerca de su saldo en su cuenta de ahorro individual, modalidades de pensión y/o cualquier tipo de notificación a través de los canales de servicios de las Administradoras de Fondos de Pensiones y con todo esto, permanecer un número de años considerables al Fondo Privado, demostrando el deseo de seguir perteneciendo al mismo.
- Así mismo, que a pesar de que los fondos privados trasladen la totalidad de cotizaciones, rendimientos financieros y gastos de administración, pertenecientes a la cuenta individual del actor, debidamente indexados por el periodo en que este permaneció afiliado al mismo, se genera una afectación al sistema pensional por cuanto nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema dado que el periodo de permanencia obligatoria contribuye al logro de los principios de universalidad y eficiencia y asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema al preservar los recursos dispuestos para garantizar el pago futuro de mesadas y el reajuste periódico de las mismas, y según la Corte, el fondo del régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría.
- Respecto a la carga dinámica de la prueba manifestó que la posición jurisprudencial creó una situación ventajosa que favorece a los afiliados, puesto que su simple afirmación respecto a que el fondo no les brindó información precisa, clara y exacta, plasmada en una demanda interpuesta en cualquier tiempo, les viene permitiendo obtener el traslado al Régimen de Prima Media, sin que sea necesario que allegue el más mínimo elemento probatorio al interior del proceso.
- Propuso las excepciones de mérito de: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, prescripción, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES en caso de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, imposibilidad de materializar los efectos de la ineficacia cuando el demandante ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirió el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual, prescripción y la innominada o genérica.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia del 5 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA de la afiliación o traslado de la parte demandante **LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL c.c. 60.327.066**, del régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS hoy COLPENSIONES S.A, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la **AFP PORVENIR S.A.**, en fecha del traslado **11 noviembre DE 1995**, CONFORME A LO CONSIDERADO.

SEGUNDO.- CONDENAR al fondo pensional **PORVENIR S.A.**, donde se encuentran los recursos aportados por la parte demandante, Y QUIEN DETERMINO EL TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL, devolver a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S.A.**, entidad que representa el régimen de prima media con prestación definida, y a favor de la actor, todos los valores que hubiere recibido desde el TRASLADO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA SENTENCIA, la entrega de todo el capital recibido por cotizaciones de la parte demandante, bonos pensionales DE HABERSE COBRADO, saldos de la cuenta individual, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, sin la posibilidad de efectuar descuento alguno, ni por administración ni por cualquier otro concepto, como seguros previsionales (artículo 20 inciso 3 ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 ley 797 de 2003 y literal b) artículo 60 ley 100 de 1993), precisando que son de

cargo del fondo pensional PORVENIR S.A, la devolución de todos los recursos que fueron objeto de descuento a la demandante por los conceptos precitados desde el inicio del traslado y hasta que se devuelvan los recursos EN SU TOTALIDAD a COLPENSIONES S.A, por haber sido el determinador del traslado de régimen, todo conforme a lo considerado. Término para el CUMPLIMIENTO 1 mes a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO. -DECLARAR que la demandante para efectos pensionales, se encuentra afiliado al régimen de prima media con prestación definida, administrado en su momento por el extinto I.S.S., y hoy administrado por la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S.A.**, a la ejecutoria de esta sentencia, por las razones expuestas.

CUARTO. - Declarar no probada la excepción de prescripción por la pasivas y sobre las demás propuestas hay declaración ínsita conforme a lo considerado.

QUINTO. - Declarar la buena de la pasiva, no obstante no es suficiente por si sola para enervar el derecho de la parte demandante.

SEXTO: Condenar a COLPENSIONES S.A., a recibir el capital pensional procedente del fondo privado PORVENIR S.A., a favor de la parte demandante, INCLUYENDO LOS DESCUENTOS HECHOS, DESDE LA GENESIS DEL TRASLADO Y HASTA QUE SE DEVUELVAN, traducirlos en semanas cotizadas de acuerdo al IBC informado y sobre el cual cotizo, todo conforme a lo considerado.

SEPTIMO. -Condenar en costas a favor de la parte DEMANDANTE y en contra de la demandada PORVENIR S.A., AGENCIAS IGUAL A 2 S.M.L.M.V. \$ 1.817.052, CADA S.M.L.M.V IGUAL A \$ 908.526 DECRETO 1785 DE 2020, SIENDO EL FONDO DETERMINANTE A SU VEZ DEL TRASLADO PENSIONAL Fundamento legal artículo 365-1 DEL C.G.P. en concordancia con el ACUERDO PSAA16-10554 ARTICULO 5 NUMERAL 1., PRIMERA INSTANCIA. Las agencias fijadas se tendrán en cuenta en su momento procesal oportuno para liquidar las costas.

OCTAVO. -ORDENAR así fuere apelado este fallo en su oportunidad, por parte de COLPENSIONES S.A., se surta el grado jurisdiccional de CONSULTA ante el Superior funcional, en razón a que hay condena al imponerse una obligación a COLPENSIONES S.A.”

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que el litigio se fijó en declarar la ineficacia o nulidad del traslado de régimen pensional del RPMPD al RAIS, para que sean devueltos todos los recursos, cotizaciones, bonos pensionales y sumas adicionales de la aseguradora, con sus frutos e intereses sin descuento alguno, y sean enviados a COLPENSIONES S.A.; señalando como hechos probados pese a que no se aportó el formulario, que la actora se trasladó a AFP PORVENIR en noviembre de 1995.
- Manifestó que según lo señalado por la jurisprudencia en forma reiterada abordaría la problemática como ineficacia del traslado de régimen pensional, como quiera que el tema de la nulidad es más complejo, pues la carga procesal es de la parte demandante que debe acreditar las falencias que genera la nulidad pero la ineficacia se circunscribe al alegato de falta de información planteada por la actora.
- Mencionó lo consagrado en el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su texto original y su posterior modificación con el artículo 2.º de la Ley 797 de 2003, con relación al tiempo en que se puede solicitar el traslado entre regímenes, con la prohibición de trasladare entre estos cuando faltaren 10 años para cumplir la edad de pensión, indicando que la demandante no se puede movilizar de un régimen a otro porque está en el margen legal sin que pertenezca al régimen de transición.
- Resaltó la Sentencia SL1452 del 03 de abril del 2019 y que en la hipótesis de estudio de acuerdo a las fechas de traslado, se tienen las directrices del deber de suministrar información necesaria y transparente por parte de la AFP a la

demandante para materializar el traslado de régimen pensional, precisando la fundamentación legal del literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 para formar un consentimiento libre e informado, necesario en todo usuario para los fines de un traslado de régimen pensional. Que cuando se vea truncado ese consentimiento libre e informado, bien sea por la inexistencia del mismo o por la existencia de un vicio en su producción, o por la indebida información o su ausencia, será susceptible declarar la ineficacia de tal escogencia según la directriz jurisprudencial.

- Indicó que el artículo 1604 del Código Civil consagra que la prueba de la diligencia o cuidado en la celebración de contratos incumbe al que ha debido emplear, por lo tanto, el deber de información está a cargo de la Administradora del Fondo de Pensiones, de quienes emana la responsabilidad de carácter profesional. Que estas tienen el deber de brindar información completa, suficiente y necesaria sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar al anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Que uno de los primeros pronunciamientos sobre este delicado tema se ubica en el año 2008 con el radicado 31989 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. Eduardo Lopez Villegas, donde se señaló el deber de información para que se pueda materializar el traslado, la cual debe ser completa y comprensible, a la medida de la simetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego en materias de alta complejidad, premisa que implica dar a conocerlas diferentes alternativas con sus beneficios e inconvenientes, como podría ser la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
- Expuso sobre el simple consentimiento vertido en formulario de afiliación al que se han referido las demandadas que la Corte que es insuficiente y surge la necesidad de un consentimiento informado, y se precisa que en el formato nada se dice sobre la información recibida por la demandante y ofrecida por la AFP para garantizar un consentimiento informado al potencial afiliado; sin que en este caso se aportara dicho formulario.
- Manifestó que la parte pasiva planteó y se acepta, que en su momento se hablaba que la obligación que tenían los fondos era la prevista en el Decreto 692 del 94 artículo 11 en concordancia con el 3. °, sobre en cuanto a los formularios que tenían que diligenciarse bien para que tuviera validez ese traslado, lo cual es cierto, pero no menos cierto es que el artículo 97 en su numeral 1. ° del Estatuto Financiero que es el Decreto 663 del 93 establecía una información a los usuarios y en concreto la norma señala que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado, y de esa transparencia se remite al artículo 272 de la Ley 100 del año 93, entonces no se obró en consonancia con el principio de eficiencia que informa al Sistema de Seguridad Social al tenor del literal a del artículo 2 de la Ley 100 del año 93, pues no se probó que hubo la información debida al potencial afiliado para que tomara a determinación del traslado.
- Indicó que el legislador en el campo del actuar de los fondos pensionales para los fines de la transparencia, fue celoso sobre la responsabilidad de los promotores, vinculando por la conducta de ellos a los mismos fondos según el artículo 10 del Decreto 720 del 94, que señala que cualquier infracción, error u omisión, en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados en que incurran los promotores de las Sociedades Administradores del Sistema General de Pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la Sociedad Administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual con relación a su gestión se hubiere realizado la respectiva vinculación, sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a esta pero destaca que acorde a lo oído en el proceso en este caso no hubo un promotor sino se le presentó a la trabajadora el formulario y lo firmó sin mayor información.
- Señaló que la ineficacia implica privar desde su génesis todo efecto práctico al traslado bajo la ficción jurídica de que nunca se trasladó al RAIS o siempre

estuvo afiliado al RPMPD. Así mismo, que la AFP donde se encuentra afiliada deberá devolver todos los valores recibidos con ocasión a la afiliación de la demandante, con los rendimientos producidos, sin efectuar descuento alguno por gastos de administración o los que se hacían para pagar el seguro previsional a cargo de la AFP determinante del traslado en la que ha estado el afiliado, esto según lo señalado por la jurisprudencia, porque no puede verse favorecida la AFP con dineros que nunca debió percibir, en perjuicio de COLPENSIONES que será la entidad encargada de un eventual reconocimiento prestacional a la demandante, cuidándose en este sentido la sostenibilidad financiera del sistema.

- Manifestó que, si bien es cierto no está en riesgo el tema pensional o la prestación como tal, se pretermitió la información debida.
- Manifestó que no opera la prescripción respecto a la ineficacia del traslado como se señaló en la SL1688 del 2019, porque la consecuencia de la ineficacia se caracteriza porque desde nacimiento el acto carece de efectos jurídicos, la sentencia que declara la ineficacia de un acto lo que hace es constatar un estado de cosas, y estos no prescriben.
- Declaró la buena fe propuesta por PORVENIR, pero indicó que esto no enerva ninguna pretensión de la parte demandante, así mismo, declaro no probadas las demás excepciones presentadas.
- Por lo anterior, ordenó a COLPENSIONES que reciba los aportes provenientes del fondo pensional correspondientes a la demandante y los traduzca en semanas cotizadas, con el objeto de garantizar a la actora el derecho pensional a su causación.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 De la parte demandada PORVENIR:

La apoderada de PORVENIR interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que no está de acuerdo con la orden del numeral segundo de la sentencia de restituir los gastos de administración y lo pagado por seguro de previsional, por considerar que dicha determinación resulta en contravía del inciso final del artículo 964 del Código Civil respecto del régimen de restituciones mutuas y de la Ley 100 de 1993, según los cuales se deben reconocer a los fondos de pensiones por los servicios prestados en la obtención de los rendimientos; advirtiendo que si bien las ineficacias conllevan al estado anterior como si nunca hubiera existido, en este caso se advierte que mientras duró la afiliación se consolidó la situación de prestación de servicios que causó a su favor esos conceptos.

- Así mismo, que la prima del seguro previsional ya se pagó por ser una obligación de carácter legal, por lo que resulta injusta la restitución de estos pagos, pues las aseguradoras que son terceros ajenos al proceso ya prestaron ese servicio por lo que resulta imposible retrotraer los efectos de la ineficacia en este caso.

- También manifestó que estas sumas no van a afectar el patrimonio de COLPENSIONES, debido a que los rendimientos causados en el RAIS siempre serán mayores que los causados en dicha entidad y esta rentabilidad permite subsanar cualquier falencia derivada de los descuentos, siendo prueba de la buena administración y cumplimiento de los deberes de esa entidad. Por ello, de mantenerse la orden se beneficiaría injustificadamente a COLPENSIONES con estos rubros.

3.2 De la parte demandada COLPENSIONES:

La apoderada de COLPENSIONES interpone recurso de apelación, argumentando lo siguiente:

- Que no es procedente la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante porque según se identificó en los interrogatorios de parte, la trabajadora suscribió el formulario por presión del empleador y no de la administradora; sin que estas realizaran averiguaciones propias sobre la decisión que estaba tomando y ha permanecido por más de 20 años en el RAIS, lo que permite colegir una voluntad de aceptación. Sin que a la fecha haya prueba de que el traslado sea realmente beneficioso para aumentar el monto pensional y no se solicita esta por falta de información; resaltando que no existe facultad legal para recibir a una persona que ya se encuentra en el límite de menos de 10 años para cumplir la edad pensional.

4. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES, se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de la sentencia, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

5. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• PARTE DEMANDANTE:

El apoderado de la actora manifiesta que sus pretensiones deben ser confirmadas por estar respaldadas en abundante jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral y del Consejo de Estado, donde se ha indicado que las administradoras de los fondos privados de pensiones, una vez entrada en vigencia la ley 100 de 1993, desplegaron unas campañas publicitarias, con el propósito de captar el mayor número de afiliados para esta nueva modalidad de régimen pensional, incurriendo en omisiones en su deber de informar a los usuarios de los cálculos aproximados de pensión a devengar comparando ambos regímenes, explicar las modalidades de pensión, características del régimen de ahorro y ante ello se desconoció la normatividad vigente de impartir una asesoría seria, informada, cierta, suficiente y oportuna; además se impartió información engañosa sobre el I.S.S.

Concluye que se debe acatar la reiterada y uniforme jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 2817 DE 2019, SL 4360 DE 2019, SL 1689 DE 2019 y SL 1688 DE 2019, y la normatividad vigente invocada, respecto de que estamos frente a un traslado que debe ser declarado ineficaz, toda vez que no cumplió con los requisitos y exigencias establecidas, y por el contrario el mismo se materializó con desinformación y falacias por parte del FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S. A. – PORVENIR S.A.

• PARTE DEMANDADA

El apoderado de PORVENIR solicitó que se revoque la sentencia y se absuelva a su representada, teniendo en cuenta que para la fecha en que fue realizado el traslado, no existía disposición legal que estableciera de manera clara y precisa el mínimo y/o máximo de información que debía ser suministrada para considerarse que se brindó una debida asesoría; La cual efectivamente se brindó, pero de forma verbal, dejando constancia, de que el traslado se realizó de manera libre, espontánea y sin precisiones, pues la demandante suscribió el formulario exigido, luego la AFP cumplió con la carga de dejar la evidencia de que el traslado fue conforme a la ley.

Indicó que, revisadas las pruebas documentales allegadas por la parte demandante, se tiene que ninguna de ellas, desacreditan que se brindó una debida asesoría, conforme con las disposiciones y jurisprudencia de la época de suscripción del formulario de afiliación. Así mismo, que, para este caso, el acceso al derecho a pensión en el régimen de ahorro individual se tiene garantizado como lo evidencian las liquidaciones pensionales allegadas.

Señaló que no está de acuerdo en devolver los gastos de administración y otras erogaciones realizadas por la AFP, porque se relacionan con gastos ordinarios en la

producción de la rentabilidad del capital. Igualmente, que la rentabilidad generada en la cuenta de ahorro individual se debe a la buena administración efectuada por la entidad administradora, por lo que al operar la declaración de nulidad y/o ineficacia del traslado, no habría lugar a restituir los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, no obstante, lo anterior, la sociedad administradora de pensiones entiende que dichos rendimientos son un beneficio obtenido por el afiliado y hacen parte de su cuenta individual, lo que no se entiende es que se ordene devolver los gastos de administración que remuneran la gestión del Fondo de Pensiones. Que, además, debe tenerse en cuenta que la administradora del RPM no efectuó ninguna gestión de administración en ese mismo período y podría constituirse en un enriquecimiento sin justa causa. Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el artículo 1746 del Código Civil, considera que frente a los gastos de administración debe operar las restituciones mutuas, y/o en su defecto, abstenerse de ordenar su devolución. También señaló, que las obligaciones que se generan como consecuencia del acuerdo de voluntades plasmado en el acto de afiliación al régimen de ahorro individual, se pueden asemejar con los efectos que produce un contrato de mandato.

La apoderada de COLPENSIONES solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia señalando que, a lo largo del debate probatorio llevado a cabo en la primera instancia, la parte actora no logró demostrar esa indebida o insuficiente información por parte del fondo privado al momento de realizarse el traslado, razón por la cual no es procedente su declaratoria, y que el mismo se realizó bajo el derecho a la libre elección de régimen que le asiste al demandante, quien lo hizo en forma libre, voluntaria y cumpliendo con los requisitos legales de capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. Así mismo, señaló que la Corte también ha indicado que existen ciertos comportamientos y actividades que demuestran el compromiso de un afiliado de permanecer en un régimen pensional.

Hizo referencia a los argumentos de la Corte Constitucional en sentencia C-1024/2004 señalando que el período de carencia previsto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 no vulnera el derecho a la igualdad, ni ningún otro principio o derecho fundamental que emane de las relaciones de trabajo, pues resulta razonable para evitar un perjuicio a la sostenibilidad económica del sistema pensional.

También indicó que la carga de la prueba radica en cabeza de la parte actora, y la entidad que representa por vía de jurisprudencia no puede otorgar prestaciones económicas que no estén expresamente consagradas en la ley, razón por la cual negó el traslado en sede administrativa.

6. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

7. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER:

El problema jurídico propuesto a consideración de esta Sala es el siguiente:

¿Si en este caso resultaba procedente declarar la nulidad del traslado de la señora LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL del RPMPD al RAIS a través de la A.F.P. PORVENIR S.A.?, y de ser procedente, ¿si la declaratoria de nulidad del traslado implica la devolución de aportes, de los gastos de administración y demás conceptos ordenados?

8. CONSIDERACIONES:

Procede esta Sala a determinar en primer lugar si el traslado de la señora LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad que se efectuó en el año 1995, se dio con pleno cumplimiento al deber de información que radicaba en cabeza de la demandada Administradora de Fondo de Pensiones PORVENIR S.A., o si en su defecto, procede la declaratoria de ineficacia del traslado inicial que se dio del RPMPD al RAIS y el orden de devolución de los aportes, gastos de administración y demás conceptos a COLPENSIONES.

Al respecto el A Quo concluyó que era procedente declarar la ineficacia del traslado dado que existe un deber de información de las administradoras a sus afiliados al momento de consolidar el mismo, respecto del cual era necesario brindar y demostrar que se entregó información clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias del cambio del régimen pensional, lo que jurisprudencialmente se ha señalado es carga de la prueba de la demandada y no se cumplió, por lo que accedió a las pretensiones.

A esta conclusión se opuso PORVENIR S.A. alegando que dio la debida asesoría y que no está de acuerdo con la orden de restituir los gastos de administración y lo pagado por seguro de previsional, por considerar que dicha determinación resulta en contravía del inciso final del artículo 964 del Código Civil y de la Ley 100 de 1993.

Por su parte Colpensiones manifestó que no es procedente la declaratoria de la ineficacia del traslado de la demandante porque se evidencia una falta de interés de la demandante para resolver oportunamente su situación pensional ya que ha permanecido más de 20 años en el RAIS y siendo su interés mejorar su mesada pensional, no se demuestra que efectivamente vaya a consolidarse dicha mejora.

En esa medida, se tiene que lo pretendido por la parte actora es la ineficacia del acto de traslado de régimen pensional por el incumplimiento del deber de información a cargo de la administradora y con ello la constitución de un vicio del consentimiento; pretensión que tiene fundamento en que una de las características del sistema general de pensiones es la selección libre y voluntaria del régimen pensional por parte de los afiliados, conforme al artículo 13 de la ley 100 de 1993.

Para que un traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual adquiera plena determinación, dicha actuación debe contener un pleno acatamiento de este deber para que de esa decisión se pueda predicar la libertad y voluntariedad exigida, pues la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en jurisprudencia sentada desde el año 2008 ha determinado que previo a su decisión, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar, porque de no ser así, bien por brindarse una incorrecta u omitirse la relevante, puede entenderse que existe un error que vicia su voluntad. En otras palabras, es posible predicar la ineficacia de la vinculación al RAIS por un vicio en el consentimiento denominado error, que hace imposible que la selección del nuevo régimen sea soberana y potestativa

Sobre la procedibilidad de estas pretensiones, la jurisprudencia en providencias como SL19447 de 2017, ha señalado que existirá ineficacia de la afiliación cuando i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados; providencia que ha sido reiterada en SL2611 del 1 de julio de 2020.

En decisión SL1452 del 3 de abril de 2019 (Rad. 68.852 y M.P. CLARA DUEÑAS) la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia realiza un profundo análisis del presente problema jurídico, señalando que la prosperidad de la pretensión de nulidad de afiliación a una AFP por incumplimiento del deber de información no depende de que la persona tenga una expectativa pensional ni se trata de una imposición novedosa e inexigible para traslados anteriores al año 2009, puesto que **el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber exigible desde su creación.**

Cabe recordar que, el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015, pues ya los artículos 14 y 15 del Decreto 656 de 1994, exigían de estas cumplir sus funciones con suma diligencia, con prudencia y pericia, dentro de las cuales se entienden: la transparencia, la vigilancia, y el deber de información. Ello, según ha dicho la jurisprudencia, a partir del artículo 1603 del Código Civil que enseña que las partes no solo se comprometen en los contratos al cumplimiento de las obligaciones expresas sino también a las responsabilidades que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación.

Al respecto la sentencia SL1452 de 2019 hace un recuento de las etapas de este deber de información, reiterando que surge con el artículo 13 de la ley 100 de 1993 y que sus decisiones previas identifican que inclusive en el Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, numeral 1° del artículo 97 impone a las entidades el deber de suministrar la información necesaria a los usuarios para las operaciones que realicen y que ello implica entender la transparencia como *“una norma de diálogo que le impone a la administradora, a través del promotor de servicios o asesor comercial, dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios. En otros términos, la transparencia impone la obligación de dar a conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro”*.

Prosigue la Corte identificando las normativas de diversa índole que se han proferido desde entonces para garantizar el cumplimiento de este deber a favor de los afiliados, imponiendo 3 puntos fundamentales:

(i) La constatación del deber de información es ineludible, pues si desde el principio las AFP tenían el deber de brindar información con el paso del tiempo este grado de exigencia se ha intensificado y los jueces tienen el deber *“de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido”*.

(ii) En desarrollo de lo anterior, agrega la Corte que *“El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente”* de manera que existe la necesidad de un consentimiento informado, pues *“la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, **no son suficientes para dar por demostrado el deber de información**”* dado que *“el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado”*.

(iii) Por ende, afirma la Corte que la carga de la prueba debe invertirse en favor del afiliado puesto que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”*, de manera que *“si se arguye que a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo”* el afiliado no puede demostrar un supuesto negativo como sería el que no recibió la información y de allí que es la AFP quien debe demostrar que suministró la asesoría en forma correcta.

De ahí que, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son estos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretenden pertenecer al sistema de ahorro individual: (i) las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, (ii) las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y (iii) las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Estos preceptos han venido siendo reiterados, como puede verse en providencia SL587 de 2021 donde la Corte resalta que *“es la demostración de un consentimiento informado en el traslado de régimen, el que tiene la virtud de generar en el juzgador la convicción de que ese contrato de aseguramiento goza de plena validez”* y por lo tanto *“si*

el afiliado alega que no recibió la información debida cuando se vinculó, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede acreditarse materialmente por quien lo invoca, máxime cuando el deber de información *“es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones y su ejercicio debe ser de tal diligencia que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión”*, indicando que la inversión de la carga de la prueba en favor del afiliado obedece a una regla de justicia y tampoco resultaría razonable invertirla contra la parte débil de la relación contractual.

Aplicando estos preceptos legales y jurisprudenciales al caso concreto, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad está en cabeza de la A.F.P PPORVENIR S.A.; pues argumenta la demandante que la aparente decisión libre y voluntaria de trasladarse de régimen no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte del fondo que la recibió, por lo que no existe tal consentimiento libre y voluntario, por lo que atendiendo a la carga de la prueba mencionada, se hace necesario auscultar el material probatorio a efectos de determinar si por el contrario, la información fue correcta, oportuna y suficiente.

La demandante manifestó que estuvo afiliada al RPMPD administrado por el entonces ISS (hoy COLPENSIONES), donde alcanzó a cotizar 143 semanas y se trasladó al RAIS el 1 de noviembre de 1995 a través de la firma de formulario de vinculación del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A.

Del expediente se puede evidenciar que la actora se encontraba afiliada RPMPD desde abril de 1986, cotizando acorde a la historia laboral aportada por COLPENSIONES un total de 468,43 semanas y conforme certificado expedido por PORVENIR S.A., surtió traslado efectivo a dicha administradora desde el 1 de noviembre de 1995, donde a la fecha de interposición de la demanda ha sumado otras 679 semanas para un total de 1146.

Se resalta que no obran otras pruebas al plenario sobre lo acontecido al momento de ese traslado, pues ni siquiera fue aportado el referido formulario de afiliación suscrito en octubre de 1995; por lo que es necesario reiterar que la carga de la prueba no recae para estos asuntos en la demandante, es decir, la señora LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL no se encontraba en la obligación de demostrar con grado de certeza que se le indujo a error o se vició su consentimiento al suscribir el formulario, para alcanzar sus pretensiones; pues se ha asignado a la Administradora de Pensiones el deber de demostrarle al operador judicial que garantizó el deber de información y expuso las consecuencias que conllevaba el cambio: como identificar que la pensión mínima dependía de una ahorro determinado o las estimaciones sobre la diferencia en la forma de estructurar el valor final de la mesada pensional para que tuviera idea sobre los resultados de su traslado, no siendo dable tampoco demostrar un perjuicio para acceder a la pretensión.

Fluye del relato probatorio, que no obra prueba alguna que dé cuenta si PORVENIR S.A. brindó a la afiliada previo a su traslado, toda la información en los términos exigidos por la jurisprudencia; esto es, que para el octubre a noviembre de 1995, momento en que se alega firmó el formulario de solicitud de vinculación o traslado, se le haya indicado que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta individual; que si no se completaba el suficiente capital para obtener por lo menos una pensión mínima (equivalente al 110% del SMLMV), debía seguir cotizando o aceptar la devolución de saldos; y que existen diferentes modalidades pensionales. Tampoco obra prueba de la que pueda desprenderse que a la fecha indicada se hubieren efectuado las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones y otras tantas observaciones respecto a los riesgos que asumía la referida con su traslado, pues ellas brillan por su ausencia en el plenario.

De acuerdo con lo explicado, en su momento PORVENIR S.A., no actuó cumpliendo con su deber de información, pues conforme se expuso tenía la carga de acreditar que así lo hizo, y no aportó documento o prueba alguna que lo acreditara, ya que no contestó la demanda en término oportuno y con las pruebas aportadas al proceso no se infiere con certeza que la situación pensional particular de la actora haya sido estudiada y ante ello se puede concluir que la demandada no logró acreditar que la activa hubiere recibido la información del traslado bajo los siguientes parámetros:

información necesaria, completa, eficiente, suficiente, eficaz, cierta, oportuna y comprensible de las reales implicaciones que conllevaría el traslado y las posibles consecuencias futuras. Tampoco allegó prueba sobre los datos proporcionados a LUZ EDITH MENDOZA CARRASCAL donde consten los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

En atención a los lineamientos jurisprudenciales citados, a que para la fecha del ultimo traslado al RAIS ya estaba en vigencia la Ley 1328 de 2009, así como el Decreto 2241 de 2010, y con sustento en las pruebas analizadas, la Sala concluye que en el presente caso, sí se presentó un vicio en el consentimiento de la afiliada, traducido en un engaño por la *“Falta del deber de información en un asunto neurálgico para una persona, como es el cambio de régimen pensional”*, que lo indujo en error de hecho sobre el objeto o identidad de la cosa específica de que se trata, como señala el artículo 1510 del Código Civil, al tomar la decisión de su traslado al régimen de ahorro individual y de esa manera los argumentos iniciales del recurso de apelación de ambas demandadas son desestimados, pues para enervar la decisión debía enfocarse la demandada en un ejercicio adecuado de la carga de la prueba que le correspondía, respecto de un deber legal que existe desde la concepción del Sistema General de Seguridad Social.

Por otra parte, sobre la prescripción que podría beneficiar a COLPENSIONES en virtud de la consulta, se advierte que al tratarse el presente asunto de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la Seguridad Social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento., Por lo tanto, la acción encaminada a lograr la ineficacia de la afiliación en los fondos privados por cambio de régimen pensional no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada.

Así lo ha expresado en diversos pronunciamientos, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, concluye por ejemplo en providencia SL361 de 2019 que *“la acción encaminada a lograr la nulidad de la afiliación en fondos privados por cambio de régimen no está sujeta a las reglas de prescripción al estar relacionada con los derechos pensionales de la afiliada”*; por lo que esta excepción no está llamada en prosperar.

Abordando lo correspondiente a las restituciones contenidas en la condena, específicamente la devolución de los descuentos realizados por la AFP por gastos de administración a la cuenta de la actora, se ha concluido que PORVENIR S.A., incumplió con su deber de información sobre las incidencias, ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio al RAIS, por lo que, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración incluyen que se realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y descuentos realizados por gastos de administración y seguro previsional a COLPENSIONES, tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló en lo pertinente lo siguiente: «...las prestaciones acaecidas no son plenamente retroactivas...», por lo que, al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen se encuentra nulo por vicio del consentimiento, PORVENIR S.A., deberá devolver completamente todas las prestaciones que recibieron de la afiliada, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones. Los cuáles están en custodia de la Administradora y no de la aseguradora, para quien la presente condena no se hace extensible por no tener responsabilidad alguna en las pretensiones o el objeto del litigio, sin perjuicio de que se puedan adelantar acciones futuras para determinar la procedibilidad de recobros.

Esto ha sido recientemente reiterado por la Sala de Casación Laboral en proveído SL2877 de 2020, donde se dijo:

*“En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS **debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a***

que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, **incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.**

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989).

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que PROTECCIÓN S.A. y PROTECCIÓN S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar **los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.**”

Lo anterior permite desestimar el argumento de la apoderada de COLPENSIONES sobre que aceptar a la actora desequilibraría la financiación del régimen de prima media; pues los aportes deben ser devueltos a dicha entidad a plenitud, como si se hubieran realizado en igualdad de condiciones y por lo tanto conformando íntegramente el mismo capital pensional que hubiera generado la mesada de haber permanecido desde 1995 en esa entidad.

Así mismo, ha señalado la Corte desde providencia SL1688 de 2019 que “a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”; por ende, no es posible señalar que la permanencia en la entidad por la actora pueda entenderse como un acto de relacionamiento que sanee la irregularidad que avala la pretensión.

Respecto de los demás argumentos de los apelantes sobre la imposibilidad de devolver descuentos legalmente realizados en su momento, advierte la Sala de Casación Laboral en providencia SL3199 de 2021 reiterada en SL3895 de 2021:

“como la declaratoria de ineficacia tiene efectos ex tunc (desde siempre), las cosas deben retrotraerse a su estado anterior, como si el acto de afiliación jamás hubiera existido. Por ello, en tratándose de afiliados, la Sala ha adoctrinado que tal

*declaratoria obliga a las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones --debidamente indexados-- **con cargo a sus propias utilidades**, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, postura que resulta igualmente aplicable respecto del porcentaje destinado a constituir el fondo de garantía de pensión mínima.”*

De lo anterior se desprende, que es la AFP quien, al predeterminar la ineficacia, está llamada a responder de su patrimonio por todas las consecuencias que de ello se deriven.

Conforme a lo anterior, la Sala deberá confirmar la decisión adoptada por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en sentencia del 5 de noviembre de 2021; finalmente, se condenará en costas de segunda instancia a las demandadas PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, al no haber prosperado su recurso de apelación. Fíjense como agencias en derecho a favor de la actora, por la segunda instancia, la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha del 5 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, de acuerdo con lo explicado en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS de segunda instancia a la parte demandada PORVENIR S.A. y COLPENSIONES. Fijar como agencias en derecho a favor del demandante la suma de \$250.000 a cargo de cada demandada.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander

TRIBUNAL SUPERIOR

Distrito Judicial de Cúcuta

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE

Dr. JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

PROCESO ORDINARIO LABORAL

Juzgado Cuarto Laboral Circuito de Cúcuta

Rad. Juzgado: 54-001-31-05-004-2021-00096-00

Partida Tribunal: 19536

Demandante: JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA

Demandada(o): COLPENSIONES / PORVENIR S.A.

Tema: NULIDAD DE TRASLADO

Ref.: APELACIÓN Y CONSULTA DE SENTENCIA

San José de Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Procede la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta a resolver el recursos de alzada presentados por los apoderados judiciales de las entidades demandadas, así como el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el día 22 de septiembre de 2021, dentro del proceso ordinario laboral con Radicado del Juzgado N°54-001-31-05-004-2021-00096-00 y partida de este Tribunal Superior No. 19536 promovido por el señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, S.A. y PORVENIR, S.A.

Abierto el acto por el Magistrado Ponente, entra la Sala a deliberar y una vez conocido y aprobado el proyecto, se profirió la presente sentencia, previos los siguientes

I. ANTECEDENTES

El demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA demanda a las entidades anteriormente mencionadas solicitando principalmente que, previos los trámites del proceso ordinario laboral, se **DECLARE** la NULIDAD de la afiliación efectuada a la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLPATRIA, hoy PORVENIR, por la indebida y nula información que le suministrara el fondo privado para convencerla de que se trasladara de régimen y, en consecuencia, se ordene el traslado a COLPENSIONES de la totalidad de los dineros que se encuentren depositados en su cuenta de ahorro individual, que se condene a las demandadas al pago por costas y agencias en derecho, y a las facultades

extra y ultra petita; y subsidiariamente solicitó que se reconozcan a su favor los perjuicios causados así como la pensión de vejez en las mismas condiciones y circunstancias a que tendría derecho si se hubiese pensionado en el Régimen de Prima media con prestación definida.

II. HECHOS

La parte demandante fundamentó sus pretensiones en los hechos narrados en el libelo originario, los cuales serán expuestos brevemente, de la siguiente manera:

1. Que nació el 21 de mayo de 1950, con lo cual se concluye que para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, por tanto, es beneficiario del RÉGIMEN DE TRANSICIÓN establecido por el art. 36 de la Ley 100 de 1993.
2. Que cumplió la edad mínima requerida dentro del Régimen de Prima Media para acceder a la Pensión de Vejez, el 21 de mayo de 2010.
3. Que se afilió al Régimen de Prima media con Prestación definida el día 03 de junio de 1976, tal y como puede corroborarse con el reporte de semanas expedido por COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
4. Que se trasladó el día 15 de abril de 1999, del RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA al RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, mediante afiliación a PORVENIR.
5. Que desde su afiliación al Régimen de Ahorro Individual, ha cotizado a ese régimen más de 1090 semanas de cotización al sistema en pensiones.
6. Que a la fecha, ha cotizado al Sistema General de Pensiones con los dos Regímenes más de 1150 semanas.
7. Que elevó derecho de petición al Fondo de Pensiones PORVENIR S.A el día 25 de enero de 2021, solicitando información de la afiliación y el traslado del régimen, a lo cual la entidad guardó total silencio.
8. Que el día 26 de enero de 2021, solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen y que procediera a afiliar sin dilaciones al Señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA, petición que le correspondió el radicado 2021_776952.

III. NOTIFICACIÓN A LAS DEMANDADAS

Notificado el libelo a la demandada **COLPENSIONES, S.A.**, ésta dio formal contestación oponiéndose a las pretensiones de la demanda, en el entendido que la demandante se afilió voluntariamente a PORVENIR, encontrándose incurso en lo establecido por el literal B del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por estar a menos de 10 años para pensionarse.

Como excepciones de fondo propuso las que denominó INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA Y FALTA DE DERECHO PARA PEDIR, COBRO DE LO NO DEBIDO POR FALTA DE PRESUPUESTOS LEGALES PARA SU RECLAMACIÓN, RESPONSABILIDAD SUI GENERIS DE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, JUICIO DE PROPORCIONALIDAD Y PONDERACIÓN, INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES, EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN, PRESCRIPCIÓN Y LA INNOMINADA O GENÉRICA.

Por su parte, PORVENIR S.A. indicó que se opone a las pretensiones principales y subsidiarias incoadas por la demandante, ya que en el traslado efectuado inicialmente no existió vicio alguno que amerite o genere su nulidad o ineficacia y de accederse a las súplicas de la demanda, sería como que la demandante desconociera su propio acto, lo que contraviene el principio de buena fe contractual.

Como excepciones de mérito propuso las excepciones que denominó INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN Y LA INNOMINADA O LA GENÉRICA.

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Tramitada la Litis, el Juzgado de conocimiento que lo fue el CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 2021, resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la INEFICACIA de la afiliación o traslado de la parte demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA c.c. 13.358.862 del régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS hoy COLPENSIONES S.A, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP PORVENIR S.A, desde 01-06-1999 siendo determinante del traslado de régimen, con efectos respecto de CUALQUIER TRASLADO SUBSIGUIENTE DENTRO DEL MISMO RAIS, todo conforme a lo considerado.

SEGUNDO.- CONDENAR al fondo pensional PORVENIR S.A, donde se encuentran los recursos aportados por la parte demandante, devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S.A., y a favor de la demandante, fondo pensional COLPENSIONES S.A., representa el régimen de prima media con prestación definida, SE DEVOVLERÁN SE REITERA, todos los valores que hubiere recibido desde el TRASLADO de régimen pensional 1 de

agosto de 1994, Y HASTA EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA SENTENCIA, la entrega de todo el capital recibido por cotizaciones de la parte demandante, bonos pensionales DE HABERSE COBRADO, saldos de la cuenta individual, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del Código Civil, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado, sin la posibilidad de efectuar descuento alguno, ni por administración ni por cualquier otro concepto, como seguros previsionales, artículo 20 inciso 3 ley 100 de 1993 modificado por el artículo 7 ley 797 de 2003 y literal b) artículo 60 ley 100 de 1993, precisando que son de cargo del fondo pensional Porvenir S.A, DETERMINANTE DEL TRASLADO DE REGIMEN, la devolución de todos los recursos que fueron objeto de descuento a la demandante por los conceptos precitados desde el inicio del traslado y hasta que se devuelvan los recursos EN SU TOTALIDAD a COLPENSIONES S.A, todo conforme a lo considerado. Término para el CUMPLIMIENTO 1 mes a la ejecutoria de la sentencia.

TERCERO. -DECLARAR que la parte demandante para efectos pensionales, se encuentra afiliado al régimen de prima media con prestación definida, administrado en su momento por el extinto I.S.S., y hoy administrado por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES S.A., a la ejecutoria de esta sentencia, por las razones expuestas.

CUARTO. - DECLARAR probada la excepción de mérito de buena fe, propuesta por LA PASIVA PORVENIR S.A, la que por sí sola no enerva lo pretendido por la actriz.

QUINTO. - Declarar no probada la excepción de prescripción por las pasivas, y sobre las demás propuestas hay declaración ínsita conforme a lo considerado.

SEXTO: Condenar a COLPENSIONES S.A., a recibir el capital pensional procedente del fondo privado PORVENIR S.A., a favor de la parte demandante, INCLUYENDO LOS DESCUENTOS HECHOS, DESDE LA GENESIS DEL TRASLADO Y HASTA QUE SE DEVUELVAN, traducirlos en semanas cotizadas de acuerdo al IBC informado y sobre el cual cotizo, todo conforme a lo considerado.

SEPTIMO: Condenar en costas a favor de la parte DEMANDANTE y en contra de la demandada COLPENSIONES S.A., AGENCIAS IGUAL A 1 S.M.L.M.V. \$ 908.526 DECRETO 1785 DE 2020 POR HABERSE OPUESTO A LAS PRETENSIONES, sin ser determinante del traslado de régimen pensional, y en cuanto a PORVENIR S.A., determinante del traslado de régimen, A 2 S.M.L.M.V., \$1.817.052 Fundamento legal artículo 365-1 DEL C.G.P. en concordancia con el ACUERDO PSAA16-10554 ARTICULO 5 NUMERAL 1., PRIMERA INSTANCIA. Las agencias fijadas se tendrán en cuenta en su momento procesal oportuno para liquidar las costas.

OCTAVO. -ORDENAR así fuere apelado este fallo en su oportunidad, por parte de COLPENSIONES S.A., se surta el grado jurisdiccional de CONSULTA ante el Superior funcional, en razón a que hay condena al imponerse una obligación a COLPENSIONES S.A.

La anterior decisión la fundamentó en el hecho que no existe en el expediente, prueba idónea que indique el cumplimiento de la obligación de una veraz, completa y cierta información a la afiliada al momento de su traslado al régimen pensional administrado por fondo privado. En relación a lo anterior, para el despacho existió una afectación del derecho fundamental de dignidad del trabajador a una vida digna, con una pensión por un valor mucho menor de mantenerse en el régimen, donde se está saltando la libertad de voluntad de escoger libremente el fondo por la parte interesada del afiliado, que tenía derecho a recibir una información veraz.

Así mismo, dado que las pretensiones principales prosperaron, no consideró necesario estudiar lo pedido de manera subsidiaria.

V. RECURSOS DE APELACIÓN

PARTE DEMANDADA- PORVENIR, S.A.

Indicó la parte en su recurso que se encuentra inconforme con la decisión y solicita que sea revocada en su integridad, reiterando lo manifestado en los alegatos de conclusión.

Solicitó que sean revocada las condenas incluidas en el numeral 2 de la sentencia atacada, conforme al artículo 964 del Código Civil inciso final que dice: “En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producirlos”.

Recalcó que estos frutos, conforme a la Ley 100 del 93, son la retribución por los servicios prestados por la entidad, y se utiliza para cubrir los costos y gastos de la actividad de la AFP y aquellos son situaciones jurídicas consolidadas y hechos consumados, por lo que son excepciones al retrotraer los efectos del traslado.

En relación con las primas pagadas por los seguros, informó que estas fueron sumas pagadas a favor de terceros como son las compañías de seguros, quienes prestaron sus servicios, es decir, quienes dieron cobertura durante todo el tiempo que estuvo vigente la filiación de la señora demandante con el fondo; que al ya haber sido pagados, son dineros que son difíciles de restituir por cuanto son unos pagos que se hacen a unos terceros ajenos los fondos, y hay que tener en cuenta que la fuente de esas obligaciones es de carácter legal.

Consideró que este reconocimiento hace que se incurra en un enriquecimiento sin causa y a favor de Colpensiones, entidad que además de recibir los rendimientos va a recibir estas sumas adicionales.

PARTE DEMANDADA- COLPENSIONES

La ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES no se encontró de acuerdo con la anterior decisión, por lo que interpuso recurso de apelación en su contra, manifestando que la ineficacia del traslado no es procedente por estar fundamentada en la falta de información al afiliado, siendo que el señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA estaba capacitado para entender la obligación que adquirió cuando registró su traslado de régimen. Señala que han pasado más de 20 años desde la afiliación, y que es tiempo suficiente para que la accionante se haya informado de las consecuencias del cambio de régimen. Señaló, también, que el ISS –hoy Colpensiones, no participó en el traslado de régimen del actor y no tiene ninguna responsabilidad en ese hecho.

Se refirió a la obligatoriedad que surge de recibir al demandante dentro del régimen de prima media, por cuanto esa situación genera una inestabilidad financiera para el régimen de pensiones, teniendo en cuenta que el demandante siempre ha cotizado dentro del régimen de ahorro individual, y que el traslado de los fondos pensionales nunca son suficientes para el otorgamiento de las pensiones, por lo que se genera un desbalance dentro de Colpensiones, situación que se debe cuenta al momento de generar los traslados de régimen pensional faltando menos de los 10 años para adquirir la pensión, transgrediendo la normatividad vigente desde la Ley 100.

Por último, enfatizó en que se absuelva a Colpensiones de todas las pretensiones incoadas en la demanda, específicamente en la obligación que se interpone a Colpensiones a recibir en el régimen de prima media al demandante.

VI. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión, que se resumen de la siguiente manera:

PARTE DEMANDADA PORVENIR

En sus alegatos de conclusión, la pasiva solicitó se revoque la sentencia proferida por el A quo, y en su lugar, se le absuelva de las pretensiones incoadas en su contra. Indicó que revisadas las pruebas documentales allegadas por la parte demandante, se tiene que ninguna de ellas, desacreditan que se brindó una debida asesoría, conforme con las disposiciones y jurisprudencia vigente en la época del traslado;

que La AFP PORVENIR informó a sus afiliados sobre las características del régimen de ahorro individual, sobre sus aportes, rendimientos y de las posibilidades de traslado de régimen; que, de hecho, además de los canales dispuestos por la Administradora y el envío de la información junto con los extractos trimestrales, en el año 2004, PORVENIR S.A. junto con los demás fondos de pensiones realizó campañas a través del envío de comunicaciones masivas a sus afiliados, de medios de comunicación (publicación realizada en el Diario El Tiempo), informándoles a todos los afiliados la posibilidad de retornar al RPM de acreditar con los requisitos establecidos en dichas normas y la demandante no hizo uso de ese legítimo derecho, por lo que nadie puede alegar su propia torpeza.

Respecto a la condena de que se restituyan con cargo al patrimonio propio de PORVENIR S.A los gastos de administración descontados durante el tiempo que permaneció en el fondo, precisó que no comparte esta condena, pues al declararse la ineficacia del traslado, se ordena como consecuencia de ello, una serie de restituciones, entre ellas los frutos o rentabilidades generadas por el capital pensional, por lo tanto, se debe acudir al Código Civil, como referente normativo en este asunto; que en tal sentido, el artículo 964 del CC, inciso final, claramente establece que toda restitución de frutos se abonará al que la hace los gastos ordinarios que ha invertido en producir los frutos; que los gastos de administración y otras erogaciones realizadas por la AFP, se relacionan con gastos ordinarios en la producción de la rentabilidad del capital.

Igualmente, respecto a la condena en costas y agencias en derecho, consideró que la misma no se ajusta a derecho en cuanto se refiere a PORVENIR S.A. no incurrió en falta alguna.

PARTE DEMANDANTE

Alegó la parte que la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito que determina entre otras cosas, declarar la INEFICACIA de la afiliación o traslado del demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA, del régimen de prima media con prestación definida administrado por CAJANAL el I.S.S. hoy COLPENSIONES S.A, al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la HORIZONTE S.A., hoy PORVENIR S.A., en fecha de 1999, se encuentra debidamente soportada por los hechos que en proceso fueron determinantes para dicha decisión.

Recalcó que dentro del proceso judicial de referencia, fueron declarados como ciertos los hechos relativos a las faltas graves en cuanto al deber de información de la administradora de pensiones PORVENIR S.A., y su incidencia en la afiliación de la demandante.

Una vez cumplido el término para el efecto, sin que la pasiva, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES ejerciera su derecho a

presentar alegatos de conclusión, procede la Sala a resolver el asunto conforme a las siguientes,

VII. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA. La Sala asume la competencia para decidir los recursos de alzada teniendo presente lo previsto en el artículo 66A del C.P.T y de la S.S., que fue adicionado por el artículo 35 de la ley 712 de 2001; igualmente, por haber impuesto la sentencia proferida en primera instancia, una carga presupuestaria a COLPENSIONES, se surtirá el grado jurisdiccional de consulta.

Se procede entonces a plantear los siguientes problemas jurídicos:

1. Con fundamento en el caudal probatorio aportado, establecer si es procedente declarar la nulidad del traslado de régimen pensional, efectuado por el demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA en el año 1999 a PORVENIR S.A. –régimen de ahorro individual con solidaridad.
2. De ser procedente la nulidad del traslado de régimen pensional, establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que generarían dicha declaración, tanto para PORVENIR S.A., como para la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- entidad a la que se encontraba afiliada con anterioridad.
3. Examinar si la acción tendiente a obtener la nulidad del traslado de régimen pensional, puede promoverse en cualquier tiempo o si por el contrario está sujeta al fenómeno extintivo de los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Esto, conforme a la excepción de prescripción planteada por Colpensiones.
4. Por último, se revisará la condena en costas impuestas.

ANÁLISIS PROBATORIO

A fin de resolver lo anterior, la Sala acatando lo normado en los artículos 60 y 61 del C.P. del T. y de la S.S., tendrá como pruebas los documentos debidamente allegados al plenario tanto por la demandante como por las entidades demandadas, advirtiendo que no se propuso tacha alguna por falsedad respecto de los documentos allegados al plenario.

SOLUCIÓN AL PRIMER PROBLEMA JURÍDICO

Dado que lo pretendido por la demandante es que se declare la nulidad del traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, toda vez que su transferencia del ISS a hoy PORVENIR S.A. se dio por engaños,

arguyendo que los asesores de dicha AFP no le informaron adecuadamente las implicaciones que generaba el traslado, es menester por parte de esta Sala analizar, si el mencionado traslado se ajustó a las normas reguladoras de este tema y si no estuvo viciado el consentimiento del señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA para realizar el cambio advertido.

Aclarado lo anterior, esta colegiatura precisa que los afiliados al sistema de seguridad social están facultados para escoger libremente a qué régimen se afilian, tal como lo preceptúa el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1.993, en el que va inmerso como principio fundamental el consentimiento libre e informado y, en el evento de que se vislumbre un vicio en su producción o por la indebida información o su ausencia, será posible declarar la nulidad de tal escogencia.

El artículo 97 de la ley 100 de 1.993, enmarcó a los fondos de pensiones como constitutivos de un patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, lo que conlleva a la exigencia del cuidado de los intereses de quienes se ligan a ellas, el que inicia desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de su afiliación a la administradora, dada la confiabilidad de quienes van a entregar sus ahorros y sus seguros de previsión para su vejez, su invalidez o una eventual pensión de sobreviviente para sus beneficiarios.

Por tanto se entiende que, las administradoras de fondos de pensiones están obligadas a prestar de forma eficiente, eficaz y adecuada la provisión del servicio público de pensiones, con fundamento constitucional en el artículo 48 de la Carta Política, desarrollado por los artículos 90 y s.s. de la Ley 100 de 1.993; así mismo, se advierte, que el deber de información que le impone la ley a las administradoras de pensiones, se entiende como **obligación de carácter profesional** que se materializa a través de expertos en la materia a quienes le corresponde suministrar toda la información necesaria y relevante según sea el escenario en que se encuentra el afiliado o potencial vinculado, lo que implica un asesoramiento desde la antesala de la afiliación y que se extiende a todas las etapas de este proceso hasta que se garantice el disfrute de la pensión.

Por otra parte, el Decreto 656 de 1.994 *“por el cual se establece el régimen jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos de pensiones”* impuso en sus artículos 14 y 15 las obligaciones que debe cumplir con decoro y apego a las responsabilidades propias, esto es con diligencia, prudencia y pericia, como también toda que se le integre por fuerza de la naturaleza de las mismas, como lo manda el artículo 1603 del Código Civil, regla válida para las obligaciones cualquiera que fuere su fuente, legal, reglamentaria o contractual en ejecución de la buena fe; por lo que es claro que el deber de información a cargo de las administradoras de los fondos de pensiones no solo es exigible con la expedición del Decreto 2071 de 2015.

Recordemos igualmente que el Decreto 2071 de 2015 y la circular Externa 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, persiguen superar las inconsistencias que ha generado el traslado masivo entre regímenes sin ningún tipo de información haciendo obligatorio que el afiliado reciba

información veraz de manera simultánea por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad y al régimen de prima media, garantizando así que en efecto el afiliado conforme a su situación particular tenga una libertad contractual transparente, y pueda adoptar la decisión que mejor le convenga, a tiempo y con la mayor garantía de beneficios con base en la densidad de cotizaciones o capital por él acumulado.

Por lo antes mencionado, los fondos de pensiones son entidades con responsabilidades profesionales, aspecto plenamente respaldado en los artículos 14 y 15 del decreto 656 de 1994 y 1603 de C.C., por su responsabilidad en un tema tan técnico y profesional tienen el deber y la obligación de entregar una información clara y comprensible a las personas interesadas en adquirir sus servicios y afiliarse a las mismas.

Aunado a lo anterior, en reiterados pronunciamientos la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dispuso que si al momento de realizarse el acto de afiliación o cambio de régimen pensional, no hay una información clara, completa y comprensible por parte del Fondo de Pensiones hacia el usuario de dichos servicios, tal acto no tendrá la efectividad suficiente y dará lugar a la declaratoria de la ineficacia o nulidad del traslado, no siendo suficiente el simple consentimiento informado expresado en el formulario de afiliación, ya que esto no demuestra que en efecto se cumplió con el deber de suministrar dicha información, demostración está que por demás se encuentra, dentro de un proceso judicial, en cabeza del Fondo de Pensiones, invirtiéndose la carga de la prueba. (Ver sentencias de radicados N° 31989 de 2008 M.P. Eduardo López Villegas, N° 31314 de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón; N° 33083 del 22 de noviembre de 2011, la SL 9519 radicado n° 55050 del 22 de julio de 2015, la SL 19447 radicado n° 47125 de 27 de septiembre de 2017, SL 17595 con radicado n° 46292 de 18 de octubre de 2017, la sentencia SL 2372 con radicado n° 45041 de 23 de mayo de 2018, sentencia SL 47990 del 28 de febrero de 2018 y SL 1452 de 2019).

En conclusión, para que el operador judicial declare la nulidad de traslado de régimen pensional, deberá realizar un análisis minucioso sobre la actuación administrativa desarrollada por la administradora de pensiones, con el fin de verificar y constatar que el afiliado recibió la información adecuada, suficiente y cierta sobre su traslado, bajo el entendido de que las mencionadas entidades fueron creadas para cumplir un servicio público como lo es la seguridad social, con conocimientos y experiencia que resultan confiables a los ciudadanos quienes les entregan sus ahorros para la previsión a su vejez, invalidez o muerte.

Es de suma importancia resaltar que, este deber conlleva, a que el afiliado goce de un completo y certero conocimiento sobre la posibilidad de elegir voluntariamente, en permanecer en el régimen público o privado de seguridad social en pensión y le permite entender sobre los beneficios y desventajas de cada uno, ya que a pesar de cubrir los mismos riesgos, cada administradora ofrece diferentes alternativas que dependiendo del aporte, de la edad, de la fecha inicial de afiliación y de otras características procesales y sustanciales,

los resultados son disímiles respecto al capital ahorrado, la liquidación de las pensiones, requisitos y exigencias para ser beneficiario de las prestaciones.

Y entonces, según lo expuesto, se encuentra en cabeza del fondo de pensiones la obligación de controvertir la declaración de ineficacia del acto de traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad, dado que, en su libelo introductorio, el señor JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA afirma que esa decisión aparentemente libre y voluntaria de trasladarse, no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte de PORVENIR, S.A., lo que genera, a su juicio, una ausencia de consentimiento de libertado y voluntariedad.

CASO CONCRETO

Bajo el amparo de lo expuesto en líneas anteriores, se tiene que el demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA ingresó al sistema de Seguridad Social en Pensiones, cotizando aportes ante extinto el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS), y que el 15 de abril de 1999, realiza traslado del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR, suscribiendo formato de traslado No. 0308447.

Revisando las pruebas allegadas a los autos, se evidencia que si bien en el formato visto a PDF 15 del expediente digital, el cual fue suscrito por el demandante se dejó plasmado que su traslado entre régimen se dio de manera voluntaria, esto es, que “*se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones*”, considera la Sala que estas calidades de la decisión no se encuentran demostradas, toda vez que la información que debe ser suministrada al posible afiliado, como se dijo en líneas anteriores, no debe ser una simple expresión genérica como se consignó en el formulario de afiliación, y en virtud de la carga de la prueba que emana dentro del presente asunto a cargo de PORVENIR, S.A., se tiene que ningún elemento probatorio fue aportado por ella, con la intención de acreditar que en este caso en particular, suministró al demandante, la información necesaria y relevante que lleva consigo la migración de régimen pensional.

Así las cosas, en efecto, PORVENIR no demostró que por su parte, se hubiera realizado una oferta respecto de proyecciones sobre el posible valor de la pensión en el sistema de ahorro individual, que desde luego su resultado final, dependería del comportamiento real e histórico de variables, como el rendimiento financiero de los fondos, como tampoco se demostró que se proporcionara una comparación con el monto pensional que recibiría en el régimen de prima media, es decir, no se evidencia el estudio holístico entre las ventajas y desventajas que representara cada régimen para el caso particular del demandante.

Reiterándose que, le correspondía a la dicho FONDO acreditar que informó de manera clara, suficiente y apegada a la realidad, a la demandante en todo lo concerniente a las implicaciones del cambio de régimen pensional; no

obstante, como ya se advirtió, en el expediente no obra prueba alguna tendiente a demostrar que se cumplió con tal presupuesto legal, por lo que la simple manifestación genérica como la contenida en la solicitud de vinculación, no es suficiente para inferir que existió una decisión documentada por parte de la actora, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales por cuenta de la pasiva PORVENIR.

En ese orden de ideas, se encuentra demostrado el error al que se indujo al demandante en el momento de su traslado, debido a la ausencia de una construcción comunicativa del estudio del impacto en el derecho pensional del afiliado, por lo que, se configura una falta al deber de información y buen consejo, de la administradora demandada PORVENIR, y por consiguiente, encuentra esta Sala que es totalmente nulo e ineficaz el traslado y afiliación efectuada al régimen de ahorro individual del demandante ante el fondo privado por vicio del consentimiento (error) por falta de asentimiento informado, no asistiéndole la razón a los recurrentes y quedando de esta manera resuelto el primer problema jurídico planteado en forma favorable a el demandante JORGE ENRIQUE GARCIA GARCIA.

SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO- MONTOS A RESTITUIR

Retomando lo dicho en precedencia, resulta claro que PORVENIR S.A., incumplió con su deber de información sobre las incidencias, ventajas o desventajas que podría conllevar el cambio al RAIS que se surtió con la suscripción del formulario por el demandante en el mes de abril de 1999, por lo que, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia o nulidad de la afiliación del demandante al sistema pensional de ahorro individual, es que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN al ISS, hoy COLPENSIONES tal como fue señalado por en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló en lo pertinente que «...las prestaciones acaecidas no son plenamente retroactivas...».

Además, la mencionada Corporación se pronunció en su sentencia con Rad. 68852 del 09 de octubre de 2019, de la siguiente manera al analizar los efectos de la declaratoria de ineficacia de un traslado:

Según este artículo, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al *statu quo ante* no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen.

Ahora bien, en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone negarle efecto al traslado, tal situación solo es posible bajo la ficción de que el mismo nunca ocurrió. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que nunca se cambió al sistema privado de pensiones, y si estuvo afiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que nunca se trasladó al sistema público administrado por Colpensiones.

Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga las entidades del régimen de ahorro individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones (CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019 y CSJSL1688-2019).

En este mismo sentido, la mencionada Corporación en su sentencia Rad. 31989 del 8 de septiembre, señaló:

Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”

Así las cosas, es claro que al declararse la ineficacia del traslado que tuvo lugar en un principio, desde COLPENSIONES hacia PORVENIR, las cosas deben retrotraerse para, hasta donde sea posible, hacer como si dicho traslado no hubiera tenido lugar, siendo entonces procedente la devolución de esta hacia aquella, de manera completa, de todas las prestaciones que el afiliado hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado, los gastos de representación, y los demás valores dictados en la sentencia apelada y consultada, montos estos que conforman el capital total que debe ser reintegrado en el régimen de prima media para evitarle pérdidas o consecuencias desfavorables al afiliado, en sus respectivos periodos de cotización, sumas estas que se encuentran bajo la custodia de las Administradoras, y no de las aseguradoras, para quienes la presente condena no se hace extensible por no tener responsabilidad alguna en las pretensiones o el objeto del litigio, sin perjuicio de que se puedan adelantar acciones futuras para determinar la procedibilidad de recobros.

Esto fue recientemente establecido por la HCSJ en su Sala de Casación Laboral mediante sentencia SL2877 de 2020, donde se indicó lo siguiente:

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de

vez a que tiene derecho la demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cobija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

Precisamente en un asunto similar, esta Sala de Casación estableció que «la actuación viciada de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por los traslados de administradoras dentro de este último régimen; ciertamente, la decisión de escoger entre una y otra administradora de ahorro individual, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales» (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989).

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado la actora, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones.”

Así las cosas, no queda otro camino para esta Sala que CONFIRMAR la sentencia apelada y consultada en cuanto condenó a PORVENIR a devolver a COLPENSIONES *“todos los valores que hubiere recibido desde el TRASLADO de régimen pensional”*, debiéndose, sin embargo, MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO respecto de la fecha establecida por el A quo a partir de la cual deberán ser devueltas las sumas indicadas ya que el traslado realizado fue efectivo a partir del 01 de mayo de 1999.

TERCER PROBLEMA JURÍDICO- COSTAS PROCESALES

Por último, se rememora que las costas judiciales son aquellas erogaciones económicas que comporta la atención de un proceso judicial, en las que se incluyen: (i) **las expensas**, que son los gastos realizados y necesarios para adelantar el proceso y los causados en el desarrollo de la actuación, pero

siempre distintos de los honorarios que se pagan a los abogados, como por ejemplo, la producción de determinadas pruebas, el valor del desplazamiento y el tiempo ocupado por los testigos en su declaración, las copias necesarias para surtir determinados recursos etc., y (ii) **las agencias en derecho**, que consisten en el valor que el juzgador le da al trabajo del profesional del derecho que ha salido avante en el proceso, las que le corresponde pagar a la parte que resulte derrotada judicialmente; entonces, éste último rubro sumado con las expensas integran el concepto de costas.

En ese orden de ideas, tal y como se ha señalado en múltiples pronunciamientos de esta Sala, en lo que respecta a las costas procesales, debe indicarse, que el artículo 365 del Código General del Proceso, establece un criterio objetivo sobre las mismas, el cual es, que serán a cargo de la parte vencida en juicio. Como en el presente asunto dichas entidades fueron vencidas en el proceso, a su cargo deberán imponerse las costas.

Se condenará en costas de segunda instancia a la parte vencida en la presente actuación respecto del recurso de apelación, la parte demandada, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 365 del C.G. del P. En consecuencia, se fijarán como agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000) a cargo de cada una de las demandadas, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, S.A. y PORVENIR, S.A., y en favor del demandante.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA por intermedio de su SALA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

VIII. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia apelada y consultada proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el día 22 de septiembre de 2021, en el sentido de que es a partir del **01 de mayo de 1999**, que se condena a PORVENIR a devolver a COLPENSIONES todos los valores allí incluidos.

SEGUNDO: CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia apelada y consultada, conforme a lo explicado anteriormente.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte vencida en la presente actuación respecto del recurso de apelación, la parte demandada, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 365 del C.G. del P. En consecuencia, se fijan como agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, la suma de CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$400.000) a cargo de cada una de las demandadas, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, S.A. y PORVENIR, S.A., y en favor del demandante.

NOTIFÍQUESE



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE



ELVER NARANJO

MAGISTRADO



NIDIAM BELÉN QUINTERO GÉLVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 2 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-004-2021-00149-00 promovido por **Elsa Patricia Mendoza Acevedo** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.**, **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.** y la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (fls. 22-28, archivo digital 07) Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso. Pide, en forma subsidiaria, indemnización plena de perjuicios representada en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo la égida del RPM, o la

diferencia monetaria existente entre la mesada pensional que se liquidaría en uno y otro régimen.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 6 de febrero de 1963 y el 2 de junio de 1980 se afilió al régimen de prima media con prestación definida, de donde mutó el 1° de agosto de 1995 con destino a Porvenir S.A. y luego a Protección S.A., el 1° de agosto de 1997, para regresar a Porvenir S.A. el 1° de febrero del 2000. Ambos regímenes donde ha cotizado más de 1455 semanas. **2) Que** la vinculación al RAIS la realizó sin ser advertida de los efectos negativos que conllevaba el traslado, indicando que dichos movimientos no fueron libres ni voluntarios al no mediar una verdadera asesoría sobre los riesgos y consecuencias que acarreaban los cambios; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, lo que genera nulidad de dicho acto. **3). Que** formuló ante las administradoras de pensiones convocadas a juicio petición de nulidad del traslado de régimen sin éxito alguno.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: La **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A.** (fls. 14-23, archivo digital 10) se muestra en contra de las peticiones. Admitió la edad de la accionante y la densidad de aportes cotizados al RAIS, explicó que el traslado efectuado ante el fondo, se hizo de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, por lo tanto, no hay lugar a decretar la nulidad en los términos solicitados, ni a acceder a las demás súplicas. Afirmó, que la actora no se encuentra dentro de las posibilidades que otorga la jurisprudencia y reglamentación vigente para trasladarse al RPM. Sobre los demás factuales dijo que no son ciertos o no le constan. Para resistirse a las pretensiones de pago de pensión de vejez e indemnización, alegó que debe probar los perjuicios ocasionados y que estas son excluyentes entre sí. Propuso como excepciones de mérito las de falta de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro provisional cuando se

declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, e innominada.

Igualmente, **La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** (fls. 24-38, archivo digital 11) se opuso a lo pretendido con excepción de los pedidos subsidiarios en tanto se encuentra dirigidos en forma exclusiva contra los fondos privados. Admitió como ciertos los hechos relacionados con la edad de la actora, la afiliación al régimen por ella administrado y la reclamación administrativa elevada. Argumentó que ésta se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria. Señaló que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas de las cuales desconoce su veracidad y de la que no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad. Propuso las excepciones que denominó: buena fe, inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, prescripción, cobro de lo no debido y falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades, e innominada.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección S.A. (fls. 1-11, archivo digital 13) también se resistió a las súplicas. Dijo no constarle ninguno de los hechos. Adujo que el demandante no señaló ni demostró cuál fue el error en el que se incurrió para poder determinar si hay lugar a la anulación de su consentimiento, máxime cuando, dice, obra formulario de vinculación o traslado suscrito por el mismo, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad. Aduce que el petente se halla inmerso

en la causal fáctica de prohibición legal de traslado. Dice que resulta improcedente el que una AFP del régimen de ahorro individual reconozca una pensión en las condiciones dispuestas por el legislador para el RPM, porque dice, se trata de modalidades excluyentes con regulación propia y de obligatoria observancia. Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, e innominada.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el 2 de diciembre de 2021, resolvió declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que la accionante surtió con las AFP Protección y Porvenir S.A. Condenó a ambas AFP a devolver a - Colpensiones-, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de aquélla, como saldo de la cuenta, cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, todos los frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C. con los rendimientos que se hubieren causado, sin descuento alguno. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM que una vez cumplido lo anterior, acepte el traslado de la accionante del RAIS al régimen que ésta administra. Declaró probada la excepción de buena fe y desestimó las demás. Gravó en costas a las enjuiciadas.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio las encartadas de naturaleza privada, no cumplieron con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada al demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas. Aseveró que la permanencia ni traslados entre AFP, convalidan el traslado del RPM al RAIS.

RECURSOS DE APELACIÓN: -**Colpensiones**- aspira a que se revoque la decisión. Manifestó que no es posible aceptar el traslado de la demandante a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó literal e), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al establecer que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para adquirir la pensión de vejez; evento que satisface la activa al encontrarse en el rango de edad prescrito. Indicó que no se observan vicios en el consentimiento o incompleta información a la accionante al momento de realizar el traslado al RAIS, en la medida que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez. Aseveró que a partir del acto de traslado, el afiliado contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió, al contrario, se convalidó la permanencia con los traslados entre AFP de dicho régimen. Añade que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados, por lo que solicita que en caso de mantenerse la condena, se ordene la devolución de la totalidad de aportes.

Porvenir S.A. busca dejar sin efectos la sentencia. Manifestó que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones, como asegura, lo son, los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde el fondo prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción generó gastos a la AFP que la misma ley reconoce como comisiones de administración por la gestión de los aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil.

Discute que ningún detrimento de la cuenta del afiliado se puede reputar porque arguye, los rendimientos generados por el RAIS siempre serán superiores a los del RPM en tanto que éste último es un fondo común que no garantiza siquiera la rentabilidad mínima que las AFP están obligadas a reconocer incluso con su propio patrimonio. Y que, el acogimiento de las pretensiones representa una merma contraria a derecho del patrimonio del fondo privado y el aumento injustificado del perteneciente al RPM y la afiliada.

Protección eleva petición de revocatoria. Discrepa de la orden de devolución conjuntamente las comisiones y rendimientos porque se trata de prestaciones ya acaecidas que emanan de la buena gestión desplegada por el fondo. Menos, el seguro previsional en tanto afirma se trata de un concepto girado en favor de un tercero de buena fe, como lo es la aseguradora correspondiente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Porvenir S.A. y Protección S.A. replicaron los argumentos expuestos en la apelación elevada ante el juez *A-Quo*. Colpensiones ni la actora alegaron.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado de la petente del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, primero ante Protección y luego a Porvenir S.A., adolece o no del consentimiento informado de aquella. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que las encartadas del RAIS restituyan lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad

en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir,

hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de las AFP Protección y Porvenir S.A., al argumentar la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Elsa Patricia Mendoza Acevedo para hacer efectivas las mutaciones de régimen pensional, fue informado, es decir, si las AFP codemandadas cumplieron o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Se tiene que la protagonista procesal suscribió un formulario de afiliación a Horizonte (hoy Porvenir SA), el 24 de julio de 1995 (fl. 36, archivo digital 14), el 12 de junio de 1997 otro documento de igual naturaleza ante Protección S.A. (fl. 167) y un tercer escrito fechado el 13 de enero del 2000 en el que interviene Porvenir S.A. Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a las AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que ninguna de las encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitieron a la

accionante sopesara la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Elsa Patricia Mendoza Acevedo de la anotación: *“hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)”*, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado.

No asumieron entonces Protección ni Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como les correspondía los hechos aducidos por la deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplieron con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalaran en sus contestaciones de demanda que sí brindaron la asesoría en donde le explicaron en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuaron. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, los fondos de pensiones convocados a juicio, se sustrajeron al momento de suscribirse los distintos formularios de traslado y en perjuicio del demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir faltaron a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones sobre la imposibilidad del traslado luego que le faltaren menos de 10 años al afiliado para alcanzar la edad, ya que, de que se trata es de la ineficacia de un acto,

valga decir, de la inexistencia del mismo (traslado). Igual suerte corre la afirmación de que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Tampoco puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrió sobre ello.

También se desestima la afirmación de –Colpensiones- sobre que la existencia de cualquier falencia fue superada con la permanencia por espacio temporal considerable en el RAIS, ya que, la actuación irregular de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por la fidelidad dentro de este último régimen. Ciertamente, la decisión de permanecer en una y otra administradora de ahorro individual o incluso efectuar traslados entre éstas, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva a modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales.

Y es que si bien la demandante se vinculó primero a Porvenir y posteriormente a Protección S.A., para finalizar sus traslados en Porvenir S.A. no de ello puede inferirse que la afiliada conocía todos los elementos ya referidos para concluir que tales brindaron la información pertinente, transparente y legal.

Nótese que solo se aportó como prueba del cumplimiento del deber de información, los formatos de vinculación, que precisamente se trata de pre-impresos que no detallan el estudio de las circunstancias particulares del demandante que en cumplimiento del deber legal debieron analizarse.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión del *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo la demandante del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Protección, ni en su oportunidad Porvenir S.A., con el deber de información, deberá ésta como última administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Elsa Patricia Mendoza Acevedo, devolver todas las prestaciones que de la afiliada hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de las administradoras privadas, éstas también deben asumir los

deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tienen acogida las afirmaciones de las codemandadas pertenecientes al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección, por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a

cargo de cada una \$400.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO: CONDENAR en costas Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$500.000 a cargo de cada una de ellas. Líquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 9 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso radicado 54-001-31-05-004-2021-00184-01 promovido por **Margi Enith Vargas González** contra la **Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.** y la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: (Fls. 2-11, archivo digital 05): Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 25 de agosto de 1966, iniciando sus cotizaciones en junio de 1994. **2) Que** para tal data se presentó un asesor de Porvenir en su lugar de trabajo y la convenció de trasladarse a dicha AFP, situación que se repitió con Colpatria AFP, para terminar afiliada a Porvenir. **3) Que** usaron como fundamento para aceptar los traslados, la opción de obtener una mayor rentabilidad. **4) Que** el 15 de marzo de 2021, solicitó a Porvenir su proyección de pensión de vejez y su historia laboral, enterándose que el valor ofertado no cumple las expectativas planteadas al momento del traslado. **5) Que** formuló ante las administradoras de pensiones convocadas a juicio petición de nulidad del traslado de régimen sin éxito alguno.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: **La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** se opuso a lo pretendido. Acepta como ciertos los hechos relacionados con la edad de la actora y la reclamación administrativa elevada. Argumentó que ésta mutó al régimen de ahorro individual de forma voluntaria. Señaló que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas de las cuales desconoce su veracidad y de la que no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad. Propuso las excepciones que denominó: buena fe, inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, prescripción, cobro de lo no debido por falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en caso de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, sugerir un juicio de proporcionalidad y ponderación, no procede la declaratoria de ineficacia y/o nulidad de traslado de régimen pensional, en los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el régimen de ahorro individual en cualquiera de sus modalidades y la genérica.

Porvenir S.A. también se resistió a las súplicas. Dijo no constarle ninguno de los hechos esbozados en la demanda. Adujo que la incoante no señaló ni demostró cuál fue el error en el que se incurrió para poder determinar si hay

lugar a la anulación de su consentimiento, máxime cuando obra formulario de vinculación o traslado suscrito por el mismo, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad. Aduce que la petente se halla inmersa en la causal fáctica de prohibición legal de traslado. Formuló los medios de defensa: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, e innominada.

La Agencia Nacional del Estado no contestó.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el 9 de diciembre de 2021, resolvió declarar la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual que la accionante surtió con el fondo de pensiones Porvenir S.A. Condenó al fondo privado a devolver a Colpensiones, en el término imposterizable de un mes, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de aquel, como cotizaciones, bonos pensionales, todos los frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C. con los rendimientos que se hubieren causado, sin descuento alguno. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM que una vez cumplido lo anterior, acepte el traslado de la activa del RAIS al régimen que ésta administra. Gravó en costas a ambas AFP.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio Porvenir S.A., no cumplió con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada a la demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas.

RECURSOS DE APELACIÓN: **Porvenir S.A.** busca dejar sin efectos la sentencia. Manifestó que no se tuvieron en cuenta a las AFP ING y Colmena

pues deben devolver los gastos de administración que descontaron mientras tuvieron vínculo con la accionante. Aseveró que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones, como asegura, lo son los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción le generó gastos que la misma ley reconoce como comisiones de administración por la gestión de los aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil.

Discute que ningún detrimento de la cuenta de la afiliada se puede reputar porque, arguye, los rendimientos generados por el RAIS siempre serán superiores a los del RPM en tanto que éste último es un fondo común que no garantiza siquiera la rentabilidad mínima que las AFP están obligadas a reconocer incluso con su propio patrimonio. Y que, el acogimiento de las pretensiones representa una merma contraria a derecho del patrimonio del fondo privado y el aumento injustificado del perteneciente al RPM y la afiliada.

Colpensiones busca dejar sin efectos la sentencia. Manifestó que no es posible aceptar el traslado de la actora a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó literal e), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al establecer que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para adquirir la pensión de vejez; evento que satisface la incoante al encontrarse en el rango de edad prescrito. En cuanto a la ineficacia del traslado, indica que no es viable, en la medida que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, ya que, se realizó ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del

artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su artículo 48, sin que se observen vicios en el consentimiento. Asevera que, a partir del acto de traslado la afiliada contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los más de 20 años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió, circunstancia que ratifica su consentimiento. Añade que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados. Máxime, cuando arguye, la búsqueda de traslado de la pretensora se funda en un deseo netamente económico, como lo es la creencia del recibo de una mesada pensional superior al SMLMV. Disiente de la condena en costas argumentando que previo al pronunciamiento de la autoridad judicial respectiva, le está vedado admitir el traslado de un afiliado que la ley proscribe tajantemente.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: Porvenir S.A. replicó los argumentos expuestos en la apelación elevada ante la juez *A-Quo*. Colpensiones ni extremo activo alegaron.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado del demandante del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, ante Porvenir S.A., adolece o no del consentimiento informado de aquel. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que la encartada del RAIS restituya lo descontado por concepto de gastos de administración, comisiones y primas.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad

en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir,

hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de la AFP Porvenir S.A., al argumentar la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Margi Enith Vargas González para hacer efectivas la mutación de régimen pensional, fue informada, es decir, si la AFP codemandada cumplió o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

De otro lado, se observa que la hoy incoante, suscribió 3 formularios de afiliación al RAIS: el 29 de octubre de 1999 ante Colpatria (hoy Porvenir); el 28 de abril de 2000 a Porvenir S.A., proveniente de Colmena y el 13 de diciembre de 2000 frente Porvenir S.A. Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a las AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que ninguna de las encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto,

permitieron a la accionante sopesara la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá del mismo formulario de afiliación, que en todo caso a nada conduce para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Vargas González la anotación: “*hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)*”, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informada. Situación que ratifica la protagonista procesal al momento de rendir interrogatorio de parte, pues insiste en que no fue asesorada porque su afiliación se perfeccionó en el 2000 a través de un asesor bajo el argumento de que el Seguro Social estaba en crisis e iba a desaparecer y que quienes estaban allí afiliados quedarían en el limbo, sin resultar advertida acerca de las ventajas y desventajas del traslado, ni el eventual monto de la pensión de parte de ninguna AFP.

No asumió entonces Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como le correspondía, los hechos aducidos por la deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplió con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalara en su contestación de demanda que sí brindó la asesoría en donde le explicó en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debió haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuó. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, el fondo de pensiones convocado a juicio, se sustrajo al momento de suscribir el formulario de traslado y en perjuicio de la demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de promover su cambio de régimen, es decir, faltó a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se

puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones sobre la imposibilidad del traslado luego que le faltaren menos de 10 años a la afiliada para alcanzar la edad, ya que, de que se trata es de la ineficacia de un acto, valga decir, de la inexistencia del mismo (traslado). Igual suerte corre la afirmación de que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Menos puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrimó sobre ello.

También se desestima la afirmación de Porvenir S.A. sobre la imposibilidad de aplicar el precedente judicial vertical en el sub-analíse, ya que, si bien la vinculación primigenia del actor al RAIS se dio en 1994, el órgano de cúspide ha sido claro y reiterativo en precisar que la obligación de información a cargo de las AFP se encuentra prevista desde la creación del SGP.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión del *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado de la demandante del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Porvenir S.A., con el deber de información, deberá ésta como administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Vargas González, devolver todas las prestaciones que de la afiliada hubiere

recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación del demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló :*“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”*

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de la administradora privada, ésta también debe asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tiene acogida la afirmación de la codemandada perteneciente al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir

los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de sistema pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó el juez de primera instancia, siendo ineludible la confirmación íntegra de dicha decisión.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones y Porvenir S.A., por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$500.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 9 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta.

SEGUNDO.- CONDENAR en costas Colpensiones y Porvenir S.A. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$500.000 a cargo de cada una de ellas. Líquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

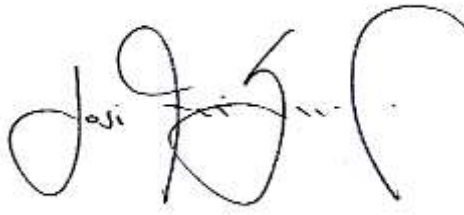
Los Magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

Joaquín P

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo

Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se deciden los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 10 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral radicado 54-001-31-05-004-2021-00232-00 promovido por **Ledy Yaneth Carreño Cárdenas** contra la **Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantía Protección** y la **Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones-**. Además, con fundamento en el artículo 69 del CPTSS, se surte el grado jurisdiccional de consulta de la misma providencia en lo que es adverso a la última entidad y no fue impugnado.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA: Depreca la actora se decrete la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). En consecuencia, se ordene su retorno al régimen de prima media con prestación definida (RPM) administrado por Colpensiones, así como cualquier otro derecho que se halle demostrado por conducto de las facultades ultra y extra petita, más las costas del proceso. Pide, en forma subsidiaria, indemnización plena de perjuicios representada en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo la égida del RPM, o la diferencia monetaria existente entre la mesada pensional que se liquidaría en uno y otro régimen.

Adujo para ello: **1) Que** nació el 5 de enero de 1966 y el 10 de septiembre de 1984 se afilió al régimen de prima media con prestación definida, de donde mutó el 1° de mayo de 1996 con destino a Protección y luego a Porvenir S.A., el 1° mayo de 2002. Ambos regímenes donde ha cotizado más de 1536 semanas. **2) Que** la vinculación al RAIS se realizó a través de formularios de vinculación, pero nunca fue advertida de los efectos negativos que conllevaba el traslado, indicando que dichos movimientos no fueron libres ni voluntarios al no mediar una verdadera asesoría sobre los riesgos y consecuencias que acarrearían los cambios; falta de información que revela que su decisión de traslado no fue espontánea, lo que genera nulidad de dicho acto. **3) Que** el 21 de mayo de 2021, Porvenir S.A. le entregó la simulación de reconocimiento pensional en el RAIS cuyo resultado arrojó mesada de \$940.418, que resulta bastante desfavorable comparada con la que le hubiese correspondido en el RPM. **4) Que** formuló ante las administradoras de pensiones convocadas a juicio petición de nulidad del traslado de régimen sin éxito alguno.

CONTESTACIONES DE LA DEMANDA: **La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones-** se opuso a lo pretendido con excepción de los pedidos subsidiarios en tanto se encuentra dirigidos en forma exclusiva contra los fondos privados. Admitió como ciertos los hechos relacionados con la edad de la actora y la reclamación administrativa elevada. Argumentó que ésta se afilió al régimen de ahorro individual de forma voluntaria. Señaló que son circunstancias fácticas y jurídicas ajenas de las cuales desconoce su veracidad y de la que no existe fundamento que permita la declaratoria de nulidad. Propuso las excepciones que denominó: buena fe, inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, prescripción, cobro de lo no debido y falta de presupuestos legales para su reclamación, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social, juicio de proporcionalidad y ponderación, imposibilidad de materializar los efectos de la ineficacia cuando

el demandante ya tiene una situación jurídica consolidada o adquirió el estatus de pensionado en el régimen de ahorro individual, e innominada.

Igualmente **Protección** se muestra en contra de las peticiones. Admitió la edad de la accionante y su traslado efectuado ante el fondo, aspecto sobre el que explicó, se hizo de conformidad con la normatividad vigente en ese momento, por lo tanto, no hay lugar a decretar la nulidad en los términos solicitados, ni a acceder a las demás súplicas. Más, afirma, cuando el término previsto para este tipo de reclamos se encuentra afectado por el fenómeno extintivo de la prescripción. Sobre los demás factuales dijo que no son ciertos. Fundada en las mismas razones, resistió las pretensiones de pago de pensión de vejez. Propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver el seguro provisional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y la genérica.

Porvenir S.A. también se resistió a las súplicas. Dijo no constarle ninguno de los hechos. Adujo que el demandante no señaló ni demostró cuál fue el error en el que se incurrió para poder determinar si hay lugar a la anulación de su consentimiento, máxime cuando, dice, obra formulario de vinculación o traslado suscrito por el mismo, bajo la gravedad del juramento en donde deja constancia que su decisión la ha tomado de manera libre, espontánea y sin presiones, lo que despeja cualquier duda acerca de la presencia de vicio alguno de la voluntad. Aduce que el petente se halla inmerso en la causal fáctica de prohibición legal de traslado. Dice que resulta improcedente el que una AFP del régimen de ahorro individual reconozca una pensión en las condiciones dispuestas por el legislador para el RPM, porque dice, se trata de modalidades excluyentes con regulación propia y de obligatoria observancia. Propuso las excepciones que denominó inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, e innominada.

Por su parte, la Agencia Nacional del Estado no dio contestación de la demanda.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta el 10 de diciembre de 2021, resolvió declarar la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual que la accionante surtió con las AFP Protección y Porvenir S.A. Condenó a éste último fondo *-donde se encuentran los recursos perseguidos-* a devolver a Colpensiones, en el término impostergable de un mes, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación de aquélla, como cotizaciones, bonos pensionales, todos los frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C. con los rendimientos que se hubieren causado, sin descuento alguno. Del mismo modo ordenó a la administradora del RPM que una vez cumplido lo anterior, acepte el traslado de la accionante del RAIS al régimen que ésta administra. Gravó en costas a las enjuiciadas.

Consideró como premisas la obligación que tienen los fondos de pensiones de proporcionar a los posibles usuarios y afiliados una información completa clara, oportuna y comprensible la cual es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993. Dice que verificado el acervo probatorio las encartadas de naturaleza privada, no cumplieron con esa carga, pues, no obra en el plenario prueba alguna de la correcta y completa asesoría dada al demandante, ni siquiera documental que acredite que se le haya informado sobre los beneficios de trasladarse de régimen y, mucho menos de sus desventajas.

RECURSOS DE APELACIÓN: **Porvenir S.A.** busca dejar sin efectos la sentencia. Manifestó que aun cuando la ineficacia tiene como propósito central el retrotraer los efectos del acto jurídico como si nunca hubieren existido, tal propósito tiene excepciones, como asegura, lo son, los hechos consumados como acontece en el sub lite, donde el fondo prestó sus servicios, administró los aportes y generó rendimientos. Pide que, de no acogerse tal argumento, se reconsidere la orden de restitución de frutos y rendimientos porque dice, su producción generó gastos a la AFP que la misma ley reconoce como

comisiones de administración por la gestión de los aportes; igual que afirma, sucede, con el seguro provisional aplicado a la cuenta de ahorro individual que se efectúa en favor de un tercero de buena fe ajeno al proceso. Circunstancia que asevera, contraría lo preceptuado por el inciso final del artículo 964 del Código Civil.

Discute que ningún detrimento de la cuenta del afiliado se puede reputar porque arguye, los rendimientos generados por el RAIS siempre serán superiores a los del RPM en tanto que éste último es un fondo común que no garantiza siquiera la rentabilidad mínima que las AFP están obligadas a reconocer incluso con su propio patrimonio. Y que, el acogimiento de las pretensiones representa una merma contraria a derecho del patrimonio del fondo privado y el aumento injustificado del perteneciente al RPM y la afiliada.

Protección eleva petición de revocatoria. Arguye que dio cumplimiento a la normatividad exigida para perfeccionar el traslado de regímenes, cual era, la suscripción del formulario (artículo 11 Decreto 692 de 1994), y porque la obligación de dejar registrado el escrito de información al igual que la asesoría y re asesoría, nació en 2014 y 2015 (Ley 1748 de 2014 y Decreto 2071 de 2015). Discrepa de la orden de devolución conjuntamente las comisiones y rendimientos porque se trata de prestaciones ya acaecidas que emanan de la buena gestión desplegada por el fondo. Menos, el seguro previsual en tanto afirma se trata de un concepto girado en favor de un tercero de buena fe, como lo es la aseguradora correspondiente.

Colpensiones también aspira a que se revoque la decisión. Manifestó que no es posible aceptar el traslado de la demandante a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó literal e), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, al establecer que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 10 años o menos para adquirir la pensión de vejez; evento que satisface la activa al encontrarse en el rango de edad prescrito. En cuanto a la ineficacia del traslado, indica que no es viable, en la medida que la

suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, ya que, se realizó ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su artículo 48, sin que se observen vicios en el consentimiento. Asevera que a partir del acto de traslado, el afiliado contaba con la carga ineludible de ejercer diligencia y cuidado en los casi 20 años que se mantuvo en el RAIS, pudiendo haber probado que realizó actos tendientes a mejorar su situación pensional, lo que no ocurrió, al contrario, se convalidó la permanencia con los traslados entre AFP de dicho régimen. Añade que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: La activa se ratificó en lo propuesto en el libelo introductor, solicitando mantener incólume el fallo apelado, resaltando que la aparente decisión libre y voluntaria no estuvo precedida de la suficiente ilustración por parte del fondo que lo recibió en el RAIS, por lo que en entendimiento de la jurisprudencia, no existe tal consentimiento de libertad y voluntariedad, que se traduce en la ineficacia del acto jurídico de traslado, en tanto que los fondos, siendo su ineludible carga, omitieron acreditar la veracidad de sus dichos.

Porvenir S.A. y Protección replicaron los argumentos expuestos en la apelación elevada ante el juez *a-quo*.

Colpensiones, pese a hallarse debidamente enterada del traslado concedido, omitieron presentar alegaciones finales.

3o. CONSIDERACIONES

Deberá establecerse si el traslado de la petente del régimen de prima con prestación definida al régimen de ahorro individual, primero ante Protección y luego a Porvenir S.A., adolece o no del consentimiento informado de aquélla. En ese orden, se verificará también, si resulta viable o no que las encartadas del RAIS restituyan lo descontado por concepto de gastos de administración,

comisiones y primas. Asimismo, si la condena en costas resulta ajustada a derecho.

De la ineficacia del traslado.

A la luz del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, una de las características del sistema general de pensiones es la **selección libre y voluntaria** del régimen pensional por parte de los afiliados. Por eso, cuando de traslados del RPM al RAIS se trata, para que esa determinación contenga las condiciones de la disposición referida, es decir, para poder predicar la libertad y voluntariedad en ello, previamente, los ciudadanos deben recibir de los fondos la información completa respecto a lo que arriesgan con tal actuar.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencias SL1688, SL1689, SL3463 y SL4360 de 2019 de manera reiterada ha considerado que, ante el incumplimiento del deber de información de las administradoras pensionales, quienes se encuentran obligadas a suministrarla de manera clara cierta, comprensible y oportuna sobre las características, condiciones, beneficios, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, lo procedente es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, sentando como regla jurisprudencial en sus pronunciamientos, que no es un deber que opere únicamente para los afiliados que tengan un derecho consolidado, un beneficio transicional o expectativa legítima de pensionarse sino que es predicable en todos los eventos, comoquiera que el deber de información se erige como presupuesto de eficacia del acto jurídico de traslado, correspondiéndoles a aquellas acreditar que cumplieron con ese deber de suministrar información suficiente.

El tribunal de cierre como respaldo a esta regla general que creó en estas decisiones judiciales, argumentó que ese deber de información de las administradoras pensionales existe y es exigible desde la creación de la ley 100 de 1993, mismo que con el transcurrir del tiempo evolucionó para acumular más obligaciones a cargo de las AFP.

Así, identificó la Corte dentro del desarrollo normativo de ese deber de información tres momentos. Inicialmente encontró sustento en el literal b del Art. 13 de la ley 100 de 1993, en cuanto dispuso que la escogencia del régimen pensional por parte de los trabajadores es libre y voluntaria y presuponía el conocimiento a plenitud de las consecuencias de su decisión de traslado. Para ello dice, era necesario que se les describieran al potencial afiliado al momento de asesorarlo, las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales; de tal suerte que éste conociera las ventajas y las desventajas de cada uno, inclusive, las consecuencias jurídicas del traslado.

Posteriormente con la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010, se estableció la obligación de asesoría y buen consejo de las administradoras, elevando así el nivel de exigencia en el deber de información, que desde ese momento implicaba el estudio de los antecedentes del afiliado tales como edad, semanas de cotización ingresos bases de cotización entre otra; así como su expectativa pensional, de modo que el afiliado conociera tanto de las características objetivas de los regímenes como de su situación individual. Esto acompañado de la opinión que sobre el asunto tuviere el representante de la administradora. Lo dicho comportaba un asesoramiento de personas expertas en la materia que le permitieran al trabajador tomar una decisión responsable.

Como tercer estadio, se tiene que mediante la Ley 1749 de 2014, el Decreto 2071 de 2015 y la circular externa No. 16 de 2016 de la Superfinanciera, se reglamentó el derecho del afiliado a obtener información de parte de los asesores de ambos regímenes como condición previa para la procedencia de traslado entre los mismos. Se implementó entonces la denominada doble asesoría que le permitiera formar su juicio imparcial y objetivo sobre características, debilidades, condiciones y ejemplos jurídicos de cada uno de los regímenes pensionales.

La Sala de Casación Laboral aclaró en esos pronunciamientos, que el simple consentimiento vertido en los formatos del traslado de régimen pre impresos

por las administradoras pensionales, no daban por demostrado el deber de información frente al afiliado, ya que, si bien acreditaban un consentimiento, lo cierto que no probaban que este hubiere sido informado.

De esta manera, siendo los fondos privados quienes tienen a cargo la obligación de asesorar a los futuros afiliados en los términos indicados, y cuentan con los medios técnicos y con los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, son éstos, los que en el proceso judicial deben acreditar que la información dada al cotizante satisface las exigencias legales, para establecer así la existencia o no de error en la voluntad del afiliado. Es decir, hay una inversión de la carga de la prueba, determinada por la mejor posición para probar de las AFP. Luego, estas entidades deben detallar plena y fehacientemente a quienes pretendan pertenecer al sistema de ahorro individual **(i)** las diferencias en cada uno de los sistemas pensionales, **(ii)** las proyecciones de la mesada por vejez que podrían recibir tanto en el RAIS como en el RPM, y **(iii)** las implicaciones y la conveniencia de optar por uno u otro régimen pensional, debiendo incluso llegar a desanimarlos en el evento de evidenciar que el traslado perjudique su futura prestación.

Así, la posibilidad de desvirtuar la declaración de ineficacia del acto de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad en el sub lite, está en cabeza de las AFP Protección y Porvenir S.A., al argumentar la demandante que se omitió información a la hora de trasladarse. Atendiendo entonces, la carga de la prueba mencionada, se hace necesario verificar si el consentimiento que dio Ledy Yaneth Carreño Cárdenas para hacer efectivas las mutaciones de régimen pensional, fue informado, es decir, si las AFP codemandadas cumplieron o no con su deber legal de información a partir del precedente judicial de la alta corporación en la especialidad y, de acuerdo con el momento histórico en el que debía cumplirse.

Se tiene que la actora suscribió dos formularios de afiliación al RAIS: el 1º de mayo de 1996 ante Protección, el 27 de marzo de 2002 hacia Porvenir S.A. Espacios temporales en los que conforme a la evolución normativa del deber

de información que identificó la Sala de Casación en las sentencias mencionadas, le correspondía a las AFP ilustrar sobre las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales. En ese orden y ante la afirmación del extremo actor de que ninguna de las encartadas le suministró información suficiente y completa sobre aquellos aspectos, le correspondía a éstas desvirtuar este aserto, aportando los elementos de prueba que condujeran a la certeza de que dieron cumplimiento a esta obligación y que en efecto, permitieron al accionante sopesara la conveniencia o no de permanecer en el régimen de prima media o cambiarse al de ahorro individual.

No obstante, ninguna probanza en tal sentido se arrimó, más allá de los mismos formularios de afiliación, que en todo caso a nada conducen para ese propósito, pues, el que se hubiere insertado al lado de la rúbrica de Ledy Yaneth Carreño Cárdenas de la anotación: “*hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la he efectuado en forma libre, espontánea y sin presiones(...)*”, como lo señala el órgano cúspide, si bien denota un consentimiento, no se verifica con ello que hubiese sido informado.

No asumieron entonces Protección ni Porvenir S.A. la carga de desvirtuar, como les correspondía los hechos aducidos por la deprecante como sustento de su pretensión, demostrando para ello lo contrario, esto es, que cumplieron con su deber de información, toda vez que, no bastaba con que señalaran en sus contestaciones de demanda que sí brindaron la asesoría en donde le explicaron en concreto, características, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, sin arrimar medio de convicción alguno. Téngase presente que afirmar no es probar. Debieron haber desplegado un importante esfuerzo probatorio para demostrar las aseveraciones que en tal sentido efectuaron. Lo cual no ocurrió.

En conclusión, los fondos de pensiones convocados a juicio, se sustrajeron al momento de suscribirse los distintos formularios de traslado y en perjuicio del demandante, de suministrar información relevante con la finalidad de

promover su cambio de régimen, es decir faltaron a su deber de ilustrar sobre las características, condiciones, efectos y riesgos de cada uno de ellos. No se puede predicar que existió una decisión informada precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, siendo que tal es un presupuesto de eficacia jurídica de tal acto.

No resulta de recibo en consecuencia, el dicho de Colpensiones sobre la imposibilidad del traslado luego que le faltaren menos de 10 años al afiliado para alcanzar la edad, ya que, de que se trata es de la ineficacia de un acto, valga decir, de la inexistencia del mismo (traslado). Igual suerte corre la afirmación de que la suscripción del formulario para lograr el traslado al RAIS tiene plena validez, al realizarse ejerciendo el derecho a la libre elección en los términos del artículo 13 literal b de la Ley 100 de 1993 y la Ley 1328 de 2009 en su art 48, habida cuenta de que, como ha quedado establecido, si bien pudo existir un consentimiento el mismo no fue informado como lo demanda la jurisprudencia respectiva. Tampoco puede aceptarse que el traslado perseguido supone una descapitalización del fondo común del RPM y directa afectación de los demás afiliados porque ningún medio de convicción se arrió sobre ello.

También se desestima la afirmación de Porvenir S.A. sobre que la existencia de cualquier falencia fue superada con la permanencia por espacio temporal considerable en el RAIS, ya que, la actuación irregular de traslado del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual, no se convalida por la fidelidad dentro de este último régimen. Ciertamente, la decisión de permanecer en una y otra administradora de ahorro individual o incluso efectuar traslados entre éstas, no implica la ratificación de la decisión de cambio de régimen que conlleva a modificar sensiblemente el contenido de los derechos prestacionales.

Y es que si bien la demandante se vinculó primero a Protección y posteriormente a Porvenir S.A., no de ello puede inferirse que la afiliada

conocía todos los elementos ya referidos para concluir que tales brindaron la información pertinente, transparente y legal.

Nótese que solo se aportó como prueba del cumplimiento del deber de información, los formatos de vinculación, que precisamente se trata de pre-impresos que no detallan el estudio de las circunstancias particulares del demandante que en cumplimiento del deber legal debieron analizarse.

Suficiente lo expuesto para confirmar la decisión del *A-Quo* en lo que se refiere a la declaratoria de ineficacia del acto de traslado que hizo el actor del régimen de prima media al RAIS.

Al determinarse que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz por no cumplir en su momento la AFP Protección, ni en su oportunidad Porvenir S.A., con el deber de información, deberá ésta como última administradora del RAIS que cuenta con los aportes de Ledy Yaneth Carreño Cárdenas, devolver todas las prestaciones que de la afiliada hubiera recibido, garantizando las situaciones consolidadas, es decir, las cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses, con los rendimientos que se hubieran causado y los gastos de representación, en virtud del regreso automático al Régimen de Prima Media con Prestación Definida de Colpensiones, como lo dispone el artículo 1746 del C.C.

En lo que tiene que ver con los gastos de administración, seguro previsional y los frutos, las consecuencias o efectos jurídicos que genera la declaración de la ineficacia de la afiliación de la demandante al sistema pensional de ahorro individual, son que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, realice la devolución de los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración a Colpensiones tal como fue señalado en la sentencia SL17595 del 2017 proferida por la CSJ en su Sala de Casación Laboral donde se rememoró la de radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008, que señaló : *“Como la nulidad fue una conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado,*

esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de la mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiera incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C...”

Y, como la irregularidad en el acto objeto de debate, se itera fue por conducta indebida de las administradoras privadas, éstas también deben asumir los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

A partir de lo anterior, no tienen acogida las afirmaciones de las codemandadas pertenecientes al RAIS, de que lo único procedente es la devolución de los aportes de la cuenta individual y no los gastos de administración y primas, que si bien es cierto dicen, ingresan a su patrimonio son para remunerar y cubrir los costos y gastos en que incurrieron para tal fin y que de hacerse, originaría su empobrecimiento injustificado, porque como ha quedado elucidado, las irregularidades presentadas en el acto de traslado les son totalmente achacables, debiendo asumir las mermas sufridas por el capital aportado, destinadas a los gastos de administración y primas.

Se advierte que, contrario a lo reflexionado por el funcionario judicial de primer grado, por tales rubros han de responder conjuntamente ambas AFP y de cara a los periodos en que se gestó la afiliación de la demandante. Dado que tal como lo señaló el órgano de cúspide de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral en la sentencia hito proferida sobre tal tópico (radicado 31989 del 8 de septiembre de 2008), más allá de que la omisión en el suministro de información se configuró a partir del acto primigenio del traslado perfeccionado ante Protección, al mantenerse dicha conducta en el movimiento perpetrado ante Porvenir S.A., corresponde a cada fondo responder por los deterioros sufridos por el capital de la cuenta de ahorro

individual de cara al espacio temporal en que se mantuvo el vínculo pensional. Esto impone e modificar el apartado de la providencia apelada a fin de extender la orden de pago a las codemandadas de naturaleza privada.

Consulta.

En lo que toca con la prescripción de la acción para deprecar la ineficacia del traslado, debe precisarse que, al tratarse de una controversia de índole pensional estrechamente asociada al derecho fundamental de la seguridad social, su exigibilidad puede darse en cualquier momento en aras de obtener su integro reconocimiento. Así lo ha estimado la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencias SL 1689-2019 y SL1421-2019, *“la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible, en tanto se trata de una pretensión meramente declarativa y por cuanto los derechos que nacen de aquella tienen igual connotación, pues, se reitera, forman parte del derecho irrenunciable a la seguridad social, calidad que implica al menos dos cosas: (i) no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por parte de su titular (inalienable e indisponible), (ii) como tampoco puede extinguirse por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable).”*.

Condena en costas a Colpensiones en primer grado.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las costas, orientado a que éstas sean cubiertas por la parte que pierde el litigio. Como las pretensiones prosperaron en este juicio, habiéndose opuesto a ello la AFP del RPM no cabe duda que debe ser condenada al pago de las costas del proceso en primera instancia.

En síntesis, como no se encontró que el cambio de sistema pensional se hubiere celebrado con el cumplimiento del deber de información, resulta ajustada a derecho la intelección que, frente a dicho tópico, efectuó la juez de primera instancia, siendo ineludible la confirmación de dicha decisión. Se modificará el numeral segundo de la sentencia a fin de precisar que compete a

Protección y Porvenir S.A., reintegrar de las sumas descontadas a la actora a título de gastos de administración, seguro previsional y demás.

Por último, con fundamento en el aludido artículo 365 del CGP, se condenará en costas a Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección, por cuanto sus apelaciones resultaron imprósperas. Se fijarán como agencias en derecho a cargo de cada una \$400.000. Monto acorde con el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia del 10 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cúcuta en el sentido de precisar que compete a Protección y Porvenir S.A., reintegrar las sumas descontadas a la actora a título de gastos de administración, seguro previsional y demás.

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la decisión apelada y consultada.

TERCERO.- CONDENAR en costas Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección. Inclúyanse como agencias en derecho de la alzada la suma de \$400.000 a cargo de cada una de ellas. Líquidense de manera concentrada por el despacho de origen.

NOTIFÍQUESE.

Los Magistrados,



ELVER NARANJO

Nidia Belén Quintero G.

Nidiam Belén Quintero Gélves



José Andrés Serrano Mendoza

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

PROCESO:	PROCESO ORDINARIO
RADICADO ÚNICO:	54-001-31-05-001-2016-00090-01 -P.T. 18.795
DEMANDANTE:	INOCENCIO COGOLLO ZARATE Y OTROS
DEMANDADO:	TERMOTASAJERO S.A. E.S.P.

MAGISTRADA SUSTANCIADORA:
DR. NIDIAM BÉLEN QUINTERO GELVES

En término oportuno dentro del proceso ordinario seguido por INOCENCIO COGOLLOS ZARATE, JOSÉ ALIRIO CÁRDENAS RICO, EZEQUIEL ALBERTO BENITEZ ROMERO, JOSUÉ ANTONIO OSORIO CANO, JULIO CESAR FLÓREZ ROJAS, JAIRO ENRIQUE JÁCOME RAMÓREZ, JAIME EFRAÍN HERNÁNDEZ DELGADO, NELSON GUILLERMO LARIOS RODRÍGUEZ, RUBEN DARÍO BAUTISTA RAMÍREZ, PEDRO JOSÉ GÓMEZ MARICALES, HENRU GERMÁN JIMÉNEZ, JORGE OMAR PÉREZ CASADIEGO, CIRO ALFONSO CARRILLO MORENO y VÍCTOR FERNANDO PABÓN RINCÓN contra TERMOTASAJERO S.A. E.S.P., el apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Sala en el proceso de la referencia.

La Ley Procesal Laboral establece que la cuantía para la viabilidad del recurso de casación, debe ser superior a los ciento veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para el año 2021 equivalía a \$908.526 y por ende el interés para casación asciende a \$ 109.023.120.

A su vez la H. Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el valor del interés para recurrir en casación de la parte demandante, si el juez colegiado confirma íntegramente la absolución dispuesta por el A quo, no será otro que el valor de las peticiones impetradas en el escrito inaugural del proceso y que a la postre, desde luego, les fueron negadas con la sentencia recurrida.

En este caso, lo pretendido principalmente por el actor era que se reliquidara la pensión de jubilación reconocida por la demandada a partir de la indexación de su primera mesada, se ordene el pago de las diferencias a que haya lugar desde la fecha de reconocimiento y el pago de intereses moratorios.

Al resolver las decisiones de instancia, se resolvió que siguiendo la fórmula e indicaciones ordinarias de la indexación de primera mesada no había lugar a reajuste alguno; sin embargo, en el curso del proceso el apoderado de los actores alegó que el cálculo demandado era diferente y para ejemplificar aportó una serie de liquidaciones para estimar el valor que estima debía reajustarse, de la siguiente manera:

Nº	DEMANDANTES	Valor de mesada reajustada	Diferencia	Fecha de causación	Interés para recurrir
1.	INOCENCIO COGOLLOS ZARATE	\$2.576.361,36	\$172.549,36	1/02/2009	\$82.362.569,25
2.	JOSÉ ALIRIO CÁRDENAS RICO	\$1.262.487,72	\$60.212,72	17/05/2005	\$50.526.618,07
3.	EZEQUIEL ALBERTO BENITEZ ROMERO	\$3.028.386,89	\$175.207,89	15/04/2009	\$82.108.424,62
4.	JOSUÉ ANTONIO OSORIO CANO	\$3.030.287,45	\$184.058,45	25/03/2009	\$86.256.099,76
5.	JULIO CESAR FLÓREZ ROJAS	\$1.461.363,42	\$79.854,42	17/04/2007	\$52.106.651,77
6.	JAIRO ENRIQUE JÁCOME RAMÍREZ	\$2.954.460,16	\$165.285,16	11/04/2008	\$92.856.279,04
7.	JAIME EFRAÍN HERNÁNDEZ DELGADO	\$2.070.503,36	\$119.789,36	16/04/2009	\$56.616.558,62
8.	NELSON GUILLERMO LARIOS RODRÍGUEZ	\$1.451.638,13	\$65.489,13	01/09/2006	\$47.008.578,76
9.	RUBEN DARÍO BAUTISTA RAMÍREZ	\$2.542.403,58	\$44.660,58	06/04/2010	\$18.279.088,24
10.	PEDRO JOSÉ GÓMEZ MARICALES	\$2.315.010,61	\$129.511,61	01/04/2008	\$71.073.515,53
11.	HENRY GERMÁN JIMÉNEZ	\$1.871.708,72	\$109.709,72	30/06/2007	\$70.127.549,91
12.	JORGE OMAR PÉREZ CASADIEGO	\$1.498.108,18	\$71.834,18	10/06/2005	\$60.066.829,93
13.	CIRO ALFONSO CARRILLO MORENO	\$2.735.406,42	\$106.179,42	1/06/2006	\$78.115.758,73
14.	VÍCTOR FERNANDO PABÓN RINCÓN	\$2.477.954,12	\$141.007,12	1/07/2007	\$90.661.863,88

*En ningún caso se evidencia información suficiente en el plenario para estimar incidencia futura.

La Sala, conforme a los cálculos realizados para cada demandante, considera que no es procedente conceder el recurso de casación

interpuesto por el apoderado de la parte demandante dado que las pretensiones de ninguno de los actores superan el límite para recurrir en casación.

Por lo expuesto la Sala Laboral de Decisión del Tribunal Superior,

R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el recurso extraordinario de Casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante respecto de INOCENCIO COGOLLOS ZARATE, JOSÉ ALIRIO CÁRDENAS RICO, EZEQUIEL ALBERTO BENITEZ ROMERO, JOSUÉ ANTONIO OSORIO CANO, JULIO CESAR FLÓREZ ROJAS, JAIRO ENRIQUE JÁCOME RAMÓREZ, JAIME EFRAÍN HERNÁNDEZ DELGADO, NELSON GUILLERMO LARIOS RODRÍGUEZ, RUBEN DARÍO BAUTISTA RAMÍREZ, PEDRO JOSÉ GÓMEZ MARICALES, HENRU GERMÁN JIMÉNEZ, JORGE OMAR PÉREZ CASADIEGO, CIRO ALFONSO CARRILLO MORENO y VÍCTOR FERNANDO PABÓN RINCÓN, contra la sentencia dictada el día veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021), dentro del proceso de la referencia.

SEGUNDO: Ejecutoriado el presente auto, remítase el expediente a la mencionada Superioridad, dejándose las debidas constancias de su salida.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



**NIDIAM BELEN QUINTERO GELVEZ
MAGISTRADA**



MAGISTRADO



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034 fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8
a.m. Cúcuta, 1 de abril de 2022



Secretario

ANEXO – LIQUIDACIONES

1. INOCENCIO COGOLLOS ZARATE

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 172.549,36	2,00%	13	\$ 2.243.141,68
2010	\$ 176.000,35	3,17%	14	\$ 2.464.004,86
2011	\$ 181.579,56	3,73%	14	\$ 2.542.113,81
2012	\$ 188.352,48	2,44%	14	\$ 2.636.934,66
2013	\$ 192.948,28	1,94%	14	\$ 2.701.275,87
2014	\$ 196.691,47	3,66%	14	\$ 2.753.680,62
2015	\$ 203.890,38	6,77%	14	\$ 2.854.465,33
2016	\$ 217.693,76	5,75%	14	\$ 3.047.712,63
2017	\$ 230.211,15	4,09%	14	\$ 3.222.956,11
2018	\$ 239.626,79	3,18%	14	\$ 3.354.775,01
2019	\$ 247.246,92	3,80%	14	\$ 3.461.456,86
2020	\$ 256.642,30	1,61%	14	\$ 3.592.992,22
2021	\$ 260.774,24		4	\$ 521.548,48
				\$ 35.397.058,14

LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE MORA EN PENSIONES		
	AÑO	MES
Liquidado <i>HASTA</i> :	2021	02
Liquidado <i>DESDE</i> :	2009	02
Tasa máxima de interés moratorio vigente al momento de efectuarse el pago: (Art. 141 de la Ley 100 de 1993).		1,97%

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	01		1,97%	146	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	02	\$ 172.549	1,97%	145	\$ 492.887,25	\$ 492.887,25
2009	03	\$ 172.549	1,97%	144	\$ 489.488,02	\$ 982.375,27
2009	04	\$ 172.549	1,97%	143	\$ 486.088,80	\$ 1.468.464,07

2009	05	\$ 172.549	1,97%	142	\$ 482.689,58	\$ 1.951.153,65
2009	06	\$ 172.549	1,97%	141	\$ 479.290,36	\$ 2.430.444,01
2009	M13	\$ 172.549	1,97%	141	\$ 479.290,36	\$ 2.909.734,37
2009	07	\$ 172.549	1,97%	140	\$ 475.891,13	\$ 3.385.625,50
2009	08	\$ 172.549	1,97%	139	\$ 472.491,91	\$ 3.858.117,41
2009	09	\$ 172.549	1,97%	138	\$ 469.092,69	\$ 4.327.210,11
2009	10	\$ 172.549	1,97%	137	\$ 465.693,47	\$ 4.792.903,57
2009	11	\$ 172.549	1,97%	136	\$ 462.294,25	\$ 5.255.197,82
2009	12	\$ 172.549	1,97%	135	\$ 458.895,02	\$ 5.714.092,84
2009	M14	\$ 172.549	1,97%	135	\$ 458.895,02	\$ 6.172.987,86
2010	01	\$ 176.000	1,97%	134	\$ 464.605,72	\$ 6.637.593,59
2010	02	\$ 176.000	1,97%	133	\$ 461.138,52	\$ 7.098.732,10
2010	03	\$ 176.000	1,97%	132	\$ 457.671,31	\$ 7.556.403,41
2010	04	\$ 176.000	1,97%	131	\$ 454.204,10	\$ 8.010.607,52
2010	05	\$ 176.000	1,97%	130	\$ 450.736,90	\$ 8.461.344,41
2010	06	\$ 176.000	1,97%	129	\$ 447.269,69	\$ 8.908.614,10
2010	M13	\$ 176.000	1,97%	129	\$ 447.269,69	\$ 9.355.883,79
2010	07	\$ 176.000	1,97%	128	\$ 443.802,48	\$ 9.799.686,28
2010	08	\$ 176.000	1,97%	127	\$ 440.335,28	\$ 10.240.021,55
2010	09	\$ 176.000	1,97%	126	\$ 436.868,07	\$ 10.676.889,62
2010	10	\$ 176.000	1,97%	125	\$ 433.400,86	\$ 11.110.290,48
2010	11	\$ 176.000	1,97%	124	\$ 429.933,65	\$ 11.540.224,14
2010	12	\$ 176.000	1,97%	123	\$ 426.466,45	\$ 11.966.690,59
2010	M14	\$ 176.000	1,97%	123	\$ 426.466,45	\$ 12.393.157,03
2011	01	\$ 181.580	1,97%	122	\$ 436.408,31	\$ 12.829.565,35
2011	02	\$ 181.580	1,97%	121	\$ 432.831,20	\$ 13.262.396,55
2011	03	\$ 181.580	1,97%	120	\$ 429.254,08	\$ 13.691.650,63
2011	04	\$ 181.580	1,97%	119	\$ 425.676,96	\$ 14.117.327,59
2011	05	\$ 181.580	1,97%	118	\$ 422.099,85	\$ 14.539.427,43
2011	06	\$ 181.580	1,97%	117	\$ 418.522,73	\$ 14.957.950,16
2011	M13	\$ 181.580	1,97%	117	\$ 418.522,73	\$ 15.376.472,89
2011	07	\$ 181.580	1,97%	116	\$ 414.945,61	\$ 15.791.418,50
2011	08	\$ 181.580	1,97%	115	\$ 411.368,49	\$ 16.202.786,99
2011	09	\$ 181.580	1,97%	114	\$ 407.791,38	\$ 16.610.578,37
2011	10	\$ 181.580	1,97%	113	\$ 404.214,26	\$ 17.014.792,63
2011	11	\$ 181.580	1,97%	112	\$ 400.637,14	\$ 17.415.429,77
2011	12	\$ 181.580	1,97%	111	\$ 397.060,02	\$ 17.812.489,79
2011	M14	\$ 181.580	1,97%	111	\$ 397.060,02	\$ 18.209.549,82
2012	01	\$ 188.352	1,97%	110	\$ 408.159,82	\$ 18.617.709,64
2012	02	\$ 188.352	1,97%	109	\$ 404.449,28	\$ 19.022.158,92
2012	03	\$ 188.352	1,97%	108	\$ 400.738,74	\$ 19.422.897,66
2012	04	\$ 188.352	1,97%	107	\$ 397.028,19	\$ 19.819.925,85
2012	05	\$ 188.352	1,97%	106	\$ 393.317,65	\$ 20.213.243,50
2012	06	\$ 188.352	1,97%	105	\$ 389.607,10	\$ 20.602.850,60
2012	M13	\$ 188.352	1,97%	105	\$ 389.607,10	\$ 20.992.457,71
2012	07	\$ 188.352	1,97%	104	\$ 385.896,56	\$ 21.378.354,27
2012	08	\$ 188.352	1,97%	103	\$ 382.186,02	\$ 21.760.540,29
2012	09	\$ 188.352	1,97%	102	\$ 378.475,47	\$ 22.139.015,76
2012	10	\$ 188.352	1,97%	101	\$ 374.764,93	\$ 22.513.780,69
2012	11	\$ 188.352	1,97%	100	\$ 371.054,39	\$ 22.884.835,07
2012	12	\$ 188.352	1,97%	99	\$ 367.343,84	\$ 23.252.178,92
2012	M14	\$ 188.352	1,97%	99	\$ 367.343,84	\$ 23.619.522,76
2013	01	\$ 192.948	1,97%	98	\$ 372.505,95	\$ 23.992.028,71
2013	02	\$ 192.948	1,97%	97	\$ 368.704,87	\$ 24.360.733,58
2013	03	\$ 192.948	1,97%	96	\$ 364.903,79	\$ 24.725.637,36
2013	04	\$ 192.948	1,97%	95	\$ 361.102,71	\$ 25.086.740,07
2013	05	\$ 192.948	1,97%	94	\$ 357.301,62	\$ 25.444.041,69
2013	06	\$ 192.948	1,97%	93	\$ 353.500,54	\$ 25.797.542,24
2013	07	\$ 192.948	1,97%	93	\$ 353.500,54	\$ 26.151.042,78
2013	07	\$ 192.948	1,97%	92	\$ 349.699,46	\$ 26.500.742,24
2013	08	\$ 192.948	1,97%	91	\$ 345.898,38	\$ 26.846.640,62
2013	09	\$ 192.948	1,97%	90	\$ 342.097,30	\$ 27.188.737,93
2013	10	\$ 192.948	1,97%	89	\$ 338.296,22	\$ 27.527.034,14

2013	11	\$ 192.948	1,97%	88	\$ 334.495,14	\$ 27.861.529,28
2013	12	\$ 192.948	1,97%	87	\$ 330.694,06	\$ 28.192.223,34
2013	M14	\$ 192.948	1,97%	87	\$ 330.694,06	\$ 28.522.917,40
2014	01	\$ 196.691	1,97%	86	\$ 333.234,69	\$ 28.856.152,09
2014	02	\$ 196.691	1,97%	85	\$ 329.359,87	\$ 29.185.511,95
2014	03	\$ 196.691	1,97%	84	\$ 325.485,04	\$ 29.510.997,00
2014	04	\$ 196.691	1,97%	83	\$ 321.610,22	\$ 29.832.607,22
2014	05	\$ 196.691	1,97%	82	\$ 317.735,40	\$ 30.150.342,62
2014	06	\$ 196.691	1,97%	81	\$ 313.860,58	\$ 30.464.203,20
2014	M13	\$ 196.691	1,97%	81	\$ 313.860,58	\$ 30.778.063,78
2014	07	\$ 196.691	1,97%	80	\$ 309.985,76	\$ 31.088.049,53
2014	08	\$ 196.691	1,97%	79	\$ 306.110,93	\$ 31.394.160,47
2014	09	\$ 196.691	1,97%	78	\$ 302.236,11	\$ 31.696.396,58
2014	10	\$ 196.691	1,97%	77	\$ 298.361,29	\$ 31.994.757,87
2014	11	\$ 196.691	1,97%	76	\$ 294.486,47	\$ 32.289.244,34
2014	12	\$ 196.691	1,97%	75	\$ 290.611,65	\$ 32.579.855,99
2014	M14	\$ 196.691	1,97%	75	\$ 290.611,65	\$ 32.870.467,64
2015	01	\$ 203.890	1,97%	74	\$ 297.231,40	\$ 33.167.699,03
2015	02	\$ 203.890	1,97%	73	\$ 293.214,76	\$ 33.460.913,79
2015	03	\$ 203.890	1,97%	72	\$ 289.198,11	\$ 33.750.111,90
2015	04	\$ 203.890	1,97%	71	\$ 285.181,47	\$ 34.035.293,38
2015	05	\$ 203.890	1,97%	70	\$ 281.164,83	\$ 34.316.458,21
2015	06	\$ 203.890	1,97%	69	\$ 277.148,19	\$ 34.593.606,40
2015	M13	\$ 203.890	1,97%	69	\$ 277.148,19	\$ 34.870.754,60
2015	07	\$ 203.890	1,97%	68	\$ 273.131,55	\$ 35.143.886,15
2015	08	\$ 203.890	1,97%	67	\$ 269.114,91	\$ 35.413.001,06
2015	09	\$ 203.890	1,97%	66	\$ 265.098,27	\$ 35.678.099,33
2015	10	\$ 203.890	1,97%	65	\$ 261.081,63	\$ 35.939.180,97
2015	11	\$ 203.890	1,97%	64	\$ 257.064,99	\$ 36.196.245,96
2015	12	\$ 203.890	1,97%	63	\$ 253.048,35	\$ 36.449.294,31
2015	M14	\$ 203.890	1,97%	63	\$ 253.048,35	\$ 36.702.342,66
2016	01	\$ 217.694	1,97%	62	\$ 265.891,16	\$ 36.968.233,82
2016	02	\$ 217.694	1,97%	61	\$ 261.602,59	\$ 37.229.836,41
2016	03	\$ 217.694	1,97%	60	\$ 257.314,02	\$ 37.487.150,43
2016	04	\$ 217.694	1,97%	59	\$ 253.025,46	\$ 37.740.175,89
2016	05	\$ 217.694	1,97%	58	\$ 248.736,89	\$ 37.988.912,78
2016	06	\$ 217.694	1,97%	57	\$ 244.448,32	\$ 38.233.361,10
2016	M13	\$ 217.694	1,97%	57	\$ 244.448,32	\$ 38.477.809,43
2016	07	\$ 217.694	1,97%	56	\$ 240.159,76	\$ 38.717.969,18
2016	08	\$ 217.694	1,97%	55	\$ 235.871,19	\$ 38.953.840,37
2016	09	\$ 217.694	1,97%	54	\$ 231.582,62	\$ 39.185.422,99
2016	10	\$ 217.694	1,97%	53	\$ 227.294,05	\$ 39.412.717,05
2016	11	\$ 217.694	1,97%	52	\$ 223.005,49	\$ 39.635.722,54
2016	12	\$ 217.694	1,97%	51	\$ 218.716,92	\$ 39.854.439,46
2016	M14	\$ 217.694	1,97%	51	\$ 218.716,92	\$ 40.073.156,38
2017	01	\$ 230.211	1,97%	50	\$ 226.757,98	\$ 40.299.914,36
2017	02	\$ 230.211	1,97%	49	\$ 222.222,82	\$ 40.522.137,18
2017	03	\$ 230.211	1,97%	48	\$ 217.687,66	\$ 40.739.824,85
2017	04	\$ 230.211	1,97%	47	\$ 213.152,50	\$ 40.952.977,35
2017	05	\$ 230.211	1,97%	46	\$ 208.617,34	\$ 41.161.594,69
2017	06	\$ 230.211	1,97%	45	\$ 204.082,18	\$ 41.365.676,88
2017	M13	\$ 230.211	1,97%	45	\$ 204.082,18	\$ 41.569.759,06
2017	07	\$ 230.211	1,97%	44	\$ 199.547,02	\$ 41.769.306,09
2017	08	\$ 230.211	1,97%	43	\$ 195.011,87	\$ 41.964.317,95
2017	09	\$ 230.211	1,97%	42	\$ 190.476,71	\$ 42.154.794,66
2017	10	\$ 230.211	1,97%	41	\$ 185.941,55	\$ 42.340.736,20
2017	11	\$ 230.211	1,97%	40	\$ 181.406,39	\$ 42.522.142,59
2017	12	\$ 230.211	1,97%	39	\$ 176.871,23	\$ 42.699.013,82
2017	M14	\$ 230.211	1,97%	39	\$ 176.871,23	\$ 42.875.885,04

2018	01	\$ 239.627	1,97%	38	\$ 179.384,61	\$ 43.055.269,66
2018	02	\$ 239.627	1,97%	37	\$ 174.663,97	\$ 43.229.933,63
2018	03	\$ 239.627	1,97%	36	\$ 169.943,32	\$ 43.399.876,95
2018	04	\$ 239.627	1,97%	35	\$ 165.222,67	\$ 43.565.099,62
2018	05	\$ 239.627	1,97%	34	\$ 160.502,02	\$ 43.725.601,64
2018	06	\$ 239.627	1,97%	33	\$ 155.781,38	\$ 43.881.383,02
2018	M13	\$ 239.627	1,97%	33	\$ 155.781,38	\$ 44.037.164,39
2018	07	\$ 239.627	1,97%	32	\$ 151.060,73	\$ 44.188.225,12
2018	08	\$ 239.627	1,97%	31	\$ 146.340,08	\$ 44.334.565,20
2018	09	\$ 239.627	1,97%	30	\$ 141.619,43	\$ 44.476.184,64
2018	10	\$ 239.627	1,97%	29	\$ 136.898,79	\$ 44.613.083,42
2018	11	\$ 239.627	1,97%	28	\$ 132.178,14	\$ 44.745.261,56
2018	12	\$ 239.627	1,97%	27	\$ 127.457,49	\$ 44.872.719,05
2018	M14	\$ 239.627	1,97%	27	\$ 127.457,49	\$ 45.000.176,54
2019	01	\$ 247.247	1,97%	26	\$ 126.639,87	\$ 45.126.816,41
2019	02	\$ 247.247	1,97%	25	\$ 121.769,11	\$ 45.248.585,52
2019	03	\$ 247.247	1,97%	24	\$ 116.898,34	\$ 45.365.483,86
2019	04	\$ 247.247	1,97%	23	\$ 112.027,58	\$ 45.477.511,44
2019	05	\$ 247.247	1,97%	22	\$ 107.156,82	\$ 45.584.668,26
2019	06	\$ 247.247	1,97%	21	\$ 102.286,05	\$ 45.686.954,31
2019	M13	\$ 247.247	1,97%	21	\$ 102.286,05	\$ 45.789.240,36
2019	07	\$ 247.247	1,97%	20	\$ 97.415,29	\$ 45.886.655,64
2019	08	\$ 247.247	1,97%	19	\$ 92.544,52	\$ 45.979.200,17
2019	09	\$ 247.247	1,97%	18	\$ 87.673,76	\$ 46.066.873,92
2019	10	\$ 247.247	1,97%	17	\$ 82.802,99	\$ 46.149.676,92
2019	11	\$ 247.247	1,97%	16	\$ 77.932,23	\$ 46.227.609,15
2019	12	\$ 247.247	1,97%	15	\$ 73.061,46	\$ 46.300.670,61
2019	M14	\$ 247.247	1,97%	15	\$ 73.061,46	\$ 46.373.732,08
2020	01	\$ 256.642	1,97%	14	\$ 70.781,95	\$ 46.444.514,02
2020	02	\$ 256.642	1,97%	13	\$ 65.726,09	\$ 46.510.240,12
2020	03	\$ 256.642	1,97%	12	\$ 60.670,24	\$ 46.570.910,36
2020	04	\$ 256.642	1,97%	11	\$ 55.614,39	\$ 46.626.524,74
2020	05	\$ 256.642	1,97%	10	\$ 50.558,53	\$ 46.677.083,28
2020	06	\$ 256.642	1,97%	9	\$ 45.502,68	\$ 46.722.585,96
2020	M13	\$ 256.642	1,97%	9	\$ 45.502,68	\$ 46.768.088,63
2020	07	\$ 256.642	1,97%	8	\$ 40.446,83	\$ 46.808.535,46
2020	08	\$ 256.642	1,97%	7	\$ 35.390,97	\$ 46.843.926,43
2020	09	\$ 256.642	1,97%	6	\$ 30.335,12	\$ 46.874.261,55
2020	10	\$ 256.642	1,97%	5	\$ 25.279,27	\$ 46.899.540,82
2020	11	\$ 256.642	1,97%	4	\$ 20.223,41	\$ 46.919.764,23
2020	12	\$ 256.642	1,97%	3	\$ 15.167,56	\$ 46.934.931,79
2020	M14	\$ 256.642	1,97%	3	\$ 15.167,56	\$ 46.950.099,35
2021	01	\$ 260.774	1,97%	2	\$ 10.274,51	\$ 46.960.373,86
2021	02	\$ 260.774	1,97%	1	\$ 5.137,25	\$ 46.965.511,11

Retroactivo: \$35.397.058,14

Intereses de mora: \$46.965.511,11

Total: \$82.362.569,25

2. JOSÉ ALIRIO CÁRDENAS RICO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2005	\$ 60.212,72	4,85%	8,5	\$ 511.808,12
2006	\$ 63.133,04	4,48%	14	\$ 883.862,52
2007	\$ 65.961,40	5,69%	14	\$ 923.459,56
2008	\$ 69.714,60	7,67%	14	\$ 976.004,41

2009	\$ 75.061,71	2,00%	13	\$ 975.802,23
2010	\$ 76.562,94	3,17%	14	\$ 1.071.881,22
2011	\$ 78.989,99	3,73%	14	\$ 1.105.859,86
2012	\$ 81.936,32	2,44%	14	\$ 1.147.108,43
2013	\$ 83.935,56	1,94%	14	\$ 1.175.097,88
2014	\$ 85.563,91	3,66%	14	\$ 1.197.894,78
2015	\$ 88.695,55	6,77%	14	\$ 1.241.737,72
2016	\$ 94.700,24	5,75%	14	\$ 1.325.803,37
2017	\$ 100.145,50	4,09%	14	\$ 1.402.037,06
2018	\$ 104.241,46	3,18%	14	\$ 1.459.380,38
2019	\$ 107.556,33	3,80%	14	\$ 1.505.788,67
2020	\$ 111.643,47	1,61%	14	\$ 1.563.008,64
2021	\$ 113.440,93		2	\$ 226.881,87
				\$ 18.693.416,72

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2005	05	\$ 60.213	1,97%	190	\$ 225.376,21	\$ 225.376,21
2005	06	\$ 60.213	1,97%	189	\$ 224.190,02	\$ 449.566,23
2005	M13	\$ 60.213	1,97%	189	\$ 224.190,02	\$ 673.756,25
2005	07	\$ 60.213	1,97%	188	\$ 223.003,83	\$ 896.760,08
2005	08	\$ 60.213	1,97%	187	\$ 221.817,64	\$ 1.118.577,72
2005	09	\$ 60.213	1,97%	186	\$ 220.631,45	\$ 1.339.209,17
2005	10	\$ 60.213	1,97%	185	\$ 219.445,26	\$ 1.558.654,43
2005	11	\$ 60.213	1,97%	184	\$ 218.259,07	\$ 1.776.913,49
2005	12	\$ 60.213	1,97%	183	\$ 217.072,88	\$ 1.993.986,37
2005	M14	\$ 60.213	1,97%	183	\$ 217.072,88	\$ 2.211.059,25
2006	01	\$ 63.133	1,97%	182	\$ 226.357,20	\$ 2.437.416,45
2006	02	\$ 63.133	1,97%	181	\$ 225.113,48	\$ 2.662.529,93
2006	03	\$ 63.133	1,97%	180	\$ 223.869,76	\$ 2.886.399,69
2006	04	\$ 63.133	1,97%	179	\$ 222.626,04	\$ 3.109.025,73
2006	05	\$ 63.133	1,97%	178	\$ 221.382,32	\$ 3.330.408,05
2006	06	\$ 63.133	1,97%	177	\$ 220.138,60	\$ 3.550.546,64
2006	M13	\$ 63.133	1,97%	177	\$ 220.138,60	\$ 3.770.685,24
2006	07	\$ 63.133	1,97%	176	\$ 218.894,88	\$ 3.989.580,12
2006	08	\$ 63.133	1,97%	175	\$ 217.651,16	\$ 4.207.231,27
2006	09	\$ 63.133	1,97%	174	\$ 216.407,43	\$ 4.423.638,71
2006	10	\$ 63.133	1,97%	173	\$ 215.163,71	\$ 4.638.802,42
2006	11	\$ 63.133	1,97%	172	\$ 213.919,99	\$ 4.852.722,41
2006	12	\$ 63.133	1,97%	171	\$ 212.676,27	\$ 5.065.398,69
2006	M14	\$ 63.133	1,97%	171	\$ 212.676,27	\$ 5.278.074,96
2007	01	\$ 65.961	1,97%	170	\$ 220.904,73	\$ 5.498.979,69
2007	02	\$ 65.961	1,97%	169	\$ 219.605,29	\$ 5.718.584,98
2007	03	\$ 65.961	1,97%	168	\$ 218.305,85	\$ 5.936.890,83
2007	04	\$ 65.961	1,97%	167	\$ 217.006,41	\$ 6.153.897,24
2007	05	\$ 65.961	1,97%	166	\$ 215.706,97	\$ 6.369.604,21
2007	06	\$ 65.961	1,97%	165	\$ 214.407,53	\$ 6.584.011,74
2007	M13	\$ 65.961	1,97%	165	\$ 214.407,53	\$ 6.798.419,27
2007	07	\$ 65.961	1,97%	164	\$ 213.108,09	\$ 7.011.527,36
2007	08	\$ 65.961	1,97%	163	\$ 211.808,65	\$ 7.223.336,01
2007	09	\$ 65.961	1,97%	162	\$ 210.509,21	\$ 7.433.845,22
2007	10	\$ 65.961	1,97%	161	\$ 209.209,77	\$ 7.643.054,99
2007	11	\$ 65.961	1,97%	160	\$ 207.910,33	\$ 7.850.965,33
2007	12	\$ 65.961	1,97%	159	\$ 206.610,89	\$ 8.057.576,22
2007	M14	\$ 65.961	1,97%	159	\$ 206.610,89	\$ 8.264.187,11
2008	01	\$ 69.715	1,97%	158	\$ 216.993,66	\$ 8.481.180,78
2008	02	\$ 69.715	1,97%	157	\$ 215.620,29	\$ 8.696.801,06
2008	03	\$ 69.715	1,97%	156	\$ 214.246,91	\$ 8.911.047,97
2008	04	\$ 69.715	1,97%	155	\$ 212.873,53	\$ 9.123.921,50
2008	05	\$ 69.715	1,97%	154	\$ 211.500,15	\$ 9.335.421,66
2008	06	\$ 69.715	1,97%	153	\$ 210.126,78	\$ 9.545.548,43

2008	M13	\$ 69.715	1,97%	153	\$ 210.126,78	\$ 9.755.675,21
2008	07	\$ 69.715	1,97%	152	\$ 208.753,40	\$ 9.964.428,61
2008	08	\$ 69.715	1,97%	151	\$ 207.380,02	\$ 10.171.808,63
2008	09	\$ 69.715	1,97%	150	\$ 206.006,64	\$ 10.377.815,27
2008	10	\$ 69.715	1,97%	149	\$ 204.633,27	\$ 10.582.448,54
2008	11	\$ 69.715	1,97%	148	\$ 203.259,89	\$ 10.785.708,42
2008	12	\$ 69.715	1,97%	147	\$ 201.886,51	\$ 10.987.594,93
2008	M14	\$ 69.715	1,97%	147	\$ 201.886,51	\$ 11.189.481,44
2009	01	\$ 75.062	1,97%	146	\$ 215.892,49	\$ 11.405.373,93
2009	02	\$ 75.062	1,97%	145	\$ 214.413,77	\$ 11.619.787,71
2009	03	\$ 75.062	1,97%	144	\$ 212.935,06	\$ 11.832.722,77
2009	04	\$ 75.062	1,97%	143	\$ 211.456,34	\$ 12.044.179,11
2009	05	\$ 75.062	1,97%	142	\$ 209.977,63	\$ 12.254.156,74
2009	06	\$ 75.062	1,97%	141	\$ 208.498,91	\$ 12.462.655,65
2009	07	\$ 75.062	1,97%	141	\$ 208.498,91	\$ 12.671.154,56
2009	07	\$ 75.062	1,97%	140	\$ 207.020,20	\$ 12.878.174,76
2009	08	\$ 75.062	1,97%	139	\$ 205.541,48	\$ 13.083.716,24
2009	09	\$ 75.062	1,97%	138	\$ 204.062,76	\$ 13.287.779,00
2009	10	\$ 75.062	1,97%	137	\$ 202.584,05	\$ 13.490.363,05
2009	11	\$ 75.062	1,97%	136	\$ 201.105,33	\$ 13.691.468,39
2009	12	\$ 75.062	1,97%	135	\$ 199.626,62	\$ 13.891.095,00
2009	M14	\$ 75.062	1,97%	135	\$ 199.626,62	\$ 14.090.721,62
2010	01	\$ 76.563	1,97%	134	\$ 202.110,85	\$ 14.292.832,47
2010	02	\$ 76.563	1,97%	133	\$ 200.602,56	\$ 14.493.435,03
2010	03	\$ 76.563	1,97%	132	\$ 199.094,27	\$ 14.692.529,30
2010	04	\$ 76.563	1,97%	131	\$ 197.585,98	\$ 14.890.115,28
2010	05	\$ 76.563	1,97%	130	\$ 196.077,69	\$ 15.086.192,97
2010	06	\$ 76.563	1,97%	129	\$ 194.569,40	\$ 15.280.762,37
2010	M13	\$ 76.563	1,97%	129	\$ 194.569,40	\$ 15.475.331,77
2010	07	\$ 76.563	1,97%	128	\$ 193.061,11	\$ 15.668.392,88
2010	08	\$ 76.563	1,97%	127	\$ 191.552,82	\$ 15.859.945,70
2010	09	\$ 76.563	1,97%	126	\$ 190.044,53	\$ 16.049.990,23
2010	10	\$ 76.563	1,97%	125	\$ 188.536,24	\$ 16.238.526,46
2010	11	\$ 76.563	1,97%	124	\$ 187.027,95	\$ 16.425.554,41
2010	12	\$ 76.563	1,97%	123	\$ 185.519,66	\$ 16.611.074,07
2010	M14	\$ 76.563	1,97%	123	\$ 185.519,66	\$ 16.796.593,73
2011	01	\$ 78.899	1,97%	122	\$ 189.625,83	\$ 16.986.219,57
2011	02	\$ 78.899	1,97%	121	\$ 188.071,52	\$ 17.174.291,09
2011	03	\$ 78.899	1,97%	120	\$ 186.517,21	\$ 17.360.808,30
2011	04	\$ 78.899	1,97%	119	\$ 184.962,90	\$ 17.545.771,20
2011	05	\$ 78.899	1,97%	118	\$ 183.408,59	\$ 17.729.179,80
2011	06	\$ 78.899	1,97%	117	\$ 181.854,28	\$ 17.911.034,08
2011	M13	\$ 78.899	1,97%	117	\$ 181.854,28	\$ 18.092.888,36
2011	07	\$ 78.899	1,97%	116	\$ 180.299,97	\$ 18.273.188,33
2011	08	\$ 78.899	1,97%	115	\$ 178.745,66	\$ 18.451.933,99
2011	09	\$ 78.899	1,97%	114	\$ 177.191,35	\$ 18.629.125,35
2011	10	\$ 78.899	1,97%	113	\$ 175.637,04	\$ 18.804.762,39
2011	11	\$ 78.899	1,97%	112	\$ 174.082,73	\$ 18.978.845,12
2011	12	\$ 78.899	1,97%	111	\$ 172.528,42	\$ 19.151.373,54
2011	M14	\$ 78.899	1,97%	111	\$ 172.528,42	\$ 19.323.901,96
2012	01	\$ 81.936	1,97%	110	\$ 177.556,01	\$ 19.501.457,97
2012	02	\$ 81.936	1,97%	109	\$ 175.941,86	\$ 19.677.399,83
2012	03	\$ 81.936	1,97%	108	\$ 174.327,71	\$ 19.851.727,54
2012	04	\$ 81.936	1,97%	107	\$ 172.713,57	\$ 20.024.441,11
2012	05	\$ 81.936	1,97%	106	\$ 171.099,42	\$ 20.195.540,53
2012	06	\$ 81.936	1,97%	105	\$ 169.485,28	\$ 20.365.025,81
2012	M13	\$ 81.936	1,97%	105	\$ 169.485,28	\$ 20.534.511,09
2012	07	\$ 81.936	1,97%	104	\$ 167.871,13	\$ 20.702.382,22
2012	08	\$ 81.936	1,97%	103	\$ 166.256,99	\$ 20.868.639,21
2012	09	\$ 81.936	1,97%	102	\$ 164.642,84	\$ 21.033.282,05

2012	10	\$ 81.936	1,97%	101	\$ 163.028,70	\$ 21.196.310,75
2012	11	\$ 81.936	1,97%	100	\$ 161.414,55	\$ 21.357.725,30
2012	12	\$ 81.936	1,97%	99	\$ 159.800,40	\$ 21.517.525,70
2012	M14	\$ 81.936	1,97%	99	\$ 159.800,40	\$ 21.677.326,11
2013	01	\$ 83.936	1,97%	98	\$ 162.045,99	\$ 21.839.372,10
2013	02	\$ 83.936	1,97%	97	\$ 160.392,46	\$ 21.999.764,56
2013	03	\$ 83.936	1,97%	96	\$ 158.738,93	\$ 22.158.503,49
2013	04	\$ 83.936	1,97%	95	\$ 157.085,40	\$ 22.315.588,89
2013	05	\$ 83.936	1,97%	94	\$ 155.431,87	\$ 22.471.020,76
2013	06	\$ 83.936	1,97%	93	\$ 153.778,34	\$ 22.624.799,10
2013	M13	\$ 83.936	1,97%	93	\$ 153.778,34	\$ 22.778.577,44
2013	07	\$ 83.936	1,97%	92	\$ 152.124,81	\$ 22.930.702,25
2013	08	\$ 83.936	1,97%	91	\$ 150.471,28	\$ 23.081.173,53
2013	09	\$ 83.936	1,97%	90	\$ 148.817,75	\$ 23.229.991,28
2013	10	\$ 83.936	1,97%	89	\$ 147.164,22	\$ 23.377.155,49
2013	11	\$ 83.936	1,97%	88	\$ 145.510,69	\$ 23.522.666,18
2013	12	\$ 83.936	1,97%	87	\$ 143.857,16	\$ 23.666.523,34
2013	M14	\$ 83.936	1,97%	87	\$ 143.857,16	\$ 23.810.380,49
2014	01	\$ 85.564	1,97%	86	\$ 144.962,38	\$ 23.955.342,87
2014	02	\$ 85.564	1,97%	85	\$ 143.276,77	\$ 24.098.619,64
2014	03	\$ 85.564	1,97%	84	\$ 141.591,16	\$ 24.240.210,80
2014	04	\$ 85.564	1,97%	83	\$ 139.905,55	\$ 24.380.116,34
2014	05	\$ 85.564	1,97%	82	\$ 138.219,94	\$ 24.518.336,28
2014	06	\$ 85.564	1,97%	81	\$ 136.534,33	\$ 24.654.870,62
2014	M13	\$ 85.564	1,97%	81	\$ 136.534,33	\$ 24.791.404,95
2014	07	\$ 85.564	1,97%	80	\$ 134.848,72	\$ 24.926.253,67
2014	08	\$ 85.564	1,97%	79	\$ 133.163,11	\$ 25.059.416,78
2014	09	\$ 85.564	1,97%	78	\$ 131.477,50	\$ 25.190.894,29
2014	10	\$ 85.564	1,97%	77	\$ 129.791,90	\$ 25.320.686,18
2014	11	\$ 85.564	1,97%	76	\$ 128.106,29	\$ 25.448.792,47
2014	12	\$ 85.564	1,97%	75	\$ 126.420,68	\$ 25.575.213,14
2014	M14	\$ 85.564	1,97%	75	\$ 126.420,68	\$ 25.701.633,82
2015	01	\$ 88.696	1,97%	74	\$ 129.300,37	\$ 25.830.934,19
2015	02	\$ 88.696	1,97%	73	\$ 127.553,07	\$ 25.958.487,26
2015	03	\$ 88.696	1,97%	72	\$ 125.805,77	\$ 26.084.293,03
2015	04	\$ 88.696	1,97%	71	\$ 124.058,47	\$ 26.208.351,50
2015	05	\$ 88.696	1,97%	70	\$ 122.311,16	\$ 26.330.662,66
2015	06	\$ 88.696	1,97%	69	\$ 120.563,86	\$ 26.451.226,52
2015	M13	\$ 88.696	1,97%	69	\$ 120.563,86	\$ 26.571.790,38
2015	07	\$ 88.696	1,97%	68	\$ 118.816,56	\$ 26.690.606,94
2015	08	\$ 88.696	1,97%	67	\$ 117.069,26	\$ 26.807.676,20
2015	09	\$ 88.696	1,97%	66	\$ 115.321,95	\$ 26.922.998,15
2015	10	\$ 88.696	1,97%	65	\$ 113.574,65	\$ 27.036.572,81
2015	11	\$ 88.696	1,97%	64	\$ 111.827,35	\$ 27.148.400,15
2015	12	\$ 88.696	1,97%	63	\$ 110.080,05	\$ 27.258.480,20
2015	M14	\$ 88.696	1,97%	63	\$ 110.080,05	\$ 27.368.560,25
2016	01	\$ 94.700	1,97%	62	\$ 115.666,87	\$ 27.484.227,12
2016	02	\$ 94.700	1,97%	61	\$ 113.801,28	\$ 27.598.028,40
2016	03	\$ 94.700	1,97%	60	\$ 111.935,68	\$ 27.709.964,08
2016	04	\$ 94.700	1,97%	59	\$ 110.070,09	\$ 27.820.034,17
2016	05	\$ 94.700	1,97%	58	\$ 108.204,49	\$ 27.928.238,67
2016	06	\$ 94.700	1,97%	57	\$ 106.338,90	\$ 28.034.577,57
2016	M13	\$ 94.700	1,97%	57	\$ 106.338,90	\$ 28.140.916,47
2016	07	\$ 94.700	1,97%	56	\$ 104.473,30	\$ 28.245.389,77
2016	08	\$ 94.700	1,97%	55	\$ 102.607,71	\$ 28.347.997,48
2016	09	\$ 94.700	1,97%	54	\$ 100.742,12	\$ 28.448.739,60
2016	10	\$ 94.700	1,97%	53	\$ 98.876,52	\$ 28.547.616,12
2016	11	\$ 94.700	1,97%	52	\$ 97.010,93	\$ 28.644.627,04
2016	12	\$ 94.700	1,97%	51	\$ 95.145,33	\$ 28.739.772,37

2016	M14	\$ 94.700	1,97%	51	\$ 95.145,33	\$ 28.834.917,71
2017	01	\$ 100.146	1,97%	50	\$ 98.643,32	\$ 28.933.561,02
2017	02	\$ 100.146	1,97%	49	\$ 96.670,45	\$ 29.030.231,47
2017	03	\$ 100.146	1,97%	48	\$ 94.697,58	\$ 29.124.929,06
2017	04	\$ 100.146	1,97%	47	\$ 92.724,72	\$ 29.217.653,78
2017	05	\$ 100.146	1,97%	46	\$ 90.751,85	\$ 29.308.405,63
2017	06	\$ 100.146	1,97%	45	\$ 88.778,99	\$ 29.397.184,62
2017	M13	\$ 100.146	1,97%	45	\$ 88.778,99	\$ 29.485.963,60
2017	07	\$ 100.146	1,97%	44	\$ 86.806,12	\$ 29.572.769,72
2017	08	\$ 100.146	1,97%	43	\$ 84.833,25	\$ 29.657.602,97
2017	09	\$ 100.146	1,97%	42	\$ 82.860,39	\$ 29.740.463,36
2017	10	\$ 100.146	1,97%	41	\$ 80.887,52	\$ 29.821.350,88
2017	11	\$ 100.146	1,97%	40	\$ 78.914,65	\$ 29.900.265,53
2017	12	\$ 100.146	1,97%	39	\$ 76.941,79	\$ 29.977.207,32
2017	M14	\$ 100.146	1,97%	39	\$ 76.941,79	\$ 30.054.149,11
2018	01	\$ 104.241	1,97%	38	\$ 78.035,16	\$ 30.132.184,27
2018	02	\$ 104.241	1,97%	37	\$ 75.981,60	\$ 30.208.165,87
2018	03	\$ 104.241	1,97%	36	\$ 73.928,04	\$ 30.282.093,91
2018	04	\$ 104.241	1,97%	35	\$ 71.874,49	\$ 30.353.968,40
2018	05	\$ 104.241	1,97%	34	\$ 69.820,93	\$ 30.423.789,33
2018	06	\$ 104.241	1,97%	33	\$ 67.767,37	\$ 30.491.556,70
2018	M13	\$ 104.241	1,97%	33	\$ 67.767,37	\$ 30.559.324,07
2018	07	\$ 104.241	1,97%	32	\$ 65.713,82	\$ 30.625.037,89
2018	08	\$ 104.241	1,97%	31	\$ 63.660,26	\$ 30.688.698,15
2018	09	\$ 104.241	1,97%	30	\$ 61.606,70	\$ 30.750.304,85
2018	10	\$ 104.241	1,97%	29	\$ 59.553,15	\$ 30.809.858,00
2018	11	\$ 104.241	1,97%	28	\$ 57.499,59	\$ 30.867.357,59
2018	12	\$ 104.241	1,97%	27	\$ 55.446,03	\$ 30.922.803,62
2018	M14	\$ 104.241	1,97%	27	\$ 55.446,03	\$ 30.978.249,65
2019	01	\$ 107.556	1,97%	26	\$ 55.090,35	\$ 31.033.340,00
2019	02	\$ 107.556	1,97%	25	\$ 52.971,49	\$ 31.086.311,50
2019	03	\$ 107.556	1,97%	24	\$ 50.852,63	\$ 31.137.164,13
2019	04	\$ 107.556	1,97%	23	\$ 48.733,77	\$ 31.185.897,90
2019	05	\$ 107.556	1,97%	22	\$ 46.614,91	\$ 31.232.512,82
2019	06	\$ 107.556	1,97%	21	\$ 44.496,05	\$ 31.277.008,87
2019	M13	\$ 107.556	1,97%	21	\$ 44.496,05	\$ 31.321.504,92
2019	07	\$ 107.556	1,97%	20	\$ 42.377,19	\$ 31.363.882,12
2019	08	\$ 107.556	1,97%	19	\$ 40.258,33	\$ 31.404.140,45
2019	09	\$ 107.556	1,97%	18	\$ 38.139,47	\$ 31.442.279,93
2019	10	\$ 107.556	1,97%	17	\$ 36.020,61	\$ 31.478.300,54
2019	11	\$ 107.556	1,97%	16	\$ 33.901,76	\$ 31.512.202,30
2019	12	\$ 107.556	1,97%	15	\$ 31.782,90	\$ 31.543.985,19
2019	M14	\$ 107.556	1,97%	15	\$ 31.782,90	\$ 31.575.768,09
2020	01	\$ 111.643	1,97%	14	\$ 30.791,27	\$ 31.606.559,36
2020	02	\$ 111.643	1,97%	13	\$ 28.591,89	\$ 31.635.151,25
2020	03	\$ 111.643	1,97%	12	\$ 26.392,52	\$ 31.661.543,77
2020	04	\$ 111.643	1,97%	11	\$ 24.193,14	\$ 31.685.736,91
2020	05	\$ 111.643	1,97%	10	\$ 21.993,76	\$ 31.707.730,67
2020	06	\$ 111.643	1,97%	9	\$ 19.794,39	\$ 31.727.525,06
2020	M13	\$ 111.643	1,97%	9	\$ 19.794,39	\$ 31.747.319,44
2020	07	\$ 111.643	1,97%	8	\$ 17.595,01	\$ 31.764.914,46
2020	08	\$ 111.643	1,97%	7	\$ 15.395,63	\$ 31.780.310,09
2020	09	\$ 111.643	1,97%	6	\$ 13.196,26	\$ 31.793.506,35
2020	10	\$ 111.643	1,97%	5	\$ 10.996,88	\$ 31.804.503,23
2020	11	\$ 111.643	1,97%	4	\$ 8.797,51	\$ 31.813.300,73
2020	12	\$ 111.643	1,97%	3	\$ 6.598,13	\$ 31.819.898,86
2020	M14	\$ 111.643	1,97%	3	\$ 6.598,13	\$ 31.826.496,99
2021	01	\$ 113.441	1,97%	2	\$ 4.469,57	\$ 31.830.966,57
2021	02	\$ 113.441	1,97%	1	\$ 2.234,79	\$ 31.833.201,35

Retroactivo: \$18.693.416,72

Intereses de mora: \$31.833.201,35

3. EZEQUIEL ALBERTO BENITEZ ROMERO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 175.207,89	2,00%	10	\$ 1.752.078,90
2010	\$ 178.712,05	3,17%	14	\$ 2.501.968,67
2011	\$ 184.377,22	3,73%	14	\$ 2.581.281,08
2012	\$ 191.254,49	2,44%	14	\$ 2.677.562,86
2013	\$ 195.921,10	1,94%	14	\$ 2.742.895,39
2014	\$ 199.721,97	3,66%	14	\$ 2.796.107,56
2015	\$ 207.031,79	6,77%	14	\$ 2.898.445,10
2016	\$ 221.047,85	5,75%	14	\$ 3.094.669,83
2017	\$ 233.758,10	4,09%	14	\$ 3.272.613,35
2018	\$ 243.318,80	3,18%	14	\$ 3.406.463,24
2019	\$ 251.056,34	3,80%	14	\$ 3.514.788,77
2020	\$ 260.596,48	1,61%	14	\$ 3.648.350,74
2021	\$ 264.792,08		2	\$ 529.584,17
				\$ 35.416.809,66

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	01		1,97%	146	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	02	\$ 0	1,97%	145	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	03	\$ 0	1,97%	144	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	04	\$ 175.208	1,97%	143	\$ 493.578,15	\$ 493.578,15
2009	05	\$ 175.208	1,97%	142	\$ 490.126,55	\$ 983.704,70
2009	06	\$ 175.208	1,97%	141	\$ 486.674,96	\$ 1.470.379,65
2009	M13	\$ 175.208	1,97%	141	\$ 486.674,96	\$ 1.957.054,61
2009	07	\$ 175.208	1,97%	140	\$ 483.223,36	\$ 2.440.277,97
2009	08	\$ 175.208	1,97%	139	\$ 479.771,77	\$ 2.920.049,74
2009	09	\$ 175.208	1,97%	138	\$ 476.320,17	\$ 3.396.369,91
2009	10	\$ 175.208	1,97%	137	\$ 472.868,57	\$ 3.869.238,48
2009	11	\$ 175.208	1,97%	136	\$ 469.416,98	\$ 4.338.655,46
2009	12	\$ 175.208	1,97%	135	\$ 465.965,38	\$ 4.804.620,84
2009	M14	\$ 175.208	1,97%	135	\$ 465.965,38	\$ 5.270.586,23
2010	01	\$ 178.712	1,97%	134	\$ 471.764,07	\$ 5.742.350,30
2010	02	\$ 178.712	1,97%	133	\$ 468.243,44	\$ 6.210.593,74
2010	03	\$ 178.712	1,97%	132	\$ 464.722,81	\$ 6.675.316,55
2010	04	\$ 178.712	1,97%	131	\$ 461.202,19	\$ 7.136.518,74
2010	05	\$ 178.712	1,97%	130	\$ 457.681,56	\$ 7.594.200,30
2010	06	\$ 178.712	1,97%	129	\$ 454.160,93	\$ 8.048.361,23
2010	M13	\$ 178.712	1,97%	129	\$ 454.160,93	\$ 8.502.522,17
2010	07	\$ 178.712	1,97%	128	\$ 450.640,31	\$ 8.953.162,47
2010	08	\$ 178.712	1,97%	127	\$ 447.119,68	\$ 9.400.282,15
2010	09	\$ 178.712	1,97%	126	\$ 443.599,05	\$ 9.843.881,20
2010	10	\$ 178.712	1,97%	125	\$ 440.078,42	\$ 10.283.959,62
2010	11	\$ 178.712	1,97%	124	\$ 436.557,80	\$ 10.720.517,42
2010	12	\$ 178.712	1,97%	123	\$ 433.037,17	\$ 11.153.554,59
2010	M14	\$ 178.712	1,97%	123	\$ 433.037,17	\$ 11.586.591,75
2011	01	\$ 184.377	1,97%	122	\$ 443.132,21	\$ 12.029.723,97
2011	02	\$ 184.377	1,97%	121	\$ 439.499,98	\$ 12.469.223,94
2011	03	\$ 184.377	1,97%	120	\$ 435.867,75	\$ 12.905.091,69
2011	04	\$ 184.377	1,97%	119	\$ 432.235,52	\$ 13.337.327,21
2011	05	\$ 184.377	1,97%	118	\$ 428.603,29	\$ 13.765.930,50
2011	06	\$ 184.377	1,97%	117	\$ 424.971,05	\$ 14.190.901,55

2011	M13	\$ 184.377	1,97%	117	\$ 424.971,05	\$ 14.615.872,60
2011	07	\$ 184.377	1,97%	116	\$ 421.338,82	\$ 15.037.211,43
2011	08	\$ 184.377	1,97%	115	\$ 417.706,59	\$ 15.454.918,02
2011	09	\$ 184.377	1,97%	114	\$ 414.074,36	\$ 15.868.992,38
2011	10	\$ 184.377	1,97%	113	\$ 410.442,13	\$ 16.279.434,51
2011	11	\$ 184.377	1,97%	112	\$ 406.809,90	\$ 16.686.244,41
2011	12	\$ 184.377	1,97%	111	\$ 403.177,67	\$ 17.089.422,07
2011	M14	\$ 184.377	1,97%	111	\$ 403.177,67	\$ 17.492.599,74
2012	01	\$ 191.254	1,97%	110	\$ 414.448,48	\$ 17.907.048,22
2012	02	\$ 191.254	1,97%	109	\$ 410.680,77	\$ 18.317.728,99
2012	03	\$ 191.254	1,97%	108	\$ 406.913,05	\$ 18.724.642,04
2012	04	\$ 191.254	1,97%	107	\$ 403.145,34	\$ 19.127.787,38
2012	05	\$ 191.254	1,97%	106	\$ 399.377,63	\$ 19.527.165,01
2012	06	\$ 191.254	1,97%	105	\$ 395.609,91	\$ 19.922.774,92
2012	M13	\$ 191.254	1,97%	105	\$ 395.609,91	\$ 20.318.384,83
2012	07	\$ 191.254	1,97%	104	\$ 391.842,20	\$ 20.710.227,03
2012	08	\$ 191.254	1,97%	103	\$ 388.074,49	\$ 21.098.301,52
2012	09	\$ 191.254	1,97%	102	\$ 384.306,77	\$ 21.482.608,29
2012	10	\$ 191.254	1,97%	101	\$ 380.539,06	\$ 21.863.147,35
2012	11	\$ 191.254	1,97%	100	\$ 376.771,35	\$ 22.239.918,69
2012	12	\$ 191.254	1,97%	99	\$ 373.003,63	\$ 22.612.922,32
2012	M14	\$ 191.254	1,97%	99	\$ 373.003,63	\$ 22.985.925,96
2013	01	\$ 195.921	1,97%	98	\$ 378.245,28	\$ 23.364.171,23
2013	02	\$ 195.921	1,97%	97	\$ 374.385,63	\$ 23.738.556,86
2013	03	\$ 195.921	1,97%	96	\$ 370.525,98	\$ 24.109.082,85
2013	04	\$ 195.921	1,97%	95	\$ 366.666,34	\$ 24.475.749,18
2013	05	\$ 195.921	1,97%	94	\$ 362.806,69	\$ 24.838.555,88
2013	06	\$ 195.921	1,97%	93	\$ 358.947,05	\$ 25.197.502,92
2013	07	\$ 195.921	1,97%	93	\$ 358.947,05	\$ 25.556.449,97
2013	07	\$ 195.921	1,97%	92	\$ 355.087,40	\$ 25.911.537,37
2013	08	\$ 195.921	1,97%	91	\$ 351.227,76	\$ 26.262.765,13
2013	09	\$ 195.921	1,97%	90	\$ 347.368,11	\$ 26.610.133,24
2013	10	\$ 195.921	1,97%	89	\$ 343.508,46	\$ 26.953.641,70
2013	11	\$ 195.921	1,97%	88	\$ 339.648,82	\$ 27.293.290,52
2013	12	\$ 195.921	1,97%	87	\$ 335.789,17	\$ 27.629.079,70
2013	M14	\$ 195.921	1,97%	87	\$ 335.789,17	\$ 27.964.868,87
2014	01	\$ 199.722	1,97%	86	\$ 338.368,96	\$ 28.303.237,83
2014	02	\$ 199.722	1,97%	85	\$ 334.434,44	\$ 28.637.672,27
2014	03	\$ 199.722	1,97%	84	\$ 330.499,92	\$ 28.968.172,19
2014	04	\$ 199.722	1,97%	83	\$ 326.565,39	\$ 29.294.737,58
2014	05	\$ 199.722	1,97%	82	\$ 322.630,87	\$ 29.617.368,45
2014	06	\$ 199.722	1,97%	81	\$ 318.696,35	\$ 29.936.064,80
2014	M13	\$ 199.722	1,97%	81	\$ 318.696,35	\$ 30.254.761,14
2014	07	\$ 199.722	1,97%	80	\$ 314.761,82	\$ 30.569.522,97
2014	08	\$ 199.722	1,97%	79	\$ 310.827,30	\$ 30.880.350,27
2014	09	\$ 199.722	1,97%	78	\$ 306.892,78	\$ 31.187.243,05
2014	10	\$ 199.722	1,97%	77	\$ 302.958,26	\$ 31.490.201,31
2014	11	\$ 199.722	1,97%	76	\$ 299.023,73	\$ 31.789.225,04
2014	12	\$ 199.722	1,97%	75	\$ 295.089,21	\$ 32.084.314,25
2014	M14	\$ 199.722	1,97%	75	\$ 295.089,21	\$ 32.379.403,46
2015	01	\$ 207.032	1,97%	74	\$ 301.810,94	\$ 32.681.214,41
2015	02	\$ 207.032	1,97%	73	\$ 297.732,42	\$ 32.978.946,82
2015	03	\$ 207.032	1,97%	72	\$ 293.653,89	\$ 33.272.600,71
2015	04	\$ 207.032	1,97%	71	\$ 289.575,36	\$ 33.562.176,08
2015	05	\$ 207.032	1,97%	70	\$ 285.496,84	\$ 33.847.672,92
2015	06	\$ 207.032	1,97%	69	\$ 281.418,31	\$ 34.129.091,23
2015	M13	\$ 207.032	1,97%	69	\$ 281.418,31	\$ 34.410.509,54
2015	07	\$ 207.032	1,97%	68	\$ 277.339,79	\$ 34.687.849,33
2015	08	\$ 207.032	1,97%	67	\$ 273.261,26	\$ 34.961.110,59

2015	09	\$ 207.032	1,97%	66	\$ 269.182,73	\$ 35.230.293,32
2015	10	\$ 207.032	1,97%	65	\$ 265.104,21	\$ 35.495.397,53
2015	11	\$ 207.032	1,97%	64	\$ 261.025,68	\$ 35.756.423,21
2015	12	\$ 207.032	1,97%	63	\$ 256.947,15	\$ 36.013.370,36
2015	M14	\$ 207.032	1,97%	63	\$ 256.947,15	\$ 36.270.317,52
2016	01	\$ 221.048	1,97%	62	\$ 269.987,89	\$ 36.540.305,41
2016	02	\$ 221.048	1,97%	61	\$ 265.633,25	\$ 36.805.938,66
2016	03	\$ 221.048	1,97%	60	\$ 261.278,61	\$ 37.067.217,26
2016	04	\$ 221.048	1,97%	59	\$ 256.923,96	\$ 37.324.141,23
2016	05	\$ 221.048	1,97%	58	\$ 252.569,32	\$ 37.576.710,55
2016	06	\$ 221.048	1,97%	57	\$ 248.214,68	\$ 37.824.925,22
2016	M13	\$ 221.048	1,97%	57	\$ 248.214,68	\$ 38.073.139,90
2016	07	\$ 221.048	1,97%	56	\$ 243.860,03	\$ 38.316.999,93
2016	08	\$ 221.048	1,97%	55	\$ 239.505,39	\$ 38.556.505,32
2016	09	\$ 221.048	1,97%	54	\$ 235.150,75	\$ 38.791.656,06
2016	10	\$ 221.048	1,97%	53	\$ 230.796,10	\$ 39.022.452,17
2016	11	\$ 221.048	1,97%	52	\$ 226.441,46	\$ 39.248.893,62
2016	12	\$ 221.048	1,97%	51	\$ 222.086,82	\$ 39.470.980,44
2016	M14	\$ 221.048	1,97%	51	\$ 222.086,82	\$ 39.693.067,26
2017	01	\$ 233.758	1,97%	50	\$ 230.251,73	\$ 39.923.318,98
2017	02	\$ 233.758	1,97%	49	\$ 225.646,69	\$ 40.148.965,68
2017	03	\$ 233.758	1,97%	48	\$ 221.041,66	\$ 40.370.007,34
2017	04	\$ 233.758	1,97%	47	\$ 216.436,62	\$ 40.586.443,96
2017	05	\$ 233.758	1,97%	46	\$ 211.831,59	\$ 40.798.275,55
2017	06	\$ 233.758	1,97%	45	\$ 207.226,56	\$ 41.005.502,11
2017	M13	\$ 233.758	1,97%	45	\$ 207.226,56	\$ 41.212.728,66
2017	07	\$ 233.758	1,97%	44	\$ 202.621,52	\$ 41.415.350,18
2017	08	\$ 233.758	1,97%	43	\$ 198.016,49	\$ 41.613.366,67
2017	09	\$ 233.758	1,97%	42	\$ 193.411,45	\$ 41.806.778,12
2017	10	\$ 233.758	1,97%	41	\$ 188.806,42	\$ 41.995.584,54
2017	11	\$ 233.758	1,97%	40	\$ 184.201,38	\$ 42.179.785,92
2017	12	\$ 233.758	1,97%	39	\$ 179.596,35	\$ 42.359.382,27
2017	M14	\$ 233.758	1,97%	39	\$ 179.596,35	\$ 42.538.978,62
2018	01	\$ 243.319	1,97%	38	\$ 182.148,45	\$ 42.721.127,07
2018	02	\$ 243.319	1,97%	37	\$ 177.355,07	\$ 42.898.482,15
2018	03	\$ 243.319	1,97%	36	\$ 172.561,69	\$ 43.071.043,84
2018	04	\$ 243.319	1,97%	35	\$ 167.768,31	\$ 43.238.812,15
2018	05	\$ 243.319	1,97%	34	\$ 162.974,93	\$ 43.401.787,08
2018	06	\$ 243.319	1,97%	33	\$ 158.181,55	\$ 43.559.968,64
2018	M13	\$ 243.319	1,97%	33	\$ 158.181,55	\$ 43.718.150,19
2018	07	\$ 243.319	1,97%	32	\$ 153.388,17	\$ 43.871.538,36
2018	08	\$ 243.319	1,97%	31	\$ 148.594,79	\$ 44.020.133,15
2018	09	\$ 243.319	1,97%	30	\$ 143.801,41	\$ 44.163.934,56
2018	10	\$ 243.319	1,97%	29	\$ 139.008,03	\$ 44.302.942,59
2018	11	\$ 243.319	1,97%	28	\$ 134.214,65	\$ 44.437.157,24
2018	12	\$ 243.319	1,97%	27	\$ 129.421,27	\$ 44.566.578,51
2018	M14	\$ 243.319	1,97%	27	\$ 129.421,27	\$ 44.695.999,78
2019	01	\$ 251.056	1,97%	26	\$ 128.591,06	\$ 44.824.590,84
2019	02	\$ 251.056	1,97%	25	\$ 123.645,25	\$ 44.948.236,09
2019	03	\$ 251.056	1,97%	24	\$ 118.699,44	\$ 45.066.935,52
2019	04	\$ 251.056	1,97%	23	\$ 113.753,63	\$ 45.180.689,15
2019	05	\$ 251.056	1,97%	22	\$ 108.807,82	\$ 45.289.496,97
2019	06	\$ 251.056	1,97%	21	\$ 103.862,01	\$ 45.393.358,98
2019	M13	\$ 251.056	1,97%	21	\$ 103.862,01	\$ 45.497.220,98
2019	07	\$ 251.056	1,97%	20	\$ 98.916,20	\$ 45.596.137,18
2019	08	\$ 251.056	1,97%	19	\$ 93.970,39	\$ 45.690.107,57
2019	09	\$ 251.056	1,97%	18	\$ 89.024,58	\$ 45.779.132,15

2019	10	\$ 251.056	1,97%	17	\$ 84.078,77	\$ 45.863.210,92
2019	11	\$ 251.056	1,97%	16	\$ 79.132,96	\$ 45.942.343,88
2019	12	\$ 251.056	1,97%	15	\$ 74.187,15	\$ 46.016.531,02
2019	M14	\$ 251.056	1,97%	15	\$ 74.187,15	\$ 46.090.718,17
2020	01	\$ 260.596	1,97%	14	\$ 71.872,51	\$ 46.162.590,68
2020	02	\$ 260.596	1,97%	13	\$ 66.738,76	\$ 46.229.329,44
2020	03	\$ 260.596	1,97%	12	\$ 61.605,01	\$ 46.290.934,45
2020	04	\$ 260.596	1,97%	11	\$ 56.471,26	\$ 46.347.405,71
2020	05	\$ 260.596	1,97%	10	\$ 51.337,51	\$ 46.398.743,21
2020	06	\$ 260.596	1,97%	9	\$ 46.203,76	\$ 46.444.946,97
2020	M13	\$ 260.596	1,97%	9	\$ 46.203,76	\$ 46.491.150,72
2020	07	\$ 260.596	1,97%	8	\$ 41.070,01	\$ 46.532.220,73
2020	08	\$ 260.596	1,97%	7	\$ 35.936,25	\$ 46.568.156,98
2020	09	\$ 260.596	1,97%	6	\$ 30.802,50	\$ 46.598.959,49
2020	10	\$ 260.596	1,97%	5	\$ 25.668,75	\$ 46.624.628,24
2020	11	\$ 260.596	1,97%	4	\$ 20.535,00	\$ 46.645.163,24
2020	12	\$ 260.596	1,97%	3	\$ 15.401,25	\$ 46.660.564,50
2020	M14	\$ 260.596	1,97%	3	\$ 15.401,25	\$ 46.675.965,75
2021	01	\$ 264.792	1,97%	2	\$ 10.432,81	\$ 46.686.398,56
2021	02	\$ 264.792	1,97%	1	\$ 5.216,40	\$ 46.691.614,96

Retroactivo: \$35.416.809,66

Intereses de mora: \$46.691.614,96

4. JOSUÉ ANTONIO OSORIO CANO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2009	\$ 184.058,45	2,00%	10	\$ 1.840.584,50
2010	\$ 187.739,62	3,17%	14	\$ 2.628.354,67
2011	\$ 193.690,96	3,73%	14	\$ 2.711.673,51
2012	\$ 200.915,64	2,44%	14	\$ 2.812.818,93
2013	\$ 205.817,98	1,94%	14	\$ 2.881.451,71
2014	\$ 209.810,85	3,66%	14	\$ 2.937.351,88
2015	\$ 217.489,93	6,77%	14	\$ 3.044.858,95
2016	\$ 232.213,99	5,75%	14	\$ 3.250.995,91
2017	\$ 245.566,30	4,09%	14	\$ 3.437.928,17
2018	\$ 255.609,96	3,18%	14	\$ 3.578.539,43
2019	\$ 263.738,36	3,80%	14	\$ 3.692.336,99
2020	\$ 273.760,41	1,61%	14	\$ 3.832.645,79
2021	\$ 278.167,96		2	\$ 556.335,91
				\$ 37.205.876,35

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	01		1,97%	146	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	02	\$ 0	1,97%	145	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	03	\$ 0	1,97%	144	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	04	\$ 184.058	1,97%	143	\$ 518.511,06	\$ 518.511,06
2009	05	\$ 184.058	1,97%	142	\$ 514.885,11	\$ 1.033.396,17
2009	06	\$ 184.058	1,97%	141	\$ 511.259,16	\$ 1.544.655,32
2009	M13	\$ 184.058	1,97%	141	\$ 511.259,16	\$ 2.055.914,48
2009	07	\$ 184.058	1,97%	140	\$ 507.633,21	\$ 2.563.547,69
2009	08	\$ 184.058	1,97%	139	\$ 504.007,25	\$ 3.067.554,94
2009	09	\$ 184.058	1,97%	138	\$ 500.381,30	\$ 3.567.936,24

2009	10	\$ 184.058	1,97%	137	\$ 496.755,35	\$ 4.064.691,59
2009	11	\$ 184.058	1,97%	136	\$ 493.129,40	\$ 4.557.820,99
2009	12	\$ 184.058	1,97%	135	\$ 489.503,45	\$ 5.047.324,44
2009	M14	\$ 184.058	1,97%	135	\$ 489.503,45	\$ 5.536.827,89
2010	01	\$ 187.740	1,97%	134	\$ 495.595,05	\$ 6.032.422,94
2010	02	\$ 187.740	1,97%	133	\$ 491.896,58	\$ 6.524.319,51
2010	03	\$ 187.740	1,97%	132	\$ 488.198,11	\$ 7.012.517,62
2010	04	\$ 187.740	1,97%	131	\$ 484.499,64	\$ 7.497.017,26
2010	05	\$ 187.740	1,97%	130	\$ 480.801,17	\$ 7.977.818,43
2010	06	\$ 187.740	1,97%	129	\$ 477.102,70	\$ 8.454.921,12
2010	M13	\$ 187.740	1,97%	129	\$ 477.102,70	\$ 8.932.023,82
2010	07	\$ 187.740	1,97%	128	\$ 473.404,23	\$ 9.405.428,04
2010	08	\$ 187.740	1,97%	127	\$ 469.705,76	\$ 9.875.133,80
2010	09	\$ 187.740	1,97%	126	\$ 466.007,28	\$ 10.341.141,08
2010	10	\$ 187.740	1,97%	125	\$ 462.308,81	\$ 10.803.449,90
2010	11	\$ 187.740	1,97%	124	\$ 458.610,34	\$ 11.262.060,24
2010	12	\$ 187.740	1,97%	123	\$ 454.911,87	\$ 11.716.972,12
2010	M14	\$ 187.740	1,97%	123	\$ 454.911,87	\$ 12.171.883,99
2011	01	\$ 193.691	1,97%	122	\$ 465.516,85	\$ 12.637.400,84
2011	02	\$ 193.691	1,97%	121	\$ 461.701,14	\$ 13.099.101,98
2011	03	\$ 193.691	1,97%	120	\$ 457.885,43	\$ 13.556.987,41
2011	04	\$ 193.691	1,97%	119	\$ 454.069,72	\$ 14.011.057,13
2011	05	\$ 193.691	1,97%	118	\$ 450.254,01	\$ 14.461.311,14
2011	06	\$ 193.691	1,97%	117	\$ 446.438,29	\$ 14.907.749,43
2011	M13	\$ 193.691	1,97%	117	\$ 446.438,29	\$ 15.354.187,72
2011	07	\$ 193.691	1,97%	116	\$ 442.622,58	\$ 15.796.810,31
2011	08	\$ 193.691	1,97%	115	\$ 438.806,87	\$ 16.235.617,18
2011	09	\$ 193.691	1,97%	114	\$ 434.991,16	\$ 16.670.608,33
2011	10	\$ 193.691	1,97%	113	\$ 431.175,45	\$ 17.101.783,78
2011	11	\$ 193.691	1,97%	112	\$ 427.359,73	\$ 17.529.143,51
2011	12	\$ 193.691	1,97%	111	\$ 423.544,02	\$ 17.952.687,54
2011	M14	\$ 193.691	1,97%	111	\$ 423.544,02	\$ 18.376.231,56
2012	01	\$ 200.916	1,97%	110	\$ 435.384,19	\$ 18.811.615,75
2012	02	\$ 200.916	1,97%	109	\$ 431.426,15	\$ 19.243.041,90
2012	03	\$ 200.916	1,97%	108	\$ 427.468,12	\$ 19.670.510,02
2012	04	\$ 200.916	1,97%	107	\$ 423.510,08	\$ 20.094.020,10
2012	05	\$ 200.916	1,97%	106	\$ 419.552,04	\$ 20.513.572,14
2012	06	\$ 200.916	1,97%	105	\$ 415.594,00	\$ 20.929.166,14
2012	M13	\$ 200.916	1,97%	105	\$ 415.594,00	\$ 21.344.760,14
2012	07	\$ 200.916	1,97%	104	\$ 411.635,96	\$ 21.756.396,10
2012	08	\$ 200.916	1,97%	103	\$ 407.677,93	\$ 22.164.074,03
2012	09	\$ 200.916	1,97%	102	\$ 403.719,89	\$ 22.567.793,91
2012	10	\$ 200.916	1,97%	101	\$ 399.761,85	\$ 22.967.555,76
2012	11	\$ 200.916	1,97%	100	\$ 395.803,81	\$ 23.363.359,57
2012	12	\$ 200.916	1,97%	99	\$ 391.845,77	\$ 23.755.205,35
2012	M14	\$ 200.916	1,97%	99	\$ 391.845,77	\$ 24.147.051,12
2013	01	\$ 205.818	1,97%	98	\$ 397.352,19	\$ 24.544.403,31
2013	02	\$ 205.818	1,97%	97	\$ 393.297,58	\$ 24.937.700,89
2013	03	\$ 205.818	1,97%	96	\$ 389.242,96	\$ 25.326.943,85
2013	04	\$ 205.818	1,97%	95	\$ 385.188,35	\$ 25.712.132,20
2013	05	\$ 205.818	1,97%	94	\$ 381.133,74	\$ 26.093.265,94
2013	06	\$ 205.818	1,97%	93	\$ 377.079,12	\$ 26.470.345,06
2013	07	\$ 205.818	1,97%	93	\$ 377.079,12	\$ 26.847.424,18
2013	07	\$ 205.818	1,97%	92	\$ 373.024,51	\$ 27.220.448,69
2013	08	\$ 205.818	1,97%	91	\$ 368.969,89	\$ 27.589.418,58
2013	09	\$ 205.818	1,97%	90	\$ 364.915,28	\$ 27.954.333,86
2013	10	\$ 205.818	1,97%	89	\$ 360.860,66	\$ 28.315.194,52
2013	11	\$ 205.818	1,97%	88	\$ 356.806,05	\$ 28.672.000,57
2013	12	\$ 205.818	1,97%	87	\$ 352.751,44	\$ 29.024.752,01
2013	M14	\$ 205.818	1,97%	87	\$ 352.751,44	\$ 29.377.503,45
2014	01	\$ 209.811	1,97%	86	\$ 355.461,54	\$ 29.732.964,99
2014	02	\$ 209.811	1,97%	85	\$ 351.328,27	\$ 30.084.293,26

2014	03	\$ 209.811	1,97%	84	\$ 347.194,99	\$ 30.431.488,25
2014	04	\$ 209.811	1,97%	83	\$ 343.061,72	\$ 30.774.549,97
2014	05	\$ 209.811	1,97%	82	\$ 338.928,45	\$ 31.113.478,42
2014	06	\$ 209.811	1,97%	81	\$ 334.795,17	\$ 31.448.273,59
2014	M13	\$ 209.811	1,97%	81	\$ 334.795,17	\$ 31.783.068,76
2014	07	\$ 209.811	1,97%	80	\$ 330.661,90	\$ 32.113.730,66
2014	08	\$ 209.811	1,97%	79	\$ 326.528,63	\$ 32.440.259,29
2014	09	\$ 209.811	1,97%	78	\$ 322.395,35	\$ 32.762.654,64
2014	10	\$ 209.811	1,97%	77	\$ 318.262,08	\$ 33.080.916,72
2014	11	\$ 209.811	1,97%	76	\$ 314.128,80	\$ 33.395.045,53
2014	12	\$ 209.811	1,97%	75	\$ 309.995,53	\$ 33.705.041,06
2014	M14	\$ 209.811	1,97%	75	\$ 309.995,53	\$ 34.015.036,59
2015	01	\$ 217.490	1,97%	74	\$ 317.056,82	\$ 34.332.093,41
2015	02	\$ 217.490	1,97%	73	\$ 312.772,27	\$ 34.644.865,68
2015	03	\$ 217.490	1,97%	72	\$ 308.487,72	\$ 34.953.353,39
2015	04	\$ 217.490	1,97%	71	\$ 304.203,17	\$ 35.257.556,56
2015	05	\$ 217.490	1,97%	70	\$ 299.918,61	\$ 35.557.475,17
2015	06	\$ 217.490	1,97%	69	\$ 295.634,06	\$ 35.853.109,23
2015	M13	\$ 217.490	1,97%	69	\$ 295.634,06	\$ 36.148.743,29
2015	07	\$ 217.490	1,97%	68	\$ 291.349,51	\$ 36.440.092,80
2015	08	\$ 217.490	1,97%	67	\$ 287.064,96	\$ 36.727.157,76
2015	09	\$ 217.490	1,97%	66	\$ 282.780,41	\$ 37.009.938,17
2015	10	\$ 217.490	1,97%	65	\$ 278.495,86	\$ 37.288.434,03
2015	11	\$ 217.490	1,97%	64	\$ 274.211,30	\$ 37.562.645,33
2015	12	\$ 217.490	1,97%	63	\$ 269.926,75	\$ 37.832.572,08
2015	M14	\$ 217.490	1,97%	63	\$ 269.926,75	\$ 38.102.498,83
2016	01	\$ 232.214	1,97%	62	\$ 283.626,17	\$ 38.386.125,00
2016	02	\$ 232.214	1,97%	61	\$ 279.051,55	\$ 38.665.176,55
2016	03	\$ 232.214	1,97%	60	\$ 274.476,94	\$ 38.939.653,49
2016	04	\$ 232.214	1,97%	59	\$ 269.902,32	\$ 39.209.555,81
2016	05	\$ 232.214	1,97%	58	\$ 265.327,70	\$ 39.474.883,51
2016	06	\$ 232.214	1,97%	57	\$ 260.753,09	\$ 39.735.636,60
2016	M13	\$ 232.214	1,97%	57	\$ 260.753,09	\$ 39.996.389,69
2016	07	\$ 232.214	1,97%	56	\$ 256.178,47	\$ 40.252.568,17
2016	08	\$ 232.214	1,97%	55	\$ 251.603,86	\$ 40.504.172,03
2016	09	\$ 232.214	1,97%	54	\$ 247.029,24	\$ 40.751.201,27
2016	10	\$ 232.214	1,97%	53	\$ 242.454,63	\$ 40.993.655,89
2016	11	\$ 232.214	1,97%	52	\$ 237.880,01	\$ 41.231.535,91
2016	12	\$ 232.214	1,97%	51	\$ 233.305,40	\$ 41.464.841,30
2016	M14	\$ 232.214	1,97%	51	\$ 233.305,40	\$ 41.698.146,70
2017	01	\$ 245.566	1,97%	50	\$ 241.882,81	\$ 41.940.029,50
2017	02	\$ 245.566	1,97%	49	\$ 237.045,15	\$ 42.177.074,65
2017	03	\$ 245.566	1,97%	48	\$ 232.207,49	\$ 42.409.282,15
2017	04	\$ 245.566	1,97%	47	\$ 227.369,84	\$ 42.636.651,98
2017	05	\$ 245.566	1,97%	46	\$ 222.532,18	\$ 42.859.184,16
2017	06	\$ 245.566	1,97%	45	\$ 217.694,52	\$ 43.076.878,69
2017	M13	\$ 245.566	1,97%	45	\$ 217.694,52	\$ 43.294.573,21
2017	07	\$ 245.566	1,97%	44	\$ 212.856,87	\$ 43.507.430,08
2017	08	\$ 245.566	1,97%	43	\$ 208.019,21	\$ 43.715.449,30
2017	09	\$ 245.566	1,97%	42	\$ 203.181,56	\$ 43.918.630,85
2017	10	\$ 245.566	1,97%	41	\$ 198.343,90	\$ 44.116.974,75
2017	11	\$ 245.566	1,97%	40	\$ 193.506,24	\$ 44.310.481,00
2017	12	\$ 245.566	1,97%	39	\$ 188.668,59	\$ 44.499.149,59
2017	M14	\$ 245.566	1,97%	39	\$ 188.668,59	\$ 44.687.818,17
2018	01	\$ 255.610	1,97%	38	\$ 191.349,62	\$ 44.879.167,79
2018	02	\$ 255.610	1,97%	37	\$ 186.314,10	\$ 45.065.481,89
2018	03	\$ 255.610	1,97%	36	\$ 181.278,58	\$ 45.246.760,47

2018	04	\$ 255.610	1,97%	35	\$ 176.243,07	\$ 45.423.003,54
2018	05	\$ 255.610	1,97%	34	\$ 171.207,55	\$ 45.594.211,09
2018	06	\$ 255.610	1,97%	33	\$ 166.172,03	\$ 45.760.383,13
2018	M13	\$ 255.610	1,97%	33	\$ 166.172,03	\$ 45.926.555,16
2018	07	\$ 255.610	1,97%	32	\$ 161.136,52	\$ 46.087.691,68
2018	08	\$ 255.610	1,97%	31	\$ 156.101,00	\$ 46.243.792,68
2018	09	\$ 255.610	1,97%	30	\$ 151.065,49	\$ 46.394.858,17
2018	10	\$ 255.610	1,97%	29	\$ 146.029,97	\$ 46.540.888,14
2018	11	\$ 255.610	1,97%	28	\$ 140.994,45	\$ 46.681.882,59
2018	12	\$ 255.610	1,97%	27	\$ 135.958,94	\$ 46.817.841,53
2018	M14	\$ 255.610	1,97%	27	\$ 135.958,94	\$ 46.953.800,47
2019	01	\$ 263.738	1,97%	26	\$ 135.086,79	\$ 47.088.887,26
2019	02	\$ 263.738	1,97%	25	\$ 129.891,14	\$ 47.218.778,40
2019	03	\$ 263.738	1,97%	24	\$ 124.695,50	\$ 47.343.473,90
2019	04	\$ 263.738	1,97%	23	\$ 119.499,85	\$ 47.462.973,75
2019	05	\$ 263.738	1,97%	22	\$ 114.304,21	\$ 47.577.277,95
2019	06	\$ 263.738	1,97%	21	\$ 109.108,56	\$ 47.686.386,51
2019	M13	\$ 263.738	1,97%	21	\$ 109.108,56	\$ 47.795.495,07
2019	07	\$ 263.738	1,97%	20	\$ 103.912,91	\$ 47.899.407,98
2019	08	\$ 263.738	1,97%	19	\$ 98.717,27	\$ 47.998.125,25
2019	09	\$ 263.738	1,97%	18	\$ 93.521,62	\$ 48.091.646,88
2019	10	\$ 263.738	1,97%	17	\$ 88.325,98	\$ 48.179.972,85
2019	11	\$ 263.738	1,97%	16	\$ 83.130,33	\$ 48.263.103,18
2019	12	\$ 263.738	1,97%	15	\$ 77.934,69	\$ 48.341.037,87
2019	M14	\$ 263.738	1,97%	15	\$ 77.934,69	\$ 48.418.972,55
2020	01	\$ 273.760	1,97%	14	\$ 75.503,12	\$ 48.494.475,68
2020	02	\$ 273.760	1,97%	13	\$ 70.110,04	\$ 48.564.585,72
2020	03	\$ 273.760	1,97%	12	\$ 64.716,96	\$ 48.629.302,68
2020	04	\$ 273.760	1,97%	11	\$ 59.323,88	\$ 48.688.626,56
2020	05	\$ 273.760	1,97%	10	\$ 53.930,80	\$ 48.742.557,36
2020	06	\$ 273.760	1,97%	9	\$ 48.537,72	\$ 48.791.095,08
2020	M13	\$ 273.760	1,97%	9	\$ 48.537,72	\$ 48.839.632,80
2020	07	\$ 273.760	1,97%	8	\$ 43.144,64	\$ 48.882.777,44
2020	08	\$ 273.760	1,97%	7	\$ 37.751,56	\$ 48.920.529,00
2020	09	\$ 273.760	1,97%	6	\$ 32.358,48	\$ 48.952.887,48
2020	10	\$ 273.760	1,97%	5	\$ 26.965,40	\$ 48.979.852,88
2020	11	\$ 273.760	1,97%	4	\$ 21.572,32	\$ 49.001.425,20
2020	12	\$ 273.760	1,97%	3	\$ 16.179,24	\$ 49.017.604,44
2020	M14	\$ 273.760	1,97%	3	\$ 16.179,24	\$ 49.033.783,68
2021	01	\$ 278.168	1,97%	2	\$ 10.959,82	\$ 49.044.743,50
2021	02	\$ 278.168	1,97%	1	\$ 5.479,91	\$ 49.050.223,41

Retroactivo: \$37.205.876.35

Intereses de mora: \$49.050.223,41

5. JULIO CESAR FLÓREZ ROJAS

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2007	\$ 79.854,42	5,69%	10,5	\$ 838.471,41
2008	\$ 84.398,14	7,67%	14	\$ 1.181.573,91
2009	\$ 90.871,47	2,00%	14	\$ 1.272.200,63
2010	\$ 92.688,90	3,17%	14	\$ 1.297.644,64
2011	\$ 95.627,14	3,73%	14	\$ 1.338.779,98
2012	\$ 99.194,03	2,44%	14	\$ 1.388.716,47

2013	\$ 101.614,37	1,94%	14	\$ 1.422.601,15
2014	\$ 103.585,69	3,66%	14	\$ 1.450.199,62
2015	\$ 107.376,92	6,77%	14	\$ 1.503.276,92
2016	\$ 114.646,34	5,75%	14	\$ 1.605.048,77
2017	\$ 121.238,51	4,09%	14	\$ 1.697.339,07
2018	\$ 126.197,16	3,18%	14	\$ 1.766.760,24
2019	\$ 130.210,23	3,80%	14	\$ 1.822.943,22
2020	\$ 135.158,22	1,61%	14	\$ 1.892.215,06
2021	\$ 137.334,27		2	\$ 274.668,53
				\$ 20.752.439,62

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2007	04	\$ 79.854	1,97%	167	\$ 262.713,06	\$ 262.713,06
2007	05	\$ 79.854	1,97%	166	\$ 261.139,92	\$ 523.852,98
2007	06	\$ 79.854	1,97%	165	\$ 259.566,79	\$ 783.419,77
2007	M13	\$ 79.854	1,97%	165	\$ 259.566,79	\$ 1.042.986,57
2007	07	\$ 79.854	1,97%	164	\$ 257.993,66	\$ 1.300.980,23
2007	08	\$ 79.854	1,97%	163	\$ 256.420,53	\$ 1.557.400,75
2007	09	\$ 79.854	1,97%	162	\$ 254.847,40	\$ 1.812.248,15
2007	10	\$ 79.854	1,97%	161	\$ 253.274,26	\$ 2.065.522,41
2007	11	\$ 79.854	1,97%	160	\$ 251.701,13	\$ 2.317.223,55
2007	12	\$ 79.854	1,97%	159	\$ 250.128,00	\$ 2.567.351,54
2007	M14	\$ 79.854	1,97%	159	\$ 250.128,00	\$ 2.817.479,54
2008	01	\$ 84.398	1,97%	158	\$ 262.697,65	\$ 3.080.177,20
2008	02	\$ 84.398	1,97%	157	\$ 261.035,01	\$ 3.341.212,20
2008	03	\$ 84.398	1,97%	156	\$ 259.372,36	\$ 3.600.584,57
2008	04	\$ 84.398	1,97%	155	\$ 257.709,72	\$ 3.858.294,29
2008	05	\$ 84.398	1,97%	154	\$ 256.047,08	\$ 4.114.341,36
2008	06	\$ 84.398	1,97%	153	\$ 254.384,43	\$ 4.368.725,80
2008	M13	\$ 84.398	1,97%	153	\$ 254.384,43	\$ 4.623.110,23
2008	07	\$ 84.398	1,97%	152	\$ 252.721,79	\$ 4.875.832,02
2008	08	\$ 84.398	1,97%	151	\$ 251.059,15	\$ 5.126.891,17
2008	09	\$ 84.398	1,97%	150	\$ 249.396,50	\$ 5.376.287,67
2008	10	\$ 84.398	1,97%	149	\$ 247.733,86	\$ 5.624.021,53
2008	11	\$ 84.398	1,97%	148	\$ 246.071,22	\$ 5.870.092,75
2008	12	\$ 84.398	1,97%	147	\$ 244.408,57	\$ 6.114.501,32
2008	M14	\$ 84.398	1,97%	147	\$ 244.408,57	\$ 6.358.909,90
2009	01	\$ 90.871	1,97%	146	\$ 261.364,52	\$ 6.620.274,42
2009	02	\$ 90.871	1,97%	145	\$ 259.574,35	\$ 6.879.848,77
2009	03	\$ 90.871	1,97%	144	\$ 257.784,19	\$ 7.137.632,96
2009	04	\$ 90.871	1,97%	143	\$ 255.994,02	\$ 7.393.626,98
2009	05	\$ 90.871	1,97%	142	\$ 254.203,85	\$ 7.647.830,83
2009	06	\$ 90.871	1,97%	141	\$ 252.413,68	\$ 7.900.244,51
2009	M13	\$ 90.871	1,97%	141	\$ 252.413,68	\$ 8.152.658,19
2009	07	\$ 90.871	1,97%	140	\$ 250.623,51	\$ 8.403.281,71
2009	08	\$ 90.871	1,97%	139	\$ 248.833,35	\$ 8.652.115,05
2009	09	\$ 90.871	1,97%	138	\$ 247.043,18	\$ 8.899.158,23
2009	10	\$ 90.871	1,97%	137	\$ 245.253,01	\$ 9.144.411,24
2009	11	\$ 90.871	1,97%	136	\$ 243.462,84	\$ 9.387.874,08
2009	12	\$ 90.871	1,97%	135	\$ 241.672,67	\$ 9.629.546,76
2009	M14	\$ 90.871	1,97%	135	\$ 241.672,67	\$ 9.871.219,43
2010	01	\$ 92.689	1,97%	134	\$ 244.680,16	\$ 10.115.899,59
2010	02	\$ 92.689	1,97%	133	\$ 242.854,19	\$ 10.358.753,78
2010	03	\$ 92.689	1,97%	132	\$ 241.028,22	\$ 10.599.781,99
2010	04	\$ 92.689	1,97%	131	\$ 239.202,24	\$ 10.838.984,24
2010	05	\$ 92.689	1,97%	130	\$ 237.376,27	\$ 11.076.360,51
2010	06	\$ 92.689	1,97%	129	\$ 235.550,30	\$ 11.311.910,81
2010	M13	\$ 92.689	1,97%	129	\$ 235.550,30	\$ 11.547.461,11
2010	07	\$ 92.689	1,97%	128	\$ 233.724,33	\$ 11.781.185,44
2010	08	\$ 92.689	1,97%	127	\$ 231.898,36	\$ 12.013.083,80

2010	09	\$ 92.689	1,97%	126	\$ 230.072,39	\$ 12.243.156,19
2010	10	\$ 92.689	1,97%	125	\$ 228.246,42	\$ 12.471.402,61
2010	11	\$ 92.689	1,97%	124	\$ 226.420,44	\$ 12.697.823,05
2010	12	\$ 92.689	1,97%	123	\$ 224.594,47	\$ 12.922.417,53
2010	M14	\$ 92.689	1,97%	123	\$ 224.594,47	\$ 13.147.012,00
2011	01	\$ 95.627	1,97%	122	\$ 229.830,27	\$ 13.376.842,27
2011	02	\$ 95.627	1,97%	121	\$ 227.946,41	\$ 13.604.788,68
2011	03	\$ 95.627	1,97%	120	\$ 226.062,56	\$ 13.830.851,24
2011	04	\$ 95.627	1,97%	119	\$ 224.178,70	\$ 14.055.029,94
2011	05	\$ 95.627	1,97%	118	\$ 222.294,85	\$ 14.277.324,79
2011	06	\$ 95.627	1,97%	117	\$ 220.410,99	\$ 14.497.735,79
2011	07	\$ 95.627	1,97%	117	\$ 220.410,99	\$ 14.718.146,78
2011	07	\$ 95.627	1,97%	116	\$ 218.527,14	\$ 14.936.673,92
2011	08	\$ 95.627	1,97%	115	\$ 216.643,29	\$ 15.153.317,21
2011	09	\$ 95.627	1,97%	114	\$ 214.759,43	\$ 15.368.076,64
2011	10	\$ 95.627	1,97%	113	\$ 212.875,58	\$ 15.580.952,22
2011	11	\$ 95.627	1,97%	112	\$ 210.991,72	\$ 15.791.943,94
2011	12	\$ 95.627	1,97%	111	\$ 209.107,87	\$ 16.001.051,81
2011	M14	\$ 95.627	1,97%	111	\$ 209.107,87	\$ 16.210.159,67
2012	01	\$ 99.194	1,97%	110	\$ 214.953,46	\$ 16.425.113,14
2012	02	\$ 99.194	1,97%	109	\$ 212.999,34	\$ 16.638.112,48
2012	03	\$ 99.194	1,97%	108	\$ 211.045,22	\$ 16.849.157,69
2012	04	\$ 99.194	1,97%	107	\$ 209.091,10	\$ 17.058.248,79
2012	05	\$ 99.194	1,97%	106	\$ 207.136,97	\$ 17.265.385,76
2012	06	\$ 99.194	1,97%	105	\$ 205.182,85	\$ 17.470.568,61
2012	M13	\$ 99.194	1,97%	105	\$ 205.182,85	\$ 17.675.751,47
2012	07	\$ 99.194	1,97%	104	\$ 203.228,73	\$ 17.878.980,19
2012	08	\$ 99.194	1,97%	103	\$ 201.274,61	\$ 18.080.254,80
2012	09	\$ 99.194	1,97%	102	\$ 199.320,48	\$ 18.279.575,28
2012	10	\$ 99.194	1,97%	101	\$ 197.366,36	\$ 18.476.941,65
2012	11	\$ 99.194	1,97%	100	\$ 195.412,24	\$ 18.672.353,89
2012	12	\$ 99.194	1,97%	99	\$ 193.458,12	\$ 18.865.812,00
2012	M14	\$ 99.194	1,97%	99	\$ 193.458,12	\$ 19.059.270,12
2013	01	\$ 101.614	1,97%	98	\$ 196.176,70	\$ 19.255.446,82
2013	02	\$ 101.614	1,97%	97	\$ 194.174,90	\$ 19.449.621,72
2013	03	\$ 101.614	1,97%	96	\$ 192.173,10	\$ 19.641.794,82
2013	04	\$ 101.614	1,97%	95	\$ 190.171,29	\$ 19.831.966,11
2013	05	\$ 101.614	1,97%	94	\$ 188.169,49	\$ 20.020.135,60
2013	06	\$ 101.614	1,97%	93	\$ 186.167,69	\$ 20.206.303,29
2013	M13	\$ 101.614	1,97%	93	\$ 186.167,69	\$ 20.392.470,98
2013	07	\$ 101.614	1,97%	92	\$ 184.165,88	\$ 20.576.636,86
2013	08	\$ 101.614	1,97%	91	\$ 182.164,08	\$ 20.758.800,94
2013	09	\$ 101.614	1,97%	90	\$ 180.162,28	\$ 20.938.963,22
2013	10	\$ 101.614	1,97%	89	\$ 178.160,47	\$ 21.117.123,69
2013	11	\$ 101.614	1,97%	88	\$ 176.158,67	\$ 21.293.282,37
2013	12	\$ 101.614	1,97%	87	\$ 174.156,87	\$ 21.467.439,23
2013	M14	\$ 101.614	1,97%	87	\$ 174.156,87	\$ 21.641.596,10
2014	01	\$ 103.586	1,97%	86	\$ 175.494,88	\$ 21.817.090,98
2014	02	\$ 103.586	1,97%	85	\$ 173.454,24	\$ 21.990.545,22
2014	03	\$ 103.586	1,97%	84	\$ 171.413,60	\$ 22.161.958,82
2014	04	\$ 103.586	1,97%	83	\$ 169.372,96	\$ 22.331.331,78
2014	05	\$ 103.586	1,97%	82	\$ 167.332,32	\$ 22.498.664,10
2014	06	\$ 103.586	1,97%	81	\$ 165.291,69	\$ 22.663.955,79
2014	M13	\$ 103.586	1,97%	81	\$ 165.291,69	\$ 22.829.247,47
2014	07	\$ 103.586	1,97%	80	\$ 163.251,05	\$ 22.992.498,52
2014	08	\$ 103.586	1,97%	79	\$ 161.210,41	\$ 23.153.708,93
2014	09	\$ 103.586	1,97%	78	\$ 159.169,77	\$ 23.312.878,70
2014	10	\$ 103.586	1,97%	77	\$ 157.129,13	\$ 23.470.007,83
2014	11	\$ 103.586	1,97%	76	\$ 155.088,50	\$ 23.625.096,33
2014	12	\$ 103.586	1,97%	75	\$ 153.047,86	\$ 23.778.144,19

2014	M14	\$ 103.586	1,97%	75	\$ 153.047,86	\$ 23.931.192,04
2015	01	\$ 107.377	1,97%	74	\$ 156.534,07	\$ 24.087.726,12
2015	02	\$ 107.377	1,97%	73	\$ 154.418,75	\$ 24.242.144,87
2015	03	\$ 107.377	1,97%	72	\$ 152.303,42	\$ 24.394.448,29
2015	04	\$ 107.377	1,97%	71	\$ 150.188,10	\$ 24.544.636,39
2015	05	\$ 107.377	1,97%	70	\$ 148.072,77	\$ 24.692.709,16
2015	06	\$ 107.377	1,97%	69	\$ 145.957,45	\$ 24.838.666,61
2015	M13	\$ 107.377	1,97%	69	\$ 145.957,45	\$ 24.984.624,06
2015	07	\$ 107.377	1,97%	68	\$ 143.842,12	\$ 25.128.466,18
2015	08	\$ 107.377	1,97%	67	\$ 141.726,80	\$ 25.270.192,97
2015	09	\$ 107.377	1,97%	66	\$ 139.611,47	\$ 25.409.804,45
2015	10	\$ 107.377	1,97%	65	\$ 137.496,15	\$ 25.547.300,59
2015	11	\$ 107.377	1,97%	64	\$ 135.380,82	\$ 25.682.681,41
2015	12	\$ 107.377	1,97%	63	\$ 133.265,50	\$ 25.815.946,91
2015	M14	\$ 107.377	1,97%	63	\$ 133.265,50	\$ 25.949.212,40
2016	01	\$ 114.646	1,97%	62	\$ 140.029,04	\$ 26.089.241,44
2016	02	\$ 114.646	1,97%	61	\$ 137.770,51	\$ 26.227.011,95
2016	03	\$ 114.646	1,97%	60	\$ 135.511,97	\$ 26.362.523,92
2016	04	\$ 114.646	1,97%	59	\$ 133.253,44	\$ 26.495.777,36
2016	05	\$ 114.646	1,97%	58	\$ 130.994,91	\$ 26.626.772,27
2016	06	\$ 114.646	1,97%	57	\$ 128.736,38	\$ 26.755.508,65
2016	M13	\$ 114.646	1,97%	57	\$ 128.736,38	\$ 26.884.245,02
2016	07	\$ 114.646	1,97%	56	\$ 126.477,84	\$ 27.010.722,86
2016	08	\$ 114.646	1,97%	55	\$ 124.219,31	\$ 27.134.942,17
2016	09	\$ 114.646	1,97%	54	\$ 121.960,78	\$ 27.256.902,95
2016	10	\$ 114.646	1,97%	53	\$ 119.702,24	\$ 27.376.605,19
2016	11	\$ 114.646	1,97%	52	\$ 117.443,71	\$ 27.494.048,91
2016	12	\$ 114.646	1,97%	51	\$ 115.185,18	\$ 27.609.234,08
2016	M14	\$ 114.646	1,97%	51	\$ 115.185,18	\$ 27.724.419,26
2017	01	\$ 121.239	1,97%	50	\$ 119.419,93	\$ 27.843.839,19
2017	02	\$ 121.239	1,97%	49	\$ 117.031,53	\$ 27.960.870,73
2017	03	\$ 121.239	1,97%	48	\$ 114.643,14	\$ 28.075.513,86
2017	04	\$ 121.239	1,97%	47	\$ 112.254,74	\$ 28.187.768,60
2017	05	\$ 121.239	1,97%	46	\$ 109.866,34	\$ 28.297.634,94
2017	06	\$ 121.239	1,97%	45	\$ 107.477,94	\$ 28.405.112,88
2017	M13	\$ 121.239	1,97%	45	\$ 107.477,94	\$ 28.512.590,81
2017	07	\$ 121.239	1,97%	44	\$ 105.089,54	\$ 28.617.680,35
2017	08	\$ 121.239	1,97%	43	\$ 102.701,14	\$ 28.720.381,50
2017	09	\$ 121.239	1,97%	42	\$ 100.312,74	\$ 28.820.694,24
2017	10	\$ 121.239	1,97%	41	\$ 97.924,34	\$ 28.918.618,58
2017	11	\$ 121.239	1,97%	40	\$ 95.535,95	\$ 29.014.154,53
2017	12	\$ 121.239	1,97%	39	\$ 93.147,55	\$ 29.107.302,08
2017	M14	\$ 121.239	1,97%	39	\$ 93.147,55	\$ 29.200.449,62
2018	01	\$ 126.197	1,97%	38	\$ 94.471,19	\$ 29.294.920,82
2018	02	\$ 126.197	1,97%	37	\$ 91.985,11	\$ 29.386.905,93
2018	03	\$ 126.197	1,97%	36	\$ 89.499,03	\$ 29.476.404,95
2018	04	\$ 126.197	1,97%	35	\$ 87.012,94	\$ 29.563.417,90
2018	05	\$ 126.197	1,97%	34	\$ 84.526,86	\$ 29.647.944,75
2018	06	\$ 126.197	1,97%	33	\$ 82.040,77	\$ 29.729.985,53
2018	M13	\$ 126.197	1,97%	33	\$ 82.040,77	\$ 29.812.026,30
2018	07	\$ 126.197	1,97%	32	\$ 79.554,69	\$ 29.891.580,99
2018	08	\$ 126.197	1,97%	31	\$ 77.068,61	\$ 29.968.649,60
2018	09	\$ 126.197	1,97%	30	\$ 74.582,52	\$ 30.043.232,12
2018	10	\$ 126.197	1,97%	29	\$ 72.096,44	\$ 30.115.328,56
2018	11	\$ 126.197	1,97%	28	\$ 69.610,35	\$ 30.184.938,91
2018	12	\$ 126.197	1,97%	27	\$ 67.124,27	\$ 30.252.063,18
2018	M14	\$ 126.197	1,97%	27	\$ 67.124,27	\$ 30.319.187,45
2019	01	\$ 130.210	1,97%	26	\$ 66.693,68	\$ 30.385.881,13
2019	02	\$ 130.210	1,97%	25	\$ 64.128,54	\$ 30.450.009,67

2019	03	\$ 130.210	1,97%	24	\$ 61.563,40	\$ 30.511.573,06
2019	04	\$ 130.210	1,97%	23	\$ 58.998,26	\$ 30.570.571,32
2019	05	\$ 130.210	1,97%	22	\$ 56.433,11	\$ 30.627.004,43
2019	06	\$ 130.210	1,97%	21	\$ 53.867,97	\$ 30.680.872,40
2019	M13	\$ 130.210	1,97%	21	\$ 53.867,97	\$ 30.734.740,38
2019	07	\$ 130.210	1,97%	20	\$ 51.302,83	\$ 30.786.043,21
2019	08	\$ 130.210	1,97%	19	\$ 48.737,69	\$ 30.834.780,90
2019	09	\$ 130.210	1,97%	18	\$ 46.172,55	\$ 30.880.953,44
2019	10	\$ 130.210	1,97%	17	\$ 43.607,41	\$ 30.924.560,85
2019	11	\$ 130.210	1,97%	16	\$ 41.042,26	\$ 30.965.603,11
2019	12	\$ 130.210	1,97%	15	\$ 38.477,12	\$ 31.004.080,24
2019	M14	\$ 130.210	1,97%	15	\$ 38.477,12	\$ 31.042.557,36
2020	01	\$ 135.158	1,97%	14	\$ 37.276,64	\$ 31.079.834,00
2020	02	\$ 135.158	1,97%	13	\$ 34.614,02	\$ 31.114.448,02
2020	03	\$ 135.158	1,97%	12	\$ 31.951,40	\$ 31.146.399,42
2020	04	\$ 135.158	1,97%	11	\$ 29.288,79	\$ 31.175.688,21
2020	05	\$ 135.158	1,97%	10	\$ 26.626,17	\$ 31.202.314,38
2020	06	\$ 135.158	1,97%	9	\$ 23.963,55	\$ 31.226.277,93
2020	M13	\$ 135.158	1,97%	9	\$ 23.963,55	\$ 31.250.241,48
2020	07	\$ 135.158	1,97%	8	\$ 21.300,94	\$ 31.271.542,42
2020	08	\$ 135.158	1,97%	7	\$ 18.638,32	\$ 31.290.180,73
2020	09	\$ 135.158	1,97%	6	\$ 15.975,70	\$ 31.306.156,44
2020	10	\$ 135.158	1,97%	5	\$ 13.313,08	\$ 31.319.469,52
2020	11	\$ 135.158	1,97%	4	\$ 10.650,47	\$ 31.330.119,99
2020	12	\$ 135.158	1,97%	3	\$ 7.987,85	\$ 31.338.107,84
2020	M14	\$ 135.158	1,97%	3	\$ 7.987,85	\$ 31.346.095,69
2021	01	\$ 137.334	1,97%	2	\$ 5.410,97	\$ 31.351.506,66
2021	02	\$ 137.334	1,97%	1	\$ 2.705,49	\$ 31.354.212,15

Retroactivo: \$20.752.439,62

Intereses de mora: \$31.354.212,15

6. JAIRO ENRIQUE JÁCOME RAMÍREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 165.285,16	7,67%	11	\$ 1.818.136,76
2009	\$ 177.962,53	2,00%	14	\$ 2.491.475,44
2010	\$ 181.521,78	3,17%	14	\$ 2.541.304,95
2011	\$ 187.276,02	3,73%	14	\$ 2.621.864,32
2012	\$ 194.261,42	2,44%	14	\$ 2.719.659,86
2013	\$ 199.001,40	1,94%	14	\$ 2.786.019,56
2014	\$ 202.862,02	3,66%	14	\$ 2.840.068,34
2015	\$ 210.286,77	6,77%	14	\$ 2.944.014,84
2016	\$ 224.523,19	5,75%	14	\$ 3.143.324,65
2017	\$ 237.433,27	4,09%	14	\$ 3.324.065,81
2018	\$ 247.144,29	3,18%	14	\$ 3.460.020,10
2019	\$ 255.003,48	3,80%	14	\$ 3.570.048,74
2020	\$ 264.693,61	1,61%	14	\$ 3.705.710,60
2021	\$ 268.955,18		2	\$ 537.910,36
				\$ 38.503.624,35

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	01		1,97%	158	\$ 0,00	\$ 0,00

2008	02	\$ 0	1,97%	157	\$ 0,00	\$ 0,00
2008	03	\$ 0	1,97%	156	\$ 0,00	\$ 0,00
2008	04	\$ 165.285	1,97%	155	\$ 504.698,24	\$ 504.698,24
2008	05	\$ 165.285	1,97%	154	\$ 501.442,12	\$ 1.006.140,35
2008	06	\$ 165.285	1,97%	153	\$ 498.186,00	\$ 1.504.326,36
2008	M13	\$ 165.285	1,97%	153	\$ 498.186,00	\$ 2.002.512,36
2008	07	\$ 165.285	1,97%	152	\$ 494.929,88	\$ 2.497.442,24
2008	08	\$ 165.285	1,97%	151	\$ 491.673,77	\$ 2.989.116,00
2008	09	\$ 165.285	1,97%	150	\$ 488.417,65	\$ 3.477.533,65
2008	10	\$ 165.285	1,97%	149	\$ 485.161,53	\$ 3.962.695,18
2008	11	\$ 165.285	1,97%	148	\$ 481.905,41	\$ 4.444.600,59
2008	12	\$ 165.285	1,97%	147	\$ 478.649,29	\$ 4.923.249,89
2008	M14	\$ 165.285	1,97%	147	\$ 478.649,29	\$ 5.401.899,18
2009	01	\$ 177.963	1,97%	146	\$ 511.855,83	\$ 5.913.755,01
2009	02	\$ 177.963	1,97%	145	\$ 508.349,97	\$ 6.422.104,98
2009	03	\$ 177.963	1,97%	144	\$ 504.844,11	\$ 6.926.949,09
2009	04	\$ 177.963	1,97%	143	\$ 501.338,24	\$ 7.428.287,33
2009	05	\$ 177.963	1,97%	142	\$ 497.832,38	\$ 7.926.119,71
2009	06	\$ 177.963	1,97%	141	\$ 494.326,52	\$ 8.420.446,23
2009	M13	\$ 177.963	1,97%	141	\$ 494.326,52	\$ 8.914.772,75
2009	07	\$ 177.963	1,97%	140	\$ 490.820,66	\$ 9.405.593,41
2009	08	\$ 177.963	1,97%	139	\$ 487.314,80	\$ 9.892.908,20
2009	09	\$ 177.963	1,97%	138	\$ 483.808,93	\$ 10.376.717,14
2009	10	\$ 177.963	1,97%	137	\$ 480.303,07	\$ 10.857.020,21
2009	11	\$ 177.963	1,97%	136	\$ 476.797,21	\$ 11.333.817,42
2009	12	\$ 177.963	1,97%	135	\$ 473.291,35	\$ 11.807.108,77
2009	M14	\$ 177.963	1,97%	135	\$ 473.291,35	\$ 12.280.400,12
2010	01	\$ 181.522	1,97%	134	\$ 479.181,19	\$ 12.759.581,31
2010	02	\$ 181.522	1,97%	133	\$ 475.605,22	\$ 13.235.186,53
2010	03	\$ 181.522	1,97%	132	\$ 472.029,24	\$ 13.707.215,76
2010	04	\$ 181.522	1,97%	131	\$ 468.453,26	\$ 14.175.669,02
2010	05	\$ 181.522	1,97%	130	\$ 464.877,28	\$ 14.640.546,30
2010	06	\$ 181.522	1,97%	129	\$ 461.301,30	\$ 15.101.847,60
2010	M13	\$ 181.522	1,97%	129	\$ 461.301,30	\$ 15.563.148,90
2010	07	\$ 181.522	1,97%	128	\$ 457.725,32	\$ 16.020.874,22
2010	08	\$ 181.522	1,97%	127	\$ 454.149,34	\$ 16.475.023,56
2010	09	\$ 181.522	1,97%	126	\$ 450.573,36	\$ 16.925.596,92
2010	10	\$ 181.522	1,97%	125	\$ 446.997,38	\$ 17.372.594,31
2010	11	\$ 181.522	1,97%	124	\$ 443.421,40	\$ 17.816.015,71
2010	12	\$ 181.522	1,97%	123	\$ 439.845,43	\$ 18.255.861,14
2010	M14	\$ 181.522	1,97%	123	\$ 439.845,43	\$ 18.695.706,56
2011	01	\$ 187.276	1,97%	122	\$ 450.099,19	\$ 19.145.805,75
2011	02	\$ 187.276	1,97%	121	\$ 446.409,85	\$ 19.592.215,60
2011	03	\$ 187.276	1,97%	120	\$ 442.720,51	\$ 20.034.936,11
2011	04	\$ 187.276	1,97%	119	\$ 439.031,17	\$ 20.473.967,28
2011	05	\$ 187.276	1,97%	118	\$ 435.341,84	\$ 20.909.309,12
2011	06	\$ 187.276	1,97%	117	\$ 431.652,50	\$ 21.340.961,62
2011	M13	\$ 187.276	1,97%	117	\$ 431.652,50	\$ 21.772.614,11
2011	07	\$ 187.276	1,97%	116	\$ 427.963,16	\$ 22.200.577,28
2011	08	\$ 187.276	1,97%	115	\$ 424.273,82	\$ 22.624.851,10
2011	09	\$ 187.276	1,97%	114	\$ 420.584,49	\$ 23.045.435,58
2011	10	\$ 187.276	1,97%	113	\$ 416.895,15	\$ 23.462.330,73
2011	11	\$ 187.276	1,97%	112	\$ 413.205,81	\$ 23.875.536,54
2011	12	\$ 187.276	1,97%	111	\$ 409.516,47	\$ 24.285.053,02
2011	M14	\$ 187.276	1,97%	111	\$ 409.516,47	\$ 24.694.569,49
2012	01	\$ 194.261	1,97%	110	\$ 420.964,50	\$ 25.115.533,99
2012	02	\$ 194.261	1,97%	109	\$ 417.137,55	\$ 25.532.671,53
2012	03	\$ 194.261	1,97%	108	\$ 413.310,60	\$ 25.945.982,13
2012	04	\$ 194.261	1,97%	107	\$ 409.483,65	\$ 26.355.465,78
2012	05	\$ 194.261	1,97%	106	\$ 405.656,70	\$ 26.761.122,47
2012	06	\$ 194.261	1,97%	105	\$ 401.829,75	\$ 27.162.952,22
2012	07	\$ 194.261	1,97%	105	\$ 401.829,75	\$ 27.564.781,97

2012	07	\$ 194.261	1,97%	104	\$ 398.002,80	\$ 27.962.784,77
2012	08	\$ 194.261	1,97%	103	\$ 394.175,85	\$ 28.356.960,61
2012	09	\$ 194.261	1,97%	102	\$ 390.348,90	\$ 28.747.309,51
2012	10	\$ 194.261	1,97%	101	\$ 386.521,95	\$ 29.133.831,46
2012	11	\$ 194.261	1,97%	100	\$ 382.695,00	\$ 29.516.526,46
2012	12	\$ 194.261	1,97%	99	\$ 378.868,05	\$ 29.895.394,50
2012	M14	\$ 194.261	1,97%	99	\$ 378.868,05	\$ 30.274.262,55
2013	01	\$ 199.001	1,97%	98	\$ 384.192,10	\$ 30.658.454,65
2013	02	\$ 199.001	1,97%	97	\$ 380.271,78	\$ 31.038.726,43
2013	03	\$ 199.001	1,97%	96	\$ 376.351,45	\$ 31.415.077,88
2013	04	\$ 199.001	1,97%	95	\$ 372.431,12	\$ 31.787.509,00
2013	05	\$ 199.001	1,97%	94	\$ 368.510,79	\$ 32.156.019,79
2013	06	\$ 199.001	1,97%	93	\$ 364.590,46	\$ 32.520.610,25
2013	M13	\$ 199.001	1,97%	93	\$ 364.590,46	\$ 32.885.200,72
2013	07	\$ 199.001	1,97%	92	\$ 360.670,14	\$ 33.245.870,86
2013	08	\$ 199.001	1,97%	91	\$ 356.749,81	\$ 33.602.620,67
2013	09	\$ 199.001	1,97%	90	\$ 352.829,48	\$ 33.955.450,15
2013	10	\$ 199.001	1,97%	89	\$ 348.909,15	\$ 34.304.359,30
2013	11	\$ 199.001	1,97%	88	\$ 344.988,83	\$ 34.649.348,13
2013	12	\$ 199.001	1,97%	87	\$ 341.068,50	\$ 34.990.416,63
2013	M14	\$ 199.001	1,97%	87	\$ 341.068,50	\$ 35.331.485,13
2014	01	\$ 202.862	1,97%	86	\$ 343.688,83	\$ 35.675.173,96
2014	02	\$ 202.862	1,97%	85	\$ 339.692,45	\$ 36.014.866,42
2014	03	\$ 202.862	1,97%	84	\$ 335.696,07	\$ 36.350.562,49
2014	04	\$ 202.862	1,97%	83	\$ 331.699,69	\$ 36.682.262,18
2014	05	\$ 202.862	1,97%	82	\$ 327.703,31	\$ 37.009.965,48
2014	06	\$ 202.862	1,97%	81	\$ 323.706,93	\$ 37.333.672,41
2014	M13	\$ 202.862	1,97%	81	\$ 323.706,93	\$ 37.657.379,33
2014	07	\$ 202.862	1,97%	80	\$ 319.710,54	\$ 37.977.089,88
2014	08	\$ 202.862	1,97%	79	\$ 315.714,16	\$ 38.292.804,04
2014	09	\$ 202.862	1,97%	78	\$ 311.717,78	\$ 38.604.521,82
2014	10	\$ 202.862	1,97%	77	\$ 307.721,40	\$ 38.912.243,22
2014	11	\$ 202.862	1,97%	76	\$ 303.725,02	\$ 39.215.968,23
2014	12	\$ 202.862	1,97%	75	\$ 299.728,63	\$ 39.515.696,87
2014	M14	\$ 202.862	1,97%	75	\$ 299.728,63	\$ 39.815.425,50
2015	01	\$ 210.287	1,97%	74	\$ 306.556,05	\$ 40.121.981,56
2015	02	\$ 210.287	1,97%	73	\$ 302.413,40	\$ 40.424.394,96
2015	03	\$ 210.287	1,97%	72	\$ 298.270,75	\$ 40.722.665,71
2015	04	\$ 210.287	1,97%	71	\$ 294.128,11	\$ 41.016.793,82
2015	05	\$ 210.287	1,97%	70	\$ 289.985,46	\$ 41.306.779,27
2015	06	\$ 210.287	1,97%	69	\$ 285.842,81	\$ 41.592.622,08
2015	M13	\$ 210.287	1,97%	69	\$ 285.842,81	\$ 41.878.464,89
2015	07	\$ 210.287	1,97%	68	\$ 281.700,16	\$ 42.160.165,04
2015	08	\$ 210.287	1,97%	67	\$ 277.557,51	\$ 42.437.722,55
2015	09	\$ 210.287	1,97%	66	\$ 273.414,86	\$ 42.711.137,41
2015	10	\$ 210.287	1,97%	65	\$ 269.272,21	\$ 42.980.409,62
2015	11	\$ 210.287	1,97%	64	\$ 265.129,56	\$ 43.245.539,18
2015	12	\$ 210.287	1,97%	63	\$ 260.986,91	\$ 43.506.526,09
2015	M14	\$ 210.287	1,97%	63	\$ 260.986,91	\$ 43.767.513,00
2016	01	\$ 224.523	1,97%	62	\$ 274.232,62	\$ 44.041.745,62
2016	02	\$ 224.523	1,97%	61	\$ 269.809,52	\$ 44.311.555,14
2016	03	\$ 224.523	1,97%	60	\$ 265.386,41	\$ 44.576.941,55
2016	04	\$ 224.523	1,97%	59	\$ 260.963,30	\$ 44.837.904,86
2016	05	\$ 224.523	1,97%	58	\$ 256.540,20	\$ 45.094.445,05
2016	06	\$ 224.523	1,97%	57	\$ 252.117,09	\$ 45.346.562,14
2016	M13	\$ 224.523	1,97%	57	\$ 252.117,09	\$ 45.598.679,23
2016	07	\$ 224.523	1,97%	56	\$ 247.693,98	\$ 45.846.373,22

2016	08	\$ 224.523	1,97%	55	\$ 243.270,88	\$ 46.089.644,09
2016	09	\$ 224.523	1,97%	54	\$ 238.847,77	\$ 46.328.491,86
2016	10	\$ 224.523	1,97%	53	\$ 234.424,66	\$ 46.562.916,52
2016	11	\$ 224.523	1,97%	52	\$ 230.001,56	\$ 46.792.918,08
2016	12	\$ 224.523	1,97%	51	\$ 225.578,45	\$ 47.018.496,53
2016	M14	\$ 224.523	1,97%	51	\$ 225.578,45	\$ 47.244.074,98
2017	01	\$ 237.433	1,97%	50	\$ 233.871,77	\$ 47.477.946,75
2017	02	\$ 237.433	1,97%	49	\$ 229.194,34	\$ 47.707.141,09
2017	03	\$ 237.433	1,97%	48	\$ 224.516,90	\$ 47.931.657,99
2017	04	\$ 237.433	1,97%	47	\$ 219.839,46	\$ 48.151.497,45
2017	05	\$ 237.433	1,97%	46	\$ 215.162,03	\$ 48.366.659,48
2017	06	\$ 237.433	1,97%	45	\$ 210.484,59	\$ 48.577.144,07
2017	M13	\$ 237.433	1,97%	45	\$ 210.484,59	\$ 48.787.628,67
2017	07	\$ 237.433	1,97%	44	\$ 205.807,16	\$ 48.993.435,83
2017	08	\$ 237.433	1,97%	43	\$ 201.129,72	\$ 49.194.565,55
2017	09	\$ 237.433	1,97%	42	\$ 196.452,29	\$ 49.391.017,84
2017	10	\$ 237.433	1,97%	41	\$ 191.774,85	\$ 49.582.792,69
2017	11	\$ 237.433	1,97%	40	\$ 187.097,42	\$ 49.769.890,11
2017	12	\$ 237.433	1,97%	39	\$ 182.419,98	\$ 49.952.310,09
2017	M14	\$ 237.433	1,97%	39	\$ 182.419,98	\$ 50.134.730,07
2018	01	\$ 247.144	1,97%	38	\$ 185.012,22	\$ 50.319.742,28
2018	02	\$ 247.144	1,97%	37	\$ 180.143,47	\$ 50.499.885,76
2018	03	\$ 247.144	1,97%	36	\$ 175.274,73	\$ 50.675.160,49
2018	04	\$ 247.144	1,97%	35	\$ 170.405,99	\$ 50.845.566,47
2018	05	\$ 247.144	1,97%	34	\$ 165.537,25	\$ 51.011.103,72
2018	06	\$ 247.144	1,97%	33	\$ 160.668,50	\$ 51.171.772,22
2018	M13	\$ 247.144	1,97%	33	\$ 160.668,50	\$ 51.332.440,73
2018	07	\$ 247.144	1,97%	32	\$ 155.799,76	\$ 51.488.240,49
2018	08	\$ 247.144	1,97%	31	\$ 150.931,02	\$ 51.639.171,50
2018	09	\$ 247.144	1,97%	30	\$ 146.062,28	\$ 51.785.233,78
2018	10	\$ 247.144	1,97%	29	\$ 141.193,53	\$ 51.926.427,31
2018	11	\$ 247.144	1,97%	28	\$ 136.324,79	\$ 52.062.752,10
2018	12	\$ 247.144	1,97%	27	\$ 131.456,05	\$ 52.194.208,15
2018	M14	\$ 247.144	1,97%	27	\$ 131.456,05	\$ 52.325.664,20
2019	01	\$ 255.003	1,97%	26	\$ 130.612,78	\$ 52.456.276,98
2019	02	\$ 255.003	1,97%	25	\$ 125.589,21	\$ 52.581.866,19
2019	03	\$ 255.003	1,97%	24	\$ 120.565,65	\$ 52.702.431,84
2019	04	\$ 255.003	1,97%	23	\$ 115.542,08	\$ 52.817.973,92
2019	05	\$ 255.003	1,97%	22	\$ 110.518,51	\$ 52.928.492,43
2019	06	\$ 255.003	1,97%	21	\$ 105.494,94	\$ 53.033.987,36
2019	M13	\$ 255.003	1,97%	21	\$ 105.494,94	\$ 53.139.482,30
2019	07	\$ 255.003	1,97%	20	\$ 100.471,37	\$ 53.239.953,68
2019	08	\$ 255.003	1,97%	19	\$ 95.447,80	\$ 53.335.401,48
2019	09	\$ 255.003	1,97%	18	\$ 90.424,23	\$ 53.425.825,71
2019	10	\$ 255.003	1,97%	17	\$ 85.400,67	\$ 53.511.226,38
2019	11	\$ 255.003	1,97%	16	\$ 80.377,10	\$ 53.591.603,47
2019	12	\$ 255.003	1,97%	15	\$ 75.353,53	\$ 53.666.957,00
2019	M14	\$ 255.003	1,97%	15	\$ 75.353,53	\$ 53.742.310,53
2020	01	\$ 264.694	1,97%	14	\$ 73.002,50	\$ 53.815.313,03
2020	02	\$ 264.694	1,97%	13	\$ 67.788,03	\$ 53.883.101,06
2020	03	\$ 264.694	1,97%	12	\$ 62.573,57	\$ 53.945.674,63
2020	04	\$ 264.694	1,97%	11	\$ 57.359,11	\$ 54.003.033,74
2020	05	\$ 264.694	1,97%	10	\$ 52.144,64	\$ 54.055.178,38
2020	06	\$ 264.694	1,97%	9	\$ 46.930,18	\$ 54.102.108,56
2020	M13	\$ 264.694	1,97%	9	\$ 46.930,18	\$ 54.149.038,73
2020	07	\$ 264.694	1,97%	8	\$ 41.715,71	\$ 54.190.754,45
2020	08	\$ 264.694	1,97%	7	\$ 36.501,25	\$ 54.227.255,69

2020	09	\$ 264.694	1,97%	6	\$ 31.286,78	\$ 54.258.542,48
2020	10	\$ 264.694	1,97%	5	\$ 26.072,32	\$ 54.284.614,80
2020	11	\$ 264.694	1,97%	4	\$ 20.857,86	\$ 54.305.472,66
2020	12	\$ 264.694	1,97%	3	\$ 15.643,39	\$ 54.321.116,05
2020	M14	\$ 264.694	1,97%	3	\$ 15.643,39	\$ 54.336.759,44
2021	01	\$ 268.955	1,97%	2	\$ 10.596,83	\$ 54.347.356,27
2021	02	\$ 268.955	1,97%	1	\$ 5.298,42	\$ 54.352.654,69

Retroactivo: \$38.503.624,35

Intereses de mora: \$54.352.654,69

7. JAIME EFRAÍN HERNÁNDEZ DELGADO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2005		4,85%		\$ -
2006		4,48%		\$ -
2007		5,69%		\$ -
2008		7,67%	11	\$ -
2009	\$ 119.789,36	2,00%	14	\$ 1.317.682,96
2010	\$ 122.185,15	3,17%	14	\$ 1.710.592,06
2011	\$ 126.058,42	3,73%	14	\$ 1.764.817,83
2012	\$ 130.760,40	2,44%	14	\$ 1.830.645,53
2013	\$ 133.950,95	1,94%	14	\$ 1.875.313,29
2014	\$ 136.549,60	3,66%	14	\$ 1.911.694,36
2015	\$ 141.547,31	6,77%	14	\$ 1.981.662,38
2016	\$ 151.130,07	5,75%	14	\$ 2.115.820,92
2017	\$ 159.820,04	4,09%	14	\$ 2.237.480,62
2018	\$ 166.356,68	3,18%	14	\$ 2.328.993,58
2019	\$ 171.646,83	3,80%	14	\$ 2.403.055,58
2020	\$ 178.169,41	1,61%	14	\$ 2.494.371,69
2021	\$ 181.037,93		2	\$ 362.075,87
				\$ 24.334.206,66

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2009	01		1,97%	146	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	02	\$ 0	1,97%	145	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	03	\$ 0	1,97%	144	\$ 0,00	\$ 0,00
2009	04	\$ 119.789	1,97%	143	\$ 337.458,61	\$ 337.458,61
2009	05	\$ 119.789	1,97%	142	\$ 335.098,76	\$ 672.557,36
2009	06	\$ 119.789	1,97%	141	\$ 332.738,91	\$ 1.005.296,27
2009	M13	\$ 119.789	1,97%	141	\$ 332.738,91	\$ 1.338.035,17
2009	07	\$ 119.789	1,97%	140	\$ 330.379,05	\$ 1.668.414,23
2009	08	\$ 119.789	1,97%	139	\$ 328.019,20	\$ 1.996.433,43
2009	09	\$ 119.789	1,97%	138	\$ 325.659,35	\$ 2.322.092,79
2009	10	\$ 119.789	1,97%	137	\$ 323.299,50	\$ 2.645.392,29
2009	11	\$ 119.789	1,97%	136	\$ 320.939,65	\$ 2.966.331,94
2009	12	\$ 119.789	1,97%	135	\$ 318.579,80	\$ 3.284.911,75
2009	M14	\$ 119.789	1,97%	135	\$ 318.579,80	\$ 3.603.491,55
2010	01	\$ 122.185	1,97%	134	\$ 322.544,36	\$ 3.926.035,91
2010	02	\$ 122.185	1,97%	133	\$ 320.137,31	\$ 4.246.173,22
2010	03	\$ 122.185	1,97%	132	\$ 317.730,26	\$ 4.563.903,48
2010	04	\$ 122.185	1,97%	131	\$ 315.323,22	\$ 4.879.226,70
2010	05	\$ 122.185	1,97%	130	\$ 312.916,17	\$ 5.192.142,87
2010	06	\$ 122.185	1,97%	129	\$ 310.509,12	\$ 5.502.651,99

2010	M13	\$ 122.185	1,97%	129	\$ 310.509,12	\$ 5.813.161,11
2010	07	\$ 122.185	1,97%	128	\$ 308.102,07	\$ 6.121.263,19
2010	08	\$ 122.185	1,97%	127	\$ 305.695,03	\$ 6.426.958,21
2010	09	\$ 122.185	1,97%	126	\$ 303.287,98	\$ 6.730.246,19
2010	10	\$ 122.185	1,97%	125	\$ 300.880,93	\$ 7.031.127,12
2010	11	\$ 122.185	1,97%	124	\$ 298.473,88	\$ 7.329.601,01
2010	12	\$ 122.185	1,97%	123	\$ 296.066,84	\$ 7.625.667,85
2010	M14	\$ 122.185	1,97%	123	\$ 296.066,84	\$ 7.921.734,68
2011	01	\$ 126.058	1,97%	122	\$ 302.968,81	\$ 8.224.703,49
2011	02	\$ 126.058	1,97%	121	\$ 300.485,46	\$ 8.525.188,95
2011	03	\$ 126.058	1,97%	120	\$ 298.002,10	\$ 8.823.191,05
2011	04	\$ 126.058	1,97%	119	\$ 295.518,75	\$ 9.118.709,80
2011	05	\$ 126.058	1,97%	118	\$ 293.035,40	\$ 9.411.745,21
2011	06	\$ 126.058	1,97%	117	\$ 290.552,05	\$ 9.702.297,26
2011	M13	\$ 126.058	1,97%	117	\$ 290.552,05	\$ 9.992.849,31
2011	07	\$ 126.058	1,97%	116	\$ 288.068,70	\$ 10.280.918,01
2011	08	\$ 126.058	1,97%	115	\$ 285.585,35	\$ 10.566.503,36
2011	09	\$ 126.058	1,97%	114	\$ 283.102,00	\$ 10.849.605,36
2011	10	\$ 126.058	1,97%	113	\$ 280.618,65	\$ 11.130.224,01
2011	11	\$ 126.058	1,97%	112	\$ 278.135,30	\$ 11.408.359,31
2011	12	\$ 126.058	1,97%	111	\$ 275.651,95	\$ 11.684.011,26
2011	M14	\$ 126.058	1,97%	111	\$ 275.651,95	\$ 11.959.663,20
2012	01	\$ 130.760	1,97%	110	\$ 283.357,79	\$ 12.243.020,99
2012	02	\$ 130.760	1,97%	109	\$ 280.781,81	\$ 12.523.802,80
2012	03	\$ 130.760	1,97%	108	\$ 278.205,83	\$ 12.802.008,62
2012	04	\$ 130.760	1,97%	107	\$ 275.629,85	\$ 13.077.638,47
2012	05	\$ 130.760	1,97%	106	\$ 273.053,87	\$ 13.350.692,34
2012	06	\$ 130.760	1,97%	105	\$ 270.477,89	\$ 13.621.170,23
2012	M13	\$ 130.760	1,97%	105	\$ 270.477,89	\$ 13.891.648,11
2012	07	\$ 130.760	1,97%	104	\$ 267.901,91	\$ 14.159.550,02
2012	08	\$ 130.760	1,97%	103	\$ 265.325,93	\$ 14.424.875,95
2012	09	\$ 130.760	1,97%	102	\$ 262.749,95	\$ 14.687.625,90
2012	10	\$ 130.760	1,97%	101	\$ 260.173,97	\$ 14.947.799,86
2012	11	\$ 130.760	1,97%	100	\$ 257.597,99	\$ 15.205.397,85
2012	12	\$ 130.760	1,97%	99	\$ 255.022,01	\$ 15.460.419,86
2012	M14	\$ 130.760	1,97%	99	\$ 255.022,01	\$ 15.715.441,87
2013	01	\$ 133.951	1,97%	98	\$ 258.605,70	\$ 15.974.047,57
2013	02	\$ 133.951	1,97%	97	\$ 255.966,87	\$ 16.230.014,44
2013	03	\$ 133.951	1,97%	96	\$ 253.328,04	\$ 16.483.342,48
2013	04	\$ 133.951	1,97%	95	\$ 250.689,20	\$ 16.734.031,68
2013	05	\$ 133.951	1,97%	94	\$ 248.050,37	\$ 16.982.082,05
2013	06	\$ 133.951	1,97%	93	\$ 245.411,54	\$ 17.227.493,59
2013	07	\$ 133.951	1,97%	93	\$ 245.411,54	\$ 17.472.905,12
2013	07	\$ 133.951	1,97%	92	\$ 242.772,70	\$ 17.715.677,82
2013	08	\$ 133.951	1,97%	91	\$ 240.133,87	\$ 17.955.811,69
2013	09	\$ 133.951	1,97%	90	\$ 237.495,03	\$ 18.193.306,73
2013	10	\$ 133.951	1,97%	89	\$ 234.856,20	\$ 18.428.162,93
2013	11	\$ 133.951	1,97%	88	\$ 232.217,37	\$ 18.660.380,29
2013	12	\$ 133.951	1,97%	87	\$ 229.578,53	\$ 18.889.958,83
2013	M14	\$ 133.951	1,97%	87	\$ 229.578,53	\$ 19.119.537,36
2014	01	\$ 136.550	1,97%	86	\$ 231.342,33	\$ 19.350.879,69
2014	02	\$ 136.550	1,97%	85	\$ 228.652,31	\$ 19.579.532,00
2014	03	\$ 136.550	1,97%	84	\$ 225.962,28	\$ 19.805.494,28
2014	04	\$ 136.550	1,97%	83	\$ 223.272,25	\$ 20.028.766,53
2014	05	\$ 136.550	1,97%	82	\$ 220.582,22	\$ 20.249.348,75
2014	06	\$ 136.550	1,97%	81	\$ 217.892,20	\$ 20.467.240,95
2014	M13	\$ 136.550	1,97%	81	\$ 217.892,20	\$ 20.685.133,15
2014	07	\$ 136.550	1,97%	80	\$ 215.202,17	\$ 20.900.335,31
2014	08	\$ 136.550	1,97%	79	\$ 212.512,14	\$ 21.112.847,46
2014	09	\$ 136.550	1,97%	78	\$ 209.822,12	\$ 21.322.669,57
2014	10	\$ 136.550	1,97%	77	\$ 207.132,09	\$ 21.529.801,66

2014	11	\$ 136.550	1,97%	76	\$ 204.442,06	\$ 21.734.243,72
2014	12	\$ 136.550	1,97%	75	\$ 201.752,03	\$ 21.935.995,76
2014	M14	\$ 136.550	1,97%	75	\$ 201.752,03	\$ 22.137.747,79
2015	01	\$ 141.547	1,97%	74	\$ 206.347,67	\$ 22.344.095,46
2015	02	\$ 141.547	1,97%	73	\$ 203.559,19	\$ 22.547.654,65
2015	03	\$ 141.547	1,97%	72	\$ 200.770,70	\$ 22.748.425,35
2015	04	\$ 141.547	1,97%	71	\$ 197.982,22	\$ 22.946.407,57
2015	05	\$ 141.547	1,97%	70	\$ 195.193,74	\$ 23.141.601,31
2015	06	\$ 141.547	1,97%	69	\$ 192.405,26	\$ 23.334.006,57
2015	M13	\$ 141.547	1,97%	69	\$ 192.405,26	\$ 23.526.411,83
2015	07	\$ 141.547	1,97%	68	\$ 189.616,78	\$ 23.716.028,61
2015	08	\$ 141.547	1,97%	67	\$ 186.828,29	\$ 23.902.856,90
2015	09	\$ 141.547	1,97%	66	\$ 184.039,81	\$ 24.086.896,71
2015	10	\$ 141.547	1,97%	65	\$ 181.251,33	\$ 24.268.148,04
2015	11	\$ 141.547	1,97%	64	\$ 178.462,85	\$ 24.446.610,89
2015	12	\$ 141.547	1,97%	63	\$ 175.674,37	\$ 24.622.285,26
2015	M14	\$ 141.547	1,97%	63	\$ 175.674,37	\$ 24.797.959,62
2016	01	\$ 151.130	1,97%	62	\$ 184.590,27	\$ 24.982.549,89
2016	02	\$ 151.130	1,97%	61	\$ 181.613,01	\$ 25.164.162,90
2016	03	\$ 151.130	1,97%	60	\$ 178.635,74	\$ 25.342.798,64
2016	04	\$ 151.130	1,97%	59	\$ 175.658,48	\$ 25.518.457,12
2016	05	\$ 151.130	1,97%	58	\$ 172.681,22	\$ 25.691.138,34
2016	06	\$ 151.130	1,97%	57	\$ 169.703,96	\$ 25.860.842,29
2016	M13	\$ 151.130	1,97%	57	\$ 169.703,96	\$ 26.030.546,25
2016	07	\$ 151.130	1,97%	56	\$ 166.726,69	\$ 26.197.272,94
2016	08	\$ 151.130	1,97%	55	\$ 163.749,43	\$ 26.361.022,37
2016	09	\$ 151.130	1,97%	54	\$ 160.772,17	\$ 26.521.794,54
2016	10	\$ 151.130	1,97%	53	\$ 157.794,91	\$ 26.679.589,45
2016	11	\$ 151.130	1,97%	52	\$ 154.817,64	\$ 26.834.407,09
2016	12	\$ 151.130	1,97%	51	\$ 151.840,38	\$ 26.986.247,47
2016	M14	\$ 151.130	1,97%	51	\$ 151.840,38	\$ 27.138.087,85
2017	01	\$ 159.820	1,97%	50	\$ 157.422,74	\$ 27.295.510,59
2017	02	\$ 159.820	1,97%	49	\$ 154.274,28	\$ 27.449.784,88
2017	03	\$ 159.820	1,97%	48	\$ 151.125,83	\$ 27.600.910,71
2017	04	\$ 159.820	1,97%	47	\$ 147.977,38	\$ 27.748.888,08
2017	05	\$ 159.820	1,97%	46	\$ 144.828,92	\$ 27.893.717,00
2017	06	\$ 159.820	1,97%	45	\$ 141.680,47	\$ 28.035.397,47
2017	M13	\$ 159.820	1,97%	45	\$ 141.680,47	\$ 28.177.077,93
2017	07	\$ 159.820	1,97%	44	\$ 138.532,01	\$ 28.315.609,95
2017	08	\$ 159.820	1,97%	43	\$ 135.383,56	\$ 28.450.993,50
2017	09	\$ 159.820	1,97%	42	\$ 132.235,10	\$ 28.583.228,60
2017	10	\$ 159.820	1,97%	41	\$ 129.086,65	\$ 28.712.315,25
2017	11	\$ 159.820	1,97%	40	\$ 125.938,19	\$ 28.838.253,44
2017	12	\$ 159.820	1,97%	39	\$ 122.789,74	\$ 28.961.043,18
2017	M14	\$ 159.820	1,97%	39	\$ 122.789,74	\$ 29.083.832,91
2018	01	\$ 166.357	1,97%	38	\$ 124.534,61	\$ 29.208.367,52
2018	02	\$ 166.357	1,97%	37	\$ 121.257,38	\$ 29.329.624,91
2018	03	\$ 166.357	1,97%	36	\$ 117.980,16	\$ 29.447.605,07
2018	04	\$ 166.357	1,97%	35	\$ 114.702,93	\$ 29.562.308,00
2018	05	\$ 166.357	1,97%	34	\$ 111.425,70	\$ 29.673.733,70
2018	06	\$ 166.357	1,97%	33	\$ 108.148,48	\$ 29.781.882,18
2018	M13	\$ 166.357	1,97%	33	\$ 108.148,48	\$ 29.890.030,66
2018	07	\$ 166.357	1,97%	32	\$ 104.871,25	\$ 29.994.901,91
2018	08	\$ 166.357	1,97%	31	\$ 101.594,02	\$ 30.096.495,93
2018	09	\$ 166.357	1,97%	30	\$ 98.316,80	\$ 30.194.812,73
2018	10	\$ 166.357	1,97%	29	\$ 95.039,57	\$ 30.289.852,30
2018	11	\$ 166.357	1,97%	28	\$ 91.762,34	\$ 30.381.614,65

2018	12	\$ 166.357	1,97%	27	\$ 88.485,12	\$ 30.470.099,76
2018	M14	\$ 166.357	1,97%	27	\$ 88.485,12	\$ 30.558.584,88
2019	01	\$ 171.647	1,97%	26	\$ 87.917,51	\$ 30.646.502,39
2019	02	\$ 171.647	1,97%	25	\$ 84.536,06	\$ 30.731.038,45
2019	03	\$ 171.647	1,97%	24	\$ 81.154,62	\$ 30.812.193,07
2019	04	\$ 171.647	1,97%	23	\$ 77.773,18	\$ 30.889.966,25
2019	05	\$ 171.647	1,97%	22	\$ 74.391,74	\$ 30.964.357,99
2019	06	\$ 171.647	1,97%	21	\$ 71.010,29	\$ 31.035.368,28
2019	M13	\$ 171.647	1,97%	21	\$ 71.010,29	\$ 31.106.378,58
2019	07	\$ 171.647	1,97%	20	\$ 67.628,85	\$ 31.174.007,43
2019	08	\$ 171.647	1,97%	19	\$ 64.247,41	\$ 31.238.254,83
2019	09	\$ 171.647	1,97%	18	\$ 60.865,97	\$ 31.299.120,80
2019	10	\$ 171.647	1,97%	17	\$ 57.484,52	\$ 31.356.605,32
2019	11	\$ 171.647	1,97%	16	\$ 54.103,08	\$ 31.410.708,40
2019	12	\$ 171.647	1,97%	15	\$ 50.721,64	\$ 31.461.430,04
2019	M14	\$ 171.647	1,97%	15	\$ 50.721,64	\$ 31.512.151,68
2020	01	\$ 178.169	1,97%	14	\$ 49.139,12	\$ 31.561.290,80
2020	02	\$ 178.169	1,97%	13	\$ 45.629,19	\$ 31.606.919,99
2020	03	\$ 178.169	1,97%	12	\$ 42.119,25	\$ 31.649.039,24
2020	04	\$ 178.169	1,97%	11	\$ 38.609,31	\$ 31.687.648,55
2020	05	\$ 178.169	1,97%	10	\$ 35.099,37	\$ 31.722.747,92
2020	06	\$ 178.169	1,97%	9	\$ 31.589,44	\$ 31.754.337,36
2020	M13	\$ 178.169	1,97%	9	\$ 31.589,44	\$ 31.785.926,80
2020	07	\$ 178.169	1,97%	8	\$ 28.079,50	\$ 31.814.006,30
2020	08	\$ 178.169	1,97%	7	\$ 24.569,56	\$ 31.838.575,86
2020	09	\$ 178.169	1,97%	6	\$ 21.059,62	\$ 31.859.635,48
2020	10	\$ 178.169	1,97%	5	\$ 17.549,69	\$ 31.877.185,17
2020	11	\$ 178.169	1,97%	4	\$ 14.039,75	\$ 31.891.224,92
2020	12	\$ 178.169	1,97%	3	\$ 10.529,81	\$ 31.901.754,73
2020	M14	\$ 178.169	1,97%	3	\$ 10.529,81	\$ 31.912.284,54
2021	01	\$ 181.038	1,97%	2	\$ 7.132,89	\$ 31.919.417,44
2021	02	\$ 181.038	1,97%	1	\$ 3.566,45	\$ 31.922.983,88

Retroactivo: \$24.693.574,74

Intereses de mora: \$31.922.983,88

8. NELSON GUILLERMO LARIOS RODRÍGUEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 65.489,13	4,48%	5	\$ 327.445,65
2007	\$ 68.423,04	5,69%	14	\$ 957.922,60
2008	\$ 72.316,31	7,67%	14	\$ 1.012.428,40
2009	\$ 77.862,98	2,00%	14	\$ 1.090.081,66
2010	\$ 79.420,23	3,17%	14	\$ 1.111.883,29
2011	\$ 81.937,86	3,73%	14	\$ 1.147.129,99
2012	\$ 84.994,14	2,44%	14	\$ 1.189.917,94
2013	\$ 87.068,00	1,94%	14	\$ 1.218.951,94
2014	\$ 88.757,11	3,66%	14	\$ 1.242.599,60
2015	\$ 92.005,62	6,77%	14	\$ 1.288.078,75
2016	\$ 98.234,41	5,75%	14	\$ 1.375.281,68
2017	\$ 103.882,88	4,09%	14	\$ 1.454.360,38
2018	\$ 108.131,69	3,18%	14	\$ 1.513.843,72
2019	\$ 111.570,28	3,80%	14	\$ 1.561.983,95
2020	\$ 115.809,95	1,61%	14	\$ 1.621.339,34

2021	\$ 117.674,49		2	\$ 235.348,99
				\$ 18.348.597,86

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	01		1,97%	182	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	02	\$ 0	1,97%	181	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	03	\$ 0	1,97%	180	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	04	\$ 0	1,97%	179	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	05	\$ 0	1,97%	178	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	06	\$ 0	1,97%	177	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	M13	\$ 0	1,97%	177	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	07	\$ 0	1,97%	176	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	08	\$ 0	1,97%	175	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	09	\$ 65.489	1,97%	174	\$ 224.483,64	\$ 224.483,64
2006	10	\$ 65.489	1,97%	173	\$ 223.193,50	\$ 447.677,14
2006	11	\$ 65.489	1,97%	172	\$ 221.903,37	\$ 669.580,51
2006	12	\$ 65.489	1,97%	171	\$ 220.613,23	\$ 890.193,74
2006	M14	\$ 65.489	1,97%	171	\$ 220.613,23	\$ 1.110.806,98
2007	01	\$ 68.423	1,97%	170	\$ 229.148,76	\$ 1.339.955,74
2007	02	\$ 68.423	1,97%	169	\$ 227.800,83	\$ 1.567.756,56
2007	03	\$ 68.423	1,97%	168	\$ 226.452,89	\$ 1.794.209,46
2007	04	\$ 68.423	1,97%	167	\$ 225.104,96	\$ 2.019.314,42
2007	05	\$ 68.423	1,97%	166	\$ 223.757,03	\$ 2.243.071,44
2007	06	\$ 68.423	1,97%	165	\$ 222.409,09	\$ 2.465.480,53
2007	M13	\$ 68.423	1,97%	165	\$ 222.409,09	\$ 2.687.889,63
2007	07	\$ 68.423	1,97%	164	\$ 221.061,16	\$ 2.908.950,78
2007	08	\$ 68.423	1,97%	163	\$ 219.713,22	\$ 3.128.664,01
2007	09	\$ 68.423	1,97%	162	\$ 218.365,29	\$ 3.347.029,30
2007	10	\$ 68.423	1,97%	161	\$ 217.017,36	\$ 3.564.046,65
2007	11	\$ 68.423	1,97%	160	\$ 215.669,42	\$ 3.779.716,07
2007	12	\$ 68.423	1,97%	159	\$ 214.321,49	\$ 3.994.037,56
2007	M14	\$ 68.423	1,97%	159	\$ 214.321,49	\$ 4.208.359,05
2008	01	\$ 72.316	1,97%	158	\$ 225.091,75	\$ 4.433.450,80
2008	02	\$ 72.316	1,97%	157	\$ 223.667,12	\$ 4.657.117,91
2008	03	\$ 72.316	1,97%	156	\$ 222.242,48	\$ 4.879.360,40
2008	04	\$ 72.316	1,97%	155	\$ 220.817,85	\$ 5.100.178,25
2008	05	\$ 72.316	1,97%	154	\$ 219.393,22	\$ 5.319.571,47
2008	06	\$ 72.316	1,97%	153	\$ 217.968,59	\$ 5.537.540,06
2008	M13	\$ 72.316	1,97%	153	\$ 217.968,59	\$ 5.755.508,65
2008	07	\$ 72.316	1,97%	152	\$ 216.543,96	\$ 5.972.052,61
2008	08	\$ 72.316	1,97%	151	\$ 215.119,33	\$ 6.187.171,94
2008	09	\$ 72.316	1,97%	150	\$ 213.694,70	\$ 6.400.866,63
2008	10	\$ 72.316	1,97%	149	\$ 212.270,06	\$ 6.613.136,70
2008	11	\$ 72.316	1,97%	148	\$ 210.845,43	\$ 6.823.982,13
2008	12	\$ 72.316	1,97%	147	\$ 209.420,80	\$ 7.033.402,93
2008	M14	\$ 72.316	1,97%	147	\$ 209.420,80	\$ 7.242.823,73
2009	01	\$ 77.863	1,97%	146	\$ 223.949,50	\$ 7.466.773,24
2009	02	\$ 77.863	1,97%	145	\$ 222.415,60	\$ 7.689.188,84
2009	03	\$ 77.863	1,97%	144	\$ 220.881,70	\$ 7.910.070,54
2009	04	\$ 77.863	1,97%	143	\$ 219.347,80	\$ 8.129.418,34
2009	05	\$ 77.863	1,97%	142	\$ 217.813,90	\$ 8.347.232,24
2009	06	\$ 77.863	1,97%	141	\$ 216.280,00	\$ 8.563.512,24
2009	M13	\$ 77.863	1,97%	141	\$ 216.280,00	\$ 8.779.792,24
2009	07	\$ 77.863	1,97%	140	\$ 214.746,10	\$ 8.994.538,34
2009	08	\$ 77.863	1,97%	139	\$ 213.212,20	\$ 9.207.750,54
2009	09	\$ 77.863	1,97%	138	\$ 211.678,30	\$ 9.419.428,84
2009	10	\$ 77.863	1,97%	137	\$ 210.144,40	\$ 9.629.573,23
2009	11	\$ 77.863	1,97%	136	\$ 208.610,50	\$ 9.838.183,73
2009	12	\$ 77.863	1,97%	135	\$ 207.076,60	\$ 10.045.260,32
2009	M14	\$ 77.863	1,97%	135	\$ 207.076,60	\$ 10.252.336,92

2010	01	\$ 79.420	1,97%	134	\$ 209.653,52	\$ 10.461.990,44
2010	02	\$ 79.420	1,97%	133	\$ 208.088,94	\$ 10.670.079,39
2010	03	\$ 79.420	1,97%	132	\$ 206.524,37	\$ 10.876.603,75
2010	04	\$ 79.420	1,97%	131	\$ 204.959,79	\$ 11.081.563,54
2010	05	\$ 79.420	1,97%	130	\$ 203.395,21	\$ 11.284.958,75
2010	06	\$ 79.420	1,97%	129	\$ 201.830,63	\$ 11.486.789,38
2010	07	\$ 79.420	1,97%	129	\$ 201.830,63	\$ 11.688.620,01
2010	07	\$ 79.420	1,97%	128	\$ 200.266,05	\$ 11.888.886,06
2010	08	\$ 79.420	1,97%	127	\$ 198.701,47	\$ 12.087.587,54
2010	09	\$ 79.420	1,97%	126	\$ 197.136,89	\$ 12.284.724,43
2010	10	\$ 79.420	1,97%	125	\$ 195.572,32	\$ 12.480.296,75
2010	11	\$ 79.420	1,97%	124	\$ 194.007,74	\$ 12.674.304,49
2010	12	\$ 79.420	1,97%	123	\$ 192.443,16	\$ 12.866.747,65
2010	M14	\$ 79.420	1,97%	123	\$ 192.443,16	\$ 13.059.190,80
2011	01	\$ 81.938	1,97%	122	\$ 196.929,45	\$ 13.256.120,26
2011	02	\$ 81.938	1,97%	121	\$ 195.315,28	\$ 13.451.435,53
2011	03	\$ 81.938	1,97%	120	\$ 193.701,10	\$ 13.645.136,64
2011	04	\$ 81.938	1,97%	119	\$ 192.086,93	\$ 13.837.223,56
2011	05	\$ 81.938	1,97%	118	\$ 190.472,75	\$ 14.027.696,31
2011	06	\$ 81.938	1,97%	117	\$ 188.858,57	\$ 14.216.554,88
2011	M13	\$ 81.938	1,97%	117	\$ 188.858,57	\$ 14.405.413,46
2011	07	\$ 81.938	1,97%	116	\$ 187.244,40	\$ 14.592.657,85
2011	08	\$ 81.938	1,97%	115	\$ 185.630,22	\$ 14.778.288,08
2011	09	\$ 81.938	1,97%	114	\$ 184.016,05	\$ 14.962.304,12
2011	10	\$ 81.938	1,97%	113	\$ 182.401,87	\$ 15.144.705,99
2011	11	\$ 81.938	1,97%	112	\$ 180.787,69	\$ 15.325.493,69
2011	12	\$ 81.938	1,97%	111	\$ 179.173,52	\$ 15.504.667,21
2011	M14	\$ 81.938	1,97%	111	\$ 179.173,52	\$ 15.683.840,72
2012	01	\$ 84.994	1,97%	110	\$ 184.182,30	\$ 15.868.023,03
2012	02	\$ 84.994	1,97%	109	\$ 182.507,92	\$ 16.050.530,94
2012	03	\$ 84.994	1,97%	108	\$ 180.833,53	\$ 16.231.364,47
2012	04	\$ 84.994	1,97%	107	\$ 179.159,15	\$ 16.410.523,62
2012	05	\$ 84.994	1,97%	106	\$ 177.484,76	\$ 16.588.008,39
2012	06	\$ 84.994	1,97%	105	\$ 175.810,38	\$ 16.763.818,76
2012	M13	\$ 84.994	1,97%	105	\$ 175.810,38	\$ 16.939.629,14
2012	07	\$ 84.994	1,97%	104	\$ 174.135,99	\$ 17.113.765,14
2012	08	\$ 84.994	1,97%	103	\$ 172.461,61	\$ 17.286.226,75
2012	09	\$ 84.994	1,97%	102	\$ 170.787,22	\$ 17.457.013,97
2012	10	\$ 84.994	1,97%	101	\$ 169.112,84	\$ 17.626.126,81
2012	11	\$ 84.994	1,97%	100	\$ 167.438,46	\$ 17.793.565,27
2012	12	\$ 84.994	1,97%	99	\$ 165.764,07	\$ 17.959.329,34
2012	M14	\$ 84.994	1,97%	99	\$ 165.764,07	\$ 18.125.093,41
2013	01	\$ 87.068	1,97%	98	\$ 168.093,48	\$ 18.293.186,89
2013	02	\$ 87.068	1,97%	97	\$ 166.378,24	\$ 18.459.565,13
2013	03	\$ 87.068	1,97%	96	\$ 164.663,00	\$ 18.624.228,13
2013	04	\$ 87.068	1,97%	95	\$ 162.947,76	\$ 18.787.175,89
2013	05	\$ 87.068	1,97%	94	\$ 161.232,52	\$ 18.948.408,42
2013	06	\$ 87.068	1,97%	93	\$ 159.517,28	\$ 19.107.925,70
2013	M13	\$ 87.068	1,97%	93	\$ 159.517,28	\$ 19.267.442,98
2013	07	\$ 87.068	1,97%	92	\$ 157.802,04	\$ 19.425.245,03
2013	08	\$ 87.068	1,97%	91	\$ 156.086,80	\$ 19.581.331,83
2013	09	\$ 87.068	1,97%	90	\$ 154.371,56	\$ 19.735.703,39
2013	10	\$ 87.068	1,97%	89	\$ 152.656,32	\$ 19.888.359,72
2013	11	\$ 87.068	1,97%	88	\$ 150.941,08	\$ 20.039.300,80
2013	12	\$ 87.068	1,97%	87	\$ 149.225,85	\$ 20.188.526,65
2013	M14	\$ 87.068	1,97%	87	\$ 149.225,85	\$ 20.337.752,49
2014	01	\$ 88.757	1,97%	86	\$ 150.372,30	\$ 20.488.124,79

2014	02	\$ 88.757	1,97%	85	\$ 148.623,78	\$ 20.636.748,57
2014	03	\$ 88.757	1,97%	84	\$ 146.875,27	\$ 20.783.623,84
2014	04	\$ 88.757	1,97%	83	\$ 145.126,75	\$ 20.928.750,59
2014	05	\$ 88.757	1,97%	82	\$ 143.378,24	\$ 21.072.128,82
2014	06	\$ 88.757	1,97%	81	\$ 141.629,72	\$ 21.213.758,54
2014	M13	\$ 88.757	1,97%	81	\$ 141.629,72	\$ 21.355.388,26
2014	07	\$ 88.757	1,97%	80	\$ 139.881,21	\$ 21.495.269,47
2014	08	\$ 88.757	1,97%	79	\$ 138.132,69	\$ 21.633.402,16
2014	09	\$ 88.757	1,97%	78	\$ 136.384,18	\$ 21.769.786,33
2014	10	\$ 88.757	1,97%	77	\$ 134.635,66	\$ 21.904.421,99
2014	11	\$ 88.757	1,97%	76	\$ 132.887,15	\$ 22.037.309,14
2014	12	\$ 88.757	1,97%	75	\$ 131.138,63	\$ 22.168.447,77
2014	M14	\$ 88.757	1,97%	75	\$ 131.138,63	\$ 22.299.586,40
2015	01	\$ 92.006	1,97%	74	\$ 134.125,79	\$ 22.433.712,19
2015	02	\$ 92.006	1,97%	73	\$ 132.313,28	\$ 22.566.025,47
2015	03	\$ 92.006	1,97%	72	\$ 130.500,77	\$ 22.696.526,24
2015	04	\$ 92.006	1,97%	71	\$ 128.688,26	\$ 22.825.214,51
2015	05	\$ 92.006	1,97%	70	\$ 126.875,75	\$ 22.952.090,26
2015	06	\$ 92.006	1,97%	69	\$ 125.063,24	\$ 23.077.153,49
2015	M13	\$ 92.006	1,97%	69	\$ 125.063,24	\$ 23.202.216,73
2015	07	\$ 92.006	1,97%	68	\$ 123.250,73	\$ 23.325.467,46
2015	08	\$ 92.006	1,97%	67	\$ 121.438,22	\$ 23.446.905,68
2015	09	\$ 92.006	1,97%	66	\$ 119.625,71	\$ 23.566.531,39
2015	10	\$ 92.006	1,97%	65	\$ 117.813,20	\$ 23.684.344,58
2015	11	\$ 92.006	1,97%	64	\$ 116.000,69	\$ 23.800.345,27
2015	12	\$ 92.006	1,97%	63	\$ 114.188,17	\$ 23.914.533,44
2015	M14	\$ 92.006	1,97%	63	\$ 114.188,17	\$ 24.028.721,62
2016	01	\$ 98.234	1,97%	62	\$ 119.983,51	\$ 24.148.705,13
2016	02	\$ 98.234	1,97%	61	\$ 118.048,29	\$ 24.266.753,42
2016	03	\$ 98.234	1,97%	60	\$ 116.113,07	\$ 24.382.866,49
2016	04	\$ 98.234	1,97%	59	\$ 114.177,85	\$ 24.497.044,35
2016	05	\$ 98.234	1,97%	58	\$ 112.242,64	\$ 24.609.286,98
2016	06	\$ 98.234	1,97%	57	\$ 110.307,42	\$ 24.719.594,40
2016	M13	\$ 98.234	1,97%	57	\$ 110.307,42	\$ 24.829.901,82
2016	07	\$ 98.234	1,97%	56	\$ 108.372,20	\$ 24.938.274,02
2016	08	\$ 98.234	1,97%	55	\$ 106.436,98	\$ 25.044.711,01
2016	09	\$ 98.234	1,97%	54	\$ 104.501,77	\$ 25.149.212,77
2016	10	\$ 98.234	1,97%	53	\$ 102.566,55	\$ 25.251.779,32
2016	11	\$ 98.234	1,97%	52	\$ 100.631,33	\$ 25.352.410,65
2016	12	\$ 98.234	1,97%	51	\$ 98.696,11	\$ 25.451.106,76
2016	M14	\$ 98.234	1,97%	51	\$ 98.696,11	\$ 25.549.802,87
2017	01	\$ 103.883	1,97%	50	\$ 102.324,64	\$ 25.652.127,51
2017	02	\$ 103.883	1,97%	49	\$ 100.278,14	\$ 25.752.405,65
2017	03	\$ 103.883	1,97%	48	\$ 98.231,65	\$ 25.850.637,30
2017	04	\$ 103.883	1,97%	47	\$ 96.185,16	\$ 25.946.822,46
2017	05	\$ 103.883	1,97%	46	\$ 94.138,67	\$ 26.040.961,13
2017	06	\$ 103.883	1,97%	45	\$ 92.092,17	\$ 26.133.053,30
2017	M13	\$ 103.883	1,97%	45	\$ 92.092,17	\$ 26.225.145,47
2017	07	\$ 103.883	1,97%	44	\$ 90.045,68	\$ 26.315.191,15
2017	08	\$ 103.883	1,97%	43	\$ 87.999,19	\$ 26.403.190,34
2017	09	\$ 103.883	1,97%	42	\$ 85.952,69	\$ 26.489.143,04
2017	10	\$ 103.883	1,97%	41	\$ 83.906,20	\$ 26.573.049,24
2017	11	\$ 103.883	1,97%	40	\$ 81.859,71	\$ 26.654.908,95
2017	12	\$ 103.883	1,97%	39	\$ 79.813,22	\$ 26.734.722,17
2017	M14	\$ 103.883	1,97%	39	\$ 79.813,22	\$ 26.814.535,38
2018	01	\$ 108.132	1,97%	38	\$ 80.947,38	\$ 26.895.482,76
2018	02	\$ 108.132	1,97%	37	\$ 78.817,19	\$ 26.974.299,95

2018	03	\$ 108.132	1,97%	36	\$ 76.686,99	\$ 27.050.986,95
2018	04	\$ 108.132	1,97%	35	\$ 74.556,80	\$ 27.125.543,75
2018	05	\$ 108.132	1,97%	34	\$ 72.426,61	\$ 27.197.970,35
2018	06	\$ 108.132	1,97%	33	\$ 70.296,41	\$ 27.268.266,77
2018	M13	\$ 108.132	1,97%	33	\$ 70.296,41	\$ 27.338.563,18
2018	07	\$ 108.132	1,97%	32	\$ 68.166,22	\$ 27.406.729,40
2018	08	\$ 108.132	1,97%	31	\$ 66.036,02	\$ 27.472.765,42
2018	09	\$ 108.132	1,97%	30	\$ 63.905,83	\$ 27.536.671,25
2018	10	\$ 108.132	1,97%	29	\$ 61.775,63	\$ 27.598.446,88
2018	11	\$ 108.132	1,97%	28	\$ 59.645,44	\$ 27.658.092,32
2018	12	\$ 108.132	1,97%	27	\$ 57.515,25	\$ 27.715.607,57
2018	M14	\$ 108.132	1,97%	27	\$ 57.515,25	\$ 27.773.122,81
2019	01	\$ 111.570	1,97%	26	\$ 57.146,30	\$ 27.830.269,11
2019	02	\$ 111.570	1,97%	25	\$ 54.948,36	\$ 27.885.217,47
2019	03	\$ 111.570	1,97%	24	\$ 52.750,43	\$ 27.937.967,90
2019	04	\$ 111.570	1,97%	23	\$ 50.552,49	\$ 27.988.520,40
2019	05	\$ 111.570	1,97%	22	\$ 48.354,56	\$ 28.036.874,96
2019	06	\$ 111.570	1,97%	21	\$ 46.156,62	\$ 28.083.031,58
2019	M13	\$ 111.570	1,97%	21	\$ 46.156,62	\$ 28.129.188,21
2019	07	\$ 111.570	1,97%	20	\$ 43.958,69	\$ 28.173.146,90
2019	08	\$ 111.570	1,97%	19	\$ 41.760,76	\$ 28.214.907,65
2019	09	\$ 111.570	1,97%	18	\$ 39.562,82	\$ 28.254.470,47
2019	10	\$ 111.570	1,97%	17	\$ 37.364,89	\$ 28.291.835,36
2019	11	\$ 111.570	1,97%	16	\$ 35.166,95	\$ 28.327.002,31
2019	12	\$ 111.570	1,97%	15	\$ 32.969,02	\$ 28.359.971,33
2019	M14	\$ 111.570	1,97%	15	\$ 32.969,02	\$ 28.392.940,35
2020	01	\$ 115.810	1,97%	14	\$ 31.940,38	\$ 28.424.880,73
2020	02	\$ 115.810	1,97%	13	\$ 29.658,93	\$ 28.454.539,66
2020	03	\$ 115.810	1,97%	12	\$ 27.377,47	\$ 28.481.917,13
2020	04	\$ 115.810	1,97%	11	\$ 25.096,02	\$ 28.507.013,15
2020	05	\$ 115.810	1,97%	10	\$ 22.814,56	\$ 28.529.827,71
2020	06	\$ 115.810	1,97%	9	\$ 20.533,10	\$ 28.550.360,81
2020	M13	\$ 115.810	1,97%	9	\$ 20.533,10	\$ 28.570.893,92
2020	07	\$ 115.810	1,97%	8	\$ 18.251,65	\$ 28.589.145,56
2020	08	\$ 115.810	1,97%	7	\$ 15.970,19	\$ 28.605.115,76
2020	09	\$ 115.810	1,97%	6	\$ 13.688,74	\$ 28.618.804,49
2020	10	\$ 115.810	1,97%	5	\$ 11.407,28	\$ 28.630.211,77
2020	11	\$ 115.810	1,97%	4	\$ 9.125,82	\$ 28.639.337,60
2020	12	\$ 115.810	1,97%	3	\$ 6.844,37	\$ 28.646.181,96
2020	M14	\$ 115.810	1,97%	3	\$ 6.844,37	\$ 28.653.026,33
2021	01	\$ 117.674	1,97%	2	\$ 4.636,37	\$ 28.657.662,71
2021	02	\$ 117.674	1,97%	1	\$ 2.318,19	\$ 28.659.980,90

Retroactivo: \$18.348.597,86

Intereses de mora: \$28.659.980,9

9. RUBEN DARÍO BAUTISTA RAMÍREZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2010	\$ 44.660,58	3,17%	11	\$ 491.266,38
2011	\$ 46.076,32	3,73%	14	\$ 645.068,49
2012	\$ 47.794,97	2,44%	14	\$ 669.129,54
2013	\$ 48.961,16	1,94%	14	\$ 685.456,30
2014	\$ 49.911,01	3,66%	14	\$ 698.754,15

2015	\$ 51.737,75	6,77%	14	\$ 724.328,55
2016	\$ 55.240,40	5,75%	14	\$ 773.365,60
2017	\$ 58.416,72	4,09%	14	\$ 817.834,12
2018	\$ 60.805,97	3,18%	14	\$ 851.283,54
2019	\$ 62.739,60	3,80%	14	\$ 878.354,35
2020	\$ 65.123,70	1,61%	14	\$ 911.731,82
2021	\$ 66.172,19		2	\$ 132.344,39
				\$ 8.278.917,22

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2010	01		1,97%	134	\$ 0,00	\$ 0,00
2010	02	\$ 0	1,97%	133	\$ 0,00	\$ 0,00
2010	03	\$ 0	1,97%	132	\$ 0,00	\$ 0,00
2010	04	\$ 44.661	1,97%	131	\$ 115.255,56	\$ 115.255,56
2010	05	\$ 44.661	1,97%	130	\$ 114.375,75	\$ 229.631,30
2010	06	\$ 44.661	1,97%	129	\$ 113.495,93	\$ 343.127,24
2010	M13	\$ 44.661	1,97%	129	\$ 113.495,93	\$ 456.623,17
2010	07	\$ 44.661	1,97%	128	\$ 112.616,12	\$ 569.239,29
2010	08	\$ 44.661	1,97%	127	\$ 111.736,31	\$ 680.975,59
2010	09	\$ 44.661	1,97%	126	\$ 110.856,49	\$ 791.832,08
2010	10	\$ 44.661	1,97%	125	\$ 109.976,68	\$ 901.808,76
2010	11	\$ 44.661	1,97%	124	\$ 109.096,86	\$ 1.010.905,63
2010	12	\$ 44.661	1,97%	123	\$ 108.217,05	\$ 1.119.122,68
2010	M14	\$ 44.661	1,97%	123	\$ 108.217,05	\$ 1.227.339,73
2011	01	\$ 46.076	1,97%	122	\$ 110.739,83	\$ 1.338.079,56
2011	02	\$ 46.076	1,97%	121	\$ 109.832,12	\$ 1.447.911,68
2011	03	\$ 46.076	1,97%	120	\$ 108.924,42	\$ 1.556.836,10
2011	04	\$ 46.076	1,97%	119	\$ 108.016,72	\$ 1.664.852,82
2011	05	\$ 46.076	1,97%	118	\$ 107.109,01	\$ 1.771.961,83
2011	06	\$ 46.076	1,97%	117	\$ 106.201,31	\$ 1.878.163,14
2011	M13	\$ 46.076	1,97%	117	\$ 106.201,31	\$ 1.984.364,45
2011	07	\$ 46.076	1,97%	116	\$ 105.293,61	\$ 2.089.658,06
2011	08	\$ 46.076	1,97%	115	\$ 104.385,90	\$ 2.194.043,96
2011	09	\$ 46.076	1,97%	114	\$ 103.478,20	\$ 2.297.522,16
2011	10	\$ 46.076	1,97%	113	\$ 102.570,50	\$ 2.400.092,66
2011	11	\$ 46.076	1,97%	112	\$ 101.662,79	\$ 2.501.755,45
2011	12	\$ 46.076	1,97%	111	\$ 100.755,09	\$ 2.602.510,54
2011	M14	\$ 46.076	1,97%	111	\$ 100.755,09	\$ 2.703.265,63
2012	01	\$ 47.795	1,97%	110	\$ 103.571,70	\$ 2.806.837,33
2012	02	\$ 47.795	1,97%	109	\$ 102.630,14	\$ 2.909.467,47
2012	03	\$ 47.795	1,97%	108	\$ 101.688,58	\$ 3.011.156,04
2012	04	\$ 47.795	1,97%	107	\$ 100.747,02	\$ 3.111.903,06
2012	05	\$ 47.795	1,97%	106	\$ 99.805,46	\$ 3.211.708,52
2012	06	\$ 47.795	1,97%	105	\$ 98.863,90	\$ 3.310.572,41
2012	M13	\$ 47.795	1,97%	105	\$ 98.863,90	\$ 3.409.436,31
2012	07	\$ 47.795	1,97%	104	\$ 97.922,33	\$ 3.507.358,64
2012	08	\$ 47.795	1,97%	103	\$ 96.980,77	\$ 3.604.339,42
2012	09	\$ 47.795	1,97%	102	\$ 96.039,21	\$ 3.700.378,63
2012	10	\$ 47.795	1,97%	101	\$ 95.097,65	\$ 3.795.476,28
2012	11	\$ 47.795	1,97%	100	\$ 94.156,09	\$ 3.889.632,37
2012	12	\$ 47.795	1,97%	99	\$ 93.214,53	\$ 3.982.846,90
2012	M14	\$ 47.795	1,97%	99	\$ 93.214,53	\$ 4.076.061,43
2013	01	\$ 48.961	1,97%	98	\$ 94.524,42	\$ 4.170.585,85
2013	02	\$ 48.961	1,97%	97	\$ 93.559,88	\$ 4.264.145,73
2013	03	\$ 48.961	1,97%	96	\$ 92.595,35	\$ 4.356.741,07
2013	04	\$ 48.961	1,97%	95	\$ 91.630,81	\$ 4.448.371,88
2013	05	\$ 48.961	1,97%	94	\$ 90.666,28	\$ 4.539.038,16
2013	06	\$ 48.961	1,97%	93	\$ 89.701,74	\$ 4.628.739,90
2013	M13	\$ 48.961	1,97%	93	\$ 89.701,74	\$ 4.718.441,64
2013	07	\$ 48.961	1,97%	92	\$ 88.737,21	\$ 4.807.178,85

2013	08	\$ 48.961	1,97%	91	\$ 87.772,67	\$ 4.894.951,52
2013	09	\$ 48.961	1,97%	90	\$ 86.808,14	\$ 4.981.759,66
2013	10	\$ 48.961	1,97%	89	\$ 85.843,60	\$ 5.067.603,26
2013	11	\$ 48.961	1,97%	88	\$ 84.879,07	\$ 5.152.482,33
2013	12	\$ 48.961	1,97%	87	\$ 83.914,53	\$ 5.236.396,86
2013	M14	\$ 48.961	1,97%	87	\$ 83.914,53	\$ 5.320.311,39
2014	01	\$ 49.911	1,97%	86	\$ 84.559,23	\$ 5.404.870,62
2014	02	\$ 49.911	1,97%	85	\$ 83.575,99	\$ 5.488.446,61
2014	03	\$ 49.911	1,97%	84	\$ 82.592,74	\$ 5.571.039,35
2014	04	\$ 49.911	1,97%	83	\$ 81.609,49	\$ 5.652.648,84
2014	05	\$ 49.911	1,97%	82	\$ 80.626,25	\$ 5.733.275,09
2014	06	\$ 49.911	1,97%	81	\$ 79.643,00	\$ 5.812.918,09
2014	07	\$ 49.911	1,97%	81	\$ 79.643,00	\$ 5.892.561,09
2014	07	\$ 49.911	1,97%	80	\$ 78.659,75	\$ 5.971.220,84
2014	08	\$ 49.911	1,97%	79	\$ 77.676,50	\$ 6.048.897,34
2014	09	\$ 49.911	1,97%	78	\$ 76.693,26	\$ 6.125.590,60
2014	10	\$ 49.911	1,97%	77	\$ 75.710,01	\$ 6.201.300,61
2014	11	\$ 49.911	1,97%	76	\$ 74.726,76	\$ 6.276.027,38
2014	12	\$ 49.911	1,97%	75	\$ 73.743,52	\$ 6.349.770,89
2014	M14	\$ 49.911	1,97%	75	\$ 73.743,52	\$ 6.423.514,41
2015	01	\$ 51.738	1,97%	74	\$ 75.423,29	\$ 6.498.937,70
2015	02	\$ 51.738	1,97%	73	\$ 74.404,06	\$ 6.573.341,76
2015	03	\$ 51.738	1,97%	72	\$ 73.384,82	\$ 6.646.726,58
2015	04	\$ 51.738	1,97%	71	\$ 72.365,59	\$ 6.719.092,18
2015	05	\$ 51.738	1,97%	70	\$ 71.346,36	\$ 6.790.438,53
2015	06	\$ 51.738	1,97%	69	\$ 70.327,12	\$ 6.860.765,66
2015	M13	\$ 51.738	1,97%	69	\$ 70.327,12	\$ 6.931.092,78
2015	07	\$ 51.738	1,97%	68	\$ 69.307,89	\$ 7.000.400,67
2015	08	\$ 51.738	1,97%	67	\$ 68.288,66	\$ 7.068.689,33
2015	09	\$ 51.738	1,97%	66	\$ 67.269,42	\$ 7.135.958,75
2015	10	\$ 51.738	1,97%	65	\$ 66.250,19	\$ 7.202.208,94
2015	11	\$ 51.738	1,97%	64	\$ 65.230,96	\$ 7.267.439,89
2015	12	\$ 51.738	1,97%	63	\$ 64.211,72	\$ 7.331.651,61
2015	M14	\$ 51.738	1,97%	63	\$ 64.211,72	\$ 7.395.863,34
2016	01	\$ 55.240	1,97%	62	\$ 67.470,62	\$ 7.463.333,96
2016	02	\$ 55.240	1,97%	61	\$ 66.382,39	\$ 7.529.716,35
2016	03	\$ 55.240	1,97%	60	\$ 65.294,15	\$ 7.595.010,50
2016	04	\$ 55.240	1,97%	59	\$ 64.205,92	\$ 7.659.216,42
2016	05	\$ 55.240	1,97%	58	\$ 63.117,68	\$ 7.722.334,10
2016	06	\$ 55.240	1,97%	57	\$ 62.029,45	\$ 7.784.363,54
2016	M13	\$ 55.240	1,97%	57	\$ 62.029,45	\$ 7.846.392,99
2016	07	\$ 55.240	1,97%	56	\$ 60.941,21	\$ 7.907.334,20
2016	08	\$ 55.240	1,97%	55	\$ 59.852,97	\$ 7.967.187,17
2016	09	\$ 55.240	1,97%	54	\$ 58.764,74	\$ 8.025.951,91
2016	10	\$ 55.240	1,97%	53	\$ 57.676,50	\$ 8.083.628,41
2016	11	\$ 55.240	1,97%	52	\$ 56.588,27	\$ 8.140.216,68
2016	12	\$ 55.240	1,97%	51	\$ 55.500,03	\$ 8.195.716,71
2016	M14	\$ 55.240	1,97%	51	\$ 55.500,03	\$ 8.251.216,74
2017	01	\$ 58.417	1,97%	50	\$ 57.540,47	\$ 8.308.757,21
2017	02	\$ 58.417	1,97%	49	\$ 56.389,66	\$ 8.365.146,87
2017	03	\$ 58.417	1,97%	48	\$ 55.238,85	\$ 8.420.385,72
2017	04	\$ 58.417	1,97%	47	\$ 54.088,04	\$ 8.474.473,76
2017	05	\$ 58.417	1,97%	46	\$ 52.937,23	\$ 8.527.410,99
2017	06	\$ 58.417	1,97%	45	\$ 51.786,42	\$ 8.579.197,41
2017	M13	\$ 58.417	1,97%	45	\$ 51.786,42	\$ 8.630.983,83
2017	07	\$ 58.417	1,97%	44	\$ 50.635,61	\$ 8.681.619,45
2017	08	\$ 58.417	1,97%	43	\$ 49.484,80	\$ 8.731.104,25
2017	09	\$ 58.417	1,97%	42	\$ 48.333,99	\$ 8.779.438,24

2017	10	\$ 58.417	1,97%	41	\$ 47.183,18	\$ 8.826.621,43
2017	11	\$ 58.417	1,97%	40	\$ 46.032,38	\$ 8.872.653,80
2017	12	\$ 58.417	1,97%	39	\$ 44.881,57	\$ 8.917.535,37
2017	M14	\$ 58.417	1,97%	39	\$ 44.881,57	\$ 8.962.416,94
2018	01	\$ 60.806	1,97%	38	\$ 45.519,35	\$ 9.007.936,29
2018	02	\$ 60.806	1,97%	37	\$ 44.321,47	\$ 9.052.257,76
2018	03	\$ 60.806	1,97%	36	\$ 43.123,59	\$ 9.095.381,35
2018	04	\$ 60.806	1,97%	35	\$ 41.925,72	\$ 9.137.307,07
2018	05	\$ 60.806	1,97%	34	\$ 40.727,84	\$ 9.178.034,91
2018	06	\$ 60.806	1,97%	33	\$ 39.529,96	\$ 9.217.564,87
2018	M13	\$ 60.806	1,97%	33	\$ 39.529,96	\$ 9.257.094,83
2018	07	\$ 60.806	1,97%	32	\$ 38.332,08	\$ 9.295.426,91
2018	08	\$ 60.806	1,97%	31	\$ 37.134,21	\$ 9.332.561,12
2018	09	\$ 60.806	1,97%	30	\$ 35.936,33	\$ 9.368.497,45
2018	10	\$ 60.806	1,97%	29	\$ 34.738,45	\$ 9.403.235,90
2018	11	\$ 60.806	1,97%	28	\$ 33.540,57	\$ 9.436.776,47
2018	12	\$ 60.806	1,97%	27	\$ 32.342,70	\$ 9.469.119,17
2018	M14	\$ 60.806	1,97%	27	\$ 32.342,70	\$ 9.501.461,86
2019	01	\$ 62.740	1,97%	26	\$ 32.135,22	\$ 9.533.597,08
2019	02	\$ 62.740	1,97%	25	\$ 30.899,25	\$ 9.564.496,34
2019	03	\$ 62.740	1,97%	24	\$ 29.663,28	\$ 9.594.159,62
2019	04	\$ 62.740	1,97%	23	\$ 28.427,31	\$ 9.622.586,93
2019	05	\$ 62.740	1,97%	22	\$ 27.191,34	\$ 9.649.778,28
2019	06	\$ 62.740	1,97%	21	\$ 25.955,37	\$ 9.675.733,65
2019	M13	\$ 62.740	1,97%	21	\$ 25.955,37	\$ 9.701.689,02
2019	07	\$ 62.740	1,97%	20	\$ 24.719,40	\$ 9.726.408,42
2019	08	\$ 62.740	1,97%	19	\$ 23.483,43	\$ 9.749.891,85
2019	09	\$ 62.740	1,97%	18	\$ 22.247,46	\$ 9.772.139,32
2019	10	\$ 62.740	1,97%	17	\$ 21.011,49	\$ 9.793.150,81
2019	11	\$ 62.740	1,97%	16	\$ 19.775,52	\$ 9.812.926,33
2019	12	\$ 62.740	1,97%	15	\$ 18.539,55	\$ 9.831.465,88
2019	M14	\$ 62.740	1,97%	15	\$ 18.539,55	\$ 9.850.005,43
2020	01	\$ 65.124	1,97%	14	\$ 17.961,12	\$ 9.867.966,55
2020	02	\$ 65.124	1,97%	13	\$ 16.678,18	\$ 9.884.644,73
2020	03	\$ 65.124	1,97%	12	\$ 15.395,24	\$ 9.900.039,97
2020	04	\$ 65.124	1,97%	11	\$ 14.112,31	\$ 9.914.152,28
2020	05	\$ 65.124	1,97%	10	\$ 12.829,37	\$ 9.926.981,65
2020	06	\$ 65.124	1,97%	9	\$ 11.546,43	\$ 9.938.528,08
2020	M13	\$ 65.124	1,97%	9	\$ 11.546,43	\$ 9.950.074,51
2020	07	\$ 65.124	1,97%	8	\$ 10.263,50	\$ 9.960.338,01
2020	08	\$ 65.124	1,97%	7	\$ 8.980,56	\$ 9.969.318,57
2020	09	\$ 65.124	1,97%	6	\$ 7.697,62	\$ 9.977.016,19
2020	10	\$ 65.124	1,97%	5	\$ 6.414,68	\$ 9.983.430,87
2020	11	\$ 65.124	1,97%	4	\$ 5.131,75	\$ 9.988.562,62
2020	12	\$ 65.124	1,97%	3	\$ 3.848,81	\$ 9.992.411,43
2020	M14	\$ 65.124	1,97%	3	\$ 3.848,81	\$ 9.996.260,24
2021	01	\$ 66.172	1,97%	2	\$ 2.607,18	\$ 9.998.867,42
2021	02	\$ 66.172	1,97%	1	\$ 1.303,59	\$ 10.000.171,02

Retroactivo: \$8.278.917,22

Intereses de mora: \$10.000.171,02

10. PEDRO JOSÉ GÓMEZ MARICALES

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2008	\$ 126.511,61	7,67%	11	\$ 1.391.627,71

2009	\$ 136.215,05	2,00%	14	\$ 1.907.010,71
2010	\$ 138.939,35	3,17%	14	\$ 1.945.150,92
2011	\$ 143.343,73	3,73%	14	\$ 2.006.812,21
2012	\$ 148.690,45	2,44%	14	\$ 2.081.666,30
2013	\$ 152.318,50	1,94%	14	\$ 2.132.458,96
2014	\$ 155.273,48	3,66%	14	\$ 2.173.828,66
2015	\$ 160.956,49	6,77%	14	\$ 2.253.390,79
2016	\$ 171.853,24	5,75%	14	\$ 2.405.945,35
2017	\$ 181.734,80	4,09%	14	\$ 2.544.287,20
2018	\$ 189.167,75	3,18%	14	\$ 2.648.348,55
2019	\$ 195.183,29	3,80%	14	\$ 2.732.566,04
2020	\$ 202.600,25	1,61%	14	\$ 2.836.403,54
2021	\$ 205.862,12		2	\$ 411.724,23
				\$ 29.471.221,17

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2008	01		1,97%	158	\$ 0,00	\$ 0,00
2008	02	\$ 0	1,97%	157	\$ 0,00	\$ 0,00
2008	03	\$ 0	1,97%	156	\$ 0,00	\$ 0,00
2008	04	\$ 126.512	1,97%	155	\$ 386.303,17	\$ 386.303,17
2008	05	\$ 126.512	1,97%	154	\$ 383.810,89	\$ 770.114,06
2008	06	\$ 126.512	1,97%	153	\$ 381.318,61	\$ 1.151.432,68
2008	M13	\$ 126.512	1,97%	153	\$ 381.318,61	\$ 1.532.751,29
2008	07	\$ 126.512	1,97%	152	\$ 378.826,34	\$ 1.911.577,62
2008	08	\$ 126.512	1,97%	151	\$ 376.334,06	\$ 2.287.911,68
2008	09	\$ 126.512	1,97%	150	\$ 373.841,78	\$ 2.661.753,46
2008	10	\$ 126.512	1,97%	149	\$ 371.349,50	\$ 3.033.102,96
2008	11	\$ 126.512	1,97%	148	\$ 368.857,22	\$ 3.401.960,18
2008	12	\$ 126.512	1,97%	147	\$ 366.364,94	\$ 3.768.325,12
2008	M14	\$ 126.512	1,97%	147	\$ 366.364,94	\$ 4.134.690,06
2009	01	\$ 136.215	1,97%	146	\$ 391.781,73	\$ 4.526.471,79
2009	02	\$ 136.215	1,97%	145	\$ 389.098,29	\$ 4.915.570,08
2009	03	\$ 136.215	1,97%	144	\$ 386.414,85	\$ 5.301.984,94
2009	04	\$ 136.215	1,97%	143	\$ 383.731,42	\$ 5.685.716,35
2009	05	\$ 136.215	1,97%	142	\$ 381.047,98	\$ 6.066.764,33
2009	06	\$ 136.215	1,97%	141	\$ 378.364,54	\$ 6.445.128,88
2009	M13	\$ 136.215	1,97%	141	\$ 378.364,54	\$ 6.823.493,42
2009	07	\$ 136.215	1,97%	140	\$ 375.681,11	\$ 7.199.174,53
2009	08	\$ 136.215	1,97%	139	\$ 372.997,67	\$ 7.572.172,20
2009	09	\$ 136.215	1,97%	138	\$ 370.314,23	\$ 7.942.486,44
2009	10	\$ 136.215	1,97%	137	\$ 367.630,80	\$ 8.310.117,24
2009	11	\$ 136.215	1,97%	136	\$ 364.947,36	\$ 8.675.064,60
2009	12	\$ 136.215	1,97%	135	\$ 362.263,93	\$ 9.037.328,52
2009	M14	\$ 136.215	1,97%	135	\$ 362.263,93	\$ 9.399.592,45
2010	01	\$ 138.939	1,97%	134	\$ 366.772,10	\$ 9.766.364,54
2010	02	\$ 138.939	1,97%	133	\$ 364.034,99	\$ 10.130.399,54
2010	03	\$ 138.939	1,97%	132	\$ 361.297,89	\$ 10.491.697,42
2010	04	\$ 138.939	1,97%	131	\$ 358.560,78	\$ 10.850.258,20
2010	05	\$ 138.939	1,97%	130	\$ 355.823,68	\$ 11.206.081,88
2010	06	\$ 138.939	1,97%	129	\$ 353.086,57	\$ 11.559.168,45
2010	M13	\$ 138.939	1,97%	129	\$ 353.086,57	\$ 11.912.255,02
2010	07	\$ 138.939	1,97%	128	\$ 350.349,46	\$ 12.262.604,48
2010	08	\$ 138.939	1,97%	127	\$ 347.612,36	\$ 12.610.216,84
2010	09	\$ 138.939	1,97%	126	\$ 344.875,25	\$ 12.955.092,10
2010	10	\$ 138.939	1,97%	125	\$ 342.138,15	\$ 13.297.230,25
2010	11	\$ 138.939	1,97%	124	\$ 339.401,04	\$ 13.636.631,29
2010	12	\$ 138.939	1,97%	123	\$ 336.663,94	\$ 13.973.295,23
2010	M14	\$ 138.939	1,97%	123	\$ 336.663,94	\$ 14.309.959,17
2011	01	\$ 143.344	1,97%	122	\$ 344.512,32	\$ 14.654.471,49

2011	02	\$ 143.344	1,97%	121	\$ 341.688,45	\$ 14.996.159,94
2011	03	\$ 143.344	1,97%	120	\$ 338.864,58	\$ 15.335.024,52
2011	04	\$ 143.344	1,97%	119	\$ 336.040,71	\$ 15.671.065,22
2011	05	\$ 143.344	1,97%	118	\$ 333.216,83	\$ 16.004.282,06
2011	06	\$ 143.344	1,97%	117	\$ 330.392,96	\$ 16.334.675,02
2011	M13	\$ 143.344	1,97%	117	\$ 330.392,96	\$ 16.665.067,98
2011	07	\$ 143.344	1,97%	116	\$ 327.569,09	\$ 16.992.637,08
2011	08	\$ 143.344	1,97%	115	\$ 324.745,22	\$ 17.317.382,30
2011	09	\$ 143.344	1,97%	114	\$ 321.921,35	\$ 17.639.303,64
2011	10	\$ 143.344	1,97%	113	\$ 319.097,48	\$ 17.958.401,12
2011	11	\$ 143.344	1,97%	112	\$ 316.273,61	\$ 18.274.674,73
2011	12	\$ 143.344	1,97%	111	\$ 313.449,73	\$ 18.588.124,46
2011	M14	\$ 143.344	1,97%	111	\$ 313.449,73	\$ 18.901.574,20
2012	01	\$ 148.690	1,97%	110	\$ 322.212,21	\$ 19.223.786,40
2012	02	\$ 148.690	1,97%	109	\$ 319.283,00	\$ 19.543.069,40
2012	03	\$ 148.690	1,97%	108	\$ 316.353,80	\$ 19.859.423,21
2012	04	\$ 148.690	1,97%	107	\$ 313.424,60	\$ 20.172.847,81
2012	05	\$ 148.690	1,97%	106	\$ 310.495,40	\$ 20.483.343,20
2012	06	\$ 148.690	1,97%	105	\$ 307.566,20	\$ 20.790.909,40
2012	07	\$ 148.690	1,97%	105	\$ 307.566,20	\$ 21.098.475,59
2012	07	\$ 148.690	1,97%	104	\$ 304.636,99	\$ 21.403.112,59
2012	08	\$ 148.690	1,97%	103	\$ 301.707,79	\$ 21.704.820,38
2012	09	\$ 148.690	1,97%	102	\$ 298.778,59	\$ 22.003.598,97
2012	10	\$ 148.690	1,97%	101	\$ 295.849,39	\$ 22.299.448,36
2012	11	\$ 148.690	1,97%	100	\$ 292.920,19	\$ 22.592.368,55
2012	12	\$ 148.690	1,97%	99	\$ 289.990,98	\$ 22.882.359,53
2012	M14	\$ 148.690	1,97%	99	\$ 289.990,98	\$ 23.172.350,52
2013	01	\$ 152.319	1,97%	98	\$ 294.066,10	\$ 23.466.416,61
2013	02	\$ 152.319	1,97%	97	\$ 291.065,42	\$ 23.757.482,03
2013	03	\$ 152.319	1,97%	96	\$ 288.064,75	\$ 24.045.546,78
2013	04	\$ 152.319	1,97%	95	\$ 285.064,07	\$ 24.330.610,85
2013	05	\$ 152.319	1,97%	94	\$ 282.063,40	\$ 24.612.674,25
2013	06	\$ 152.319	1,97%	93	\$ 279.062,72	\$ 24.891.736,98
2013	M13	\$ 152.319	1,97%	93	\$ 279.062,72	\$ 25.170.799,70
2013	07	\$ 152.319	1,97%	92	\$ 276.062,05	\$ 25.446.861,75
2013	08	\$ 152.319	1,97%	91	\$ 273.061,37	\$ 25.719.923,12
2013	09	\$ 152.319	1,97%	90	\$ 270.060,70	\$ 25.989.983,82
2013	10	\$ 152.319	1,97%	89	\$ 267.060,03	\$ 26.257.043,85
2013	11	\$ 152.319	1,97%	88	\$ 264.059,35	\$ 26.521.103,20
2013	12	\$ 152.319	1,97%	87	\$ 261.058,68	\$ 26.782.161,88
2013	M14	\$ 152.319	1,97%	87	\$ 261.058,68	\$ 27.043.220,56
2014	01	\$ 155.273	1,97%	86	\$ 263.064,33	\$ 27.306.284,89
2014	02	\$ 155.273	1,97%	85	\$ 260.005,44	\$ 27.566.290,33
2014	03	\$ 155.273	1,97%	84	\$ 256.946,55	\$ 27.823.236,88
2014	04	\$ 155.273	1,97%	83	\$ 253.887,67	\$ 28.077.124,55
2014	05	\$ 155.273	1,97%	82	\$ 250.828,78	\$ 28.327.953,33
2014	06	\$ 155.273	1,97%	81	\$ 247.769,89	\$ 28.575.723,22
2014	M13	\$ 155.273	1,97%	81	\$ 247.769,89	\$ 28.823.493,11
2014	07	\$ 155.273	1,97%	80	\$ 244.711,00	\$ 29.068.204,12
2014	08	\$ 155.273	1,97%	79	\$ 241.652,12	\$ 29.309.856,23
2014	09	\$ 155.273	1,97%	78	\$ 238.593,23	\$ 29.548.449,46
2014	10	\$ 155.273	1,97%	77	\$ 235.534,34	\$ 29.783.983,81
2014	11	\$ 155.273	1,97%	76	\$ 232.475,45	\$ 30.016.459,26
2014	12	\$ 155.273	1,97%	75	\$ 229.416,57	\$ 30.245.875,83
2014	M14	\$ 155.273	1,97%	75	\$ 229.416,57	\$ 30.475.292,39
2015	01	\$ 160.956	1,97%	74	\$ 234.642,37	\$ 30.709.934,76
2015	02	\$ 160.956	1,97%	73	\$ 231.471,53	\$ 30.941.406,29
2015	03	\$ 160.956	1,97%	72	\$ 228.300,69	\$ 31.169.706,98
2015	04	\$ 160.956	1,97%	71	\$ 225.129,84	\$ 31.394.836,82

2015	05	\$ 160.956	1,97%	70	\$ 221.959,00	\$ 31.616.795,82
2015	06	\$ 160.956	1,97%	69	\$ 218.788,16	\$ 31.835.583,98
2015	M13	\$ 160.956	1,97%	69	\$ 218.788,16	\$ 32.054.372,13
2015	07	\$ 160.956	1,97%	68	\$ 215.617,31	\$ 32.269.989,45
2015	08	\$ 160.956	1,97%	67	\$ 212.446,47	\$ 32.482.435,92
2015	09	\$ 160.956	1,97%	66	\$ 209.275,63	\$ 32.691.711,55
2015	10	\$ 160.956	1,97%	65	\$ 206.104,79	\$ 32.897.816,33
2015	11	\$ 160.956	1,97%	64	\$ 202.933,94	\$ 33.100.750,28
2015	12	\$ 160.956	1,97%	63	\$ 199.763,10	\$ 33.300.513,38
2015	M14	\$ 160.956	1,97%	63	\$ 199.763,10	\$ 33.500.276,48
2016	01	\$ 171.853	1,97%	62	\$ 209.901,55	\$ 33.710.178,02
2016	02	\$ 171.853	1,97%	61	\$ 206.516,04	\$ 33.916.694,06
2016	03	\$ 171.853	1,97%	60	\$ 203.130,53	\$ 34.119.824,59
2016	04	\$ 171.853	1,97%	59	\$ 199.745,02	\$ 34.319.569,61
2016	05	\$ 171.853	1,97%	58	\$ 196.359,51	\$ 34.515.929,12
2016	06	\$ 171.853	1,97%	57	\$ 192.974,00	\$ 34.708.903,13
2016	M13	\$ 171.853	1,97%	57	\$ 192.974,00	\$ 34.901.877,13
2016	07	\$ 171.853	1,97%	56	\$ 189.588,49	\$ 35.091.465,62
2016	08	\$ 171.853	1,97%	55	\$ 186.202,99	\$ 35.277.668,61
2016	09	\$ 171.853	1,97%	54	\$ 182.817,48	\$ 35.460.486,09
2016	10	\$ 171.853	1,97%	53	\$ 179.431,97	\$ 35.639.918,05
2016	11	\$ 171.853	1,97%	52	\$ 176.046,46	\$ 35.815.964,51
2016	12	\$ 171.853	1,97%	51	\$ 172.660,95	\$ 35.988.625,46
2016	M14	\$ 171.853	1,97%	51	\$ 172.660,95	\$ 36.161.286,41
2017	01	\$ 181.735	1,97%	50	\$ 179.008,78	\$ 36.340.295,19
2017	02	\$ 181.735	1,97%	49	\$ 175.428,60	\$ 36.515.723,79
2017	03	\$ 181.735	1,97%	48	\$ 171.848,43	\$ 36.687.572,22
2017	04	\$ 181.735	1,97%	47	\$ 168.268,25	\$ 36.855.840,47
2017	05	\$ 181.735	1,97%	46	\$ 164.688,08	\$ 37.020.528,55
2017	06	\$ 181.735	1,97%	45	\$ 161.107,90	\$ 37.181.636,45
2017	M13	\$ 181.735	1,97%	45	\$ 161.107,90	\$ 37.342.744,35
2017	07	\$ 181.735	1,97%	44	\$ 157.527,72	\$ 37.500.272,07
2017	08	\$ 181.735	1,97%	43	\$ 153.947,55	\$ 37.654.219,62
2017	09	\$ 181.735	1,97%	42	\$ 150.367,37	\$ 37.804.587,00
2017	10	\$ 181.735	1,97%	41	\$ 146.787,20	\$ 37.951.374,19
2017	11	\$ 181.735	1,97%	40	\$ 143.207,02	\$ 38.094.581,22
2017	12	\$ 181.735	1,97%	39	\$ 139.626,85	\$ 38.234.208,06
2017	M14	\$ 181.735	1,97%	39	\$ 139.626,85	\$ 38.373.834,91
2018	01	\$ 189.168	1,97%	38	\$ 141.610,98	\$ 38.515.445,89
2018	02	\$ 189.168	1,97%	37	\$ 137.884,37	\$ 38.653.330,26
2018	03	\$ 189.168	1,97%	36	\$ 134.157,77	\$ 38.787.488,03
2018	04	\$ 189.168	1,97%	35	\$ 130.431,16	\$ 38.917.919,19
2018	05	\$ 189.168	1,97%	34	\$ 126.704,56	\$ 39.044.623,75
2018	06	\$ 189.168	1,97%	33	\$ 122.977,95	\$ 39.167.601,71
2018	M13	\$ 189.168	1,97%	33	\$ 122.977,95	\$ 39.290.579,66
2018	07	\$ 189.168	1,97%	32	\$ 119.251,35	\$ 39.409.831,01
2018	08	\$ 189.168	1,97%	31	\$ 115.524,74	\$ 39.525.355,75
2018	09	\$ 189.168	1,97%	30	\$ 111.798,14	\$ 39.637.153,90
2018	10	\$ 189.168	1,97%	29	\$ 108.071,54	\$ 39.745.225,43
2018	11	\$ 189.168	1,97%	28	\$ 104.344,93	\$ 39.849.570,36
2018	12	\$ 189.168	1,97%	27	\$ 100.618,33	\$ 39.950.188,69
2018	M14	\$ 189.168	1,97%	27	\$ 100.618,33	\$ 40.050.807,01
2019	01	\$ 195.183	1,97%	26	\$ 99.972,88	\$ 40.150.779,90
2019	02	\$ 195.183	1,97%	25	\$ 96.127,77	\$ 40.246.907,67
2019	03	\$ 195.183	1,97%	24	\$ 92.282,66	\$ 40.339.190,33
2019	04	\$ 195.183	1,97%	23	\$ 88.437,55	\$ 40.427.627,87
2019	05	\$ 195.183	1,97%	22	\$ 84.592,44	\$ 40.512.220,31

2019	06	\$ 195.183	1,97%	21	\$ 80.747,33	\$ 40.592.967,64
2019	M13	\$ 195.183	1,97%	21	\$ 80.747,33	\$ 40.673.714,97
2019	07	\$ 195.183	1,97%	20	\$ 76.902,22	\$ 40.750.617,18
2019	08	\$ 195.183	1,97%	19	\$ 73.057,11	\$ 40.823.674,29
2019	09	\$ 195.183	1,97%	18	\$ 69.211,99	\$ 40.892.886,28
2019	10	\$ 195.183	1,97%	17	\$ 65.366,88	\$ 40.958.253,17
2019	11	\$ 195.183	1,97%	16	\$ 61.521,77	\$ 41.019.774,94
2019	12	\$ 195.183	1,97%	15	\$ 57.676,66	\$ 41.077.451,60
2019	M14	\$ 195.183	1,97%	15	\$ 57.676,66	\$ 41.135.128,26
2020	01	\$ 202.600	1,97%	14	\$ 55.877,15	\$ 41.191.005,41
2020	02	\$ 202.600	1,97%	13	\$ 51.885,92	\$ 41.242.891,34
2020	03	\$ 202.600	1,97%	12	\$ 47.894,70	\$ 41.290.786,04
2020	04	\$ 202.600	1,97%	11	\$ 43.903,47	\$ 41.334.689,51
2020	05	\$ 202.600	1,97%	10	\$ 39.912,25	\$ 41.374.601,76
2020	06	\$ 202.600	1,97%	9	\$ 35.921,02	\$ 41.410.522,78
2020	M13	\$ 202.600	1,97%	9	\$ 35.921,02	\$ 41.446.443,81
2020	07	\$ 202.600	1,97%	8	\$ 31.929,80	\$ 41.478.373,61
2020	08	\$ 202.600	1,97%	7	\$ 27.938,57	\$ 41.506.312,18
2020	09	\$ 202.600	1,97%	6	\$ 23.947,35	\$ 41.530.259,53
2020	10	\$ 202.600	1,97%	5	\$ 19.956,12	\$ 41.550.215,66
2020	11	\$ 202.600	1,97%	4	\$ 15.964,90	\$ 41.566.180,56
2020	12	\$ 202.600	1,97%	3	\$ 11.973,67	\$ 41.578.154,23
2020	M14	\$ 202.600	1,97%	3	\$ 11.973,67	\$ 41.590.127,90
2021	01	\$ 205.862	1,97%	2	\$ 8.110,97	\$ 41.598.238,87
2021	02	\$ 205.862	1,97%	1	\$ 4.055,48	\$ 41.602.294,36

Retroactivo: \$29.471.221,17

Intereses de mora: \$41.602.294,36

11. HENRY GERMÁN JIMÉNEZ

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2007	\$ 109.709,72	5,69%	7	\$ 767.968,04
2008	\$ 115.952,20	7,67%	14	\$ 1.623.330,84
2009	\$ 124.845,74	2,00%	14	\$ 1.747.840,32
2010	\$ 127.342,65	3,17%	14	\$ 1.782.797,12
2011	\$ 131.379,41	3,73%	14	\$ 1.839.311,79
2012	\$ 136.279,87	2,44%	14	\$ 1.907.918,12
2013	\$ 139.605,09	1,94%	14	\$ 1.954.471,33
2014	\$ 142.313,43	3,66%	14	\$ 1.992.388,07
2015	\$ 147.522,11	6,77%	14	\$ 2.065.309,47
2016	\$ 157.509,35	5,75%	14	\$ 2.205.130,92
2017	\$ 166.566,14	4,09%	14	\$ 2.331.925,95
2018	\$ 173.378,69	3,18%	14	\$ 2.427.301,72
2019	\$ 178.892,14	3,80%	14	\$ 2.504.489,92
2020	\$ 185.690,04	1,61%	14	\$ 2.599.660,54
2021	\$ 188.679,65		2	\$ 377.359,30
				\$ 28.127.203,46

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2007	01		1,97%	170	\$ 0,00	\$ 0,00

2007	02	\$ 0	1,97%	169	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	03	\$ 0	1,97%	168	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	04	\$ 0	1,97%	167	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	05	\$ 0	1,97%	166	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	06	\$ 0	1,97%	165	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	M13	\$ 109.710	1,97%	165	\$ 356.611,44	\$ 356.611,44
2007	07	\$ 109.710	1,97%	164	\$ 354.450,16	\$ 711.061,61
2007	08	\$ 109.710	1,97%	163	\$ 352.288,88	\$ 1.063.350,49
2007	09	\$ 109.710	1,97%	162	\$ 350.127,60	\$ 1.413.478,09
2007	10	\$ 109.710	1,97%	161	\$ 347.966,32	\$ 1.761.444,41
2007	11	\$ 109.710	1,97%	160	\$ 345.805,04	\$ 2.107.249,45
2007	12	\$ 109.710	1,97%	159	\$ 343.643,76	\$ 2.450.893,20
2007	M14	\$ 109.710	1,97%	159	\$ 343.643,76	\$ 2.794.536,96
2008	01	\$ 115.952	1,97%	158	\$ 360.912,82	\$ 3.155.449,78
2008	02	\$ 115.952	1,97%	157	\$ 358.628,56	\$ 3.514.078,34
2008	03	\$ 115.952	1,97%	156	\$ 356.344,30	\$ 3.870.422,64
2008	04	\$ 115.952	1,97%	155	\$ 354.060,04	\$ 4.224.482,68
2008	05	\$ 115.952	1,97%	154	\$ 351.775,78	\$ 4.576.258,46
2008	06	\$ 115.952	1,97%	153	\$ 349.491,53	\$ 4.925.749,99
2008	M13	\$ 115.952	1,97%	153	\$ 349.491,53	\$ 5.275.241,52
2008	07	\$ 115.952	1,97%	152	\$ 347.207,27	\$ 5.622.448,78
2008	08	\$ 115.952	1,97%	151	\$ 344.923,01	\$ 5.967.371,79
2008	09	\$ 115.952	1,97%	150	\$ 342.638,75	\$ 6.310.010,54
2008	10	\$ 115.952	1,97%	149	\$ 340.354,49	\$ 6.650.365,04
2008	11	\$ 115.952	1,97%	148	\$ 338.070,23	\$ 6.988.435,27
2008	12	\$ 115.952	1,97%	147	\$ 335.785,98	\$ 7.324.221,25
2008	M14	\$ 115.952	1,97%	147	\$ 335.785,98	\$ 7.660.007,22
2009	01	\$ 124.846	1,97%	146	\$ 359.081,32	\$ 8.019.088,54
2009	02	\$ 124.846	1,97%	145	\$ 356.621,86	\$ 8.375.710,40
2009	03	\$ 124.846	1,97%	144	\$ 354.162,40	\$ 8.729.872,79
2009	04	\$ 124.846	1,97%	143	\$ 351.702,93	\$ 9.081.575,73
2009	05	\$ 124.846	1,97%	142	\$ 349.243,47	\$ 9.430.819,20
2009	06	\$ 124.846	1,97%	141	\$ 346.784,01	\$ 9.777.603,21
2009	M13	\$ 124.846	1,97%	141	\$ 346.784,01	\$ 10.124.387,22
2009	07	\$ 124.846	1,97%	140	\$ 344.324,55	\$ 10.468.711,77
2009	08	\$ 124.846	1,97%	139	\$ 341.865,09	\$ 10.810.576,86
2009	09	\$ 124.846	1,97%	138	\$ 339.405,63	\$ 11.149.982,49
2009	10	\$ 124.846	1,97%	137	\$ 336.946,17	\$ 11.486.928,66
2009	11	\$ 124.846	1,97%	136	\$ 334.486,71	\$ 11.821.415,37
2009	12	\$ 124.846	1,97%	135	\$ 332.027,25	\$ 12.153.442,61
2009	M14	\$ 124.846	1,97%	135	\$ 332.027,25	\$ 12.485.469,86
2010	01	\$ 127.343	1,97%	134	\$ 336.159,13	\$ 12.821.628,99
2010	02	\$ 127.343	1,97%	133	\$ 333.650,48	\$ 13.155.279,46
2010	03	\$ 127.343	1,97%	132	\$ 331.141,83	\$ 13.486.421,29
2010	04	\$ 127.343	1,97%	131	\$ 328.633,18	\$ 13.815.054,47
2010	05	\$ 127.343	1,97%	130	\$ 326.124,53	\$ 14.141.178,99
2010	06	\$ 127.343	1,97%	129	\$ 323.615,88	\$ 14.464.794,87
2010	M13	\$ 127.343	1,97%	129	\$ 323.615,88	\$ 14.788.410,75
2010	07	\$ 127.343	1,97%	128	\$ 321.107,23	\$ 15.109.517,97
2010	08	\$ 127.343	1,97%	127	\$ 318.598,58	\$ 15.428.116,55
2010	09	\$ 127.343	1,97%	126	\$ 316.089,93	\$ 15.744.206,47
2010	10	\$ 127.343	1,97%	125	\$ 313.581,28	\$ 16.057.787,75
2010	11	\$ 127.343	1,97%	124	\$ 311.072,63	\$ 16.368.860,38
2010	12	\$ 127.343	1,97%	123	\$ 308.563,98	\$ 16.677.424,35
2010	M14	\$ 127.343	1,97%	123	\$ 308.563,98	\$ 16.985.988,33
2011	01	\$ 131.379	1,97%	122	\$ 315.757,27	\$ 17.301.745,60
2011	02	\$ 131.379	1,97%	121	\$ 313.169,10	\$ 17.614.914,70
2011	03	\$ 131.379	1,97%	120	\$ 310.580,93	\$ 17.925.495,62
2011	04	\$ 131.379	1,97%	119	\$ 307.992,75	\$ 18.233.488,38
2011	05	\$ 131.379	1,97%	118	\$ 305.404,58	\$ 18.538.892,95
2011	06	\$ 131.379	1,97%	117	\$ 302.816,40	\$ 18.841.709,35
2011	07	\$ 131.379	1,97%	117	\$ 302.816,40	\$ 19.144.525,76

2011	07	\$ 131.379	1,97%	116	\$ 300.228,23	\$ 19.444.753,98
2011	08	\$ 131.379	1,97%	115	\$ 297.640,05	\$ 19.742.394,04
2011	09	\$ 131.379	1,97%	114	\$ 295.051,88	\$ 20.037.445,92
2011	10	\$ 131.379	1,97%	113	\$ 292.463,70	\$ 20.329.909,62
2011	11	\$ 131.379	1,97%	112	\$ 289.875,53	\$ 20.619.785,15
2011	12	\$ 131.379	1,97%	111	\$ 287.287,36	\$ 20.907.072,51
2011	M14	\$ 131.379	1,97%	111	\$ 287.287,36	\$ 21.194.359,86
2012	01	\$ 136.280	1,97%	110	\$ 295.318,48	\$ 21.489.678,34
2012	02	\$ 136.280	1,97%	109	\$ 292.633,76	\$ 21.782.312,11
2012	03	\$ 136.280	1,97%	108	\$ 289.949,05	\$ 22.072.261,16
2012	04	\$ 136.280	1,97%	107	\$ 287.264,34	\$ 22.359.525,50
2012	05	\$ 136.280	1,97%	106	\$ 284.579,62	\$ 22.644.105,12
2012	06	\$ 136.280	1,97%	105	\$ 281.894,91	\$ 22.926.000,03
2012	M13	\$ 136.280	1,97%	105	\$ 281.894,91	\$ 23.207.894,94
2012	07	\$ 136.280	1,97%	104	\$ 279.210,20	\$ 23.487.105,14
2012	08	\$ 136.280	1,97%	103	\$ 276.525,48	\$ 23.763.630,62
2012	09	\$ 136.280	1,97%	102	\$ 273.840,77	\$ 24.037.471,39
2012	10	\$ 136.280	1,97%	101	\$ 271.156,06	\$ 24.308.627,45
2012	11	\$ 136.280	1,97%	100	\$ 268.471,34	\$ 24.577.098,80
2012	12	\$ 136.280	1,97%	99	\$ 265.786,63	\$ 24.842.885,43
2012	M14	\$ 136.280	1,97%	99	\$ 265.786,63	\$ 25.108.672,06
2013	01	\$ 139.605	1,97%	98	\$ 269.521,59	\$ 25.378.193,64
2013	02	\$ 139.605	1,97%	97	\$ 266.771,37	\$ 25.644.965,01
2013	03	\$ 139.605	1,97%	96	\$ 264.021,15	\$ 25.908.986,16
2013	04	\$ 139.605	1,97%	95	\$ 261.270,93	\$ 26.170.257,08
2013	05	\$ 139.605	1,97%	94	\$ 258.520,71	\$ 26.428.777,79
2013	06	\$ 139.605	1,97%	93	\$ 255.770,49	\$ 26.684.548,27
2013	M13	\$ 139.605	1,97%	93	\$ 255.770,49	\$ 26.940.318,76
2013	07	\$ 139.605	1,97%	92	\$ 253.020,27	\$ 27.193.339,02
2013	08	\$ 139.605	1,97%	91	\$ 250.270,04	\$ 27.443.609,07
2013	09	\$ 139.605	1,97%	90	\$ 247.519,82	\$ 27.691.128,89
2013	10	\$ 139.605	1,97%	89	\$ 244.769,60	\$ 27.935.898,50
2013	11	\$ 139.605	1,97%	88	\$ 242.019,38	\$ 28.177.917,88
2013	12	\$ 139.605	1,97%	87	\$ 239.269,16	\$ 28.417.187,05
2013	M14	\$ 139.605	1,97%	87	\$ 239.269,16	\$ 28.656.456,21
2014	01	\$ 142.313	1,97%	86	\$ 241.107,41	\$ 28.897.563,62
2014	02	\$ 142.313	1,97%	85	\$ 238.303,84	\$ 29.135.867,46
2014	03	\$ 142.313	1,97%	84	\$ 235.500,26	\$ 29.371.367,72
2014	04	\$ 142.313	1,97%	83	\$ 232.696,69	\$ 29.604.064,41
2014	05	\$ 142.313	1,97%	82	\$ 229.893,11	\$ 29.833.957,53
2014	06	\$ 142.313	1,97%	81	\$ 227.089,54	\$ 30.061.047,07
2014	M13	\$ 142.313	1,97%	81	\$ 227.089,54	\$ 30.288.136,61
2014	07	\$ 142.313	1,97%	80	\$ 224.285,97	\$ 30.512.422,58
2014	08	\$ 142.313	1,97%	79	\$ 221.482,39	\$ 30.733.904,97
2014	09	\$ 142.313	1,97%	78	\$ 218.678,82	\$ 30.952.583,78
2014	10	\$ 142.313	1,97%	77	\$ 215.875,24	\$ 31.168.459,02
2014	11	\$ 142.313	1,97%	76	\$ 213.071,67	\$ 31.381.530,69
2014	12	\$ 142.313	1,97%	75	\$ 210.268,09	\$ 31.591.798,78
2014	M14	\$ 142.313	1,97%	75	\$ 210.268,09	\$ 31.802.066,88
2015	01	\$ 147.522	1,97%	74	\$ 215.057,73	\$ 32.017.124,61
2015	02	\$ 147.522	1,97%	73	\$ 212.151,55	\$ 32.229.276,16
2015	03	\$ 147.522	1,97%	72	\$ 209.245,36	\$ 32.438.521,52
2015	04	\$ 147.522	1,97%	71	\$ 206.339,18	\$ 32.644.860,69
2015	05	\$ 147.522	1,97%	70	\$ 203.432,99	\$ 32.848.293,68
2015	06	\$ 147.522	1,97%	69	\$ 200.526,80	\$ 33.048.820,49
2015	M13	\$ 147.522	1,97%	69	\$ 200.526,80	\$ 33.249.347,29
2015	07	\$ 147.522	1,97%	68	\$ 197.620,62	\$ 33.446.967,91

2015	08	\$ 147.522	1,97%	67	\$ 194.714,43	\$ 33.641.682,34
2015	09	\$ 147.522	1,97%	66	\$ 191.808,25	\$ 33.833.490,59
2015	10	\$ 147.522	1,97%	65	\$ 188.902,06	\$ 34.022.392,65
2015	11	\$ 147.522	1,97%	64	\$ 185.995,88	\$ 34.208.388,53
2015	12	\$ 147.522	1,97%	63	\$ 183.089,69	\$ 34.391.478,22
2015	M14	\$ 147.522	1,97%	63	\$ 183.089,69	\$ 34.574.567,91
2016	01	\$ 157.509	1,97%	62	\$ 192.381,92	\$ 34.766.949,83
2016	02	\$ 157.509	1,97%	61	\$ 189.278,99	\$ 34.956.228,81
2016	03	\$ 157.509	1,97%	60	\$ 186.176,05	\$ 35.142.404,87
2016	04	\$ 157.509	1,97%	59	\$ 183.073,12	\$ 35.325.477,98
2016	05	\$ 157.509	1,97%	58	\$ 179.970,18	\$ 35.505.448,17
2016	06	\$ 157.509	1,97%	57	\$ 176.867,25	\$ 35.682.315,42
2016	M13	\$ 157.509	1,97%	57	\$ 176.867,25	\$ 35.859.182,67
2016	07	\$ 157.509	1,97%	56	\$ 173.764,31	\$ 36.032.946,98
2016	08	\$ 157.509	1,97%	55	\$ 170.661,38	\$ 36.203.608,36
2016	09	\$ 157.509	1,97%	54	\$ 167.558,45	\$ 36.371.166,81
2016	10	\$ 157.509	1,97%	53	\$ 164.455,51	\$ 36.535.622,32
2016	11	\$ 157.509	1,97%	52	\$ 161.352,58	\$ 36.696.974,90
2016	12	\$ 157.509	1,97%	51	\$ 158.249,64	\$ 36.855.224,54
2016	M14	\$ 157.509	1,97%	51	\$ 158.249,64	\$ 37.013.474,19
2017	01	\$ 166.566	1,97%	50	\$ 164.067,65	\$ 37.177.541,83
2017	02	\$ 166.566	1,97%	49	\$ 160.786,29	\$ 37.338.328,13
2017	03	\$ 166.566	1,97%	48	\$ 157.504,94	\$ 37.495.833,07
2017	04	\$ 166.566	1,97%	47	\$ 154.223,59	\$ 37.650.056,66
2017	05	\$ 166.566	1,97%	46	\$ 150.942,24	\$ 37.800.998,90
2017	06	\$ 166.566	1,97%	45	\$ 147.660,88	\$ 37.948.659,78
2017	M13	\$ 166.566	1,97%	45	\$ 147.660,88	\$ 38.096.320,66
2017	07	\$ 166.566	1,97%	44	\$ 144.379,53	\$ 38.240.700,19
2017	08	\$ 166.566	1,97%	43	\$ 141.098,18	\$ 38.381.798,37
2017	09	\$ 166.566	1,97%	42	\$ 137.816,82	\$ 38.519.615,19
2017	10	\$ 166.566	1,97%	41	\$ 134.535,47	\$ 38.654.150,66
2017	11	\$ 166.566	1,97%	40	\$ 131.254,12	\$ 38.785.404,78
2017	12	\$ 166.566	1,97%	39	\$ 127.972,77	\$ 38.913.377,55
2017	M14	\$ 166.566	1,97%	39	\$ 127.972,77	\$ 39.041.350,31
2018	01	\$ 173.379	1,97%	38	\$ 129.791,29	\$ 39.171.141,60
2018	02	\$ 173.379	1,97%	37	\$ 126.375,73	\$ 39.297.517,33
2018	03	\$ 173.379	1,97%	36	\$ 122.960,17	\$ 39.420.477,50
2018	04	\$ 173.379	1,97%	35	\$ 119.544,61	\$ 39.540.022,10
2018	05	\$ 173.379	1,97%	34	\$ 116.129,05	\$ 39.656.151,15
2018	06	\$ 173.379	1,97%	33	\$ 112.713,49	\$ 39.768.864,64
2018	M13	\$ 173.379	1,97%	33	\$ 112.713,49	\$ 39.881.578,12
2018	07	\$ 173.379	1,97%	32	\$ 109.297,93	\$ 39.990.876,05
2018	08	\$ 173.379	1,97%	31	\$ 105.882,37	\$ 40.096.758,41
2018	09	\$ 173.379	1,97%	30	\$ 102.466,81	\$ 40.199.225,22
2018	10	\$ 173.379	1,97%	29	\$ 99.051,25	\$ 40.298.276,46
2018	11	\$ 173.379	1,97%	28	\$ 95.635,69	\$ 40.393.912,15
2018	12	\$ 173.379	1,97%	27	\$ 92.220,13	\$ 40.486.132,28
2018	M14	\$ 173.379	1,97%	27	\$ 92.220,13	\$ 40.578.352,40
2019	01	\$ 178.892	1,97%	26	\$ 91.628,55	\$ 40.669.980,95
2019	02	\$ 178.892	1,97%	25	\$ 88.104,38	\$ 40.758.085,33
2019	03	\$ 178.892	1,97%	24	\$ 84.580,20	\$ 40.842.665,54
2019	04	\$ 178.892	1,97%	23	\$ 81.056,03	\$ 40.923.721,57
2019	05	\$ 178.892	1,97%	22	\$ 77.531,85	\$ 41.001.253,42
2019	06	\$ 178.892	1,97%	21	\$ 74.007,68	\$ 41.075.261,10
2019	M13	\$ 178.892	1,97%	21	\$ 74.007,68	\$ 41.149.268,78
2019	07	\$ 178.892	1,97%	20	\$ 70.483,50	\$ 41.219.752,28
2019	08	\$ 178.892	1,97%	19	\$ 66.959,33	\$ 41.286.711,61

2019	09	\$ 178.892	1,97%	18	\$ 63.435,15	\$ 41.350.146,76
2019	10	\$ 178.892	1,97%	17	\$ 59.910,98	\$ 41.410.057,74
2019	11	\$ 178.892	1,97%	16	\$ 56.386,80	\$ 41.466.444,54
2019	12	\$ 178.892	1,97%	15	\$ 52.862,63	\$ 41.519.307,17
2019	M14	\$ 178.892	1,97%	15	\$ 52.862,63	\$ 41.572.169,80
2020	01	\$ 185.690	1,97%	14	\$ 51.213,31	\$ 41.623.383,11
2020	02	\$ 185.690	1,97%	13	\$ 47.555,22	\$ 41.670.938,33
2020	03	\$ 185.690	1,97%	12	\$ 43.897,13	\$ 41.714.835,45
2020	04	\$ 185.690	1,97%	11	\$ 40.239,03	\$ 41.755.074,48
2020	05	\$ 185.690	1,97%	10	\$ 36.580,94	\$ 41.791.655,42
2020	06	\$ 185.690	1,97%	9	\$ 32.922,84	\$ 41.824.578,27
2020	M13	\$ 185.690	1,97%	9	\$ 32.922,84	\$ 41.857.501,11
2020	07	\$ 185.690	1,97%	8	\$ 29.264,75	\$ 41.886.765,86
2020	08	\$ 185.690	1,97%	7	\$ 25.606,66	\$ 41.912.372,52
2020	09	\$ 185.690	1,97%	6	\$ 21.948,56	\$ 41.934.321,08
2020	10	\$ 185.690	1,97%	5	\$ 18.290,47	\$ 41.952.611,55
2020	11	\$ 185.690	1,97%	4	\$ 14.632,38	\$ 41.967.243,92
2020	12	\$ 185.690	1,97%	3	\$ 10.974,28	\$ 41.978.218,21
2020	M14	\$ 185.690	1,97%	3	\$ 10.974,28	\$ 41.989.192,49
2021	01	\$ 188.680	1,97%	2	\$ 7.433,98	\$ 41.996.626,47
2021	02	\$ 188.680	1,97%	1	\$ 3.716,99	\$ 42.000.343,45

Retroactivo: \$28.127.203,46

Intereses de mora: \$42.000.343,45

12. JORGE OMAR PÉREZ CASADIEGO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2005	\$ 71.834,18	4,85%	8	\$ 574.673,44
2006	\$ 75.318,14	4,48%	14	\$ 1.054.453,93
2007	\$ 78.692,39	5,69%	14	\$ 1.101.693,46
2008	\$ 83.169,99	7,67%	14	\$ 1.164.379,82
2009	\$ 89.549,13	2,00%	14	\$ 1.253.687,75
2010	\$ 91.340,11	3,17%	14	\$ 1.278.761,51
2011	\$ 94.235,59	3,73%	14	\$ 1.319.298,25
2012	\$ 97.750,58	2,44%	14	\$ 1.368.508,07
2013	\$ 100.135,69	1,94%	14	\$ 1.401.899,67
2014	\$ 102.078,32	3,66%	14	\$ 1.429.096,52
2015	\$ 105.814,39	6,77%	14	\$ 1.481.401,46
2016	\$ 112.978,02	5,75%	14	\$ 1.581.692,34
2017	\$ 119.474,26	4,09%	14	\$ 1.672.639,65
2018	\$ 124.360,76	3,18%	14	\$ 1.741.050,61
2019	\$ 128.315,43	3,80%	14	\$ 1.796.416,02
2020	\$ 133.191,42	1,61%	14	\$ 1.864.679,83
2021	\$ 135.335,80		2	\$ 270.671,60
				\$ 22.355.003,92

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2005	01		1,97%	194	\$ 0,00	\$ 0,00
2005	02	\$ 0	1,97%	193	\$ 0,00	\$ 0,00
2005	03	\$ 0	1,97%	192	\$ 0,00	\$ 0,00
2005	04	\$ 0	1,97%	191	\$ 0,00	\$ 0,00

2005	05	\$ 0	1,97%	190	\$ 0,00	\$ 0,00
2005	06	\$ 71.834	1,97%	189	\$ 267.460,20	\$ 267.460,20
2005	M13	\$ 71.834	1,97%	189	\$ 267.460,20	\$ 534.920,40
2005	07	\$ 71.834	1,97%	188	\$ 266.045,07	\$ 800.965,47
2005	08	\$ 71.834	1,97%	187	\$ 264.629,94	\$ 1.065.595,41
2005	09	\$ 71.834	1,97%	186	\$ 263.214,80	\$ 1.328.810,21
2005	10	\$ 71.834	1,97%	185	\$ 261.799,67	\$ 1.590.609,88
2005	11	\$ 71.834	1,97%	184	\$ 260.384,54	\$ 1.850.994,42
2005	12	\$ 71.834	1,97%	183	\$ 258.969,40	\$ 2.109.963,82
2005	M14	\$ 71.834	1,97%	183	\$ 258.969,40	\$ 2.368.933,22
2006	01	\$ 75.318	1,97%	182	\$ 270.045,66	\$ 2.638.978,88
2006	02	\$ 75.318	1,97%	181	\$ 268.561,89	\$ 2.907.540,77
2006	03	\$ 75.318	1,97%	180	\$ 267.078,12	\$ 3.174.618,90
2006	04	\$ 75.318	1,97%	179	\$ 265.594,36	\$ 3.440.213,25
2006	05	\$ 75.318	1,97%	178	\$ 264.110,59	\$ 3.704.323,84
2006	06	\$ 75.318	1,97%	177	\$ 262.626,82	\$ 3.966.950,67
2006	M13	\$ 75.318	1,97%	177	\$ 262.626,82	\$ 4.229.577,49
2006	07	\$ 75.318	1,97%	176	\$ 261.143,06	\$ 4.490.720,54
2006	08	\$ 75.318	1,97%	175	\$ 259.659,29	\$ 4.750.379,83
2006	09	\$ 75.318	1,97%	174	\$ 258.175,52	\$ 5.008.555,35
2006	10	\$ 75.318	1,97%	173	\$ 256.691,75	\$ 5.265.247,10
2006	11	\$ 75.318	1,97%	172	\$ 255.207,99	\$ 5.520.455,09
2006	12	\$ 75.318	1,97%	171	\$ 253.724,22	\$ 5.774.179,31
2006	M14	\$ 75.318	1,97%	171	\$ 253.724,22	\$ 6.027.903,53
2007	01	\$ 78.692	1,97%	170	\$ 263.540,81	\$ 6.291.444,34
2007	02	\$ 78.692	1,97%	169	\$ 261.990,57	\$ 6.553.434,91
2007	03	\$ 78.692	1,97%	168	\$ 260.440,33	\$ 6.813.875,25
2007	04	\$ 78.692	1,97%	167	\$ 258.890,09	\$ 7.072.765,34
2007	05	\$ 78.692	1,97%	166	\$ 257.339,85	\$ 7.330.105,20
2007	06	\$ 78.692	1,97%	165	\$ 255.789,61	\$ 7.585.894,81
2007	M13	\$ 78.692	1,97%	165	\$ 255.789,61	\$ 7.841.684,42
2007	07	\$ 78.692	1,97%	164	\$ 254.239,37	\$ 8.095.923,80
2007	08	\$ 78.692	1,97%	163	\$ 252.689,13	\$ 8.348.612,93
2007	09	\$ 78.692	1,97%	162	\$ 251.138,89	\$ 8.599.751,82
2007	10	\$ 78.692	1,97%	161	\$ 249.588,65	\$ 8.849.340,48
2007	11	\$ 78.692	1,97%	160	\$ 248.038,41	\$ 9.097.378,89
2007	12	\$ 78.692	1,97%	159	\$ 246.488,17	\$ 9.343.867,06
2007	M14	\$ 78.692	1,97%	159	\$ 246.488,17	\$ 9.590.355,24
2008	01	\$ 83.170	1,97%	158	\$ 258.874,91	\$ 9.849.230,15
2008	02	\$ 83.170	1,97%	157	\$ 257.236,46	\$ 10.106.466,61
2008	03	\$ 83.170	1,97%	156	\$ 255.598,01	\$ 10.362.064,62
2008	04	\$ 83.170	1,97%	155	\$ 253.959,56	\$ 10.616.024,19
2008	05	\$ 83.170	1,97%	154	\$ 252.321,12	\$ 10.868.345,30
2008	06	\$ 83.170	1,97%	153	\$ 250.682,67	\$ 11.119.027,97
2008	M13	\$ 83.170	1,97%	153	\$ 250.682,67	\$ 11.369.710,64
2008	07	\$ 83.170	1,97%	152	\$ 249.044,22	\$ 11.618.754,85
2008	08	\$ 83.170	1,97%	151	\$ 247.405,77	\$ 11.866.160,62
2008	09	\$ 83.170	1,97%	150	\$ 245.767,32	\$ 12.111.927,94
2008	10	\$ 83.170	1,97%	149	\$ 244.128,87	\$ 12.356.056,82
2008	11	\$ 83.170	1,97%	148	\$ 242.490,42	\$ 12.598.547,24
2008	12	\$ 83.170	1,97%	147	\$ 240.851,97	\$ 12.839.399,21
2008	M14	\$ 83.170	1,97%	147	\$ 240.851,97	\$ 13.080.251,19
2009	01	\$ 89.549	1,97%	146	\$ 257.561,21	\$ 13.337.812,39
2009	02	\$ 89.549	1,97%	145	\$ 255.797,09	\$ 13.593.609,48
2009	03	\$ 89.549	1,97%	144	\$ 254.032,97	\$ 13.847.642,46
2009	04	\$ 89.549	1,97%	143	\$ 252.268,85	\$ 14.099.911,31
2009	05	\$ 89.549	1,97%	142	\$ 250.504,74	\$ 14.350.416,05
2009	06	\$ 89.549	1,97%	141	\$ 248.740,62	\$ 14.599.156,67
2009	07	\$ 89.549	1,97%	141	\$ 248.740,62	\$ 14.847.897,28
2009	07	\$ 89.549	1,97%	140	\$ 246.976,50	\$ 15.094.873,78
2009	08	\$ 89.549	1,97%	139	\$ 245.212,38	\$ 15.340.086,17
2009	09	\$ 89.549	1,97%	138	\$ 243.448,26	\$ 15.583.534,43

2009	10	\$ 89.549	1,97%	137	\$ 241.684,15	\$ 15.825.218,58
2009	11	\$ 89.549	1,97%	136	\$ 239.920,03	\$ 16.065.138,61
2009	12	\$ 89.549	1,97%	135	\$ 238.155,91	\$ 16.303.294,52
2009	M14	\$ 89.549	1,97%	135	\$ 238.155,91	\$ 16.541.450,43
2010	01	\$ 91.340	1,97%	134	\$ 241.119,62	\$ 16.782.570,05
2010	02	\$ 91.340	1,97%	133	\$ 239.320,22	\$ 17.021.890,28
2010	03	\$ 91.340	1,97%	132	\$ 237.520,82	\$ 17.259.411,10
2010	04	\$ 91.340	1,97%	131	\$ 235.721,42	\$ 17.495.132,52
2010	05	\$ 91.340	1,97%	130	\$ 233.922,02	\$ 17.729.054,54
2010	06	\$ 91.340	1,97%	129	\$ 232.122,62	\$ 17.961.177,16
2010	M13	\$ 91.340	1,97%	129	\$ 232.122,62	\$ 18.193.299,78
2010	07	\$ 91.340	1,97%	128	\$ 230.323,22	\$ 18.423.623,01
2010	08	\$ 91.340	1,97%	127	\$ 228.523,82	\$ 18.652.146,83
2010	09	\$ 91.340	1,97%	126	\$ 226.724,42	\$ 18.878.871,25
2010	10	\$ 91.340	1,97%	125	\$ 224.925,02	\$ 19.103.796,27
2010	11	\$ 91.340	1,97%	124	\$ 223.125,62	\$ 19.326.921,89
2010	12	\$ 91.340	1,97%	123	\$ 221.326,22	\$ 19.548.248,11
2010	M14	\$ 91.340	1,97%	123	\$ 221.326,22	\$ 19.769.574,33
2011	01	\$ 94.236	1,97%	122	\$ 226.485,82	\$ 19.996.060,15
2011	02	\$ 94.236	1,97%	121	\$ 224.629,38	\$ 20.220.689,52
2011	03	\$ 94.236	1,97%	120	\$ 222.772,93	\$ 20.443.462,46
2011	04	\$ 94.236	1,97%	119	\$ 220.916,49	\$ 20.664.378,95
2011	05	\$ 94.236	1,97%	118	\$ 219.060,05	\$ 20.883.439,00
2011	06	\$ 94.236	1,97%	117	\$ 217.203,61	\$ 21.100.642,62
2011	M13	\$ 94.236	1,97%	117	\$ 217.203,61	\$ 21.317.846,23
2011	07	\$ 94.236	1,97%	116	\$ 215.347,17	\$ 21.533.193,40
2011	08	\$ 94.236	1,97%	115	\$ 213.490,73	\$ 21.746.684,13
2011	09	\$ 94.236	1,97%	114	\$ 211.634,29	\$ 21.958.318,41
2011	10	\$ 94.236	1,97%	113	\$ 209.777,85	\$ 22.168.096,26
2011	11	\$ 94.236	1,97%	112	\$ 207.921,41	\$ 22.376.017,67
2011	12	\$ 94.236	1,97%	111	\$ 206.064,96	\$ 22.582.082,63
2011	M14	\$ 94.236	1,97%	111	\$ 206.064,96	\$ 22.788.147,60
2012	01	\$ 97.751	1,97%	110	\$ 211.825,51	\$ 22.999.973,10
2012	02	\$ 97.751	1,97%	109	\$ 209.899,82	\$ 23.209.872,92
2012	03	\$ 97.751	1,97%	108	\$ 207.974,13	\$ 23.417.847,06
2012	04	\$ 97.751	1,97%	107	\$ 206.048,45	\$ 23.623.895,50
2012	05	\$ 97.751	1,97%	106	\$ 204.122,76	\$ 23.828.018,27
2012	06	\$ 97.751	1,97%	105	\$ 202.197,07	\$ 24.030.215,34
2012	M13	\$ 97.751	1,97%	105	\$ 202.197,07	\$ 24.232.412,42
2012	07	\$ 97.751	1,97%	104	\$ 200.271,39	\$ 24.432.683,80
2012	08	\$ 97.751	1,97%	103	\$ 198.345,70	\$ 24.631.029,51
2012	09	\$ 97.751	1,97%	102	\$ 196.420,02	\$ 24.827.449,52
2012	10	\$ 97.751	1,97%	101	\$ 194.494,33	\$ 25.021.943,85
2012	11	\$ 97.751	1,97%	100	\$ 192.568,64	\$ 25.214.512,49
2012	12	\$ 97.751	1,97%	99	\$ 190.642,96	\$ 25.405.155,45
2012	M14	\$ 97.751	1,97%	99	\$ 190.642,96	\$ 25.595.798,41
2013	01	\$ 100.136	1,97%	98	\$ 193.321,96	\$ 25.789.120,37
2013	02	\$ 100.136	1,97%	97	\$ 191.349,29	\$ 25.980.469,66
2013	03	\$ 100.136	1,97%	96	\$ 189.376,62	\$ 26.169.846,28
2013	04	\$ 100.136	1,97%	95	\$ 187.403,94	\$ 26.357.250,22
2013	05	\$ 100.136	1,97%	94	\$ 185.431,27	\$ 26.542.681,49
2013	06	\$ 100.136	1,97%	93	\$ 183.458,60	\$ 26.726.140,09
2013	M13	\$ 100.136	1,97%	93	\$ 183.458,60	\$ 26.909.598,69
2013	07	\$ 100.136	1,97%	92	\$ 181.485,92	\$ 27.091.084,61
2013	08	\$ 100.136	1,97%	91	\$ 179.513,25	\$ 27.270.597,86
2013	09	\$ 100.136	1,97%	90	\$ 177.540,58	\$ 27.448.138,44
2013	10	\$ 100.136	1,97%	89	\$ 175.567,91	\$ 27.623.706,34

2013	11	\$ 100.136	1,97%	88	\$ 173.595,23	\$ 27.797.301,58
2013	12	\$ 100.136	1,97%	87	\$ 171.622,56	\$ 27.968.924,14
2013	M14	\$ 100.136	1,97%	87	\$ 171.622,56	\$ 28.140.546,70
2014	01	\$ 102.078	1,97%	86	\$ 172.941,09	\$ 28.313.487,78
2014	02	\$ 102.078	1,97%	85	\$ 170.930,15	\$ 28.484.417,93
2014	03	\$ 102.078	1,97%	84	\$ 168.919,20	\$ 28.653.337,14
2014	04	\$ 102.078	1,97%	83	\$ 166.908,26	\$ 28.820.245,40
2014	05	\$ 102.078	1,97%	82	\$ 164.897,32	\$ 28.985.142,71
2014	06	\$ 102.078	1,97%	81	\$ 162.886,38	\$ 29.148.029,09
2014	M13	\$ 102.078	1,97%	81	\$ 162.886,38	\$ 29.310.915,47
2014	07	\$ 102.078	1,97%	80	\$ 160.875,43	\$ 29.471.790,90
2014	08	\$ 102.078	1,97%	79	\$ 158.864,49	\$ 29.630.655,39
2014	09	\$ 102.078	1,97%	78	\$ 156.853,55	\$ 29.787.508,93
2014	10	\$ 102.078	1,97%	77	\$ 154.842,60	\$ 29.942.351,54
2014	11	\$ 102.078	1,97%	76	\$ 152.831,66	\$ 30.095.183,20
2014	12	\$ 102.078	1,97%	75	\$ 150.820,72	\$ 30.246.003,92
2014	M14	\$ 102.078	1,97%	75	\$ 150.820,72	\$ 30.396.824,63
2015	01	\$ 105.814	1,97%	74	\$ 154.256,22	\$ 30.551.080,85
2015	02	\$ 105.814	1,97%	73	\$ 152.171,67	\$ 30.703.252,53
2015	03	\$ 105.814	1,97%	72	\$ 150.087,13	\$ 30.853.339,66
2015	04	\$ 105.814	1,97%	71	\$ 148.002,59	\$ 31.001.342,24
2015	05	\$ 105.814	1,97%	70	\$ 145.918,04	\$ 31.147.260,29
2015	06	\$ 105.814	1,97%	69	\$ 143.833,50	\$ 31.291.093,79
2015	M13	\$ 105.814	1,97%	69	\$ 143.833,50	\$ 31.434.927,29
2015	07	\$ 105.814	1,97%	68	\$ 141.748,96	\$ 31.576.676,24
2015	08	\$ 105.814	1,97%	67	\$ 139.664,41	\$ 31.716.340,66
2015	09	\$ 105.814	1,97%	66	\$ 137.579,87	\$ 31.853.920,53
2015	10	\$ 105.814	1,97%	65	\$ 135.495,33	\$ 31.989.415,85
2015	11	\$ 105.814	1,97%	64	\$ 133.410,78	\$ 32.122.826,64
2015	12	\$ 105.814	1,97%	63	\$ 131.326,24	\$ 32.254.152,88
2015	M14	\$ 105.814	1,97%	63	\$ 131.326,24	\$ 32.385.479,12
2016	01	\$ 112.978	1,97%	62	\$ 137.991,35	\$ 32.523.470,47
2016	02	\$ 112.978	1,97%	61	\$ 135.765,69	\$ 32.659.236,16
2016	03	\$ 112.978	1,97%	60	\$ 133.540,02	\$ 32.792.776,18
2016	04	\$ 112.978	1,97%	59	\$ 131.314,35	\$ 32.924.090,53
2016	05	\$ 112.978	1,97%	58	\$ 129.088,69	\$ 33.053.179,21
2016	06	\$ 112.978	1,97%	57	\$ 126.863,02	\$ 33.180.042,23
2016	M13	\$ 112.978	1,97%	57	\$ 126.863,02	\$ 33.306.905,25
2016	07	\$ 112.978	1,97%	56	\$ 124.637,35	\$ 33.431.542,60
2016	08	\$ 112.978	1,97%	55	\$ 122.411,68	\$ 33.553.954,29
2016	09	\$ 112.978	1,97%	54	\$ 120.186,02	\$ 33.674.140,31
2016	10	\$ 112.978	1,97%	53	\$ 117.960,35	\$ 33.792.100,66
2016	11	\$ 112.978	1,97%	52	\$ 115.734,68	\$ 33.907.835,34
2016	12	\$ 112.978	1,97%	51	\$ 113.509,02	\$ 34.021.344,36
2016	M14	\$ 112.978	1,97%	51	\$ 113.509,02	\$ 34.134.853,37
2017	01	\$ 119.474	1,97%	50	\$ 117.682,15	\$ 34.252.535,52
2017	02	\$ 119.474	1,97%	49	\$ 115.328,50	\$ 34.367.864,02
2017	03	\$ 119.474	1,97%	48	\$ 112.974,86	\$ 34.480.838,88
2017	04	\$ 119.474	1,97%	47	\$ 110.621,22	\$ 34.591.460,10
2017	05	\$ 119.474	1,97%	46	\$ 108.267,57	\$ 34.699.727,67
2017	06	\$ 119.474	1,97%	45	\$ 105.913,93	\$ 34.805.641,61
2017	M13	\$ 119.474	1,97%	45	\$ 105.913,93	\$ 34.911.555,54
2017	07	\$ 119.474	1,97%	44	\$ 103.560,29	\$ 35.015.115,83
2017	08	\$ 119.474	1,97%	43	\$ 101.206,65	\$ 35.116.322,47
2017	09	\$ 119.474	1,97%	42	\$ 98.853,00	\$ 35.215.175,47
2017	10	\$ 119.474	1,97%	41	\$ 96.499,36	\$ 35.311.674,83
2017	11	\$ 119.474	1,97%	40	\$ 94.145,72	\$ 35.405.820,55

2017	12	\$ 119.474	1,97%	39	\$ 91.792,07	\$ 35.497.612,63
2017	M14	\$ 119.474	1,97%	39	\$ 91.792,07	\$ 35.589.404,70
2018	01	\$ 124.361	1,97%	38	\$ 93.096,46	\$ 35.682.501,16
2018	02	\$ 124.361	1,97%	37	\$ 90.646,56	\$ 35.773.147,72
2018	03	\$ 124.361	1,97%	36	\$ 88.196,65	\$ 35.861.344,37
2018	04	\$ 124.361	1,97%	35	\$ 85.746,74	\$ 35.947.091,12
2018	05	\$ 124.361	1,97%	34	\$ 83.296,84	\$ 36.030.387,95
2018	06	\$ 124.361	1,97%	33	\$ 80.846,93	\$ 36.111.234,88
2018	M13	\$ 124.361	1,97%	33	\$ 80.846,93	\$ 36.192.081,81
2018	07	\$ 124.361	1,97%	32	\$ 78.397,02	\$ 36.270.478,84
2018	08	\$ 124.361	1,97%	31	\$ 75.947,12	\$ 36.346.425,95
2018	09	\$ 124.361	1,97%	30	\$ 73.497,21	\$ 36.419.923,16
2018	10	\$ 124.361	1,97%	29	\$ 71.047,30	\$ 36.490.970,46
2018	11	\$ 124.361	1,97%	28	\$ 68.597,40	\$ 36.559.567,86
2018	12	\$ 124.361	1,97%	27	\$ 66.147,49	\$ 36.625.715,35
2018	M14	\$ 124.361	1,97%	27	\$ 66.147,49	\$ 36.691.862,84
2019	01	\$ 128.315	1,97%	26	\$ 65.723,16	\$ 36.757.586,00
2019	02	\$ 128.315	1,97%	25	\$ 63.195,35	\$ 36.820.781,35
2019	03	\$ 128.315	1,97%	24	\$ 60.667,54	\$ 36.881.448,88
2019	04	\$ 128.315	1,97%	23	\$ 58.139,72	\$ 36.939.588,61
2019	05	\$ 128.315	1,97%	22	\$ 55.611,91	\$ 36.995.200,51
2019	06	\$ 128.315	1,97%	21	\$ 53.084,09	\$ 37.048.284,61
2019	M13	\$ 128.315	1,97%	21	\$ 53.084,09	\$ 37.101.368,70
2019	07	\$ 128.315	1,97%	20	\$ 50.556,28	\$ 37.151.924,98
2019	08	\$ 128.315	1,97%	19	\$ 48.028,47	\$ 37.199.953,44
2019	09	\$ 128.315	1,97%	18	\$ 45.500,65	\$ 37.245.454,10
2019	10	\$ 128.315	1,97%	17	\$ 42.972,84	\$ 37.288.426,93
2019	11	\$ 128.315	1,97%	16	\$ 40.445,02	\$ 37.328.871,96
2019	12	\$ 128.315	1,97%	15	\$ 37.917,21	\$ 37.366.789,17
2019	M14	\$ 128.315	1,97%	15	\$ 37.917,21	\$ 37.404.706,38
2020	01	\$ 133.191	1,97%	14	\$ 36.734,19	\$ 37.441.440,57
2020	02	\$ 133.191	1,97%	13	\$ 34.110,32	\$ 37.475.550,89
2020	03	\$ 133.191	1,97%	12	\$ 31.486,45	\$ 37.507.037,34
2020	04	\$ 133.191	1,97%	11	\$ 28.862,58	\$ 37.535.899,93
2020	05	\$ 133.191	1,97%	10	\$ 26.238,71	\$ 37.562.138,63
2020	06	\$ 133.191	1,97%	9	\$ 23.614,84	\$ 37.585.753,47
2020	M13	\$ 133.191	1,97%	9	\$ 23.614,84	\$ 37.609.368,31
2020	07	\$ 133.191	1,97%	8	\$ 20.990,97	\$ 37.630.359,28
2020	08	\$ 133.191	1,97%	7	\$ 18.367,10	\$ 37.648.726,38
2020	09	\$ 133.191	1,97%	6	\$ 15.743,23	\$ 37.664.469,60
2020	10	\$ 133.191	1,97%	5	\$ 13.119,35	\$ 37.677.588,96
2020	11	\$ 133.191	1,97%	4	\$ 10.495,48	\$ 37.688.084,44
2020	12	\$ 133.191	1,97%	3	\$ 7.871,61	\$ 37.695.956,05
2020	M14	\$ 133.191	1,97%	3	\$ 7.871,61	\$ 37.703.827,67
2021	01	\$ 135.336	1,97%	2	\$ 5.332,23	\$ 37.709.159,90
2021	02	\$ 135.336	1,97%	1	\$ 2.666,12	\$ 37.711.826,01

Retroactivo: \$22.355.003,92

Intereses de mora: \$37.711.826,01

13. CIRO ALFONSO CARRILLO MORENO

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2006	\$ 106.179,42	4,48%	9	\$ 955.614,78

2007	\$ 110.936,26	5,69%	14	\$ 1.553.107,61
2008	\$ 117.248,53	7,67%	14	\$ 1.641.479,44
2009	\$ 126.241,49	2,00%	14	\$ 1.767.380,91
2010	\$ 128.766,32	3,17%	14	\$ 1.802.728,53
2011	\$ 132.848,22	3,73%	14	\$ 1.859.875,02
2012	\$ 137.803,45	2,44%	14	\$ 1.929.248,36
2013	\$ 141.165,86	1,94%	14	\$ 1.976.322,02
2014	\$ 143.904,48	3,66%	14	\$ 2.014.662,67
2015	\$ 149.171,38	6,77%	14	\$ 2.088.399,32
2016	\$ 159.270,28	5,75%	14	\$ 2.229.783,95
2017	\$ 168.428,32	4,09%	14	\$ 2.357.996,53
2018	\$ 175.317,04	3,18%	14	\$ 2.454.438,59
2019	\$ 180.892,12	3,80%	14	\$ 2.532.489,74
2020	\$ 187.766,02	1,61%	14	\$ 2.628.724,35
2021	\$ 190.789,06		2	\$ 381.578,12
				\$ 30.173.829,92

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2006	01		1,97%	182	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	02	\$ 0	1,97%	181	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	03	\$ 0	1,97%	180	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	04	\$ 0	1,97%	179	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	05	\$ 0	1,97%	178	\$ 0,00	\$ 0,00
2006	06	\$ 106.179	1,97%	177	\$ 370.237,02	\$ 370.237,02
2006	M13	\$ 106.179	1,97%	177	\$ 370.237,02	\$ 740.474,04
2006	07	\$ 106.179	1,97%	176	\$ 368.145,29	\$ 1.108.619,32
2006	08	\$ 106.179	1,97%	175	\$ 366.053,55	\$ 1.474.672,87
2006	09	\$ 106.179	1,97%	174	\$ 363.961,82	\$ 1.838.634,69
2006	10	\$ 106.179	1,97%	173	\$ 361.870,08	\$ 2.200.504,77
2006	11	\$ 106.179	1,97%	172	\$ 359.778,35	\$ 2.560.283,12
2006	12	\$ 106.179	1,97%	171	\$ 357.686,61	\$ 2.917.969,73
2006	M14	\$ 106.179	1,97%	171	\$ 357.686,61	\$ 3.275.656,34
2007	01	\$ 110.936	1,97%	170	\$ 371.525,53	\$ 3.647.181,88
2007	02	\$ 110.936	1,97%	169	\$ 369.340,09	\$ 4.016.521,97
2007	03	\$ 110.936	1,97%	168	\$ 367.154,65	\$ 4.383.676,61
2007	04	\$ 110.936	1,97%	167	\$ 364.969,20	\$ 4.748.645,82
2007	05	\$ 110.936	1,97%	166	\$ 362.783,76	\$ 5.111.429,57
2007	06	\$ 110.936	1,97%	165	\$ 360.598,31	\$ 5.472.027,89
2007	M13	\$ 110.936	1,97%	165	\$ 360.598,31	\$ 5.832.626,20
2007	07	\$ 110.936	1,97%	164	\$ 358.412,87	\$ 6.191.039,07
2007	08	\$ 110.936	1,97%	163	\$ 356.227,42	\$ 6.547.266,49
2007	09	\$ 110.936	1,97%	162	\$ 354.041,98	\$ 6.901.308,47
2007	10	\$ 110.936	1,97%	161	\$ 351.856,54	\$ 7.253.165,01
2007	11	\$ 110.936	1,97%	160	\$ 349.671,09	\$ 7.602.836,10
2007	12	\$ 110.936	1,97%	159	\$ 347.485,65	\$ 7.950.321,75
2007	M14	\$ 110.936	1,97%	159	\$ 347.485,65	\$ 8.297.807,39
2008	01	\$ 117.249	1,97%	158	\$ 364.947,77	\$ 8.662.755,17
2008	02	\$ 117.249	1,97%	157	\$ 362.637,98	\$ 9.025.393,15
2008	03	\$ 117.249	1,97%	156	\$ 360.328,18	\$ 9.385.721,33
2008	04	\$ 117.249	1,97%	155	\$ 358.018,39	\$ 9.743.739,72
2008	05	\$ 117.249	1,97%	154	\$ 355.708,59	\$ 10.099.448,31
2008	06	\$ 117.249	1,97%	153	\$ 353.398,79	\$ 10.452.847,10
2008	M13	\$ 117.249	1,97%	153	\$ 353.398,79	\$ 10.806.245,90
2008	07	\$ 117.249	1,97%	152	\$ 351.089,00	\$ 11.157.334,89
2008	08	\$ 117.249	1,97%	151	\$ 348.779,20	\$ 11.506.114,10
2008	09	\$ 117.249	1,97%	150	\$ 346.469,41	\$ 11.852.583,50
2008	10	\$ 117.249	1,97%	149	\$ 344.159,61	\$ 12.196.743,11
2008	11	\$ 117.249	1,97%	148	\$ 341.849,81	\$ 12.538.592,93

2008	12	\$ 117.249	1,97%	147	\$ 339.540,02	\$ 12.878.132,94
2008	M14	\$ 117.249	1,97%	147	\$ 339.540,02	\$ 13.217.672,96
2009	01	\$ 126.241	1,97%	146	\$ 363.095,77	\$ 13.580.768,74
2009	02	\$ 126.241	1,97%	145	\$ 360.608,82	\$ 13.941.377,55
2009	03	\$ 126.241	1,97%	144	\$ 358.121,86	\$ 14.299.499,41
2009	04	\$ 126.241	1,97%	143	\$ 355.634,90	\$ 14.655.134,31
2009	05	\$ 126.241	1,97%	142	\$ 353.147,94	\$ 15.008.282,26
2009	06	\$ 126.241	1,97%	141	\$ 350.660,99	\$ 15.358.943,24
2009	M13	\$ 126.241	1,97%	141	\$ 350.660,99	\$ 15.709.604,23
2009	07	\$ 126.241	1,97%	140	\$ 348.174,03	\$ 16.057.778,26
2009	08	\$ 126.241	1,97%	139	\$ 345.687,07	\$ 16.403.465,33
2009	09	\$ 126.241	1,97%	138	\$ 343.200,11	\$ 16.746.665,45
2009	10	\$ 126.241	1,97%	137	\$ 340.713,16	\$ 17.087.378,60
2009	11	\$ 126.241	1,97%	136	\$ 338.226,20	\$ 17.425.604,80
2009	12	\$ 126.241	1,97%	135	\$ 335.739,24	\$ 17.761.344,05
2009	M14	\$ 126.241	1,97%	135	\$ 335.739,24	\$ 18.097.083,29
2010	01	\$ 128.766	1,97%	134	\$ 339.917,33	\$ 18.437.000,62
2010	02	\$ 128.766	1,97%	133	\$ 337.380,64	\$ 18.774.381,26
2010	03	\$ 128.766	1,97%	132	\$ 334.843,94	\$ 19.109.225,19
2010	04	\$ 128.766	1,97%	131	\$ 332.307,24	\$ 19.441.532,44
2010	05	\$ 128.766	1,97%	130	\$ 329.770,55	\$ 19.771.302,98
2010	06	\$ 128.766	1,97%	129	\$ 327.233,85	\$ 20.098.536,83
2010	07	\$ 128.766	1,97%	129	\$ 327.233,85	\$ 20.425.770,68
2010	07	\$ 128.766	1,97%	128	\$ 324.697,15	\$ 20.750.467,83
2010	08	\$ 128.766	1,97%	127	\$ 322.160,46	\$ 21.072.628,29
2010	09	\$ 128.766	1,97%	126	\$ 319.623,76	\$ 21.392.252,05
2010	10	\$ 128.766	1,97%	125	\$ 317.087,06	\$ 21.709.339,11
2010	11	\$ 128.766	1,97%	124	\$ 314.550,37	\$ 22.023.889,48
2010	12	\$ 128.766	1,97%	123	\$ 312.013,67	\$ 22.335.903,15
2010	M14	\$ 128.766	1,97%	123	\$ 312.013,67	\$ 22.647.916,82
2011	01	\$ 132.848	1,97%	122	\$ 319.287,41	\$ 22.967.204,23
2011	02	\$ 132.848	1,97%	121	\$ 316.670,30	\$ 23.283.874,53
2011	03	\$ 132.848	1,97%	120	\$ 314.053,19	\$ 23.597.927,72
2011	04	\$ 132.848	1,97%	119	\$ 311.436,08	\$ 23.909.363,81
2011	05	\$ 132.848	1,97%	118	\$ 308.818,97	\$ 24.218.182,78
2011	06	\$ 132.848	1,97%	117	\$ 306.201,86	\$ 24.524.384,64
2011	M13	\$ 132.848	1,97%	117	\$ 306.201,86	\$ 24.830.586,50
2011	07	\$ 132.848	1,97%	116	\$ 303.584,75	\$ 25.134.171,25
2011	08	\$ 132.848	1,97%	115	\$ 300.967,64	\$ 25.435.138,90
2011	09	\$ 132.848	1,97%	114	\$ 298.350,53	\$ 25.733.489,43
2011	10	\$ 132.848	1,97%	113	\$ 295.733,42	\$ 26.029.222,85
2011	11	\$ 132.848	1,97%	112	\$ 293.116,31	\$ 26.322.339,16
2011	12	\$ 132.848	1,97%	111	\$ 290.499,20	\$ 26.612.838,37
2011	M14	\$ 132.848	1,97%	111	\$ 290.499,20	\$ 26.903.337,57
2012	01	\$ 137.803	1,97%	110	\$ 298.620,08	\$ 27.201.957,65
2012	02	\$ 137.803	1,97%	109	\$ 295.905,35	\$ 27.497.862,99
2012	03	\$ 137.803	1,97%	108	\$ 293.190,62	\$ 27.791.053,61
2012	04	\$ 137.803	1,97%	107	\$ 290.475,89	\$ 28.081.529,51
2012	05	\$ 137.803	1,97%	106	\$ 287.761,16	\$ 28.369.290,67
2012	06	\$ 137.803	1,97%	105	\$ 285.046,44	\$ 28.654.337,11
2012	M13	\$ 137.803	1,97%	105	\$ 285.046,44	\$ 28.939.383,54
2012	07	\$ 137.803	1,97%	104	\$ 282.331,71	\$ 29.221.715,25
2012	08	\$ 137.803	1,97%	103	\$ 279.616,98	\$ 29.501.332,23
2012	09	\$ 137.803	1,97%	102	\$ 276.902,25	\$ 29.778.234,48
2012	10	\$ 137.803	1,97%	101	\$ 274.187,52	\$ 30.052.422,01
2012	11	\$ 137.803	1,97%	100	\$ 271.472,80	\$ 30.323.894,81
2012	12	\$ 137.803	1,97%	99	\$ 268.758,07	\$ 30.592.652,87
2012	M14	\$ 137.803	1,97%	99	\$ 268.758,07	\$ 30.861.410,94
2013	01	\$ 141.166	1,97%	98	\$ 272.534,81	\$ 31.133.945,75

2013	02	\$ 141.166	1,97%	97	\$ 269.753,84	\$ 31.403.699,59
2013	03	\$ 141.166	1,97%	96	\$ 266.972,87	\$ 31.670.672,47
2013	04	\$ 141.166	1,97%	95	\$ 264.191,91	\$ 31.934.864,38
2013	05	\$ 141.166	1,97%	94	\$ 261.410,94	\$ 32.196.275,31
2013	06	\$ 141.166	1,97%	93	\$ 258.629,97	\$ 32.454.905,29
2013	M13	\$ 141.166	1,97%	93	\$ 258.629,97	\$ 32.713.535,26
2013	07	\$ 141.166	1,97%	92	\$ 255.849,00	\$ 32.969.384,26
2013	08	\$ 141.166	1,97%	91	\$ 253.068,04	\$ 33.222.452,30
2013	09	\$ 141.166	1,97%	90	\$ 250.287,07	\$ 33.472.739,37
2013	10	\$ 141.166	1,97%	89	\$ 247.506,10	\$ 33.720.245,47
2013	11	\$ 141.166	1,97%	88	\$ 244.725,13	\$ 33.964.970,61
2013	12	\$ 141.166	1,97%	87	\$ 241.944,17	\$ 34.206.914,78
2013	M14	\$ 141.166	1,97%	87	\$ 241.944,17	\$ 34.448.858,94
2014	01	\$ 143.904	1,97%	86	\$ 243.802,97	\$ 34.692.661,91
2014	02	\$ 143.904	1,97%	85	\$ 240.968,05	\$ 34.933.629,96
2014	03	\$ 143.904	1,97%	84	\$ 238.133,13	\$ 35.171.763,10
2014	04	\$ 143.904	1,97%	83	\$ 235.298,22	\$ 35.407.061,31
2014	05	\$ 143.904	1,97%	82	\$ 232.463,30	\$ 35.639.524,61
2014	06	\$ 143.904	1,97%	81	\$ 229.628,38	\$ 35.869.152,99
2014	M13	\$ 143.904	1,97%	81	\$ 229.628,38	\$ 36.098.781,37
2014	07	\$ 143.904	1,97%	80	\$ 226.793,46	\$ 36.325.574,83
2014	08	\$ 143.904	1,97%	79	\$ 223.958,54	\$ 36.549.533,37
2014	09	\$ 143.904	1,97%	78	\$ 221.123,62	\$ 36.770.656,99
2014	10	\$ 143.904	1,97%	77	\$ 218.288,71	\$ 36.988.945,70
2014	11	\$ 143.904	1,97%	76	\$ 215.453,79	\$ 37.204.399,49
2014	12	\$ 143.904	1,97%	75	\$ 212.618,87	\$ 37.417.018,36
2014	M14	\$ 143.904	1,97%	75	\$ 212.618,87	\$ 37.629.637,23
2015	01	\$ 149.171	1,97%	74	\$ 217.462,04	\$ 37.847.099,26
2015	02	\$ 149.171	1,97%	73	\$ 214.523,36	\$ 38.061.622,63
2015	03	\$ 149.171	1,97%	72	\$ 211.584,69	\$ 38.273.207,31
2015	04	\$ 149.171	1,97%	71	\$ 208.646,01	\$ 38.481.853,32
2015	05	\$ 149.171	1,97%	70	\$ 205.707,33	\$ 38.687.560,65
2015	06	\$ 149.171	1,97%	69	\$ 202.768,66	\$ 38.890.329,31
2015	M13	\$ 149.171	1,97%	69	\$ 202.768,66	\$ 39.093.097,97
2015	07	\$ 149.171	1,97%	68	\$ 199.829,98	\$ 39.292.927,95
2015	08	\$ 149.171	1,97%	67	\$ 196.891,30	\$ 39.489.819,25
2015	09	\$ 149.171	1,97%	66	\$ 193.952,63	\$ 39.683.771,88
2015	10	\$ 149.171	1,97%	65	\$ 191.013,95	\$ 39.874.785,83
2015	11	\$ 149.171	1,97%	64	\$ 188.075,28	\$ 40.062.861,11
2015	12	\$ 149.171	1,97%	63	\$ 185.136,60	\$ 40.247.997,71
2015	M14	\$ 149.171	1,97%	63	\$ 185.136,60	\$ 40.433.134,31
2016	01	\$ 159.270	1,97%	62	\$ 194.532,72	\$ 40.627.667,03
2016	02	\$ 159.270	1,97%	61	\$ 191.395,10	\$ 40.819.062,12
2016	03	\$ 159.270	1,97%	60	\$ 188.257,47	\$ 41.007.319,59
2016	04	\$ 159.270	1,97%	59	\$ 185.119,85	\$ 41.192.439,44
2016	05	\$ 159.270	1,97%	58	\$ 181.982,22	\$ 41.374.421,66
2016	06	\$ 159.270	1,97%	57	\$ 178.844,60	\$ 41.553.266,26
2016	M13	\$ 159.270	1,97%	57	\$ 178.844,60	\$ 41.732.110,86
2016	07	\$ 159.270	1,97%	56	\$ 175.706,97	\$ 41.907.817,83
2016	08	\$ 159.270	1,97%	55	\$ 172.569,35	\$ 42.080.387,18
2016	09	\$ 159.270	1,97%	54	\$ 169.431,72	\$ 42.249.818,90
2016	10	\$ 159.270	1,97%	53	\$ 166.294,10	\$ 42.416.113,00
2016	11	\$ 159.270	1,97%	52	\$ 163.156,47	\$ 42.579.269,48
2016	12	\$ 159.270	1,97%	51	\$ 160.018,85	\$ 42.739.288,33
2016	M14	\$ 159.270	1,97%	51	\$ 160.018,85	\$ 42.899.307,18
2017	01	\$ 168.428	1,97%	50	\$ 165.901,90	\$ 43.065.209,07
2017	02	\$ 168.428	1,97%	49	\$ 162.583,86	\$ 43.227.792,93

2017	03	\$ 168.428	1,97%	48	\$ 159.265,82	\$ 43.387.058,75
2017	04	\$ 168.428	1,97%	47	\$ 155.947,78	\$ 43.543.006,53
2017	05	\$ 168.428	1,97%	46	\$ 152.629,74	\$ 43.695.636,27
2017	06	\$ 168.428	1,97%	45	\$ 149.311,71	\$ 43.844.947,98
2017	M13	\$ 168.428	1,97%	45	\$ 149.311,71	\$ 43.994.259,69
2017	07	\$ 168.428	1,97%	44	\$ 145.993,67	\$ 44.140.253,35
2017	08	\$ 168.428	1,97%	43	\$ 142.675,63	\$ 44.282.928,98
2017	09	\$ 168.428	1,97%	42	\$ 139.357,59	\$ 44.422.286,57
2017	10	\$ 168.428	1,97%	41	\$ 136.039,55	\$ 44.558.326,13
2017	11	\$ 168.428	1,97%	40	\$ 132.721,52	\$ 44.691.047,65
2017	12	\$ 168.428	1,97%	39	\$ 129.403,48	\$ 44.820.451,12
2017	M14	\$ 168.428	1,97%	39	\$ 129.403,48	\$ 44.949.854,60
2018	01	\$ 175.317	1,97%	38	\$ 131.242,34	\$ 45.081.096,94
2018	02	\$ 175.317	1,97%	37	\$ 127.788,59	\$ 45.208.885,53
2018	03	\$ 175.317	1,97%	36	\$ 124.334,84	\$ 45.333.220,37
2018	04	\$ 175.317	1,97%	35	\$ 120.881,10	\$ 45.454.101,47
2018	05	\$ 175.317	1,97%	34	\$ 117.427,35	\$ 45.571.528,83
2018	06	\$ 175.317	1,97%	33	\$ 113.973,61	\$ 45.685.502,43
2018	M13	\$ 175.317	1,97%	33	\$ 113.973,61	\$ 45.799.476,04
2018	07	\$ 175.317	1,97%	32	\$ 110.519,86	\$ 45.909.995,90
2018	08	\$ 175.317	1,97%	31	\$ 107.066,12	\$ 46.017.062,02
2018	09	\$ 175.317	1,97%	30	\$ 103.612,37	\$ 46.120.674,39
2018	10	\$ 175.317	1,97%	29	\$ 100.158,62	\$ 46.220.833,01
2018	11	\$ 175.317	1,97%	28	\$ 96.704,88	\$ 46.317.537,89
2018	12	\$ 175.317	1,97%	27	\$ 93.251,13	\$ 46.410.789,03
2018	M14	\$ 175.317	1,97%	27	\$ 93.251,13	\$ 46.504.040,16
2019	01	\$ 180.892	1,97%	26	\$ 92.652,94	\$ 46.596.693,11
2019	02	\$ 180.892	1,97%	25	\$ 89.089,37	\$ 46.685.782,47
2019	03	\$ 180.892	1,97%	24	\$ 85.525,79	\$ 46.771.308,27
2019	04	\$ 180.892	1,97%	23	\$ 81.962,22	\$ 46.853.270,49
2019	05	\$ 180.892	1,97%	22	\$ 78.398,64	\$ 46.931.669,13
2019	06	\$ 180.892	1,97%	21	\$ 74.835,07	\$ 47.006.504,20
2019	M13	\$ 180.892	1,97%	21	\$ 74.835,07	\$ 47.081.339,27
2019	07	\$ 180.892	1,97%	20	\$ 71.271,50	\$ 47.152.610,77
2019	08	\$ 180.892	1,97%	19	\$ 67.707,92	\$ 47.220.318,69
2019	09	\$ 180.892	1,97%	18	\$ 64.144,35	\$ 47.284.463,03
2019	10	\$ 180.892	1,97%	17	\$ 60.580,77	\$ 47.345.043,81
2019	11	\$ 180.892	1,97%	16	\$ 57.017,20	\$ 47.402.061,00
2019	12	\$ 180.892	1,97%	15	\$ 53.453,62	\$ 47.455.514,62
2019	M14	\$ 180.892	1,97%	15	\$ 53.453,62	\$ 47.508.968,24
2020	01	\$ 187.766	1,97%	14	\$ 51.785,87	\$ 47.560.754,11
2020	02	\$ 187.766	1,97%	13	\$ 48.086,88	\$ 47.608.840,99
2020	03	\$ 187.766	1,97%	12	\$ 44.387,89	\$ 47.653.228,88
2020	04	\$ 187.766	1,97%	11	\$ 40.688,90	\$ 47.693.917,77
2020	05	\$ 187.766	1,97%	10	\$ 36.989,91	\$ 47.730.907,68
2020	06	\$ 187.766	1,97%	9	\$ 33.290,92	\$ 47.764.198,60
2020	M13	\$ 187.766	1,97%	9	\$ 33.290,92	\$ 47.797.489,51
2020	07	\$ 187.766	1,97%	8	\$ 29.591,92	\$ 47.827.081,44
2020	08	\$ 187.766	1,97%	7	\$ 25.892,93	\$ 47.852.974,37
2020	09	\$ 187.766	1,97%	6	\$ 22.193,94	\$ 47.875.168,31
2020	10	\$ 187.766	1,97%	5	\$ 18.494,95	\$ 47.893.663,27
2020	11	\$ 187.766	1,97%	4	\$ 14.795,96	\$ 47.908.459,23
2020	12	\$ 187.766	1,97%	3	\$ 11.096,97	\$ 47.919.556,20
2020	M14	\$ 187.766	1,97%	3	\$ 11.096,97	\$ 47.930.653,17
2021	01	\$ 190.789	1,97%	2	\$ 7.517,09	\$ 47.938.170,26
2021	02	\$ 190.789	1,97%	1	\$ 3.758,54	\$ 47.941.928,81

Retroactivo: \$30.173.829,92

Intereses de mora: \$47.941.928,81

14.VÍCTOR FERNANDO PABÓN RINCÓN

Año	Diferencia	IPC	Total mesadas	Retroactivo
2007	\$ 141.007,12	5,69%	14	\$ 1.974.099,68
2008	\$ 149.030,43	7,67%	14	\$ 2.086.425,95
2009	\$ 160.461,06	2,00%	14	\$ 2.246.454,82
2010	\$ 163.670,28	3,17%	14	\$ 2.291.383,92
2011	\$ 168.858,63	3,73%	14	\$ 2.364.020,79
2012	\$ 175.157,05	2,44%	14	\$ 2.452.198,76
2013	\$ 179.430,89	1,94%	14	\$ 2.512.032,41
2014	\$ 182.911,85	3,66%	14	\$ 2.560.765,84
2015	\$ 189.606,42	6,77%	14	\$ 2.654.489,87
2016	\$ 202.442,77	5,75%	14	\$ 2.834.198,84
2017	\$ 214.083,23	4,09%	14	\$ 2.997.165,27
2018	\$ 222.839,24	3,18%	14	\$ 3.119.749,33
2019	\$ 229.925,53	3,80%	14	\$ 3.218.957,36
2020	\$ 238.662,70	1,61%	14	\$ 3.341.277,74
2021	\$ 242.505,16		2	\$ 485.010,33
				\$ 37.138.230,92

Año	Mes	Mesada	Tasa Interes	Meses en Mora	Total intereses	Intereses Acumulados
2007	01		1,97%	170	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	02	\$ 0	1,97%	169	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	03	\$ 0	1,97%	168	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	04	\$ 0	1,97%	167	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	05	\$ 0	1,97%	166	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	06	\$ 0	1,97%	165	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	M13	\$ 0	1,97%	165	\$ 0,00	\$ 0,00
2007	07	\$ 141.007	1,97%	164	\$ 455.565,80	\$ 455.565,80
2007	08	\$ 141.007	1,97%	163	\$ 452.787,96	\$ 908.353,77
2007	09	\$ 141.007	1,97%	162	\$ 450.010,12	\$ 1.358.363,89
2007	10	\$ 141.007	1,97%	161	\$ 447.232,28	\$ 1.805.596,17
2007	11	\$ 141.007	1,97%	160	\$ 444.454,44	\$ 2.250.050,61
2007	12	\$ 141.007	1,97%	159	\$ 441.676,60	\$ 2.691.727,22
2007	M14	\$ 141.007	1,97%	159	\$ 441.676,60	\$ 3.133.403,82
2008	01	\$ 149.030	1,97%	158	\$ 463.872,12	\$ 3.597.275,93
2008	02	\$ 149.030	1,97%	157	\$ 460.936,22	\$ 4.058.212,15
2008	03	\$ 149.030	1,97%	156	\$ 458.000,32	\$ 4.516.212,47
2008	04	\$ 149.030	1,97%	155	\$ 455.064,42	\$ 4.971.276,89
2008	05	\$ 149.030	1,97%	154	\$ 452.128,52	\$ 5.423.405,41
2008	06	\$ 149.030	1,97%	153	\$ 449.192,62	\$ 5.872.598,02
2008	M13	\$ 149.030	1,97%	153	\$ 449.192,62	\$ 6.321.790,64
2008	07	\$ 149.030	1,97%	152	\$ 446.256,72	\$ 6.768.047,36
2008	08	\$ 149.030	1,97%	151	\$ 443.320,82	\$ 7.211.368,18
2008	09	\$ 149.030	1,97%	150	\$ 440.384,92	\$ 7.651.753,10
2008	10	\$ 149.030	1,97%	149	\$ 437.449,02	\$ 8.089.202,12
2008	11	\$ 149.030	1,97%	148	\$ 434.513,12	\$ 8.523.715,25
2008	12	\$ 149.030	1,97%	147	\$ 431.577,22	\$ 8.955.292,47
2008	M14	\$ 149.030	1,97%	147	\$ 431.577,22	\$ 9.386.869,69
2009	01	\$ 160.461	1,97%	146	\$ 461.518,10	\$ 9.848.387,79
2009	02	\$ 160.461	1,97%	145	\$ 458.357,02	\$ 10.306.744,81
2009	03	\$ 160.461	1,97%	144	\$ 455.195,94	\$ 10.761.940,74

2009	04	\$ 160.461	1,97%	143	\$ 452.034,85	\$ 11.213.975,60
2009	05	\$ 160.461	1,97%	142	\$ 448.873,77	\$ 11.662.849,37
2009	06	\$ 160.461	1,97%	141	\$ 445.712,69	\$ 12.108.562,05
2009	M13	\$ 160.461	1,97%	141	\$ 445.712,69	\$ 12.554.274,74
2009	07	\$ 160.461	1,97%	140	\$ 442.551,60	\$ 12.996.826,34
2009	08	\$ 160.461	1,97%	139	\$ 439.390,52	\$ 13.436.216,86
2009	09	\$ 160.461	1,97%	138	\$ 436.229,44	\$ 13.872.446,30
2009	10	\$ 160.461	1,97%	137	\$ 433.068,35	\$ 14.305.514,66
2009	11	\$ 160.461	1,97%	136	\$ 429.907,27	\$ 14.735.421,93
2009	12	\$ 160.461	1,97%	135	\$ 426.746,19	\$ 15.162.168,12
2009	M14	\$ 160.461	1,97%	135	\$ 426.746,19	\$ 15.588.914,31
2010	01	\$ 163.670	1,97%	134	\$ 432.056,81	\$ 16.020.971,11
2010	02	\$ 163.670	1,97%	133	\$ 428.832,50	\$ 16.449.803,61
2010	03	\$ 163.670	1,97%	132	\$ 425.608,20	\$ 16.875.411,81
2010	04	\$ 163.670	1,97%	131	\$ 422.383,89	\$ 17.297.795,70
2010	05	\$ 163.670	1,97%	130	\$ 419.159,59	\$ 17.716.955,29
2010	06	\$ 163.670	1,97%	129	\$ 415.935,28	\$ 18.132.890,57
2010	M13	\$ 163.670	1,97%	129	\$ 415.935,28	\$ 18.548.825,85
2010	07	\$ 163.670	1,97%	128	\$ 412.710,98	\$ 18.961.536,83
2010	08	\$ 163.670	1,97%	127	\$ 409.486,67	\$ 19.371.023,50
2010	09	\$ 163.670	1,97%	126	\$ 406.262,37	\$ 19.777.285,87
2010	10	\$ 163.670	1,97%	125	\$ 403.038,06	\$ 20.180.323,94
2010	11	\$ 163.670	1,97%	124	\$ 399.813,76	\$ 20.580.137,70
2010	12	\$ 163.670	1,97%	123	\$ 396.589,46	\$ 20.976.727,15
2010	M14	\$ 163.670	1,97%	123	\$ 396.589,46	\$ 21.373.316,61
2011	01	\$ 168.859	1,97%	122	\$ 405.834,83	\$ 21.779.151,44
2011	02	\$ 168.859	1,97%	121	\$ 402.508,32	\$ 22.181.659,75
2011	03	\$ 168.859	1,97%	120	\$ 399.181,80	\$ 22.580.841,56
2011	04	\$ 168.859	1,97%	119	\$ 395.855,29	\$ 22.976.696,84
2011	05	\$ 168.859	1,97%	118	\$ 392.528,77	\$ 23.369.225,61
2011	06	\$ 168.859	1,97%	117	\$ 389.202,26	\$ 23.758.427,87
2011	07	\$ 168.859	1,97%	117	\$ 389.202,26	\$ 24.147.630,13
2011	07	\$ 168.859	1,97%	116	\$ 385.875,74	\$ 24.533.505,87
2011	08	\$ 168.859	1,97%	115	\$ 382.549,23	\$ 24.916.055,09
2011	09	\$ 168.859	1,97%	114	\$ 379.222,71	\$ 25.295.277,81
2011	10	\$ 168.859	1,97%	113	\$ 375.896,20	\$ 25.671.174,00
2011	11	\$ 168.859	1,97%	112	\$ 372.569,68	\$ 26.043.743,68
2011	12	\$ 168.859	1,97%	111	\$ 369.243,17	\$ 26.412.986,85
2011	M14	\$ 168.859	1,97%	111	\$ 369.243,17	\$ 26.782.230,02
2012	01	\$ 175.157	1,97%	110	\$ 379.565,33	\$ 27.161.795,34
2012	02	\$ 175.157	1,97%	109	\$ 376.114,73	\$ 27.537.910,08
2012	03	\$ 175.157	1,97%	108	\$ 372.664,14	\$ 27.910.574,22
2012	04	\$ 175.157	1,97%	107	\$ 369.213,55	\$ 28.279.787,76
2012	05	\$ 175.157	1,97%	106	\$ 365.762,95	\$ 28.645.550,71
2012	06	\$ 175.157	1,97%	105	\$ 362.312,36	\$ 29.007.863,07
2012	M13	\$ 175.157	1,97%	105	\$ 362.312,36	\$ 29.370.175,43
2012	07	\$ 175.157	1,97%	104	\$ 358.861,76	\$ 29.729.037,19
2012	08	\$ 175.157	1,97%	103	\$ 355.411,17	\$ 30.084.448,36
2012	09	\$ 175.157	1,97%	102	\$ 351.960,58	\$ 30.436.408,94
2012	10	\$ 175.157	1,97%	101	\$ 348.509,98	\$ 30.784.918,92
2012	11	\$ 175.157	1,97%	100	\$ 345.059,39	\$ 31.129.978,31
2012	12	\$ 175.157	1,97%	99	\$ 341.608,79	\$ 31.471.587,10
2012	M14	\$ 175.157	1,97%	99	\$ 341.608,79	\$ 31.813.195,90
2013	01	\$ 179.431	1,97%	98	\$ 346.409,28	\$ 32.159.605,18
2013	02	\$ 179.431	1,97%	97	\$ 342.874,49	\$ 32.502.479,66
2013	03	\$ 179.431	1,97%	96	\$ 339.339,70	\$ 32.841.819,36
2013	04	\$ 179.431	1,97%	95	\$ 335.804,91	\$ 33.177.624,27
2013	05	\$ 179.431	1,97%	94	\$ 332.270,12	\$ 33.509.894,40
2013	06	\$ 179.431	1,97%	93	\$ 328.735,33	\$ 33.838.629,73
2013	M13	\$ 179.431	1,97%	93	\$ 328.735,33	\$ 34.167.365,06

2013	07	\$ 179.431	1,97%	92	\$ 325.200,55	\$ 34.492.565,61
2013	08	\$ 179.431	1,97%	91	\$ 321.665,76	\$ 34.814.231,36
2013	09	\$ 179.431	1,97%	90	\$ 318.130,97	\$ 35.132.362,33
2013	10	\$ 179.431	1,97%	89	\$ 314.596,18	\$ 35.446.958,51
2013	11	\$ 179.431	1,97%	88	\$ 311.061,39	\$ 35.758.019,90
2013	12	\$ 179.431	1,97%	87	\$ 307.526,60	\$ 36.065.546,50
2013	M14	\$ 179.431	1,97%	87	\$ 307.526,60	\$ 36.373.073,11
2014	01	\$ 182.912	1,97%	86	\$ 309.889,26	\$ 36.682.962,36
2014	02	\$ 182.912	1,97%	85	\$ 306.285,89	\$ 36.989.248,26
2014	03	\$ 182.912	1,97%	84	\$ 302.682,53	\$ 37.291.930,79
2014	04	\$ 182.912	1,97%	83	\$ 299.079,17	\$ 37.591.009,95
2014	05	\$ 182.912	1,97%	82	\$ 295.475,80	\$ 37.886.485,75
2014	06	\$ 182.912	1,97%	81	\$ 291.872,44	\$ 38.178.358,19
2014	M13	\$ 182.912	1,97%	81	\$ 291.872,44	\$ 38.470.230,63
2014	07	\$ 182.912	1,97%	80	\$ 288.269,08	\$ 38.758.499,71
2014	08	\$ 182.912	1,97%	79	\$ 284.665,71	\$ 39.043.165,42
2014	09	\$ 182.912	1,97%	78	\$ 281.062,35	\$ 39.324.227,77
2014	10	\$ 182.912	1,97%	77	\$ 277.458,99	\$ 39.601.686,75
2014	11	\$ 182.912	1,97%	76	\$ 273.855,62	\$ 39.875.542,38
2014	12	\$ 182.912	1,97%	75	\$ 270.252,26	\$ 40.145.794,63
2014	M14	\$ 182.912	1,97%	75	\$ 270.252,26	\$ 40.416.046,89
2015	01	\$ 189.606	1,97%	74	\$ 276.408,24	\$ 40.692.455,13
2015	02	\$ 189.606	1,97%	73	\$ 272.672,99	\$ 40.965.128,12
2015	03	\$ 189.606	1,97%	72	\$ 268.937,75	\$ 41.234.065,87
2015	04	\$ 189.606	1,97%	71	\$ 265.202,50	\$ 41.499.268,37
2015	05	\$ 189.606	1,97%	70	\$ 261.467,25	\$ 41.760.735,62
2015	06	\$ 189.606	1,97%	69	\$ 257.732,01	\$ 42.018.467,63
2015	M13	\$ 189.606	1,97%	69	\$ 257.732,01	\$ 42.276.199,64
2015	07	\$ 189.606	1,97%	68	\$ 253.996,76	\$ 42.530.196,40
2015	08	\$ 189.606	1,97%	67	\$ 250.261,51	\$ 42.780.457,91
2015	09	\$ 189.606	1,97%	66	\$ 246.526,27	\$ 43.026.984,18
2015	10	\$ 189.606	1,97%	65	\$ 242.791,02	\$ 43.269.775,20
2015	11	\$ 189.606	1,97%	64	\$ 239.055,77	\$ 43.508.830,97
2015	12	\$ 189.606	1,97%	63	\$ 235.320,53	\$ 43.744.151,50
2015	M14	\$ 189.606	1,97%	63	\$ 235.320,53	\$ 43.979.472,03
2016	01	\$ 202.443	1,97%	62	\$ 247.263,60	\$ 44.226.735,63
2016	02	\$ 202.443	1,97%	61	\$ 243.275,48	\$ 44.470.011,10
2016	03	\$ 202.443	1,97%	60	\$ 239.287,35	\$ 44.709.298,46
2016	04	\$ 202.443	1,97%	59	\$ 235.299,23	\$ 44.944.597,69
2016	05	\$ 202.443	1,97%	58	\$ 231.311,11	\$ 45.175.908,80
2016	06	\$ 202.443	1,97%	57	\$ 227.322,99	\$ 45.403.231,79
2016	M13	\$ 202.443	1,97%	57	\$ 227.322,99	\$ 45.630.554,77
2016	07	\$ 202.443	1,97%	56	\$ 223.334,86	\$ 45.853.889,64
2016	08	\$ 202.443	1,97%	55	\$ 219.346,74	\$ 46.073.236,38
2016	09	\$ 202.443	1,97%	54	\$ 215.358,62	\$ 46.288.595,00
2016	10	\$ 202.443	1,97%	53	\$ 211.370,50	\$ 46.499.965,49
2016	11	\$ 202.443	1,97%	52	\$ 207.382,37	\$ 46.707.347,87
2016	12	\$ 202.443	1,97%	51	\$ 203.394,25	\$ 46.910.742,12
2016	M14	\$ 202.443	1,97%	51	\$ 203.394,25	\$ 47.114.136,37
2017	01	\$ 214.083	1,97%	50	\$ 210.871,98	\$ 47.325.008,35
2017	02	\$ 214.083	1,97%	49	\$ 206.654,54	\$ 47.531.662,89
2017	03	\$ 214.083	1,97%	48	\$ 202.437,10	\$ 47.734.099,99
2017	04	\$ 214.083	1,97%	47	\$ 198.219,66	\$ 47.932.319,66
2017	05	\$ 214.083	1,97%	46	\$ 194.002,22	\$ 48.126.321,88
2017	06	\$ 214.083	1,97%	45	\$ 189.784,78	\$ 48.316.106,66
2017	M13	\$ 214.083	1,97%	45	\$ 189.784,78	\$ 48.505.891,45
2017	07	\$ 214.083	1,97%	44	\$ 185.567,34	\$ 48.691.458,79

2017	08	\$ 214.083	1,97%	43	\$ 181.349,90	\$ 48.872.808,69
2017	09	\$ 214.083	1,97%	42	\$ 177.132,46	\$ 49.049.941,16
2017	10	\$ 214.083	1,97%	41	\$ 172.915,02	\$ 49.222.856,18
2017	11	\$ 214.083	1,97%	40	\$ 168.697,59	\$ 49.391.553,77
2017	12	\$ 214.083	1,97%	39	\$ 164.480,15	\$ 49.556.033,91
2017	M14	\$ 214.083	1,97%	39	\$ 164.480,15	\$ 49.720.514,06
2018	01	\$ 222.839	1,97%	38	\$ 166.817,46	\$ 49.887.331,51
2018	02	\$ 222.839	1,97%	37	\$ 162.427,52	\$ 50.049.759,04
2018	03	\$ 222.839	1,97%	36	\$ 158.037,59	\$ 50.207.796,63
2018	04	\$ 222.839	1,97%	35	\$ 153.647,66	\$ 50.361.444,28
2018	05	\$ 222.839	1,97%	34	\$ 149.257,72	\$ 50.510.702,00
2018	06	\$ 222.839	1,97%	33	\$ 144.867,79	\$ 50.655.569,79
2018	M13	\$ 222.839	1,97%	33	\$ 144.867,79	\$ 50.800.437,58
2018	07	\$ 222.839	1,97%	32	\$ 140.477,86	\$ 50.940.915,44
2018	08	\$ 222.839	1,97%	31	\$ 136.087,92	\$ 51.077.003,37
2018	09	\$ 222.839	1,97%	30	\$ 131.697,99	\$ 51.208.701,36
2018	10	\$ 222.839	1,97%	29	\$ 127.308,06	\$ 51.336.009,41
2018	11	\$ 222.839	1,97%	28	\$ 122.918,12	\$ 51.458.927,54
2018	12	\$ 222.839	1,97%	27	\$ 118.528,19	\$ 51.577.455,73
2018	M14	\$ 222.839	1,97%	27	\$ 118.528,19	\$ 51.695.983,92
2019	01	\$ 229.926	1,97%	26	\$ 117.767,86	\$ 51.813.751,78
2019	02	\$ 229.926	1,97%	25	\$ 113.238,32	\$ 51.926.990,10
2019	03	\$ 229.926	1,97%	24	\$ 108.708,79	\$ 52.035.698,89
2019	04	\$ 229.926	1,97%	23	\$ 104.179,26	\$ 52.139.878,15
2019	05	\$ 229.926	1,97%	22	\$ 99.649,72	\$ 52.239.527,88
2019	06	\$ 229.926	1,97%	21	\$ 95.120,19	\$ 52.334.648,07
2019	M13	\$ 229.926	1,97%	21	\$ 95.120,19	\$ 52.429.768,26
2019	07	\$ 229.926	1,97%	20	\$ 90.590,66	\$ 52.520.358,92
2019	08	\$ 229.926	1,97%	19	\$ 86.061,13	\$ 52.606.420,04
2019	09	\$ 229.926	1,97%	18	\$ 81.531,59	\$ 52.687.951,64
2019	10	\$ 229.926	1,97%	17	\$ 77.002,06	\$ 52.764.953,70
2019	11	\$ 229.926	1,97%	16	\$ 72.472,53	\$ 52.837.426,22
2019	12	\$ 229.926	1,97%	15	\$ 67.942,99	\$ 52.905.369,22
2019	M14	\$ 229.926	1,97%	15	\$ 67.942,99	\$ 52.973.312,21
2020	01	\$ 238.663	1,97%	14	\$ 65.823,17	\$ 53.039.135,38
2020	02	\$ 238.663	1,97%	13	\$ 61.121,52	\$ 53.100.256,90
2020	03	\$ 238.663	1,97%	12	\$ 56.419,86	\$ 53.156.676,76
2020	04	\$ 238.663	1,97%	11	\$ 51.718,21	\$ 53.208.394,97
2020	05	\$ 238.663	1,97%	10	\$ 47.016,55	\$ 53.255.411,52
2020	06	\$ 238.663	1,97%	9	\$ 42.314,90	\$ 53.297.726,42
2020	M13	\$ 238.663	1,97%	9	\$ 42.314,90	\$ 53.340.041,32
2020	07	\$ 238.663	1,97%	8	\$ 37.613,24	\$ 53.377.654,56
2020	08	\$ 238.663	1,97%	7	\$ 32.911,59	\$ 53.410.566,14
2020	09	\$ 238.663	1,97%	6	\$ 28.209,93	\$ 53.438.776,08
2020	10	\$ 238.663	1,97%	5	\$ 23.508,28	\$ 53.462.284,35
2020	11	\$ 238.663	1,97%	4	\$ 18.806,62	\$ 53.481.090,97
2020	12	\$ 238.663	1,97%	3	\$ 14.104,97	\$ 53.495.195,94
2020	M14	\$ 238.663	1,97%	3	\$ 14.104,97	\$ 53.509.300,90
2021	01	\$ 242.505	1,97%	2	\$ 9.554,70	\$ 53.518.855,61
2021	02	\$ 242.505	1,97%	1	\$ 4.777,35	\$ 53.523.632,96

Retroactivo: \$37.138.230,92

Intereses de mora: \$53.523.632,96



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

San José de Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2.022)

RAD. N° 54001-3105-001-2021-00077-00//54001-4105-001-2022-00076-00

PARTIDA INTERNA. N° 19.745

PROCESO: ORDINARIO LABORAL

DEMANDANTE: HERNANDO ALBERTO SANTAELLA AYALA

DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES

Magistrada Ponente: **NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES**

Procede la Sala a resolver el conflicto de competencia para conocer del proceso ordinario laboral previamente referenciado, que se suscitó entre el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta y el Juzgado Primero Laboral de este mismo Circuito Judicial, mediante el siguiente:

AUTO

1. Antecedentes

El demandante HERNANDO ALBERTO SANTAELLA AYALA, presentó mediante apoderado judicial demanda ordinaria laboral en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, con el objeto de que proceda a restituir el reconocimiento y pago de la mesada adicional de su pensión de jubilación correspondiente al mes de junio a partir del año 2.016.

Al realizar el estudio de la demanda, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, mediante providencia del 30 de julio de 2.021 la rechazó por encontrar que la cuantía estimada no es superior a 10 SMLMV y que las pretensiones no superan los 20 SMLMV, razón por la cual se declaró sin competencia para conocer del proceso en virtud de lo consagrado en el artículo 12 de C.P.T y S.S.

El referido proceso le correspondió por reparto al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de este distrito judicial, que, mediante providencia del 24 de febrero del año en curso, declaró la falta de competencia y propuso el conflicto negativo de la misma, por considerar al solicitar la parte actora el reconocimiento y pago de la mesada adicional del mes de junio a partir del año 2016, la cuantía del proceso no se reduce a las mesadas causadas desde esa fecha hasta el día de presentación de la demanda con las demás pretensiones accesorias, sino a las mesadas que se causen durante la vida probable del demandante, en razón a lo establecido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a que cuando se pretende el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, la cuantía debe determinarse por la vida probable del demandante por tratarse de una pensión vitalicia y que teniendo en cuenta la edad del actor, esta

corresponde a \$42.600.812,8, lo que supera los 20 S.M.L.M.V

2. Consideraciones

De acuerdo a los planteamientos expuestos por el Juzgado que suscitó el conflicto de competencia, el problema jurídico que debe resolverse corresponde a: ¿Es correcto el planteamiento realizado por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de éste Distrito Judicial, al suscitar el conflicto de competencia contra el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, fundamentando que la cuantía es mayor a la legalmente asignada a su conocimiento?

Es importante tener en cuenta que en la normativa procesal, de manera general, sólo se acepta el llamado por la teoría general como *conflicto negativo de competencia*, y que consiste en que el Juez que está conociendo del proceso se declara incompetente y así se lo comunica al Juez que cree debe conocerlo, y el que recibe la actuación se declara a su vez incompetente, suscitándose así una colisión que suspende la competencia para actuar válidamente en los dos jueces y que debe ser por lo tanto resuelta por la autoridad judicial correspondiente, según fuere el caso concreto.

Sin embargo, el funcionario que recibe el expediente no podrá declarar su incompetencia cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales. Esta premisa fue conservada por el nuevo código general del proceso (Artículo 139-3°), ya que así lo disponía el CPC (Artículo 148-3°) y había sido reconocido por la doctrina nacional¹⁻², al respecto el profesor López Blanco³, anotó⁴:

“Para que el conflicto pueda existir, es requisito indispensable que los funcionarios no sean directamente subordinados, pues en tal caso, dada la característica de nuestra organización judicial, eminentemente jerarquizada, la opinión del de mayor categoría predomina sobre la del de inferior categoría, quien debe cumplir la decisión sin reparos de ninguna clase.

Lo anterior no significa que un juez directamente subordinado de otro esté imposibilitado para remitirle un proceso si estima que es el competente. Naturalmente que puede hacerlo, sólo que no le es dable proponer el conflicto de competencia en caso de que el superior no acepte las razones dadas, por cuanto si así acontece y retorna el proceso debe acatar la orden y asumir su conocimiento”. (Subrayado fuera de texto).

Así las cosas, en virtud de la jerarquización de la justicia no podría, un Juzgado de menor jerarquía declararse incompetente cuando ha sido su superior funcional para la especialidad laboral quien le ha remitido el expediente; ahora bien, ha sido la postura de esta Sala de decisión entender que los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales por ser del orden municipal tenían como superior funcional a los Juzgados Laborales del Circuito y por ello no podían invocar el conflicto de competencia en ningún caso, lo cual no era motivo para remitir el expediente al Juzgado Laboral del Circuito si se apreciaba una errada interpretación de la competencia en cada caso concreto.

¹ AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal civil, tomo I, 4ª edición, editorial Temis SA, Santa Fe de Bogotá, 1993, p.175.

² PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, parte general, editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1992, p.60.

³ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código general del proceso, parte general, Bogotá DC, Dupré editores, 2016, p.259.

⁴ TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. Sala Unitaria Civil- Familia. Veinticuatro (24) de mayo de 201

Sin embargo, realizando una valoración sobre este precepto que entiende a los Juzgados Laborales del Circuito como superiores funcionales de los de Pequeñas Causas Laborales, es del caso resaltar que estos últimos fueron creados como despachos de única instancia y por ello no tienen propiamente dicho un superior que revise sus decisiones en asuntos ordinarios por expresa disposición legal, siendo jurisprudencialmente en Sentencia C-424 de 2015 donde se dio paso al grado de consulta a favor del trabajador, afiliado o beneficiario vencido en juicio de única instancia y donde se estipuló que sería de conocimiento de los Juzgados Laborales del Circuito.

No obstante, y atendiendo a que con su creación no se estableció en la ley que los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales tuvieran algún tipo de subordinación jerárquica con los Juzgados Laborales del Circuito, no es dable realizar dicha interpretación y entender que tácitamente existe este sometimiento.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral, mediante proveído ATL191-2013, del 22 mayo de 2015, rad. 43055 tuvo la oportunidad de precisar lo siguiente:

"Los Juzgados de Pequeñas Causas se instituyeron para coadyuvar a consolidar una justicia pronta, en aras de disminuir la congestión judicial y alcanzar una mayor eficacia y celeridad en la resolución de los litigios, según se extrae, incluso, de del Congreso 418 de 2006, que contiene la discusión inicial del proyecto que culminó con la expedición de 1285 de 2009; esa Ley los incorporó, de manera genérica, a la estructura de la Rama Judicial.

En el parágrafo 1° del artículo 40 ibídem, que modificó el 11 de 270 de 1996, se delimitaron claramente las competencias así: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los Tribunales Superiores, los Tribunales Administrativos y los Consejos Seccionales de tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio; los Jueces de pequeñas causas a nivel municipal y local (...) Los jueces de descongestión tendrán la competencia territorial y material específica que se les señale en el acto de su creación (subrayado fuera del original).

De ese modo, la esfera de atribuciones, en lo relativo a los juzgados de pequeñas causas, fue la municipal y local, en tanto, desde su origen, se establecieron para conocer de conflictos menores y se reforzó la necesidad de que realizaran un juicio sumario. Fue así como 1395 de 2010, en su artículo 46, que modificó el 12 del Código Procesal del Trabajo y , adjudicó a aquellos, en la jurisdicción del trabajo, el trámite de asuntos en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente al veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

Esa asignación implicó que, por su naturaleza, las decisiones emanadas en los procesos ordinarios, no fueran susceptibles de apelación, conforme la exclusión que hace el precepto 66 del Estatuto Instrumental, es decir, que fueran despachos municipales, exclusivos para asuntos de única instancia.

De esta última normativa, se concluye palmariamente, que la competencia de dichos juzgados, se consagró teniendo en cuenta el factor objetivo y por razón de la cuantía de las pretensiones, tal como sucedió en este caso, pues en ningún momento, se hizo alusión a la calidad de las partes intervinientes en el proceso, esto es, no previó le legislador, hacer alguna distinción por el factor subjetivo".

De lo anterior y en recientes pronunciamientos se ha permitido concluir esta Sala, variando la postura adoptada previamente, que ante la ausencia de una disposición legal que disponga estrictamente la subordinación categórica de la competencia de

los Juzgados de Pequeñas Causas Laborales en su función de despachos de única instancia, respecto de los Juzgados Laborales del Circuito, es posible que entre ellos se susciten conflictos de competencia y atendiendo a que el superior funcional de ambos es la presente corporación, se procederá a resolver el mismo.

Este conflicto se origina en lo esbozado por el Juez Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, quien rechazó la demanda y se declaró sin competencia por encontrar que la cuantía estimada no es superior a 10 S.M.L.M.V. y que las pretensiones no superan los 20 S.M.L.M.V.; argumento que es rechazado por la Jueza Primera Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta pues considera que la cuantía de la presente demanda ordinaria supera los 20 salarios mínimos, por cuanto las pretensiones de la demanda ascienden a la suma de \$42.600.812,8, ya que la pretensión del actor sobre el reconocimiento y pago de la mesada adicional de mes de junio, pese a que se solicita a partir de 2.016, está relacionada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por lo que la cuantía debe determinarse por la vida probable del demandante por tratarse de una pensión vitalicia.

Para resolver este asunto, se tiene que el artículo 26 establece que la cuantía debe calcularse conforme al “**valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda**, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a su presentación”, como lo reclamado es la mesada adicional de junio que fue suprimida por virtud del Acto Legislativo 01 de 2005 y que se indica fue negada desde el año 2016, sin reclamar intereses moratorios. Así las cosas, se advierte que para ese año su mesada ascendía a la suma de \$2.207.296 y acorde a la tabla de liquidación anexa, el total de mesadas a la fecha de recepción de la demanda en esta jurisdicción era de \$14.724.466,95, que resulta inferior a los 20 salarios mínimos vigentes para el 2021 que asciende a \$18.170.520.

Año	Mesada	IPC
2016	\$2.207.296,00	5,75%
2017	\$2.334.215,52	4,09%
2018	\$2.429.684,93	3,18%
2019	\$2.506.948,92	3,80%
2020	\$2.602.212,97	1,61%
2021	\$2.644.108,60	5,62%
SUMA	\$14.724.466,95	

Ahora, respecto de lo alegado por la Jueza Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales sobre la incidencia futura, esta es una interpretación contraria al precepto legal y la jurisprudencia que cita hace referencia al deber del Juez para determinar adecuadamente la cuantía al momento de presentación de la demanda, sin perjuicio de que si resulta alterada en instancia posterior deba declarar su falta de competencia y remitir al Circuito, para evitar desconocer el principio de doble instancia.

Así se explica recientemente en STL2288 de 2020:

“el Legislador dispuso en el inciso 3° del artículo 46 de la citada Ley 1395 de 2010, que modificó el 12 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que los Jueces Municipales de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple en la jurisdicción laboral, «conocen en única instancia de los negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a veinte (20) veces el salario mínimo legal mensual vigente», siendo de conocimiento de los Jueces Laborales del Circuito, todo aquel proceso cuya cuantía supere el nuevo límite económico trazado en la citada disposición.

Esta distinción que nace de un límite económico por sus específicas características, no sólo determina la naturaleza del proceso en razón de su

cuantía, si es de única o de primera instancia, sino que además atribuye la competencia al funcionario que debe conocerlo y fija el trámite procesal que debe aplicarse, que para los procesos de única se encuentra establecido en los artículos 12 y 70 a 73 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los que gobiernan específicamente el trámite que debe observarse y adelantarse para afectos de admitirlo, tramitarlo y decidirlo.

*Así las cosas, el anterior referente normativo impone a los Jueces, un riguroso control que le permita establecer con absoluta certeza el cumplimiento de aquellos presupuestos que le otorgan la competencia para conocer de un determinado proceso, y para ello, **deben cuantificar el valor de las pretensiones al momento de la presentación de la demanda**, por lo que si el funcionario encuentra alterada la cuantía que se fija en el artículo 12 del Estatuto Procesal del Trabajo, es su deber declarar la falta de competencia para adelantar la litis y disponer la remisión inmediata del expediente al Juez correspondiente ya sea de forma oficiosa o por vía de excepción.”*

Fluye de lo expuesto, que en el presente caso le asistió razón al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta, toda vez que efectivamente las pretensiones estimadas en la demanda no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación y por ello la competencia del presente asunto debe asignarse al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de esta ciudad, para que se trámite como un proceso ordinario laboral de única instancia, debiendo remitirse las diligencias allí, sin perjuicio de que posteriormente si se adultera la cuantía inicial deba garantizarse el principio de doble instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta,

RESUELVE:

PRIMERO: **Dirimir** el conflicto de competencia, asignando el conocimiento del proceso ordinario laboral de HERNANDO SANTAELLA AYALA en contra de COLPENSIONES, al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta.

SEGUNDO: Por secretaria de la Sala Laboral de este Tribunal, REMITASE el presente expediente al Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cúcuta, de forma inmediata y sin más dilaciones para lo de su cargo.

TERCERO: Comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



ELVER NARANJO

Magistrado



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
SALA DE DECISIÓN LABORAL
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2.022)

PROCESO:	ORDINARIO LABORAL
RADICADO ÚNICO:	54-405-31-03-001-2019-00154-01
RADICADO INTERNO:	19.452
DEMANDANTE:	ALIDA ROSA ANAYA FERNANDEZ
DEMANDADO:	SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. y GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ

MAGISTRADA PONENTE:
NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala, dentro del proceso ordinario laboral previamente referenciado, a resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las partes, contra la sentencia del 19 de agosto de 2.021 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (N. de S.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

1. ANTECEDENTES:

La señora ALIDA ROSA ANAYA FERNANDEZ mediante apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra el SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. representado por el señor JORGE ELIECER MORANTES CACERES, para que se declare que entre las partes existió una relación laboral bajo la figura del contrato a término fijo, desde el 11 de octubre de 2.010 hasta el 1. ° de marzo de 2.019, en horario laboral de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. y de 05:00 p.m. hasta las 09:00 p.m. de lunes a domingo, y que dicho contrato terminó sin justa causa.

Pidió que se condene al empleador a reconocer y pagar los recargos dominicales, así como los recargos por festivos que se causaron desde el 20 de junio de 2.015 hasta la fecha de finalización del contrato, en las sumas de \$3.357.662 y \$1.068.613 respectivamente. También solicitó que se condene a la demandada a realizar el reajuste de las prestaciones sociales, pensión y parafiscales de acuerdo al salario real que devengó desde el 20 de junio de 2.015 hasta el 1. ° de marzo de 2.019, lo que da la suma de \$2.295.023; a cancelar la sanción moratoria por consignación deficitaria de las cesantías por un valor de \$13.780.100 y a reintegrarla a su puesto de trabajo en cumplimiento del contrato firmado el 28 de febrero de 2.018.

Manifestó que en caso de no darse su reintegro solicitaba como pretensión subsidiaria que se condene a la demandada a cancelar la indemnización por perjuicios causados, lucro cesante y daño emergente, en la suma de \$13.780.100, equivalente al valor del contrato más las demás pretensiones, y a reconocer los daños morales causados por el despido injustificado.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones expresó:

- Que el 10 de octubre de 2.010 ingresó a laborar en el SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S., antes MINI MERDACO JM, a través de contrato verbal que duro hasta junio de 2.014, y que durante este lapso realizó funciones de servicios generales.
- Que a partir de junio de 2.014 fue vinculada en el cargo de auxiliar de servicios generales mediante contrato de trabajo a término fijo por un año, el cual se prolongó hasta febrero de 2.017 y que posteriormente se realizó otro contrato del mismo tipo que inició el 28 de febrero de 2.017 para desempeñar el mismo cargo, el cual se canceló de forma unilateral y sin justa causa el 1. ° de marzo de 2.019, sin que le fuera notificada la terminación del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1. ° del artículo 3. ° de la Ley 50 de 1.990.
- Que devengaba un salario mínimo mensual legal vigente más auxilio de transporte.
- Que pactó con su empleador jornadas de trabajo de 8 horas diarias y 48 horas semanales, pero durante la relación laboral presto sus servicios de lunes a domingo, en los horarios de 09:00 a.m. a 02:00 p.m. y de 05:00 p.m. hasta las 09:00 p.m., incluyendo los días festivos, y no le fueron cancelados los dominicales y los festivos que laboró. Que al igual que los demás empleados registraba su entrada y salida diaria de labores a través de un lector de huella digital ubicado en la entrada del establecimiento.
- Que el despido injustificado le generó perjuicios económicos y morales por ser el sustento económico de su hogar.
- Que el 26 de marzo de 2018 en AGESO LTDA le practicaron examen médico y/o paraclínico ocupacional y se emitió concepto favorable para desempeñar el cargo con patología que no impide su desempeño laboral.
- Que el 06 de agosto de 2.018 acudió al CENTRO MÉDICO LA SAMARITANA por dolor en la rodilla y obtuvo el diagnóstico principal de dolor en articulación. Que el 13 de agosto de 2.018 ingreso nuevamente a dicho centro médico reportando dolor en ambas rodillas y fue diagnosticada con artrosis no especificada. Que el 24 de agosto de 2018 acudió nuevamente al centro médico mencionado por un reporte de rodillas comparativas y se le diagnosticó dolor en articulación. Que el 12 de septiembre de 2.018 fue atendida en LA SAMARITANA por dolor en ambas rodillas y se reiteró el diagnóstico de la artrosis no especificada. Que el 25 de febrero de 2.018 acudió nuevamente al centro médico por dolor en las articulaciones y adormecimiento de la mano.
- Que el 02 de marzo de 2.019 en AGESO LTDA se practicó examen médico y/o paraclínico ocupacional, respecto del cual se emitió el concepto de examen médico de retiro con patología para seguimiento EPS y se le diagnosticó presbicia, dolor en articulación, gonartrosis no especificada y varices en otros sitios especificados.

El SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. a través de apoderado judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y señalando:

- Que son ciertos los hechos narrados en la demanda relativos a que a partir del 1. ° de marzo de 2.017, fecha en que inició el vínculo laboral, se pactó con la actora una jornada de trabajo de 8 horas diarias para

un total de 48 horas semanales, a la cual se dio cumplimiento; que durante la relación laboral pagó a la demandante el salario mínimo legal mensual vigente conforme a lo pactado en el contrato de trabajo a término fijo, así como las prestaciones sociales; que el 26 de marzo de 2.018 efectuó a la demandante el examen periódico en cumplimiento de la normativa de salud ocupacional, en el cual resultó ser apta para la labor contratada sin restricciones ni recomendaciones y que también se practicó el examen de retiro el 02 de marzo de 2.019, en el que tampoco aparecen restricciones ni recomendaciones para trabajar. Sobre los demás hechos manifestó que no son ciertos y deben probarse.

- Que se constituyó por escritura pública N° 2870 del 28 de diciembre de 2.016 emitida por la Notaria Quinta de Cúcuta y se registró en la Cámara de Comercio de Cúcuta bajo el N° 9355822 del Libro IX del registro mercantil el día 10 de febrero de 2.017, por lo que no pudo existir vínculo laboral con la demandante en fecha previa a las mencionadas.
- Que existieron dos contratos de trabajo, el primero al cual se asignó el N° 033, inició el 1. ° de marzo de 2.017 y finalizó el 28 de febrero de 2.018 con previa entrega de carta de preaviso de fecha 15 de enero de 2.018, y el segundo al cual se asignó el N° 037, inició el 1. ° de marzo de 2.018 y finalizó el 28 de febrero de 2.019.
- Que el contrato de trabajo de la demandante terminó a partir del 1. ° de marzo de 2.019 por vencimiento del plazo pactado, previa carta de preaviso del 28 de enero del mismo año, la cual recibió y firmo la actora, quien laboró hasta el 28 de febrero de ese año.
- Que a la demandante se le pagaron las horas contratadas y laboradas de lunes a sábado y no hay registro de que haya trabajado en días domingos o festivos. Que el registro de las entradas y salidas de las personas que laboran allí se hace diario y máximo semanal
- Que la actora durante la vigencia del contrato de trabajo no presentó documentos válidos y propios que anunciaran estados de salud o frustración, tristeza, sentimientos negativos o afectaciones de su fuero interno.
- Que durante el tiempo en que prestó servicios la demandante, estuvo afiliada a las entidades de la seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, y se le practicaron los exámenes ocupacionales de ley.

Propuso como excepción previa: la ineptitud de la demanda por insuficiencia de poder.

Propuso como excepciones de mérito: inexistencia de la condición de discapacidad o limitación física, sensorial o sicológica, para solicitar reintegro al cargo o a uno similar; terminación del contrato laboral por vencimiento de plazo pactado entre las partes, con preaviso entregado en tiempo e inexistencia de pagos indemnizatorios; pago total de acreencias laborales previstas por el legislador, generadas y causadas por la relación contractual que existió entre las partes según contrato de trabajo a término fijo; cobro de lo no debido; buena fe; prescripción de derechos y prescripción de la acción, y la genérica.

En audiencia de fecha 1. ° de septiembre de 2.020 se ordenó integrar como litisconsorte necesario al establecimiento de comercio SUPERMERCADO JM

PLUS a través de su propietaria, la señora GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ.

La demandada GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ a través de apoderado judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, reiterando lo manifestado por el SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. en su contestación y a su vez expresó:

- Que tuvo una relación laboral con la actora desde el 1. ° de enero de 2.016 al 31 de diciembre del mismo año, en un establecimiento de comercio que tuvo en ese año donde la demandante desarrolló la actividad de servicios varios, vinculación que terminó de común acuerdo y la actora no laboró en horario suplementario, ni en dominicales, ni festivos, recibió la liquidación de sus prestaciones sociales, así como el pago de salarios.
- Que su establecimiento de comercio funcionó hasta el 31 de diciembre de 2.016 y que canceló su matrícula mercantil.
- Que es socia del SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. al cual se vinculó la demandante mediante contrato de trabajo a término fijo a partir del 1. ° de marzo de 2.017.

Propuso como excepciones de mérito: inexistencia de la condición de discapacidad o limitación física, sensorial o sicológica, para solicitar reintegro al cargo o a uno similar; terminación del contrato laboral por vencimiento de plazo pactado entre las partes, con preaviso entregado en tiempo e inexistencia de pagos indemnizatorios; pago total de acreencias laborales previstas por el legislador, generadas y causadas por la relación o relaciones contractuales que existió entre las partes; cobro de lo no debido; buena fe; prescripción de derechos y prescripción de la acción, y la genérica.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

La Sala se pronuncia del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la Sentencia del 19 de agosto de 2021 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (N. de S.), mediante la cual se resolvió:

“PRIMERO: RECONOCER la existencia de un contrato de trabajo subordinado mediante contrato de trabajo a término fijo entre la señora ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ como trabajadora, y la sociedad SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S, representada legalmente por el señor JORGE ELIECER MORANTE CACERES, como empleador, desde el 11 de octubre de 2010 hasta el 1° de marzo de 2019, de conformidad con las motivaciones expuestas.

SEGUNDO: CONDENAR a la sociedad SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S, representada legalmente por el señor JORGE ELIECER MORANTE CACERES, a reconocer y pagar en favor del trabajador demandante ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ, los aportes para pensión que se hayan causado desde el desde el 11 de octubre de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015 conforme lo establece el inciso segundo del artículo 22 de la Ley 100 de 1993, los cuales se constituyen en un derecho irrenunciable de la trabajadora, hoy demandante, siendo este aspecto de sustancial importancia pues compromete el derecho mínimo legal relacionado con la pensión a que llegare tener derecho por el riesgo de vejez, debiendo informar la demandante el fondo de pensiones al cual han de hacerse los aportes respectivos ordenando.

CUARTO: ABSOLVER al demandado SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S de las demás pretensiones incoadas en su contra, por lo manifestado en las consideraciones.

QUINTO: CONDENAR al demandado SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S al pago de las costas de primera instancia, quien por agencias en derecho deberá cancelar a la demandante ALIDA ROSA ANAYA FERNANDEZ, la suma de NOVECIENTOS MIL PESOS (\$900.000).”

2.2. Fundamento de la decisión.

La jueza de primera instancia fundamentó su decisión en los siguientes argumentos:

- Que correspondía establecer inicialmente si existió un contrato de trabajo entre la demandante y la sociedad SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S., representada legalmente por el señor JORGE ELIECER MORANTE CACERES, bajo una única relación laboral ininterrumpida de manera subordinada desde el 1. ° de octubre de 2.010 al 1. ° de marzo de 2.019. Que de ser afirmativa la existencia del contrato por los extremos temporales se establecería si la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de los recargos dominicales y festivos, y como consecuencia la reliquidación de las prestaciones sociales y demás acreencias solicitadas en la demanda.
- Que a folio 5 del expediente se observa la certificación laboral suscrita por la señora GLADYS ROSA MELO, de fecha 08 de noviembre de 2.011, en la que consta que la demandante laboraba en la empresa MINI MERCADO JM, haciendo aseo general, con un sueldo mensual de \$200.000 desde octubre de ese año.
- Que en el certificado del establecimiento SUPERMERCADO JM PLUS se verifica que fue inscrito mediante matrícula 153370 de fecha 1. ° de agosto de 2.006 y el 05 de mayo de 2.014 se registró el cambio de nombre del establecimiento que antes era MINI MERCADO JM PENSILVANIA.
- Que en certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio SUPERMERCADO JM PLUS visto a folios 4 y 5 del expediente, se observa que se constituyó por escritura pública 2870 del 28 de diciembre de la Notaria de Cúcuta, registrada en la Cámara de Comercio de Cúcuta bajo el número 93558 del Libro 9. ° del registro mercantil del 10 de febrero de 2.017.
- Que a folios 56 a 66 se observan los contratos a término fijo por medio de los cuales la demandante fue vinculada por periodos de 3 meses que fueron prorrogados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del C.S.T., desde el 1. ° de marzo de 2.017 hasta el 28 de febrero de 2.018, y luego la sociedad demandada vinculó a la actora por medio de contrato a término fijo desde el 1. ° de marzo de 2.018 al 1. ° de marzo de 2.019.
- Que con las pruebas relacionadas concluye, que se configura lo dispuesto en el artículo 67 del C.S.T., toda vez que las actividades de los establecimientos de comercio no variaron, por lo que encuentra demostrado que la demandante de conformidad con el artículo 167 del CG.P. prestó sus servicios a la sociedad demandada en el cargo de servicios generales desde el 11 de octubre de 2.010 hasta el 1. ° de marzo de 2.019, sin que sea de recibo lo manifestado por la señora GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ, respecto a que expidió

certificación laboral a la actora bajo el argumento de que fue por hacerle un favor, aunado a que ese documento no fue desconocido o tachado.

- Que, habiéndose declarado la existencia de un contrato de trabajo entre la actora y la sociedad demandada, por el periodo comprendido desde el 1. ° de octubre de 2.018 hasta por el 14 de marzo de 2.019, del cual se deriva condena por prestaciones sociales, de conformidad con la excepción de prescripción propuesta, las prestaciones causadas con anterioridad al 29 de julio de 2.016 se encuentran prescritas, teniendo en cuenta que se presentó la demanda el 29 de julio de 2.019, sin perjuicio de los aportes al sistema de seguridad social que no prescriben.
- Que se observan que las prestaciones sociales a partir del 29 de julio de 2.016 fueron pagadas por la demandada.
- Que, respecto a los recargos dominicales y festivos, por virtud de los dispuesto en el artículo 167 del C.G.P., a la demandante le correspondía mencionar y probar que la labor que se ejecutó fue en horario suplementario, lo cual no hizo, por lo que no puede entrar a hacer cálculos o suposiciones de horas extras laboradas. Que al respecto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL9318 del 22 de junio de 2.016, radicación 45931, con ponencia del Dr. GERARDO BOTERO ZULUAGA, indicó que para que el juez produzca condena de horas extras, dominicales o festivos, las comprobaciones del trabajo más allá de la jornada ordinaria han de analizarse de tal manera que en el ánimo del juzgador no deje duda alguna acerca de su ocurrencia.
- Que por ser imprescriptibles los aportes a pensión, se condenara a la sociedad demandada al reconocimiento y pago de la totalidad de los que se hayan causado desde el 1. ° de octubre de 2.010 hasta el 31 de diciembre de 2.015, teniendo en cuenta que los causados a partir del 2.016 ya fueron pagados.

3. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando lo siguiente:

- Que el despacho tiene en cuenta la sustitución patronal en la relación laboral entre las partes, sin embargo, habiendo hecho la petición en debida forma y habiendo allegado pruebas al proceso, no se condenó al supermercado demandado al pago de la indemnización por despido injustificado que fue decididamente sustentado, por lo que se realizó un falso juicio de la prueba documental de la carta de aviso que no fue tachada por la parte demandada y que el demandado expone la caducidad como una causal de terminación del contrato la cual no está estipulada en el C.S.T.

- Que el despacho no tuvo en cuenta la sanción moratorio por consignación deficitaria de cesantías, por lo que violó directamente el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 y también el artículo 254 del C.S.T., pues aunque se aceptó una relación laboral, no se hizo énfasis en la prueba que llevo el establecimiento del comercio y realizó un falso juicio de existencia de la prueba documental del certificado de fondos de cesantías PORVENIR que fue allegada en debida forma, en donde se evidencia que faltaron consignaciones.

- Que no se decretó la mala fe de los demandados que primero admiten la relación del año 2.016, luego en el interrogatorio de parte desde el 2.016 en adelante y que allegaron una liquidación parcial que no fue objetada.

El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación para que se revoque la condena en su contra, argumentando lo siguiente:

- Que no está de acuerdo en la relación laboral contractual que consideró la señora Juez, porque la constancia que obra en el expediente y que aportó la parte demandante, es una certificación laboral del año 2.011, en donde la señora GLADYS RODSA MELO certifica que la demandante ha trabajado desde octubre de 2.010 hasta la fecha, lo que quiere decir que es una relación laboral prescrita por ese periodo de tiempo.

- Que en el expediente obra liquidación del 1. ° de enero de 2.016 al 31 de diciembre de ese año, con lo que se demuestra que la relación laboral fue por intervalos de tiempo y no existió una sola relación laboral. Que queda demostrado que la actora no prestó servicios en enero y febrero para la señora GLADYS ROSA MELO y para el mes de marzo de 2.017 fue contratada por la sociedad hasta el año 2.019, por lo que no se puede dar sustitución patronal, porque la relación fue terminada y liquidada, fue firmada por la demandante lo que quiere decir que aceptó esa fórmula de terminación de ese contrato.

4. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida en auto que antecede, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

•PARTE DEMANDANTE:

El apoderado de la parte demandante solicita que se adicione el reconocimiento y condena del pago de las acreencias y sanciones laborales debidamente probadas. También solicita que se cite a la demandante a rendir testimonio.

Señaló que se opone a la absolución que realizó la *A quo* respecto a las pretensiones que consideró prescritas, relativas a auxilio de cesantías, derecho a las vacaciones, indemnización por despido injustificado del 01/03/2.019, reconocimiento y condena al pago de la sanción moratoria por la consignación deficitaria de las cesantías e indemnización por perjuicios causados.

Expresó que la prescripción sobre el auxilio de cesantías exigibles al 01/03/2019, fecha que se reconoció como extremo laboral, sin que hayan transcurrido los 3 años dispuestos en los artículos 249, 488 y 489 del C.S.T. y S.S., va en contra vía de las sentencias N° 67636 del 21/11/2.018 y 46704 del 26/10/2.016 proferidas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y no tiene congruencia por falso raciocinio, porque esta prestación se hace exigible a la terminación del contrato. También señaló que no se tuvo en cuenta el auxilio de cesantías correspondientes a de enero y febrero de 2.017, los cuales no fueron cancelados, se encuentran vigentes y corresponden a meses en que la demandada GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ canceló seguridad social.

Indicó que a su poderdante le corresponde el reconocimiento de las vacaciones del año 2.016, pues estas no fueron canceladas en la liquidación del contrato de trabajo y se encontraban vigentes al momento de presentar la demanda.

Expuso que la *A quo* no valoró que el documento de la carta de preaviso no cumple con lo consagrado en el numeral 1. ° del artículo 46 de C.S.T. y S.S., ni con lo establecido en la sentencia de casación N° 49903 del 30/05/2019 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que especifica la importancia de que el preaviso sea claro, conciso y concreto, de manera que se exprese de forma inequívoca la decisión de no renovar el contrato, so pena de no tenerse en cuenta, ya que en dicho documento no se expresó taxativamente la determinación de no prorrogar el contrato y se expone la caducidad con causal de terminación del mismo, la cual no está estipulada en los artículos 61 y 62 del C.S.T. y S.S. Que por lo anterior, la parte demandada debe ser sancionada a indemnización por despido injustificado.

Que en primera instancia no se realizó pronunciamiento sobre la pretensión de reconocimiento y condena al pago de la sanción moratoria por la consignación deficitaria de las cesantías, pese a que se comprobó la mala fe de los demandados y que solo se consignó en el Fondo de Cesantías un único aporte correspondiente a un año, por lo que se viola lo establecido en el numeral 3. ° del artículo 99 de la Ley 50 de 1.990 y en la sentencia N° 70892 del 03/12/2019.

Respecto a la pretensión subsidiaria de indemnización por perjuicios causados en caso de no darse el reintegro, manifestó que no hubo pronunciamiento al respecto, pese a que la carta de preaviso no cumple los requisitos manifestados previamente.

Finalmente pidió que se ratifiquen los extremos laborales y las condenas impuestas a los demandados en primera instancia porque se demostraron los tres elementos esenciales que exige el artículo 23 del C.S.T. Y S.S y se presentó durante la relación laboral el fenómeno jurídico de sustitución patronal consagrado en los artículos 67 al 69 *ibidem*.

• PARTE DEMANDADA:

El apoderado de la parte demandada solicita la revocatoria total de la sentencia y en su lugar la absolución de las condenas impuestas por la evidente buena fe en el actuar de sus representados.

Manifestó que la Jueza de la primera instancia no tuvo en cuenta que la parte demandante no probó los extremos de la relación laboral que predica, el elemento de prestación personal del servicio, la subordinación o dependencia y la remuneración durante el periodo comprendido entre el 11 de octubre de 2010 hasta el 1. ° de marzo de 2019, conforme al art.23 del C.S.T., para que se disponga el reconocimiento de un contrato de trabajo para con la SOCIEDAD SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S., ya que solo prestó servicios a la sociedad del marzo de 2017 al 28 de febrero de 2019, a través de varios contratos de trabajo a término fijo como fue acreditado con prueba documental.

Expresó que consta en el proceso que la demandante prestó algunos servicios a la señora GLADYS ROSA MELO, haciendo aseo por horas en un local, de octubre de 2010 al 8 de noviembre de 2011 y de 1. ° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016, sin que exista prueba distinta en el expediente para determinar la existencia de una relación laboral desde el año 2010 en forma continua e ininterrumpida hasta el 1. ° de marzo de 2019, ni de la sustitución del empleador.

Solicita que no se acceda a la condena de indemnización por terminación del contrato e indemnización moratoria por no consignación de cesantías que fue solicitada por la demandante, porque no hubo despido o terminación del contrato a término fijo fuera de los parámetros legales según lo aceptado en

el interrogatorio de parte por la actora y la prueba documental. Que el entendimiento dado por las partes al vocablo “caduca” que aparece en la carta del 28 de enero de 2.019, fue el de terminación del contrato y que no es regla precedente para el derecho laboral la de plasmar en este tipo de cartas la palabra terminación o no prórroga del contrato como lo refiere el art.61 del C.S.T.

Respecto a la solicitud de indemnización moratoria por el no pago de cesantías por el tiempo laborado expresó que no se puede imponer esta condena porque la parte demandante no acreditó la prestación del servicio en cuanto a tiempo y forma.

5. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal, hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

6. PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER:

Los problemas jurídicos propuestos a consideración de esta Sala son los siguientes:

¿Se encuentra acreditada la existencia de un contrato de trabajo realidad entre ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ como trabajadora y la demandada SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S. como empleador entre 11 de octubre de 2.010 hasta el 1° de marzo de 2.019 con sustitución patronal de la señora GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ desde marzo de 2017?

También se debe establecer ¿Si resulta procedente la indemnización por despido injusto y la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por consignación indebida de cesantías?

7. CONSIDERACIONES:

En este caso, procede la Sala a determinar si entre la señora ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ como trabajadora y la demandada SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S. como empleadora, existió un contrato de trabajo realidad entre 11 de octubre de 2.010 hasta el 1 de marzo de 2.019, en virtud del cual, la empresa demandada estaría obligada a reconocer aportes a seguridad social, indemnización por despido injusto y sanción moratoria por no consignación oportuna de cesantías

La jueza *a quo*, determinó que con las pruebas aportadas se configura lo dispuesto en el artículo 67 del C.S.T. sobre sustitución patronal, debido a que las actividades de los establecimientos de comercio no variaron, por lo que de conformidad con el artículo 167 del CG.P. se demostró que la demandante prestó sus servicios a la sociedad demandada en el cargo de servicios generales desde el 11 de octubre de 2.010 hasta el 1. ° de marzo de 2.019,; así mismo se observa, que las prestaciones sociales causadas a partir del 29 de julio de 2.016 fueron pagadas por la demandada y que las que se generaron con anterioridad al 29 de julio de 2.016 se encuentran prescritas teniendo en cuenta la fecha de presentación de la demanda, sin perjuicio de los aportes al sistema de seguridad social que no prescriben. También indicó que no se reconocen los recargos dominicales y festivos solicitados porque la actora no probó que ejecutó labores en horario suplementario.

Decisión frente a la cual presentó apelación la parte demandante por estimar que no se condenó al supermercado demandado al pago de la indemnización por despido injustificado que fue solicitada y probada, ni a la sanción moratoria por consignación deficitaria de cesantías, por lo que se realizó un falso juicio de la prueba documental respecto a la carta de aviso y del certificado de fondos de cesantías PORVENIR. También indicó que no hubo pronunciamiento sobre la mala fe de los demandados.

El apoderado de la parte demandada también apeló la decisión, al no estar de acuerdo en la relación laboral contractual que consideró la jueza de primera instancia, porque esta se dio por intervalos de tiempo y que tampoco existió sustitución patronal.

De manera preliminar, debe señalarse, que en virtud del principio de consonancia fijado en el artículo 66A del C.P.T.Y.S.S., la competencia de esta Sala de Decisión se circunscribe en las materias apeladas: la declaratoria de contrato realidad con sustitución patronal, y las pretensiones negadas de condena por indemnización por despido injusto y por indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por consignación indebida de cesantías; por ende, los asuntos sobre los que hubo absolución, como el trabajo suplementario, reajuste de prestaciones y perjuicios morales al no ser apeladas por el actor quedaron en firme y no serán revisadas en esta instancia. En igual medida se abstuvo la actora de apelar la declaratoria de prescripción, por lo que esta no podrá ser revisada. Finalmente se advierte que las peticiones de pruebas elevadas en los alegatos de conclusión no proceden, en la medida que precluyó el período probatorio en segunda instancia y no se evidenció que las pruebas hubieran sido solicitadas oportunamente, ni que se hubieren dejado de practicar en primera instancia sin culpa del solicitante.

Procede la Sala a analizar entonces los problemas jurídicos expuestos, iniciando por la declaratoria de contrato de trabajo realidad con sustitución patronal y posteriormente las condenas reclamadas por la actora.

7.1 Contrato de trabajo y sustitución patronal

La señora ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ reclamó en su demanda que el 10 de octubre de 2.010 ingresó a laborar en el SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S., antes MINI MERDACO JM, a través de contrato verbal que duro hasta junio de 2.014; que a partir de junio de 2.014 fue vinculada en el cargo de auxiliar de servicios generales mediante contrato de trabajo a término fijo por un año, el cual se prolongó hasta febrero de 2.017 y que posteriormente se realizó otro contrato del mismo tipo que inició el 28 de febrero de 2.017 para desempeñar el mismo cargo; hechos controvertidos por la parte demandada, quien aceptó la existencia de un contrato con la actora pero exclusivamente desde el 1 de marzo de 2017, advirtiendo la imposibilidad de reclamar por períodos anteriores dado que dicha persona jurídica solo nació formalmente entre diciembre de 2016 y febrero de 2017 que se materializó su existencia.

Ante los hechos alegados por la demandada, se dispuso integrar al litisconsorcio necesario a la señora GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ quien aceptó una relación laboral con la actora exclusivamente entre enero a diciembre de 2016 como propietaria de un establecimiento de comercio, cuando vendió el establecimiento a la sociedad SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S., negando una relación previa.

Al respecto, la *a quo* concluyó que se demostró una relación laboral con la señora MELO RODRÍGUEZ como propietaria del establecimiento MINIMERCADO JM y luego SUPERMERCADO J.M. PLUS desde el 11 de

octubre de 2010 hasta diciembre de 2016 cuando fue sustituida patronalmente por la persona jurídica SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S., de la que es socia la misma señora MELO RODRÍGUEZ, donde la actora siguió ejerciendo las mismas funciones; conclusiones a las que se opone la demandada, insistiendo que no procedía la sustitución, que el certificado entregado no corresponde a la realidad y que se ratifica en los hechos aceptados, negando cualquier relación anterior.

En términos del artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo, contrato de trabajo es aquél por el cual, una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Ante ello, acorde al artículo 23 (*ibidem*), para que se predique su existencia debe existir una actividad personal realizada por el mismo trabajador, bajo la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, y, una remuneración o salario.

Por su parte, el artículo 24 del C.S.T., subrogado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, enseña que “...*Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo*”, pues una vez reunidos los tres elementos anteriores, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, no obstante, esta presunción admite prueba en contrario.

Esta presunción legal opera a favor del trabajador y, por consiguiente, demostrada la prestación del servicio, es a cargo del empleador desvirtuarla. Así lo ha explicado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en diferentes oportunidades, entre estas en la Sentencia de 13 de diciembre de 1996, donde precisa, que el artículo 24 no consagra un derecho sino una regla de juicio que afecta la carga de la prueba en el proceso laboral, esto es, se trata de una instrucción a los jueces laborales, relevando al trabajador de acreditar el elemento de la subordinación pues esta se presume y toda prestación de una actividad personal a favor de otra persona, natural o jurídica, debe entenderse en principio como laboral a menos que el empleador desvirtúe que hubo dependencia.

De lo anterior, se extrae que, probada la prestación personal del servicio, la subordinación se presume y compete ejercer plena actividad probatoria a la parte demandada que excepciona la inexistencia del contrato de trabajo; complementando esta teoría, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-20683 de 6 de diciembre de 2017, radicación No. 56.313, en lo referente al principio de la primacía de la realidad y la presunción del artículo 24 del Código sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, reitera lo ya expuesto y concreta que quien se abroga la calidad de trabajador debe demostrar al menos dos aspectos: la prestación personal del servicio y los extremos temporales en que afirma haberlo desarrollado, con los elementos de juicio suficientes para convencer al Juez y al tiempo permitir que el demandado tenga información suficiente para ejercer adecuadamente su derecho de defensa y contradicción, siendo a partir de estas reglas que el juez debe aplicar las respectivas consecuencias jurídicas a la parte que omite su deber procesal.

Es importante señalar, que la teoría general de la carga de la prueba establece, que le corresponde probar las obligaciones o su extinción al que alegue aquellas o éstas (Art. 1757 C.C), principio que se reproduce en otros términos en el artículo 167 del C.G.P. al determinar que “...*incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*”.

Entre los principios que orientan el Derecho Procesal Colombiano, es de recibo el de la necesidad de la prueba, el cual está contemplado en el artículo 164 del C.G.P., que a su letra dice: “...*Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de pleno derecho*”. A la vez hace lo suyo en materia laboral, el artículo 60 de C.P.T.S.S. que expresa:“(...) *El juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas a tiempo*”. Seguidamente el artículo 61 del C.P.T.S.S. reza que:

“...El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes (...)”.

Esto, en consonancia con el artículo 167 del C.G.P.

Lo anterior significa, que a la parte actora le basta tanto con probar la prestación o la actividad personal como el período en que ejecutó la actividad, para que se presuma el contrato de trabajo y es al empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.

Ahora bien, con el fin de resolver el problema jurídico antes expuesto, la Sala observa que dentro del expediente obran como pruebas que acreditan la prestación de servicios, las siguientes:

- Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio SUPERMERCADO J.M. PLUS de fecha 04/07/2019, donde consta que este nació el 1 de agosto de 2006, que el 05/05/2014 se realizó cambio de nombre, anteriormente era MINI MERCADO PENSILVANIA; aparece como propietario el SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. desde el 10 de febrero de 2017.
- Certificados de existencia y representación legal de la persona jurídica SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. de fechas 03/07/2019 y 19/08/2019, donde consta su constitución en diciembre de 2016 y matrícula mercantil de febrero de 2017.
- Certificado del MINI MERCADO J.M. expedido por la señora GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ a la actora el 08/11/2011, donde consta que labora en ese establecimiento de comercio haciendo aseo general, con un sueldo mensual de \$200.000, desde octubre de 2.010.
- Certificado de afiliación de la demandante al Fondo de Cesantías PORVENIR, en donde consta que al 1. ° de marzo de 2.019 tenía un saldo disponible de \$871.359,09.
- Informe de PORVENIR de fecha 1. ° de marzo de 2.019, donde consta que la actora está afiliada a ese fondo de pensiones obligatorias desde el 08/09/2008, con un saldo de \$6.932.685 y que el último aporte a su cuenta lo realizó la empresa SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S.
- Historia clínica ocupacional de examen Médico ocupacional de ingreso realizado a ALIDA ROSA NAYA FERNANDEZ en AGESO el 26 de marzo de 2.018, con concepto de aptitud para desempeñar el cargo con patología que no impide su desempeño laboral.
- Autorización N° 252148 del Centro Médico La Samaritana de fecha 24 de agosto de 2.018, donde consta consulta de control o de seguimiento por fisioterapia por dolor en articulación de la actora, con la finalidad de detección temprana de enfermedad general por lo que se ordenan 10 sesiones de fisioterapia.
- Historia clínica emitida por el Centro Médico La Samaritana a la actora, de fecha 24/08/2018, con motivo de consulta de reporte de rx de rodillas comparativas.

- Historia clínica emitida por el Centro Médico La Samaritana a la actora, de fecha 06/08/2018, con motivo de consulta de dolor en la rodilla.
- Historia clínica emitida por el Centro Médico La Samaritana a la actora, de fecha 06/08/2018, con motivo de consulta de dolor en la rodilla.
- Historia clínica emitida por el Centro Médico La Samaritana a la actora, de fecha 13/08/2018, con motivo de consulta de dolor de ambas rodillas.
- Autorización N° 252148 del Centro Médico La Samaritana de fecha 13 de agosto de 2.018, donde consta interconsulta por ortopedia por complejidad y pertinencia por artrosis no especificada de la actora, con la finalidad de detección temprana de enfermedad general por lo que se ordena interconsulta de las dos rodillas.
- Historia clínica emitida por el Centro Médico La Samaritana a la actora, de fecha 12/09/2018, con motivo de consulta de dolor de ambas rodillas.
- Constancia de atención general practicada a la demandante en el Centro Médico La Samaritana el 25/02/2019 por dolor en las articulaciones y adormecimiento en la mano.
- Historia clínica ocupacional de examen médico ocupacional de retiro realizado a ALIDA ROSA NAYA FERNANDEZ en AGESO, el 02 de marzo de 2.019, con concepto de patología para seguimiento en EPS.
- Contrato de trabajo a término fijo N° 033 suscrito entre la actora y la sociedad demandada el 1. ° de marzo de 2.017, por una duración de 03 meses, con remuneración del salario mínimo mas auxilio de transporte.
- Contrato de trabajo a término fijo N° 072 suscrito entre la actora y la sociedad demandada el 1. ° de junio de 2.017, por una duración de 03 meses, con remuneración del salario mínimo mas auxilio de transporte.
- Contrato de trabajo a término fijo N° 113 suscrito entre la actora y la sociedad demandada el 1. ° de septiembre de 2.017, por una duración de 03 meses, con remuneración del salario mínimo mas auxilio de transporte.
- Carta de preaviso de fecha 15 de enero de 2.018 en donde el Gerente de SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. informa a la demandante que el contrato a término fijo caduca el 28 de febrero de 2.018.
- Contrato de trabajo a término fijo N° 037 suscrito entre la actora y la sociedad demandada el 1. ° de marzo de 2.018, por una duración de 12 meses, con remuneración del salario mínimo mas auxilio de transporte.
- Carta de preaviso de fecha 28 de enero de 2.019 en donde el Gerente de SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. informa a la demandante que el contrato a término fijo caduca el 1. ° de marzo de 2.019 por lo que estaría en periodo de seguimiento y evaluación.
- Liquidaciones de prestaciones sociales realizadas por el SUPREMERCAO JM PLUS S.A.S. a la actora, de fechas 20/12/2017, 06/01/2018, 20/06/2018, 20/12/2018 y 28/02/2019.
- Constancias suscritas por la demandante, en las que expresa que recibió de la sociedad demandada intereses sobre las cesantías y prima, y que se encuentran a paz y salvo en pago de salarios y auxilio de transporte, de fechas 20/12/2017, 06/01/2018 y 28/02/2019.
- Planilla de cesantías N° 860000115950 del año 2.018.
- Concepto de aptitud emitido por AGESO a la demandante el 26/03/2018 en el examen médico ocupacional de ingreso, en el que se consignó que es apta para desempeñar el cargo con patología que no impide su desempeño laboral.
- Concepto de aptitud emitido por AGESO a la demandante el 02/03/2019 en el examen médico ocupacional de retiro, en el que se consignó patología por seguimiento en EPS.
- Historia laboral de la demandante emitida por PORVENIR S.A. – Folio 188 del PDF.

- Certificado de cancelación de la matrícula mercantil de GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ como persona natural, expedida el 21/08/2020.
- Liquidación del contrato de trabajo por medio de la cual la actora declara que su patrono está a paz y salvo por todo concepto laboral relacionado a la terminación del contrato que se ejecutó del 01/01/2016 al 31/12/2016.
- Escritura pública N° 2870-2016 de la Notaria Quinta del Circulo de Cúcuta, que trata de la constitución de la sociedad SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S.
- Testimonio rendido por **CAMILA ANDREA GRATERON MOROS**, quien manifestó que es administradora del punto de venta del SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. Que la actora ingresó en marzo de 2.017, fecha en la que se hizo contratación nueva de toda la planta en general, incluida ella. Que ella era la encargada del área de talento humano y de contratación, así como de los horarios y nunca le informaron novedades. Que tienen 2 turnos de ocho horas, uno de 6 a 12 y de 2 a 5, y el otro turno de 9 a 2 y de 5 a 8, y que la actora se rotaba en estos 2 turnos de forma semanal. Que el supermercado está abierto al público de 6 de la mañana 8 de la noche, y dependiendo del área, si era necesario que estuviera abierto en la apertura o cierre se manejaban los horarios. Que las funciones de la demandante eran de auxiliar de servicios generales haciendo aseo, para lo cual se armaba cronograma de acuerdo a la necesidad de la empresa. Que fue ella quien hizo la contratación de la actora. Que notificó a la demandante un mes antes la terminación del contrato normal en documento firmado por el gerente. Que el SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. tiene publicaciones en Facebook por la parte comercial y que de esa página se encarga el área de mercadeo y publicidad. Que los domingos y festivos el aseo lo hacían personas externas.
- Interrogatorio de parte rendido por la demandante ALIDA ROSA ANAYA FERNANDEZ, quien manifestó que empezó a trabajar en el mini mercado el 10 de octubre de 2.010, con un salario de \$200.000 pesos trabajando 4 horas diarias de lunes a domingo. Que a partir del 15 de junio de 2.014 momento en que inició el contrato laboral con el SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S., empezó a ganar el salario mínimo, el cual siguió ganando en el año 2.017 cuando trabajó para JM PLUS S.A.S. donde trabajó hasta que la llamaron el 16 de febrero de 2.019 a informarle que no iba a tener más contrato y trabajaría 15 días más. Que cuando le dieron por terminado el contrato de trabajo le dieron la liquidación del año con las cesantías. Que su salida fue injustificada y cuando trabajó en J.M. MINI MERCADO, no le pagaron ni dieron vacaciones, ni la liquidaron hasta que pasó para el SUPERMERCADO J.M., en donde no tenía tampoco prestaciones, ni seguro, y que trataba de no faltar, pero lo hizo pocas veces cuando enfermó y llevo a su hijo y a una sobrina para que la reemplazara. Que a partir de 2.014 le hicieron firmar contrato todos los años. Que empezó a trabajar en el SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. desde marzo de 2.010, pero como pidió un certificado para un subsidio de una vivienda le dieron constancia desde octubre desde ese año y fue contratada por don JORGE y doña ROSA, dueños del supermercado, quienes le daban órdenes. Que trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hasta que se trasladaron en 2.014 al SUPERMERCADO JM, en donde empezó a trabajar 13 horas. Que en 2.014 se enfermó de la columna y doña ROSA la envió al Hospital para que pasara por el SISBEN y posteriormente la afilió. Que la primera liquidación que le dieron fue en 2.016 porque iban a pasar a la razón social SUPERMERCADO JM PLUS, pero esa vez no le pagaron vacaciones. Que siempre trabajo más de 8 horas y cuando por enfermedad llevaba a su hijo o sobrino para que la reemplazaran ella era quien les pagaba.

- Interrogatorio de parte rendido por el señor JORGE ELIECER MORANTES CACERES en calidad de Representante Legal del SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S., quien manifestó que la terminación del contrato de la demandante fue normal y se le cancelaron las prestaciones como manda la ley. Que la actora estaba afiliada a seguridad social, que ella firmo todos los documentos de retiro y se le mando a hacer el examen de retiro. Que su esposa GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ era la propietaria y representante legal del establecimiento de comercio denominado MINI MERCADO J.M. PENSILVANIA del municipio de Los Patios. Que conoce a la demandante desde el 1. ° de marzo de 2.017. Que su esposa entro como socia en la sociedad que él representa con las acciones obtenidas de la tienda JM PLUS. Que JM PLUS esta desde el 2.017 y antes era una tienda que se denominaba MINI MERCADO JM. Que la empresa JM PLUS PENSILVANIA se acabó y en el 2.016 la volvieron a crear otra vez. Que la demandante estuvo vinculada a su establecimiento de comercio cree que desde febrero de 2.017 hasta 2.019, desempeñando la actividad de servicios varios y trabajaba 8 horas, pero no tiene claro el horario porque eso lo maneja la administradora. Que el SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. esta abierto de 6 de la mañana a ocho de la noche y que existen dos turnos. Que cuando hay urgencia se paga las horas extras al empleado. Que corrige lo manifestado respecto a que la relación contractual con la demandante inició en febrero de 2.017 pues esta inició en marzo de ese año. Que junto a su esposa eran los propietarios del establecimiento denominado JM PLUS, inscrito en la Cámara de Comercio bajo matricula 153370, el cual su esposa dio como aporte con sus activos a la empresa que actualmente representa, los pasivos no porque ella se hizo cargo. Que el pago de las acreencias laborales de los trabajadores del SUPERMERCADO JM PLUS los asumió la señora GLADYS ROSA MELO. Que la sociedad que representa es propietaria del SUPERMERCADO JM PLUS y que los trabajadores de este supermercado no siguieron trabajando en la entidad que él representa porque los administradores hicieron una selección de personal. Que a la demandante con un mes de anticipación se le informó la terminación del contrato por medio de una carta que él firmó. Que a ratos iba al SUPERMERCADO JM PLUS PENSILVANIA. Que en el 2.014 el establecimiento JM PLUS propiedad de su esposa funcionó en predio de su propiedad del barrio Pizarreal, pero no se acuerda cuantos empleados tenía.
- Interrogatorio de parte rendido por la demandada GLADYS ROSA MELO RODRIGUEZ, quien manifestó que tuvo vinculación con la demandante hasta el año 2.016, momento en que terminó su sociedad que era de persona natural, la cual liquidó y terminó contrato de Cámara de Comercio. Que no ha tenido vinculación con manejo de personal dentro del SUPERMERCADO J.M. PLUS SA.S. entre los años 2.016 al 2.019. Que tiene acciones en el supermercado demandado. Que contrato a la demandante desde el 2.014 y hasta el 2.016 para el aseo y mantenimiento del establecimiento de su propiedad J.M. PENSILVANIA. Que en el 2.015 y 2.016 le canceló las cesantías a la actora en efectivo. Que mediante escritura 2870 de 2.017 aportó sus acciones a la sociedad demandada, que el establecimiento ya no lo tenía. Que cuando ella hizo terminación de contratos no supo que pasaría con la nueva administración, ni a quien contratarían en el SUPERMERCADO PLUS S.A.S.

Conforme a esta relación probatoria, y lo reiterando por esta Sala, que para declarar la existencia de la presunción de que trata el artículo 24 del C.S.T., la actora debe acreditar la prestación personal del servicio, para de esa forma trasladar a la demandada la carga de la prueba de probar que no existió subordinación.

Por lo anterior, al realizar la valoración probatoria el juez tiene unas facultades que la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL21157-2017, Radicación No. 55951 y con M.P. ERNESTO FORERO VARGAS, las refiere:

“no están sometidos a la tarifa legal, como quiera que atendiendo los mandatos previstos en el artículo. 61 del CPTSS, ostentan la facultad legal de apreciar libremente los medios de prueba y así formar de manera libre su convencimiento, atendiendo, eso sí, el principio de la sana crítica, lo que conlleva a que sus conclusiones, mientras no sean descabelladas, queden amparadas por la presunción de legalidad y acierto (...) las decisiones se deben fundamentar en los elementos probatorios que le merezcan mayor persuasión y credibilidad, ya sea en forma prevalente o excluyente de lo que surja entre una u otra prueba, sin que esa escogencia razonada configure la comisión de un yerro fáctico”

Bajo esta libertad de configurarse un criterio a partir de los elementos probatorios, la parte demandada aceptó la existencia de múltiples relaciones laborales con la actora así: GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ como propietaria del establecimiento SUPERMERCADO JM PLUS de enero a diciembre de 2016 y la persona jurídica SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S. aceptó haber firmado múltiples contratos de trabajo a término fijo entre marzo de 2017 a febrero de 2019; por lo que se analizará si le asistió razón a la jueza *a quo* cuando declaró un solo contrato desde el mes octubre de 2010 a febrero de 2019, bajo la figura de la sustitución patronal.

Sea lo primero resaltar que en el curso de este proceso se evidencia un indebido manejo de la actividad procesal por la parte demandante y la ausencia de control por la jueza de primera instancia; pues ante la contestación de la demanda de la parte demandada y de la vinculada, el apoderado de la actora radicó sendos memoriales descorriendo traslado de las excepciones, aprovechando para incorporar hechos, pretensiones y pruebas nuevas.

Esta actuación procesal no está consagrada en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, debido a que el artículo 32 advierte que las excepciones de mérito se resuelven en la sentencia sin trámite especial y el artículo 77 consagra que, contestada la demanda, se citará a audiencia, sin que exista la etapa para descorrer traslado de las excepciones.

En esa medida, si la parte actora pretendía incorporar nuevos hechos, pretensiones y pruebas como resultado de la contestación de la demanda, su oportunidad era reformar la demanda en los términos del artículo 28 del C.P.T.Y.S.S.; para lo cual cuenta con un término preclusivo y no es posible admitir un estudio de lo incorporado indebidamente en los escritos donde descorre traslado, que es una etapa del procedimiento civil consagrado en el artículo 370 del C.G.P.

Por lo expuesto, esta Sala no tendrá en cuenta los hechos y pretensiones adicionados indebidamente; no sucede lo mismo, respecto de las pruebas, debido a que las mismas fueron decretadas e incorporadas en la etapa probatoria, sin que las partes propusieran medios de impugnación y, por lo tanto, se entienden legalmente incorporadas al plenario.

Ante esta actuación procesal irregular, se llamará la atención a la Jueza Primero Civil del Circuito de Los Patios, para que se abstenga de incurrir nuevamente en actos propios del procedimiento civil en los procesos laborales que le atañen a su competencia como juez civil, por carecer su circuito de un juzgado especializado en conocimientos laborales.

Ahora bien, entre los hechos incorporados en dichos escritos se resalta la sustitución patronal entre el demandado inicial y la vinculada; situación que en principio no podría entonces ser convalidada, pues vulneraría el principio de congruencia. No obstante, en reciente providencia SL5242 de 2021, la Sala de Casación Laboral explicó que esta sustitución puede declararse si deviene del escenario fáctico percibido por el juez y con la presencia de las partes en la etapa probatoria para controvertirlo, explicando lo siguiente:

“(…) la Sala no percibe que el Tribunal se hubiera equivocado en la forma indicada por la censura pues, ante la necesidad de definir la responsabilidad a cargo de los demandados por el incumplimiento de las obligaciones laborales, bien podía acudir al referente legal en comento, sin violación de las reglas adjetivas invocadas por la censura.

Como se anotó, los elementos estructurales de la sustitución de patronos hacían parte del escenario fáctico develado en el proceso; así mismo, se trata de un instrumento incorporado al engranaje jurídico sustancial que, por tanto, puede ser aplicado por los jueces de instancia para resolver la controversia, con independencia de que no hubiese sido invocado dentro de los fundamentos jurídicos de la demanda.

Lo anterior, constituye la línea de pensamiento de la Corte, en el sentido de que las normas y fundamentos jurídicos traídos por las partes no limitan al juez laboral, en tanto no constituyen una barrera infranqueable a la hora de emitir el pronunciamiento final. Es al administrador de justicia a quien incumbe resolver el litigio según los hechos demostrados y a la luz del ordenamiento jurídico

En igual sentido, la Corte ha enseñado que «el principio de congruencia en ningún caso quiere decir que las condenas impuestas en la sentencia deben ser un calco de las pretensiones de la demanda, pues bien puede ocurrir que la solución jurídica, resultante del examen fidedigno y sin alteración de los hechos y con respaldo en el ordenamiento normativo, sea distinta a la propuesta por el demandante» (CSJ SL, 27 jul. 2000, rad. 13507).

Conforme lo expuesto, la distribución entre los demandados de la responsabilidad por las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, no implica reconocer u otorgar un derecho diferente al perseguido por el actor, sino producir una respuesta judicial consecuente con los hechos probados, en perspectiva de la vocación protectora del derecho laboral y de la seguridad social.”

Aclarado lo anterior, procede entonces la Sala a verificar si efectivamente se demostró un solo contrato con sustitución patronal en los términos establecidos por la jueza de primera instancia.

El primer elemento de prueba a destacar, es el referido certificado laboral, donde la señora MELO RODRÍGUEZ da constancia de que ALIDA ANAYA labora en su empresa MINIMERCADO JM, desde octubre de 2010 hasta la fecha, que fue expedido el 8 de noviembre de 2011; el cual desconoce el demandado, indicando que lo firmó como un favor personal y no corresponde a la realidad.

Sobre la validez y valor probatorio del Certificado Laboral, de vieja data la jurisprudencia ha referido que *“El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo” y que ante ello “la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario”.* (SL14426-2014, SL 8360, 8 mar. 1996, SL 36748, 23 sept. 2009, SL 34393, 24 ago. 2010 y SL 38666, 30 abr. 2013)

Ahora bien, para la plena aplicación de este parámetro jurisprudencial, el juzgador debe tener un documento oponible a la parte que se le imputa, esto

es haber identificado con claridad su autenticidad porque de ello la eficacia probatoria de todo documento, en la medida que si no está clara la autoría de un documento no es posible valorarlo o apreciarlo; al respecto, el artículo 244 del C.G.P. señala que *“es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso”*.

En este caso, se evidencia que el documento fue suscrito por la vinculada GLADYS ROSA MELO, sin que lo tachara de falso y tramitara hasta su final este medio de impugnación de la autenticidad; por ende, este se mantiene como auténtico y debe ser tenido como verdadero, pues no existen pruebas que controviertan su contenido. Ante ello, se encuentra demostrado que la actora prestó servicios para la señora MELO RODRÍGUEZ en los dos extremos enunciados en dicho documento.

No obstante, asiste razón a la parte demandada cuando reclama que no hay pruebas que certifiquen la continuidad plena en la prestación de servicios de la demandante en el interregno del 9 de noviembre de 2011 a diciembre de 2015; documentalmente solo se aportó por este período un resumen de cotizaciones expedido por PORVENIR, donde obran aportes realizados a la actora por GLADYS MELO en los períodos interrumpidos: agosto de 2014, enero a marzo de 2015, enero a febrero de 2016 y enero a febrero de 2017.

Sobre esta única prueba, se advierte, que la jurisprudencia ha reiterado como insuficiente, para demostrar el contrato de trabajo, la mera existencia de aportes a seguridad social o de afiliaciones; pues debe evidenciarse realmente que hubo prestación de servicios, para ser beneficiaria de la presunción del artículo 24 del C.S.T. Así se indica en SL3936 de 2021: *“la afiliación a la seguridad social no conlleva, necesariamente, la existencia de una relación laboral, a menos que haya pruebas contundentes que así lo acrediten (...) el hecho de la afiliación al seguro social, no demuestra por sí sólo el contrato de trabajo, pues para la estructuración de este, se requiere la coexistencia de los elementos del contrato de trabajo”*.

Se resalta entonces, que la parte actora no ejecutó debidamente su carga de la prueba, pues sus testigos no asistieron a la audiencia de práctica de pruebas y las demandadas en su interrogatorio de parte no manifestaron hechos susceptibles de confesión; por lo que no existe prueba suficiente que permita evidenciar prestación de servicio entre el 9 de noviembre de 2011 a diciembre de 2015.

Respecto de los períodos en que se acepta la existencia del contrato de trabajo; se evidenció documentalmente que la vinculada GLADYS MELO aportó la liquidación del período de enero a diciembre de 2016, cancelando a la actora cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones y este documento fue suscrito como aceptado por la actora; evidenciando inicialmente, que las partes aceptaron haber ejecutado una relación laboral por ese año y que finalizó de común acuerdo, a paz y salvo la empleadora de todo concepto. No obstante, se advierte, que no obra prueba de las cotizaciones a seguridad social por este período y, por ende, se condenará por estas.

En cuanto a SUPERMERCADO JM PLUS S.A.S., este aportó 4 contratos de trabajo a término fijo por los períodos: marzo a mayo de 2017, junio a agosto de 2017, septiembre a noviembre de 2017, marzo de 2018 a marzo de 2019; respecto del período sin contrato, de diciembre de 2017 a febrero de 2018,

aunque no se aportó el contrato este se referencia y acepta en preaviso del 15 de enero de 2018 y en liquidación de prestaciones. Así mismo, obra liquidación de prestaciones sociales de diciembre de 2017 por el periodo de marzo a diciembre de ese año, una de prima de servicios de enero a junio de 2018, liquidación de enero a diciembre de 2018 y otra de enero a marzo de 2019.

Sea lo primero destacar que no existe prueba de prestación del servicio de la actora entre enero y febrero de 2017, como señaló el apelante; exclusivamente obra la constancia de cotización, pero esta es insuficiente para demostrar prestación del servicio y como se advirtió, no hubo prueba testimonial o confesión de parte para evidenciar que hubo plena continuidad en el cambio de administración del supermercado, en aras de identificar sustitución patronal.

Al respecto, el artículo 67 del C.S.T. establece que:

“Se entiende por sustitución de patronos todo cambio de un patrono por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto éste no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios.”, agregando el artículo 68 que “La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”.

Sobre este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado como criterio jurisprudencial, recientemente en Sentencia SL-1943 del 17 de febrero de 2016, M.P. JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ que:

“(...) la institución de la sustitución patronal tiene por fin amparar al trabajador contra una imprevista e intempestiva extinción del contrato producida por el cambio de un patrono por otro, cualquiera que sea la causa, ya se trate de mutación de dominio (permuta, venta, cesión, traspaso, sucesión por causa de muerte), enajenación del goce (arrendamiento, alquiler, etc.), alteración de la administración, modificación en la sociedad, transformación o fusión de ésta, liquidación o cualquier otra causa. Por consiguiente, cuando existe o media la sustitución patronal, los contratos de trabajo no se extinguen, son los mismos y deben continuar con el nuevo patrono.”

Agregando el Tribunal de Cierre de esta Jurisdicción que *“...para que se produzca el fenómeno de la sustitución patronal que se reúnan tres condiciones, a saber: a) el cambio de un patrono por otro; b) la continuidad de la empresa y c) la continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo”.*

En esa medida, encuentra la Sala que erró la jueza a quo cuando concluyó que estaba suficientemente acreditada la sustitución patronal; pues no solo la demandante dejó de demostrar la continuidad en la prestación del servicio, como era su obligación, sino que además está demostrado que su vinculación con la persona jurídica se dio bajo una modalidad de contratación diferente.

Descartada la sustitución patronal, se encuentra que la relación a declarar entre ALIDA ANAYA y SUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S. será del 1 de marzo de 2017 al 28 de febrero de 2019; regida por un contrato de trabajo a término indefinido, modalidad que fue declarada en primera instancia y no fue objeto de apelación.

Sin embargo, es del caso advertir, que dicha declaración está justificada en la indebida implementación del contrato a término fijo, pues cada uno de los contratos dejaba de ser preavisado y liquidado debidamente, sirviendo esa modalidad encubierta para desconocer la continuidad en la prestación del

servicio de la actora y por lo tanto suscitándose en el plano de la realidad, un contrato a término indefinido. Para lo cual se resalta que en SL5186 de 2021 la Sala de Casación Laboral explicó que pese a aparentar el cumplimiento de formalidades en cuanto a contratos a término fijo, era procedente que el juez declarara una situación diferente si así lo evidencia como ejecutado, acorde al principio de supremacía de la realidad sobre las formas

Fluye de lo expuesto, que le asiste razón al apelante, pues las pruebas analizadas no demostraron que existiera entre las partes una relación única e ininterrumpida de 2010 a 2019; por el contrario, se demostró una serie de relaciones fragmentada, por lo que se revocará el numeral primero de la providencia apelada, y en su lugar se declarará que existió contrato de trabajo realidad entre ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ como trabajadora y GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ como empleadora, en los períodos del 11 de octubre de 2010 al 8 de noviembre de 2011 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y con SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S. como empleador entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2019.

Consecuente con lo anterior, se modificará el numeral segundo para ordenar que cada empleador proceda a cancelar el cálculo actuarial correspondiente a cubrir con los aportes a seguridad social en pensiones, por el período declarado a cada uno y si existen pagos ya realizados, procedan a corregir cualquier inconsistencia respecto de lo resuelto.

7.2 Indemnización por despido injusto

Procediendo al siguiente problema jurídico, en principio el trabajador que alega la cusación de derechos originados en un despido injusto, debe demostrar el hecho simple del despido, y al empleador le corresponde acreditar la ocurrencia de la justa causa legal que le permitió realizar el mismo, en los términos del artículo 167 del C.G.P., el cual dispone que le corresponde a las partes demostrar los supuestos de hecho en que se sustentan sus pretensiones.

Se advierte también, que el empleador cuando considere que existe justa causa puede unilateralmente y sin indemnización alguna, despedir al trabajador, siempre y cuando, le haya comunicado los motivos y razones concretos por los cuales se va a dar por terminado el contrato de trabajo, sin que le sea posible al empleador alegar hechos diferentes en un eventual proceso judicial posterior, lo cual debe ser inmediato al evento generador y debe estar relacionado entre las causas taxativamente previstas en el postulado normativo.

Para el caso concreto, se advierte, que está demostrado en documento visto a folio 116 del PDF, que el 28 de enero de 2019 se entregó carta de preaviso a la trabajadora indicando lo siguiente: *“su contrato a término fijo por un año caduca el 1 de marzo de 2019, por ende le informamos que en este lapso de tiempo estará en período de seguimiento y evaluación, así que esperamos la mayor disposición y compromiso por las funciones y responsabilidades asignadas”*; documento que afirma el demandado, constituye la notificación de terminación por el plazo fijo pactado.

Ahora bien, estima la Sala que al haberse declarado un contrato de trabajo realidad a término indefinido, el plazo fijo deja de constituirse en una justa causa y, por lo tanto, está acreditado que el empleador fue quien decidió finalizar el vínculo laboral sin tener una motivación legal para ejecutarlo sin indemnización a favor del trabajador. Inclusive, aun en el caso de haberse declarado el contrato a término fijo, se resalta que dicha misiva en ningún aparte señala la intención de no renovar nuevamente el vínculo y solo advierte

que entra en período de evaluación, por lo que no podría tenerse como un preaviso adecuado para haber evitado esta condena.

En consecuencia, se revocará el numeral cuarto que absolvió por este concepto y en su lugar se declarará que hubo terminación unilateral sin justa causa imputable al empleador, por lo que acorde al artículo 64 del C.S.T. se condenará a indemnización equivalente a 30 días por el primer año y 20 días por el segundo, al haberse tratado de un contrato a término indefinido que duró 2 años, que para este caso por tratarse de salario mínimo diario de \$27.607 arroja una suma de \$1.380.351,6.

7.3 Sanción moratoria por no consignación oportuna de cesantías

Se solicitó en la demanda la indemnización moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por consignación indebida de cesantías, norma cuyo numeral tercero dice: *“El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo”*

Al respecto, sobre la indemnización moratoria, se traerá a colación lo indicado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-1091 de 2018 al indicar que esta condena *“...tiene un carácter eminentemente sancionatorio, pues se genera cuando quiera que el empleador se sustrae, sin justificación atendible, al pago de salarios y prestaciones sociales a que tiene derecho el trabajador a la terminación del vínculo laboral” y se ha agregado por la jurisprudencia “que el juzgador no debe proferir condena automática ante el hecho de la falta de pago, sino que ha de examinar la conducta patronal y si de ésta emerge la buena fe para exonerar al empleador”*; esta noción que rechaza la aplicación automática de la indemnización moratoria se extiende a la sanción por no consignación oportuna de las cesantías, indicando la Sala de Casación Laboral en sentencia SL3492 de 2018, que *“para su imposición el fallador debe analizar la conducta del empleador a efectos de establecer si la omisión en la consignación de las cesantías estuvo revestida de buena fe de parte aquel para, de esta manera, proceder a eximirlo de su pago”*.

Más recientemente, la providencia SL1293 de 2020 resalta que la Sala de Casación Laboral *“...se ha opuesto a cualquier hermenéutica fundada en reglas inderrotables y concluyentes acerca de cuándo procede o en qué casos hay buena fe o no, pues se ha inclinado por la verificación de la conducta del empleador en cada caso concreto, de acuerdo con todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el proceso, pues «no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuándo un empleador es de buena o de mala fe» y «sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro”* concluyendo que *“las decisiones fundamentadas en guías o paradigmas preestablecidos de comportamiento de buena o mala fe, se distancian del sentido que esta Sala les ha atribuido a los preceptos normativos que consagran la indemnización moratoria, que, se repite, exigen sin excepción, la revisión completa y dimensionada de todos los elementos del caso”*.

Ante ello, no existe un parámetro objetivo para determinar la buena fe del empleador para no cancelar las prestaciones laborales respectivas al trabajador cuando ha finalizado la relación laboral, sino que compete al juzgador establecer si existió alguna justificación que permita entrever que el empleador entendía que no estaba obligado a cancelar los derechos reconocidos, o que estaba convencido de que existían serias razones objetivas y jurídicas para abstenerse de hacer los pagos.

En el presente caso, el empleador demostró haber cancelado el 6 de enero de 2018 directamente a la trabajadora la suma de \$684.048 por cesantías liquidadas de marzo a diciembre de 2017 y acorde a certificado de PORVENIR, se consignaron las cesantías de 2018 por valor de \$869.453.

Estima la Sala que se demostró el adecuado cumplimiento del deber de consignar las cesantías de 2018, de otra parte, si bien las cesantías de 2017 debieron haberse consignado al fondo, en virtud del contrato a término indefinido que se ha declarado, es evidente que el empleador actuó bajo el convencimiento de estar ejecutando un contrato a término fijo y bajo dicha convicción, realizó cumplidamente el pago de esa prestación y la demandante aceptó haber recibido el mismo. Se advierte que, en la demanda, esta sanción se reclamaba fundada en la consignación incompleta producto de la reliquidación por trabajo suplementario y no por incumplimiento propiamente dicho.

En consecuencia, no se advierte mala fe del empleador en su actuar y por lo tanto no se cumple el presupuesto para imponer la sanción moratoria, ante lo cual habrá de confirmarse la absolución por este concepto.

Finalmente, al haber prosperado parcialmente ambas apelaciones, estima la Sala que no hay lugar a condena en costas.

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA:

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia impugnada de fecha sentencia del 19 de agosto de 2021 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios (N. de S.), por las razones expuestas en esta providencia y en su lugar declarar que existió contrato de trabajo realidad entre ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ como trabajadora y GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ como empleadora, en los periodos del 11 de octubre de 2010 al 8 de noviembre de 2011 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, y con SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S. como empleador entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2019.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral segundo de la providencia, en el sentido de condenar a GLADYS ROSA MELO RODRÍGUEZ y SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S., a cancelar el cálculo actuarial correspondiente a cubrir con los aportes a seguridad social en pensiones, por el período declarado a cada uno en el numeral anterior y si existen pagos ya realizados, procedan a corregir cualquier inconsistencia respecto de lo resuelto.

TERCERO: CONDENAR a SUPERMERCADOS JM PLUS S.A.S. a reconocer indemnización por despido injusto a la trabajadora ALIDA ROSA ANAYA FERNÁNDEZ, en suma de \$1.380.351,6, por lo explicado previamente

CUARTO: CONFIRMAR en los demás aspectos la providencia apelada.

QUINTO: ADVERTIR a la Jueza Primero Civil del Circuito de Los Patios, para que se abstenga de incurrir nuevamente en actos propios del procedimiento civil en los procesos laborales que le atañen a su competencia por carecer su circuito de un juzgado especializado en conocimientos laborales.

SEXTO: SIN CONDENA EN COSTAS de segunda instancia.

Oportunamente devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES
Magistrada Ponente



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
Magistrado



ELVER NARANJO

Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

Ref. Proceso ordinario - Rad. 54-405-31-03-001-2021-00065-01

Demandante: Etelvina Bautista Suarez

Demandada: Pilar Rosario Belloso Ramírez

Cúcuta, Treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

1º. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 30 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Civil Circuito de Los Patios – Norte de Santander.

2º. ANTECEDENTES

En la contestación de la demanda interpuesta por Etelvina Bautista Suarez contra Pilar Rosario Belloso Ramírez, se esgrimió la excepción previa denominada “*Prescripción*”. Se dijo que sin que ello implique el reconocimiento de las pretensiones, que todos los derechos laborales reclamados en el libelo demandatorio se encuentran afectados por la prescripción conforme los artículos 488 del CST y el 151 del CPT y de la SS.

En desarrollo de la audiencia prevista en el artículo 77 del CPTSS, el *A Quo*, luego de decretar las pruebas solicitadas por las partes y de oficio el interrogatorio a ambos extremos, determinó negar de plano la excepción de prescripción formulada con carácter de previa, afirmando que de conformidad con el artículo 101 del C.G.P. aplicable por analogía del

artículo 145 del CPTSS, este medio de defensa debe ser presentado en el término de traslado de la demanda en escrito separado.

Inconforme con lo decidido la pasiva interpone el recurso de reposición y en subsidio el de apelación a fin de que se revoque tal determinación. Discute que el procedimiento laboral no contempla la presentación de las excepciones previas en escrito separado, además que así se viene haciendo en los procesos laborales. Reposición que no fue de recibo por el operador judicial de primera instancia, quien reiteró la norma general como fundamento de su negativa, y concedió el recurso de alzada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: La pasiva, alegó que el a quo viola el debido proceso e incurre en un defecto procedimental absoluto al exigir el cumplimiento de requisitos que no se encuentran dentro del ordenamiento laboral colombiano, pues, dice, el artículo 31 del CPTSS señala que las excepciones previas serán propuestas en la contestación de la demanda, igualmente que el artículo 32 ibídem contempla el trámite que se debe dar a las excepciones previas. Conforme lo anterior, solicita se revoque el auto recurrido y se ordene el estudio de la excepción previa propuesta.

La ejecutante no alegó.

3º. CONSIDERACIONES

En consonancia con la alzada, deberá establecerse si fue formulada en debida forma o no por la pasiva la excepción previa de prescripción. Dependiendo de lo que se determine, si adquiere o no prosperidad la misma.

Cierto es que el artículo 101 del CGP, aplicable en materia laboral por analogía dispuesta en el 145 del CPTSS prevé que *“las excepciones previas se formularan en el término de traslado de la demanda en escrito separado que deberá*

expresar las razones y hechos en que se fundamentan”, empero, no puede perderse de vista, que su aplicación está circunscripta a la inexistencia de disposiciones en el código adjetivo laboral y de la seguridad social. Dicho otras palabras, las normas del CGP, se tienen en cuenta cuando en el CPTSS no existe norma especial o no es posible aplicar una análoga del mismo cuerpo legal. Es decir, si existen tales en el CPTSS, no se recurre al CGP.

Por manera que, cuando se verifica que el numeral 6 del artículo 31 del CPTSS, señala que la contestación de la demanda deberá contener “*las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas*”, sin distinguir entre previas y de fondo, diáfano es que innecesario resulta acudir al 101 del CGP, para establecer que los medios enervantes de especial y previo pronunciamiento deben presentarse en escrito separado, ya que, los susodichos se esgrimen en el mismo escrito contentivo de la contestación al libelo genitor.

Al amparo de lo dicho, cuando la jueza *a quo* niega de plano el estudio de la excepción previa de prescripción formulada por Beloso Ramírez, sustentando que la misma debió presentarse en escrito separado conforme lo reza el artículo 101 del CGP, patente y claro es que tal determinación no se acomoda a la legalidad. En efecto, al existir norma en el CPTSS, en cuanto a la presentación de las excepciones previas, valga decir, dentro del mismo escrito de contestación de la demanda como lo dispone el artículo 31-6, no pueden aplicarse las disposiciones del CGP, específicamente su artículo 101. Recuérdese que a la luz del artículo 145 del CPTSS, solo se acude a la normativa del CGP, cuando no exista norma especial o no sea posible aplicar una que gobierne situaciones análogas dentro del mismo CPTSS, lo cual efectivamente no sucede en sub-analice.

Por fuerza de lo explicado, le asiste razón a la recurrente pues la falladora de instancia en la audiencia de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio debió dar trámite y resolver la

excepción previa de prescripción sin más exigencias que haberla formulado dentro del escrito de contestación de la demanda, ya que así lo indica el numeral 6 del artículo 31 del CPTSS.

Entonces, como la excepción previa de prescripción fue debidamente formulada, en aras de honrar los principios de celeridad y economía procesal que le asisten al derecho procesal laboral y de la seguridad social, se resolverá en esta instancia dicho medio enervante.

El artículo 32 del CPTSS, prevé: “...*también podrá proponerse como previa la excepción de prescripción cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión (...)*”

Como puede verse, solo podrá proponerse la excepción de prescripción como de especial y previo pronunciamiento cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, de su interrupción o suspensión.

Sobre la excepción de marras y su resolución en la audiencia pública de “*conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio*”, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3693 de 2017, sostuvo que al juez laboral le es dable resolverla en la primera audiencia de trámite, siempre y cuando, como lo establece el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el 19 de la Ley 712 de 2001, “no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o de su suspensión”. Añadió el órgano de cierre: “*Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido*”, igualmente, señaló “*En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la*

exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia.”

Significa lo dicho, que cuando el operador judicial cuente con los suficientes elementos de juicio que lo llevan a la certeza de que la acción para reclamar el derecho se extinguió por el paso del tiempo, ha de decidir sobre la excepción de prescripción en la audiencia prevista en el artículo 77 del CPTSS, pero, si existe duda del derecho su resolución se hará en la sentencia.

En el sub-analise se tiene que la pasiva desconoció la relación laboral de la cual depreca su existencia la demandante, proponiendo como medio exceptivo con carácter de previa, que todos los derechos laborales reclamados en el libelo demandatorio se encuentran afectados por la prescripción conforme los artículos 488 del CST y el 151 del CPT y de la SS. A su vez la activa en el libelo genitor reseñó que la relación laboral se gestó del 27 de febrero de 2012 al 10 de abril de 2018.

Así las cosas, la excepción de prescripción propuesta como previa, no está llamada a prosperar, pues, no se dan los presupuestos señalados en el artículo 32 del CPTSS, es decir, en esta etapa procesal no hay certeza siquiera de la existencia de la relación laboral, menos de los extremos laborales de los cuales pueda desprenderse exigibilidad de derecho alguno laboral protegible. Dudas que han de resolverse con el agotamiento de las etapas procesales correspondientes, y, analizarse en la sentencia de instancia la procedencia o no del fenómeno extintivo aquí alegado.

Bajo estos parámetros, se declarará impróspera la excepción de prescripción propuesta como previa y se dispondrá que la misma sea analizada con carácter de fondo o de mérito, como se contempló en la jurisprudencia citada.

En consecuencia, se confirmará el auto del 30 de noviembre de 2021, pero por las razones aquí expuestas. Se ordenará a la jueza de instancia que

resuelva la excepción de prescripción formulada por la pasiva como de fondo o mérito. Se dispondrá la devolución del expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite correspondiente.

Sin costas en esta instancia.

4º DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, **RESUELVE: PRIMERO.-** CONFIRMAR el auto del 30 de noviembre de 2021, proferido por el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios – Norte de Santander. **SEGUNDO.- ORDENAR** al *a quo* que resuelva la excepción de prescripción formulada por Pilar Rosario Belloso Ramírez como de fondo o mérito. Disponer la devolución del expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite correspondiente. **TERCERO:** Sin costas.

NOTIFÍQUESE.

Los magistrados,



ELVER NARANJO



Nidiam Belén Quintero Gelves



José Andrés Serrano Mendoza

JoaquinP

Certifico: Que el auto anterior fue notificado Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m. Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPUBLICA DE COLOMBIA



Departamento Norte de Santander
TRIBUNAL SUPERIOR
Distrito Judicial de Cúcuta

PROCESO: ORDINARIO LABORAL
RAD. JUZGADO: 2019-00369
PARTIDA TRIBUNAL: 19315
JUZGADO UNICO DEL CIRCUITO DE OCAÑA
DEMANDANTE: ROSA AIDE ARIAS DE POLO
ACCIONADO: UGPP Y DIOSELINA BAYONA TORO
ASUNTO: PENSION DE SOBREVIVIENTES
TEMA: APELACIÓN Y CONSULTA

JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE

San José de Cúcuta, **treinta y uno** (31) de **marzo** de dos mil veintidós (2022).

Procede la Sala de decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y surtir el grado jurisdiccional de consulta a favor de la UGPP, contra la sentencia proferida el 23 de abril de 2021 por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña, dentro del proceso ordinario laboral seguido bajo el radicado No. 54-001-31-05-001-2019-00369-00 y P.T. No. 19315 promovido por la señora ROSA AIDE ARIAS DE POLO en contra de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” y la señora DIOSELINA BAYONA TORO.

Abierto el acto por el Magistrado Ponente, entra la Sala a deliberar y una vez conocido y aprobado el proyecto, se profirió la presente sentencia, previos los siguientes

I. ANTECEDENTES

La demandante, por intermedio de apoderado judicial, interpone demanda ordinaria laboral con el fin de que se condene a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor en un 58% virtud del fallecimiento de su cónyuge, el señor JULIO CESAR POLO GONZALEZ, a partir del 19 de marzo de 2019, al pago del retroactivo pensional los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

II. HECHOS

La demandante fundamentó sus pretensiones en los hechos narrados en el libelo originario, los cuales serán expuestos brevemente, de la siguiente manera: que contrajo matrimonio católico con el señor JULIO CESAR POLO GONZALEZ el

23 de septiembre de 1967, vinculo que perduró hasta el fallecimiento del señor Polo González el 19 de marzo de 2019; que el señor Polo González obtuvo la pensión de jubilación el día 08 de noviembre de 1989 mediante resolución No.3264 emitida por CAPRECOM; que ante el fallecimiento del pensionado, reclamó la pensión de sobrevivientes junto con la señora Diocelina Bayona Toro; que la UGPP profirió resolución RDP 012471 del 12 de abril de 2019 por la cual dejó en suspenso la pensión de sobrevivientes; que el día 22 de mayo de 2019 se profiere la resolución RDP 015686 donde otorga el 100% de la pensión de sobrevivientes a la señora Diocelina Bayona desconociendo el derecho que le asiste según la escritura pública 1207 del 31 de julio de 1998 en la que se liquida la sociedad conyugal pero no cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. Que interpuso acción de tutela y mediante fallo proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña el 16 de julio de 2019 amparo sus derechos y ordenó a la UGPP a pagarle el 50% de la mesada pensional y el 23 de agosto de 2019 la Sala Civil Familia de este Tribunal confirmó la decisión, pero modificó en el sentido de otorgar la pensión de sobrevivientes como medio transitorio mientras el juez ordinario competente resuelva la controversia durante los 4 meses siguientes.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDADA

Notificada de la demanda presentada en su contra, LA UGPP dio formal contestación a la misma, oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda, manifestando que la demandante no convivió con el causante durante los 5 años anteriores al fallecimiento, como tampoco existía sociedad conyugal, por lo que, es imposible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes según lo consagrado en el art. 13 de la Ley 797 de 2003; además, que también se presentó otra persona a reclamar la prestación, razón por la cual, es a la justicia ordinaria a quien le corresponde resolver el conflicto; propuso como excepciones de fondo, la prescripción, la inexistencia de la obligación y la buena fe de la UGPP.

La demandada DIOSELINA BAYONA TORO a través de apoderada judicial aceptó parcialmente los hechos, se opuso a todas las pretensiones alegando que la demandante y el causante habían liquidado la sociedad conyugal el 31 de julio de 1998 por lo que, no cumple con los requisitos de la Ley 797 de 2003 y propuso como excepciones de fondo el cobro de lo no debido, la inexistencia del derecho reclamado, la prescripción, la temeridad y la mala fe, la genérica y la buena fe.

Igualmente solicitó, que se declaren probadas las excepciones y se declare como única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes en un 100%.

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Tramitada la Litis, el Juzgado de conocimiento que lo fue el ÚNICO LABORAL DEL CIRCUITO OCAÑA, en sentencia de fecha **23 de abril de 2021** resolvió declarar probada la excepción de mérito propuesta por la parte demandada denominada inexistencia del derecho, en consecuencia, negó las pretensiones formuladas por la parte demandante y declaró que la señora DIOSELINA BAYONA TORO es la única beneficiaria de la sustitución pensional con ocasión al fallecimiento del señor Julio Cesar Polo González, ordenando a la UGPP a reconocer y pagar la mesada pensional en los términos declarados a la beneficiaria y en la resolución RDP 015686 del 22 de mayo de 2019, por último, condenó a la demandante en costas procesales y fijó las agencias en derecho en \$600.000 a cargo de la parte actora y a favor de cada una de las demandadas.

Para resolver lo anterior, argumentó que, de las pruebas aportadas y las declaraciones practicadas en audiencia, se acreditó que el causante Julio Cesar Polo González y la demandante Rosa Aydee Bayona Toro contrajeron matrimonio el 23 de diciembre de 1967, que para la fecha del fallecimiento del pensionado, estaban separados de hecho con sociedad conyugal liquidada según escritura del año 1998, sin embargo, aseguraron las partes intervinientes, que mantuvieron una relación formal de respeto ya que no hubo divorcio entre ellos; igualmente, se comprobó que el señor Julio César Polo (q.e.p.d.) y la señora Diocelina Bayona Toro iniciaron una relación como compañeros permanentes desde el 10 de febrero del año 1996 hasta la fecha de la muerte del señor Julio César Polo, esto es el 19 de marzo del año 2019; concluyendo que no existió convivencia simultánea entre la cónyuge y la compañera permanente según lo prevé el art. 13 de la Ley 797 de 2003.

Sostuvo que, al analizar el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, no es procedente dar aplicación a la sentencia de la Sala Laboral de la CSJ del 13 de marzo de 2012 traída por el apoderado judicial de la demandante, ya que en este asunto se demostró que no existe convivencia simultánea a pesar de la manifestación de la voluntad en vida del pensionado, de dejarle el 50% de la mesada pensional a la cónyuge separada de hecho con sociedad conyugal liquidada.

Señaló que tampoco es procedente dar aplicación de la sentencia proferida por la Corte Constitucional traída por el apoderado judicial de señora Diocelina Bayona Toro **la sentencia SU453 de 2019**, ya que ésta fue declarada nula por la misma Corte Constitucional en auto 167 del 13 de mayo de 2020 por haber incurrido en la causal de omisión de análisis de una cuestión relevante constitucional para la decisión.

Aseguró que la sentencia aplicable al caso, es la proferida por la **Corte Constitucional C-515 del 2019** donde se estudió la constitucionalidad del art. 13 de la Ley 797 de 2003, en especial, para los casos en que existe separación de hecho con sociedad conyugal disuelta y sin convivencia simultánea no tendría derecho la cónyuge, diferente a la analizada por la Sala Laboral de la CSJ en el

2012 en la que se analizó el mismo factor pero con convivencia simultánea, por lo que, concluyó que “...siendo esta la última interpretación constitucional y de acuerdo a la sentencia C131 de 1993, las interpretaciones que hace la Corte Constitucional en sus fallos de constitucionalidad hacen tránsito a cosa juzgada y son vinculantes y hacen parte de la palabra ley del artículo 230 de la Constitución Política, que los despachos judiciales estamos sometidos al imperio de la ley y que las decisiones de constitucionalidad hacen parte de la ley como cosa juzgada implícita y que además existen causales por apartarnos precisamente del precedente constitucional, que haría la invalidación de un fallo de una decisión de la jurisdicción ordinaria, esta interpretación es la más correcta por parte del guardián de la constitución...”; razones por las cuales, decidió el conflicto suscitado a favor de la compañera permanente demandada Dioselina Bayona Toro.

V. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la demandante inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicita sea revocada en su totalidad y se ordene el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora ROSA AIDE ARIAS en calidad de cónyuge del causante Julio Cesar Polo González, fundamentando su petición en que, si bien es cierto que no había una convivencia simultánea como quedó probado, **había un vínculo conyugal vigente** entre las partes, el cual quedó demostrado en el proceso, subsistiendo obligaciones mutuas, relacionadas con alimentos y ayudas, las cuales también quedaron probadas por los testigos y por la voluntad del causante; sostuvo que deberá dársele aplicación a lo normado en el inciso 4º del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que según lo analizado por la jurisprudencia, la unión conyugal difiera de la sociedad conyugal, razón por la que, en este caso persistió la unión entre los cónyuges hasta el fallecimiento del pensionado.

VI. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA.

El apoderado judicial de la demandante ratificó lo argumentando en el recurso de alzada, ampliando su exposición en que, los cónyuges a pesar de la liquidación de la sociedad conyugal, decidieron en forma libre y voluntaria, mantener el vínculo matrimonial, como se dispuso en la Escritura Pública 1207 del 31 de Julio de 1998 aportada al expediente, donde se realizan las siguientes anotaciones relevantes:

“Décimo tercero: “El conyugue se obliga a suministrar en forma mensual para la alimentación de su esposa e hija Francy Liliana la suma de dinero que se reajustaba de forma anual de acuerdo con las disposiciones que fija el Gobierno para los salarios.

Décimo Cuarto: El conyugue mantendrá de por vida el seguro médico de Caprecom a su esposa.

Décimo Quinta: Que se compromete el conyugue a ceder a su esposa la pensión a la hora de su muerte.”

De la misma manera, el causante a través de la declaración juramentada rendida junto con su compañera permanente DIOSELINA BAYONA, ante la Notaría 1 de Floridablanca el 07 de marzo de 2019, indica que no está divorciado de la Sra. ROSA AYDEE y que ella depende económicamente de él.

Asimismo, el 08 de marzo de 2019, un día después de la declaración anterior, el señor JULIO CESAR se dirige nuevamente a la Notaria 1 de Floridablanca, esta vez sin su compañera, y declara bajo gravedad de juramento que su esposa Rosa Aydee tiene como único sustento el aporte que le da mensualmente y que viene haciendo de forma ininterrumpida. Esta declaración juramentada hecha por el señor POLO apenas 11 días antes de fallecer, deja claro que, hasta sus últimos días de vida mantenía fielmente el lazo de cuidado y ayuda que siempre se mantuvo.

También se demostró la unión conyugal con el testimonio de la enfermera Kelly, quien acompañó domiciliariamente a la señora Rosa Aydee por un lapso de 3 años contados del 2017 al 2019, quien aseguró que entre el señor Polo y la señora Rosa había una relación de respeto, de visitas constantes (varias veces a la semana) a quien le llevaba frutas, medicinas, la transportaba hasta el médico, e inclusive de vistas evidenció cuando el señor le daba, lo que dice “la plata del mes” para hacer mercado, pagar recibos y demás del hogar. Este testimonio ratifica las acciones que el señor Polo hacía a favor de su cónyuge, desde la liquidación de su sociedad hasta el día de su muerte.

Aseveró que la liquidación de la sociedad conyugal es un acto jurídico diferente al divorcio y a la cesación de los efectos civiles del matrimonio, caso en el que continúan vigentes obligaciones como esposos, como las de ayuda y apoyo mutuo que claramente se ven vigentes desde su boda hasta su muerte, aunado al conocimiento que tenía el Sr POLO del difícil estado de salud que padece su esposa, que hoy en día le impide valerse por sí misma.

*Que la interpretación de la “LA SOCIEDAD CONYUGAL” según los tribunales de cierre, tanto la Corte Suprema De Justicia como la Corte Constitucional, han entendido que la que debe estar vigente NO es la sociedad conyugal (desde el punto de vista patrimonial) sino el vínculo conyugal (Desde el punto de vista del estado civil). Dicha interpretación ha sido reiterativa y cuya línea jurisprudencial se ha mantenido hasta la fecha, cuyo último pronunciamiento se dio con la **SENTENCIA C 515 de 2019**, según asegura el apoderado, también fue analizado por la Corte Constitucional en dicha sentencia.*

Finalmente dice que el realizar el cálculo, a la señora ROSA AYDEE quien convivió 11.018 días con el señor POLO, y la señora DIOSELINA convivió 8.319 días con el señor POLO les corresponderá el 56,97% a la señora ROSA AYDEE ARIAS y el 43,03% a la señora DIOSELINA BAYONA.

El apoderado judicial de la demandada DIOSELINA BAYONA solicitó confirmar en todas sus partes la sentencia de primera instancia, considerando que fue proferida en derecho y ajustada con los resultados del debate probatorio surgido al interior del proceso.

LA UGPP a través de su apoderado judicial, ratifica lo manifestado en la contestación de la demanda como los argumentos presentados en los alegatos de conclusión de primera instancia; sostiene que la demandante ROSA AYDEE ARIAS no se acreditó los requisitos que la ley exige para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, toda vez que no convivió con el causante durante los últimos 5 años al fallecimiento como también se encontraba disuelta y liquidada la sociedad conyugal, por lo que no es posible el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes puesto que el artículo 13 de la ley 797 de 2003.

Aseguro que de las pruebas aportadas y recaudadas durante el presente proceso se tiene que obran declaraciones extrajudiciales de los señores PEDRO VARGAS y ANTONIO IBAEZ BECERRA en la que indican que el causante y la señora ROSA AYDEE ARIAS DE POLO se encuentran separados mediante escritura pública de la Notaria primera de Ocaña y que aunado a lo anterior obra escritura No 1207 del 31 de julio de 1998 de la Notaria primera de Norte Santander mediante la cual se liquida la sociedad conyugal entre la señora ROSA AYDEE ARIAS DE POLO y el causante, razón por la cual no existiría controversia y la pensión de sobrevivientes deberá ser reconocida para quien cumpla con los requisitos legales establecidos en este caso la señora DIOSELINA BAYONA TORO quien logró demostrar durante el sub lite, a través de las declaraciones extrajudiciales aportadas y a través de los testimonios recaudados que fue quien cumplió con los requisitos legales para hacerse beneficiaria de la pensión de sobreviviente del causante.

Trae a colación las sentencias proferidas por la Corte Constitucional C-1035 de 2008, SU140-2021 y por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral SL 16949 del 23 de noviembre de 2016 para solicitar la confirmación de la sentencia de primera instancia.

VII. CONSIDERACIONES

APELACIÓN. De conformidad con el artículo 66 A del CPT y de la SS adicionado al art. 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala se encuentra limitada a los temas propuestos y debidamente sustentados por el apelante en su recurso de alzada, sin embargo, será procedente analizar los derechos ciertos e indiscutibles a favor de la demandante y que sean consecuencia directa de la solución del conflicto.

CONSULTA. Igualmente, se conocerá el grado jurisdiccional de consulta por tratarse de un fallo adverso a los intereses de la UGPP de conformidad con el art. 69 del C.P.T y de la S.S., en concordancia con el art. 156 de la Ley 1151 de 2007 y lo señalado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el Auto AL-903-2019 reiterado en el de radicado AL2032-19 de mayo de dos mil veintiuno (2021).

Hechos acreditados.

En este asunto no existe discusión en que, el causante Julio Cesar Polo González nació el 16 de julio de 1942 (fl.37-PDF1), desde el 8 de noviembre de 1989 CAPRECOM hoy la UGPP le reconoció la pensión de jubilación mediante resolución No.3264 y reliquidada en la No.726 del 04 de junio de 1990 en la suma de \$355.451 desde el 1º de enero de 1990; que contrajo matrimonio religioso con la demandante Rosa Aidé Arias (con fecha de nacimiento 23 de octubre de 1945 (fl.39) el 23 de diciembre de 1967 inscrita en el registro civil de matrimonio de la notaría quinta de Bogotá el 25 de julio de 1989; que mediante escritura pública No. 1207 del 31 de julio de 1998 (fls.46-49) los consortes deciden en forma libre y voluntaria y de común acuerdo DISOLVER Y LIQUIDAR la sociedad conyugal de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 5º del art. 1820 del Código Civil, en la que se estipula para lo pertinente, lo siguiente:

“Décimo tercero: El conyugue se obliga a suministrar en forma mensual para la alimentación de su esposa e hija Francy Liliana la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda legal y corriente y que se reajustaba de forma anual de acuerdo con las disposiciones que fija el Gobierno para los salarios.

Décimo Cuarto: El conyugue mantendrá de por vida el seguro médico de Caprecom a su esposa...

Décimo Quinta: Que se compromete el conyugue a ceder a su esposa la pensión a la hora de su muerte...”.

Igualmente, no existe discusión en la veracidad de la declaración extraprocesal No.0805 rendida ante el Notario Primero del Municipio de Floridablanca Departamento de Santander entre el señor Julio Cesar Polo González y la demandada DIOSELINA BAYONA (fecha de nacimiento:28 de agosto de 1959) el 07 de marzo de 2019 vista a folio 180 del expediente digital PDF1, en donde bajo la gravedad de juramento, que el primero es casado y la segunda soltera, con unión marital de hecho entre sí, de ocupación PENSIONADO y AMA DE CASA, que conviven desde el 10 de febrero de 1996, hace 23 años, compartiendo techo, lecho y mesa de forma permanente e ininterrumpida, que la señora Dioselina depende económicamente del señor Polo González y que al no haberse divorciado de la señora Rosa Aydee Arias de Polo ésta también depende de él económicamente.

También se aportó una petición elevada por el pensionado ante la UGPP el día 08 de marzo de 2019 (fls.50-51 PDF1), manifestando que “DESIGNA EN VIDA” y en partes iguales, la pensión reconocida y pagada a las señoras Rosa Aydee Arias de Polo con vínculo matrimonial vigente y con quien procreó 04 hijos, quien depende económicamente de su aporte, y tal como fue estipulado en la Escritura Pública No.1207 del 31 de julio de 1998 y, a favor de la señora Dioselina Bayona Toro con quien convive en unión libre (sic) desde hace 23 años.

Que el señor Julio Cesar Polo González falleció el 19 de marzo de 2019, para lo cual, se presentaron ante la UGPP el día 08 de abril de 2019 dos reclamaciones de la pensión de sobrevivientes y/o sustitución pensional, la demandante Rosa Aydee Arias de Polo en calidad de cónyuge supérstite con sociedad conyugal liquidada y la señora Dioselina Bayona en calidad de compañera permanente.

Que la UGPP ante el conflicto suscitado por las reclamantes, profirió la Resolución RDP 012471 del 12 de abril de 2019 (fls.13-18 PDF1), suspendiendo el reconocimiento de la mesada pensional de sobrevivientes, con fundamento en el art. 6º de la Ley 1204 de 2008.

Posteriormente la UGPP en la Resolución RDP 015686 del 22 de mayo de 2019 (fls.19-23) revocó la decisión anterior, y reconoció el 100% de la sustitución pensional a la señora Dioselina Bayona en razón a lo previsto en la escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre los cónyuges y otras pruebas analizadas en la investigación administrativa, decisión que fue confirmada en la Resolución RDP 004038 del 14 de junio de 2019 y RDP 017892 del 13 de junio de 2019 (fls.25-31).

Se allegó al expediente, sentencia de tutela del 16 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ocaña quien amparó los derechos fundamentales incoados por la señora Rosa Aydee Arias de Polo y ordenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en un 50% con ocasión del fallecimiento del pensionado POLO GONZALEZ y el 50% a favor de la señora Dioselina Bayona (fls.57-76 PDF1).

La anterior decisión fue CONFIRMADA por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en sentencia del 23 de agosto de 2019, sin embargo, ADVIRTIÓ a la señora Rosa Aydee Arias de Polo que los efectos se mantendrían únicamente mientras las autoridades competentes decidan en forma definitiva sobre su solicitud, es decir, surtió efectos TRANSITORIOS por 4 meses siguientes a la notificación (fls.79-91 PDF1).

El 4 de septiembre de 2019 la UGPP cumplió el fallo de tutela y reconoció mediante Resolución RDP 026546 el 50% de la pensión de sobrevivientes a la señora Rosa Aydee Arias de Polo y el 50% restante a favor de la señora Dioselina Bayona (fls.32-36 PDF1).

Finalmente, la demanda fue interpuesta el 22 de octubre de 2019 (fl.93 PDF1).

Argumentos de la decisión de primera instancia, apelación y problema jurídico.

Según los argumentos del Juez A quo, la señora Rosa Aydee Arias de Polo no cumple con los requisitos previstos en la normatividad aplicable, para ser beneficiaria de la sustitución pensional, todo ello, con fundamento en la interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional señalada en la sentencia C-515 del 2019 donde se estudió la constitucionalidad del art. 13 de la Ley 797 de 2003, en especial, para los casos en que existe separación de hecho con sociedad conyugal disuelta y sin convivencia simultánea.

El apoderado judicial recurrente insiste en que, la señora Rosa Aydee Arias de Polo mantuvo **la unión conyugal vigente** hasta el fallecimiento de su cónyuge Polo González, cumple con los presupuestos señalados en la sentencia de la Corte Constitucional y la adoctrinada por la Corte Suprema de Justicia, además, allegó un memorial donde solicitó dar aplicación a un caso análogo según la sentencia SL359 del 03 de febrero de 2021 rad. 86405 con ponencia de la H.M. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

Por otra parte, la demandada Dioselina Bayona Toro alega que ella es la beneficiaria del 100% de la pensión de sobrevivientes causada por el pensionado Polo González, en calidad de compañera permanente supérstite y con quien convivió desde el año 1996 durante 23 años hasta el fallecimiento en marzo de 2019, razón por la cual, la señora Rosa Aydee Arias de Polo no cumple con los requisitos previstos en la Ley 797 de 2003 al encontrarse la sociedad conyugal liquidada desde el año 1998.

De conformidad con lo expuesto, la Sala procederá a planear el siguiente **PROBLEMA JURÍDICO:**

Determinar si la demandante Rosa Aydee Arias de Polo es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y/o sustitución pensional con ocasión al fallecimiento del pensionado Julio Cesar Polo González, en proporción al tiempo de convivencia en calidad de cónyuge, teniendo en cuenta que, para la fecha del óbito 19 de marzo de 2019, se encontraba separada de hecho, con sociedad conyugal liquidada desde el 31 de julio de 1998 y no existía simultaneidad de convivencia con la compañera permanente Dioselina Bayona Toro.

Normatividad aplicable.

Se hace preciso indicar que el aparte del art. 13 de la Ley 797 de 2003 aplicable al caso controvertido es el previsto en el inciso 3 del literal b) que dispone: “...**Si**

no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera permanente podrá reclamar una cuota parte de la correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo de convivencia con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe sociedad conyugal vigente.”

Sobre este punto, la parte actora arguye que, de las pruebas aportadas y practicadas, se demostró que Rosa Aydee Arias sostuvo la **unión matrimonial** vigente hasta el fallecimiento del pensionado Julio Cesar Polo González, quien se comprometió en vida a ceder la pensión en caso de muerte, mediante la escritura pública No. 1207 y además, declaró mantener después de su muerte, esa ayuda a través del 50% de la mesada pensional a su favor a pesar de la liquidación de la sociedad conyugal en el año 1998, y el otro 50% a favor de su compañera permanente.

Así las cosas, para la Sala a estudiar las **declaraciones rendidas** en audiencia, de las cuales se destacan:

Las allegadas por la demandante:

Lucy Matilde Vergel Arévalo es vecina, tiene 52 años, conoce a la demandante y al causante desde hace 30 años, asegura que el señor Polo se fue de la casa con otra mujer pero no hubo separación legal; que posterior a ello, el señor Polo siempre estuvo pendiente de sus hijos y de la señora Rosa Aydee Arias, siempre lo encontraba en la casa, los ayudaba económicamente, les llevaba mercado, que la señora Aydee sufre de una enfermedad y siempre la llevaba y la recogía del médico le compraba los medicamentos, tiene conocimiento porque estaba pendiente llamándolos, visitándolos, son amigos de la infancia; que procrearon 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres (Cesar, Jhon, Sonia y Francly Liliana) que los hombres viven en Panamá y las hijas en Ocaña; que no conoce a la mujer con quien se fue a vivir, pero asegura que fue hace muchos años; que el señor Polo falleció en una Clínica en Bucaramanga, que fue velado en Ocaña en una funeraria; que dos meses antes de fallecer lo saludo en su casa, que padecía de cáncer en los pulmones.

Kelly Torcoroma Jácome Carrascal 29 años, auxiliar de enfermería, cuidó a la señora Rosa Aydee desde el 2017 hasta el 20 de noviembre de 2019, se encargaba de su limpieza, que tuviera una buena alimentación, la administración de medicamentos, acompañarla a las citas médicas, entre otras funciones, su horario laboral era de 24 horas (sic), una semana de día y una semana de noche; que tuvo varias compañeras, que trabaja en la EPS SANITAS y fue designada como enfermera a domicilio, aseguró que el señor Polo González era el ex esposo de la señora Aydee porque su paciente se lo contó; que antes de ir a trabajar como enfermera, trabajó en la casa como empleada domestica interna

por dos meses, que le pagaba la profesora Sonia quien es hija de la señora Aydee; que la hija Liliana Polo vive con ella y es quien hace todos los trámites médicos junto con el señor Polo, que él siempre la visitaba a diario, no se quedaba a dormir pero estaba pendiente de ella, asegura que le llevaba frutas, la llevaba a citas médicas, que la señora Aydee estaba afiliada por el seguro médico del ex esposo; Que Liliana estudia derecho y se costea sus estudios con una sociedad que tiene con los hermanos que viven en Panamá; que en algunas ocasiones ella recibía el dinero que dejaba el señor Polo, pero no sabe la cantidad y otras veces le entregaba el dinero a su hija Liliana Polo, que con esa plata compraban mercado, pagaban recibos; que la relación entre la señora Aydee y el señor Polo González siempre fue buena, cordial, de amigos; que tuvo conocimiento que el señor Polo vivía con otra mujer pero no la conoció; que falleció por cáncer de Pulmón en la ciudad de Bucaramanga, que asistieron sus hijos y la señora Aydee viajaron en el carro de Liliana; que la señora Aydee tiene dificultad para caminar; que la casa era frecuentada por amigos del barrio; que el señor Polo estuvo un mes antes del fallecimiento en la ciudad de Bucaramanga en citas médicas y luego falleció el 19 de marzo de 2019 y durante ese mes se pagaron los servicios domiciliarios normalmente; que la señora Aydee padeció una embolia cerebral y quedó con problemas de equilibrio, le falla la memoria a corto plazo, además sufre de hipertensión y diabetes; que el dinero del hogar siempre lo maneja la hija Liliana y la señora Aydee es la que paga los servicios con ese dinero; aseguró que el hogar recibía plata del señor Polo para los gastos de la señora Aydee y desde Panamá, pero éstos último no tiene conocimiento para que se usaba.

Rosmira Trinidad Quintero de Barbosa dice conocer a la señora Aydee desde hace 14 años porque son vecinas, que conoció al señor Polo González cuando ya estaban separados, a pesar de eso, él siempre estuvo pendiente de ella, de su hogar, solventaba los gastos; que visita a la señora Aydee con frecuencia porque vende productos; aseguró que cuando el señor Polo llegaba le dejaba dinero a la señora Aydee; que tienen 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres, una es profesora y Liliana es amiga de ella; los otros viven en Panamá; que el señor Polo falleció en una clínica en Bucaramanga.

Los testigos traídos por la demandada Dioselina Bayona:

Carmenza Manzano Bayona es la hija de la demandada Dioselina Bayona, es comerciante tiene una tienda de ropa; dice que conoció a la señora Rosa Aydee por primera vez hace 15 años cuando el señor Polo González los llevó hasta Bucaramanga a una cita médica, viajaron solo los 3; aseguró que su mamá convivió con el causante desde el **10 de febrero de 1996** cuando un Juez de la República lo declaró en octubre de 2020; que vivían inicialmente en un apartamento cerca del mercado público, que cuando él llegó a vivir con su mamá ella tenía 15 años, que fueron compañeros hasta el fallecimiento; que el señor Polo y la señora Aydee no tuvieron ninguna relación sentimental después de la separación, que la única relación era con sus hijos; que tiene conocimiento de una escritura pública donde liquidan la sociedad conyugal; que vivió en el hogar

de su mamá y el señor Polo por 13 años hasta que nació su hijo que en la actualidad tiene 13 años, agregó que todos los días los visitaba porque su hijo Juan Manuel se llevaba muy bien con el señor Polo y cuando ella trabajaba lo dejaba al cuidado de su mamá; que la convivencia entre ellos fue permanente, nunca hubo separación, el señor Polo nunca durmió en otro lugar; que se enteró de la enfermedad del señor Polo dos meses antes del fallecimiento, padecía Cáncer de Pulmón y luego metástasis en todo el cuerpo, que estuvo inicialmente hospitalizado en la Clínica Torcoroma en Ocaña por 3 día y luego fue trasladado a Bucaramanga y duró un mes y falleció en la Clínica Ardila Lulle; que durante ese mes quien lo acompañó fue su mamá Dioselina, que los hijos de Polo fueron a visitarlo en la clínica, Cesar, Jhon, que venía desde Panamá y Sonia y Liliana que vivían en Ocaña y también la señora Rosa Aydee; que lo velaron en la Funeraria la Esperanza y ella fue quien se encargó de la organización del sepelio; que el señor Polo siempre fue muy respetuoso con ella y sus hermanas, que las trató como hijas, que lo llamaba GOYO, que él llegó a su casa cuando estaban muy pequeñas, que siempre tuvieron contacto con los dos hijos del señor Polo, que su mamá tuvo muy buena relación con ellos, que asistieron al cumpleaños de su hijo Juan Manuel; que después del fallecimiento del señor Polo la relación se terminó, porque se presentó discordia con el tema de la pensión; que el señor Polo fue a una notaría con su mamá para declarar sobre su relación porque le preocupaba su bienestar económico; que su mamá trabajaba con un tío en un supermercado y dejó de trabajar hace 5 años; luego se mantuvo con la pensión del señor Polo.

Jenny María Lázaro Carvajalino dice que conoce a la señora Rosa Aydee Arias porque vivió cerca a su casa en el Barrio Cuarto Centenario; que conoce a la señora Dioselina Bayona de un local en el mercado y que conoció al señor Polo González desde hace mas de 35 años; que Rosa y Polo fueron esposos, y luego se separaron y él se fue a vivir con Dioselina hasta su fallecimiento; que nunca vio a la señora Rosa trabajar; que cuando vivió cerca a la casa de Rosa aun vivía el señor Polo con ella hace mas de 35 años, luego ella se graduó de bachiller y se fue a trabajar en el mercado, se trasladó a otro lugar y de se enteró que el señor Polo y Dioselina eran compañeros; que siempre los vio juntos, iban a reuniones los dos, se comportaron como pareja; aseguró que el señor Polo nunca regresó a donde la señora Rosa; que la señora Dioselina le hizo una video llamada desde la clínica en Bucaramanga y le comentó que el señor Polo estaba muy enfermo, que tiene conocimiento de los hijos del señor Polo, Sonia que es la mayor, los dos hombres y la menor Liliana que no la distingue.

Sandra Patricia Criado Sánchez tiene 50 años es comerciante y vende charcutería en el Mercado de Ocaña, es la esposa del hermano de Dioselina desde hace 26 años, que conoce a la demandante porque el señor Julio Cesar la recogió recién operada en Bucaramanga y él iba con ella, era la ex esposa, se trataban como amigos, que cuando el señor Polo se fue a vivir con Dioselina se separó de la señora Rosa Aydee, asegura que esa fue la causa de la separación; que la relación fue pública, siempre se presentaron como pareja, que asistían a eventos, cumpleaños, bautizos, asegura que los hijos de Polo, Cesar y Jhon siempre compartieron con Dioselina, tenían buena relación; que la señora

Dioselina trabajó para ella en el supermercado el campeón, que desde hace 7 años ya no trabaja porque el señor Polo era pensionado y se dedicaron a viajar los dos, que la pensión le quedó a la señor Dioselina desde mayo de 2020; que fue testigo en un proceso en el que el Juez declaró en octubre de 2020 la unión marital de hecho entre Dioselina y Polo González; que el señor Polo falleció de cáncer de pulmón en marzo de 2019; aseguró que la señora Dioselina trabajó por 20 años porque le gustaba ser independiente en sus cosas, que tuvo tres hijas Zuleima, Carmenza y Milena Bayona.

Análisis.

En este orden de ideas, al estudiar integralmente las pruebas, es innegable reconocer que entre la demandante y el causante existió una convivencia en calidad de cónyuges por 27 años, 1 meses y 17 días, **desde el 23 de diciembre de 1967 hasta el 10 de febrero de 1996**, última data en la que inicia la unión marital de hecho con la demandada Dioselina Bayona; además, se demostró que los consortes liquidan la sociedad conyugal pero sin divorcio formal según escritura pública No. 1207, esto es, el contrato matrimonial se mantuvo vigente hasta el fallecimiento del pensionado. Igualmente, fácil concluir que, la demandada Dioselina Bayona, inició con el señor Julio César Polo González (q.e.p.d.), **la convivencia el 10 de febrero de 1996 hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 2019, esto es, por espacio de 23 años, 1 mes y 10 días.**

De la misma forma, los testigos son concurrente al señalar que la demandante Rosa Aydee Arias de Polo sostuvo con el causante una relación de “*amistad*” después de la separación de hecho y de la liquidación de la sociedad conyugal; en especial, lo dicho por la auxiliar de enfermería Kelly Torcoroma Jácome Carrascal, quien por la labor desempeñada y la permanencia en el hogar de la demandante diariamente durante 3 años (2017-2019), que prueba las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que sucedieron los hechos, asegurando que, la señora Rosa Aydee padecía de hipertensión, diabetes y una embolia cerebral que le produjo incapacidad para la movilización, por tales motivos, debía estar en control médico permanente, de lo cual, el señor Polo González en calidad de “ex esposo”, **la visitaba de 2 a 3 días el hogar, que se quedaba por espacio de 3 a 4 horas, que en algunas ocasiones la trasladaba al médico, que le dejaba dinero para gastos, que a pesar de que nunca pernotó en la vivienda, siempre ayudó y acompañó a la actora en su enfermedad**; así mismo, indicó que durante el último mes de vida del pensionado (febrero a marzo de 2019), los gastos del hogar siempre fueron satisfechos por parte de la hija menor Liliana Polo; hechos que coinciden con lo manifestado por la hija de la señora Dioselina, al asegurar que el causante permaneció durante un mes en la Clínica Ardila Lulle en la ciudad de Bucaramanga hasta su fallecimiento, además, que durante ese mes fue visitado por la señora Rosa Aydee y sus cuatro hijos, que la relación entre la demandante y el causante era de *amigos*, que el señor Polo estuvo pendiente de sus hijos y que nunca hubo discordia entre las familias, que siempre fue muy reservado en sus asuntos familiares por lo que, no tiene conocimiento de la presunta ayuda

económica con la señora Rosa Aydee, que durante los 23 años de convivencia con su mamá, nunca hubo separación y no se quedó en otro hogar.

De lo anterior, a esta Sala de Decisión le queda claro que los testigos asomados por la parte demandante, son concurrentes y precisos en manifestar que posterior a la fecha de separación de hecho de los consortes, éstos sostenían una relación en la cual, el pensionado de forma voluntaria ayudaba económicamente a la señora Arias de Polo, que por razones de la enfermedad padecida por su cónyuge, ésta no pudo ejercer trabajo alguno que le permitiera una subsistencia digna, todo ello, conforme a la relación de vecindad y cuidado de enfermería sostenida entre los declarantes y la pareja de esposos, además, esas aseveraciones coinciden con lo demostrado a través de la prueba documental asomada, en especial la escritura pública No.1207 en la que el pensionado se comprometió en entregarle mensualmente una suma de dinero para su cuidado y el de su hija menor, junto con la decisión de entregarle parte de su mesada pensional en caso de muerte.

Conforme a lo expuesto, el punto central de la discusión, consiste en determinar el alcance de la relación de “amistad” y “ayuda económica” entre el pensionado y la demandante Rosa Aydee Arias después de la separación de la sociedad conyugal respaldado con su expresa manifestación de voluntad de conceder parte de su pensión a su cónyuge, con vigencia de la unión matrimonial y sin convivencia durante los últimos años de vida del pensionado, para efectos del reconocimiento o no, de la sustitución pensional.

Jurisprudencia Vigente.

La Sala de Casación Laboral de antaño ha señalado que en cualquiera de las hipótesis del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es requisito imprescindible para acceder a la pensión de sobrevivientes **la demostración de convivencia real y efectiva, por un lapso no inferior a cinco años, que para el caso del cónyuge puede ser en cualquier tiempo**. La misma orientación puede verse vertida en sentencias de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral del 27 agosto. 2008, rad. 33885; 25 mayo 2010, rad. 37093; 28 agosto 2012, rad. 41625; SL680-2013, SL17571-2014, entre otras.

En caso de la existencia de **CONVIVENCIA SIMULTÁNEA** en los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera permanente, la beneficiaria de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo...”, éste texto fue declarado exequible condicionalmente mediante la **sentencia C-1035 de 2008** proferida por la Corte Constitucional que puntualizó que no se trata de cualquier relación, sino que, para determinar al beneficiario de la pensión de sobrevivientes, ésta debe reunir las siguientes condiciones:

El requisito de la convivencia simultánea, para determinar el beneficiario de la pensión de sobreviviente tiene que ver con la convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia, esto es, que ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los cinco años previos a la muerte

del causante y excluye de antemano las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el causante, como tampoco se refiere a aquellas situaciones en las cuales el causante convivió con diversas personas de forma sucesiva (no simultánea), situación que tiene su regulación especial.

Ahora bien, para el caso en estudio, se hace necesario traer a colación la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la CSJ del 13 de marzo de 2012 rad. 45038 M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, en la que se reconoció la pensión de sobrevivientes y/o sustitución pensional a favor de la demandante, quien acreditó que contrajo matrimonio religioso en diciembre de 1979, **que la sociedad conyugal fue liquidada en noviembre de 2001**, que para el momento del fallecimiento del pensionado en mayo de 2003 estaba separada de hecho y no hubo convivencia simultánea con otra reclamante, señalando respecto a los supuestos consagrados en la norma analizada, lo siguiente:

Justamente, frente a idéntica problemática, en reciente sentencia, esta Corte rectificó su posición, en tanto consideró que el literal b del artículo 13 ibidem, reconoce el valor del vínculo matrimonial, excluyendo el criterio de convivencia de los 5 años anteriores al fallecimiento, cuando quiera que el lazo jurídico se encuentre indeleble.

En efecto, en las providencias de 24 de enero de 2012, radicado 41637 y 40055 de 29 de noviembre de 2011 esta Sala estimó que la norma en cita contenía varios supuestos, y diferenciaba la existencia de una convivencia simultánea, caso en el cual la prestación debía dividirse con la (el) compañera (o) permanente, así como el evento en que la citada convivencia simultánea no existiera, pero sí una unión conyugal precedida de una separación de hecho, que reconocía un derecho a la cónyuge, siempre que su convivencia matrimonial hubiese durado por lo menos 5 años.

Ese cambio jurisprudencial se fundó en que la interpretación de esa norma debía ser amplia, en atención a que el legislador respetó la unión reconociéndole a la (el) esposa (o) el derecho a sustituir, aunque no existiera vida en común, lo que, en criterio de la Sala, equilibraba la realidad de la pareja que durante por lo menos 5 años de convivencia matrimonial conformó un proyecto de vida y coadyuvó con su compañía a que se construyera la pensión, de modo que no era posible dejarla sin amparo, máxime cuando la incorporación, en el caso de las mujeres, al mercado laboral, fue tardía, amén de que se les relegó históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas sin el cubrimiento del sistema general de seguridad social, por tanto avocadas al desamparo.

En la misma jurisprudencia se hizo énfasis en que no se intentaba regresar al anacrónico concepto del cónyuge culpable, sino darle preponderancia al principio de seguridad social que inspira al sistema, cuando, en este tipo de eventos, se privilegia ese lazo jurídico, y en perspectiva se tienen en cuenta otro tipo de componentes, relacionados con el hecho de que el afiliado o pensionado haya mantenido asistencia económica o el citado vínculo, aun cuando mediara la separación de hecho.

También se contempló que si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el

legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva.

(...) En sede de instancia, cabe resaltar que de folios 106 a 118 consta la escritura pública 5607 de 30 de noviembre de 2001, en la que MARÍA ANGÉLICA SIERRA y RAMÓN ANTONIO CASTRILLON URIBE disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal en el que las partes incorporaron al referido documento la siguiente cláusula: *“se deja constancia que al momento de morir el señor RAMÓN ANTONIO CASTRILLÓN URIBE la pensión en su totalidad quedará de la señora MARÍA ANGELICA SIERRA DE CASTRILLÓN junto con los demás derechos derivados de la seguridad social que por ley le pertenecen”*.

El artículo 13 de la ley 797 de 2003 contiene dos situaciones que no pueden equipararse, una relacionada con la existencia de la “unión conyugal” y la restante con la de la “sociedad conyugal vigente”. estima la sala, que si la protección que otorgó el legislador fue respecto del vínculo matrimonial, tal como se destacó en sede de casación, debe otorgarse la pensión a quien acreditó que el citado lazo jurídico no se extinguió amén de que no hubo divorcio, pues por el especial régimen del contrato matrimonial, es menester distinguir entre los efectos de orden personal, relativos a las obligaciones de los cónyuges entre sí y con sus hijos, del meramente patrimonial como acontece con la sociedad conyugal o la comunidad de bienes que se conforma con ocasión de aquel.

Esa distinción, en eventos como el aquí se discute es de especial interés, pues frente a los primeros, inclusive, subsiste la obligación de socorro y ayuda mutua, que están plasmados en el artículo 176 del código civil que dispone que *“los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida”*, y en el propio artículo 152, modificado por el artículo 5 de la ley 25 de 1992, prevé que el matrimonio se disuelve, entre otros, por el divorcio judicialmente decretado.

(...)

Por demás, es el propio artículo 42 de la Constitución Política el que señala que “los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil”, y si a ello se suma la voluntad del legislador de proteger la “unión conyugal” a la que hizo referencia la norma que aquí se discute, no sería propio negar el otorgamiento de la prestación cuando la sociedad conyugal esté disuelta, pero exista el verdadero vínculo jurídico, máxime cuando en este evento, el propio Ramón Antonio Castrillón Uribe, en desarrollo de sus obligaciones de socorro y ayuda mutua, previó el tema pensional e incorporó en la cláusula atrás transcrita su deseo de prodigar amparo, a quien convivió con él por más de 20 años.

Como soporte de lo anterior, la Honorable CSJ trajo a colación lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-523 de 2000, que abordó la naturaleza del matrimonio, y en torno al punto que aquí interesa estimó:

“(...) el matrimonio no es la mera unión de hecho, ni la cohabitación entre los cónyuges. Los casados no son simplemente dos personas que viven juntas. Son más bien personas jurídicamente vinculadas (...) En el matrimonio (...) las obligaciones que surgen del pacto conyugal, a pesar de que pueden llegar a extinguirse por divorcio y éste a su vez puede darse por voluntad de los cónyuges, es menester lograr la declaración judicial del divorcio para que se produzca la disolución del vínculo jurídico a que se ha hecho referencia”.

La anterior interpretación fue ratificada por la CSJ en sentencias SL7299-2015, SL6519-2017, SL16419-2017, SL6519-2017, entre otras, donde en casos de **CONVIVENCIA NO SIMULTÁNEA**, clarificó que la vigencia o subsistencia del **vínculo matrimonial** le permite a la cónyuge separada de hecho o de cuerpos, acceder a la pensión de sobrevivientes; señalado que “*otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes en clave a la adquisición del derecho*”.

Igualmente fue ratificada en sentencia SL1399 del 25 de abril de 2018 rad. 45779, en la que señaló que “...a diferencia del contrato matrimonial, el cual incorpora derechos y obligaciones personales tales como los de socorro y ayuda mutua, tolerancia y respeto a la personalidad del cónyuge, los cuales subsisten mientras el vínculo no sea disuelto por muerte, divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión. Por lo tanto, el primero de los conceptos posee un significado subjetivo e intrínseco, del cual emanan unos deberes personales, mientras que el segundo alude a una sociedad patrimonial o de bienes...en este sentido, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos, sino más bien a la vigencia del contrato matrimonial, dado que es esta unión la que confiere derechos y asigna obligaciones personales y subjetivos a los consortes, y, por consiguiente, permite incluirlos como miembros de su grupo familiar...”.

Aunado a lo expuesto, en sentencia SL14498 del 13 de septiembre de 2017 M.P. Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz dispuso en lo pertinente:

En efecto, para el caso de los cónyuges separados de hecho, a pesar de que resulta indiferente si tienen o no «*sociedad conyugal vigente*», lo que sí se les reclama es que obviamente el vínculo matrimonial perviva –lo que está fuera de discusión-, pero también que, incluso en la separación, hayan mantenido actantes lazos de solidaridad y de ayuda mutua, que son propios a la unión conyugal, y que permiten predicar respecto de quienes están relacionados con ese vínculo jurídico, que pertenecen al grupo familiar del pensionado o afiliado que fallece, y que son quienes en la perspectiva de la seguridad social tienen derecho al amparo de ella cuando ocurra riesgo por muerte, en los términos del artículo 46 (aplicable en el régimen de ahorro individual según lo dispuesto en el artículo 73) de la Ley 100 de 1993.

En resumen, la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral como máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su función de asentar jurisprudencia con fundamento en la aplicación de la normatividad y el desarrollo incuestionable de su adaptabilidad a la sociedad cambiante en aras de efectivizar el derecho de la seguridad social integral, determinó en aplicación al inciso 3º del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que en caso como el presente, de **convivencia no simultánea para la fecha del óbito**, la cónyuge supérstite tendrá derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando acredite los siguientes presupuestos: (1º) que a pesar de la liquidación de la sociedad conyugal, hasta la fecha del fallecimiento del pensionado perduró el

contrato matrimonial y/o unión conyugal (sin divorcio) **(2º)** mantuvo los lazos de solidaridad y ayuda mutua, y, **(3º)** que la convivencia halla perdurado por más de cinco años en CUALQUIER ÉPOCA ante la existencia o no de una compañera permanente, lo que le da derecho a percibir en proporción al tiempo de convivencia o en forma total en caso de no existir compañera, la mesada pensional de sobrevivientes.

Interpretación que actualmente se encuentra vigente por parte del la H. Sala de Casación Laboral de la CSJ, aun en vigencia de la aludida sentencia de exequibilidad, pues de conformidad con la sentencia traída por el apelante de radicado SL359-2021 del 03 de febrero de 2021 M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo se dispuso lo siguiente:

...a efectos de reconocer la pensión de sobrevivientes a la cónyuge con unión matrimonial vigente y separación de hecho, basta con que acredite el requisito de convivencia con el causante en cualquier época en los términos del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

A lo anterior, hay que agregar que la actora y su cónyuge fallecido liquidaron y disolvieron la sociedad conyugal en la anualidad de 1994 (f.º 178 a 183), lo cual tampoco es un obstáculo para que la consorte sobreviviente acceda al derecho pensional discutido.

En efecto, a diferencia del contrato matrimonial, la sociedad conyugal hace referencia al régimen económico de la unión y únicamente alude al patrimonio y bienes. Por ello, no es adecuado atar el derecho a la pensión de sobrevivientes a la pervivencia de la sociedad conyugal o de la sociedad de bienes, figuras que responden a contenidos netamente económicos.

Ahora bien, respecto al tema, la **Corte Constitucional** como máximo órgano interprete de la constitucionalidad de las normas y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere el 30 de octubre de 2019 la sentencia C-515-2019, en la que declaró la exequibilidad de la expresión ***“con la cual existe la sociedad conyugal vigente”***, contenida en el inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificó sustancialmente en los fundamentos de su análisis, la doctrina jurisprudencial de la justicia ordinaria, conforme con los siguientes argumentos:

La Corte Constitucional inicia su estudio, señalando que la expresión demandada establecía como requisito para el reconocimiento de la cuota parte de la pensión de sobrevivientes, **únicamente que el cónyuge supérstite separado de hecho, mantenga en vigor la sociedad conyugal a la fecha del fallecimiento del causante, excluyendo al cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta.**

Al abordar el tema, indicó que *“...el legislador, decidió a su vez crear en el aparte demandado (parte final del inciso 3 del literal b)), una excepción a dicha regla, determinando que el derecho a la pensión de sobrevivientes se conservaría en una cuota parte a los cónyuges que en algún momento hubiesen convivido por más de 5 años, pero que esté **separados de hecho** (sin convivencia al momento*

*de la muerte del causante), pero que hubiesen decidido mantener los efectos patrimoniales del matrimonio, esto es, la sociedad conyugal vigente. Por lo cual, en esta excepción, objeto de la presente demanda, el legislador **optó por desplazar el criterio de convivencia, por el de vigencia o no de la sociedad conyugal...*** (negrilla fuera de texto).

Por otra parte, se indicó que el contrato matrimonial conlleva efectos jurídicos personales (ayuda mutua, cohabitación, socorro, fidelidad, arts.176 y siguientes del Código Civil) y efectos jurídicos patrimoniales (artículos 1771 a 1848 regula la figura de la sociedad conyugal o comunidad de bienes), que, de acuerdo con el numeral 2º del art. 1781 del CC, hacen parte del derecho a suceder de la sociedad conyugal entre otros, *las pensiones que se deriven de los bienes sociales o de los bienes de cada cónyuge, que se devenguen durante el matrimonio, pertenecen a la sociedad conyugal...*

Bajo este entendimiento, señala la Corte Constitucional, que los demandantes invocan los efectos personales de la vigencia de la unión conyugal “*para intentar demostrar que en el supuesto de convivencia no simultánea los cónyuges con y sin sociedad conyugal vigente son equiparables*”, todo ello con el fin, de acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes; *a juicio de los accionantes, el legislador confunde en el inciso acusado las figuras de unión conyugal y sociedad conyugal.*

La Corte Constitucional derruye el argumento expuesto por los demandantes con fundamento en tres aspectos principales para el debate de **juicio de igualdad**:

- 1) Que “*el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente mantiene en su totalidad los efectos de orden patrimonial... al punto que preservan el vínculo económico y los derechos que de este se derivan...en el caso del cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta, por decisión libre de los cónyuges se extinguen los efectos patrimoniales del vínculo matrimonial, aunado a la separación de hecho, por lo que, no existen en este caso vínculos afectivos o económicos que permitan inferir su calidad de beneficiario.*”
- 2) Consideró que el legislador en su amplia facultad, estableció una excepción a la regla general de la demostración de la convivencia, esto es, determinó el requisito de **existencia del vínculo patrimonial (sociedad conyugal vigente)** hasta el fallecimiento del causante, es el criterio relevante en el contexto de **convivencia no simultánea**, es decir, en estos casos el cónyuge sólo será beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en la medida en que haya convivido con el causante 5 años en cualquier tiempo, que se hayan separado de hecho y para la fecha del fallecimiento, se encuentre vigente la sociedad conyugal sin exigencias de lazos de familiaridad.

- 3) Que de conformidad con lo previsto en el artículo 1781 del Código Civil, La sociedad conyugal se integra por dos tipos de haberes: el haber absoluto y el haber relativo. Los bienes del haber absoluto incluyen las “pensiones” (numeral 2° del artículo 1781), luego, cuando la sociedad conyugal se disuelve, los haberes del pensionado o del afiliado dejan de ser parte de la masa patrimonial, por ello, no es posible que, en materia de acceso a la pensión de sobrevivientes, el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal disuelta esté en el mismo plano jurídico y fáctico que el cónyuge separado de hecho con sociedad conyugal vigente.

Planteada así la interpretación constitucional de la norma que modificó sustancialmente lo que de antaño desarrolló la Corte Suprema de Justicia, esto es, que ante los eventos donde **NO EXISTA CONVIVENCIA SIMULTÁNEA** para la fecha del fallecimiento del pensionado y/o afiliado, la cónyuge supérstite separada de hecho, sólo tendrá derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, si demuestra que la sociedad conyugal se mantuvo vigente hasta el óbito (los consortes no liquidaron la sociedad conyugal) y convivió con el causante por más de cinco (05) años en cualquier época, el punto central que llama la atención de esta Sala, y que es traído insistentemente por la parte activa, opera cuando la Corte Constitucional al referirse a la sentencia anteriormente analizada proferida por la Sala de Casación Laboral de la CSJ de radicado 45038 del 13 de marzo de 2012 señaló textualmente:

En esa ocasión, el alto tribunal concedió pensión de sobrevivientes a un cónyuge supérstite que no mantenía convivencia con el causante y además tenía disuelta la sociedad conyugal. Frente a esto, es necesario aclarar que si bien el alto tribunal interpretó el último inciso del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en el sentido de dar prevalencia a los efectos personales sobre los patrimoniales, también lo es que la decisión estuvo marcada por la existencia de un elemento de juicio determinante: la manifestación expresa del causante de dejar como beneficiaria de su pensión a la cónyuge¹; prueba que, a juicio de la Sala Laboral, demostró que los cónyuges mantuvieron “las obligaciones de socorro y ayuda mutua”, a pesar de la disolución de la sociedad conyugal. Por esto, y en razón a que ese caso se trató el supuesto de convivencia simultánea entre cónyuges, diferente al de convivencia no simultánea, estima la Corte que este caso particular no puede ser fundamento para un análisis en control abstracto de la disposición acusada.

Bajo estos derroteros, la Corte Constitucional consideró que la sentencia de la CSJ contaba con un elemento de juicio determinante que limitaba la intención del legislador al momento de crear la excepción prevista, esto es, *la manifestación expresa del causante de dejar como beneficiaria de su pensión a la cónyuge, prueba que, a juicio de la Sala Laboral, demostró que los cónyuges mantuvieron “las obligaciones de socorro y ayuda mutua”, a pesar de la disolución de la*

¹ En este punto, la sentencia de casación precitada señaló: “En sede de instancia, cabe resaltar que [...] consta la Escritura Pública 5607 de 30 de noviembre de 2001, en la que María Angélica Sierra y Ramón Antonio Castrillón Uribe disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal en el que las partes incorporaron al referido documento la siguiente cláusula: “se deja constancia que al momento de morir el [causante] la pensión en su totalidad quedará de la [cónyuge supérstite] junto con los demás derechos derivados de la seguridad social que por ley le pertenecen”.

sociedad conyugal; adicionalmente aseguró que, en ése caso se trató el supuesto de convivencia simultánea entre cónyuges, diferente al de convivencia no simultánea, razón por la cual, no podía ser fundamento de análisis para el control abstracto de la norma acusada.

En este orden de ideas, y a pesar de la evidente modificación en la interpretación constitucional del inciso 3º del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 establecida por la Corte Constitucional en la sentencia C-515 del 2019, en comparación a la desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, que forzaría a esta Sala de Decisión acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional de conformidad con el carácter vinculante de las sentencias de control abstracto de constitucionalidad que obligan no solo de la parte resolutive sino los contenidos de la parte motiva de las sentencias, convirtiendo la jurisprudencia como fuente de derecho, con fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, se tiene que, **en este asunto especial le asiste razón al apoderado judicial recurrente**, cuando señala que la Corte Constitucional avaló la interpretación sostenida por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de radicado 45038 del 13 de marzo de 2012, ante la existencia de la manifestación libre y voluntaria del pensionado de ceder la pensión, cuando suscribió en la escritura pública de la liquidación de la sociedad conyugal, dando prevalencia a los efectos jurídicos personales de la unión conyugal sobre los patrimoniales, derrotero que es aplicable al caso controvertido, porque a pesar de que en el caso estudiado por la CSJ, el pensionado no tuvo compañera permanente durante los 3 últimos años de su vida, desde el momento de la liquidación de la sociedad conyugal hasta el fallecimiento, la misma Corporación dispuso:

(...) También se contempló que si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva...

Es decir, en los casos de CONVIVENCIA NO SIMULTÁNEA, la existencia o no la compañera permanente durante los últimos años de vida del pensionado y/o afiliado, no afectaría el derecho a la cónyuge supérstite.

Luego entonces, en este asunto, la Sala concluye que opera la prevalencia de los efectos jurídicos personales sobre los patrimoniales, al demostrarse que a pesar de la liquidación de la sociedad conyugal entre los consortes y ante la convivencia no simultánea, se acreditó fehacientemente que los lazos de la unión conyugal o del contrato matrimonial perduraron desde la celebración del vínculo hasta el fallecimiento del pensionado, esto es, el pensionado Julio Cesar Polo

González en vida manifestó de manera libre, voluntaria sin vicios del consentimiento, el deseo de ceder su mesada pensional tanto al cónyuge como a la compañera permanente, primero, a través de la suscripción de la escritura pública No.1207 en la que se estipuló para lo pertinente, lo siguiente: *“Décimo tercero: El conyugue se obliga a suministrar en forma mensual para la alimentación de su esposa e hija Francy Liliana la suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda legal y corriente y que se reajustaba de forma anual de acuerdo con las disposiciones que fija el Gobierno para los salarios. Décimo Cuarto: El conyugue mantendrá de por vida el seguro médico de Caprecom a su esposa... Décimo Quinta: Que se compromete el conyugue a ceder a su esposa la pensión a la hora de su muerte...”*; de la misma forma, la declaración rendida por pensionado No.0805 ante el Notario Primero del Municipio de Floridablanca Departamento de Santander, en la que participó la demandada DIOSELINA BAYONA en calidad de compañera permanente, ratificó que al no haberse divorciado de la señora Rosa Aydee Arias de Polo ésta también depende de él económicamente, declaración que fue aceptada al no ser controvertida por la demandada; aunado a ello, también se encuentra la petición elevada por el pensionado ante la UGPP el día 08 de marzo de 2019 (fls.50-51 PDF1), manifestando que *“DESIGNA EN VIDA” y en partes iguales, la pensión reconocida y pagada a las señoras Rosa Aydee Arias de Polo con vínculo matrimonial vigente y con quien procreó 04 hijos, quien depende económicamente de su aporte, y tal como fue estipulado en la Escritura Pública No.1207 del 31 de julio de 1998 y, a favor de la señora Dioselina Bayona Toro con quien convive en unión libre (sic) desde hace 23 años.*

Ello también es concordante con las declaraciones rendidas en audiencia, tanto por los testigos traídos por la demandante como los allegados por la demandada Dioselina Bayona, quienes manifestaron que los ex esposos mantenían después de la separación de hecho, una relación de amistad, que el señor Polo realizaba visitas constantes a la cónyuge, le ayudaba económicamente, le brindaba apoyo mutuo respecto a la enfermedad padecida por la señora Rosa Aydee Arias, que en algunas ocasiones era trasladada por el pensionado, a citas médicas a la ciudad de Bucaramanga, que ésta última fue a visitarlo cuando el pensionado estuvo hospitalizado en la ciudad de Bucaramanga, supuestos que demuestran una vez más, que el lazo familiar entre los consortes, no se rompió a pesar de la existencia de la unión marital de hecho con la señora Dioselina Bayona.

Decisión.

Bajo estas condiciones, la señora Rosa Aydee Arias de Polo convivió con el causante desde el 23 de diciembre de 1967 hasta el 10 de febrero de 1996, esto es, por espacio de 27 años, 1 meses y 17 días, y la señora Dioselina Bayona, inició con el señor Julio César Polo González (q.e.p.d.), la convivencia el 10 de febrero de 1996 hasta su fallecimiento el 19 de marzo de 2019, esto es, por espacio de 23 años, 1 mes y 10 días, luego entonces, la hacen acreedoras de la mesada pensional, en un 54% a favor de la demandante y en un 46% a favor de la demandada, mesada que no fue afectada del fenómeno de la prescripción de

la acción judicial, por cuanto el derecho fue exigible el 19 de marzo de 2019, la petición fue presentada el 12 de abril de 2019 y la demanda el 22 de octubre de 2019.

En este asunto no son procedentes los intereses moratorios previstos en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto el derecho pensional se fundamento en el desarrollo jurisprudencial de la normatividad aplicable.

En consecuencia, la Sala procederá a REVOCAR en su totalidad la sentencia proferida por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña del 23 de abril de 2021, en su lugar, se ordenará a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, reconocer y pagar la mesada pensional a favor de la señora ROSA AIDE ARIAS DE POLO en calidad de cónyuge supérstite del pensionado JULIOS CESAR POLO GONZÁLEZ en un 54% del total y en un 46% a favor de la demandada DIOSELINA BAYONA TORO, desde el fallecimiento ocurrido el 19 de marzo de 2019.

Se ACLARA que, en consideración a que la UGPP había reconocido la mesada pensional en un 50% a favor de la demandante ROSA AIDE ARIAS DE POLO por cumplimiento de la orden judicial del juez constitucional de tutela, y que la demandada DIOSELINA BAYONA TORO para el momento de la demanda se encontraba disfrutando del 100% de la mesada pensional, se AUTORIZARÁ la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, para que realice los respectivos descuentos y compensaciones.

Igualmente, se AUTORIZARÁ a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” para que del retroactivo pensional descuenta los aportes a la seguridad social en salud.

Declarar no prósperas las excepciones de fondo propuestas por las demandadas de: inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, temeridad y mala fe.

No se condenará en costas en segunda instancia, al operar la consulta a favor de la UGPP y al haber prosperado el recurso de alza de la demandante.

En mérito de lo expuesto la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia adiada del 23 de abril de 2021, proferida por el Juzgado Único Laboral del Circuito y en su lugar **DECLARAR** que la señora ROSA AIDE ARIAS DE POLO cumplió con los requisitos previstos en el inciso 3º

del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 en consideración a la interpretación prevista por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral en sentencia de radicado No. 45038 del 13 de marzo de 2012 aceptada por la Corte Constitucional en sentencia C-515 de 2019 conforme a lo analizado; en igual sentido, la demandada DIOSELINA BAYONA TORO en calidad de compañera permanente supérstite, cumple con los presupuestos previstos en la norma aplicable.

SEGUNDO: CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, a reconocer y pagar la mesada pensional a favor de la señora ROSA AIDE ARIAS DE POLO en calidad de cónyuge supérstite del pensionado JULIOS CESAR POLO GONZÁLEZ en un 54% del total y en un 46% a favor de la demandada DIOSELINA BAYONA TORO, desde el fallecimiento ocurrido el 19 de marzo de 2019.

TERCERO: DECLARAR no prósperas las excepciones de fondo propuestas por las demandadas de: inexistencia de la obligación, prescripción, cobro de lo no debido, temeridad y mala fe.

CUARTO: ABSOLVER a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” del pago de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993.

QUINTO: ACLARAR que, en consideración a que la UGPP había reconocido la mesada pensional en un 50% a favor de la demandante ROSA AIDE ARIAS DE POLO por cumplimiento de la orden judicial del juez constitucional de tutela, y que la demandada DIOSELINA BAYONA TORO para el momento de la demanda se encontraba disfrutando del 100% de la mesada pensional, se **AUTORIZA** la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, para que realice los respectivos descuentos y compensaciones.

SEXTO: AUTORIZAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP” para que del retroactivo pensional descuenta los aportes a la seguridad social en salud.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas en esta instancia por cuando no se causaron al resultar favorable la decisión del recurso de apelación, en virtud del artículo 365 del CGP y operar la consulta a favor de la UGPP.

NOTIFÍQUESE



JOSÉ ANDRÉS SERRANO MENDOZA
MAGISTRADO PONENTE



ELVER NARANJO
MAGISTRADO



NIDIAM BELÉN QUINTERO GÉLVES
MAGISTRADA

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



SALA DE DECISIÓN LABORAL

San José de Cúcuta, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Elver Naranjo
Magistrado Sustanciador

1o. ASUNTO

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 2 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña – Norte de Santander, dentro del proceso ordinario laboral con radicado No. 54-498-31-05-001-2021-00073-00, promovido por **Maryury Quiroga Quintero** contra **Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S.**; trámite al que fueron vinculados los herederos indeterminados de Abdón de Jesús Quiroga Chaverra, y Teresa de Jesús Quintero Angarita.

2o. ANTECEDENTES

DEMANDA (Expediente digital): Depreca la accionante, en calidad de heredera, se declare que su padre Abdón de Jesús Quiroga Chaverra sostuvo una relación laboral regida por un contrato de trabajo con la sociedad convocada a juicio y bajo modalidad indefinida, entre el 30 de junio de 2014 y el 4 de julio de 2020. Como consecuencia de ello, pide el pago de prestaciones sociales por el 2019, a saber, cesantías, intereses a éstas, prima de servicios, y vacaciones compensadas en dinero; y los mismos rubros, por el periodo proporcional laborado en 2020. También,

sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST y la del 99 de la Ley 50 de 1990; indexación de las condenas, más las costas del proceso.

Adujo para ello: **1) Que** su progenitor Abdón de Jesús Quiroga Chaverra, mantuvo relación laboral con la empresa Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S., desde el 30 de julio de 2014 al 4 de julio de 2020, última data en la que falleció. **2) Que** su familiar desempeñaba el cargo de conductor con asignación salarial equivalente al mínimo legal vigente para cada anualidad. **3) Que** en diciembre de 2018 presenta diagnóstico clínico de accidente cerebrovascular con secuelas motoras marcadas, que lo incapacitan para trabajar, siendo posteriormente valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Norte de Santander con PCL del 71,20%. **4) Que** producto de la citada patología, su familiar fallece el 4 de julio de 2020, configurándose, a la luz del artículo 64 del CST, una causa justa para la finalización del contrato que venía gestando con la enjuiciada; siendo menester en consecuencia, realizar en favor de los herederos, el pago de las acreencias laborales causadas, tales como salarios y prestaciones sociales. **5) Que** la pasiva se abstuvo de consignar en el fondo respectivo, las cesantías correspondientes al año 2019, intereses a éstas, prima de servicios y vacaciones compensadas en dinero de la misma vigencia; así como las proporcionales causadas en 2020. **6) Que** el impago de dichos rubros da lugar a la imposición de la indemnización prevista en el artículo 65 del CST.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Los herederos indeterminados de Abdón de Jesús Quiroga Chaverra estuvieron representados por curador ad litem. Este profesional del derecho adujo no constarle las situaciones fácticas descritas en la demanda, a excepción del fallecimiento de Quiroga Chaverra en tanto se soporta en registro civil de defunción. No formuló excepciones, precisando que se atiene a lo probado en el transcurso del trámite.

Por su parte, Teresa de Jesús Quintero Angarita aceptó como ciertos todos los hechos del escrito introductor y coadyuvó las pretensiones de la actora.

La empresa Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. no dio respuesta al libelo seminal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: El Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña – Norte de Santander, el 2 de noviembre de 2021, declaró la existencia de relación laboral entre Abdón de Jesús Quiroga Chaverra y Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. por el espacio temporal comprendido entre el 30 de julio de 2014 y el 10 de abril de 2019; condenó a la demandada al pago de prestaciones sociales (cesantías: \$230.000, intereses a éstas: \$7.660, prima de servicios: \$230.000), vacaciones compensadas en dinero (\$115.000), más sanción moratoria del artículo 65 del CST a la fecha de providencia por valor de \$25.423.161 (\$27.600 diarios), último rubro al que descontó el valor de \$3.554.635 cancelado previamente por la sociedad, para un total de \$21.868.526. Absolvió a la encartada de las demás pretensiones y la gravó en costas.

Consideró que la falta de pronunciamiento de la convocada a juicio, así como la inasistencia de su representante legal a absolver interrogatorio de parte, obliga a dar aplicación a la consecuencia procesal prevista en el artículo 77 del CPTSS, declarando la existencia de contrato de trabajo entre Abdón de Jesús Quiroga Chaverra y Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. Dijo no existir discusión sobre el extremo temporal inicial del vínculo, que referenció en 30 de julio de 2014, situando el final en abril 10 de 2019, con apego en lo resuelto en el proceso adelantando en el mismo despacho judicial bajo radicado único nacional No. 54498 31 05 001 2019 00296 00, que involucró a los mismos sujetos de la relación obrero-patronal, siendo reconocida en favor del obitado Quiroga Chaverra, pensión de invalidez a partir de la última data mentada, situación que dijo, da lugar a la terminación del contrato de trabajo a la luz de lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 62 del CST.

En hilo de lo anterior y al no hallar prueba del pago de prestaciones sociales, dispuso su reconocimiento en las siguientes sumas: (cesantías: \$230.000, intereses a éstas: \$7.660, prima de servicios: \$230.000), vacaciones compensadas en dinero (\$115.000).

Tuvo por procedente la condena al pago de sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST, porque no encontró justificación para la falta de pago de los rubros laborales reconocidos en la providencia, precisando que si bien, el 29 de junio de 2021 la enjuiciada efectuó consignación por concepto de prestaciones sociales (\$3.554.635), ello ocurrió dos años y dos meses después de finalizada la relación laboral, sin que resulte de recibo el argumento de desconocimiento del beneficiario de dicha liquidación de cara al fallecimiento del ex trabajador en tanto que la obligación de pago surge a partir de la extinción del contrato, que fue anterior al deceso. En últimas, tomó dicho pago como un abono parcial a la obligación, que de conformidad con lo establecido en los artículos 1626, 1649 y 1653 del Código Civil, es susceptible de aplicación de la teoría de imputación de pagos en la medida en que no cubre la totalidad de lo adeudado.

No concedió indexación sobre dicha indemnización moratoria concedida, por resultar incompatibles ambos conceptos.

Se abstuvo de reconocer sanción de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 advirtiéndole que lo que la norma castiga es la no consignación de cesantías e intereses en el fondo respectivo al que se encuentre afiliado el empleado, y siendo que, la verdadera fecha de expiración de la relación laboral fue el 10 de abril de 2019, ya no estaba obligado el empleador a tal proceder, sino que debía pagar dichas acreencias directamente al subordinado.

RECURSO DE APELACIÓN: Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. persigue la revocatoria parcial de la providencia. Arguye que la buena fe de la sociedad fue plenamente demostrada en tanto carecía de certeza sobre la persona o personas a las que efectivamente debía hacerse entrega de los dineros correspondientes a las acreencias laborales causadas por Abdón de Jesús Quiroga Chaverra, por lo que, previendo una disputa entre cónyuge e hija de éste, se abstuvo de efectuar el pago hasta tanto se definiera el asunto en los estrados judiciales. Disiente de la aplicación de imputación de pagos respecto al abono efectuado por concepto de prestaciones sociales, acotando que en parte alguna del artículo 65 del CST se prevé dicha figura primero a intereses y luego a capital por la

cancelación parcial de acreencias laborales, como erradamente considera, concluyó el *A Quo*.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: La pasiva ratificó los argumentos expuestos en la alzada. Los demás sujetos no alegaron.

3o. CONSIDERACIONES

Importa destacar que en esta instancia se encuentra por fuera de discusión, por no haberse cuestionado, el que **(i)** Abdón de Jesús Quiroga Chaverra y Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. celebraron contrato de trabajo gestado entre julio 30 de 2014 y el 10 de abril de 2019, con asignación mensual equivalente al salario mínimo legal mensual vigente de cada época, y que **(ii)** para el momento de la sentencia, la ex empleadora adeudaba prestaciones sociales correspondientes a cesantías: \$230.000, intereses a éstas: \$7.660, prima de servicios: \$230.000, y vacaciones compensadas en dinero (\$115.000).

El tema álgido del asunto se centra en la eventual procedencia de la sanción moratoria del artículo 65 del CST y su limitación temporal, pues mientras la activa asegura que no existe justificación para la dilación del pago de las acreencias laborales causadas por su progenitor, la convocada a juicio arguye que ello obedeció al desconocimiento sobre el beneficiario legalmente legitimado para percibir los dineros, y que, en todo caso, el pago efectuado no puede ser objeto de imputación a intereses porque tal mecanismo correctivo no está previsto en la norma.

Así las cosas, atendiendo a la alzada, el problema jurídico consiste en determinar si la prolongación temporal en la cancelación de prestaciones sociales causadas por la activa, encuentra justificación fáctica y legal que permita a la encartada desligarse de la obligación de pago de la citada sanción. En caso negativo, bajo qué parámetros cuantitativos ha de cancelarse dicha indemnización.

En tal sendero, ha de señalarse que la sanción moratoria del artículo 65 del CST no es de aplicación automática y opera cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta. En otras palabras, cuando no demuestra, que pese al no pago de salarios y prestaciones sociales a la finalización

del contrato, desplegó un actuar asistido de buena fe, es decir recto y leal (Ver sentencias SL15.507-2015, SL8216-2016 y SL6621-2017).

En el caso presente, de entrada no se observa probidad en el proceder de la pasiva al beneficiarse del trabajo del fallecido Abdón de Jesús Quiroga Chaverra y obviar cancelar las prestaciones sociales que legalmente le correspondían, teniendo pleno conocimiento de dicha obligación.

Ahora, como para exonerarse de la sanción aludida arguye la encartada que luego de la muerte del precitado colaborador ignoraba por completo cuál o qué sujetos estaban legitimados para percibir dichos rubros salariales, por lo que consideró prudente esperar que la jurisdicción ordinaria resolviera tal tópico, tal argumento no resulta de recibo, conforme pasa a explicarse.

En primera medida, es claro, a partir de lo dispuesto en el numeral primero del mencionado artículo 65, que la obligación de realizar liquidación contentiva de salarios y prestaciones sociales causadas por el trabajador, nace y se radica en cabeza del dador del laborío una vez finalizado el vínculo de trabajo por cualesquiera de las causales previstas en el ordenamiento jurídico, que para el caso bajo estudio aconteció el 10 de abril de 2019 cuando a través de providencia judicial se concedió a Quiroga Chaverra pensión de invalidez; situación fáctica que como a bien tuvo concluir el sentenciador de primer grado, da lugar a extinguir el vínculo de trabajo, a la luz del numeral 14 del artículo 62 del CST.

En tal línea, patente resulta que desde el día siguiente, dígase, 11 de abril de 2019 la empresa Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S., era responsable de cancelar la liquidación final causada proporcionalmente en dicha vigencia por el desvinculado trabajador. Lo que no ocurrió, o por lo menos no se acreditó dentro del trámite sino hasta el 29 de junio de 2021, cuando se efectuó depósito judicial para pago de prestaciones sociales por valor de \$3.554.635 a nombre de Abdón de Jesús Quiroga Chaverra.

En segundo lugar, al momento de dar respuesta al derecho de petición radicado el 3 de diciembre de 2020, la encartada se niega a reconocer suma de dinero alguna

aduciendo que en vida, el subordinado percibió lo que en derecho le correspondía, de modo que el reclamo constituía pretensión de doble pago. Empero, sorpresivamente, con posterioridad a la muerte del causante, acontecida el 4 de julio de 2020, consignó el valor referenciado (\$3.554.635).

Lo mostrado, da cuenta de que la pasiva se sustrajo de pagar lo debido, no por desconocimiento frente al real beneficiario del rubro, ya que, la eventual necesidad de acreditar la calidad de herederos tan solo surgió con la muerte del trabajador, en julio de 2020. Lo que se evidencia es que la pasiva incurrió en un actuar desobligante consistente en negarse a pagar en vida lo causado por un empleado que experimentó una grave situación de salud que a la postre cegó su vida, luego, asegurar que sí canceló la misma en favor de quien por razones evidentes, no podía controvertir tal dicho, y, finalmente, escudarse en la existencia de contienda de sujetos frente al reclamado de lo adeudado, que ciertamente, nunca se configuró, si en cuenta se tiene que la actora acredita la condición de única heredera como da cuenta la liquidación de la herencia aportada al cartapacio.

Si en gracia de discusión, se hallara probada la multiplicidad de reclamos, tal situación tampoco es óbice para cumplir con las obligaciones laborales que tenía a cargo aquélla, pues, la razón aducida no encuadra dentro del concepto esbozado de la buena fe, Esto porque no se trata de que el empleador alegue no poder pagar por razones como la expuesta, sino que, demuestre haber realizado acciones tendientes al cumplimiento de sus deberes, que revelen un actuar probo, es decir recto y leal. Tal presupuesto se echa de menos en el sub- análice, puesto que, se itera, no existe medio de convicción que dé cuenta de las acciones desplegadas por la encartada para cumplir con la consignación del valor equivalente a la liquidación del contrato desde la data misma de fenecimiento del vínculo, ora dentro de un término mínimamente considerable. *Contrario sensu*, se evidencia un pago materializado dos años y dos meses después de terminado el contrato, luego de enterada de la radicación y admisión de la demanda ordinaria laboral de primera instancia.

Bajo los anteriores parámetros se tiene que es procedente la condena impuesta por concepto de la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del CST, razón por la cual se confirmará tal aspecto de la decisión de primera instancia.

De otra parte, le asiste a la encartada razón en su descontento al discutir que no es factible dar aplicación a la figura jurídica de imputación de pagos de que trata el artículo 1653 del Código Civil, porque la legislación laboral es clara frente a la procedencia y aplicación de la sanción moratoria por impago de salarios y prestaciones sociales. Así prescribe el ya citado artículo 65 en su redacción original:

*“Si a la terminación del contrato, el {empleador} no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, **una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.**”*

Circunstancia fáctica que resulta aplicable más allá de la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, en lo que al límite temporal para reclamar la imposición de la indemnización se refiere, atendiendo a que el trabajador fallecido siempre devengó como asignación salarial el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, casos para los cuales el legislador previó que continuaría vigente el texto transcrito. Así se estableció:

“Para los trabajadores que devenguen menos de un (1) salario mínimo mensual vigente, continúa vigente el texto que puede leerse en los párrafos anteriores, para los demás casos el nuevo texto es el siguiente:> Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.” -Se destaca-

Retomando entonces, siendo claro que la explicada sanción moratoria se causa desde el día siguiente a la terminación del contrato y hasta el cabal pago de lo adeudado, puntualícese, la totalidad de las acreencias causadas, palmario deviene que con la suma consignada el 29 de junio de 2021, la encartada saldó el crédito adeudado desde el 11 de abril de 2019, día posterior a la finalización del contrato laboral perfeccionado con Abdón de Jesús Quiroga Chaverra. Mírese que, el total de prestaciones sociales liquidadas por el juez *A Quo* tan solo ascienden a **\$582.660** (cesantías: \$230.000, intereses a éstas: \$7.660, prima de servicios: \$230.000), vacaciones compensadas en dinero (\$115.000), siendo pagado un valor de \$3.554.635, por lo que se obtiene un excedente de \$2.971.975.

Significa lo anterior que como entre el 11 de abril de 2019 y el 29 de junio de 2021, hay 811 días, que al multiplicarse por un salario diario de \$27.603, arrojan un total de indemnización equivalente a \$22.386.033, a este factor ha de restársele los \$2.971.975 del saldo a favor por pago superior de liquidación de prestaciones finales. Dicha operación arroja un valor final de **\$19.414.058** que corresponde cancelar a la convocada a juicio a título de sanción moratoria por pago tardío e injustificado de acreencias laborales causadas por el finado Quiroga Chaverra. Así se declarará.

En resumen, la apelación de la pasiva no logra su cometido, al no acreditarse justificación válida para la prolongación en el tiempo, por más de dos años, del pago efectivo de la liquidación final de prestaciones sociales de Abdón de Jesús Quiroga Chaverra, lo que impone la confirmación de la decisión en lo que atañe dicho tópico. Se modificará para precisar que las acreencias fueron saldadas en suma superior a través de consignación judicial realizada el 29 de junio de 2021, por lo que la sanción moratoria de que trata el artículo 65 del CST solo se puede calcular hasta tal data, y asciende a **\$19.414.058** luego de perfeccionado el descuento por el pago excesivo de prestaciones sociales.

No se impondrán costas a cargo de la encartada por la prosperidad parcial de la alzada.

4o. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **RESUELVE:**

Primero: MODIFICAR el literal e) del numeral segundo de la sentencia del 2 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Único Laboral del Circuito de Ocaña – Norte de Santander, en el sentido de precisar que las prestaciones sociales causadas por el trabajador Abdón de Jesús Quiroga Chaverra y liquidadas por el Despacho en cuantía de \$582.660 fueron cubiertas con el depósito judicial consignado por valor de \$3.554.635. Por lo que, en su lugar, la sanción moratoria del artículo 65 del CST únicamente operó entre el 11 de abril de 2019 (data de finalización del contrato) y el 29 de junio de 2021 (momento del referido pago), debiendo cancelar la empresa Manuel Paredes Castellanos Transportes Peralonso S.A.S. por dicho concepto, la suma de **\$19.414.058**.

Segundo: CONFIRMAR en lo demás la providencia apelada.

Tercero: Sin costas.

NOTIFÍQUESE.

Los magistrados,



ELVER NARANJO

Elver Naranjo

Nidia Belén Quintero G .

Nidiam Belén Quintero Géives

José Andrés Serrano Mendoza

José Andrés Serrano Mendoza

KattyM

Certifico: Que el auto anterior fue notificado
Por ESTADO No. 034, fijado hoy en la
Secretaria de este Tribunal Superior, a las 8 a.m.
Cúcuta, 01 de abril de 2022.



Secretario